

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Causa Rol N° 4.473

Sentencia dictada por el Ministro en Visita Extraordinaria, don Álvaro Mesa Latorre.

Temuco, catorce de agosto de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

ÍNDICE

Relación de la Sentencia.....2-8

Resumen ejecutivo.....8-9

Actuarios de tramitación y dato técnico.....9-10

Tachas.....10-14

Incidentes.....14-21

En cuanto a la Acción Penal:

Declaraciones21-390

Documentos.....390-416

Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal.....416-432

Calificación jurídica de los hechos.....432-438

Concepto de Lesa Humanidad.....438-441

Declaraciones indagatorias y sus respectivo análisis:441-889

En cuanto a las defensas.....889-912

Análisis de las defensas:

Consideraciones previas al análisis de la defensa:

Resumen del auto acusatorio.....912-918

Estado de Derecho.....918-923

Obligación de Investigar.....923-940

Jurisprudencia Internacional sobre graves violaciones a los Derechos Humanos (Delitos de Lesa Humanidad) pronunciada por el Tribunales Alemanes.....940-951

En cuanto a la complicidad.....951

Convenio de Ginebra.....951-953

Análisis de las defensas específicas:.....953-992

Acusaciones particulares.....992-997

Análisis de las acusaciones particulares.....997

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Adhesiones a la Acusación Judicial.....997

Análisis de las adhesiones a la acusación fiscal.....998

Reflexiones sobre lesa humanidad.....998- 1004

Circunstancias Modificadorias de Responsabilidad Penal:

Eximentes de responsabilidad penal.....1004-1005

Atenuante de responsabilidad penal.....1005-1008

Institución de la Media Prescripción o Prescripción Gradual.....1008-1011

Agravantes de Responsabilidad Penal.....1012-1013

Determinación de la Pena.....1013-1015

Beneficios de la Ley 18.216 y sus modificaciones posteriores.....1015-1024

En cuanto a la Acción Civil:

Demandas civiles.....1024- 1042

Contestación de la demanda civil.....1042-1053

Análisis de la contestación de las demandas civiles.....1053-1065

Acreditación probatoria del daño moral.....1065-1072

Montos; reajustes e intereses de las sumas demandadas.....1072-1073

Aspectos Resolutivos.....1073- 1081

RELACIÓN DE LA SENTENCIA

Que se ha iniciado esta **causa rol N° 4.473** del ingreso del Juzgado de Letras de Pucón, para investigar los delitos de **detención ilegal y secuestro con grave daño** en las personas **de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt** y determinar la responsabilidad que en tales hechos le ha cabido a:

- 1. **LUIS ROBINSON BUSTOS LETELIER**, R.U.N 3.708.573-1, chileno, fallecido según consta en certificado de defunción a fs. 6.349 (Tomo XVIII). Sobreseído a fs. 6.376 (Tomo XVIII) con fecha 05 de enero de 2024.
- 2. **OSCAR ALFONSO ERNESTO PODLECH MICHAUD**, R.U.N. 3.085.228-1, chileno, natural de Victoria, de 88 años, casado, abogado, domiciliado en Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina I, Carretera General

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

San Martín N°665, comuna de Colina, región Metropolitana (actualmente cumpliendo condena por otros hechos), nunca antes condenado (extracto de filiación y antecedentes de fs. 5.794 a fs. 5.797 Tomo XVII).

3. PEDRO GUILLERMO MANUEL TICHAUER SALCEDO, R.U.N. 5.166.731-K, chileno, natural de Moneda, de 76 años, casado, Brigadier (r) del Ejército de Chile, domiciliado en calle Los Hualles, Parcela N°1 S/N, Sector El Claro, comuna de Pucón, nunca antes condenado (extracto de filiación y antecedentes de fs. 5.798 a fs.5.799 Tomo XVII).

4. RAIMUNDO IGNACIO GARCÍA COVARRUBIAS, R.U.N. 5.482.807-1, chileno, natural de Viña del Mar, de 75 años, casado, ex funcionario del Ejército de Chile, domiciliado en Avenida Vitacura N°9800 departamento 213, comuna de Vitacura, región Metropolitana, nunca antes condenado (extracto de filiación y antecedentes de fs. 5.792 a fs.5.793 Tomo XVII).

5. ROMILIO OSVALDO LAVÍN MUÑOZ, R.U.N. 6.352.155-8, chileno, natural de Angol, de 75 años, casado, coronel (r) del Ejército de Chile, domiciliado en calle Centenario N°1126, comuna de Las Condes, región Metropolitana, nunca antes condenado (extracto de filiación y antecedentes de fs.5.800 a fs. 5.801 Tomo XVII).

A **fs. 1 a fs. 3 (Tomo I)**, se inició la causa mediante denuncia de Alejandro González Poblete, abogado en representación del Consejo Superior de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, por el delito de inhumación ilegal de cadáveres de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Juan Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, en contra quienes resulten responsables de este delito.

A **fs. 129 a fs. 134 (Tomo I)**, con fecha 09 de abril de 1999, solicita la reapertura del proceso e interpone querrela criminal Ruth Alicia González Ortega, en contra de Gonzalo Arias González por la responsabilidad que le cabe en calidad de autor, cómplice o encubridor del delito de secuestro agravado, homicidio calificado e inhumación ilegal, cometidos en las personas de Hugo Arner González Ortega y Elías Dagoberto González Ortega.

A **fs. 201 a fs. 207 (Tomo I)**, con fecha 25 de octubre de 2000, Jorge Correa Sutil, Subsecretario del Interior, solicita reapertura del proceso por los

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

delitos de secuestro, homicidio e inhumación ilegal de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Juan Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, solicitando se sirva tener como parte coadyuvante.

A **fs. 2.185 a fs. 2.186 vuelta (Tomo VII)**, el abogado David Morales Troncoso, en representación de Ricardo Virginio Aguayo Olavarría, Nelly Sara Aguayo Olavarría y Evita Valentina Aguayo Olavarría, interpuso querella criminal en contra de los agentes del Estado y todos los que resulten responsables por el delito de secuestro calificado cometido en la persona de Héctor Domingo Aguayo Olavarría, con costas.

A **fs. 2.453 a fs. 2.456 vuelta (Tomo VII)**, el abogado José Luis Neira Vejar, en representación de Rita Aurora Ortega Muñoz, Othniel Isaac Gonzalez Ortega, Neftalí Gonzalez Ortega, Luisa Noemi Gonzalez Ortega, Rita Aurora Gonzalez Ortega, Juana Eugenia Gonzalez Ortega, Ruth Alicia Gonzalez Ortega y Elibeth Gonzalez Ortega, interpuso querella criminal en contra de todos aquellos que resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores por el delito de detención ilegal y secuestro como delito permanente consumado en la persona de Hugo Arner Gonzalez Ortega y de Elías Dagoberto Gonzalez Ortega, con costas.

A **fs. 3.055 a fs. 3.058 (Tomo IX)**, interpone querella criminal Elisa Margarita Schmidt Arriagada, por los delitos de detención ilegal y secuestro calificado de sus hermanos Carlos Schmidt Arriagada y Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, en contra de aquellos que resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores condenarlos al máximo de las penas legales, con costas.

A **fs. 4.552 a fs. 4.556 (Tomo XIII)**, los abogados David Morales Troncoso y Marcelo Baeza Carrasco, interpone querella criminal en representación de Matilde Escobar Vásquez, Maria Haydée Escobar Vásquez, Vicente Edmundo Escobar Vásquez, Pedro Juan Escobar Vásquez y Juan Escobar Vásquez, en contra de agentes del Estado y todos aquellos que resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores por el delito de secuestro calificado, cometido en la persona de Alejandro Escobar Vásquez, aplicando el máximo de penas legales, con costas.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

A fs. 2.071 a fs. 2.072 (Tomo VI), con fecha 30 de mayo de 2015, se sometió a proceso a **LUIS ROBINSON BUSTOS LETELIER** (sobreseído por fallecimiento según consta a fs. 6.376 (Tomo XVIII) como autor de los delitos de detención ilegal en las personas de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Juan Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, perpetrado en la comuna de Pucón el 13 de septiembre de 1973.

A fs. 4.254 a fs. 4.335 (Tomo XII), con fecha 17 de junio de 2022, se sometió a proceso a **OSCAR ALFONSO ERNESTO PODLECH MICHAUD, PEDRO GUILLERMO MANUEL TICHAUER SALCEDO, RAIMUNDO IGNACIO GARCÍA COVARRUBIAS**, y a **ROMILIO OSVALDO LAVÍN MUÑOZ**, como cómplices de los delitos de secuestro con grave daño, en su carácter de lesa humanidad, en las personas de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Juan Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, ilícito ocurrido entre fines de septiembre e inicio de octubre de 1973, decretándose la medida cautelar persona de arresto domiciliario total.

A fs. 4.396 (Tomo XII), con fecha 19 de julio de 2022, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco confirma el auto de procesamiento de fs. 4.254 y siguientes.

A fs. 4.574 (Tomo XIII), con fecha 03 de octubre de 2022, **se declaró cerrado el sumario.**

A fs. 4.600 a fs. 4.662 (Tomo XIII), con fecha 04 de noviembre de 2022, se dictó auto **acusatorio** en contra de **LUIS ROBINSON BUSTOS LETELIER** (sobreseído por fallecimiento según consta a fs. 6.376 (Tomo XVIII) como autor de los delitos de detención ilegal, en su carácter de lesa humanidad en las personas de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Juan Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, ilícito perpetrado en la comuna de Pucón el 13 de septiembre de 1973. **OSCAR ALFONSO ERNESTO PODLECH MICHAUD, PEDRO GUILLERMO MANUEL TICHAUER SALCEDO, RAIMUNDO IGNACIO GARCÍA**

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

COVARRUBIAS, y ROMILIO OSVALDO LAVÍN MUÑOZ; como cómplices de los delitos de secuestro con grave daño, en su carácter de lesa humanidad en las personas de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Juan Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, ilícito ocurrido entre fines de septiembre e inicio de octubre de 1973.

A **fs. 4.735 a fs. 4.743 (Tomo XIV)**, el abogado Ricardo Lavín Salazar, en representación de la Unidad Programa de Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos formula **acusación particular**.

A **fs. 4.814 a fs. 4.851 (Tomo XIV)**, el abogado Sebastián Saavedra Cea, en representación de los querellantes de autos, en lo principal de su escrito deduce **acusación particular**. Al primer otrosí presenta **demanda civil** de indemnización de daños y perjuicios en representación de Luisa Noemi González Ortega y otros, en contra del Fisco de Chile por el accionar ilícito de agentes estatales que secuestraron a Elías Dagoberto González Ortega, con costas.

A **fs. 4.903 a fs. 4.940 (tomo XIV)**, el abogado Sebastián Saavedra Cea, en representación de los querellantes de autos en lo principal de su escrito formula **acusación particular**. Al primer otrosí deduce **demanda civil** de indemnización de daños y perjuicios en representación de Evita Valentina Aguayo Olavarría, en contra del Fisco de Chile por el accionar ilícito de agentes estatales que secuestraron a Héctor Aguayo Olavarría, con las costas del juicio.

A **fs. 4.952 a fs. 4.986 (Tomo XIV)**, los abogados Manuel Lisboa Cordero y Juan Carlos Hernández Vidal, por la parte querellante en lo principal de su escrito se **adhieren a la acusación fiscal**. Al primer otrosí deducen **demanda civil** de indemnización de perjuicios en representación de Elisa Margarita Schmidt Arriagada, en contra del Fisco de Chile por concepto de aquellos daños morales que ha padecido con ocasión de los hechos cometidos por agentes del Estado en contra de sus hermanos Carlos y Ricardo Schmidt Arriagada, con costas.

A **fs. 5.007 a fs. 5.035 (Tomo XIV)**, el abogado David Morales Troncoso, por los querellantes de autos en lo principal de su escrito **adhiera a la acusación fiscal**. Al primer otrosí interpone **demanda civil** de indemnización de perjuicios en representación de Ricardo Virginio Aguayo Olavarría y otros, en contra del Fisco de Chile, por el actuar doloso de los agentes del Estado, consistente en la

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

detención ilegal y secuestro de Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Alejandro Escobar Vásquez, con costas.

A **fs. 5.061 a fs. 5.083 (Tomo XIV)**, el abogado José Luis Neira Vejar, por la querellante de autos en lo principal de su presentación **adhiera a la acusación fiscal**. Al primer otrosí deduce demanda civil de indemnización de perjuicios en representación de Rita Aurora González Ortega, en contra del Fisco de Chile, por la detención ilegal de Hugo Arner González Ortega y Elías Dagoberto González Ortega.

A **fs. 5.508 a fs. 5.548 (Tomo XVI)**, el abogado Procurador Fiscal de Temuco Álvaro Sáez Willer, en representación del Fisco de Chile, **contesta las demandas civiles**. Solicitando acoger las excepciones o defensas opuestas.

A **fs. 5.576 a fs. 5.611 (Tomo XVI)**, el abogado Luis Hernán Núñez Muñoz, en representación de Raimundo Ignacio García Covarrubias, en lo principal de su escrito contesta acusación fiscal, adhesión y acusación particular; en el primer otrosí: solicita beneficios y al segundo otrosí: medios de prueba.

A **fs. 5.640 a fs. 5.658 (Tomo XVI)**, el abogado Víctor Hugo Risco Ferreira, en representación de Luis Robinson Bustos Letelier (sobreseído por fallecimiento según consta a fs. 6.376 (Tomo XVIII)

A **fs. 5.683 a fs. 5.705 (Tomo XVI)**, la abogada Karen Valenzuela Jerez, en representación del acusado Pedro Guillermo Manuel Tichauer Salcedo, en lo principal: opone excepciones de previo y especial pronunciamiento; al primer otrosí: sobreseimiento parcial y definitivo; en el segundo otrosí: contesta la acusación de oficio, adhesiones a la acusación y contesta acusación particular; en el tercer otrosí: invoca atenuantes; en el cuatro otrosí: medios de prueba; en el quinto otrosí: solicita beneficios; en el sexto otrosí: información sumaria y en séptimo otrosí: copias.

A **fs. 5.731 a fs. 5.746 (Tomo XVI)**, el abogado Alfonso Eduardo Podlech Delarze, en representación del acusado Oscar Alfonso Podlech Michaud, en lo principal: opone excepciones de previo y especial pronunciamiento; en el primer otrosí: presenta documentación; al segundo otrosí: en subsidio contesta la acusación Fiscal y las particulares, plantea excepciones de fondo; en el tercer otrosí: tachas a testigos; en el cuatro otrosí: medio de prueba: en el quinto otrosí: lista de testigos y minuta: en el sexto otrosí: acompaña documentos y en el séptimo otrosí: solicita en subsidio beneficios de la ley 18.216.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

A fs. 5.923 a fs. 5.929 (Tomo XVII) el abogado Rodrigo Cortés Carrasco, en representación de Romilio Osvaldo Lavín Muñoz, en lo principal de su escrito interpone incidentes y eximentes; en el primer otrosí: interpone excepciones de previo y especial pronunciamiento, en carácter de fondo; en el segundo otrosí: contesta acusaciones particulares y adhesiones a la misma; en subsidio solicita recalificación de los delitos; en subsidio atenuantes de responsabilidad penal; en el tercer otrosí: solicita penas sustitutivas de la ley 18.216.

A fs. 6.376 (Tomo XVIII) con fecha 05 de enero de 2024 se **sobresee definitiva y parcialmente** a **Luis Robinson Bustos Letelier**, por fallecimiento, tal como consta en certificado de defunción de fs. 6.349 (Tomo XVIII).

A fs. 6.104 a fs. 6.105 (Tomo XVIII) con fecha 14 de septiembre de 2023, **se recibió la causa a prueba.**

A fs. 6.308 (Tomo XVIII), con fecha 15 de noviembre de 2023, se certificó que el término probatorio se encontraba vencido.

A fs. 6.309 (Tomo XVIII), con fecha 15 de noviembre de 2023, se trajeron los autos para efectos del **artículo 499 del Código de Procedimiento Penal**.

A fs. 6.310 (Tomo XVIII), se dictaron medidas para mejor resolver.

A fs. 6.651 (Tomo XX), con fecha 14 de agosto de 2024 se trajeron los autos para fallo.

Resumen ejecutivo

- **En cuanto a las tachas 1° al 7°.**
- **En cuanto a al incidente Nulidad 8° al 13°**
- **Acción penal 14° al 64°:**

14°) y 15°) En cuanto a la acción penal y elementos probatorios del proceso: Declaraciones y Documentos; 16°) Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal; 17°) y 18°) Calificación jurídica de los hechos; 19°) y 20°) Concepto de Lesa Humanidad; 21°) Declaraciones indagatorias de Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud; 22°) y 23°) Análisis de la declaración del acusado, corroboración con sus propios dichos y ponderación en relación a la prueba del proceso; 24°) Declaraciones indagatorias de Pedro Guillermo Tichauer Salcedo; 25°) y 26°) Análisis de la declaración del acusado, corroboración con sus propios dichos y ponderación en relación a la prueba del proceso; 27°) Declaraciones indagatorias de Raimundo Ignacio García Covarrubias; 28°) y 29°) Análisis de la declaración del acusado, corroboración con sus propios dichos y ponderación en relación a la prueba del proceso; 30°) Declaraciones indagatorias de Romilio Osvaldo Lavín Muñoz; 31°) y 32°) Análisis de la declaración del acusado, corroboración con sus propios dichos y ponderación en relación a la prueba del proceso; 33°) Defensa del abogado Alfonso Podlech Delarze; 34°) Defensa de la abogada Karen Valenzuela Jerez; 35°) Defensa del abogado Luis Hernán Núñez Muñoz; 36°) Defensa del abogado

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Rodrigo Cortes Carrasco; **37°)** Defensa del abogado Víctor Hugo Risco Ferreira; **38°)** **Consideraciones Previas al Análisis de la Defensa:** Resumen del auto acusatorio; Estado de Derecho; Obligación de investigar; Jurisprudencia internacional sobre graves violaciones a los derechos humanos (delitos de lesa humanidad) pronunciada por Tribunales Alemanes; Convenio de Ginebra; En cuanto a la complicidad; Convenio de Ginebra; **39°)** Análisis de la defensa específica del acusado Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud; **40°)** Análisis de la defensa específica del acusado Pedro Guillermo Tichauer Salcedo; **41°)** Análisis de la defensa del acusado Raimundo Ignacio García Covarrubias; **42°)** Análisis de la defensa Romilio Osvaldo Lavín Muñoz; **43°)** Acusación particular del abogado Ricardo Lavín Salazar; **44°)** Acusación particular del abogado Sebastián Saavedra Cea; **45°)** Acusación particular del abogado Sebastián Saavedra Cea; **46°) y 47°)** Análisis de las acusaciones particulares; **48°)** Adhesión a la acusación de los abogados Manuel Alejandro Lisboa Cordero y Juan Carlos Hernández Vidal; **49°)** Adhesión a la acusación del abogado David Morales Troncoso; **50°)** Adhesión a la acusación del abogado José Luis Neira Vejar; **51°)** Análisis de las adhesiones a la acusación fiscal; **52°)** Reflexiones sobre lesa humanidad; **Circunstancias Modificadorias de Responsabilidad Penal:** **53°)** Eximentes de responsabilidad penal; **54°)** Análisis del Tribunal; **55°)** Atenuante de responsabilidad penal; **56°)** Análisis del Tribunal; **57°)** Institución de la Media Prescripción o Prescripción Gradual; **58°)** Agravantes de responsabilidad penal; **59°), 60°) y 61°)** Determinación de la pena; **62°), 63°) y 64°)** Beneficios de la ley 18.216 y sus modificaciones posteriores.

En cuanto a la acción civil 65° al 74°:

65°) Demanda civil interpuestas por el abogado Sebastián Saavedra Cea, en representación de Luisa Noemí González Ortega y otros; **66°)** Demanda civil interpuesta por el abogado Sebastián Saavedra Cea, en representación de Evita Valentina Aguayo Olavarría; **67°)** Demanda civil interpuesta por los abogados Manuel Lisboa Cordero y Juan Carlos Hernández Vidal en representación de Elisa Margarita Schmidt Arriagada; **68°)** Demanda civil interpuesta por el abogado David Alberto Morales Troncoso en representación de Ricardo Aguayo Olavarría; Matilde Escobar Vásquez y otros; **69°)** Demanda civil interpuesta por el abogado José Luis Neira Vejar en representación de Rita Ortega Muñoz y otros; **70°)** Contestación de la demanda civil por el abogado Procurador Fiscal de Temuco Álvaro Sáez Willer, en representación del Consejo de Defensa del Estado; **71°)** Análisis de la contestación de las demandas civiles efectuadas por el Fisco de Chile; **72°)** Acreditación probatoria del daño moral; **73°)** Montos; **74°)** Reajustes e intereses de las sumas demandadas.

Actuarios de tramitación y dato técnico

- A.** Fecha de inicio de la causa: 18 de marzo de 2003.
- B.** Actuario de Tramitación Sumario: Marcelo Varas Cicarelli, Ignacia Pérez García.
- C.** Actuario de Tramitación Plenario: Jocelyn Fuentes Cortes, Paulina Montealegre Carrillo, Leslie Villalobos Retamal y Yessica Sobarzo Tragol.
- D.** Tomos: XX
Tomo I de fs.1 a fs. 395;

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Tomo II de fs. 396 a fs. 720;
Tomo III de fs. 721 a fs. 1.071;
Tomo IV de fs. 1.072 a fs. 1.422;
Tomo V de fs. 1.423 a fs. 1.773;
Tomo VI de fs. 1.774 a fs. 2.165;
Tomo VII de fs. 2.166 a fs. 2.551 Bis;
Tomo VIII de fs. 2.552 a fs. 2.904;
Tomo IX de fs. 2.905 a fs. 3.296;
Tomo X de fs. 3.297 a fs. 3.659;
Tomo XI de fs. 3.660 a fs. 4.096 Bis;
Tomo XII de fs. 4.097 a fs. 4.482;
Tomo XIII de fs. 4.483 a fs. 4.733;
Tomo XIV de fs. 4.734 a fs. 5.179;
Tomo XV de fs. 5.180 a fs. 5.489 Ter;
Tomo XVI de fs. 5.490 a fs. 5.759;
Tomo XVII de fs. 5.760 a fs. 6.102;
Tomo XVIII de fs. 6.102 Bis a fs. 6.402;
Tomo XIX de fs. 6.403 a fs. 6.627
Tomo XX de fs.6.628 en adelante;

Cuadernos agregados

1 cuadernos reservado de 229 fojas.

1 cuaderno secreto de 242 fojas;

2 cuaderno separado: 1cuaderno de incidente de 29 fojas; y 1 cuaderno de 94 fojas.

Causas agregadas:

Causa 4.452 del Juzgado del Crimen de Pucón de 58 fojas.

Anexos:

11 CD con archivos digitales

E. Total, de fojas 1081

F. Considerandos 74

EN CUANTO A LAS TACHAS

1°) Que el abogado Alfonso Podlech Delarze, por el acusado Oscar Alfonso Podlech Michaud, en el tercer otrosí de su presentación de fs. 5.731 y siguientes (Tomo XVI), interpuso tachas, respecto de:

A). José Heriberto Mansilla Gatica, en relación con su declaración de fs. 3.809 y de Aquiles Poblete Müller, con relación a su declaración de fs. 3.665. La defensa alega que a estas personas se les tacha por la causal del artículo 460 N°13

del Código de Procedimiento Penal, que de sus propias declaraciones se desprende que nada saben sobre los hechos que se investigan en esta causa. Que hacen referencia genérica como testigos de oídas de Poblete Müller y a una situación particular que narra Mansilla. Ninguno tendría la calidad de testigo hábil, aludiendo a doctrina y jurisprudencia que definen la palabra testigo.

2°) Que se dio traslado a las partes a **fs. 6.071 (Tomo XVII)** de estas tachas.

3°) Que a **fs. 6.085 y siguientes (Tomo XVII)**, evacuó traslado el abogado David Alberto Morales Troncoso, en representación de los querellantes de autos, transcribiendo las tachas opuestas y distingue que, el testigo Aquiles Poblete Müller, de acuerdo a sus declaraciones y en especial la de fs. 3.665, conocía perfectamente todas las acciones de interrogatorios y de destinación de los prisioneros, ya que se infiere que él también realizaba interrogatorios, por lo mismo y de acuerdo a su conocimiento declara como un testigo directo de lo ocurrido con las personas que estaba detenidas en el recinto del regimiento Tucapel, y además tiene perfectamente claro que quien decidía el destino de dichos detenidos era el abogado Alfonso Podlech, de esta forma no es un testigo de oídas como lo señala el incidentista, y la tacha respecto de este testigo no se encuadra dentro de la causal esgrimida por lo que debe ser rechazada. Que de la misma forma respecto de la tacha formulada al testigo José Heriberto Mansilla Gatica, en su declaración de fs. 3.809 que señala: "... el trabajo cotidiano de la fiscalía, como interrogar, tomar decisiones con respecto de los detenidos era de Alfonso Podlech", prosigue reproduciendo lo declarado por este testigo y que del análisis de dicha declaración, se desprende que el testigo tachado, no es de oídas y que sabe sobre los hechos de esta causa y quien determinaba el destino de las personas detenidas era Alfonso Podlech, y fue ante éste que intercedió por dos mujeres que conocía, se trata de una persona que estuvo en el regimiento en aquella época y que además participó y trabajó con el acusado Podlech, por lo que no se trata de un testigo cualquiera, sino se trata de uno presencial, por lo que la tacha debe ser rechazada.

4°) Que a **fs. 6.096 y siguientes (Tomo XVII)**, evacuó traslado el abogado Ricardo Lavín Salazar, en representación del Programa Unidad de Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, solicitando se rechacen las tachas interpuestas por la defensa del acusado Alfonso Podlech Michaud, en contra los testigos José Heriberto Mansilla Gatica y Aquiles Poblete Müller. Aduce que se

deben rechazar, ya que la defensa del señor Podlech Michaud, solicita errónea y arbitrariamente tachar a los testigos que indica en una oportunidad procesal inidónea. Que la defensa podría haber manifestado sus reparos durante su defensa en el sumario y no lo hizo. Podría haber solicitado la ratificación de los hechos en el plenario y proceder a tacharlos en el periodo probatorio cuestión que tampoco hizo. Por ello es por lo que desde el punto de vista formal deben rechazarse dichas tachas. Como segundo punto distingue que deben ser rechazadas porque lo que pretende la defensa es inhabilitar a los testigos del sumario en conformidad al artículo 460 N°13. Respecto del testigo Mansilla Gatica y Poblete Müller, se les tacha en virtud de la causal N°13, que se señala que Mansilla era suboficial del regimiento Tucapel a la época de los hechos y Aquiles Poblete Müller era comisario de investigaciones asignado al regimiento Tucapel, en sus declaraciones han señalado con claridad quienes son los que interrogaban, torturaban y mandaban a ejecutar, y en este caso en sus declaraciones señalan a Alfonso Podlech, como quien tomaba las decisiones respecto de los detenidos. Transcribe los artículos 459 y 464 del Código de Procedimiento Penal.

5°) Que a fs. 6.098 (Tomo XVII), evacuó traslado el habilitado en derecho Leonel Moisés Arriagada Sanzana, en representación de querellante de autos, solicitando se desestimen las tachas por no ser efectivos los hechos en que se fundan y por no tener sustento legal, lo que las torna improcedentes; razón suficiente para señalar que el testimonio prestado por los testigos Mansilla Gatica y Poblete Müller debe dársele pleno valor legal.

6°) A fs. 6.103 (Tomo XVIII), se dejó para la definitiva la resolución de las tachas.

7°) Que, del estudio de los alegatos de las partes, mérito del proceso y su relación con las normas del artículo 460 y siguientes, 492 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, en relación con la tacha, el Tribunal razona lo siguiente:

A. Que, del escrito de tacha, se aprecia que este no cumple con los estándares que establece el artículo 493 inciso segundo del Código de Procedimiento Penal, porque en ningún caso se ha indicado los medios con que pretende acreditarlos. Toda vez, que no basta con decir que son las propias declaraciones de los testigos.

B. Que tal como lo exponen en los traslados los querellantes y a diferencia del alegato de la defensa, los testigos declaran sobre hechos que tuvieron

conocimiento y que pudieron apreciar por sus propios sentidos, los que además se relacionan con la investigación llevada a cabo por el secuestro con grave daño en su carácter de lesa humanidad de las víctimas de autos. En efecto no se trata de terceros ajenos al regimiento Tucapel, en el caso de Aquiles Poblete era el jefe de los detectives asignados al regimiento, quien practicaba interrogatorios y por su puesto recibía toda la información de lo que sucedía con respecto a estas personas detenidas. Y en el caso de José Heriberto Mansilla, la defensa no expone ningún argumento legal o de facto para que el Tribunal pueda inhabilitar a este testigo. Lo que relata además es un hecho real que le toco presenciar y realizar.

C. Que, puntualizando aún más al analizar las declaraciones de José Mansilla Gatica, este da cuenta de la labor que le correspondió realizar, y mantiene su relato a lo largo del tiempo, refiriendo particularmente a fs. **3.809 a fs. 3.810 (Tomo XI)** en declaración judicial que: “El trabajo cotidiano de la fiscalía, como interrogar, tomar decisiones con respecto de los detenidos era de Alfonso Podlech. Comunica que se intercedía ante Alfonso Podlech, porque este decidía la suerte de los detenidos que una vez llegaron en camiones. Que el comandante Jofré le dijo personalmente cuando estaba de guardia, que las decisiones respecto a un grupo de detenidos que llegaron entre los que había mujeres, debía tomarlas Alfonso Podlech. Por esa razón intercedió ante Podlech por las mujeres que conocía. Replica que la oficina de plana mayor era ocupada por la Fiscalía Militar. Que en lo formal el comandante Jofre era el fiscal militar, pero todas las decisiones de la Fiscalía Militar las tomaba Podlech. Aduce que Alfonso Podlech tenía el poder de decidir lo que pasaba con los detenidos. Por esa razón se intercedía ante él por ellos”. Y en el caso de Aquiles Poblete Müller, se hace presente que éste estuvo incorporado como detective, para tomar declaraciones a los detenidos que pasaban por el regimiento Tucapel. En consecuencia, narra sobre hechos que estuvieron en su conocimiento y que pudo apreciar por sus propios sentidos, así lo expresa entre otras declaraciones, por cuanto dice en declaración judicial rolante de fs. **1.320 a fs. 1.322 (Tomo IV)**, atestigua “que el gran responsable de todo y quien decidía el destino de los detenidos era el abogado Alfonso Podlech, quien estaba a cargo de la Fiscalía Militar. Que toda la información se la entregaban a Ubilla y este a su vez, entregaba los antecedentes a la Fiscalía Militar. En esa repartición quien decidía el destino de los detenidos era Alfonso Podlech, que según supo, era el Fiscal”. En su declaración

extrajudicial de **fs. 1.697 a fs. 1.698 (Tomo V)**, soslaya que “estaba a cargo del grupo de detectives agregados al regimiento Tucapel de Temuco. Cumplió funciones ordenadas por un capitán de ejército de apellido Ubilla, quien dispuso que se hiciera cargo de los interrogatorios de las personas que llegaban en calidad de detenidas al regimiento Tucapel”. En declaración judicial de **fs. 1.703 a fs. 1.704 (Tomo V)**, en lo pertinente dice “que sabía de las decisiones que tomaba el abogado Alfonso Podlech con respecto de los detenidos, porque los propios soldados que los llevaban y traían les decían que era esta persona quien determinaba sus destinos. Que le correspondió interrogar detenidos en una sala ubicada en una cuadra del regimiento, en donde les aplicaban electricidad a estas personas”.

D. Que como se aprecia, estos testigos en manera alguna son inhábiles de conformidad a la causal invocada por la defensa, toda vez, que no se acreditó que carezcan de facultades o ineptitudes o alguna imposibilidad material para acreditar sus dichos.

E. Cabe, asimismo mencionar a la defensa que el artículo 464 del texto citado, permite una amplia valoración de los testigos al Tribunal. En efecto: “Los jueces apreciarán la fuerza probatoria de testigos que no reúnan los requisitos exigidos por el artículo 459. Tales declaraciones pueden constituir presunciones judiciales. Igualmente, las de testigos de oídas, sea que declaren haber oído al procesado, o a otra persona”. En consecuencia, se **rechaza** las tachas referidas y así se dispone para lo resolutive del fallo.

INCIDENTE

En cuanto al incidente de nulidad de procesal

8°) Que este incidente se dejó para la definitiva a fs. 29 del cuaderno separado, con fecha 28 de junio de 2023. En síntesis, en lo sustancial y pertinente: A **fs. 5.923 y siguientes (Tomo XVII)** el abogado Rodrigo Cortés Carrasco, en representación de Romilio Lavín Muñoz, en lo principal de su presentación interpone incidente de nulidad de conformidad a lo prescrito en los artículos 69, 71, 211 y 213 del Código de Procedimiento Penal. Expresa que en la acusación judicial se señala que mediante las declaraciones del acusado Romilio Lavín, de los demás involucrados y de testigos, se pudo acreditar, tanto la existencia del hecho de las detenciones ilegales y los secuestros con grave daño, en carácter de lesa humanidad como el periodo de tiempo en el que ocurrieron estos en septiembre de

1973. Contraviniéndose de esta manera lo proveniente en las normas legales señaladas, pues en calidad de juez acusador, dispone de amplias facultades interrogativas, e incluso puede hacer preguntas sugestivas y dicho ejercicio escapa de cualquier control adversarial, por cuanto la defensa no dispone de las facultades para controlar el ejercicio sugestivo señalado. Circunstancia que indica sería contraria a los artículos 211 y 213 del cuerpo legal, siendo causal de nulidad la ocurrencia de esta práctica interrogativa, debiendo declararse nulas en forma absoluta, no considerándose como medios de prueba contra su defendido. Cita jurisprudencia. Manifiesta que habría prueba ilícita, entendiendo como tal aquella prueba que ha sido obtenida con infracción de garantías fundamentales, al producirse con la afectación de la imparcialidad del juzgador, quien dirige sus preguntas a la acreditación del delito en desmedro de la defensa. Requiriendo la nulidad de las declaraciones de su representado y de los demás involucrados, incluyendo a los testigos, algunos de ellos detenidos de aquella época, a saber: Juan Luis Díaz Cortés, Francisco Jerónimo Matta Aro, Manuel Antonio Humaña Jiménez, Renato Arturo Santana Dubreuil, Rene Esteban Díaz Cortés, Rubén Ernesto Sandoval Muñoz y el testigo reservado M.J.C.S, declaraciones de Alfonso Podlech Michaud; Pedro Guillermo Tichauer Salcedo y Raimundo Ignacio García Covarrubias.

9°) A fs.9 a fs.11 (cuaderno separado) el abogado David Alberto Morales Troncoso, en representación de los querellantes de autos, evacua traslado solicitando su rechazo. Comienza reseñando los argumentos del incidentista y luego reproduce el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal, planteando que la nulidad procesal, es el estado de anormalidad del acto procesal, originado en la carencia de algunos de sus elementos constitutivos o de vicios existentes en ellos, que lo colocan en la situación de ser declarado judicialmente invalido, por lo mismo resultaría imprescindible en su reclamación expresar o detallar cual o cuales serían los actos del proceso viciado y de qué forma se habría producido el vicio que lo invalida. Que bajo esta premisa resulta evidente que el incidente promovido carece de fundamentos básicos, puesto que no señala cuales son las preguntas, en que declaraciones, en qué fecha se habría infringido los artículos 211 y 213 del texto legal antes dicho, requisito para determinar la efectividad de lo denunciado por el incidentista como para determinar si el supuesto vicio es de aquellos que con la sola declaración de nulidad de lo obrado se pudiese subsanar.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

10°) A fs.13 (cuaderno separado), el habilitado en derecho Leonel Arriagada Sanzana, por la parte querellante evacua traslado de la nulidad procesal interpuesta solicitando su rechazo con costas, por no ser efectivos los hechos en que se funda. Funda que de la lectura de las declaraciones de las personas aludidas fluye que, de manera alguna, les fueron formuladas preguntas capciosas o sugestivas, ni tampoco se empleó contra ellas coacción, promesa, engaño u artificio para obligarlas o inducir las a declarar en determinado sentido. De manera que el incidente planteado no se funda en antecedente alguno y no se dan los supuestos del artículo 213 del Código de Procedimiento Penal.

11°) A fs. 15 a fs. 16 (cuaderno separado), el abogado Sebastián Saavedra Cea, en representación de los querellantes de autos, expresa que el incidente de nulidad planteado no señala el perjuicio que deba ser reparado o sancionado mediante la nulidad solicitada. No se indica cual es el vicio concreto que afectaría el debido proceso o la imparcialidad del Tribunal. Anexa que la defensa invoca como infringidas las normas de los artículos 211 y 213 del Código de Procedimiento Penal, referido a la toma de declaración de testigos, siendo el caso que nos encontramos frente a una declaración de inculpado o declaración indagatoria, regida por normas diversas, las que no han sido denunciadas como infringidas, por lo que solicita se rechace el incidente de nulidad.

12°). A fs. 18 a fs. 26 (cuaderno separado), el abogado Ricardo Lavín Salazar, por la parte querellante de autos, evacua traslado solicitado el rechazo del incidente promovido por la defensa del acusado Romilio Lavín Muñoz, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

A. Extemporaneidad de la incidencia. Que la defensa no hace referencia alguna a las normas de la nulidad procesal, y en ese sentido, que es importante comenzar señalando que se encuentra regulada entre los artículos 68 y 73 del Código de Procedimiento Penal. Suma que la parte incidentista, en ningún momento, durante la vigencia del extenso sumario instruido en la presente causa, incidentó la nulidad procesal de las actuaciones que hoy está cuestionando, ni tampoco lo hizo en la oportunidad indicada en el artículo 401 del Código de Procedimiento Penal, pese a que aduce a vulneración de derechos y garantías procesales penales como constitucionales. Que las normas precitadas deben ser armonizadas con el contenido del artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie, debido a lo dispuesto en el artículo 68 del Código de

Procedimiento Penal, reproduciendo el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil. También debe estimarse lo dispuesto en el artículo 71 bis del Código de Procedimiento Penal y artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por lo referido en el artículo 68 del primer cuerpo normativo citado. Que con fecha 17 de junio de 2022, se dictó auto de procesamiento en contra de Romilio Lavín Muñoz en calidad de cómplice de secuestro con grave daño en perjuicio de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt. Con fecha 05 de julio de 2022, es notificado del auto de procesamiento, señala que su abogado es Jorge Balmaceda. Con fecha 04 de noviembre de 2022, se dicta acusación fiscal y con fecha 20 de abril de 2023, se designa abogado patrocinante a la Corporación de Asistencia Judicial, para contestar la acusación en representación de Romilio Lavín Muñoz, se dio traslado de la acusación con fecha 4 de mayo de 2023, como consta a fs. 5.888, siendo notificado con fecha 11 de mayo de 2023 a fs. 5.989, se notifica a Rodrigo Cortés Carrasco de la acusación y recién a fs. 5.923 con fecha 02 de junio de 2023 interpone incidente de nulidad, excepciones de previo y especial pronunciamiento y contesta las acusaciones. En atención a lo expresado queda demostrado que el Tribunal no ha prohibido la defensa material ni técnica al acusado Romilio Lavín Muñoz, ni a ningún otro acusado. Las partes han podido ejercer los recursos que la ley pone a su disposición cada vez que se han negado diligencias. Copia los artículos 206, 210 y 213 del Código de Procedimiento Penal. Considera que estimado las actuaciones procedimentales que ha realizado la defensa del acusado, con posterioridad a la verificación de los actos procesales que hoy plantea, entiende que existe aceptación de los efectos de los referidos actos o diligencias, se han subsanado cualquier vicio. Teniendo la incidencia fines dilatorios.

B. Estándares normativos internacionales sobre Derechos Humanos:

Expresa que nuestro país al haber ratificado diversos instrumentos sobre protección a los Derechos Humanos, como es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha adquirido una serie de obligaciones internacionales que implican que todos los poderes del Estado, incluido el Poder Judicial, deban realizar todas las acciones que propendan al resguardo y ejercicio de los Derechos Humanos, importando especialmente en este caso la obligación de investigar y juzgar, garantizando el acceso a la justicia en un plazo razonable. Refiere al artículo 1 de

dicha convención apoyándose en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a la obligación de investigar.

C. Jurisprudencia del Excelentísimo Tribunal Constitucional: Aduce que la defensa cita un fallo de dicho Tribunal respecto de una nulidad procesal del sistema procesal penal nuevo, no aplicable al procedimiento penal antiguo, que en diferentes fallos el máximo Tribunal ha declarado la constitucionalidad de este, en el cual se consagran las garantías respecto al debido proceso, publicidad de los actos jurisdiccionales, derecho a la acción, oportuno conocimiento de ella por la parte contraria, defensa de abogado, facultad de interponer recursos, igualdad ante la ley, entre otras garantías, pero de la presentación de la defensa no se entiende como se vulnerarían dichos derechos en el caso concreto, cita jurisprudencia al efecto.

D. Consideraciones finales: Que de todo lo expuesto el Tribunal utiliza un estándar normativo en Derechos Humanos como el control de convencionalidad, utiliza todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación como el proceso judicial, otorgar las garantías de seguridad a todas las partes del proceso, pone a disposición de manera efectiva los recursos procesales, cumple con investigar, juzgar y sancionar. Se analiza de forma seria e imparcial el contexto en el cual ocurrieron los hechos como las posibles participaciones de los agentes, realizando un examen acucioso e integral con la prueba que consta en el proceso. Reiterando que no se ha impedido el derecho a la defensa técnica por lo tanto la petición de nulidad de las declaraciones del acusado y demás involucrados y testigos, sin mencionar fojas, solicitadas por el abogado Rodrigo Cortés Carrasco deben ser rechazadas.

13°) Que, del estudio de los antecedentes, el mérito del proceso y escritos de las partes, el Tribunal razona lo siguiente:

A. Que dé inicio y antes de entrar al fondo del incidente el Tribunal hace presente que este incidente de nulidad de manera semejante han sido presentados en las siguientes causas: rol 113.089 del ingreso del Juzgado del Crimen de Temuco, seguida para conocer los delitos de apremios ilegítimos y homicidios calificados de Florentino Alberto Molina Ruiz y otros de fecha 15 de septiembre de 2023, donde fue rechazada tal petición; en causa rol 63.556 del ingreso del Juzgado de Letras de Angol, para conocer el delito de apremios ilegítimos con resultado de muerte de Óscar Gutiérrez Gutiérrez, donde dicho incidente fue rechazado y la

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

sentencia de primera instancia confirmada por la ltima. Corte de Apelaciones de Temuco con fecha 25 de febrero de 2022.

B. Que del auto de procesamiento dictado contra el acusado Romilio Lavín Muñoz de fecha 17 de junio de 2022 según consta a fs. **4.254 a fs. 4.335 (Tomo XII)**, y notificado personalmente el 05 de julio de 2022 y advertido de los derechos que le confiere la ley se reserva el derecho de apelar del auto de procesamiento a **fs. 4.361 (Tomo XII)**. Desde esa fecha hasta la dictación del Auto Acusatorio de fecha 04 de noviembre de 2022 de **fs. 4.600 a fs. 4.662 (Tomo XIII)**, transcurrieron cinco meses, durante ese periodo el abogado del acusado o quien lo representaba apeló y solicitó copias según consta a fs. 4.372 a fs. 4.374 (Tomo XII), las que fueron concedidas con fecha 11 de julio de 2022 según consta a fs. 4.375 (Tomo XII). Como se aprecia entonces y lo reitera el abogado Ricardo Lavín Salazar, la defensa tuvo tiempo suficiente para realizar su defensa técnica e interponer todos los recursos procesales que consagra el ordenamiento jurídico para impugnar las resoluciones del Tribunal. Por estos primeros argumentos debe **rechazarse** el incidente de nulidad promovido.

C. Que también cabe hacer presente, que es nuestra propia Constitución Política, a propósito de la reforma procesal penal que estableció en el artículo 77 inciso final que: “La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, así como las leyes procesales que regulen un sistema de enjuiciamiento, podrán fijar fechas diferentes para su entrada en vigor en las diversas regiones del territorio nacional. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo para la entrada en vigor de dichas leyes en todo el país no podrá ser superior a cuatro años”. Refiriéndose con ello al principio de gradualidad, a fin de que la reforma procesal penal se fuera incorporando gradualmente en las diferentes regiones del país. Esto es concordante con el título final del Código Procesal Penal que refiere a la entrada en vigencia del código en cuanto dispone en el artículo 483 que: “Las disposiciones de este Código sólo se aplicarán a los hechos acaecidos con posterioridad a su entrada en vigencia”; el artículo 484 prescribe: “Entrada en vigencia respecto de hechos acaecidos en el territorio nacional. Este Código comenzará a regir, para las distintas Regiones del país, al término de los plazos que establece el artículo 4º transitorio de la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público. En consecuencia, regirá para las regiones de Coquimbo y de la Araucanía, desde el 16 de diciembre de 2000(...)”. Por tal razón, las normas del

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Código Procesal Penal se aplican a hechos acaecidos con posterioridad al 16 de diciembre del 2000. En consecuencia, todos los fundamentos que el incidentista plantea respecto a principios y normas que tengan relación con el Código Procesal Penal son improcedentes. Por estos nuevos argumentos debe ser **rechazado** el incidente de nulidad.

D. Que, desde otro punto de vista, este Tribunal comparte los argumentos dados por el querellante Ricardo Lavín Salazar, en cuanto expresa además que, la nulidad procesal se encuentra regulada en los artículos 68 y 73 del Código de enjuiciamiento criminal, y demás normas conexas. Aduciendo a la oportunidad en que la parte afectada debe promover, citando el artículo 71 del Código de Procedimiento Penal. Que la parte incidentista, en ningún momento, durante la vigencia del extenso sumario instruido en la presente causa, incidentó la nulidad procesal de las actuaciones que hoy está cuestionando, ni tampoco lo hizo en la oportunidad indicada en el artículo 401 del texto de procedimiento penal, pese a que aduce a vulneración de derechos y garantías procesales penales. Sin embargo, motiva el incidente mediante esta actuación procesal, con claros fines dilatorios. Efectivamente el incidente, es además extemporáneo por aplicación en primer lugar de la norma de reenvío del artículo 43 del Código de Procedimiento Penal al Libro Primero del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a los incidentes deben promoverse en el término de cinco días, artículos 82 y siguientes de dicho texto legal. Además, cabe citar las normas sobre nulidad del propio Código de Procedimiento Penal artículos 68 a 73. En efecto, el artículo 71 manifiesta que las partes podrán pedir el incidente de nulidad en el plazo señalado en el artículo 401 del código citado, esto es, a propósito de la conclusión del sumario, en dicho plazo la parte nada expuso, desde ese punto de vista tal como dispone el artículo 71 bis del mismo código, cualquier nulidad que hubiere existido queda subsanada si las partes no las oponen en las oportunidades respectivas, como ha sucedido en la especie. Este es otro argumento para **rechazar** el incidente de nulidad.

E. Que asimismo para rechazar el incidente de nulidad, el Tribunal hace presente que las normas del Código de Procedimiento Penal a que alude la defensa han sido revisados reiteradamente, a través de una jurisprudencia consciente y uniforme por el Tribunal Constitucional quien ha rechazado diferentes requerimiento de inaplicabilidad de interpuestos por múltiples defensas, como ejemplo de lo anterior roles 27.530-A Juzgado de Letras de Carahue requerimiento 5192-18- INA y

5438-18-INA; rol 63.534 Juzgado de Letras de Angol requerimientos 4807-18- INA, 5193-18-INA, 5439-18-INA; rol 57.067 Juzgado de Letras de Victoria requerimientos 5.195-18-INA y 5.440-18-INA; rol 53.680 ingreso del Tercer Juzgado del Crimen de Temuco requerimiento 8558-20-INA. Por lo que esas alegaciones a las actuaciones del Tribunal son improcedentes.

F. Que además tal como lo exponen los querellantes el escrito de incidente de nulidad es confuso, porque lo principal de su alegato son las declaraciones de Romilio Lavín, y sucede que los artículos que regulan las declaraciones del inculcado están a partir del artículo 318 y siguientes del Código de Procedimiento Penal y no los artículos que nombra la defensa. Asimismo, se le hace presente a la defensa que desde un punto de vista formal, tanto el auto de procesamiento como el auto acusatorio tienen forma de estructural y en esas formas de estructuras se deben citar los dichos de los inculcados, tal como se ha hecho en el auto acusatorio. El incidente revela que el articulista no ha dado una lectura adecuada al auto acusatorio, desde que el numeral 1) al numeral 63) se aportan las pruebas, se describen los hechos, se califican las conductas y luego se identifican los dichos de los acusados. En consecuencia, al contrario de lo que expone la defensa no existe ningún error ningún actuar que merezca la nulidad.

G. Finalmente para rechazar la nulidad, tal como lo expone los abogados querellantes, en consideración a que del escrito del incidente de nulidad aparte de enunciar diferentes testigos e incluso a los otros imputados y testigo reservado, la parte articulista no logra acreditar cuales serían esos antecedentes plausibles para entender que hubo algún tipo de vicio o cuáles fueron las preguntas sugestivas, qué fecha, qué testigo o imputado, qué fojas del proceso, pues de ello nada dice. En consecuencia, con esa argumentación vaga y difusa no es posible acceder a lo pedido por la defensa y se **rechaza** el incidente de nulidad y así se dirá en lo resolutivo.

CONSIDERANDO:

EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL

14°) Que a **fs. 4.600 a fs. 4.662 (Tomo XIII)**, con fecha 04 de noviembre de 2022, se dictó auto **acusatorio** en contra de **LUIS ROBINSON BUSTOS LETELIER** (sobreseído por fallecimiento según consta a fs. 6.376 (Tomo XVIII) como autor de los delitos de detención ilegal, en su carácter de lesa humanidad

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

en las personas de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Juan Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, ilícito perpetrado en la comuna de Pucón el 13 de septiembre de 1973. **OSCAR ALFONSO ERNESTO PODLECH MICHAUD, PEDRO GUILLERMO MANUEL TICHAUER SALCEDO, RAIMUNDO IGNACIO GARCÍA COVARRUBIAS, y ROMILIO OSVALDO LAVÍN MUÑOZ;** como **cómplices** de los delitos de secuestro con grave daño, en su carácter de lesa humanidad en las personas de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Juan Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, ilícito ocurrido entre fines de septiembre e inicio de octubre de 1973.

15°) Que con el objeto de establecer en autos la existencia de los ilícitos penales señalados, se han reunido durante el curso de la investigación los siguientes elementos de convicción, además de los ya enunciados que se encuentran en el auto acusatorio de fs. 4.600 a fs. 4.662 (Tomo XIII) (que corren de fs. 1 a fs. **4.599**), como las querellas deducidas antes individualizadas. Sin perjuicio, del análisis de las pruebas rendidas durante el plenario.

A. DECLARACIONES

Los testimonios que a continuación se detallan corresponden a una síntesis de los aspectos sustanciales y pertinentes en relación con los hechos investigados, que los testigos expresaron:

A.1. Eduardo Vergara González (46 años a época de los hechos). Quien declaró de fs. 52 (Tomo I); de fs. 71 a fs. 71 vta. (Tomo I); de fs. 143 (Tomo I); de fs. 397 a fs. 397 vta. (Tomo I); de fs. 546 (Tomo II); de fs. 824 a fs. 825 (Tomo III), de fs. 915 (Tomo III), de fs. 1.014 a fs. 1.015 (Tomo III) y de fs. 1055 (Tomo III).

En declaración extrajudicial del 15 de noviembre de 1995, rolante de **fs. 52 (Tomo I)**, (copia de la cual se encuentra a fs. 1055 Tomo III), comienza haciendo una breve reseña de su carrera funcionaria, en lo pertinente se retiró en noviembre de 1974 de Carabineros de Chile. Los sucesos del 11 de septiembre de 1973 le sorprendieron cumpliendo funciones en la subcomisaria de Pucón. Su función específica era la oficina de partes y el rol administrativo de la unidad. En cuanto a los hermanos Schmidt Arriagada, conocía a la madre de nombre Aurora

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Arriagada Vergara, la cual tenía un restaurant en Villarrica, quien convivía con Otto Schmidt. En el año 1957 cuando se desempeñaba como jefe del Retén Llafenca, conoció a sus hijos, los cuales a esa fecha eran pequeños. Desde esa fecha no los volvió a ver. Que no es efectivo lo que ha manifestado la señora Aurora Arriagada, que su hijo fue capturado y llevado a la unidad de Pucón, por cuanto jamás tuvo conocimiento que eso ocurriera, pero no lo descarta, insiste que a subcomisaria no llegaron detenidos. Ignorando que pudo haberles ocurrido, que años después, por comentarios se enteró que habían desaparecidos, intentando cruzar hacia Argentina.

En declaración extrajudicial del 09 de enero de 1986, de **fs. 71 a 71 vuelta (Tomo I)**, replica en lo pertinente que el 11 de septiembre de 1973 se desempeñaba como suboficial en la subcomisaria de Carabineros de Pucón. Que en relación con los detenidos después del 11 de septiembre, no tiene antecedentes que aportar. En cuanto a los hermanos Schmidt Arriagada los conocía de pequeños, porque conocía a su madre, quien vivía en Menetue, con quien no volvió a tener contacto. Niega haberle mencionado detalles acerca de la detención de sus hijos, por cuanto no tuvo conocimiento de ésta. Que se retiró entre julio o agosto de 1974.

En diligencia de careo con Silvia Schmidt del 01 de junio de 1979, rolante de **fs. 143 (Tomo I)**, ratifica su declaración y agrega que desde abril de 1973 se dedicó a labores administrativas, sin participar en actos policiales. Con Guido Krause nunca trabajó, por cuanto ejercía en Pucón, no en Villarrica. Que en la documentación que realizó, nunca aparecieron esas personas registradas, por lo que le parece extraño que carabineros tuviera alguna participación en la detención. Que nunca conversó con la madre de esos jóvenes, por lo que no podría haberle hecho ningún comentario.

En declaración judicial del 17 de noviembre de 2004, rolante de **fs. 397 a fs. 397 vuelta (Tomo II)**, ratifica su declaración de fs. 71 exponiendo que para el tiempo en que ocurrió la detención, se encontraba enfermo, producto de un accidente en camión. Esto ocurrió una semana después del 11 de septiembre. Que en enero de ese año, pasó a visitarlo Luis Bustos Letelier, subcomisario de Pucón en 1973, conversando acerca de los hechos acaecidos con motivo de la detención de unos jóvenes desaparecidos. Estuvieron de acuerdo, en que efectivamente estuvo en el cuartel cuando estos fueron detenidos y que los

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

habrían entregado al regimiento Tucapel. El Tribunal le pregunta por los integrantes de la subcomisaria de Pucón, responde: que el jefe era Luis Bustos Letelier; luego venía el suboficial mayor Helio Raúl Burgos, actualmente fallecido; posteriormente él; luego el sargento primero Ignacio Cofré Leal; cabo Reden Rivas Vega, enfermero de ganado; José Eve Mancilla Yáñez, quien llegó posterior al 11 de septiembre; Guillermo Rosales; Ramón Rivas Pinilla; Diógenes Bravo; Cristóbal Moneada Gutiérrez; Ramón Quezada Reyes (fallecido) chofer; Francisco Monsalve Hidalgo (fallecido) chofer. El Tribunal le pregunta si vio pasar detenidos en tránsito hacia Temuco, ya sea trasladados por personal del ejército carabineros o de la Fuerza Aérea, responde: que sí, en dos o tres oportunidades vio a los militares, que fueron a buscar detenidos. El Tribunal le pregunta si tuvo conocimiento que algunos detenidos hayan sido transportados vía aérea hacia Temuco o vio sobrevolar helicópteros en la zona. El deponente responde: que vio sobrevolar helicópteros antes y después del 11 de septiembre, que también aterrizaban a buscar detenidos. Que a veces llegaban dos helicópteros y siempre aterrizaban en el patio de la subcomisaria. No recuerda quiénes formaban parte de la tripulación, pero si recuerda a un comandante de apellido Fernández, quien era muy autoritario con ellos. El Tribunal le pregunta si la subcomisaria de Pucón fue visitada alguna vez por el coronel Gonzalo Arias González. Barbulla que no, lo conocía porque fue su profesor de equitación, pero nunca lo vio en Pucón. El Tribunal le pregunta si existió el Servicio de Inteligencia de Carabineros en Pucón y si formó parte de ella. El deponente comunica que, si existió, pero no formó parte de ella, pues se retiró el año en que ésta se formó. Pero sí recuerda que había dos suboficiales que formaban parte de este organismo. Uno de ellos era suboficial de apellidos Reyes Fernández y el otro era Cristóbal Moneada Gutiérrez.

En declaración judicial del 07 de marzo de 1991, rolante de **fs. 546 (Tomo II)**, funda que entre noviembre de 1972 a diciembre de 1974 se desempeñó como suboficial mayor de carabineros en la subcomisaria de Pucón. No detuvo a ninguna persona después del 11 de septiembre de 1973. En cuanto a Alejandro Escobar Vásquez, no lo conoció, ni estuvo detenido en la subcomisaria. Hace presente que, personal militar y de aviación se constituyeron en la zona y efectuaron detenciones aisladas, no masivas, como dice la publicación del diario en que se habla de 21 personas entre las cuales se encontraba la persona por la que declara. En cuanto al jefe de la unidad en esa época, era el capitán Luis

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Bustos quien falleció hace varios años. No puede aportar mayores antecedentes al respecto por desconocerlos, ya que los detenidos que hubo fueron llevados a Temuco, sin pasarlos por la subcomisaria. Ignora el grado de oficial e identidad, del que andaba a cargo de las patrullas tanto militares como de aviación.

En declaración extrajudicial del 09 de agosto de 2012, rolante de **fs. 824 a fs. 825 (Tomo III)**, replica su carrera funcionaria y en lo pertinente soflama que en septiembre de 1973 ostentaba el grado de sargento primero y se desempeñaba en la subcomisaria de carabineros de Pucón, la que estaba al mando del capitán Luis Bustos Letelier, recordando como compañeros de unidad a los carabineros Francisco Monsalve, Ramón Quezada, Orlando Reyes, Cristóbal Moncada. Respecto a la detención de Hugo y Elías González Ortega, Juan y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa, Héctor Aguayo Olavarría, Raúl Figueroa Burkhardt y Alejandro Escobar Vásquez, recuerda a los hermanos Schmidt, por conocer a su padre Otto, quien tenía domicilio en Menetúe, cuando trabajó en el retén de Llafenco. En cuanto a la detención de estos jóvenes, señala que en una oportunidad el capitán Bustos, le comentó que había detenido a un grupo de jóvenes que aparentemente intentaban cruzar la frontera cerca de Caburgua. Que, según Bustos, la detención la habría hecho el suboficial Heleo Raúl Burgos Burgos, junto al carabinero Francisco Monsalve Hidalgo y otros funcionarios que no recuerda. Por lo comentado por el capitán Bustos, esos jóvenes fueron entregados al ejército, motivo por el cual se les trasladó hasta el regimiento Tucapel de Temuco, por vía terrestre en un vehículo particular. Lo anterior, se lo comentó el capitán Bustos, cuando lo visitó en su domicilio debido a que se encontraba con licencia médica por sufrir accidente de tránsito. Recuerda que hubo particulares que prestaron sus vehículos para efectuar patrullajes, que entre las personas que facilitaban esos medios de transportes recuerda a Carlos Barra. Recordando la presencia de personal del ejército y helicóptero de la Fuerza Aérea. Afirma que los helicópteros más de una vez trasladaron personas detenidas a Temuco. Comenta otros hechos.

En declaración judicial del 13 de diciembre de 2012, rolante de **fs. 915 (Tomo III)**, ratifica su declaración extrajudicial de fs. 804 a 805 (la que consta en estos autos a fs. 824 a fs. 825 Tomo III), afirma que conoce a los hermanos Schmidt Arriagada cuando eran pequeños. Insiste que conocía al padre de estos. Que no volvió a tener contacto con ellos desde esa época. Que en una

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

oportunidad conversó con el carabinero Cristóbal Moncada Garcés muchos años después del 11 de septiembre de 1973, y le dijo que los hermanos Schmidt Arriagada se habrían ido a Alemania. No supo de donde obtuvo la información. Francisco Monsalve Hidalgo era chofer de la subcomisaría de Pucón. Que en ese tiempo se utilizaba una camioneta blanca de INDAP para las labores de la unidad. Que no puede aseverar los hechos que rodearon la desaparición de las personas que en esta causa se investiga, porque en esa época estaba con licencia médica, y todo lo supo por el capitán Bustos. Tiene la impresión de que estos jóvenes desaparecieron desde el regimiento Tucapel de Temuco, ya que nunca más supo de ellos una vez que ingresaron a ese lugar.

En declaración extrajudicial del 16 de mayo de 2013, rolante de **fs. 1.014 a fs. 1.015 (Tomo III)**, replica su carrera funcionaria y que al 11 de septiembre, sin precisar fecha exacta, estaba con licencia médica. Con relación a los ocho detenidos, se enteró en una oportunidad sobre la detención de unos jóvenes, pero no puede precisar si son ocho, quienes fueron detenidos por el sargento Burgos, Ramón Quezada Reyes, Monsalve y otros funcionarios. Que posterior a la detención de los jóvenes, leyó un oficio en el cual se hacía referencia a los detenidos, recordando que en este oficio figuraban los hermanos Schmidt y Olavarría, quien era hijo de un comerciante en la ciudad de Curarrehue. Ese oficio no lo confeccionó él, en dicho documento se mencionaba la entrega de los detenidos al regimiento de Infantería N°8 Tucapel de Temuco. Que estos detenidos fueron trasladados vía terrestre a Temuco, ignora si fueron llevados en vehículo policial o de propiedad de Carlos Barra Matamala, quien siempre les prestó colaboración. No recuerda los nombres de los funcionarios que trasladaron a los jóvenes a Temuco. Señala otros hechos y que no supo qué pasó con esos jóvenes en Temuco, empero no recuerda haber conversado con familiares de los Schmidt, en Villarrica, no descarta la situación. Refiere que no es efectivo que hayan entregados detenidos a personal de la Fuerza Aérea para que efectuaran su traslado a Temuco, por vía aérea, a pesar de que en una oportunidad vio que trasladaban a personas en esa calidad, quienes habían sido detenidos por efectivos de esa institución.

A.2. Guido Krause Pardo (46 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 53 (Tomo I); de fs. 68 a fs. 68 vuelta (Tomo I); de fs. 137 (Tomo I);

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

de fs. 396 a fs. 396 vuelta (Tomo I); de fs. 547 (Tomo II); de fs. 754 a fs. 755 (Tomo III); de fs. 802 (Tomo III) y de fs. 1.056 (Tomo III).

En declaración extrajudicial de fecha 17 de noviembre de 1995, rolante de **fs. 53 (Tomo I)**, copia de la cual se encuentra a fs. 1056, cuenta que ingresó a carabineros de Chile en 1967. En lo pertinente comunica que el 11 de septiembre de 1973, se desempeñaba en la comisaría de Villarrica. Que conoció a los hermanos Carlos y Ricardo Schmidt Arriagada, específicamente al que trabajaba en "Corvi". A propósito de una postulación en la adquisición de una vivienda, sin tener mayor contacto con él. La madre del joven la ubicaba, por cuanto tenía un negocio de alcoholes. Aquilata que no tuvo conocimiento de lo ocurrido, nunca los vio en la comisaría.

En declaración judicial del 27 de diciembre de 1995 de **fs. 68 a 68 vuelta (Tomo I)**, hace una breve reseña de su carrera funcionaria, en lo pertinente señala que para el 11 de septiembre de 1973 trabajaba en la subcomisaría de Villarrica hasta octubre de 1974, ostentaba el grado de carabinero y no tenía participación en detenciones de personas relacionadas con los hechos ocurridos en esa época. Replica que conocía a los hermanos Schmidt, específicamente a uno de ellos, porque en aquella época trabajaba en "Corvi" y con quién conversó en varias ocasiones, a raíz de la tramitación de la adquisición de una vivienda. De igual manera ubicaba a la madre de los jóvenes, que regentaba un expendio de alcoholes y con motivo de las fiscalizaciones de rutina que realizaba carabineros. Aclara que jamás le manifestó a esa señora que hubiera tenido antecedentes acerca de la detención de sus hijos.

En declaración judicial de fecha 14 de mayo de 1999, rolante de **fs. 137 (Tomo I)**, ratifica su declaración de fs. 68 a 68 vta., sin tener más antecedentes que aportar.

En declaración judicial de fecha 17 de noviembre de 2004, rolante de **fs. 396 a 397 (Tomo II)**, ratifica íntegramente la declaración de fs. 68 y en lo tocante insiste que no vio detenidos por motivos políticos, solo por faltas o delitos comunes. No realizó detenciones por motivos políticos. Tampoco vio pasar detenidos en tránsito hacia Temuco, por personal de ejército, carabineros o de Fuerza Aérea. Que vio sobrevolar helicópteros, pero no tuvo conocimiento que trasladaran detenidos. Revela que cada seis o una vez al año hacían una visita de inspección, pero no recuerda que oficial era él que los visitaba. Que el coronel

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Arias era el subprefecto, el jefe de la subcomisaria de Villarrica, era el señor Ramón Torrealba Guzmán.

En declaración judicial de fecha 15 de marzo de 1991, rolante de **fs. 547 (Tomo II)**, dice que entre 1971 y octubre de 1974 estuvo destinado en la unidad de Villarrica, no conoció a la persona por la cual se le interrogada, no lo vio en la unidad donde se desempeñaba y tampoco con posterioridad a la fecha. No supo que personal estuvo a cargo de la detención de las personas, por las cuales se investiga sobre su paradero, en ese tiempo tenía el grado de carabineros y cumplía funciones de rutinas, como hacer guardia, cuartelero y servicio de población. Que a Alejandro Escobar Vásquez no lo conoció y tampoco a su familia. No recuerda que haya habido detenciones masivas en la zona, tampoco aisladas al menos no tuvo información oficial. En 1974 es destinado a Curarrehue, ocupándose de problemas del sector, en el sentido policial.

En declaración extrajudicial de fecha 09 de mayo de 2012, rolante de **fs. 754 a 755 (Tomo III)**, en lo pertinente reitera que 1973 ostentaba el grado de carabinero en la subcomisaria de Villarrica. La unidad policial estaba a cargo del capitán de carabineros Ramón Torrealba Guzmán. Entre sus compañeros estaba el sargento René Raipal y José Salas, los cabos Raúl Vargas y Néstor Albarrán y el carabinero Joaquín López Bizama. Atestigua que conoció a Eduardo Vergara González por ser sargento 2° y se desempeñaba en la subcomisaria de Pucón o reten de carabineros de Curarrehue. No sabe si a la subcomisaria llegaban detenidos por temas políticos. Dice que, al llegar el 11 de septiembre de 1973, efectuaba patrullajes de control de toque de queda, que no participó en allanamiento ni detenciones de personas opositoras al régimen militar. En cuanto a Hugo y Elías González Ortega, Juan y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa, Raúl Figueroa Burkhardt y Héctor Aguayo Olavarría, solo recuerda a uno de apellido Schmidt que se desempeñaba en el "Serviu", porque le ayudo en unos trámites para obtener vivienda en Villarrica. Por comentarios de la gente supo que escapó a Argentina con posterioridad al golpe de Estado. Que conoció a la madre del joven, porque tenía un negocio de alcoholes en calle Bilbao con esquina Eleodoro Acevedo, que nunca le preguntó información relativa a su hijo.

En declaración judicial de fecha 25 de septiembre de 2012, rolante de **fs. 802 (Tomo III)**, ratifica su declaración extrajudicial de fs. 734 a fs. 735, e invoca que un grupo de jóvenes se fueron a Argentina, entre los que estaba uno de

apellido Schmidt, pero no recuerda haberlos visto detenidos en la unidad policial. Que es falso que él le haya comentado a la madre acerca de la detención de los jóvenes. Que de lo depuesto por Carlos Barra no supo nada, porque trabajaba en Villarrica. Que, por rumores de personas en el pueblo, se enteró que se ejecutó a personas en el puente de Villarrica y sus cuerpos fueron lanzados al río, pero eran rumores.

A.3. José Eliseo Arriagada Vergara (45 años a la época de los hechos). **En declaración extrajudicial** de fecha 15 de noviembre de 1995, rolante de **fs. 54 (Tomo I)** (copia de lo cual se encuentra a fs. 1.057 Tomo III), funda que es tío de Carlos y Ricardo Schmidt Arriagada, desaparecidos desde el 13 de septiembre de 1973, que el 11 de septiembre de 1973, concurrió a Temuco a realizar diligencias a la oficina de tierras. Debido a que ese día ocurrió el golpe de Estado, debiendo quedar en la ciudad hasta el 13 en la mañana, fecha en la cual le autorización regresar a su casa. Al llegar al domicilio, su esposa le informó que los sobrinos Carlos y Ricardo, junto a los hermanos Hugo y Elías González Ortega, Juan de Dios Cabrera Figueroa y Héctor Aguayo Olavarría, había pasado la noche en su casa, y que se habían ido el día 12, en horas de la tarde con dirección a la frontera, tomando el camino Faja Molco, con la intención de pasar a Argentina. Según le dijo su esposa, esta determinación la tomaban porque tenía miedo a ser detenido, por cuanto todos pertenecían a juventudes socialistas. Después de lo narrado no se supo más de ellos, y uno diez años después, por comentarios se enteró que el grupo de jóvenes los había detenido en el trayecto y que lo habrían trasladados a la tenencia de carabineros de Pucón. También se le informó que el carabinero Quezada (fallecido), le comentó que no buscarán más a los jóvenes por cuanto ya no existían. De acuerdo con las averiguaciones de parte de la familia, no tuvieron una respuesta oficial sobre la suerte corrida por sus sobrinos. Que su hermana Aurora falleció intentando obtener antecedentes en la intendencia de Temuco.

A.4. Maria Inés Vásquez Ceballos (48 años a la época de los hechos). **En declaración extrajudicial** de fecha 15 de noviembre de 1995, rolante de **fs. 55 a fs. 56 (Tomo I)** (cuya copia de esta de fs. 1.058 a fs. 1.059 Tomo III), expone que es madre de Alejandro Escobar Vásquez desaparecido desde el día 13 de septiembre de 1973. Su hijo desapareció a los 18 años, soltero y trabajaba en una tontería, como operario. Pertenecía a las juventudes socialistas. Con relación a la

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

desaparición de su hijo, señala que el 11 o 12 de ese mes, carabineros allanó su domicilio al igual que otros del vecindario, en busca de armas o elementos políticos. Ese día estaba sola con sus hijos pequeños, Alejandro estaba en la casa de su hermana Adela. Carabineros al ver que no había lo que buscaban, se retiraron. El 13 de septiembre de ese año, Alejandro le comunicó en la mañana, que se iba con unos amigos del partido a Argentina, debido a que temía ser detenido o muertos por la represión. Alrededor de las 14:00 horas, sacó ropa de vestir y abrigo, le preparó cosas para comer. Desde ese momento nunca más ha vuelto a ver su hijo. En ese tiempo nunca tuvo ningún tipo de información sobre lo que ocurrió con esos jóvenes, no obstante haber conversado con madres de los otros muchachos que salieron con su hijo. Que hubo muchos comentarios entre los que recuerda, es que habían sido detenidos cuando trataron de cruzar la frontera y otro que decía que se encontraba viviendo en Argentina. No tiene conocimiento de lo ocurrido con ellos, ni quienes pudieron ser los autores de la detención.

A.5. David Iván Figueroa Burkhardt (29 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 57 (Tomo I); de fs. 746 a fs. 747 (Tomo III); de fs. 850 (Tomo III) y de fs. 1.060 (Tomo III).

En declaración extrajudicial de fecha 14 de noviembre de 1995, rolante de **fs. 57 (Tomo I)** (cuya copia se encuentra a fs. 1.060 Tomo III), arguye que es hermano de Marcial Figueroa Burkhardt desaparecido en los días posteriores al 11 de septiembre de 1973. En esa época se encontraba trabajando en Temuco, aproximadamente el 17 de septiembre de ese año, llamó a su madre Olga Burkhardt Gabilan a Villarrica, quien le informó que su hermano se había marchado días antes hacia Argentina, en compañía de unos amigos, de los cuales no recuerda nombres. Desde esa fecha no volvieron a tener noticias de su hermano. Posteriormente escucho una serie de rumores, relacionado con el paradero de Raúl, que lo habrían visto en Argentina, que amigos de él habían vuelto a Chile, que lo habían matado en el puente del río Toltén, todos esos dichos resultaron ser rumores, ya que nunca más supo noticias concretas de su hermano. En lo personal no efectuó diligencias para dar con el paradero de su hermano, al parecer su madre tampoco las efectuó, debido al clima reinante en la época.

En declaración extrajudicial de fecha 11 de mayo de 2012, rolante de **fs. 746 a fs. 747 (Tomo III)**, para el 11 de septiembre se desempañaba como

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

funcionarios de correos, telégrafos de Chile en Temuco, y en lo tocante que Raúl Marcial, era el menor de sus hermanos, para esa época tenía 23 años de edad, residía en Villarrica, junto a su madre. Ignora la tendencia política de su hermano o a que se dedicaba laboralmente. Que Raúl perteneció a la Armada de Chile hasta 1970, cuando fue dado de baja. Dice no tener antecedentes en cuanto a la detención de su hermano, salvo que se había ido a Argentina junto a un grupo de amigos. Lo anterior, le fue informado por su madre vía telefónica. Que en ese momento no le dio mayor importancia a esa situación, ya que creyó que éste se había ido en busca de trabajo a ese país. Con el paso de los años, circulaban rumores con relación al destino de su hermano, les comentaron que fue visto en la ciudad de Neuquén, que incluso que estaba en Brasil, pero eran rumores sin relevancia, porque está seguro de que Raúl hubiera tomado contacto con algún integrante de la familia. Espeta que su hermano Ricardo asumió el liderazgo en la familia para efectuar averiguaciones sobre el paradero de su hermano. Eso fue cuando regresó la democracia a Chile, incluso este declaró en Pucón, y dio muestras de sangre, al objeto de constatarlas con los cuerpos encontrados en la época, pero no hubo resultados positivos. Señala que, en el año 1980, mientras estaba de paso en Villarrica, se le acercó un hombre, cuya identidad desconoce, pero trabajaba como pescador o botero, quien le comentó que había visto el cadáver de su hermano flotando en el río Toltén junto a otros cuerpos enredados en unos matorrales que había a orilla de ese río. Ese hombre le comentó que dicho lugar estaba en la Curva del Toro, río Toltén. Añade que, pese a la gran cantidad de rumores, uno de ellos decía que su hermano fue ejecutado junto a otras personas en el puente Rodrigo Bastidas y la sangre que quedó en el pavimento, fue limpiada por bomberos de Villarrica. No recuerda haber conocido a Hugo y Elías González Ortega, Juan y Ricardo Schmidt, Juan Cabrera Figueroa, Héctor Aguayo Olavarría, pero en Villarrica había personas con esos apellidos.

A.6. Diógenes Segundo Bravo Bernales (42 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 60 a fs. 61 (Tomo I); de fs. 72 vuelta a fs. 73 (Tomo I); de fs. 96 vuelta a fs. 97 (Tomo I); de fs. 118 (Tomo I) y de fs. 1.063 a fs. 1.064 (Tomo III).

En declaración extrajudicial de fecha 14 de diciembre de 1995, rolante de **fs. 60 a fs. 61 (Tomo I)** (copia a fs. 1.063 a fs. 1.064 Tomo III), explana carrera funcionaria y en lo adecuado que para el 11 de septiembre de 1973 prestaba

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

servicios en la subcomisaria de Pucón, con el grado de cabo primero. En relación con Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría, Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, no los recuerda por sus nombres, pero puede indicar que dentro de los primeros días del pronunciamiento militar, en circunstancias que se encontraba en la subcomisaria, llegó hasta la unidad el cabo primero Francisco Monsalve (fallecido), con un grupo de jóvenes, no recuerda la totalidad, pero eran varios, en calidad de detenidos, por cuanto habían sido sorprendidos huyendo hacia Argentina por una patrulla que estaba al mando del capitán don Luis Robinson Bustos Letelier, quien a la vez era el jefe de la unidad. Que los detenidos fueron ingresados a los calabozos, mientras que el suboficial de guardia, del cual no recuerda su nombre, comunicaba esta novedad a la Prefectura de Temuco en forma telefónica. Que ese mismo día a media tarde llegó hasta el cuartel un helicóptero de la Fuerza Aérea en el cual venía el teniente coronel de carabineros Gonzalo Arias González, el cual procedió a retirar a estos jóvenes, trasladándolos a Temuco. Que este hecho quedó consignado en el libro de novedades de la guardia. No recuerda si el capitán Bustos estaba presente cuando se llevaron a los detenidos. Que otras personas que fueron detenidas en la zona por diversas circunstancias, el procedimiento normal que se realizaba era que el suboficial de guardia confeccionara el parte correspondiente y los ponía a disposición de la Fiscalía de Ejército de Temuco. Estas personas eran trasladadas por tierra por funcionarios de la unidad y eran entregadas en el recinto de guardia del regimiento Tucapel.

En declaración judicial de fecha 09 de enero de 1996, rolante de **fs. 72 vuelta a fs. 73 (Tomo I)**, blasona que el 11 de septiembre de 1973 prestaba servicios en la subcomisaria de Pucón, como cabo primero. En lo pertinente a los detenidos de aquella época por asuntos políticos y específicamente acerca de las personas que se le mencionan, agrega que no los recuerda, pero si asocia a ellos un hecho ocurrido en los primeros días del pronunciamiento militar; en que estando en la unidad, aproximadamente a mediodía, llegó a la subcomisaria el furgón policial conducido por el chofer de la época, cabo primero Francisco Monsalve Hidalgo (fallecido), recordando que este le expuso que traía unos detenidos que habían sorprendido arrancándose a la Argentina. Esta detención la

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

había hecho el jefe de la unidad Luis Robinson Bustos Letelier, junto al personal. Que el cabo Monsalve entregó los detenidos al funcionario de guardia, cuyo nombre no recuerda. Y por la tarde de ese mismo día apareció en la unidad un helicóptero en el que venía el subprefecto de la época Gonzalo Arias Gonzalez, quien hizo subir a los detenidos al helicóptero y los trasladó a Temuco.

En declaración judicial de fecha 12 de enero de 1996, rolante de **fs. 96 a fs. 97 vuelta (Tomo I)**, insiste que el 11 de septiembre de 1973 prestaba servicios en la subcomisaria de Pucón. En cuanto a los detenidos de la época no los recuerda, pero si asocia un hecho ocurrido en los primeros días del pronunciamiento militar. En que estando en la unidad, aproximadamente a mediodía, llegó a la subcomisaria el furgón policial conducido por el chofer de la época, cabo primero Francisco Monsalve Hidalgo (fallecido) recuerda que éste le expresó que traía unos detenidos, que habían sido sorprendidos arrancándose a la Argentina. Que esa detención la hizo el jefe de la unidad junto al personal, el jefe de ese entonces era Robinson Bustos Letelier, capitán. Y que el cabo Monsalve entregó los detenidos al funcionario de guardia, cuyo nombre no recuerda. Por la tarde, apareció en la unidad militar un helicóptero en el que venía el subprefecto Gonzalo Arias González, quien hizo subir a los detenidos al helicóptero y trasladó a Temuco. Los detenidos eran jóvenes, entre veinte a veintitrés años, pero las características ya no las recuerda, ni siquiera como vestían. Que después el subprefecto se llevó a los detenidos y no volvió a tener noticias acerca de la suerte que habrían corrido.

En diligencia de careo con Gonzalo Arias González de fecha 24 de febrero de 1997, de **fs. 118 (Tomo I)**, se mantiene en sus dichos e insiste que recuerda muy bien lo que narró. No puede precisar la fecha exacta, ni siquiera aproximada, si lo supiera lo diría. Sabe perfectamente que el señor que está a su lado es el subprefecto de Cautín de aquella época.

A.7. Luis Armando Jofré Soto (44 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 62 a fs. 63 (Tomo I); de fs. 76 a fs. 77 (Tomo I); de fs. 78 (Tomo I); de fs. 1.065 a fs. 1.066 (Tomo III) y de fs. 1.275 a fs. 1.276 (Tomo IV).

En declaración extrajudicial de fecha 12 de diciembre de 1995 de **fs. 62 a fs. 63 (Tomo I)** (copia de lo cual se encuentra a fs. 76 a fs. 77 Tomo I y de fs. 1.065 a fs. 1.066 Tomo III), afina que en el año 1972 era mayor de ejército y fue trasladado al regimiento Tucapel de Temuco, por el lapso de tres años. Durante su

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

desempeño en esa ciudad, ocurrió el pronunciamiento militar, razón por la cual se le designó como fiscal militar. Que junto a Alfonso Podlech Michaud, abogado, organizaron el funcionamiento de la fiscalía, para la situación reinante. Que incluso para el mejor funcionamiento se tuvo la cooperación de actuarios de los juzgados de crimen, entre ellos González y Solorza. Que uno de los primeros consejos del abogado asesor y actuarios, fue que todos los movimientos que se efectuara en la Fiscalía debían ser ajustados a derecho y transparente, lo cual encontró muy acertado y así actuó. Debido a su desempeño como fiscal, no le correspondió participar en investigaciones ni detenciones de personas que de una u otra forma habían actuado durante el régimen de la unidad popular con la intención de llevar al país a un caos general. Respecto a la desaparición de los ocho jóvenes, Hugo González Ortega, Elías González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Aguayo Olavarría y Raúl Figueroa Burkhardt, mientras fue fiscal no recuerda que hayan llegado esas personas detenidas y menos la cantidad que se indica. Invoca que la fuerza aérea y carabineros tenían sus propias fiscalías en Temuco, razón por la cual procesaban sus propios detenidos. No recuerda que en alguna ocasión lo hayan derivado algún detenido. Se le pregunta por otros hechos.

En declaración judicial de fecha 04 de marzo de 1996, rolante de **fs. 78 (Tomo I)**, ratifica íntegramente su declaración extrajudicial. Dice que el funcionario que menciona como actuario es un señor de apellido Toloza y no Solorza. En su cargo de fiscal, que desempeñó por casi dos años, solo conoció personas que fueron puestas a disposición de la fiscalía por personal del ejército y cuyos antecedentes se encuentran en la fiscalía Temuco.

En declaración judicial de fecha 23 de julio de 199, rolante de **fs. 1.275 (Tomo IV)**, en lo pertinente soslaya que Dixon Retamal Cornejo no sabe si estuvo detenido por otra fiscalía, que pudo ser de carabineros o aviación. Se refiere a otros hechos. Suma que, en su papel de fiscal se pudo dar cuenta que los detenidos de la época eran personas idealistas, no peligrosas, en virtud de lo cual les otorgo libertad, ayudándoles incluso a irse al extranjero, además de brindar ayuda a los familiares. Jamás se le interrogó a una persona torturada o con signos de un castigo físico ni moral, de lo contrario se habría seguido algún proceso al respecto. Revela que personas que regresaron al país lo han buscado para darle las gracias por su actuación favorable, con regalos para el deponente y sus hijos.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

A.8. Adrián Segundo González Maldonado (31 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 64 a fs. 65 (Tomo I), de fs. 70 vuelta a fs. 71 (Tomo I), de fs. 1.067 a fs. 1.068 (Tomo III), de fs. 1.367 a fs. 1.370 (Tomo IV) y de fs. 1.651 (Tomo V).

En declaración extrajudicial de fecha 14 de diciembre de 1995, rolante de **fs. 64 a 65 (Tomo I)** (copia de fs. 1.067 a fs. 1.068 Tomo III), explica que para el 11 de septiembre de 1973 trabajaba en el Primer Juzgado del Crimen de Temuco, como oficial tercero de la sección criminal. Dentro de los primeros días de pronunciamiento militar, fue destinado en comisión de servicio a la Fiscalía de Ejército de Cautín, junto a Héctor Toloza Fierro (fallecido), siendo recibidos por el mayor y fiscal militar don Luis Jofre Soto junto al abogado asesor Alfonso Podlech Michaud. Se le dio la misión de actuar y de inmediato comenzar a organizar la fiscalía y proceder a los interrogatorios de los detenidos que se encontraban en la cárcel y otros en el recinto de militar del Regimiento N° 8 Tucapel de Temuco. Que la fiscalía en un principio se encontraba al interior del citado Regimiento. El procedimiento acordado a seguir con todos los detenidos que fueran puestos a disposición de la fiscalía debía ser estrictamente apegado a derecho y conforme a las disposiciones del Código de Justicia Militar y normas generales de Procedimiento Penal. En el caso específico de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría, Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, no recuerda haber procedido personalmente en sus interrogatorios. Desconoce cualquier antecedente que diga relación con estos.

En declaración judicial de fecha 09 de enero de 1996, rolante de **fs. 70 vuelta a fs. 71 (Tomo I)**, esgrime que efectivamente para el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, era oficial tercero del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, en tal razón fue destinado en comisión de servicio a la Fiscalía Militar de Cautín junto a su colega Héctor Toloza Fierro (fallecido). Alrededor de una semana después del 11, fue llamado por el presidente de ese entonces de la Corte de Apelaciones, quien le comunicó que estaba destinado a dicho servicio. Al presentarse a la fiscalía fue recibido por el fiscal Luis Jofré Soto junto al abogado asesor Alfonso Podlech Michaud. La misión específica que realizó fue la de actuar, al igual que Toloza, vale decir, tomar las declaraciones

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

de los detenidos o inculpados, y de todas las personas que aparecían implicados, tramitando todo el proceso. Con relación a las personas que se mencionan, no recuerda haberlas interrogado, ni haber tomado participación en algún proceso en el que hubieran podido estar implicados. Destaca que si hubiera interrogado a los hermanos Schmidt Arriagada los recordaría por cuanto en aquella época vivía desde hace tiempo con una familia de apellido Arriagada y por lo menos le habría preocupado averiguar si tenían alguna relación de parentesco. Dice que trabajo en la comisión de servicio en la fiscalía militar hasta julio de 1984.

En declaración judicial de fecha 11 de junio de 2009, rolante de **fs. 1.367 a fs. 1.370 (Tomo IV)**, replica su desempeño laboral e insiste que fue comisionado a la Fiscalía Militar de Temuco como actuario. Que la Fiscalía Militar funcionaba al interior del regimiento en una oficina ubicada en el edificio de la comandancia. Su jefe directo era el mayor Luis Jofré Soto, segundo comandante del regimiento y fiscal militar, secretario era uno de los hermanos García Covarrubias, no recuerda cuál de ellos. Que las funciones que cumplía era la toma de declaraciones a los detenidos, que eran puestos a disposición del Tribunal. Recuerda que en un tiempo estuvo ayudando en esa tarea el sargento Quilodrán, pero fue por un periodo breve. El Tribunal le pregunta si cumplió funciones apoyando la labor de la fiscalía, el suboficial Santiago Villarroel, como lo señaló a fs. 132, el suboficial Orlando Moreno Vásquez. No recuerda a esta persona, y en lo pertinente que Oscar Podlech Michaud prestaba asesoría legal al fiscal Jofré, no participando en los interrogatorios a detenidos y testigos, pues esa función la efectuaba junto a Toloza. Que las ordenes de investigar y las citaciones eran despachadas a carabineros e investigaciones tal como se hacía ordinariamente en cualquier tribunal del crimen. No tiene conocimiento que haya habido personal de investigaciones agregado al regimiento, bajo las órdenes o disposición de la Fiscalía militar. Suma que en la Fiscalía Militar se trataban todos aquellos casos que tuvieran que ver con la ley de control de armas y tenencia de explosivos. A las personas detenidas se les consultaba por su militancia política, se había participado de tomas o atentados. Recuerda que se les interrogó a muchas personas pertenecientes al "MIR". Se interroga por otros hechos

En declaración judicial de fecha 18 de mayo de 2011, rolante de **fs. 1.651 (Tomo V)**, expone hechos relativos a otros hechos.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

A.9. Nelson Rodolfo Thielemann Rodríguez (34 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 67 a fs. 67 vuelta (Tomo I) y de fs. 1.272 a fs. 1.273 (Tomo IV).

En declaración judicial de fecha 27 de diciembre de 1995, rolante de **fs. 67 a fs. 67 vuelta (Tomo I)**, explana que el 11 de septiembre de 1973, en su calidad de reservista fue llamado por el ejército para realizar labores administrativas en la Fiscalía Militar Letrada de Temuco, llegó a laborar allí el 15 de ese mes y se mantuvo por espacio de dos meses. La labor específica que le tocó realizar fue labores relacionados con oficina, como por ejemplo sacar copias a máquina y otros afines. En algunas ocasiones se le asignó la tarea de tomar alguna declaración, lo que ocurrió cuando había mucho trabajo, pero siempre con la supervisión del fiscal, que en un principio era el mayor Jofre no recuerda el nombre, y posteriormente fue Alfonso Podlech. No recordando el nombre de las personas a quienes tuvo que tomarles declaración, debido al tiempo transcurrido. Anexa que todo el tiempo que laboró en la Fiscalía lo hizo en las oficinas de Temuco, nunca salió a terreno o fuera de la ciudad.

En declaración extrajudicial de fecha 03 de julio de 2003, rolante de **fs. 1.272 a fs. 1.273 (Tomo IV)**, expone que después del pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, en su calidad de oficial de reserva de ejército, fue llamado por el fiscal de apellido Jofre, para que cumpliera funciones administrativas en la Fiscalía Militar de la ciudad de Temuco. Que sus actividades dentro de la fiscalía era principalmente el traslado de expedientes de consejos de guerra a la comandancia de la IV o V división de ejército, en algunos casos interrogar a detenidos privados de libertad, por razones de índole político subversivo. Que no tuvo que atender a presos que presentaran lesiones atribuibles a su detención o interrogatorio preliminar, actuaciones practicadas por organismos represivos que actuaban en la época y en ninguna de sus entrevistas se violentó física o psicológicamente a una persona, y el testimonio por escrito del declarante, era entregado al fiscal militar. En ese mismo contexto, no asistió a funcionarios administrativos en ningún consejo de guerra, ya que, sus funciones no comprendían presenciar ese tipo de sesiones. A finca que, sin embargo, se enteró de muchos casos de personas que fueron detenidas en Temuco y acusadas de extremismo, participación en grupos de guerrillas y fabricación de artefactos explosivos. Por el tiempo transcurrido no puede recordar con precisión

identidades de personas sometidas a este tipo de juicio por autoridades castrenses, solo recuerda un proceso de una persona de apellido Ortigosa. Se le pregunta por otros hechos y en lo adecuado que ha escuchado rumores de personas muertas en la región, producto de la violencia política que existía en la época, pero no le consta que estos hechos se encuentren comprendidos dentro del ámbito de la administración de justicia en tiempo de guerra o de actuaciones ordenadas por la Fiscalía Militar. En cuanto a la muerte de personas que eran trasladadas hacia o desde la Fiscalía Militar, también escuchó del personal del regimiento Tucapel, que a veces estos hechos acontecían producto que los detenidos trataban de escapar de las patrullas militares que los custodiaban. Recordando que en algunas oportunidades le correspondió trasladar detenidos desde la cárcel pública de Temuco, hacia dependencias de la fiscalía militar y viceversa, ocupándose para el efecto en algunas oportunidades un camión o jeep militar en directa relación con la cantidad de presos. En ese procedimiento iba a cargo de funcionarios de menor jerarquía, portando siempre un documento donde constará el nombre de las personas que trasladaba y para seguridad usaba un revolver, pero no se recuerda el calibre, marca, ni modelo. Que no tuvo problemas en sus actuaciones de traslado de detenido y aunque así fuera por el tiempo transcurrido sería imposible recordarlo. Se le interroga por otras cosas.

A.10. Nelson Manuel Uldaricio Ubilla Toledo (32 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 69 vuelta a fs. 70 (Tomo I), de fs. 1.284 a fs. 1.285 (Tomo IV), de fs. 1.292 a fs. 1.293 (Tomo IV) y de fs. 1.303 a fs. 1.304 (Tomo IV).

En declaración judicial de fecha 05 de enero de 1996, rolante **de fs. 69 vuelta a fs. 70 (Tomo I)**, colige que el 11 de septiembre de 1973 se desempeñaba como capitán de ejército, perteneciente al Regimiento de Infantería N°8 de Temuco. En relación con los detenidos que hubiesen pasado en tránsito por la unidad, derivados de la fiscalía, no tiene antecedentes que aportar por cuanto el regimiento nunca fue unidad carcelaria, si los hubo en algún momento, fueron de tránsito y dichos antecedentes solo lo manejaba el personal de la fiscalía. Su labor específica era de comandante de unidad fundamental (compañía) y como oficial está seguro de que nunca salió personal del regimiento a realizar labores policiales, como “ser a buscar detenidos o algo así, menos aún a esta zona”, no vio nunca, ni supo que hubiese alguien, que al menos el personal a su cargo

jamás vino a la zona. Destaca que el comandante de la época, Pablo Iturriaga Marchesse era un hombre correcto y apegado a la legalidad, les dio órdenes de patrullajes urbanos dentro de Temuco y cualquier detenido infringiendo el toque de queda, debía ser puesto inmediatamente a disposición de la fiscalía, cosa que el deponente instruyó a su personal, porque le consta que en su unidad se dio cumplimiento irrestricto a lo ordenado por el señor comandante. Preguntado dice que el ejército no contaba con helicóptero en Temuco, en Santiago sí. Que en ese tiempo la fuerza aérea era quien tenía helicópteros, la Base Aérea de Maquehue era justamente base área de helicópteros, ignora que patrullajes habrán efectuado estos y en qué zonas de la región. Recuerda el nombre del coronel Pacheco como comandante de la base, los demás pilotos y capitanes no recuerda sus nombres porque eran rotados constantemente. Que ese coronel sí estuvo para el 11. Agrega que los patrullajes en las zonas rurales estaban a cargo de carabineros y eventualmente fuerza aérea, lo que no le consta, “nosotros no teníamos personal suficiente para eso, además hay otro regimiento en Lautaro y una división en Valdivia”.

En declaración extrajudicial de fecha 23 de julio de 2003, rolante de **fs. 1.284 a fs. 1.285 (Tomo IV)**, en lo pertinente indica que, en fechas posteriores al 11 de septiembre de 1973, teniendo el grado de capitán y ocupando el cargo de **comandante de la plana mayor logística**, la que dependía de la comandancia y segunda comandancia de la unidad. La función era al mando de la compañía y fundamentalmente se realizaba instrucción y posteriormente, además, se acordó al rol de unidades, se realizaron patrullajes y resguardos de los servicios de utilidad pública de la ciudad de Temuco. Por ello nunca fue el jefe del servicio de inteligencia militar, por cuanto lo que existe en un regimiento es la sección segunda de informaciones y es la encargada de la declaración historial personal, del personal que debe efectuar el servicio militar, tener a cargo el desciframiento de claves criptográfica y verificación, a través de fuentes abiertas de la situación del adversario potencial (Argentina); que esta actividad la realizaban dos clases que dependían directamente del segundo comandante del regimiento mayor Luis Jofré Soto. No obstante, el personal por lista de revista de comisario, al igual que hasta el comandante del regimiento pertenecía a la compañía de plana mayor y logística. Recuerda que uno de los clases que pertenecía a la segunda e informaciones era Orlando Moreno Vásquez, mientras que el otro funcionario era

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Schönherr, con quienes tenía contacto normal, sin tener que dar algún tipo de orden operacional a ellos. Se pregunta por otras víctimas de las que dice no tener conocimiento, tampoco conoce su suerte, si es que fueron detenidas en fecha posterior al 11 de septiembre de 1973. Refiere nunca haber participado en algún operativo en los cuales se procediera a detener a alguna persona con militancia política, ni patrullajes de control de toque de queda, como tampoco trasladar detenidos desde la cárcel a la Fiscalía Militar, puesto que esas operaciones no eran de su competencia. Acerca de, la Fiscalía Militar de Temuco y su funcionamiento en fechas posteriores al 11 de septiembre de 1973, recuerda que el fiscal militar, en primera instancia, fue el mayor Luis Jofre Soto, quien se desempeñó por espacio de dos o tres meses, no recuerda exactamente, pero sí que luego de éste pasó a desempeñarse el abogado Alfonso Podlech Michaud no precisando fecha. Del funcionamiento de la fiscalía, recuerda que los detenidos eran llevados al regimiento por funcionarios de carabinero o investigaciones, los cuales se les llevaba a prestar declaración o de lo contrario se dejaban en calidad de tránsito de la guardia del recinto, hasta que declaraban; una vez hecho eran dejados en libertad o enviados a la cárcel. Ignora que personas eran los que trasladaban detenidos. Relata comitiva de general Sergio Arellano Stark.

En declaración judicial de fecha 10 de diciembre de 2003, rolante de **fs. 1.292 a fs. 1.293 (Tomo IV)**, reproduce desempeñó en el regimiento Tucapel de Temuco y en lo adecuado arguye que en la última compañía que tuvo de plana mayor y logística, hubo personal encuadrado por lista de revista de comisario, pero su mando depende normalmente del segundo comandante o del comandante, como la administración de fondos, la parte de combustible y la sección segunda de informaciones. En septiembre de 1973 estaba al mando de la plana mayor logística. Se le pregunta por otros hechos.

En diligencia de careo con Herman Carrasco Paul, de fecha 12 de diciembre de 2003, rolante de **fs. 1.303 a fs. 1.304 (Tomo IV)**, ratifica su declaración de fs. 171 (la que consta en estos autos a fs. 1.292 a fs. 1.293 Tomo IV). Declara que no prestó funciones de ninguna naturaleza en la intendencia de Temuco, como tampoco es efectivo que haya interrogado o torturado a detenidos al interior del regimiento Tucapel. Que no intervino en la conversación a la que alude a la persona con la que se le carea, a quien es primera vez que lo ve y su nombre no le desconocido. Que en la época no era comandante de la segunda

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

compañía, sino de la compañía de plana mayor y logística. Que efectivamente el suboficial Beltrán pertenecía a dotación del regimiento Tucapel, pero no intercedió a favor de algún detenido al menos con el deponente. Enfatiza que los detenidos no estuvieron bajo su responsabilidad, sino bajo la responsabilidad de la fiscalía militar y estando encuadrado y subordinado en el regimiento no podría tener disponibilidad de la vida de las personas en sus manos.

A.11. Ramón Armando Torrealba Guzmán (39 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 74 a fs. 74 vuelta (Tomo I), de fs. 412 a fs. 412 vuelta (Tomo II), de fs. 862 a fs. 863 (Tomo III), de fs. 867 a fs. 869 (Tomo III), de fs. 880 a fs. 881 (Tomo III), de fs. 885 a fs. 886 (Tomo III), de fs. 894 a fs. 895 (Tomo III) y de fs. 2.626 (Tomo VIII).

En declaración judicial de fecha 07 de marzo de 1996, rolante de **fs. 74 a fs. 74 vuelta (Tomo I)**, funda en lo atinente que el 11 de septiembre de 1973 se desempeñaba como subcomisario de carabineros de Villarrica, en cuanto a los procedimientos judiciales que se adoptaban en la jurisdicción de Pucón, lo desconoce, pues ambas eran comisarias dependientes directamente de Loncoche. Que carabineros de la jurisdicción a su cargo no efectuó detenciones de carácter político, solo de carácter policial. Recuerda que se dio cuenta a la justicia militar de algunos hechos, cuyo conocimiento les correspondía, pero no recuerda que se hubiera puesto a disposición de la fiscalía militar cuyo asiento era Temuco, a algún detenido. Que no tuvo conocimiento de que en el puente Toltén de Villarrica, muriera presumiblemente algún detenido político. Que Gonzalo Arias González, era subprefecto de carabineros, siendo su jefe directo, pero como subalterno no podía saber de todas las acciones que él realizaba en la zona.

En declaración judicial de fecha 06 de diciembre de 2004, rolante de **fs. 412 a fs. 412 vuelta (Tomo II)**, interrogado si vio pasar detenidos en tránsito, trasladados por carabineros, ejército o fuerza aérea, responde: que no, pero si recuerda que los primeros días después del 11 de septiembre aterrizaban helicópteros de la fuerza aérea en el patio de la subcomisaria de Villarrica. No recuerda caras, ni nombre de los miembros de la tripulación. Preguntado si recuerda haber recibido la visita de algún comandante de carabineros después del 11 de septiembre, atina que: no hubo visitas en ese periodo. Que no está muy seguro, pero cree que el prefecto de la época el coronel Prado o el coronel Gordon. Como subprefecto estaba el teniente coronel Arias o el teniente coronel

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

San Martín. Se le pregunta cuándo comenzó a funcionar el servicio de inteligencia de carabineros y quienes eran sus integrantes. Responde que no recuerda fecha exacta, pero sí existió ese organismo y desde sus comienzos dependió de la prefectura de Cautín. La dotación de esa unidad era de dos funcionarios de la subcomisaria recordando a Espinoza. No recuerda si fue él quien propuso el nombre de estas dos personas o llegaron directamente nombrados por la prefectura de Temuco.

En declaración extrajudicial de fecha 19 de noviembre de 2012, rolante de **fs. 862 a fs. 863 (Tomo III)** (copia de la cual se encuentra de fs. 894 a fs. 895 Tomo III), hace una breve reseña de su carrera funcionaria y en lo adecuado que dentro de su personal subalterno estaba el suboficial mayor René Raipán y carabineros Corbalán, Vargas y Ramírez. Que no le son conocidos los nombres de Hugo y Elías González Ortega, Juan y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa, Héctor Aguayo Olavarría, Raúl. Figueroa Burkhardt y Alejandro Escobar Vásquez. Supo que hubo una ejecución en el puente Rodrigo Bastidas, no teniendo claro si la mañana siguiente se constituyó en el puente, no presenciando rastros de sangre de las supuestas víctimas. Con el paso de los días supo por intermedio de personal subalterno, que en las aguas del río Toltén hubo cadáveres flotando, comentado que algunos de ellos fueron removidos para que se los llevara la corriente. Refiere que no se le informó, si dentro de los cadáveres se encontraba alguna persona conocida de la zona. Tampoco supo si en la ejecución participó personal de ejército o de la Fuerza Aérea de Chile de Temuco. Que efectivamente en el mes de septiembre y octubre de 1973 hubo presencia militar en la zona recordando haber visto patrullas de ejército y fuerza aérea, recordando que a veces recibía en la unidad al personal militar que llegaba en helicóptero. Sobre el capitán Bustos Letelier, lo recuerda como el oficial a cargo de la subcomisaria de carabineros de Pucón, en ese entonces no tenían mucho contacto. Niega otros hechos y soslaya que la Fuerza Aérea de Chile tenía un recinto a orillas del río Toltén, sector Catrico.

En declaración judicial de fecha 20 de noviembre de 2012, rolante de **fs. 867 a fs. 869 (Tomo III)**, en lo pertinente ratifica su declaración extrajudicial de fs. 842 a fs. 843 (la que consta en estos autos a fs. 862 a fs. 863 Tomo III). Que en 1973 no había otro oficial en la subcomisaria, por lo que pudo ser que el suboficial Corvalán le haya informado acerca de la existencia de cadáveres

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

flotando en el río Toltén. Sin embargo, no los vio, quizás los boteros de aquellos años hayan podido ver cadáveres en ese lugar. No recuerda si un civil concurrió a preguntar a la subcomisaria bajo su mando, por la identidad de cadáveres que supuestamente flotaban. Recuerda que esporádicamente llegaba personal de la fuerza aérea y del ejército en helicóptero, el que aterrizaba en el patio de la unidad policial. Que esos funcionarios llegaban solo a reposar a la unidad y alimentarse, no recuerda nombre. Dice que carabineros no colaboró con ellos, en nada. Recordando un detenido político que era del movimiento de izquierda revolucionaria, cuyo nombre no recuerda, pero que esta persona estuvo un tiempo en la unidad y posteriormente salió en libertad. Que hubo una instrucción que impartió la Fiscalía Militar del Ejército desde Temuco que ordenaba la detención de ciertas personas y el allanamiento de domicilios en Villarrica. Los detenidos eran derivados a la Fiscalía Militar de Temuco. En aquel tiempo el fiscal militar era Alfonso Podlech Michaud. No recuerda haber interrogado detenidos en la subcomisaria de Villarrica, ni que personal de ejército haya interrogado detenidos dentro de la unidad. El Tribunal lee en lo pertinente declaraciones de Ignacio Cofré Leal de f. 746, Francisco Sandoval Hernández de fs. 831 y de Joaquín López Bizama de fs. 833, insiste no haber interrogado detenidos. El Tribunal lee declaración de Joaquín López Bizama de fs. 834, a lo que depone dice no recordar haber dado orden de detención para las personas de apellidos Schmidt Arriagada, a quien no conocía. Que conoció a Mario Cortés con quien tuvo amistad, pero no participó en actividades conjuntas con carabineros. Si recuerda la ayuda de un señor de apellido Berckhoff (fallecido), quien facilitaba un jeep para efectuar patrullajes. El Tribunal lee declaración de Merardo Medrano Torres de fs. 832, atestigua que no dio la orden para que carabineros se apersonará en el puente Rodrigo Bastidas después de la supuesta ejecución de civiles en el lugar. Solo se enteró al día siguiente de ese hecho e inmediatamente dio cuenta a la fiscalía militar con copia de superioridad de carabineros. Presume que la ejecución de esas personas fue en manos de personal de ejército, aunque no le consta, debió haber ocurrido después del 11 de septiembre y antes de octubre de 1973.

En declaración judicial de fecha 29 de noviembre de 2012, rolante de **fs. 880 a fs. 881 (Tomo III)**, no recuerda haber citado a una reunión en la comisaria de Villarrica, ni fuera de ella, de carácter policial a la policía de investigaciones de Villarrica en conjunto con la Fuerza Aérea, una noche luego del 11 de septiembre

de 1973. Preguntado dice que, entre el 11 de septiembre y octubre de 1973 no escucho disparos que pudiera identificar como los realizados con metralleta, en algún sector de Villarrica. Que solo una vez le informaron sus subalternos sobre una supuesta ejecución en el puente Rodrigo Bastidas de Villarrica. No asocia esas ejecuciones con algún otro hecho de relevancia. Tampoco recuerda que alguna patrulla militar haya llegado desde el sur a la unidad. Alude a otros hechos y en lo pertinente, dice que efectuó un allanamiento en el sector Catrico, en una propiedad de supuestamente José Ortigosa Ansoleaga, lugar donde le informaron que había una escuela de guerrilla, encontrando dinamita y otros elementos explosivos en la tapa de baño. Recordando un señor de apellido Bastidas, que a su parecer era secretario de la municipalidad y supuestamente dirigía esa escuela de guerrilla.

En diligencia de careo con Héctor González Castro de fecha 29 de noviembre de 2012, rolante de **fs. 885 a 886 (Tomo III)**, reconoce a la persona que está a su lado como el subcomisario de investigaciones de Villarrica, Héctor González Castro. Ratifica en lo pertinente su declaración de fs. 859 (que en estos autos consta a fs. 880 a fs. 881 Tomo III), que la comisaria estaba a cuatro cuadras del puente, que esa noche no necesariamente tendría que haber estado en la unidad policial. No recuerda haber tenido una entrevista con el juez después del supuesto fusilamiento de personas en el puente Rodrigo Bastidas de Villarrica. Conmemora que los primeros 45 días después del 11 de septiembre alojó en su domicilio en la ciudad de Villarrica. Que seguramente en algunos días se quedó en el cuartel, pero no salió de la comuna en las noches. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo con Joaquín Segundo López Bizama de fecha 30 de mayo de 2017, rolante de **fs. 2.626 (Tomo VIII)**, reconoce a la persona que esta su lado, como el señor López, su chofer en la unidad. El tribunal lee en lo pertinente sus declaraciones de fs. 867 a fs. 869 y de fs.880 a fs. 881, ratifica sus declaraciones leídas. No recuerda que se le hayan informado que había sangre en el puente, ni que al parecer haya pasado algo. No recuerda haberse constituido puente Rodrigo Bastidas, que podría haber ido, pero tal vez por impedimentos fue. No ordenó que se limpiara las manchas de sangre. Puede que Raipán le haya dado cuenta, pero no lo recuerda, que este era el segundo jefe de la unidad. Se mantiene en sus dichos.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

A.12. Gonzalo Enrique Arias González (47 años a la fecha de los hechos). Quien declaró de fs. 98 a fs. 98 vuelta (Tomo I), de fs. 118 (Tomo I), de fs. 181 a fs. 181 vuelta (Tomo I), de fs. 350 a fs. 350 vuelta (Tomo I), de fs. 422 a fs. 423 (Tomo II), de fs. 1.279 a fs. 1.280 (Tomo IV), y de fs. 1.305 (Tomo IV).

En declaración judicial de fecha 10 de julio de 1996, rolante de **fs. 98 a fs. 98 vuelta (Tomo I)**, en lo tocante comienza renunciando a su fuero de declarar por oficio, debido a su grado general inspector en retiro, presentándose en forma voluntaria ante el Tribunal. Urde que el 11 de septiembre de 1973 era el subprefecto de la Prefectura de Cautín, vale decir el segundo jefe de la provincia, en lo que se refiere a los servicios policiales de Carabineros de Chile. Con relación a Hugo y Elías González Ortega, Juan y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Aguayo Olavarría y Raúl Figueroa Burkhardt nunca había escuchado esos nombres. Que respecto a los antecedentes que se le dan a conocer, señala que la Prefectura de Carabineros de Cautín en esa época no contaba con medios de transportes aéreos de ningún tipo y menos el señalado en la querella o declaraciones, ya que ese tipo de aparatos era de cargo de la fuerza. Que su misión no era ejecutiva, ni operativa, se trataba de supervisión, control y dirección, de acuerdo con las pautas que indicaba el prefecto. En relación con la imputación que formula Diógenes Bravo Bernalles, no corresponde a la verdad y podría tratarse de una confusión por el tiempo transcurrido, porque posteriormente cada persona relataba los hechos a su manera.

En diligencia de careo con Diógenes Bravos Bernalles de fecha 24 de febrero de 1997, rolante de **fs. 118 (Tomo I)**, se mantiene en sus dichos y pregunta al señor que diga la fecha en que sucedieron los hechos que narra.

En diligencia de careo con Luis Robinson Bustos Letelier de fecha 26 de noviembre de 1999, rolante de **fs. 181 a fs. 181 vuelta (Tomo I)**, ratifica sus dichos en el Tribunal de Santiago, si realizar modificaciones. Suma que carabineros no contaba con helicópteros en esa época, por tanto, no puede haber ido a buscar detenidos a la unidad de Pucón, menos si no tenían cargos graves en su contra.

En declaración judicial de fecha 26 de junio de 2003, rolante de **fs. 350 a fs. 350 vuelta (Tomo I)**, ratifica su declaración indagatoria rolante de fs. 98, haciendo presente que en diligencia de careo don Luis Bustos Letelier, este indicó

el nombre del comandante de la patrulla aérea que dicen aterrizo en Pucón. El Tribunal pregunta que cargo desempeñaba al 11 de septiembre de 1973, depone que además de las funciones, se desempeñaba en el cargo de fiscal militar de la Fiscalía de Carabineros, que funcionaba en dependencias de la Prefectura de Carabineros de Cautín de Temuco, específicamente en el segundo piso del edificio ubicado en calle solar. El Tribunal pregunta cuál era la competencia de la fiscalía al 11 de septiembre de 1973, responde que mayormente conocía las materias de reclutamiento. Con posterioridad a la fecha, en su calidad de fiscal comenzó a recibir antecedentes que remitía a la Fiscalía Militar, dando cuenta de hechos que pudieran ser constitutivos de delitos a los cuales se avocaba y decretaba las diligencias que estimaba pertinente. No cuestiono la competencia respecto a los nuevos antecedentes que le tocó conocer en su calidad de fiscal, en atención a circunstancias que vivían en esa época. Preguntado por el Tribunal en cómo y con qué criterios se distribuían las causas que llegaban a su conocimiento. Dice que le correspondía a la Fiscalía Militar distribuir los antecedentes que llegaban a su conocimiento e ignora que criterio empleaba para la distribución. Entre los antecedentes que recibía en su calidad de Fiscal Militar de Carabineros se acompañaba el parte policial, la providencia de la Fiscalía Militar, propiamente tal y detenidos si procedía.

En declaración judicial de fecha 14 de diciembre de 2004 de **fs. 422 a fs. 423 (Tomo II)**, en cuanto a la comisión civil de carabineros el Tribunal le pregunta sobre la composición de esta entre septiembre a octubre de 1973. Responde que se integraba particularmente por oficiales y suboficiales que tenían otras funciones y que permitían esta clase de cometidos, en especial labores administrativas o trabajos de oficina o con algunos impedimentos para vestir de uniforme, como lesiones visibles. El Tribunal le pregunta si formaban parte de la comisión civil el teniente Eduardo Riquelme Rodríguez, el sargento Juan Fritz Vega; los cabos Juan Verdugo Jara, Omar Burgos Dejean, Hugo Opazo Inzunza y Ernesto Garrido Bravo. Responde que respecto al teniente no tiene duda, del resto del personal no podría asegurar si ellos formaban parte, pues no recuerda sus nombres ni rostros. Los que sin embargo, dice seguramente integraron la comisión civil, si es que fueron reclutados por el teniente Riquelme, encargado de la selección de personal y dirigir actividades de la comisión. El Tribunal le pregunta si el teniente Juan Bustamante integró la referida comisión civil. El declarante

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

responde, que el teniente Bustamante era de dotación de la segunda comisaría, de quien no tenía mando, sino que dependía directamente del comisario y del prefecto, por lo que no podría asegurar ni negar su pertenencia a esa comisión. El Tribunal le pregunta si existía un nexo o vínculo entre él y la comisión civil que dirigía el teniente Riquelme. La deponente barbulla que existía el nexo natural de jerarquía de mando, pero no por asignación de tareas para la comisión civil, porque Riquelme debía rendir cuentas al prefecto o comisario. Se le continúa preguntado por la comisión civil y en lo pertinente el Tribunal le pregunta si le correspondió interrogar detenidos que estaban a disposición de la comisión civil. El declarante responde, que no, pero durante el tiempo que permaneció en el cargo interrogó a detenidos puestos a su disposición como fiscal militar, recordando al exintendente, a algunos profesores, a los integrantes de Los Traperos de Emaus, la señora de un médico y a un carabinero que tuvo arrestado. Preguntado dice que en una ocasión sobrevoló, tras descubrirse una fábrica de explosivos en Nehuentúe, donde acompañó al prefecto y coroneles de ejército y fuerza Aérea. Preguntado si conocía a Nelson Ubilla, responde que lo conocía en un par de reuniones sociales en el regimiento Tucapel, su nombre le es familiar, se le pregunta otras cosas.

En declaración extrajudicial de fecha 11 de julio de 2003, rolante de **fs.1.279 a fs. 1.280 (Tomo IV)**, hace una breve reseña de su carrera funcionaria, y en lo pertinente refiere al 11 de septiembre de 1973, recordando haberse enterado en el transcurso de la mañana por información de la radio, y en el transcurso de la misma recibir instrucciones por parte de la autoridad coronel Ramírez del regimiento de Lautaro a través del prefecto San Martín, las ordenes fueron el sentido de cuidar el orden público y preocuparse del arresto domiciliario del entonces intendente de la zona de apellido Fonseca. Que, transcurrido el 11 de septiembre, llegaron a su despacho procesos derivados de la Fiscalía Militar, propiamente tal y cuyo fiscal era un abogado de apellido Podlech, por cuanto dichos documentos, eran firmados por esa persona, no así las actuaciones judiciales que había en cada proceso, por cuanto esto no lo recuerda. En el cumplimiento de esta función, como segundo fiscal militar recuerda haber visto varios casos dentro de los cuales puede señalar no más de tres o cinco procesos, por cuanto los primeros días del mes de octubre tuvo que viajar a Santiago a recibir instrucciones referentes a una nueva destinación, siendo llamado por la

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

dirección general. Recordando haber terminado los procesos judiciales que tenía a su cargo y que habían sido derivados por la Fiscalía Militar, siendo uno de estos el grupo de cerca de setenta profesores que fueron puesto a disposición por la fuerza aérea, bajo el cargo de ser “comunistas o socialistas”, todos quienes fueron dejados en libertad, continúa relatando otros hechos.

En declaración judicial de fecha 15 de diciembre de 2003, rolante de **fs. 1.305 (Tomo IV)**, en lo pertinente ratifica su declaración extrajudicial de fs. 133 a 134 (la que consta en estos autos a fs. 1.279 a fs. 1.280).

A.13. Julio Cesar Guevara Guevara (23 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 213 bis a fs. 215 (Tomo I), de fs. 416 a fs. 416 vuelta (Tomo II), de fs. 624 a fs. 625 (Tomo II) y de fs. 789 (Tomo II).

En declaración judicial de fecha 11 de febrero de 2002, rolante de **fs. 213 bis a fs. 215 (Tomo I)**, soslaya en lo adecuado que para el golpe de militar el 11 de septiembre de 1973, se encontraba realizando un reemplazo de profesor de una escuela de Cholchol, y estando allí fue detenido acusado de militancia política, junto a un hermano, por carabineros de Cholchol, no puede precisar la fecha exacta. Trasladado a la cárcel de Temuco donde conoció a varios detenidos, que al igual que él, estaban según la policía por razones políticas, entre esas personas Elías Dagoberto González Ortega, joven de Villarrica a quien conocía en Huiscaپی desde pequeño y eran amigos. Comunica que el 12 de octubre quedó en libertad. Que estando detenidos de pronto se realizaban llamados a los detenidos a presentarse a la guardia de la cárcel, entre esos llamados salió su amigo Elías, y desde esa ocasión no supo más de éste, ni lo volvió a ver. Supuso que habría quedado en libertad, porque así pensaban todos los que estaban detenidos, que si alguien salía en los listados de llamados, era para quedar en libertad, lamentablemente no era así, cosa que se fueron enterando de a poco. En cuanto al hermano de Elías, a saber, Hugo Arner no lo vio detenido, de haberlo visto lo recordaría, porque eran amigo de familia, pero no lo vio. En relación con otras personas, solo escucho entre los llamados que hacían, a unos señores de apellido Schmidt Arriagada, pero no los vio. Conmemora que Elías le conto las circunstancias en que fueron detenidos, esto es cuando se disponían a salir del país, por un paso fronterizo de Curarrehue, siendo detenido junto a su hermano, pero a su parecer lo habrían separados, pero dice estar seguro de que nunca vio a Hugo Arner en la cárcel. Insiste que escuchó entre los llamados a Elías, a quien

desde esa ocasión no volvió a ver. No puede precisar la fecha del llamado, pero pensó que había quedado en libertad, aunque nunca más supo su suerte. Recuerda que otras personas llamadas a la guardia al igual que Elías, posteriormente eran ejecutados en el regimiento, acusados de haber querido escapar, recién ahí se dieron cuenta que los detenidos llamados a la guardia, no era para quedar en libertad, sino que corrían otra suerte, que quizás eso fue lo que ocurrió al joven González, aunque no tiene la certeza de lo ocurrido con éste. Relata su situación en la cárcel. Suma que pasado un tiempo se encontró con una prima de Elías González, llamada Zudelia Castro González, a quien le contó que había estado con Elías en la cárcel de Temuco en aquella época. No recuerda el nombre de personal de gendarmería de la época, excepto a quien conocía como Nicolás Rubilar, apodado el "Kiko", pero del cual ignora todo tipo de antecedentes, solo lo conoció allá. En relación con los procesos, dice que nunca existió alguno, porque jamás lo llevaron a declarar ante un Tribunal o Fiscalía, solo estuvo en la cárcel y nunca fue interrogado. Aclara que la gente que salía estando detenida, iba al regimiento, pero desde ese lugar no volvían, que después se enteraron de que habían sido ejecutados, así es que nombre de personal o funcionarios, no sabían. Ignora quien estaba a cargo de la cárcel. Deja claro que hay muchas cosas que no recuerda, sin embargo, lo de Elías lo recuerda porque eran amigos, continúa detallando su situación personal.

En declaración judicial de fecha 07 de diciembre de 2004 de **fs. 416 a fs. 417 (Tomo II)**, arguye que conocía a la familia de Elías González Ortega, especialmente a sus padres y el día que se encontró con él en la cárcel pública de Temuco, éste se veía muy maltratado. Le preguntó por su hermano Hugo, sin embargo, no se acuerda qué fue lo que le dijo. No obstante esto, él se veía muy preocupado por su hermano y por el resto de sus amigos. Le parece que este le dijo que su hermano habría huido junto a otros de sus amigos al momento de la detención. Que diariamente se leían listados de cinco o seis personas que eran requeridas en la guardia. Estas personas salían con sus cosas y ellos pensaban que era para otorgarles la libertad; sin embargo, después supieron que muchas de estas personas fueron dadas de baja en el regimiento por haber intentado fugarse. Que por lo general estos listados eran dados a conocer en la tarde. Que conocidos son los casos de un doctor y de un señor Ortigosa. Todas estas personas eran llamadas en horas de la tarde. Que estuvo preso alrededor de un mes y nunca fue

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

llevado a la Fiscalía Militar, ni le dijeron el motivo de la detención. Fue liberado después que Abdiel González, pero lo liberaron en la mañana y a Abdiel se lo llevaron en la tarde. Que junto a él estuvo detenido su hermano de Sotero Guevara, de Imperial, recordando que le hablo de. Abdiel González. No recuerda si Abdiel González espetó que hubiese otros amigos detenidos con él. Que, si bien escuchó por los altavoces el apellido Schmidt, no recuerda que González anduviera acompañado. Alude a su detención.

En declaración extrajudicial de fecha 09 de marzo de 2012, rolante de **fs. 624 a fs. 625 (Tomo II)**, revela en lo pertinente que en 1973 tenía la edad de 23 años y trabajaba como profesor interino en la Escuela Fiscal N° 45 de Cholchol. No pertenecía a ningún partido político, pero era simpatizante del Partido Socialista. Que fue detenido por personal de carabineros de Cholchol el día 12 o 13 de septiembre del año 1973, siendo trasladado hasta la cárcel de Imperial, para posteriormente ser llevado hasta la Cárcel Pública de Temuco, lugar donde permanece recluido hasta el mes de octubre de ese año. Que tomó contacto durante su reclusión con uno de los hermanos González Ortega, que nunca estuvo detenido al interior del Regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco, pero durante su permanencia en la Cárcel Pública de Temuco, se contactó con uno de los hermanos González, no recuerda cuál de ellos era, lo único que recuerda es que le preguntó por su hermano Elías, a quien conocía desde Villarrica, contestándole éste joven que Elías, había escapado por un paso fronterizo junto a otros amigos hacia Argentina. Eso fue lo único, que supo respecto a Elías.

En declaración judicial de fecha 31 de julio de 2012, rolante de **fs. 789 (Tomo III)**, ratifica su declaración extrajudicial rolante de fs. 624 a fs. 625, agrega a sus dichos que mientras estuvo en la cárcel, escuchó mencionar los nombres de los señores Ortigosa, Mateluna y González quienes fueron llamados a viva voz para presentarse en la guardia. Sus nombres estaban en un listado junto al de otras personas, que según supo eran llevados al regimiento. Que posteriormente a supieron a través de una noticia publicada en el diario Austral que Ortigosa y Mateluna fueron ejecutados.

A.14. Alfredo García Díaz (27 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 244 a fs. 246 (Tomo I), de fs. 247 a fs. 248 (Tomo I) y de fs. 360 a fs. 361 (Tomo I).

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

En diligencia de careo con Alfonso Podlech Michaud, de fecha 23 de enero de 2002, rolante de **fs. 244 a 246 (Tomo I)**, ratifica íntegramente su declaración, que en septiembre de 1973, se encontraba como jefe interno de la penitenciaría, y le sorprendió cuando Alfonso Podlech llegó vestido de militar y en ese momento quedaron en libertad los detenidos de patria y libertad, con una orden judicial. Que posteriormente a eso se dio cuenta que estaba detenido Gastón Lobos, a quien conocía y estaba incomunicado, luego llegó una orden para retirarlo y nunca más volvió. Se mantiene en sus dichos.

En declaración judicial de fecha 07 de enero de 2002, rolante de **fs. 247 a fs. 249 (Tomo I)**, explica que ingresó a Gendarmería en el año 1968 hasta 1998. Refiere a Gastón Lobos a quien conocía y vio que estaba en la celda de incomunicado, que durante la permanencia de este lo visitó el jefe del regimiento, llegando una orden posteriormente de la Fiscalía Militar, para ser entregado. No recuerda cuantos detenidos se entregó en aquella ocasión, tampoco recuerda quien lo fue a retirar, pero dice que fue por orden del comandante del regimiento Iturriaga Marchesse o bien por el mayor de apellido Cofré o Jofre o bien Alfonso Podlech. Insiste que no recuerda bien, porque Gastón Lobos fue uno de los primeros que llegó el 11 de septiembre de 1973. Que no recuerda bien porque en ese tiempo llegaban listas de detenidos tanto de noche y de día, tenían una población de doscientos internos, pero después aumentaron a unos dos mil detenidos en 15 días. Rememora que Alfonso Podlech los primeros días llegaba a la penitenciaría vestido de oficial de ejército o civil, indistintamente. Ignora si tiene algo que ver con la desaparición de Lobos. Pero que el 11 de septiembre de 1973, llegó Alfonso Podlech como oficial de ejército con su respectivo uniforme, que le llamo mucho la atención porque lo conocía como abogado, llegó con una orden judicial para que quedará un grupo de patria y libertad que estaban detenidos. Recuerda que junto a Lobos, también había un teniente de Ejército, de quien no recuerda nombre, Víctor Maturana, un abogado de apellido Fonseca, entre los que recuerda. Continúa haciendo referencia a Lobos y en lo pertinente dice que siempre entregaban a los detenidos con orden escrita y firmada por el fiscal militar del tiempo. Que muchas veces no regresaban con los detenidos que salían, porque llegan ordenes donde les comunicaban que se habían dado a la fuga, y ahí procedían a rebajarlo de los libros de novedades, tanto de la guardia armada y guardia interna, que estos libros tienen que coincidir con el total de la población,

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

por lo tanto, en ambos libros se registran los ingresos y egresos de los internos, documento que se guarda en el archivo de la unidad, esto es la penitenciaría en Temuco.

En declaración judicial de fecha 15 de julio de 2003, rolante de **fs. 360 a fs. 361 (Tomo I)**, en lo pertinente, anexa a sus dichos anteriores que a partir del 11 de septiembre aumentó considerablemente la población penal, porque comenzaron a llegar detenidos de toda la provincia en camiones del ejército, porque lo que se tuvo que habilitar una oficina especial para la estadística de detenidos. Suma que hubo dos personas que desempeñaron un rol de nexo entre la Fiscalía Militar y de carabineros con la penitenciaría, el suboficial Moreno y el teniente García Watson; sin embargo, este último dejó de cumplir tal misión, ya que pasó a manos de personal del ejército. Dice que debe aclarar que “ellos eran los únicos facultados para retirar detenidos hacia las fiscalías”. Preguntado por el Tribunal de cómo se llevaba a efecto la rebaja de detenidos de los libros de estadísticas. El deponente refiere que, en algunas oportunidades, los detenidos salían físicamente desde el recinto penitenciario con la respectiva orden de libertad, de la que se deja constancia en el libro de la guardia interna, de la guardia armada y del libro de estadísticas. Que sin embargo, hubo casos en que los detenidos fueron llevados a las respectivas fiscalías y nunca volvieron a la unidad y eran rebajados de los libros antes mencionados por una orden escrita emanada de alguna de las fiscalías, la que era llevada a la unidad generalmente por el suboficial Moreno. Recordando el caso de Lobos Hortigosa, Mateluna y otros y en lo pertinente el Tribunal le lee la nómina de detenidos que se refiere a la querella de fs. 1, depone que no recuerda los nombres por los que se le pregunta. Que ellos trabajan en un comienzo con las dos fiscalías, la de carabineros y ejército cuyos fiscales eran Arias y Jofré, posteriormente asumió como único fiscal militar Alfonso Podlech Michaud. Recordando que acompañaba a Moreno un miembro de investigaciones de apellido Quiroz, pero que se encontraba agregado al ejército.

A.15. Guillermo Segundo Rosales Pérez (39 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 393 a fs. 393 vuelta. (Tomo I), de fs. 719 (Tomo II), de fs. 770 a fs. 771 (Tomo III) y de fs. 1012 a fs. 1013 (Tomo III).

En declaración judicial de fecha 16 de noviembre de 2003, rolante de **fs. 393 a fs. 393 Vuelta (Tomo I)**, proclama que en septiembre de 1973 ostentaba el

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

grado de sargento vice primero en la subcomisaria de Pucón, desde junio de 1972 a diciembre de 1973, cuando es destinado a la Segunda Comisaria de Temuco al mando del mayor Sáez, continua relatando su carrera funcionaria y en lo adecuado, el Tribunal pregunta quienes cumplían funciones de suboficial de guardia en la subcomisaria de Pucón, entre septiembre y octubre de 1973. Depone que cumplían funciones de suboficial de guardia en la subcomisaria de pucón entre septiembre y octubre de 1973, los suboficiales o sargentos o cabo más antiguos, en caso de enfermedad de algunos de los otros. Por lo general, Eduardo Vergara González y José Mancilla Yáñez. El Tribunal le pregunta si conocía a las personas detenidas y desaparecidas que han motivado el proceso. El deponente responde: que no, nunca había oído nombrar, tampoco recuerda que le hayan comentado de su detención. El tribunal le pregunta si tuvo conocimiento de que un helicóptero de la fuerza aérea haya aterrizado en la subcomisaria para retirar detenidos. Depone que no tuvo conocimiento, sin embargo, era común ver sobrevolar helicópteros en aquella época. Solo recuerda que en 1972 aterrizó un aparato en la subcomisaria y luego de eso nunca más vio que aterrizara en el lugar. El Tribunal le pregunta si conoció al teniente coronel Gonzalo Arias González. Responde que, si lo conocía antes de 1973, cuando trabajaba en la Tercera Comisaría de Padre Las Casas. El Tribunal le pregunta si vio o tuvo conocimiento de que el teniente coronel Gonzalo Arias González visitara retenes o comisarias fuera de Temuco, cómo Pucón o Melipeuco. Señala que no le consta. Se le preguntan por otros organismos de la época, refiriendo que no participó ni supo de detenciones políticas.

Declaración judicial de fecha 09 de julio de 2012, rolante de **fs. 719 (Tomo II)**, ratifica su declaración judicial de fs. 393. Interrogado dice que hubo detenidos por motivos políticos en la subcomisaria de Pucón, pero lo fueron el mismo 11 de septiembre de 1973. Al día siguiente, esos detenidos fueron retirados por personal militar del regimiento Tucapel de Temuco. No recuerda al teniente de apellido Jaña Toro que haya estado Curarrehue. Que se fue de Pucón a fines de diciembre de 1973, por lo que ese oficial, si estuvo en Pucón, no lo vio.

En declaración extrajudicial de fecha 08 de junio de 2012, rolante de **fs. 770 a fs. 771 (Tomo III)**, replica su desarrollo funcionario y que para el año 1973, ostentaba el grado de sargento segundo y se desempeñaba en la Subcomisaria de Carabinero de Pucón, la que estaba al mando del capitán Bustos. Recuerda

que llegado el pronunciamiento militar se encontraba cumpliendo el servicio de guardia y en aquella oportunidad hubo entre veintiocho a treinta personas detenidas, las cuales quedaron en los calabozos de la unidad policial. Según su apreciación, estas personas fueron detenidas por temas políticos las cuales al día siguiente fueron trasladadas a Temuco en camiones militares. Durante el día 11 de septiembre el mando de la unidad determinó que todos los efectivos policiales debían acuartelarse por una semana, después de la cual se comenzaron a efectuar los servicios policiales con normalidad. Que no efectuó allanamientos a domicilios particulares, ni tampoco recuerda si alguno de sus colegas los efectuó, como tampoco le correspondió efectuar detenciones. En relación con los vehículos con que contaba la unidad, señala que después del pronunciamiento militar un particular cuya identidad no recuerda facilitó su vehículo para que los carabineros efectuaran patrullajes en la zona. De las víctimas Hugo y Elías González Ortega, Juan y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa, Raúl Figueroa Burkhardt y Héctor Aguayo Olavarría, es primera vez que escucha sus nombres. En cuanto a la llegada de helicópteros de la fuerza aérea a Pucón dice que recuerda que en una oportunidad aterrizó en el patio de la unidad policial, pero este no efectuó traslado de ninguna persona detenida. Que no recuerda a nadie de apellido Mancilla. Ignora si se ejecutaron personas en el puente Rodrigo Bastidas de Villarrica.

En declaración extrajudicial de fecha 15 de mayo de 2013, rolante **de fs. 1.012 a fs. 1.013 (Tomo III)**, no tiene conocimiento de lo que pasó con los jóvenes. Puntualiza que el 11 de septiembre de 1973 cumplió funciones de encargado de guardia de la unidad policial, en horas de tarde fueron llevadas a la unidad, cerca de 30 personas, las cuales entregó al encargado de guardia del turno entrante, quien hizo entrega de los detenidos a personal de ejército, quienes los trasladaron en camiones militares de Temuco, por lo que comentaron en su momento, ya que ese día estaba saliente de turno. De las personas detenidas, había un apodado “el flor de palito”, apellido Castillo y otra persona Colihueque, quien reparaba televisores en Pucón. En fecha anterior al golpe de estado, vio aterrizar un helicóptero de la Fuerza Aérea de Chile. Cercanos al capitán Bustos Letelier, nombra a Eduardo Vergara, oriundo de Villarrica, y viajaba todos los días a Pucón, también el Sargento Canario.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

A.16. Manuel Vásquez Chahuán (27 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 346 a fs. 346 vuelta (Tomo I), de fs. 1.296 a fs. 1.297 (Tomo IV), de fs. 1.403 a fs. 1.404 (Tomo IV), de fs. 1.410 a fs. 1.412 (Tomo IV), de fs. 1.527 a fs. 1.529 (Tomo V), de fs. 1.530 (Tomo V), de fs. 1.548 (Tomo V), de fs. 1.561 a fs. 1.562 (Tomo V), de fs. 1.569 a fs. 1.571 (Tomo V), de fs. 1.572 (Tomo V), de fs. 1.586 (Tomo V), de fs. 2.308 (Tomo VII), de fs. 3.562 (Tomo X), de fs. 3.577 (Tomo X) y de fs. 3.616 (Tomo X).

En declaración judicial de fecha 25 de junio de 2003, rolante de **fs. 346 a fs. 346 vuelta (Tomo I)**, cuenta que al 11 de septiembre de 1973 se desempeñaba como oficial subalterno en el Regimiento Tucapel de Temuco, con el grado de teniente. Al mando del regimiento estaba el coronel Pablo Iturriaga Marchesse, le seguía el teniente coronel Jofre, después el mayor Leal Manzer, A continuación venían los capitanes, que eran comandantes de compañía, entré los que recuerda a Mario Alvarado Verdugo, Fernández Carranza, Nelson Ubilla Toledo, González, Vargas (fallecido); luego venían los tenientes recordando a los hermanos Jaime y Raimundo García Covarrubias y los subtenientes Grant, Oviedo, Espinoza, y Armando Maldonado Valdivia, oficial de reserva. A la pregunta dice que las personas que se le menciona (las de la querella de fs. 1) no le son conocidas y no podría, ni tampoco le consta que dichos muchachos hayan sido llevado en helicóptero al regimiento Tucapel, toda vez que el 12 de septiembre se le encomendó la misión de subordinarse al comandante Guerra (teniente coronel) y en aquella oportunidad salieron de Temuco con destino a Liquiñe con el objetivo de capturar al “Comandante Pepe” por su participación en un asalto a un retén de carabineros, regresando al regimiento Tucapel a fines de septiembre o durante los primeros días de reintegrándose a sus actividades normales. Su labor normal en el regimiento era la de ser oficial Instructor de los soldados conscriptos y en forma anexa también cumplía funciones de seguridad militar a los servicios de utilidad pública. Dice que el regimiento no fue un centro de detención, aunque sí circularon civiles detenidos ya que allí funcionaban los Consejos de Guerra de la época. El ejército no contaba con medios aéreos propios, al menos en la zona donde él servía y los helicópteros que alguna vez aterrizaron en el regimiento eran de la fuerza aérea.

En declaración judicial de fecha 11 de diciembre de 2003, rolante de **fs. 1.296 a fs. 1.297 (Tomo IV)**, en lo pertinente refiere a sus labores en el regimiento

y respecto de los hechos de la querella de fs. 11 y siguientes (de otros hechos), no recuerda los hechos, salvo lo informado mediante el Bando Militar de la época y por los comentarios que se hicieron al día siguiente de ocurridos éstos. Que a la época estaba casado y la noche en que ocurrieron los hechos no estaba de guardia. El Tribunal le pregunta si el Regimiento Tucapel era centro de detención. Responde que no, al menos en la época en que estuvo. El Tribunal le pregunta si a raíz de los hechos reseñados hubo heridos o bajas entre los miembros del Regimiento Tucapel. El deponente responde que no, o al menos no tuvo conocimiento.

En declaración judicial de fecha 04 de septiembre de 2009, rolante de **fs. 1.403 a fs. 1.404 (Tomo IV)**, atestigua respecto de la presencia de detenidos al interior del regimiento Tucapel, que sólo vio personas privadas de libertad que estaban en tránsito hacia la fiscalía o hacia la cárcel. Que, por lo general, eran personas detenidas por infracción a la ley de toque de queda. Estas personas permanecían al lado de la guardia que estaba a la entrada del regimiento. Acerca de los dichos de algunos conscriptos que lo sindicaban como uno de los oficiales encargados de interrogar y torturar detenidos, señala que son falsas tales imputaciones. Suma que existía en el regimiento una unidad de emergencia o reacción, que era integrada por turnos y se componía de doce soldados conscriptos, bajo las órdenes de un suboficial. Esta unidad intervenía ante eventos como un asalto al polvorín, continúa refiriendo a ese hecho.

En declaración extrajudicial de fecha 20 de agosto de 2009, rolante de **fs. 1.410 a fs. 1.412 (Tomo IV)**, alude que para el año 1973 se desempeñaba en el Regimiento de Infantería N°8 de Tucapel de Temuco, con el grado de teniente, en la segunda compañía de cazadores, siendo el comandante de compañía y el subteniente de esta era Manuel Espinoza Ponce. Respecto de las personas que ingresaron detenidas al regimiento, específicamente Fiscalía Militar, funciona en un principio en el pabellón de comandancia de la unidad, donde tenía la oficina el comandante Jofre y luego al costado de la guardia de unidad, indica que efectivamente luego del 11 de septiembre ingresaron personas en esa calidad, pero en tránsito, sin que recuerde que existiera en el destacamento una dependencia para mantener prisioneros dentro de la unidad. Insiste que el 12 de septiembre de 1973 es designado por el coronel Pablo Iturriaga Marchesse, como comandante de una patrulla reforzada y enviado al complejo maderero de

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Panguipulli, específicamente a Liquiñe, bajo las órdenes de un comandante de ejército de apellido Guerra, sin que lo acompañará en ese cometido del teniente Manuel Espinoza. En ese sector cumplió funciones hasta los primeros días de octubre, probablemente hasta la segunda semana de ese mes, cuando regresó a la unidad con su compañía. Se le pregunta por otros hechos, asimismo refiere a su comisión en el sector de Liquiñe y en lo pertinente dice que estando como oficial de guardia, le correspondió recibir detenidos en tránsito en la unidad, esto eran revisados, controlados e ingresados en unos calabozos que estaban en la guardia, a la espera de ser llevados ante la presencia del fiscal, que era el comandante Jofré. Posteriormente, estas personas eran sacadas y trasladadas fuera de la unidad militar, para lo cual no existía personal de la unidad, ya que el deponente veía a personal de carabineros, policía de investigaciones y gendarmería en ese cometido. Finalmente señala que el abogado Alfonso Podlech Michaud era el asesor del fiscal militar y efectivamente en oportunidades vestía uniforme, siendo al parecer su grado oficial de justicia, desde antes del 11 de septiembre de 1973.

En declaración judicial de fecha 22 de julio de 2010, rolante de **fs. 1.527 a fs. 1. 529 (Tomo V)**, ratifica declaración extrajudicial rolante de fs. 739 a 740 (la que consta en estos autos a fs. 1.410 a fs. 1.412 (Tomo IV), y en lo pertinente alude que el regimiento Tucapel tenía un comando, donde estaba el coronel Iturriaga, su ayudante el teniente Rubio, una plana mayor cuyo jefe era el segundo comandante mayor Luis Jofré Soto, más su grupo de asesores. Después venía un mayor que era el comandante de batallón, mayor Gustavo Leal Manzer, a continuación, estaba la compañía de plana mayor y servicios, al mando del capitán Nelson Ubilla Toledo; la primera y segunda de cazadores, no recordando el mando de la primera y el suscrito al mando de la segunda, la de mortero al mando del capitán Fernández Carranza; la andina al mando del capitán Alvarado. Que además había unidades de materia de guerra y transporte, las que probablemente estaban encuadrados en la compañía de plana mayor y servicios. Respecto de la segunda compañía de cazadores bajo su mando, tenía a dos oficiales bajo su mando: los tenientes Espinoza y Valdebenito, quienes estaban a cargo de una de las tres secciones. El teniente Raimundo no pertenecía a su compañía mientras el deponente estuvo a su mando. Recuerda que en su compañía existían tres secciones y una sección de apoyo. Dos secciones de estas estaban a cargo de suboficiales antiguos o de algún sargento, no recordando el nombre de éstos.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Cada sección tenía tres escuadras, conformadas por nueve o diez conscriptos, bajo el mando de un clase, que podía ser cabo segundo, cabo primero o sargento. Los oficiales comandantes de una sección de su compañía por lo general salían a patrullar con personal de su propia sección, aunque podía darse el caso que tomaran soldados conscriptos de otra sección, si existía necesidad. En todo caso, de ningún modo podían tomar personal de otras compañías. Ahora bien, como comandante de compañía le correspondía ordenar las actividades de cada uno de los jefes de sección, salvo que se encontrase ausente, en cuyo caso lo subrogaba el teniente Espinoza. No existían choferes asignados a la compañía, pero si esta tenía vehículos propios eran conducidos por generalmente por los comandantes de escuadra. Una vez cumplida las misiones, el clase u oficial al mando de la patrulla debía dar cuenta al comandante de la compañía. En el caso de la segunda compañía de cazadores, era él quien recibía el informe de todas las actividades de patrullajes y demás misiones que cumplía alguna sección de la compañía, cuando se encontraba efectivamente al mando de la compañía. Dice no tener conocimiento que hubieran detenidos en el gimnasio del regimiento Tucapel de Temuco.

En diligencia de careo con Sergio Orlando Vallejos Garcés, de fecha 23 de julio de 2010, rolante de **fs. 1.530 (Tomo V)** (copia de lo cual se encuentra a fs. 3.577 Tomo X), en lo pertinente ratifica su declaración judicial de fs. 1.305 a fs. 1.307 (la que consta en estos autos a fs. 1.527 a fs. 1.528 Tomo V).

En diligencia de careo con Manuel Reinaldo Canales Valdés de fecha 03 de agosto de 2010, rolante de **fs. 1.548 (Tomo V)** (copia de la cual se encuentra a fs. 3.616 Tomo X), ratifica su declaración judicial de fs. 717. No le consta que hubiera detenidos en el gimnasio del regimiento Tucapel. No recuerda la persona con quien se le carea.

En diligencia de careo con Juan Bautista Labraña Luvecce de fecha 05 de agosto de 2010, rolante de **fs. 1.561 a fs. 1.562 (Tomo V)**, ratifica su declaración judicial y en lo procedente dice que es falso que integrara o estuviera al mando de la sección segunda de inteligencia del regimiento. Que no tenía cursos de inteligencia. Y no tenía nada que ver con los detenidos, nunca los vio, más allá de los que estaban en la guardia del regimiento. Respecto de estos últimos tuvo relación con ellos, solo cuando se encontraba de oficial de guardia. Blasona que en ese tiempo él no era capitán sino teniente. No recuerda haber

concurrido a Cunco en helicóptero junto a Labraña, a pesar de que voló muchas veces. Tampoco recuerda haber interrogado detenidos en esa ciudad. Estima que es importante aclarar la época de 1973 en se le imputa haber concurrido a Cunco. El Tribunal lee declaraciones de Luis Alarcón Seguel, causa rol 113.051 del 29 de mayo y 10 de diciembre de 2007. Depone que no es efectivo que el deponente lo haya interrogado al señor Alarcón en Cunco. Tampoco es efectivo que interrogara a estas personas en el regimiento Tucapel de Temuco. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo con Luis Alberto Alarcón Seguel de fecha 10 de diciembre de 2007, rolante de **fs. 1.569 a fs. 1.571 (Tomo V)**, ratifica íntegramente su declaración judicial y en lo pertinente que la persona con quien se le carea no le resulta conocida. Agrega que en el aquel tiempo el ejército no tenía trajes de camuflaje, utilizando solo uniformes de color verde oliva. Posteriormente en la época de los 80 llegaron trajes de camuflaje. El oficial a cargo de investigar al Movimiento de Izquierda Revolucionaria en el regimiento Tucapel era el capitán Ubilla. Realiza otros comentarios y se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo con Héctor Mauricio Villablanca Huenulao de fecha 05 de agosto de 2010, rolante de **fs. 1.572 (Tomo V)** (copia de lo cual se encuentra a fs. 3.562 (Tomo X), declara sobre otros hechos.

En diligencia de careo con Juan Ociel Schneider Martín de fecha 19 de agosto de 2010, rolante de **fs. 1586 (Tomo V)**, ratifica su declaración judicial de fs. 174 de otros hechos, en el sentido que al 10 de noviembre residía junto a su señora e hijos en la población Llaima de Temuco. Insiste que en la fecha de ocurrencia de los hechos todavía vivía en el departamento de la población Llaima ubicada en Avenida Alemania.

En declaración judicial de fecha 01 de julio de 2013, rolante de **fs. 1.798 (Tomo VI)**, soflama en lo pertinente el capitán Manuel Fernández Carranza era comandante de la compañía de morteros, según recuerda. Que poco antes del 11 de septiembre de 1973, en una reunión que el comandante Iturriaga efectuó con todos los oficiales, para preparar los acontecimientos que vendrían, éste manifestó su desacuerdo con el pronunciamiento militar y pidió no ser considerado en operativos. Por este motivo, el capitán Fernández fue separado del mando y relegado al casino de oficiales. Recuerda haber participado en un operativo aéreo en helicóptero con gente de su compañía hacia el sector fronterizo de Mamuil

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Malal, porque existían antecedentes de que algunos integrantes del grupo del “Comandante Pepe”, habrían ido hacia ese sector en un intento de huir hacia Argentina. Fueron por el día, siendo la única vez que voló por la zona y no resultaron personas detenidas. El Tribunal lee la declaración de Antonio Sergio Monserrat Mena de fs. 3.450, dice no recordar a Antonio Monserrat Mena, e insiste en que solo voló una vez en la zona hacia Puesco y Mamuil Malal. Que quizás el teniente Rubio haya efectuado esas misiones apoyadas por la fuerza aérea, al igual que el teniente Espinoza, que era paracaidista. Que estas órdenes las impartía el comandante Iturriaga. Sin embargo, no participó de ellas, salvo Mamuil Malal.

En diligencia de careo con Antonio Sergio Monserrat Mena de fecha 01 de julio de 2013, rolante de **fs. 1799 (Tomo V)**, ratifica su declaración judicial de fs. 3466. Reconoce a la persona que está a su lado como el señor Antonio Sergio Monserrat Mena, piloto de la base aérea Maquehue de Temuco en 1973, y con quien hizo un curso en una fecha posterior, sobre alto mando. Reitera que en una sola oportunidad fue a la base Maquehue a embarcarse en un helicóptero con destino a Mamuil Malal, aparte de las veces que tuvo que ir a Panguipulli. Además, fue a la base en varias otras oportunidades porque era piloto civil y le gustaba volar avionetas. Se mantiene en sus dichos.

En declaración extrajudicial de fecha 06 de agosto de 2015, rolante de **fs. 2.307 a fs. 2.308 (Tomo VII)**, aquilata su desempeño funcionario, y replica que el día 12 de septiembre de 1973, es designado por parte del comandante de la unidad militar, para preparar una patrulla militar reforzada de su compañía, integrada por personal del cuadro permanente y soldados conscriptos, para viajar al sector cordillerano de Liquiñe, para la ubicación del “Comandante Pepe”, permaneciendo en dicha zona desde el día 13 al 24 de septiembre de 1973. Que regresó a Temuco, debido a que se enfermó de Tifus, diagnostico que lo tuvo fuera de actividad hasta el día 12 o 13 de octubre, reintegrándose a sus funciones normales a partir de esa fecha. Que sus funciones se limitaban a estar a cargo de la segunda compañía de cazadores, no siendo parte de la sección de inteligencia de la unidad militar. En relación a Héctor Aguayo Olavarría, los hermanos Hugo Arner y Elías Dagoberto Gonzalez Ortega, los hermanos Juan Carlos y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan de Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez y Raúl Figueroa Burkhardt, sobre quienes se le informa que estuvieron detenidos al

interior del Regimiento Tucapel de Temuco probablemente a partir del día 13 de septiembre de 1973, dice que es primera vez que escucha sus nombres e ignora todo antecedente relacionado con sus permanencias al interior de la unidad militar. Que la fiscalía militar, probablemente tenía relación con las determinaciones que se hacían respecto a los detenidos del regimiento, en el sentido de disponer en que condición quedarían estos. Que el fiscal militar de la unidad militar era el mayor Luis Jofré Soto, siendo apoyado en sus funciones por un abogado de apellido Podlech, a quien se le asimiló al grado de oficial de ejército. Desconoce el traslado de cadáveres desde la isla Cautín hasta el puente Allipén, que probablemente cuando sucedió este hecho se encontraba fuera de la unidad por los motivos que narró, ahora bien, en su ausencia quien quedó a cargo de la segunda compañía de cazadores fue el subteniente Manuel Espinoza Ponce y nunca se dio cuenta de tal situación a su regreso, como tampoco tomó conocimiento por otros medios.

A.17. Mario Emiliano Alvarado Verdugo (29 años a la época de los hechos). **En declaración judicial** de fecha 25 de junio de 2003, rolante de **fs. 347 a fs. 347 vuelta (Tomo I)**, arguye que en septiembre de 1973 se desempeñaba como comandante de la compañía andina del regimiento Tucapel con el grado de capitán. Su labor fundamental era de instrucción, pero a partir del 11 de septiembre de 1973 por circunstancias que vivía el país su función cambió. En su caso particular le tocó participar en allanamientos relacionados con la ley de control de armas, efectuar algunos patrullajes y resguardo de instalaciones o servicios públicos. Que a fines de septiembre o los primeros días de octubre es destinado en comisión servicio a Santiago con su unidad, comisión que desempeño hasta vísperas de Pascua en que volvió a su unidad de origen hasta septiembre 1974, cuando es destinado al cuartel general de la IV división de ejército con sede en Valdivia. Señala que el regimiento Tucapel no tenía un helicóptero institucional asignado y cuando se necesitaba se utilizaban los de la fuerza aérea. De las personas que se le mencionan, de la querella de fs. 1 no le son conocidas, ni le consta que dichos muchachos hayan sido trasladados en helicóptero hasta el regimiento Tucapel. Aunque “sí debo señalar que al regimiento en algunas oportunidades llegaban helicópteros transportando detenidos.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

A.18. Eleodoro Rubilar Bascur (39 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). **En declaración judicial** de fecha 25 de junio de 2003, rolante de **fs. 348 a fs. 348 vta. (Tomo I)**, depone al tenor de la minuta de fs. 255. En lo pertinente afirma que entre agosto y octubre de 1973, era funcionario de gendarmería en la penitenciaría de Temuco. Que los detenidos provenientes de la Fiscalía Militar eran llevados por funcionarios del ejército en un vehículo de la institución. Una vez los recibían, en un primer momento eran ingresados en el libro de novedades, por el oficial de guardia. Recuerda que uno de ellos era Héctor Ruiz de Gamboa, del cual era su ayudante. Se ingresaba en estadística en el libro correspondiente, según su situación procesal, esto es, detenidos procesados o rematados. En cuanto a su egreso el proceso era a la inversa. Los libros debían estar en los archivos de la penitenciaría de Temuco. Que durante el periodo en el cual prestó servicios en la penitenciaría de Temuco, entre el año 1970 a 1978, se desempeñaron como Alcaide, Jorge Arias Guíñez y luego Maximiliano Vivanco Parra y Sigisfredo Jara Contreras. No recuerda a ninguna de las personas que se le han nombrado, como internos de la penitenciaría de Temuco. Que Alfonso Podlech Michaud era Fiscal militar y concurría periódicamente a la penitenciaría, la mayoría de las veces en tenida militar y pasaba donde el oficial de guardia, quien daba las novedades y anunciaba con el Alcaide, con el cual conversaba. No conoció a Gonzalo Arias González. Anexa que era una sola persona en representación del ejército que traía los detenidos y revestía la calidad de suboficial, cree que era de apellido Moreno, pero no lo recuerda con exactitud. Que fuera de los nombres que ha señalado en la pregunta N°4, agrega que trabajó con tres jefes de guardia a saber, teniente Jaime González Sepúlveda, teniente Víctor Ortega Ortega y Alfredo García Díaz.

A.19. Roden Rivas Vergara (39 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 394 (Tomo I), de fs. 718 (Tomo II) y de fs. 772 a fs. 773 (Tomo III) y de fs. 1.010 a fs. 1.011 (Tomo III).

En declaración judicial de fecha 16 de noviembre de 2004, rolante de **fs. 394 (Tomo I)**, comunica en lo pertinente que septiembre de 1973 ostentaba el grado de sargento segundo y enfermero de ganado en la subcomisaría de Pucón, lugar donde estuvo hasta 1977. El nombre de las personas que se le menciona como detenidos no recuerda. Sin embargo, si recuerda la detención de siete personas, todas adultas, entre ellos un tal Colihueque, que fueron citados al

cuartel por órdenes del regimiento Tucapel y luego de ello le correspondió trasladarlos hasta Temuco, donde los entregó a la guardia del regimiento Tucapel. Que esas personas regresaron a Pucón como a los cinco días y debieron presentarse a firmar todos los fines de semana en el cuartel. Aparte de eso, no recuerda otro suceso similar. Que era frecuente que helicópteros sobrevolaran la zona y a lo menos en dos oportunidades durante el periodo de septiembre a diciembre de 1973 aterrizaron en la comisaría, no recuerda fecha porque no estaba presente. Rememorando que fines de septiembre llegó el teniente coronel Gonzalo Arias González en vehículo junto a su chofer y un ayudante, en esa oportunidad los saludo y se fue visitando a todos los destacamentos.

En declaración judicial de fecha 09 de julio de 2012, rolante de **fs. 718 (Tomo II)**, ratifica su declaración judicial de fs. 394. No recuerda que el teniente Cesar Jaña Toro haya reemplazado al capitán Luis Bustos Letelier. Recordando a un señor de apellido Barra Matamala, quien colaboró en una oportunidad con carabineros para septiembre de 1973, facilitando su camioneta para trasladar detenidos al regimiento Tucapel. No le consta que haya habido detenidos políticos al interior de la subcomisaria de Pucón.

En declaración extrajudicial de fecha 11 de junio de 2012, rolante de **fs. 772 a fs. 773 (Tomo III)**, replica su desempeño funcionario y que en 1973 se desempeñaba en la subcomisaria de Carabineros de Pucón, al mando del capitán Luis Bustos Letelier. Que, llegado el 11 de septiembre de 1973, se le ordenó a la totalidad del personal que se acuartelaran a la unidad policial, situación que duro una semana. Sobre la permanencia de personas detenidas en la unidad policial, nombra a los señores Colihueque y Brevis, entre otros. Conmemora a estas personas, porque junto a otros detenidos los trasladó al Regimiento de Infantería N°8 Tucapel de Temuco, en dos vehículos, recordando que en el número de estos se acercaba a las diez personas y lo acompañaron los carabineros Ramón Quezada Reyes y Francisco Monsalve. Una vez que llegaron a Temuco, entregó los detenidos en el regimiento Tucapel, los recibió un funcionario a su parecer de grado de oficial, a quien le hizo entrega de los detenidos. Subsiguientemente, regresaron a Pucón, y los días posteriores vio a los señores Colihueque y Brevis en las calles de Pucón. Agrega que los detenidos fueron trasladados en camioneta de Carlos Barra. Posterior al pronunciamiento militar, era frecuente la permanencia de helicópteros de la Fuerza Aérea de Chile, los cuales en más de una

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

oportunidad aterrizaron en el patio interior de la subcomisaria de Pucón. Desconoce quiénes eran los pilotos y tripulantes. No vio personal de ejército ni de la fuerza aérea, efectuar interrogatorios al interior de las caballerizas de la unidad policial. No recuerda haber oído los nombres de Hugo y Elías González Ortega, Juan y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa, Raúl Figueroa Burkhardt y Héctor Aguayo Olavarría. No reconoce a la persona que se le exhibe, cuya fotografía corresponde a Héctor Aguayo Olavarría. No supo respecto de la ejecución en el puente Rodrigo Bastidas de Villarrica, lo que único que supo por comentarios, fue que en el puente Allipen, ejecutaron personas, efectivos del ejército.

En declaración extrajudicial de fecha 15 de mayo de 2013, rolante de **fs. 1.010 a fs. 1.011 (Tomo III)**, insiste en lo pertinente que solo recuerda como detenidos en la tenencia de carabineros de Pucón, solamente a los señores Colihueque y Brevis; a quienes trasladó junto a otros detenidos hasta el regimiento Infantería N°8 Tucapel de Temuco, en dos vehículos, uno particular de propiedad de Carlos Barra y uno institucional. Los detenidos eran cerca de diez personas, de quienes no recuerda mayores características. Nunca supo los motivos, ni lugares de detenciones de las personas que trasladó a Temuco, solamente recibió orden para efectuar esa labor por parte del jefe de unidad el capitán Luis Bustos Letelier.

A.20. Ignacio Cofré Leal (38 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 398 a fs. 398 vuelta (Tomo II), de fs. 766 a fs. 767 (Tomo III), de fs. 803 (Tomo III), de fs. 1.016 a fs. 1.017 (Tomo III) y de fs. 2.008 (Tomo VI).

Declaración judicial de fecha 17 de noviembre de 2004, rolante de **fs. 398 a 398 vta. (Tomo II)**, en lo adecuado dice que el 11 de septiembre de 1973 se desempañaba en la subcomisaria de Pucón con el grado de sargento segundo. Sus actividades consistían en patrullajes, turnos de guardia y chofer. Respecto de los hechos de este proceso dice que nada puede aportar, pues no recuerda que estos jóvenes hayan llegado detenidos hasta la subcomisaria. El Tribunal le pregunta si estuvo en la subcomisaria entre el 11 y el 15 de septiembre de 1973. Responde que sí estuvo en ese periodo, pero nada supo de los detenidos. El Tribunal le pregunta por los integrantes de la subcomisaria de Pucón. Depone que el jefe era Luis Bustos Letelier, luego venía el suboficial mayor Helio Raúl Burgos Burgos, el sargento primero Eduardo Vergara; luego venía él; José Eve Mancilla Yáñez; Ramón Quezada, Guillermo Rosales; Ramón Rivas Pinilla; Cristóbal

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Moncada Gutiérrez, Francisco Monsalve Hidalgo, chofer; cabo Roden Rivas Vega, enfermero de ganado; Diógenes Bravo; Luis Riquelme; un carabinero de apellido Sagal. En cuanto a la formación del Servicio de Inteligencia de Carabineros, dice que Cristóbal Moncada y un sargento de apellido Reyes Fernández pasaron a trabajar para ese organismo y vestían de civil. Sin embargo, dependían directamente de Villarrica o de Temuco, pues jamás dieron cuenta de sus labores en la subcomisaria de Pucón. Esto debe haber sucedido en 1974. El Tribunal le pregunta si vio detenidos en la subcomisaria de Pucón o si vio pasar detenidos en tránsito hacia Temuco, ya sean trasladados por personal del ejército, carabineros o de la fuerza aérea. Responde que no, que nunca vio detenidos. El Tribunal le pregunta si vio sobrevolar helicópteros en la zona. Responde que vio sobrevolar helicópteros después del 11 de septiembre y también vio que aterrizaban en el patio de la unidad. Que esto ocurrió como diez veces. No recuerda a los miembros de las tripulaciones y sólo conversaban con el jefe de la unidad. El Tribunal le pregunta si la subcomisaria de Pucón fue visitada alguna vez por algún oficial de alguna rama de las fuerzas armadas o de carabineros. El deponente responde que solo vio en una oportunidad al comandante Gonzalo Arias González en 1974, cuando fue en una visita de rutina acompañado por un ayudante, no recuerda su identidad ni la fecha exacta de esa visita. Que debe haber sido el primer semestre de 1974 y fue por tierra.

En declaración extrajudicial de fecha 07 de junio de 2012, rolante de **fs. 766 a fs. 766 vuelta (Tomo III)**, reseña de su carrera funcionaria y en lo pertinente, replica que se encontraba bajo las órdenes del capitán Luis Bustos Letelier insistiendo en la dotación de la época y que le correspondió realizar labores de conducción, suboficial de guardia y patrullajes ordenado por el subcomisario jefe de la unidad, donde nunca se registraron detenidos, pero dice tener conocimiento que ingresaron detenidos al cuartel entre ellos las personas de apellido Fonseca, Acevedo, Brevis y otros que no recuerda, quienes pertenecían a partidos contrarios al gobierno de esos momentos, los cuales se mantuvieron un día en el cuartel, siendo dejados en libertad luego de ser interrogados por funcionarios del ejército de Chile, quienes aparecían en oportunidades en la unidad, ya sea, en helicópteros o en vehículos militares. En cuanto a las víctimas cuyos nombres se le dan a conocer, no las recuerda como detenidos. Solo que por comentarios tomó conocimiento que hasta el cuartel llegaron

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

aproximadamente seis detenidos jóvenes, desconociendo todo antecedentes, ya que, había sido detenidos por personal del ejército, presumiendo que fueron traídos y llevados en helicóptero, a algún lugar del cual desconoce. Espeta que es efectivo que personas de "Patria y Libertad" colaboraron con vehículos a carabineros.

En declaración judicial de fecha 25 de septiembre de 2012, rolante de **fs. 803 (Tomo III)**, ratifica su declaración extrajudicial de fs. 746 a fs. 747. Espeta que Carlos Barra prestó colaboración a carabineros para el traslado de detenidos, en un vehículo de su propiedad, desde la subcomisaria de Pucón hasta el regimiento Tucapel, situación que nunca supo. No recuerda nombres de las personas que se le dan a conocer, ni familiares de estos. Que recuerda cuando aterrizan los helicópteros en la unidad, el oficial al mando pasaba a hablar directamente con el jefe de la unidad a su oficina.

En declaración extrajudicial de fecha 16 de mayo de 2013, rolante de **fs. 1.016 a fs. 1.017 (Tomo III)**, insiste que se desempeñaba en subcomisaria de Pucón en el año 1973 y en lo procedente atina que respecto a los ocho jóvenes que se le consultan, no tuvo participación en la presunta detención de estos jóvenes e ignora sus identidades. El 11 de septiembre de 1973 estaba con licencia médica, pero dado los hechos acaecidos debió presentar al cuartel, ya que quedaron en situación de acuartelamiento, por una semana. Por comentarios de sus colegas supo que hubo detenidos en la unidad. En relación con la presencia de helicópteros, dice que llegaban a la unidad, pero en más de una oportunidad vio que estos llegaban, se posaban en el patio, sus tripulantes bajaban detenidos a quienes los mismos militares interrogaban en las caballerizas de su unidad y después se lo llevaban en helicóptero con rumbo desconocido. Ignora a que institución pertenecían esos helicópteros, no llevaban distintivo, pero eran helicópteros militares. Refiere a otras personas detenidas en la unidad.

En declaración judicial de fecha 16 de diciembre de 2014, rolante de **fs. 2.008 (Tomo VI)**, asevera que cuando tomaba el turno de guardia, revisaba el libro de novedades, pero solo lo ocurrido en el turno anterior, por lo que no se enteró de la detención de las víctimas. Insiste en que no vio a los detenidos a que se referencia en la causa, ni que fueran trasladados a Temuco en helicóptero. Que el sargento Burgos con el cabo Bravo, eran excelentes funcionarios. Por lo general Monsalve, Bravo y Burgos salían con el capitán Bustos.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

A.21. José Eve Mancilla Yáñez (41 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 399 a fs. 400 (Tomo II), de fs. 768 a fs. 769 (Tomo III), de fs. 809 (Tomo III), de fs. 1.019 (Tomo III), de fs. 2.007 (Tomo VI) y de fs. 2.508 a fs. 2.509 (Tomo VII).

En declaración judicial de fecha 17 noviembre de 2004, rolante de **fs. 399 a fs. 400 (Tomo II)**, arguye que para el 11 de septiembre de 1973 se desempeñaba en la subcomisaria de Pucón con el grado de sargento segundo. Sus labores entre septiembre y diciembre de 1973 consistían en hacer guardias y turnos en la calle. El Tribunal le pregunta por los integrantes de la subcomisaria de Pucón, responde: el oficial a cargo era Luis Bustos Letelier; luego el suboficial mayor Helio Raúl Burgos Burgos, el sargento primero Eduardo Vergara, Aliro Canario Rodríguez, Ramón Quezada, chofer (fallecido); Guillermo Rosales, Ramón Rivas Pinilla, Cristóbal Moncada Gutiérrez, no está seguro si estaba en ese tiempo, Francisco Monsalve Hidalgo, chofer (fallecido); cabo Roden Rivas Vega, enfermero de ganado; Diógenes Bravo, tampoco recuerda si formaba parte de la dotación en ese tiempo; Luis Riquelme; un carabinero de apellido Sagal, no recuerda si trabajó con él en 1973. Preguntado por el Tribunal si sobrevolar helicópteros en la zona. Responde que vio sobrevolar y aterrizar helicópteros después del 11 de septiembre. Que esto ocurría constantemente, casi todos los días. Los helicópteros aterrizaban en el patio de la unidad y los tripulantes conversaban con los oficiales que se encontraban en la unidad. No recuerda la conformación de las tripulaciones. Preguntado si vio detenidos en la subcomisaria de Pucón o si vio pasar detenidos en tránsito hacia Temuco, señala que sí vio detenidos, sobre todo en los primeros días del golpe militar, dentro de la primera quincena de septiembre. Los que llegaban detenidos por personal militar o de la Fuerza Aérea de Chile, que incluso llegaron personas detenidas por carabineros. Los detenidos eran transportados posteriormente hacia Temuco vía aérea y terrestre. Respecto de las personas que se le señala, no las recuerda, pero dice que, si llegaron detenidos hasta la subcomisaria, es muy probable que hayan sido derivados hacia Temuco vía aérea, ya que ese era el medio más usual de transporte de detenidos. Interrogado dice que no le correspondió practicar detenciones o citaciones ordenadas por la Fiscalía Militar de Temuco. Preguntado por el Tribunal si la subcomisaria de Pucón fue visitada alguna vez por algún oficial de alguna rama de las fuerzas armadas o de carabineros, refiere que solo

vio oficiales de carabineros que iban a inspeccionar, entre los que recuerda al comandante Gonzalo Arias González, cuando fue en una visita de rutina, acompañado de su ayudante, no recordando su identidad ni la fecha exacta de su visita, pero fue después del 11 de septiembre. Fue por tierra. En relación con la formación del Servicio de Inteligencia de Carabineros, no sabe la fecha en que se formó, pero recuerda a los funcionarios Cristóbal Moncada y uno de apellido Reyes Fernández, como miembros de ese organismo, y vestían de civil. Que sin embargo, no dependían de la subcomisaria de Pucón y prácticamente no se les veía en el lugar. Respecto de las personas cuyos nombres aparecen indicados en la querella de fs. 1, no las recuerda. No recuerda que el cabo Francisco Monsalve haya ido a entregar a la subcomisaria un grupo de detenidos y que posteriormente hayan sido trasladados a Temuco. El Tribunal le pregunta si formaba parte de la patrulla que detuvo a un grupo de jóvenes camino a Curarrehue en septiembre de 1973, los que posteriormente fueron trasladados hasta la subcomisaria de Pucón, responde que no formaba parte ni recuerda ese hecho.

En declaración extrajudicial de fecha 7 de junio de 2012, rolante de **fs. 768 a fs. 769, (Tomo III)**, refiere a su carrera funcionaria y en lo particular que para el año 1973 ostentaba el grado de sargento segundo, y se desempeñaba en la subcomisaria de Carabineros de Pucón, la cual por ese entonces estaba a cargo del capitán Bustos. Recuerda que días posteriores al pronunciamiento militar, el mando de la unidad les ordenó efectuar patrullajes de control de toque de queda, recordando que en más de una oportunidad tuvieron que llevar personas detenidas por vulnerar ese horario, las que quedaban en libertad al día siguiente. Aduce que al recinto policial era habitual la llegada de helicópteros militares, los cuales se posaban en el patio de la unidad. Recordando que en una oportunidad estando de guardia, llegó un helicóptero en cuyo interior iba un grupo de detenidos, entre los cuales estaba Servando Castillo. Los detenidos no se bajaron del helicóptero, el cual después de unos minutos emprendió vuelo con rumbo desconocido. Respecto de Hugo y Elías González Ortega, Juan y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa, Raúl Figueroa Burkhardt y Héctor Aguayo Olavarría, dice que es la primera vez que escucha sus nombres y tampoco los recuerda como detenidos. Agrega que no hubo personas detenidas por temas políticos y los detenidos que en algún momento vio solamente estuvieron de paso en la unidad. Relata otras cosas.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

En declaración judicial de fecha 28 septiembre de 2012, rolante de **fs. 809 (Tomo III)**, ratifica su declaración extrajudicial de fs. 748 a fs. 749 y en lo referente a la declaración de Carlos Barra, respecto al traslado de unos detenidos desde la subcomisaria de Pucón al regimiento Tucapel de Temuco nada sabe. Que era recurrente ver a Carlos Barra en la subcomisaria de Pucón, eran bien amigos con el jefe de la unidad. En cuanto a las visitas que habría efectuado el teniente coronel Gonzalo Arias González a la subcomisaria de Pucón, es primera vez que escucha ese nombre y no recuerda haberlo visto en la unidad. En cuanto a las víctimas desaparecidas, refiere no saber, que no supo de ejecuciones de detenidos u otras personas en Villarrica o Pucón, que esa época no se podía hablar “de esos temas”.

En declaración extrajudicial de fecha 16 de mayo de 2013, rolante de **fs. 1.019 (Tomo III)**, ratifica lo declarado extrajudicialmente, no teniendo ningún otro antecedente que aportar.

En declaración judicial de fecha 16 de diciembre de 2014, rolante de **fs. 2.007 (Tomo VI)**, consultado dice que los carabineros Diógenes Bravo y Burgos, eran excelentes funcionarios. Sobre las personas desaparecidas y víctimas de autos, no tiene mayores antecedentes. Si estuvieron detenidas en Pucón, él no las vio.

En declaración judicial de fecha 12 de septiembre de 2016, rolante de **fs. 2.508 a fs. 2.509 (Tomo VII)**, ratifica declaraciones de otro proceso y reseña a ello. En lo pertinente alude que no vio personal de ejército en Pucón, pero sí vio llegar helicópteros con personal de la fuerza aérea. Estos llevaban detenidos, ignorado sus identidades. Se le consulta por otros hechos.

A.22. Aliro Humberto Canario Rodríguez (39 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 401 a fs. 402 (Tomo II), de fs. 764 a fs. 765 (Tomo III), de fs. 804 (Tomo III), de fs. 1.018 (Tomo III), de fs. 2.006 (Tomo VI) y de fs. 2.232 a fs. 2.233 (Tomo VII).

En declaración judicial de fecha 17 de noviembre de 2004, rolante de **fs. 401 a fs. 402 (Tomo II)**, invoca que para el 11 de septiembre de 1973 se desempeñaba en la subcomisaria de Pucón con el grado de sargento segundo. En lo atinente que sus labores entre septiembre y diciembre de 1973 consistían en hacer guardia y turnos en la calle. Preguntado por los integrantes de la subcomisaria de Pucón. Responde que el oficial a cargo era el capitán Luis Bustos

Letelier; le seguía el suboficial mayor Helio Raúl Burgos Burgos; el sargento primero Eduardo Vergara; cabo Ramón Quezada, chofer (fallecido); sargento Ignacio Cofré; sargento segundo Guillermo Rosales; cabo primero Ramón Rivas Pinilla; sargento segundo Cristóbal Moncada Gutiérrez; Francisco Monsalve Hidalgo, chofer (fallecido); cabo Roden Rivas Vega, enfermero de ganado; cabo Diógenes Bravo, no sabe si formaba parte de la dotación en ese tiempo, ya que el parecer era del Retén Puesco; cabo Luis Riquelme; carabinero de apellido Sagal. Consultado dice que vio sobrevolar y aterrizar helicópteros antes y después del 11 de septiembre. Esto ocurría constantemente, ya que mantenían bencina en la unidad. Esos helicópteros aterrizaban en el patio de la unidad. Preguntado si vio detenidos en la subcomisaria de Pucón o si vio pasar detenidos en tránsito hacia Temuco, ya sea trasladado por el personal del ejército, carabineros o la fuerza aérea. Responde que no vio detenidos en la subcomisaria de Pucón. Inquirido por el Tribunal si formaba parte de la patrulla que detuvo a un grupo de jóvenes camino a Curarrehue en septiembre de 1973, los que posteriormente fueron trasladados hasta la subcomisaria de Pucón, señala que no formaba parte ni recuerda ese hecho. Con relación a la declaración de don Luis Bustos Letelier, que se le lee, donde se da cuenta de la detención de unos jóvenes que fueron trasladados a la subcomisaria y luego llevados en helicóptero a Temuco, dice no tener conocimientos. Preguntado por el Tribunal si le correspondió efectuar detenciones o citaciones ordenadas por la fiscalía militar de Temuco. El deponente responde: que no le correspondió. En relación con la formación del Servicio de Inteligencia de Carabineros no tuvo conocimiento al respecto, pero sí sabe que dos de sus colegas pertenecieron a la Dirección de Inteligencia Nacional, Cristóbal Moncada y Orlando Reyes Fernández, quienes a partir de 1974 dejaron de usar uniforme y andaban de civil, pues al parecer ya no dependían de la subcomisaria, sino de la Prefectura de Temuco. Que nunca supo que el Servicio de Inteligencia de Carabineros tuviera funcionarios en Pucón. Preguntado si la subcomisaria de Pucón fue visitada alguna vez por algún oficial de alguna rama de las fuerzas armadas o de carabineros, responde que no recuerda. Solo se acuerda de las visitas de rutina que se hacían, que las efectuaba el coronel o el segundo jefe de Temuco, pero no recuerda en particular a ninguno de ellos, ni tampoco las fechas en que esas se efectuaron. Respecto de las personas cuyos nombres aparecen indicados en la querella de fs. 1, no las recuerda, salvo a una persona de apellido

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

González, que “me suena como jefe de INDAP en Pucón”. Sin embargo, no recuerda haberlo visto detenido.

En declaración extrajudicial de fecha 7 de junio de 2012, rolante de **fs. 764 a fs. 765, (Tomo III)**, destaca su carrera policial y en lo pertinente replica que para el año 1973 ostentaba el grado de sargento segundo y se desempeñaba en la subcomisaria de Carabineros de Pucón, bajo las órdenes del capitán Luis Bustos Letelier, siendo secundado en el mando por el sargento Vergara. Respecto a Hugo y Elías González Ortega, Juan y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa, Raúl Figueroa Burkhardt y Héctor Aguayo Olavarría, no recuerda haberlas conocido, ni tampoco las recuerda como detenidas en la subcomisaria de Pucón. Hace presente que con posterioridad al pronunciamiento militar no vio detenidos de índole política que hayan sido llevados en esa calidad hasta la subcomisaria de Carabineros de Pucón, como tampoco se les ordenó efectuar allanamiento a algunos domicilios de esa comuna. Sin embargo, dice que es efectivo que llegaba a la unidad policial un helicóptero de la Fuerza Aérea, el cual aterrizaba en recinto policial, pero nunca vio que en ese helicóptero se trasladaran personas detenidas hasta la ciudad de Temuco, como tampoco supo si civiles apoyaran a carabineros con sus vehículos con el traslado de estos. Que en una oportunidad escuchó que pasaron un grupo de personas detenidas por el cuartel policial, pero ignora quienes los habrían detenido y que destino tuvieron. Añade que durante ese año se agregaron a su unidad policial los efectivos policiales que cumplían servicios en el Retén Llafenco.

En declaración judicial de fecha 25 de septiembre de 2012, rolante de **fs. 804 (Tomo III)**, ratifica declaración extrajudicial de fs. 744 a fs. 745 (las que constan en estos autos de fs. 764 a fs. 765 Tomo III), inquiriere que no recuerda el hecho que se le informa y que correspondió a lo declarado por un civil de nombre Carlos Barra, referente al traslado de detenidos desde carabineros de Pucón al regimiento Tucapel de Temuco. No recuerda que esa persona haya sido “muy apegado” a carabineros. Lo recuerda como un comerciante de la zona. No recuerda que otros civiles hayan prestado vehículos para el traslado de detenidos o cooperar con las labores de carabineros de Pucón. Carabineros tenía sus propios vehículos. Solo supo por rumores de personas en el pueblo que pasaron unos detenidos por la comisaría de Pucón, pero eran comentarios que él no

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

tomaba en cuenta. Que de haber detenidos tendrían que haber quedado registros en la guardia de su paso por la unidad policial.

En declaración extrajudicial de fecha 16 de mayo de 2013, rolante de **fs. 1.018 (Tomo III)**, ratifica lo declarado extrajudicial y judicialmente, no teniendo ningún antecedente más que aportar.

En declaración judicial de fecha 16 de diciembre de 2014, rolante de **fs. 2.006, (Tomo VI)**, ratifica todas sus declaraciones anteriores prestadas en la presente causa. Respecto de los carabineros Diógenes Bravo y Burgos, los recuerda como excelentes funcionarios, sin que hayan recibido algún reproche por su actuar. Insiste en que nunca supo que las víctimas de autos hayan sido llevadas a la subcomisaria donde permanecieron hasta que fueron trasladadas en helicóptero a Temuco. Eso no le consta, ni le fue informado posteriormente.

En declaración de fecha 8 de octubre de 2015, rolante de **fs. 2.232 a fs. 2.233 (Tomo VII)**, replica que para el año 1973 era sargento segundo y como tal se desempeñaba en la subcomisaria de Pucón, a cargo del capitán Luis Robinson Bustos Letelier, siendo secundado por el sargento primero Vergara González, sargento segundo Cofré Leal, además de los funcionarios Ramón Rivas, Mansilla Yáñez y otros que no recuerda. Con relación a las detenciones de índole político llevadas a efecto después del día 11 de septiembre de 1973, no observó detenidos de dicha índole en la subcomisaria de Pucón, solo recuerda que en el patio posterior aterrizaban helicópteros con personal de la Fuerza Aérea de Chile, los cuales nunca llevaron detenidos a la unidad, solo se posaban en el cuartel para cargar combustible, eso debido a que nunca los observó directamente, a pesar de que se encontraban acuartelados. Sobre la detención de Ricardo Virginio Aguayo Olavarría y otros hechos ocurridos en la comuna de Villarrica, posterior al 11 de septiembre de 1973, dice no conocer a las personas mencionadas, así como tampoco tiene antecedentes de sus detenciones.

A.23. Antonio Sergio Monserrat Mena, (27 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 415 a fs. 415 vuelta (Tomo II), de 1.786 a fs. 1.788 (Tomo VI),

En declaración judicial de fecha 7 de diciembre de 2004, rolante de **fs. 415 a fs. 415 vuelta (Tomo II)**, puntea en lo pertinente que se desempeñó en el grupo de aviación N° 3 con asiento en la ciudad de Temuco desde octubre de 1972 hasta marzo de 1981. Respondiendo lo que se le pregunta, señala que no

descarta ni afirma que alguna vez o más de alguna le haya correspondido pilotar o participar de la tripulación de un helicóptero que haya transportado detenidos desde algún punto de la región hasta el regimiento Tucapel. Que la Tripulación normal de un helicóptero era de cuatro: piloto, copiloto y dos tripulantes. A la pregunta que se le formula, responde, normalmente trasladaban tropa a algún punto, los dejaban y volvían a buscarlos en la tarde. Recuerda que una o dos veces le correspondió trasladar detenidos al regimiento Tucapel. No recuerda haber trabajado con personal de carabineros en algún operativo, ya que sólo le correspondió trabajar con personal del ejército. El Tribunal le pregunta si la base aérea Maquehue contaba con lugares habilitados para interrogar y detener a presos políticos, a lo que responde: No, por cuanto ni siquiera existían las dependencias mínimas para los oficiales, por lo que mal podrían destinar un espacio para detenidos. Se le pregunta por otros antecedentes de la base aérea Maquehue.

En declaración judicial de fecha 26 de junio de 2013, rolante de **fs. 1.786 a fs. 1.788 (Tomo VI)**, replica sus funciones y en lo adecuado dice que después del 11 de septiembre de 1973 le correspondió efectuar operativos en helicóptero hacia Concepción, en primer término, a dejar al mecánico y repuestos; otro vuelo fue con motivo de la búsqueda de Altamirano, quién supuestamente estaba en ese lugar. Fue acompañado por un piloto civil de apellido Salinas. Posteriormente o antes del segundo vuelo a Concepción, no lo recuerda bien, fue a Valdivia transportando tropas militares, con ocasión de la denominada "operación peineta". Allí estuvo bajo las órdenes del teniente coronel Sinclair. Estuvo entre diez y quince días operando allí. Preguntado dice que, en la región le correspondió efectuar operativos hacia Curacautín y Curarrehue, según recuerda, en donde transportó tropas del ejército que buscaban "supuestos extremistas". En estos operativos los militares trajeron personas civiles, las que fueron subidas al "aparato", regresando a Temuco con ellos más los militares. A todos ellos los dejó en dependencias del regimiento Tucapel, específicamente en el sector de la isla Cautín. Recuerda que en dos o tres oportunidades más o menos le correspondió trasladar militares que llevaban civiles al Tucapel. Desconoce si esos civiles iban en calidad de detenidos, puesto que la tripulación sólo se limitaba a operar el aparato, desconociendo la naturaleza de las misiones. Interrogado dice que jamás le correspondió trasladar detenidos a la base aérea Maquehue. Respecto de la

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

consulta, responde que en estos vuelos donde se llevaron personas civiles, al mando de los militares, recuerda que iba el teniente Rubio Balladares y en otras ocasiones otro oficial cuyo nombre no recuerda. No está seguro si el teniente Vásquez Chahuán voló con él en esas oportunidades, porque los operativos constaban de más de un helicóptero generalmente. Pero de lo que sí está seguro es que el teniente Vásquez Chahuán formaba parte de esas patrullas. Respecto de la consulta, que es posible que carabineros haya concurrido a la base, pero él no los vio. Supo posteriormente que el mayor Callís visitaba la base y se entrevistaba con el comandante Pacheco. Que sí vio a oficiales de ejército, como Alejandro Rubio Balladares y Manuel Vásquez Chahuán. Estos fueron en algunas ocasiones a la base acompañados por otros militares bajo su mando, para embarcarse en los helicópteros y salir en los diferentes operativos que se efectuaron en la zona.

En diligencia de careo con Manuel Abraham Vásquez Chahuán, de fecha 1 de julio de 2013 **de fs. 1.799 (Tomo VI)**, ratifica su declaración de fs. 3.450 a fs. 3.452 (las que constan en estos autos a fs. 1.786 a fs. 1.788 Tomo VI), reconoce a la persona con quien se le carea y de quien ha hecho referencia, y a quién vio en una o dos oportunidades en la base aérea en las actividades señaladas en su declaración.

A.24. Enrique Alcides Isaac Casacuberta, (37 años a la época de los hechos). **En declaración judicial** de fecha 7 de diciembre de 2004, rolante de **fs. 417 a fs. 418 (Tomo II)**, en lo adecuado que se desempeñó en el grupo de aviación N°3 con asiento en la ciudad de Temuco desde 1971 hasta 1979. En el período septiembre a diciembre de 1973 sus labores decían relación con ser comandante de la escuadrilla de mantenimiento. Además, cumplía funciones de piloto e instructor de pilotos de helicóptero. El Tribunal le pregunta si le correspondió en alguna oportunidad transportar detenidos desde alguna comuna o comisaría hasta el regimiento Tucapel de Temuco, respondiendo que recuerda que una vez hizo transporte de detenidos desde el sector de Lonquimay hasta el grupo N°3, pero nunca llevó detenidos al regimiento Tucapel. Recuerda que, a contar del 18 de septiembre de 1973, le correspondió ir a Neltume transportando una patrulla del ejército al mando del teniente Vásquez del regimiento Tucapel, con el fin de detener al comandante Pepe junto a otras personas. Luego de ejecutada esta operación le correspondió trasladarlo hasta un complejo maderero

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

ubicado en el sector precordillerano de la zona de Valdivia, donde fueron entregados a un oficial de ejército que estaba al mando del destacamento militar que operaba en la zona. Además, le correspondió volar con carabineros para controlar pasos limítrofes ante la posibilidad que personas entraran o salieran del país. El Tribunal le pregunta por lugares habilitados en la base aérea Maquehue para interrogar y detener a presos políticos refiriendo a ello.

A.25. Andrés Rigoberto Pacheco Cárdenas, (45 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 424 a fs. 424 vuelta (Tomo II) y de fs. 454 a fs. 454 vuelta (Tomo II).

En declaración judicial de fecha 15 de diciembre de 2004, rolante de **fs. 424 a fs. 424 vuelta (Tomo II)**, proclama en lo pertinente que se desempeñó en el grupo de aviación N° 3 de helicópteros en Temuco, desde 1972 a enero de 1974, con el cargo de comandante. El Tribunal le pregunta si hubo operativos aéreos conjunto con carabineros o personal del ejército, respondiendo que hubo varios operativos en conjuntos, los que eran solicitados por los comandantes de cada unidad. Es así como se efectuaron operativos con el regimiento La Concepción de Lautaro, Tucapel de Temuco y carabineros. Sin embargo, todas esas actividades las coordinaba el comandante Benjamín Fernández, al que dejó a cargo cuando se integró al “CAJSI” o Comando Acción Conjunta Jurisdiccional Situación Interna. Agrega que no integró el “SIR”. Que en representación de la fuerza aérea estaba el mayor Puebla, jefe del departamento de inteligencia de la Base Aérea Maquehue; en representación del ejército estaba Nelson Ubilla y en representación de carabineros estaba Gonzalo Arias González. Se le interroga en base a otros antecedentes.

En declaración judicial de fecha 22 de septiembre de 2006, rolante de **fs. 454 a fs. 454 Vuelta (Tomo II)**, el Tribunal le pregunta si recuerda los operativos conjuntos que realizó la fuerza aérea con carabineros en la novena región, a lo que responde: hubo noticias de una marcha que iban a realizar los partidarios del gobierno de la Unidad Popular, por lo que se acordó al interior del “CAJSI” realizar un operativo conjunto para esa eventualidad. También carabineros y el ejército solicitaban helicópteros a la fuerza aérea por intermedio de la Intendencia, para realizar distintos operativos, como es el caso de la operación que culminó con la detención del “Comandante Pepe” en Liquiñe. Además, carabineros solicitaba algunas veces helicópteros para efectuar traslado

de detenidos desde puntos lejanos a Temuco, como el sector cordillerano. En esos vuelos sólo iba personal de la fuerza aérea. El destino final del viaje con detenidos siempre fue la Base Aérea Maquehue, luego de lo cual los detenidos eran distribuidos a la unidad que los requería. El tipo de helicóptero utilizado para estos movimientos era el UH - 1H, cuya tripulación la formaban un piloto, un copiloto y uno o dos mecánicos tripulantes. La capacidad de pasajeros era de diez o doce personas. En total en la base había diez helicópteros, de los cuales cinco o seis estaban operativos permanentemente. Se le pregunta por otros antecedentes. Y en lo pertinente dice que sólo en Puerto Montt había una Fiscalía de Aviación, cuyo fiscal investigaba los casos en que ocurrieran accidentes aéreos. En Temuco el Fiscal Militar era a quien le correspondía ver todos los demás casos que ocurrían tanto en la Base Aérea Maquehue como en el resto de las unidades, derivando a ese Tribunal los detenidos. También, algunos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Carabineros. Recuerda que se efectuaron vuelos para buscar detenidos desde Vilcún y Liquiñe. No recuerda que se efectuara un vuelo a Pucón, pero no lo descarta porque era común que carabineros solicitara ayuda para el traslado de detenidos desde las unidades pequeñas.

A.26. Juan Luis Díaz Cortés, (22 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 476 a fs. 477 (Tomo II), de fs.486 a fs. 488 (Tomo II), de fs. 517 a fs. 518 (Tomo II), de fs. 666 (Tomo II), de fs. 2.101 a fs. 2.102 (Tomo VI) y de fs. 4.141 a fs. 4.144 (Tomo XII).

En declaración extrajudicial de fecha 13 de abril de 2011, rolante de **fs. 476 a fs. 477 (Tomo II)**, refiere para el año 1973 tenía veintidós años, vivía en la casa de sus padres en la localidad de Curarrehue, era soltero, simpatizante del Gobierno de Salvador Allende, por tanto, era una persona conocidamente de izquierda. Con lo ocurrido el once de septiembre de ese año, y a raíz de sus ideales políticos y sociales fue detenido en unas oportunidades por personal de carabineros del retén de Curarrehue, quienes lo trasladaron hasta Temuco. La primera detención ocurrió el día trece de septiembre de 1973, cuando concurrió a presentarse previa citación a carabineros, los que de inmediato lo trasladaron hasta la segunda Comisaría de Carabineros de Temuco, junto a Luís Cid, Renato Santana, ambos trabajadores de "CONAF", y al jefe de esa repartición cuyo nombre no recuerda y durante la mañana del día siguiente lo trasladan a la base

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

aérea Maquehue, para luego dejarlo en libertad. La segunda detención fue el dieciséis de septiembre de ese mismo año; esa vez lo detuvieron desde la casa de sus padres en horas de la mañana. En esa oportunidad lo detuvieron junto a René Esteban, su hermano, y los llevaron a Temuco, pero esta vez directamente al Regimiento de Infantería de Montaña N° 8 Tucapel. En ese lugar, los juntaron con otros detenidos dentro de los cuales estaba Ricardo Aguayo, hermano de una de las víctimas de la presente causa Héctor Aguayo Olavarría, quien también estaba en ese lugar, el cual recuerda como una cuadra de batallón. Afirma que conversó con Héctor, apodado "El Chachi", quien le señaló directamente que sabía que lo iban a matar los militares de ese lugar, pues ya se lo habían dicho. Recuerda que Héctor Aguayo le presentó a unos jóvenes hermanos que habían sido detenidos junto a él, cuyos apellidos eran Schmidt Arriagada, quienes eran de Villarrica. Que en horas de la tarde les ordenan formarse en el patio del regimiento, en el cual se encontraba un oficial, quien leyó un documento en el cual nombró a algunos de los detenidos, entre esos su hermano René Díaz Cortes a Héctor Aguayo Olavarría y a los hermanos Schmidt, entre los que recuerda. Esos prisioneros fueron llevados hasta la guardia del regimiento, lugar donde, luego de un par de horas, solamente sacaron a su hermano, quien se reunió con él y los demás detenidos, quedando en el calabozo el resto de los prisioneros a quienes nunca más volvieron a ver. Posteriormente, fueron llevados hasta la cárcel pública de Temuco, quedando en libertad, según recuerda, el día dieciocho o diecinueve de septiembre de ese año. Que el oficial que apartó a los detenidos, dentro de los cuales estaban Héctor Aguayo, los hermanos Schmidt y su hermano, era una persona de aproximadamente veinticinco años, un metro setenta de altura, de contextura delgada, pelo rubio, ojos de color azul, piel blanca y ocupaba bigote. Suma que fue el abogado Alfonso Podlech Michaud quien firmó como fiscal su orden de libertad y la de su hermano, lo anterior fue porque pudo ver dicho documento, recordando la firma de ese señor.

En declaración judicial de fecha 7 de junio de 2011, rolante **de fs. 486 a fs. 488 (Tomo II)**, ratifica su declaración extrajudicial de fs. 476 a fs. 477 y en lo pertinente complementa sus dichos en el sentido de aclarar que se encontró en dos oportunidades con Héctor Aguayo cuando fue detenido, siendo la primera de ellas en la comisaría de Pucón. En ese lugar pudo constatar que Héctor había sido torturado, pues presentaba evidentes signos de maltrato físico. Después se

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

encontraron en el regimiento Tucapel. No recuerda si fueron trasladados juntos o por separado, por eso tiene la impresión de haberlo visto dos veces mientras estuvo cautivo. El grupo de carabineros que lo detuvo en las dos oportunidades en Curarrehue pertenecía a un destacamento que había llegado hace poco a esa comuna, no reconociendo a ninguno de ellos como pertenecientes a la dotación permanente. Recuerda que un capitán de nombre Juan, llegó junto con ellos y era quien daba las órdenes para detener personas. Que en la segunda detención fue trasladado desde Curarrehue a Pucón, y de allí hasta el regimiento Tucapel. Estuvo una noche en ese lugar junto a los ya nombrados más Manuel Humaña, su hermano René Esteban Díaz y otras personas cuyos nombres no recuerda. En aquella oportunidad fueron trasladados en una camioneta de un particular cuyo nombre es Clorindo Mena. En el regimiento fueron mantenidos en una cuadra cercana a la guardia, custodiados por conscriptos. Respecto del oficial que leyó el listado de detenidos entre los que figuraban los hermanos Schmidt y Héctor Aguayo, recuerda que era rubio, de ojos azules y usaba bigote. Al día siguiente fueron trasladados a la cárcel. Dos días más tarde su hermano y él fueron liberados. Héctor Aguayo y los hermanos Schmidt no llegaron a la cárcel junto con ellos e ignora que sucedió con ellos, pues fueron apartados del grupo en el regimiento. Respecto de las demás personas que aparecen como víctimas en autos, sólo recuerda los nombres de los hermanos Schmidt y de Elías González, pues fue el propio Héctor Aguayo quien se los presentó mientras estuvieron detenidos en el regimiento.

En declaración judicial de fecha 20 de mayo de 1991, rolante de **fs. 517 a fs. 518 (Tomo II)**, replica que, en el mes de septiembre de 1973, fue detenido por carabineros de Curarrehue, llevado hasta Pucón, y desde ahí llevado hasta el regimiento Tucapel de Temuco. La primera vez fueron cuatro personas y la segunda detención iban más personas, el profesor Humaña y dos profesores más, tres funcionarios de "CONAF", él y su hermano Esteban Díaz Cortés; los transportaron en una camioneta de propiedad de Cloro Mena, los llevó personal de carabineros hasta la subcomisaria de Pucón y desde allí los llevaron al regimiento Tucapel de Temuco. En ese lugar se encontraron con los hermanos Schmidt Arriagada y Héctor Aguayo. Recuerda que les contaron que ellos eran un grupo de seis muchachos entre quince a dieciocho años y decidieron arrancar a Argentina, pero como algunos de ellos eran muy jóvenes, se pusieron a llorar por

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

la mamá y tuvieron que regresar. Rememora que Aguayo dijo que venían por Caburgua cuando fueron detenidos por carabineros. Que efectivamente después de unos días llamaron a diez personas, entre las cuales se encontraban los hermanos Schmidt, Héctor Aguayo y su hermano Esteban Díaz, los llevaron a otras dependencias; los nueve restantes nunca más regresaron al regimiento y no los volvieron a ver. Su hermano regresó casi inmediatamente, ya que al pasarles lista lo dejaron inmediatamente. Posteriormente, cuando fue llevado a la cárcel de Temuco, encontró a otro joven conocido como Ricardo Aguayo y le comentó lo sucedido con su hermano, manifestando que no lo había visto. Después ya no volvió a verlos, porque junto a su hermano fueron puestos en libertad el dieciséis de septiembre de ese año y nunca más fueron detenidos. Quedó con la obligación de presentarse a firmar todas las mañanas en el cuartel de carabineros de Curarrehue. Que solo vio una vez a esos jóvenes ya que el mismo día que llegó, los llamaron y no los volvieron a ver. Ignora que sucedió con ellos, solo existen comentarios de que fueron fusilados.

En declaración judicial de fecha 7 de mayo de 2012, rolante de **fs. 666 (Tomo II)**, ratifica su declaración de fs. 517 a fs. 518, agregando en lo adecuado que la segunda vez que fue detenido se topó con los hermanos Arriagada y los demás jóvenes que le presentó Héctor Aguayo.

En declaración judicial de fecha 18 de junio de 2015, rolante de **fs. 2.101 a fs. 2.102 (Tomo VI)**, viene en complementar sus dichos en el sentido de que fue detenido la primera vez entre el doce y catorce de septiembre de 1973. Sus aprehensores fueron carabineros de Curarrehue, siendo trasladado junto a Luis Cid, Renato Santana y el jefe de "CONAF" de esa localidad, que era de apellido Tapia. Recuerda que pasaron a la comisaría de Pucón donde los bajaron a todos e ingresaron a los calabozos. Allí estuvieron por lo menos un par de horas. De pronto reconoció de entre los detenidos a Héctor Aguayo Olavarría, alias "Chachi", a quien conocía desde que era un niño. Adiciona que este se veía muy maltratado físicamente, presentaba un testículo inflamado y tenía rapado el pelo en la parte superior de la cabeza. Que el "Chachi" le dijo que había sido detenido camino de Caburgua junto a otras personas con quienes pretendía huir hacia la Argentina, pero que en el trayecto uno de ellos se había arrepentido y se había puesto a llorar, por lo que decidieron regresar a Villarrica. En eso fueron interceptados por una patrulla que los detuvo, que habían sido interrogados respecto de la posesión

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

de armas y el lugar donde las tenían escondidas, al tiempo que los sometieron a golpizas interminables. Que quienes venían de Curarrehue fueron nuevamente subidos un vehículo, no recuerda cual, y llevados a la segunda Comisaría de Temuco, donde pasaron la noche. Que Aguayo y los demás quedaron en Pucón. La segunda vez que vio al “Chachi” fue el día diecisiete de septiembre, cuando fueron nuevamente detenidos en Curarrehue y llevados al regimiento Tucapel de Temuco. Aguayo y otras personas estaban en esa oportunidad en la unidad militar. Recuerda que este se le acercó y conversaron nuevamente. A su parecer estaba con el pelo completamente rapado. Allí le presentó a unos jóvenes, dos de apellido Schmidt y dos de apellido González. El “Chachi” le dijo que sabía que los iban a matar porque alguno de los militares se lo había dicho. Que tenía mucho temor. Después fueron separados en grupos y en filas, quedando el “Chachi” en una fila junto a sus compañeros y a su hermano René Díaz; en tanto que él quedó en otra. Que de la fila del “Chachi” solo regresó su hermano, junto a quien después fueron llevados a la cárcel, al igual que Santana, Humaña y los demás que habían llegado de Curarrehue. Al “Chachi” y a sus amigos no los volvió a ver.

En declaración de fecha 19 de junio de 2015, rolante de **fs. 4.141 a fs. 4.144, (Tomo XII)**, insiste en lo pertinente que en 1973 vivía en Curarrehue junto a sus padres y sus hermanos, que fue detenido en dos oportunidades, una de ella fue el día 13 de septiembre de 1973 por carabineros, quienes llegaron hasta su domicilio, llevándolo al retén, donde estaban ya detenidos Renato Santana Dubreuil, Luis Cid Hernández y Benito Tapia. En el retén estuvieron en la guardia, lugar en el que había un teniente de apellido Figueroa Nieto, quién ordenó que fueran llevados a Temuco. Los subieron a una camioneta de propiedad de un civil de nombre Clorindo Mena y emprendieron el viaje. Pasaron a la Comisaría de Pucón, donde los ingresaron a los calabozos. Allí estuvieron por lo menos un par de horas. Reconociendo de entre los detenidos a Héctor Aguayo Olavarría, alias “Chachi”, a quien conocía desde que era un niño. Adiciona que este se veía muy maltratado físicamente, presentaba un testículo inflamado y tenía rapado el pelo en la parte superior de la cabeza. El “Chachi” le dijo que había sido detenido camino de Caburgua junto a otras personas con quienes pretendía huir hacia Argentina, pero que en el trayecto uno de ellos se había arrepentido y se había puesto a llorar, por lo que decidieron regresar a Villarrica. En eso fueron interceptados por una patrulla que los detuvo, que habían sido interrogados

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

respecto de la posesión de armas y el lugar donde las tenían escondidas, al tiempo que los sometieron a golpizas interminables. Los que iban de Curarrehue fueron nuevamente subidos a un vehículo, no recuerda cual, y llevados a la segunda Comisaría de Temuco, donde pasaron la noche. Replica que Aguayo y los demás quedaron en Pucón, continua relatado lo que le aconteció y en lo adecuado que el 17 de septiembre de 1973, cuando fue nuevamente detenido por carabineros, esa vez junto a su hermano René Díaz Cortez y los profesores Humaña, Leal, Salazar, Saravia y otros más cuyos nombres no recuerda, fueron trasladados a su parecer en un vehículo particular y llegaron ese mismo día al regimiento Tucapel del Temuco, donde fueron ingresados a un gimnasio en el que había mucha gente. Esa fue la segunda vez que vio al “Chachi” Aguayo, quien estaba junto a otras personas en la unidad militar antes señalada. Recuerda que se le acercó y conversaron nuevamente. A su parecer esta con el pelo completamente rapado. Allí le presentó a unos jóvenes, dos de apellido Schmidt y dos de apellido González. El “Chachi” le dijo que sabía que los iban a matar porque alguno de los militares se lo había dicho. Que tenía mucho temor. Después fueron separados en grupos y en filas, quedando el “Chachi” en una fila junto a sus compañeros y a su hermano René Díaz; en tanto que ellos quedaron en otra fila. De la fila del “Chachi” solo regresó su hermano junto a quién después fueron llevados a la cárcel al igual que Santana, Humaña y los demás que llegaron de Curarrehue. Al “Chachi” y a sus amigos no los volvió a ver. Continúa su relato en relación con lo que le sucedió.

A.27. Manuel Antonio Humaña Jiménez (41 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 478 a fs. 479 (Tomo II), de fs. 501 a fs. 506 (Tomo II), de fs. 559 (Tomo II) y de fs. 3.854 a fs. 3.857 (Tomo XI).

En declaración extrajudicial de fecha 15 de abril de 2011, rolante de **fs. 478 a fs. 479 (Tomo II)**, afinsa que para el año 1973, tenía cuarenta y un años, era casado y se desempeñaba como director del Colegio N° 17 de Curarrehue. Y en lo pertinente dice que fue detenido el 17 de septiembre de 1973, ocasión en que tuvo que presentarse junto a los profesores de apellidos Salazar, Leal y Renato Saravia, en dependencias del retén de carabineros de Curarrehue. Que ese mismo día, los trasladaron en primera instancia hasta Pucón en un Jeep de la “CONAF”, recuerda que junto con ellos iban otros detenidos dentro de los cuales recuerda a Renato Santana, Luis Cid y el jefe de ambos cuya identidad no

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

recuerda; también iban los hermanos Esteban Díaz y Luis Díaz. Una vez en dependencias del cuartel de carabineros de Pucón, le consultó al capitán de carabineros de apellido Letelier, a quien previamente conocía, sobre el motivo de la detención y éste le manifestó que ignoraba el motivo y que en esa unidad no había ningún documento que ordenara la detención. Recuerda que en esa unidad policial se unió a ellos otro detenido a quién no conocía, recordando únicamente que su apellido era Matta. Posteriormente los trasladaron hasta Temuco, específicamente hasta el regimiento de Infantería N°8 Tucapel de Temuco, lugar donde después de requerirles las cédulas de identidad y registrarlos, procedieron a ingresarlos a un gimnasio del regimiento, lugar donde había muchas personas detenidas, reconociendo entre ellas a Héctor Aguayo Olavarría, quien también había sido su alumno en Curarrehue y a un señor de apellido Rachell, quien trabajaba en la Tesorería de la comuna de Pucón. Recuerda que permanecieron en ese lugar hasta las 18:30 horas, hora en que un militar con el grado de capitán, y cuya identidad desconoce, los ordenó que se formaran en el patio del regimiento, lugar donde ese militar nombró a diez personas dentro las cuales estaban Esteban Díaz y Héctor Aguayo, a quienes apartaron de ellos y se las llevaron a un lugar que desconoce. Al resto de los detenidos, los ingresaron nuevamente al gimnasio, recordando que cerca de las 22:00 horas traen de vuelta a Esteban Díaz, quien les comentó que uno de los militares le dijo que él no tenía nada que ver con el resto del grupo y lo devolvió al gimnasio. Recuerda que no hizo mayores comentarios. Posteriormente, ya cerca de la media noche los trasladaron a la Cárcel Pública de Temuco, quedando en su caso particular en libertad el día 05 de octubre de ese año. Agrega que mientras estuvo en el gimnasio logró conversar con Héctor Aguayo, quien estaba muy asustado y le comentó que había sido detenido el día anterior en el sector de Caburgua, cerca del río Turbio por una patrulla de militares, los cuales los habían llevado hasta el regimiento. Respecto a lo anterior, esa fue la última vez que vio a Héctor Aguayo. Suma que cinco días previos a su libertad tuvo que declarar ante el Fiscal Alfonso Podlech Michaud, quien lo interrogó respecto de sus actividades políticas y sociales, manifestándole que no se preocupara, ya que recuperaría su libertad en cuanto terminara con unos papeles. Sigue relatando lo que le aconteció.

En declaración judicial de fecha 8 de febrero de 1991, rolante de **fs. 501 a fs. 506 (Tomo II)**, en lo atinente replica que fue detenido por carabineros en

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Curarrehue y comunicado por el teniente Nieto Figueroa que debía ser llevado a Temuco, porque se había recibido instrucciones desde esa ciudad. Que había nueve personas en total, entre ellos Renato Saravia, Baldomero Salazar y otro de apellido Leal, Renato Santana y un tal "Luchín" y dos exalumnos suyos, Luis y Esteban Díaz Cortez. A todos les pidieron el carnet y le colocaron activista extremista con letras rojas y después se los devolvían. Aproximadamente a las 10 de la mañana llegó el vehículo, era un jeep de "CONAF" conducido por Poblete, funcionario de "CONAF", acompañado por un militar, al parecer conscripto, ya que no le vio grado. Los llevaron hasta la unidad de carabineros en Pucón y posteriormente al regimiento Tucapel de Temuco. Allí pasaron por la guardia, los identificaron y quitaron la cédula de identidad y los llevaron a una especie de gimnasio cerrado, donde había aproximadamente ciento cincuenta o doscientas personas más. Al primero que reconoció fue a su alumno Héctor Domingo Aguayo Olavarría, quién al verlo se acercó y lo abrazó, poniéndose a llorar; le preguntó qué estaba haciendo allí y le dijo que el día antes, en circunstancias que iba a Curarrehue con un grupo de amigos, no dijo cuántos, fueron detenidos en el sector El Turbio de Pucón y que los habían llevado al regimiento. No recuerda si especificó quién lo había detenido, ni quienes eran sus compañeros de detención y por las circunstancias que estaban viviendo no se percató si él posteriormente se juntaba con otros jóvenes que hubiesen sido sus compañeros a los que había aludido. Recuerda que un sargento de ejército entró al gimnasio y conversó con muchas personas, les hacía preguntas y aconsejaba que dijeran la verdad que a nadie castigaron en esos momentos. Estuvieron allí hasta las dieciocho horas, cuando ingresó un capitán de ejército, de quién no sabe su identidad, les ordenó que se formaran y nombró a diez personas, las cuales debían dar un paso al frente, entre los nombrados estaban Héctor Aguayo y Esteban Díaz; los sacaron en dirección a la guardia y aproximadamente a las 20:30 horas regresó solo Esteban Díaz, ninguno de los otros nueve regresó al gimnasio. Que según versiones de Díaz, los interrogaban uno a uno y cuando le tocó el turno a él, no lo interrogaron y lo mandaron de vuelta al gimnasio; no sabe que sucedió con las nueve personas restantes, lo que sí tiene seguro es que hasta las veintidós horas, en que fueron conducidos a la cárcel pública, no regresaron esas personas al gimnasio. Fueron llevados en camiones y buses del regimiento hasta la cárcel. En la cárcel se encontró con un hermano de Héctor Aguayo, llamado Ricardo y le dijo

que su hermano estaba en el regimiento Tucapel y que allí había quedado al ser ellos trasladados hasta la cárcel. Que permaneció en la cárcel diecinueve días; a los doce días llamaron voluntarios a declarar y reunió ciento veinte personas, los mismos que habían llegado detenidos desde Curarrehue, y se presentaron uno a uno frente a una comisión interrogadora compuesta por oficiales de ejército, no pudiendo distinguir grados, porque usaban el traje mimetizado; recuerda que a cargo del interrogatorio estaba un capitán, porque así lo nombraron sus compañeros que estaban de civil, como igualmente el jefe a cargo de los interrogatorios que era un señor de apellido Podlech de Temuco, que tenía el cargo de Fiscal Militar. Prosigue relatando lo que le acaeció y en lo adecuado que hasta su casa llegó en el mes de noviembre de 1973 el padre de Héctor Aguayo a requerir datos sobre su hijo ya que no supieron más de él desde que fue detenido y llamado en el regimiento Tucapel junto a ocho personas, de las cuales no se sabe nada hasta la fecha.

En declaración judicial de fecha 25 de noviembre de 2011, rolante de **fs. 559 (Tomo II)**, ratifica su declaración extrajudicial de fs. 478 a fs. 480 y su declaración judicial de fs. 501 a fs. 506. Agrega que durante su segunda detención en la tenencia de Curarrehue fue torturado en las caballerizas de esa unidad narrando lo sucedido y en lo pertinente que, respecto de Héctor Aguayo Olavarría, sólo sabe lo que narró en las declaraciones que prestó anteriormente.

En declaración extrajudicial, de fecha 27 de noviembre de 2013, rolante de **fs. 3.854 a fs. 3.857 (Tomo XI)**, replica sus dichos que para el año 1973 tenía 42 años, era militante del Partido Demócrata Cristiano y director de una escuela en Curarrehue. En lo pertinente relata que fue detenido el día 17 de septiembre de 1973 en su domicilio en Curarrehue, por dos carabineros del retén Curarrehue. Lo llevaron detenido junto a los profesores Saravia, Salazar y Leal, hasta el mencionado retén donde se les informó que por un bando militar quedaban en calidad de detenidos y debían ser puestos a disposición de la Fiscalía Militar de Temuco. Fueron trasladados hasta la Tenencia de Carabineros de Pucón, para posteriormente continuar viaje a Temuco al Regimiento de Infantería de Temuco, al cual llegaron a eso de las 13:00 o 14:00 horas. Cuando pasaron por la Tenencia de Carabineros de Pucón, solicitó hablar con el capitán Bustos Letelier, a quien conocía y le comentó lo que le estaba pasando, respondiéndole que éste que no estaba en conocimiento del bando militar u orden que disponía su detención,

limitándose a decir que debía quedarse tranquilo. Agrega que junto a los profesores iban también detenidos unos funcionarios de “CONAF” y un señor de apellido Matta. Al llegar a Temuco les quitaron las cédulas de identidad y los ingresaron a un gimnasio, el cual estaba lleno de personas detenidas, recordando que encontró a un alumno y vecino de Curarrehue de nombre Héctor Aguayo Olavarría, a quién conocía por el apodo del “Chachi”, quien al verlo le comentó que había sido detenido por una patrulla de carabineros cuando junto a unos amigos iba camino a Caburgua o Curarrehue; no recuerda bien, pero el caso es que lloraba cuando le contaba esa situación, dándose cuenta que estaba muy asustado, por lo que trató de calmarlo. Posteriormente, a eso de las 18:00 horas, un oficial con el grado de capitán, les ordenó a todos los detenidos salir del gimnasio y les pidió que se formaran. Ese militar sacó una lista y llamó a diez personas dentro de las cuales estaba “El Chachi”, Esteban Díaz Cortés y un señor de apellido González; a ellos los separaron del grupo y cerca de las 22:00 horas regresa al gimnasio solamente Esteban, quién les comentó que al resto de los detenidos los habían ingresado a una dependencia y a él le habían ordenado regresar, perdiendo todo tipo de contacto con las demás personas. Que posteriormente a eso de las 00:00 horas fue trasladado, junto a los profesores antes mencionados y otros detenidos, hasta la cárcel pública de Temuco, donde permaneció cerca de 19 días. Señala que la última semana que estuvo en la cárcel, escuchó que el Fiscal Militar necesitaba diez voluntarios para declarar, esa situación se la informó a sus colegas, por lo que se inscribieron en el listado; es así que al día siguiente los comenzaron a llamar y fue presentado ante el Fiscal Militar Alfonso Podlech Michaud, quien le consultó su filiación política y otros antecedentes, recordando que le manifestó que nunca hubo orden en su contra y le dio a entender que su detención y la de los demás profesores fue por iniciativa propia de los carabineros de Curarrehue, representándole su molestia por ese hecho, ya que según el fiscal, ellos no debían estar detenidos, declarándole en ese momento que quedaría en libertad, situación que se llevó a cabo el día 5 de octubre de 1973. Refiere que el 7 de octubre de 1973, nuevamente fue detenido por una patrulla de la Fuerza Aérea de Chile de dotación de la Base Aérea Maquehue, y junto a los mismos profesores fue trasladado hasta el Retén de carabineros de Curarrehue relatando lo acontecido en esa oportunidad.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

A.28. Carlos Reinaldo Barra Matamala (31 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 516 (Tomo II), de fs. 750 a fs. 751 (Tomo III), de fs. 805 (Tomo III) y de 921 a fs. 922 (Tomo III).

En declaración judicial de fecha 11 de abril de 1991, rolante de **fs. 515 (Tomo II)**, indica en lo pertinente que nunca prestó colaboración a carabineros o militares para proceder a la detención de personas en ese sector. No es efectivo lo expuesto por Ricardo Aguayo en el sentido que hubiese facilitado su camioneta con carrocería térmica, a carabineros para que detuviese en sector El Turbio a un grupo de jóvenes del partido socialista. A ninguno de los nombrados los conoce y recuerda claramente que en Pucón hubo detención de personas después del 11 de septiembre, pero todas ellas fueron puestas en libertad posteriormente, ya que se les vio nuevamente en Pucón o se supo que estaban viviendo en Argentina. Insiste que nunca carabineros u otras fuerzas armadas le solicitaron cooperación en el sentido de facilitar su vehículo, que era el único que tenía en esos años. Tampoco supo de detenciones masivas practicadas en la zona por efectivos de carabineros u otras fuerzas armadas.

En declaración judicial de fecha 11 de abril de 1991, rolante de **fs. 516 (Tomo II)**, viene en ampliar su declaración en lo referente que nunca ha pertenecido a partido político, ni ha sido simpatizante de ningún.

En declaración extrajudicial de fecha 8 de mayo de 2012, rolante de **fs. 750 a fs. 751 (Tomo III)**, en lo adecuado dice que por aquellos años se identificaba con “la centro derecha”, no militaba en ningún partido político, pero pertenecía al grupo Patria y Libertad. Tenía un camión Ford modelo F-350, color rojo, año 1960 y su carrocería la tenía cerrada por material metálico. Ese vehículo, lo utilizaba para llevar la carne desde Temuco, específicamente desde la planta “SOCOAGRO”. Respecto a Hugo y Elías González Ortega, Juan y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa, Raúl Figueroa Burkhardt y Héctor Aguayo Olavarría, apunta no conocerlas, pero refiere que se comentaba en Pucón que era frecuente la detención de personas, las cuales eran llevadas a las unidades militares de la ciudad de Temuco. Con relación a los carabineros de la subcomisaría de Pucón, recuerda al capitán Luis Bustos Letelier, jefe de esa unidad policial. Expone que este oficial en una oportunidad le solicitó que trasladara a un grupo de detenidos en su camión hacia el Regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco. Recordando que se estacionó en las afueras de la

subcomisaria donde hicieron subir a los detenidos, dice que no se bajó del camión, por eso no supo las identidades de estas personas. Esto ocurrió en los días posteriores del golpe de Estado y en esa oportunidad lo acompañó uno o dos carabineros, no recuerda muy bien, pero tiene claro que una vez que llegaron a Temuco se estacionó fuera del Regimiento Tucapel, lugar donde se bajaron los detenidos junto a los carabineros. Que esta fue la única vez que se le solicitó el traslado de detenidos en su camión, negando cualquier otra situación de esa naturaleza, como también que facilitara su vehículo a carabineros. Que nunca integró grupo alguno de personas que efectuaran detenciones, ni cualquier otra actividad relacionada con personas de tendencia política contraria a la del Gobierno Militar. Recordando que Alberto Ulloa Salazar y Jorge Higuera Betanzo, eran otras de las personas que facilitaban sus vehículos a carabineros de Pucón. Menciona integrantes de Patria y Libertad.

En declaración judicial de fecha 25 de septiembre de 2012, rolante de **fs. 805 (Tomo III)**, ratifica su declaración que rola de fs. 515 a fs. 516, y la de fs. 750 a fs. 751. Insiste en no haber pertenecido a ningún partido político ni grupos relacionados con ellos. Y en lo atinente que respecto a traslado de personas detenidas desde carabineros de Pucón hasta el regimiento Tucapel, recuerda que fue la única vez que cooperó con el traslado de detenidos y cuya fecha exacta no recuerda, pero que fue en septiembre de 1973. No supo a qué personas trasladó en su camión, ya que el carabinero que se sentó a su lado le dijo que sólo manejara. Una vez que dejaron a los detenidos en la guardia del regimiento no supo nada más de ellos. Suma no conocer a las víctimas de autos ni a sus familiares.

En declaración judicial de fecha 25 de septiembre de 2012, rolante de **fs. 921 a fs. 922 (Tomo III)**, ratifica su declaración judicial de fs. 785. El Tribunal le lee las declaraciones que rola de fs. 746 a fs. 747 y de fs. 748 a fs. 749, depone que: respecto al trato que tenía con el subcomisario de carabineros de Villarrica, tenían relación, porque era miembro del directorio de la cámara de comercio de esta localidad. En lo pertinente dice que nunca conoció a familiares de las personas que se le mencionan y que estarían desaparecidas desde el mes de septiembre de 1973. Reitera que concurrió a su domicilio un carabinero, cuyo nombre no recuerda, para pedirle que cooperara con el traslado de unos detenidos desde la subcomisaria de Pucón, hasta el regimiento Tucapel de Temuco. Aceptó

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

y fueron hasta la unidad policial, se estacionó fuera de la subcomisaria y una vez que las personas estuvieron arriba de su camioneta, se dirigieron hasta el regimiento Tucapel de Temuco. En ese lugar se estacionó afuera y esperó a que los bajaran. Que nunca supo quiénes eran los detenidos. Todo lo anterior ocurrió en una fecha posterior al 11 de septiembre de 1973, no recuerda fecha exacta, pero sí que fue en ese mes. La camioneta era totalmente cerrada, por lo que era imposible ver quiénes eran los detenidos. No puede precisar cuántas personas eran. Todo el trámite de subir a los detenidos y bajarlos, fue realizado por carabineros. No supo de supuestas ejecuciones en el puente Rodrigo de Bastidas de Villarrica.

A.29. Lidia de las Mercedes Carter Leiva (16 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 538 (Tomo II), de fs. 539 a fs. 540 (Tomo II), de fs. 1.179 a fs. 1.180 (Tomo IV) y de fs. 1.201 a fs. 1.202 (Tomo IV).

En declaración judicial de fecha 24 de agosto de 1990, rolante de **fs. 538 (Tomo II)**, ratifica la denuncia formulada.

En declaración judicial de fecha 01 de octubre de 1990, rolante de **fs. 539 a fs. 540 (Tomo II)**, ratifica la denuncia de su cuñado Alejandro Escobar Vásquez y en lo pertinente dice que para el día 11 de septiembre de 1973, vivía con sus suegros en Villarrica, recuerda que el día 13 del mismo mes y año, su cuñado Alejandro junto con otros jóvenes de su misma edad e ideología, que pertenecían al Partido Socialista, manifestaron su deseo de ausentarse del país en dirección a Argentina. Debido a que temían ser detenidos por militares o carabineros. Su suegra no quería que Alejandro saliera de la casa, pero ese día, todos partieron juntos desde Villarrica en dirección a Argentina. Su cuñado vestía sombrero negro, camisa blanca sin “polera, blue jeans”, chaquetón azul marino, botas de agua y todos sus documentos personales. Además de ropa para cambiarse. En cuanto a sus características físicas de estatura un metro sesenta, de contextura mediana a gruesa, pelo liso de color negro, dentadura completa y sana, dieciocho años a esa fecha, ninguna fractura, ningún tipo de cicatriz, como tampoco prótesis, ojos oscuros. Todos los antecedentes relacionados con la desaparición de su cuñado los obtuvo de parte de la hermana de Carlos y Ricardo Schmidt. Dice que su cuñado y los demás fueron detenidos cuando se dirigían a Argentina, fueron llevados a la subcomisaria de carabineros de Pucón desde donde desaparecieron, ya que nunca más se supo de ellos. Con relación a lo que

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

dice de los detenidos fueron llevados posteriormente al regimiento Tucapel de Temuco, no le consta, solo sabe que los llevaron a Pucón y eso se lo informó la señora Schmidt. Hace presente que después del 13 de septiembre de 1973 nunca tuvieron noticias de su cuñado, ninguna carta o indicio de vida.

En declaración extrajudicial sin fecha y rolante de **fs. 541 (Tomo II)**, arguye que es cuñada de Alejandro Escobar Vásquez, quien vivió toda su vida en Villarrica y Pucón junto a sus padres y hermanos, ya que nunca se casó. En el año 1973 este vivía en Villarrica junto a sus familiares, y ese mismo año ingresó a las Juventudes Socialistas de Villarrica, ya que en esa fecha tenía 18 años. Cuando llegó el pronunciamiento militar el 11 de septiembre de 1973, su cuñado junto a otros jóvenes de Villarrica fueron hasta Pucón con la intención de pasar a Argentina, sin volver a verlo con vida desde esa fecha. Cuando habían transcurrido varios meses escuchó comentarios de que varias personas habían sido detenidas en diferentes ciudades de la región, pero nunca escuchó el nombre de su cuñado entre ellas, por esa razón no realizó ningún tipo de trámite para ubicarlo o saber dónde se encontraba. Que transcurrido 17 años desde que Alejandro Escobar desapareció, comenzó a realizar trámites legales para ubicarlo, ya que por los comentarios que ha escuchado, piensa que puede haber sido detenido junto a otras personas y esté muerto. De ser así, desea junto a los familiares directos de él, saber dónde están sus restos y proceder a sepultarlo cristianamente y obtener y certificado de defunción al respecto. Aporta que: Alejandro Escobar Vásquez, chileno, nacido en Pucón el 11 de octubre de 1954, se ignora su número de cédula de identidad, pero tenía documento de Villarrica, domiciliado en esa ciudad, medía un metro sesenta de estatura, contextura gruesa, pelo negro liso, tez moreno pálido, dentadura blanca y pareja en la parte delantera, sin cicatrices ni fracturas en su cuerpo, tampoco tenía trabajos odontológicos. Las últimas ropas que usaba eran un sombrero negro, camisa blanca, "jeans", botas de goma color negro y un chaquetón azul, sus documentos de identidad y una cajetilla de cigarrillos "Ideal".

En declaración judicial de fecha 21 de junio de 2013, rolante de **fs. 1.201 a fs. 1.202 (Tomo IV)**, ratifica sus declaraciones de fs. 535 a fs. 541 y adiciona en lo eventual a sus dichos que tiene entendido que dos o tres jóvenes que fueron detenidos con su cuñado Alejandro Escobar Vásquez regresaron a Villarrica luego de ser liberados. Que la información de que Alejandro Escobar y sus amigos

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

fueron trasladados al regimiento Tucapel de Temuco la obtuvieron de la Vicaría de la Solidaridad, pero a ella no le consta. Ningún familiar de su cuñado hizo alguna gestión para buscarlo, pero ella sí lo hizo posteriormente. Recuerda haber ido junto con su cuñado Vicente Escobar a la Vicaría de la Solidaridad para tratar de encontrar antecedentes sobre su paradero. Que se rumoreó que su cuñado y sus amigos sintieron temor por lo que les pudiera suceder, ya que un socialista que trabajaba con ellos de nombre Carlos Lucas “se habría dado vuelta la chaqueta y presumían que los denunciaría ante las autoridades”. El Tribunal le lee las declaraciones extrajudiciales de Luis Robinson Bustos Letelier de fs. 58 a fs. 59 y de fs. 84 a fs. 84 vuelta. La deponente señala que las fechas que se indican como posibles para la detención de su cuñado y sus amigos, coincide con la época en que ellos salieron hacia Argentina. Recordando que este se llevó su documentación.

A.30. Juan Antonio Colihueque (42 años a la época de los hechos). **En declaración judicial** de fecha 5 de marzo de 1991, rolante de **fs. 543, (Tomo II)**, atestigua que el 11 de septiembre de 1973 fue llamado a presentarse a la unidad policial de Pucón, a cargo de un capitán cuyo nombre era Luis, no recuerda su apellido. Quedando con arresto domiciliario y el veintiséis del mismo mes fue llevado por una patrulla militar al regimiento Tucapel de Temuco, donde fue interrogado y permaneció junto a otros detenidos, todos adultos, ningún estudiante y finalmente fue puesto en libertad. Recuerda que un joven de apellido Gutiérrez, le comentó que permaneció detenido con un grupo de estudiantes de Pucón y Villarrica en el regimiento Tucapel, donde posteriormente fueron separados y nunca más supo de sus compañeros de detención, por lo que presumía que habían sido fusilados. Acota otras cosas.

A.31. Raúl Acevedo Hott (60 años a la época de los hechos). **En declaración judicial** de fecha 6 de marzo de 1991, rolante de **fs. 544 a fs. 545 (Tomo II)**, quien lo pertinente dice que alrededor del 15 de septiembre de 1973 fue notificado personalmente por el capitán de carabineros a cargo de la subcomisaría de Pucón, cuyo nombre no recuerda, de que estaba con arresto domiciliario y debía concurrir todos los días alrededor de las doce horas a la comisaría con el fin de firmar un libro, situación que se prolongó por espacio de dos meses. A fines de septiembre fue llevado con otras personas a la ciudad de Temuco, entre otros recuerda a Antonio Colihueque, llegaron al regimiento Tucapel, donde fueron

interrogados por un individuo de civil, no supo ni se enteró de su rango ni nombre; trasladándolos el mismo día a la cárcel pública de Temuco, donde estuvo por espacio de tres días. Las razones que se dio de su detención fueron entre otras, que era militante socialista, que había pertenecido a la "JAP". Continúa su relato y suma que los lugares en que estuvo detenido no vio, ni conoció a Alejandro Escobar Vásquez.

A.32. Luis Brunel Cid Hernández (24 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 573 a fs. 574 (Tomo II), de fs. 1.183 a fs. 1.185 (Tomo IV) y de fs. 1.205 a fs. 1.207 (Tomo IV).

En declaración extrajudicial de fecha 11 de octubre de 2011, rolante de **fs. 573 fs. 574 (Tomo II)**, esgrime que, en el mes de septiembre del año 1973, vivía en la localidad de Curarrehue, era funcionario de la Corporación Nacional Forestal, y en lo pertinente tenía veinticuatro años y era militante del Partido Socialista. Fue detenido en Curarrehue el día 12 de septiembre de 1973 por personal de carabineros que no pertenecían al retén de carabineros de Curarrehue. Una vez detenido, los carabineros lo hicieron abordar un vehículo en cuyo interior iban Luis Díaz, Renato Santana y Manuel Humaña. Recuerda que los llevaron en una primera instancia hasta la comisaría de Pucón, lugar donde los entregaron a efectivos militares del regimiento Tucapel de Temuco. Que una vez que quedaron a disposición de los militares, los hicieron subir a un camión militar junto a otros detenidos que había en Pucón, siendo todos trasladados hasta el Regimiento de Infantería N° 8 Tucapel de Temuco, llegando cerca de las dieciocho horas aproximadamente a ese recinto militar. En el regimiento, los militares los ubicaron en un patio, lugar donde los agruparon de a cuatro personas, para posteriormente hacerlos pasar por grupos al interior del gimnasio del regimiento. En ese lugar fueron sometidos a interrogatorios relacionados sobre la tenencia de armas o si sabían de la existencia de estas en los lugares donde vivían. Recuerda que al contestar las preguntas manifestaba que no tenía conocimiento sobre el tema, el oficial a cargo lo comenzó a torturar mediante golpes de puños y pies, incluso lo amenazó con una especie de daga la cual afirmó en el piso y lo hizo ubicar sobre ella sostenido de sus manos y pies. Relata lo que le aconteció y en cuanto a Hugo y Elías González Ortega, Juan Carlos y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa, Raúl Figueroa Burkhardt y Héctor Aguayo Olavarría, no recuerda haber visto a ninguno de ellos al interior tanto de la comisaria de

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

carabineros de Pucón como del regimiento Tucapel de Temuco. Que de ese grupo de personas solamente conocía a Héctor Aguayo y a los hermanos González. Con posterioridad se enteró de la muerte de Héctor Aguayo, por medio de comentarios de personas residentes en Curarrehue, quienes hacían referencia a que este joven había sido asesinado por personal militar del regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco, pero nunca se supo del paradero de su cuerpo.

En declaración judicial de fecha 22 de junio de 2013, rolante de **fs. 1.205 a fs. 1.207 (Tomo IV)**, ratifica parcialmente su declaración extrajudicial de fs. 573 a fs. 574. Añadiendo que fue detenido en dos oportunidades en Curarrehue y en lo tocante reitera que el 12 de septiembre fue su primera detención, pasando por la subcomisaria de Pucón y luego trasladado al regimiento Tucapel de Temuco, en este último lugar lo llevaron a la Fiscalía Militar donde le tomaron los datos y le retuvieron sus documentos luego de lo cual fue dejado en libertad. Recordando que andaba junto a Benito Tapia, Renato Santana y otras personas. La segunda vez que lo detienen fue el 17 de septiembre de 1973, cuando llegó a firmar al retén de Curarrehue. Carabineros de ese reten los trasladaron directamente al regimiento Tucapel de Temuco. Junto a él iban Renato Santana, Manuel Humaña, Benito Tapia, los hermanos René y Luis Díaz y Rubén Leal. En el regimiento fueron llevados a un gimnasio donde un oficial alto y que usaba bigote lo torturó detallando lo vivido en ese lugar. Suma a sus dichos que cuando ingresó al gimnasio del regimiento Tucapel pudo ver a Héctor Aguayo Olavarría, a quien le decían "el Chachi", quien era un joven de Curarrehue a quien conocía. Se acercó y le preguntó cómo estaba y qué hacía allí. Éste le dijo que había sido detenido junto con otros jóvenes con quienes había intentado cruzar la frontera hacia Argentina. Sin embargo, durante el viaje uno de ellos se desistió de huir y quiso regresar por lo que todos se volvieron, siendo detenidos por carabineros durante el trayecto. Le señaló también, que estaba muy maltratado y que apenas se podía tocar los genitales. Además, su cara y su cuerpo lo noto visiblemente hinchado, por lo que no era difícil pensar que había sido torturado. En un momento determinado Héctor Aguayo y René Díaz fueron sacados juntos del gimnasio, siendo esta la última vez que vio a Aguayo. A René Díaz lo volvió a ver en 1976, pero no conversaron sobre el tema. Ese mismo día fueron llevados a la cárcel de Temuco, donde permanecieron hasta el día 27 de septiembre de 1973. Fue liberado junto a Renato Santana.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

A.33. Renato Ariel Saravia Flores (22 años a la época de los hechos).

Quien declaró de fs. 575 a fs. 577 (Tomo II) y de fs. 690 a fs. 691 (Tomo II).

En declaración extrajudicial de fecha 12 de octubre de 2011, rolante de **fs. 575 a fs. 577 (Tomo II)**, en lo pertinente declara que para el año 1973 vivía en la localidad de Curarrehue, tenía 22 años y se desempeñaba como profesor de enseñanza básica en la Escuela N° 17 de esa localidad. El director de ese establecimiento era Manuel Humaña Jiménez. Que nunca ha militado en partido político, pero para el año 1973 era simpatizante del gobierno del presidente Salvador Allende. Que fue detenido el día 11 de septiembre por carabineros del retén de Curarrehue quedando bajo arresto domiciliario, con firma diaria. El día 17 de septiembre, mientras realizaba ese trámite un carabinero le comunicó que lo trasladarían hasta Temuco. Lo subieron a una camioneta, que según recuerda pertenecía a la Corporación Nacional Forestal, en ese vehículo también iban Manuel Humaña Jiménez, Baldomero Salazar, Rubén Leal Riquelme, los hermanos René y Luis Díaz Cortez y los funcionarios de "CONAF" de apellidos Santana y Cid. La camioneta iba a cargo del carabinero Orlando Reyes Fernández, quien se acompañaba de dos carabineros más, siendo uno de ellos Castilla. En horas de la tarde llegaron a Temuco, dejándolos en dependencias del Regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco. Personal militar los llevó hasta el gimnasio de ese recinto militar; donde había cerca de cien personas, los dividieron en grupos, no recordando quienes eran los integrantes de su grupo. Les dieron comida y los mantuvieron hasta cerca de las veinte horas, para posteriormente trasladarlo junto al grupo con que había llegado hasta dependencias de la cárcel pública de Temuco, no pudiendo precisar cuánto tiempo. Cuando salió de la cárcel pública de Temuco, junto con una parte del grupo con que había llegado, fueron llevados por personal militar nuevamente hasta el regimiento Tucapel, hasta la oficina de fiscal militar Podlech, quien de manera prepotente y grosera les manifestó que "no nos metiéramos más en problemas y que volviéramos a nuestros lugares de origen". Quien, al momento de entregarles las cédulas de identidad, las rayó con un lápiz, y escribió "Extremista Peligroso". En cuanto a Héctor Aguayo Olavarría, Hugo y Elías González Ortega, Juan y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa y Raúl Figueroa Burkhardt, solamente recuerda a la persona de apellido Aguayo, a quien vio junto a un grupo de jóvenes al interior de la cárcel pública de Temuco. Esta persona era

el más joven del grupo y lo conoció por intermedio de Manuel Humaña al interior de la cárcel. Las personas mencionadas las relaciona con un grupo de jóvenes que unos dos o tres días antes del golpe de Estado, estando en Curarrehue, los vio pasar en una camioneta, al parecer de color rojo hacia la cordillera, pero por lo que notó en esa oportunidad iban de cacería o pesca, ya que se percató que llevaban cañas de pescar y trajes típicos para realizar esa actividad. Hace presente esta situación porque el día 10 de septiembre llegó en horas de la tarde un helicóptero con personal militar el cual aterrizó en una cancha de fútbol ubicada en el sector; recuerda que por lo novedoso de la situación llevó a sus alumnos a ese lugar y pudo conversar con uno de los militares quien le preguntó acerca de los profesores que trabajaban en la escuela de Curarrehue y sobre otras personas de la localidad. Posteriormente, el helicóptero se fue en dirección a la cordillera. Cree que en este helicóptero interceptaron a esos jóvenes en la cordillera mientras cazaban y creo que por ese medio los trasladaron directamente al Tucapel. Lo anterior lo sostiene porque una de las preguntas que hicieron los militares fue acerca de una camioneta que subió en dirección a la cordillera con un grupo de jóvenes. Adiciona otros sucesos.

En declaración judicial de fecha 30 de mayo de 2012, rolante de **fs. 690 a fs. 691 (Tomo II)**, ratifica su declaración extrajudicial de fs. 575 a fs. 578 con excepción de aquella parte en que señaló que asociaba al grupo de jóvenes que fueron detenidos por personal de la fuerza aérea con las víctimas de autos, porque en realidad se trató de dos grupos distintos de detenidos. Explica que no está muy seguro si uno de los jóvenes que vio en Temuco junto al Humaña era de apellido Aguayo. De lo que sí está seguro es que esos jóvenes, que eran entre siete y nueve, se les acercaron cuando supieron que también venían detenidos desde Curarrehue. Esos jóvenes no superaban los veinte años en promedio, y a uno de ellos le decían "Chuma". Esa persona era quien le daba ánimo sus compañeros. Que en el regimiento fue interrogado por el abogado Podlech, quien según todos los comentarios que escuchó en la cárcel, era el fiscal militar de la época. Esta persona fue muy prepotente con ellos. En un principio pensó que era un militar porque se comportaba con mucho odio hacia los detenidos. Que Podlech fue quien los interrogó uno por uno ese día fueron a la fiscalía militar. Relata otros hechos y respecto de las víctimas de autos dice desconocerlos. Sin embargo, los

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

asocia con los jóvenes que vio en Temuco junto a ellos. Se le preguntan al tenor de lo que le aconteció.

A.34. Baldomero Osvaldo Salazar Salgado (21 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 578 a fs. 580 (Tomo II) y de fs. 692 a fs. 693 (Tomo II).

En declaración extrajudicial de fecha 12 de octubre de 2011, rolante de **fs. 578 a fs. 580, (Tomo II)**, escruta en lo pertinente que para el año 1973 tenía 21 años y se desempeñaba como profesor de historia y geografía en la Escuela N° 17 de Curarrehue, de la cual su director era Manuel Humaña Jiménez. Que era militante del Partido Comunista para la época y fue detenido el 11 de septiembre de 1973 a manos de personal de carabineros del retén de Curarrehue, quedando bajo arresto domiciliario, el cual duro hasta el día 17 de septiembre, día en que los funcionarios de carabineros decidieron ir a buscarlo a su domicilio y comunicarle que sería trasladado hasta la ciudad de Temuco. Recuerda que lo hicieron abordar un Jeep de color verde en cuyo interior estaba en calidad de detenido Renato Santana, funcionario de la Corporación Nacional Forestal. Ese vehículo iba a cargo de unos carabineros, cuya identidad no recuerda, los llevaron hasta la comisaría de carabineros de Pucón, lugar donde abordó el Jeep, en calidad de detenido, un señor de avanzada edad cuyo apellido era Matta. Posteriormente, siguieron el trayecto llegando a la ciudad de Temuco hacia el regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco, lugar donde los efectivos militares los llevaron hasta un patio, donde había otros detenidos, no superando las cincuenta personas, según lo que recuerda. Agrega que en otros vehículos iban otros detenidos provenientes de Curarrehue y otros sectores, recordando que uno de ellos iba su colega de nombre Renato Saravia, junto a Manuel Humaña, los hermanos René y Luis Díaz Cortez, Luis Cid y otro profesor de nombre Rubén Leal Riquelme. Una vez a disposición de los efectivos militares, recuerda que estos los hicieron formar en dos filas, quedando separado momentáneamente del resto de sus colegas. Consecutivamente, los hicieron ingresar a un recinto cerrado similar a un gimnasio, donde les dijeron que se acomodaran ahí porque pasarían la noche en el lugar, cosa que no sucedió porque esa misma noche a eso de las 23:30 horas fueron trasladados hasta la cárcel pública de Temuco, ignorando el destino de las personas que estaban en la otra fila. Permaneció en la Cárcel Pública de Temuco hasta el día 05 de octubre del año 1973. Recuerda que, al

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

interior de la Cárcel Pública, el señor Humaña le presentó a Servando Castillo, quien era de Pucón y a quien había llevado detenido con anterioridad al 11 de septiembre junto a una persona que le apodaban el "Pillé Carrasco", otro apodado el "Piden", quien era botero de Pucón, y otra persona de apellido Muñoz, apodado el "Pluma", quien era hermano de un profesor de Loncoche de nombre Alfonso Muñoz. Las personas antes mencionadas fueron detenidas por efectivos militares quienes, según la información que maneja, llegaron a Curarrehue en un helicóptero. También en la cárcel pública de Temuco pudo ver a aun conocido al que conocía por el apodo de el "Flaco Chávez", quien era secretario general de las juventudes comunistas. Recuerda que no pudo conversar con él, pero sí tiene claro que una noche, cree que, durante las fiestas patrias, lo sacaron de la cárcel y no lo volvió a ver. Tiempo después por medio de la prensa local se enteró que Chávez, junto a otras personas había muerto en un intento de asalto al Polvorín del Regimiento Tucapel, hecho que bajo ningún concepto creyó. Respecto a Héctor Aguayo Olavarría, Hugo y Elías González Ortega, Juan y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa y Raúl Figueroa Burkhardt, por nombre no los conoció, pero si tiene en su recuerdo que al interior del regimiento Tucapel conversó con un muchacho joven, de aproximadamente dieciocho a veinte años, que le comentó que estaba con su hermano y que su padre era dueño de un aserradero en Curarrehue. Hace presente que ese joven no lo volvió a ver más, como al resto de las personas que estaban en la fila en la cual estaba él en un principio. Prosigue relatando la segunda vez que fue detenido por personal de la fuerza aérea.

En declaración judicial de fecha 30 de mayo de 2012, rolante de **fs. 692 a fs. 693 (Tomo II)**, ratifica su declaración extrajudicial de fs. 578 a fs. 580. Y en lo pertinente dice que en el regimiento fue interrogado, pero no recuerda quién lo hizo. Que desconoce las identidades de las personas desaparecidas, pero, sin embargo, los asocia con los jóvenes que vio en el regimiento de Temuco, en la fila en que inicialmente estaba ubicado. Recuerda que dos eran hermanos cuyo padre tenía aserradero, según dijo uno de ellos. Además, le dijo que ellos se iban a Argentina cuando fueron atrapados en la cordillera. Reanuda su relato en cuanto a su segunda detención, detallando la misma.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

A.35. Renato Santana Dubreuil (27 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 581 a fs. 583 (Tomo II), de fs. 799 (Tomo III), de fs. 3.858 a fs. 3.861 (Tomo XI) y de fs. 3.862 a fs. 3.864 (Tomo XI).

En declaración extrajudicial de fecha 13 de octubre de 2011, rolante de **fs. 581 a fs. 583 (Tomo II)**, en lo pertinente cuenta que para el año 1973, residía en la localidad de Curarrehue, era funcionario de la Corporación Nacional Forestal, tenía 27 años, era simpatizante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Fue detenido en tres oportunidades, la primera el 12 de septiembre de 1973, por carabineros que no eran dotación del retén de Curarrehue, y un grupo de civiles. Lo llevaron hasta el retén de Curarrehue junto a su compañero de labores Luis Cid. En el lugar también estaba detenido Luis Díaz, los tres abordan un vehículo y los trasladan hasta la comisaria de Pucón, donde pernoctaron y vio detenido a Benito Tapia. Al día siguiente, fueron trasladados por carabineros hasta la ciudad de Temuco, hasta la segunda comisaría de esa ciudad, posteriormente, fueron llevados hasta el regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco, para quedar en libertad al día siguiente. El 14 de septiembre, fue notificado por carabinero que quedaba bajo arresto domiciliario hasta el día 17 de septiembre, nuevamente detenido por carabinero. En esa oportunidad el grupo de detenidos aumentó, recordando a los profesores Manuel Humaña, uno de apellido Barrales, Renato Saravia, Rubén Leal, los hermanos René y Luis Díaz y su colega Luis Cid. Siendo nuevamente trasladados hasta la comisaría de Carabineros de Pucón, seguidamente a segunda comisaría de Carabineros de Temuco, y posteriormente entregados a efectivos militares del Regimiento Tucapel de Temuco, lugar en que permanecieron unas horas para ser llevados finalmente a la cárcel pública de Temuco. Continúa narrando lo vivido y en cuanto a Héctor Aguayo Olavarría, Hugo y Elías González Ortega, Juan y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa y Raúl Figueroa Burkhardt, recuerda solamente a Héctor Aguayo Olavarría, a quien conocía por el apodo del "Chachi", quien para la época tenía cerca de 16 años. A "ese muchacho lo vi al interior del regimiento Tucapel", no recuerda en cuál de sus estadías, solo recuerda que al verlo intercambió un par de palabras con él en el baño del gimnasio del regimiento, pero no recuerda lo que alcanzaron a conversar, el hecho es que fue la última vez que lo vio. Prosigue relatando otros hechos.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

En declaración judicial de fecha 30 de agosto de 2012, rolante de **fs. 799, (Tomo III)**, ratifica su declaración extrajudicial de fs. 581 a fs. 585. Se le preguntan por otros hechos y en lo atinente dice que no ha tenido mayor conocimiento respecto a la desaparición Héctor Aguayo y las otras personas.

En declaración judicial de fecha 25 de junio de 2015, rolante de **fs. 3.858 a fs. 3.861 (Tomo XI)**, reitera que en el año 1973 vivía en Curarrehue y en lo pertinente que después del golpe militar, el 12 o 13 de septiembre de 1973, fue detenido junto a Luis Cid y un señor de apellido Brevis, replicando sus dichos en cuanto fueron trasladados a diferentes unidades y que el día 17 de septiembre de 1973 fue nuevamente detenido por carabineros, esta vez junto a Luis y René Díaz Cortez, más los profesores Humaña, Leal, Salazar, Saravia y otros más cuyos nombres no recuerda. Que llegaron ese mismo día al Regimiento Tucapel de Temuco, donde fueron ingresados un gimnasio; en él había mucha gente. Allí vio al "Chachi" Aguayo, quien estaba junto a otras personas en la unidad militar antes señalada. Recuerda que este pidió ir al baño y él también, por lo que pudo intercambiar algunas palabras en ese lugar. A su parecer estaba con el pelo como "mordisqueado". Después fueron separados en grupos y en filas, quedando René Díaz en una distinta a la de ellos, aunque después lo juntaron con ellos nuevamente. Después fueron llevados a la cárcel al igual que Santana, Humaña y los demás que iban de Curarrehue. Al "Chachi" no lo volvió a ver. Pormenorizando lo que le acaeció.

En declaración judicial sin fecha y rolante de **fs. 3.862 a fs. 3.864 (Tomo XI)**, insiste en sus dichos precedentemente relatados.

A.36. René Esteban Díaz Cortez (25 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 474 a fs. 475 (Tomo II), de fs. 584 a fs. 585 (Tomo II) y de fs. 800 (Tomo III).

En declaración extrajudicial de fecha 13 de abril de 2011, rolante de **fs. 474 a fs. 475 (Tomo II)**, proclama en lo adecuado que el mes de septiembre de 1973, tenía 24 años y trabajaba en la comuna de La Unión, en la Tesorería Comunal de esa comuna. Su padre vivía en la localidad de Curarrehue. Que no tenía militancia política, pero era simpatizante del gobierno del presidente Salvador Allende, no supo que después de los hechos del 11 de septiembre de 1973 las autoridades militares de la zona lo requirieran. Por lo anterior, viajó a Curarrehue a la casa de sus padres a celebrar el cumpleaños de su madre.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Recuerda que fue la mañana del día siguiente cuando se encontraba en la casa de sus padres, llegó una patrulla de carabineros del retén del sector, quienes se llevaron detenido a su hermano Juan Luis, para posteriormente regresar una hora más tarde a detenerlo a él. Los trasladaron hasta la ciudad de Temuco, hasta el regimiento de Infantería N° 08 Tucapel, donde fueron ingresados en un gimnasio, lugar donde había más personas detenidas y particularmente un grupo de ocho detenidos aproximadamente todos sentados en el suelo con las piernas cruzadas, amordazadas y con sus manos amarradas a la espalda. Dentro de ese grupo de se encontraba Héctor Domingo Aguayo Olavarría, a quien conocía desde Curarrehue con el apodo del "Chachi". Ese mismo día, pero ya en horas de la tarde sacaron a todos los detenidos al patio del regimiento, lugar donde los formaron y un militar, del cual desconoce rango e identidad, escogió un grupo de ocho a diez personas dentro de las cuales estaba Aguayo Olavarría y él, y los llevó hasta un calabozo ubicado en la sala de guardia que se ubica en la entrada del regimiento Tucapel. Pasada algunas horas, lo sacaron del calabozo y lo devolvieron al gimnasio integrándose al resto de los detenidos, dentro de los cuales se encontraban su hermano Juan Luis y Manuel Humaña Jiménez, quien era profesor y también iba detenido desde Curarrehue junto a ellos. Esta fue la última vez que vio a Domingo Aguayo, quien quedó en el calabozo de la guardia del regimiento. Respecto a la militancia política de Héctor Aguayo Olavarría, ignora si era militante de algún partido político y solo sabe que fue detenido en un paso fronterizo por una patrulla de carabineros, la cual estaba a cargo de un oficial que no pertenecía al retén de Curarrehue.

En declaración extrajudicial de fecha 13 de octubre de 2011, rolante de **fs. 584 a fs. 585 (Tomo II)**, reitera en lo concerniente que en su estadía en calidad de prisionero en el Regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco, pudo ver que se encontraba detenido Héctor Aguayo Olavarría, quien también era oriundo de la ciudad de Curarrehue. Que las demás personas y cuyas identidades corresponden a Hugo y Elías González Ortega, Juan y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa y Raúl Figueroa Burkhardt, no recuerda haberlas conocido. Preguntado dice que no fue interrogado por personal militar, a pesar de que en un momento uno de los militares lo sacó del gimnasio y lo llevó junto al grupo donde estaba Héctor Aguayo, pero sin mediar explicación uno de los militares ahí presentes lo regresó nuevamente al gimnasio, lugar donde estaban sus conocidos

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

de Curarrehue, junto a su hermano Juan Luis. Recordando que el lugar donde lo habían llevado los militares se ubicaba, a su parecer, a la entrada del regimiento, cree que ese lugar correspondía a la guardia del regimiento, siendo ese lugar la última vez donde vio a Héctor Aguayo. Se le preguntan otras cosas.

En declaración judicial de fecha 30 de agosto de 2012, rolante de **fs. 800 (Tomo III)**, ratifica su declaración de fs. 474 a fs. 475 y la de fs. 584 a fs. 585. Rectifica que no supo en qué lugar detuvieron a Aguayo Olavarría; por comentarios posteriores se decía que había sido aprehendido junto a un grupo al interior de Pucón, camino a Caburgua. Replicando que detenido por carabineros de Curarrehue el 17 de septiembre de 1973. No conocía a los carabineros de esa dotación. Fue trasladado a Temuco y estuvo detenido por alrededor de cinco días, y posterior a eso no hubo más detenciones. No recibió torturas físicas por parte de militares en el Regimiento. No supo si de las personas que estaban detenidos junto a él en el regimiento hayan sufrido algún tipo de torturas. Nunca fue interrogado mientras estuvo detenido.

A.37. Luisa Noemí González Ortega (19 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 594 a fs. 595 (Tomo II), de fs. 598 (Tomo II) y de fs. 617 a fs. 618 (Tomo II).

En declaraciones extrajudiciales de fecha 26 de febrero de 2012, rolante de **fs. 594 a fs. 595 (Tomo II)**, (cuya copia consta a fs. 617 a fs. 618 Tomo II) indica que es la hermana de Elías Dagoberto y Hugo Arner González Ortega. Para el año 1973 tenían la edad de 25 y 23 años respectivamente, y según su recuerda eran militantes de la juventud del Partido Socialista. En esa época residían en la casa de sus padres en Villarrica. Llegado el 11 de septiembre del año 1973, fecha en que ocurrió el golpe de Estado, sus hermanos se colocaron nerviosos debido a los constantes bandos militares que se publicaban en los medios de comunicación y por ese motivo, creyendo que serían llamados en algún momento decidieron, junto a otros integrantes del Partido Socialista, planificar su salida de Chile hacia Argentina por un paso no habilitado ubicado en la comuna de Curarrehue. Esta situación está en su conocimiento porque recuerda que se lo manifestaron a su padre Marcos (fallecido). El día 14 de septiembre del año 1973, en horas de la tarde, sus hermanos se fueron junto a los hermanos Juan y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Aguayo Olavarría y Raúl Figueroa Burkhardt, con quienes se reunirían esa tarde

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

en la subida de “Piedra”, la que se encuentra a la salida de Villarrica. Esa fue la última vez que vio a sus hermanos. Posteriormente, durante el mes de noviembre del año 1973, mientras visitaba a su hermano Othniel, quien estaba detenido en la cárcel pública de Temuco, decidió, por consejo del familiar de una persona detenida en ese lugar, concurrir hasta el Regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco a consultar si ellos se encontraban en ese lugar. Concurrió en dos oportunidades al mencionado recinto militar se presentó en la guardia de este y uno de los soldados le permitió revisar los listados de los detenidos que ahí se encontraban, no logrando ubicar a sus hermanos. Creyendo que habían logrado llegar hasta Argentina, fue entre los meses de febrero a diciembre del año 1974, hasta las ciudades de Junín, Cinco Saltos, General Roca, Luis Beltrán y Buenos Aires, lugares donde publicó avisos en las distintas radioemisoras sin lograr resultados positivos. Desde ese entonces perdió las esperanzas en encontrarlos, y debido a la situación que vivía el país en ese momento, por temor, no quiso seguir efectuando averiguaciones, sino hasta cuando regresó la democracia al país. Por intermedio de una hermana de Héctor Aguayo Olavarría, supo que el grupo de jóvenes integrado por sus hermanos había sido detenido en Curarrehue por efectivos de carabineros de la comisaría de Pucón y que posteriormente habrían sido trasladados en helicóptero hasta el Regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco. Lo anterior concuerda, porque un amigo de la familia de apellido Guevara, quién estuvo detenido en el regimiento Tucapel, le mencionó a una prima Sudelia Castro González, que pudo ver a sus hermanos llegar al mencionado regimiento en calidad de detenidos.

En declaración judicial de fecha 29 de febrero de 2012, rolante de **fs. 598 (Tomo II)**, ratifica su declaración extrajudicial de fs. 594 a fs. 595. Suma que, según los dichos de Eva Aguayo, hermana de Héctor Aguayo, el grupo que integraba su hermano fue detenido por carabineros y trasladado hasta la comisaría de Pucón y desde ese lugar fueron todos trasladados al regimiento Tucapel en helicóptero.

A.38. Evita Valentina Aguayo Olavarría (10 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 619 a fs. 620 (Tomo II), de fs.

En declaración extrajudicial de fecha 28 de febrero de 2012, rolante de **fs. 619 a fs. 620 (Tomo II)**, afinsa en lo pertinente que hermana de Héctor Aguayo Olavarría, quien desde el día 13 de septiembre el año 1973, se encuentra

desaparecido. Para septiembre de ese año tenía la edad de 10 años y vivía junto a sus padres Francisco Aguayo Gallegos y Cirila Olavarría Jaramillo, y a sus hermanos Ricardo Virginio, Nelly Sara y Héctor Domingo, a quien apodaban el "Chachi". Para ese entonces, vivían en un domicilio ubicado en el camino internacional de Curarrehue. Su hermano Héctor Domingo, señala que para el año 1973, tenía 17 años, era estudiante de enseñanza media y pertenecía a la juventud del Partido Socialista. Que llegado el golpe de Estado comenzaron a ser publicados, en los medios de comunicación, diversos bandos militares, y fueron numerosas las personas que fueron detenidas durante esos días en Villarrica. Debido a la situación antes mencionada, su padre decidió que sus hermanos Ricardo y Héctor, debían salir del país y para esto los llevaría hasta un paso fronterizo no habilitado en Curarrehue. El día 13 de septiembre, mientras se estaba preparando la salida de sus hermanos desde Villarrica, fue detenido por carabineros de Villarrica su hermano Ricardo, quien fue trasladado a la cárcel pública de Temuco. Al enterarse de esta situación Héctor se dirigió al domicilio de los hermanos Gonzalez Ortega, donde se reunió con los hermanos Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa y Alejandro Escobar Vásquez, todos pertenecientes al Partido Socialista, donde planificaron su salida del país para el día siguiente por "Añihuarraque", lugar cercano a Curarrehue. Eso fue lo último que supieron de Héctor, ya que cuando su hermana Nelly fue a dejarle ropa al domicilio de los hermanos González Ortega, una hermana de ellos le comentó lo señalado anteriormente. Debido a que no se obtenían noticias de su hermano, su padre se empezó a preocupar y fue por el aviso de los hermanos Luis y René Díaz, quienes eran de Curarrehue, decidió ir hasta el Regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco a preguntar por Héctor. Lo anterior porque los hermanos Díaz le comentaron que en ese lugar habían visto a su hermano. Según su padre, al llegar al mencionado recinto militar le permitieron revisar el listado de detenidos del regimiento, pero no figuraba su hermano como tampoco ninguno de sus amigos. Hace presente que su padre junto a su madre fue en reiteradas oportunidades al Regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco, pero nunca obtuvieron información alguna respecto a su hermano. Debido a lo anterior su padre comenzó a efectuar algunas averiguaciones y en una conversación que sostuvo con su padrino Gregario Seguel Capitán, le comentó que un día apareció Héctor en su domicilio ubicado en calle Matta N° 0331 Temuco, donde él le había

manifestado que había estado detenido al interior del regimiento Tucapel y le solicitó dinero para regresar a Villarrica. Según su padre, don Gregario le comentó que había aconsejado a Héctor de no regresar esa tarde a Villarrica, debido a que estaban cerca del horario de toque de queda, y podía ser detenido nuevamente, pero hizo caso omiso a su consejo, porque Héctor le había dicho que andaba con un grupo de amigos. Por otra parte, su padre logró enterarse que su hermano junto a sus amigos fue detenido camino a Caburgua por personas de civil, quienes se movilizaban en una camioneta de propiedad de Carlos Barra, quién en esos años tenía una carnicería frente a la municipalidad de Pucón. Otro antecedente más que obtuvieron fue que una vecina de ellos de nombre Laura Pinilla, le comentó a su madre que un carabinero de nombre Joaquín López, quien era parte de la dotación del retén de carabineros de Villarrica, le manifestó que habían matado al hijo de su vecina, refiriéndose a su madre, en el puente Rodrigo Bastidas en Villarrica. Que también en una oportunidad se contactó con ella don Francisco Matta Iturra, quien le manifestó que su padre de nombre Francisco Matta, había visto y conversado con su hermano al interior del regimiento Tucapel de Temuco.

En declaración judicial de fecha 29 de enero de 2013, rolante de **fs. 957 a fs. 959 (Tomo III)**, adiciona que su hermano Ricardo Aguayo fue detenido el 13 de septiembre de 1973 por carabineros de Villarrica y llevado posteriormente a Temuco. En esa ciudad estuvo detenido por casi un mes en la cárcel y fue torturado en ese lugar. Que en lo concerniente a lo que ocurrió con su hermano Héctor y sus compañeros, agrega que su madrina, Zunilda Seguel, le contó que Héctor fue a la casa que ella tenía en Temuco. A ella y a su padrino les contó que había estado detenido y que necesitaba dinero para volver a Villarrica. Al día siguiente apareció una patrulla en la casa de sus padrinos preguntando por su hermano. Esto se repitió tres veces más. Por esto presume que su hermano y sus amigos fueron seguidos por los militares una vez que fueron liberados. A raíz de esto último tiene cierto asidero un rumor que su madre le dijo que había escuchado su padre. Este decía que su hermano y sus amigos fueron detenidos en el camino hacia Villarrica cuando hacían dedo para regresar a esa ciudad. Los aprehensores fueron militares, quienes los llevaron al puente Rodrigo Bastidas en Villarrica o al puente Toltén, en Pitrufquén, no lo tiene claro, donde los asesinaron. En el barrio donde crecieron vivían los hermanos Díaz Cortés, con quienes fueron

compañeros de curso. Su profesor fue don Manuel Humaña. Tanto los hermanos Díaz como el profesor Humaña vieron a su hermano detenido en el regimiento Tucapel de Temuco. Que ellos vivían en la calle Pedro Montt N° 967, en tanto que los hermanos Schmidt Arriagada vivían en la Población Corvi. No conoció a ningún otro joven de apellido Schmidt más que a los desaparecidos junto con su hermano. Respecto del carabinero Joaquín López señala que vivía muy cerca de su casa y constantemente visitaba la casa de su vecina, doña Laura Pinilla. Esa señora le contó a su madre que un día llegó Joaquín López, como de costumbre, y que después de haber bebido algunas copas le señaló que la noche anterior habían dado muerte a unos comunistas, entre ellos su hermano. Esto porque le señaló textualmente: "anoche matamos al hijo de tu vecina", indicando el domicilio de su madre. Después de la detención de su hermano Ricardo nunca más volvieron los carabineros a su domicilio. Su madre le dijo que Carlos Barra era un colaborador de los militares y carabineros. Supuestamente una camioneta cerrada de color blanco que éste tenía sirvió para trasladar a su hermano y sus compañeros hacia Villarrica, después que fueron liberados en el regimiento Tucapel de Temuco. Desconoce de dónde sacó esa información su madre, pero era uno de los tantos rumores que ella escuchó y que le contó. Por otra parte, don Rolando Chávez, quien en aquella época trabajaba en la oficina de correos de Curarrehue, en una oportunidad le dijo que su padre le había contado que alguien encontró la cédula de identidad de su hermano Héctor en la orilla del río Toltén cerca de Villarrica, del puente hacia abajo. Dicho documento le fue entregado a su padre, pero a ella no le consta. No recuerda el nombre de ningún botero de Villarrica.

A.39. Laura Pinilla Fuentes (34 años a la época de los hechos) Quien declaró de fs. 748 a fs. 749 (Tomo III), de fs. 961 a fs. 962 (Tomo III), fs. 985 (Tomo III), de fs. 988 a fs. 989 (Tomo III).

En declaración extrajudicial de fecha 08 de mayo de 2012, rolante a **fs. 748 a fs. 749 (Tomo III)** en lo adecuado refiere que recuerda que el año 1968, llegó a vivir al lado de su casa, un matrimonio proveniente de Curarrehue de apellidos Aguayo Olavarría, junto a sus cuatro hijos Ricardo, Sara, Eva y Héctor, éste último conocido como el "Chachi". Esta familia, era simpatizante de izquierda y formaban parte de un grupo de esta ideología en el sector de Curarrehue. Para el año 1973 y una vez producido el golpe militar el día 11 de septiembre, recuerda

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

que a la zona comenzó a llegar personal militar, situación que provocó de alguna manera que personas contrarias al régimen militar, se escondieran o sencillamente se iban de la ciudad, debiendo agregar que en Villarrica, el grupo de civiles que conformaban el "Patria Libertad", entre ellos Amador Zerené (fallecido), Mario Cortes y otros que no recuerda en este momento, colaboraban en la entrega de información con respecto a los paraderos de personas de izquierda, como también facilitaban sus vehículos y acompañaban a personal de carabineros. El caso es que, en fecha posterior al golpe militar, se enteró por intermedio de la madre del "Chachi", que lo habían detenido los carabineros de Pucón junto a un grupo de jóvenes y que se lo habían llevado a todos al regimiento Tucapel de Temuco, recordando que ella viajó a Temuco y los busco en el regimiento, unidades de carabineros e investigaciones, no encontrando información con respecto a su paradero. Después que desapareciera el "Chachi" y no se tuviera noticias de él, recuerda que Joaquín López, funcionario de carabineros perteneciente a la comisaría de Villarrica en esa fecha, quien tiene un hijo del cual junto a su esposo son padrinos, existiendo de esta manera una relación de confianza entre ambas familias, además que Joaquín López, junto a su señora de Alicia Salamanca y su hijo, residían en esa fecha detrás de su casa, le comentó en una oportunidad, cuando compartían en una reunión familiar en su casa, que al "Chachi" y unos hermanos de apellidos Schmidt, los habían eliminados camino a Caburgua, no recordando si él había participado o se había enterado por comentario, siendo esta la única vez que López se refirió al "Chachi" y a estos hermanos Schmidt. Posteriormente, López se fue de Villarrica y nunca más supo de él.

En declaración judicial de fecha 31 de enero de 2013 rolante a **fs. 961 a fs. 962 (Tomo III)**, ratifica su declaración extrajudicial de fs. 728 a fs. 729. Preguntada no recuerda que carabineros haya allanado la casa de la familia Aguayo el 13 de septiembre de 1973 y que se hayan llevado detenido a Ricardo Aguayo. Lo que sí recuerda claramente es que durante el mes de noviembre de ese año una patrulla integrada por militares boinas negras, carabineros y civiles llegaron hasta la casa de la familia Aguayo en búsqueda de Ricardo Aguayo. Momentos antes de esto el carabinero Joaquín López le había advertido a la familia lo que iba a ocurrir, entonces, Ricardo se escondió en su casa, cuando llegó la patrulla y no encontró a Ricardo en su casa, los uniformados allanaron la suya.

Entraron por la puerta trasera y la delantera de la casa, los apuntaron con armas largas y sacaron a Ricardo. Posteriormente se enteró que a Ricardo lo “soltaron durante la noche”, previo a haber sido golpeado por los uniformados. Desconoce quiénes participaron de este hecho, salvo Joaquín López quien era el chófer del furgón de carabineros de Villarrica y que esa noche participó del allanamiento. Consultada dice que el carabinero Joaquín López era conocido de la familia de su esposo, por lo que cuando esta persona se casó y tuvo un hijo le pidieron a su marido que fuera el padrino de la criatura. Con el pasar el tiempo Joaquín López comenzó a frecuentar su casa e incluso iba acompañado de otros carabineros, quienes se tomaban unos tragos en su domicilio. El Tribunal le lee en lo pertinente la declaración prestada por doña Evita Aguayo Olavarría a fs. 936. La declarante señala: no es efectivo que el carabinero López le haya dicho lo sucedido con Héctor Aguayo, sino que se lo contó a su esposo Enrique Jara Zúñiga y este sólo le dijo que al "Chachi" lo habían matado camino a Caburgua. Todos los detalles seguramente López se los narró a su esposo, pero ella no quiso saber nada más. Que en aquel tiempo ellos estaban enfermos de los nervios por todo lo que sucedía y porque los carabineros llegaban a su casa contando muchas historias horribles como el relato que Joaquín López les hizo sobre la ejecución de unas personas que los militares trajeron desde Liquiñe, entre ellos uno de apellido Castro que era periodista y que ella conoció cuando vivieron en Coñaripe. Según los dichos de López, estas personas fueron ejecutadas sobre el puente Rodrigo Bastidas y antes de tirarlos al río les abrieron el pecho con sus bayonetas para que se hundieran rápidamente. López señaló que las tripas se les salían a los ejecutados. A raíz de esto, tiempo después los cadáveres comenzaron a salir a flote y muchos turistas pescadores enredaban sus anzuelos en los cuerpos. Por este motivo, militares o carabineros sacaron los cadáveres del río, los juntaron todos en un sector determinado y los dinamitaron. Todo esto se lo contó Joaquín López.

En declaración judicial de fecha 27 de marzo de 2013, rolante a **fs. 985 (Tomo III)** adujo que todo lo que supieron su marido y ella respecto de los hechos de sangre ocurridos en Villarrica lo supieron por intermedio del carabinero López. El Carabinero López les dijo que al "Chachi" Aguayo y a sus amigos los habían matado camino a Caburgua. Por otra parte, la madre del "Chachi" averiguó que su hijo y los demás habían estado en el regimiento Tucapel. Ella tiene la impresión de

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

que estos jóvenes querían cruzar hacia Argentina porque el padre de uno de ellos tenía un campo que limitaba con la república trasandina. Incluso Ricardo Aguayo cruzó posteriormente hacia allá, por ese lugar. Refiere que, López siempre iba a la casa con dos o tres carabineros cuando andaban de ronda. También recuerda que en una oportunidad pasó a avisar que a Ricardo Aguayo lo iban a ir a detener, por lo que debía esconderse.

En diligencia de careo con Joaquín Segundo López Bizama, de fecha 27 de marzo de 2013, rolante a **fs. 988 a fs. 989 (Tomo III)** ratifica su declaración judicial de fs. 940 a fs. 941. Reconoce a la persona que está a su lado como el carabinero Joaquín López de quien ha hecho referencia. Está segura de que Joaquín López le dijo esto porque nadie más le ha comentado esta situación tan detalladamente. Se mantiene en sus dichos.

A.40. Elisa Margarita Schmidt Arriagada (12 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 621 a fs. 623 (Tomo II) y de fs. 788 (Tomo III).

En declaración extrajudicial de fecha 07 de marzo de 2012, rolante de **fs. 621 a fs. 623 (Tomo II)** aduce en lo respectivo que es hermana de Carlos y Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, quienes desde el día 13 de septiembre del año 1973, se encuentran en calidad de desaparecidos. Para el año 1973, su hermano Carlos tenía la edad de 21 años, trabajaba como empleado de la Corporación de la Vivienda "CORVI" en Villarrica y vivía con su esposa de nombre Elena Santibáñez Fernández (fallecida), su hermano era militante del Partido Juventudes Socialistas, para lo cual se encontraba inscrito. Ricardo Augusto, tenía la edad de 20 años, cursaba el cuarto año medio del Liceo Industrial de Villarrica y vivía con su hermano Carlos y su esposa, en el inmueble ubicado en la calle José Miguel Carrera esquina Inés de Aguilera, comuna de Villarrica, debiendo hacer presente que éste no tenía militancia política. En su caso, vivía con su madre de nombre Aurora Arriagada Vergara (fallecida), en el inmueble ubicado en la calle Gerónimo de Alderete, de la comuna de Villarrica, existiendo además dos hermanas de nombres Isolde Yolanda y Silvia Luz, quienes residían y trabajaban en la ciudad de Temuco. Una vez producido el golpe militar el día 11 de septiembre de 1973, recuerda que la sorprendió en la ciudad de Temuco, por lo que no pudo regresar a Villarrica ese día, haciéndolo el día 13 de septiembre, en horas de la tarde. Al llegar a la casa su madre le señala que sus hermanos Carlos y Ricardo, se encontraban preparando sus cosas en la casa de un tío de nombre

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Eliseo Arriagada Vergara (fallecido), ya que iban a cruzar la frontera hacia Argentina por la cordillera. A raíz de lo anterior, se trasladó de inmediato donde se encontraban y pudo conversar con ellos por última vez, percatándose que en la misma situación estaban los hermanos Hugo y Elías González, Juan Cabrera, Raúl Figueroa, Alejandro Escobar y Héctor Aguayo. Recuerda que le señalaron que abandonarían el país, ya que temían por sus vidas, ya que por sus militancias políticas las cuales eran de todo conocimiento de Villarrica y alrededores, serían pronto detenidos por las fuerzas armadas. Posteriormente, permaneció con ellos hasta que iniciaron su viaje a pie, recordando que todo el grupo tomó un camino interior que va hacia Curarrehue, llamado Llancalil, sector Huife Alto, ellos le manifestaron que harían abandono del país por ese sector cordillerano. Pasados dos semanas y al no tener noticias de sus hermanos, su madre comenzó a efectuar consultas a los familiares de los otros jóvenes, donde tuvo como respuesta que ninguno de ellos se había comunicado con sus respectivas familias. Luego de varios meses, su madre se enteró por otra persona, de quien ignora su identidad, que sus hermanos y el resto del grupo, habían sido detenidos en la cordillera y ejecutados posteriormente, razón por la cual su madre quiso en cierta medida olvidar este comentario, pero le trajo bastantes complicaciones de salud, falleciendo al año después. El año 1990, su hermana Silvia se acercó a los estamentos de los Derechos Humanos de la ciudad de Temuco, con la finalidad de entregar los antecedentes respecto a la situación de sus hermanos Carlos y Ricardo, instancia donde en conversaciones con familiares de los otros jóvenes que formaban parte del grupo, se informó de varios comentarios y antecedentes con respecto a las circunstancias en que fueron detenidos y en los posibles lugares donde fueron ejecutados, como también donde podrían encontrarse sepultados. Afirma que en una oportunidad y en fecha posterior a la desaparición de sus hermanos, su madre le comentó que el carabinero de apellido Vergara, perteneciente a la tenencia de Villarrica, se habría acercado a la casa y le había manifestado que sus hijos los habían matado. Del mismo modo, en fecha posterior al 11 de septiembre de 1973, don Carlos Barra persona conocida en Villarrica facilitó su camioneta blanca a carabineros de Villarrica para llevar a cabo detenciones de personas en la zona, presumiendo que posiblemente si sus hermanos y el grupo fueron detenidos por los carabineros en la cordillera, hayan sido trasladados en dicho vehículo. Finalmente hace entrega de documentos.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

En declaración judicial de fecha 30 de julio de 2012, rolante de **fs. 788 (Tomo III)** ratifica su declaración extrajudicial de fs. 621 a fs. 623. Por comentarios en Villarrica supo que un oficial de reserva de apellido Thielemann decía que en el campo de un tío de éste ubicado en entre Villarrica y Pucón habrían enterrado a varios detenidos. También que Carlos González Navarro, informante de la Policía de Investigaciones en Villarrica, a alguien le dijo, que a sus hermanos lo habían matado en Coñaripe. Continúa refiriendo a comentarios de terceros.

A.41. Francisco Jerónimo Matta Iturra (29 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 626 a fs. 627 (Tomo II), de fs. 786 a fs. 787 (Tomo III) y de fs. 1.706 a fs. 1.707 (Tomo V).

En declaración extrajudicial de fecha 13 de marzo de 2012, rolante de **fs. 626 a fs. 627 (Tomo II)** arguye que es hijo de don Francisco Matta Aro, de nacionalidad española, quien fue detenido en su fundo de Palguin Bajo, el cual se ubica entre Pucón y Curarrehue. Dicha situación, ocurrió entre los días 13 y 14 de al año 1973 a manos de personal de carabineros de la comisaría de Pucón, recordando que uno de sus aprehensores correspondía a un capitán de carabineros de apellido Partarriet. Su padre fue detenido y trasladado en su propia camioneta, en primera instancia hasta la comisaría de Pucón, para luego ser derivado junto a Héctor Aguayo Olavarría y otro joven hasta la ciudad de Temuco, específicamente hasta el regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco, lugar donde al llegar quedaron a disposición del fiscal militar Alfonso Podlech Michaud, quien dispuso la expulsión de su padre por ser financista del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, hecho que era totalmente falso. Pasado un mes dicha expulsión fue revocada gracias a la gestión efectuada por el Ministro del Interior, General Bonilla, quien por intermedio del Vicecónsul Leonardo Saiz, lograron establecer que las imputaciones que Podlech hacía en su contra no estaban fundamentadas. Su padre, en más de una ocasión le hizo referencia que en el caso de Héctor Aguayo Olavarría y el joven que lo acompañaba, el Fiscal Podlech, hizo mención, que se encargaría de ellos, no haciendo mayores comentarios. Esa fue la última vez que su padre vio a Héctor, debido a que en horas de esa misma noche fue trasladado hasta la cárcel pública de Temuco, lugar donde permaneció recluso cerca de diez días. Interrogado sobre Héctor Aguayo Olavarría, señala que lo conocía, ya que su padre era del Partido Socialista y también amigo de su familia. La camioneta de su padre correspondía a una Chevrolet C-10, color café,

la cual fue sustraída por carabineros de Pucón en los momentos en que su padre fue detenido. Dicho vehículo estuvo en poder de los carabineros por un lapso de diez días, siendo utilizado para efectuar detenciones y traslado de detenidos. Suma que había una persona en Pucón que facilitaba por propia voluntad su camioneta a carabineros para efectuar detenciones y traslados de detenidos, esta persona corresponde a Carlos Barra Matamala, quien era dueño en esa época de una carnicería. Que este señor también practicaba detenciones junto a un grupo de civiles y carabineros. Dentro de los civiles, recuerda a una persona de apellido Ulloa y a otra persona de nombre Horacio Müller.

En declaración judicial de fecha 31 de julio de 2012, rolante de **fs. 786 a fs. 787 (Tomo III)** (cuya copia consta a fs. 1706 a fs. 1.707 Tomo V), ratifica su declaración extrajudicial de fs. 626 a fs. 627. Afirma que está seguro de que fue el abogado Alfonso Podlech Michaud quien interrogó a su padre y a Héctor Aguayo Olavarría, porque su padre se lo dijo. Además, a mediados de octubre de 1973 concurrió a conversar con Alfonso Podlech Michaud en compañía del exdiputado Hardy Momberg, quien en aquel tiempo era miembro del Partido Nacional. Se entrevistaron con él en una oficina ubicada al interior del regimiento. En esa reunión Podlech se hizo acompañar de los capitanes Nelson Ubilla y Mario Alvarado. Hardy Momberg le dijo que si expulsaba del país a su padre él también se iría. Entonces Podlech le dijo que lo iba a echar del país de todas formas porque su padre era financista de la guerrilla del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y del Partido Socialista. Esta conversación duró no más de tres minutos. Recuerda que, en una fecha posterior, el abogado Sergio Zapata Camus fue a conversar con Podlech en representación de su padre. Está seguro de que éste era el verdadero fiscal militar en Temuco y utilizaba al mayor Jofré como pantalla, ya que fue el propio Podlech quien le dijo a su padre que lo iba a expulsar y pudo comprobar su autoridad cuando conversó con éste. En cuanto a Héctor Aguayo Olavarría, lo conoció puesto que su padre Francisco Aguayo, fue candidato a regidor en 1967 junto con su persona. Reitera que su padre le dijo que Podlech junto con asegurarle que se iría expulsado, ordenó a Aguayo y a otra persona quedarse en la fiscalía para ser interrogados. Adiciona que Podlech ordenó la expulsión de otros ciudadanos extranjeros como Aberto Malvaldi que era el dueño de la radio La Frontera y concesionario del teatro municipal de Temuco,

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

don Máximo Eitel, presidente del Banco Sur. Acompaña en lo adecuado copia de salvoconducto emanado desde la Fiscalía Militar de Temuco para su padre.

A.42. Ruth Alicia González Ortega (12 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 49 (Tomo I), de fs. 679 (Tomo II), de fs. 1.036 a fs. 1.037 (Tomo III), de fs. 1.046 a fs. 1.047 (Tomo III) y de fs. 1.052 (Tomo III) y de fs. 1.143 a fs. 1.145 (Tomo IV).

En declaración extrajudicial de fecha 15 de noviembre de 1995, rolante a **fs. 49 (Tomo I)** (cuya copia consta a fs. 1052 Tomo III) proclama que es hermana de Hugo Arner y Elías Dagoberto González Ortega, ambos desaparecidos desde el 13 de septiembre de 1973. Después del 11 de septiembre del año en cuestión, sus hermanos Hugo y Elías, les comunicaron a sus padres que se irían el día 13 hacia Argentina, debido a que eran requeridos por carabineros de Villarrica, por pertenecer a las juventudes socialistas. El día 12 de septiembre del año en mención, sus hermanos salieron de la casa alrededor de las cuatro de la tarde, en dirección a la población Vista Hermosa, donde se iban a encontrar con los hermanos Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Aguayo Olavarría y Raúl Figueroa Burkhardt, desde esa fecha no ha tenido noticias de sus hermanos. Posteriormente su madre con su hermana Luisa realizaron diversas diligencias, con la finalidad de poder ubicar a sus hermanos, tales como en el regimiento Tucapel, cárcel, estadio de Temuco, comisaria de carabineros de Villarrica, en todos los lugares, no obtuvieron ninguna respuesta positiva del paradero de Hugo y Elías. Aproximadamente en el año 1991, interpuso una denuncia en el Juzgado del Crimen de Pucón, por presunta desgracia en favor de sus hermanos y los demás muchachos que los acompañaron en su huida hacia Argentina. Por último, debe señalar que desde esa fecha que sus hermanos se fueron a Argentina, nunca más ha tenido noticias de ellos.

En declaración judicial de fecha 17 de mayo de 2012 rolante de **fs. 679 (Tomo II)** ratifica su declaración extrajudicial de fs. 49. Y en lo pertinente dice que inmediatamente después de ocurrido el golpe militar su casa fue allanada por militares que estaban en el sector y carabineros de Villarrica. Recuerda que los uniformados apuntaron sus armas en contra de su padre a la vez que le preguntaban por armas. Este procedimiento se repitió en varias oportunidades, antes de que sus hermanos decidieran huir. También estos allanamientos

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

sucedieron después de que sus hermanos se fueron, incluso hasta pasado dos años de ocurrido el golpe militar. Que incluso en una oportunidad su hermano mayor Otniel, se asustó tanto por un allanamiento que huyó de la casa, siendo perseguido por carabineros quienes le dispararon sin herirlo y lo detuvieron. Su hermano fue llevado al regimiento Tucapel donde fue torturado.

En declaración extrajudicial ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de fecha 29 de agosto de 1990 rolante a **fs. 1.036 a fs. 1.037 (Tomo III)** (cuya copias constan de fs. 1.046 a fs. 1.047 Tomo III y a fs. 1.143 a fs. 1.145 Tomo IV) agrega que Elías era el hijo mayor de 25 años, trabajaba en un balneario del Banco Estado en Villarrica, hasta el 13 de septiembre de 1973, salió a su trabajo como cualquier día, se quedó de juntar en la casa de un padre de los “chicos, hacia Licanray, era en la casa del padre de Juan Cabrera. Hugo estaba en la casa y dijo que se iba con Elías, los Schmidt Escobar y Cabrera. Se iban a la Argentina, llevó ropas, pretendían escapar, los estaban buscando, habían ido carabinero de Villarrica. Un carabinero amigo de ellos de apellido Krause, les dio la idea de que se fueran. Nunca supieron si se reunieron o no en esa casa, eran todos, los seis militantes del Partido Socialista en Villarrica, los carabineros iban y preguntaban por ellos, según ha sabido, era un grupo de diez “muchachos, los que huyeron”. Según se piensa que los tomaron presos en Curarrehue, fueron llevados en una camioneta particular, tuvieron un accidente, llegaron todos al hospital, tal vez está registrado su ingreso (que tendría que ser a partir del 13 de septiembre), luego fueron sacados, llevados al puente del río Toltén para ser fusilados. Recientemente les han contado esta historia. Los padres aún no se enteran de esta versión, piensan que aún están vivos. Ellos habían escuchado antes que habían fusilado en el puente, se supo que en el río había un cuerpo flotando, luego los carabineros acordonaron el lugar. En las noches se escuchaban metralletas y luego llegaban los bomberos a lavar allí. Hay una persona que vio sangre y masa encefálica allí, se llamaba Minerva Toro, también vio un cadáver que flotaba. Ambos eran solteros, sin hijos, vivían los once en la casa familiar, ellos hicieron gran cantidad de averiguaciones, incluso gente que llegaba a la casa decía haberlos visto, se hospedaban y comían gratuitamente hasta que descubrían el engaño. El padre de las víctimas es pastor evangélico. Con posterioridad carabineros siguió llegando regularmente a la casa, siempre buscando armas, todo esto hasta el año 1980, registraban todo. Daban vuelta todo, lo hacían con

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

gran prepotencia. En una oportunidad un hermano suyo tuvo miedo, huyó, le dispararon y posteriormente lo detuvieron, así estuvo tres meses, en la cárcel o el regimiento de Temuco, nunca quiso contar. Respecto del caso de Cabrera, puede decir que tenía dieciocho años, estudiaba, militaba el partido socialista, huyó con todo el grupo. Suma que los familiares de los Schmidt, puede que tengan otros datos, hay quienes decían que los habrían visto en Huife de Pucón hacia la cordillera, un lugar con cajones cordilleranos.

A.43. Matilde Escobar Vásquez (16 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 744 a fs. 745 (Tomo III) y de fs. 911 a fs. 912 (Tomo III).

En declaración extrajudicial de fecha 08 de mayo de 2012, rolante a **fs. 744 a fs. 745 (Tomo III)** aseveró que es hermana de Alejandro Escobar Vásquez, quien, para la época de ocurridos los hechos, residía junto con sus padres José Daniel Escobar Núñez y María Inés Vásquez Ceballos y sus quince hermanos de nombres Carmen, Adela, Francisca, Juan, Pedro, Érica, Daniel, Izáis, María Aidé, María Inés, Vicente y otros, en el domicilio ubicado en la comuna de Villarrica. En el mes de septiembre de 1973, su hermano Alejandro comunicó a la familia que en esos instantes se iba del hogar con dirección a Argentina, por el paso fronterizo ubicado en Pucón, sin señalar motivo específico, solicitándole su madre que no lo hiciera, porque le podía suceder cualquier cosa debido a lo que estaba ocurriendo en esos momentos en el país. Fue así como su hermano sale del domicilio cargando sólo una mochila, indicando que se juntaría con otros amigos para realizar la caminata, amigos de los cuales desconoce sus nombres. Pasado unos tres años de la fecha en que su hermano dejó la casa, tomaron conocimiento por un diario enviado por su cuñada Lidia Carter quien residía en Concepción, en el cual se señala que Alejandro se encontraba desaparecido junto a otras personas. Posterior a esto nunca lo buscaron, porque se pensaba que estaba vivo en Argentina, hasta el día que nuevamente aparece en el diario de Concepción que cinco personas fueron encontradas muertas camino al paso fronterizo con Argentina, específicamente en una quebrada, señalando entre otras personas el nombre de su hermano Alejandro Escobar Vásquez. Luego de dicha información la familia se consternó sin realizar ninguna diligencia para recuperar el cuerpo y sin denunciar o prestar declaraciones respecto de lo sucedido. Desconoce todo antecedentes respecto de quienes o como ocurrió la muerte de su hermano.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

En declaración judicial de fecha 13 de diciembre de 2012, rolante de **fs. 911 a fs. 912 (Tomo III)** ratifica su declaración extrajudicial de fs. 725 a fs. 725. Adiciona que su hermano se fue de la casa, tenía veinte años aproximadamente. No participada de ningún grupo político, desde esa fecha en que su hermano se fue de la casa, nunca volvieron a saber de él. Cuenta que la mamá de los hermanos González Ortega era conocida de su madre y comentaban lo que posiblemente les ocurrió a los jóvenes. Respecto a Juan Cabrera Figueroa, recuerda que era hijo de una vecina que tenían en Villarrica. Y en lo pertinente dice que hasta el día de hoy no ha tenido noticias o conocimiento sobre el paradero de su hermano.

A.44. Joaquín Segundo López Bizama (27 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 752 a fs. 753 (Tomo III), de fs. 853 a fs. 854 (Tomo III), de fs. 973 a fs. 974 (Tomo III), de fs. 981 (Tomo III), fs. 987 (Tomo III), de fs. 988 a fs. 989 (Tomo III), de fs. 2.261 a fs. 2.262 (Tomo VII), de fs. 2.488 (Tomo VII), de fs. 2.623 a fs. 2.624 (Tomo VIII) y de fs. 2.626 (Tomo VIII)

En declaración extrajudicial de fecha 11 de mayo de 2012, rolante a **fs. 752 a fs. 753 (Tomo III)** adujo su carrera funcionaria y en lo adecuado que en la fecha del pronunciamiento militar en el año 1973, era parte de la dotación de la séptima Comisaría de Villarrica, la cual el día del alzamiento fue acuartelada completamente, en esa fecha contaba con unos veinticuatro uniformados entre los que recuerda al capitán Ramón Torrealba Guzmán, suboficial René Reipan, suboficial Mayor Manuel Moncada, sargento Vargas, sargento Corbalán, carabinero Manuel Troncoso, carabinero Luciano Sabinone, carabinero Guido Kruce, cabo segundo Placido Regolo, cabo Raúl Valenzuela y otros que este momento no recuerda. En la fecha de ocurridos los hechos él era el conductor del jefe de unidad, fue en ese puesto que tomó conocimiento de la detención de unos jóvenes por parte del personal de la unidad de Villarrica, los cuales aparentemente pertenecían a las juventudes socialistas, estos jóvenes habrían sido trasladados hasta el regimiento de Temuco, tal como era la costumbre, en vehículos particulares debido a que la unidad no contaba con estos elementos. Posterior a lo señalado, específicamente en el mes de octubre en horas de la mañana escuchó unas ráfagas que provenían del costado del puente Rodrigo Bastidas o puente Toltén, levantándose en forma inmediata y dirigiéndose a la guardia para instrucciones, momentos en los cuales se le ordena dirigirse a la casa del jefe de

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

unidad a quien trasladó hasta la unidad y luego al puente, en el lugar donde observó una gran cantidad de manchas de sangre, escuchando el comentario de las personas que residían en el sector, que los autores de los disparos a unas personas, que estaban junto a ellos, eran los militares. Luego de revisado el sector su jefe de unidad ordenó a personal de bomberos que limpiara el lugar debido a que se encontraba manchado y no se veía. En la época de ocurridos los hechos la gente de Patria Libertar, les prestaba colaboración con vehículos, comida, linternas y otros elementos que les servían para el diario laborar, dentro de estas personas se encontraban Mario Cortez, Carlos Speet, Del Prado y otros que no recuerda. Por otra parte, debe señalar que en la fecha de ocurridos los hechos, su unidad participó en muchos allanamientos en los cuales muchas veces eran órdenes directas del ejército de Chile, también hubieron muchos detenidos por toque de queda y actuaciones políticas, quienes como lo señaló anteriormente eran directamente derivados al regimiento Tucapel de Temuco, hace presente que en estos procedimientos nunca vio personal civil. Sobre Hugo y Elías González Ortega, Juan y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa y Héctor Aguayo Olavarría, no recuerda haberlas conocido. Pero si tiene claro, que Aguayo era vecino de su sector donde residía.

En declaración judicial de fecha 12 de noviembre de 2012, rolante a **fs. 853 a fs. 854 (Tomo III)** ratifica su declaración extrajudicial de fs. 752 a fs. 753 y en lo pertinente suma que después del 11 de septiembre de 1973 estuvieron acuartelados en grado uno por varios meses. Recuerda que constantemente salían a patrullajes por la ciudad y practicaban allanamientos a domicilios particulares y detenciones de civiles que eran traídos al cuartel. Los primeros días hubo varios detenidos que eran encargados por la Fiscalía Militar de Temuco, los que posteriormente fueron llevados todos al regimiento Tucapel de esa ciudad. Posteriormente, recuerda la presencia de dos o tres detenidos que estuvieron varios días en el cuartel, a quienes el capitán Torrealba les dio algunas comodidades. Recuerda la presencia de militares en la zona y en el cuartel. Estos eran comandos y personal fuerza aérea que pasaban de vez en cuando a conversar con el capitán Torrealba. No supo las identidades de estas personas. Su función en la unidad era ser el chofer del capitán. Además, manejaba el único vehículo que había y que era una “campañola y posteriormente un jeep Land Rover” que consiguieron. Preguntado dice que efectivamente la familia Aguayo

vivía cerca de su casa y es posible que este domicilio haya sido allanado por carabineros, pero no lo recuerda, aunque no descartaría esta posibilidad. Que, no conoció a los hermanos Schmidt Arriagada, pero recuerda que una noche poco después del 11 de septiembre de 1973 acompañó al cabo Pedro Bermedo Rojas (fallecido), a buscar dos personas que estaban detenidas en el centro de la ciudad, no recuerda en qué parte. La cosa es que luego de subirlos al vehículo policial, el cabo Bermedo le dijo que no los iba a llevar al cuartel, sino que los liberaría, porque los conocía y eran buena gente. Se trataba de los hermanos Schmidt Arriagada, supone que éste dio las explicaciones al jefe de la unidad, pero no supo nada más de estos, hasta hace poco tiempo cuando una persona de nombre Marcelo Bermedo Lillo, que es hijo del cabo Bermedo, le dijo que hace tres meses llegó a Chile uno de los hermanos Schmidt Arriagada trayendo las cenizas del otro hermano quien habría fallecido en Suiza, país al que huyeron. Posteriormente, hicieron un acto en el puente Rodrigo Bastidas y arrojaron las cenizas al río. En esa ceremonia estuvieron presentes algunos familiares de los hermanos Schmidt Arriagada y Marcelo Bermedo. Consultado agrega que, Marcelo Bermedo le dijo que hasta su casa llegó el hermano de Schmidt Arriagada y los hijos de este, buscando a su colega fallecido para darle las gracias por el gesto que tuvo en 1973. Además, traían una carta escrita por el difunto Schmidt donde expresaba su agradecimiento.

En declaración extrajudicial de fecha 07 de febrero de 2013, rolante a **fs.973 a fs. 974 (Tomo III)** replica sus dichos en cuanto a haber pertenecido a carabineros. En lo concerniente señala que efectivamente días posteriores al golpe de Estado, cuando se encontraba en una fiesta familiar en el domicilio de Enrique Jara y su señora, quienes en esa fecha eran padrinos de su hijo Alex, junto a su señora María Elisa Salamanca Aguilera y otras personas que no recuerda y luego de unas copas comenta a sus compadres que había escuchado que en Curarrehue habían matado al tal “Chachi Aguayo” antecedentes que obtuvo en el interior de la subcomisaría de Villarrica, cuando se encontraban en una conversación de grupo, sin recordar en el momento quién hizo el comentario. Que antes de la desaparición de Héctor Aguayo, su familia le comentó que este muchacho se había ido a Curarrehue, escuchando a los días posteriores el comentario sobre la muerte del “Chachi Aguayo” en Curarrehue.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

En declaración judicial de fecha 26 de marzo de 2013, rolante a **fs. 981 (Tomo III)** ratifica su declaración extrajudicial de fs. 952 a fs. 953. Respecto a lo señalado por doña Laura Pinilla a fs. 940 recuerda que hizo un comentario respecto de lo sucedido con el "Chachi Aguayo en Curarrehue", pero fue algo muy general puesto que, lo que escuchó de parte de algunos colegas en la comisaria. No recuerda quien hizo el comentario ni mayores detalles sobre el mismo.

En diligencia de careo judicial con Enrique del Tránsito Jara Zúñiga, de fecha 27 de marzo de 2013, rolante a **fs. 987 (Tomo III)** ratifica sus declaraciones judiciales de fs. 833 y de fs. 960. Reconoce a la persona que está a su lado como don Enrique Jara Zúñiga, que es su compadre. Lo que asegura este señor no es efectivo porque si bien se enteró por comentarios hechos en la comisaría y por la información de radio sobre la presunta muerte del "Chachi" Aguayo, jamás dijo quiénes habían intervenido en su muerte. Además, sólo recuerda que apareció un cuerpo en Pucón o Curarrehue cuyas características físicas eran parecidas al "Chachi", pero él nunca lo vio ni supo qué pasó con su cadáver. Que, no es cierto lo que el señor Jara señala en el sentido de haberle dicho que hubo ejecutados en Liquiñe y que sus cuerpos fueron inhumados y que se les echó cal encima. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo judicial con Laura Pinilla Fuentes de fecha 27 de marzo de 2013, rolante a **fs. 988 a fs. 989 (Tomo III)** aseveró que ratifica sus declaraciones judiciales de fs. 833 y de fs. 960. Reconoce a la persona que está a su lado como doña Laura Pinilla Fuentes, que es su "comadre". Que lo que asegura esta señora respecto de que tuvo conocimiento de la manera en que murió el "Chachi" Aguayo es cierto, en parte. Porque sólo se enteró de manera muy general. Por lo que recuerda al parecer escuchó una información por la radio del jeep que él conducía y por comentarios en la unidad en que se daba cuenta de la aparición de un cuerpo en el sector de Curarrehue y que aparentemente se parecía físicamente a esta persona. No supo qué pasó con el cuerpo que apareció en Pucón, seguramente los carabineros de esa unidad deben saber. Que no es cierto lo que ella señala en el sentido de haberle dicho que a las personas ejecutadas en el puente Rodrigo Bastidas se les habría abierto el pecho con corvos para que no flotaran. Recuerda que el trato entre los jefes de investigaciones y carabineros en Villarrica era bueno y se comunicaban constantemente. Suma haber conversado varias veces con el chofer del jefe de

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

investigaciones cuando ambos se reunían en el club Radical. Además, en esas reuniones participaban, los jefes de la fuerza aérea que andaban en el sector y Mario Cortés, civil proclive al régimen militar. Se mantiene en sus dichos.

En declaración extrajudicial de fecha 14 de octubre de 2015, rolante a **fs. 2.261 a fs. 2.262 (Tomo VII)** insiste que su vida funcionaria ya ha sido entregada en diversas oportunidades. En lo atinente señala que por el grado que ostentaba el año 1973, sus labores se remitían a la conducción de vehículos policiales pertenecientes a la subcomisaria de Villarrica, siendo ocupado gran parte del tiempo por el jefe de subcomisaria. En relación a las detenciones de índole político después del día 11 de septiembre de 1973, dice que la mayoría de estas detenciones se efectuaron la primera semana de ocurrido el golpe de Estado, recuerda bien esta situación ya que estuvieron acuartelados casi un mes, recordando que parte de estos detenidos eran llevados a las caballerizas en donde eran interrogados por personal de la fuerza aérea y en oportunidades el cabo de carabineros Araneda y otros que no recuerda en estos momentos, posterior a eso, estos detenidos eran llevados a Temuco, específicamente al regimiento Tucapel. Dentro de estos detenidos, recuerda a una mujer cuyo apellido era Puchi, la cual trasladó directamente al regimiento Tucapel y a una persona de apellido Bastias, el cual trabajaba en la Municipalidad de Villarrica, además de Mario Cortes el cual era patrón de fundo en la ciudad y fue detenido por personal de la subcomisaria de Villarrica, debido a que estaba involucrado en el encubrimiento de una persona de apellido Ortigosa. Preguntado refiere que los carabineros que participaron en los allanamientos y detenciones por temas políticos recuerdan al suboficial mayor Cristóbal Moncada, sargento segundo Rafael Corvalán Tello, suboficial René Reipan, cabo primero Raúl Vargas Escobar, cabo primero Héctor Fuica Figueroa, cabo primero Federico Muñoz Mardones y el cabo primero Albarran. Respecto de la víctima Ricardo Aguayo Olavarría, señala que efectivamente participó en su detención, específicamente en la conducción del vehículo que acompañó a funcionarios de la fuerza aérea quienes portaban el bando respectivo para la aprehensión de la persona antes señalada, además de su persona se encontraba a cargo de su carro el suboficial Raipán, además de otros funcionarios los cuales no recuerda, pero tendrían que haber sido alguno de los mencionados en el párrafo anterior. Luego de la detención de Aguayo recuerda que fue llevado hasta la subcomisaria en donde

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

quedó estacionado fuera y personal fuerza aérea, lo ingresó al interior de la unidad quedando este detenido en dicho cuartel, sin saber en qué condición quedo el detenido. Pasado unos días el personal de la unidad comento que Aguayo había sido trasladado a Temuco. Afirma que efectivamente participó como conductor en varias detenciones políticas junto a personal militar y de la fuerza aérea, detenidos que eran llevados por este personal a la subcomisaria donde eran interrogado en los calabozos o en las caballerizas, pero debe señalar que nunca estuvo presente en dichos interrogatorios, pero era comentario de todo el personal, ya que, se les estaba prohibido involucrarse, no así el personal que estaba destinado para este servicio. Dice que nunca tuvo conocimiento de posibles muertes al interior de la unidad, como tampoco escucho algo de esa magnitud. Que nunca participó en interrogatorios, ni menos en torturas sólo prestó colaboración en la conducción cuando se realizaron detenciones políticas.

En declaración judicial de fecha 08 de agosto de 2016 rolante a **fs. 2.488 (Tomo VII)** ratifica su declaración extrajudicial de fs. 2.261 a fs. 2.262. Agrega que después del 11 de septiembre de 1973 hubo otros carabineros que también cumplieron las funciones de conductores como Moneada y Albarrán, Raipán y Troncoso. Por esto él no siempre andaba en los patrullaje o allanamientos que se produjeron en Villarrica. Desconoce las identidades de los efectivos de la fuerza aérea que llegaron a la subcomisaria de Villarrica. Estos se entendían directamente con el jefe de la unidad, capitán Ramón Torrealba. Estos efectivos llegaban por tierra y siempre eran distintos. Recuerda que en una oportunidad llegó, un jeep con una ametralladora empotrada atrás. En una oportunidad aterrizaron tres helicópteros de los cuales bajaron militares con sus rostros pintados. Preguntado dice que por orden del capitán Torrealba le correspondió acompañar al personal de la fuerza aérea hasta la casa de Ricardo Aguayo Olavarría, quien fue detenido y llevado hasta la unidad policial de Villarrica. Allí fue ingresado, desconociendo lo que pudo haber sucedido con éste. Le consta que los de la fuerza aérea interrogaban detenidos en las caballerizas y en los calabozos, pero a ellos les estaba prohibido ingresar a esos recintos salvo el personal autorizado, que eran los anteriormente mencionados. No supo de ejecuciones al interior de la unidad de Villarrica.

En declaración judicial de fecha 30 de mayo de 2017, rolante a **fs. 2.623 a fs. 2.627 (Tomo VIII)** arguye que la historia que él sabe es que a los ocho

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

jóvenes los detuvieron en Pucón (porque se iban arrancando para Argentina) y posteriormente los trasladaron a Temuco. Luego no entiende como el señor Aguayo se les arrancó de Temuco. Consultado dice que el mayor Torrealba era subalterno de Luis Bustos Letelier, que era el comisario jefe de Pucón. Entonces el mayor Torrealba debe tener conocimiento de lo que sucedió, pues el comisario Bustos Letelier le debe haber dado cuenta al mayor. El episodio del puente Las Batías sucedió de la siguiente forma: se encontraban acuartelados en la unidad (Villarrica) cuando. Escucharon el ruido del tiroteo que era ensordecedor. Fue entonces cuando junto a Vargas, Corvalán, Reipan, Sanhueza se dirigieron hacia el puente. Al llegar, los demás funcionarios se bajaron y se dieron cuenta de las manchas de sangre. Luego se trasladaron hasta la comisaria a dar cuenta al mayor Torrealba, el cual se encontraba en su casa e inmediatamente dirigió a la comisaria. Al tomar conocimiento el mayor Torrealba fue a ver hacia donde se habían ido los militares. Quiere señalar que el subalterno (Reipan) fue quien ordenó a los bomberos si podían lavar el sitio. No recuerda en que mes del año 1973 ocurrió eso (pero fue después del 11 de septiembre de 1973). Se le pregunta por otro hecho.

En diligencia de careo con Ramón Armando Torrealba Guzmán, de fecha 30 de mayo de 2017, rolante a **fs. 2.627 (Tomo VIII)** reconoce a la persona que está sentada a su lado como Ramón Torrealba Guzmán, el mayor en esos años cuando él trabajó en Villarrica. El tribunal le lee en lo pertinente sus declaraciones de fs. 2.623 a fs. 2.624 a lo que el deponente señala que ratifica aquella declaración, indicando que no tiene nada más que agregar.

A.45. Francisco Raúl Sandoval Hernández (24 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 758 a fs. 759 (Tomo III), de fs. 851 (Tomo III), de fs. 2.263 a fs. 2.264 (Tomo VII) y de fs. 2.490 a fs. 2.491 (Tomo VII).

En declaración extrajudicial de fecha 11 de junio de 2012 rolante a **fs. 758 a fs. 759 (Tomo III)** aduce en lo adecuado que para el año 1973, ostentaba el grado de carabinero y se desempeñaba en la subcomisaria de Villarrica, la cual por ese entonces estaba a cargo del capitán Torrealba. Que, para la fecha del pronunciamiento militar, se les ordenó acuartelarse en la unidad policial, situación que se prolongó durante casi todo el año. Desde el día del pronunciamiento militar, se les ordenó efectuar también patrullajes para controlar el horario de toque de queda, recordando que en algunas oportunidades hubo detenidos por vulnerar

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

este horario. También hace presente, que hubo operativos o allanamiento, pero a él nunca le tocó participar, ya que a estos iba solamente el personal más antiguo de la unidad. Respecto a la presencia de personas detenidas en la unidad policial, puede hacer mención que de los operativos que se efectuaban casi siempre llegaban personas detenidas, las cuales eran interrogadas por el capitán Torrealba y su escribiente de nombre Santiago Candía. Según recuerda, el capitán después de interrogar a las personas confeccionaba un oficio en el cual remitía el listado de personas detenidas junto a sus declaraciones hacia el regimiento Tucapel, también recuerda, en una oportunidad en que los detenidos fueron llevados hasta el regimiento en una “micro”, recuerda esta situación porque a él se le encomendó acompañar a estos detenidos junto al sargento primero Corvalán, el carabinero Espinoza le practicó primeros auxilios a Sergio Delgado Peña. En esa oportunidad se entregaron los detenidos en la comandancia del regimiento Tucapel de Temuco. Señala que el personal de inteligencia de la unidad policial estaba conformado por los carabineros de apellidos Medrano y Espinoza, quienes vestían de civil. Que era frecuente que llegara hasta la unidad policial, personal de ejército y la fuerza aérea de Chile a consultar si tenían detenidos en la unidad policial, recordando que en la mayoría de los casos se entendían directamente con el capitán Torrealba. Con relación a lo anterior, señala que existía unas instalaciones de la fuerza aérea en el sector Catrico, el cual estaba distante a unos ocho kilómetros desde Villarrica a Freire. Respecto a Hugo y Elías Gonzalez Ortega, Juan y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa, Raúl Figueroa Burkhardt y Héctor Aguayo Olavarría debe señalar que no recuerda haber escuchado sus nombres alguna vez. En relación con la fotografía que se le exhibe y cuya identidad se le da a conocer como Héctor Aguayo Olavarría, señala que no le es conocido su rostro. Nunca supo respecto a alguna ejecución que se haya llevado a cabo en el puente Rodrigo Bastidas de Villarrica.

En declaración judicial de fecha 12 de noviembre de 2012, rolante a **fs. 851 (Tomo III)** ratifica su declaración extrajudicial de fojas 738 a 739. Y que, por rumores de personas en el pueblo, supo que se ejecutó a personas en el puente de Villarrica y sus cuerpos habrían sido lanzados al río. Desconoce qué pasó con los cuerpos de estas personas. Que efectivamente hubo allanamientos efectuados por carabineros a domicilios en Villarrica, pero él no participó de aquellos. El personal más antiguo, sargentos y cabos, era quien participaba de estas

actividades. Los detenidos eran interrogados en la oficina del capitán Torrealba y participaban el escribiente Candía y el sargento Raipán. También recuerda que personal de la fuerza aérea y de ejército pasaban a preguntar si había detenidos y además conversaban con el capitán Torrealba. No recuerda que hayan dejado u sacado detenidos. Le consta que los carabineros Medrano y Espinoza pertenecían a la comisión civil, puesto que no vestían uniforme. Estos no cumplían servicios y se entendían directamente con el capitán Torrealba. Desconoce qué actividades realizaban.

En declaración extrajudicial de fecha 15 de octubre de 2015, rolante a **fs. 2.263 a fs. 2.264 (Tomo VII)** replica en lo pertinente su desempeño funcionario para 1973 y que sus labores como carabinero tenían relación con el servicio de guardia donde hacía el turno de cuartelero, vigilante y servicios en la población. Que, a los pocos días de ocurrido el pronunciamiento militar, le correspondió acompañar a funcionarios de mayor grado en el traslado de unos detenidos a la ciudad de Temuco, específicamente al regimiento de Infantería Tucapel, donde fueron entregados en la comandancia de esa unidad militar mediante un oficio firmado por el capitán Torrealba. Estos detenidos, fueron trasladados en un bus siendo el funcionario a cargo de esa diligencia el sargento primero Rafael Corvalán Tello, acompañado por el cabo primero Sergio Delgado, el carabinero Ricardo Espinoza y le parece mucho que como chofer iba el carabinero Joaquín López. Recuerda bien esta situación, ya que fue la única vez en que le correspondió trasladar detenidos de este tipo a Temuco, recordando que dentro del grupo de detenidos iba una mujer de apellido Puchi, quien al ser entregada en el Tucapel quedó inmediatamente en libertad, incluso la llevaron de regreso a Villarrica. Respecto a Ricardo Virginio Aguayo Olavarría, es primera vez que escucha su nombre e ignora todo antecedente relacionado con su detención. Sobre lo que se le comenta en este acto en el sentido que la víctima fue detenida el día 13 de septiembre en su domicilio particular de calle Montt de Villarrica, debe señalar que no le correspondió participar en su detención, solo tiene claro que hubo personal de su unidad que participó en detenciones durante esos días, pero ignora sus identidades, solo sabe que en estos casos participaba el personal más antiguo de la unidad, quedando los más nuevos en está, cumpliendo labores de resguardo. Por otra parte, debe señalar que los detenidos fueron interrogados por el capitán Torrealba, juntamente con el escribiente de la unidad, cuyo nombre

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

correspondía a Santiago Candía ignora mayores antecedentes, también participaban estas labores el sargento primero Raipán, quien era el “brazo derecho” del capitán, recordando que sus declaraciones fueron remitidas con el oficio al regimiento. Respecto a su consulta, debe señalar que es efectivo que vio personal de la fuerza aérea y del ejército de Chile en la ciudad, ellos se presentaban con su jefe de unidad y generalmente seguían viaje a la cordillera, recordando que nunca los vio que trajeran o retiraran detenidos de la comisaria. Señala que esta fue la única vez que vio detenidos por temas políticos en la unidad, recordando que hubo otras oportunidades, pero en menores cantidades y por infracción al toque de queda, quedando en libertad al día siguiente.

En declaración judicial de fecha 08 de agosto de 2016, rolante a **fs. 2.490 a fs. 2.491 (Tomo VII)**, ratifica su declaración extrajudicial de fojas 2.263 a 2.264. Preguntado dice que hubo allanamientos efectuados por carabineros a domicilios en Villarrica, pero él no participó de aquellos. El personal más antiguo, sargentos, cabos y carabineros antiguos, era quien participaba de estas actividades las que eran ordenadas por el capitán Torrealba. Las patrullas eran conformadas por los carabineros Moneada, Raipán, Corvalán, Garrido, Buchhorts, Fuica, Muñoz Mardones, Muñoz Salgado, Navarro que era chofer, Salas, Ulloa, Vargas, Albarrán, Bermedo, Espinoza Krause, López que era otro chofer, Medrana y Sabignones. Respecto de su consulta, algunos detenidos eran interrogados en la oficina del capitán Torrealba y participaban el escribiente Candía y el sargento Raipán. No recuerda haber visto detenidos políticos en las caballerizas. Que sí los hubo por toque de queda, ya que, los calabozos estaban llenos. Le consta que los carabineros Medrano y Espinoza pertenecían a la comisión civil puesto que no vestían uniforme. Ellos no cumplían servicios y se entendían directamente con el capitán Torrealba. Respecto del personal de la fuerza aérea y de ejército, estos pasaban a preguntar si había detenidos y además conversaban con el capitán Torrealba. No recuerda que estos hayan traído o sacado detenidos, ni los vio al interior de la unidad policial. Respecto de los hechos materia de esta investigación puede indicar que no conoció a Ricardo Virginia Aguayo Olavarría, no participó de su detención ni supo que haya sido torturado al interior de las caballerizas de la unidad.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

A.46. Sergio Zapata Camus (33 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 791 a fs. 792 (Tomo III), fs. 1.242 (Tomo IV), fs. 1.243 (Tomo IV), fs. 1.244 (Tomo IV) y fs. 1.716 (Tomo V).

En declaración judicial de fecha 07 de agosto de 2012, rolante a **fs. 791 a fs. 792 (Tomo III)** (Cuya copia consta a 1.716 Tomo V). El Tribunal le lee la declaración de fojas 766 a 767, a lo que el deponente indica que efectivamente fue a conversar con el señor Podlech, no recuerda fecha exacta, pero está seguro que fue el año 1973, por el caso de Francisco Matta Haro, quien vivía en el sector de Palguin, entre Pucón y Curarrehue, a quien se le atribuía ser financista del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Sin embargo, por su relación de amistad con el señor Matta Haro, sabía que era falso lo que le imputaban. Fue a hablar con el señor Podlech, ya que éste tenía incidencia en la Fiscalía Militar, el llevaba el caso del señor Matta, pero no recuerda si era o no fiscal militar. Dice estar seguro de que éste tomaba decisiones importantes en la Fiscalía Militar, por eso fue a conversar con él. No recuerda cual fue la decisión que éste tomó al respecto. No conversó con el señor Podlech por otros casos que se tramitaran en la Fiscalía Militar. De los nombres que se le han dado a conocer, que corresponderían a personas inhumadas ilegalmente, desconoce cualquier tipo de información al respecto. Comenta otros hechos.

En declaración judicial de fecha 01 de agosto de 2013, rolante a **fs. 1.243 (Tomo IV)** aquilata que atendido el tiempo transcurrido no está en condiciones de poder afirmar que el señor Podlech tomaba decisiones en la fiscalía. Efectivamente fue a conversar con el señor Podlech, porque así se lo insinuó el hijo de Francisco Matta Haro, y que además lo acompañó en la diligencia. No tomó contacto con ningún militar, porque no los conocía y porque el hijo de Matta Haro le señaló que era con Podlech con quien debía conversar.

En diligencia de careo con Oscar Podlech Michaud de fecha 01 de agosto de 2013, rolante a **fs. 1.244 (Tomo IV)** ratifica su declaración judicial de fs. 1.242 a fs. 1.243, en el sentido de que conversó con Alfonso Podlech Michaud, con quien se le carea en este acto, respecto de la situación procesal de Francisco Matta Haro. Se mantiene en sus dichos.

A.47. Héctor Guillermo Sepúlveda Chacón (32 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 810 a fs. 811 (Tomo III), de fs. 834 a fs. 835 (Tomo III) y de fs. 2.485 (Tomo VII).

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

En declaración judicial de fecha 28 de septiembre de 2012, rolante a **fs. 810 a fs. 811 (Tomo III)**, aquilata en lo pertinente que para el año 1973 era parte de la dotación de la tenencia de Curarrehue, con el grado de carabinero. Recuerda como parte de la dotación a los carabineros de apellido Muñoz y Torres. Sólo recuerda a Héctor Aguayo, ya que desde niño vivió en Curarrehue y era común verlo en esa localidad. Pero no sabe nada más con relación a esos casos. Recuerda que unos días después del 11 de septiembre de 1973, llegaban helicópteros con personal de la fuerza aérea, que se posaban en un terreno colindante a la tenencia y que iban con órdenes superiores para detener a determinadas personas de la localidad. Estos fueron encargados de detener a personas y trasladarlas en helicóptero. Cuando llegaban los helicópteros, por órdenes superiores tuvo que acompañarlos un suboficial de carabineros de apellido Castilla, para que les señalara donde vivían las personas que andaban buscando. Quien lo nombró para acompañar al personal de la fuerza aérea era el jefe de la tenencia. El Tribunal le lee el documento que rola de fojas 656 del proceso, responde que del listado que se le da a conocer, sólo recuerda a Castilla, ya que tiene entendido que las otras personas estuvieron antes del año 1973 en la tenencia. Nunca supo de supuestas ejecuciones de detenidos u otras personas en Villarrica o Pucón.

En declaración extrajudicial de fecha 09 de agosto de 2012, rolante a **fs. 834 a fs. 835 (Tomo III)**, en lo atinente que para el año 1973, ostentaba grado de carabinero y se desempeñaba en el retén de Curarrehue, a cargo de un suboficial mayor, pero a los días después del pronunciamiento militar llegó a hacerse cargo de esta unidad un teniente cuyo nombre no recuerda, pero formaban parte de la dotación Axel Victoriano y Muñoz. Respecto a la presencia de personas detenidas en el retén Curarrehue, debe señalar que nunca le tocó ir a detener personas en la comuna de Curarrehue por temas políticos, pero sí tiene claro que días posteriores al 11 de septiembre de 1973, comenzaron a llegar helicópteros de la Fuerza Aérea de Chile, siendo sus tripulantes los encargados de detener a las personas que traían consignadas en un listado. Según su recuerdo, el oficial a cargo del helicóptero se entrevistaba con el jefe del retén, quien ordenaba a los carabineros más antiguos para que guiaran a los militares a los domicilios de las personas requeridas, las cuales las detenían y llevaban a Temuco. Por los antecedentes que maneja, este helicóptero hacía escala en la subcomisaria de Pucón, no

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

teniendo claro por qué motivo se detenía en esa unidad policial. Respecto a su consulta, debe señalar que no era frecuente la presencia de carabineros de Pucón en su jurisdicción, recordando solamente una vez que el capitán Bustos Letelier, jefe de la subcomisaria de Pucón, llegó hasta el retén en un Jeep junto a su conductor de apellido Garrido, pero solamente fue a dar algunas instrucciones al suboficial a cargo del retén. Esto fue pocos días después del 11 de septiembre de 1973. En cuanto a Hugo y Elías González Ortega, Juan y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa, Héctor Aguayo Olavarría, Raúl Figueroa Burkhardt y Alejandro Escobar Vásquez, solo recuerda a Héctor Aguayo Olavarría, ya que conocía a su padre, quien vivía en la comuna de Curarrehue y hace presente que a la fecha ignoraba que el fuera uno de los detenidos desaparecidos de esta zona.

En declaración judicial de fecha 22 de julio de 2016, rolante a **fs. 2.485 (Tomo VII)**, ratifica su declaración extrajudicial de fs. 2.360 a fs. 2.361 (desglosada de estos autos a rol 1-2019 del ingreso del Juzgado de Letras de Pucón). No agrega más antecedentes.

A.48. Rogelio Hernán Schmidt Muñoz (17años a la época de los hechos). **En declaración judicial** de fecha 11 de enero de 2013 rolante a **fs. 944 a fs. 946 (Tomo III)**, asevera que conoció a los hermanos Schmidt Arriagada, ya que eran de Villarrica y como era un pueblo chico, todas las personas se ubicaban. No tienen ningún tipo de relación familiar, sólo es un alcance de apellido. Recuerda que el día 12 de septiembre de 1973, carabineros de Villarrica llegaron a buscar a sus hermanos, Luis y Guillermo, ya que en esa época militaban en el partido Ad-Mapu y eran partidarios del gobierno de Salvador Allende. En esa oportunidad iban con otra persona detenida de apellido Donoso. Relatando lo acontecido, aduciendo apremios por parte de los carabineros que llegaron hasta su domicilio y participaron en sus torturas entre ellos Albarrán, Salas, Krause y López Bizama. Comunicando que luego fue conducido a la comisaría de Villarrica y al día siguiente fue trasladado al regimiento Tucapel de Temuco. Recuerda que en ese lugar los dejaron en el patio y posteriormente los llevaron a la cárcel de Temuco. Que estuvo treinta y dos días, detenido en la cárcel de Temuco, pero no le tocó ir nuevamente al regimiento Tucapel, detallando a quienes vio detenido y recuerda que, según lo que les informaron los gendarmes, una persona que era fiscal, en la misma cárcel, fue a interrogarlo y le

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

preguntó por qué estaba detenido. Le dijo que iba a tratar de aclarar su caso. Recordando que en la cárcel de Temuco había mucha gente de Villarrica, pero nunca vio a los hermanos Schmidt Arriagada. Con relación al regimiento Tucapel de Temuco no puede decir lo mismo, ya que estuvo muy poco tiempo en ese lugar. Ilustrado otros hechos.

A.49. Raúl Edgardo Aedo Aedo (23 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 840 a fs. 841 (tomo III) y de fs. 919 a fs. 920 (tomo III).

En declaración extrajudicial de fecha 09 de agosto de 2012, rolante a **fs.840 a fs. 841 (Tomo III)**, expresó en lo pertinente que desde el año 1966 que se desempeña como botero en el sector del embarcadero Municipal, lugar en el cual le correspondía trasladar turistas y realizar labores de pesca en el interior del río Toltén. Que luego del golpe de Estado, ocurrido en septiembre de 1973, se les permitió en el mes de octubre comenzar con las labores de pesca, fue así como en muchas oportunidades le tocó observar en el interior del río cadáveres de personas flotando a la deriva, perpetua su relato en ese sentido. En cuanto a Hugo y Elías Gonzalez Ortega, Juan y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa, Héctor Aguayo Olavarría, Raúl Figueroa Burkhardt y Alejandro Escobar Vásquez, recuerda a Raúl Figueroa Burkhardt y a René Schmidt, a quienes conocía y de quienes existió el comentario por boteros antiguos, que el cuerpo de Figueroa se encontraba boca abajo en el río y lo giraron reconociéndolo en forma inmediata, también habrían visto el cuerpo de Schmidt en las mismas condiciones, comentarios que escuchó uno de los fines de semana cuando le correspondía pescar. Desconoce quienes habrían fusilado personas en el puente y que solo por rumores habrían sido militares y carabineros.

En declaración judicial de fecha 14 de diciembre de 2012, rolante a **fs. 919 a fs. 920 (Tomo III)** ratifica su declaración extrajudicial de fs. 820 a fs. 821 (las que constan en estos autos de fs. 840 a fs. 841 Tomo III). Y en lo pertinente rectifica aquella parte en que se menciona a René Schmidt, ya que el nombre es Ricardo Schmidt conocía a Ricardo Schmidt, porque fueron compañeros de colegio y con Figueroa vivían en la misma población. Recuerda haber visto no más de siete cadáveres flotando en el río Toltén. Que se notaba que todos los cuerpos eran de adultos. Fue la única vez que vio cadáveres, en esas condiciones, en el río Toltén. En una primera oportunidad se comentaba que los militares habían sido los responsables de las muertes. Pero después se rumoreaba que los carabineros

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

de Villarrica habían tenido que ver con eso. Agrega que hay versiones que los hermanos Schmidt estaban en Argentina, pero a él le parece raro, porque supieron que sus cuerpos estaban flotando muertos en el río Toltén.

A.50. Héctor Ulises González Castro (32 años para la época de los hechos). Quien declaró de fs. 876 a fs. 878 (Tomo III), de fs. 882 a fs. 883 (Tomo III) y de fs. 885 a fs. 886 (Tomo III).

En declaración judicial de fecha 27 de noviembre de 2012, rolante a **fs. 876 a fs. 878 (Tomo III)**, en lo pertinente sostiene que, para el 11 de septiembre de 1973, se encontraba sirviendo en la Policía de Investigaciones de Villarrica, era jefe de unidad. Tenían ocho funcionarios a su cargo, recuerda a Álvarez, chofer y hombre de confianza. Una vez producido el golpe militar, recuerda que se reunieron con su personal y les dijo que toda diligencia debía ser comunicada a él. Era el jefe y él debía resolver sobre los conflictos que se generaran. En Villarrica se movilizaban en un jeep. No tuvieron contacto con otras instituciones, como carabineros o ejército, después del 11 de septiembre de 1973. No participó de reuniones con las fuerzas de orden o militares. Recuerda que ese día llegó un camión del ejército a preguntarles con quien estaban, así que les dijo que iba a obedecer las órdenes superiores. Que el regimiento en septiembre de 1973 pedía que se les llevara detenidos a dirigentes sociales de Villarrica. Los solicitaba telefónicamente, sin órdenes escritas. Al ver esta situación, llamo al Fiscal Militar Alfonso Podlech Michaud y coordinaron una reunión para analizar la situación en la que regularizaron la forma en que se solicitaban a los detenidos. Desde esa fecha el Fiscal Militar Podlech, ordenó que toda se hiciera por escrito. Recuerda como detenidos políticos a toda la directiva del campamento "Che Guevara", que se presentaron voluntariamente en la comisaría. Los que fueron enviados detenidos a la Fiscalía Militar de Temuco. Que todos regresaron sin problemas e incluso lo pasaron a ver. Relata otras situaciones en el contexto de sus labores y agrega que un amigo apodado "El turquito", le contó que a varias personas las habían matado en el puente y que los cadáveres se iban por el río. Fueron y efectivamente había manchas de sangre en el puente. Que los comentarios sobre estas personas muertas se relacionaban con unos jóvenes que se iban hacia Argentina, los tomaron detenidos en Curarrehue y los habían fusilado en el puente de Villarrica. Recordando que estos jóvenes arrendaban una casa frente al Cuartel de Investigaciones. Eran catorce jóvenes, aproximadamente, los que vivían en

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

ese lugar, entre dieciocho a veinte años. Proclama que llamó a su jefe Carlos Aranda Salazar (fallecido), a quien le dio cuenta de lo ocurrido. Éste le dijo que iba a darle cuenta al director general de investigaciones. También se le hizo presente sobre esta situación a don René García Villegas. Manifestó que Torrealba era el oficial más antiguo de la zona, era el jefe de la zona Villarrica - Pucón, y debe saber sobre esas muertes.

En declaración judicial de fecha 29 de noviembre de 2012, rolante a **fs. 882 a fs. 883 (Tomo III)**, ratificó la declaración judicial de fojas 856 (la que consta en estos autos a fs. 876 a fs. 878 Tomo III), en lo atinente dice que el único procedimiento que se relaciona con el tableteo de metralletas en el puente Rodrigo Bastidas de Villarrica fue el que mencionó en su declaración, es decir, los ocho jóvenes desaparecidos que vivían frente a la Policía de Investigaciones de Villarrica. Narra a otros hechos y en cuanto a las ejecuciones que se efectuaron en el puente de Villarrica no las asocia con detenidos de Liquiñe, sino con los jóvenes de la localidad. Que había presencia de fuerza aérea en la comuna. Sólo fue una vez que escuchó sonidos de metralletas. Se le pregunta por otros hechos y agrega que cuando supieron lo ocurrido en el puente, no se investigó nada, porque presumió que la fuerza aérea o el ejército tenían relación con estos hechos, ya que había una fuerte presencia de ese personal en la comuna. Preguntado inquiere que carabineros tenían fusiles, al igual que la fuerza aérea y ejército. Que meses después habló con el magistrado y como no sabían quienes habían sido los ejecutados, pusieron un aviso en la radio Villarrica, para que los familiares de las víctimas se acercaran a carabineros, el juzgado o investigaciones para dar cuenta de lo sucedido con estas personas. Nadie se acercó a hacer denuncias. No le consta que el oficial Torrealba de carabineros le haya dado cuenta de esos hechos al juez de Villarrica. Que considerando la situación que se vivía en ese momento, cree que es difícil que el capitán Torrealba no haya escuchado los tableteos de metralletas aquella noche posterior al 11 de septiembre, ya que la comisaría estaba ubicada a dos cuadras del puente Rodrigo Bastidas de Villarrica.

En diligencia de careo con Ramón Torrealba Guzmán con fecha 29 de noviembre de 2012, rolante a **fs. 885 a fs. 886 (Tomo III)**, reconoce a la persona que tiene a su lado como el capitán Ramón Torrealba, comisario de carabineros de Villarrica el año 1973. Ratifica en lo pertinente la declaración judicial de fs.856 (las que constan en estos autos de fs.876 a fs. 878 Tomo III). Destaca que la

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

fuerza aérea utilizaba metralletas y carabineros usa fusiles sic. El sonido de ambas armas es muy distinto, el de metralletas es un sonido constante y el de los fusiles es una descarga más sólida. Se mantuvo en sus dichos.

A.51. Jaime Aliro Soto Quezada (33 años para la época de los hechos). **En declaración judicial** de fecha 11 de enero de 2013, rolante a **fs. 947 (Tomo III)**, musito que conocía desde pequeño a Héctor Aguayo Olavarría, ya que era amigo de su padre de nombre Francisco Aguayo. Eran del mismo sector de Curarrehue. Supo que después del 11 de septiembre del año 1973, Héctor Aguayo Olavarría y un hermano de éste, habrían sido detenidos por una patrulla militar y muertos por ésta. Se comentó que los habían asesinado en el puente Rodrigo de Bastidas, de Villarrica. Todo lo supo solo por comentarios que se hicieron en el pueblo. Que nunca colaboró con vehículos de su propiedad ni materiales a carabineros de Pucón. Sin embargo, el contacto con carabineros era cercano. Recuerda que el capitán de carabineros de Pucón era Luis Bustos Letelier, con quien eran compañeros en el club de Leones de Pucón. El Tribunal le lee en lo pertinente la declaración que rola de fs. 730 a fs.731, el deponente señaló que: No es efectivo lo declarado en el sentido que haya pertenecido a Patria y Libertad. Durante aquella época no perteneció a ningún partido político ni grupos relacionados con estos. Lo que en aquella época integró fue un grupo de personas que se preocupaba por los acontecimientos en la comuna.

A.52. Enrique Del Tránsito Jara Zúñiga (39 años para la época de los hechos). Quien declaró de fs. 971 a fs. 972 (Tomo III), de fs. 983 a fs. 984 (Tomo III) y de fs. 987 (Tomo III).

En declaración extrajudicial de fecha 7 de febrero de 2013, rolante a **fs. 971 a fs. 972 (Tomo III)**, relato en lo tocante que a los días posteriores al 11 de septiembre de 1973, cuando se encontraba en una reunión familiar, entre los cuales se encontraba el carabinero Joaquín López perteneciente a carabineros de Villarrica, quien le señaló que el vecino apodado "El Chachi Aguayo", había sido muerto con otros jóvenes camino a Curarrehue por personal que no era de la zona, los cuales andaban vestidos con uniformes de las distintas fuerzas armadas. Respecto a lo anterior, en la misma conversación señaló que dicha situación la habría escuchado en su unidad policial desconociendo mayores antecedentes.

En declaración judicial de fecha 27 de marzo de 2013, rolante a **fs. 983 a fs. 984 (Tomo III)**, ratifica declaración extrajudicial de fs. 950 a fs. 951 (las que

constan en estos autos de fs.971 a fs. 972 Tomo III), y comentó en lo pertinente que le dijo al mayor de los hermanos de Héctor Aguayo, lo que el carabinero López le había contado sobre el destino del "Chachi". En aquel tiempo Ricardo Aguayo estaba muy asustado porque lo andaban siguiendo a él también. Incluso fue detenido en varias oportunidades. Consultado dice que lo que el Carabinero López contó en su casa son hechos que realmente ocurrieron. Además, él le señaló que el personal que participó en la ejecución del "Chachi" y sus amigos era de afuera puesto que él no reconoció a ninguna persona. Le dijo que el grupo era integrado por militares, carabineros y otros más. Esta información la obtuvo en la comisaría, por lo que presume que el personal de esa unidad estaba al tanto de lo ocurrido. Afirma que el carabinero Joaquín López no era un hombre mentiroso ni le gustaba andar inventando historias, por eso cree que sus dichos son creíbles. Que efectivamente su casa fue allanada por carabineros en una oportunidad en que Ricardo Aguayo estaba en su domicilio. Previamente habían allanado la casa de los Aguayo. Este allanamiento fue practicado por carabineros de Villarrica. Que constantemente el carabinero López llegaba a su casa y contaba historias de ejecuciones ocurridas en Liquiñe. En este lugar, según López, inhumaron varias personas y les echaron cal encima. No recuerda haber escuchado de parte del señor López una narración respecto de lo ocurrido con las personas ejecutadas sobre el puente Rodrigo Bastidas ni que posteriormente sus cuerpos hayan sido dinamitados. Quizás no estuvo presente cuando este carabinero le contó eso a su señora.

En diligencia de careo con Joaquín López Bizama, con fecha 27 de marzo de 2013, rolante a **fs. 987 (Tomo III)**, ratifica declaración judicial de fs. 962 a fs. 963 (la que consta en estos autos de fs.983 a fs.984 Tomo III). Reconoce a la persona que está a su lado como el carabinero Joaquín López de quien ha hecho referencia. Está seguro de que López le dijo esto, porque de dónde lo iba a sacar, si nadie más llegaba a su casa contando ese tipo de historias. Se mantiene en sus dichos.

A.53. Ricardo Secundino Figueroa Burkhardt (27 años a la época de los hechos). **En declaración extrajudicial** en la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de fecha 29 de agosto de 1990, rolante de **fs. 1.049 a fs. 1.050 (Tomo III)**. Expuso que el día 14 de septiembre un grupo de muchachos vinculados al partido socialista de Villarrica, su hermano, dos hermanos de

apellido Gonzalez y uno o dos de apellido Schmidt, deciden huir hacia Argentina, por la ruta de Pucón. Hasta ese día estos jóvenes no habían sido perseguidos ni hostigados y piensa que su huida había mucho de aventura. No hay certeza de su detención, pero hasta hoy no se han vuelto a tener noticias de ellos. En los días posteriores hubo un suicidio en el río Toltén y en la búsqueda de su cuerpo, alguien vio el de su hermano, un señor Villalobos. Agregó que en Villarrica se sabe que hubo fusilamientos en el río Toltén.

A.54. Sergio Muñoz Salgado (47 años para la época de los hechos.) **En declaración judicial** de fecha 21 de junio de 2013, rolante de **fs.1.203 a fs.1.204 (Tomo IV)**, informa en lo pertinente que para septiembre de 1973 trabajaba en la subcomisaria de carabineros de Villarrica y tenía el grado de cabo primero. Al mando de la Unidad estaba el capitán Ramón Torrealba Guzmán. Recordando a Rene Raipán Cabrapán, Rafael Corvalán, Guillermo Buchhorts, Héctor Fuica Figueroa, Federico Muñoz Mardones, José Salas Cruces, Osvaldo Ulloa Jara, Raúl Vargas Escobar, Néstor Albarrán Mandujano, Pedro Bermedo Rojas, Ricardo Espinoza Pailaqueo, Guido Krause Pardo, Joaquín López Bizama, Medardo Medrano Torres, Plácido Regollo Zúñiga, Luciano Sabignones y Guido Troncoso Ávila. Después del 11 de septiembre de 1973, hubo detenidos políticos en la subcomisaria de Villarrica, los que eran traídos por los militares. Estos eran interrogados en dependencias de la unidad por los militares y el mismo día o al día siguiente eran trasladados a Temuco. Recuerda haber trasladado a cuatro detenidos hasta la segunda Comisaría de Carabineros de Temuco. Entre los detenidos iba un profesor de nombre Hugo Carriel, a quien él conocía. No recuerda que algún detenido haya sido ejecutado en Villarrica. Sin embargo, en una oportunidad en que él se encontraba de franco en su domicilio escucho en la noche varios disparos que provenían del sector del puente Rodrigo Bastidas, al día siguiente se enteró por los comentarios de sus compañeros que durante la noche había llegado un contingente de militares con detenidos traídos desde Liquiñe. A su parecer estos militares pasaron a la subcomisaria y posteriormente se dirigieron al puente Rodrigo Bastidas acompañados por algunos carabineros, no sabe quiénes, los que pudieron presenciar como los militares ejecutaron a los detenidos disparándole en la cabeza a cada uno y posteriormente los lanzaron al río. Manifiesta que carabineros de Villarrica no participo en allanamientos. El Tribunal le lee la declaración de Joaquín López Bizarría de fs. 833. El deponente

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

señaló que no recuerda que le haya correspondido efectuar allanamientos. Quizás éste en sus turnos lo haya hecho, pero no tuvo noticia de aquello. El Tribunal le leyó las declaraciones de doña Laura Pinilla Fuentes de fs. 940 y fs. 964. Refiere no recordar a doña Laura Pinilla. Que no es efectivo lo que esta señala, por lo menos no tiene recuerdo de que se hubiesen allanado y menos que carabineros actuara juntamente con efectivos militares o boinas negras. Respecto de Ricardo Aguayo no lo conoce ni supo algo acerca de su detención. Tampoco supo de la detención de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Juan Carlos Schmidt Amagada, Ricardo Schmidt Amagada, Juan de Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, personas que no le resultan conocidas.

A.55. Jaime Guillermo García Covarrubias (26 años para la época de los hechos). Quien declaró de fs. 1.255 a fs. 1.260 (Tomo IV), de fs. 1.456 a fs. 1.458 (Tomo V), de fs. 1.601 a fs. 1.603 (Tomo V); de fs. 1.604 a fs. 1.605 (Tomo V), de fs. 1.606 (Tomo V), de fs. 1.607 (Tomo V), de fs. 1.608 (Tomo V), de fs. 1.609 a fs. 1.610 (Tomo V), de fs. 1.611 a fs. 1.612 (Tomo V), de fs. 1.848 a fs. 1.852 (Tomo VI), de fs. 1.858 a fs. 1.859 (Tomo VI), de fs. 1.860 (Tomo VI), de fs. 3.470 a fs. 3.471 (Tomo X), de fs. 3.473 a fs. 3.475 (Tomo X), de fs. 3.478 a fs. 3.479 (Tomo X), de fs. 3.801 a fs. 3.803 (Tomo XI), de fs. 3.821 a fs. 3.822 (Tomo XI), de fs. 3.827 a fs. 3.828 (Tomo XI), de fs. 3.836 (Tomo XI), de fs. 3.839 (Tomo XI), de fs. 3.843 (Tomo XI), de fs. 3.874 a fs. 3.879 (Tomo XI), de fs. 3.880 a fs. 3.882 (Tomo XI), de fs. 3.883 a fs. 3.886 (Tomo XI) y de fs. 3.887 a fs. 3.895 (Tomo XI).

En declaración judicial de fecha 21 de abril de 2003, rolante de **fs.1.255 a fs.1.260 (Tomo IV)**, cimiento en lo pertinente que en el año 1972 fue destinado al Regimiento Tucapel en Temuco. En el mes de enero de 1973 ascendió a teniente, desempeño distintas funciones que fueron el algún período ayudante, jefe de relaciones públicas y luego se desempeñó como teniente en la compañía de **plana mayor**. Refiere a la visita del general Arellano Stark y su desarrollo. Consultado no recuerda que en el regimiento se hubiesen mantenido personas detenidas, por problemas políticos. Tampoco que hubiera instalaciones habilitadas para ello. Pero si puede decir que luego del golpe militar el 11 de septiembre de 1973 se difundieron listas de personas que debían presentarse a la Fiscalía Militar y pudo ver largas filas de personas que se presentaron ante la Fiscalía la que se

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

encontraba situada a la entrada del regimiento. Era una oficina pequeña habilitada para ello. No había personas detenidas en el regimiento. Preguntado por el Tribunal, respecto a si participó junto al capitán Nelson Ubilla Toledo, teniente Manuel Vásquez Chahuán, teniente Raimundo García Covarrubias, un oficial de apellido Espinoza, el conscripto Juan Carrillo y por el sargento de apellido Moreno, torturando a personas que se encontraban detenidas, respondió que no, jamás participo en torturas ni tampoco con los oficiales que se mencionan. Que el teniente mencionado Raimundo García Covarrubias es su hermano y en esa fecha era subteniente y su grado era de teniente. Anexas antecedentes respecto a causa denominada "El Polvorín". Preguntado por el Tribunal para que diga si tiene conocimiento de consejos de guerra que se habrían llevado a cabo en la Fiscalía Militar que funcionaba al interior del regimiento Tucapel, respondió que sí, hubo consejos de guerra los primeros meses de haberse producido el golpe militar. En su mayoría se realizaron por porte de armas de fuego. No recuerda ningún consejo efectuado en la Fiscalía Militar de Temuco en el que se haya resuelto condenar a pena de muerte. Que le correspondió participar en dos consejos de guerra y se desempeñó como secretario.

En declaración judicial de fecha 26 de enero de 2010, rolante de **fs. 1.456 a fs. 1.458 (Tomo V)** (cuyas copias consta de fs.3.473 a fs.3.475 Tomo X, y de fs.3.880 a fs.3.882 Tomo XI), relata otros hechos que dicen relación a causa denominada "El Polvorín". Que en algún momento le correspondió desempeñar el cargo de secretario de la Fiscalía Militar, esto es septiembre de 1973 y posteriormente en 1974. Este era un puesto rotatorio. Dentro de sus funciones como secretario estaba el leer las sanciones a los presos. Que a cargo de la unidad de reacción estaba un teniente, subteniente o algún suboficial antiguo. Que no le correspondió integrar el "CIRE". En aquella época estaba conformado por los oficiales de inteligencia de cada institución de las fuerzas armadas y de orden, todo bajo el mando de algún segundo comandante. Afirma que sí hubo detenidos en el regimiento Tucapel, específicamente en la guardia, los que estaban en tránsito o permanecían por un período muy breve. En un primer momento se habilitó el patio con mesas para interrogar personas, porque eran muchas, y cuando llovía se les ubicaba en el gimnasio. Posteriormente, el capitán Ubilla habilitó una dependencia ubicada frente a la comandancia, cercana al patio de mantenimiento, donde además intervenía personal de investigaciones.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

En diligencia de careo con Herman Carrasco Paul de fecha 15 de septiembre de 2010, rolante de **fs. 1.601 a fs. 1.603 (Tomo V)**, ratifica en lo pertinente su declaración de fs. 77 (no consta en autos) en el sentido que no participo de interrogatorios ni torturas de detenidos. Respecto de la consulta, no vio detenidos en el gimnasio del regimiento Tucapel, aunque es posible que los haya habido de manera transitoria, pues en ese lugar trabajaba la sección segunda temas de inteligencia. Recuerda que en la sección segunda estaba el capitán Ubilla y el teniente Maldonado; además estaban los suboficiales Moreno y Schonherr. Estos últimos se dedicaban a labores administrativas. El oficial operativo era Ubilla, por lo que éste con toda seguridad debió haberse entendido con los detenidos. También colaboraban en esa función algunos detectives. Que nunca perteneció a la sección segunda. Fue ayudante del regimiento Tucapel entre febrero o marzo de 1973 hasta fines de noviembre o principios de diciembre de ese mismo año. Su función tenía que ver con el aspecto administrativo del regimiento más las necesidades particulares del comandante. En ningún caso era un cargo operativo, pues no estaba en la cadena de mando y no tenía tropa a su cargo. Durante el período septiembre a diciembre de 1973 sólo le correspondió salir en patrullaje una vez que dejó la ayudantía. Continúo agregando antecedentes respecto a causa denominada “El Polvorín”. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo con Luis Humberto Llamunao Huaiquinao de fecha 15 de septiembre de 2010, rolante **de fs. 1.604 a fs. 1.605 (Tomo V)**, ratifica declaraciones y en lo pertinente afirmó que no estuvo como comandante de la segunda compañía de cazadores durante 1973. Tampoco es efectivo que saliera en patrullajes en compañía del subteniente Espinoza ni menos con soldados. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo Héctor Omar Barra Reyes de fecha 21 de septiembre de 2010, rolante de **fs. 1.606 (Tomo V)**, ratifica declaraciones y refiere que existió una dependencia especialmente habilitada por el capitán Ubilla junto a la comandancia, donde eran interrogados los detenidos por el personal de inteligencia, pero jamás entro a ese lugar mientras estuvo ocupado por ese grupo, ni participo de interrogatorios y menos aún de torturas de detenidos. Se mantiene en sus dichos.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

En diligencia de careo con Oscar Inostroza Segura de fecha 21 de septiembre de 2010, rolante de **fs.1.607 (Tomo V)**, ratifica declaraciones y recalca que jamás ha participado en actos como los que el señor Inostroza, con quien se le carea, ha descrito. Hace presente que considera ofensivos los dichos de esta persona y faltan a la verdad. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo con Jorge Luis Godoy Valdebenito de fecha 21 de septiembre de 2010, rolante de **fs. 1.608 (Tomo V)**, ratifica declaraciones y afinca que jamás ha participado en actos como los que el señor Godoy, con quien se le carea, ha descrito. Hace presente que no tenía mando por lo que no tenía unidades a su dependencia, pues era el ayudante del comandante. Por otra parte, jamás paso por sobre el mando del capitán Ubilla. Piensa que esta persona está prestando un falso testimonio y está siendo orientado desde algún lado. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo con Juan Bautista Labraña Luvecce de fecha 22 de septiembre de 2010, rolante de **fs. 1.609 a fs.1.610 (Tomo V)**, inquirió que jamás perteneció a la sección segunda. Le parece que el señor Labraña, debe estar confundido puesto que la oficina de la comandancia donde trabajaba estaba en el mismo pabellón que la oficina de la sección segunda. Por lo tanto, es falso que integrara o estuviera al mando de la sección segunda de inteligencia del regimiento. Además, no tenía cursos de inteligencia. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo con Orlando Moreno Vásquez de fecha 22 de septiembre de 2010, rolante de **fs. 1.611 a fs. 1.612 (Tomo V)** (cuya copia consta a fs.3.839 Tomo XI), ratifica declaraciones y expresó en lo pertinente que quizás también en aquella época pudo haber sido reemplazado en la ayudantía por el capitán Rubio Balladares. Continúo agregando antecedentes respecto a causa denominada "El Polvorín". Se mantiene en sus dichos.

En declaración judicial de fecha 24 de septiembre de 2013, rolante de **fs.1.848 a fs.1.852 (Tomo VI)** (cuyas copias consta de fs.3.801 a fs.3.803 Tomo XI), insiste en haber desempeñado el cargo de secretario no letrado de la Fiscalía Militar, esto es después de septiembre de 1973, que era un puesto rotatorio por lo que no tiene mucho recuerdo de qué cosa le correspondía firmar o atender. Rememoro haber participado en el primer consejo de guerra que hubo en Temuco y que se llevó a efecto en el casino de oficiales y que también un consejo de guerra en contra de un señor de apellido Maturana. Que todos estos procesos

fueron publicitados y de pública audiencia. Se le preguntan por otras cosas y en lo adecuado que por norma general él llegaba al regimiento o a la comandancia antes que el comandante Iturriaga. En ese lapso debía pasar revista a la guardia e izar la bandera. Fue en ese instante en que se enteró al parecer por boca de dos oficiales, cuyos nombres no recuerda, sobre lo que había ocurrido la noche anterior en el polvorín del Regimiento. Interrogado sustentó que el capitán Ubilla habilitó una dependencia ubicada frente a la comandancia, cercana al patio de mantenimiento, donde además intervenía personal de investigaciones, que fue expresamente llamado para apoyar a la inteligencia en los interrogatorios. Otro grupo de detectives, según lo recuerda, trabajó con la Fiscalía Militar. Que puede ser que el capitán Ubilla haya interrogado personas en ese lugar o quizás se habilitaron dependencias en el gimnasio grande. Dice que en un primer momento después del 11 de septiembre de 1973 se canalizaba todo a través de la Intendencia, pero a poco andar de septiembre de 1973, el comandante Iturriaga dispuso que todos los hechos de carácter operativo fueran informados por la guarnición militar. En todo caso, las relaciones entre el intendente y el comandante del regimiento eran buenas. Continúo agregando antecedentes respecto a causa denominada “El Polvorín”.

En diligencia de careo con Ernesto García Isla de fecha 4 de octubre de 2013, rolante de **fs.1.858 a fs. 1.859 (Tomo VI)** (cuyas copias consta a fs.3.836 Tomo XI), ratifica declaraciones y proclama en lo atinente que jamás participó en actos como los que el señor García Isla señala, que no tenía la especialidad de inteligencia, nunca interrogó a detenidos, ni se relacionó con ellos. Además, el “SIRE” se formó mucho después de 1973. Que no solo se paseaba por la compañía de plana mayor, sino que lo hizo por todas las compañías, porque como ayudante del regimiento debía hacerlo, mandado por el comandante. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo con Libardo Schwartenski Rubio de fecha 4 de octubre de 2013, rolante de **fs.1.860 (Tomo VI)** (cuya copia consta a fs.3.843 Tomo XI), ratifica declaraciones e inquiriere en lo pertinente que jamás estuvo en una sala en donde se estuviera interrogando o torturando personas. Si fue en alguna oportunidad a la compañía de plana mayor, pero no participó ni se enteró de un hecho como el que se señala Schwartenski. Se mantiene en sus dichos.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

En declaración judicial de fecha 27 de noviembre de 2003, rolante de **fs. 3.470 a fs. 3.471 (Tomo X)**, proclama otros hechos y en lo atinente el Tribunal le preguntó si mientras se desempeñó como oficial en el regimiento Tucapel pernoctó en alguna de las dependencias. El deponente respondió que sí en el casino del regimiento, que es un lugar que engloba los comedores, sala de esparcimiento y el dormitorio de los solteros.

En diligencia de careo con Víctor Manuel Terán Vásquez de fecha 16 de abril de 2015 rolante de **fs. 3.478 a fs. 3.479 (Tomo X)** (cuyas copias constan de fs.3.821 a fs.3.822 Tomo XI), ratifica declaraciones y en lo oportuno indica que jamás ha participado en actos como los que el señor Terán, ha descrito. Que no estaba en la compañía de plana mayor en 1973 ni tampoco en la sección de inteligencia. Que en marzo de 1973 fue designado ayudante del regimiento y de la comandancia de guarnición, cargo que significaba dedicación exclusiva. Por eso piensa que el señor Terán está confundido. Por otra parte, el señor Terán afirmó que fue golpeado y sancionado por el deponente, en circunstancias que un teniente reglamentariamente no podía ni sancionar y felicitar. Por esto piensa que él nuevamente está confundido. Quizás el capitán Ubilla fue quien lo castigó. Que en las fechas que indica el señor Terán, él estaba en la segunda compañía de cazadores. Comenta otras situaciones.

En diligencia de careo con Pedro Misael Elgueta Muñoz de fecha 9 de noviembre de 2015 rolante de **fs.3.827 (Tomo XI)**, ratifica declaraciones de y sostiene en lo pertinente que en 1973 era ayudante del regimiento por lo que no le correspondió efectuar patrullajes, servicios de guardia y de ronda, puesto que estaba eximido de tales labores por su cargo, según el reglamento. Sí efectuó patrullajes en 1974 y antes del 11 de septiembre de 1973, específicamente para el paro de los camioneros y del comercio en octubre de 1972. Se mantiene en sus dichos.

En declaración judicial de fecha 16 de abril de 2015, rolante de **fs.3.883 a fs.3.886 (Tomo XI)**, ratifica declaraciones y en lo concerniente exclama que para septiembre de 1973 y hasta el final de ese año fue ayudante del regimiento, aunque en diciembre además cumplió labores de oficial de intendencia por haber sido destinado el teniente Tichauer. Detalla las funciones que le correspondían y alude que después del 11 de septiembre de 1973 estas funciones se tensionaron y se hicieron más delicadas. Llegó mucha más gente a conversar con el coronel Iturriaga

entre los que estaban los interventores designados para las empresas del Estado, civiles que querían que les fueran devueltas sus tierras tomadas, etc. Que solo una persona pidió audiencia para hablar con el comandante Iturriaga por un detenido. El Tribunal le pregunta si el regimiento Tucapel fue centro de detención. El deponente respondió: que inmediatamente después del 11 de septiembre hubo mucha gente que llegó al regimiento llamada por bando, las que fueron interrogadas en el patio de la unidad por personal de inteligencia y algunos suboficiales que fueron comisionados para tales efectos. También vio carros de gendarmería que estaban en el regimiento en los que algunos civiles eran llevados a la cárcel tras los interrogatorios. Que también hubo personas detenidas por toque de queda, los que eran liberados al día siguiente. Asevera que el capitán Nelson Ubilla Toledo era el comandante de la compañía, de plana mayor y servicios y además, era el oficial de inteligencia del regimiento. Éste tenía personal especializado bajo su mando más un grupo de funcionarios de la policía de investigaciones, con quienes interrogaba personas. Algunos de estos civiles pueden ser que hayan quedado detenidos al interior del regimiento, pero por breve tiempo para ser interrogados por Ubilla. El capitán Ubilla tenía una oficina ubicada cerca de la Banda Instrumental donde interrogaba a las personas. Personalmente vio en alguna oportunidad que este oficial interrogaba personas junto a su grupo. El Tribunal le pregunta si le correspondió interrogar a los detenidos o presenciar interrogatorios. Responde que nunca. El Tribunal le pregunta si supo de personas que hayan sido sometidas a apremios ilegítimos. El deponente respondió: Nunca. Supo de la muerte de personas en la vía pública por acción militar, porque tuvo que dar a conocer a la prensa algunos bandos que daban cuenta de esos hechos. Que no supo de la muerte de personas al interior del regimiento Tucapel de Temuco. Agregó antecedentes de otras causas seguidas por el Tribunal.

En declaración judicial prestada por video llamada con fecha 12 de abril de 2022, rolante de **fs.3.887 a fs.3.896 (Tomo XI)**, se le manifestó los hechos de la presente causa. Se le leyó declaración de fecha 24 de septiembre de 2013, las cual fue otorgada en causa rol 113.089 de este Tribunal y agregada a esta causa a fs. 3.801 y siguiente. Sr. Covarrubias, respecto a la declaración leída ¿Ud. está de acuerdo con esta declaración? ¿La ratifica? ¿Quiere rectificar algo? ¿Modificar? La ratifica. No rectifica ni modifica su declaración y en lo pertinente dice que son declaraciones en que confirmo su rol de ayudante y a partir de

noviembre de 1973 oficial de intendencia de toda la parte logística, administración, pagos, en fin. Esas fueron sus funciones, por lo cual, él no tenía que ver ni con detenidos y sí paso un periodo en la Fiscalía como secretario, que era un rol no letrado, era un rol rotatorio, después hubo carabineros, incluso antes hubo otros oficiales, un rol en esa condición. Se le leyeron sus declaraciones, las cuales fueron otorgadas en causa rol 113.961 de este Tribunal a saber: declaración judicial de fs. 334 de fecha 21 de abril de 2003. Declaración judicial de fs. 134 de fecha 26 de enero de 2010. Declaración judicial de fs. 1.260 de fecha 16 de abril de 2015. Declaraciones que no se encuentran agregadas a este proceso, motivo por el cual el Tribunal ordenó agregarlas. Las ratifica e insiste que durante todo el año 1973, fue ayudante del regimiento y en noviembre se le agregó la actividad de intendencia cuando Tichauer es destinado, entonces tomo todo lo que es administración de fondos, intendencia. Preguntado dice que estuvo por lo menos dos meses, parte de noviembre y diciembre en intendencia. Que lo que quería decir, cuando señaló que en el regimiento quedaba gente detenida, se estaba refiriendo a que en los primeros días hubo listas en donde se citó gente. Esa gente hacia “cola, no tenían nada que ver con su persona”, pasaban frente a la ayudantía, a la Fiscalía que quedaba al fondo, y la Fiscalía de acuerdo con eso podía determinar si quedaba detenido, había unos carros de gendarmería afuera. Ahora, también las patrullas de esos primeros días detenían gente por temas de toque de queda y esos también estaban detenidos en los regimientos, no sabe el procedimiento, porque no tenía nada que ver con su persona, iban quedando en libertad o lo que fuera. A esos detenidos se refirió en esa declaración. Tribunal le leyó en lo pertinente las siguientes declaraciones, las cuales fueron otorgadas en esta causa por un testigo reservado de iniciales M.J.C.S: 1) declaración extrajudicial de fecha 01 de septiembre de 2015, 2) declaración judicial de fecha 30 de mayo de 2017, 3) declaración judicial de fecha 26 de marzo de 2019, 4) declaración judicial de fecha 16 de agosto de 2021 y 5) declaración judicial de fecha 27 de noviembre de 2019. Preguntado por el Tribunal si tuvo conocimiento, sabe de los hechos de estos jóvenes que primeramente fueron detenidos camino a Caburgua, trasladados hasta la tenencia de Pucón, luego ingresados al regimiento Tucapel de Temuco y de acuerdo con los hechos, habrían sido fusilados en el regimiento Tucapel. Responde: “Ninguno su señoría, absolutamente ninguno”. Inquirido por el Tribunal qué puede señalar respecto a lo que dice el soldado de iniciales M.J.C.S. El deponente

responde: “bueno, si él es testigo... él no tenía conocimiento de eso, no tiene ninguna información de eso”. El Tribunal le pregunta respecto al recogimiento de cuerpos. Ante sus dichos en sus declaraciones que el coronel Iturriaga les comunicó la situación de la causa del “Polvorín”. Si no tuvo conocimiento que se hubieran recogido otros cuerpos por fusilamiento. El deponente responde que no, porque él recuerda que, en el caso suyo, por el Polvorín, el coronel Iturriaga, comunicó esto al día siguiente. Lo del “Polvorín” rememoro que fue un sábado le parece, que no estaba en el cuartel, muchos no estaban en el cuartel y él se imagina que en ese episodio habrán recogido los cuerpos ese mismo día, esto ya fue al día siguiente, en la mañana, cuando el coronel Iturriaga informa estos sucesos y además aparecen en el diario Austral. El Tribunal le dice que ha señalado, que durante un periodo de tiempo al interior del regimiento Tucapel se desempeñó como secretario de la Fiscalía y también se desempeñó como ayudante de la comandancia del regimiento. También ha señalado que la Fiscalía era el órgano que decidía si los detenidos quedaban o no en libertad. Y que se desempeñó como ayudante de la comandancia, y en este punto recordar que en el recinto de la comandancia funcionaba la sección segunda de inteligencia a cargo de Ubilla. Y además ha dicho que existían personas detenidas las cuales eran interrogadas. Se le pregunta ¿en qué consistían los interrogatorios? y ¿en qué condiciones quedaban los detenidos? Espeta el deponente que no tiene ninguna información de eso, pero ahí hay un error. En la comandancia, funcionaba la ayudantía entrando a mano izquierda y la registratura, esa era su actividad. Ahí estaban dos suboficiales trabajando junto a él y al fondo el comandante. Se seguía por el pasillo, a mano derecha, estaba intendencia, administración de fondos, al frente la segunda comandancia y al mismo tiempo la Fiscalía, y al final había como tres pequeñas oficinas y un baño. La oficina uno era ocupada por la sala de cartas de la sección de inteligencia, de la sección segunda, era una oficina donde básicamente estaban las cartas, no se realizaban diligencias en ese lugar, nunca vio que se interrogara gente en ese lugar. Luego se encontraba la oficina de asistencia social, había unos dactilógrafos y luego venía la segunda comandancia, que al mismo tiempo hacía de Fiscalía. El Tribunal le pregunta donde trabajaba Nelson Ubilla. Responde que Nelson Ubilla tenía dos funciones, era comandante de la compañía de plana mayor, donde tenía una buena oficina, la oficina del capitán y era el oficial de inteligencia del regimiento Tucapel, por supuesto de éste dependía esa sala de cartas donde ahí

había uno o dos dactilógrafos, no sabe si daba para dos dactilógrafos. En otra oficina estaba la persona de la Fiscalía, el suboficial Quilodrán que era el que llevaba los papeles a la Fiscalía, las firmas, los exhortos, ahí había muchas oficinas chicas. Se le ocurre que todavía están porque la comandancia más o menos todavía es la misma. El Tribunal le pregunta si en el periodo que estuvo de ayudante ¿vio pasar hacia esa oficina donde trabajaba el comandante Ubilla gente? ¿Qué tipo de personas? ¿Civiles, militares? Responde que no, era una oficina para las cartas, más bien para papeles, para una persona. Que las personas que entraban se dirigían normalmente a la Fiscalía, donde el comandante Jofré, a esa oficina. Porque normalmente eran llamados en los bandos, eran citados y por eso es por lo que en los primeros días se puso unos escritorios en el patio, entonces atendían suboficiales, se les tomaban los nombres a las personas. Había centinelas porque había largas filas, “pero no era algo coercitivo, no, eran filas de gente voluntaria que se presentaba por listas que aparecían en la prensa”. El Tribunal le dice que ha manifestado que, como secretario de la Fiscalía, en la Fiscalía precisamente se decidía el destino de estos detenidos. ¿Quién lo decidía? ¿Qué oficial? Responde el deponente que, en primer lugar, afirmo que no fue todo el año secretario de la Fiscalía. Fue en periodos, si se revisa los documentos de la época, va a ver que hay documentos firmados por él, otros documentos firmados por oficiales de carabineros y ahí un documento en el que él dio cuenta en un momento al Tribunal, que no es su firma, “no vamos a decir que eran probablemente documentos importantes, pero como no eran letrados, de repente venía el mismo suboficial a agilizar un trámite”. Segundo, en el periodo suyo, recuerda más bien y seguramente está en los expedientes, no recuerda que alguien fuera detenido arbitrariamente. Cuando estuvo en la Fiscalía, lo que había, eran procesos de la Fiscalía. No era que se detenía a una persona, él nunca vio eso y además no trabajaba en la Fiscalía, trabajaba en la ayudantía. El Tribunal le expresa que él mencionó que cuando fue ayudante de Fiscalía alguien decidía el destino de estos detenidos. ¿Quién era? El deponente responde “A bueno sí, el fiscal. Claro, lógico, que era el comandante Jofré”. El Tribunal le pregunta la labor del señor Podlech ¿cuál era? El deponente responde que Podlech primero llegó como cadete de escuela militar, como asesor jurídico de Jofré, porque éste era letrado y Jofré no lo era. Y Podlech con el correr de los meses, en el año 1974, se le contrato en el ejército con el grado de teniente de justicia militar y empezó a usar uniforme formal

de oficial. El Tribunal le pregunta que en esas labores que el deponente ofició rotativamente como secretario de la Fiscalía. ¿Estaba en la Fiscalía? ¿Se encontraba en la ayudantía? ¿Le iban a sacar la firma? ¿Cómo era la dinámica? Responde que la Fiscalía tenía el Fiscal, y los suboficiales que trabajaban con Jofré. Y venían abogados también, muchos abogados de visitas. Él trabajaba en la ayudantía, no fue secretario, fue por un periodo y en ese periodo que fue en octubre, lo designaron secretario de dos consejos de guerra que hubo, que están en el diario y eran por portes de arma. Pasó a ser secretario de esos consejos de guerra, porque el rol suyo era administrativo, no tenía mando de tropa, entonces era el más adecuado para este tipo de actividades, por eso fue también el oficial de intendencia, pero no fue secretario siempre ni menos estaba en la Fiscalía. No tenía voto, su cargo era más bien un formulismo de tener un secretario. El Tribunal le consulta que en ese cargo de secretario. ¿Vio que se tomara una declaración? ¿Recibió alguna instrucción del fiscal Jofre? Responde que nunca vio tomar declaraciones, no recuerda haber participado en declaraciones, ni haber tomado nota de declaraciones. Si recuerda que hay unos documentos, pero no recuerda tampoco que fueran muy relevantes en la Fiscalía, en que aparece una firma donde dice secretario Jaime García, pero una firma que nunca ha sido suya, aunque no recuerda que haya sido una cuestión tan excesivamente relevante, por lo menos para su criterio. El Tribunal le pregunta ¿Cuál era la oficialidad al mando de la compañía de plana mayor y servicios del regimiento Tucapel de Temuco, después del 11 de septiembre de 1973. ¿Cuál era la cadena de mando? Musita el declarante que estaba Ubilla, su hermano (Raimundo García Covarrubias) como subteniente y Romilio Lavín también como subteniente. La compañía de plana mayor era una compañía que para términos operativos no era como la compañía andina o la compañía de cazadores, o la compañía de fusileros, que eran todos juntos. La compañía de plana mayor era una estructura que se desarma, por ejemplo, estaba Lavín que era el jefe de mantenimiento de los vehículos. Estaba su hermano, que le parece que estaba a cargo de todo lo que era exploración, táctica, tenían caballos y estaba Ubilla que mandaba a todos. Entonces era una compañía que se desarmaba, que no actuaba en conjunto. Ahora, Ubilla cumplía las dos funciones, era el comandante de la compañía de plana mayor, pero él era el único oficial que recuerda, no sabe si había uno más, pero recuerda que era especialista en inteligencia, con el curso de inteligencia, por lo tanto, cumplía esa tarea y

después del 11, de 24 horas. El Tribunal le pregunta por ¿El Sr. Pedro Tichauer se encontraba dentro de esta compañía como teniente para esa fecha? Responde que no recuerda. Puntualizó que no podría haber sido porque Tichauer era más antiguo que los otros tenientes que allí había. No sabe si intendencia estaba encuadrada dentro de esta compañía, pero el cumplía funciones en la administración de fondos, en una oficina aparte, propia del oficial de intendencia. Explica que hay estructuras de paz y estructuras operativas de guerra, esas están en las tablas de organización y equipo. Para el caso de una guerra, probablemente el oficial de intendencia estaba en la compañía de plana mayor, pero en la paz no lo está. En la paz cumple función de administración de fondos de intendencia. El Tribunal le pregunta, si después del 11 de septiembre de 1973 ¿Tichauer pasó a cumplir otra función? Responde que no, que siempre tuvo otras funciones, no era de armas, era de especialidad de intendencia, pero en el caso de guerra, de movilización, existen las tablas de organización y equipo y ahí todos quedaban agrupados en alguna compañía y esa específica compañía es la miscelánea, tiene exploración, creo que mantenimiento, veterinaria, la panadería, la carnicería. El Tribunal le dice en el recuerdo que tiene después de 11 de septiembre de 1973 del capitán Fernández Carranza. ¿Qué pasó con él? Infirió que el capitán Fernández Carranza siguió en el regimiento hasta el año 1974, fue a la academia a un curso que había de seis meses y después de eso salió llamado a retiro, pero que recuerde, estuvo hasta el año 1974. El Tribunal le señala, pero en su recuerdo, por ejemplo, desde el 11 de septiembre de 1973 al 11 de noviembre del mismo año ¿él siguió trabajando dónde? ¿En su compañía? El deponente responde que sí, sí recuerda que en su compañía. Cree que era la compañía de morteros, no recuerda bien cual era. Se le consulta sobre hechos de otras causas que lleva el Tribunal. Luego el Tribunal le pregunta, en el caso que hubiera una muerte al interior del regimiento ¿Cuál era el protocolo, el procedimiento? Una muerte accidental, por entrenamiento, en este caso por apremios u otro tipo de cosas. ¿Cuál era el procedimiento y su labor como ayudante? Responde que no, la verdad que ninguna, en ninguna de las situaciones, porque cada compañía tenía un capitán. Él era teniente, ayudante del comandante, estaba fuera de la línea de mando. Relata el accidente de un soldado. Que seguramente, poniéndose en esa situación de ficción, sanidad pudo haber tenido algo que ver cuando había un soldado herido. Ahora, si alguien moría en un interrogatorio, se imagina que no iba a ir donde el

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

comandante, pero su rol, en verdad es que no tenía ninguno. El Tribunal le dice, por ejemplo, al coronel Iturriaga ¿Cuándo le llegaba la noticia de hechos graves que pudieran haber sucedido? ¿Quién le enviaba esa información? Responde que el segundo comandante, si esto se producía en el batallón o si se producía en inteligencia con Ubilla. Insiste que, si se producía en inteligencia con Ubilla, en inteligencia existía lo que se llama canal técnico, ellos no se relacionan por la jerarquía, incluso ellos pueden relacionarse directamente con la dirección de inteligencia del ejército. El iría, donde el comandante Jofré, porque inteligencia dependía de éste como segundo comandante y Jofré debería haberle comunicado al coronel. Se le consulta sobre hechos de otras causas que lleva el Tribunal.

A.56. Víctor Hernán Maturana Burgos (34 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 1.266 a fs. 1.268 (Tomo IV), de fs. 1.286 a fs. 1.287 (Tomo IV), de fs. 1.325 a fs. 1.326 (Tomo IV) y de fs. 1.824 a fs. 1.825 (Tomo VI).

En declaración extrajudicial de fecha 3 de julio de 2013, rolante de **fs. 1.266 a fs. 1.268 (Tomo IV)**, relato en lo pertinente que fue detenido el 13 de septiembre de 1973 en dependencias del regimiento Tucapel de Temuco, cuando se fue presentar en forma voluntaria, ya que el día anterior fue llevado como rehén un hermano suyo al allanar su domicilio y no encontrarlo, dejándole el mensaje que si no se presentaba su hermano iba ser muerto. Cuenta lo acontecido con su persona y agrega que durante el tiempo que estuvo detenido en la cárcel de Temuco y las veces que fue llevado a prestar declaración fue bajo sesiones de torturas en el regimiento Tucapel. Recuerda haber visto pasar muchas personas que tenían igual condición a la suya, entre otros Luis Almonacid Dumenes, Dixon Retamal Cornejo, Jaime Eltit Spielmann y Omar Venturelli Leonelli. Además, dentro de las personas que fueron ejecutadas por razones políticas José Ortigosa Anseolaga, Juan Antonio Chávez Rivas y Daniel Mateluna Gómez. Con estas personas tuvo algún tipo de contacto en la cárcel o en el regimiento, por ejemplo, con Ortigosa, con quien fue sacado en el mismo vehículo con dirección al regimiento, pero en la tarde sólo volvió él, a los días después se sabía que le habían dado muerte. Con relación a las personas que interrogaban y/o torturaban en el regimiento Tucapel, recuerda al capitán Nelson Ubilla Toledo, el suboficial Leonel Quilodrán Burgos, el suboficial Orlando Moreno Vásquez, un oficial de nombre Manuel Vásquez Chahuán. Además, recuerda a un detective de apellido Morales, a quien apodaban “el membrillo”. Reconoce a estas personas debido a que antes de la tortura ellos

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

conversaban con él, después podía relacionar sus voces y en otras ocasiones por comentarios de otros detenidos como también de militares. Relato otras causas y que en la época sólo funcionaba la Fiscalía Militar, la que llevaba todo el fuerte de los detenidos políticos que se encontraban en los diferentes lugares de detención y funcionaba en forma muy directa con los funcionarios del servicio de inteligencia militar, por cuanto luego de ser torturados por ellos debíamos firmar las declaraciones de la Fiscalía, las que eran dadas en las sesiones de torturas. Adiciona otros antecedentes y respecto a los funcionarios de la Fiscalía Militar, que operaban los primeros días de octubre de 1973, recuerda que el fiscal era el mayor Luis Jofré Soto, quien además era el segundo comandante del regimiento; el asesor jurídico Alfonso Podlech Michaud, quien en su condición de abogado asumió el puesto, pero debido a la personalidad que tenía Jofré, “un poco tímido, este (Podlech) era quien hacía y deshacía en la Fiscalía”. Refiere que es de las personas que tiene más información acerca de las personas que fueron muertas, desaparecidas y en general en todos los hechos ocurridos con posterioridad al 11 de septiembre de 1973.

En declaración extrajudicial de fecha 5 de noviembre de 2003, rolante de **fs. 1.286 a fs. 1.287 (Tomo IV)**, reitera haber sido detenido el 13 de septiembre de 1973 y en lo tocante preciso que fue interrogado en varia ocasiones, siendo estas sesiones con la aplicación de torturas, tanto físicas como psicológicas. De sus torturadores pudo identificar al capitán Nelson Ubilla Toledo, teniente Manuel Vásquez Chahuán, teniente Jaime García Covarrubias, los suboficiales Orlando Moreno Vásquez y Leonel Quilodrán Burgos (fallecido). Acerca de los hechos que le fueron consultados, musito que en estos interrogatorios fundamentalmente se dirigían a la entrega de nombres de otros militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Respecto de si vio personas muertas en el periodo que permaneció detenido en el regimiento Tucapel, asevero que nunca las vio, pero si señaló que tuvo contacto con personas que actualmente se encuentran como ejecutados políticos o detenidos desaparecidos, los que refirió en su declaración anterior. Respecto a nombres de las personas que pudieron haberles dado muerte a estas personas, expreso que no tiene antecedentes concretos, pero tiene la certeza de manifestar que estos pertenecían a funcionarios militares de la dotación del regimiento Tucapel de Temuco. Que mientras permaneció detenido hasta el mes de enero de 1976, se percató que la constante de la muerte o desapariciones de los

detenidos políticos de Temuco fue mediante el mecanismo de sacarlos desde el lugar donde se encontraban y nunca más regresaban, justificándose a través de la "Ley de Fuga" algunas de las muertes. Las muertes o desapariciones de las personas que nombró fueron entre el 13 de septiembre, día que fue detenido hasta la primera quincena del mes de octubre, no teniendo la certeza de las fechas exactas.

En declaración extrajudicial de fecha 10 de febrero de 2009, rolante de **fs. 1.325 a fs. 1.326 (Tomo IV)**, en lo pertinente luego del relato de otros hechos, manifestó que cuando se presentó voluntariamente ante la fiscalía del regimiento Tucapel el día 13 de septiembre de 1973, debido a que fue citado previa amenaza de dar muerte a su hermano que estaba recluido. Al ingresar a esta fiscalía fue el abogado Alfonso Podlech Michaud, vistiendo de militar con el grado de mayor; ordenó sin consulta alguna al personal de esa fiscalía, proceder a su detención, incomunicación y reclusión en la cárcel pública de Temuco, sin argumento alguno, lo que demuestra que este abogado era quien tomaba las determinaciones al interior de esa fiscalía, sin tomar siquiera el parecer de las autoridades militares que se encontraban.

En declaración judicial de fecha 19 de julio de 2013, rolante de **fs. 1.824 a fs. 1.825 (Tomo VI)**, preguntado asevero que Alfonso Podlech Michaud fue la persona que ordenó su detención e incomunicación el 13 de septiembre de 1973, además de disponer su traslado a la cárcel. Que vestía uniforme en aquella oportunidad, lo interrogó a lo menos en cinco oportunidades en la Fiscalía Militar mientras estuvo privado de libertad, éste dirigía el interrogatorio mientras que un actuario tomaba nota a máquina de lo que declaraba. Constantemente Podlech le decía que, si no entregaba toda la información que se le estaba pidiendo en el interrogatorio, iba a ser devuelto a otro equipo para que ellos le sacaran las respuestas que él requería. Este otro equipo era el grupo de torturadores que operaba en otra dependencia del regimiento y al que tuvo que enfrentar en varias oportunidades durante su cautiverio. A veces pasaba primero a la sala de torturas y luego la Fiscalía o lo hacía a la inversa, es decir, se cumplieron las amenazas de Podlech. Recordó que en una ocasión se le hizo firmar en la Fiscalía una declaración tomada en la sala de torturas. Consultado dice que, si bien el mayor Jofré era el Fiscal Militar en lo formal, en la práctica y en los hechos quien tomaba todas las decisiones respecto de los detenidos era el abogado Alfonso Podlech, quien tenía mayor personalidad y conocimiento sobre leyes que Jofré.

A.57. Sigisfredo Jara Contreras (39 años a la época de los hechos). Quien declaró a fs. 1.270 a fs.1.271 (Tomo IV) y a fs. 4.195 a fs. 4.196 (Tomo XII).

En declaración extrajudicial de fecha 3 de julio de 2003, rolante **de fs. 1.270 a fs.1.271 (Tomo IV)**, quien narro en lo oportuno que, en el mes de octubre de 1973, fue trasladado con el grado de capitán, a cumplir funciones a la cárcel de Temuco, en la que estaba como alcaide a cargo de la guardia armada e interna el mayor Maximiliano Vivanco Parra, quien lo recibió. En cuanto a la población penal, cuando llegó a Temuco, era de aproximadamente ochocientas personas; cuatrocientos reos por delitos comunes y cuatrocientos prisioneros políticos. Acerca de estos últimos, no recuerda cual era el sistema para ingresarlos, debido a que este tema era totalmente autoritario, por parte de los militares; ya que cuando llegaban en la noche en patrullas, fuertemente armados y con sus caras enmascaradas, se llevaban a un grupo de personas de las cuales no habían registros, por cuanto estos no entregaban ninguna orden judicial o de la Fiscalía, por lo que era muy difícil para ellos poder controlarlo y además, no estaban en condiciones de poner trabas a ese procedimiento. Lo anterior lo supo a raíz de los comentarios del personal que llevaba más tiempo en la unidad. Recuerda que en el mes de noviembre de 1973 y en circunstancias que había quedado como jefe del penal, fue a exponer la situación antes relatada al entonces fiscal Alfonso Podlech Michaud, quien a partir de ese momento coopero en solucionar el procedimiento y de esta forma, en el corto plazo, el sistema volvió a ser como correspondía, pudiendo llevar el control de los detenidos. Cuando quedó como jefe del penal, esto se debió al traslado de Maximiliano Vivanco Parra por cuanto este entre otras cosas anteriores; no había acatado una orden del coronel Iturriaga Marchesse, quien era el comandante del regimiento Tucapel, el que le habría ordenado que diera muerte a diez reos comunes, sin orden competente, razón por la que este no lo hizo. Preciso que anterior a Podlech, el fiscal militar en Temuco era el señor Luis Jofré. Referente a las libertades que daba la fiscalía militar, explayó que estas eran entregadas por funcionarios de gendarmería o de las instituciones militares, pero habiendo un documento legal que permitiera la salida del interno. Estas se hacían efectivas en forma inmediata, produciéndose la salida del interno por la puerta principal y las que generalmente se producían antes de la hora del encierro de la población penal, es decir cerca de las 19.00 horas. Si alguna orden llegaba posterior a esa hora, igual se daba cumplimiento, pero no

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

recuerda ninguna. En relación con el traslado de los internos a las diferentes Fiscalías o Tribunales de la jurisdicción, apunto que estos eran realizados por los funcionarios de gendarmería, sin perjuicio de las veces que los mismos militares lo hacían, no recordando nombres de estos, debido a que eran diferentes en cada oportunidad y con los cuales no se hablaba mucho. Todo esto antes de la conversación que tuvo con el fiscal Alfonso Podlech. Relata hechos relativos a otras causas. Respecto a las Fiscalías que funcionaban en esa época en la ciudad de Temuco, aseveró que recuerda que la militar era en la que centraba toda la labor, sin perjuicio de las otras, tales como la de aviación o de carabineros, de las cuales no recuerda haber tenido mayor contacto con estas. Que la Fiscalía Militar era la que tenía todo el traslado de detenidos durante el día o la noche, pudiendo recordar algunos carabineros en el penal en algunas oportunidades. Con relación a detenidos desaparecidos o ejecutados políticos de la época, solo tuvo conocimiento de los que eran nombrados en los bandos de las autoridades de la zona.

En declaración judicial de fecha 04 de marzo de 1991, rolante de **fs. 4.195 a fs. 4.196 (Tomo XII)**, afirma en lo pertinente que el primero de octubre de 1973 llegó trasladado desde Linares y su grado era de capitán de Gendarmería, se desempeñó en la función de control general de personal uniformado. Que en esa época le correspondió también tratar de darle alojamiento a los presos políticos, ya que la población llegó a una capacidad de ochocientas personas, la mitad eran presos comunes y el resto presos políticos. Expone que no tuvo ninguna relación con el personal militar que traía y llevaba gente desde la cárcel, pero recuerda a un suboficial de Ejército de apellido Moreno, conocido por muchos, quien además era del servicio de inteligencia del ejército y siempre andaba de civil. Comunica que los presos políticos eran sacados de la cárcel por personas de ejército y de la fuerza aérea, siendo éstos los que los sacaban con unas órdenes que dejaban en la guardia, las que llevaban una firma ilegible y un timbre, pero para poder realizar estas situaciones hubo que conversar con el fiscal, don Alfonso Podlech o el secretario, para poder normalizar el ingreso y egreso de los presos. Que conoció a Víctor Maturana Burgos, quien estuvo preso en la penitenciaría local.

A.58. Orlando Moreno Vásquez (32 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 1.276 a fs. 1.278 (Tomo IV), de fs. 1.310 a fs. 1.311 (Tomo

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

IV), de fs. 1.312 a fs. 1.313 (Tomo IV), de fs. 1.329 a fs. 1.331 (Tomo IV), de fs. 1.385 a fs. 1.386 (Tomo IV), de fs. 1.611 a fs. 1.612 (Tomo V), de fs. 1.861 (Tomo VI), de fs. 3.837 (Tomo XI), de fs. 3.838 (Tomo XI), de fs. 3.839 (Tomo XI), de fs. 3.840 a fs. 3.841 (Tomo XI), de fs. 3.842 (Tomo XI) y de fs. 3.843 (Tomo XI).

En declaración extrajudicial de fecha 18 de julio de 2003, rolante de **fs. 1.276 a fs.1.278 (Tomo IV)**, musito en lo pertinente que el 11 de septiembre de 1973 llegó al regimiento Tucapel, tenía el grado de sargento segundo y se desempeñaba en la segunda comandancia con el mayor Luis Jofré Soto; quien era el segundo comandante del regimiento y el Fiscal Militar; también trabajaba el sargento Raúl Schonherr Frías. Dentro de sus funciones antes del pronunciamiento, eran de labor administrativa (dactilógrafo) y encargado en la criptografía y claves de la unidad. Que al llegar al cuartel ese día 11 de septiembre, se les indicó que tenían que esperar órdenes y noticias que tenían que llegar de Santiago, según lo que manifestó el mayor Jofré y durante la mañana, a través de los diferentes bandos emitidos por la radio se enteraron de que las fuerzas armadas habían derrocado al gobierno del presidente Salvador Allende. Esa misma mañana el comandante del regimiento, coronel Pablo Iturriaga Marchesse, llamó a una reunión a los oficiales, oportunidad en la que seguramente, les dio a conocer los hechos ocurridos y las órdenes para que sean transmitidas a los demás militares. Una vez que se emitieron las órdenes, el mayor Jofré le indicó que junto Schonherr se dedicaran a la parte de los criptogramas, recibir y enviar los mensajes que se estaban cursando, los que debido a los hechos que acontecían habían aumentado considerablemente, razón por la que se veían imposibilitados de cumplir alguna otra función. Paralelamente la Fiscalía Militar a cargo del mayor Jofré, funcionaba en la misma dependencia del regimiento, pero en un lugar diferente de donde él se desempeñaba su función, por lo que no tenía contacto con la labor de ellos. La Fiscalía Militar tenía para su funcionamiento, dos personas que eran militares con el grado de suboficiales, recordando a Santiago Villarroel y Leonel Quilodrán Burgos; además de otros civiles que se agregaron después del pronunciamiento que pertenecían a un Juzgado del Crimen de Temuco, de los que rememoró a Adrián González Maldonado y a Héctor Toloza Fierro. Que estas personas fueron llevadas por un abogado, quien fue el que se hizo cargo de la Fiscalía Militar de Temuco a los pocos días después del 11 de septiembre de 1973, de nombre Alfonso Podlech

Michaud; quien para todos los efectos era el Fiscal Militar letrado, ignorando cuál era su función específica por cuanto nunca trabajó en forma directa con él. A partir de esa fecha el mayor Jofré, pasó a cumplir funciones como segundo comandante del regimiento, ignorando si todavía tenía alguna incidencia en la Fiscalía Militar. Alude que Alfonso Podlech Michaud cumplía sus funciones de Fiscal en el regimiento Tucapel, recordando que era cotidiano verlo en el interior de esa unidad militar, pero no pudiendo agregar que este se encontraba durante todo el día. Debido a su función y grado, no tenía acceso a otro tipo de información que digan relación con la Fiscalía Militar. Consultado si cumplió funciones en el servicio de inteligencia militar (SIM) en fecha posterior al 11 de septiembre de 1973; adoso que su función en esta correspondía a todo lo relacionado con las claves y al manejo de la documentación clasificada de la unidad, siendo el jefe de 1973. Indicó que eso es correcto, pero de este servicio estaba a cargo el entonces capitán Nelson Ubilla Toledo, que a su vez era comandante de la compañía de plana mayor. Otro de los integrantes de este grupo era el sargento Schonherr. Respecto a si en alguna oportunidad participó en algún operativo donde se detuvieran personas o en el traslado de prisioneros políticos desde la cárcel hasta la Fiscalía Militar de Temuco, afirmo que nunca realizó algún operativo donde se haya detenido gente, pero sí reconoció que cuando la fiscalía militar necesitaba algún preso político, era enviado con una orden de esta para retirarlo de la cárcel y una vez que era interrogado, era trasladado nuevamente al recinto carcelario. Pero sin tener él conocimiento alguno de los interrogatorios, como asimismo en las circunstancias en que estos se realizaban. Lo anterior, supone que ocurría por el sólo hecho de pertenecer al SIM, lo que sucedió en varias ocasiones, no recordando nombres de alguna persona detenida que le haya correspondido trasladar. Preguntado por las personas muertas o desaparecidas, de las cuales existen testimonios que estuvieron detenidos por personal militar del regimiento Tucapel; aseguro que nunca tuvo conocimiento que se les diera muerte al alguna de estas o algún prisionero político, por cuanto no participó de estos hechos ni le consta que hayan ocurrido, ignorando en qué circunstancias ocurrían estos. Por lo anterior, es que no puede indicar si esos hechos tuvieran alguna relación con la llegada del general Arellano Stark a la ciudad de Temuco y si esto ocurrió, que él haya ordenado darle muerte por parte de los militares que pertenecían a ese regimiento.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

En declaración judicial de fecha 22 de diciembre de 2003, rolante de **fs. 1.310 a fs.1.311 (Tomo IV)** (cuya copia consta a fs.3.837 Tomo XI), comunico que para septiembre de 1973 se desempeñaba en la segunda comandancia, que estaba a cargo del mayor Luis Jofré Soto. Con posterioridad al 11 de septiembre se formó la sección segunda de seguridad, a la cual fue asignado para efectuar trabajos de oficina y eventualmente para efectuar patrullajes de control de toque de queda. Adicionó causa "El polvorín". El Tribunal preguntó si el regimiento Tucapel fue centro de detención. El deponente respondió: que sí, dada la gran cantidad de detenidos que llegaron al regimiento éstos fueron dejados en el gimnasio donde algunos permanecieron por varios días, luego de lo cual eran dejados en libertad o trasladados a la cárcel pública por orden de la Fiscalía Militar. El Tribunal preguntó si le correspondió interrogar a los detenidos o presenciar interrogatorio. Responde que no. El Tribunal preguntó si le correspondió practicar apremios ilegítimos a los detenidos o presenciar sesiones de tortura. El deponente responde que no, que nunca escucho que alguien fuera torturado, aunque no podría asegurar que no haya ocurrido.

En diligencia de careo con Herman Carrasco Paul, de fecha 22 de diciembre de 2003, rolante de **fs. 1.312 a fs.1.313 (tomo IV)**, ratifica declaración y proclama que su única misión era llevar y traer a los detenidos desde la cárcel a la Fiscalía y es por eso por lo que lo mencionan, puesto que se hizo conocido de la mayoría de los detenidos. Refiriendo a los dichos de Carrasco dice que esa es sólo una impresión que éste tiene puesto que jamás participó ni supo de hechos de esa naturaleza. Recuerda haber visto a Carrasco en el regimiento, pero no se acuerda haberlo visto maltratado o golpeado como éste afirma.

En declaración extrajudicial de fecha 11 de febrero de 2009, rolante de **fs. 1.329 a fs.1.331 (tomo IV)**, insiste que, para el septiembre de 1973, estaba inserto en la segunda comandancia del regimiento, al mando del mayor Luis Jofré Soto, quien ese tiempo era el Fiscal Militar del regimiento Tucapel. En esta unidad cumplió labores de dactilógrafo y criptógrafo. A partir del 11 de septiembre de 1973, paso a desempeñarse en la sección segunda, que veía los temas de seguridad militar del regimiento, la que se encontraba al mando del entonces capitán Nelson Ubilla Toledo (fallecido). El mayor Luís Jofré siguió cumpliendo funciones de fiscal militar, pero era asistido por el abogado Alfonso Podlech Michaud. Las dependencias de la Fiscalía para la fecha en comento funcionaban

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

en otra dependencia distinta a las oficinas de la sección segunda, que donde él junto al sargento Raúl Schonherr trabajaban, principalmente en labores de documentación clasificada y mensajes cifrados que salían y llegaban a la unidad. Dentro de las personas que se desempeñaban como actuarios en la Fiscalía, se encontraban dos actuarios de un Tribunal del Crimen de Temuco, Adrián González Maldonado, Héctor Toloza Fierro (fallecido) y el abogado Dorian Novoa Godoy. Además, había un grupo de funcionarios de la policía de investigaciones de Temuco agregados también a la Fiscalía Militar, dentro de los cuales recuerda a los señores San Juan Clavería, Morales, Quiroz y Luco. Que efectivamente y cree que por su especialidad la que es "Especialista en seguridad militar", le correspondía ir hasta la cárcel pública de Temuco, en vehículo militar (jeep) escoltado por patrulla de la unidad a dejar detenidos de la fiscalía del regimiento o llevar detenidos que eran requeridos; todos por causas políticas. Por lo anterior es que es mencionado tantas veces en estos cometidos, haciendo presente que estos detenidos los dejaba en la guardia del regimiento a espera que fueran ingresados a la Fiscalía. La seguridad de los detenidos mientras permanecían en la unidad militar, era responsabilidad del personal que cumplía labores de guardia y eran mantenidos conforme su recuerdo en el "gimnasio chico" que quedaba aledaño al rancho de conscriptos del Tucapel. Relata otros hechos y desarrollo que el regimiento Tucapel, estaba compuesto por una compañía de plana mayor y servicios, dos compañías de fusileros, una compañía de morteros y una compañía andina. Que el teniente Manuel Hugo Espinoza Ponce (fallecido), lo recuerda inserto dentro de una de las compañías de fusileros como comandante de sección. En tanto, no recuerda algún oficial de apellido Farías.

En declaración judicial de fecha 10 de julio de 2009, rolante de **fs. 1.385 a fs.1.386 (Tomo IV)** (cuya copia consta de fs.3.838 Tomo XI), en lo pertinente recuerda que los oficiales que alojaban en el regimiento y que estaban solteros eran los hermanos García Covarrubias, Manuel Vásquez Chahuán, el teniente Espinoza, teniente Tichauer, el teniente Romilio Lavín, Pablo Gran, Carlos Oviedo. No recuerda al teniente Uribe Moroni. También alojaban los capitanes Vargas, Valdebenito, Mario Alvarado, Fernández Carranza. El teniente Rubio Valladares era casado. Todos los oficiales solteros pernoctaban en las dependencias ubicadas en el casino de oficiales. Que el "CIRE" se formó en el mismo regimiento después del 11 de septiembre de 1973 con representantes de ejército, carabineros

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

y fuerza aérea, pero funcionó poco tiempo. En un principio estuvo nominado junto con Schonherr para formar parte de este organismo, pero posteriormente fueron designados los cabos de apellidos Martínez y Bahamondes, quienes eran conductores. Recuerda que por carabineros había un capitán de apellido Quiroz, y por la fuerza aérea un teniente de apellido Videla. El jefe del "CIRE" era el capitán Rubio Valladares. El capitán Ubilla era el nexo entre el comandante del regimiento y el "CIRE". Puede ser que investigaciones haya formado parte de este organismo, pero no lo recuerda. El sargento Mario Arias Díaz era instructor, pero posteriormente pasó a formar parte de la DINA, al parecer en 1974 o 1975. Recuerda al suboficial Arturo Átala Alcántara (fallecido). Agregó antecedentes respecto causa "El polvorín".

En diligencia de careo con Jaime García Covarrubias, de fecha 22 de diciembre de 2003, rolante de **fs. 1.611 a fs.1.612 (Tomo V)** (cuya copia consta de fs.3.839 Tomo XI), ratifica declaración judicial y reconoce a la persona con quien se le carea y de quien ha hecho referencias. Acotando antecedentes respecto causa "El polvorín".

En diligencia de careo con Ernesto García Isla, fecha 4 de octubre de 2013, rolante de **fs. 1.861 (Tomo V)** (cuya copia consta a fs.3.843 Tomo XI), aseveró que lo que dice García es absolutamente falso, puesto que él nunca entró a la sala que señaló el señor García, ni supo de su existencia. No sabe el motivo por el cual esta persona lo involucro en esos hechos. Se mantiene en sus dichos.

En declaración judicial de fecha 25 de junio de 2012, rolante de **fs. 3.840 a fs. 3.841 (Tomo XI)**, a la pregunta, explico que el Fiscal era Luis Jofré Soto, pero era asesorado por Alfonso Podlech Michaud. Este abogado iba constantemente a la Fiscalía a conversar con el mayor Jofré encerrándose ambos en la oficina del mayor. Este procedimiento era rutinario y permanente desde el mismo 11 de septiembre de 1973 y hasta que el abogado Podlech asumió como Fiscal. Preguntado dice que en varias oportunidades vio al abogado Podlech entrar a la Fiscalía, pero no le consta que él hubiese interrogado personas, ni que diera instrucciones. Este vestía de uniforme, porque antes había sido militar. Interrogado musita que los detenidos políticos eran mantenidos en un gimnasio pequeño que estaba a un costado del rancho de tropa. Estos detenidos eran interrogados en la Fiscalía o viceversa. A él solo le correspondió llevar detenidos desde la guardia o la cárcel a la Fiscalía y desde la Fiscalía a la cárcel. Que el capitán Ubilla coordinaba

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

las actividades de los detectives y del grupo de la fuerza aérea y carabineros que estuvieron agregados al regimiento. Supone que ellos estaban a cargo de las detenciones e interrogatorio de detenidos.

En declaración judicial de fecha 26 de junio de 2013, rolante de **fs. 3.842 (Tomo XI)**, ratifica su declaración extrajudicial y precisa aquella parte de su declaración en que señaló que el señor Podlech era Fiscal y que él confeccionaba los bandos. La verdad no le consta que el señor Podlech haya confeccionado los bandos. Tampoco es efectivo que él fuera fiscal militar en 1973, pero sí le consta que este señor estaba permanentemente en la fiscalía y que, junto al mayor Jofré, que sí era el fiscal militar, tomaban decisiones respecto de los detenidos. También cree que los bandos eran confeccionados en la Fiscalía y posteriormente presentados ante el comandante Iturriaga, quien los aprobaba. Esto lo presumía por el tipo de redacción que los Bandos tenían. Tras esto, el Ayudante Jaime García Covarrubias se los pasaba a él para que los cifrara y los comunicara al cuartel general de División. Que los oficiales Jaime García Covarrubias, Raimundo García Covarrubias, Manuel Vásquez Chahuán, Nelson Ubilla Toledo y en general todo el resto debieron necesariamente saber acerca de la existencia de detenidos en el regimiento y el destino final de estos, porque ellos tenían cargos de responsabilidad y recibían instrucciones directas del comandante Iturriaga, quien tenía el control y el conocimiento de todo lo que ocurría en la unidad.

A.59. Elías Amar Amar (33 años en la época de los hechos).

En declaración extrajudicial de fecha 5 de noviembre de 2003, rolante de **fs. 1.288 a fs.1.289 (Tomo IV)**, expuso en lo pertinente que fue detenido el 14 septiembre 1973 en horas de la noche, en el interior de su domicilio por funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile. Presume que su detención se debió a su cargo de secretario comunal de Temuco del Partido Socialista. Luego de su detención fue trasladado a la base aérea de Maquehue, donde fue interrogado y torturado lo que detalla. Que esa misma tarde los mismos soldados de la fuerza aérea lo trasladaron a la fiscalía militar del regimiento Tucapel, donde fue llevado ante el fiscal militar, percatándose que se trataba de un conocido abogado llamado Alfonso Podlech, quien lo envió incomunicado a la cárcel pública de Temuco. Estuvo incomunicado por cerca de diez días, razón por la cual no salió de ese lugar hasta fines de octubre, cuando es llevado a un interrogatorio al regimiento Tucapel, a cargo de un teniente del cual ignora mayores antecedentes. Pero dicho

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

interrogatorio fue sin aplicación de torturas. Una vez terminado el interrogatorio fue llevado a la cárcel nuevamente, sin decirles a ellos absolutamente nada. En una segunda oportunidad, a fines de noviembre de 1973, fue llevado nuevamente al regimiento Tucapel donde esta vez el interrogatorio fue acompañado por torturas tanto psicológicas como físicas, también la aplicación de corriente electrónica en el cuerpo. Sesión que duró cerca de dos horas aproximadamente, regresándolo a la cárcel. En ambas ocasiones fue llevado a la unidad militar en compañía de otro detenido. Ignora antecedentes acerca de las personas que lo interrogaron y aplicaron torturas. Consultado si vio personas detenidas en la cárcel o regimiento Tucapel, quienes posteriormente fueron Indicadas como desaparecidas o muertas dentro del periodo en que permaneció en esos lugares, dice que, hasta el mes de enero de 1974, recuerda haber visto entre otras personas a Pedro Ríos, Daniel Mateluna, José Ortigosa y Omar Venturelli. Comenta otros hechos.

A.60. Elcides Luis Gubelín Duran (24 años a la época de los hechos). **En declaración extrajudicial** de fecha 5 de noviembre de 2003, rolante de fs. 1.290 a fs.1.291 (Tomo IV), manifestó en lo adecuado que fue detenido cerca del 14 de septiembre de 1973, en su domicilio en la localidad de Pitrufrquén por efectivos de carabineros de ese lugar. Luego fue trasladado a la unidad policial, donde permaneció cerca de seis días, para posteriormente ser llevado al regimiento Tucapel de Temuco. Donde fue recibido por el Fiscal Militar del cual no recuerda su nombre; quien lo interrogó y le dijo que en su caso se le estaban pidiendo cinco años de prisión por estar junto a otras tres personas en la plaza de armas de Pitrufrquén, protestando en contra del régimen militar y que se le había encontrado en su poder un revólver calibre 45, lo que no era cierto. Luego de sucedido esto fue enviado a la cárcel de Temuco, donde permaneció detenido hasta noviembre de 1975. Cuenta pormenores de su detención y antecedentes de otros hechos. Que, a mediados del mes de octubre 1973, fue llevado al consejo de guerra de Temuco, donde fue condenado a diez años por infracción a la ley de control de armas. Siendo luego de esta presentación, enviado por el consejo a la cárcel de Temuco. Que nunca fue llevado a declarar al regimiento de Temuco, encontrándose detenido en la cárcel de Temuco. Solo declaró cuando llegó y ante el señor Fiscal, quien luego de hacerle algunas preguntas lo envió a la cárcel.

A.61.Herman Carrasco Paul (22 años a la época de los hechos) de fs. 1.298 a fs. 1.302 (Tomo IV), de fs. 1.303 a fs. 1.304 (Tomo IV), de fs. 1.312 a fs.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

1.313 (Tomo IV), de fs. 1.314 a fs. 1.317 (Tomo IV), de fs. 1.323 a fs. 1.324 (Tomo IV), de fs. 1.351 a fs. 1.352 (Tomo IV), de fs. 1.598 a fs. 1.599 (Tomo V), de fs. 1.600 (tomo V), de fs. 1.601 a fs. 1.603 (Tomo V), de fs. 1.613 a fs. 1.614 (Tomo V) y de fs. 1.831 a fs. 1.832 (Tomo VI).

En declaración judicial de fecha 11 de diciembre de 2003, rolante de **fs.1.298 a fs.1.302 (Tomo IV)**, exployo que para septiembre de 1973 era dirigente de las juventudes comunistas y alumno de segundo año de la Universidad de Chile, sede Temuco. El 17 de septiembre personal de la fuerza aérea allano su casa, por lo que se fue a la casa de sus suegros. Su suegro, don René Beltrán Valdebenito, era suboficial mayor en servicio activo del regimiento Tucapel. Su padre también era suboficial en retiro desde el año 1962. El 17 de septiembre, saliendo de la casa de sus suegros, en la Villa O'Higgins una patrulla de la fuerza aérea lo detuvo y estuvo en la fuerza aérea hasta el veinticuatro de ese mes. En ese lugar fue vendado, lo llevaron a la guardia y luego lo trasladaron a un recinto cerrado donde luego de hacerlo desnudar, lo someten a maltrato físico y torturas. En esa época él hacía clases en el liceo vespertino de adultos en donde había personal de la fuerza aérea, completando la enseñanza media, por lo que reconoció a Jorge Aliro Valdebenito y a un sargento de apellido Fernández, quienes eran alumnos suyos. Además, se enteró que fue torturado por un teniente de apellido Cantarutti, un sargento de apellido Garrido y Ángel Campos (fallecido). Esto lo supo porque tiempo después estuvo detenido en la cárcel pública y a ese lugar llegaron detenidos el sargento Fernández, el suboficial Paredes, el suboficial de apellido Soto Maino, mecánico de helicóptero, prosigue su relato con relación a lo que le aconteció en esa oportunidad. Agrega que el día 5 de noviembre mientras tomaba once en casa de sus padres, llegaron a buscarlo el suboficial Omar Burgos Dejean y el cabo Juan de Dios Fritz, ambos de carabineros de Chile, pues lo requerían en la fiscalía militar. Lo llevaron a la 2º Comisaría donde le preguntaron por el nombre de dirigentes políticos de la época. Luego de eso lo pasaron a un calabozo donde vio a Florentino Alberto Molina Ruiz, secretario regional del partido comunista y Raúl Buholzer Matamala, catedrático de la "UTE" de Temuco. Al día siguiente los tres fueron trasladados al regimiento Tucapel y los ingresaron a un calabozo que estaba detrás de la guardia. Allí fueron recibidos entre otros, por Orlando Moreno Vásquez, a quien conocía porque eran vecinos. Estando en ese lugar fue vendado y conducido por Juan Carrillo hacia el gimnasio

del regimiento donde fue sometido a tortura, mediante la aplicación de electricidad en todo el cuerpo. Calcula que eran cinco personas las que lo torturaban, entre las cuales reconoció la voz de Nelson Ubilla Toledo y Orlando Moreno Vásquez. A Nelson Ubilla lo ubicaba, pues en su calidad de dirigente estudiantil fue varias veces a la Intendencia y esta persona fue ayudante del intendente en una época. Luego de esos tormentos lo llevaron de vuelta al calabozo antes señalado, lugar donde llegaron además en momentos distintos; Víctor Hugo Valenzuela Velásquez, funcionario del Conservador de Bienes Raíces de Temuco, Juan Antonio Chávez Rivas, secretario regional de las Juventudes Comunistas y Pedro Juan Mardones Cofré, estudiante de ingeniería eléctrica de la "UTE". En los días posteriores fueron torturados por turnos por los antes mencionados y en una oportunidad vio a Juan Carlos Ruiz Mancilla en la guardia, quien estaba muy golpeado y al parecer tenía la columna quebrada. En otra ocasión fue conducido a las dependencias de la segunda compañía en donde le sacaron la venda y conversó cara a cara con Nelson Ubilla Toledo y en presencia al parecer de Orlando Moreno, quien le dijo que lo sabían todo y que dijera dónde estaban las armas. Él negó todo, pero éste le dijo que para que se diera cuenta de lo informados que estaban, lo vendaron y lo llevaron a una pieza contigua donde escuchó el interrogatorio que le hacían a Amador Francisco Montero Mosquera, quien dio su nombre y el de Juan Antonio Chávez como jefes. Se dio cuenta que los dichos de Montero eran producto de la tortura. Después de eso lo devuelven al calabozo y concluyo que había más personas detenidas. Posteriormente el día jueves por la noche los sacan, al patio ya sin vendas, los forman a todo el grupo y aparece un oficial alto y delgado de bigotes tipo prusiano, no está seguro si era Jaime o Raimundo García Covarrubias, pero era uno de ellos pues su suegro con posterioridad, le reveló el nombre porque éste presencié el hecho. Los condujeron al gimnasio y en ese lugar aparece por accidente otro detenido de nombre Gastón Ramos, quien venía a entregar su cargo de director del servicio de Seguro Social, quien posteriormente fue sacado del lugar. Que en el gimnasio el oficial García Covarrubias comenzó a golpearlos con una fusta que tenía en la mano. Además, los obligaron a desnudarse y procedieron a golpearlos. Junto a García Covarrubias había conscriptos a quienes éste arengó para que los golpearan con furia, cosa que hicieron, entre otras cosas que detalla. Que el día 8 de noviembre, aún en el gimnasio, los sacan de a uno hacia la fiscalía militar para firmar su

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

libertad. Esto sucedió en presencia del cabo Schonherr y de Alfonso Podlech Michaud. Posteriormente Raúl Buholzer y él fueron subidos a un camión junto a otros detenidos y los condujeron la cárcel. En el camión iba el sargento Moreno. A los diez o quince días se enteró que los otros detenidos con los que había estado habían sido ejecutados. Esto lo supo porque un cuñado le llevo un recorte del diario con la noticia que habían intentado atacar “el polvorín” del Regimiento. En una fecha indeterminada del año 1974, como seis meses después, a las dos de la mañana aproximadamente, vino un camión de militares a buscarlo, pero gendarmería se opuso a que lo llevaran pues no había orden de la Fiscalía. Días después llegó Moreno a la cárcel y le dijo que le agradeciera a su suegro el hecho de estar vivo. Tiempo después, Moreno lo llevó a la Fiscalía donde se intentó vincularlo con la tenencia de armas, cosa que negó. En junio o julio de 1975 obtuvo la libertad bajo fianza, siendo condenado en ausencia a la pena de tres años y un día por infracción a la ley de armas, sanción que nunca cumplió por haberse acogido a la ley de amnistía.

En diligencia de careo con Nelson Ubilla Toledo, de fecha 12 de diciembre de 2003, rolante de **fs. 1.303 a fs.1.304 (Tomo IV)**, ratifica su declaración y agrego que la persona sentada a su lado es el señor Nelson Ubilla Toledo, a quien se ha referido en su declaración. Que el señor Ubilla es quien lo torturó y dirigía los interrogatorios. Además, su suegro René Beltrán Valdebenito, le salvó la vida ya que intercedió ante esta persona y eso hizo que lo llevaran a conversar con él y este señor fue quien le sacó la venda que llevaba en la vista para que conversaran. Quien argumentó que el motivo de conversar con él era el aprecio que le tenía a su suegro e iba a intentar salvarlo pues estaban todos condenados a muerte. Adiciona que, en su estadía en la cárcel, donde pasaron más de quinientas personas, los que habían tenido la desgracia de pasar por el regimiento, señalaban sin temor a dudas y con absoluta certeza, que la persona que dirigía el aparato de represión, interrogatorios y desaparecimientos desde el regimiento, como es el caso de Luis Almonacid; era don Nelson Ubilla Toledo, capitán y jefe del servicio de inteligencia militar. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo con Orlando Moreno Vásquez, de fecha 22 de diciembre de 2003, rolante de **fs. 1.312 a fs.1.313 (Tomo IV)**, ratifico su declaración de fs. 175 la que rola en estos autos de fs.1.298 a fs.1.302 (Tomo IV), reconoce a la persona sentada a su lado como el sargento Orlando Moreno

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Vásquez. Que para él es muy difícil aceptar la versión del señor Moreno, puesto que, si bien es cierto que no lo vio, en la cárcel todo el mundo comentaba que éste era un torturador y mano derecha de Nelson Ubilla. Además, cuando fue sometido a tortura en el gimnasio del regimiento escuchó su voz, de entre las de sus torturadores. Insiste en sus dichos y que entiende la situación incómoda en la que se encuentra Orlando Moreno, pero insiste que hay hechos que le permitirían aliviar su conciencia y decir la verdad, pues éste lo vio torturado. Se mantiene en sus dichos.

En declaración judicial de fecha 29 de diciembre de 2008, rolante de **fs.1.314 a fs. 1.317 (Tomo IV)**, reitera en lo pertinente que el día 4 de noviembre de 1973, fue detenido por dos funcionarios de carabineros de nombres Juan Fritz y Omar Burgos, quienes se movilizaban en una camioneta y vestían de civil. Le mostraron una orden de detención emanada de la Fiscalía Militar, la que además incluía a muchas otras personas. Fue conducido hasta la segunda comisaría de carabineros, en donde un suboficial le preguntó en la guardia acerca de las personas que aparecía en la lista entre las que recuerda a Raúl Buholzer Matamala, a Florentino Alberto Molina Ruiz, quien era un obrero y secretario regional del partido comunista de Temuco; Juan Carlos Ruiz Mansilla, quien era militante de la juventud comunista y estudiante de la "UTE"; además de otros funcionarios públicos. Que al día siguiente fue trasladado en furgón hasta el regimiento Tucapel junto con Juan Antonio Chávez y al parecer Víctor Valenzuela Velásquez. Ya en el Tucapel estaban los ya mencionados, más Pedro Juan Mardones Jofré, quien fue sumado al grupo en ese lugar. Fueron recibidos por el sargento Orlando Moreno Vásquez en la guardia del regimiento. También estaba presente el capitán Nelson Ubilla Toledo y otros oficiales cuyos nombres no recuerda. Junto a Buholzer, Chávez, Molina, Mardones y Valenzuela los condujeron hasta la pieza ubicada detrás de la guardia. Luego, comenzaron a sacarlos de a uno hacia el gimnasio del regimiento para someterlos a interrogatorios. En ese lugar fue interrogado por el capitán Nelson Ubilla, por el teniente Jaime García Covarrubias y por el sargento Orlando Moreno Vásquez. Los interrogatorios incluían apremios ilegítimos y siempre estuvieron vendados, salvo en una oportunidad en que los fueron sacadas a todos las vendas y pudo ver al teniente Jaime García Covarrubias y al conscripto Juan Carrillo, quien fue militante de las juventudes comunistas y expulsado de este partido, prosigue su

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

relato y que dos días después fue llevado junto a Juan Antonio Chávez hasta la oficina de la fiscalía militar, ubicada al interior del regimiento donde fue conminado a firmar un documento autoinculpatorio, el cual se negaron a suscribir. En ese lugar se encontraban Alfonso Podlech, Nelson Ubilla Toledo y Orlando Moreno Vásquez. Reproduce que se salvó gracias a su suegro René Beltrán Valdebenito, quien intercedió por él y conversó con Nelson Ubilla Toledo, sumando detalle. Cuenta lo ocurrido en los hechos del episodio denominado “el asalto polvorín”.

En declaración extrajudicial, de fecha 5 de enero de 2009, rolante de **fs. 1.323 a fs. 1.324 (Tomo IV)**, comienza refiriendo a lo acontecido en episodio denominado “el asalto polvorín”, y relatando su situación cuando fue detenido. En lo pertinente soslaya que a quienes recuerda como sus interrogadores al interior del regimiento Tucapel, estaban Orlando Moreno Vásquez, que se desempeñaba en la Fiscalía del regimiento, a quien conocía desde niño porque eran vecinos. El fallecido Nelson Ubilla Toledo, el teniente de ejército Manuel Vásquez Chahuán, además de otro teniente llamado “El Loco Espinoza”, el teniente Jaime García Covarrubias, quien los interrogó a rostro descubierto y el conscripto Juan Carrillo. Finalmente indico que respecto del fiscal del regimiento Tucapel, el abogado Alfonso Podlech Michaud, este sí participaba de los interrogatorios, vestido de militar y con el grado de mayor, y fue éste quien, le insistió en firmar un documento; que negaron a firmar y donde se hacían responsables como los jefes del “Plan Z”.

En diligencia de careo con Juan Humberto Carrillo Rebolledo, de fecha 19 de mayo de 2009, rolante de **fs. 1.351 a fs. 1.352 (Tomo IV)**, ratifica su declaración que rola de fs. 218 la que consta en estos autos a fs. 1.314 a fs. 1.317 (Tomo IV). Reconoce a la persona con la cual se le carea como Juan Carrillo Rebolledo, quien era conscripto del regimiento Tucapel para septiembre de 1973. Que el primer día que lo sacaron desde la pieza de guardia hacia el gimnasio del regimiento; fue el conscripto Juan Carrillo quien lo sacó de ese lugar. Lo llevo hacia la parte de atrás del recinto, lo golpeó, le dijo “expúlsame ahora concha de tu madre” y posteriormente le vendó la vista para conducirlo al gimnasio. Que es cierto que el suboficial Beltrán era su suegro, pero nunca lo fue a ver mientras estuvo detenido. Su suegro conversó con el capitán Ubilla, con el sargento Moreno y con el comandante Iturriaga para interceder por él. Preguntado dice que vio a

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Juan Carrillo dentro del regimiento, en no menos de tres oportunidades. Se mantiene en sus dichos.

En declaración extrajudicial de fecha 2 de septiembre de 2010, rolante de **fs. 1.598 a fs.1.599 (Tomo V)**, (cuya copia consta de fs.1.613 a fs.1.614 Tomo V), en lo pertinente reitera antecedentes de causa “el polvorín” e insiste en su relato sobre su detención por carabineros y que al día siguiente es trasladado al regimiento Tucapel de Temuco e ingresado a un calabozo que existía en la parte posterior al recinto de guardia. Ya estando detenido y habiendo sido sometido a diversos interrogatorios bajo tortura, el día 7 u 8 de noviembre de 1973 mientras estaba en el calabozo junto a Víctor Valenzuela, Juan Mardones, Alberto Molina, Juan Antonio Chávez y Raúl Buholzer, todos a rostros descubiertos, en horas de la tarde, apareció un oficial del grado teniente a quien ubicaba con antelación de nombre Jaime García Covarrubias, portando una fusta de montar, con su rostro desencajado. Y les ordenó salir del calabozo hacia el patio de formación, recuerda que el teniente García, se hacía acompañar de una patrulla de conscriptos, quienes andaban portando sus fusiles. En un momento les hizo formar entre gritos e insultos y golpes con la fusta y les gritó “aquí se forman todos los comunistas chucha de su madre” y en fila los hizo marchar hacia el gimnasio que se encontraba en la parte sur de la unidad militar. Una vez al interior del gimnasio García Covarrubias, a “punta de golpes de su fusta, nos obliga a desvestirnos entre golpe de culata que nos proporcionaban los conscriptos en cumplimiento de órdenes”, prosigue detallando lo sucedido, y agrega que a la mañana siguiente es sacado de las dependencias, para lo cual se le hace vestir y venda la vista, siendo conducido a lo que cree que eran las dependencias de la segunda compañía de cazadores. En dicho lugar, es ingresado a una pieza donde escucha que una persona estaba bajo tortura, en ese lugar un hombre desconocido le dice a Montero Mosquera que repita el nombre de los dirigentes de las juventudes comunistas y este dice producto de las torturas Juan Antonio Chávez y el “Chico Carrasco” refiriéndose a él. Le sacan la capucha y vio al capitán Nelson Ubilla Toledo y a su suegro, continúa su relato.

En declaración judicial de fecha 15 de septiembre de 2010, rolante de **fs.1.600 (Tomo V)**, ratifica su declaración extrajudicial de fs. 1.543 a fs. 1.544 la que consta en estos autos a fs. 1.598 a fs.1.599 (Tomo V), y anexa a sus dichos que permaneció en calidad de detenido al interior del regimiento Tucapel hasta el

día anterior al supuesto “asalto al polvorín”, puesto que fue trasladado hasta la cárcel de Temuco, en un camión bajo la custodia de una patrulla militar que iba al mando de Orlando Moreno Vásquez. Junto a él iban otras personas, entre las que recuerda a un hijo o sobrino de un militante comunista que era de apellido Fernández a quien apodaban “pantera”.

En diligencia de careo con Jaime García Covarrubias, de fecha 15 de septiembre de 2010, rolante de **fs. 1.601 a fs.1.603 (Tomo V)**, ratifica declaraciones de fs. 218 que rola en estos autos a fs.1.314 a fs. 1.317 (Tomo IV) y de fs. 1.547 la que rola a fs. 1.600 (Tomo V) de estos autos, reconoce a la persona sentada a su lado como Jaime García Covarrubias, a quien ha hecho referencia en sus dichos. Dice tener la certeza que éste participó en el asesinato de las personas que murieron en el polvorín; por la manera como se ensañó con ellos durante las sesiones de tortura junto a sus conscriptos. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo con Alfonso Podlech Michaud, de fecha 12 de agosto de 2013, rolante de **fs. 1.831 a fs. 1.832 (Tomo VI)**, en lo pertinente ratifica declaraciones de fs. 175, de fs. 218 que rola en estos autos a fs.1.314 a fs. 1.317 (Tomo IV) y de fs. 3.567. Reconoce a la persona sentada a su lado como Alfonso Podlech Michaud de quien ha hecho referencia. Que conoce a Alfonso Podlech Michaud desde niño. En lo demás, se mantuvo en sus dichos.

A.62. Manuel Ángel Fernández Carranza (33 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 1.318 a fs. 1.319 (Tomo IV), de fs. 1.802 a fs. 1.804 (Tomo VI), de fs. 2.764 a fs. 2.765 (Tomo VIII), y de fs. 3.112 a fs. 3.113 (Tomo IX).

En declaración judicial de fecha 29 de diciembre de 2008, rolante de **fs.1.318 a fs.1.319 (Tomo IV)**, musito en lo pertinente que para septiembre de 1973 se desempeñaba en el regimiento Tucapel de Temuco, con el grado de capitán. En cuanto a la sección segunda del regimiento, el capitán Nelson Ubilla se hizo cargo de ésta y en un principio comenzó a operar en el gimnasio ubicado al interior del regimiento. Hasta ese lugar acudían las personas llamadas por bando militar o por altavoces. Alude que en dicho lugar seguramente se efectuaron todos los interrogatorios. Le son familiares los nombres de Schonherr y Orlando Moreno Vásquez, pero no rememora con exactitud si trabajaban junto a Ubilla Toledo. Sin embargo, recuerda que en una oportunidad vio a un oficial de

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

aviación al interior del regimiento interrogando a personas requeridas por la sección segunda. También vio patrullas de carabineros y de investigaciones que constantemente salían y entraban del regimiento. Todos estos movimientos eran coordinados por el capitán Nelson Ubilla Toledo. Relata que en cuanto al “asalto al polvorín” a su regreso a Temuco, entrando en la guardia el comandante del regimiento le informó que el “asalto al polvorín” no había sido tal, sino que había sido una ejecución efectuada en el polígono. Esto se lo dijo para que lo supera de su boca y no de trascendidos. Alude que además de los oficiales ya referidos puede indicar a los capitanes Herrera, Alvarado y Vargas. El ayudante del regimiento Jaime García Covarrubias, quien dice que está al tanto de todo lo ocurrido en el regimiento Tucapel. Que además había un teniente de apellido Espinoza. También había una compañía de personal movilizado al mando de un capitán de apellido Huerta, entre cuyos componentes recuerda a un teniente de apellido Maldonado. No recuerda a algún conscripto de nombre Juan Carrillo, y no le consta que haya habido personas detenidas en la segunda compañía. Solo supo de los detenidos al interior del gimnasio.

En declaración judicial de fecha 2 de julio de 2013, rolante de **fs.1.802 a fs.1.804 (Tomo VI)**, en lo adecuado desarrollo que, desde antes del 11 de septiembre de 1973, todos los oficiales sabían cuál era la postura política de cada uno. Él era el único oficial que no estaba de acuerdo con que se produjera el golpe de Estado. Por eso, cuando en una reunión previa a este hecho, el comandante Iturriaga preguntó si ante un hipotético golpe de Estado alguno de los oficiales no estaría de acuerdo, el expreso su opinión en ese sentido. Entonces el ayudante del regimiento, Jaime García Covarrubias se levantó y le dijo que era comunista. Que después del 11 de septiembre de 1973, le correspondió disponer personal para la seguridad de las instalaciones de los servicios básicos que se necesitaran resguardar en la ciudad. Preguntado dice que vio personas civiles que llegaron al regimiento llamadas por Bando, quienes fueron atendidas al interior del gimnasio de la unidad. Que, en ese lugar, seguramente fueron interrogadas por el personal de inteligencia. Nunca entró al gimnasio, pero pudo ver en alguna oportunidad que vehículos de carabineros entraba al regimiento o salían de este con personas civiles, con destino a la cárcel posiblemente. Salvo estos hechos, no vio personas detenidas en algún otro lugar del regimiento. Alude que el grupo de inteligencia del regimiento estaba dirigido por el capitán Nelson Ubilla Toledo y con seguridad se

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

coordinaba para sus acciones con el comandante Iturriaga. Que quien debe haber servido de nexo para esta coordinación era el ayudante del regimiento, el teniente Jaime García Covarrubias. Sin perjuicio de esto, todos los oficiales iban al gimnasio a ver lo que ocurría, pero desconoce si Ubilla “echó mano de alguno de ellos para que lo ayudaran en los interrogatorios”. Preguntado dijo que con excepción de las personas que resultaron muertas en el polvorín, no supo de otras ejecuciones en el regimiento Tucapel. Se le pregunta por otros hechos. Y que respecto de la misión que cumplió hacia el sector de Pucón, recuerda que esta duró entre una semana y diez días, fue acompañado por más de un capitán, recordando uno de apellido Riedemann, que era de reserva. Fue al mando de alrededor de doscientos efectivos. Se constituyó en una escuela de Pucón y dirigió las misiones hacia los pasos fronterizos. No hubo detenidos ni se registraron eventos especiales. Recuerda que voló en un helicóptero que era pilotado por el capitán Reyes de la base Maquehue.

En declaración extrajudicial de fecha 29 de agosto de 2017, rolante de **fs. 2.764 a fs. 2.765 (Tomo VIII)**, replica desempeño en el regimiento de Tucapel de Temuco, y en lo pertinente proclama que por su conocida posición ante los sucesos ocurridos el día 11 de septiembre de 1973, optó por quedar aparte a toda labor operativa o represiva que se comenzó a realizar en Temuco, la cual iba orientada a las detenciones e interrogatorios de personas opositoras al régimen militar. La labor antes mencionada se canalizó directamente desde la comandancia del regimiento hacia la compañía de plana mayor y servicios, la cual estaba a cargo del capitán Nelson Ubilla Toledo, quien asumió labores de inteligencia. Dentro de los colaboradores de Ubilla, estaba el sargento Arias, recordando que en la comandancia había otro cabo o sargento que también veía esos temas cuyo apellido era Schonherr. Que todo el mando de esas labores lo llevó Ubilla, quedando a cargo del personal de la policía de investigaciones, carabineros y fuerza aérea que llegó a colaborar en temas relacionados con detenidos. Dentro de las labores que le correspondió realizar la primera semana de ocurrido el golpe de Estado, recordó el haber quedado a cargo de la distribución del personal en distintos puntos de la ciudad al objeto de resguardar servicios públicos. Niega haber participado en detenciones y torturas al interior del regimiento e indica que tenía una posición muy distinta de lo que se estaba haciendo e incluso estaba dispuesto a poner su cargo a disposición si se le daba

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

una orden de esa naturaleza. Por el motivo antes señalado, quedo marginado de toda labor operativa y por ende nunca presencié apremios ilegítimos en contra de algún detenido. Respecto a su concurrencia a la zona de Pucón y Villarrica, afirmo haber concurrido, pero no recuerda fecha exacta, solo tiene la claridad que esta concurrencia fue a las semanas de ocurrido el golpe. Respecto a las víctimas de Héctor Aguayo Olavarría; los hermanos Juan Carlos y Ricardo Schmidt Arriagada; Elías y Hugo Gonzalez Ortega, Alejandro Escobar Vásquez, Raúl Figueroa Burkhardt y Juan de Dios Cabrera Figueroa; señaló que sus nombres no le son conocidos, por lo que no podría aportar antecedentes respecto sus detenciones y posibles paraderos. Respecto a la consulta, afirmo que nunca supo por comentarios de soldados de su compañía que hayan tenido que ir a la isla Cautín los primeros días del golpe de Estado, a recoger los cuerpos de personas fallecidas para posteriormente subirlas a camiones militares que salieron con rumbo desconocido.

En declaración judicial de fecha 26 de marzo de 2019, rolante de **fs. 3.112 a fs. 3.113 (Tomo IX)**, ratificó su declaración extrajudicial rolante de fs. 2.764 a fs. 2.765. Alude que tampoco por diferentes razones fue a la isla Cautín, nunca se enteró de fusilamientos en aquella isla, ni nadie le dio cuenta de aquello. Salvo cuando se le consultó del famoso caso polvorín donde el propio comandante Iturriaga Marchesse le dijo “quiero que Ud., sepa de boca mía lo que realmente ocurrió...que se habían ejecutado unas personas, dando como motivo el asalto al cuartel, y que esto no era efectivo”. Que nunca se enteró respecto a lo sucedido a esos ocho jóvenes, víctimas según se le indico de esta causa. Que tuvo una actitud de negación al golpe. Eso lo manifestó ante toda la oficialidad del regimiento Tucapel de Temuco tras el golpe de Estado. En relación con el término de su carrera militar, indico que su primer gesto ante el golpe de Estado fue renunciar. Sin embargo, el general Urbina que se encontraba en Temuco le hizo ver que perdería toda su carrera militar. Luego continuó en el ejército, pero marginado de todas aquellas situaciones en relación con los detenidos. Permaneciendo en el regimiento Tucapel hasta diciembre de 1973. Proclama que en el gimnasio se desarrollaron todos los interrogatorios, lógicamente veía como los detenidos desfilaban por el patio, pero él estaba al margen de todo ello. Había una línea de mando destinada a aquellas detenciones. Apunto que salvo algunas vidas como es el caso del concejal Smith de Pitrufquén, donde fue a hablar a la

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

fuerza aérea a efectos de interceder por éste, quien en definitiva se salvó. Manifestándome éste con posterioridad, que los demás detenidos que estaban con él habrían perdido la vida, desconociendo de qué forma.

A. 63. Aquiles Alfonso Poblete Müller (43 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 1.320 a fs. 1.322 (Tomo IV), de fs. 1.697 a fs. 1.698 (Tomo V), de fs. 1.703 a fs. 1.704 (Tomo V), de fs. 1.805 (Tomo VI), de fs. 3.647 a fs. 3.649 (Tomo X), de fs. 3.650 a fs. 3.652 (Tomo X), de fs. 3.653 a fs. 3.654 (Tomo X) y de fs.3.655 (Tomo X).

En declaración judicial de fecha 29 de diciembre de 2008, rolante de **fs. 1.320 a fs. 1.322 (Tomo IV)**, (cuya copia consta de fs. 3.647 a fs. 3.649 Tomo X), atestigua que para septiembre de 1973 se desempeñaba como jefe territorial de investigaciones de ferrocarriles, que comprendía la jurisdicción de Cajón a Puerto Montt, le parece que tenía el grado de inspector. Que fue destinado al regimiento Tucapel de Temuco, desde fines de septiembre de 1973 hasta los primeros días de enero de 1974. Junto a él fueron asignados Rigoberto Ortiz, Luis Morales y Hernán Quiroz. En cuanto al chofer Carlos Luco, le parece que estuvo en el regimiento, pero no estaba a su cargo. Que nadie más fue asignado al regimiento, al menos que recuerde. En el regimiento fueron recibidos por el comandante de la unidad quien le presentó al capitán Ubilla, informándoles que a partir de ese momento trabajarían bajo sus órdenes. En el regimiento cumplían diversas funciones, como citaciones y cosas por el estilo. Interrogado dice que sí interrogó detenidos políticos, específicamente recuerda haber interrogado a seis médicos que venían de Puerto Saavedra, aunque ignora sus nombres. No recuerda haber trabajado con los suboficiales Moreno, Schonherr y Rubilar. Los interrogatorios los efectuaban en una oficina grande, que era como una cuadra y posteriormente en un gimnasio. Que practicaba los interrogatorios en presencia de Quiroz, Ortiz y Morales. Los detenidos no prestaban un interrogatorio formal en el sentido que firmaran alguna declaración, sino que ellos obtenían la información y le informaban de los avances de los interrogatorios al capitán Ubilla, quien muchas veces presenciaba esas entrevistas. Desconoce la filiación política de los médicos. Hace presente que el gran responsable de todo y quien decidía el destino de los detenidos era el abogado Alfonso Podlech, quien estaba a cargo de la fiscalía militar. Que no presenció ni participó en torturas en el regimiento Tucapel. A las personas que ellos interrogaban en el gimnasio del regimiento Tucapel estaban allí

en calidad de detenidos y se veían muy cansados. Por lo general, les preguntaban acerca de la existencia de armas y por su filiación política. En total debe haber interrogado a diez personas; pudiendo recordar a un joven que dijo ser "GAP", pero que tras el interrogatorio descubrieron que no era tal. Posteriormente un oficial, al parecer Ubilla, le dijo que a ese joven "se lo había llevado el señor". Otra persona que a quien tomo declaración fue a un corredor de autos de apellido Ortigosa. Toda la información se la entregaban a Ubilla y este a su vez, entregaba los antecedentes a la fiscalía militar. En esa repartición quien decidía el destino de los detenidos era Alfonso Podlech, que según supo, era el Fiscal. Se le pregunta por otros hechos y en lo adecuado no recuerda haber conocido al conscripto Juan Carrillo. Que se retiró del regimiento en enero de 1974, pero dice que se quedó trabajando en ese lugar Hernán Quiroz, quien no quiso retirarse. Que solo su equipo más el oficial Ubilla estaban presentes en los interrogatorios que le correspondió practicar. Nunca vio presenciar interrogatorios a Alfonso Podlech ni estuvo presente cuando éste decidía el destino de los detenidos, pero que se comentaba mucho ese hecho. Finalmente, dio a conocer al Tribunal que se comentaba que un médico del regimiento practicaba interrogatorios a los detenidos usando Pentotal. Sin embargo, no conoce el nombre de ese médico.

En declaración extrajudicial de fecha 11 de julio de 2012, rolante de **fs. 1.697 a fs. 1.698 (Tomo V)**, soslaya que es efectivo que estaba a cargo del grupo de detectives agregados al regimiento Tucapel de Temuco. Cumplió funciones ordenadas por un capitán de ejército de apellido Ubilla, quien dispuso que se hiciera cargo de los interrogatorios de las personas que llegaban en calidad de detenidas al regimiento Tucapel. Para efectuar dichas labores se situaron en el gimnasio del regimiento, donde personal del ejército les entregaba a los detenidos, quienes ya venían en malas condiciones físicas y procedían a interrogarlos bajo la aplicación de corriente eléctrica producida por un dinamo, también recuerda que con un cochuayo mojado, lo pasaban por el cuerpo de los detenidos simulando que se trataba de una culebra. Hace presente, que todos los detenidos ingresaban vendados y procuraban no sobrepasarse con ellos. Una vez, terminada la sesión de interrogatorios entregaban a los detenidos al capitán Ubilla, quien, hacia entrega de estos a otro grupo de interrogadores, pero que pertenecían al regimiento. Acota que el personal de ejército no participaba en los interrogatorios que ellos efectuaban, pero recuerda que en más de una oportunidad estuvo

presenten por unos momentos el comandante Iturriaga Marchesse. Afirma que el grupo de detective que interrogaba junto a él recuerda a Quiroz y Ortiz. Que su horario era de 8:30 AM a 17:30 horas de lunes a viernes. Insiste que estuvo agregado al regimiento por tres meses, recordando que al final del periodo ya se encontraba aburrido de las situaciones que ocurrían al interior del regimiento, sobre todo lo que les comentaban algunos militares, referente a los detenidos que interrogaban, ya que, en más de una oportunidad se le comentó que la mayoría de estas personas se les daba muerte. Por ese motivo, le manifestó su molestia al comandante Iturriaga, señalándole que junto a su personal se retiraban del regimiento a lo que el uniformado no le puso objeción. El único detective que siguió fue Quiroz, quien se había hecho muy cercano del capitán Ubilla, manifestándole en la oportunidad que le ordenó que abandonara el regimiento, que se quedaba en el regimiento ya que le iban a otorgar grado de oficial. Se le pregunta por otros hechos y señala que fueron muchos los interrogatorios que efectuaron, recordando el de una persona de Santiago que decía ser del "GAP", recordando que una vez interrogado lo entregaron a Ubilla enterándose al día siguiente que había fallecido a mano de los militares, por ley de fuga, afincando que los militares siempre le aplicaban ley de fuga a los detenidos. En cuanto a los militares que interrogaban a los detenidos y que posteriormente se enteraban de que estos se les daba muerte, correspondían a un grupo de funcionarios al mando del capitán Ubilla, que a su parecer eran del área de inteligencia y dice que son ellos los que debiesen saber de qué manera eran eliminados y las circunstancias, no recordando nombres al respecto.

En declaración judicial de fecha 30 de julio de 2012, rolante de **fs. 1.703 a fs. 1.704 (Tomo V)**, ratifica declaraciones y en lo pertinente dice que sabía de las decisiones que tomaba el abogado Alfonso Podlech con respecto de los detenidos, porque los propios soldados que los llevaban y traían les decían que era esta persona quien determinaba sus destinos. Recuerda haber interrogado a un joven que decía haber pertenecido al "GAP". Esta persona cuando se la entregaron estaba muy "frisquedada" es decir, los militares de inteligencia lo habían torturado bastante. Que éste les refirió con lujo de detalles la estructura del Palacio de la Moneda, por lo que no hubo necesidad de apremiarlo. Describe como era esta persona y dice que fue ejecutado por militares. Un soldado, cuya identidad ignora le dijo que a este joven "se lo había llevado el Señor". Que había

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

otro oficial que estaba al tanto de lo que pasaba con los detenidos, el teniente Rubio. Sin embargo, no le cabe duda de que todos los oficiales sabían sobre esto. Se le pregunta por otros hechos y en lo atinente dice que desconoce el nombre de los militares que trabajaban con ellos, pero siempre fue el mismo grupo entre conscriptos y clases. No recuerda que un joven haya muerto durante los interrogatorios producto de las torturas. Refiere a otros hechos y que le correspondió interrogar detenidos en una sala ubicada en una cuadra del regimiento, en donde les aplicaban electricidad a estas personas. Recuerda que tanto Quiroz como Ortiz participaban dándole vuelta al dínamo, pero al que más utilizó fue a Quiroz, puesto que Ortiz participaba más de los interrogatorios; en tanto Morales era torpe y sólo servía para trasladar a los detenidos y darle algunos golpes. Las terminales eléctricas se las ponían en cualquier parte del cuerpo. Insiste que Quiroz se quedó trabajando con el grupo de inteligencia del ejército.

En declaración judicial de fecha 3 de julio de 2013, rolante de **fs.1.805 (Tomo VI)**, (cuya copia consta de fs. 3.655 Tomo X), consultado destacó que el abogado Alfonso Podlech era quien determinaba el destino de los detenidos. Sin embargo no recuerda haberlo visto interrogando detenidos junto a él. Se le pregunta por José Ortigosa Ansoleaga, dice que vio a esta persona al interior del regimiento Tucapel. Esta persona estaba botada en el piso del gimnasio de la unidad, recuerda que la arrastro hacia una banca y posteriormente dio cuenta de esta situación al capitán Ubilla, quien al parecer le dio a conocer el caso al coronel Iturriaga, no supo que militares intervinieron en su muerte. Aun no recuerda el nombre de los militares que trabajaban con ellos, pero siempre fue el mismo grupo entre conscriptos y clases. Ratificó sus dichos en cuanto al detective Quiroz, agregando que el capitán Ubilla le pidió que dejara a Quiroz trabajando con él.

En declaración judicial de fecha 26 de julio de 2006, rolante de **fs. 3.650 a fs. 3.652 (Tomo X)**, replica su desempeño funcionario para septiembre de 1973, reiterando que fue asignado a fines de septiembre de 1973 al regimiento Tucapel y en lo pertinente insiste que interrogó detenidos políticos, específicamente recuerda haber interrogado a seis médicos que venían de Puerto Saavedra, que los interrogatorios los efectuaban en una oficina grande al parecer un gimnasio. Que él practicaba interrogatorios en presencia de Quiroz, Ortiz y Morales. Dice que los detenidos no prestaban un interrogatorio formal en el sentido que firmaran alguna declaración, sino que ellos obtenían la información y le informaban de los avances

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

de los interrogatorios al capitán Ubilla, quien muchas veces presenciaba estas entrevistas. Reitera que el gran responsable de todo era el abogado Alfonso Podlech, quien estaba a cargo de la Fiscalía Militar. Que no nunca presenció ni participó en torturas en el regimiento Tucapel.

En declaración judicial de fecha 26 de julio de 2006, rolante de **fs. 3.653 a fs. 3.654 (Tomo X)**, ratifica su declaración rolante de fs. 224 a fs. 226 la que consta en estos autos de fs. 1.320 a fs. 1.322 (Tomo IV), y declaración de fs. 3.206 a fs. 3.207. Consultado dice que él sabía de las decisiones que tomaba el abogado Alfonso Podlech con respecto de los detenidos, porque los propios soldados que los llevaban y traían, les decían que era esta persona quien determinaba sus destinos. Se pregunta por el joven del GAP que menciona en sus declaraciones precedentes y refiere que esta persona cuando “nos entregaron estaba muy frisqueada”, los militares de inteligencia lo habían torturado bastante. Que un soldado cuya identidad ignora le dijo que a este joven “se lo había llevado el señor”. Recordando que había otro oficial que estaba al tanto de lo que pasaba con los detenidos, que era el teniente Rubio. Sin embargo, no le cabe duda de que todos los oficiales sabían sobre esto. Desconoce el nombre de los militares que trabajaban junto a ellos, pero siempre fue el mismo grupo entre conscriptos y clases. No recuerda que un joven haya muerto durante los interrogatorios producto de las torturas. Insiste que le correspondió interrogar detenidos en una sala ubicada en una cuadra del regimiento, en donde les aplicaban electricidad a estas personas. Recuerda que tanto Quiroz como Ortiz participaban dándole vuelta al dínamo, pero al que más utilizó fue a Quiroz, puesto que Ortiz participaba más de los interrogatorios; en tanto que Morales era torpe y sólo servía para trasladar a los detenidos y darles algunos golpes. Las terminales eléctricas se las ponían en cualquier parte del cuerpo. Que el detective Quiroz no quiso regresar a investigaciones junto a ellos y prefirió quedarse trabajando con el grupo de inteligencia de los militares. Que este hombre se transformó en una persona cruel en el trato con los detenidos; y en general el clima dentro del regimiento se hizo insostenible para él y por eso decidió retirarse de ese lugar.

A.64. José Albino Krause Álvarez (29 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 1.327 a fs. 1.328 (Tomo IV) y de fs. 2.575 a fs. 2.577 (Tomo VIII).

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

En declaración extrajudicial de fecha 10 de febrero de 2009, rolante de **fs.1.327 a fs.1.328 (Tomo IV)**, en lo tocante sostiene que para el año 1973 ostentaba el grado de cabo primero y cumplía funciones en el regimiento de Infantería N.º 8 Tucapel de Temuco. Dentro de las funciones se encontraba de guarda almacén de material de guerra, la unidad militar contaba con cinco compañías; una de morteros, donde se encontraba el comandante de compañía Vásquez Chahuán y el suboficial Morales; tres compañías de fusileros, la compañía de **plana mayor y servicios**, que era donde él se encontraba inserto y se desempeñaba también el capitán Nelson Ubilla Toledo. Sobre el oficial de ejército apodado "El Loco Espinoza", afirmo que lo recuerda porque era un oficial del grado de teniente de nombre Manuel Espinoza, que pertenecía a la compañía de morteros; era un sujeto de personalidad especial que gustaba de las actividades propias de un "comando". El cual tenía un grupo de soldados por ser comandante de sección. Que efectivamente el regimiento Tucapel luego del 11 de septiembre de 1973, fue utilizado como lugar base para la permanencia de detenidos políticos; que eran requeridos por las autoridades militares y de la Fiscalía Militar que funcionaba al interior del regimiento. Específicamente en el casino de oficiales, conforme a su recuerdo el abogado Alfonso Podlech Michaud, quien vistiendo uniforme militar asimilado al grado de mayor era el Fiscal Militar del regimiento. Se le pregunta por otros hechos.

En declaración extrajudicial de fecha 11 de enero de 2017, rolante de **fs. 2.575 a fs. 2.577 (Tomo VIII)**, en lo adecuado señaló que el capitán Nelson Ubilla Toledo siempre estuvo a cargo de la compañía de plana mayor y servicios, a pesar de que a partir del 11 de septiembre paso a cumplir funciones en la comandancia del regimiento a cargo de la sección segunda. Por lo antes señalado, el mando de la compañía fue asumido entre comillas por el teniente Luis León Stepilcovich. Reitera sus funciones en su compañía, y que se desempeñaba en la dependencia ubicada en el sector norte del primer pabellón de su compañía. Se le pregunta por otros hechos y en relación con la detención de ocho jóvenes de la comuna de Pucón a manos de personal de carabineros de esa comuna el día 13 de septiembre de 1973, quienes posteriormente fueron trasladados al regimiento Tucapel donde finalmente se les pierde el rastro, expreso que ignora todo antecedente relacionado con ese hecho. Que nunca tomo conocimiento respecto a la tortura y posterior ejecución de personas que permanecieron

detenidas al interior del regimiento Tucapel. Que en la compañía de plana mayor y servicios existió una sala donde torturaban a los detenidos, donde siempre se veía gente de civil que pertenecía a la policía de investigaciones de Temuco, recordando que uno de ellos era de apellido Quiroz. De los antes señalado, se enteró por intermedio de los conscriptos de su compañía, ya que ellos pernoctaban en el regimiento y notaban que esa sala funcionaba solo de noche, ya que de día permanecía cerrada.

A. 65. Norberto Francisco Uribe Moroni (22 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 1.332 a fs. 1.334 (Tomo IV), de fs. 1.482 a fs. 1.483 (Tomo V), de fs. 1.637 (Tomo V), y de fs. 2.303 a fs. 2.304 (Tomo VII).

En declaración judicial de fecha 12 de marzo de 2009, rolante de **fs. 1.332 a fs. 1.334 (Tomo IV)**, en lo atingente preciso que no vio detenidos en el regimiento Tucapel después de septiembre de 1973 en ninguna dependencia. Que a cargo del servicio de inteligencia del regimiento Tucapel estaba el capitán Nelson Ubilla Toledo, quien dependía de la comandancia. No recuerda haber visto personal de las Fuerzas Armadas, de orden o de investigaciones al interior del regimiento Tucapel. Se le pregunta por otros hechos.

En declaración judicial de fecha 11 de junio de 2010, rolante de **fs. 1.482 a fs. 1.483 (Tomo V)**, ratifica declaración de fs.305, la que consta en estos autos de fs. 1.332 a fs. 1.334 (Tomo IV), y en lo adecuado recuerda como interrogador de detenidos al interior del regimiento Tucapel al capitán Nelson Ubilla Toledo. En cuanto a las imputaciones que le hacen algunos conscriptos en el sentido que formaba parte del grupo de interrogadores de detenidos, indica que no es efectivo, pues jamás participó en tales actividades. En aquella época era subteniente y por su grado no tenía conocimiento de tales actividades. Además, estaba recién llegado al regimiento. Interrogado acerca de las declaraciones de fs. 597, en las que se le sindicó integrando una patrulla cuya misión era subir cadáveres en un camión, los que se encontraban en la isla Cautín, el deponente señaló: que no es efectivo, jamás participó en ejecuciones ni tuvo conocimiento de estos hechos. Tampoco le correspondió cargar cadáveres que se encontraran en la isla Cautín o en alguna otra parte. Que del 11 de septiembre de 1973 continuaron las instrucciones de los soldados conscriptos de manera normal, aunque también se destinó tiempo a patrullajes y otras actividades de seguridad. No recuerda al sargento Mario Arias Díaz. Se le pregunta por otros hechos.

En declaración extrajudicial de fecha 22 de julio de 2015, rolante de **fs. 2.303 a fs. 2.304 (Tomo VII)**, preciso que para el año 1973 cumplía funciones en el regimiento de Infantería N.º 8 Tucapel de Temuco, año en que ostentaba el grado de subteniente, desempeñándose en la primera compañía de cazadores, la que estaba al mando de un capitán de apellido Bravo, siendo el único oficial de esa compañía. Consultado dice que es efectivo que estuvo en la comuna de Curarrehue en una fecha que no puede precisar del año 1973, por lo que recuerda puede haber sido antes del 11 de septiembre de 1973. En esa oportunidad fue toda la compañía, más algunos funcionarios de plana mayor que manejaban los camiones militares, instalándose en la escuela de la comuna ubicada en la calle principal. Su misión era la de fiscalizar el tránsito de personas a la República de Argentina y también el disponer a personal militar (soldados conscriptos) en distintos puntos de la frontera. Que durante su estadía en Curarrehue no se practicó ningún tipo de detención, ni tampoco recuerda haber conocido a alguna persona de apellido Aguayo, sobre quien se le informa que su nombre era Francisco y habría sido dueño de un negocio en Curarrehue. Sobre la víctima Héctor Aguayo Olavarría, es primera vez que escucha su nombre y no tiene antecedentes respecto a su detención y destino final. Sobre la detención de ocho jóvenes oriundos de la comuna de Villarrica y Curarrehue, efectuada el día 12 de septiembre de 1973, musito que nunca supo tal situación durante su estadía en Curarrehue. Consultado sobre su conocimiento de si en el puente Allipén se efectuaron ejecuciones en fechas posteriores al 11 de septiembre de 1973, dice que lo único que sabe, es que un conscripto de la compañía de plana mayor y servicios lo acusó falsamente respecto a su participación en el traslado de cadáveres de detenidos hasta ese lugar donde procedieron a lanzarlos a las aguas del río; según el soldado, manejaba el camión militar que efectuaba el traslado, pero eso siempre lo ha negado porque es falso. Sumo que el día 12 de septiembre de 1973, toda la compañía viajó a Santiago, recuerda que estuvieron en Santiago hasta fines de octubre de 1973, regresando nuevamente a Temuco en ese periodo.

A.66. Raúl Binaldo Schonherr Frías (27 años a la época de los hechos) quien declaró de fs. 1.335 a fs. 1.336 (Tomo IV), de fs. 1.341 a fs. 1.343 (Tomo IV) y de fs. 4.227 a fs. 4.229 (Tomo XII).

En declaración extrajudicial de fecha 18 de marzo de 2009, rolante de **fs.1.335 a fs.1.336 (Tomo IV)**, narro en lo pertinente que para el año 1973 tenía veintisiete años y se desempeñaba al interior del regimiento N.º 8 de Infantería Tucapel, específicamente en la segunda comandancia la que se encontraba en el pabellón de comandancia, ingresando al cuartel a mano izquierda. Esta comandancia, se encontraba a cargo del mayor Luís Jofré Soto, segundo hombre en la línea de mando de la unidad. Por aquel tiempo, ostentaba el grado de cabo primero de ejército, trabajaba junto al sargento segundo Orlando Moreno Vásquez en una oficina de la segunda comandancia, la que solo ocupaban ambos. Que ya para el mes de noviembre de 1973 junto a Orlando Moreno, veían lo relativo a la seguridad del cuartel, planes de defensa y enlace; mensajes en clave que ingresan y salían de la unidad. Por aquel tiempo estaban al mando directo del fallecido capitán Nelson Ubilla Toledo. Por lo anterior, no efectuaban servicios de guardia, pero eventualmente algún servicio de toque de queda. Que también le correspondió en alguna oportunidad el traslado de detenidos de la Fiscalía del regimiento, desde la unidad militar hacia la cárcel pública y viceversa. Esta misión se la daban eventualmente y solo porque su oficina se encontraba al lado de la Fiscalía, por tanto, estaban junto a Moreno, “como se dice estábamos a la mano”. Reseña otros hechos.

En declaración judicial de fecha 2 de abril de 2009, rolante de **fs. 1.341 a fs. 1.343 (Tomo IV)** (cuya copia consta de fs. 4.227 a fs. 4.229 Tomo XII) ratifica declaración extrajudicial de fs. 333 a fs. 334, la que consta en estos autos de fs. 1.335 a fs. 1.336 (Tomo IV) y en lo pertinente preciso que estaba bajo el mando del mayor Jofré y no del capitán Ubilla, como aparece en la declaración extrajudicial. Explicitó que la sección segunda se organizó en el mes de noviembre de 1973 y quedó a cargo del capitán Ubilla. En su caso se integró a esa sección a principio de diciembre de ese año. Antes lo había hecho el suboficial Moreno. No recuerda que hubiese acuartelamiento grado uno después del 11 de septiembre, entendiendo que este grado obliga a todos los integrantes del regimiento a dormir en la unidad, tanto solteros como casados. El grado dos de acuartelamiento obligaba a pernoctar dentro del recinto militar a los solteros y a la guardia. Su horario de trabajo se extendía desde las 07:30 horas hasta las 18:30 horas aproximadamente. Preguntado dice que los oficiales solteros, que en su mayoría eran subtenientes y tenientes, por obligación tenían que pernoctar en el

regimiento. Para ello tenían habilitados habitaciones a un costado del casino de oficiales. También existía un edificio ubicado por calle Arturo Prat al llegar a León Gallo, que estaba reservado para los oficiales casados. Los funcionarios solteros que pertenecían al cuadro permanente también tenían la obligación de pernoctar en el regimiento. Las dependencias para ese efecto estaban ubicadas en uno de los pabellones ubicados cerca de la enfermería. Recuerda como oficiales solteros y que pernoctaban en el regimiento en septiembre 1973 a Norberto Uribe Moroni, Pablo Gran López, Carlos Oviedo, Lavín, Espinoza, Eduardo Valdebenito Bugmann, Fernández Carranza, Jaime García Covarrubias. No recuerda si Vásquez Chahuán estaba casado o era soltero. En total, le parece que era grupo de diez oficiales quienes dormían en ese lugar. No sabe si los oficiales se tomaban licencias para salir de noche o pernoctar fuera, pero el cuadro permanente estaba muy controlado y existía prohibición de abandonar la unidad. Que en aquella época vio a detenidos al interior del regimiento, los que eran mantenidos en la guardia de la unidad. Es posible que hayan sido derivados hacia el gimnasio, pero a él no le consta. Representa otros hechos.

A.67. Daniel San Juan Clavería (28 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 1.337 a fs. 1.338 (Tomo IV), de fs. 1.383 a fs. 1.384 (Tomo IV), de fs. 1.690 a fs. 1.691 (Tomo V), de fs. 3.617 a fs. 3.618 (Tomo X), de fs. 3.619 a fs. 3.620 (Tomo X) y de fs. 3.684 a fs. 3.687 (Tomo XI).

En declaración judicial de fecha 17 de marzo de 2009, rolante de **fs.1.337 a fs.1.338 (Tomo IV)**, (cuya copia consta de fs. 3.617 a fs. 3.618 Tomo X), expuso en lo pertinente que para el año 1973 se desempeñaba con el grado de detective cuarto, prestando servicios en la comisaría judicial de Temuco. Posterior al 11 de septiembre de 1973 fue agregado junto a otros oficiales de la institución, entre los que recuerda a don Aquiles Poblete Müller, Rigoberto Ortiz Lara (fallecido), Luis Morales Toledo, Hernán Quiroz Barra y el conductor Carlos Luco Astroza, al regimiento de Infantería N.º 8 Tucapel. Las funciones que desempeñaron fue las de entrevistar y tomar declaraciones a las personas que llegaban detenidas a dicho recinto militar y entregar la información a los funcionarios del ejército que la solicitaban. Se le pregunta por otros hechos y en lo tocante dijo que las instrucciones sobre a quién debían entrevistar las impartía directamente su jefe de grupo, que era Aquiles Poblete, quien a su vez recibía instrucciones del capitán Nelson Ubilla Toledo. Que el Fiscal Militar que estaba a

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

cargo a partir del 11 de septiembre de 1973, fue inicialmente Jofré. Sin embargo, posteriormente asumió el Fiscal Alfonso Podlech Michaud, pero no recuerda fecha exacta en la que este último comenzó a ejercer el cargo. Dentro de los funcionarios del ejército que recuerda, están el teniente Espinoza, a quien apodaban "El gato Espinoza", al sargento Moreno y al cabo Schonherr. Sin embargo, desconoce cuáles eran sus funciones dentro del regimiento, solo recuerda que los dos últimos desempeñaban labores administrativas.

En declaración judicial de fecha 9 de julio de 2009, rolante de **fs.1.383 a fs. 1.384 (Tomo IV)**, (cuya copia consta de fs. 3.619 a fs. 3.620 Tomo X), ratifica declaración de fs. 335 a fs. 336 la que consta en estos autos de fs.1.337 a fs.1.338 (Tomo IV), y alude que le correspondió servir en el regimiento Tucapel durante cinco meses más o menos, tiempo durante el cual interrogó detenidos políticos en una dependencia ubicada en la comandancia de la unidad militar, que era contigua a la Fiscalía Militar. Los detenidos interrogados se encontraban con su vista sin vendas, no llevaban esposas, eran traídos y llevados por personal militar. Desconoce donde permanecían estos detenidos antes y después de los interrogatorios. No le correspondió practicar interrogatorios con intervención de oficiales o suboficiales del ejército. Tampoco práctico interrogatorios en el gimnasio del regimiento, ignorando si este lugar era recinto habilitado para esos fines. Que no participó en torturas a detenidos ni supo que ese hecho ocurriera. Toda la información recabada durante los interrogatorios era entregada a su jefe, comisario Aquiles Poblete Müller, quien se la entregaban al capitán Nelson Ubilla Toledo. No recuerda a ningún otro oficial que colaborara con Ubilla o que tuviera que ver con detenidos. Su horario de trabajo era desde las 08:30 horas hasta las 19:00 horas, sin que jamás haya interrogado personas de noche. Nunca supo que sus colegas lo hicieran fuera de horario. No recuerda que personal militar colaborara en el cumplimiento de órdenes de la Fiscalía Militar. Los nombres de Juan Carrillo o Ángel Valeria Candía no le son conocidos. Se le pregunta por otros hechos.

En declaración extrajudicial de fecha 18 de abril de 2012, rolante de **fs.1.690 a fs.1.691 (tomo V)**, afínca su desempeño funcionario y en lo adecuado que para el año 1973, ostentaba el grado de detective cuarto y después del 11 de septiembre de ese año a solicitud del mando del regimiento de Infantería N.º 08 Tucapel de Temuco, fue asignado por sus superiores a cumplir funciones en dicho

destacamento militar. Dentro de los funcionarios policiales que fueron asignados, recuerda al subcomisario Aquiles Poblete Müller, el detective primero Rigoberto Ortiz Lara, el detective segundo Luis Morales Toledo, el detective cuarto Hernán Quiroz Barra y el conductor de vehículos policiales Carlos Luco Astroza. Dentro de las funciones que les asignaron a cumplir al interior del regimiento, era las de tomar declaraciones a los detenidos que disponía un capitán de ejército de apellido Ubilla, quien se entendía para esos efectos con el subcomisario Aquiles Poblete Müller. Otra de sus funciones, era las de efectuar citaciones que disponía la fiscalía militar del regimiento. Atestiguo que el lugar que se les asignó para trabajar correspondía a una oficina que a su parecer se encontraba en la comandancia del regimiento, donde también había una oficina de partes, donde trabajaban los sargentos Moreno y Schonherr, también en esas dependencias operaba la fiscalía militar. Que nunca trabajaron junto a funcionarios de la fuerza aérea y a carabineros al interior del regimiento Tucapel. Lo que si recuerda, es que en varias ocasiones vio que efectivos de la fuerza aérea llegaban al regimiento a entregar personas detenidas. Alude a otros hechos.

En declaración judicial de fecha 27 de octubre de 2021, rolante de fs. 3.684 a fs. 3.687 (tomo XI). El tribunal le leyó sus declaraciones que rolan de fs. 3.617 y fs. 3.619 del proceso 113.089 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco. El deponente indicó: ratificaba las declaraciones leídas y reconoce la firma estampada en ellas. El tribunal le consultó si puede indicar la cantidad de detenidos por motivos políticos que pudo observar en el regimiento Tucapel de Temuco tras el 11 de septiembre de 1973 y en qué lugar eran mantenidos al interior del regimiento. El declarante preciso: que no lo recuerda, la gente llegaba a la guardia y ahí tenían unos calabozos seguramente, ahí quedaban, pero nunca supo quién los llevaban, donde fueron detenidos. Respecto a la cantidad de detenidos no puede precisar, “fueron muchas personas”. Que tal vez pueden haber sido más de cien personas. Respecto a la dependencia ubicada en la comandancia de regimiento inquirió que estaba abierta. Desconoce dónde estaba ubicada la oficina de Ubilla Toledo, éste se comunicaba con su jefe, Aquiles Poblete. Este último era quien les ordenaba practicar los interrogatorios. Justificó que en sus interrogatorios no participaban oficiales del ejército. El único que se movilizaba era Ubilla. Quien daba cuenta de su actuación dentro del regimiento era Aquiles Poblete, si tomaban declaraciones a éste se las entregaban. Respecto

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

a la dinámica de los interrogatorios, dice que le avisaban a don Aquiles Poblete que en la guardia había gente detenida por patrullas y que había que entrevistarlas. Ahora, en la sala donde ellos estaban, era un lugar abierto. Él trabajaba frecuentemente con Hernán Quiroz. Sus demás colegas, no sabe donde trabajaban, pero no estaban los cuatro o cinco juntos en esa oficina. En cuanto al estado de los detenidos manifiesta que estos estaban bien, nunca vio que hayan estado golpeados o en malas condiciones físicas. Que entre dos o tres personas fueron interrogadas diariamente en esa oficina. No supo de apremios ilegítimos que se hayan efectuado a los detenidos, no hubo aplicación de electricidad, como se le señala que alguna vez expresó Aquiles Poblete Müller. No puede precisar donde estaban sus otros colegas mientras hacían interrogatorios. En la sala donde entrevistaban había un escritorio, una máquina, una silla, pero insiste no saber dónde estaban los otros mientras hacían esa "tarea". Afirma nunca haber interrogado niños, niñas o mujeres, solo hombres. Desconoce que pasaba con los detenidos una vez que eran interrogados. Recuerda haber entrevistado a personas de la zona de Puerto Saavedra o de la costa, le preguntaban de donde eran, que hacía en ese lugar, entre otras cosas. Consultados por los dichos de Hernán Quiroz Barra de fs. 3.621 y fuera ratificado a fs. 3.623 y que en lo pertinente se le lee. El deponente manifiesta que: es efectivo en lo pertinente que lo que se le ha leído, lo declarado por Quiroz, sin embargo, no recuerda que respecto a los detenidos difíciles se los haya entregado al teniente de ejercito Espinoza, para hacerse cargo de su interrogatorio. Que ellos como funcionarios de menor grado, no podrían entregárselo a los militares, por último, tendría que haber sido al jefe del grupo quien debería haber tomado esa determinación.

A.68. Carlos Salvador Zurita Panguilef (31 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 1.339 a fs. 1.340 (Tomo IV), de fs. 1.344 a fs. 1.345 (Tomo IV), de fs. 3.673 a fs. 3.674 (Tomo XI), de fs. 3.675 a fs. 3.676 (Tomo XI), de fs. 3.688 a fs. 3.692 (Tomo XI) y de fs. 4.206 a fs. 4.207 (Tomo XII).

En declaración extrajudicial de fecha 18 de marzo de 2009, rolante de **fs.1.339 a fs.1.340 (Tomo IV)** (cuya copia consta de fs. 3.673 a fs. 3.674 Tomo XI), en lo atinente relato que para el año 1973 ostentaba el grado de detective cuarto, se desempeñaba en la oficina de informaciones de la Prefectura de Investigaciones de Temuco junto a don Rigoberto Ortiz Lara; quien recuerda tenía el grado de detective primero. Que fue el señor Ortiz Lara, quien se fue agregado

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

junto a otros funcionarios como colaboradores del regimiento Tucapel a cargo del inspector Aquiles Poblete Müller, esto a fines del mes de septiembre de 1973. Que estos fueron elegidos porque sus nombres venían en un listado, según tiene entendido. Dice que, a partir del 11 de septiembre de 1973, el trabajo en la oficina de informaciones se intensificó, recuerda que diariamente concurrían hasta el cuartel dos funcionarios del regimiento antes referido, a quienes identifico como Orlando Moreno y Raúl Schonherr, los que trabajaban con el capitán Nelson Ubilla Toledo; a quien vio en un par de oportunidades en el cuartel y claramente se entrevistaba con su jefe de prefectura, el señor Carlos Aranda. Se le pregunta por otros hechos.

En declaración judicial de fecha 3 de abril de 2009, rolante de fs.1.344 a fs.1.345 (Tomo IV) (cuya copia consta fs. 3.675 a fs. 3.676 Tomo XI, de fs. 4.206 a fs. 4.207 Tomo XII) ratifica declaración extrajudicial rolante de fs. 337 a fs. 338 las que constan en estos autos de fs. 1.339 a fs. 1.340 (Tomo IV) y en lo pertinente le parece que fueron cinco los funcionarios de investigaciones asignados al regimiento Tucapel de Temuco luego del 11 de septiembre de 1973; entre los que recuerda a Aquiles Poblete Müller, Rigoberto Ortiz, Luis Morales Toledo, Hernán Quiroz Barra y el chofer Carlos Luco Astroza. Respecto de Orlando Moreno Vásquez y Raúl Schonherr Frías, evidencio que a poco tiempo de ocurrido el golpe militar, la autoridad habló con su jefe, el prefecto Aranda, solicitando que le entregaran todo tipo de información al ejército. Acto seguido, comenzaron a llegar al cuartel alternadamente Moreno y Schonherr; quienes llevaban un listado con nombres y ellos le entregaban toda la información que poseían respecto de cada uno de los nombres. En varias oportunidades le correspondió atenderlos. Tiempo después vio al capitán Ubilla concurrir al cuartel para entrevistarse con el prefecto. Inmediatamente después el señor Aranda les dio órdenes de prestar toda la colaboración al ejército para tener información. A los pocos días llegaron Moreno y Schonherr, y comenzaron a copiar toda su información. Para ello, uno se sentó frente a una máquina de escribir y el otro dictaba los datos que requerían. Que asocia a Moreno y a Schonherr con el capitán Ubilla, porque ellos le señalaron que trabajaban bajo sus órdenes. Que luego los detectives agregados al regimiento regresaron a la unidad, pero Luco y Quiroz lograron extender su comisión quedándose en el regimiento Tucapel, bajo las órdenes de Ubilla un tiempo más. Preguntado dice que la Comisaría Judicial

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

era la que se encargaba de tramitar las órdenes emanadas de la Fiscalía Militar.
358- 359

En declaración judicial de fecha 28 de octubre de 2021, cuya transcripción rola de **fs. 3.688 a fs.3.692 (Tomo XI)**, en lo oportuno afirmo que sus labores eran administrativas, que nunca salió a hacer rondas ni detenciones, ni ninguna agregación al regimiento. El Tribunal le señala a modo de referencia que a partir del 11 de septiembre de 1973 comenzaron a surgir en la prensa de la época bandos militares, los cuales ordenaban a diferentes personas presentarse en las dependencias del regimiento Tucapel de Temuco, la mayoría de las cuales quedaban en calidad de detenidas en el regimiento. Enunciando la edición de 14 de septiembre de 1973 que refiere a otra víctima detenida desaparecida, seguidamente se le leyó lo pertinente las siguientes declaraciones, las cuales fueron otorgadas en esta causa por un testigo reservado de iniciales M.J.C.S, recordándole al señor Zurita que las víctimas de la presente causa, que se encuentran desaparecidas son las siguientes: Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Juan Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Schmidt Arriagada, Juan de Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, dándole a conocer el relato de los hechos de estos autos las declaraciones pertinentes del testigo reservado y se le pregunta si tiene conocimiento de lo que relata el testigo protegido. El deponente respondió: Que no tiene conocimiento, pero le produce un verdadero trastorno, no sabe. Que él no sería capaz de hacer una cosa así. Nunca en su carrera funcionaría de veintiséis años hizo una cosa así. El Tribunal preguntó de acuerdo con lo que relata el testigo, ese detective fornido, alto del grupo que iba al regimiento Tucapel ¿Quién puede ser? ¿El más alto de ustedes quién era? El testigo respondió: el más alto era un señor de apellido Morales (fallecido). El Tribunal preguntó: Pero lo que dice el testigo ¿es posible, es probable que ese grupo de detective haya estado con los militares torturando a estos jóvenes? El testigo respondió: No sabe hasta qué punto los militares participaron en ese tipo de interrogatorios y metiendo seguramente a los que estaban agregados al regimiento. Ellos podrían saber, él lo ignora, como dijo sus labores eran administrativas, ciento por ciento, no conocía a ningún militar. Se le pregunta por otros hechos.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

A.69. Juan Humberto Carrillo Rebolledo (19 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 1.346 a fs. 1.347 (Tomo IV), de fs. 1.348 a fs. 1.350 (Tomo IV), de fs. 1.351 a fs. 1.352 (Tomo IV), de fs. 1.533 a fs. 1.534 (Tomo V) y de fs. 4.208 a fs. 4.210 (Tomo XII).

En declaración extrajudicial de fecha 29 de abril de 2009, rolante de **fs.1.346 a fs.1.347 (Tomo IV)**, en lo adecuado narro que para el año 1973 tenía la edad de dieciocho años y vivía junto a sus padres en la población Amanecer. Para el año 1972 ya se encontraba trabajando y participaba de actividades propias de las Juventudes Comunistas; sin tener ningún cargo dentro del partido, del cual ese mismo año se desprendió. Se le exhiben fotografías de diferentes personas y luego indica que su fecha de ingresó al regimiento Tucapel, el día 15 de enero del año 1973, a través de un llamado especial para cubrir las elecciones parlamentarias que ese año se llevarían a cabo. A su ingreso fue inserto en la primera compañía de cazadores, que estaba a cargo del capitán Rodolfo Vargas Campos; siendo su ayudante el suboficial mayor Rómulo Correa Yáñez. Formó parte de la primera sección de la compañía, siendo el comandante de sección el teniente Jaime Guillermo García Covarrubias. Siendo los conscriptos más cercanos, en términos de amistad; Samuel Arroyo Riquelme, Sergio Alfredo Concha San Martín, Miguel Calderón Sepúlveda, Sergio Luis Campos Torres, José Chávez Etchepare, Cosme Fernández Panes, entre otros. Su sección se componía alrededor de veinticinco soldados conscriptos y la compañía tenía alrededor de ciento veinticinco. Que recuerda al teniente Manuel Espinoza Ponce, a quién apodaban el "Loco Espinoza", el cual pertenecía a la segunda compañía de cazadores, la que se encontraba a cargo del teniente Manuel Vásquez Chahuán. En cuanto a la permanencia de personas detenidas al interior del regimiento Tucapel, proclamo que efectivamente vio prisioneros políticos al interior de este, específicamente, en una sala contigua a la guardia. Además, recuerda haber visto en esa calidad a Juan Antonio Chávez Rivas y a Herman Carrasco Paul. Sobre los servicios de guardia al interior de la unidad militar, menciono que luego del 11 de septiembre de 1973, no existía un orden correlativo para cubrir estos servicios, ya que una compañía podía repetir por varios días la custodia del Regimiento. Se le pregunta por otros hechos. 405-406

En declaración judicial de fecha 18 de mayo de 2009, rolante de **fs.1.348 a fs.1.350 (Tomo IV)** (cuya copia consta de fs. 4.208 a fs. 4.210 Tomo

XII), ratifica la declaración extrajudicial de fs. 405 a fs. 406 la que consta en estos autos de fs. 1.346 a fs. 1.347 (Tomo IV), rectifica aquella parte en que se señaló como año de salida de las Juventudes Comunistas en 1972, siendo en realidad el año 1970. En lo oportuno musito que su escuadra dormía al interior del regimiento en una dependencia determinada. Sin embargo, no recuerda haber escuchado disparos o explosiones la noche en que ocurrieron los hechos investigados en esa causa (el polvorín). Más aún, no tuvo noticias de que haya ocurrido tal evento. Ellos tenían preparación para reaccionar ante un ataque de esa naturaleza, pero esa noche no hubo ninguna orden, ese sentido. Prosigue refiriendo a otros hechos e indica que recuerda a Herman Carrasco Paul porque era de las juventudes comunistas y además lo vio detenido en el regimiento Tucapel en 1973. Que conoció al capitán Ubilla, al teniente Jaime García y al sargento Orlando Moreno Vásquez. Manifiesta que los dichos de Herman Carrasco Paul son falsos en el sentido que estuviera presente en los interrogatorios practicado a esta persona. Preguntado dice que el teniente Jaime García Covarrubias era el comandante de la primera sección de la compañía de cazadores, en la que estaba encuadrado. Este oficial fue reemplazado posteriormente por su hermano, el teniente Raimundo García Covarrubias, ya que el primero fue destinado a la compañía de plana mayor como ayudante del comandante Iturriaga Marchesse. El comandante de su compañía era el capitán Rodolfo Vargas. La segunda compañía de cazadores estaba al mando del capitán Vásquez Chahuán, quien era secundado por el teniente Espinoza.

En diligencia de careo con Herman Carrasco Paul, de fecha 19 de mayo de 2009 rolante de **fs. 1.351 a fs.1.352 (tomo IV)**, ratifica su declaración de fs. 411 la que consta en estos autos a fs.1.348 a fs.1.350 (Tomo IV), y en lo tocante adoso que solo vio al señor Carrasco Paul, en una sola oportunidad y que fue cuando sostuvo la conversación con el suboficial Beltrán, cuando éste lo fue a visitar. Insiste en que converso con el suboficial Beltrán mientras él y Carrasco Paul charlaban sentados en un escaño. Esa fue la única oportunidad que lo vio, quien se veía muy deprimido, pero no tenía señales de haber sido torturado. Comparte ese último punto, pues el polvorín jamás fue atacado o por lo menos él nunca se enteró de aquello. Se mantiene en sus dichos.

En declaración judicial de fecha 26 de julio de 2010, rolante de **fs.1.533 a fs.1.534 (Tomo V)**, en lo atinente respecto a su destinación al llegar al

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

regimiento Tucapel, inquirió que estuvo encuadrado en la primera compañía de cazadores, primera sección bajo las órdenes de Jaime García Covarrubias. Posteriormente en abril de 1973 paso a la compañía de plana mayor cuyo comandante era el capitán Nelson Ubilla Toledo; específicamente encuadrado en la primera sección bajo las órdenes de un sargento cuyo nombre no recuerda. A mediados de 1973 se hizo cargo de su sección el teniente Raimundo García Covarrubias. Preguntado dice que no le correspondió salir a efectuar patrullajes nocturnos bajo las órdenes de Raimundo García Covarrubias. Este oficial hizo una sección de montados, constituida por unos veinticinco conscriptos, con quienes salía habitualmente. En ese grupo recuerda a Gerardo García Díaz, José Inzunza Reyes, José Chávez Etchepare y Leopoldo Villagrán Alvarado. Posteriormente, esa patrulla quedó bajo las órdenes de un capitán de reserva de apellido Huerta, quien a poco tiempo fue ascendido a mayor. No recuerda una "patrulla chacal". Alude a otros hechos, y sostiene que recuerda haber visto al capitán Huerta reunirse habitualmente con el teniente Raimundo García Covarrubias, porque ambos estaban relacionados con la patrulla montada.

A.70. Sergio Luis Campos Torres (19 años a la época de los hechos). **En declaración extrajudicial** de fecha 6 de mayo de 2009, rolante de **fs.1.353 a fs.1.354 (Tomo IV)**, narró que para el año 1973 en enero ingresó a efectuar su servicio militar obligatorio en el regimiento de Infantería N.º 8 Tucapel, se encontraba inserto en la **compañía de logística plana mayor**, cuyo comandante era el capitán Nelson Ubilla Toledo. Recuerda como el ayudante del comandante suboficial Ángel Sigisfredo Quilodrán Quilodrán. Específicamente perteneció a la sección montada compuesta por veinticinco soldados conscriptos, siendo sus labores principales las de salir a patrullar en la ciudad de Temuco y sus alrededores. No recuerda haber visto a personas en calidad de detenidas en el regimiento, pero sí apreciaba un alto flujo de personas que entraba y salía del recinto constantemente acompañada de oficiales y soldados. Recuerda al teniente Manuel Espinoza Ponce, a quién apodaban "El loco Espinoza", siendo bastante agresivo con ellos. Recuerda al soldado Juan Carrillo Rebolledo, quien pertenecía a la misma sección que él, es decir a la plana mayor, sección montada, por lo que realizaban las mismas labores. Se le pregunta por otros hechos.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

A.71. Ernesto García Isla (19 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 1.361 a fs. 1.363 (Tomo IV), de fs. 1.381 a fs. 1.382 (Tomo IV) y de fs. 1.858 a fs. 1.859 (Tomo VI).

En declaración extrajudicial de fecha 7 de mayo de 2009, rolante de **fs.1.361 a fs.1.363 (Tomo IV)**, sustentó que perteneció a la **compañía plana mayor y servicios** que en ese entonces estaba a cargo del capitán Nelson Ubilla Toledo, formando parte de la sección de ingenieros a cargo del sargento primero Luis Peña Andaur. Consultado en cuanto a la permanencia de detenidos al interior del regimiento, manifestó que vio detenidos en dicho recinto militar, dentro de los que pudo ver estaba su exprofesor en el liceo de Gorbea, cuyo nombre es Omar Venturelli Leonelli, a quién le facilitó un plato para que pudiera recibir algo de alimentación, pudiendo intercambiar algunas palabras con él. Sin embargo, a esa persona no la vio más en dicho lugar. También dentro de las personas que en fotografía se le exhibieron, dice que recuerda haber visto a un hombre, delgado, alto, de barba; a quien tuvo que vendar y llevar ante la presencia de oficiales de la unidad y que se asemeja a quien se le indico por nombre Juan Antonio Chávez Rivas. Lo anterior, mientras se desempeñaba en servicio de guardia. Agrega que los detenidos estaban a cargo de un grupo especializado denominado servicio de inteligencia regional, compuesto por los oficiales Nelson Ubilla Toledo, Manuel Espinoza Ponce, Jaime García Covarrubias, Raimundo García Covarrubias y los funcionarios de planta Orlando Moreno Vásquez, el suboficial de apellido Atala y el cabo primero Bahamondes, quienes interrogaban a los detenidos. Por lo general, era en una sala que estaba en el pabellón que albergaba a las compañías de plana mayor y servicios, y compañía morteros, a un costado de los baños de la compañía. Que el grupo antes señalado pasaba bastante junto, compartían en sus respectivos casinos, y él en más de una oportunidad se encontraba trabajando en esas dependencias cuando esta gente llegaba al lugar, pudiendo escuchar sus conversaciones por lo que se daba cuenta que formaban un grupo de trabajo. Se le pregunta por otros hechos.

En declaración judicial de fecha 23 de junio de 2009, rolante de **fs.1.381 a fs.1.382 (Tomo IV)**, ratifica declaración extrajudicial y proclamo que nunca le correspondió retirar cadáveres desde el sector del polígono de tiro o de cualquier otro lugar. Tampoco supo de estos hechos, solo le correspondió trasladar detenidos en una oportunidad. En una oportunidad le correspondió trasladar un

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

detenido desde la guardia hasta un sector al interior del regimiento donde se lo entregó le pareció al cabo segundo Pablo Silva Gómez, quien era su instructor. Recuerda que este sujeto, tenía unos de 35 años aproximadamente y se veía muy cansado, le vendió la vista y le ordenaron hacerle simulacro de alambrada y zanja, es decir, hacer que se agachara y saltara. Le parece que los interrogatorios se efectuaban en el pabellón de plana mayor. Esos interrogatorios eran efectuados por el capitán Ubilla Toledo quien era ayudado por Orlando Moreno Vásquez, Raúl Schonherr y un suboficial de apellido Atala.

En diligencia de careo con Jaime García Covarrubias, de fecha 4 de octubre de 2013, rolante de **fs. 1.858 a fs.1.859 (Tomo VI)**, ratificó sus dichos de fs. 601 a fs. 602 los que constan en estos autos de fs. 1.381 a fs. 1.382 (Tomo IV), rectifica aquella parte en la que dijo que le entregó un detenido al cabo Pablo Silva Gómez, porque en realidad se lo entregó al capitán Ubilla. Reconoce a la persona con quien se le carea como el teniente Jaime García Covarrubias de quien ha hecho referencia. Preguntado dice que nunca vio entrar a la sala ubicada entre las compañías de plana mayor y de morteros al teniente Jaime García, empero sí era comentario generalizado que este oficial tenía relación con los detenidos y participaba en el servicio de inteligencia junto al capitán Ubilla. También recuerda que se le veía en la compañía pasando revista y revisando. Refiere que en una oportunidad fueron castigados por este oficial por un supuesto desorden, debido a lo cual los azotó en las nalgas con la fusta que siempre portaba. Que los hechos que ha relatado sucedieron en 1973, a partir del 11 de septiembre en adelante. Se mantiene en sus dichos.

A.72. Enrique Abzalón Castro Obreque (19 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 1.355 a fs. 1.357 (Tomo IV), de fs. 1.371 (Tomo IV) y de fs. 2.582 a fs. 2.583 (Tomo VIII).

En declaración extrajudicial de fecha 6 de mayo de 2009, rolante de **fs.1.355 a fs.1.357 (Tomo IV)**, sostuvo en lo pertinente que para el año 1973 se encontraba inserto en la compañía de **plana mayor y servicios** del regimiento Tucapel de Temuco, cuyo comandante era el capitán Nelson Ubilla Toledo (fallecido) quién posteriormente, no precisa fecha exacta, es designado para hacerse cargo de servicio de inteligencia militar. Recuerda como ayudante del comandante, al suboficial Ángel Sigisfredo Quilodrán Quilodrán. Que particularmente estaba dentro de la sección de ingenieros y telecomunicaciones,

siendo el oficial a cargo de su sección, el teniente Romilio Lavín Muñoz. Dice que recuerda haber visto a personas en calidad de detenidos al interior del regimiento, sin poder aportar antecedentes respecto de ellos, haciendo presente que ninguna de las personas que en ese acto le fueron mostradas en fotografías, recuerda haberlas visto al interior del regimiento. Que también recuerda que el capitán Nelson Ubilla Toledo estaba a cargo de las investigaciones sobre los prisioneros que allí se encontraban, pudiendo ver entre el grupo que trabajaba con Ubilla en estos temas, a un par de supuestos funcionarios de la policía de investigaciones, uno de ellos de pelo ondulado y canoso; en tanto el otro era de contextura gorda. Anexo que era el teniente Manuel Espinoza Ponce, apodado el "Loco Espinoza", que pertenecía a una de las compañías de cazadores, el oficial que en ausencia del capitán Ubilla, se hacía cargo de los prisioneros políticos, sacándolos al patio del regimiento para efectuarles todo tipo de burlas, las cuales disfrutaba. Que por las noches era usual que este teniente, según se comentaba, sacaba a estos detenidos del cuartel, sin que regresara con ellos. Da fe que en una noche en la que se encontraba de guardia en la puerta de ingreso principal al recinto, este oficial salió acompañado por al menos tres soldados, en un camión tres cuartos de la unidad, llevando consigo a un prisionero amarrado, vendado y amordazado, pero vivo al interior de ese vehículo, volviendo al rato después sin él. Luego se comentó que ese prisionero era un tal "Milico" quien antes habría sido funcionario del ejército. Se le pregunta por otros hechos.

En declaración judicial de fecha 17 de junio de 2009, rolante de **fs.1.371 (Tomo IV)**, ratifica declaración extrajudicial rolante de fs. 441 a fs. 443, las que constan en estos autos a fs.1.355 a fs.1.357 (Tomo IV), agrego a sus dichos que un conscripto de su compañía era chofer particular del capitán Ubilla, llamado Samuel Arroyo.

En declaración extrajudicial de fecha 25 de enero de 2017, rolante de **fs. 2.582 a fs. 2.583 (tomo VIII)**, replica su ingreso y encuadramiento dentro del regimiento Tucapel y en lo pertinente en la compañía de plana mayor y servicios, la que estaba al mando del capitán Nelson Ubilla Toledo, quien dejó ese cargo el día 11 de septiembre asumiendo el mando el teniente Raimundo García Covarrubias, quien subrogó al mencionado capitán. De los clases de su compañía, recuerda al sargento Luis Peña Andaur, el sargento Mario Arias Díaz, cabo segundo Pablo Silva, junto con ellos también había otro oficial de apellido Lavín,

quien era teniente. De los soldados a Guillermo San Martín, Arroyo quien era chofer del capitán Ubilla y Valeria, quien era cabo de reserva. Respecto a sus funciones, en el tramo comprendido entre septiembre y diciembre de 1973, apuntó que fue asignado a la guardia de honor, la que estaba a cargo del sargento primero Peña, junto a otros soldados de su compañía, en estas funciones estuvo dos meses, posteriormente se le designó a cumplir guardia, noche por medio en la casa de comando, la que era ocupada por el comandante del regimiento coronel Pablo Iturriaga Marchesse y su familia, cumpliendo esas funciones hasta comienzos de 1974. Con relación a la presencia de detenidos en el regimiento, aseveró que esa situación fue efectiva, ya que vio detenidos al interior de la guardia del regimiento, que en una ocasión vio a un profesor que tuvo en su colegio en la comuna Comuy, cuyo nombre era Andino Catalán Salazar, quien posteriormente quedó en libertad. Comunica que al interior de su compañía existía una sala donde se ingresaban a los detenidos. En esa sala trabajaban dos detectives, uno alto y de contextura gruesa y otro delgado con pelo cano, semi ondulado. El soldado Arroyo en alguna oportunidad le comentó que ellos interrogaban a los detenidos. Que se rumoreaba mucho sobre los interrogatorios efectuados a un detenido apodado "El Milico", quien al parecer con anterioridad al golpe de Estado había sido militar, esto también se lo comentó Arroyo en alguna oportunidad, pero no le pudo dar mayores antecedentes. Respecto a la detención de ocho jóvenes de la comuna de Pucón a manos de personal de carabineros de esa comuna el día 13 de septiembre, de 1973, quienes posteriormente fueron trasladados al regimiento Tucapel donde finalmente se les perdió el rastro, ignora todo antecedente relacionado con ese hecho. Alude que nunca tomó conocimiento respecto a la tortura y posterior ejecución de personas que permanecieron detenidas al interior del regimiento Tucapel.

A.73. Gerardo Jaime Araneda Muñoz (19 años a la época de los hechos). Quien prestó declaraciones de fs. 1.358 a fs. 1.360 (Tomo IV) y de fs. 1.372 a fs. 1.373 (Tomo IV).

En declaración extrajudicial de 06 de mayo de 2009, que rola de **fs. 1.358 a fs. 1.360 (Tomo IV)**, en lo pertinente indicó que para el año 1973, tenía 18 años y estaba efectuando su servicio militar obligatorio en el regimiento de Infantería N° 8 Tucapel, que dentro del regimiento se encontraba inserto en la primera compañía de cazadores cuyo comandante era el capitán Rodolfo Vargas

Campos, siendo su ayudante el suboficial Rómulo Correa Yáñez. Dentro de su compañía recuerda a los soldados conscriptos: Caledonio Aburto Fuentes, Pablo Aguilera Bastías, Héctor Barra Reyes, Samuel Arroyo Riquelme, quién era ayudante del capitán Ubilla, Miguel Calderón Sepúlveda y Sergio Campos Torres, entre otros. Que luego de siete meses de instrucción por el mes de noviembre de ese año, hubo una reestructuración de las compañías, pasando en mi caso a depender de la compañía de plana mayor y servicios, la que estaba a cargo del capitán Nelson Ubilla Toledo. En cuanto al soldado conscripto Juan Carrillo Rebolledo, a quién podaban. "El Loco Carrillo", básicamente por no adoptar íntegramente la disciplina dentro del regimiento y salir a escondidas del mismo, lo cual derivaba en sanciones, que no lo asocia como una persona cercana al teniente Manuel Espinoza Ponce, a quién recuerda como un oficial inserto en la segunda compañía de cazadores siendo apodado "El Loco Espinoza", por sus actitudes agresivas, tanto con los prisioneros políticos allí detenidos como con los propios conscriptos del cuartel, llegaba con perros que mataba en plena vía pública para hacerle instrucción a su compañía. No recuerda con un grupo especial de trabajo, pero sí constantemente relacionado con los prisioneros políticos, a quienes llevaba desde su lugar de reclusión hasta dependencias del matadero que existía para aquella época en la unidad. Inquieta que éste oficial se relacionaba mayoritariamente con integrantes de su compañía, ya fueran estos oficiales, suboficiales o conscriptos. Comenta los hechos ocurridos el 10 de noviembre de 1973 en el regimiento Tucapel con relación a un supuesto "asalto al Polvorín".

En declaración judicial de 17 de junio de 2009 que rola de **fs. 1.372 a fs. 1.373 (tomo IV)**, ratifica su declaración extrajudicial de fs. 446 a fs. 448 las que constan en estos autos de fs. 1.358 a fs. 1.360 (Tomo IV), y en lo pertinente acota que el comandante de la segunda compañía cazadores le parece que era el capitán Manuel Vásquez Chahuán, a la cual pertenecía el teniente Espinoza. Agrega que el teniente Espinoza salía con conscriptos de su compañía para efectuar detenciones y otras misiones. Recuerda que una noche vio llegar a este oficial con detenidos que fueron ingresados al matadero que existía en el regimiento y que estaba ubicado a un costado del rancho donde, trabajaba. Después, se escucharon muchos gritos y lamentos, pero no pudo ver quiénes acompañaron a Espinoza en esa oportunidad. Recuerda que hubo comentarios

entre los conscriptos que indicaban que las personas muertas fueron ejecutadas, por lo que no se trataría de un “asalto al polvorín”, prosigue su relato en tal sentido.

A.74. Héctor Joaquín Celedón Fuentes (19 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 1.374 (Tomo IV) y de fs. 2.584 a fs. 2.585 (Tomo VIII).

En declaración judicial de fecha 18 de junio de 2009, que rola de **fs. 1.374 (Tomo IV)**, ratifica la declaración extrajudicial de otros hechos y en lo pertinente alude que no le correspondió trasladar detenidos al interior del regimiento, pero recuerda a un conscripto, a quien le decían “el chico”, que era de Cunco, quien colaboraba en estas tareas con los funcionarios de investigaciones que estaban en el regimiento. No recuerda el nombre de esta persona, pero le parece que luego de haber finalizado el servicio militar ingresó a Investigaciones.

En declaración extrajudicial de fecha 25 de enero de 2017, que rola de **fs. 2.584 a fs. 2.585 (Tomo VIII)**, añade en lo tocante que en el regimiento estaba encuadrado en la **compañía de plana mayor y servicios**, la que estaba al mando del capitán Nelson Ubilla, también había otros oficiales como Romilio Lavín, quien era subteniente y otros que no recuerda. De los clases de su compañía, recuerda al cabo Krause, sargento Peña Andaur, cabo segundo Pablo Silva, el suboficial Víctor Martínez y el cabo Maximiliano Antihuén. De los soldados, recuerda a Cosme Fernández Panes, Samuel Arroyo, Chávez Etchepare, Schwartenski y Concha. Que, dentro de sus funciones al interior de la compañía, pertenecía a la sección de reconocimiento, la que era de caballería correspondiéndole patrullar a caballo los sectores de Santa Rosa y alrededores de Temuco. Respecto a lo anterior, cumplió funciones en esa sección los primeros meses de ocurrido el golpe de Estado, recordando que después pasó a cumplir funciones al rancho. Sobre el capitán Aquiles Huerta, indica que éste se hizo cargo de la sección de caballería en la época en que cumplía funciones en el rancho. Nunca le correspondió salir con la sección montada al sector de Cholchol o el fundo La Serena. Hace presente, que al interior de su compañía existía una sala donde se interrogaban a los detenidos, en ella trabajaban dos personas de civil, ignorando si pertenecía a la Policía de Investigaciones de Temuco, el caso es que uno de ellos se parecía a un actor de cine por lo que lo apodaban Michael Douglas y el otro de mayor estatura y contextura gruesa. Precisa que vio que a esa sala ingresaba

personas detenidas las que eran trasladadas por soldados, para luego ser interrogadas bajo tortura, según los comentarios que había entre los soldados. Señala que la mayoría de los detenidos eran llevados al gimnasio del regimiento, nunca le correspondió custodiarlos. En cuanto a la detención de ocho jóvenes de la comuna de Pucón a manos de personal de carabineros de esa comuna el día 13 de septiembre de 1973, quienes posteriormente fueron trasladados al regimiento Tucapel donde finalmente se les pierde el rastro, ignora todo antecedente relacionado con ese hecho. Nunca tomó conocimiento respecto a la tortura y posterior ejecución de personas que permanecieron detenidas al interior del regimiento Tucapel, ni tampoco supo que personal de su compañía haya ido a recoger cadáveres al polígono de tiro de la isla cautín. Agrega que durante el mes de septiembre de 1973 estuvo fuera del regimiento, ya que, fue operado de apendicitis.

A.75. Juan Luis Figueroa Fernández, (18 años a la época de los hechos). **En declaración judicial** de fecha 18 de junio de 2009, que rola de **fs. 1.375 a fs. 1.377 (Tomo IV)**, ratifica su declaración extrajudicial y en lo pertinente refiere a otros hechos y expresa que los detenidos, eran mantenidos en el gimnasio “grande, pero eran interrogados en el gimnasio chico”, que se encontraba más retirado de ese lugar. Que no le correspondió trasladar detenidos al interior del regimiento, pero recuerda a un sargento de reserva de nombre Luis Ángel Valeria Candía, a quien le decían “el chico” y que era de Cunco, quien colaboraba en estas tareas. A veces andaba con el capitán Ubilla. Sobre el conscripto Juan Carrillo, indica que comenzó a salir a servicios vestido de civil. Incluso se apartó un poco del grupo al cabo de un tiempo. Recuerda que hubo varios conscriptos de diferentes secciones y compañías que fueron designados para cumplir estas misiones vestidos de civil, pero ignora quienes eran y con qué suboficiales u oficiales salían. Todo lo que sabe, es que su sección, lo hacían Carrillo y Valeria. Que le correspondió salir en una oportunidad a allanar un domicilio bajo las órdenes del sargento Luis Peña Andaur, donde resultó detenida una persona, la que llevaron al regimiento y dejaron en la guardia. Respecto de las personas que interrogaban a los detenidos, señala que éstos eran detectives, quienes los hacían de noche en el lugar antes indicado. Recuerda haber visto a dos de ellos entrando cerca de la medianoche al regimiento y haberlos visto salir en horas de la mañana.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

A.76. Héctor Omar Barra Reyes (19 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 1.387 a fs. 1.389 (Tomo IV), de fs. 1.394 a fs. 1.395 (Tomo IV) y de fs. 1.606 (Tomo V).

En declaración extrajudicial de fecha 09 de enero de 2009, que rola de **fs. 1.387 a fs. 1.389 (Tomo IV)**, manifiesta que para el año 1973, tenía 19 años y se encontraba realizando el servicio militar obligatorio en el regimiento de Infantería N°8 Tucapel de Temuco. Se encontraba inserto dentro de la **compañía de plana mayor y servicios**, la que se encontraba al mando del capitán Nelson Ubilla Toledo. Hasta antes del 11 de septiembre de ese año, sus labores habituales consistían en el trabajo en la panadería del regimiento y el reparto de éste al personal de planta, para lo cual conducía un pequeño tractor de color rojo. Luego del 11 de septiembre de 1973, su compañía se hizo cargo de los servicios de guardia tanto del interior del regimiento, como de los perímetros; eso incluía el polígono que se encontraba en la isla del regimiento, este servicio duraba generalmente dos horas, pero si el tiempo estaba bueno, podía permanecer en ese lugar toda la noche. Refiere a los hechos ocurrido la noche del 10 de noviembre del año 1973, recordando que de pronto, y sin sentir movimiento de personas, vehículos o gritos, sintió venir desde el polígono de la unidad que se encontraba distante del polvorín a unos doscientos metros aproximadamente, una serie de disparos, tanto de ráfaga como tiro a tiro. Pensó que se trataba de un ejercicio de instrucción nocturno que en oportunidades se efectuaban y solo se limitó a permanecer apostado en el lugar. Este polvorín era una pieza de cemento de tres por tres metros aproximadamente, la que permanecía cerrada y contaba con un cierre perimetral de alambre, la guardia se efectuaba afuera. Que luego de esos disparos, a los pocos minutos fue relevado de su puesto para ir a descansar a la guardia por las dos horas siguientes, retomando esa noche luego de este descanso otro punto de vigilancia y en relación a los detenidos y su permanencia al interior de la unidad, dice recordar que éstos eran llevados hasta una sala que se encontraba ubicada entre la compañía de plana mayor y la de morteros, desde ese lugar se escuchaban gritos y quejidos de dolor, claramente esta dependencia era usada para la tortura de detenidos. Para el tratamiento de los detenidos que ingresaban al regimiento, existía un grupo de funcionarios, cuya conformación no maneja, pero sí puede decir que a esa sala de castigos vio ingresar al capitán Nelson Ubilla que era quien se encontraba a cargo de los detenidos, el teniente

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Manuel Hugo Espinoza apodado "El Loco Espinoza", los hermanos Covarrubias, principalmente el de nombre Jaime. Se le pregunta por otros hechos.

En declaración judicial de fecha 20 de agosto de 2009, que rola de **fs. 1.394 a fs. 1.395 (Tomo IV)**, ratifica su declaración extrajudicial rolante de fs. 669 a fs. 671, la que consta en estos autos de fs. 1.387 a fs. 1389 (Tomo IV). En lo adecuado dice que le consta que el capitán Nelson Ubilla Toledo, los hermanos Covarrubias y algunas personas de civil interrogaban detenidos, porque en más de una oportunidad los vio entrar a una pieza que estaba en un pabellón entre la compañía de morteros y de plana mayor. Que en ese lugar torturaban a los detenidos, pues se escuchaban múltiples alaridos de dolor. También estaba en este grupo el capitán Vásquez Chahuán. Precisa que había dos soldados que los oficiales antes indicados utilizaban para trasladar a los detenidos, de nombres Luis Valeria y Libardo Schwartenski. El primero de ellos actualmente está fallecido y lo conocía porque era de Cunco, al igual que el declarante. Éste se subía sobre las espaldas de los detenidos, hombres y mujeres, saliendo con ellos a dar vueltas por el patio mientras los interrogaba. Estas dos personas se entendían directamente con el capitán Ubilla. Ambos soldados se fueron a Santiago al servicio de inteligencia. Agrega a sus dichos que por orden del teniente Lavín o Espinoza se formó una patrulla especial, denominada "Patrulla Brava" destinada a salir a efectuar patrullajes, allanamientos y detenciones, que estaba conformada casi con certeza por Sergio Ferreira Zapata, Juan Mario Fuentes Henríquez, Gerardo Enrique García Díaz, Lorenzo Octavio Olave Pineda, Pedro Rey Ortega Giraldi, Aladín Roberto Ríos Manzano y Leopoldo Villagrán Alvarado. Que quien puede aportar más información es Samuel Raúl Arroyo Riquelme, cercano al capitán Ubilla, pues era algo así como su chofer y le arreglaba una "renoleta" que tenía en aquel tiempo el oficial mencionado.

En diligencia de careo con Jaime García Covarrubias, de 21 de septiembre de 2010 que rola a **fs. 1.606 (Tomo V)**, ratifica sus dichos de fs. 669 y de fs. 701 las que consta de fs. 1.387 a fs. 1.389 (Tomo IV) y de fs. 1.394 a fs. 1.395 (Tomo IV) respectivamente, que le han sido leídas en el sentido que vio ingresar al teniente Jaime García Covarrubias en alguna oportunidad a la sala donde se mantenían a los detenidos políticos al interior del regimiento Tucapel y donde, además se les torturaba. Sin embargo, no le consta que este oficial participara de las torturas. No reconoce a la persona con quien se le carea. El

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Tribunal le da a conocer que se trata de Jaime García Covarrubias. Se mantiene en sus dichos.

A.77. René Humberto Garabito Vega (18 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 1.390 a fs. 1.391 (Tomo IV) y de fs. 1.396 (Tomo IV).

En declaración extrajudicial de fecha 09 de julio de 2009, que rola de **fs. 1.390 a fs. 1.391 (Tomo IV)**, explica que en el mes de enero del año 1972, ingresó al regimiento de Infantería N.º 8 Tucapel de Temuco a cumplir con su servicio militar obligatorio, quedando inserto en primera instancia en la primera compañía cazadores, para tres meses más tarde pasar integrar la compañía de **plana mayor y servicios**, la que se encontraba a cargo del capitán Nelson Ubilla Toledo. Con relación a lo ocurridos el 11 de septiembre de 1973, se encontraba en la compañía antes señalada, formando parte de la sección panadería, siendo el jefe de esta sección el suboficial Aliro Quintana Perez, la que además estaba compuesta por el cabo primero Juan Guillermo Pozo Castro, los conscriptos Lorenzo Contreras Figueroa, y Adelmo Agustín Obreque Culman, entre otros. En lo pertinente sostuvo que en más de una oportunidad vio ingresar detenidos al regimiento, estando a cargo de éstos siempre un carabinero de apellido Omar Burgos Dejean y el cabo segundo Pablo Silva Gómez, quienes vestían de civil, y tiene entendido que éstos participaban además de los interrogatorios de los detenidos. Se le pregunta por otros hechos.

En declaración judicial de fecha 20 de agosto de 2009, que rola a **fs. 1.396 (Tomo IV)**, ratifica su declaración extrajudicial rolante de fs. 674 a fs. 675 la que consta en este proceso de fs. 1390 a fs. 1391 (Tomo IV). En lo atingente proclama que conocía al carabinero Burgos Dejean, pues eran vecinos en Las Quilas. Muchas veces lo vio ingresando con detenidos a una pieza ubicada en la compañía de plana mayor y logística. Estos detenidos iban con su vista vendada. También participaba en estas actividades el cabo segundo Pablo Silva Gómez, que era de la compañía de plana mayor.

A.78. Juan Alfonso Campos Valdebenito (19 años a la época de los hechos). Quien prestó declaración de fs. 1.392 a fs. 1.393 (tomo IV) y de fs. 2.752 a fs. 2.753 (tomo VIII).

En declaración judicial de fecha 20 de agosto de 2009, que rola de **fs. 1.392 a fs. 1.393 (Tomo IV)**, ratifico su declaración extrajudicial rolante de fs. 667 a fs. 668 de otros hechos y en lo oportuno sostuvo que el suboficial a cargo de la

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

segunda sección era el cabo Juan Muñoz Venegas. Consultado por otros hechos que dicen relación con el “asalto al polvorín” narra que al día siguiente algunos compañeros de su sección le indicaron que la noche anterior algunos oficiales y soldados conscriptos habían sacado a un grupo detenidos hacia la isla Cautín para fusilarlos. No recuerda el nombre de las personas que le dieron esta información, pero eran de su sección. El Tribunal le lee los nombres de los soldados conscriptos que aparecen en el cuaderno reservado. El deponente señala que recuerda como integrantes de la segunda sección a Celedonio Aníbal Aburto Fuentes, Samuel Raúl Arroyo Riquelme, Miguel Calderón Vega, Hugo del Carmen Candía Pinilla, Armando Cárcamo Cárcamo, Enrique Castro Obreque, Héctor Joaquín Celedón Fuentes, Sergio Alfredo Concha San Martín, Manuel Contreras Salazar, Bernardino Cuevas Contreras, José Chávez Etchepare, Crescencio Ferrada Guerrero, Gerardo Enrique García Díaz, Roberto Henríquez Ruiz, Héctor Jerzán Illanes Leal, José Raúl Inzunza Reyes, Juvenal Lagos Osses, José Anselmo Matamala Jofré, Rosendo Molina Sandoval, Lorenzo Octavio Olave Pineda, Aristóteles Pacheco Nicloux, Abner Palma Muñoz, Aladín Roberto Ríos manzano, Libardo Schwartenski Rubio, José Silva Solís, Luis Ángel Valeria Candia, Germán Humberto Vilugrón Ortiz. Preguntado, acota que le consta que el capitán Nelson Ubilla Toledo y los detectives Hernán Quiroz y Morales interrogaban detenidos, porque en una oportunidad le correspondió ir a buscar un detenido al gimnasio, tuvo que vendarle la vista y lo trasladó hasta una pieza ubicada en la compañía de morteros, donde estas personas practicaban los interrogatorios.

En declaración extrajudicial de fecha 08 de agosto de 2017, que rola de **fs. 2.752 a fs. 2.753 (Tomo VIII)**, indica que efectuó el servicio militar obligatorio en el regimiento de Infantería N° 8 Tucapel de Temuco, se desempeñó como soldado conscripto en la **compañía de plana mayor y servicios**, y en lo oportuno que es efectiva la existencia de una sala donde se interrogaban a los detenidos del regimiento, esta estaba entre las compañías de morteros y la de plana mayor, lugar que anteriormente estaba destinado para la recreación de los conscriptos. Según su recuerdo, existía un grupo encargado de los interrogatorios en esa sala, liderado por el capitán Nelson Ubilla, los detectives Quiroz y Morales, un carabinero y un funcionario de la fuerza aérea de la Base Maquehue. Recuerda a los detectives porque en ocasiones conversaba con Quiroz, quien siempre le

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

preguntaba por el accidente que sufrió a causa del disparo accidental de un fusil, el cual le había traído complicaciones a su cadera y por lo que recuerda su trato con él era muy amable y cercano a pesar de que se veía una persona muy reservada. El equipo de interrogadores trabajaba durante el día en la sala antes mencionada y en unas diez ocasiones el capitán Ubilla le entregaba papeles con nombres de detenidos a objeto que los fuera a buscar al gimnasio para llevarlos a la sala de interrogatorios, es así como en muchas oportunidades debió realizar esos traslados recordando que a los detenidos los llamaban por alto parlantes para ser ubicados dentro del gimnasio, debido a que eran muchos. No tiene claridad, las identidades de los militares que le entregaban detenido, solo tiene claro que en la mayoría de las veces se trataba de soldados conscriptos. Siempre los detenidos se los entregaban vendados, se los entregaba a Ubilla en la sala de la compañía de plana mayor y posteriormente se los entregaban nuevamente para regresarlos al gimnasio y algunas veces debía llevarlos a la guardia donde en un par de ocasiones les dieron la libertad. Esa es su participación en este grupo, nunca tuvo participación en interrogatorios, salvo en los traslados de detenidos que ya especificó. Respecto a las víctimas Héctor Aguayo Olavarría, los hermanos Juan Carlos y Ricardo Schmidt Arriagada, Elías y Hugo Gonzalez Ortega, Alejandro Escobar Vásquez, Raúl Figueroa Burkhardt y Juan de Dios Cabrera Figueroa, señala que sus nombres no le son conocidos, por lo que no podría aportar antecedentes respecto a sus detenciones y posibles paraderos. Lo anterior, debido a que para el día 13 o 14 de septiembre de 1973, fechas en que se le comenta que las víctimas estuvieron detenidas en el regimiento, no se encontraba ejecutando labores con detenidos durante esos días ya que se encontraba convaleciente e internado en la enfermería del regimiento, sin embargo, sus labores apoyando a Ubilla pudieron haber comenzado después de septiembre, probablemente en noviembre o diciembre no descartando que también haya apoyado a ese grupo en 1974. Nunca supo por comentarios de otros soldados de su compañía, que hayan tenido que ir a la isla Cautín los primeros días del golpe de Estado a recoger los cuerpos de personas fallecidas para posteriormente subirlas a camiones militares que salieron con rumbo desconocido.

A. 79. Jorge Luis Godoy Valdebenito, (18 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 1.412 a fs. 1.413 (Tomo IV), de fs. 1.423 a fs. 1.425

(Tomo V), de fs. 1.608 a fs. 1.610 (tomo V) y de fs. 232 a fs. 235 (Cuaderno secreto).

En declaración extrajudicial de fecha 25 de agosto de 2009, que rola de **fs. 1.412 a fs. 1.413 (Tomo IV)**, dice que para el mes de septiembre de 1973, tenía 18 años y se encontraba efectuando el servicio militar obligatorio en el regimiento N° 8 de Infantería Tucapel, inserto dentro de la **compañía de plana mayor y servicios**, cuyo comandante era el capitán Nelson Ubilla Toledo. Aclara que desde antes del 11 de septiembre de 1973, se encontraba cumpliendo servicio de custodia nocturna de la casa particular del comandante del regimiento, don Pablo Iturriaga Marchesse, por lo que en el día dormía en el regimiento y en la noche junto al conscripto de apellido Luis Ángel Valeria Candía se dirigía hasta la casa de avenida Alemania, ubicada por ese entonces frente a la "SOFO", y en lo adecuado asevera que su compañía era la encargada de la seguridad regimiento, para lo cual este personal debía cubrir servicios de guardia y vigilancia. Dentro del regimiento efectivamente existían personas detenidas luego del 11 de septiembre de 1973, incluso recuerda el hecho de que el hermano de un conscripto de su compañía cuya identidad no recuerda, mientras permanecía prisionero en el patio de la unidad juntó a otros detenidos, de rodillas y con sus brazos extendidos los cuales debían sostener ladrillos, fue brutalmente golpeado por otro conscripto de la compañía de nombre José Chávez Etchepare, quien estaba designado por el mando de la unidad para vendar a los detenidos, marearlos mediante la técnicas de dar vueltas sobre su eje para posteriormente pasarlos a la pieza que se encontraba dentro de la compañía de plana mayor, la cual contaba con un catre metálico y dos dínamos eléctricos. Que conoció el funcionamiento de estos aparatos, cuando por reírse el sargento Mario Hernán Arias Díaz lo puso sobre este catre y le aplicó golpes de corriente en su cuerpo, al menos por unos diez minutos, lo cual le causó mucho dolor, vómitos y diarrea, lo que hasta el día de hoy no ha podido olvidar. Por lo antes expuesto es que luego de finalizado el servicio militar obligatorio, se fue inmediatamente a Argentina, desvinculándose por completo del ejército de Chile.

En declaración judicial de fecha 25 de septiembre de 2009, que rola de **fs. 1.423 a fs. 1.425 (Tomo V)**, ratifica su declaración extrajudicial, rolante de fs. 743 a fs. 744, la que consta en estos autos de 1.405 a fs. 1.406 Tomo IV que se le ha leído. Cuenta otros hechos y en lo atinente expresa que sabe de la existencia

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

de una patrulla especial, formada por conscriptos que se ofrecieron como voluntarios, entre los que recuerda a José Chávez Etchepare, Libardo Schwarzenski, Juan Mario Fuente Henríquez, Juan Carrillo y al parecer Leopoldo Villagrán Alvarado, entre otros. A fines de noviembre de 1973 Luis Valeria Candía dejó de hacer guardia junto a él en la casa del comandante y se unió a esta patrulla. Este grupo era dirigido por el sargento Mario Arias Díaz, quien actuaba bajo las órdenes directas del teniente Jaime García Covarrubias. Que este grupo se destacaba por su crueldad con los detenidos y por participar en allanamientos y detenciones. En cuanto a los detenidos en el regimiento Tucapel, agrega que el teniente García Covarrubias los interrogaba en la sala donde funcionaba la banda del regimiento. Después, eran trasladados por personal militar, entre ellos los mencionados precedentemente, hasta la sala de torturas ubicada entre el edificio de plana mayor y morteros, donde en una oportunidad fue torturado por el sargento Arias. Precisa que el teniente García mandaba más que el capitán Ubilla en cuanto al tratamiento de detenidos, destacándose por su crueldad para con ellos. Su hermano, el subteniente Raimundo García, en un principio fue una persona muy amable y no se quiso meter con los detenidos, pero después fue influenciado por su hermano y cambió su conducta. Posteriormente, ambos participaban en los interrogatorios de los detenidos en la dependencia de la banda del regimiento. Relata otros hechos.

En diligencia de careo con Jaime García Covarrubias, de fecha 21 de septiembre de 2010, que rola de **fs. 1.608 (Tomo V)**, ratifica sus dichos y en lo pertinente no reconoce a la persona con quien se le carea. El Tribunal le da a conocer que se trata de Jaime García Covarrubias. Manifiesta que siente mucho temor de esta persona, por lo que no desea seguir declarando, ya que está seguro de que su vida correría peligro si agrega algo más. “Este señor es muy peligroso”.

A.80. Oscar Inostroza Segura (19 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 1.414 a fs. 1.416 (Tomo IV), de fs. 1.426 a fs. 1.428 (Tomo V), de fs. 1.468 (Tomo V) y de fs. 1.607 (Tomo V).

En declaración extrajudicial de fecha 26 de agosto de 2009, que rola de **fs. 1.414 a fs. 1.416 (Tomo IV)**, acota que ingresó a efectuar el servicio militar obligatorio el día 06 de enero del año 1973, al regimiento N° 8 de infantería y Montaña Tucapel, en la ciudad de Temuco. Para el mes de noviembre del año 1973, se encontraba inserto dentro de la **compañía de plana mayor y servicios**,

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

la que se encontraba bajo el mando del Capitán Nelson Ubilla Toledo, siendo su segundo comandante el Subteniente Raimundo García Covarrubias, recordando que su hermano el teniente Jaime García, se destacaba por su crueldad y tratos inhumanos hacia los detenidos y los propios conscriptos. Añade que dentro de los lugares o dependencias que eran usadas para mantener prisioneros políticos dentro del regimiento estaban, la sala de banda de música de la unidad, el "gimnasio chico" donde se practicaba boxeo, el calabozo de la guardia y la "sala de conferencias" existente dentro de la compañía de plana mayor y servicio. Esta última dependencia se encontraba ubicada al medio de la compañía, allí se encontraba un catre metálico de los que ellos usaban y que era de una plaza, con los instrumentos necesarios para la tortura. En alguna oportunidad le correspondió llevar a esta sala a su propio cuñado de nombre Ricardo Villanueva, quien por ese tiempo era simpatizante de la unidad popular. Se le pregunta por otros hechos y en lo pertinente dice que recuerda a quienes realizaban interrogatorios a los detenidos del regimiento al capitán Nelson Ubilla Toledo, sargento Mario Arias Díaz, y los conscriptos sargento segundo de reserva José Chávez Etchepare, Libardo Schwartenski Rubio y Luis Ángel Valeria Candía y el teniente Jaime García, entre otros.

En declaración judicial de fecha 28 de septiembre de 2009, que rola de **fs. 1.426 a fs. 1.428 (Tomo V)**, ratifica su declaración extrajudicial rolante de fs. 753 a fs. 755, la que consta en estos autos de fs. 1.414 a fs. 1.416 Tomo IV) que le fuera leída y en lo pertinente afincó en relación al "ataque al polvorín", que se comentaba por parte de los conscriptos que lo del ataque era un montaje, pues la sección que estuvo de turno de emergencia aquella noche, no fue llamada a repeler el supuesto ataque. Que, en realidad, lo ocurrido aquella noche fue una ejecución de detenidos, siendo de comentario generalizado dentro de los conscriptos que los oficiales Jaime y Raimundo García Covarrubias y Nolberto Uribe Moroni habrían participado utilizando bazucas. Además, actuaron en este acto los suboficiales Pablo Silva, Mario Arias Díaz y Peña Andaúr. No le consta que haya habido conscriptos aquella noche, pero lo más probable es que aquellos que componían una escuadra especialmente seleccionada por los oficiales, haya participado en las ejecuciones. Expone que existía una escuadra de conscriptos que fueron tomados de todas las compañías del regimiento. Esta selección fue ordenada por el capitán Nelson Ubilla y fue hecha por los clases de cada

compañía y se efectuó antes del golpe militar, para salir a las calles a disuadir las manifestaciones. Los conscriptos seleccionados eran en su mayoría gente fornida y de estatura por sobre el promedio. En ese sentido, recuerda que de su compañía fueron seleccionados Héctor Illanes Leal, Gerardo García Díaz, Libardo Schwarzenski, Juan Carrillo y José Chávez Etchepare, entre otros cuyos nombres no recuerda. Refiere que tanto Illanes como García era personas de un carácter muy violento. Narra que le correspondió trasladar a varios de detenidos desde la guardia del regimiento hasta una sala ubicada entre el pabellón de plana mayor y la compañía de morteros. A esta sala le llamaban “sala de conferencias de alto nivel”. Hasta ese lugar llevó a Ricardo Villanueva. En una de las visitas que hizo a esa sala pudo ver que dentro de esta se encontraba Jaime García Covarrubias y al sargento Mario Arias Díaz, entre otros que no recuerda. En esa oficina se torturaba a las personas mediante la aplicación de corriente. Que también le correspondió custodiar detenidos en el “gimnasio chico”, lugar al que llegaban personas muy golpeadas, tanto hombres como mujeres. Sobre las personas que murieron en el supuesto ataque al polvorín, señala que vio detenidos dentro del regimiento en los días previos a Alberto Molina y al “Flaco Chávez” a quienes conoció de vista antes de esto. A Chávez lo ubicaba del liceo donde estudió. A Molina lo ubicaba por su inclinación política, ya que su familia era de izquierda. Finalmente, indica que le correspondió efectuar allanamientos y detenciones en varios lugares de Temuco, siempre bajo las órdenes de algún clase, entre los que recuerda a Pablo Silva, Mario Arias y Peña Andaúr.

En diligencia de careo con Mario Hernán Arias Díaz, de fecha 26 de marzo de 2010 que rola a **fs. 1.468 (Tomo V)** ratifica su declaración extrajudicial y en lo pertinente reconoce a la persona con la cual se le carea y de quien ha hecho referencia. Precisa que en más de una oportunidad le correspondió trasladar detenidos desde la guardia a la sala de interrogatorios, pudiendo ver en más de una oportunidad al sargento Arias entre el grupo de interrogadores. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo con Jaime García Covarrubias, de fecha 21 de septiembre de 2010, que rola a **fs. 1.607 (Tomo V)**, ratifico sus dichos de fs. 753, la que consta en estos autos de fs. 1.414 Tomo IV) y de fs. 774 y en lo pertinente en el sentido que vio al teniente Jaime García Covarrubias en alguna oportunidad dentro de la sala donde se mantenían a los detenidos políticos al interior del

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

regimiento Tucapel y donde, además se les torturaba. No reconoce a la persona con quien se le carea. El Tribunal le da a conocer que se trata de Jaime García Covarrubias. Manifiesta que son hechos que ocurrieron hace mucho tiempo, por lo que pensándolo más detenidamente quizás se haya confundido al sindicarlo a él como presente al interior de la sala donde se torturaba a los detenidos. Puede ser que no haya estado en ese lugar. Se mantiene en sus dichos.

A.81. Enrique Segundo Muñoz Moreno, (19 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 1.417 a fs. 1.418 (Tomo IV), de fs. 1.429 (Tomo V) y de fs. 1.470 (Tomo V).

En declaración extrajudicial, de fecha 26 de agosto de 2009, rolante de **fs. 1.417 a fs. 1.418 (Tomo IV)**, en lo atinente sostuvo que efectuó su servicio militar en el regimiento de Infantería N°8 Tucapel de Temuco, ingresando en enero de 1973, encontrándose bajo el mando del capitán Nelson Ubilla Toledo, siendo el segundo comandante Raimundo García Covarrubias, recordando que su hermano el teniente Jaime García se destacaba por su crueldad y tratos inhumanos hacia los detenidos y los propios conscriptos. Suma que eran varias las dependencias usadas en el regimiento para mantener detenidos después del 11 de septiembre de 1973, a quienes se les vendaba la vista cuando eran sacados de su lugar de reclusión. Que por el tiempo transcurrido no le es posible recordar a ninguna persona que haya estado allí en esas condiciones. Recordando que quienes realizaban los interrogatorios a los detenidos del regimiento eran el capitán Nelson Ubilla Toledo, sargento Mario Arias Díaz y el conscripto sargento de reserva José Chávez Etchepare.

En declaración judicial de fecha 28 de septiembre de 2009, rolante de **fs. 1.429 (Tomo V)**, ratifica declaración extrajudicial que rola de 756 a fs. 757, la que consta en estos autos de fs. 1.417 a fs. 1.418 (Tomo IV), se le pregunta por otros hechos y en lo adecuado que dice relación con las personas que interrogaban a los detenidos insiste que eran el capitán Nelson Ubilla Toledo, sargento Mario Arias Díaz y José Chávez Etchepare. Que solo le correspondió sacar a los detenidos al baño. Que estos generalmente estaban en la guardia, en la sala de banda o el "gimnasio chico".

A.82. Arnoldo Filiberto Cuevas Mardones (18 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 1.419 a fs. 1.420 (Tomo IV) y de fs. 1.430 (Tomo V).

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

En declaración extrajudicial, de fecha 28 de agosto de 2009, rolante de **fs. 1.419 a fs. 1.420 (Tomo IV)**, en lo oportuno soslayo que ingresó efectuar mi servicio militar obligatorio en el mes de abril del año 1973 al regimiento Infantería y Montaña Tucapel de Temuco, para noviembre de 1973 estaba inserto dentro de la **compañía de plana mayor y servicios**, bajo el mando del capitán Nelson Ubilla Toledo, siendo el segundo al mando el teniente García Covarrubias. Justifica que dicha compañía estaba formada por alrededor de cien soldados conscriptos, quienes realizaban principalmente servicios de guardia en la unidad militar. Se le interroga por otros hechos y alude que respecto a las personas detenidas por temas políticos en el interior del regimiento Tucapel no le correspondió custodiarlos, pero que si era de conocimiento que había varias personas en esta calidad detenidas en uno de los pabellones cercano a la compañía de plana mayor. Que para la custodia e interrogatorio de estos detenidos existía una “patrulla brava”, a su parecer conformada por los conscriptos José Chávez Etchepare, Luis Valeria Candía, Libardo Schwartenski, cabo Hernán Peña Andaur y Luis Arias, además de un civil de apellido Luco, entre otros.

En declaración judicial de fecha 28 de septiembre de 2009, rolante de **fs. 1.430 (Tomo V)**, ratifico declaración extrajudicial de fs. 760 a fs. 761 la que consta en estos autos de fs. 1.419 a fs. 1.420 (Tomo IV), y en lo atinente dice que, aunque no vio detenidos al interior del regimiento, supo por comentarios que éstos se encontraban en una dependencia ubicada a un costado del pabellón de plana mayor. También por comentarios supo que un civil de apellido Luco tenía que ver con los interrogatorios y torturas de los detenidos. En cuanto a la “patrulla brava”, indica que se comentaba que los conscriptos Chávez, Schwarstenski y Valeria formaban parte de aquella, aunque no le consta.

A.83. Mario Hernán Arias Díaz (33 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 1.442 a fs. 1.444 (Tomo V), de fs. 1.461 a fs. 1.462 (Tomo V), de fs. 1.468 (Tomo V), de fs. 1.469 (Tomo V), de fs. 1.470 (Tomo V), de fs. 1.817 a fs. 1.819 (Tomo VI), de fs. 3.187 a fs. 3.188 (Tomo IX), fs. 128 a fs. 129 (cuaderno secreto), de fs. 196 (Cuaderno secreto) y de fs. 236 a fs. 242 (Cuaderno secreto).

En declaración extrajudicial de fecha 25 de septiembre de 2009, rolante de **fs. 1.442 a fs. 1.444 (Tomo V)**, en lo atinente sustentó que para 1973 se desempeñaba en el regimiento Infantería N°8 Tucapel de Temuco, en la **compañía de plana mayor y servicios** a cargo del capitán Nelson Ubilla Toledo, quien se desempeñaba como oficial de inteligencia de la unidad militar. Comunica

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

que, por orden superior, entre el periodo de septiembre y diciembre del año 1973, la compañía de plana mayor y servicios fue la encargada de cumplir con los servicios de guardia de la unidad militar. Relata el funcionamiento de los servicios de guardia y a los hechos ocurridos la noche del 10 de noviembre de 1973 y sobre la permanencia de personas detenidas al interior de la unidad militar, dice que vio personas al interior del regimiento en esa calidad en lo denominado "En tránsito" desde la cárcel a la fiscalía y viceversa, quienes eran generalmente mantenidos en un calabozo que se habilitó, en un dormitorio de conscriptos existente dentro de la guardia, sobre quienes había que tener la debida vigilancia. Se le exhiben fotografías de otras víctimas las que no reconoce y en cuanto a los funcionarios encargados de las entrevistas de los detenidos al interior del regimiento, recuerda a personal de la policía de investigaciones de Temuco, entre ellos Hernán Quiroz Barra y Hernán Morales Toledo, además de los sargentos Orlando Moreno Vásquez, Raúl Schonner Frías y Nelson Ubilla Toledo. Dentro de este grupo recuerda a como conscriptos de confianza de este grupo a Libardo Schwartenski Rubio, José Chávez Etchepare. Sobre la "sala de conferencia" dice que cada compañía del regimiento tenía una sala de instrucción teórica, con la finalidad de efectuar la enseñanza respectiva a los conscriptos, estas estaban dentro de cada compañía, contigua a los baños y dormitorios. Que efectivamente su compañía tenía la suya y allí se interrogaba por parte del grupo ya referido a los detenidos. Dice que no participaba de estos interrogatorios porque su función dentro del cuartel era la que ya señaló.

En declaración judicial de fecha 28 de enero de 2010, rolante de **fs. 1.461 a fs. 1.462 (Tomo V)**, ratifica su declaración extrajudicial de fs. 879 a fs. 881 la que consta en estos autos de fs. 1.442 a fs. 1.444 (Tomo V), acota que para septiembre de 1973 estaba casado, antes de esa fecha pasaban acuartelados en el regimiento, pero después de esa fecha pudieron ir a dormir a sus casas. Lo anterior, debido a que antes del golpe militar existía temor ante un posible ataque del "MIR". Las personas que menciona en su declaración extrajudicial como participando en los interrogatorios eran los que formaban parte del departamento segundo. A él no le correspondió participar en interrogatorios. Que tenían prohibición de acercarse al lugar donde estos se efectuaban. El Tribunal le lee, en lo pertinente, las declaraciones de: fs. 597, fs. 769, fs. 774, fs. 778. El deponente señala: Que no tenía acceso a la sala de interrogaciones ni menos los conscriptos,

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

salvo aquellos que he mencionado. Desconoce el motivo por el cual los conscriptos lo sindicaron como integrante del grupo de interrogadores. Piensa que se debe al hecho que él era un instructor muy estricto y ellos quieren tomarse revancha en este momento. Que jamás trabajó junto al teniente Espinoza o al teniente Gran, pues estos eran de otra compañía. Que sí supo que el teniente Espinoza salía con algunas patrullas a efectuar ejecuciones simuladas a “borrachitos que pillaba en horas de toque de queda”. Insiste que jamás participó en hechos como los que se le imputan, sus funciones fundamentales eran las de hacer guardia y hacer instrucción a la sección de telecomunicaciones.

En diligencia de careo con Oscar Inostroza Segura, de fecha 26 de marzo de 2010, rolante de **fs. 1.468 (Tomo V)**, ratifica su declaración de fs. 951 a la que consta en estos autos de fs. 1.461 a fs. 1.462 (Tomo V), insiste que su única función era hacer guardia e instrucción a la sección de telecomunicaciones, por el hecho de tener esa especialidad. Que en alguna oportunidad le correspondió entregar detenidos desde la guardia a conscriptos para que llevaran detenidos a la dependencia a que hace referencia el señor Inostroza. Que puede ser que su equivoco se deba a que la sala de instrucciones donde se llevaba a cabo los interrogatorios estaba al lado del almacén de telecomunicaciones, donde trabajaba. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo con Libardo Schwartenski Rubio de fecha 26 de marzo de 2010, rolante de **fs. 1469 (Tomo V)**, reitera que no estuvo asignado a la sección segunda, pues solo había especialistas en inteligencia y el deponente era telecomunicaciones, desconoce porque esa persona se le sindicó a esa sección. Ratifica íntegramente su declaración prestada de fs. 951 de autos. Aunque no recuerda a la persona con la que se carea, pero si el nombre de Libardo Schwartenski como un conscripto de confianza del grupo de suboficiales y oficiales a cargo de los detenidos.

En diligencia de careo con Enrique Segundo Muñoz Moreno, de fecha 26 de marzo de 2010, rolante de **fs. 1.470 (Tomo V)**, ratifica su declaración de fs. 951 a la que consta en estos autos de fs. 1.461 a fs. 1.462 (Tomo V), insiste que su única función era hacer guardia e instrucción a la sección de telecomunicaciones, por el hecho de tener esa especialidad. Que estaba el almacén de telecomunicaciones y no en la sala de instrucción, que se ubicaba al costado de ésta. Se mantiene en sus dichos.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

En declaración judicial de fecha 6 de julio de 2013, rolante de **fs. 1.817 a fs. 1.819 (Tomo VI)**, fs. 879 a fs. 881 la que consta en estos autos de fs. 1.442 a fs. 1.444 (Tomo V) y de fs. 951a fs. 952 a la que consta en estos autos de fs. 1.461 a fs. 1.462 (Tomo V), consultado dice que vio detenidos en una dependencia ubicada en la guardia del regimiento, los que no se registraban en ese lugar, es decir, no se dejaba constancia de su detención e ingreso a la unidad en el libro de novedades. Mientras estuvo allí a veces llamaban del departamento segundo para pedir que les llevara los detenidos a la oficina que tenía este departamento en la comandancia. Los detenidos que eran llevados al departamento segundo estaban con su vista descubierta y no iban esposados. Sin embargo, le parece que había otro grupo de detenidos que eran llevados hacia la compañía de plana mayor, que iban con su vista vendada. Consultado dice que el oficial de inteligencia del regimiento era el capitán Nelson Ubilla Toledo, quien trataba junto a su grupo el tema de los detenidos. Tiene entendido que todos los oficiales concurrían al lugar donde trabajaba Ubilla y su grupo, porque cuando llegaban con detenidos debían informarle al capitán respecto de la razón por la cual estas personas estaban privadas de libertad. También debían darle cuenta al fiscal respecto de lo mismo. Anexa que el fiscal en 1973 era el mayor Jofré, quien se hizo asesorar por personal de la Corte de Apelaciones de Temuco y por un abogado de nombre Alfonso Podlech. A este abogado lo veía casi todos los días cuando llegaba al regimiento. Siempre lo vio de civil, salvo en los consejos de guerra, en que vistió uniforme. Los consejos de guerra se efectuaron en el casino de oficiales. Interrogado afínica que muchos detenidos que estaban en la guardia fueron llamados a declarar a la Fiscalía Militar ubicada en la comandancia. Varios de estos fueron dejados en libertad y otros fueron llevados a la cárcel. No recuerda que hayan quedado persona detenidas en la guardia por más de algunas horas o que hubiesen sido llevados desde la fiscalía hacia el departamento segundo. Recuerda haber visto detenido en el regimiento a una persona que era hijo de una profesora que tuvo en Cunco. Esta persona era de apellido Ortega Aguilar y le decían "El Pani", quien posteriormente fue expulsado del país. Que también supo que había llegado detenido el "Milico Morales" con quien trabajó en el regimiento años antes. No lo vio a esta persona, pero supo que desapareció. No le consta que haya habido detenidos en el gimnasio del regimiento, pero que es probable. Que hizo rol de clase de servicio en su compañía, el cual duraba

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

veinticuatro horas y eran turnos cada seis a ocho días más o menos. Durante esos turnos nunca vio detenidos en la sala de instrucción de la compañía ni escuchó interrogatorios. Debe señalar que aun cuando estaban en ese rol debía efectuar instrucción a los conscriptos bajo su mando. El Tribunal le lee las declaraciones extrajudicial y judicial prestadas por José Raúl Inzunza Reyes, de fs. 3.307 y fs. 3.310. El deponente señala: que supo de interrogatorios efectuados en la compañía de plana mayor y servicio, pero nunca participó de ellos. Piensa que esta persona fue inducida a declarar en su contra. Respecto de lo que señala esta persona en el sentido que el deponente habría participado en detenciones junto con él, debe señalar que recuerda el hecho que relata. En una oportunidad, excepcionalmente el capitán Ubilla le pidió que fuera dejar a un detenido a la cárcel, por lo que se hizo acompañar de un conscripto. Subieron a un jeep y cuando se dirigían al centro de detención la persona que llevaban les dijo que en una camioneta que estaba delante de ellos iba "el maestro"; que era quien le fabricaba o arreglaba las armas al "MIR". Entonces detuvieron la camioneta y se llevaron a las dos personas que estaban en su interior al regimiento Tucapel. Le dio cuenta al capitán Ubilla, quien tras un breve interrogatorio dejó, libre al más joven de los detenidos y al otro lo llevó hacia el interior de la unidad, ignorando qué sucedió con éste. Que esta fue la única vez que detuvo a alguien y una de las pocas veces que le correspondió trasladar detenidos a la cárcel. Respecto de los dichos de Inzunza con relación a la muerte de dos personas en la sala de interrogatorios de la compañía de plana mayor, dice que no supo de esto. Que si sucedió este conscripto debió haber dado cuenta al oficial de servicios, al menos eso habría hecho él. El Tribunal le lee la declaración de Martín Huiriqueo Antuhuil, de fs. 3.342 a fs. 3.343. El deponente señala: que no sabía que los cabos Lizama, Labraña, Silva y Saldaña tenían que ver con detenidos. Insiste en que no participó en interrogatorios o torturas de detenidos. Que se comentaba eso sí, que los hermanos García Covarrubias participaban de estas actividades, sobre todo el menor de ellos que "medio loco", sometiendo a los conscriptos a actividades de instrucción no programadas durante las noches.

En declaración extrajudicial de fecha 9 de mayo de 2019, rolante de **fs. 3.187 a fs. 3.188 (Tomo IX)** (cuyas copias constan de fs. 3.153 a fs. 3.154 Tomo IX) en lo pertinente agrego que para septiembre de 1973 pertenecía a la compañía de plana mayor y servicios la que estaba al mando del capitán Nelson Ubilla

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Toledo y el deponente dice que estaba a cargo de la instrucción de los conscriptos. Señala que el capitán Nelson Ubilla se hizo cargo de la inteligencia de la unidad militar, departamento segundo, además de encargarse de la compañía de plana mayor y servicios. Sobre la existencia de una sala ubicada entre la compañía de plana mayor y servicios y la compañía de morteros, donde después del día 11 de septiembre fue habilitada para efectuar interrogatorios a detenidos bajo aplicación de tortura, expresa que era manejada por el departamento segundo, que él no intervenía en dicho lugar por ser parte de plana mayor, que jamás interrogó a alguien, su función era de instrucción de conscriptos, la persona que interrogaban en ese lugar eran funcionarios del departamento segundo. De los detenidos que comenzaron a llegar al regimiento, recuerda que estos eran dejados directamente en la fiscalía, cuando había muchos detenidos o consejos de guerra, estos eran llevados al casino, ignorando que ocurría al interior, jamás participó de algún consejo, tenían prohibido acercarse al casino cuando se realizaban los consejos de guerra. En cuanto a la participación de personal de su compañía en recoger uno cuerpos de personas ejecutadas al polígono de tiro y cargarlos a un camión militar el cual habría emprendido rumbo al puente Allipen, señala que esa situación nunca estuvo bajo su conocimiento y que a él no le correspondió efectuar esa labor, tampoco vio que alguien de su compañía lo hiciera. En cuanto a las víctimas Hugo Arner y Elías Dagoberto Gonzalez Ortega; los hermanos Juan Carlos y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan de Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Raúl Figueroa Burkhardt y Héctor Aguayo Olavarría, es la primera vez que escucha sus nombres e ignora sus paraderos, esto debido a que la compañía de plana mayor tenía como exclusiva finalidad cubrir las guardias del cuartel, que nunca los dejaban ver o conocer la identidad de las personas detenidas que pasaban a declarar a la fiscalía. Niega haber sido enviado en alguna misión especial al sector del puente Allipen, tampoco supo que en dicho lugar se practicaron ejecuciones de detenidos de su unidad militar.

A.84. Juan Isaías Zurita Alarcón (18 años a la época de los hechos). **En declaración judicial** de fecha 7 de diciembre de 2009, rolante de fs. **1.445 (Tomo V)**, en lo pertinente proclamo que puede agregar a sus dichos que el teniente Raimundo García Covarrubias algunas veces sacaba algunos conscriptos de madrugada o en la noche para participar en actividades que desconoce. Entre los

conscriptos recuerda a Heriberto Carrillo como uno de los que García Covarrubias seleccionaba esas noches.

A.85. Leopoldo Enrique Villagrán Alvarado (19 años a la época de los hechos). **En declaración judicial** de fecha 7 de diciembre de 2009, rolante de **fs. 1.446 a fs. 1.447 (Tomo V)**, en lo pertinente se le pregunta por otros hechos recordando que el teniente Espinoza a su parecer estaba en la segunda compañía de cazadores. Que no le correspondió trabajar con él. Tampoco recuerda que algún suboficial u oficial haya solicitado voluntarios para formar patrullas especiales destinadas a tratar con los detenidos políticos. Recordando a Gerardo García Díaz, Aladín Ríos Manzano, Libardo Schwarzenski, Juan Mario Fuentes, Luis Valeria Candía, Sergio Ferreira Zapata, Lorenzo Octavio Olave Pineda. Preguntado dice que vio detenidos en la guardia de la unidad, cuando le correspondió cumplir funciones en ese lugar. Por lo general, él hacía de guardia en la casa del coronel Iturriaga.

A.86. José Sebastián Venegas Umanzor (19 años a la época de los hechos). **En declaración judicial** de fecha 7 de diciembre de 2009, rolante de **fs. 1.448 a fs. 1.449 (Tomo V)**, proclama que sabe por comentarios que los detenidos eran torturados al interior de la sala de conferencias, que era una oficina ubicada entre la cuadra de plana mayor y la de morteros. Que también se comentaba que el teniente Jaime García Covarrubias era uno de los oficiales que tenían que ver con los detenidos. En cuanto a los conscriptos que ayudaban a los oficiales y suboficiales con los detenidos, solo recuerda a Libardo Schwarzenski, quien dice que era regalón de los superiores y, según se enteró más tarde cumplió labores en inteligencia. Cuenta lo sucedido con un familiar.

A.87. Libardo Hernán Schwartenski Rubio (19 de edad a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 1.450 a fs. 1.453 (Tomo V), de fs. 1.463 a fs. 1.464 (Tomo V), de fs. 1.467 (Tomo V), de fs. 1.469 (Tomo V), de fs. 1.740 a fs. 1.741 (Tomo V), de fs. 1.784 a fs. 1.785 (Tomo VI), de fs. 1.813 a fs. 1.814 (Tomo VI), de fs. 1.815 a fs. 1.816 (Tomo VI), de fs. 1.860 (Tomo VI), de fs. 3.633 a fs. 3.634 (Tomo X), de fs. 3.829 (Tomo XI), de fs. 3.830 a fs. 3.831 (Tomo XI), de fs. 3.832 a fs. 3.833 (Tomo XI), de fs. 3.834 a fs. 3.835 (Tomo XI) y de fs. 3.836 (Tomo XI).

En declaración extrajudicial de fecha 5 de enero de 2010, rolante de **fs. 1.450 a fs. 1.453 (Tomo V)**, refiere en lo adecuado que ingreso al regimiento

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Tucapel el 15 de enero de 1973, tres meses después fue seleccionado por el teniente Rubio Balladares para formar parte de una sección denominada “montada” que se encuadro en la **compañía de plana mayor**, recordando como integrantes de esta sección a Juvenal Lagos Osses, Pedro. Ortega Giraldi y José Raúl Inzunza Reyes, Sergio Ferreira y Luis Valeria Candía, entre otros. Después del 11 de septiembre de 1973, le correspondió efectuar turnos de guardia que generalmente eran cumplidos en la puerta de acceso al regimiento y en el sector de la línea férrea, detrás de la unidad. Aduce que no le correspondió efectuar patrullajes, ni detener personas o allanar domicilios. Que vio detenidos al interior del regimiento Tucapel después del 11 de septiembre de 1973, quienes eran mantenidos en algunas cuadras de las compañías de cazadores y plana mayor. Que quien estaba a cargo de los detenidos era el capitán Nelson Ubilla Toledo, siendo sus colaboradores directos el teniente Espinoza, los sargentos Moreno, Schonherr y Arias. Además, había un grupo de detectives entre los que recuerda a Carlos Luco Astroza y Hernán Quiroz Barra. Que no le correspondió participar en interrogatorios o torturas de los detenidos. Tampoco trasladar detenidos al interior del regimiento. Consultado dice que algunos de los conscriptos que estaban en la enfermería eran requeridos por los oficiales y suboficiales antes mencionados para que los ayudaran con los detenidos. Recordando el nombre de Pío Seco como uno de ellos. Se le pregunta por otros hechos y en lo pertinente el Tribunal le lee la declaración de fs.701 (de otros autos). El deponente señala: que no es efectivo que tuviera algo que ver con los detenidos, como tampoco sabe que Valeria participara de estas actividades. Se le leen otras declaraciones de otros procesos que dicen relación con la llamada “patrulla brava”. Negando haber integrado dicha patrulla, así también dice que jamás participó en actividades con detenidos.

En declaración extrajudicial de fecha 14 de enero de 2010, rolante de **fs. 1.463 a fs. 1.464 (Tomo V)**, narra que para el año 1973 y posterior a la restructuración del regimiento fue encuadrado en la **compañía de plana mayor y servicios**, la que se encontraba al mando del entonces capitán Nelson Ubilla Toledo, a quien recuerda como el encargado del servicio de inteligencia militar. En lo relativo a las personas que ingresaban en calidad de detenidas al cuartel este oficial era quien estaba a cargo. Recordando haber visto personas en esta calidad en la unidad militar. Sobre la existencia de un grupo encargado de la entrevista de los prisioneros políticos, recuerda que este lo integraban el capitán Ubilla, los

sargentos Orlando Moreno Vásquez y Raúl Schonherr Frías, además del sargento Mario Arias Díaz. Que también pertenecían a este grupo los detectives Carlos Luco Astroza y Hernán Quiroz Barra sin dejar de mencionar al fallecido teniente Hugo Espinoza Ponce. Que mientras permaneció en el regimiento Tucapel, le correspondió hacer guardia, no siendo efectivo que estuviese exento de tales servicios. Cuenta que trabajó en labores administrativas en la oficina del capitán Nelson Ubilla y el sargento primero Quilodrán. Se le pregunta por otros hechos y luego dice que con relación a que algunos conscriptos de la enfermería del cuartel eran requeridos en oportunidades por el grupo que trabajaba con los prisioneros o detenidos, esto lo señaló porque en alguna oportunidad vio alguno de estos hombres solicitar la colaboración de la enfermería para asistir a los detenidos quienes eran interrogados en distintos lugares del regimiento, sin precisar un lugar específico. Niega haber participado en interrogaciones a persona detenidas al interior del regimiento y que tampoco le correspondió el traslado fuera de esa unidad, ni al sector de isla Cautín.

En declaración judicial de fecha 27 de marzo de 2010, rolante de **fs. 1.467 (Tomo V)** (cuya copia consta a fs. 3.829 Tomo XI), ratifica declaración extrajudicial de fs. 1.029 a fs. 1.030, la que consta en estos autos a fs. 1.463 a fs. 1.464 (Tomo V) y suma que el sargento Arias Díaz pertenecía a la plana mayor y servicios. A su parecer se integró a la sección segunda después del golpe de militar, pues lo veía junto a Schonherr, Moreno Vásquez y el capitán Ubilla participando en el grupo que se ocupaba de los detenidos para su interrogatorio.

En diligencia de careo con Mario Hernán Arias Díaz, de fecha 27 de marzo de 2010, rolante de **fs. 1.469 (Tomo V)**, ratifica sus declaraciones de fs. 1.029 a fs. 1.030, de fs. 932 y fs. 1.071. Las que constan en estos autos a fs. 1.463 a fs. 1.464; de fs. 1.450 a fs. 1.453 y la de 1.467 todas del Tomo V, respectivamente. Reconoce a la persona con quien se le carea como el sargento Mario Hernán Arias Díaz de quien ha hecho referencias. Marca que varias veces fue llamado para efectuar trabajos administrativos en la compañía de plana mayor, como escribir a máquina, pero que jamás participó en los interrogatorios de detenidos. Se mantiene en sus dichos.

En declaración extrajudicial de fecha 8 de noviembre de 2012, rolante de **fs. 1.740 a fs. 1.741 (Tomo V)**, en lo oportuno insiste que para 1973 se encontraba encuadrado en la **compañía de plana mayor y servicios**, al mando

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

del capitán Nelson Ubilla Toledo. En cuanto a la existencia de un grupo encargado de los interrogatorios de los prisioneros políticos, indica que recuerda que este lo integraban el capitán Ubilla, el teniente Jaime García Covarrubias, apodado “el yango”, el subteniente Romilio Lavín, los sargentos Orlando Moreno Vásquez y Raúl Schonherr Frías, además del sargento Mario Arias Díaz, los cuales realizaban su labor en una sala de interrogatorios habilitada en la cuadra de la compañía de plana mayor y servicios, donde era recurrente observar los detenidos que ingresaban a esa sala, los cuales se sabía que eran torturados. De la misma forma, existía un grupo de detectives que estaba integrado por Carlos Luco Astroza y Hernán Quiroz Barra, quienes efectuaban interrogatorios, los que en más de una vez presencié en oportunidades en que debía entregarles documentación, como eran torturados los detenidos. Menciona como otro interrogador al fallecido teniente Manuel Espinoza Ponce. En cuanto a las condiciones en las que observé a las personas cuando estaban siendo torturadas, señala que estas se encontraban desnudas, con la vista vendada y sobre un somier metálico, junto a sus torturadores que eran los detectives Quiroz y Morales, quienes eran acompañados en muchas oportunidades por el sargento Mario Arias Díaz. Se le interroga respecto de los detenidos asesinados por ley de fuga, lo que dice desconocer, agregando otros comentarios.

En declaración judicial de fecha 25 de junio de 2013, rolante de **fs. 1.784 a fs. 1.785 (Tomo VI)**, (cuya copia consta de fs. 3.830 a fs. 3.831 Tomo XI), ratifica declaraciones y en lo tangente recuerda al teniente Jaime García Covarrubias y a su hermano Raimundo. Dice que estos oficiales siempre andaban juntos. En una oportunidad pudo ver al teniente Jaime García y al subteniente Raimundo García al interior de la sala donde se torturaban personas en la compañía de plana mayor y servicios. En esos momentos había una persona desnuda y con su vista vendada, tendida sobre un somier. También estaban presentes los detectives Quiroz y Morales. En cuanto al subteniente Lavín puede indicar que éste era uno de sus jefes en la compañía de plana mayor y servicios y pudo verlo entrar en más de una ocasión a la sala donde se interrogaba y torturaba personas. No puede asegurar que éste participó en torturas, pero por lo menos sabía lo que allí pasaba y debió haber presenciado alguna sesión de estas. Se le pregunta por el punto N°1 del bando N°9 de fecha 5 de octubre de 1973 y el recorte de prensa del Diario Austral del día 4 de octubre de 1973, los cuales se le

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

leen. A lo que señala que los hechos allí narrados no le resultan verosímiles, por cuanto resulta difícil de creer que un detenido haya intentado fugarse del regimiento. Cree que las personas mencionadas, en el bando; Pedro Ríos Castillo y Guido Troncoso Pérez más los mencionados en el diario Mateluna y Ortigosa, fueron ejecutados por el grupo de inteligencia o se “murieron durante los interrogatorios y tortura”. Que de los hechos ocurridos en el regimiento con relación a los detenidos lo sabían todos los oficiales, por lo menos el comandante Iturriaga, el segundo comandante Jofré y el ayudante Jaime García Covarrubias, además de todos los oficiales involucrados en los interrogatorios y torturas. Respecto de Alfonso Podlech Michaud, refiere que tiempo después se enteró que éste era el fiscal en el regimiento Tucapel, pero no lo vio mientras estuvo en ese lugar. Hace presente que a principios de octubre se fue a Santiago a efectuar curso de inteligencia en las Rocas de Santo Domingo. El Tribunal le lee en lo pertinente la declaración de José Raúl Inzunza Reyes, de fs. 3.310. El deponente señala: que recuerda a José Inzunza quien al igual que él, ayudaban al capitán Ubilla, pero no siendo efectivo que él hubiese participado en interrogatorios ni menos en torturas. Preguntado acota que a Jaime García Covarrubias le decían "El Yango" porque siempre andaban con armas al cinto y era “muy loco, como el personaje de las películas de Far west”. Además, le gustaban los caballos. El Tribunal le exhibe la fotografía rolante a fs. 57 de la causa rol 114.003 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco. El deponente señala: que dé pie y de izquierda a derecha reconoce al capitán Nelson Ubilla Toledo, al comandante Pablo Iturriaga Marchesse y al último de la derecha como Jaime García Covarrubias. Sentado, al centro, reconoce al general Pinochet.

En diligencia de careo con José Raúl Inzunza Reyes, de fecha 5 de julio de 2013, rolante de **fs. 1.813 a fs. 1.814 (Tomo VI)** (cuya copa consta de fs. 3.832 a fs. 3.833 Tomo XI), ratifica declaración de fs. 3.445 a fs. 3.446 las que constan en estos autos de fs. 1.784 a fs. 1.785 (Tomo VI), reconoce a la persona con quien se le carea como José Raúl Inzunza Reyes, quien al igual que él era conscripto en el regimiento Tucapel. En lo adecuado dice que efectivamente pudo haber presenciado algunos interrogatorios cuando ingresaba a la sala donde estos se llevaban a cabo para dejar la documentación, pero jamás interrogó a nadie, ni participó en las torturas. Suma que recuerda haber visto entrar a la sala de interrogatorios al cabo Salgado Goyeneche, que era de la compañía andina y

también estaba a cargo del material de guerra, trabajando junto al teniente Lavín. Que también vio ingresar frecuentemente a Jaime García Covarrubias y a Raimundo García Covarrubias. Sin embargo, era común que todos los oficiales fueran a mirar de vez en cuando, porque la novedad. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo con Hernán Raúl Quiroz Barra, de fecha 5 de julio de 2013, rolante de **fs. 1.815 a fs. 1.816 (Tomo VI)** (cuya copia consta de fs. 3.834 a fs. 3.835 Tomo XI), ratifica declaración de fs. 3.445 a fs. 3.446 las que constan en estos autos de fs. 1.784 a fs. 1.785 (Tomo VI) (cuya copia consta de fs. 3.633 a fs. 3.634 Tomo X), reconoce a la persona con quien se le carea como Hernán Raúl Quiroz Barra, a quien vio en la sala donde se torturaba e interrogaba detenidos. Sin embargo, en ese momento no recuerda que este particularmente haya estado torturando a estas personas, pero sí estaba en el grupo. Que solo trabajaba para el capitán Nelson Ubilla y no para la Fiscalía Militar. Nunca llevó documentación hacia la comandancia ni a la fiscalía, sino que solo entregó estas a los detectives cuando estaban en la sala ubicada en la compañía de plana mayor. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo con Jaime García Covarrubias, de fecha 4 de octubre de 2013, rolante de **fs. 1.860 (Tomo VI)** (cuya copia consta a fs. 3.836 Tomo XI), ratifica declaraciones que rolan en otros autos y en lo pertinente la de fs. 3.446 que consta de fs. 1.784 a fs. 1.785 (Tomo VI), reconoce a la persona con la cual se le carea como el teniente Jaime García Covarrubias de quien ha hecho referencias. Acota que se refiere a hechos que ocurrieron entre el 11 de septiembre y mediados de octubre de 1973, fecha que se fue a Santiago. Que su nombre lo dio posteriormente porque le preguntaron si conocía a otros oficiales a los que él hubiese visto en la sala donde se interrogaban y torturaba detenidos. Se mantiene en sus dichos.

A.88. Carlos Millar Gajardo (37 de edad a la época de los hechos). **En declaración judicial** de fecha 16 de marzo de 2010, rolante de **fs. 1.466 (Tomo V)**, afina en lo pertinente ratifica declaración y en lo propicio que debe aclarar que el ayudante del comandante Iturriaga era Jaime García Covarrubias y no Raimundo García. Que vio detenidos al interior del regimiento Tucapel, los que eran llevados a unas dependencias que estaban ubicadas en la compañía de plana mayor. Allí quedaban a cargo del capitán Ubilla y de algunos civiles cuyos

nombres desconoce, pero a su parecer eran de carabineros, investigaciones y de la aviación. Alude a otros hechos.

A.89. Juan Bautista Labraña Luvecce (27 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 1.472 a fs. 1.473 (Tomo V), de fs. 1.478 a fs. 1.479 (Tomo V), de fs. 1.558 a fs. 1.560 (Tomo V), de fs. 1.561 a fs. 1.562 (Tomo V), de fs. 1.609 a fs. 1.610 (Tomo V), de fs. 1.642 a fs. 1.643 (Tomo V), de fs. 1.645 (Tomo V), de fs. 1.646 (Tomo V), de fs. 1.652 (Tomo V), de fs. 3.579 (Tomo X), de fs. 3.603 (Tomo X).

En declaración extrajudicial de fecha 23 de marzo de 2010, rolante de **fs. 1.472 a fs. 1.473 (Tomo V)**, arguyo que para el año 1973 y hasta fines de ese año permaneció en el regimiento de Infantería N°8 Tucapel de Temuco. Ostentaba el grado de cabo primero y pertenecía a la segunda compañía de cazadores, cuyo comandante era el teniente Manuel Vásquez Chahuán. Su sección dentro de la compañía era la cuarta. También denominada "Armas de Apoyo" cuyo oficial a cargo era Manuel Espinoza Ponce (fallecido). Que efectivamente fue la compañía de plana mayor y logística, la que se encargó desde el mes de septiembre hasta fines del mismo año de efectuar los servicios de guardia de la unidad militar. Dicha compañía, se encontraba a cargo del por entonces capitán Nelson Ubilla Toledo, quien era el oficial a cargo de la inteligencia del regimiento o "sección segunda". Narra que su compañía luego del 11 de septiembre de 1973 fue designada para efectuar los controles de toque de queda en la población, para lo cual se formaban patrullas a cargo de suboficiales, que eran integradas en su totalidad por personal de la misma compañía. Dice que en el mes de octubre de 1973 integró una patrulla a cargo del teniente Manuel Vásquez Chahuán, con quien se dirigieron vía aérea en helicóptero de la base aérea Maquehue, hasta la localidad de Cunco, prosigue sus dichos en ese sentido. En cuanto al teniente Hugo Espinoza Ponce, puede señalar que efectivamente pertenecía al grupo de confianza de la unidad militar que trabajaba los temas de inteligencia y por ende lo relativo a los prisioneros del cuartel dentro de los conscriptos cercanos a este oficial y que eran de su sección estaban: Manuel Campos Ceballos, Manuel Canales Valdés, Héctor Villablanca Huenulao, Juan Carlos Concha Belmar y Sergio Vallejos Valdés. Que este grupo de conscriptos desarrollaba sus labores a parte de la compañía siempre acompañados del teniente ya referido. Sobre la sección segunda, que se encontraba bajo el mando de Nelson Ubilla Toledo, puede decir que recuerda al

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

sargento Orlando Moreno Vásquez, Raúl Schonner Frías, Luís Barrenechea Calderón cabo primero, Luís Campos Espinoza y Roberto Astete Cea. Además, dentro de este grupo se encontraban los oficiales Jaime y Raimundo García Covarrubias. Se le interroga por otros hechos.

En declaración judicial de fecha 12 de mayo de 2010, rolante de **fs. 1.478 a fs. 1.479 (Tomo V)**, ratifica declaración extrajudicial de fs. 1.109 a fs. 1.120 las que constan en este proceso a fs. 1.472 a fs. 1.475 (Tomo V), en lo pertinente decanta que los detenidos eran mantenidos en el gimnasio del regimiento y el acceso a ese lugar estaba restringido. Solo concurrían allí los miembros de la sección segunda, quienes vestían de civil. Además, concurrían a ver a los detenidos los oficiales Vásquez Chahuán, Espinoza Ponce y los hermanos García Covarrubias, quienes trabajaban en la comandancia del regimiento.

En declaración judicial de fecha 5 de agosto de 2010, rolante de **fs. 1.558 a fs. 1.560 (Tomo V)**, ratifica declaración extrajudicial de fs. 1.109 a fs. 1.120 las que constan en este proceso a fs. 1.472 a fs. 1.475 (Tomo V), el Tribunal le lee la declaración de fs. 1.237. El deponente señala: No es efectivo que tuviera algo que ver con los detenidos. Estos estaban a cargo del personal de la sección segunda, entre los que recuerda los clases Orlando Moreno Vásquez, Luis Campos Espinoza, Roberto Astete Cea y Luis Barrenechea. Que también estuvieron como comandantes de esta sección el capitán Vásquez Chahuán y el teniente Jaime García Covarrubias, ambos por períodos breves. Esto lo sabe porque fue anunciado en alguna orden del día, independientemente de que estuvieran ejerciendo el cargo de comandante de la sección segunda o de alguna compañía del regimiento, estos oficiales constantemente estaban relacionándose con los detenidos, pero desconoce qué actividades realizaban con ellos, pues no tenía acceso a esa información. Se le pregunta por otros antecedentes y otros hechos los que desarrolla.

En diligencia de careo con Manuel Abraham Vásquez Chahuán, de fecha 5 de agosto de 2010, rolante de fs. 1.561 a fs. 1.562 (Tomo V), ratifica declaración judicial de fs. 1.404 a fs. 1.406 la que consta en estos autos de fs. 1.558 a fs. 1.560 (Tomo V), y en lo oportuno manifestó que la persona sentada a su lado es el teniente Manuel Abraham Vásquez Chahuán de quien ha hecho referencia. Insiste que el señor Vásquez integró la sección segunda y tuvo relación directa con los

detenidos que estaban al interior del regimiento Tucapel. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo con Jaime García Covarrubias, de fecha 22 de septiembre de 2010, rolante de **fs. 1.609 a fs. 1.610 (Tomo V)**, arguye que ratifica su declaración y en lo pertinente reconoce a la persona con quien se le carea como el teniente Jaime García Covarrubias de quien ha hecho referencia y que tenía participación en la sección segunda de inteligencia. Aunque nunca vio al señor García al interior de la oficina de la sección segunda presume que sabía todo lo que allí ocurría, puesto que en su calidad de ayudante del regimiento debía informar a su superior de todo lo que ocurría allí. Preguntado dice que no vio al teniente García Covarrubias relacionarse con los detenidos, pero presume que pudo haberlo hecho dada su cercanía con los integrantes de la sección segunda, que sí tenían que ver con ellos. Se mantiene en sus dichos.

En declaración extrajudicial de fecha 14 de abril de 2011, rolante de **fs. 1.642 a fs. 1.643 (Tomo V)**, reitera que la sección segunda que se encontraba bajo el mando del capitán Nelson Ubilla Toledo (fallecido), era integrada por los sargentos Orlando Moreno Vásquez y Raúl Schonner Frías además del cabo primero Luís Barrenechea Calderón. Que también, le es preciso señalar que el teniente Manuel Vásquez Chahuán a veces era requerido por esta sección, cuando se debía concurrir en comisión de servicio a otras localidades de la región, como lo fue la ocasión en que lo acompañó a Cunco lugar donde éste se encargó de interrogar personas detenidas en el cuartel de Carabineros de esa localidad. Que es efectivo que los detenidos que llegaban al regimiento eran llevados hasta el gimnasio. Lugar donde eran custodiados por los conscriptos de la compañía que estuviera cumpliendo servicios de guardia. Por otra parte, también le es preciso señalar que los únicos que podían ingresar a dicha dependencia eran los oficiales y funcionarios del cuadro permanente que cumplían funciones en la sección segunda, recordando entre estos al teniente Manuel Vásquez Chahuán, Manuel Hugo Espinoza Ponce, los hermanos Jaime y Raimundo Garcia Covarrubias, quienes también tenían el grado de teniente. Pero deja en claro que, si un funcionario no estaba autorizado por la gente de la sección, no podía ingresar a este lugar, ya que arriesgaba ser sancionado y puesto en duda su lealtad. En cuanto al teniente Espinoza dice que era cercano a él y que este oficial salía de patrullaje solamente cuando se encontraba de servicio junto a su “patrulla salvaje”,

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

integrada entre otros por los conscriptos Sergio Vallejos Garcés y Héctor Villablanca Huenulao, representa a otra situación.

En declaración judicial de fecha 15 de abril de 2011, rolante de **fs. 1.645 (Tomo V)**, viene en ratificar declaración extrajudicial.

En diligencia de careo con Sergio Orlando Vallejos Garcés, de fecha 18 de mayo de 2011, rolante de **fs. 1.646 (Tomo V)** (cuya copia consta a fs. 3.579 Tomo X), apoya en lo adecuado que no integró la "Patrulla chacal", y se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo con Gabriel Alfonso Dittus Marín, de fecha 19 de mayo de 2011, rolante de **fs. 1.652 (Tomo V)** (cuya copia consta a fs. 3.603 Tomo X), no recuerda que el señor Dittus haya integrado la "Patrulla chacal", se mantiene en sus dichos.

A.90. Carlos Samuel Bobadilla Ojeda (25 años a la época de los hechos). **En declaración judicial** de fecha 12 de mayo de 2010, rolante de fs. 1.480 (Tomo V), enuncio en lo atinente que vio detenidos al interior del regimiento Tucapel, quienes eran mantenidos en el gimnasio del regimiento y en una dependencia ubicada entre las compañías de plana mayor y la de morteros. El acceso a esos lugares estaba restringido, solo concurrían allí los miembros de la sección segunda, entre los que recuerda a los sargentos Moreno Schonherr. Que además concurrían a ver los detenidos los oficiales Vásquez Chahuán, Espinoza Ponce y en alguna oportunidad vio al teniente Uribe Morini transitar hacia ese sector.

A.91. Francisco Hueche Human (18 años para la época de los hechos). Quien declaró de fs. 1.484 a fs. 1.485 (Tomo V), de fs. 1.489 (Tomo V) y de fs. 1.552 (Tomo V).

En declaración extrajudicial de fecha 03 de junio de 2010, rolante a de **fs. 1.484 a fs. 1.485 (Tomo V)**, relató que para el año 1973 tenía la edad de 18 años, en el mes de abril de 1973 ingresó al regimiento de Infantería N° 8 Tucapel de Temuco a cumplir con su servicio militar obligatorio, quedando en la compañía de cazadores donde se encontraba el teniente Manuel Espinoza Ponce, a quien le decían "El Loco Espinoza". Agrega que pertenecía a la primera sección, a cargo del sargento primero Isaías Rubilar Alarcón y que el comandante de su compañía era el teniente Manuel Vásquez Chahuán, quien siempre se hacía acompañar del clase de su compañía de nombre Juan Bautista Labraña Luvecce y los

conscriptos, también de su compañía, Héctor Villablanca Huenulao, Sergio Vallejos Garcés. Ricardo Vásquez Estrada y Juan Carlos Concha Belmar. Alude que la noche del 11 de septiembre de 1973 le tocó hacer servicio de guardia en una garita que estaba cerca de la línea del tren, la cual pasaba por detrás del regimiento camino a la isla Cautín, sin compañía alguna, garita que era nombrada como "la garita tres", cuando alrededor de las once y media de la noche, llegó un camión militar de la unidad, al polígono, distante a unos doscientos metros de donde él se encontraba apostado, había luna clara y se veía. Sabe que andaban ese grupo oficiales y clases del Tucapel, sin que pueda recordar quienes eran, pero rememora que bajaron de la parte trasera del camión a un grupo de once personas en total, a quienes pusieron en fila y los fusilaron en el polígono. Luego de esto se retiraron en el camión, dejando en el lugar los cuerpos sin vida. Añade que vio cadáveres junto a Sebastián Quintana Benavente, conscripto de su compañía, quien le fue a hacer el relevo de su puesto; los muertos eran todos hombres de distintos portes y edades, estaban todos vestidos, no reconoció a nadie. Horas más tarde, nuevamente de turno en la "Garita N°3", cerca de las cinco de la madrugada, llegó al mismo polígono el teniente Espinoza Ponce acompañado de los conscriptos Vallejos y Villablanca, no recuerda si alguien más, momentos en que bajaron a un hombre a quien amarraron a un fierro que estaba por sobre los postes de madera que se encontraban enterrados en fila en el polígono, persona que quedó colgando amarrado y Espinoza procedió a dispararle, dejando también en el lugar el cadáver de este otro asesinado. Respecto a los cuerpos antes señalados, indica que eran conscriptos de la sección del teniente Espinoza Ponce, quienes se encargaban de enterrar en la misma isla Cautín por orden de éste a los fusilados, y que deben ser ellos los que pueden decir que pasó con los cuerpos que vio y otros tanto que allí fueron dejados. Arguye que es cierto que todo lo relativo a las ejecuciones de prisioneros dentro del regimiento Tucapel se hacía de noche, en el sector de la isla Cautín donde está el polígono. También es efectivo que era el teniente Espinoza; quien generalmente salía de la unidad con su patrulla hacia el lugar ya referido, con la finalidad de ejecutar a personas que estaban detenidos en el cuartel. Se le preguntan por otros hechos y respecto de las fotografías que se le exhiben, señala que ni los nombres que se le indican, ni las fotografías que le son mostradas, le resultan conocidas como prisioneros de regimiento para el año 1973.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

En declaración judicial de fecha 29 de junio de 2010, rolante de **fs. 1.489 (Tomo V)**, ratifica declaración extrajudicial rolante de fs. 1.178 a fs. 1.179, la que consta en estos autos de fs. 1.484 a fs. 1.485 (Tomo V), soflama que el teniente Espinoza tenía un grupo de diez conscriptos con quienes salina constantemente, entre los que recuerda a Vallejos y Villablanca. Expresa estar seguro de que lo vio aquella noche mientras efectuaba su turno de guardia en la garita tres. Que hubo muchos detenidos al interior del regimiento Tucapel, alguno de los cuales permanecían en el rancho de los suboficiales. En algunas oportunidades dice que les dio pan a algunos que eran de ascendencia mapuche.

En declaración judicial de fecha 04 de agosto de 2010, rolante de **fs. 1.552 (Tomo V)**, ratifica su declaración extrajudicial rolante de fs. 1.178 a fs. 1.179, la que consta en estos autos de fs. 1.484 a fs. 1.485 (Tomo V) y la de fs. 1.201 que consta a fs. 1.489 de estos autos. Anexa que el teniente Espinoza siempre salía con un grupo de conscriptos entre los que recuerda a Vallejos, Villablanca y Concha Belmar. Que vio varios detenidos en el gimnasio de regimiento Tucapel. Rememora que el teniente Espinoza entraba al gimnasio para ver a los detenidos.

A.92. Omar Burgos Dejean (26 años para la época de los hechos). Quien declaró de fs. 1.486 a fs. 1.488 (Tomo V), de fs. 1.615 a fs. 1.616 (Tomo V) y de fs. 1.699 a fs. 1.700 (Tomo V)

En declaración judicial de fecha 21 de junio de 2007, rolante de **fs. 1.486 a fs. 1.488 (Tomo V)** argumenta que ratifica íntegramente las declaraciones que rolan de fs. 168 a fs. 167 de otros hechos y destaca en lo pertinente que en noviembre de 1973 fue destinado al regimiento Tucapel como agregado a hacer un archivo político a disposición del capitán Nelson Ubilla; además señala que cuando prestó dichas funciones le correspondió ver al capitán Callis entrevistarse con Ubilla. Precisa que antes del golpe militar él se desempeñaba en la comisión civil junto con Fritz Vega, pero que antes del 11 de septiembre se encontraba enfermo de una gripe, razón por la cual recién el trece fue llamado a acuartelarse, luego de ello y como comisión civil le correspondió detener a unas personas las cuales fueron trasladadas hasta el regimiento, y en dicho lugar inventaron un enfrentamiento y les dieron muerte a estos detenidos, pero que el nada tiene que ver con esos hechos. Precisa que el SICAR sólo comenzó a funcionar en el año 1974. Además, que, entre el once y treinta de septiembre como comisión civil, les

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

correspondió cumplir órdenes emanadas desde la fiscalía militar, fiscal "Polvich". Se le preguntan por otros hechos y en lo adecuado en la declaración se procede a interrogar al testigo por la abogada Magdalena Garcés dejando constancia que todas las preguntas se formulan en el periodo de comprendido entre el 11 de septiembre y 30 del mismo mes. Textualmente se le pregunta "Para que diga si le correspondió como integrante de la comisión civil detener a personas por motivos políticos. Respondiendo el testigo: por órdenes de la fiscalía. Luego le consultan ¿Quiénes interrogaban a los detenidos políticos dentro de la 2° Comisaria? A lo que indica: Fritz, Riquelme, quien a veces salía con la comisión civil, pero señala que no era un interrogatorio con torturas, ya que nunca se empleó la fuerza con los detenidos, sino que simplemente se limitaban a preguntar datos personales, así como militancia política. Luego se le consulta: en caso de que la militancia fuera del MIR, partido comunista o partido socialista. Respondiendo que eran puestos a disposición de la Fiscalía Militar o de carabineros, según de quien daba la orden de detención, y algunos eran llevados al regimiento, pero todas con orden policial. Luego se le consulta "Para que diga si personalmente le correspondió trasladar detenidos desde la 2° Comisaria hasta el Regimiento Tucapel o base Aérea Maquehue", el testigo responde que: efectivamente le tocó trasladar detenidos hasta el regimiento Tucapel, en la guardia mediante un documento que era firmado por el personal militar. Agrega que dichos traslados los efectuaban en una camioneta roja, y siempre en compañía de Fritz, quien iba a cargo. A continuación, se le consulta respecto a quien era el jefe de la comisión civil. Respondiendo que: en esa época era Fritz, como suboficial, y los servicios dependían del subcomisario. Se le pregunta por otros sucesos. Luego es interrogado por el abogado Sergio Concha Rodríguez "Para que diga el testigo si tiene conocimiento de detenidos políticos sacados desde (...) con destino desconocido". Respondiendo que: (...) puede agregar que había comentarios del capitán Callis, relativos a que (...) apodado el carnicero, y debe ser porque mataba gente o algo así. Se le señala al deponente que precise sus dichos, pero se mantiene en hecho. Se le consulta por otras situaciones.

En declaración judicial de fecha 12 de octubre de 2010, rolante de **fs. 1.615 a fs. 1.616 (Tomo V)**, narra en lo oportuno que efectivamente estuvo agregado al regimiento Tucapel desde principios de octubre de 1973 hasta los primeros días de marzo de 1974, bajo las órdenes del capitán Nelson Ubilla

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Toledo, quien le encargó diversas tareas, tales como dar salvoconductos, revisar antecedentes de personas que supuestamente estaban postulando a algún cargo. El Tribunal le pregunta si le correspondió tomar declaraciones o detener personas en su estadía en el regimiento. El declarante responde que no, que sólo se dedicó a hacer archivo y entregar salvoconductos. Que su horario de trabajo era de lunes a sábado de desde las 09:00 horas hasta las 18:00 horas. Que trabajó con dos conscriptos en el regimiento Tucapel, de apellidos Jaque y Cid. El Tribunal le lee lo pertinente la declaración rolante a fs. 1.293 y que el declarante prestó ante el ministro Solís en junio de 2007 en otros autos. El deponente señala que efectivamente era comentario generalizado que lo del supuesto asalto al polvorín fue un montaje, ya que las personas que resultaron fallecidas en ese hecho estaban detenidas en el regimiento Tucapel. Le consta porque, al menos a dos de ellas, le correspondió detenerlas, es decir, a una persona de apellido Chávez y a otra a quien le faltaba un brazo. Que esa orden emanó de la Fiscalía Militar y le correspondió cumplirla junto al sargento Fritz, entregando a los detenidos en la guardia del regimiento Tucapel. Que es imposible que esos detenidos hubiesen burlado la seguridad que había en el recinto militar. Desconoce quiénes estaban a cargo de los detenidos, que jamás se relacionó con ellos. No tenía acceso al lugar donde estos estaban. Recuerda haber visto a los detectives Quiroz y Luco agregados al regimiento, quienes practicaban detenciones junto con el sargento Moreno Vásquez. Sin embargo, no sabe si ellos practicaban interrogatorios.

En declaración extrajudicial prestada con fecha 18 de abril de 2012, rolante de **fs. 1.699 a fs. 1.700 (Tomo V)**, afirma en lo adecuado respecto a su calidad de agregado al regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco, señala que esta se concretó los primeros días del mes de octubre de 1973. El día que llegó, se tuvo que presentar con el capitán Nelson Ubilla Toledo, quien dispuso que él se hiciera cargo de confeccionar un archivo político. Recuerda, que se le otorgó una oficina, la cual estaba llena de papeles, con datos de personas que habían pertenecido a instituciones públicas y de partidos políticos. Recuerda que el capitán Ubilla le ordenó confeccionar ficha de cada una de las personas que indicaban los papeles que allí se encontraban, recordando que tuvo que clasificar la información de acuerdo con la tendencia política que cada una de estas personas registraba en dichos documentos. Para estos efectos, se le asignó como compañeros de labores un conscripto de apellido Cid. En relación con el grupo de

detectives que operaba al interior del regimiento recuerda solamente a los de apellidos Quiroz y Luco. Alude que no había personal de la fuerza aérea agregado al regimiento. Que a pesar de que estaba agregado al regimiento Tucapel, en más de una oportunidad salió a efectuar detenciones emanadas de la Fiscalía Militar, en esas oportunidades era requerido por el sargento de carabineros Juan Fritz Vega, a quien se le hacían llegar estas órdenes. En relación sobre su participación en interrogatorios al interior del regimiento Tucapel, reitera que nunca participó en interrogatorios a los detenidos que llegaban. Tampoco sabe si los detectives agregados al regimiento efectuaban estas labores. Respecto a los sargentos Schonherr y Moreno los recuerda trabajando en la sección segunda del regimiento, pero no los recuerda haber visto tomando declaraciones a los detenidos. Agrega que había un teniente de ejército de apellido Espinoza, de quien se comentaba que aplicaba muy malos tratos a los detenidos, pero esta situación no le consta ya que nunca lo vio en tales cometidos. Se le pregunta por otras víctimas y en lo atinente añade que nunca vio que sacaran cadáveres desde el interior del regimiento, a pesar de que en más de una oportunidad se emitían bandos militares que señalaban el fallecimiento de detenidos por la acción de los militares, argumentando que a estos detenidos se les aplicaba la llamada ley de fuga. Agrega que estuvo en calidad de agregado al regimiento Tucapel de Temuco hasta el mes de febrero o marzo del año 1974.

A.93. Sergio Orlando Vallejos Garcés (20 años para la fecha de los hechos investigados). Quien declaró de fs. 1.490 a fs. 1.492 (Tomo V), de fs. 1.524 a fs. 1.526 (Tomo V), de fs. 1.530 (Tomo V), de fs. 1.646 (Tomo V), de fs. 1.647 a fs. 1.648 (Tomo V) y de fs. 1.649 (Tomo V); de fs. 3.566 a fs. 3.567 (Tomo X), de fs. 3.571 a fs. 3.573 (Tomo X), de fs. 3.574 a fs. 3.576 (Tomo X), de fs. 3.577 (Tomo X), de fs. 3.578 (Tomo X), de fs. 3.579 (Tomo X), de fs. 3.580 a fs. 3.581 (Tomo X), de fs. 3.582 (Tomo X), de fs. 3.583 a fs. 3.584 (Tomo X).

En declaración extrajudicial de fecha 23 de junio de 2010, rolante a **fs. 1.490 a fs. 1.492 (Tomo V)** (cuya copia consta a fs. 3.571 a fs. 3.573 Tomo X), en lo apropiado dice que en el año 1973, estaba cumpliendo con su servicio militar obligatorio al regimiento de Infantería N° 8 Tucapel de Temuco, lugar donde se encontraba encuadrado en la cuarta sección de la segunda compañía de cazadores a cargo del teniente Manuel Vásquez Chahuán. Su sección se encontraba a cargo del subteniente Manuel Espinoza Ponce (fallecido). Como

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

instructor recuerda al cabo primero Juan Bautista Labraña Luvecce. Acota que su teniente Manuel Espinoza Ponce se entendía directamente con el comandante de compañía don Manuel Vásquez Chahuán en todo lo relativo a sus procedimientos de la sección y la patrulla “chacal”. Sobre la existencia de una patrulla denominada “la patrulla chacal” dice que aquella existía y estaba conformada por el subteniente Manuel Hugo Espinoza Ponce, a quien efectivamente apodaban “el loco Espinoza”, además de los conscriptos Héctor Villablanca Huenulao, Juan Carlos Concha Belmar y Gabriel Dittus Marín, que era de otra sección, pero de su compañía; enterando un grupo no superior a los diez soldados, sin que el clase Labraña Luvecce participará conforme a su recuerdo en esa patrulla. Refiere a los hechos ocurridos la noche del 10 de noviembre de 1973 y otro hecho ocurrido una noche del mes de septiembre de 1973, que mientras andaban de patrullaje con el teniente Espinoza Ponce en Temuco, controlaron a un infractor del toque de queda, a quien apodaban según el mismo “curro” o “curruco”. El teniente Espinoza, luego que aquel sujeto le propinara un golpe por tratar de detenerlo, decidió que lo llevaran a la “isla Cautín” del regimiento. Una vez que llegaron al lugar, le hizo a la patrulla formar en línea y proceder a dispararle a este hombre, quien cayó inmediatamente al suelo. Luego, el teniente Espinoza les hizo lanzar el cuerpo sin vida de este hombre al cauce del río Cautín que pasa por ese lugar.

En declaración judicial de fecha 22 de julio de 2010, rolante a **fs. 1.524 a fs. 1.526 (Tomo V)** (cuya copia consta de fs. 3.574 a fs. 3.576 Tomo X) ratifica su declaración extrajudicial rolante de fs. 1.207 a fs. 1.209 la que consta a fs. 1.491 a fs. 1.492 (Tomo V) de estos autos. Acota otros hechos y en lo tocante dice que los oficiales jefes de la segunda compañía de cazadores eran los tenientes Vásquez Chahuán y Espinoza Ponce. Entre ellos había una estrecha comunicación, ya que Espinoza Ponce le rendía cuenta de todas las actividades que se realizaban, tanto de instrucción como de patrullajes efectuados por “la patrulla chacal”. Que el teniente Espinoza recibía órdenes directas del teniente Vásquez cuando salían con “la patrulla chacal” y posteriormente le daba cuenta de sus acciones. Agrega que había conscriptos de otras secciones que pertenecían a la “patrulla chacal”, entre los que recuerda a Dittus y a Concha Belmar. También existía un teniente de confianza de Espinoza de apellido Schneider. Anexa que la “patrulla chacal” se formó inmediatamente después del 11 de septiembre de 1973 y fueron seleccionados personalmente por el teniente Espinoza, con la venia del teniente

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Vásquez, sin que se les hubiera preguntado algo. Patrulla que estaba conformada por un grupo de diez a doce conscriptos, pero salían en grupos de seis y ocho, alternándose. Los vehículos que utilizaban eran institucionales y particulares, no recordando marcas ni modelos. Respecto de los conductores de estos vehículos, no recuerda a personas determinadas. No recuerda que los tenientes Vásquez o Espinoza hubieran ordenado hacer un pacto de silencio acerca de estos temas. Reseña los hechos ocurridos la noche del 10 de noviembre de 1973 donde indica se le ordeno custodiar a los detenidos en el gimnasio ubicado a un costado del casino de suboficiales junto a tres o cuatro conscriptos, todos miembros de la “patrulla chacal”, recordando que cerca de las veintidós horas llegaron el teniente Espinoza y Vásquez junto a otras cinco o seis personas, oficiales entre ellos. Un camión se aculato frente a la puerta de gimnasio e inmediatamente el teniente Vásquez dijo “nos vamos” y les ordenó retirarse a la cuadra de la compañía. Que le comento al teniente Espinoza que a uno de los detenidos lo conocía, y este le respondió que todos iban a ser ejecutados porque eran políticos. Que la única ventaja de permanecer en la “patrulla chacal”, era el hecho de ser liberados de efectuar guardia.

En diligencia de careo con Manuel Abraham Vásquez Chahuán, de fecha 23 de julio de 2010, rolante a **fs. 1.530 (Tomo V)** (cuya copia consta de fs. 3.577 Tomo X), ratifica sus declaraciones extrajudiciales y en lo pertinente reconoce a la persona como el teniente Manuel Vásquez Chahuán, de quien ha hecho referencia. Que el teniente Manuel Vásquez Chahuán llegó junto al teniente Espinoza al lugar donde se encontraban los detenidos que el custodiaba. Aunque no presenció la ejecución de aquellas personas, le consta que eso ocurrió, porque el teniente Espinoza ante su consulta por la situación de Valenzuela Velásquez, le dijo que los detenidos iban a ser dados de baja por ser políticos. Respecto de Valenzuela Velásquez se enteró que estaba detenido justo en el momento en que le correspondió custodiarlo en el gimnasio que estaba ubicado a un costado del casino de conscriptos.

En diligencia de careo con Juan Labraña Luvecce, de fecha 18 de mayo de 2011, rolante a **fs. 1.646 (Tomo V)** (cuya copia consta a fs. 3.579 Tomo X), ratifica declaración y en lo pertinente agrega en lo pertinente que Juan Labraña Luvecce era instructor de su sección y una persona muy cercana al subteniente

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Espinoza Ponce. Que Labraña no formaba parte de la denominada “patrulla chacal”.

En diligencia de careo con Héctor Villablanca Huenulao, de fecha 18 de mayo de 2011, rolante a **fs. 1.647 a fs. 1.648 (Tomo V)** (cuya copia consta a fs. 3.566 a fs. 3.567 y a fs. 3.580 a fs. 3.581 Tomo X), ratifica declaración y en lo pertinente insiste que Villablanca estaba junto a él cuando llegaron los oficiales Espinoza y Vásquez al lugar donde se encontraban los detenidos, los cuales fueron retirados del lugar, prosigue su relato en relación a los hechos denominados el “asalto al polvorín”. Suma que los custodios a cargo de los detenidos eran miembros de la “patrulla chacal”, y en aquella oportunidad eran alrededor de cuatro o cinco soldados.

En declaración judicial de fecha 18 de mayo de 2011, rolante de **fs. 1.649 (Tomo V)** (cuya copia consta a fs. 3.582 Tomo X), el Tribunal le pregunta si Gabriel Dittus Marín integraba la denominada “patrulla chacal”: el deponente señala que si, porque fue uno de los seleccionados por el subteniente Espinoza para integrarla, correspondiéndole realizar patrullajes en compañía de éste.

En declaración judicial de fecha 8 de abril de 2011, rolante de fs. 3.578 (Tomo X), en lo atinente el Tribunal le lee declaración de Héctor Villablanca Huenulao de fs. 1.360 y refiere que no es efectivo lo declarado por éste en el sentido que no estuvo presente cuando llegaron los oficiales Vásquez y Espinoza a retirar los detenidos que estaban bajo su custodia. Que Villablanca tiene que conocer a los otros integrantes de la patrulla, ya que éste también formaba parte de ella.

En declaración judicial de fecha 5 de diciembre de 2011, rolante de **fs. 3.583 a fs. 3.584 (Tomo X)**, en lo adecuado afirma que aparte del subteniente Espinoza y del teniente Vásquez Chahuán, se imagina que el coronel del regimiento debería haber estado en conocimiento de la cantidad de detenidos y del destino de estos. Que al menos dos conscriptos de la “patrulla chacal” debieron estar junto con él, custodiando a los detenidos. Que puede que Dittus, Belmar y Villablanca Huenulao sean alguno de ellos, porque materialmente no podía estar solo en esa tarea dada la cantidad de personas que debían ser custodiadas. Se le pregunta por otros hechos a los que se ciñe.

A.94. Luis Humberto Llamunao Huaiquinao (19 años para la fecha de los hechos investigados). Quien declaró de fs. 1.493 a fs. 1.494 (Tomo V), de fs.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

1.537 a fs. 1.538 (Tomo V), de fs. 1.541 (Tomo V), de fs. 1.604 a fs. 1.605 (Tomo V) y de fs. 3.602 (Tomo X).

En declaración extrajudicial de fecha 12 de enero de 2010, rolante a **fs. 1.493 a fs. 1.494 (Tomo V)**, acota en lo pertinente que 11 de abril de 1973, a cumplir con su servicio militar obligatorio en el regimiento de Infantería N° 8 Tucapel de Temuco, siendo encuadrado en la segunda compañía de cazadores, al mando del capitán Manuel Vásquez Chahuán, siendo el comandante de la segunda sección, a la cual el pertenecía el sargento primero Isaías Rubilar Alarcón. Que el comandante de su sección no tenía una relación cercana con el subteniente Manuel Hugo Espinoza Ponce, a quien apodaban el "loco" debido a las características de la personalidad de este oficial. Que efectivamente existía un grupo cercano al subteniente Espinoza, que estaba constituido por algunos soldados conscriptos que él personalmente eligió de su sección, recordando principalmente los apellidos de Vallejos, Villablanca, Hueichaleo y Millanao, que en total eran doce. La escuadra la comandaba el conscripto Héctor Villablanca Huenulao, siendo Vallejos el tirador escogido de este grupo. Que también el subteniente Espinoza, junto a su grupo, la mayor parte del tiempo salía de patrullaje en las noches, en un camión marca Chevrolet, color celeste y con carrocería cerrada con madera y piso metálico. En relación con el conductor de este camión, cuenta que no era funcionario militar, lo recuerda como una persona civil, de unos treinta y cinco años, alto y de pelo cano. Agrega que el teniente Jaime García Covarrubias acompañaba en este camión al subteniente Espinoza, a quienes personalmente vio juntos en este cometido. Preguntado en cómo los vehículos de la unidad hacían para llegar al sector de la isla Cautín, refiere que para llegar se debía salir del regimiento por O'Higgins, tomar calle Prat, cruzar la línea férrea allí existente para ingresar al sector antes referido. Añade que por su parte pudo ver, estando de centinela en el regimiento, en más de una oportunidad al teniente Espinoza dirigirse de noche hacia este sector del cuartel. Que después del 11 de septiembre de 1973 no se efectuaban las prácticas de tiro en el polígono de la isla Cautín, lugar donde al común denominador de los conscriptos se les tenía prohibido concurrir. Tampoco se efectuó más instrucción militar en ese sector del regimiento y los ejercicios nocturnos, por razones obvias, se suspendieron. Se le interroga por otros hechos.

En declaración judicial de fecha 28 de julio de 2010, rolante de **fs. 1.537 a fs. 1.538 (Tomo V)**, ratifica su declaración extrajudicial prestada ante Policía de Investigaciones de Chile de fs. 1.234 a fs. 1.235, la que consta a fs. 1.493 a fs. 1.494 (Tomo V). Delibera que el subteniente Espinoza tenía una patrulla con la que siempre salía. Grupo que siempre era el mismo, pudiendo recordar a los conscriptos Carlos Huichaleo Calfileo, Vallejos, Villablanca, Segundo Millanao Alián, Antitur, Canales, Concha Belmar y Dittus como miembros de esta patrulla formada por el subteniente Espinoza. Que estos conscriptos eran sacados desde la tercera y cuarta secciones de la segunda compañía de cazadores. No recuerda quien era el comandante de la tercera sección de la segunda compañía de cazadores, aunque siempre veía a los sargentos Astete y Muñoz alternarse en esta tarea. Agrega que al subteniente Raimundo García no lo recuerda como oficial al mando de esa sección, aunque sí aparecía algunas veces, pero como oficial de ronda. Respecto de los sargentos Labraña y Bobadilla, señala que eran cercanos al subteniente Espinoza. En cuanto al conductor del camión que hace referencia en su declaración extrajudicial, aquel era un civil que siempre vestía con una chaqueta de cuero. El camión que conducía era un vehículo tres cuartos y no era institucional, sino particular, este móvil pasó a formar parte de la dotación de la cuarta sección. Comenta otras situaciones y en contexto dice que el grupo del subteniente Espinoza, dormían completamente armados y constantemente eran sacados por el oficial indicado durante las noches. A diferencia de ellos, el resto de la compañía tenía la obligación de entregar las armas en el almacén de guerra e incluso se les cobraba dinero por cada bala percutida que no estuviera autorizada.

En diligencia de careo con Gabriel Alfonso Dittus Marían, de fecha 28 de julio de 2010, rolante de **fs. 1.541 (Tomo V)** (cuya copia consta a fs. 3.602 Tomo X), ratifica íntegramente sus declaraciones extrajudicial y judicial prestadas en autos y que rolan de fs. 1.234 a fs. 1.235 la que consta a fs. 1.493 a fs. 1.494 (Tomo V), y de fs. 1.323 a fs. 1.324, la que consta a fs. 1.537 a fs. 1.538 Tomo V) de estos autos. Refiere que la persona que está sentada a su lado es Gabriel Alfonso Dittus Marín, de quien ha hecho referencia, quien integró la patrulla especialmente seleccionada por el subteniente Espinoza. Dice que lo vio en varias ocasiones salir con este oficial de patrullaje junto a los otros conscriptos mencionados en su declaración. Se mantiene en sus dichos.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

En diligencia de careo con Jaime García Covarrubias, de fecha 15 de septiembre de 2010, rolante de **fs. 1.604 a fs. 1.605 (Tomo V)**, ratifica en lo pertinente su declaración extrajudicial de fs. 1.234, la que consta a fs. 1.493 a fs. 1.494 (Tomo V). Refiere que la persona con la cual se le carea es Jaime García Covarrubias, de quien he hecho referencia en sus dichos. Que le consta que el teniente Covarrubias salía en patrullajes con el subteniente Espinoza, pues los vio salir en tres oportunidades, todas en la noche, mientras el hacía guardia en el regimiento. Que estos oficiales salían en un camión y llevaban con ellos a la denominada "patrulla chacal" que era un grupo de conscriptos seleccionados. El teniente Jaime García Covarrubias estuvo como comandante de la segunda compañía de cazadores durante un breve período antes del 11 de septiembre de 1973, en reemplazo del capitán Vásquez Chahuán. Nunca después de esa fecha. No recuerda haber visto al subteniente Raimundo García Covarrubias o al teniente Jaime García Covarrubias como comandantes de sección en la segunda compañía de cazadores. Manteniéndose en sus dichos.

A.95. Héctor Enrique Muñoz Garrido (28 años para la época de los hechos). **En declaración extrajudicial** de fecha 22 de abril de 2010, rolante de **fs. 1.495 a fs. 1.496 (Tomo V)**, en lo pertinente acota que el grupo de funcionarios que se dedicaba a trabajar el tema relativo a prisioneros del regimiento Tucapel, sobre esta materia estaba cargo el fallecido capitán Nelson Ubilla Toledo, además del teniente Manuel Vásquez Chahuán quien secundaba a Ubilla en estas funciones, el subteniente Manuel Espinoza Ponce, además del teniente de apellido Goich, de quien no recuerda su nombre. Recordando que los prisioneros permanecían en el "gimnasio chico". Que efectivamente luego del 11 de septiembre de 1973, debido a la gran cantidad de servicios que debió cumplir el regimiento, los ejercicios de instrucción nocturna en el sector de la isla del Tucapel, se acabaron. También es efectivo, que Manuel Vásquez Chahuán y el teniente Jaime García Covarrubias, se movilizaban en la noche en lo relativo a los detenidos de la unidad, agregando que Jaime García también pertenecía a este grupo. En cuanto a Juan Labraña Luvecce, efectivamente era muy cercano al teniente Espinoza, y que también trabaja tema relativo a los prisioneros de la unidad.

A.96. Héctor Mauricio Villablanca Huenulao (18 años para la época de los hechos). Quien declaró de fs. 1.497 a fs. 1.498 (Tomo V), de fs. 1.542 a fs.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

1.545 (Tomo V), de fs. 1.572 (Tomo V), de fs. 1.573 a fs. 1.572 (Tomo V), de fs. 1.644 (Tomo V), de fs. 1.641 (Tomo V), de fs. 1.647 a fs. 1.648 (Tomo V) y de fs. 1.650 (Tomo V), de fs. 3.553 (Tomo X), de fs. 3.556 a fs. 3.557 (Tomo X), de fs. 3.558 a fs. 3.561 (Tomo X), de fs. 3.562 (Tomo X), de fs. 3.563 a fs. 3.564 (Tomo X), de fs. 3.565 (Tomo X), de fs. 3.566 a fs. 3.567 (Tomo X), de f. 3.569 (Tomo X), de fs. 3.569 (Tomo X), de fs. 3.570 (Tomo X), de fs. 3.580 a fs. 3.581 (Tomo X).

En declaración extrajudicial de fecha 22 de abril de 2010, rolante de **fs. 1.497 a fs. 1.498 (Tomo V)** (cuya copia consta a fs. 3.556 a fs. 3.557 Tomo X), apunta en lo tocante que, en el año 1973, estaba haciendo su servicio militar obligatorio en el regimiento de. Infantería N°. 8 Tucapel, inserto en la segunda compañía de cazadores, cuarta sección en armas de apoyo, cuyo comandante de sección era el teniente Hugo Espinoza Ponce, y recordando como compañeros de sección a Francisco Hueche Guzmán, Juan Schneider Martin, Juan Garcés Yañez, Sergio Vallejos Garcés, Ricardo Vásquez Estrada, Luis Valdés Huenupi, José Santos Curiqueo Colicheo, Carlos Huichaleo Calfiqueo, Agustín Lefio, Agustín Lefio Huenchupil, Benjamín Lefimil Curilen, Juan Lepuman Leuman, Luis Llamunao Huaiquinao, Juan Mariqueo Vargas y Tomás Nílean, entre otros. Se le exhibe fotografía e indica que reconoce como prisionero del regimiento Tucapel, a quien en fotografía se le indica como Florentino Alberto Molina Ruiz. Que en una ocasión no determinada el teniente Espinoza en su presencia sometió a interrogatorios bajo tortura a este prisionero en las duchas que estaban ubicadas entre las compañías andinas y cazadores. Agrega que la tarde antes de la ejecución de éste y otros prisioneros que estaban junto a él en la compañía de cazadores, después de la hora del rancho alrededor de las 15:00 horas, desaparecieron de su vista. Y dice aquello porque recuerda que aquel y otro detenido que no puede precisar, eran mantenidos en aquella compañía por razones que desconoce. Que aquello fue una ejecución porque días posteriores a lo antes narrado, fueron junto con la compañía, a práctica de tiro a la cancha del polígono y pudo ver restos de cráneo y huesos en el suelo que no tenían más de tres días allí. Respecto a la existencia de un grupo denominado “patrulla chacal”, señala que efectivamente este grupo existía bajo el mando del teniente Hugo Espinoza Ponce (fallecido). Esta patrulla la “integrábamos dice” los conscriptos Sergio Vallejos Garcés, Manuel Campos Ceballos, Manuel Canales Valdés, Juan Carlos Concha Belmar, y muy probablemente dice Eliecer Antitur Ñancufil, sin que

el cabo Labraña Luvecce integrara esta patrulla según su recuerdo. Proclama que el conscripto más cercano al teniente Espinoza Ponce era sin duda Sergio Vallejos Garcés, por lo que si alguien de la patrulla antes señalada pudo haber participado en los hechos era éste. Consultada soflama que el cabo primero Juan Labraña Luvecce era el instructor de su sección, la cual estaba bajo el mando del subteniente Manuel Espinoza Ponce. Precisa que en la patrulla antes señalada salían (y se incluye) casi todas las noches a patrullar y controlar el toque de queda en un camión cuya marca no recuerda, tipo tres cuarto, más chico que "Los Unimog" que era del regimiento, y los detenidos que resultaran de estás procedimientos quedaban en la guardia de la unidad. Concuerda que Nelson Ubilla Toledo era el oficial a cargo de los temas de inteligencia del cuartel, a quien recuerda siempre acompañado de un soldado conscripto, alto, de contextura atlética, que pertenecía a la compañía de plana mayor y servicios cuyo apellido recuerdo como Schwartenski. Que el subteniente Espinoza era siempre citado a la oficina del mayor Nelson Ubilla Toledo, por lo tanto, era bastante cercano a este mayor. Sobre el grupo de personas que se encargaba de trabajar con los detenidos del regimiento, no tiene antecedentes que aportar al respecto.

En declaración judicial de fecha 02 de agosto de 2010, rolante de **fs. 1.542 a fs. 1.545 (Tomo V)** (cuya copia consta de fs. 3.558 a fs. 3.561 Tomo X), ratifica su declaración extrajudicial y rectifica aquella parte de su declaración en que indica a un conscripto de apellido Schwartenski como acompañante del capitán Ubilla, pues en realidad no sabe de quien se trataba. En lo pertinente precisa que se desempeñó en la cuarta sección de la segunda compañía de cazadores, específicamente en la segunda escuadra, bajo las órdenes del cabo Labraña Luvecce. El oficial al mando de su sección era el subteniente Espinoza. Desarrolla que no recuerda a los demás integrantes de su escuadra, pero eran alrededor de diez soldados por escuadra, indicando que él no estaba al mando de su escuadra. Escruta que al parecer Vallejos estaba en la primera escuadra y seguramente era el hombre de confianza del teniente Espinoza, pues aquel siempre lo llamaba. Respecto de cómo se formó la "patrulla chacal", no está muy seguro, pero indica que pudo haber sido después que el teniente Espinoza mató a un perro e hizo que algunos conscriptos "metiéramos" la cabeza dentro del cuerpo del perro que había matado, para comerse las vísceras de este animal. Que jamás le correspondió participar de algún procedimiento junto al teniente Espinoza en

que haya sido ejecutado algún detenido. El Tribunal le lee la declaración de fs. 1.178, a lo que el declarante señala que no es efectivo que haya participado en hechos como los que se han descrito en la declaración que le ha sido leída. Respecto a las personas que más se repetían para salir con el teniente Espinoza, puede nombrar a Vallejos, Campos y él. Aquello se debió seguramente porque eran soldados más eficientes. En su caso, llegó a tener el grado de sargento segundo de reserva. En relación con el cabo Labraña, señala que de vez en cuando salía con ellos a dejar soldados como punto fijo o efectuar patrullajes de toque de queda. Luego narra el episodio en que el teniente Espinoza le dio muerte a una persona en el sector Amanecer. Se le consulta por otros hechos. Cuenta que ellos como “patrulla chacal” se entendían directamente con el subteniente Espinoza, porque era su superior al mando. A la vez, el superior de teniente Espinoza era el teniente Vásquez Chahuán. Que nunca vio salir en patrullajes al subteniente Espinoza con algún otro oficial. Si lo vio salir junto a algunos clases como cabo Astete, pero a dejar patrullas de punto fijo en diferentes lugares. No recuerda haber visto detenidos en el gimnasio del regimiento, tampoco haber visto detenidos con signos de haber sido torturados, con excepción del detenido que el subteniente Espinoza maltrató en su presencia. Esgrime que todos los integrantes de la compañía de cazadores eran tiradores escogidos. No recuerda quien era el comandante de la tercera sección de su compañía. Indica que nunca se fue a la escuela de infantería, aunque postuló a ella aconsejado por el teniente Vásquez Chahuán. El subteniente Valdebenito pertenecía a la compañía andina. Relata que en la segunda compañía de cazadores había dos oficiales, el teniente Vásquez que era comandante de la compañía y el subteniente Espinoza, que era el comandante de su sección, no existiendo ningún otro oficial. El subteniente Espinoza debía reportarse ante el teniente Vásquez Chahuán después de sus misiones. Comunica hechos relativos al asalto al polvorín.

En diligencia de careo con Manuel Abraham Vásquez Chahuán, de fecha 5 de agosto de 2010, rolante de **fs. 1.572 (Tomo V)** (cuya copia consta a fs. 3.562 Tomo X), ratifica declaraciones, reconoce a la persona con quien se le carea como el teniente Manuel Vásquez Chahuán, quien dio a conocer a la compañía la noticia del asalto a polvorín. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo con Manuel Campos Ceballos y Juan Carlos Concha Belmar, de fecha 5 de agosto de 2010, rolante de fs. 1.573 a fs. 1.574

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

(Tomo V) (cuya copia consta de fs. 3.563 a fs. 3.564 Tomo X), musita en lo pertinente que solo participó del hecho que ha narrado, no recuerda haber formado parte de la patrulla cuando ocurrió el evento que relata el señor Campos, con quien se le carea. Que coincide con Campos en el número de integrantes y sus nombres. Reconoce que era cercano al subteniente Espinoza, al igual que Vallejos, pues ambos eran sargentos de reserva.

En declaración extrajudicial de fecha 14 de abril de 2011, rolante de **fs. 1.641 (Tomo V)**, glosa en lo pertinente que se mantiene en sus dichos y se le pregunta por los hechos ocurrido el 10 de noviembre 1973, negando que en horas de la noche participara en la custodia de los detenidos que posteriormente resultaron muertos en la isla del regimiento Tucapel. 1747

En declaración judicial de fecha 15 de abril de 2011, rolante de **fs. 1.644 (Tomo V)** (cuya copia consta de fs. 3.565 Tomo X), viene en ratificar su declaración extrajudicial precedente.

En diligencia de careo con Sergio Orlando Vallejo Garcés, de fecha 18 de mayo de 2011, rolante de **fs. 1.647 (Tomo V)** (cuya copia consta de fs. 3.566 a fs. 3.567, y de fs. 3.580 a fs. 3.581 Tomo X), ratifica la declaración y en lo pertinente insiste que no es efectivo lo dicho por Vallejos, toda vez que no estaba presente cuando se verificó el hecho narrado. Hace presente que jamás le correspondió realizar ese tipo de funciones, ya que la única forma en que hacía guardia era como telefonista, labor que cumplía al interior de una oficina adherida a la guardia del regimiento. Que efectivamente tuvo una discusión con Vallejos por el motivo que éste señala, pero aquella ocurrió al día siguiente a la entrada de la compañía, en la mañana. Que le llama la atención que el señor Vallejos solamente lo indique a él como uno de los soldados a cargo de los detenidos, en circunstancias que como ya lo dijo, los que estaban a cargo de esto eran alrededor de ocho a diez.

En declaración judicial de fecha 18 de mayo de 2011, rolante de **fs. 1.650 (Tomo V)** (cuya copia consta a fs. 3.568 Tomo X), el Tribunal le pregunta si Gabriel Dittus Marín integraba la denominada “patrulla chacal”, responde que sí, porque fue uno de los seleccionados por el subteniente Espinoza para integrarla.

En diligencia de careo con Manuel Rafael Campos Ceballos, de fecha 19 de diciembre de 2011, rolante de **fs. 3.553 (Tomo X)** (cuya copia consta a fs. 3.569 Tomo X), en lo pertinente ratifica sus dichos en el sentido que el capitán

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Vásquez Chahuán y no el teniente Espinoza quien dio a conocer a la compañía que la noche anterior habían asaltado el polvorín. Hace presente que esa mañana se encontraba junto al capitán Vásquez, el teniente Espinoza cuando el dio la noticia. Se mantiene en sus dichos.

En declaración judicial de fecha 19 de diciembre de 2011, rolante de **fs. 3.570 (Tomo X)**, destaca que respecto de lo declarado por Sergio Vallejos Garcés a fs. 1.830, señala que no son efectivos sus dichos. Que jamás le dijo a esta persona que él sabía muchas cosas y no pensaba darlas a conocer. Que en la conversación que tuvieron le enrostró el hecho que lo estuviera involucrando en hechos de los cuales no tiene conocimiento. Nunca supo las identidades de los detenidos a que hace referencia el señor Vallejos y solo se enteró de la identidad de unos de ellos y del vínculo de amistades que tenían con Vallejos por boca de este conscripto. Acota otras circunstancias.

A.97. Manuel Reinaldo Canales Valdés (19 años para la fecha de los hechos investigados). Quien declaró de fs. 1.499 (Tomo V), de fs. 1.513 a fs. 1.514 (Tomo V), de fs. 1.546 a fs. 1.547 (Tomo V), de fs. 1.548 (Tomo V), de fs. 3.554 (Tomo X), de fs. 3.609 a fs. 3.610 (Tomo X), de fs. 3.611 (Tomo X), de fs. 3.612 a fs. 3.613 (Tomo X), de fs. 3.614 a fs. 3.615 (Tomo X), de fs. 3.616 (Tomo X), de fs. 3.717 a fs. 3.722 (Tomo XI).

En declaración extrajudicial de fecha 06 de julio de 2010, rolante de **fs. 1.499 (Tomo V)** (cuya copia rola a fs. 3.611 Tomo X), alega que, respecto a los dichos señalados por Héctor Villablanca Huenulao, a quien recuerda como conscripto de su compañía, señala que no perteneció a ninguna patrulla que estuviera al mando del subteniente Espinoza Ponce. Patrulla a la cual recuerda con la denominación de "Patrulla Mata Perros", la que "claramente" aquel conscripto integraba junto al conscripto Sergio Vallejos Garcés y también el cabo primero Juan Labraña Luvecce. Puntualiza que el subteniente Espinoza era el segundo al mando de la compañía y se entendía directamente con el comandante de la compañía Manuel Vásquez Chahuán, el cual en más de una oportunidad, no autorizaba al subteniente Espinoza a sacar conscriptos de otras secciones que no fuera la de él, (cuarta sección). Sobre lo señalado por el ex - conscripto Manuel Campos Ceballos y el cabo primero Juan Labraña Luvecce, respecto a su participación en la patrulla antes mencionada, indica que sus dichos tampoco se ajustan a la verdad, no pudiendo negar que en alguna oportunidad pudo haber

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

salido junto a ellos, pero como sección, no como integrante de la patrulla. También recuerda haber custodiado detenidos en el gimnasio de la unidad mientras efectuaba servicios de guardia, no pudiendo recordar las identidades de estos detenidos. Narrando otros hechos.

En declaración judicial de fecha 14 de julio de 2010, rolante de **fs. 1.513 a fs. 1.514 (Tomo V)** (cuya copia consta d fs. 3.612 a fs. 3.613 Tomo X), ratifica sus declaraciones extrajudiciales y en lo pertinente afinca que los conscriptos tenían la obligación de pernoctar en el regimiento, sin que existiera alguno con un permiso especial. Luego refiere a los hechos relativos al asalto al polvorín. Recuerda haber custodiado detenidos una mañana, los que estaban en el gimnasio del regimiento, de los que no supo sus identidades ni el motivo por el cual se encontraban en ese lugar. Desconoce que oficiales estaban a cargo de los detenidos. Con relación a la patrulla especial que tenía bajo su mando el subteniente Espinoza, señala que no pertenecía a ella. Recuerda como integrantes de esta, a los conscriptos Vallejos y Villablanca. Que si bien, no pertenecía a esa patrulla es cierto que le correspondió salir junto con ellos al menos una vez por semana a realizar patrullajes. Esto, porque el subteniente Espinoza obligaba a cualquier conscripto de la compañía a sumarse a este grupo, sobre todo cuando salía a patrullar las calles, en las que iba dejando centinelas en las esquinas. Se le pregunta por otros hechos.

En declaración judicial de fecha 03 de agosto de 2010, rolante de **fs. 1.546 a fs. 1.547 (Tomo V)** (cuya copia consta de fs. 3.614 a fs. 3.615 Tomo X), relata que respecto a las personas que estaban detenidas en el gimnasio del regimiento, puede señalar que eran alrededor de veinte, pero no pudo visualizar de quienes se trataba porque no les estaba permitido ingresar al inmueble, solamente custodiaban por turnos al exterior del gimnasio. Desconoce que oficiales estaban a cargo de los detenidos, pero todos los oficiales del regimiento entraban al gimnasio donde estos entraban. No podría asegurar que el subteniente Espinoza estaba a cargo de los detenidos. Reitera que no integraba “la patrulla chacal” y no sabe por qué lo nombran. Está seguro de que Villablanca y Vallejos si la integraban. Sin embargo, en alguna oportunidad le correspondió salir con ellos en patrullajes, al igual que muchos otros a quienes el subteniente Espinoza designaba. Puntualiza que el comandante de su sección era el suboficial Gajardo. El Tribunal le lee la declaración de fs. 1.282, el declarante señala que no

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

son efectivos los dichos allí expresados, pues no pertenecía a la “patrulla chacal” ni estuvo involucrado en los hechos que el Tribunal le ha dado a conocer. Respecto de Virginio Cruces Cárdenas, al parecer es del sector de Toltén, pero no lo ha vuelto a ver desde que terminaron el servicio militar. El conscripto Gabriel Dittus al parecer era de la primera o de la segunda sección. Difunde que la “patrulla chacal” siempre salía en vehículos militares, no recordando que en alguna oportunidad lo hiciera en un vehículo o camioneta particular. No recuerda haber visto al teniente Chahuán salir con la patrulla chacal en compañía del subteniente Espinoza. Desconoce si el subteniente Espinoza se reportara con el teniente Vásquez. Ostenta que quienes más salían con el teniente Espinoza eran los conscriptos Villablanca y Vallejos. Que la “patrulla chacal” se integraba con los dos conscriptos ya mencionados más el cabo Labraña Luvecce, quien era el conductor de la sección, y se completaba con cualquier otro conscripto que el subteniente Espinoza designaba. Respecto a los demás conscriptos que ocasionalmente integraban la “patrulla chacal”, indica que Campos y Concha Belmar lo hicieron en muchas más oportunidades que él. Se le consulta referente a los dichos de Villablanca Huenulao, con relación al asalto al polvorín.

En diligencia de careo con Manuel Vásquez Chahuán, de fecha 03 de agosto de 2010, rolante de **fs. 1.548 (Tomo V)** (cuya copia consta a fs. 3.616 Tomo X), ratifica íntegramente sus declaraciones judiciales y en lo pertinente reitera que hubo detenidos en el gimnasio del regimiento, teniendo acceso a este lugar solo los oficiales. La persona sentada a su lado, con el cual se le carea, es el teniente Manuel Vásquez Chahuán respecto al cual ha hecho referencia.

En diligencia de careo de fecha 19 de diciembre de 2011, rolante de **fs. 3.554 (Tomo X)**, ratifica sus dichos en el sentido que se enteró por la prensa de lo sucedido la noche anterior en el polvorín, continúa precisando hechos respecto al asalto al polvorín.

En declaración extrajudicial de fecha 21 de abril de 2010, rolante de **fs. 3.609 a fs. 3.610 (Tomo X)**, adosa en lo pertinente que ingresó al ejército de Chile en calidad de soldado conscripto en el mes de abril del año 1973 a cumplir con su servicio militar obligatorio en el regimiento de Infantería N° 8 Tucapel de Temuco, quedando encuadrado desde el comienzo en la segunda compañía de cazadores, a cargo del teniente Manuel Vásquez Chahuán, siendo secundado por el oficial subteniente Manuel Espinoza Ponce, quien además estaba a cargo de la cuarta

sección de esa compañía; sin que entre ellos hubiera, según su apreciación, mucha cercanía. Que no era cercano con el subteniente Espinoza, debido a que el pertenecía a la segunda sección de la compañía, la cual estaba bajo el mando del sargento José Gajardo, de quien recuerda que no permitía que los de su sección participaran en ejercicios militares al interior del regimiento, en los cuales estuviera al mando el subteniente Espinoza. Señala que no era cercano al subteniente Espinoza, por los motivos anteriormente referidos, incluso recuerda que ni siquiera salió en patrullajes con aquel oficial, considerando además que éste oficial les daba muy malos tratos a los conscriptos y es por ese motivo cuando lo veía cerca trataba de alejarse de éste. Sobre los soldados conscriptos cercanos a este oficial, recuerda a dos soldados de la cuarta sección y que corresponden a los conscriptos de apellidos Vallejos y Villablanca, recordando también como soldado clase cercano al subteniente Espinoza, al cabo Labraña, quien además le secundaba en el mando en la cuarta sección. Se le pregunta por otros hechos.

En declaración judicial de fecha 21 de agosto de 2021, rolante de **fs. 3.717 a fs. 3.722 (Tomo XI)**, en lo pertinente ratifica sus declaraciones de fs. 3.609 a fs. 3.610, fs. 3.611, fs. 3.612 y de fs. 3.614 a fs. 3.615. El Tribunal le lee lo pertinente de las declaraciones del testigo reservado de iniciales M.J.C.S de fecha 01 de septiembre de 2015; la de fecha 30 de mayo de 2017; la de 26 de marzo de 2019; la de 27 de noviembre de 2019 y la de fecha 16 de agosto de 2021, manifestándole al declarante que aquel conscripto narra un hecho en que señala que en dos oportunidades le tocó cargar cuerpos de personas fallecidas, en la segunda oportunidad cargó ocho cuerpos desde el polígono de tiro de la isla Cautín a un camión militar, señalando que presentes en el lugar se encontraban una serie de personas, entre las cuales mencionó a los de confianza de Espinoza, los denominados “patrulla chacal”, manifestándole al declarante que el integraba esa patrulla y realizándole la siguiente pregunta: En relación a lo anterior, se le pregunta que puede decir de la declaración de este conscripto ¿se sitúa esa noche en los hechos? ¿Estaba presente? El declarante responde que “no, yo no conozco al conscripto, ni lo conocí y nunca estuve en los hechos. Usted una vez señor Ministro fue al regimiento y me interrogó, yo le dije donde dormía, a qué hora había salido. Fue una mañana que fue al regimiento Tucapel, donde llegamos varios, pero yo nunca participé en esas cosas, desconozco todo de esos hechos”, que cuando se le interrogó sobre esos hechos, él estaba de guardia en

el cerro Nielol. Él, y una “montonera más”, que no recuerda quienes eran, llegaron como las una de la mañana y después durmieron un rato y los echaron de franco para la casa a las ocho de la mañana. El Tribunal le pregunta si tuvo conocimiento de que se hubieran ejecutado personas, tanto al interior del regimiento Tucapel como en la isla Cautín. Respondiendo el declarante que no, porque ellos cuando salían en la mañana vieron en el diario, pero él no vio adentro nada raro, porque a ellos los “largaron a las 7.30 - 8:00 de la mañana.” El Tribunal le consulta que vio en el diario, de qué se recuerda, de qué ejecución. El declarante responde que de un asalto. Que vieron en la pantalla del diario en la mañana, porque no tenía plata para comprar el diario, más encima iban saliendo. El Tribunal le consulta si ¿escucho quejidos, lamentos o cualquier otra situación de gente siendo torturada en alguna sala o compañía del Regimiento Tucapel? El declarante responde que no porque a ellos lo dejaban siempre lejos, que no sabría decir si adentro pasaba algo o no pasaba, pero él hacía guardia de cuartel y esa era toda la función de ello. El Tribunal le consulta ¿cuántas veces salió con el teniente Espinoza aproximadamente? El declarante responde que cuando salieron en campaña, ahí salieron todos, cada cual tenía su sección. Espinoza estaba a cargo de la cuarta, él estaba a cargo de “cheche Gajardo”. El Tribunal le pregunta si de acuerdo con su experiencia, y a lo que él vio en el regimiento, cuál era el grupo de más confianza de Espinoza, qué soldados eran los que estaban siempre con él. El declarante responde que ya no se acuerda quienes eran, porque nombran a una persona de los morteros, pero a esa persona nunca la conoció, ni sabe quién es, nunca estuvo en contacto con él, ni con las otras compañías. El Tribunal le pregunta si por ejemplo ¿conoció al soldado Vallejos? El declarante responde que si porque, los ubicaba porque eran cien, entonces por ahí de repente en los pasillos todos se ubicaban más o menos, pero nunca fue amigo de Vallejos. El Tribunal le pregunta ¿con quién andaba siempre Espinoza? ¿Quién le hacía todas sus cosas, le ordenaba la pieza, le lustraba las botas? El declarante responde que lo desconoce, quien iba a la pieza no sabe, nunca supo donde éste tenía su habitación. El Tribunal le consulta si en las salidas que tuvo ¿conoció a Vallejos, Villablanca, Dittus? El declarante responde que si los ubica cuando estaban haciendo el servicio, porque era lógico eran cien. El Tribunal le consulta si con las veces que salió con Espinoza ¿El comentó algo, le tocó presenciar algo, algún abuso, alguna actuación, alguna ejecución? El declarante responde que no porque

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

nunca tuvo contacto con ellos, sólo contacto visual, hola y chao, nunca confianza como haber salido juntos, haber compartido algo, porque la verdad es que era de un pueblo chico, de Cholchol, y no tenía contacto con nadie aquí, ósea, se ubicaban, pero nunca fue amigo ni tuvo contacto tan cercano con ellos. El Tribunal le consulta respecto a los detenidos políticos, las veces que a él le tocó realizar patrullajes, consultándole si reconoce haber detenido a alguna persona por orden del teniente Espinoza y haberla trasladado hasta el regimiento Tucapel? El deponente responde que no, porque nunca anduvo con Espinoza. A ellos les tocaba hacer guardia de cuartel y después para la casa o a dormir. El Tribunal le indica al declarante que en sus declaraciones ha señalado que esporádicamente le tocó conformar la patrulla que integraba el Espinoza. Preguntándole si en las oportunidades que le correspondió ir ¿Pudo ver que el teniente Espinoza detuviera a alguna persona? El declarante responde que no vio, porque éste era oficial y ellos eran simples “pelados”, entonces había mucha distancia entre éste y él que era un simple pelado nada más. No había confianza, no había nada. El Tribunal le lee su declaración policial de fs. 828 a fs. 829, de fecha 01 de diciembre de 2016, de la causa rol 114.011 de este Tribunal, mencionándosele que la víctima corresponde a Victoriano Fernández Coloma, quien fue detenido el 12 diciembre de 1973 para posteriormente ser trasladado hasta las dependencias del regimiento Tucapel de Temuco, lugar donde habría muerto producto de torturas y le pregunta si ¿ratifica esa declaración? El declarante responde “Sí, porque para mí la verdad es esa, porque yo no conocía a la policía, no sé dónde torturaban ni nada, porque esas cosas las manejaban, pienso que los oficiales, porque yo era un simple pelado no más, que iba a hacer”. El Tribunal le pregunta si no reconoce a la víctima Victoriano Fernández Coloma ni a ninguna persona que haya muerto al interior del Regimiento Tucapel producto de las torturas expresándole ¿Vio algo? ¿Escuchó lamentos, gritos?”. El declarante responde “No, no, porque llegaban y nos sacaban al tiro para la escuadra, lejos, así que nosotros no andábamos cerca de ellos”

A.98. Juan Carlos Concha Belmar (18 años para la fecha de los hechos). Quien declaró de fs. 1.500 a fs. 1.501 (Tomo V), de fs. 1.518 a fs. 1.519 (Tomo V), de fs. 1.553 a fs. 1.555 (Tomo V), de fs. 1.556 a fs. 1.557 (Tomo V), de fs. 3.547 (Tomo X); de fs. 3.551 a fs. 3.552 (Tomo X), de fs. 3.585 a fs. 3.586 (Tomo X), de fs. 3.587 a fs. 3.588 (Tomo X), de fs. 3.589 a fs. 3.590 (Tomo X), de

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

fs. 3.591 a fs. 3.593 (Tomo X), de fs. 3.594 a fs. 3.595 (Tomo X), de fs. 3.596 (Tomo X), de fs. 3.597 (Tomo X), de fs. 3.711 a fs. 3.716 (Tomo XI).

En declaración extrajudicial de fecha 06 de julio de 2010, rolante de **fs. 1.501 a fs. 1.501 (tomo V)** (cuya copia consta de fs. 3.587 a fs. 3.588 Tomo X), se refiere a los hechos relativos al asalto al Polvorín. Respecto a su participación en la denominada "patrulla chacal" que estaba comandada por el subteniente Espinoza Ponce, reconoce que efectivamente fue integrante de esta patrulla, recordando además que estaba integrada por los conscriptos Manuel Canales Valdés, Sergio Vallejos Garcés, Héctor Villablanca Huenulao, Manuel Campos Ceballos y un conscripto de apellido Quintana. Refiere además que esta patrulla también la integraba el cabo segundo Juan Labraña Luvecce, a quien además siempre lo veía acompañando al subteniente Espinoza. Sobre la participación de la denominada "Patrulla Chacal" en labores de detención, custodia y fusilamiento de personas detenidas al interior del regimiento Tucapel, indica que a él nunca le correspondió realizar dichos cometidos, ya que no siempre salía con la mencionada patrulla, desconociendo también si alguno de los demás integrantes que mencionó haya participado en alguna de las mencionadas labores. Que nunca supo que esta patrulla realizara este tipo de funciones, ya que las veces que le toco salir como integrante de esta, era solo para realizar patrullajes en la población cuando había toque de queda. Se le pregunta por otros hechos.

En declaración judicial de fecha 15 de julio de 2010, rolante de **fs. 1.518 a fs. 1.519 (Tomo V)** (cuya copia consta a fs. 3.589 a fs. 3.590 Tomo X), ratifica sus declaraciones extrajudiciales e indica en lo pertinente que quiere rectificar sus dichos en el sentido que si vio detenidos al interior del regimiento Tucapel de Temuco, quienes estaban en la guardia del regimiento, que desconoce si algunos fueron ingresados a otras dependencias. Refiere respecto a los hechos relativos al asalto al Polvorín e indica que el salía esporádicamente en patrullajes con el subteniente Espinoza, quien escogía persona para estos efectos de toda la compañía, que jamás participó o presencié ejecuciones de detenidos por parte "nuestra" o por parte del subteniente Espinoza.

En declaración judicial de fecha 04 de agosto de 2010, rolante de **fs. 1.553 a fs. 1.555 (Tomo V)** (cuya copia consta a fs. 3.591 a fs. 3.593 Tomo X), advierte que estaba encuadrado en la segunda sección de la segunda compañía de cazadores. El comandante de sección era el sargento Gajardo. Anexa que

efectivamente existía una "patrulla chacal" que fue formada por el subteniente Espinoza, a la cual ingresó en algunas ocasiones. No recuerda desde cuándo comenzó a integrar esa patrulla. Entre sus integrantes recuerda a Campos, Vallejos y Villablanca. Que aquellos conscriptos eran los más apegados al subteniente Espinoza pues siempre se le veía junto a éste. Que toda la compañía sabía que estos tres conscriptos andaban junto. Asegura que en las oportunidades en que le tocó salir integrando la patrulla recuerda haberlo hecho junto a Vallejos, Campos y Villablanca. Que los conscriptos Villablanca y Vallejos eran los más cercanos al subteniente Espinoza. A su parecer eran sus guardaespaldas. Precisa que él no era reservista y le correspondió efectuar turnos de guardia, aunque participara de la "patrulla chacal". Sobre el cabo Labraña Luvecce, indica que éste también integró la "patrulla chacal" en más de una oportunidad. El Tribunal le da a conocer lo declarado por Sergio Vallejos Garcés de fs. 1.282 y fs. 1.388. Responde que no recuerda el hecho que ha mencionado el señor Campos Ceballos. El Tribunal le da a conocer el hecho narrado por Sergio Vallejos Garcés de fs. 1.209. Responde que no son efectivos los hechos expuestos por Vallejos. Jamás participó en un episodio de esa naturaleza. Preguntado exclama que los conscriptos que siempre salían con el subteniente Espinoza eran Vallejos, Villablanca y Campos; siendo todos los demás integrantes ocasionales. Se refiere a hechos relativos al asalto al polvorín. Consultado menciona que vio llegar al regimiento varios detenidos, los que eran conducidos hacia el gimnasio del regimiento, pero desconoce mayores antecedentes de estas personas. Reitera antecedentes relativos a la causa del asalto al polvorín, y en lo pertinente apunta que recuerda a un conscripto de apellido Schneider, quien al parecer era de la cuarta sección, no recordando que haya salido a patrullar junto con el subteniente Espinoza, el cual era muy estudioso porque al parecer siempre andaba con cuadernos en la mano.

En diligencia de careo con Manuel Rafael Campos Ceballos, de fecha 04 de agosto de 2010, rolante **de fs. 1.556 a fs. 1.557 (Tomo V)** (cuya copia consta a fs. 3.551 a fs. 3.552 y de fs. 3.594 a fs. 3.595 Tomo X) ratifica su declaración prestada a fs. 1.392 y en lo pertinente indica que la persona con quien se le carea es Manuel Rafael Campos Ceballos, a quien ha sindicado como integrante permanente de la "patrulla chacal". Que coincide con el señor Campos en el

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

sentido que hubo detenidos en el gimnasio de la unidad. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo con Manuel Rafael Campos Ceballos, de fecha 19 de diciembre de 2011, rolante a **fs. 3.547 (Tomo X)** (cuya copia consta a fs. 3.597 Tomo X), ratifica sus dichos de fs. 1.245 y refiere a los hechos relacionados al asalto al polvorín. Manteniéndose en sus dichos.

En declaración extrajudicial de fecha 21 de abril de 2010, rolante de **fs. 3.585 a fs. 3.586 (Tomo X)**, apunta que ingresó al ejército a principios del año 1973, a efectuar su servicio militar obligatorio al regimiento de Infantería N° 8 Tucapel de Temuco. Recuerda que estaba inserto dentro de la segunda compañía de cazadores, de la cual era comandante el teniente Manuel Vásquez Chahuán, siendo el teniente Manuel Espinoza Ponce que lo sucedía. En lo pertinente afirma que efectivamente el teniente Espinoza se movilizaba bastante de noche dentro del regimiento. Que también es efectivo que los conscriptos Sergio Vallejos Valdés y Héctor Villablanca Huenulao, siempre se movilizaban con este oficial, quien se caracterizaba por ser muy duro con los conscriptos. Sobre la existencia del denominado “escuadrón de la muerte”, indica que no recuerda que existiera al interior de la unidad un grupo llamado de esta manera. Que tampoco el perteneció a ella, sin embargo, refiere que es cierto que salió en más de una oportunidad junto al teniente Espinoza, generalmente de noche en uno de los camiones “Unimog”. Lo anterior, con la finalidad de dejarlos en algún puesto de guardia o patrullaje. Respecto de los ejercicios nocturnos que se efectuaban en la “isla Cautín” del regimiento como parte de la formación de los conscriptos, indica que luego del 11 de septiembre de 1973, conforme a su recuerdo se dejaron de efectuar debido a la gran cantidad de ejercicios que se hacían en la unidad militar. Se le preguntan por otros hechos y sobre la permanencia de personas detenidas al interior del regimiento Tucapel, indica que jamás vio personas en su interior. Menciona que los soldados clases cercanos al teniente Espinoza Ponce, recuerda al cabo Juan Labraña Luvecce, quien además de ayudante, era muy amigo de aquel oficial.

En diligencia de careo con Jorge Gonzalez Curiqueo, de fecha 15 de junio de 2011, rolante de **fs. 3.596 (Tomo X)**, ratifica sus dichos y refiere a los hechos relativos al asalto al polvorín y en lo pertinente dice que lo que señala el

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

señor Gonzalez es cierto, pues el turno de guardia implicaba rotar por todos los puestos de vigilancia de la unidad. Se mantiene en sus dichos.

En declaración judicial de fecha 28 de diciembre de 2011, rolante de **fs. 3.711 a fs. 3.716 (Tomo XI)**, el Tribunal le lee lo pertinente de sus declaraciones otorgadas en causa rol 113.089 y agregadas a esta causa, las cuales constan de fs. 3.585, fs. 3.587, fs. 3.589 y de fs. 3.591 y le consulta si ¿ratifica esas declaraciones? El declarante responde que sí, pero hay una lectura que se dice, que pertenecía a la patrulla, pero él nunca perteneció. El Tribunal le indica que las declaraciones que se le han leído las otorgó él, que el Tribunal sólo hace lectura de ellas. El declarante responde que sólo está diciendo que salió una o dos veces, pero nunca perteneció, no salía constantemente con ellos. El Tribunal lo tiene presente y le lee lo pertinente de las siguientes declaraciones otorgadas por el testigo reservado de iniciales M.J.C.S de fecha 01 de septiembre de 2015; la de fecha 30 de mayo de 2017; la de 26 de marzo de 2019; la de 27 de noviembre de 2019 y la de fecha 16 de agosto de 2021. El deponente rectifica en el sentido que Muñoz Venegas Muñoz Venegas no era conscripto, era cabo. El Tribunal lo tiene presente y le consulta que puede señalar en relación a la declaraciones que otorga este conscripto de iniciales M.J.C.S, en el sentido de indicar que en una oportunidad, posterior al 11 de septiembre de 1973, le tocó cargar ocho cuerpos de personas fallecidas desde el polígono de tiro de la isla cautín, mencionando a varias personas presentes, entre las cuales se encontraría el grupo de confianza de Espinoza, los denominados “patrulla chacal” y según declaraciones de otros conscriptos o sus propios dichos, la cual habría integrado de manera ocasional, preguntándole ¿acaso estaba presente aquella noche? ¿Puede reconocer este hecho? El declarante responde que nunca estuvo en esas cosas, además si él hubiera sabido algo, lo hubiera dicho, anexa otros comentarios. El Tribunal le pregunta: El relato que hace este conscripto ¿es verídico de acuerdo con la experiencia que tuvo el deponente en el regimiento Tucapel? El declarante responde que no sabría decirlo, si él hubiera sabido algo lo informa. El Tribunal le pregunta ¿no sabía que se ejecutaban personas en la isla cautín? El declarante responde que no, no, porque lo hubiera informado. Como lo informó anteriormente en el caso que está condenado. El Tribunal le consulta si Vallejos era de confianza del teniente Espinoza, si siempre andaba con éste. Lo anterior, de acuerdo con los antecedentes que dispone el Tribunal. El declarante responde: “Siempre andaba

con él, siempre". El Tribunal le pregunta: ¿y que otros? ¿Villablanca Huenulao? El declarante responde: "Villablanca igual señor". El Tribunal le pregunta si ¿recuerda a otro integrante de la patrulla que hubiera andado siempre con el teniente Espinoza? El declarante responde que Dittus, salía con éste. Que está cooperando en lo que más puede, pero lo que más se le dice es si vi detenidos, que llevaron gente al paredón o que mataron. Que nunca vio, nunca vio que estaban golpeando, torturando, alguna cosa, lo habría informado, que es de corazón bueno, no de corazón malo, entonces reconoce eso, por eso cooperó la vez anterior. El Tribunal le indica que ha señalado que en ocasiones integró la patrulla del teniente Espinoza y le pregunta: En estas ocasiones señor Concha ¿esta patrulla detuvo a personas?, ¿Cómo era la dinámica, trasladaban a las personas al regimiento Tucapel?, ¿Quién las trasladaba?, ¿Dónde eran ingresadas? ¿En la guardia? ¿Qué puede señalar acerca de aquello? El declarante responde que siempre habían detenidos en la noche, hasta por "curados se los llevaban", por ebriedad. Pero igual había detenidos, los llevaban a la guardia. De la guardia del Tucapel abajo hay un galpón grande y ahí llevaban a los detenidos, ahí los dejaban. El Tribunal le pregunta ¿Cuántos detenidos de carácter político pudieron observar en la guardia o en otros lugares del regimiento? El declarante responde que tiene el número exacto, pero pocos, no eran muchos, eran los que se tenía dentro del patrullaje nocturno. Y él salió como dos veces, con el teniente Espinoza, más no salió. El Tribunal le pregunta, sin perjuicio de lo que ha manifestado ¿le tocó estando en el regimiento durante el día, ver a jóvenes detenidos, a un grupo de jóvenes detenidos? ¿Cuál era el contacto de él con los detenidos que existían en el regimiento? El declarante responde que no, es que a nadie lo dejaban tener contacto. Se tomaba a los detenidos cuando salía a patrullar, los dejaba en la guardia, de la guardia se los llevaban al galpón grande que estaba allá abajo, pero ahí ya no se podía acercar. El Tribunal le pregunta ¿Le tocó en el patio, en la actividad diaria toparse con algún detenido? El declarante responde que no porque a los detenidos los sacaban para el otro lado del rancho, donde iban a almorzar, ahí tenían varios le parece, pero para las unidades donde estaban ellos, no, además sus unidades estaban al lado de las caballadas. El Tribunal le pregunta ¿de dónde es natural? El declarante responde que de Temuco. El Tribunal le pregunta respecto a su conocimiento por otras víctimas. Y en relación con las torturas que se efectuaban

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

al interior del regimiento Tucapel de Temuco, por sus distintos integrantes, y en diferentes dependencias de este regimiento, se le pregunta si él pudo observar a las personas que realizaban esos hechos. ¿pudo observar personas siendo torturadas? Responde que nunca vio. El Tribunal le pregunta ¿no escucho gritos de dolor o de quejas? El deponente responde que no, él único quejido que escuchaban era cuando salían con las camas al hombro afuera y les daban aporreo, eso eran los únicos quejidos que escuchaban. Se le pregunta por otros hechos y en lo pertinente el Tribunal le pregunta si en las oportunidades en que salió con el teniente Espinoza ¿el comentaba algo? ¿Indicaba alguna directriz, instrucción? ¿Qué recuerda? ¿O hablaba poco el teniente Espinoza? El declarante responde que “no si era callao, pero cuando tenía que hablar, por ejemplo, quédate en este punto de guardia, después nos pasaba a buscar, pero nada más”. El Tribunal le consulta ¿recuerda que él hubiera contado alguna experiencia, hice esto, hice lo otro? El declarante responde que no, no recuerda.

A.99. Manuel Rafael Campos Ceballos (19 años para la fecha de los hechos investigados). Quien declaró de fs. 1.502 a fs. 1.503 (Tomo V), de fs. 1.504 (Tomo V), de fs. 1.515 a fs. 1.517 (Tomo V), de fs. 1.549 a fs. 1.551 (Tomo V), de fs. 1.556 a fs. 1.557 (Tomo V), de fs. 1.573 a fs. 1.574 (Tomo V); de fs. 3.541 a fs. 3.542 (Tomo X), de fs. 3.543 (Tomo X), de fs. 3.544 a fs. 3.546 (Tomo X), de fs. 3.547 (Tomo X); de fs. 3.548 a fs. 3.550 (Tomo X), de fs. 3.551 a fs. 3.552 (Tomo X), de fs. 3.553 (Tomo X), de fs. 3.554 (Tomo X), de fs. 3.555 (Tomo X), de fs. 3.563 a fs. 3.564 (Tomo X), de fs. 3.569 (Tomo X), de fs. 3.594 a fs. 3.595 (Tomo X), de fs. 3.597 (Tomo X), de fs. 3.701 a fs. 3.706 (Tomo XI) y de fs. 3.708 a fs. 3.709 (Tomo XI).

En declaración extrajudicial de fecha 06 de julio de 2010, rolante de **fs. 1.504 (Tomo V)** (cuya copia consta a fs. 3.543 Tomo X), anexa en lo pertinente que respecto a los integrantes de la denominada "Patrulla Chacal", hace presente que aparte de estar integrada por los conscriptos Vallejos, Villablanca, Canales y Concha Belmar, también la integraba un conscripto de apellido Dittus. Aclara lo señalado anteriormente en el sentido que su función mientras integró la patrulla del subteniente Espinoza, la cual no reconoce como "Patrulla Chacal", era salir de patrullaje por las noches con este oficial en los distintos camiones del regimiento, que en oportunidades manejaba Espinoza y lograr la detención de infractores del toque de queda, entre otros. Que estas personas detenidas, las entregaban en la

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

guardia, sin que el participara en la custodia de ellas, ya que nunca custodió detenidos. Alude a la línea de mando de la segunda compañía cazadores a la cual pertenecía, cuyo comandante era Manuel Vásquez Chahuán, secundado por el subteniente Manuel Espinoza Ponce, quien se entendía directamente con el comandante de compañía. Dice que los que integraban la "Patrulla Chacal" no tuvieron participación en la ejecución de las personas que se le mencionaron en su oportunidad y cuyas fotografías también le fueron exhibidas.

En declaración extrajudicial de fecha 23 de abril de 2010, rolante de **fs. 1.502 a fs. 1.503 (Tomo V)** (cuya copia consta a fs. 3.541 a fs. 3.542 Tomo X), comunica que ingresó al ejército de Chile en el mes de abril del año 1973, a efectuar su servicio militar obligatorio al regimiento de Infantería N° 8 Tucapel, donde fue inserto en la segunda compañía de cazadores. Hace presente que el comandante de la compañía era el teniente Manuel Vásquez Chahuán, siendo el segundo oficial a bordo, el subteniente Manuel Espinoza Ponce. Recuerda la existencia de unos postes de madera, de unos dos metros de altura enterrados en el suelo de tierra del polígono existente en la isla Cautín, donde se desarrollaban las labores de entrenamiento militar. Respecto del conscripto Sergio Vallejos Garcés, quien pertenecía a su compañía, pero a la cuarta sección, indica que lo recuerda como el soldado más cercano al teniente Manuel Espinoza Ponce, a quien efectivamente apodaban el "Loco Espinoza", quien también efectivamente tenía una patrulla comandada por él; integrada por conscriptos sólo de la segunda compañía de cazadores, siendo el uno de los integrantes de ésta junto a Manuel Canales Valdés, Héctor Villablanca Huenulao, Carlos Concha Belmar y Sergio Vallejos Valdés. Refiere que aquella patrulla tenía la finalidad de acompañar al teniente en un camión del regimiento que él manejaba a efectuar patrullajes nocturnos en la población, resultando en oportunidades personas detenidas a quien éste oficial ordenaba efectuarle simulacro de fusilamiento. Reseña a los hechos relativos al asalto al Polvorín y en relación con la permanencia de personas detenidas al interior del regimiento, indica que jamás vio personas detenidas. En cuanto a los ejercicios nocturnos de la unidad, que se practicaban en la isla cautín, manifiesta que luego del 11 de septiembre de 1973 por razones que desconoce, se suspendieron.

En declaración judicial de fecha 15 de julio de 2010, rolante de **fs. 1.515 a fs. 1.517 (Tomo V)** (cuya copia consta a fs. 3.544 a fs. 3.546 Tomo X), ratifica

su declaración extrajudicial y en lo pertinente rectifica aquella parte en la que señaló que no vio detenidos al interior del regimiento Tucapel, puesto que en realidad si vio a varios, los que eran mantenidos en dependencias del casino de oficiales o en el gimnasio, también en el racho de los soldados. Que no sabe quién estaba a cargo de los detenidos. Recuerda que en una oportunidad en que se encontraban haciendo patrullaje con el subteniente Espinoza en el sector de la estación de ferrocarriles, detuvieron a dos o tres personas por infracción al toque de queda, los subieron a un camión y en un determinado momento el vehículo se detuvo cerca de la línea del tren y el subteniente Espinoza ordenó bajar a los detenidos. No recuerda como sucedió el siguiente hecho, pero uno de ellos tuvo un forcejeo con el subteniente Espinoza, luego de lo cual éste sacó su arma de servicio y le pegó un tiro en la cabeza. No recuerda que sucedió con los otros detenidos, pero al parecer se arrancaron o los dejaron libres. El hecho es que subieron el cuerpo del detenido y el subteniente ordenó tirar su cadáver al río, aludiendo que no recuerda el lugar en que lo hicieron. Añade que el subteniente Espinoza era un hombre de temer, estaba loco. Cuando no detenían personas, se dedicaba a matar perros a balazos. Puntualiza que el hecho narrado fue el único hecho en que participó, en que haya resultado una persona muerta. Que Manuel Canales pertenecía a la patrulla y siempre andaban las mismas personas, no recuerda que se haya incluido a una persona distinta a este grupo. Se le pregunta por otros hechos.

En declaración judicial de fecha 04 de agosto de 2010, rolante de **fs. 1.549 a fs. 1.551 (Tomo V)** (cuya copia consta a fs. 3.548 a fs. 3.550 Tomo X), reitera donde se encontraba encuadrado y en lo pertinente que conformaba una patrulla que estaba dirigida por el subteniente Espinoza. Junto a los conscriptos Canales, Villablanca Huenulao, Concha Belmar y Vallejos Valdés. Por regla general, salían seis conscriptos, siempre bajo las órdenes del subteniente Espinoza. No recuerda al cabo Labraña como integrante de esta patrulla. Que los que más se repetían como integrantes de esta patrulla eran Vallejos y Villablanca, siendo el primero de ellos el hombre de confianza del subteniente. Respecto al episodio que narró en su declaración anterior, en que el subteniente Espinoza dio muerte a una persona en un lugar cercano a la línea del tren, agrega que es probable que en aquella oportunidad anduvieran junto con los conscriptos Canales, Vallejos, Villablanca, Campos y Concha Belmar, pues por lo general

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

siempre eran los mismos quienes integraban esta patrulla. Refiere que recuerda a un conscripto de apellido Schneider, quien al parecer estaba encuadrado en la primera o segunda sección, pero no salía con ellos, no lo asocia como cercano al subteniente Espinoza, ni al teniente Vásquez. Puntualiza que la patrulla del subteniente Espinoza se formó después del golpe militar, pero no recuerda fecha exacta. Reseña otros hechos y reitera que no recuerda haber salido con el cabo Labraña como integrante de la patrulla del subteniente Espinoza. Acota que siempre salían en un vehículo militar y por lo general el subteniente Espinoza conducía, aunque puede ser que en alguna oportunidad condujera algún clase. El Tribunal le lee la declaración de fs. 1.361, el declarante señala que no recuerda haber salido en un vehículo que no fuera institucional, es decir, del ejército, por lo tanto, no participó en el hecho que se le ha dado a conocer. Comenta los hechos relativos al asalto al polvorín. Agrega que vio detenidos en el regimiento Tucapel, específicamente en el gimnasio de la unidad. Aquellos detenidos eran hombres y mujeres, quienes por toque de queda habían sido privados de su libertad. Explicita que ellos no tenían acceso al gimnasio del regimiento donde se encontraban los detenidos. Pero los oficiales sí lo hacían, aunque no recuerda quienes eran. Que nunca le correspondió custodiar el gimnasio. Comunica que todos los cabos de reserva dejaron (se incluye) de hacer guardia, por el solo hecho de haber obtenido ese grado. En esa condición, aparte de él, está seguro de que se encontraba Vallejos, Villablanca y Dittus.

En diligencia de careo con Juan Carlos Concha Belmar, de fecha 04 de agosto de 2010, rolante de **fs. 1.556 a fs. 1.557 (Tomo V)** (cuya copia consta a fs. 3.551 a fs. 3.552 y a fs. 3.594 a fs. 3.595 Tomo X), esgrime que es cierto que el salía con la patrulla chacal en más oportunidades que muchos de los otros conscriptos. Acota otros hechos y en lo pertinente ratifica sus dichos en el sentido que en una oportunidad el subteniente Espinoza dio muerte a una persona en el sector de la línea férrea y les ordenó tirar el cuerpo al río. Que es posible que el señor Concha Belmar haya formado parte. Reitera haber visto detenidos al interior del gimnasio del regimiento Tucapel.

En diligencia de careo con Héctor Mauricio Villablanca Huenulao, de fecha 05 de agosto de 2010, rolante de **fs. 1.573 a fs. 1.574 (Tomo V)** (cuya copia consta a fs. 3.563 a fs. 3.564 Tomo X), ratifica sus dichos y en lo pertinente acota que la persona con quien se le carea es Héctor Villablanca Huenulao, quien

integraba la "patrulla Chacal" la noche en que el subteniente Espinoza mató a una persona cerca de la línea férrea en Temuco, ordenándoles posteriormente lanzar el cuerpo al río Cautín. Agrega que siempre salían los mismos en las patrullas, es decir, Vallejos, Villablanca, Concha Belmar, Canales, Dittus, él y algún otro integrante ocasional. Que en todo caso no podían salir menos de seis conscriptos en la patrulla. Reitera que no recuerda que el cabo Labraña haya salido a patrullar con ellos. Y que efectivamente Villablanca y Vallejos eran los más cercanos al subteniente Espinoza, al igual que Vallejos, pues ambos eran sargentos de reserva.

En diligencia de careo con Juan Carlos Concha Belmar, de fecha 19 de diciembre de 2011, rolante de **fs. 3.547 (Tomo X)** (cuya copia consta a fs. 3.597 Tomo X), ratifica sus dichos y refiere a los hechos relativos al asalto al polvorín y se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo con Héctor Villablanca, de fecha 19 de diciembre de 2011, rolante de **fs. 3.553 (Tomo X)** (cuya copia consta a fs. 3.569 Tomo X) espeta que ratifica sus dichos y refiere a otros hechos.

En diligencia de careo con Manuel Reinaldo Canales Valdés, de fecha 19 de diciembre de 2011, rolante de **fs. 3.554 (Tomo X)**, ratifica sus dichos, manifestándose a otros hechos.

En diligencia de careo con Virginio Custodio Cruces, de fecha 19 de diciembre de 2011, rolante de **fs. 3.555 (Tomo X)**, ratifica sus dichos, alude a otros hechos.

En declaración judicial de fecha 22 de diciembre de 2021, rolante de **fs. 3.701 a fs. 3.706 (Tomo XI)**, el Tribunal le lee lo pertinente de sus declaraciones, las cuales fueron otorgadas en causa rol 113.089 de este Tribunal y agregadas a esta causa, que constan de fs. 3.541, fs. 3.543, fs. 3.544 y a fs. 3.548. Asimismo, le lee su declaración de fs. 361 se le consulta ¿ratifica esas declaraciones? El declarante responde: "sí, correcto". El Tribunal le lee lo pertinente de las declaraciones del testigo reservado de iniciales M.J.C.S de fecha 01 de septiembre de 2015; la de fecha 30 de mayo de 2017; la de 26 de marzo de 2019; la de 27 de noviembre de 2019 y la de fecha 16 de agosto de 2021 y le consulta ¿Qué puede señalar en relación a la declaración que otorga este conscripto, en el sentido de que él reconoce que la noche en que levantó ocho cuerpos estaban las personas de confianza de Espinoza, los de la "Patrulla Chacal" y usted

precisamente reconoce haber integrado dicha patrulla? El declarante responde que reconoce que perteneció a la patrulla, pero esa noche ellos no salieron a patrullar. El Tribunal le pregunta ¿recuerda haber recogido cuerpos en la isla Cautín? El declarante responde que no. El Tribunal le pregunta Sin perjuicio de eso, ¿el relato que da este conscripto es real? ¿De detenidos, de sala de torturas? El declarante responde que sí, puede ser real. “Sí, porque detenidos se veían”. El Tribunal le consulta ¿Y sala de torturas en la compañía de plana mayor y servicios? El declarante responde que no, ahí no, porque ellos son de diferentes compañías. El Tribunal le pregunta ¿sabía que en el regimiento había un lugar donde se torturaba en alguna compañía, que se utilizaba un catre, una pieza? El deponente responde que no, de eso no está seguro. El Tribunal le señala que a partir del 11 de septiembre de 1973, comenzaron a surgir en la prensa de la época distintos bandos militares, los cuales ordenaban a diferentes personas presentarse ante las dependencias del regimiento Tucapel de Temuco, muchas de estas personas quedaron en calidad de detenida al interior del regimiento Tucapel de Temuco, mencionándole por ejemplo: La edición del día 14 de septiembre de 1973 del Diario Austral de Temuco, en donde aparece el nombre por de Ambrosio Badilla Vasey, detenido desaparecido de la causa rol 113.950. Motivo por el cual el Tribunal le consulta ¿Qué puede decir respecto de la gran cantidad de detenidos por motivos políticos que existieron a partir del 11 de septiembre de 1973 al interior del regimiento Tucapel de Temuco? ¿Los observó? ¿A cuántos detenidos vio? ¿Estaban en el gimnasio, en otra dependencia? ¿Cuál era la dinámica en torno a las personas detenidas? El deponente responde: “Sí, una noche observamos varios detenidos en el gimnasio del regimiento”. El Tribunal le pregunta en el primer mes ¿Cuántos detenidos vieron en el día? ¿Cuántos detenidos vieron en la noche, en el patio, en el gimnasio, en el casino? El declarante responde: “No, ahí sí que no puedo decir cuántas personas, pero se vieron si, de eso estoy seguro.” El Tribunal le consulta por qué cree que el testigo de iniciales M.J.C.S conocía a este grupo de confianza del teniente Espinoza y el los ubica ahí al momento de él ir a recoger los cuerpos? El declarante responde: “Pero yo no lo ubico a él, eso es lo que no entiendo”. El Tribunal le pregunta ¿por qué cree que él dijo eso? y que conocía a este grupo de confianza de Espinoza. El declarante responde que no sabe, no puede explicar cómo. Bueno, si él los conocía, a lo mejor los conocía, pero “yo” a él no. Ese es el problema de ellos, que

ellos no tenían acceso a todas las compañías. Dice que ellos salían solamente a patrullar, salían del regimiento afuera, pero adentro no. El Tribunal le pregunta, ¿en el día, de las 06:00 am hasta las 12:00 de la noche, no estaba patrullando? El declarante responde que no, patrullaban solamente en la noche. En el día hacían lo que tenían que hacer siempre. El Tribunal le pregunta de acuerdo con su experiencia y consciencia, ¿está seguro de que no vio a algún cuerpo, a una persona fallecida en el regimiento Tucapel? ¿A alguna persona muerta en alguna habitación? ¿A alguna persona muerta en la isla Cautín? El declarante responde que, para nada, que detenidos sí, pero personas muertas no. El Tribunal le pregunta ¿y gente torturada, con apremios? El declarante responde que no, tampoco. El Tribunal le pregunta ¿recuerda que en el regimiento Tucapel se agregaron detectives? El declarante responde que no. El Tribunal le pregunta; señor Campos usted señaló en sus declaraciones distintos integrantes como parte de esta patrulla, entre ellos Héctor Villablanca Huenulao, Sergio Orlando Vallejos Garcés, Juan Carlos Concha Belmar, Gabriel Alfonso Dittus Marín, sin mencionar a Manuel Reinaldo Canales Valdés ¿Reconoce a Manuel Reinaldo Canales Valdés como parte integrante de este grupo? El declarante responde que le parece que hizo una declaración donde está éste también. El Tribunal le pregunta ¿el también pertenecía a ese grupo? El declarante responde que sí, ósea no, no era que pertenecieran a un grupo, era que el teniente llegaba y los sacaba “no más, él nos mandaba y obligados a salir no más”. El Tribunal le pregunta ¿Había un grupo de mayor confianza, donde salían más seguido? El declarante responde: “Sí, Vallejos y Villablanca, porque eran los más cercanos a él, porque eran de su sección”. El Tribunal le consulta acerca del conocimiento que el pudiera tener respecto de una persona que estuvo detenida al interior del regimiento Tucapel de Temuco, en una sala llamada la prevención ¿sabe el nombre de esta persona?, ¿de dónde era? o cualquier otro antecedente que pudiera aportar. El declarante responde que no. El Tribunal le consulta, que, transcurrido un mes, dos meses tras el 11 de septiembre de 1973, hubo varios detenidos; lo han declarado varios soldados. Ello aparecía en la prensa, se comunicaba en los bandos, los cuales luego informaban que las personas habían escapado y por ley de fuga habían sido dados de baja ¿Qué le parecían esas noticias? El declarante responde que ellos no tenían acceso a eso. Que si estaban acuartelados. El Tribunal le consulta ¿no escucho que existieron personas que murieron? Aparecía en la radio, en la

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

prensa, que estas personas murieron por habérseles aplicado ley de fuga. El declarante responde que no. El Tribunal le pregunta ¿No recuerda eso? El declarante responde que no.

En declaración judicial de fecha 31 de mayo de 2011, rolante de **fs. 3.708 a fs. 3.709 (Tomo XI)**, reitera lo señalado en declaraciones anteriores en el sentido de estar inserto en la segunda compañía de cazadores para 1973, que conformaba una patrulla que estaba dirigida por el subteniente Espinoza junto a los conscriptos Canales, Villablanca Huenulao, Concha Belmar y Vallejos Valdés. Que por regla general salían seis conscriptos bajo las órdenes del subteniente Espinoza. Recuerda además a Gabriel Dittus como integrante de esta patrulla. Que los que más se repetían como integrantes de esta patrulla eran Vallejos y Villablanca, quienes eran de su sección, siendo el primero de ellos el hombre de confianza del subteniente. Agrega que la patrulla del subteniente Espinoza se formó después del golpe militar, pero no recuerda fecha exacta. Que siempre salían en un vehículo militar, algunas veces conducido por el subteniente Espinoza, aunque por lo general conducía algún clase, pero no puede determinar de quién se trataría. Que, si vio detenidos en el regimiento Tucapel, específicamente en el gimnasio de la unidad, en el casino y en el rancho. Añade que eso fue muy notorio inmediatamente después del golpe militar. Dice que ellos no tenían acceso a los detenidos. Ignora que oficiales o clases estaban a cargo de estas personas. Se le pregunta por otros hechos.

A.100. Gabriel Alfonso Dittus Marín (19 años para la época de los hechos). Quien declaró de fs. 1.507 a fs. 1.508 (Tomo V), de fs. 1.539 a fs. 1.540 (Tomo V), de fs. 1.541 (Tomo V), de fs. 1.639 a fs. 1.640 (Tomo V), de fs. 1.652 (Tomo V), de fs. 1.653 (Tomo V), de fs. 1.654 a fs. 1.655 (Tomo V), de fs. 3.598 a fs. 3.599 (Tomo X), de fs. 3.600 a fs. 3.601 (Tomo X), de fs. 3.602 (Tomo X), de fs. 3.603 (Tomo X), de fs. 3.604 (Tomo X), de fs. 3.605 a fs. 3.606 (Tomo X), de fs. 3.741 a fs. 3.742 (Tomo XI).

En declaración extrajudicial de fecha 05 de julio de 2010, rolante **de fs. 1.507 a fs. 1.508 (Tomo V)** (cuya copia consta a fs. 3.598 a fs. 3.599 Tomo X), aproxima que ingresó al ejército de Chile en calidad de soldado conscripto a cumplir con su servicio militar obligatorio a fines del mes de octubre del año 1972, específicamente al regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco, quedando encasillado desde el principio en la segunda compañía de cazadores, recordando

que al mando de ésta compañía estaba el teniente Manuel Vásquez Chahuán. Dentro de aquella compañía se encontraba dentro de la segunda sección la cual estaba cargo del sargento segundo José Gajardo Gajardo. Que luego de finalizado su servicio militar el año 1974 se desvinculó completamente del ejército de Chile. Respecto, a los dichos del señor Sergio Vallejos Garcés, a quien recuerda como conscripto de su compañía y quien lo mencionó en su declaración, según se le indica, como integrante de una patrulla militar que operaba en el regimiento de infantería N° 08 Tucapel la cual estaba conformada por un grupo de conscriptos y a cargo del subteniente Manuel Espinoza Ponce, señala que eso no es efectivo, ya que nunca ingreso a patrulla alguna destinada a la detención, custodia y ejecución de prisioneros políticos al interior del regimiento. En cuanto al conscripto Vallejos, refiere que su relación con éste nunca fue buena, llegando incluso a sostener entre ambos un pugilato debido a una discrepancia de opinión por el resultado de una competencia que se efectuó al interior de la compañía. Que aquel conscripto lo apodaban el "Loco Vallejos", a quien siempre se le veía con el subteniente Manuel Espinoza Ponce. Sobre la permanencia de personas detenidas al interior del regimiento, manifiesta que nunca vio personas en esa calidad. Agrega, además, que para esa época era seleccionado de futbol del regimiento y por ese motivo estaba ajeno a las labores operativas del regimiento.

En declaración judicial de fecha 28 de julio de 2010, rolante de **fs. 1.539 a fs. 1.540 (Tomo V)** (cuya copia consta a fs. 3.600 a fs. 3.601 Tomo X), ratifica su declaración extrajudicial y en lo pertinente dice que nunca le correspondió participar en alguna patrulla bajo las órdenes del subteniente Espinoza. Tampoco recuerda que algún conscripto de su sección haya integrado esa patrulla, pues éste tenía su grupo previamente seleccionado desde los integrantes de la cuarta sección. Todos los conscriptos de su compañía dormían en una barraca, estando separadas cada sección en piezas distintas. Aquilata que de la patrulla del subteniente Espinoza sólo recuerda al "loco Vallejos", pues esa persona sobresalía y daba órdenes, que aquel conscripto era la mano derecha del subteniente Espinoza. Desconoce si el grupo de Espinoza dormía armado. Le parece que al mando de la tercera sección de la segunda compañía de cazadores estaba el cabo primero Bobadilla, no recordando a algún oficial en esta labor. Luego se refiere a los hechos relativos al asalto al polvorín.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

En diligencia de careo con Luis Humberto Llamunao Huaiquinao, de fecha 28 de julio de 2010, rolante de **fs. 1.541 (Tomo V)** (cuya copia consta a fs. 3.602 Tomo X), ratifica su declaración judicial y en lo pertinente no reconoce a la persona con la cual se le carea. El Tribunal se lo da a conocer. Niega rotundamente lo señalado por el señor Llamunao, pues refiere que nunca salió a patrullar con el subteniente Espinoza, ni de día ni de noche. Se mantiene en sus dichos.

En declaración extrajudicial de fecha 11 de abril de 2011, rolante de **fs. 1.639 a fs. 1.640 (Tomo V)**, aquilata en lo pertinente que en su calidad de exsoldado conscripto del regimiento de Infantería N° 8 Tucapel de Temuco, no fue mucha la información que pudo adquirir respecto a la labor que tenía, tanto el personal del cuadro permanente como de la oficialidad del regimiento respecto de temas relacionados con personas detenidas. En relación con lo anterior indica que, jamás integró la denominada “patrulla chacal” y aquellas personas que puedan indicar lo contrario mienten. Por otra parte, señala que es efectivo que en más de una oportunidad mientras cumplía con sus servicios de guardia en una sala ubicaba en la entrada del regimiento, vio llegar personas detenidas, quedando estas a mayoría de las veces en la sala de guardia, donde frecuentemente vio llegar al teniente Manuel Vásquez Chahuán el subteniente Espinoza Ponce a tratar con ellos puertas cerradas. Con relación al teniente Manuel Vásquez Chahuán, sólo puede indicar que lo recuerda como comandante de compañía y desconoce que otras funciones anexas a esa pudo tener. Por otra parte, recuerda al cabo primero Juan Labraña Luvecce como perteneciente a la cuarta sección de la segunda compañía de cazadores y quien era el brazo derecho del subteniente Manuel Espinoza Ponce, pudiendo recordar además que en muchas oportunidades lo vio salir de patrullajes tanto diurnos y nocturnos junto a este oficial y la mencionada “patrulla chacal”. Agrega además que Labraña Luvecce, tenía un comportamiento muy prepotente hacia los conscriptos y siempre estaba a las órdenes de Espinoza, a las que les daba estricto cumplimiento. Respecto a la conformación de la “patrulla chacal” indica que no tiene claridad en la cantidad e identidades de los conscriptos que la integraban, pero recuerda que los conscriptos más cercanos al subteniente Espinoza Ponce, eran Sergio Vallejos Garcés, Héctor Villablanca Huenulao, quienes en más de una oportunidad fueron requeridos por aquel oficial a altas horas de la madrugada. Aquella situación la vio

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

muchas veces mientras realizaba su servicio de guardia al interior de la compañía. Se le pregunta por otros hechos.

En diligencia de careo con Juan Bautista Labraña Luvecce, de fecha 19 de mayo de 2011, rolante de **fs. 1.652 (Tomo V)** (cuya copia consta a fs. 3.603 Tomo X), ratifica la declaración y se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo con Juan Pablo Garcés Yáñez, de fecha 19 de mayo de 2011, rolante de **fs. 1.653 (Tomo V)** (cuya copia consta a fs. 3.604 Tomo X), ratifica la declaración, espeta no tener nada que agregar.

En diligencia de careo con Juan Ociel Schneider, de fecha 27 de mayo de 2011, **rolante de fs. 1.654 a fs. 1.655 (Tomo V)** (cuya copia consta a fs. 3.605 a fs. 3.606 Tomo X), ratifica su declaración judicial y en lo pertinente no reconoce a la persona con quien se le carea. El Tribunal se lo da a conocer. Niega rotundamente lo asegurado por el señor Schneider, pues sólo salió a patrullar con el subteniente Espinoza de día y en un tiempo muy cercano al 11 de septiembre de 1973, pero jamás perteneció al grupo seleccionado por éste y conocido como la “patrulla chacal”. El Tribunal le lee lo declarado por el compareciente a fs. 1.328. El declarante responde que cuando aseguró en su declaración de fs. 1.328, no haber salido con el subteniente Espinoza a patrullar ni de día ni de noche, se refería al hecho que no integró una patrulla bajo su mando, aunque sí reconoce que éste estuvo al mando de algunos operativos en que actuaron varias patrullas al mismo tiempo. Sin embargo, aduce que él no formaba parte de la suya. Se mantiene en sus dichos.

En declaración judicial de fecha 19 de enero de 2022, rolante de **fs. 3.741 a fs. 3.742 (Tomo XI)**, ratifica sus declaraciones que rolan de fs. 3.598 a fs. 3.599 y de fs. 3.600 a fs. 3.601 y la declaración policial de fs. 839 prestada en causa rol 113.950 y en lo pertinente respecto a los bandos militares que se dieron a conocer en esa época, según se le informa en el acto comenzaron a surgir en la prensa de la época a contar del 11 de septiembre de 1973, los cuales ordenaban a diferentes personas presentarse ante las dependencias del regimiento Tucapel de Temuco, la mayoría de las cuales quedó detenida en aquel regimiento (Edición del 14 de septiembre de 1973 del diario Austral de Temuco, donde aparece el nombre de Ambrosio Badilla Vasey, detenido desaparecido), manifiesta que desconoce totalmente lo que se le ha dado a conocer e ignora algo sobre Ambrosio Badilla Vasey. Respecto a los nombres

de las víctimas de esta causa, que en el acto se le han dado a conocer, indica que desconoce todo aquello. Sobre la declaración extrajudicial del testigo M.J.C.S, de fecha 01 de septiembre de 2015, indica que respecto a los dichos del testigo desconoce todos los hechos. Agrega que recuerda a esos oficiales, pero ignora los hechos que se le acaban de dar a conocer que relató el testigo. Agrega que él sabía de la existencia de la patrulla del teniente Espinoza, así lo declaró. Que supo que hubo detenidos en el regimiento Tucapel, porque cuando había patrullajes se tomaban detenidos. Respecto a lo relatado por el testigo M.J.C.S, de fecha 16 de agosto de 2021, indica que ignora esos hechos sobre los cuerpos de los jóvenes. Anexa que él no estaba en "la patrulla chacal" en esas oportunidades. Insiste en que salió sólo una vez con esa patrulla por la ciudad. Que quienes integraban esa patrulla era Vallejos, Villablanca Huenulao y otro que no recuerda, que pudiera ser Concha Belmar. Que ellos debieran saber sobre lo ocurrido y relatado por este testigo. Que Vallejos era el que siempre trataba de sobresalir de ese grupo. De los casos que se le dan a conocer, Santiago Faúndez Bustos y Victoriano Fernández Coloma, desconoce los hechos que rodearon la muerte de esas personas.

A.101. Roberto Ismael Concha Muñoz (19 años para la época de los hechos). Quien declaró de fs. 1.509 a fs. 1.510 (Tomo V) y de fs. 1.520 a fs. 1.521 (Tomo V).

En declaración extrajudicial de fecha 06 de julio de 2010, rolante de **fs. 1.509 a fs. 1.510 (Tomo V)**, evidencia que estaba inserto en la segunda compañía de cazadores, específicamente en la segunda sección al mando del sargento José Gajardo Gajardo. Como comandante de la compañía de cazadores se encontraba el teniente Manuel Vásquez Chahuán, siendo el segundo oficial a bordo el teniente Manuel Hugo Espinoza Ponce, a quien efectivamente apodaban el "Loco Espinoza". Acota que este oficial contaba con una patrulla, apodada la "patrulla chacal", la cual estaba integrada mayoritariamente por soldados de su compañía, los que se destacaban del resto por tener mayores estudios. Este grupo, lo recuerda por estar aislado del resto de los conscriptos, se entendían directamente con el teniente Espinoza, no participando de los servicios de la unidad, ya que generalmente salían de noche. Relata que encontrándose en la entrada principal del regimiento cumpliendo servicio de guardia vio a la patrulla antes señalada salir de noche en uno de los camiones de la unidad. Respecto de personas detenidas

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

al interior del regimiento, señala que en alguna oportunidad vio personas en esta calidad al interior del gimnasio del cuartel, un número cercano a los sesenta, entre hombres y mujeres, custodiados por personas que vestían de civil portando entre sus hombros sobaqueras con armamento, las cuales eran alrededor de trece o catorce según recuerda. Se le exhiben antecedentes de otros hechos y en cuanto a los integrantes de la denominada "patrulla chacal", recuerda principalmente a Juan Carlos Concha Belmar, Héctor Villablanca Huenulao, Sergio Vallejos Garcés, Manuel Campos Ceballos, Eliecer Antitur Ñancufil y también a un conscripto apodado "el petizo Sandoval" oriundo de Vilcún. Reseña otros hechos y señala, que nunca salió en algún servicio bajo el mando del teniente Espinoza, integrando la "patrulla chacal", agregando además que a su superior directo el suboficial Rubilar, siempre les aconsejaba que no salieran con el subteniente Espinoza.

En declaración judicial de fecha 19 de julio de 2010, rolante de **fs. 1.520 a fs. 1.521 (Tomo V)**, ratifica su declaración extrajudicial de fs. 1.262 a fs. 1.263, la que consta en estos autos a fs. 1.509 a fs. 1.510 (Tomo V), alude a otros hechos y en lo tocante precisa que los integrantes de la "patrulla chacal" estaban apartados del servicio y siempre salían con el subteniente Espinoza. Sus integrantes eran los que mencionó en su declaración extrajudicial. Respecto al conscripto Manuel Canales, no lo recuerda como parte integrante de la patrulla antes aludida. Que no podría asegurar si los conscriptos Campos, Antitur, Concha Belmar, Canales y Vallejos se encontraban o no en aquella noche (refiriendo a otros hechos) descansando en la compañía, pues había tres cuadras donde alojaban.

A.102. Jorge Gonzalez Curiqueo (18 años para la época los hechos). Quien declaró de fs. 1.511 a fs. 1.512 (Tomo V), de fs. 1.522 a fs. 1.523 y de fs. 3.596 (Tomo X).

En declaración extrajudicial de fecha 8 de julio de 2010, rolante de **fs. 1.511 a fs. 1.512 (Tomo V)**, aduce que en el año 1973 estaba cumpliendo con su servicio militar obligatorio en el regimiento de Infantería N°8 Tucapel de Temuco, encuadrado en la segunda compañía de cazadores, cuyo comandante era el teniente Manuel Vásquez Chahuán. Pertenecía a la primera sección a cargo del sargento Isaías Rubilar Alarcón. Comunica que muchas veces vio personas detenidas al interior del gimnasio del Tucapel, las que estaban con la vista vendada. También recuerda que vio a varios centinelas del cuartel pasear a

detenidos cuyas identidades desconoce. Se exhiben fotografías de otros hechos y en lo concerniente a lo que el teniente Manuel Espinoza Ponce, se encontraba a cargo de la cuarta sección de su compañía, que este hombre era “muy malo” con los conscriptos, gustaba de andar metido con los detenidos que estaban en el gimnasio del regimiento, al igual que todos los oficiales de la unidad. Reseña lo acontecido con su padre y su desapego del ejército.

En declaración judicial de fecha 19 de julio de 2010, rolante a de **fs. 1.522 a fs. 1.523 (Tomo X)**, ratifica su declaración extrajudicial rolante de fs. 1.264 a fs. 1.265 la que consta en estos autos de fs. 1.511 a fs. 1.512 (Tomo V), relata los hechos relativos al asalto al Polvorín y en lo oportuno aduce que no recuerda que el subteniente Espinoza tuviera un grupo especial para salir a patrullar. Respecto al conscripto Juan Carlos Concha Belmar, relata que hace poco conversaron y le dijo que probablemente lo iban a citar porque estaban interrogando a todos los que estuvieron en el regimiento para septiembre de 1973 por el tema del asalto al polvorín. Destaca que vio varios detenidos al interior del regimiento Tucapel, quienes estaban con su vista vendada y eran mantenidos en el gimnasio de la unidad. Recuerda que casi todos los oficiales se paseaban por ese lugar, pero no puede asegurar si tenían que ver con los detenidos.

En diligencia de careo con Juan Carlos Concha Belmar, de fecha 15 de junio de 2011, rolante de **fs. 3.596 (Tomo X)**, ratifica su declaración judicial de fs. 1.292 la que consta a fs. 1.522 a fs. 1.523 en estos autos, en el sentido de que estuvo de guardia de cuartel y por ese motivo estuvo apostado en diferentes puntos alrededor del regimiento el día que asaltaron el polvorín de la isla Cautín, continúa su relato sólo refiriéndose a esos hechos. Se mantiene en sus dichos.

A.103. Juan Ociel Schneider Martín (21 años para la época de los hechos). Quien declaró de fs. 1.580 a fs. 1.581 (Tomo V), de fs. 1.582 a fs. 1.585 (Tomo V), de fs. 1.586 (Tomo V), de fs. 1.590 a fs. 1.591 (Tomo V), de fs. 1.654 a fs. 1.655 (Tomo V) y de fs. 3.605 a fs. 3.606 (Tomo X).

En declaración extrajudicial de fecha 17 de agosto de 2010, rolante de **fs. 1.580 a fs. 1.581 (Tomo V)** (cuya copia consta de fs. 1.590 a fs. 1.591 Tomo V), en lo pertinente dice que en 1973 se encontraba encuadrado en la segunda compañía cazadores del regimiento Tucapel, a cargo del teniente Manuel Vásquez Chahuán. Su sección era la cuarta la que se encontraba a cargo del subteniente Manuel Hugo Espinoza Ponce (fallecido). Recuerda que, a fines del mes de

septiembre de 1973, luego de ser ayudante del secretario de su compañía el suboficial René Beltrán Valdebenito, pasó a ser el ordenanza del comandante de su compañía, el teniente Manuel Vásquez Chahuán. Dentro las funciones que le correspondían en tal calidad, se encontraba la limpieza y orden de la oficina del comandante de compañía, la que se encontraba ubicada detrás de las compañías andina y segunda de cazadores. Que dentro de las funciones que el desempeñaba en el regimiento no se encontraban los servicios de guardia por ser ordenanza del comandante de compañía, pero lo que si efectuaba esporádicamente eran los servicios de patrullaje junto a su sección a cargo del subteniente Espinoza, quien salía junto a su grupo denominado efectivamente la “patrulla chacal”, la que recuerda era integrada por Sergio Vallejos Garcés, quien eran el hombre de confianza y ordenanza de Espinoza Ponce, el cabo de reserva Héctor Villablanca Huenulao, quien era el hombre de confianza del teniente Manuel Vásquez Chahuán, Juan Carlos Concha Belmar, Manuel Campos Ceballos, Manuel Canales Valdés y Gabriel Dittus Marín, también muy cercano al teniente Vásquez Chahuán. Respecto a su función cuando salía de patrullaje indica que solo le correspondía conducir el vehículo en que se movilizaba este grupo, el cual a veces era un camión particular marca Ford de color azul, con barandas de madera baja y eventualmente un camión Unimog del regimiento. Sobre las funciones del grupo antes señalado, indica que sólo se relacionaba con ellos cuando salía de patrullaje. Respecto a la línea de mando que existía en la segunda compañía de cazadores indica que existía una comunicación directa y fluida entre Vásquez y Espinoza respecto de las instrucciones que impartía el primero al segundo, ahora bien efectivamente el teniente Manuel Vásquez pertenecía al grupo de inteligencia del regimiento, el cual estaba a cargo del capitán Nelson Ubilla Toledo. Sobre el teniente Jaime García Covarrubias, indica que no pertenecía a su compañía y lo recuerda como ayudante del comandante de regimiento, coronel Pablo Iturriaga Marchesse y también como un oficial muy cercano al teniente Manuel Vásquez Chahuán, ya que en más de alguna oportunidad los veía ingresar juntos a la comandancia del regimiento. Se le pregunta por otras situaciones.

En declaración judicial de fecha 19 de agosto de 2010, rolante de fs. **1.582 fs. 1.585 (Tomo V)**, ratifica su declaración extrajudicial que rola de fs. 1.450 a fs. 1.451 la que consta en estos autos de fs. 1.580 a fs. 1.581 y copia que consta

de fs. 1.590 a fs. 1.591 (Tomo V), agrega que en unas ocho oportunidades le tocó integrar la denominada “patrulla chacal”, en calidad de conductor, ya sea en el vehículo institucional o particular que ha hecho referencia en su declaración extrajudicial. Precisa que siempre iba al mando de ella el subteniente Espinoza, la cual generalmente se componía de seis o siete conscriptos. Que en más de alguna oportunidad les correspondió detener a personas en la vía pública por infracción al toque de queda, las que eran trasladadas al regimiento. Que también ocurría a veces que el subteniente Espinoza ordenaba bajar a los detenidos del vehículo militar, de a uno y en un sitio eriazo realizaba simulacro de fusilamiento, para lo cual le ordenaba ponerse de pie, con la vista vendada y las manos amarradas, para luego efectuar un disparo al aire y un culatazo en el estómago. Una vez repetida esta maniobra con todos los detenidos los dejaba en libertad. Alude a su ingreso y las labores que le correspondían como ordenanza del teniente Manuel Vásquez Chahuán y reseña instrucción del año 1974 y en lo adecuado indica que en una oportunidad vio alrededor de cinco hombres detenidos al interior del regimiento, específicamente en una bodega que estaba al lado del rancho de los conscriptos. Recuerda tal hecho porque entre ellos había un vecino de nombre Luis Correa, el que había sido detenido por razones políticas, ya que pertenecía al Partido Socialista e incluso fue candidato a regidor por dicho partido. Se le interroga al tenor de a los hechos ocurridos el 10 de noviembre.

En diligencia de careo con Manuel Vásquez Chahuán, de fecha 19 de agosto de 2010, rolante de **fs. 1.586 (Tomo V)**, en lo relativo advierte que rectifica su declaración en el sentido que no tiene la certeza si cuando llegó a hacer el servicio militar el señor Vásquez ya vivía en la casa del regimiento. Sin embargo, cuando ocurrieron los hechos investigados (refiriendo a otros hechos), era ordenanza del teniente Vásquez Chahuán y vivía en la casa ubicada al interior del regimiento.

En diligencia de careo con Gabriel Alfonso Dittus Marín, de fecha 27 de mayo de 2011, rolante de **fs. 1.654 a fs. 1.655 (Tomo V)** (cuya copia consta de fs. 3.605 a fs. 3.606 Tomo X), ratifica sus declaraciones extrajudicial y judicial, y en lo pertinente no reconoce a la persona sentada a su lado, atendido al tiempo transcurrido, pero como el Tribunal le indica se trataría de Gabriel Alfonso Dittus Marín de quien he hecho referencia, que integró la patrulla especialmente seleccionada por el subteniente Espinoza. Acota que no podría señalar en cuántas

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

oportunidades vio salir a Dittus, con este oficial junto a los otros conscriptos mencionados en su declaración. Se mantiene en sus dichos e insiste que Dittus formaba parte de la patrulla especialmente seleccionada por el subteniente Espinoza.

A.104. Carlos Luco Astroza (36 años para la época de los hechos). Quien declaró de fs. 1.587 a fs. 1.588 (Tomo V), de fs. 1.695 a fs. 1.696 (Tomo V), de fs. 3.640 a fs. 3.642 (Tomo X), de fs. 3.643 (Tomo X) y de fs. 3.644 a fs. 3.646 (Tomo X).

En declaración extrajudicial de fecha 11 de octubre de 2006, rolante de **fs. 1.587 a fs. 1.588 (Tomo V)**, señala que para el año 1973 se encontraba prestando funciones como conductor de vehículo de la prefectura. Por diferencias de caracteres con el prefecto de la época Carlos Aranda, fue enviado en calidad de agregado a cumplir funciones a la Fiscalía Militar del Regimiento Tucapel, ubicada en calle San Martín N° 750, a partir del 14 de septiembre de ese año. Que una vez que se presentó en dicho destacamento, tomó contacto con los demás funcionarios de su institución, que ya se encontraban en calidad de agregados a la Fiscalía del Tucapel, recordando que el más antiguo era don Aquiles Poblete Müller, pero sin duda quien organizaba el grupo era don Rigoberto Ortiz Lara, ya que éste se entendía con la gente de la Fiscalía. Dentro del grupo de funcionarios policiales que allí se encontraban estaban Daniel San Juan Clavería, Hernán Raúl Quiroz Barra, Luis Morales Toledo y Carlos Zurita. Espeta que en más de una oportunidad pudo ver a don Alfonso Podlech al interior de la Fiscalía Militar del Tucapel sosteniendo reuniones con el mando y en oportunidades vistiendo de uniforme, sin dejar de mencionar que para todos los efectos era el señor Luis Jofré, el fiscal militar. Que también se destacaba la figura del capitán Nelson Ubilla Toledo, a quien recuerda como el hombre que tomaba las decisiones en cuanto a los detenidos junto a sus ayudantes los sargentos Schonherr Frías y Orlando Moreno Vásquez. Adiciona que cuando el capitán Ubilla Toledo impartía alguna instrucción lo hacía por intermedio del teniente Vásquez Chahuán. Respecto de posibles vínculos entre los grupos dedicados a trabajar temas políticos para el año 1973, dice que sólo puede agregar que su amigo Orlando Moreno Riquelme, funcionario de planta de suboficiales de la fuerza aérea y de la dotación del grupo N° 3 de helicópteros de la base aérea de Maquehue de Temuco, a quien conoció con antelación al 11 de septiembre de 1973, cumplía funciones como chofer de la

base en distintos vehículos, reseñando otras situaciones por las cuales se le pregunta. 1459-1460

En declaración extrajudicial de fecha 10 de mayo de 2012, rolante de **fs. 1.695 a fs. 1.696 (Tomo V)**, reitera lo señalado en el sentido de que para el año 1973 se desempeñaba en la comisaria judicial de Temuco, siendo sus funciones conducir vehículos policiales y que a partir del 11 de septiembre de 1973 fue designado para cumplir funciones en el regimiento de infantería Tucapel N°8 Temuco, quedando en calidad de agregado a este destacamento militar hasta el mes de noviembre de ese mismo año. Cuando llegó ya se encontraban allí agregados el subcomisario Poblete, los detectives Ortiz, Morales, San Juan y Quiroz, recordando que estos policías se encontraban trabajando en una oficina de la comandancia del regimiento, lugar donde se imagina trataban con detenidos, ya que, siempre veía al detective Morales llevar detenidos desde la guardia del regimiento hasta la oficina donde ellos trabajaban. Hace presente aquella situación porque desde su llegada al regimiento, se le ordenó por parte del detective Ortiz, que debía permanecer permanentemente en la guardia del regimiento, quedando a disposición de los detectives para efectuar solamente citaciones, negando que alguna oportunidad haya efectuado alguna detención o allanamiento. Dice que nunca salió como conductor de los militares del regimiento. Cuando llegó al regimiento se le asignó un vehículo cuatro por cuatro marcas Chevrolet modelo Blazer, color celeste, el cual pertenecía a la "UNICEF". Posteriormente después de unos veinte días le fue asignado otro vehículo, el cual correspondía a una Citroneta modelo AK, color blanco. Recuerda que, llegado el mes de noviembre de 1973, regresó por orden superior a la prefectura de investigaciones junto a los detectives Ortiz, San Juan, quedando en el regimiento los detectives Quiroz y Morales, no recordando en qué fecha retornaron a la prefectura. No recuerda que sucedió con Poblete, no tiene claro si se quedó en el regimiento o fue destinado a otra unidad policial. Respecto a los detectives Fernando Nambrard Rodríguez, Víctor Pérez y otro de apellido Aplaza no recuerda que ellos hayan estado agregados al regimiento. Se le pregunta por otros hechos y hace presente que nunca participó en interrogatorios, ni tampoco sabe que detectives agregados al regimiento se dedicaban a estas labores.

En declaración judicial de fecha 08 de abril de 2013, rolante de **fs. 3.640 a fs. 3.642 (Tomo X)**, reitera en lo pertinente que para el 11 de septiembre de

1973 se desempeñaba como conductor de la policía de investigaciones de Temuco y su jefe directo era el prefecto Carlos Aranda y que posteriormente fue destinado al regimiento Tucapel de Temuco. Que estuvo bajo las órdenes del comisario Ortiz, recordando además que en ese lugar estaban los detectives Quiroz, Poblete, San Juan y Morales. Todos quedaron bajo las órdenes del capitán Nelson Ubilla Toledo, además estaban sujetos a lo que la Fiscalía Militar dispusiera. Que en dicho regimiento le correspondió salir a efectuar citaciones siempre con funcionarios de su institución. Recuerda que en un principio tuvo a cargo una camioneta marca Chevrolet modelo C-10, color celeste, posteriormente llegó una Citroneta, modelo AK-6, color crema. Añade que le correspondió acompañar a patrullas militares hacia el sector de Cunco y Curarrehue. En ambas ocasiones fue en la Citroneta acompañando a algún detective. En Cunco fueron a buscar un supuesto entierro de bombas. Recuerda que fueron al lugar de Quechereguas, pero no recuerda con quienes andaban, llegaron hasta una cancha de fútbol, donde hicieron hoyos y que no encontraron nada, persiste en esos hechos y en lo adecuado que en la misión a Curarrehue recuerda que, saliendo de Pucón, por camino hacia Caburgua había un civil cuyo nombre no recuerda, que entrega datos a los militares respecto de la existencia de armas en determinado lugares. Precisa que ellos fueron a un sector donde encontraron dos cajones de tiros de dinamita. Agrega que en Cunco los militares andaban bajo las órdenes del capitán Rubio y en Curarrehue con el teniente Espinoza, reseña otra misión hacia al lago Colico. Insiste que en el regimiento dependían directamente del capitán Nelson Ubilla Toledo, quien además tenía a su cargo a los detenidos. Indica que el mayor Jofré no se inmiscuía en nada, por lo que le parece que el abogado Alfonso Podlech estaba a cargo de hecho en la Fiscalía Militar, quien andaba de uniforme en el regimiento. Respecto a los detenidos en el regimiento Tucapel indica que ignora quiénes los interrogaban, pero supone que eran los demás detectives agregados, más el capitán Ubilla y los suboficiales Moreno Vásquez y Schonherr, que siempre andaban con este oficial. Narra otras situaciones y que recuerda a Luis Alberto Chihuailaf Arriagada y a sus hermanos; quienes eran de Cunco al igual que él, pero no recuerda haberlo visto detenido en el regimiento Tucapel, desconoce cómo llegó a ese lugar ni qué pasó con él, continua su relato en ese sentido y que el en aquel tiempo no tenía poder de decisión sobre ningún aspecto de los operativos, ya que sólo era conductor.

En diligencia de careo con Luis Alberto Chihuailaf Arriagada, de fecha 8 de abril de 2013, rolante de **fs. 3.643 (Tomo X)**, ratifica su declaración judicial rolante de fs. 219 las que constan en estos autos a fs. 3.640 a fs. 3.642 (Tomo X), que recuerda al señor Luis Alberto Chihuailaf Arriagada, a quien vio detenido en el regimiento Tucapel de Temuco, pero no en Cunco, comenta otras situaciones y se mantiene en sus dichos.

En declaración judicial de fecha 15 de noviembre de 2013, rolante de **fs. 3.644 a fs. 3.646 (Tomo X)**, reproduce en lo oportuno que para el 11 de septiembre de 1973 se desempeñaba como conductor de la policía de investigaciones de Temuco y su jefe directo era el prefecto Carlos Aranda y que posteriormente fue destinado al regimiento Tucapel de Temuco. Que en ese lugar estuvo bajo las órdenes del comisario Ortiz, recordando además que estaban los detectives Quiroz, Poblete, San Juan y Morales. Recordando que todos quedaron bajo las órdenes del capitán Nelson Ubilla Toledo, además estaban sujetos a lo que la Fiscalía Militar dispusiera. Que en dicho regimiento le correspondió salir a efectuar citaciones siempre con funcionarios de su institución, aludiendo a los vehículos en que se movilizaba, así como a las misiones en que participó hacia Cunco y en la misión a Curarrehue recuerda que saliendo de Pucón, por camino hacia Caburgua había un civil cuyo nombre no recuerda, que entrega datos a los militares respecto de la existencia de armas en determinado lugares, insiste que en su misión a Cunco los militares andaban bajo las órdenes del capitán Rubio y en Curarrehue con el teniente Espinoza, reseña otra cometido hacia al lago Colico. Afirma que en el regimiento dependían directamente del capitán Nelson Ubilla Toledo, quien además tenía a su cargo a los detenidos. Indica que el mayor Jofré no interfería en nada, por lo que le parece que el abogado Alfonso Podlech estaba a cargo de hecho en la Fiscalía Militar, quien andaba de uniforme en el regimiento y se entendía con el capitán Ubilla. Deja claro que nunca presencié una conversación entre ellos, pero sí era evidente que existía un nexo entre la Fiscalía Militar y el trabajo de inteligencia que ejercía Ubilla. Que tanto Podlech como Ubilla estaban constantemente en la Fiscalía Militar. Respecto a los detenidos en el regimiento Tucapel indica que ignora quiénes los interrogaban, pero supone que eran los demás detectives agregados, más el capitán Ubilla y los suboficiales Moreno Vásquez y Schonherr, que siempre andaban con este oficial Narra y comunica otras situaciones.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

A.105. Ricardo Del Tránsito Esparza Rocha (19 años para la fecha de los hechos investigados). Quien declaró de fs. 1.592 a fs. 1.593 (Tomo V) y de fs. 1.617 a fs. 1.618 (Tomo V).

En declaración extrajudicial de fecha 17 de agosto de 2010, rolante de **fs. 1.592 a fs. 1.593 (Tomo V)**, expresa en lo oportuno que estaba encuadrado en la segunda compañía de cazadores y cuyo comandante de compañía recuerda al teniente Manuel Vásquez Chahuán. Realizaba servicios de guardia y centinela al interior del regimiento Tucapel, también le correspondía salir de patrullaje junto a su compañía, como también cumplir con servicios de vigilancia a algunas instalaciones en Temuco. Con relación a los detenidos en el regimiento, dice que estos eran llevados directamente al gimnasio por efectivos de la compañía que realizaba el patrullaje. Recuerda que mientras realizaba servicios de guardia en más de una oportunidad le toco custodiar a personas en esa calidad. Respecto a la existencia de algún grupo operativo al interior del regimiento, manifiesta que efectivamente existía un grupo al que se denominaba la "patrulla chacal" el cual era liderado por el teniente Manuel Espinoza Ponce e integrado por los conscriptos Sergio Vallejos Garcés, Héctor Villablanca Huenulao, Juan Carlos Concha Belmar, Manuel Canales Valdés y Gabriel Dittus Marín. Recuerda que en ocasiones salía con este grupo el conscripto Manuel Campos Ceballos. Sobre el grupo de oficiales que realizaba labores de inteligencia al interior del regimiento; recuerda al capitán Nelson Ubilla Toledo, quien era secundado a su parecer por el entonces teniente Manuel Vásquez Chahuán. En relación con el trato que había entre el teniente Vásquez Chahuán y el subteniente Espinoza, indica que ambos tenían una relación directa y muy fluida de oficial superior a subalterno. Se le pregunta por otros hechos y se le exhiben fotografía, alude que reconoce por sus características físicas a Juan Carlos Ruiz Mansilla, cuyo nombre se le da a conocer en el acto de la declaración, como quien vio en calidad de prisionero y postrado sobre una colchoneta en pésimas condiciones físicas en el baño nocturno de la segunda compañía de cazadores, quien era mantenido ahí por el subteniente Espinoza y su grupo.

En declaración judicial de fecha 14 de octubre de 2010, rolante de **fs. 1.617 a fs. 1.618 (Tomo V)**, ratifica su declaración extrajudicial rolante de fs. 1.479 a fs. 1.480, la que consta en estos autos de fs. 1.592 a fs. 1.593 (Tomo V). Agrega que le consta que los conscriptos Vallejos, Villablanca, Dittus, Concha Belmar,

Campos y Canales formaban parte de la patrulla del subteniente Espinoza, porque éste los escogió un día en que estaban formados en el patio, llamando a dar un paso al frente a todos los que tuvieran cuarto año rendido, entre quienes se encontraban ellos, fecha desde la cual siempre se les veía juntos. Agrega que aquellos conscriptos tenían un trato prepotente hacia el resto de sus compañeros. Respecto al detenido que vio en el baño nocturno de la compañía y que reconoció en fotografías como Juan Carlos Ruiz Mancilla, señala que aquel se encontraba en deplorables condiciones físicas y al parecer tenía varios huesos quebrados, pues no se podía mover. Agrega que varios de ellos le dieron leche para que se alimentara, pero el prisionero lo hacía con dificultad. Acerca del capitán Vásquez Chahuán indica que aquel hizo un curso de inteligencia durante 1974, por lo que no podría asegurar si en 1973 ya pertenecía al servicio de inteligencia militar del regimiento o no. Que los detenidos eran mantenidos en el gimnasio del regimiento desde donde eran sacados por personal de planta de turno, siendo trasladados hasta otras dependencias para ser interrogados. Después no los volvían a ver. Agrega que al le correspondió custodiar la entrada del gimnasio en alguna oportunidad. Desconoce quiénes interrogaban a los detenidos. Se le pregunta por otros hechos.

A.106. Jaime Barrenechea Vega (18 años para la época de los hechos). Quien declaró de fs. 1.596 a fs. 1.597 (Tomo V) y de fs. 1.619 (Tomo V).

En declaración extrajudicial de fecha 18 de agosto de 2010, rolante de **fs. 1.596 a fs. 1.597 (Tomo V)**, cuenta en lo adecuado que para el año 1973, tenía 18 años y se encontraba desde de abril de ese año efectuando su servicio militar obligatorio en el regimiento Tucapel. Pertenecía a la segunda compañía de cazadores del regimiento, a cargo del por entonces teniente Manuel Vásquez Chahuán. Sobre el subteniente Manuel Espinoza Ponce, indica que era un oficial de muy mal trato hacia los conscriptos de ahí su apodo de "Loco", quien tenía una patrulla de conscriptos denominada la "patrulla chacal", la cual estaba integrada por conscripto de su compañía, siendo efectivo que a ésta patrulla pertenecían Sergio Vallejos Garcés, Héctor Villablanca Huenulao, Juan Carlos Concha Belmar, Gabriel Dittus Marín y Manuel Campos Ceballos, Manuel Canales Valdés, quienes mayoritariamente, salían del regimiento de noche movilizados. Anexa que dentro de los servidos que le correspondió efectuar en el periodo antes señalado, estaban efectivamente los servicios de guardia en calidad de centinela, para lo

cual portaba el fusil Mauser y SIG. Que también le correspondió efectuar patrullas por control de toque de queda en la noche, sin que le correspondiera salir con el grupo de la "patrulla chacal". Relata otros sucesos y en lo relativo a las personas detenidas al interior del regimiento Tucapel, indica que mayormente de día sentía gritos de personas en distintas partes de la unidad provenientes casi todos del sector de la compañía de morteros. Que también era posible ver en el día como los detenidos eran paseados por centinelas de guardia con la vista vendada por los patios de la unidad. Se le interroga por otros hechos.

En declaración judicial de fecha 15 de octubre de 2010, rolante de **fs. 1.619 (Tomo V)**, ratifica su declaración extrajudicial rolante de fs. 1.485 a fs. 1.486, rolante en estos autos a fs. 1.596 a fs. 1.597 (Tomo V), consultado indica que no sabe que oficiales o suboficiales estaban a cargo de los detenidos que se encontraban al interior del regimiento. Que esas personas eran mantenidas en dependencias de la compañía de morteros.

A.107. José Arturo Fuentes Carrasco (19 años para la época de los hechos). **En declaración extrajudicial** prestada con fecha 28 de septiembre de 2010, rolante de **fs. 1.629 a fs. 1.630 (Tomo V)**, exclama en lo pertinente que para el año 1973, se encontraba inserto en la segunda compañía de cazadores, cuyo comandante era el capitán Manuel Vásquez Chahuán. En cuanto a la permanencia de personas detenidas al interior del regimiento Tucapel, agrega que recuerda haber visto a personas en esa calidad, las cuales eran trasladadas desde un punto a otro del regimiento con escolta de soldados conscriptos, se imagina que para realizarles algún tipo de interrogatorio, labor que no le correspondió realizar. Recuerda como prisioneros del regimiento a Amador Montero Mosquera, a quien vio al interior de la segunda compañía de cazadores, específicamente en "el baño nocturno". Con relación a la existencia de un grupo de soldados dedicados a efectuar detenciones fuera de la unidad militar, manifiesta que efectivamente había una patrulla liderada por el teniente Manuel Espinoza Ponce, quien era el comandante de la cuarta sección "armas de apoyo" de la segunda compañía de cazadores, integrada por los conscriptos Sergio Vallejos Garcés, Héctor Villablanca Huenulao, Guillermo Pincheira Farías y Juan Carlos Concha Belmar. Sobre el capitán Manuel Vásquez Chahuán agrega que lo recuerda como integrante del grupo de inteligencia del regimiento Tucapel, para lo cual tenía gente en la compañía de plana mayor y servicios, la que se encontraba a cargo

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

del capitán Nelson Ubilla Toledo. Que en las oportunidades que el capitán Manuel Vásquez, se encontraba ausente de su compañía, era el teniente Jaime García Covarrubias quien lo reemplazaba en sus funciones. Comenta otras situaciones y se le pregunta por otros hechos.

A.108. Osvaldo Santiago Brito Brito, (de 31 años a la fecha de los hechos). **En declaración judicial** de fecha 09 de diciembre de 2010, rolante de **fs. 1.635 a fs. 1.636 (Tomo V)**, ratifica declaración de fs. 1.666 a fs. 1.667, de otros hechos proclamó que si bien es cierto que según la revista de comisario, de 1973 aparece encuadrado en la segunda compañía de cazadores que estaba al mando del teniente Manuel Vásquez Chahuán y específicamente en la primera sección, bajo las órdenes del sargento Isaías Rubilar Alarcón, antes de septiembre de 1973, no recuerda fecha exacta, fue pasado a trabajar a la comandancia dado el hecho que era buen dactilógrafo. Este cambio lo ordenó el coronel Hernán Fuenzalida Vigar. Por este motivo, cuando asumió el mando el coronel Iturriaga Marchesse, ya se encontraba en función. Junto con él trabajaba un estafeta de nombre Luis Moisés Abdo Perez (fallecido). Su tarea consistía en escribir las órdenes del día del regimiento, radiogramas, comunicaciones breves y cualquier otro papel que se le ordenara por intermedio del ayudante del regimiento, quien para septiembre de 1973 era el teniente Jaime García Covarrubias. No recuerda que Alejandro Rubio Balladares haya sido ayudante del regimiento. Preguntado, responde vio detenidos al interior del regimiento Tucapel, específicamente en el patio de la unidad cuando en una oportunidad se amontonó a una gran cantidad de personas. Este hecho lo presenció a través de la ventana de su oficina. Después de eso no volvió a ver detenidos. Que no le correspondió transcribir algún Bando Militar, esta función nunca le fue encomendada. Tiene entendido que los bandos militares eran producidos en la sección segunda, recordando que quienes trabajaban en ese lugar eran Orlando Moreno Vásquez, Raúl Schonherr, Nelson Avello Vega y José Atala Alcántara. Se le pregunta por otros hechos.

A.109. Edison Chihuailaf Arriagada (de 39 años a la época de los hechos). **En declaración judicial** de fecha 17 de marzo de 2012, rolante de **fs. 1.656 a fs. 1.659 (Tomo V)**, expreso que para septiembre de 1973 se desempeñaba como director de la Escuela N° 27 de la localidad de Metrenco, comuna de Padre Las Casas y vivía en una casa anexa al establecimiento. Además, participaba en organizaciones campesinas del sector y era militante del

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Partido Radical. Inmediatamente después de ocurrido el golpe militar fue destituido de su cargo de director de la escuela y pasó a formar parte del cuerpo de profesores del mismo establecimiento, por orden de la Dirección Provincial de Educación. Los primeros días de octubre de 1973 llegó hasta su domicilio una patrulla militar que tenía órdenes para detenerlo, siendo llevado al regimiento Tucapel de Temuco. Allí permaneció todo el día en una dependencia ubicada en la guardia de la unidad militar. Estando en ese lugar pudo ver mucha gente detenida, algunos de los cuales habían sido torturados, pues presentaban claras muestras de haber sido golpeados. Entre éstos puede recordar a un joven de apellido Cortés, al parecer de nombre Fernando, esta persona llegó en muy malas condiciones traída por militares pues casi no podía mantenerse en pie. Como pudo trato de ayudarlo y un soldado allí presente le dijo que le diera alimento. Para esto le pasó un plato de porotos que apenas pudo probar este joven, pues estaba con su cara muy inflamada, tenía la lengua destrozada y presentaba muchos hematomas en la cara y en el pecho. No pudo conversar con él, porque entraba y salía mucho contingente militar. Hace presente que mientras se encontraba en ese lugar, llegó un joven que comentó que había sido traído desde Punta Arenas, que era estudiante de la Universidad Técnica del Estado en Temuco y que le habían asegurado que nada malo le iba a suceder. El Tribunal le exhibe la fotografía de fs. 340. El deponente señala: La persona que aparece en la fotografía que se le exhibe corresponde al joven que aseguró haber sido traído detenido desde Punta Arenas. Que durante ese mismo día en que estuvo detenido en la guardia del Regimiento Tucapel pudo ver al abogado Alfonso Podlech vestido de traje de campaña, calzando botas y dos pistolas al cinto. Este hombre entró al guardia, visiblemente alterado, y comenzó a increpar a los soldados que se encontraba allí reunidos. Les dijo más o menos textualmente lo siguiente: "Oye po' esta es la última vez que les digo, no me dejen entrar más a estas mujeres y viejas de mierda, que me tienen loco con sus reclamos. Yo ya se los dije y si no me hacen caso los hago fusilar a ustedes también". Todo esto pudo escuchar, así como también pudo ver a Podlech, porque la puerta de la celda donde estaban los detenidos se le quedó abierta a un soldado. Poco rato después entró al calabozo el mismo soldado que anteriormente le había pedido que le diera un plato de comida al detenido torturado. Se le veía muy apesadumbrado por lo que había sucedido con el abogado Podlech, al punto que se quejó diciendo que estaba

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

harto de lo que estaba sucediendo y que no hallaba la hora de que todo esto terminara. Además indicó hacia el lugar donde Podlech había estado señalando que ahora mandaban ellos, como dejando entrever que había personas ajenas al regimiento con mando. Al final de ese día lo dejaron en libertad, sin que le hubiesen preguntado nada. Sin embargo, a los pocos días fue detenido por carabineros de Padre las Casas, quienes lo condujeron a la tercera comisaría de esa comuna. Allí fue entrevistado brevemente por el teniente Morales Cravero, a quien ubicaba, porque era sobrino de un abogado de apellido Morales, que llevó su caso años más tarde. Esta persona le preguntó su nombre y después ordenó que aguardara en una sala anexa a la guardia. Allí había muchos detenidos, entre ellos campesinos y hasta niños, situación que lo impactó. También fue liberado ese día, sin que se le formularan cargos o se le hicieran preguntas. Le ordenaron que volviera a firmar cada dos días a la comisaría. Estuvo firmando en Padre Las Casas durante dos semanas hasta que nuevamente fue detenido por militares, quienes lo trasladaron al regimiento Tucapel. Al igual que en la oportunidad anterior, nadie le preguntó nada. Cada cierto rato llegaba alguien con una carpeta y les preguntaba los nombres a quienes estaban detenidos en la guardia. Casi oscureciendo fue llevado junto a otras personas a la cárcel de Temuco. Allí estuvo casi un mes, tras lo cual fue liberado nuevamente. No puede dejar de mencionar un hecho que ocurrió mientras estaba detenido en la cárcel. Que un día apareció en el penal el detective Carlos Luco Astroza, quien era oriundo de Cunco al igual que el deponente, se conocían desde niños. Quien cuando lo vio se sorprendió y le preguntó ¿te trajeron? Se acercó a él y le dijo muy bajo que no se preocupara, que él iba a mover sus influencias para que nada le pasara. Esta persona se hacía acompañar por dos o tres más, quien a su parecer venía a interrogar a un detenido. Señala que en una oportunidad durante el mes de octubre de 1973 llegó hasta su domicilio una patrulla militar al mando de un suboficial de ejército, cuyo apellido era Vidal, al parecer de nombre Luis o Edmundo, y era reservista reactivado después del 11 de septiembre. Esta persona le dijo que tenía órdenes para llevarlo detenido, pero que no lo iba a hacer en esa oportunidad porque se había portado muy bien con su mujer tiempo atrás, comentando el contexto.

A.110. Raúl Cerda Aguilaf (de 19 años a la época de los hechos). Quien declaró a fs.1.660 a fs. 1.662 (Tomo V); de fs. 3.804 a fs. 3.805 (Tomo XI) y de fs. 3.806 (Tomo XI).

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

En declaración judicial de fecha 25 de abril de 2012, rolante de **fs.1.660 a fs. 1.662 (Tomo V)** (cuya copia consta a fs. 3.804 a fs. 3.805 Tomo XI), ratifica sus declaraciones y en lo pertinente refiere que, para septiembre de 1973, estaba por salir del servicio pues duraba un año. Además, estaba listo para irse con un grupo de soldados conscriptos a la escuela de suboficiales específicamente a Tejas Verdes donde iba a recibir instrucción de ingeniería. Preguntado dice que hubo muchos detenidos en el regimiento Tucapel después del 11 de septiembre de 1973. Estos eran mantenidos en la guardia de la unidad, en el “gimnasio chico y en el gimnasio grande”. A cargo de los interrogatorios de estos detenidos, había un grupo de oficiales, suboficiales y civiles. Entre los oficiales recuerda al capitán Nelson Ubilla Toledo, a los tenientes Jaime García Covarrubias y Alejandro Rubio Valladares y a los subtenientes Raimundo García Covarrubias, Manuel Espinoza Ponce, y Carlos Oviedo Arriagada; de los soldados clase recuerda al suboficial mayor Quilodrán, sargento Silva San Martín, sargento Mario Arias Díaz y Alberto Cerda Miere, este último conductor, Víctor Juvenal Del Río Poveda, Albino Krause Álvarez. Estos dos últimos andaban de civil y trabajan en inteligencia. Todos ellos pertenecían a la plana mayor, que dependía de Ubilla. Que también recuerda a Luis Peña Andaúr, quien siempre salía con el teniente Rubio Valladares. Al capitán Ubilla, lo recuerda como jefe de inteligencia del regimiento. Al teniente Jaime García lo recuerda porque éste era el encargado de deportes del regimiento y le hizo practicar box por un tiempo. El capitán Vásquez Chahuán era alto y usaba una boina, este oficial era el comandante de compañía del subteniente Espinoza. Al teniente Rubio Valladares lo recuerda porque era de su compañía y fue éste quien se llevó a su hermanastro, Alejandro Flores, a la base aérea Maquehue donde lo mataron. De los soldados clase recuerda como encargados de tratar con detenidos al sargento Lizama, cabo Castro, cabo Schaaff, cabo Barrenechea, este último del grupo especialmente entrenado para estos efectos. También recuerda al sargento Mario Arias Díaz, que era de la segunda de cazadores. De la compañía de cazadores participaban en asuntos con los detenidos el sargento Santisteban, sargento Guajardo, cabo Labraña Luvecce y al conscripto Sigisfredo Melo. De su compañía recuerda como relacionados al tema de los detenidos al teniente Rubio, Sargento Lizama, Luis Barrenechea, Guillermo Castro, Rubén Morales, y Nelson Schaaff; de los conscriptos como parte de la patrulla que formó el teniente Rubio a Narciso Curihual Fuentes, Pedro Misael Elgueta Muñoz, Juan Carlos Marchant

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Sanhueza, Waldo Eugenio Palma Álvarez, Luis Quezada Chandía o Jesús Quezada Manosalva, Ricardo Rodríguez Muñoz, Luis Saldías Goyeneche, uno de apellido Sepúlveda que era chico y siempre salía con Rodríguez y Juan Vargas Manquilef. Explaya que era conocido por todos en el regimiento que los detenidos eran torturados en una dependencia ubicada en la compañía de la plana mayor y servicios. Hasta ese lugar llevaban a los detenidos para interrogarlos, pudiendo ver a los oficiales antes indicados pasar con detenidos hacia ese lugar o mandar en su nombre a buscar detenidos al gimnasio o a la guardia para ser llevado a la sala mencionada. Que esto lo sabe porque su compañía estaba encargada de efectuar guardias en el perímetro interior del regimiento y constantemente podían ver estas actividades. Se le pregunta por otros hechos.

En declaración judicial de fecha 17 de abril de 2015, rolante a **fs. 3.806 (Tomo XI)** vienen en ratificar declaraciones y solicita no ser careado con Jaime García Covarrubias.

A.111. Juan Nicolás Pérez Zúñiga (19 años a la época de los hechos). **En declaración judicial** de fecha 17 de mayo de 2012, rolante de **fs. 1.663 (Tomo V)**, afinsa que los conscriptos Marihueque y Gerardo Paredes estaban trabajando en el casino de oficiales desde antes de 1974 por lo que ellos pueden tener mayores antecedentes de lo que sucedía allí en aquel tiempo. En ese tiempo estaba el cabo Aguilera como mayordomo. En cuanto a los comentarios que los oficiales hacían en el casino puede señalar que escucho en más de una oportunidad hablar al teniente Espinoza, a Maldonado y a Raimundo García Covarrubias hablar acerca de detenidos. Ellos expresaban que habían detenido personas y que las estaban interrogando, acerca de la existencia de armas y de explosivos. Sin embargo, nunca se explayaron en sus dichos, pues esperaban a que él terminara de atenderles la mesa para continuar con sus comentarios. Aun así, pudo escuchar este tipo de conversaciones entre ellos. Que el teniente Espinoza era apodado "el loco" puesto que tenía una conducta muy extraña. Recuerda que este oficial gustaba de beber aguardiente con pólvora. Este acto lo hacía en el casino de oficiales, acompañado la mayoría de las veces por el teniente Maldonado y en algunas por el teniente Raimundo García Covarrubias. En una oportunidad lo encerraron en la caja dónde se guardaba el licor y comenzaron a dispararle desde afuera. "Se volvían locos con ese trago". Se le pregunta por otros hechos.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

A.112. Erasmo Ricardo Villanueva Simón (21 años a la época de los hechos). Quien declaró a fs. 1.674 a fs. 1.677 (Tomo V) y de fs. 4.221 a fs. 4.224 (Tomo XII).

En declaración judicial de fecha 18 de junio de 2012, rolante de **fs. 1.674 a fs. 1.677 (Tomo V)** (cuya copia consta a fs. 4.221 a fs. 4.224 Tomo XII), soslaya que para el año 1973 se desempeñaba en una oficina de contabilidad de Sergio Riquelme Inostroza. Que no tenía militancia política, un día del mes de noviembre del año 1973, no recuerda fecha exacta, fue al Seguro Social a efectuar un trámite. En ese lugar la señora María Antonieta Meza Moncada le preguntó por la dirección de la familia de Alejandro Flores Rivera, pues quería ir a darle el pésame por la muerte de éste. A su parecer esta señora estaba siendo vigilada, pues a los pocos días fue detenida y llevada al regimiento Tucapel, donde fue brutalmente torturada. Días más tarde llegó hasta su casa una patrulla de militares del regimiento Tucapel, quienes allanaron su domicilio. Esto ocurrió en horas de la tarde, alrededor de las 15:00 horas por lo que se encontraba en la oficina. Recibiendo un llamado telefónico desde su casa en el que le contaron lo que sucedía. Se dirigió hasta allá y pudo ver que un grupo de soldados conscriptos fuertemente armados estaban en las afueras. Un suboficial, cuyo grado, características y nombre no recuerda, le dijo que por orden del capitán Nelson Ubilla Toledo quedaba detenido. Lo llevaron a la guardia del regimiento Tucapel y allí fue ingresado a una dependencia contigua, donde había varios detenidos más, con quienes no conversó. Estuvo dos días en ese lugar sin que le dijeran nada. Durante ese período algunos conscriptos les llevaban alimentos y también los sacaban al baño. Que también durante ese lapso iban sacando a los detenidos hacia otro sector, quienes regresaban más tarde con visibles signos de haber sido torturados. En ese lugar existía un banco similar a los que están en las plazas; lugar que era utilizado para dejar a los prisioneros que quedaban en muy malas condiciones. Al tercer día fue sacado de la guardia y llevado hacia una dependencia ubicada en una de las cuadras donde se alojaban los conscriptos. Esta cuadra era la tercera construcción dispuesta hacia el poniente de la entrada al regimiento. En esa sala cuando entró pudo ver una mesa larga, en la que estaban sentadas cinco personas, entre las que puede recordar un oficial vestido con uniforme de la fuerza aérea y cuatro civiles, uno de los cuales era el abogado Alfonso Podlech Michaud, persona a quien ubicaba de vista con anterioridad.

También pudo ver una banca similar a las de las plazas. No recuerda quién le preguntó el nombre, pero luego de que revelara su identidad el abogado Alfonso Podlech buscó en un tarjetero que tenía junto a él sobre la mesa y sacó un papel. Luego de mirarlo dio una orden señalando que quedaba detenido y que al día siguiente pasaba a interrogatorio. Entonces, lo llevaron de vuelta a la sala junto a la guardia. Que al día siguiente apareció su actual cuñado Oscar Inostroza Segura junto a dos conscriptos más. Este le dijo que por órdenes superiores debía llevarlo a interrogatorios. Lo sacó de la guardia y tras caminar algunos pasos y ponerse detrás de la sala de guardia procedió a vendarle la vista. Sin embargo, por la orientación en la que quedo antes de ser vendado y la dirección que siguieron al caminar, pudo percatarse que se dirigían hacia la misma sala, donde el día anterior había sido interrogado por Podlech. En ese lugar lo hicieron desvestir y lo sentaron en la banca que había visto el día anterior. Acto seguido comenzaron a aplicarle electricidad con un magneto. Esto lo dedujo, porque a su costado izquierdo sintió que una persona hacía girar una manivela tras lo cual comenzaron las descargas. Detallando partes de su cuerpo donde la aplicaron electricidad. Que los torturadores le preguntaban por los nombres de las personas que se reunían en la casa de Alejandro Flores, por la ubicación de armas, y por las supuestas trincheras que habían armado en ese lugar. En total presume que eran cinco a seis personas y deduce que deberían haber sido las mismas personas que vio el día anterior. Que por el lenguaje utilizado por las personas presentes en la sesión de tortura presume que era gente con instrucción y cultura superior a la de un soldado clase. Que al día siguiente fue sacado nuevamente a la sesión de torturas, pero esta vez por otros conscriptos. En esa oportunidad fue nuevamente torturado al igual que el día anterior. Recuerda que uno de los torturadores le dijo que ellos habían matado a Alejandro Flores y a las personas que murieron en el supuesto asalto al polvorín. De estas últimas conocía a un señor de apellido Molina, a quien le faltaba un brazo. Recuerda, además, que después de la segunda sesión de torturas, al día siguiente llegó un militar de apellido Morales, a quien había conocido años antes en el regimiento Miraflores como el cabo primero Morales, cuando hizo el servicio militar en ese lugar. Esta persona vestía de civil y lo sacó de la sala de guardia llevándolo hacia un lugar apartado detrás de estas. Allí habló de buena manera tratando de que le diera información sobre nombres de comunistas o miristas. Sin embargo, nada le dijo pues no conocía a nadie.

Posteriormente, alrededor del octavo día de reclusión en el Tucapel fue llevado a la cárcel en un camión juntó a cuatro o cinco personas más. En ese lugar estuvo recluido hasta el 22 de diciembre de 1973. Una semana antes fue llevado al regimiento Tucapel y allí lo ingresaron a una dependencia ubicada hacia el fondo de la unidad militar, donde se entrevistó con el abogado Alfonso Podlech. En ese lugar esta persona le dijo que por decisión del tribunal quedaba en libertad a partir del 22 de diciembre, por lo que debía avisarle a su familia para que se preparara. Nadie le dio ninguna explicación por lo sucedido y ante el temor que esto le generó decidió irse a Argentina, donde estuvo 20 años.

A.113. Hernán Raúl Quiroz Barra (29 años a la época de los hechos). Quien declaró a fs. 1.692 a fs. 1.694 (Tomo V); de fs. 1.770 a fs. 1.771 (Tomo V); de fs. 1.772 (Tomo V); de fs. 1.774 (Tomo V); de fs. 1.777 a fs. 1.782 (Tomo VI); de fs. 1.809 a fs. 1.810 (Tomo VI); de fs. 1.811 a fs. 1.812 (Tomo VI); de fs. 1.815 a fs. 1.816 (Tomo VI); de fs. 3.661 a fs. 3.622 (Tomo X); de fs. 3.623 a fs. 3.628 (Tomo X); de fs. 3.629 a fs. 3.630 (Tomo X); de fs. 3.631 a fs. 3.632 (Tomo X); de fs. 3.633 a fs. 3.634 (Tomo X); de fs. 3.680 a fs. 3.683 (Tomo XI) y de fs. 3.834 a fs. 3.835 (Tomo XI).

En declaración extrajudicial de fecha 18 de abril de 2012, rolante de **fs. 1.692 a fs. 1.694 (Tomo V)** en lo concerniente dice que, una vez llegado el 11 de septiembre de 1973, y debido a los hechos que ocurrieron ese día fue destinado por el mando de su unidad a cumplir funciones al interior del Regimiento de Infantería N°8 Tucapel de Temuco. Recordando que el grupo de funcionarios policiales que fueron asignados al regimiento estaba compuesto por el subcomisario Aquiles Poblete Müller, el detective primero Rigoberto Ortiz Lara, detective segundo Luis Morales Toledo, detective cuarto Daniel San Juan Clavería y el conductor de vehículos policiales Carlos Luco Astroza. Que fue el prefecto Carlos Aranda Salazar quien dispuso la concurrencia al regimiento Tucapel, recordando que trabajaban en esa unidad desde las 9:00 hasta las 13:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas de lunes a viernes, antes de concurrir diariamente al regimiento debían pasar a la comisaría judicial a firmar. Que una vez que llegaron al regimiento Tucapel, se les puso bajo las órdenes de la Fiscalía Militar la cual estaba a cargo del mayor Luis Jofre Soto, siendo su ayudante el capitán Nelson Ubilla Toledo. Se le asignaron labores de toma de declaraciones a detenidos, efectuar citaciones, detenciones y allanamientos ordenados por la Fiscalía Militar.

Que en más de un algún allanamiento encontraron armamentos y explosivos, también señala que más de alguna detención debió obedecer a alguna implicancia política de los detenidos. Que la dependencia que se le asignó correspondía a una oficina ubicada en la comandancia del regimiento. No recuerda la identidad de algunas de las personas que en su momento le tocó tomarle declaración o detener. Dice que nunca sometió a interrogatorio bajo tortura a algún detenido que haya llegado al regimiento, que desconoce en qué dependencia se pudieron haber efectuado estas labores, ya que, el personal militar "limitó nuestro transito al interior del regimiento". Que con el paso de los días que llevaban trabajando en el regimiento, fueron separados del grupo de detective el subcomisario Aquiles Poblete Müller y el detective Rigoberto Ortiz Lara, ignorando por su parte de quien pasaron a depender, lo que sí tiene claro, es que diariamente llegaban al regimiento. Comunica que el grupo de detective quedó a cargo del detective segundo Luis Morales Toledo, con quien siguieron cumpliendo las funciones que les asignaba la Fiscalía Militar. Señala que el fiscal militar ordenó que los detenidos que no colaboraran con ellos fueran entregados directamente al teniente de ejercito Manuel Espinoza Ponce, quien se haría cargo de estas personas. En cuanto a los sargentos Schonner y Moreno, los recuerda trabajando como dactilógrafos en una oficina que estaba en la misma dependencia donde ellos trabajaban, recordando haberlos visto en más de alguna oportunidad tomándoles declaraciones a detenidos. Sobre la permanencia al interior del regimiento Tucapel de efectivos de la Fuerza Aérea de Chile y de carabineros, dice que efectivamente trabajaron funcionarios de esas instituciones cumpliendo los mismos horarios que ellos, recordando a un carabinero de nombre Omar Burgos Dejean, quien se desempeñaba en la oficina de archivos junto a otro carabinero cuya identidad no recuerda. Que también había dos funcionarios de la fuerza aérea que también trabajaban en la oficina de archivo, cuyas identidades no recuerda, pero que no trabajaban de uniforme. Respecto a las funciones del conductor de vehículos policiales Carlos Luco Astroza, precisa que estaba a disposición de ellos para efectuar las labores indicadas, pero que este siempre quedaba en la guardia del regimiento a espera de sus requerimientos. Ignorando si este salió junto al personal del ejército. Se le pregunta por otros hechos los que dice desconocer. Y agrega que siempre se enteraban de fallecimiento de detenidos al interior del regimiento durante las mañanas y de acuerdo con la información que se les

entregaba a las personas, fallecían, producto de disparos efectuados por personal militar por intentar fugarse del regimiento en horas de la noche. Para estos efectos, siempre eran emitidos bandos militares. Reiterando que mientras estuvieron agregados al regimiento siempre estuvieron bajo las órdenes de la Fiscalía Militar, recordando que ésta, estaba asesorada por el abogado Alfonso Podlech Michaud y a los actuarios Quilodrán y Toloza.

En declaración judicial de fecha 04 de junio de 2003, rolante de **fs. 1.770 a fs. 1.771 (Tomo V)**, replica que al 11 de septiembre de 1973 se desempeñaba en la Comisaría de la Policía de Investigaciones de Temuco. En ese entonces era detective cuarto y por orden del prefecto de la unidad Carlos Aranda Salazar, debió presentarse al regimiento Tucapel, junto al comisario Aquiles Poblete Müller a cargo del grupo, subcomisario Rigoberto Ortiz Lara, detective Luis Morales, Daniel San Juan Claveria y conductor Carlos Luco Astroza. Precisa que concurrieron luego que se presentaran ante los militares los funcionarios del departamento de informaciones de ese entonces, los que fueron rechazados por estos, siendo devueltos a la unidad. Que al presentarse en la ayudantía del regimiento Tucapel fueron derivados al señor fiscal militar de ese entonces Luis Jofre Soto, quien les indico que debían cumplir las mismas funciones que cumplían en investigaciones, pero al mando de este. Las que consistían en detenciones, citaciones, allanamientos, búsqueda de armas, bombas. Todas las órdenes que cumplieron fueron mediante decreto de la fiscalía, tal como se hacía con los tribunales ordinarios de justicia. Que muchas de esas órdenes las cumplieron con resultados, es decir, encontraron armas, explosivos, bombas enterradas en diferentes domicilios de Temuco. También en dichas diligencias lograron ubicar y detener a algunas personas, siendo estas puestas a disposición de la fiscalía. Manifiesta que a ellos se les asignó una oficina en el interior del regimiento Tucapel frente a la fiscalía misma. En ella tomaban declaraciones a los detenidos. Respecto a los detenidos “difíciles” eran entregados al teniente de ejército de apellido Espinoza, quien era comando, boina negra, alto de ojos claros, le decían “el gato Espinoza”. Que este oficial era el encargado del interrogatorio de esas personas difíciles, precisa que se trataban de detenidos que “se iban de negativa y no querían reconocer, habiéndoles encontrado explosivos o armamentos en su poder”. Personalmente no vio que Espinoza haya golpeado a alguno de los detenidos, ni tampoco dijo algo al respecto, porque era un hombre

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

muy reservado, y los militares tenían mucha desconfianza hacia los funcionarios de investigaciones. Que del teniente Espinoza nunca supo su nombre completo y le consta que estuvo varios meses trabajando en la unidad. En cuanto a Alfonso Podlech Michaud, sabe que este asesoraba al fiscal militar Luis Jofre Soto, en la parte legal. Este era abogado y concurría en esa época al regimiento donde lo vio personalmente. Que a petición de Podlech, se llevó a la fiscalía gente profesional, esto es, funcionarios actuarios de los tribunales de justicia. Que también tiene conocimiento que este pidió asesoría a un Ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, para llevar un buena forma el funcionamiento de la Fiscalía Militar. No recuerda los nombres que se le dan a conocer, dando a conocer su situación personal después de haber declarado.

En declaración extrajudicial de fecha 08 de noviembre de 2002, rolante de **fs. 1.772 (Tomo V)** y que continua a **fs. 1.774 (Tomo VI)** (cuya copia íntegra se encuentran 3.621 a fs. 3.622 Tomo X) insiste que mientras cumplía labores en la Comisaría de Investigaciones de Temuco, se produjo el pronunciamiento militar, ocurrido el 11 de septiembre de 1973. En ese entonces el jefe de su unidad el prefecto Carlos Aranda Salazar, llamo a su oficina a seis funcionarios, oportunidad en la cual les comunicó que tenían que presentarse en el regimiento Tucapel, sin entregarles información. El grupo iba a cargo del comisario Aquiles Poblete Müller, seguido por Rigoberto Ortiz Lara, Luis Morales, Daniel San Juan Clavería y como conductor Carlos Luco Astroza. Que estuvo agregado un poco más de un año a esta función, ya que, fue uno de los últimos detectives que regreso a la comisaria de investigaciones. Que el mismo 11 de septiembre se presentó en el regimiento Tucapel donde fueron recibidos por el fiscal militar mayor Luis Jofre Soto, quien les señaló que desde ese momento tenían que cumplir órdenes judiciales emanadas de la fiscalía. Las órdenes las impartía el señor fiscal directamente al grupo comisario Poblete, y posteriormente salían a darle cumplimiento. En estas labores le correspondió realizar diferentes investigaciones, citaciones de personas y también detenciones. Que cuando se detenía a una persona, era interrogada en los cuarteles de investigaciones y luego puesta a disposición de la fiscalía. En algunas oportunidades cuando se trataba de detenidos “difíciles” eran entregados al teniente de ejército de apellido Espinoza, quien se hacía cargo de su interrogatorio. No recordando el nombre de detenidos que le haya correspondido entregar a este oficial de ejército. Que su desplazamiento dentro del regimiento

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

estaba un poco restringido, ya que, para el ingreso pasaban por la guardia, luego contiguo a esta sala estaba una dependencia habilitada como calabozo. Por el frente de la guardia estaba la sala de la comandancia, en cuyo interior funcionaba la fiscalía. A un costado de la oficina de la fiscalía existía una oficina donde trabajaban los detectives. La oficina estaba equipada con un escritorio, dos máquinas de escribir y unas cuantas sillas. Allí se interrogaba a los presos, se le tomaba una declaración y si era detenido difícil eran entregados al teniente Espinoza, quien los llevaba hacia el interior del regimiento, ignorando que tratamiento les daba. Dice que el teniente Espinoza trabajaba con la compañía de comandos. A **fs. 1.774 (Tomo VI)** recuerda que en esa fecha la fiscalía estaba integrada por Luis Jofre que era el fiscal, "El chico Adrián" quien era funcionario judicial que estaba agregado, un señor "Tolosa" actuario del Poder Judicial, un militar de apellido Quilodrán y tres detectives Morales, Daniel San Juan y él. Que cumplían horario de oficina y sus labores estaban direccionadas a tomar declaraciones. No le correspondió ver detenidos en malas condiciones debido a malos tratos. Que tampoco supo de muerte de personas que hayan ocurrido dentro o fuera del regimiento Tucapel. Dice no tener conocimiento quienes eran los oficiales de ejército que estaban a cargo de la sección de inteligencia del regimiento. Se le pregunta por otros hechos.

En declaración judicial de fecha 24 de junio de 2013, rolante de **fs. 1.777 a fs. 1.782 (Tomo VI)** (cuya copia consta a fs. 3.623 a fs. 3.628 Tomo X) esboza que estuvo prestando funciones en el regimiento Tucapel desde el 11 de septiembre de 1973 hasta diciembre 1974. El jefe de Inteligencia era el capitán Nelson Ubilla Toledo, pero desconoce que otros militares componían ese departamento. Que esto lo supo por las publicaciones que salieron en el periódico hace, enterándome por ese medio que éste era el jefe de inteligencia en el regimiento Tucapel. Que el grupo de detectives que fue comisionado para trabajar las órdenes emanadas de la Fiscalía Militar estaba a cargo del comisario Aquiles Poblete Müller, integrándolo además del subcomisario Rigoberto Ortiz Lara (fallecido); los detectives Luis Morales Toledo (fallecido); Daniel San Juan Clavería y él. Que además, fue destinado como conductor don Carlos Luco Astroza. Respecto de las actividades que le correspondió realizar mientras estuvo en el regimiento Tucapel puede señalar que tuvo que cumplir órdenes emanadas de la Fiscalía Militar. Estas eran entregadas por el Fiscal Militar Luis Jofre Soto, y ellos

salían a cumplirlas. Las órdenes consistían en citar personas, aprehender a otras y llevar a cabo investigaciones. Recordando que en entre las personas que le correspondió detener, sólo recuerda a Víctor Maturana Burgos, pero fueron más. Mencionando controversias posteriores con dicha persona. Que cuando llegaron al regimiento Tucapel había más de ochocientos detenidos en el patio de la unidad, los que permanecieron por lo menos cinco días allí, ya que, ellos debían tomarles declaraciones y anotar sus datos. Esta tarea la realizaban escribiendo a mano; puesto que no tenían otros medios. Le parece que los detenidos fueron mantenidos en un gimnasio que había al fondo del patio de la unidad o en las caballerizas, no recuerda exactamente. Sin embargo, ellos siempre permanecían tomando declaraciones en el patio. En esa tarea fueron ayudados por el suboficial Schonherr de ejército. El Tribunal le pregunta si le correspondió participar en interrogatorios de detenidos en el regimiento Tucapel. El declarante responde: “Sí me correspondió hacerlo, pero siempre en la oficina que teníamos asignada en el recinto de la comandancia”. El Tribunal le pregunta si le correspondió participar en torturas de detenidos en el regimiento Tucapel. El deponente señala: “nunca”. El Tribunal le pregunta si supo que algunos detenidos hayan sido apremiados físicamente en el regimiento Tucapel. El deponente señala: “no supo”. Que un mes y medio o dos después de haber llegado a trabajar en el regimiento, el comisario Aquiles Poblete Müller y el subcomisario Ortiz, regresaron al cuartel de investigaciones y a fines de diciembre se fue el resto, salvo Luco y él, quienes se quedaron por petición expresa del fiscal Jofre. Quedándose como enlace entre el regimiento e investigaciones. Que nunca le correspondió salir con personal distinto a los de su institución, es decir, no salió con militares. Respecto de los dichos expresados en su declaración extrajudicial sobre los detenidos difíciles y que eran entregados al teniente Espinoza, esto era una orden expresa que el mayor Jofre le dio a su jefe el comisario Poblete. En este sentido, muchas veces llegaron personas detenidas por patrullas de carabineros, militares o de la fuerza aérea, que venían catalogadas como extremistas, a quienes interrogaban en “nuestra oficina”. Que estas personas eran derivadas al teniente Espinoza por orden del mayor Jofre. Para esto ellos llamaban a la guardia para que un soldado viniera a buscar al detenido, el que era llevado al calabozo de esa dependencia. Desde ese lugar el detenido era sacado por algún conscripto, más tarde para ser llevado a la presencia del teniente Espinoza. Desconoce hacia dónde era llevado ni quienes lo

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

interrogaban. Respecto a las personas que resultaban muertas tras intentar fugarse o quitarles el arma a los centinelas, puede señalar que este tipo de noticias ellos las recibían cuando llegaban en la mañana a trabajar al regimiento. Sin embargo, nunca tuvieron mayores antecedentes sobre cómo ocurrieron los hechos, ni tampoco podían preguntar. Sólo sabe que estos hechos acontecían durante la noche cuando ellos no estaban en la unidad. Se le pregunta por otros hechos. Musita que no supo que alguna persona falleciera al interior del regimiento producto de haber recibido descargas eléctricas. Se le consulta otros hechos y se le lee declaración de Aquiles Poblete Müller de fs. 3.223 a fs. 3.224, señala: que no es cierto que él haya interrogado detenidos aplicándole corriente. Que esta persona miente, con el afán de perjudicarlo. Que tampoco es cierto que él interrogara personas en una dependencia distinta a la oficina que estaba junto a la comandancia, ni que dependieran del capitán Ubilla. Tiene entendido que este oficial era el ayudante del comandante Iturriaga. Que este los recibió cuando llegaron al regimiento y hacía las veces de ayudante. No sabe que funciones cumplía Jaime García Covarrubias. El Tribunal le lee la declaración prestada Daniel Amoldo Aguirre Mora de fs., 3.231 a fs. 3.232. El deponente señala: que no es efectivo lo que el señor Aguirre señala en sus dichos. Nunca prestó colaboración con el señor Podlech antes del 11 de septiembre de 1973, ni menos le entregó información de inteligencia. Si bien sabía que el señor Podlech era un abogado de Temuco, recién lo conoció personalmente cuando comenzó a trabajar para la Fiscalía Militar en 1973. Que este abogado era el asesor de la fiscalía y se presentaba en ese lugar dos o tres veces a la semana. Se imagina que asesoraba al fiscal Jofre en la tramitación de los procesos. Respecto de los dichos de Aguirre Mora y que dice relación con detenidos que resultaron muertos en las torturas, indica que, no participó ni tuvo conocimiento de esto. Agrega que, a diez días de llegados al regimiento, Aquiles Poblete Müller y Ortiz fueron separados de ellos, por orden del fiscal Jofre, “quizás, y se pusieron a trabajar en otros lados, ignoro dónde”. No sabe que funciones cumplieron, pero no volvieron a trabajar a la oficina. El Tribunal le lee declaración prestada por José Raúl Insunza Reyes, de fs. 3.310 a fs. 3.313. El deponente señala: que no recuerda a la persona cuya declaración se le lee, pero que sus dichos son falsos. Nunca salió con militares a efectuar detenciones, ni interrogó personas en dependencias de la compañía de plana mayor. Tampoco trabajó para el capitán Ubilla. No sabe por qué motivo esta

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

persona lo sindicando participando de estos hechos. Que quien puede avalar sus funciones en la Fiscalía Militar es don Alfonso Podlech, ya que, con éste ellos alcanzaron a trabajar cuando fue fiscal. Rectifica aquella parte de su declaración en la que señaló que la orden de entregar a los detenidos se la dio al mayor Jofre al comisario Poblete, porque en realidad se la dio al detective Morales, puesto que Poblete ya había sido separado del grupo junto con Ortiz y trabajaban en otra parte.

En diligencia de careo con José Raúl Inzunza Reyes, de fecha 05 de julio de 2013, rolante de **fs. 1.809 a fs. 1.810 (Tomo VI)** (cuya copia consta a fs. 3.629 a fs. 3.630 Tomo X), proclama que ratifica sus declaraciones fs. 3.436 a fs. 3.441, las que constan en estos autos a fs. 3.623 a fs. 3.628 (Tomo X). No reconoce a la persona con quien se le carea. El Tribunal le da a conocer que se trata de José Raúl Inzunza Reyes. El deponente señala que: nunca conoció a esta persona con quien se le carea. Agrega que todas las detenciones que efectuaron estaban respaldadas por un decreto judicial emanado de la Fiscalía Militar. No sabe el motivo por el cual esta persona la sindicando efectuando las actividades que él señala. Que está equivocado, que había más detectives trabajando en el regimiento. Que él estuvo en el regimiento Tucapel hasta mediados de 1974 más o menos. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo con Daniel Arnoldo Aguirre Mora, de fecha 05 de julio de 2013, rolante de **fs. 1.811 a fs. 1.812 (Tomo VI)** (cuya copia consta a fs. 3.631 a fs. 3.632 Tomo X), ratifica declaraciones de fs. 3.436 a fs. 3.441, las que constan en estos autos a fs. 3.623 a fs. 3.628 (Tomo X). No reconoce a la persona con quien se le carea. El Tribunal le da a conocer que se trata de Daniel Aguirre Mora. El deponente señala que: recuerda a la persona con quien se le carea, porque en 1973 era su jefe en el cuartel de investigaciones de Temuco. Que el señor Aguirre se equivoca cuando dice que el suscrito y Luco tuvieron algo que ver con los apremios sufridos por los señores Apablaza y Nambrard, por cuanto ellos fueron detenidos por la fuerza aérea y nunca estuvieron en el regimiento Tucapel. Por otra parte él sólo atendió al señor Podlech en el cuartel de investigaciones, en una oportunidad en que éste se presentó en la guardia y solicitó subir al segundo piso a la oficina de informaciones, donde trabajaba el detective Ortiz. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo con Libardo Schwartenski Rubio, de fecha 05 de julio de 2013, rolante de **fs. 1.815 a fs. 1.816 (Tomo VI)** (cuya copia consta a fs. 3.633 a fs. 3.634 Tomo X y a fs. 3.834 a fs. 3.835 Tomo XI), ratifica declaraciones de fs. 3.436 a fs. 3.441, las que constan en estos autos a fs. 3.623 a fs. 3.628 (Tomo X). Reconoce a la persona con quien se le carea como Libardo Schwartenski Rubio quien en 1973 era conscripto del regimiento Tucapel y le llevaba la correspondencia a la Fiscalía Militar. Llevaba órdenes que llegaban de diferentes instituciones. Insiste que nunca trabajó en la compañía de plana mayor, ni presenció interrogatorios en donde se torturaran personas. Que nunca trabajó con los tenientes que menciona el señor Schwartenski. Se mantiene en sus dichos.

En declaración judicial de fecha 27 de octubre de 2021, rolante de **fs. 3.680 a fs. 3.683 (Tomo XI)**, en lo pertinente el Tribunal le consulta quién le ordenaba interrogar a los detenidos. El deponente indica: que los militares entregaban detenidos en la oficina que ellos tenían y ordenados por el señor Poblete, interrogaban a los detenidos. Luego los mismos militares retiraban a los detenidos desde la oficina. Que la oficina donde estaban es la que se vio en la inspección ocular. El suscrito trabajaba con San Juan y Morales, en otra oficina estaba Poblete y Ortiz, pero estos últimos se fueron a trabajar al interior del regimiento con el grupo que tenía Ubilla. Recuerda que todas las tardes el comisario Poblete llegaba a pedir cuenta de sus labores y este era quien daba cuenta a los militares. Que mientras estuvo tomando declaraciones, nunca llegaron oficiales de ejército. Tampoco recuerda que el mayor Jofré haya ido a ellas. Los actuarios estaban en la oficina contigua. Sobre la situación física de los detenidos, indica que todos quienes interrogaron estaban en buenas condiciones y sólo interrogó a hombres. Desconoce de dónde venían las personas detenidas, solo les daban las orden de interrogar. No puede precisar un número exacto de personas interrogadas, pero que pueden haber sido más de cien. Que a ellos les llegaba un detenido con un temario, estas preguntas tenían que ver con asuntos políticos y con el correr del tiempo se ha dado cuenta que la información que les entregaban, lo que decía de los detenidos, era falso. El Tribunal le da a conocer la identidad de las víctimas de un hecho y lee lo pertinente de las declaraciones del testigo M.C.S, rolante de fs. 2.309, de fs. 2.638; de fs. 3.109 y la de fecha 16 de agosto de 2021. El deponente indica: que no solo ellos estaban ahí para

interrogar. El capitán Ubilla solicitó a investigaciones más personal. Cuando empezaron a morir detenidos a cargo del grupo del capitán Ubilla, el señor Ortiz se retiró y les dijo “no se metan por ningún motivo a trabajar con ese grupo, porque a los militares se les están muriendo los detenidos”. Comunica que un día Poblete lo fue a buscar a la oficina y le dijo que se integrara a ese grupo, pero se negó. La propuesta también se la hizo a Morales, quien también se negó. Desde ese momento Poblete le dijo que le iba a dar de baja por incumplir las órdenes. Que ya dio la relación de los detectives que cumplieron esas funciones en el regimiento. Sobre las muertes de personas al interior del regimiento dice que debió enterarse la oficialidad del regimiento, porque es un hecho grave. Que es posible, pero no le consta lo que dice el testigo M.C.S. sobre las torturas que efectuaban los militares y que se le murieron detenidos, pero que ellos los detectives no estaban ahí, por lo menos San Juan, Morales y el deponente, quienes trabajaron en la comandancia. En cuanto a la dinámica diaria, puede decir que llegaban a las 9:00 hasta las 13:00 horas, iban a almorzar a sus domicilios y luego a las 15:00 a 19:00 horas trabajaban. Luego se retiraban. Que no cumplían labores de guardia, ni servicio nocturno, ni control de toque de queda, trabajando solo de lunes a viernes. Que siempre que interrogaban las personas estaban en buenas condiciones físicas y ellos preguntaban por qué los llevaban detenidos, si ellos no tenían nada que ver, pero ellos no tenían grado para tomar alguna determinación sobre ellos. El Tribunal le exhibe las fotografías que rolan de fs. 5 a fs. 7 de cuaderno secreto. El deponente indica que desconoce el nombre de estas personas y debe indicar que no lo interrogó. El Tribunal le consulta sobre otros hechos. Insiste que había otros detectives que también iban a tomar declaraciones, entre ellos Gonzalez, Railef y Saavedra, quienes se unieron al grupo del capitán Ubilla. Esto lo sabe porque como él era el enlace, el comisario Mario Baeza le indicó esos nombres. Ellos también fueron agregados en el lapso de los años 1973 y 1974. Que las detenciones que efectuó en algún momento fueron realizadas de día y siempre con decreto judicial y lo que más le correspondió hacer, fue citaciones. También le tocó investigar delitos que cometían los militares en relación con robos o hurtos de cosas a los detenidos, interrogando a la patrulla que estuvo a cargo de esos allanamientos. Insiste que no solo se dedicaban a los interrogatorios por motivos políticos, sino también lo que mencionó. Respecto a muertes por patrullas

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

militares, estos hechos eran investigados por el grupo donde estaban los actuarios Toloza y Gonzalez.

A.114. Fernando Alejandro Mora Paredes (21 años a la fecha de los hechos). Quien declaró a fs. 1.701 a fs. 1.702 (Tomo V) y de fs. 1.808 (Tomo V).

En declaración extrajudicial de fecha 24 de mayo de 2012, rolante de **fs. 1.701 a fs. 1.702 (Tomo V)**, que para 1973 tenía 21 años y se encontraba casado, era estudiante universitario en la Universidad de Chile, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario, residía en Temuco con su esposa Pilar. Que con fecha 29 de noviembre de 1973, fue detenido en su domicilio por personal de la policía de investigaciones de Temuco, quienes lo llevaron hasta el cuartel ubicado en calle Prat con Avenida Caupolicán. En dicha unidad policial fue interrogado y en horas de la mañana siguiente fue derivado al Regimiento Infantería N°8 Tucapel de Temuco. En cuanto a su estadía en dicho destacamento militar, recuerda que en primera instancia permaneció en una celda ubicada en la guardia de este y posteriormente fue vendado y llevado a otra dependencia del regimiento, donde lo interrogó el capitán Ubilla, junto a otro militar que aparecía a ratos amedrentarlo con un arma. Recuerda que estuvo un día en el regimiento y posteriormente fue llevado hasta la cárcel pública de Temuco donde quedó incomunicado por quince días; para posteriormente pasar a libre platica quedando en dicho recinto carcelario por dos años. Después, lo llevaron a Santiago a Capuchinos, donde permaneció cerca de 05 meses, para posterior a ello exiliarse en Noruega. Se le pregunta por otros hechos.

En declaración judicial de fecha 04 de julio de 2013, rolante de **fs. 1.808 (Tomo VI)**, soslaya que ratifica su declaración extrajudicial y en lo pertinente replica que su detención se produjo en su casa, que no supo las identidades de los detectives que lo detuvieron, ni recuerda en que medio se movilizaba para llevarlo al cuartel de investigaciones. Que en el regimiento Tucapel estuvo en la guardia un momento, donde un conscripto le ofreció cigarrillos. Después lo sacaron de allí y le vendaron la vista, siendo conducido por conscriptos hacia una oficina que estaba al interior de una dependencia ubicada a cuarenta o cincuenta metros hacia la derecha de la guardia. En ese lugar fue interrogado a rostro descubierto por el capitán Ubilla, respecto a la estructura del Movimiento de Izquierda Revolucionario, y ese mismo día conducido a la cárcel. Se le interroga por otros hechos.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

A.115. Daniel Arnoldo Aguirre Mora (41 años a la época de los hechos). Quien declaró a fs. 1.711 a fs. 1.714 (Tomo V); de fs. 1.811 a fs. 1.812 (Tomo VI); de fs. 1.836 (Tomo VI) y de fs. 3.631 a fs. 3.632 (Tomo X).

En declaración judicial de fecha 01 de agosto de 2012, rolante de **fs. 1.711 a fs. 1.714 (Tomo V)** ratifica declaraciones de otros hechos y en lo pertinente dice que recuerda que el detective Nambrard quien con conversó con su esposa y le señaló que fue torturado en el regimiento Tucapel. Que los funcionarios asignados al regimiento pasaron a depender de la inteligencia militar, que estaba bajo las órdenes del capitán Nelson Ubilla Toledo. Por su grado, el grupo de detectives del Tucapel estaba bajo las órdenes de Aquiles Poblete Müller. Luego de un mes y medio o dos, este oficial y Ortiz se retiraron del regimiento para volver a sus funciones normales. Dos meses más tarde lo hicieron el resto de los detectives, menos Quiroz, que quedó como enlace, y Luco que regresó en abril de 1974. Culpando a estos detectives de las posteriores torturas que sufrieron los detectives detenidos. Aduce que el funcionario Luco a su parecer tuvo problemas en el regimiento porque se tomaba atribuciones que no le correspondían. En cuanto a Alfonso Podlech, señala que un año antes que ocurriera el golpe militar este abogado iba al cuartel a requerir información de tipo político. Recuerda que se entrevistaba con el prefecto Leonel Hormazábal y con el detective Quiroz. Sabe que le entregaba esta información a alguien en el regimiento Tucapel, pero desconoce a quién. Que esta información la obtenía desde los archivos que la inteligencia de investigaciones tenía. Esta información la usaba con el grupo de Patria y Libertad de Temuco, según comentaban los mismos funcionarios. Que después del 11 de septiembre de 1973 Podlech siempre se mantuvo muy cercano y activo dentro el regimiento Tucapel. Que incluso en una oportunidad en que el prefecto lo presentó ante la "Junta Chica" de Temuco, éste estaba con ellos. Suma en una oportunidad del mes de noviembre de 1973 con ocasión de haber quedado como prefecto subrogante, se produjo una fuga de personas que estaban detenidas en el regimiento Tucapel, los que fueron "dados de baja". Concurrió al regimiento para pedir antecedentes sobre este hecho para tenérselas al prefecto cuando regresara. Cuando llegó a ese lugar se entrevistó con el comandante Iturriaga Marchesse y con Alfonso Podlech. Entonces el comandante le dijo que sólo le comunicara al prefecto que los detenidos habían intentado fugarse y que eso era todo. Entre estos detenidos

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

había una persona al que le faltaba parte de un brazo. Respecto de los funcionarios de investigaciones que fueron detenidos, puede indicar que en el mes de octubre de 1973 encontrándose de jefe subrogante de la prefectura, llegaron dos oficiales fuerza aérea, entre los que recuerda a uno de apellido Cáceres, quien le exhibió una orden refrendada por el Director General de Investigaciones, Ernesto Baeza Michaelsen, para que investigaciones prestara todo tipo de colaboración en las actividades que ellos venían a realizar, las que consistían en investigar a los funcionarios Ramón Apablaza, Víctor Perez y Fernando Nambrard. Que venían a detenerlos. Narrando lo ocurrido en ese momento con los funcionarios policiales. Recordando a Manuel Ríos Salgado funcionarios de investigaciones en Temuco, quien trabajaba con Antivil los temas políticos. Que después del 11 de septiembre de 1973 el departamento de inteligencia de investigaciones quedó formado por Rigoberto Ortiz como jefe y Carlos Zurita. Comunica otras cosas y agrega que Ortiz le comentó que en alguna ocasión algunos detenidos murieron en las sesiones de interrogatorios y torturas. Que además le dijo que los militares no sabían interrogar porque maltrataban demasiados a los detenidos al punto de dejarlos semi inconscientes. No sabe que oficiales del ejército practicaban interrogatorios en el Tucapel, pero sí recuerda que el capitán Nelson Ubilla Toledo y el teniente o capitán Manuel Vásquez Chahuán concurrieron en dos o tres ocasiones a buscar detenidos políticos, para llevarlos al regimiento. "Estos detenidos eran casi todos miristas". Se le pregunta por otros hechos.

En diligencia de careo con Hernán Quiroz Barra, de fecha 05 de julio de 2013, rolante de **fs. 1.811 a fs. 1.812 (Tomo VI)** (cuya copia consta a fs. 3.631 a fs. 3.632 Tomo X), ratifica sus dichos de fs. 3.231 a fs. 3.234 que en estos autos constan a fs. 1.711 a fs. 1.714 (Tomo V), rectificando aquella parte en que señala que Nambrard habría manifestado que fue torturado en el regimiento Tucapel, porque en realidad fue apremiado en la base aérea Maquehue. No reconoce a la persona con quien se le carea, el Tribunal se lo hace saber. Entiende que el grupo de detectives que se fue al regimiento Tucapel trabajó para la Fiscalía Militar. Que poco después del 11 de septiembre aparecieron tres oficiales de ejército, carabineros y fuerza aérea, y le entregaron al prefecto una nómina con los nombres de los detectives que querían que fuera a trabajar al Tucapel. Respecto del motivo por el cual indicó que los detectives Luco y Quiroz son culpables de las

torturas recibidas por Nambrad y Apablaza, es porque seguramente recibió antecedentes en aquella época que le hicieron pensar esto. Que Alfonso Podlech antes del 11 de septiembre de 1973 iba siempre al cuartel de investigaciones a buscar información de inteligencia. Para esto pasaba al segundo piso de la unidad y en algunas oportunidades lo vio junto al señor Quiroz. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo con Oscar Alfonso Podlech Michaud, de fecha 13 de agosto de 2013, rolante de **fs. 1.836 (Tomo VI)**, ratifica sus dichos de fs. 3.231 a fs. 3.234 que en estos autos constan a fs. 1.711 a fs. 1.714 (Tomo V), reconoce a la persona con quien se le carea como Alfonso Podlech Michaud de quien ha hecho referencia porque éste se presentó ante el suscrito previamente. Debiendo aclarar que nunca en el pasado este sostuvo alguna conversación con él. Que quien puede avalar sus dichos es el ayudante del prefecto, cuyo nombre es Allar Catalán. En lo demás se mantiene en sus dichos.

A.116. José Heriberto Mansilla Gatica (38 años a la época de los hechos). Quien declaró a fs. 1.717 a fs. 1.719 (Tomo V); de fs. 1.844 (Tomo VI); de fs. 1.845 (Tomo VI); de fs. 1.846 a fs. 1.847 (Tomo VI), de fs. 3.806 bis a fs. 3.808 (Tomo XI); de fs. 3.809 a fs. 3.810 (Tomo XI); de fs. 3.811 (Tomo XI); de fs. 3.812 (Tomo XI); de fs. 3.813 a fs. 3.814 (Tomo XI); de fs. 3.815 a fs. 3.816 (Tomo XI); de fs. 3.817 (Tomo XI); de fs. 3.818 (Tomo XI) y de fs. 3.819 (Tomo XI).

En declaración judicial de fecha 30 de agosto de 2012, rolante de fs. **1.717 a fs. 1.719 (Tomo V)**, ratifica declaración de fs. 2.007 a fs. 2.009 la que constan en estos autos a fs. 3.806 a fs. 3.808 (Tomo XI). Adiciona que después del 11 de septiembre de 1973, se desempeñaba en **la sección de administración de fondos** del regimiento Tucapel de Temuco, como dactilógrafo, con el grado de sargento primero. A cargo de esa sección estaba el teniente Tichauer Salcedo. En su especialidad trabajaba solo. Las dependencias de su sección se ubicaban en la comandancia del regimiento, que posteriormente fueron ocupadas por el servicio de inteligencia. Recuerda a la señora María Meza, quien era la secretaria del seguro social. A septiembre de 1973, el segundo comandante del regimiento de apellido Jofre, no tomaba declaraciones. Que Iturriaga Marchesse sólo se ocupaba de cosas generales. El trabajo cotidiano de la fiscalía, como interrogar, tomar decisiones con respecto de los detenidos era de Alfonso Podlech. Que se intercedía ante Alfonso Podlech, porque éste decidía la suerte de los detenidos

que una vez llegaron en camiones. El comandante Jofré le dijo personalmente, cuando estaba de guardia, que las decisiones respecto a un grupo de detenidos que llegaron, entre los que había dos mujeres, debía tomarla Alfonso Podlech. Por esa razón intercedió ante Podlech por las mujeres que conocía. Que la oficina de plana mayor era ocupada por la Fiscalía Militar. En lo formal el comandante Jofre era el Fiscal Militar, pero todas las decisiones de la Fiscalía Militar las tomaba Podlech. Insiste que Alfonso Podlech tenía el poder para decidir lo que pasaba con los detenidos. Por esa razón se intercedía ante éste por ellos. Comenta que Alfonso Podlech le gustaba el futbol, por esa razón en una oportunidad intercedió ante este por Rolando Núñez, quien en una oportunidad “se tomó, junto a otras personas uno de los fundos de don Alfonso Podlech”. Cuando esta persona se presentó ante la fiscalía, Alfonso le dijo que le agradeciera al deponente por haber intercedido por él, porque si no lo hubiese hecho, “hace rato lo hubiera tenido apuntado”. Dejó que se fuera y lo citó posteriormente a la fiscalía. Que gracias a su intervención Rolando se salvó. De quien nada más supo. Indica que, respecto al asalto al polvorín, supo que todo era mentira. Agrega que había una sala de torturas en la primera compañía de cazadores. En una oportunidad andaba buscando a su jefe Tichauer y vio por el “ojo de la llave como le aplicaban electricidad a una mujer en sus senos”. Que Tichauer y los oficiales García Covarrubias tenían que ver con las torturas y los detenidos. Dice que había un cabo de apellido Labraña, y otro grupo de conscriptos que integraban la “patrulla chacal”, que ellos la llamaban los “chalados”.

En declaración judicial de fecha 12 de septiembre de 2013, rolante de **fs. 1.844 (Tomo VI)** ratifica declaración judicial y advierte que estuvo trabajando una tarde con Alfonso Podlech Michaud. Éste tomada declaraciones y el deponente era el dactilógrafo. Que esta situación solo fue por una tarde y fue por orden del mayor Jofré. Replica sus dichos en cuanto el haber intercedido por personas detenidas ante Alfonso Podlech.

En declaración judicial de fecha 12 de septiembre de 2013, rolante de **fs. 1.845 (Tomo VI)** amplía su declaración anterior reiterando haber intercedido ante Alfonso Podlech respecto de una persona de apellido Núñez, a quien Alfonso Podlech lo dejó con arresto domiciliario y como el deponente era su vecino quedo a cargo de su custodia.

En diligencia de careo con Oscar Alfonso Podlech Michaud, de fecha 12 de septiembre de 2013, rolante de **fs. 1.846 a fs. 1.847 (Tomo VI)** (cuya copia consta de fs. 3.812 a fs. 3.812 vuelta Tomo XI) ratifica declaraciones de fs. 2.413 a fs. 2.415 y la de fs. 3.605 esta última consta a fs. 1.845 (Tomo VI) de estos autos. Que esa tarde estaba de suboficial de guardia. Que en la guardia de la unidad se encontró con la señora Meza Moncada en calidad de detenida. En esa oportunidad fue a conversar con don Alfonso, quien le dijo que se la llevara. Que por orden del mayor Jofré, tuvo que servir como dactilógrafo a Alfonso Podlech mientras interrogaba a la señora Meza Moncada. Que en esa época no sabía quién era el fiscal militar. En cuanto a las funciones de Alfonso Podlech era tomar declaraciones a los detenidos. Que también estaba el abogado Guido Sepúlveda. Replicando haber intercedido ante Alfonso Podlech por un deportista amigo, recordando muy bien lo relatado porque fue lo único que efectuó con Alfonso Podlech en el regimiento Tucapel de Temuco. Se mantiene en sus dichos.

En declaración judicial de fecha 20 de diciembre de 2006, rolante de **fs. 3.806 bis a fs. 3.808 (Tomo XI)**, alude que para septiembre de 1973 prestaba funciones en el regimiento Tucapel de Temuco, trabajando en administración de fondos como dactilógrafo. Que jamás trabajó tomando declaraciones en la fiscalía militar. No recuerda a la señora María Meza Moncada, aunque conoció a dos señoras que trabajaban en el seguro social. Es posible que haya interrogado a esta persona, porque estuvo, al parecer una tarde cooperándole a Alfonso Podlech en la toma de declaraciones. Lo anterior, por órdenes. Sin embargo, solo tomó declaraciones a dos personas, pero quien interrogaba era Alfonso Podlech, a quien ese mismo día le pidió que ayudara a dos civiles que el deponente conocía y que estaban detenidas. Las declaraciones las tomo en la oficina del jefe de la plana mayor. No recordando el tenor del interrogatorio o si esta persona presentaba signos de haber sido torturada. Que a la única persona que recuerda haber visto “muy maltratada producto de las torturas” fue a Rubén Morales Quijada, apodado “milico”, quien era su amigo, quien estaba detenido en el calabozo de la sala de guardia del regimiento. Era teniente o subteniente de reserva. De quien supo que fue torturado en el rancho del regimiento y estaba acusado de hacer instrucción militar en Nehuentúe, Recuerda que en una oportunidad después del 11 de septiembre de 1973 mientras se encontraba de suboficial de guardia, llegó un camión cargado con detenidos, quienes venían del

sector Toltén y de Loncoche. Cuyas personas fueron dejadas en el patio de la unidad y debían pasar la noche en el gimnasio. Entre estos detenidos venia una profesora con su hijo y una asistente social que trabajaba en el hospital de Loncoche, de nombre Selva Saavedra, por quienes intercedió ante Alfonso Podlech para que quedasen en libertad. Refiere que el capitán Ubilla y su grupo tenían habilitada una cuadra en la primera compañía para interrogar. Se le pregunta por otros hechos y en lo pertinente indica que los detenidos eran dejados en el patio de la comisaria por los militares, pero no le consta que hayan sido sometidos a apremios ilegítimos. Tampoco recuerda que hayan sido interrogados. Lo que sí sabe es que los militares disponían de los detenidos a “su antojo”.

En declaración judicial de fecha 30 de agosto de 2012, rolante de **fs. 3.809 a fs. 3.810 (Tomo XI)** ratifica declaraciones de fs. 2.007 a fs. 2.009 (las que constan a fs. 3.806 a fs. 3.809 Tomo XI), replica su desempeño como dactilógrafo después del 11 de septiembre de 1973, que las dependencias de su sección se ubicaban en la comandancia del regimiento, que posteriormente fueron ocupadas por el servicio de inteligencia. Interrogado dice que a septiembre de 1973 el segundo comandante del regimiento de apellido Jofré, no tomaba declaraciones. Iturriaga Marchesse sólo se ocupaba de cosas generales. El trabajo cotidiano de la fiscalía, como interrogar, tomar decisiones con respecto de los detenidos era de Alfonso Podlech. Comunica que se intercedía ante Alfonso Podlech, porque este decidía la suerte de los detenidos que una vez llegaron en camiones. Que el comandante Jofré le dijo personalmente cuando estaba de guardia, que las decisiones respecto a un grupo de detenidos que llegaron entre los que habían mujeres, debía tomarlas Alfonso Podlech. Por esa razón intercedió ante Podlech por las mujeres que conocía. Replica que la oficina de plana mayor era ocupada por la Fiscalía Militar. Que en lo formal el comandante Jofre era el fiscal militar, pero todas las decisiones de la Fiscalía Militar las tomaba Podlech. Aduce que Alfonso Podlech tenía el poder de decidir lo que pasaba con los detenidos. Por esa razón se intercedía ante él por ellos. Relatando haber intercedido ante este por Rolando Núñez, quien vivía en el mismo sector que el deponente, y que en una oportunidad se tomó junto a otras personas uno de los fundos de Alfonso Podlech. Y cuando esta persona se presentó ante la fiscalía, Alfonso Podlech le dijo que le agradeciera por haber intercedido por él “porque si no lo hubiese hecho, hace rato lo hubiera tenido apuntado”. Lo dejó irse y lo citó posteriormente

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

a la fiscalía. Que gracias a su intercesión Rolando “se salvó”. Comunica que había una sala de tortura en la primera compañía cazadores. En una oportunidad andaba buscando a su “jefe Tichauer” y vio por el ojo de la llave como le aplicaban electricidad a una mujer en sus senos. Que Tichauer y los oficiales García Covarrubias tenían que ver con las torturas y los detenidos. Expresa que había personal de inteligencia que incluso los vigilaba a ellos. Consultado dice que había un cabo de apellido Labraña y otro grupo de conscriptos que integraban la patrulla “chacal”, que ellos la llamaban “los chalados”. Relata otra situación.

En declaración judicial de fecha 12 de septiembre de 2013, rolante de **fs. 3.811 (Tomo XI)**, expone que efectivamente estuvo por una tarde trabajando con Alfonso Podlech Michaud. Este tomaba declaraciones y el suscrito era el dactilógrafo. Situación que fue solo por una tarde y fue por orden del mayor Jofré. Replica haber intercedido por una profesora y la asistente social, ocasión donde conversó con el mayor Jofré, quien lo mandó a hablar con Alfonso Podlech, la decisión tomada por éste fue dejar en libertad a las mujeres y citarlas para el día siguiente. Interrogado dice que el mayor Jofré lo mandó a hablar con Alfonso Podlech, porque este estaba a cargo de los detenidos.

En declaración judicial de fecha 20 de diciembre de 2006, rolante de **fs. 3.813 a fs. 3.814 (Tomo XI)**, (cuyas copias constan a fs. 3.815 a fs. 3.816 Tomo XI), manifiesta que para septiembre de 1973 prestaba funciones en el regimiento Tucapel de Temuco, trabajando en administración de fondo como dactilógrafo. Que jamás trabajó tomando declaraciones en la Fiscalía Militar. En lo pertinente señala que es posible que haya interrogado a esta persona (refiriendo a María Meza Moncada), porque estuvo al parecer una tarde cooperándole a Alfonso Podlech en la toma de declaraciones. Lo anterior porque recibió órdenes de hacer esto. Sin embargo, solo tomó declaración a estas dos personas, pero quien interrogaba era Alfonso Podlech, a quien ese mismo día le pidió que ayudara a dos civiles que el deponente conocía y que estaban detenidas. Las declaraciones las tomó en la oficina del jefe de plana mayor. No recordando el tenor del interrogatorio. Tampoco recuerda si esta persona presentaba signos de haber sido torturada. A la única persona que recuerda haber visto muy maltratada producto de las torturas, fue a Rubén Morales Quijada, quien era su amigo, relatando donde lo vio y las condiciones en que se encontraba. Recordando que Orlando Moreno Vásquez, Raúl Schonherr y un cabo de apellido Abello, trabajaban en inteligencia

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

junto al capitán Ubilla. Refiere que luego del 11 de septiembre de 1973 alrededor de las 10:30 horas, mientras se encontraba de suboficial de guardia, llegó un camión cargado de detenidos, que venían del sector de Toltén y Loncoche. Estas personas fueron dejadas en el patio de la unidad y debían pasar la noche en el gimnasio. Recuerda que entre los detenidos venían una profesora con su hijo y una asistente social por quienes intercedió ante Alfonso Podlech para que quedasen en libertad. Que el capitán Ubilla y su grupo tenían habilitada una cuadra en la primera compañía para interrogar personas. Recordando que en una oportunidad se acercó a ese lugar para conversar con el teniente Tichauer, quien estaba presente en los interrogatorios. Además, pudo ver al teniente Jaime García Covarrubias.

En declaración judicial de fecha 12 de septiembre de 2013, rolante de **fs. 3.817 (Tomo XI)**, ratifica declaraciones judiciales de fs. 1.669 a fs. 1.671 (las que constan en estos autos a fs. 3.813 a fs. 3.814 copias a fs. 3.815 a fs. 3.816 del Tomo XI), insistiendo que efectivamente estuvo una tarde trabajando con Alfonso Podlech Michaud. Este tomaba declaraciones y el deponente era el dactilógrafo, todo por orden del mayor “Cofré”. Refiere que intercedido por las personas que mencionan en sus declaraciones, que conversó con el mayor “Cofré”, quien lo mandó hablar con Alfonso Podlech. La decisión la tomaba éste, y fue dejar en libertad a esas mujeres y citarlas para el día siguiente. Replicando que el mayor “Cofré” lo mandó a hablar con Alfonso Podlech porque éste estaba a cargo de los detenidos.

En declaración judicial de fecha 12 de septiembre de 2013, rolante de **fs. 3.818 (Tomo XI)** adiciona sus dichos en cuanto a la persona por la cual intercedió ante Alfonso Podlech de apellido Núñez. Que Alfonso Podlech lo conocía y cuando lo vio en el regimiento, ordenó dejarlo con arresto domiciliario y como el deponente era su vecino quedó a cargo de su custodia.

En declaración judicial de fecha 10 de mayo de 2017, rolante de **fs. 3.819 a fs. 3.819 vuelta (Tomo XI)**, ratifica declaración de fs. 2.073 y siguientes (las que constan en estos autos a fs. 3.809 a fs. 3.810 Tomo XI). El Tribunal le lee las preguntas acompañadas en otros autos por la defensa de Pedro Guillermo Tichauer Salcedo. En lo atinente dice que lo conoce porque era el oficial de intendencia para la época de 1973. Que Pedro Tichauer era el contador del regimiento Tucapel. Respecto a los hechos que menciona en la relación a la sala

de tortura, agrega que en esa oportunidad había una llamada urgente desde la jefatura de Valdivia para su jefe, Tichauer. Entonces salió a buscarlo para avisarle de la llamada, dirigiéndose a la primera compañía y le preguntó al soldado que estaba ahí, si es que había visto al teniente Tichauer, respondiéndole afirmativamente, pero que el deponente no podía pasar. Le dijo al soldado que al teniente Tichauer lo estaban llamando de Valdivia, que era urgente. En eso se dirigió a la sala y escuchó un lamento de una mujer, miró por el ojo de la llave, vio bultos, medios de espaldas el cuerpo de un hombre, pero no la cara, sin embargo, reconoció la voz de su jefe, Tichauer, que decía “perrita, es mejor que hables”. Que el mismo soldado que estaba en la entrada le dijo que el teniente Tichauer estaba en la sala que mencionó. Este soldado no lo quería dejar pasar y lo hizo cuando le dijo que era una llamada urgente del cuartel general de Valdivia. Replica que era Pedro Tichauer, que ya lo ha declarado. Que, en esa oportunidad, cuando escucho lo que relató, Tichauer no andaba sacando firma, ya que no era la oficina del capitán Ubilla. Que la oficina donde fue a buscar a Tichauer estaba ubicada en la primera compañía, al final de esa dependencia. Hace otros comentarios y refiere a sus funciones.

A.117. Martín Huiriqueo Antuhuil (20 años a la época de los hechos). **En declaración judicial** de fecha 19 de diciembre de 2012, rolante de **fs. 1.728 a fs. 1.730 (Tomo V)**, proclama que ingreso al servicio militar en marzo de 1973 en el regimiento Tucapel de Temuco. Fue encuadrado en la compañía de morteros, cuyo comandante era el capitán Fernández Carranza. Recuerda que además estaba el teniente Gran. Como suboficiales recuerda al sargento Lizama, cabos Castro, Schaaff, Muñoz y Escobar. Que en su caso estaba en la tercera sección, segunda escuadra. En lo adecuado que la noche previa al 11 de septiembre de 1973 se acuartelaron en el regimiento les entregaron armamento y cosa de guerra. Los levantaron a las doce de la noche y posteriormente los ordenaron salir a patrullar y resguardar las instalaciones públicas. Desde el mismo 11 de septiembre en adelante salieron en patrullajes nocturnos y diurnos, resultando algunas personas detenidas por toque de queda, las que eran entregadas a carabineros. Que supo de la muerte de cuatro personas que habían intentado entrar al regimiento Tucapel por el sector de la línea férrea hacia el rancho. Que de esto se enteró mientras estuvo en Curarrehue efectuando patrullajes fronterizos. Esta misión la cumplió bajo las órdenes del teniente Espinoza, que era de otra

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

compañía, quien comandaba un grupo de soldados conscriptos y clases escogidos desde las compañías de morteros, plana mayor y cazadores. Dice que vio detenidos en regimiento Tucapel después del 11 de septiembre de 1973, recordando que estas personas eran interrogadas en el rancho de suboficiales, que el teniente Alejandro Rubio Balladares tenía acceso a los interrogatorios. Que también era comentario generalizado que los hermanos García Covarrubias participaban de los interrogatorios de detenidos. Que uno de ellos era el ayudante del comandante del regimiento. Y uno de los dos formaba parte del grupo de inteligencia del regimiento. También pudo ver personas de civil que tenían que ver con los detenidos y que trabajaban en inteligencia. Que ellos como soldados conscriptos no tenían acceso a esas dependencias. De otras compañías participaban en asuntos con los detenidos el sargento Mario Arias. Díaz y Labraña Luvecce. También recuerda al cabo Silva de plana mayor y servicios, quien trabajó en el casino de oficiales un tiempo. Todos ellos estaban encargados de sacar información a los detenidos que eran interrogados en el rancho de los soldados. Se le pregunta por otros hechos.

A.118. Víctor Manuel Terán Vásquez (19 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 1.737 a fs. 1.739 (Tomo V); de fs. 1.856 a fs. 1.857 (Tomo VI); de fs. 3.476 a fs. 3.477 (Tomo X); de fs. 3.478 a fs. 3.479 (Tomo X); de fs. 3.820 (Tomo XI); de fs. 3.821 a fs. 3.822 (Tomo XI).

En declaración extrajudicial de fecha 07 de noviembre de 2012, rolante de **fs. 1.737 a fs. 1.739 (Tomo V)**, arguyo que ingreso hacer su servicio militar en abril de 1973 en el regimiento Tucapel de Temuco, quedando encuadrado en la **compañía de plana mayor y servicio**, al mando del capitán Nelson Ubilla Toledo. Y su sección estaba a cargo del sargento Luis Peña Andaur. Adiciona que el comandante de la compañía de plana mayor y servicios también estaba a cargo de la sección de inteligencia militar y era secundado en el mando de la compañía por el teniente Jaime García Covarrubias. Que ocurrido el golpe militar era frecuente que diariamente llegaran personas detenidas, las cuales eran dejadas en el gimnasio del regimiento. Señala que había dos detectives que se encargaban de interrogar bajo tortura a los detenidos al interior del gimnasio, recordando que uno de estos detectives era de apellido Morales. Según su recuerda, ellos interrogaban a las personas bajo la aplicación de corriente eléctrica la cual era generada por un dinamo manual. Afirma dar fe de esta situación,

porque vio la maquina con la cual “trabajaban” y muchas veces le correspondió ir a limpiar al gimnasio las orinas y excrementos de las personas torturadas. Que otra dependencia donde se torturaba, correspondía a una sala que en principio ocupaban los conscriptos para ver televisión y realizaban reuniones, la cual se ubicaba en la cuadra de la compañía de plana mayor y servicios y que fue habilitada como sala de interrogatorios, donde constantemente eran llevados los detenidos para ser torturados por personal militar en base a golpes y aplicación de corriente eléctrica. Según recuerda cuando se ingresaban detenidos a esa sala, se les ordenaba que hicieran abandono de esa cuadra y siempre vio ingresar a dicho lugar al capitán Nelson Ubilla Toledo, a los tenientes Jaime y Raimundo García Covarrubias y Manuel Espinoza Ponce. Agrega que estos oficiales eran los encargados de interrogar a los detenidos en dicho lugar y también de torturar, ya que “vez que los veía ingresar con detenidos se comenzaban a escuchar los gritos de dolor de las personas desde esa sala”. Que también se desempeñaban en esas labores, los conscriptos de su compañía Aladino Ríos Manzano, Libardo Schwartenski Rubio, los de apellidos Chávez Etchepare, Valeria y uno que apodaban el "loco Carrillo". Suma que el conscripto Schwartenski quien vestía de civil trabajaba también con los detectives. Hace presente que en una oportunidad fue agredido por el teniente Jaime García relatando tal situación. Refiere a otros hechos ocurridos en el regimiento Tucapel.

En declaración judicial de fecha 02 de octubre de 2013, rolante de **fs. 1.856 a fs. 1.857 (Tomo VI)** (cuya copia constan de fs. 3.476 a fs. 3.477 Tomo X y a fs. 3.820 Tomo XI), ratifica declaración extrajudicial de fs. 3.352 a fs. 3.354 (las que constan en estos autos a fs. 1.737 a fs. 1.739 Tomo V), recordando al teniente Saldaña, que era de plana mayor y servicios, que estaba encargado de la maquinaria. Que el teniente Alejandro Rubio Balladares era de la compañía de cazadores y amigo del capitán Ubilla. Estos dos oficiales, más los tenientes Jaime y Raimundo García Covarrubias y Manuel Espinoza Ponce formaban un grupo de oficiales que tenían que ver con los detenidos. Los vio en varias oportunidades entrar a la sala de plana mayor cuando se torturaba detenidos. Que el gimnasio al que hace referencia en sus dichos estaba ubicado a un costado del rancho de conscriptos. Era un gimnasio viejo que estaba en desuso, distinto al gimnasio grande. En ese lugar se torturaba a los detenidos. Agregar que junto al detective Morales había otro que era de apellido Quiroz. Estos detectives se reunían

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

siempre con el capitán Ubilla y entraban a la sala de torturas que había en la compañía de plana mayor y servicios. A ambos los siguió viendo a través de los años porque en 1974 fue estafeta de la Fiscalía Militar que estaba ubicada en calle Claro Solar. Allí estuvo seis meses. Recuerda que traían detenidos de la cárcel, los que eran interrogados por Alfonso Podlech y Adrián González. Antes de 1974 no vio en el regimiento al señor Podlech. Se le pregunta por otros hechos.

En diligencia de careo con Jaime García Covarrubias de fecha 16 de abril de 2015, rolante de **fs. 3.478 a fs. 3.479 (Tomo X)** (copia a fs. 3.821 a fs. 3.822 Tomo XI), ratifica sus dichos de fs. 2.437 y siguientes, los que constan en estos autos a fs. 1.856 a fs. 1.857 Tomo VI, copia a fs. 3.476 a fs. 3.477 Tomo X y a fs. 3.820 Tomo XI) en el sentido que vio al teniente Jaime García Covarrubias en alguna oportunidad dentro de la sala donde se mantenían a los detenidos políticos al interior del regimiento Tucapel y donde, además se les torturaba. No reconoce a la persona con quien se le carea. El Tribunal le da a conocer que se trata de Jaime García Covarrubias. Que atendido el tiempo y su fisonomía ha cambiado, pero sí está seguro de sus dichos. Que en ese tiempo había dos oficiales de apellido García. Uno de ellos fue quien lo castigó refiriendo a tal situación. Insiste en que vio entrar con detenidos a la sala de tortura al señor García, a su hermano y otros oficiales, tras lo cual comenzaban a sentirse gritos de dolor. Aunque no lo vio personalmente, le es posible deducir que a lo menos presencié estas sesiones. Que nunca ha sido presionado, ni coaccionado para declarar en contra del señor García, que lo que declara es lo que vivió. Se mantiene en sus dichos.

A.119. María Antonieta Meza Moncada (30 años a la época de los hechos). **En declaración extrajudicial** de fecha 08 de noviembre de 2012, rolante de **fs. 1.742 a fs. 1.744 (Tomo V)**, que ingresó en el año 1970 como militante del partido comunista, para el 11 de septiembre de 1973, se encontraba en las oficinas del teatro municipal, lugar donde permanecieron hasta las 11:00 horas, siendo informado a esa hora que debían retirarse, ya que comenzaba el toque de queda a las 15:00 horas. Los días posteriores siguieron trabajando hasta las 14:00 horas, siempre con mucho miedo debido a que durante esos días habían detenido a colegas y su casa había sido allanada antes del 11 de septiembre. Que fue detenida el 03 de noviembre por un teniente de carabineros el cual vestía de huaso, trasladándola hasta la segunda comisaria de Temuco, al día siguiente es llevada hasta el regimiento Tucapel de Temuco, donde es ingresada a la guardia,

donde la dejan junto al sargento de apellido Pino, al cual conocía porque era vecino de su tío Juan Moncada. Indica que observó que al recinto ingresaban muchos de sus compañeros entre los cuales recuerda a Luis Cruz Cruces, el cual era trasladado desde un sector hasta la dependencia de la Fiscalía Militar. Es llevada hacia el interior del recinto por un conscripto de nombre Fernando Vega al cual conocía porque era su vecino, a mitad de camino la lleva el cabo Schonherr, el cual se hace cargo de su persona, este le venda la vista y traslada al gimnasio narrando las torturas y apremios a las que fue sometida, percatándose que en el interrogatorio eran tres las voces que se escuchaban, pero eran más personas las que estaban dentro de la sala. Posteriormente con la vista vendada se le obligo a firmar un documento y luego es trasladada a la Fiscalía del recinto, en ese lugar es entrevistada por el sargento Mansilla. Luego es trasladada nuevamente al recinto de la guardia donde escucho nombre de personas que eran subidas a un camión, siendo trasladada por el sargento Leiva a una Citroneta y este le señaló que era la única forma de salvar su vida, ya que los del camión no tenían destino conocido. Continúa narrando su situación y señala que en el regimiento Tucapel logró ver a Luis Cruz Cruces y antes de ser detenida supo que fueron detenidos Florentino Molina Ruiz, Amador Francisco Montero Mosquera, Juan Antonio Chávez Rivas y Pedro Mardones Jofre.

A.120. Héctor Benedicto Hernández Viscarra (18 años a la época de los hechos). **En declaración judicial** de fecha 16 de enero de 2013, rolante de **fs. 1.746 a fs. 1.749 (Tomo V)**, alude que ingreso al servicio militar el 26 de junio de 1973 en el regimiento Tucapel de Temuco, encuadrado en la compañía de mortero, cuyo comandante era el capitán Manuel Fernández Carranza, recuerda además que estaban el subteniente Pablo Gran López. Estaba bajo el mando del cabo Schaaff, rememorando otros clases como el suboficial Moraga, sargento Lizama y el cabo Muñoz. Que dos días antes del golpe militar los acuartelaron y el día 11 de septiembre la mitad de la compañía salió a la calle a patrullar y a él le correspondió efectuar labores de guardia en el regimiento. Cuenta otras situaciones y en lo pertinente dice que vio detenidos en el regimiento Tucapel, los que estaban en la guardia de la unidad y en una dependencia que estaba junto a las caballerizas. Narra que en una oportunidad el teniente Rubio Balladares y una patrulla que no puede identificar, llegaron a la guardia donde bajaron a tres detenidos los que luego habrían sido ejecutados en la isla Cautín. Que otro

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

incidente fue la ejecución de cinco o seis detenidos pertenecientes a la directiva del partido Comunista. Esa noche estaba de guardia en su compañía y pudo ver cuando Waldo Palma llegó con su fusil SIG y le dijo a Francisco Curihual que todo estaba listo y que los iban a pasar a buscar para ir al polígono de tiro de la isla Cautín, detallando tales hechos y el grupo que habría participado. Recuerda que el grupo de oficiales de inteligencia estaba conformado por el capitán Nelson Ubilla Toledo, de plana mayor y servicios y en cuya compañía funcionaba la oficina de inteligencia, más el capitán Manuel Vásquez Chahuán y los tenientes Alejandro Rubio Valladares, Pablo Gran López. Estos tres últimos, siempre andaban juntos. Que pudo ver en varias ocasiones a estos oficiales entrar a la sala contigua a las caballerizas donde estaban los detenidos. Recordando haber visto regresar a los detenidos desde ese lugar hacia la guardia en muy malas condiciones. Algunos señalaban que los habían colgado por horas de cabeza. Que en una oportunidad el capitán Vásquez Chahuán le ordenó mojar a los detenidos que estaban en la guardia utilizando una manguera para que no se les notaran las lesiones provocadas por las torturas. Que vio todas estas cosas porque le correspondió efectuar guardias internas. Estas actividades las realizó casi siempre junto a Domingo Huilipán. Que no vio detenidos salir de la comandancia hacia los lugares donde eran torturados, pero que sí los vio salir del gimnasio hacia la sala ubicada cerca de las caballerizas. Que de estos procedimientos se preocupaba el capitán Vásquez Chahuán. Se le pregunta por otros hechos.

A.121. Pedro Misael Elgueta Muñoz (19 años a la época de los hechos). Quien declaró a fs. 1.750 a fs. 1.752 (Tomo V); de fs. 1.754 a fs. 1.756 (Tomo V); de fs. 3.823 a fs. 3.824 (Tomo XI); de fs. 3.825 a fs. 3.826 (Tomo XI) y de fs. 3.827 a fs. 3.828 (tomo XI).

En declaración extrajudicial de fecha 15 de enero de 2013, rolante de **fs. 1.750 a fs. 1.752 (Tomo V)**, (cuya copia consta a fs. 3.823 a fs. 3.824 Tomo XI), que para septiembre de 1973 se encontraba efectuando su servicio militar en el regimiento de Infantería N°8 Tucapel de Temuco, encasillado en la sección de plana mayor de la compañía mortero, al mando del capitán Manuel Fernández Carranza, su comandante de escuadra era el cabo "Nelson Chaf Mora". Una vez ocurrido el pronunciamiento militar, recuerda que la compañía de morteros, pasaron a cumplir labores de punto fijos a lugares públicos y servicios de patrullajes en la ciudad. Del mismo modo, le correspondió cumplir servicios de

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

guardia, siendo testigo en muchas ocasiones del ingreso durante el día de personas detenidas a la unidad militar, debiendo hacer mención que en horas de la noche y de la madrugada, ingresaban de a dos a tres personas detenidas, con sus rostros cubiertos, a la sala de descanso por unos minutos y luego eran subidos a camiones tres cuartos, los cuales eran trasladados al sector de la isla, logrando escuchar a los minutos posteriores el sonido de disparos, presumiendo de inmediato que estas personas habían sido ejecutadas. Que estas "labores" de llevar a cabo las ejecuciones de las personas detenidas en la isla, según como pudo apreciar durante el desarrollo de su servicio, eran bajo las órdenes del oficial de ronda, recordando al capitán Nelson Ubilla de manera frecuente en estos procedimientos, debiendo agregar que quienes podrían haber cooperado o participado en estas funciones, personal de las compañías andina, plana mayor y cazadores. Hace presente, que en una oportunidad su comandante de compañía, capitán Manuel Fernández Carranza, fue ordenado por algún superior a que cumpliera una orden de eliminar a personas detenidas en la isla, por lo que este oficial se negó a cumplirla, situación que significó que dejara el mando de la compañía, no volviéndolo a ver más en el regimiento. Que otra situación que logró observar cuando fue designado como policía militar, correspondiéndole en el casino, desempeñar labores de seguridad, mientras se realizaban los Consejos de Guerra, instancias donde el abogado Alfonso Podlech y el comandante del regimiento Pablo Iturriaga Marchesse, sentenciaban las condenas de los detenidos en presencia de éstos, escuchando siempre la pena de muerte o fusilamiento. Que también pudo observar cuando trasladaban a los detenidos a la sala de instrucción de la compañía de morteros, lugar donde se escuchaba los desesperados gritos de estas personas que eran interrogadas. Que no podían mirar a quienes venían con los detenidos. Se le pregunta por otros hechos.

En declaración judicial de fecha 17 de enero de 2013, rolante de **fs. 1.754 a fs. 1.756 (Tomo V)** (cuya copia consta a fs. 3.825 a fs. 3.826 Tomo XI), ratifica su declaración extrajudicial agregando que recuerda al sargento Moraga como comandante de su sección. Que el día 11 de septiembre se le encomendó la misión de custodiar el correo en Temuco y en los días posteriores le correspondió efectuar labores de guardia en el regimiento y patrullajes. En lo pertinente dice que vio de detenidos en el regimiento Tucapel, los que estaban en la guardia de la unidad y en la sala de instrucción de la compañía de morteros. Que en ese lugar

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

los detenidos eran torturados. Pudo escuchar muchas veces los gritos de dolor que salían de esa dependencia. Allí eran sometidos a apremios tanto hombres como mujeres. Que los oficiales a cargo de los detenidos eran Nelson Ubilla Toledo, Jaime y Raimundo García Covarrubias, Manuel Espinoza Ponce, Manuel Vásquez Chahuán y Alejandro Rubio Valladares. Que estos oficiales eran ayudados por los sargentos y clases de la compañía de plana mayor y servicios, más algunos soldados conscriptos entre los que recuerda a Etchepare y Schwarzenski. Recuerda un incidente ocurrido en el regimiento Tucapel, una noche mientras se encontraba de guardia hubo gran movimiento al interior de la unidad. Poco después se escucharon detonaciones y disparos provenientes de la isla. Al día siguiente se dijo que el regimiento había sido asaltado y que ocho subversivos habían sido dados de baja. Esto les pareció un “chiste” porque esa noche no hubo nada en el regimiento, sino que todo ocurrió en la isla Cautín. Que mientras estuvo de guardia en cuatro o cinco oportunidades pudo ver que durante la noche llegaban hacia la sala de descanso de su compañía dos o tres detenidos vendados. Estos eran traídos se imagina desde la cárcel o de otra parte. Quedaban un rato detenidos en ese lugar y más tarde eran sacados, generalmente por Nelson Ubilla Toledo y los oficiales de la plana mayor y servicios y sus ayudantes, para ser subidos a un camión y se los llevaban a la isla Cautín. Al poco rato se escuchaban disparos provenientes de ese lugar. Respecto a Alfonso Podlech Michaud dice que lo recuerda bien porque como dijo en su declaración extrajudicial lo vio en los consejos de guerra. Esta persona a su parecer leía la sentencia que casi siempre era de fusilamiento. Además, se le veía pasar a la comandancia. Asevera que todos los oficiales del regimiento Tucapel debieron haber sabido de las ejecuciones ocurridas en la isla Cautín, “sin lugar a duda”. Se le pregunta por otros hechos.

En declaración diligencia de careo con Jaime García Covarrubias de fecha 09 de noviembre de 2015, rolante de **fs. 3.827 a fs. 3.828 (Tomo XI)**, ratifica sus dichos de fs. 2.147 (copia a fs. 3.825 a fs. 3.826 Tomo XI), con excepción de aquella parte donde dice que los oficiales Ubilla Toledo, tenientes Jaime y Raimundo García Covarrubias, Manuel Vásquez Chahuán, Alejandro Rubio Valladares y Manuel Espinoza Ponce participaban en los temas de detenidos políticos, porque no le consta. En realidad, se equivocó al indicarlos puesto que a don Jaime García lo recuerda efectuando labores de patrullajes al igual que al

teniente Gran López. Que a Manuel Espinoza no lo conoció. Reconoce a la persona con quien se le carea como el teniente Jaime García Covarrubias, quien en 1974 fue su comandante de compañía. Que vio transitar de día al teniente García por el patio del regimiento y también por los pasillos de su compañía, al igual que a los demás oficiales antes mencionados, pero nunca lo vio ingresar hacia la sala de tortura ubicada allí, porque el suscrito estaba en el patio y desde ese lugar no se veía muy bien hacia el interior. Que solo le resta indicar que producto de la sordera parcial que le afecta pudo haber escuchado mal en la oportunidad en que fue entrevistado.

A.122. Héctor Florentino Navarrete Jara (19 años a la época de los hechos). **En declaración judicial** de fecha 18 de enero de 2013, rolante de **fs. 1.757 a fs. 1.759 (Tomo V)**, en lo atinente expone que vio detenidos al interior del regimiento Tucapel. Que estos se encontraban en una dependencia ubicada entre el edificio de la compañía de plana mayor y la de morteros. Que en alguna oportunidad le correspondió ir a darles el rancho a unos detenidos que habían traído en helicóptero durante la noche y que venían según supo del sur. Eran profesores y una mujer, que estos eran alrededor de ocho o diez. Refiere que el teniente Jaime García Covarrubias era comandante de una sección de su compañía. Este oficial estaba a cargo de los detenidos que ha descrito precedentemente. Lo recuerda bien, porque éste le dio las instrucciones a él y al soldado conscripto Villa, para que les dieran el rancho. Al día siguiente y luego de haber escuchado durante la noche una gran balacera y explosiones, los detenidos ya no estaban en el lugar donde los vio. Que el camión que le correspondió limpiar al día siguiente estaba lleno de restos de carne humana y sesos. Este vehículo era de marca REO tres cuarto, en que se repartía el pan. Recordando a un grupo de conscriptos de su compañía que eran cercanos a los oficiales, entre los que puede mencionar a Jaime García Concha, José Héctor Marihuegue Muñoz, Aníbal Merardo Ortega Ortega. Le correspondió salir en varios patrullajes junto al teniente Jaime García Covarrubias o al teniente Uribe Moroni a recorrer diferentes puntos de la ciudad, deteniendo algunas a veces a personas por toque de queda, las que fueron llevadas al regimiento y dejadas en la guardia. En cuanto al capitán Vásquez Chahuán refiere que era comandante de la segunda compañía de cazadores, narrando una situación de maltrato a un conscripto y otros hechos. Recordando al mayor Aquiles Huerta, quien fue llamado como reservista,

encuadrado en su compañía. Que junto al éste trabajaban el suboficial Rómulo Correa y el sargento primero Vicente Reyes. Además, los conscriptos Jaime García Concha, José Héctor Marihueque Muñoz, Aníbal Merardo Ortega Ortega, Braulio Soto Arzola y un conscripto de apellido Peña, comunica que siempre andaban con los oficiales, incluido Aquiles Huerta. Que eran como la plana mayor por lo que si salía algún oficial ellos los acompañaban. También recuerda haber visto entrar a detectives al regimiento, quienes mostraban su placa y pasaban hacia el interior.

A.123. Domingo Esteban Quintana Bustos (19 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 1.760 a fs. 1.761 (Tomo V) y de fs. 1.763 a fs. 1.768 (Tomo V).

En declaración extrajudicial de fecha 20 de enero de 2013, rolante de **fs. 1.760 a fs. 1.761 (Tomo V)**, expuso que en septiembre de 1973, se encontraba efectuando el servicio militar en el Regimiento de Infantería N° 8 Tucapel de Temuco, encontrándose encasillado en la tercera escuadra de la tercera sección de la compañía de morteros, al mando del capitán Manuel Fernández Carranza. Su comandante de escuadra era el cabo primero Luís Barrenechea Calderón, mientras que al mando de la sección se encontraba el sargento primero Moraga. Que, una vez ocurrido el pronunciamiento militar, recuerda que la compañía de morteros, bajo las instrucciones del mando, pasaron a cumplir labores de punto fijo a lugares públicos de importancia, como también servicios de patrullajes de control de toque de queda en la ciudad. Del mismo modo, le correspondió cumplir servicios de guardia, siendo testigo en ocasiones del ingreso durante el día de personas detenidas a la unidad militar, los cuales permanecían en un recinto techado, desconociendo posteriormente cual era el destino de estas personas. Recuerda haber visto dependencias destinadas para los interrogatorios de los detenidos, siendo estas la sala de instrucción de la compañía de morteros y de la plana mayor. En lo que respecta al personal que se dedicaba a interrogar a los detenidos, sólo sabe por comentarios de terceros que el mayor Espinoza Ponce practicaba dichas labores. Se le pregunta por otros hechos.

En declaración judicial de fecha 22 de enero de 2013, rolante de **fs. 1.763 a fs. 1.768 (Tomo V)**, ratifica declaración extrajudicial, rectificando aquella parte en que se indica cuando terminó su servicio. Realiza comentarios respecto al

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

capitán Fernández Carranza. Y agrega que en muchas oportunidades los soldados conscriptos fueron azotados en el patio del regimiento Tucapel, detallando situaciones que observó. Afirma que vio detenidos en el regimiento Tucapel, sin embargo, no tiene conocimiento de lo que hacían con ellos. En algunas oportunidades recuerda haber pasado por el costado de la primera compañía de cazadores, lugar desde donde se escuchaban los lamentos y gritos de personas que a su parecer estaban siendo apremiadas en la sala de instrucción ubicada entre las compañías de plana mayor y de morteros. Dice que ellos tenían prohibición de acercarse a ese lugar. Que se decía que el teniente Espinoza “tenía algo que ver con los detenidos”. Por comentarios que escuchaban en el rancho de soldados que los detenidos eran torturados durante la noche, pero no recuerda quien le hizo el comentario, ni que oficiales participaban en esos hechos. Se le pregunta por otros hechos.

A.124. Hernán Alejandro Morales Gómez (35 años a la época de los hechos). **En declaración judicial** de fecha 26 de junio de 2012, rolante de **fs. 1.789 a fs. 1.792 (Tomo VI)**, soslaya que en agosto de 1973 se desempeñaba como abogado de carabineros de Temuco y dependía del prefecto de aquella época. En lo pertinente sostiene que se le designó Fiscal Ad-Hoc para efecto de una investigación que decía relación con una escuela de guerrilla en el sector costero de Carahue, quizás Nehuentúe. Una vez designado se presentó ante el comandante del regimiento Tucapel de apellido Iturriaga, quien le manifestó que iba a trabajar en una dependencia ubicada al lado de la oficina el mayor Jofré y que le iban a designar un oficial para que sirviera de actuario, no recordando el nombre del oficial. Reconoce como suya la firma estampada en un documento de otros hechos y respecto del nombre que aparece bajo la firma del secretario y que corresponde a Jaime García Covarrubias, señala que no recuerda a este oficial. Se le pregunta por otros hechos y en lo pertinente dice que conoce a Alfonso Podlech Michaud, quien es abogado, respecto del caso en particular por el que se le pregunta, indica que esta persona lo llamó por teléfono a poco de haber tomado su cargo de Fiscal Ad-Hoc para pedirle que dejara a todos los detenidos presos, porque eran extremistas. Que en aquel tiempo Podlech tenía buenas relaciones tanto con los oficiales de la fuerza aérea como con los del regimiento Tucapel. Que en este último lugar se le veía a menudo, puesto que había sido militar anteriormente. Después del 11 de septiembre de 1973, Podlech acudía

frecuentemente al regimiento, vestido de militar. Se decía que era consultado tanto por el comandante del regimiento como por el mayor Jofré sobre temas legales. Desconoce si tuvo participación en los interrogatorios de detenidos, pero si sabe que organizó la Fiscalía Militar que funcionó al interior del regimiento.

A.125. Juan José Salgado Goyeneche (31 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 1.793 a fs. 1.797 (Tomo VI); de fs. 1.806 a fs. 1.807 (Tomo VI) y de fs. 2.594 a fs. 2.597 (Tomo VIII).

En declaración judicial de fecha 26 de noviembre de 2012, rolante de **fs. 1.793 a fs. 1.797 (Tomo VI)**, sostuvo que el año 1973 cumplía funciones en el Regimiento de Infantería N° 8 Tucapel de Temuco, con el grado de sargento segundo. Encuadrado en la compañía andina cuyo comandante era el capitán Mario Alvarado Verdugo. Recuerda, además, como oficiales de esta compañía a los tenientes Pablo Gran, Carlos Oviedo y Valdebenito. Refiere a un operativo en el sector de Nehuentue, donde resultaron personas detenidas e interrogadas, siendo derivadas al regimiento Tucapel, "donde la sección de inteligencia se hizo cargo de ellos". Continúa su relato y en lo pertinente agrega que después de su regreso a Temuco, le correspondió acompañar al capitán Mario Alvarado a efectuar un patrullaje al sector cordillerano de Pucón, específicamente a Curarrehue. Recuerda que fueron en un helicóptero de la fuerza aérea y aterrizaron cerca de una cabaña. En ese lugar detuvieron a doce personas que intentaban cruzar hacia Argentina. Uno de ellos era un ex conscripto durante el período 1969 a 1970, a quien lo conoció como "el guatón Muñoz". Este joven le dijo que le habían pagado para cruzar a estas personas que eran proclives al régimen de la unidad popular. Sustenta que entre ellos había profesores, psicólogos y otros profesionales. Todos los que fueron derivados hacia el regimiento Tucapel de Temuco. Este hecho debió haber ocurrido entre fines de septiembre y mediados de octubre antes de irse a Santiago. Del personal de inteligencia del regimiento Tucapel recuerda al capitán Ubilla, a los suboficiales Moreno y Schonherr. Además, participaban en los interrogatorios de detenidos los tenientes Vásquez Chahuán, Jaime Covarrubias y Raimundo García Covarrubias. Esto le consta porque era comentario generalizado en el regimiento. Adiciona que hubo varios detenidos en el regimiento durante los primeros días después del 11 de septiembre, los que eran mantenidos en el gimnasio. Que supo de la muerte de algunas personas en Temuco después del 11 de septiembre de 1973,

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

específicamente en un enfrentamiento que hubo en el regimiento, pero no sabe más detalles. Se le pregunta por otros hechos y en lo adecuado dice que supo de la existencia de una sala de interrogatorios en la cuadra de la compañía de plana mayor, que él no participó de esos interrogatorios, pero se comentaba que los oficiales Jaime García, Raimundo García, Nelson Ubilla Toledo, Vásquez Chahuán y Rubio Balladares interrogaban a los prisioneros que estaban en el regimiento Tucapel. Que escucho o se informó a través de la prensa respecto del contenido de los Bandos militares que daban cuenta de la muerte de algunos prisioneros extremistas que habrían intentado escapar desde el regimiento Tucapel o mientras eran trasladados de un lugar a otro. Refiere a otros hechos.

En declaración judicial de fecha 04 de julio de 2013, **rolante de fs. 1.806 a fs. 1.807 (Tomo VI)**, ratifica declaración judicial rolante de fs. 3.459 a fs. 3.463 (las que constan en estos autos a fs. 1.793 a fs. 1.797 Tomo VI), suma que la oportunidad en que fue al sector de Curarrehue y se detuvo a las 12 personas, recuerda que andaban en tres helicópteros de la Base Aérea Maquehue. Los detenidos fueron trasladados en uno de estos aparatos y él se regresó posteriormente por tierra desde Curarrehue a Temuco. Que “seguramente el servicio de inteligencia se hizo cargo de ellos en el regimiento Tucapel”. Esta seguro que el servicio de inteligencia se encargaba de interrogar a los detenidos en el regimiento. El grupo de inteligencia estaba encabezado por el capitán Nelson Ubilla más los suboficiales Orlando Moreno Vásquez y Raúl Schonherr. Junto con ellos participaban de los interrogatorios los tenientes Vásquez Chahuán, Jaime y Raimundo García Covarrubias. Aunque él nunca presenció estos interrogatorios, “todo el mundo sabía dónde estaban los detenidos y quiénes los interrogaban”. Relata otra situaciones y dice que supo de la muerte de personas en el regimiento Tucapel, pero se enteró tiempo después de ocurrido estos, no cree que estas personas hayan fallecido de la manera como se dijo en los Bandos. Que las personas encargadas de los detenidos son los responsables de lo ocurrido con ellos.

En declaración judicial de fecha 27 de marzo de 2017, rolante de **fs. 2.594 a fs. 2.597 (Tomo VIII)**, replica su desempeño en el regimiento Tucapel y que le correspondió en innumerables situaciones realizar patrullajes por control de toque de queda. Si bien era sargento segundo, cuando efectuaron los patrullajes siempre iba acompañado de un superior a cargo. Que el 14 de octubre de 1973

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

vijaron a Santiago en comisión de servicios. Relata comisión de servicios a Nehuentue y reitera la detención de doce personas en el sector de Curarrehue a los que trasladaron a la base aérea Maquehue y posteriormente al regimiento Tucapel de Temuco en calidad de detenidos. Se le pregunta por otros hechos. Dice no tener conocimiento de las personas apremiadas al interior del regimiento Tucapel de Temuco. Consultados por lo ocurrido con Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Juan Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Schmidt Arriagada, Juan de Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt; quienes, habrían sido detenidos aproximadamente el 12 o 13 de septiembre por carabineros de Pucón al intentar cruzar la frontera en Curarrehue, para posteriormente ser llevados vía aérea (en helicóptero) a Temuco (Regimiento Tucapel, Cárcel o base aérea Maquehue). Refiere que puede decir que esas debieron ser las personas que tomó detenidas en el operativo que realizaron a Curarrehue y que narró precedentemente. Sin embargo, las personas que tomaron detenidas eran doce personas y que estaban listas para cruzar la frontera, los pillaron como a las seis o siete de la mañana del mes de septiembre de 1973, no está seguro, pero era posterior al 11 de septiembre de 1973. De esos detenidos reconoció a uno de apellido Muñoz, que era conscripto. Que estos detenidos fueron trasladados a la fuerza aérea o al regimiento, que eso lo manejaban los de inteligencia. Que en aquella oportunidad cree que andaba el capitán Alvarado, Pablo Grand. Se le pregunta por otros hechos y suma que nunca vio personas torturadas al interior del regimiento Tucapel, ni menos la individualización de las personas que realizaban aquellas labores. Que lo único que sabe es que esa labor la realizaba los integrantes del servicio de inteligencia del regimiento, más los de la "DINA". Sin perjuicio de haber visto personas apremiadas en los distintos patrullajes que narró y detalló en su declaración extrajudicial.

A.126. José Raúl Inzunza Reyes (21 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 1.809 a fs. 1.810 (Tomo VI); de fs. 1.813 a fs. 1.814 (Tomo VI); de fs. 2.741 a fs. 2.743 (Tomo VIII); de fs. 3.629 a fs. 3.630 (Tomo X) y de fs. 3.832 a fs. 3.833 (Tomo XI).

En diligencia de careo con Hernán Quiroz Barra de fecha 05 de julio de 2013, rolante de **fs. 1.809 a fs. 1.810 (Tomo VI)** (cuya copia consta a de fs. 3.629 a fs. 3.630 Tomo X) ratifica declaraciones extrajudiciales y en lo pertinente no

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

reconoce a la persona con quien se le carea. El Tribunal se le da a conocer que se trata de Hernán Quiroz Barra, señala que tenía la impresión de que era él, pero como ha pasado tanto tiempo esta persona ha envejecido. Lo recuerda porque trabajo con él en la compañía de plana mayor y servicios junto con el capitán Nelson Ubilla Toledo. Que no puede estar equivocado. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo con Libardo Schwartenski Rubio, de fecha 05 de julio de 2013, rolante de **fs. 1.813 a fs. 1.814 (Tomo VI)** (cuya copia consta de fs. 3.832 a fs. 3.833 Tomo XI), ratifica sus dichos y reconoce a la persona con quien se le carea, de quien hizo referencia en declaración. Que éste estuvo presente durante los interrogatorios, pero no lo vio aplicar electricidad a los detenidos, ni interrogados. Que solo recuerda al sargento Arias, participando en interrogatorios y torturas. Que es cierto lo que señala Schwartenski, en el sentido que todos los oficiales del regimiento iban a la sala de interrogatorios a curiosear. No sabe si ellos interrogaban o no, pero sí que entraban a mirar. Se mantiene en sus dichos.

En declaración extrajudicial de fecha 25 de julio de 2017, rolante de **fs. 2.741 a fs. 2.743 (Tomo VIII)**, destaca que realizó su servicio militar en el regimiento Infantería N° 8 Tucapel de Temuco, el cual tuvo una duración de dos años, es decir desde 1973 a fines de marzo de 1974. Que tal como ha declarado en ocasiones anteriores su desempeño como soldado conscripto fue en la **compañía de plana mayor y servicios** por casi todo el periodo en que permaneció en el regimiento, ya que los primeros meses de 1973 estuvo en la primera compañía de cazadores. Deja claro que integró el grupo de soldados que participaba en labores con detenidos, cuando los soldados Schwartenski, Chávez y Valeria, fueron enviados al curso de inteligencia en la región Metropolitana, no recuerda muy bien si esto fue a mediados de octubre o noviembre, el hecho es que se integró a ese grupo por esa fecha. Antes de esa época, tenía otra labor la que se relacionaba con labores logísticas o de apoyo al servicio de rancho o cocina, ya que era utilizado para repartir víveres en las distintas dependencias del regimiento, recordando que para esos efectos manejaba un tractor. En relación con las labores que pasó a cumplir, señala que estas tenían que ver con el trato con los detenidos que llegaban a la unidad militar, labores que estaban a cargo del capitán Nelson Ubilla Toledo, y el sargento Mario Arias quienes se hacían apoyar por dos detectives, recordando solamente a Quiroz. Ratificando sus dichos en el

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

sentido que estos funcionarios interrogaban a los detenidos bajo aplicación de tortura, la que consistía en golpe y corriente, al interior de una sala ubica en la compañía de plana mayor y servicios, a la cual ingresaban también otros oficiales como el teniente Jaime García Covarrubias y un suboficial de apellido Silva. Cuyo nombre nunca ha podido recordar. En cuanto a los conscriptos que participaban en los interrogatorios, recuerda a su llegada ya estaban los conscriptos Juvenal Lagos Osses y Juan Campos Valdebenito, aparte de los mencionados Chávez, Valeria y Schwartenski, quienes ya se habían ido a su llegada. Respecto de las víctimas Héctor Aguayo Olavarría, los hermanos Juan Carlos y Ricardo Schmidt Arriagada, Elías y Hugo Gonzalez Ortega, Alejandro Escobar Vásquez, Raúl Figueroa Burkhardt y Juan de Dios Cabrera Figueroa, señala que sus nombres no le son conocidos. Y en lo pertinente que la fecha en que las victimas estuvieron detenidas en el regimiento, no se encontraba realizando labores con detenidos. En relación con las dos personas fallecidas que debieron sacar de la sala de tortura de la compañía de plana mayor y servicios, ambos casos fueron de manera separada, cree que con una semana o poco más de diferencia. Aclarando que ese día se encontraba de clase de servicio y recibió la orden de un funcionario que no recuerda, que debía despejar el pasillo de la cuadra de su compañía, ya que había que sacar un cadáver de la sala, esto en las dos ocasiones que recuerda. Que no tomó los cuerpos, sino que solo vio cuando los sacaron de la sala, envueltos en frazadas, para posteriormente subirlos a un camión que se aculató a las dependencias de la compañía, para posteriormente ser llevados en ambas ocasiones al hospital Regional de Temuco. Que nunca supo mayores detalles al respecto, y en los casos señalados no pudo ver el rostro de las víctimas, ya que estaban envueltos en frazadas. Tampoco recuerda que funcionarios o soldados estaban presente en ambas ocasiones, solo puede presumir en que en estos casos hayan estado en conocimiento del personal que se desempeñaban en los interrogatorios, los cuales ya mencionó.

A.127. Bernardita del Carmen Weisser Soto (23 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 1.820 a fs. 1.821 (Tomo VI), de fs. 1.828 a fs. 1.830 (Tomo VI) y de fs. 4.215 a fs. 4.218 (Tomo XII).

En declaración judicial de fecha 19 de julio de 2013, rolante de **fs. 1.820 a fs. 1.821 (Tomo VI)**, ratifica declaración y en lo pertinente agrega a sus dichos que la mujer que participó en su interrogatorio se llama Miriam Coronado, cuyo

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

segundo apellido podría ser Figueroa. A esta mujer la conoció en Puerto Montt y tenían mucha cercanía, puesto que ambas vivían en la misma pensión y ella era como su mamá. Cuando se vino a Temuco a estudiar ella también se mudó. Recuerda que incluso la fue a ver a la cárcel mientras estuvo detenida. No sabe por qué no asoció antes, su voz, con la persona que la interrogó en el regimiento Tucapel, pero con los años tuvo la certeza de esto. Complementa que cuando estaba sentada en un oficina de la Fiscalía Militar y vio llegar a los conscriptos con libros requisados y que fueron tirado en el piso junto con otros, pudo ver uno de Gabriela Mistral, se lo pidió al mayor Jofré, quien estaba en ese lugar, “lo recogió justo en el momento en que entraba Alfonso Podlech a la sala”; continua su relato en esa dinámica, sumando que Alfonso Podlech vestía uniforme militar y recuerda que en una o dos oportunidades la interrogó en la Fiscalía Militar junto con su actuario de apellido Gonzalez. Comenta otras cosas.

En diligencia de careo con Alfonso Podlech Michaud, de fecha 19 de julio de 2013, rolante **de fs. 1.828 a fs. 1.830 (Tomo VI), ratifica** su declaración judicial rolante de fs. 3.503 a fs. 3.504 la que consta en estos autos de fs. 1.820 a fs. 1.821 (Tomo VI). Que la persona sentada a su lado es el abogado Alfonso Podlech Michaud, quien la interrogó a fines de octubre de 1973, en la Fiscalía Militar ubicada al interior del regimiento Tucapel. Comunica que fue sometida a Consejo de Guerra en 1975, y “usted” refiriendo a Alfonso Podlech, era fiscal en esa oportunidad. Que en esa ocasión fue muy irónico con los detenidos que allí estaban, pues señaló que habían sido muy bien tratados. En lo atinente replica haber sido interrogada por Podlech, en una oficina ubicada hacia el fondo del edificio que estaba situado hacia la izquierda de la entrada del regimiento. Que Podlech y el mayor Jofré usaban uniforme, mientras que sus actuarios y el señor Novoa vestían de civil. Le parece que la relación que tenía Podlech con el resto de los integrantes de la Fiscalía Militar, incluido el mayor Jofré era de superioridad, por cuanto daba la sensación de que todos le tomaban el parecer a él para actuar. Que hubo muchas otras mujeres detenidas que sufrieron torturas y que seguramente fueron interrogadas por este señor, aportando nombre de ellas y se mantiene en sus dichos.

En declaración judicial de fecha 18 de noviembre de 2003, rolante de **fs. 4.215 a fs. 4.218 (Tomo XII)**, soslaya en lo pertinente que en 1973 era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, junto con su marido Alonso

Fernán Francisco Azocar Avendaño, con quien huyó hacia la isla de Chiloé a mediados de septiembre de ese año. Sin embargo, el 16 de octubre fueron detenidos en Castro por la policía de investigaciones, al día siguiente son trasladados hasta la ciudad de Puerto Montt, al cuartel de investigaciones, narrando lo vivido en ese lugar. Al día siguiente los fueron a buscar desde Valdivia, trayéndolo a Temuco, directo al cuartel de investigaciones, lugar donde fue sometida a torturas las que detalla y que luego a los dos días fue trasladada al regimiento Tucapel, donde los recibieron en una oficina que a su parecer era el lugar de funcionamiento de la Fiscalía Militar, lugar donde fue interrogada. Posteriormente fue trasladada al “Buen Pastor”, donde estuvo más de 15 días incomunicada. Que un día fue trasladada al regimiento por el sargento Moreno y la llevaron a una declaración en la Fiscalía, que en ese lugar vio pasar a unos militares con libros requisados, los que iban a ser destruidos, que apareció Alfonso Podlech Michaud quien revisó los libros, continua su relato y que una semanas después a fines de 1973 fue llevada ante el capitán Nelson Ubilla Toledo quien le preguntó por unas situaciones de su interrogatorio. En 1974 o 1975 no recuerda bien, fue su Consejo de Guerra en el cual fue condenada a 8 años de presidio.

A.128. Mario Carril Huenumán (18 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 1.822 a fs. 1.823 (Tomo VI) y de fs. 4.225 a fs. 4.226 (Tomo XII).

En declaración judicial de fecha 19 de julio de 2013, rolante de **fs. 1.822 a fs. 1.823 (Tomo VI)** ratifica declaraciones prestadas y en lo tangente dice que cuando estaba siendo interrogado y torturado en el regimiento Tucapel, se encontraba desnudo, mojado y con la vista vendada. Detallando lo acontecido y que en un momento se le cayó la venda de la vista y pudo ver a varios militares a su alrededor y que frente a él estaba una persona sentada con una máquina de escribir, después supo que esta persona era Alfonso Podlech Michaud, a quien no conocía. Tiempo después estando en la cárcel, llegó una comisión de ministros de justicia y de militares, entre ellos el Intendente, quienes pasaron revista de los detenidos, reconociendo a la persona que había visto sentada frente a la máquina de escribir cuando lo torturaron y preguntó por su identidad a una persona y le dijo que era Alfonso Podlech Michaud, quien estaba a cargo de los detenidos políticos. Posteriormente le correspondió ir a declarar a la Fiscalía Militar que ya estaba ubicada en los altos de un banco en el centro de Temuco. En ese lugar volvió a

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

ver a Alfonso Podlech Michaud, quien lo trato con diferencia, muy distinto al trato recibido en el regimiento. Es enfático en insistir que la persona que estaba en sus torturas en el regimiento era claramente el señor Podlech.

En declaración judicial de fecha 21 de noviembre de 2003, rolante de **fs. 4.225 a fs. 4.226 (Tomo XII)**, relata que el 02 de octubre de 1973 militares de boina negra llegaron hasta la residencia de su madre en Carahue donde se encontraba, lo amarraron de pies y manos siendo trasladado hasta la comisaría de Carahue, lugar donde estuvo un momento para posteriormente ser trasladado hasta el patio de una escuela donde fue interrogado y golpeado. A la mañana siguiente lo trasladan hasta el retén de Cholchol, lugar donde fue golpeado por un sargento de carabineros. Más tarde lo trasladan al regimiento Tucapel, donde permaneció por una semana alojado en un calabozo que estaba en la guardia. Que en ese lugar fue interrogado en varias oportunidades por el señor Podlech y por el señor Ubilla, en los interrogatorios amenazaron con matarlo, los hacían con la vista vendada. Que una vez lo llevaron a una especie de enfermería en donde le dijeron que “me iban a capar”, por lo que se sacó la venda y reconoció al señor Podlech. Aclarando que el señor Podlech no estaba torturando, sino que estaba presenciando la situación. Que pasado 7 días en el regimiento lo llevaron a la cárcel y posteriormente tuvo que ir a declarar a un Juzgado del Crimen y a la Fiscalía Militar, donde se entrevistó nuevamente con Alfonso Podlech.

A.129. Nelio Gastón Holzapfel Gross (42 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 1.833 (Tomo VI) y de fs. 1.834 (Tomo VI).

En declaración judicial de fecha 12 de agosto de 2013, rolante de **fs. 1.833 (Tomo VI)**, afinsa que fue interrogado en la cárcel por un abogado que era fiscal de carabineros de nombre Dorian Novoa Godoy (fallecido). De quien había sido compañero en el liceo Pablo Neruda de Temuco, por ese motivo éste decidió interceder por él ante Alfonso Podlech, comunicándose telefónicamente con éste para darle cuenta de su situación y su estado de salud. Luego de esa conversación su declaración fue destruida y fue dejado en libertad. Le consta que Dorian se comunicó con Podlech porque lo llamo por su nombre cuando conversaron y escucho la conversación. Está seguro de que Alfonso Podlech fue quien dio la orden de liberarlo.

En diligencia de careo con Alfonso Podlech Michaud, de fecha 12 de agosto de 2013, rolante de **fs. 1.834 (Tomo VI)**, ratifica declaración de 3.571, la

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

que consta en estos autos a fs. 1.833 (Tomo VI), reconociendo a la persona sentada a su lado como Alfonso Podlech Michaud de quien ha hecho referencia. Que a pesar de que han pasado muchos años está seguro de que Dorian Novoa habló con Alfonso Podlech, aunque puede ser que Podlech haya consultado a alguien más respecto de su situación.

A.130. Eliana Pichón Seguel (36 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 1.835 (Tomo VI), de fs. 4.211 a fs. 4.214 (Tomo XII) y de fs. 4.237 a fs. 4.240 (Tomo XII).

En declaración judicial de fecha 13 de agosto de 2013, rolante de **fs. 1.835 (Tomo VI)**, ratifica declaración judicial y expone que recuerda que su hermano Rolando Pichún fue detenido un día después que ella, por efectivo de la fuerza aérea de Temuco, donde fue torturado. En lo pertinente a su estadía en el regimiento Tucapel, señala que debió haberse extendido por cinco a seis días, que puede que haya estado detenida desde el 13 o 14 de septiembre en adelante. En cuanto a Alejandro Flores Rivera lo conocía muy bien. Por ese motivo puede asegurar que lo vio en muy malas condiciones al interior del regimiento Tucapel, mientras era arrastrado por militares en el patio de esa unidad. Solicitando no ser careada con el señor Podlech por su afectación emocional.

En declaración judicial de fecha 05 de septiembre de 2006, rolante de **fs. 4.211 a fs. 4.214 (Tomo XII)** (cuya copia consta de fs. 4.237 a fs. 4.240 Tomo XII), en lo tangente dice que era militante del partido comunista, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores entre otros. Que luego del golpe militar salieron dos bandos militares publicados, uno de los cuales llamaba a presentarse al regimiento a todos los dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores y otro, en el que se mencionaba su nombre. El día 14 o 15 de septiembre apareció en su casa una patrulla de militares integrada por dos jeep y un grupo de motoristas, quienes procedieron a detenerla trasladándola hasta el regimiento Tucapel, en dicho lugar fue conducida hacia el fondo del patio donde habían construido cubículos del tamaño de la oficina en la que se le interroga. Que estando en el patio del regimiento vio pasar a Alejandro Flores dirigente de los funcionarios del hospital de Temuco, quien tenía su rostro desfigurado por los golpes e iba siendo arrastrado por dos militares, y lo seguían dos o tres militares más. Recordando haber sido interrogada por un oficial de la fuerza aérea y golpeada por otros militares detallando lo vivido y que posteriormente fue llevada a las caballerías del

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

regimiento, lugar habilitado para el encierro de detenidos. Desde ese lugar fue sacada dos veces a prestar declaración en la Fiscalía Militar. En ambas oportunidades declaró con la vista vendadas; sin embargo, en la segunda de estas sesiones pudo quitarse la venda parcialmente para restregarse el ojo derecho entonces pudo ver sentado frente a ella a Alfonso Podlech Michaud, a quien conocía desde antes. Que esta persona la interrogó largamente y como no obtuvo información levantó el teléfono “muy encolerizado dando órdenes de preparar un pelotón de fusilamiento para su ejecución”. Finalmente, el interrogatorio terminó y fue trasladada nuevamente hasta las caballerizas, al día siguiente fue liberada gracias a las gestiones de su padre, continúa su relato y solicita no ser careada con el señor Podlech por cuanto su familia sufrió mucho luego de su salida del país.

A.131. Luis Raimundo Quezada Chandía (19 años a la época de los hechos). **En declaración extrajudicial** de fecha 25 de septiembre de 2014, rolante a **fs. 1.931 a fs. 1.934 (Tomo VI)**, informa en lo pertinente que ingresó a efectuar su servicio militar obligatorio en el Regimiento de Infantería N°8 Tucapel durante los meses de noviembre o diciembre de 1972. Que es efectivo que perteneció al partido Comunista de Temuco, antes de su ingreso al regimiento Tucapel, ostentando como cargo el de dirigente estudiantil, siendo presidente de la Federación de Estudiantes Medios de Cautín y también dirigente del centro de alumnos del colegio Pablo Neruda de Temuco. Como compañeros de partido, recuerda a los dirigentes de apellido Barrios, a quien apodaban “el chico”, Figueroa y a Herman Carrasco, de quien supo que estuvo detenido en el regimiento Tucapel en una fecha posterior al 11 de septiembre, cree que poco antes al 10 de noviembre de 1973. Cuenta que el día 11 de septiembre de 1973, ya ostentaba el grado de sargento de reserva del regimiento. La madrugada de ese día se encontraba de guardia comandando una patrulla que tenía por funciones la de vigilancia de la casa del comandante del regimiento coronel Pablo Iturriaga Marchesse y la de algunos suboficiales. El caso es que esa madrugada, se presentó el teniente Espinoza, lo tomó detenido y lo trasladó al regimiento para interrogarlo respecto a su filiación política en la oficina del comandante de la compañía de morteros siendo en ese entonces el capitán Alejandro Rubio Valladares junto al capitán Nelson Ubilla Toledo, quien era jefe de la sección de inteligencia de la unidad militar, prosigue su relato en ese sentido y en lo oportuno

indica que los detenidos que comenzaron a llegar al regimiento a partir del día 11 de septiembre eran alojados en un “gimnasio chico” que estaba al costado de los comedores de los conscriptos y añade que nunca le correspondió efectuar la custodia de estos, ya que esas funciones casi siempre las efectuaba el contingente de las compañías de plana mayor y servicios y la de cazadores. Continúa su declaración señalando que dentro del gimnasio había una dependencia donde se torturaba. Se comentaba que había un catre donde se le aplicaba corriente eléctrica a los detenidos, esto lo supo por el comentario de la gente que trabajaba en el casino y también porque a veces se escuchaban gritos provenientes de esa dependencia. Que es efectivo que en la enfermería, cuadra de plana mayor y servicios y un baño ubicado entre las cuadras de las compañías de cazadores y andina, se efectuaban interrogatorios. Sobre las personas que participaban en esos interrogatorios, dice que estaban el capitán Nelson Ubilla Toledo, el sargento Moreno y dos detectives cuyos nombres no recuerda. Añade que camino a las caballerizas, las cuales se ubicaban junto a una cerca, se instaló una caja metálica, que estaba enterrada en la tierra, la cual se asimilaba a un incinerador, muchas veces sintió olor a carne asada, esto lo sabía todo el mundo. Respecto a las víctimas de los hechos investigados, indica que es la primera vez que escucha sus nombres, por lo que ignora todo antecedente relacionado con sus detenciones y destino final. Que nunca supo la procedencia de los detenidos que llegaban al regimiento.

A.132. Rodolfo Fonseca Fernández. (43 años a la época de los hechos). Quien declaró de fojas 2.052 a fs. 2.054 (Tomo VI), de fs. 2.093 a fs. 2.095 (Tomo VI) y de fs. 2.506 a fs. 2.507 (Tomo VII).

En declaración extrajudicial de fecha 15 de abril de 2015 rolante a **fs. 2.052 a fs. 2.054 (Tomo VI)** (copia a fojas 2.093 a fs. 2.095 del tomo VI) aduce en lo adecuado que para el año 1973 tenía la edad de 43 años, se desempeñaba en la corporación Nacional Forestal y además era secretario del consejo comunal campesino del partido socialista. Que estuvo detenido en una fecha posterior al once de septiembre, a manos de personal de ejército quienes probablemente venían desde Temuco, para posteriormente ser llevados a la tenencia de carabineros de Pucón y después al regimiento Tucapel de Temuco. Junto a él iban detenidos Antonio Colpinueque, Raúl Fuentes, Raúl Roa, Gustavo Brevis y un joven que apodaban “Monasterio”, además de Amador Colihual y Amador

Acevedo. Dentro de este grupo de detenidos también recuerda a una persona de nombre Juan, del cual no tiene mayores antecedentes, pero sabe que estaba casado con una mujer de nombre María. Expresa que cerca del mediodía, llegaron al regimiento Tucapel donde estuvieron casi todo el día apoyados con los brazos en alto y piernas abiertas frente a un muro, siempre apuntados por un militar y recuerda además que en un determinado momento los mandaron a comer con la vista vendada dentro del regimiento mientras los soldados los apuntaban según presume. Entre las siete y ocho de la tarde los sacaron de ese lugar para llevarlos a la Fiscalía donde se enteró que se le había denunciado de extremista peligroso y también se le acusaba de haber querido matar a un carabinero de apellido Vergara, cosa que era totalmente falsa. Según recuerda el nombre del fiscal era Alfonso Podlech quien era el fiscal militar. Hace presente que el mencionado fiscal procedió a interrogar a los ocho detenidos que estaban ahí, dictaminando su libertad condicional, ya que les advirtió que debían quedar firmando en la tenencia de carabineros, situación que se prolongó por tres años. Complementando lo anterior, señala que el fiscal fue enfático en indicar que, si caían detenidos nuevamente, serían fusilados en el acto. Hace especial referencia de la detención de Amador Curihual la que comenta. Cuenta que a su llegada a Pucón y por sugerencia de Brevis, se bajaron del bus frente a la tenencia de carabineros y comenzaron a caminar por avenida O'Higgins hacia sus domicilios. Mucha gente que apoyó el régimen militar los vio y al día siguiente en la mañana sus domicilios fueron allanados por carabineros de Pucón, quienes los llevaron detenidos a la tenencia. Recordando que luego de su llegada a la tenencia llegaron boinas negras del ejército quienes procedieron a vendarlos y llevarlos a las pesebreras. En ese lugar procedieron a interrogarlos, respecto a la tenencia de armamento, a lo cual respondieron que esa situación no era así, por esa razón los comenzaron a torturar, detallando lo sucedido a consecuencia de lo cual fue llevado al hospital donde estuvo ocho días internado. Preguntado, expresa que en la tenencia de Pucón no vio a otras personas detenidas, ya que siempre estuvieron con la vista vendada y los nombres de Héctor Aguayo Olavarría, Ricardo y Juan Carlos Smith Arriagada, Hugo y Elías González Ortega, Juan Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez y Juan Figueroa Burkhardt, no le son conocidos a excepción de Aguayo, ya que era hijo de un amigo de Curarrehue. Apunta que lamentablemente

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

no sabe las circunstancias en que desaparecieron esos jóvenes ni sus destinos finales

En declaración judicial de fecha 12 de septiembre de 2016 rolante a **fs. 2.506 a fs. 2.507 (Tomo VII)** ratifica su declaración extrajudicial de fs. 2.053 a fs. 2.054, comenta lo relacionado con las otras personas que estuvieron detenidos con él y en lo pertinente respecto de los carabineros de Pucón, puede indicar que el capitán Bustos Letelier facilitó las instalaciones a los boinas negras para que los torturaran. Sobre el tal Juan, quien presume fue la persona que murió en las torturas y fue lanzado al lago, esta persona trabajaba en "INDAP". Nunca más lo volvió a ver. Su esposa era la "María Pistola", a quien nunca más vio.

A.133. Ricardo Virginio Aguayo Olavarría (20 años a la época de los hechos). Quien declaró a fojas 2.055 a fs. 2.057 (Tomo VI), de fs. 2.061 a fs. 2.062 (Tomo VI), de fs. 2.103 a fs. 2.108 (Tomo VI) y de fs. 3.030 a fs. 3.031 (Tomo IX).

En declaración extrajudicial de 15 de abril de 2015 rolante a **fs. 2.055 a fs. 2.057 (Tomo VI)** (copia a fojas 2.090 a fs. 2.092 del tomo VI) expone que para el año 1973, se encontraba viviendo en la ciudad de Villarrica junto a sus padres, Francisco Aguayo Gallegos y Cirila Olavarría Jaramillo, ubicado en calle Pedro Montt N° 967, Villarrica. Hace presente que, a pesar de vivir en Villarrica, eran oriundos de Curarrehue, donde su padre tenía negocios relacionados con la elaboración de madera. Vivían en Villarrica por razones de estudios y en vacaciones regresaban a Curarrehue, sin embargo, eran muy conocidos en esa zona, ya que la enseñanza básica la cursaron en la Escuela N° 17 de Curarrehue, cuyo director era don Manuel Humaña. Respecto a su hermano Héctor, señala que era uno de los mayores, para el año 1973, cursaba la enseñanza media, era simpatizante de las juventudes socialistas de la zona. Dentro de sus amistades, recuerda a los que hoy también son víctimas, como lo son los hermanos Schmidt, hermanos González, un joven de apellido Parra, y otro cuya identidad no recuerda. Respecto a las circunstancias que rodearon la detención de su hermano, expresa que no fue testigo de esa situación, pero tiene claro que días posteriores al golpe de Estado, su hermano y sus amigos decidieron abandonar el país por temor a ser detenidos conforme a la información que diariamente salía en bandos militares y en la prensa local en el sentido que se mencionaba que toda persona de pensamiento distinto al régimen recién instaurado iba a ser exterminada. Esa situación la apoyó su padre por temor a que a Héctor le sucediera algo. Por esa

razón, Héctor y sus amigos emprendieron viaje hacia la República Argentina, para lo cual pretendían pasar por el paso Huife tratando de eludir los controles fronterizos que existían en los otros pasos, es así como, cuando iba camino a Pichares en un bus, deciden bajarse antes de la bifurcación Caburgua-Huife donde emprenden caminata. Por lo que sabe, al cabo de un rato son interceptados por un vehículo particular en el cual iba personal de Carabineros de Chile de la tenencia de Pucón, siendo detenidos en ese lugar. Posteriormente, son trasladados a la tenencia de Pucón, donde les habrían cortado parte de su cabello, para ser trasladados a la comisaría de Villarrica donde también les fue cortado el cabello. Por los antecedentes que maneja después de su estadía en Villarrica que no pasó más de un día, fueron trasladados hasta el regimiento Tucapel de Temuco donde permanecen detenidos dos días aproximadamente. Lo anterior, lo sostiene porque dicha información se la aportaron personas detenidas del regimiento Tucapel, a quienes encontró en la cárcel pública de Temuco, ya que también fue detenido en Villarrica y trasladado en primera instancia al regimiento Tucapel de Temuco para posteriormente ser llevado hasta a la cárcel pública, donde permaneció poco más de una semana. En ese lugar encontró al profesor Humaña quien le comentó que vio a su hermano en el Tucapel y que habían conversado dentro de lo cual le dijo que Héctor le había dado los detalles de su detención la que comentó en párrafos anteriores. Hace presente que conforme a la información que le entregó el señor Humaña y unos hermanos de apellido Díaz, entendió que probablemente Héctor iba a pasar a la cárcel ese mismo día, pero esa situación no sucedió. Apunta que el día de su libertad, pasó al domicilio en Temuco de don Gregorio Seguel Capitán, quien era padrino de su hermana Evita y por ende, muy amigo de su padre, con el objeto de pedirle ayuda económica para regresar a Villarrica, ya que no tenía dinero, es así que tomó contacto directo con don Gregorio y su esposa, quienes le comentaron que Héctor había pasado a su casa días atrás a solicitarles ayuda económica para regresar a Villarrica junto a unos amigos, dándole a conocer que había estado detenido en el regimiento Tucapel y que había sido dejado en libertad. Conforme a lo que le señaló don Gregorio le habría entregado ayuda y una vez que Héctor se retiró del domicilio, llegó personal de carabineros y ejército consultándole qué había pasado a hacer a su domicilio, a lo cual don Gregorio le respondió lo mismo que le comentó al declarante, y los efectivos militares procedieron a retirarse presumiendo que

andaban siguiendo a su hermano y a sus amigos. Desde ese día no supieron nunca más de Héctor y hasta la fecha desconocen su actual paradero. Relata que su padre, por su parte buscó a su hermano insistentemente en el regimiento Tucapel en Temuco, hasta que en un momento en que fue a consultar por él, lo amenazaron que no regrese más, ya que podría desaparecer igual que su hermano. Con el paso del tiempo y en una conversación sostenida con su padre, le confesó que él tenía una hija nacida antes del matrimonio con su madre, quien habría tenido un hijo que vendría siendo su nieto, quien, para la fecha de detención de su hermano, habría estado cumpliendo su servicio militar obligatorio en el regimiento Tucapel. Posteriormente, al tiempo su padre le comentó, que se había reunido con este nieto en dos oportunidades, en circunstancias en que vino a esta zona de campaña con su compañía, ya que su madre le habría entregado antecedentes para ubicarlo acá. Es así como su padre le manifestó que este nieto quien tiene por último apellido Aguayo le habría comentado una situación relacionada con una ejecución que se efectuó en el puente Toltén donde trajeron unos detenidos desde Temuco, a quienes hicieron bajar desde un vehículo militar y el funcionario a cargo le habría pedido a cada uno de éstos gritar su nombre completo, a lo cual le llamó la atención un joven de apellido Aguayo. Cuenta que si padre hizo referencia a que éste joven le habría dado la descripción física de este detenido la que coincidiría con la de su hermano. Respecto, de la identidad de la madre de este joven, la desconoce, pero sabe que son oriundos de la comuna de Teodoro Schmidt y su apellido podría ser Aguayo.

En declaración judicial de fecha 17 de abril de 2015 rolante a **fs. 2.061 a fs. 2.062 (Tomo VI)**, ratifica su declaración extrajudicial de fs. 2.055 a fs. 2.059 y aclara en lo pertinente que a pesar de que vivía en Villarrica en 1973, estudiaba en Temuco. Precisa además que la patrulla de carabineros y ejército que pasó a la casa de Gregorio Seguel Capitán lo hizo media hora después de que su hermano se había ido desde ese lugar. También agrega que los apellidos del conscripto a que hizo referencia son Fuentes Aguayo. Añade que por las conversaciones sostenidas con varias personas a lo largo de los años, especialmente con los señores Humaña y Díaz quienes estuvieron detenidos en la cárcel de Temuco y que conocían a su hermano, el grupo fue detenido mientras caminaban hacia la frontera cerca del cruce del camino de Caburgua hacia Curarrehue, por carabineros de Pucón que se movilizaban en una camioneta particular que

pertenecía a Carlos Barra. Esto se lo dijo su hermano Héctor a Humaña y a Díaz porque esa camioneta antes había sido de su padre y éste se la vendió a Barra. Que en ese momento los jóvenes caminaban cuidándose de no toparse con un vehículo militar o de carabineros y no le tomaron importancia al móvil particular que se acercaba. Cuenta que su hermano reconoció el vehículo por sus colores blanco y celeste. Después de la detención fueron llevados a Pucón donde les cortaron el pelo a todos a media cabeza. Acto seguido los llevaron a Villarrica donde los carabineros de esa Comisaría les cortaron totalmente el cabello y se burlaban de ellos. Esto lo supo por comentarios efectuados por el carabinero Joaquín López a una vecina de nombre Laura Pinilla hace muchos años. En esa oportunidad él se reía de la manera como habían sido pelados los detenidos desde Pucón. López en ese tiempo vivía muy cerca de su domicilio, por lo tanto los conocía a todos.

En declaración judicial de fecha 17 de junio de 2015 rolante a **fs. 2.103 a fs. 2.108 (Tomo VI)** expresa en lo adecuado que hace poco tiempo conversó con su hermana Sara Aguayo Olavarría, quien le dijo que una persona que trabajaba en correos de Chile y que era amigo de la familia encontró la cédula de identidad de su hermano en la orilla del río Toltén. Esta persona trabajó durante los años 60 en Curarrehue en correos de Chile y era vecino y amigo cercano de la familia. A quien le gustaba mucho la pesca y siempre lo hacía en diferentes ríos. Fue durante esas jornadas que encontró el carné de su hermano a fines de 1973 mientras pescaba en el río Toltén. No sabría decir en qué lugar específico ocurrió esto, pero fue a ver a su padre y le entregó la cédula de su hermano. Éste se llama Rolando Chávez. Respecto de las vestimentas que llevaba su hermano cuando fue detenido no tiene recuerdo. Solo recuerda que tenía un veston marrón que siempre usaba. Añade que su hermano Héctor al momento de ser detenido tenía una mano infectada producto de haber sufrido la mordedura de un animal del campo, quizás un Chingue. Esto sucedió durante el viaje que emprendieron para salir del país y lo supo porque alguno de los que estuvieron detenidos junto con él se lo comentaron. Dice que es muy posible que los detenidos hayan sido llevados a Villarrica antes de su ingreso al regimiento Tucapel porque esa comisaría de carabineros fue un centro de torturas que la fuerza aérea tenía. Quizás los interrogaron para sacar algún tipo de información, además del hecho de ser todos ellos de Villarrica. Ante la pregunta del Tribunal, contesta que para septiembre de

1973 estaba estudiando en Inacap en Temuco. Era compañero con varios militares de la fuerza aérea. En aquel tiempo era simpatizante del partido Socialista, pero no tenía mayor participación. Su padre era militante y había sido candidato a regidor en alguna oportunidad en Curarrehue. El 13 de septiembre de 1973 carabineros de Villarrica fue hasta su domicilio ubicado en calle Pedro Montt N° 967 en horas de la mañana. Recuerda que estaban tomando desayuno cuando tocaron a la puerta y su madre abrió. Entonces carabineros irrumpieron violentamente y allanaron la casa al tiempo que preguntaban por su hermano Héctor Aguayo. Como no lo encontraron salieron del domicilio y cuando estaban a punto de irse uno de ellos sugirió que lo llevaran detenido a él, cosa que hicieron. Relata que lo subieron al furgón policial y lo llevaron a la comisaría. Allí fui dejado junto a otras muchas personas en las pesebreras de las caballerizas. Después del mediodía apareció un microbús particular en el cual fueron todos subidos y llevados hasta el regimiento Tucapel. Recuerda que junto con él iban detenidos Oscar Donoso, estudiante; un joven de apellido Fuentes; el gerente del Banco del Estado de Villarrica entre otros cuyos nombres no recuerda. El móvil entro al patio de la unidad militar en donde estuvieron un par de horas más sin bajarse del bus. Después, todos fueron trasladados hasta la cárcel pública de Temuco. Allí les tomaron los datos y uno o dos días más tarde fue interrogado por una de las dos personas que venían de la Fiscalía Militar. Cuenta que en la cárcel de Temuco estuvo junto Manuel Humaña, los hermanos Díaz, René Turumpil, todos de Curarrehue. Dos o tres días más tarde fue liberado sin que haya pasado por la Fiscalía Militar en el regimiento. Ya en Villarrica debió presentarse en la comisaría de carabineros para informar que tenía que firmar una vez por semana en ese lugar. Relata que, al día siguiente, en horas de la noche y cuando ya estaba acostado, llegó el furgón de carabineros de Villarrica a su domicilio y los policías preguntaron por él. Salió de la casa y antes de subir al vehículo le vendaron la vista con un género de carpa muy rígido. Dieron varias vueltas por el pueblo e incluso pasaron a buscar a otras personas que quedaban en la misma condición. Finalmente llegaron a la comisaría de Villarrica, donde los subieron al segundo piso de las caballerizas. Allí fueron dejados un momento hasta que de pronto comenzaron los interrogatorios y la golpiza. Recuerda que había dos personas “jóvenes que estaban siendo terriblemente golpeadas, a quienes les preguntaban por nombres de personas”. Ellos señalaban que estaban trabajando en Argentina

y que habían cruzado a pie un paso fronterizo cerca de Pirihueico, lugar donde fueron detenidos y trasladados en helicóptero hacia Villarrica. Decían que habían regresado a Chile para dar dinero a sus familias y habían tenido que cruzar a pie porque la locomoción hacia Chile estaba paralizada. Por su puesto que no les creyeron y la tortura se hizo muy intensa, al punto que producto de los golpes en el pecho les provocaron a ambos una suerte de sofocación falleciendo en el lugar. Uno de los torturadores, que al parecer tenía conocimientos de medicina, los inspeccionó y les dijo a sus compañeros que no siguieran golpeándolos porque ambos estaban muertos. Él estaba tirado en el piso y pudo mirar esta escena, ya que se le corrió un poco la venda. Pudo identificar a los torturadores como uniformados que pertenecían a la fuerza aérea de Chile. No vio a carabineros en el lugar. Narra que le tocó el turno de ser interrogado y torturado, le preguntaron por personas a quienes no conocía, salvo a la esposa de un señor de apellido Puchi, que era comunista. Además, le consultaban por sus actividades políticas y si era comunista etc. Todo esto acompañado con golpes de pie y puños además de ser golpeado con un bastón que era como un mango de hacha. Anexa que en un momento determinado se hizo el muerto para que lo dejaran de golpear. Entonces el "enfermero" del grupo lo revisó y les dijo a sus compañeros "este ya sonó". Acto seguido los carabineros lo sacaron del lugar y lo subieron en calidad de bulto a la pick up de una ICA Renault de color amarillo. Lo llevaron hacia su domicilio y lo tiraron en la vereda a dos cuadras de su casa. Esperó a que el vehículo se alejara, se levantó y se fue a su casa. Estuvo casi una semana en cama, pero cuando llegó la fecha de ir a firmar a la comisaría tuvo que levantarse y acudir para cumplir con su obligación. No recuerda que alguno de los carabineros presentes ese día en la guardia haya hecho algún comentario cuando lo vieron aparecer. Comenta que más o menos pasado un mes desde la primera vez que fue detenido y torturado, una noche volvieron a presentarse los carabineros de Villarrica en su domicilio y lo llevaron detenidos a la comisaría, siempre vendado y subido una vez más a los altos de las caballerizas. En esta oportunidad fue torturado mucho más violentamente que la primera vez, al punto que le reventaron una glándula sebácea del lado izquierdo del cuello. También lo dejaron tirado en la calle al igual que la vez anterior, pero esta vez fue cerca de un molino que estaba en calle Presidente Ríos. Como consecuencia de estas torturas tuvo que ser operado por el doctor Negroni, que le extirpó la glándula sebácea

dañada. Asevera que fue torturado en cuatro oportunidades en total en Villarrica, siempre en el mismo lugar y por personal de la fuerza aérea. Recuerda haber visto a lo menos en dos de estas oportunidades un helicóptero estacionado detrás de las caballerizas. También fue detenido y torturado en Curarrehue. Relata que su padre tenía un aserradero y maquinaria agrícola en ese lugar por lo que constantemente debía ir a esa localidad. Recuerda que la primera vez que fue después del golpe militar fue el 30 de octubre de 1973, en vísperas de Todos los Santos. Su propósito era limpiar las tumbas de la familia. A los dos días de estar en Curarrehue fue interceptado en la calle por una patrulla de carabineros que se hacía acompañar por un soldado del ejército, específicamente del regimiento Tucapel. Al mando del grupo estaba el sargento Hermindo Morales, a quien conocía. Éste lo llamó por su nombre y después le dijo que debía acompañarlos al retén. Cuando llegaron allí lo hicieron entrar y Morales dijo a voz en cuello al resto de los carabineros "¡Este es el mirista que quería hacernos volar el retén. A él háganlo mierda!", tras lo cual todos los carabineros presentes, seis o siete, se abalanzaron sobre él y lo golpearon con palos, pies y puños. Después de un rato, dejaron de pegarle y fue encerrado en un calabozo hasta el día siguiente. Morales dijo que iba a ir a buscar a unos de los hermanos Díaz para hacerlo pelear con este. Esto era habitual en Curarrehue después del golpe, ya que carabineros hacía pelear con guantes a los detenidos en una pampita que había a un costado del retén. Estas peleas eran presenciadas por los habitantes del pueblo, que se entretenían con esto. Finalmente, no encontraron a los hermanos Díaz, así es que a la mañana siguiente fue llevado al lugar donde se peleaba junto a un hombre ya mayor de aproximadamente setenta años, con quien Hermindo Morales pretendía que boxeara. Como se negó a hacerlo éste se puso los guantes y lo desafió a pelear. Morales tenía experiencia en boxeo y pensó que ganara o perdiese, de todas formas, iba a ser malo para su integridad física, por lo que nuevamente se negó. Entonces Morales comenzó a golpearlo con los guantes y trató de esquivar sus golpes. Morales les decía a los otros carabineros presentes que el declarante se defendía bien producto de su entrenamiento como guerrillero. Continúa su relato contando que, tras un rato, lo llevaron de regreso al retén y allí le dieron unos alimentos que su padre había llevado. Después de algunas horas, al medio día quizás, fue liberado, pero Morales le dijo que en cuanto pillara a Díaz lo iba a ir a buscar para que peleara. En otra oportunidad que fue a Curarrehue se presentó

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

en el retén y nuevamente fue golpeado por los carabineros, pero esta vez no lo dejaron detenido. Después de esto su padre decidió que lo mejor era que se fuera del país o si no iba a correr la misma suerte que su hermano Héctor. Así es que en diciembre de 1973 se fue a Argentina.

En declaración judicial de fecha 5 de noviembre de 2018 rolante a fojas 3.030 a fs. 3.031 (Tomo IX) atestigua que supo de la detención de su hermano Héctor y de su posterior traslado hasta el regimiento Tucapel de Temuco, dado que en una de las oportunidades en que estuvo detenido, se encontró con el mismo grupo de personas que fueron detenidos en Curarrehue y fueron quienes vieron a Héctor en el Regimiento Tucapel de Temuco, entre ellos, Manuel Humaña y los hermanos Díaz. El tribunal le lee la declaración de don Rolando Chávez Godoy de fs. 2471 y de fs. 2476 a lo que el deponente señala: "lo declarado por don Rolando Chávez no es efectivo, lo único que puede ser cierto es que se haya encontrado un documento con el apellido de mi hermano a las orillas del río Toltén." Añade que su hermano Héctor, tras ser liberado del regimiento, no pudo haber pasado hasta la oficina de correos; lugar donde él trabajaba. Dice esto porque su hermano no conocía el lugar donde Rolando trabajaba. Además, que Rolando declaró que su hermano se encontraba en buenas condiciones físicas y por los antecedentes que Manuel Humaña y otros, que estuvieron detenidos con su hermano en el regimiento, no pueden ser cierto. Ellos comentaron que su hermano tenía una herida producida por una mordedura de zorrillo, la cual era muy visible por estar infectada. Consultado, responde que cree que su hermano efectivamente fue liberado del regimiento Tucapel de Temuco tras su paso aproximadamente el 16 de septiembre de 1973, pero sin embargo y por los antecedentes que maneja éste fue nuevamente detenido por militares de regimiento Tucapel de Temuco. Lo anterior lo dice porque Gregario Seguel Capitán, padrino de su hermana Evita, le señaló que cuando Héctor fue dejado en libertad, alrededor del 16 o 17 de septiembre de 1973, pasó a su casa y minutos más tarde su casa fue allanada por carabineros y militares quienes le preguntaron "que había pasado a hacer mi hermano a su casa"; a consecuencia de ello es que militares le allanaron su casa inmediatamente. Gregario le señaló que Héctor andaba ese día junto a un grupo de jóvenes y fue el motivo el motivo por el cual él se fue rápidamente de la casa, sólo pasó a pedir dinero para regresar a la suya. Además, le indicó que junto a su esposa, quisieron curar la herida de Héctor, pero

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

éste no accedió dado que deseaba regresar pronto junto a sus compañeros a casa. Respecto a los hechos vividos por su persona puede señalar que su primera detención se produjo el día 14 de septiembre de 1973 en su domicilio ubicado en la comuna de Villarrica. Su detención surge como consecuencia que buscaban a Héctor y como aquel no se encontraba, carabineros se llevó al declarante. En esa oportunidad recuerda alrededor de cinco o seis carabineros de la comisaria de Villarrica. Sabe que eran de Villarrica puesto que era el personal que se veía habitualmente en la comuna. Ellos lo trasladan inmediatamente al retén de carabineros de esa comuna, oportunidad en que no fue golpeado y el mismo día trasladado hasta el regimiento Tucapel de Temuco para inmediatamente ser conducido a la cárcel pública de Temuco; según consta en el certificado de fs. 2.194. Asevera que no tiene testigos de aquella detención por el paso de los años, pero consta el certificado señalado. En la cárcel pública estuvo detenido con el grupo de Curarrehue, los cuales llegaron detenidos después que él; los hermanos Díaz, Manuel Humaña, Osvaldo Salazar. Precisa que su segunda detención se produjo después del 27 de septiembre de 1973, y no el 15 de septiembre como aparece a fs. 2.189 vta. En ese lugar pudo observar que sus torturadores eran integrantes de la fuerza aérea de Chile por las vestimentas que utilizaban. En aquella oportunidad vio alrededor de ocho o nueve personas. Personas que no podría reconocer tras el paso del tiempo.

A.134. Carlos Iván González Aguayo (15 años a la época de los hechos). Quien declaró a fs. 2096 a fs. 2097 (Tomo VI) y a fs. 2489 (Tomo VII).

En declaración extrajudicial de fecha 13 de mayo de 2015, rolante de **fs. 2096 a fs. 2097 (Tomo VI)**, señala que es nieto de Francisco Aguayo Gallegos, padre de Héctor Aguayo Olavarría, una de las víctimas de los hechos investigados. Respecto a lo anterior, señala que es hijo de doña Cristina Aguayo Muñoz, quien es la hija mayor de su abuelo, fruto de una relación que este tuvo con mi abuela en una época anterior a que éste contrajera matrimonio con la madre de Héctor. Por su parte, hace presente, que se enteró de los orígenes de su madre cuando era casi un adulto y por esa razón, decidió por su cuenta buscar a su abuelo, al cual encontró en Curarrehue el año 1977, cuando se encontraba custodiando pasos fronterizos ubicados en esa zona en cumplimiento a su servicio militar obligatorio en el regimiento de Infantería N° 8 Tucapel de Temuco. Por lo que recuerda en esa única oportunidad en que pudo tomar contacto con su

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

abuelo, solo conversaron temas familiares y nunca le comentó que tenía un hijo que en esa época se encontraba detenido desaparecido, incluso sabe que con posterioridad a esa reunión su abuelo lo buscó, pero ya lo habían trasladado de esa zona. Hace presente que con el paso de los años se enteró de la existencia de Héctor Aguayo Olavarría, su tío, por intermedio de su tía Evita, quien en más de una oportunidad le habló respecto a la detención y desaparición de Héctor, sobre el cual nunca pudo obtener ningún antecedente. Señala que cumplió su servicio militar obligatorio entre los años 1977 a 1979, posteriormente ingresó a la Escuela de Telecomunicaciones del Ejército.

En declaración judicial de fecha 8 de agosto de 2016, rolante de **fs. 2.489 (Tomo VII)**, señala que ratifica su declaración extrajudicial de fs. 2.096 a fs. 2.097, añadiendo que efectuó su servicio militar obligatorio entre 1977 y 1979. En uno de esos años le correspondió ir a custodiar puestos fronterizos hacia el sector de Curarrehue. Fue en ese contexto que conoció a su abuelo, quien era padre a de Héctor Aguayo Olavarría. Este era hermano de su madre, pero nunca lo conoció ni supo qué sucedió con él.

A.135. Juan Esteban Ortiz Parra (18 años a la época de los hechos). Quien declaró a fs. 2.154 a fs. 2.155 (Tomo VI) y fs. 2.295 a fs. 2.296 (Tomo VII).

En declaraciones extrajudiciales de fecha 17 de julio de 2015, **rolante de fs. 2.154 a fs. 2.155 (Tomo VI)** (cuya copia consta de fs. 2.295 a fs. 2.296 Tomo VI), señala que para el año 1973, tenía la edad aproximada de 20 años y se desempeñaba como botero en el río Toltén, relata que fue detenido carabineros de Pitrufquén lo que pormenoriza y en lo pertinente ciñe que efectivamente días posteriores al golpe de Estado, encontró en el río Toltén una gran cantidad de cuerpos flotando en las aguas y otros varados en la ribera del mismo río. El caso es que en esa ocasión se fijó especialmente en un cuerpo que estaba varado en la ribera del río cerca del sector Galpones, se fijó en este cuerpo porque era de una persona muy joven, por lo que se bajó del bote y procedió a revisarlo, ya que podía tratarse de un conocido, pero no era el caso, ya que inmediatamente se dio cuenta que no lo era, sumado que al revisar sus vestimentas se percató que tenía un papel que era de un colegio de Villarrica y alcanzó a distinguir que su apellido era Aguayo y probablemente su nombre era Pedro, es lo que recuerda. El cuerpo de ese joven presentaba una perforación por la parte posterior de su cráneo y sus manos estaban amarradas con alambre de púa y estaba vestido con pantalones

tipo jeans color azul y una chomba. Las características físicas de ese joven, señala que aparentemente no superaba los quince o dieciséis años, era de baja estatura y no pudo percatarse de otras características, ya que el cuerpo estaba muy golpeado por la acción de las rocas del río. Por otra parte, señala que no rescató nada de sus vestimentas, ya que no portaba nada. Una vez que se percató que no se trataba de un conocido, se retiró del lugar y a la semana siguiente pasó por el mismo lugar, percatándose que el cuerpo ya no estaba, ni tampoco los demás cuerpos que había el día en que encontró al joven. También señala que había varios cadáveres flotando en el río, y lo que le llamó también la atención fue una mujer que estaba flotando en las aguas, la intentó sacar, pero estaba enredada en unas matas, era muy joven, tenía el pelo largo color negro y vestían una falda color naranja. En el sector donde estaban los cuerpos hay casas que en la actualidad aún se encuentran ahí, incluso los mismos propietarios probablemente vivan aun ahí. Posteriormente, supo que un señor, cuya identidad no recuerda, y que trabajaba en la aceitera en Pitrufrquén, tenía un familiar que había sido ejecutado y se rumoreaba que se trataba del mismo joven que había encontrado él. Señala que nunca supo que carabineros de esa ciudad hayan ido a retirar los cuerpos que vio en el río. Que otros boteros vieron los cuerpos, recordando que en esa época navegaban en el río, Rubén y Misael Sandoval y otro de nombre Manuel Abdón, a quien apodaban "El pata grande".

A.136. Rubén Ernesto Sandoval Muñoz (22 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 2.156 a fs. 2.157 (Tomo VI), de fs. 2.301 a fs. 2.302 (Tomo VII) y de fs. 2.645 a fs. 2.646 (Tomo VIII).

En declaraciones extrajudiciales de fecha 20 de julio de 2015, rolante de **fs. 2.156 a fs. 2.157 (Tomo VI)** (cuya copia consta de fs. 2.301 a fs. 2.302 Tomo VII), señala en lo pertinente que para el año 1973 tenía la edad de 22 años y se dedicaba a la pesca recreativa con turistas que llegaban a esta zona, en un bote de su propiedad en el río Toltén, entre el tramo Pitrufrquén-Faja Maisan. Que es efectivo que días posteriores al golpe de Estado, navegando por el río Toltén, encontró cerca de doce cuerpos en distintos sectores, recordando que en la isla Los Conejos habían dos cuerpos de sexo masculino, en el sector Bajada de Piedra habían cuatro cuerpos también de sexo masculino, dos cuerpos más en el sector Chesta, en el sector Isla Lefín habían tres cuerpos más, en ese lugar el río se habría en dos brazos, uno de esos brazos era por el norte y el sur, encontrando

en la unión de ambos otro cuerpo. El último cuerpo que vio estaba en un quebradero ubicado en el sector Marea de Bastías. Todos esos cuerpos eran de sexo masculino, recordando que cuatro de estos eran de edad y el resto muy jóvenes. Recuerda que en esa oportunidad andaba con un turista cuyo nombre era José Tomás Palazuelo, quien era de Santiago, y éste les sacó fotografías a dos de los cadáveres. Respecto a los cadáveres que vio en el río, especial atención le llamó un joven que vio varado en un quebradero del río entre el sector Bajada de Piedra y Chesta, ya que presentaba una perforación al lado derecho de su cráneo y otra perforación en la parte posterior de este, dándole la impresión de que le habían dado un balazo. Recuerda que junto a su cuerpo sobre la arena estaban sus documentos de identidad, recordando que decía Villarrica, no distinguiendo su identidad. Las vestimentas del cadáver correspondían a un chaquetón, blue jeans y zapatillas, no pudo percatarse si presentaba otras heridas porque por temor prefirió retirarse del lugar. Respecto a la fotografía que se le exhibe, señala que efectivamente se trata del joven que vio en el río, ahora bien, el nombre que se le da a conocer como Héctor Aguayo Olavarría, señala que no le resulta conocido. Hace presente que, del hallazgo de los cadáveres, le informó a un carabinero de apellido Lukowiak, pero este lo amenazó, manifestándole que no hablara o si no "otro gallo me iba a cantar", por esa razón no pudo denunciar el hecho en su momento. Por otra parte, señala que de los otros cuerpos no pudo obtener ninguna información, solo del que mencionó pudo observar sus documentos ya que estaban en la arena, incluso le dio la impresión de que había sido revisado con anterioridad. Finalmente, señala que los documentos los dejó en el mismo lugar del hallazgo.

En declaración judicial de fecha 31 de mayo de 2017, rolante de **fs. 2.645 a fs. 2.646, (Tomo VIII)**, señala que ratifica su declaración extrajudicial rolante de fs. 2.156 a fs. 2.157. Como señaló en su declaración extrajudicial, para diciembre de 1973 pudo observar la presencia de distintos cuerpos en el río Toltén, en circunstancias que se encontraba prestando servicios remando un bote. En esa oportunidad había bajado el río, razón por la cual los cuerpos se encontraban en distintos lugares que a continuación detalla (desde el km 10 al km 25): 2 en la isla Los Conejos había dos cuerpos de sexo masculino, no pudiendo precisar sus edades puesto que los observé de lejos. En el sector Bajada de Piedra había cuatro cuerpos también de sexo masculino, que al igual que en el

caso anterior, no puede precisar las edades, dos cuerpos en el sector de Chesta y tres en el sector de Lefín. Precisa que sólo pudo identificar uno de los cuerpos, a la altura de Chesta, en el kilómetro quince, pues cuando bajó del bote a tomar café lo vio y le quedó muy marcada su imagen, persona que en este acto reconoce tras exhibirle la fotografía que rola a fs. 2.317, cuyo nombre se le da a conocer como Héctor Aguayo Olavarría, quien tenía una perforación en el cráneo, al parecer por un impacto de bala, el cual vestía chaquetón oscuro, jean azules y zapatillas. Pudo observar que al lado de su cuerpo se encontraba su cedula de identidad, la cual sólo se lograba observar que decía "Villarrica". Le quedó muy marcada su imagen por su nariz tan ancha (como de boxeador). Esa persona estaba de lado. El comentario era que esos cadáveres se botaban en el puente Allipén. El río Allipen se junta con el río Toltén desde el puente a quinientos metros y forman el río Toltén. El cuerpo se encontraba a quince kilómetros de Pitruquén. En aquella oportunidad andaba con don José Tomás Palazuelo, quien fotografió a la víctima que precedentemente identificó. Posteriormente le dio cuenta del hecho a un carabinero de apellido Lukowiak, quien lo amenazó que no dijera nada, sino "otro gallo cantaría". Los nombres de Pedro Curihual Paillán, Luis Anselmo Fernández Barrera, Ismael Rolando Bocaz Alarcón y Daniel Mauricio Sepúlveda Contreras, no le son conocidos.

A.137. Rigoberto Antonio Gutiérrez Ancamilla (19 años a la época de los hechos). Quien declaró fs. 2.158 a fs. 2.159 (Tomo VI), de fs. 2.168 (Tomo VII), fs. 2.299 a fs. 2.300 (Tomo VII).

En declaraciones extrajudiciales de fecha 19 de julio de 2015, rolante de **fs. 2.158 a fs. 2.159 (Tomo VI)** (cuya copia consta a fs. 2.299 a fs. 2.300 Tomo VII), señala en lo pertinente que ingresó a cumplir su servicio militar obligatorio durante el mes de enero del año 1973 al Regimiento de Infantería N° 8 Tucapel de Temuco, quedando encuadrado en la segunda sección de la **compañía plana mayor y servicios**, la que estaba a cargo del capitán Nelson Ubilla Toledo, siendo su instructor el sargento Silva. Conforme su recuerdo, llegado el 11 de septiembre de 1973, al regimiento comenzaron a llegar personas detenidas, las cuales quedaban en la guardia, gimnasio y el rancho, recordando que en su compañía se habilitó una sala que ocupaban los conscriptos para efectuar interrogatorios bajo la aplicación de tortura, recordando que en más de una oportunidad vio ingresar a esa sala funcionarios de planta del regimiento. En lo personal, recuerda haber ido

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

a dejar detenidos a esa sala, pero llegaba hasta la entrada, ya que personal de planta se hacía cargo de esas personas. Por lo que puede recordar en dicha sala había un catre y un par de sillas. Se le pregunta por otros hechos y respecto a las víctimas de los hechos investigados, como los hermanos Hugo Arner y Elías Dagoberto Gonzalez Ortega, los hermanos Juan Carlos y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan de Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Raúl Figueroa Burkhardt y Héctor Aguayo Olavarría, sobre quienes se le menciona que eran oriundos de Villarrica y que fueron detenidos los primeros días del golpe de Estado y que habrían llegado en esa calidad al regimiento Tucapel de Temuco, señala que nunca los conoció e ignora sus actuales paraderos.

En declaración judicial de fecha 29 de julio de 2015, rolante de **fs. 2.168 (Tomo VII)**, ratifica su declaración extrajudicial rolante de fs. 2.158 a fs. 2.159. Comunica en lo pertinente que, desde el 11 de septiembre de 1973, y casi por espacio de dos meses, le correspondió efectuar guardias día por medio y patrullajes, además de hacer resguardo de ciertos sectores. En cuanto a la sala de interrogatorios que había en la compañía de plana mayor, afirma que en ese lugar existía una sala de interrogatorio y tortura de detenidos. Eso lo sabe porque le tocó ir a dejar detenidos a ese lugar que se encontraban en la guardia de la unidad. Luego, recibía la orden de retirarse inmediatamente. En ese lugar trabajaba el capitán Nelson Ubilla Toledo con personal de planta y detectives. No recuerda los nombres de ellos. Las personas interrogadas en ese lugar eran torturadas. Aunque no le consta personalmente, sí era comentario generalizado que eso sucedía. Respecto de las víctimas de autos cuyas identidades se le dan a conocer, señala que no recuerda haberlas visto detenidas en el regimiento, ni supo que hayan sido ejecutadas.

A.138. Miguel Arcángel Calderón Sepúlveda (19 años a la época de los hechos). Quien declaró a fs. 2.160 a fs. 2.161 (Tomo VI), a fs. 2.169 a fs. 2.170 (Tomo VII) y a fs. 2.297 a fs. 2.298 (Tomo VII).

En declaraciones extrajudiciales de fecha 19 de julio de 2015, rolante de **fs. 2.160 a fs. 2.161 (Tomo VI)** (cuya copia consta de fs. 2.297 a fs. 2.298 Tomo VI), señala en lo atinente en 1973 estaba encuadrado en la sección de telecomunicaciones de la **compañía de plana mayor y servicios** del regimiento Tucapel, a cargo del capitán Nelson Ubilla Toledo, siendo su instructor el sargento Arias. Que llegado el 11 de septiembre de 1973, al regimiento comenzaron a llegar

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

personas detenidas, las cuales quedaban alojadas en el gimnasio, muchos de ellos siempre eran dejados en libertad. En esa época fue elegido para ser estafeta de la Fiscalía Militar, que operaba en calle Bulnes, la cual era encabezada por el Fiscal Alfonso Podlech, junto a un oficial de apellido Quilodrán. Sus funciones eran la de repartir la correspondencia de la fiscalía, y, además, debía trasladar detenidos desde la cárcel pública al regimiento para presentarlos en los consejos de guerra que se llevaban a cabo en el gimnasio los miércoles y viernes. Para estos efectos, siempre los trasladaba de a cuatro, incluso a pie. Que Podlech, por razones obvias, siempre acudía a los consejos de guerra y en oportunidades vestía uniforme militar. Que es efectivo que dentro de su compañía se habilitó un dormitorio para efectuar interrogatorios bajo la aplicación de tortura, recordando que en más de una oportunidad vio ingresar a esa sala al sargento Arias, no recordando que otros funcionarios militares acudían a dicho lugar. En la Fiscalía Militar no había otros conscriptos; en un periodo anterior al mío hubo un soldado de apellido Saavedra, pero él lo reemplazó, ya que ese joven no cumplía con los que se le ordenaba. Se le pregunta por otros hechos y en lo referente a los hermanos Hugo Arner y Elías Dagoberto Gonzalez Ortega, los hermanos Juan Carlos y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan de Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Raúl Figueroa Burkhardt y Héctor Aguayo Olavarría, dice que nunca los conoció e ignora sus actuales paraderos.

En declaración judicial de fecha 29 de julio de 2015, rolante de **fs. 2.169 a fs. 2.170 (Tomo VII)**, ratifica su declaración extrajudicial rolante de fs. 2.160 a fs. 2.161, y en lo pertinente reitera que, desde el 11 de septiembre de 1973, y casi por espacio de dos meses, le correspondió efectuar guardias día por medio y patrullajes, además de hacer resguardo de ciertos sectores. Con relación a sala de interrogatorios que había en la compañía de plana mayor señala que en ese lugar existía una sala de interrogatorio y tortura de detenidos. Esto le consta, porque a partir de 1974, cuando la Fiscalía Militar se trasladó a los altos del Banco Osorno y la Unión, lo designaron como estafeta de ese Tribunal. El Fiscal era Alfonso Podlech Michaud. En ese lugar le correspondió hacer aseo, preparar y repartir correspondencia. Pasado un tiempo, y ante la escasez de personal, le tocó ir buscar detenidos a la cárcel y llevarlos al regimiento para ser interrogados. Tampoco había vehículos, por lo que el traslado era a pie. Por lo general, llevaba dos o cuatro detenidos, siempre eran números pares, todos esposados. Los

detenidos no eran interrogados en la Fiscalía, sino que por orden del Fiscal Militar Podlech debía llevarlos hasta el regimiento, donde eran ingresados a la sala de interrogatorios a la que hizo referencia anteriormente. Allí muchas veces vio al sargento Mario Arias Díaz recibir a los detenidos. Él se quedaba afuera de la sala esperando a que se desocuparan. Las personas interrogadas eran torturadas. Escuchó gritos y llantos que provenían desde el interior de la sala de interrogatorios. Las personas eran sometidas a la aplicación de electricidad. Cuando salían de ese lugar debía esperar a que se recuperaran. Después los llevaba de regreso a la cárcel. Esa diligencia la hizo más o menos diez veces durante 1974. La mayoría del tiempo eran personas jóvenes y no tanto, y algunas veces trasladó mujeres. No estoy dispuesto a carearme con el sargento Arias, por cuanto tiene mucho temor por lo vivido en aquel tiempo. Respecto de las víctimas cuyas identidades se le dan a conocer, señala que no recuerda haberlas visto detenidas en el regimiento ni supo que hayan sido ejecutadas. Pero si escuchó comentarios que se hicieron, no recuerda por quiénes, en que se decía que habían ejecutado personas en el puente Allipén, o que las habrían ido a arrojar en ese lugar.

A.139. Raúl Dagoberto Roa De La Jara (25 años a la época de los hechos). Quien declaró a fs. 2.162 a fs. 2.164 (Tomo VI), a fs. 2.171 a fs. 2.172 (Tomo VI) y a fs. 2.292 a fs. 2.294 (Tomo VII).

En declaración extrajudicial de fecha 17 de julio de 2015, rolante de **fs. 2162 a fs. 2163 (Tomo VI)** (cuya copia consta de fs. 2292 a fs. 2294, Tomo VII) señala en lo pertinente que para el año 1973, se desempeñaba en Corporación Nacional Forestal, como encargado de la unidad productiva de Pucón, teniendo residencia en esa misma ciudad. No era militante de partido político, solamente era simpatizante del partido Socialista. Fue detenido 12 de septiembre de 1973, por carabineros de Pucón, mientras se encontraba en su oficina, recordando que uno de los funcionarios aprehensores era de apellidos Rivas Pinilla. Se le trasladada a la comisaría, ingresado a un calabozo donde solamente fue sacado para ser interrogado por el capitán de esa unidad, cuyo apellido podría ser Bustos y su ayudante de apellido Riquelme, quien a su parecer era cabo. Junto con él fueron detenidos Faustino Escobar, Bernardino Quinteros y otros más cuyas identidades no recuerda. Recuerda que pasaron la noche en la unidad de carabineros de Pucón, siendo trasladados en horas de la mañana del día siguiente

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

al regimiento Tucapel de Temuco, en una camioneta de propiedad de Guillermo Polack, la que al parecer fue conducida por él. Una vez que llegaron al regimiento, permaneció encerrado en un calabozo junto a otro grupo de detenidos, de los cuales no recuerda sus identidades. Es así, que era sacado del calabozo para ser interrogado por funcionarios militares, al tenor de que confesara dónde mantenía las armas escondidas y su participación en el adiestramiento de mil quinientos guerrilleros al interior de las instalaciones de "CONAF" en Pucón. Por aproximadamente dos o tres días, según pudo percibir, fue trasladado a la isla Cautín, la base aérea Maquehue y nuevamente al regimiento Tucapel, para finalmente ser trasladado hasta la segunda Comisaría de Carabineros de Temuco, siendo en esa oportunidad que encontró a Rodolfo Fonseca Hernández, quien también se encontraba en calidad de detenido. Durante su detención, específicamente durante los interrogatorios, fue golpeado en distintas partes del cuerpo por agentes del Estado, recibiendo golpes de puño, golpes de fusil, patadas y aplicación de corriente, estando siempre con mi vista vendada. Posteriormente, cuando fue dejado en libertad en la comisaria de Temuco, quedó sujeto a firma diaria, la cual debía efectuarla en las horas y lugares que le designaba personal de carabineros de Pucón. Es así como, durante ese proceso, cuando se presentaba a la unidad de carabineros de esa ciudad, era encerrado y detenido nuevamente por un par de horas, donde era interrogado por personal de las distintas fuerzas armadas que llegaba a Pucón en helicóptero. Según recuerda, en una oportunidad mientras se encontraba vendado al interior de un calabozo, oyó el sonido de lo que al parecer era un helicóptero, del cual por comentarios supo que habían subido a personas detenidas, y al momento de regresar a la unidad, lo hacía completamente vacío, comentándose que esas personas detenidas eran lanzadas al agua o a las montañas cercanas a la ciudad. Indica que, durante el período del golpe militar, había civiles que colaboraban estrechamente con funcionarios de las fuerzas armadas, específicamente con personal de carabineros de Pucón, los que pertenecían a la directiva de patria libertad. Dentro de las personas que recuerda se encontraba Carlos y Héctor Barra, Juan Matus, Guillermo Polack, Harold Gunder, Alberto Ulloa, Sergio Poblete y Alejandro Sepúlveda, quien posteriormente fue nombrado jefe de "CONAF" de la comuna. Esas personas colaboraban facilitando sus vehículos particulares a personal de carabineros y entregando información acerca de personas opositoras

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

al régimen militar. Por otro lado, señala que la sede de “CONAF”, que estaba ubicada en Llafenco y a cargo de Alejandro Sepúlveda, funcionaba como unidad militar, la cual ejercía control en el trayecto de Curarrehue - Pucón. En relación con las víctimas Arner González Ortega, Elías González Ortega, Juan Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Schmidt Arriagada, Juan de Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez y Héctor Aguayo Olavarría, indica que no los conoció, pero sí sus apellidos le resultan familiares. En ese sentido, recuerdo que durante su estadía en alguno de los centros de detención por los cuales pasó, conoció a una persona de apellido Figueroa, desconociendo mayores antecedentes al respecto. Escuchó por comentarios que se efectuaron ejecuciones en el sector de Curarrehue, en la montaña, principalmente en un sector donde residían unos colonos, desconociendo mayores antecedentes respecto de las personas que participaron en ese hecho o de las identidades de las personas que en ese lugar fallecieron. Reseña otros hechos.

En declaración judicial de fecha 29 de julio de 2015, rolante de **fs. 2.171 a fs. 2.172 (Tomo VII)** ratifico su declaración extrajudicial que rolan de fs. 2.162 a fs. 2.163, y complementa sus dichos en el sentido de señalar que nunca supieron por qué motivo fueron detenidos. Sabe que algunos de los civiles integrantes de patria y libertad que nombró hicieron listas de personas contrarias al régimen militar, o proclives a la unidad popular, y se las entregaron a los militares y carabineros para que fueran detenidas. Él estaba en varias de esas listas. En Pucón fue golpeado por carabineros mientras estuvo detenido allí. Además, lo interrogó el capitán Bustos a cargo de la unidad, quien le dijo que existían cargos en su contra por ser terrorista. Al día siguiente fueron llevados al regimiento Tucapel, donde estuvieron hasta la noche. Durante ese período fueron interrogados por distintas personas, todos militares, aunque no todos los uniformes eran del mismo tipo, por lo que presume que había oficiales, suboficiales y conscriptos en el grupo. En la noche les vendaron la vista, y fueron subidos a un camión militar, aunque al parecer iban más móviles. Recuerdo que por los giros que hizo el camión los llevaron al sector de la isla Cautín, pero finalmente el móvil tomó rumbo hacia la base aérea Maquehue. Esto porque sintió el ruido que hace un vehículo al cruzar el puente. En ese lugar nuevamente fueron interrogados y apremiados físicamente con golpes de pies y puños, culatazos, etc. Le preguntaban por sus actividades subversivas y si tenía algún grupo de

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

guerrilleros bajo su mando. Posteriormente los llevaron a la comisaría de Temuco, donde permanecieron hasta el día siguiente en la noche cuando los liberaron. Como había toque de queda se quedamos en una pensión. Recuerda que en esa oportunidad estaba con Rodolfo Fonseca Fernández y un señor de apellido Monasterio. Al día siguiente regresaron a Pucón. Respecto de las víctimas de autos señala que no recuerda haberlas visto detenidas en el regimiento o en carabineros ni supe que hayan sido ejecutadas. Comenta otras situaciones.

A.140. Luis Alberto Romero Molina (17 años a la época de los hechos). Quien declaró a fs. 2.222 a fs. 2.223 (Tomo VII) y a fs. 3.312 a fs. 3.313 (Tomo X).

En declaración extrajudicial de fecha 13 de octubre de 2015, rolante de **fs. 2.222 a fs. 2.223 (Tomo VII)** (cuya copia consta de fs. 3312 a fs. 3313 Tomo X), señala en lo adecuado que para el año 1973, tenía la edad de 17 años, era estudiante de enseñanza media en el Colegio de Humanidades de Villarrica y vivía con sus padres de nombres Carlos Romero Reyes y Sara Molina Herrera. Era militante de las juventudes socialistas de esa ciudad, junto con sus amigos y vecinos Alejandro Escobar y Juan Cabrera, quienes a la fecha se encuentran desaparecidos desde el día 13 de septiembre de 1973. Con relación a lo anterior, señala que debido a los hechos que comenzaron a ocurrir a partir del día 11 de septiembre, por temor a ser detenidos Alejandro y Juan le propusieron escapar de Chile en dirección a Argentina, país al cual accederían por un paso fronterizo no habilitado por el sector de Curarrehue. Según su recuerdo, dicha proposición se la hicieron el día 12 de septiembre con el objeto de salir del país al día siguiente junto a otros jóvenes a quienes no conocía, pero sabía que eran del partido y con ellos debían juntarse al mediodía del día trece en el sector denominado "El Monte de Los Curas", lugar donde hoy se encuentra el colegio Laura Vicuña. La idea era salir más o menos tarde y a pie por el campo, ya que por carretera los podían encontrar y detener. Es así como el día 13 de septiembre salió retrasado de su casa, ya que sus padres no querían que se fuera, cosa que hizo igual, llegando al lugar de encuentro retrasado una media hora donde lo esperaban sus amigos, no teniendo claro si los otros jóvenes que debían estar ahí con ellos se habían ido. Fue en ese lugar donde se arrepintió de irse y luego de comunicarles su decisión a Alejandro y Juan, le representaron su molestia, pero respetaron su decisión, marchándose del lugar en dirección a Pucón, pero por el campo, tal como lo habían pensado. Por su parte regresó a su domicilio y sus padres al día siguiente

lo llevan a la ciudad de Pitrufuquén, específicamente al domicilio de unos tíos paternos en el campo, donde permaneció unos meses hasta cuando las cosas se tranquilizaron en Villarrica, ya que muchos domicilios de personas opositoras al gobierno militar fueron allanados por carabineros y militares. Nunca más supo de sus amigos, solo tiene claro que en una oportunidad una hermana de Alejandro conversó con él para ver, si tenía una fotografía de su hermano, y de la familia de Juan no supo nunca más, ya que él era hijo único y sus padres eran de avanzada edad, sumado a que después se fueron de barrio. Por otra parte, señala que nunca escuchó rumor alguno sobre el destino de sus amigos e ignoraba, hasta hace poco, que habían sido detenidos al querer cruzar la frontera. Agrega que la última vez que vio a Juan este vestía casaca y pantalones tipo jeans y no recuerda cómo iba vestido Alejandro. Finalmente, señala que nunca supo las identidades de los otros jóvenes con los cuales Alejandro y Juan abandonarían el país.

A.141. Juan Escobar Vásquez (20 años a la época de los hechos).

En declaración extrajudicial de fecha 5 de octubre de 2015, rolante **de fs. 2.226 a fs. 2.227 (Tomo VII)**, señala que es hermano de la víctima Alejandro Escobar Vásquez, quién se encuentra desaparecido desde el día 13 de septiembre de 1973, cuando dejó el domicilio familiar tratando de escapar de Villarrica junto a un grupo de amigos. Su familia estaba compuesta por sus fallecidos padres de nombres Daniel Escobar Núñez y María Inés Vásquez Ceballos, sus hermanos María Haydée, Vicente, Pedro, Matilde, Erika, Isaías, Daniel y su esposa Lidia Carter, quien para la fecha en que Alejandro se fue se encontraba junto a su familia en Villarrica. Su domicilio se encontraba en calle Caupolicán N° 1855, población Diego Portales de Villarrica. Respecto a su hermano Alejandro, señala que, para septiembre de 1973, tenía la edad de 17 años, ya había salido del colegio y solamente se dedicaba a trabajar de manera esporádica. Hace presente que era simpatizante de las juventudes socialistas. Sobre sus amistades, recuerda a los hermanos Schmidt, principalmente porque con ellos fue con los que intentó escapar a Argentina junto a otros jóvenes. Que para la fecha en que su hermano intentó escapar hacia Argentina, día 13 de septiembre de 1973, se encontraba viajando desde Talcahuano a Villarrica, por ende cuando llegó a su domicilio su hermano ya se había ido, y por lo que le comentó su esposa, él habría salido a la una de la tarde del hogar, sin dar información respecto a dónde se dirigía, solo sabe que le dijo a su madre que se

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

tenía que ir, para lo cual ella le pasó una frazada y alimentos. Conforme su recuerdo, estuvo casi una semana en Villarrica, ya que debía regresar a Concepción donde tenía su trabajo, no recibiendo ninguna noticia sobre su paradero durante esos días, pero tenía la convicción que él se encontraba bien, creyendo incluso que iba regresar a la casa, cosa que nunca sucedió hasta la fecha. Pasado el tiempo, y al ver que su hermano no regresaba a la casa, creyó que había pasado a Argentina, pero lo veía difícil, ya que en septiembre aún había abundante nieve en la cordillera, sumado a que sus padres y hermanos, por temor, no se atrevían a hacer averiguaciones en carabineros de la zona. Posteriormente, estando en Concepción, se enteró que el hogar de sus padres fue allanado por personal de ejército, siendo esa situación la que hizo decidir a sus padres de manera definitiva no hacer mayores averiguaciones. Con el paso del tiempo, mucho se comentaba sobre el destino de su hermano y sus amigos, incluso su familia recibió el comentario que se encontraba en Argentina, cosa que nunca se pudo comprobar y le restó credibilidad, ya que Alejandro al regresar la democracia hubiese dado alguna señal de vida. Lo único que supo en una fecha posterior, fue que del grupo que escapó con su hermano había dos o tres personas más de las ocho que se conoce, quienes a mitad de camino decidieron regresar a Villarrica, no siendo detenidos por carabineros, y la información respecto a sus identidades probablemente la maneje su hermano Vicente Edmundo, quien en la actualidad reside en Villarrica. Otra persona que puede manejar información es un ex - integrante del partido socialista de Villarrica, cuyo nombre es Carlos Lucas, quien después del día 11 de septiembre, tomó partido por el gobierno militar, a veces cree que éste fue la persona que informó a carabineros sobre el intento de escapar de su hermano y sus amigos. Que el único antecedente que maneja respecto a la detención de su hermano es que fue detenido por carabineros camino a Caburgua, no teniendo ningún antecedente respecto a su destino final.

A.142. Vicente Edmundo Escobar Vásquez (8 años a la época de los hechos). Quien declaró a fs. 2.252 a fs. 2.253 (Tomo VII) y a fs. 4.564 a fs. 4.565 (Tomo XIII).

En declaración extrajudicial de fecha 9 de octubre de 2015, rolante de **fs. 2252 a fs. 2253, (Tomo VII)**, señala que es hermano de la víctima Alejandro Escobar Vásquez, quien desde el día 13 de septiembre de 1973 se encuentra

detenido-desaparecido. Para el año 1973 tenía la edad de 8 años, era uno de los hermanos menores de los quince que era, recordando que la mayoría vivían en el domicilio de sus padres, el cual se ubicaba en calle Caupolicán N° 1855, comuna de Villarrica. De su hermano Alejandro no tiene muchos recuerdos y lo que sabe es por lo que le han contado sus hermanos mayores. Agrega que fue él quien inscribió la defunción de su hermano hace algunos años atrás debido a que necesitaban ese documento para una posesión efectiva, por lo quedó inscrito como muerte presunta. Deja en claro que por los antecedentes que le aportó en vida su hermana Carmela, pudo enterarse que su hermano había intentado huir de Chile junto a un grupo de personas, de las cuales regresaron tres a Villarrica. Dentro de esas tres personas había una mujer cuyo nombre era Sara, desconoce mayores antecedentes. Que no maneja mayores antecedentes sobre esta mujer ni tampoco más información respecto a los hechos que rodearon la detención de su hermano.

En declaración judicial de fecha 30 de agosto de 2022, rolante de **fs. 4.564 a fs. 4.565, (Tomo XIII)**, señala que ratifica su declaración extrajudicial de fs. 2.252 a fs. 2.253, igualmente la querella de fs. 4.452 y siguientes, añadiendo que “sus viejos” siempre vivieron preocupados de que algún día iba a aparecer su hermano, pero nunca supieron de nada, “o sea nada en realidad, nada, solo que está desaparecido”. Y bueno, “el sufrimiento de los pobres viejos nomás”, que se acordaron hasta el día de su muerte, de Alejandro esperando que apareciera. Eso fue el sufrimiento de los grandes y de ellos mismos.

A.143. Luis Eduardo Manríquez Figueroa (19 años a la época de los hechos). **En declaración extrajudicial** de fecha 19 de julio de 2017, rolante de fs. 2.730 a fs. 2.731 (Tomo VIII), en lo adecuado afina que se desempeñó en las **compañías de plana mayor y servicios** y primera de cazadores. En la plana mayor y servicios se desempeñaba en la segunda sección no recordando quien estaba a cargo de esta. Afirma que efectivamente existía una sala al interior de su compañía donde se ingresaban personas detenidas, quienes generalmente eran trasladadas ahí con la vista vendada, se rumoreaba mucho que en dicha sala se interrogaba a los detenidos bajo la aplicación de tortura, incluso se decía que a los detenidos se les aplicaba corriente. Nunca vio personas conocidas dentro de los detenidos que llegaban al regimiento. Que a esta sala siempre veía ingresar a algunos oficiales del regimiento como el capitán Ubilla y los hermanos Garcia,

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

junto con ellos también el sargento Santiesteban y el cabo Figueroa, no teniendo mayores antecedentes sobre estos últimos, el hecho es que se sabía que ellos frecuentemente ingresaban a esta sala cuando había detenidos. Por otra parte, era sabido también que los conscriptos Chávez Etchepare y Gerardo Garcia, también tenían acceso a esa sala ya que tenían mucha cercanía con el personal de planta. Agrega que, a los meses de ocurrido el golpe de Estado, cree a fines de 1973, se supo que una persona fue sacada moribunda desde la mencionada sala de su compañía, quien habría fallecido posteriormente al interior del regimiento. De esta situación no supo mayores detalles ya que fue un comentario generalizado dentro de los conscriptos por lo que tampoco recuerda la identidad del soldado que lo generó. Presume los interrogatorios dentro de la sala fueron mediante tortura y aplicación de corriente, porque eso era lo que se comentaba entre los soldados de su compañía. Nunca integre una patrulla de conscriptos que días posteriores al golpe de Estado haya tenido que concurrir a la Isla Cautín a recoger cadáveres para posteriormente subirlos a un camión, esa situación es nueva para él, por lo que desconoce que conscriptos tuvieron que concurrir hasta ese lugar. Preguntado dice que nunca supo que hayan salido camiones desde la isla Cautín con cadáveres en dirección al Puente Allipén u otro viaducto de esta zona. Respecto a las víctimas cuyas identidades se le dan a conocer verbalmente, quienes eran oriundos de las ciudades de Villarrica, Pucón, Curarrehue y que llegaron detenidos al regimiento el día 12 o 13 de septiembre de 1973, desconoce antecedentes sobre esas personas e ignora que pasó con ellos durante su estadía en el regimiento.

A.144. José Anselmo Matamala Cofré (19 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 2.736 a fs. 2.737 (Tomo VIII) y de fs. 230 a fs. 231 (Cuaderno secreto).

En declaración extrajudicial de fecha 20 de julio de 2017, rolante de **fs. 2.736 a fs. 2.737 (Tomo VIII)**, expone en lo adecuado que efectuó el servicio militar obligatorio en el regimiento de Infantería N° 8 Tucapel de Temuco. Se desempeñó en las **compañías de plana mayor y servicios** y primera cazadores. En la compañía de cazadores estuvo hasta octubre de 1973, ya que fue destinado a Loncoche para trabajar en agricultura y en lo pertinente dice que existía una sala al interior de su compañía donde se ingresaban personas detenidas, quienes generalmente eran trasladadas ahí desde la guardia con la vista vendada, se

rumoreaba mucho que en dicha sala se interrogaba a los detenidos bajo la aplicación de tortura, mediante el uso de electricidad. Nunca observó personas conocidas dentro de los detenidos que llegaban al regimiento. A la sala que señalaba anteriormente ingresaban algunos oficiales del regimiento como el capitán Ubilla, subteniente Espinoza y otros que no recuerda. Por otra parte, todos veían entrar a los conscriptos Chávez Etchepare y Valeria, a la oficina donde interrogaban, siendo los únicos que a su recuerdo estaban autorizados para ingresar, ya que cuando “nosotros entregábamos detenidos” en ese lugar sólo quedaban en la puerta de ingreso. Nunca integró una patrulla de conscriptos que días posteriores al golpe de Estado haya tenido que concurrir a la isla Cautín a recoger cadáveres para posteriormente subirlos a un camión, por lo que desconoce que conscriptos tuvieron que concurrir hasta ese lugar. Que tomó conocimiento por comentarios que en la isla Cautín se realizaban estas maniobras de las cuales nunca participó u observó, además era de conocimiento general de los conscriptos que en horas de la noche en oportunidades, se trasladaban cuerpos a distintos lugares, los cuales desconoce. Respecto a las víctimas de los hechos cuyas identidades se le dan a conocer verbalmente, quienes eran oriundos de las ciudades de Villarrica -Pucón-Curarrehue y que llegaron detenidos al regimiento el día 12 o 13 de septiembre de 1973, desconoce antecedentes sobre estas personas e ignora que pasó con ellos durante su estadía en el regimiento.

A.145. Pedro Renato Ortiz Quiroz (19 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 2.738 a fs. 2.740 (Tomo VIII) y de fs. 3.155 a fs. 3.157 (Tomo IX).

En declaración extrajudicial de fecha 20 de julio de 2017, rolante de **fs. 2.738 a fs. 2.740 (Tomo VIII)**, desarrolla en lo adecuado que efectuó el servicio militar obligatorio en el regimiento de Infantería N° 8 Tucapel de Temuco, y se desempeñaba en las **compañías de plana mayor y servicios**. Siendo sus labores patrullajes, guardia en la casa del comandante de la unidad militar. En relación a la labor operativa que efectuó, a partir del día en que fue el golpe de Estado, recuerda allanamientos que se hicieron, donde resultaron personas detenidas, las que fueron trasladadas al regimiento y en los cuales participó reseñando los hechos, y en lo pertinente afirma que existía una sala al interior de las instalaciones de su compañía, que estaba prohibido su ingreso, pero después del día 11 de septiembre era habitual escuchar lamentos y gritos de dolor tanto de

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

hombres y mujeres, por lo que se comentaba que ahí se torturaban a los detenidos mediante golpes y aplicación de corriente eléctrica. Nunca supo que funcionarios de planta ingresaban a esa sala. Respecto a los conscriptos que tenían cercanía con los funcionarios de los soldados que trataban con detenidos eran Chávez Etchepare, Valeria, Arroyo a quien apodaban "El Loco" ya que le disparó a otro conscripto, Juan Carrillo, también apodado "El Loco", Yáñez quien era conocido por su baja estatura, Oscar Venegas Muñoz, Salinas y Schwartenski. Comenta otros hechos y en cuanto a las víctimas de autos, no le son conocidos y en relación con que soldados de su compañía que fueron enviados a la isla Cautín los días posteriores al golpe de Estado a recoger cuerpos de personas fallecidas para subirlas a un camión militar, el cual posteriormente salió con rumbo desconocido desde el regimiento, señala que nunca tuvo participación en ese hecho como tampoco nunca supo nada al respecto. En relación con lo anterior, hace presente el comentario que le hizo en una oportunidad el soldado Valeria, que fue que, a los pocos días del golpe de Estado debió trasladar junto a personal de planta y otros conscriptos a un grupo de detenidos que tenían en la isla Cautín hacia el Puente Allipen, lugar donde, Valeria le comentó que los habían ejecutados con ráfagas de disparos para posteriormente lanzar sus cuerpos a las aguas del río. Valeria le comentó ese hecho, pero no quiso decir quienes participaron en esa ejecución, pero le dio a entender que andaban otros efectivos de su compañía en esa ocasión. Expresa que no tuvo participación alguna en el hecho que le comentó Valeria como tampoco en otra situación relacionada con detenidos.

En declaración judicial de fecha 16 de mayo de 2019, rolante de **fs. 3.155 a fs. 3.157 (Tomo IX)** ratifica su declaración extrajudicial que rola de fs. 2.738 a fs. 2.740, y persiste en que a contar del 11 de septiembre de 1973 se encontraba encuadrado al interior de la compañía de plana mayor y servicios de regimiento Tucapel de Temuco. A cargo de la compañía se encontraba el capitán Nelson Ubilla Toledo, le seguía en el mando un oficial de apellido García Covarrubias. Al interior del regimiento Tucapel de Temuco vio muchos detenidos por motivos políticos, al lado de la guardia, cerca de la enfermería y en la sala habilitada para las torturas de los detenidos en la compañía de plana mayor y servicios. Recuerda que veía ingresar a estos detenidos, los cuales se encontraban vendados, con capucha, esposados, apuntados con armas, a cada uno de los lugares que ha nombrado. Por las condiciones en que iban claramente

no podría reconocer jamás a ninguno de ellos. Nunca tuvo la oportunidad de hablar con ninguno. Respecto al personal que trasladaba a estos detenidos, no podría precisar en este momento a nadie, sólo recuerda que eran generalmente conscriptos mandados por los oficiales, siempre por orden superior. Que efectivamente a contar del 11 de septiembre de 1973, al interior de su compañía, la de plana mayor y servicios del regimiento Tucapel de Temuco existía una dependencia, o más bien sala, especialmente habilitada para torturar mediante la aplicación de corriente eléctrica y golpes a los detenidos de carácter político. Esto lo dice porque en muchas ocasiones sintió los gritos de dolor, lamentos, llantos desde el interior de aquella. Respecto a las personas que ingresaban a esa sala vio a veces ingresar oficiales de distintas compañías, el capitán Rodolfo Vargas Campos, también al comandante subrogante de la compañía de plana mayor de apellido García Covarrubias (quien asesoraba al capitán Nelson Ubilla Toledo). Respecto de los conscriptos que tenían cercanía con los funcionarios que trataban a los detenidos, son los que ha nombrado en su declaración policial, y también un conscripto de apellido Montesinos. Reafirma que aproximadamente a fines de septiembre de 1973 Valeria, conscripto de su compañía, le comentó que a pocos días del golpe de Estado debió trasladar junto al personal de oficiales de la compañía de plana mayor y servicios y otros conscriptos, a un grupo de cuatro a seis detenidos por carácter político que tenían en calidad de detenidos en la isla Cautín hacia el Puente Allipen camino a Villarrica, lugar donde Valeria le comentó que los habían ejecutado con ráfagas de disparos para posteriormente lanzar sus cuerpos al río. Los pusieron en fila en la baranda del puente y les pasaron una “ráfaga de fusil sí” y luego los lanzaron al agua. Indica que esta situación se la comentó Valeria mientras se encontraban descansando en el dormitorio que compartían. Se lo comentó tranquilamente, como que, si fuera algo normal, una actividad más de su labor. Con relación a las identidades de estos detenidos, lo único que le manifestó Valeria es que carabineros los fueron a dejar al regimiento en calidad de detenidos políticos y que luego los trasladados a la isla y de noche los trasladan hasta el Puente Allipen camino a Villarrica donde fueron ejecutados. Valeria no le comentó que personal del regimiento fueron quienes trasladaron a los detenidos a la isla, pero le comentó que el junto a los oficiales de la compañía de plana mayor y servicios fueron quienes ejecutaron a los detenidos. Esto es completamente posible que en aquella situación anduviera un oficial puesto que a

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

cargo de una patrulla siempre debía andar uno. En torno a las víctimas, que en este acto se le dan a conocer, como Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Juan Carlos Schmidt Arriagada, Juan de Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt no tiene conocimiento alguno.

A.146. Héctor Orlando Saavedra Peña (19 años a la época de los hechos). **En declaración extrajudicial** de fecha 23 de agosto de 2017, rolante de **fs. 2.758 a fs. 2.759 (tomo VIII)**, escruta que efectuó su servicio militar obligatorio en el regimiento de Infantería N°8 Tucapel de Temuco, integró la **compañía de plana mayor y servicios** la que estaba a cargo del capitán Ubilla, recordando a otros oficiales como los tenientes Lavín y Espinoza, los cabos Silva y Krause, los sargentos Arias y Peña Andaur. De sus compañeros, recuerda a Gonzalez, Ortega, Cortes y Medina ya que ellos eran de la misma zona donde residía. Rememorando a otros soldados como Chávez Etchepare, Garcia y Carrillo por la cercanía que tenían con el personal de planta. Sobre los detenidos que hubo en el regimiento señala que no tuvo contacto con ellos, a pesar de que se sabía que había personas en esa condición en el gimnasio de la unidad militar. Con relación a las dependencias de su compañía, expresa que es efectivo que existía una sala que se ocupaba para fines de instrucción la cual una vez iniciado el gobierno militar fue cerrada y ocupada por personal de planta prohibiéndoles a ellos, los soldados, se acercaran a ella. En una oportunidad, recuerda que el soldado Chávez Etchepare les recomendó no acercarse ahí porque en dicha sala se efectuaban los interrogatorios de los detenidos. En esa sala, ingresaba personal de la policía de investigaciones y personal de ejército que vestía de civil como es el caso del sargento Arias Díaz, quien era el que aparentemente tenía a cargo esa sala. También a esa sala ingresaban algunos oficiales como es el caso del teniente Espinoza y otro cuyo apellido a su parecer era García, quien tenía otro hermano al interior del regimiento. Respecto a las víctimas Héctor Aguayo Olavarría, los hermanos Juan Carlos y Ricardo Schmidt Arriagada, Elías y Hugo Gonzalez Ortega, Alejandro Escobar Vásquez, Raúl Figueroa Burkhardt y Juan de Dios Cabrera Figueroa, señala que sus nombres no le son conocidos, por lo que no podrían aportar antecedentes respecto a sus detenciones y posibles paraderos. Nunca supo por comentarios de otros soldados de su compañía que hayan tenido que ir a la isla Cautín los primeros días del golpe de Estado a objeto de recoger

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

los cuerpos de personas fallecidas para posteriormente subirlas a camiones militares que salieron con rumbo desconocido, sin embargo lo anterior, recuerda la ocasión en que casualmente escuchó a los soldados Carrillo y García comentar que habían hecho explotar a dos detenidos sobre un puente, por lo que pudo escuchar, hacían referencia a que los habían amarrado y les habían puesto dos granadas entre ellos, jactándose de la manera en que quedaron sus cuerpos. El escuchar ese comentario, lo marcó mucho por la frialdad con que hablaban del tema, notó que no les afectaba, esto probablemente porque ambos eran "matarifes" y estaba acostumbrado a ver sangre.

A.147. Oscar Manuel Seguel Jofre (30 años a la época de los hechos). **En declaración extrajudicial** de fecha 29 de agosto de 2017, rolante de **fs. 2.766 a fs. 2.768 (Tomo VIII)**, proclama que el día 23 de septiembre de 1973, es detenido por funcionarios de carabineros y militares, en su domicilio de Villa Donguil, participando de su detención los funcionarios de carabineros teniente Carlos Moreno Mena, Hugo Catalán, el carabinero Reinaldo Lukowiak Luppy, Carlos Ramírez Gatica, Cabo Hernán Mella Lagos, Reinaldo Hernández Reyes, Ambrosio Antipán Linconao, Juan De Dios Asenjo Inostroza, Luengo, José Meriño Ferreira y Antonio Silva Soto. Que luego de sufrir apremios es trasladado al segundo piso de la caballeriza de la comisaría de Pitrufquén, donde se encontraba gran cantidad de detenidos, entre ellos Luis Gubelin, un profesor de apellido Zaravia y un agrimensor de nombre Santiago Garcia Hueche, prosigue su relato y narra otros hechos y en lo pertinente aduce que luego de su detención en la comisaría de Pitrufquén es trasladado al regimiento Tucapel, donde es dejado en un gimnasio el cual se encontraba lleno de personas torturadas, lugar en donde es torturado en diversas oportunidades. Posteriormente y ya pasado los días es llevado a la cárcel pública, relatando otros suceso, en cuanto a las víctimas Héctor Aguayo Olavarría, los hermanos Carlos y Ricardo Schmidt Arriagada, los hermanos Elías y Hugo Gonzalez Ortega, Alejandro Escobar Vásquez, Raúl Figueroa Burkhardt y Juan De Dios Cabrera Figueroa, sus nombres no le son conocidos e ignora todo antecedente relacionado con sus detenciones y destino final. Anexa otros antecedentes, y en lo pertinente precisa que permaneció detenido en el regimiento Tucapel a los días posteriores del golpe de Estado, recuerda que fueron seis días los que ahí estuvo, siendo torturado bajo la aplicación de corriente eléctrica en una dependencia de este, distinta al gimnasio,

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

reconociendo dentro de sus torturadores al capitán Nelson Ubilla Toledo, estando en su conocimiento que también en esos interrogatorios participaban dos tenientes cuyas identidades desconoce. Respecto al señor Podlech, quien asumió la labor de Fiscal, lo recuerda en una oportunidad que lo golpeó en una oficina ya que él quería que entregara las identidades de algunas personas, incluso quería que los acusara falsamente de la tenencia de explosivos. Afirma que fue condenado a tres años de reclusión por ser catalogado como extremista y por tenencia de armamento y explosivos, cosas que eran falsas, ya que siempre supo que se le condenaba por su preferencia política. Posteriormente, a esos tres años fue exiliado e Inglaterra, regresando a Chile el año 1996.

A.148. Sara Ester Valdés Velásquez (24 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 2.886 a fs. 2.887 (Tomo VIII), de fs. 2.891 (Tomo VIII) y de fs. 3.310 a fs. 3.311 (Tomo X);

En declaración extrajudicial de fecha 13 de octubre de 2015, rolante de **fs. 2.886 a fs. 2.887 (Tomo VIII)**, (cuya copia consta de fs. 3.310 a fs. 3.311 Tomo X), explaya que para el año 1973, tenía la edad de 24 años y se dedicaba a estudiar y trabajar en Villarrica, tenía residencia en casa de su madre en el mismo domicilio que en la actualidad reside junto a su familia. En esa época, no militaba ni participaba en ningún partido político, solo participaba en actividades de tipo social en la sede del partido Socialista. En esas reuniones participaba un joven de apellido Aguayo, a quien conocía ya que iban al mismo colegio y también unos vecinos cuyos nombres corresponden a Alejandro Escobar y Juan Cabrera. También conoció en esas reuniones a los hermanos Schmidt y Gonzalez, quienes eran funcionarios municipales y estaban a cargo de la distribución de unos terrenos los cuales se habían tomado en el año 1971. Sobre la persona que en ese acto se le da a conocer su identidad como Raúl Figueroa Burkhardt, es primera vez que escucha su nombre. La última vez que vio a estos jóvenes fue unos días antes del golpe de Estado y nunca le hicieron comentario alguno respecto a un posible viaje al extranjero en este caso a Argentina. Se enteró, por comentarios de los padres de Alejandro Escobar y de Juan Cabrera que ellos se habían ido de la ciudad sin dar explicación alguna respecto a su lugar de destino, esto fue a los tres días del 11 de septiembre cuando sus padres consultaron a su madre si sabían algo respecto a sus paraderos. Por su parte, nunca supo con claridad si se habían ido, ya que como dijo anteriormente ni Alejandro ni Juan, a

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

quienes conocía mejor, le habían dicho algo. Con el paso del tiempo, comenzó a escuchar comentarios de terceras personas que habían sido vistos en Argentina, pero nunca se pudo establecer esa situación, recordando que una de las hermanas de los Gonzalez, viajó a ese país y descartó que sus hermanos estuviesen allá. Que no es efectivo que ella haya intentado escapar con ellos a los días posteriores del golpe de Estado, solo sabe que iba otra persona con el grupo que se devolvió a Villarrica y podría corresponder Omniel Gonzalez, quien era hermano de Hugo y Elías. Esta información, se la aportó en su momento la señora Betty quien es hermana de los Gonzalez. Lo anteriormente narrado es la única información que maneja respecto a las víctimas, no teniendo antecedentes respecto a si esos fueron detenidos por carabineros o militares que patrullaban la zona por esos días.

En declaración judicial de fecha 27 de febrero de 2018, rolante de **fs. 2.891 (Tomo VIII)**, en lo pertinente ratifica declaración extrajudicial.

A.149. Celedonio Aníbal Aburto Fuentes (19 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 3.150 a fs. 3.150 bis (Tomo IX), de fs. 3.185 a fs. 3.186 (Tomo IX).

En declaración extrajudicial de fecha 3 de abril de 2019, rolante de **fs. 3.150 a fs. 3.150 bis (Tomo IX)** (cuya copia consta a fs. fs. 3.185 a 3.186 Tomo IX), desarrolla que efectuó su servicio militar obligatorio en el regimiento de Infantería N° 8 Tucapel de Temuco entre los años 1973 a diciembre de 1974, en la **compañía de plana mayor y servicios**, perteneciendo a la sección de telecomunicaciones, la que estaba a cargo del sargento segundo Peña Andaur, siendo su instructor el sargento Arias. De los soldados de su compañía recuerda a Reinaldo Fuentes, Candía Pinilla, Saavedra, Illanes, Matamala, Ríos Manzano, Carrillo, Cárcamo y a uno que apodaban "el Cuervo", cuyo apellido era Garcia. Los soldados más cercanos al personal de planta eran Ríos Manzano, Carrillo y Chávez Etchepare, entre otros que no puede recordar. Respecto a una sala ubicada entre su compañía y la compañía de morteros, señala que esta existió, la recuerda muy bien porque ahí se torturaba a los detenidos del regimiento, a ella ingresaba personal de planta, recordando que sus instructores Arias y Peña ingresaban a esa sala. Supo que en esa sala se interrogaba, debido a que un soldado conscripto se lo comentó, incluso lo vio manipulando la maquina con la cual les ponían corriente a los detenidos, le mostró a modo de ejemplo cómo

funcionaba, recordando que este aparato ocupaba pilas. No recuerda el nombre de este soldado, pero sabe que éste era cercano a los funcionarios de planta. Existía otra sala donde se torturaba, pero estaba ubicada al costado de la primera compañía de cazadores, donde interrogaban los detectives de la policía de investigaciones. En la sala que se ubicaba en su compañía vio ingresar detenidos con la vista vendada, posteriormente se escuchaban quejidos, pero nunca supo la identidad de algún detenido, puesto que no tenían acceso a dicha sala. Sobre alguna situación traumática que le haya tocado vivir en el regimiento, destaca que lo que más le afectó fue ver a los detenidos, los primeros días después del golpe principalmente, puesto que a mucha gente la dejaban en el piso frente a la comandancia, pasaban la noche ahí a la intemperie. Respecto a las víctimas Hugo Arner y Elías Dagoberto González Ortega, los hermanos Juan Carlos y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Raúl Figueroa Burkhardt y Héctor Aguayo Olavarría, sobre quienes se le menciona que eran oriundos de Villarrica y que fueron detenidos los primeros días del golpe de Estado y que habrían llegado en esa calidad al regimiento Tucapel de Temuco, detalla que nunca los conoció e ignora sus actuales paraderos. Sobre el episodio ocurrido en el polígono de tiro de la isla cautín, donde un grupo de funcionarios del regimiento habrían subido a dos camiones militares ocho y diez cadáveres para ser trasladados al puente Allipén, glosa que en esa situación no tuvo participación, ni tampoco tomó conocimiento. Respecto a los funcionarios militares que estaban a cargo de la compañía de plana mayor y servicios después del día 11 de septiembre de 1973, recuerda a los tenientes García Covarrubias y Lavín. Que nunca vio personas fallecidas al interior del regimiento, tampoco supo por el comentario de otros conscriptos que les haya correspondido participar en ejecuciones o en el levantamiento de cadáveres.

A.150. Juan Guillermo Bórquez Escobar (19 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 3.196 a fs. 3.197 (Tomo IX) y de fs. 3.198 a fs. 3.201 (Tomo IX).

En declaración extrajudicial de fecha 12 de octubre de 2017, rolante de **fs. 3.196 a fs. 3.197 (Tomo IX)**, expone que durante el año 1973 se encontraba efectuando su servicio militar en el regimiento Tucapel de Temuco, encuadrado en la compañía andina, primera sección, segunda escuadra, al mando del capitán Mario Alvarado Verdugo y lo seguían en el mando los subtenientes Oviedo y

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Valdebenito. De los clases que integraban la compañía recuerda al suboficial Ulloa, sargento Salgado, los cabos Castro, Barros y otros que no recuerda. Días antes del 11 de septiembre de ese año, a la compañía andina llegaron sesenta soldados provenientes de Lebu, recordando sólo a uno que lo apodaban "Huachañiqui", por ser bajo de estatura. Se le interroga por otros hechos.

En declaración judicial de fecha 25 de junio de 2019, rolante de **fs. 3.198 a fs. 3.201 (Tomo IX)**, ratifica su declaración extrajudicial que rola de fs. 947 a fs. 948 y que rola en estos autos a fs. 3.196 a fs. 3.197 (Tomo IX). En lo adecuado dice que para el 11 septiembre de 1973 se encontraba prestando servicios como soldado conscripto de la compañía andina, no recordando la sección, al mando del capitán Alvarado, le seguían el teniente Valdebenito, los cabos Castro, el suboficial Ulloa, el sargento Salgado. Que como ha señalado en otras ocasiones, efectivamente en el regimiento Tucapel de Temuco a contar del 11 de septiembre de 1973 existieron detenidos por motivos políticos. Lo anterior lo dice, porque en varias ocasiones junto a muchos soldados y oficiales de la compañía andina en conjunto con otros oficiales y conscriptos de otras compañías fueron a practicar allanamientos a distintos domicilios de personas que eran tildadas de comunistas. Estos allanamientos eran ordenados por el comandante del regimiento, Pablo Iturriaga, las cuales a su vez eran comunicadas por los respectivos oficiales de sus compañías. A estos allanamientos siempre iba un oficial, entre ellos y de su compañía recuerda al capitán Mario Alvarado Verdugo, cabo Castro (instructor de ellos), suboficial Ulloa, sargento Salgado (Comando de la compañía andina), teniente Espinoza. Los cuales procedían a detener a las personas que eran, como dijo, tildadas de comunistas, las cuales eran subidas al camión del regimiento en el cual se dirigían y luego trasladadas hasta el gimnasio del Regimiento. Luego de ello, entraba investigaciones a averiguar si estas personas tenían armas y todo lo relacionado con su militancia política. Recuerda que allanaron el sector Amanecer, Santa Rosa, Padre las Casas y Maquehue. Del personal de investigaciones que prestaba funciones al interior del regimiento Tucapel, recuerda a uno que le decían "el rucio" y a otro "el cuervo". Estos detectives estaban para interrogar a los detenidos, de ahí ellos no sabían si a los detenidos les daban la libertad o no. Explica que las personas detenidas producto de estos allanamientos efectivamente eran golpeadas al interior del camión en el que eran conducidas al regimiento, por los distintos funcionarios que conformaban la patrulla. El Tribunal

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

le lee, en lo pertinente, la declaración de don Luis Antonio Troncoso Ortiz, de fs. 333 a.335 y de fs. 340, a lo que el deponente señala recordar perfectamente al señor Troncoso, era soldado conscripto de su compañía, era de estatura pequeña y tez Morena. Se le pregunta por otra víctima y en lo pertinente que es efectivo que al interior de la compañía de plana mayor y servicios del regimiento Tucapel de Temuco existía una sala de torturas donde se interrogaba a los detenidos mediante la aplicación de corriente. Lo anterior lo dice porque en muchas ocasiones pasó por afuera de aquella, pudiendo escuchar los gritos de dolor de estas. A esta sala ingresaban oficiales y personal de investigaciones. Lo anterior lo sabe, puesto que veía ingresar al "Rucio" y al "Cuervo", funcionarios de investigaciones y otros que no recuerda. De los oficiales recuerda al cabo Castro. Que no supo lo acontecido con Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Juan Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Schmidt Arriagada, Juan de Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría Raúl Marcial Figueroa, Burkhardt, Santiago Faúndez Bustos, Victoriano Fernández Coloma y Ambrosio Badilla Vasey.

A.151. Rolando Chávez Godoy (30 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 3.314 a fs. 3.315 (Tomo X) y de fs. 3.316 (Tomo X).

En declaración extrajudicial de fecha 04 de abril de 2016, rolante de **fs. 3.314 a fs. 3.315 (Tomo X)**, invoca que para los años setenta se desempeñaba como funcionario del servicio de correo y telégrafos de Temuco, cumpliendo funciones como jefe de oficina en la comuna de Curarrehue entre los años 1966 a 1971. Tiene muchos recuerdos de su estadía en Curarrehue, donde conoció a gran parte de sus habitantes, en especial a la familia Aguayo, con quienes entabló amistad, principalmente con Francisco Aguayo, su esposa e hijos, entre los que recuerda Ricardo y a Héctor, a quien apodaban "el Chachi" y estudiaba en la escuela de la zona. En el año 1971 por razones del servicio fue destinado a oficina de correos y telégrafos de Temuco, donde se desempeñó hasta el año 1982. Con relación a su conocimiento sobre la detención de Héctor Aguayo en el mes de septiembre de 1973, inquiera que no se enteró de dicha situación, sino hasta el día en que éste apareció en la oficina de correos consultando por su persona, en aquella oportunidad recuerda que lo atendió apenas le avisaron y al tomar contacto con él lo saludó y le comentó que había estado detenido en el regimiento Tucapel y que incluso recién le habían dado la libertad. Dentro de la conversación

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

que sostuvo con éste, le comento también que había visto al interior del regimiento calidad de detenido a un profesor de Curarrehue, cuyo nombre es Manuel Humaña Jiménez, no aportándole otros antecedentes respecto a otras personas detenidas. Hace presente a Héctor lo vio en buenas condiciones física y también le comento que se iba de regreso a Villarrica, eso fue lo único que conversó con él y la última vez que lo vio, ya que al cabo de un tiempo se enteró que había desaparecido. Por otra parte, interpreta que en una oportunidad se enteró por comentario de una persona, cuya identidad no puede recordar, que el carnet de identidad de Héctor fue encontrado a orillas del río Toltén a la altura de la comuna de Pitrufquén, no enterándose de otros detalles respecto a si habían encontrado su cuerpo. Hace presente que nunca obtuvo otro antecedente respecto a la detención y posible ejecución de Héctor Aguayo Olavarría.

En declaración judicial de fecha 16 de mayo de 2016, rolante a **fs. 3.316 (Tomo X)**, ratifica su declaración judicial que rola de fojas 2.471 a 2.472, la que en estos autos rola de fs. 3.314 a fs. 3.315 (Tomo X). Precisa que desconoce el motivo por el cual Héctor Aguayo lo fue a visitar después que salió de la cárcel. Quizás por la amistad que lo unía a su familia quería pedirle dinero, pero no se lo dijo y el deponente tampoco sospechó que quisiera hacerlo. Le dijo que había estado detenido en el regimiento Tucapel y que había sido liberado. También agregó que se encontró con don Manuel Humaña Jiménez, quien era director de la escuela de Curarrehue. Que la verdad es el "Chachi" Aguayo no le dijo si andaba con más personas. Después de esta breve conversación se fue y nunca más lo vio. Diez o quince años después, por comentarios supo que su carné de identidad habría sido encontrado en la ribera del río Toltén, cerca de Pitrufquén, pero esto no le consta ni recuerda quién le hizo el comentario.

A.152. Bernardino Piñera Carvallo (58 años a la época de los hechos). **En declaración judicial** de fecha 01 de octubre de 2010, rolante de **fs. 4.219 a fs. 4.220 (Tomo XII)**, en lo pertinente recuerda haber hecho algunas gestiones ante el comandante del regimiento Tucapel de Temuco para preguntar por algún detenido, a petición de familiares de personas que estaban en esa calidad. Usualmente, el comandante Iturriaga lo enviaba a conversar con el abogado Podlech. Que recuerda que el abogado Podlech siempre la trató con mucha caballerosidad en las oportunidades en las que tuvo que concurrir a conversar con él. En total debe haber conversado en cuatro oportunidades con el abogado

mencionado. Recuerda que en algunas oportunidades solicitó al comandante del regimiento permiso para visitar a los detenidos en la cárcel, a lo que éste le dijo que debía presentar ante el capitán Ubilla, quien estaba a cargo de esos asuntos. Rememora que sus entrevistas con el abogado Podlech se efectuaban en el regimiento Tucapel. Esta persona vestía de civil. Respecto a los dichos de doña Sonia Vásquez Villavicencio, cónyuge de Ambrosio Badilla Vasey según se le ha dado a conocer por el Tribunal manifiesta que no recuerda haber informado algo a esta persona acerca del destino de su marido. Sin embargo, no descarta que esto haya ocurrido, pues ya ha señalado que hizo muchas gestiones similares. Narra otras situaciones.

A.153. Octavio Zúñiga Corvalán (37 años a la época de los hechos). **En declaración judicial** de fecha 06 de junio de 2003, rolante de **fs. 4.241 a fs. 4.242 (Tomo XII)**, en lo pertinente musita que al 11 de septiembre de 1973 trabajaba en el Servicio Agrícola Ganadero, era militante del partido Socialista. Fue así como el día 13 de septiembre, llega un radio patrullas de carabineros, quienes proceden a detenerlo, lo llevan a la segunda comisaría de Temuco. En ese lugar, lo sacan a un patio y proceden a golpearlo, propinándole culatazos, golpes de puños y puntapiés. Había otras personas detenidas entre ellas pudo distinguir al diputado don Gastón Lobos Barrientos, militante del partido Radical, el abogado Armando Jobet, don Álvaro García, quien había sido jefe del Serviu, don Patricio Escalona, de la Conaf. También en otro calabozo se encontraba Jecar Neghme, con quien se conocían de muchachos en el liceo y porque también era militante Socialista. Pudo ver también a Gastón Elgueta, compañero Socialista. Desde dicha comisaría, los trasladaron caminando hacia el regimiento Tucapel N°8. Que esto ocurrió aproximadamente el 15 de septiembre de 1973. En la Fiscalía Militar le tomaron una declaración, la que puede calificar que fue muy formal, versó fundamentalmente acerca de su militancia, reconociendo de inmediato que era Socialista de Chile y del sector más democrático, al cual pertenecía el senador Aniceto Rodríguez. Recuerda que la declaración la tomó un actuario de apellido Toloza, el que lo conocía, por cuanto había sido su compañero de liceo y sabía que no era un terrorista. También vio ahí en la Fiscalía al abogado don Alfonso Podlech, gente de la misma época suya, por lo cual se conocían todos, este vestía uniforme de oficial de ejército, pero no de campaña. Ese día estuvo alrededor de algunas horas en la Fiscalía Militar que funcionaba en el regimiento y fue dejado

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

en libertad, con arresto domiciliario, autorizándosele para viajar a Pitrufuquén, dándosele un documento de que no podía ser detenido, sino por orden expresa de la Fiscalía Militar. Arguye que ese día fue saludado por don Alfonso Podlech en forma fría pero muy formal. No intercambiaron palabras, ni lo vio predispuesto a perjudicarlo. Quedó obligado a presentarse todos los días sábado a la Fiscalía, para firmar un libro, situación que se prolongó aproximadamente por tres meses, por lo que debía viajar desde Pitrufuquén a Temuco. En esas oportunidades le correspondió ver a don Alfonso Podlech en dicha Fiscalía. Agrega que nunca más fue detenido ni se le hizo cargo alguno en su contra. En parte le ayudó a que no se le persiguiera, porque era una persona conocida tradicionalmente en la zona, su hermano era oficial de ejército de este, su señora era sobrina del general Orlando Urbina, quien posteriormente tuvo jurisdicción sobre esta zona. Comenta otras hechos.

A.154. Audito Gavilán Tapia (36 años a la época de los hechos). **En declaración judicial** de fecha 10 de agosto de 2007, rolante de **fs. 4.243 a fs. 4.245 (Tomo XII)**, comunica que hasta el 11 de septiembre de 1973 era gobernador del departamento de Nueva Imperial, cargo de exclusiva confianza del presidente Allende y que había asumido en noviembre de 1972, y en lo pertinente que dos días después del 11 de septiembre salió un bando militar en el que se pedía que las autoridades del gobierno depuesto se presentaran hasta la Fiscalía Militar de Temuco. Concurrió entonces al regimiento Tucapel y se presentó en la guardia como exgobernador. Lo derivaron a una sala ubicada en el interior de la unidad militar, donde se entrevistó con el abogado Alfonso Podlech Michaud, quien le dijo que nada había en contra suya, por lo que debía irse a Nueva Imperial y presentarse ante el mayor de Carabineros. Sin embargo, cuando salía de la sala de la Fiscalía, se acercó a la oficina el segundo comandante de la base aérea Maquehue, cuyo nombre no recuerda, quién le manifestó al Fiscal Podlech que el deponente había tenido conocimiento del operativo en el sector de Nehuentúe, donde funcionaba una escuela de guerrillas. Ante esta situación Podlech le dijo que iba a quedar detenido en la cárcel de Temuco en libre plática, además de pedirle que elaborara un informe escrito acerca de lo que sabía sobre lo ocurrido en Nehuentúe con una escuela de guerrillas. Hizo su informe y se lo entregó a Héctor Toloza, quién era un actuario de la fiscalía militar. Luego de ocho días el señor Podlech lo mandó llamar y ordenó su libertad. Hace presente que

antes de su liberación fue sacado de la cárcel por una patrulla de la fuerza aérea y conducido a la base Maquehue. Que junto con él iba Hernán Henríquez Aravena, narrando lo allí acontecido. Que posteriormente, fue llevado nuevamente a la cárcel, a su parecer por Orlando Moreno Vásquez, suboficial de ejército y actuario de la fiscalía militar, había solicitado que esto ocurriera. Una vez que regresó a Nueva Imperial, recuerda que una tarde del mes de octubre llegó a su casa una patrulla de militares comandada por un oficial de apellido Silva, quien le dijo que lo iba a llevar a presenciar un operativo en la casa de un médico que ya estaba detenido en Temuco, detallando lo acontecido y que en Nueva Imperial fue objeto de hostigamientos por parte del mayor de carabineros Walter López Stange. Esto motivó que se viera obligado a dejar la comuna y trasladarse a vivir a Temuco a fines de 1974. Urde que un día, viviendo ya en Temuco a principios de 1975, fue hasta el liceo de hombres, donde trabajaba; personal de investigaciones, quienes lo condujeron hasta el cuartel policial. Que por órdenes del capitán Ubilla, una patrulla militar lo vino a buscar y lo condujeron hasta el regimiento Tucapel. En ese lugar fue conducido a una sala pequeña, donde le vendaron la vista y recibió un golpe en la nuca. Lo pusieron sobre un somier y procedieron a aplicarle golpes de corriente en diferentes partes del cuerpo. Le hicieron preguntas acerca de armas y nombres de personas. Luego de esto lo soltaron, debiendo irse a pie hasta su casa, prosigue su relato.

A.155. María Haydée Escobar Vásquez (5 años a la época de los hechos). **En declaración judicial** de fecha 02 de septiembre de 2022, rolante de **fs. 4.519 a fs. 4.519 bis (Tomo XIII)**, se le pregunta ¿qué edad tenía usted para septiembre de 1973? A lo que responde que tenía 5 años. Se le pregunta ¿Quiénes componían su familia en aquella época?, la deponente responde que sus papás, sus cuatro hermanos y ella. Daniel Escobar, su padre, Inés Vásquez, su madre, su hermano Isaías, Daniel, Pedro, Vicente y ella (que estaban en ese momento en su casa) y su hermano Alejandro. El Tribunal le consulta su hermano Alejandro ¿Qué edad tenía para esa época?, a lo que responde que dieciocho años. El Tribunal le consulta su hermano ¿Había salido del colegio, trabajaba?, respondiendo que no recuerda mucho. No sabe si estado trabajando o estudiando. El Tribunal le consulta ¿cómo tomó conocimiento de cuál era la militancia política de su hermano en esa época?, respondiendo que en esa época el pertenecía al partido Socialista. El Tribunal le consulta ¿Qué sucedió con su hermano a partir

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

de 13 de septiembre de 1973?, a lo que responde que recuerda que en ese tiempo fue el golpe de Estado y su hermano por pertenecer al partido sintió miedo de todo lo que estaba pasando, él con un grupo de amigos se fueron, porque tenían miedo de lo que les podía suceder por todo lo que estaba pasando en el país. Mientras ellos vivían situaciones muy tristes, porque llegaban “los milicos a su casa a buscarlo, a buscar cosas que se imagina serían armas, no sabe, ya que era tan pequeña”. Que eso fue muy triste y traumático, hasta ahora, porque vio a su madre que sufrió mucho, murió esperando saber y nunca supieron nada, ósea cosas comentarios, pero saber realmente lo que pasó hasta ahora no. El Tribunal le consulta si con ese grupo de amigos ¿hacia dónde se fueron o querían ir?, respondiendo que por lo que recuerda, dijeron que iban hacia la Argentina. El Tribunal le pregunta ¿tiene conocimiento de quienes eran ese grupo de amigos?, a lo que responde que se acuerda de una niña que se llamaba Sara, por lo que le contaba su mamá y otros niños que eran de apellido Romero, pero más allá no recuerda, y unos González también. El Tribunal le consulta ¿sabe si sus familiares en aquella época concurren a algún recinto de detención a preguntar respecto a la ubicación de su hermano? ¿Cuándo sus familiares supieron que su hermano había sido detenido?, a lo que responde que el tiempo exacto no sabe, no sabe cuánto tiempo pasaría que ellos supieron que había pasado eso realmente. El Tribunal le pregunta ¿sus padres realizaron alguna gestión, se dirigieron a alguna institución?, la deponente responde que eso tampoco lo podría asegurar, porque no se acuerda. El Tribunal le consulta si con el correr del tiempo ¿Ustedes tuvieron más antecedentes? sus hermanos ¿Se reunieron con agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos? ¿Qué hizo o sus hermanos desde esa época hasta hoy?, a lo que responde que sabe que su papá sí estuvo en contacto con personas, pero no sabría decir nada más.

A.156. Pedro Juan Escobar Vásquez (9 años a la época de los hechos). **En declaración judicial** de fecha 02 de septiembre de 2022, rolante de **fs. 4.521 a fs. 4.521 vuelta (Tomo XIII)**, el Tribunal le consulta ¿Qué edad tenía para septiembre de 1973?, respondiendo el deponente que nueve años. El Tribunal le consulta ¿Quiénes componían su familia en aquella época?, el deponente contesta que sus padres y sus cuatro hermanos. Su madre se llamaba Inés Vásquez, su padre Daniel Escobar y mis hermanos María Escobar, Vicente Escobar, Daniel Escobar, Isaías Escobar y su hermano Alejandro Escobar. El

Tribunal le consulta por su hermano Alejandro ¿Qué edad tenía para esa época?, el deponente responde que por lo poco que se acuerda, su hermano tenía dieciocho años en ese tiempo. El Tribunal le consulta ¿Su hermano Alejandro tenía alguna militancia política para aquella época?, a lo que el deponente responde que pertenecía a un partido Socialista, pero él a los nueve años era poco lo que podía entender sobre eso. El Tribunal le consulta ¿Qué sucedió con su hermano a partir de 13 de septiembre de 1973? ¿Cuál es el relato familiar?, el deponente responde que por lo que se acuerda, su hermano les mencionó a todos y especialmente a sus padres, que él tenía que irse porque tenía miedo de que les hicieran daño como familia, por el partido en el que estaba, así que lo mejor era que él se fuera, así que se reunió con unos amigos y esa fue la última vez que lo vio que salió de la casa. Había como un alto, así como una cima, se acuerda que el miró y se fue, desde entonces nunca más supieron de él. El Tribunal le consulta ¿en esa época ustedes vivían dónde?, el deponente responde que, en la comuna de Villarrica, en la población Diego Portales. El Tribunal le consulta ¿Usted sabe los nombres de los amigos con los cuales él pretendía irse? ¿Los conocía?, el deponente contesta que del que más se acuerda era uno de apellido Romero, que vivía al frente de ellos, pero de los otros no. El Tribunal le consulta recuerda que él se despidió, pero ¿Cuándo ustedes se enteraron de que él no volvió? ¿Qué supieron ustedes como familia?, el deponente responde que, primero que nada, al ver el sufrimiento de su mamá especialmente y con la esperanza de que el pudiera volver, porque parece que volvieron algunos, dos le parece que eran, pero nunca volvió su hermano y después con el tiempo supieron que lo habían visto en Argentina, pero eso fue sólo un rumor al aire, después ya nunca más supieron de su hermano Alejandro. El Tribunal le consulta si sus papás ¿fueron a alguna institución como hospital, gendarmería, regimiento, Cruz Roja? ¿Qué se acuerda de eso?, el deponente contesta que no se acuerdo. El Tribunal le consulta ¿Tiene algún otro antecedente que aportar al Tribunal de relevancia o es todo lo que sabe?, a lo que responde que lo último que supieron de su hermano, que según dicen, es que lo tomaron arrestado, que lo maltrataron y lo tiraron a un barranco. El Tribunal le consulta ¿eso lo supo por dónde?, el deponente responde que, por los familiares mayores, porque ellos estuvieron investigando sobre su hermano, para poder tranquilizar a su mamá, porque ella era la que más sufría.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

A.157. Rita Aurora Ortega Muñoz (48 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 48 (Tomo I) y de fs. 1.051 (Tomo III).

En declaración extrajudicial de fecha 15 de noviembre de 1995, rolante de **fs. 48 (Tomo I)** (cuya copia consta de fs. 1.051 Tomo III), ciñe que es la madre de Hugo Arner y Elías Dagoberto González Ortega, quienes se encuentran desaparecidos desde el 13 de septiembre de 1973. Comunica que el día 12 de septiembre del mismo año, sus hijos le comunicaron que se irían hacia Argentina, debido a que con anterioridad habían sido amenazados por carabineros, ya que ambos eran militantes de las juventudes socialistas. Ese día en horas de la tarde, salieron de la casa a reunirse con sus compañeros; los hermanos Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Aguayo Olavarría y Raúl Figueroa Burkhardt, con los cuales realizarían el viaje. Siendo esta la última vez que vio a sus hijos. Dado que pasó el tiempo y no tuvo noticias de ellos, como estaba acordado, comenzó junto a su hija a realizar diversas averiguaciones con el propósito de obtener algún antecedente respecto a estos jóvenes, para tal efecto concurrió hasta el regimiento Tucapel, hospitales de la zona, cárceles y comisarías de carabineros. En ninguno de estos organismos se le dio una información que permitiera saber de ellos. Por comentarios posteriores, los cuales nunca se han podido precisar, supo que el grupo de jóvenes había sido detenido en el sector de Curarrehue y que habían sido fusilados en el puente Toltén y lanzados al agua.

A.158. Silvia Luz Schmidt Arriagada (19 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 50 a fs. 51 (Tomo I), de fs. 137 a fs. 138 (Tomo I), fs. 143 (Tomo I), de fs. 635 (Tomo II), de fs. 1.041 a fs. 1.042 (tomo III), de fs. 1.043 a fs. 1.044 (Tomo III) y de fs. 1.053 a fs. 1.054 (Tomo III).

En declaración extrajudicial de fecha 14 de noviembre de 1995, rolante de **fs. 50 a fs. 51 (Tomo I)** (cuya copia consta de fs. 1.053 a fs. 1.054 Tomo III), destaca que es hermana de Carlo y Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, quienes se encuentran desaparecidos desde el 13 de septiembre de 1973. Su hermano Carlos nació el 24 de octubre de 1951 y Ricardo el 25 de diciembre de 1952. Pertenecían al partido socialista durante el gobierno de Salvador Allende, específicamente en las juventudes socialistas de Villarrica. Que, debido a los sucesos del 11 de septiembre de 1973, hubo mucha persecución a los que eran partidarios del depuesto gobierno. Debido a lo anterior sus hermanos optaron por

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

huir de Villarrica por temor a que fuesen detenidos. El día 13 de septiembre de ese año, al parecer ellos decidieron cruzar la frontera hacia Argentina, por el lado de Huife Alto, ubicado en el sector de Pucón – Curarrehue, según tiene entendido, esta operación la tenían pensada con otros jóvenes, entre ellos los hermanos Hugo y Elías González Ortega, Héctor Aguayo y Raúl Figueroa, entre otros que no recuerda sus nombres. Que en los días posteriores a la huida de sus hermanos y debido a que ellos no se habían comunicado con su mamá, personalmente concurrió a indagar sobre el paradero de ambos en el regimiento Tucapel de Temuco, fiscalía militar y cárcel de la ciudad, además de la segunda comisaría de carabineros, organismos en los cuales no obtuvo respuestas positivas de sus hermanos. Transcurrido aproximadamente un mes del desaparecimiento de sus hermanos, su madre fue informada a través del cabo Eduardo Vergara y el carabinero Guido Krausse, ambos domiciliado en Villarrica, que, a sus hermanos, los habían capturado en la ocasión y que habían sido llevados hasta la comisaría de Pucón para posteriormente trasladados a la ciudad de Temuco, donde presumiblemente habían sido asesinados. Su madre Aurora del Carmen Arriagada Vergara, falleció en el año 1974, víctima de un ataque cardíaco, sin haber alcanzado a conocer el paradero de sus hermanos Carlos y Ricardo Augusto, quienes se encuentran desaparecido. Hace presente que su hermano Carlos era casado con Elena del Carmen Santibáñez Fernández (fallecida).

En declaración judicial de fecha 14 de mayo de 1999, rolante de **fs. 137 a fs. 138 (Tomo I)**, esgrime que es hermana de Carlos y Ricardo Schmidt Arriagada, desaparecidos desde el 13 de septiembre de 1973. Que en aquella época sus hermanos pertenecían las juventudes socialistas y a raíz del golpe de Estado del 11 de septiembre, y por temor a ser detenidos, decidieron junto a un grupo de amigos el día 13 de septiembre, intentar cruzar la frontera hacia la república de Argentina. Sus hermanos salieron de la casa de su madre en esa época, quien en esa época residía en Villarrica, en dirección a Huife Alto, pues allí intentarían efectuar la travesía. Que está completamente segura de que ese era su destino, pues se lo dijeron a madre, que incluso la esposa de uno de ellos se quedó con su madre. Que en esa época ella se encontraba en Temuco. El caso es que como no tuvieron noticias de sus hermanos, ya que no se comunicaban con ellos, que eran su familia, se preocuparon porque, además, sabían que había innumerables personas detenidas. Ante ello decidió comenzar a indagar en

diferentes partes, por si acaso ellos hubieran sido detenidos, y es así como concurrió al regimiento Tucapel de Temuco, a la fiscalía militar, a cárcel y también a la segunda comisaria de Temuco, pero en ninguno de esos lugares aparecían ellos como detenidos, ni obtenía ningún dato tendiente a ubicarlos. Agrega que una hermana indagó con algún familiar de los otros jóvenes, con los cuales habían partido sus hermanos, pero estaban en las mismas condiciones que ellos, tampoco sabían nada del paradero de estos. Asimismo, pasado unos días, unos carabineros llamados Eduardo Vergara y Guido Krause quienes conocían a su madre, le comentaron que sus hermanos habían sido detenidos, que ellos los habrían visto, esto lo sabe porque su madre le manifestó, pero al continuar con las indagaciones, siguieron sin obtener respuestas positivas, porque en ningún lado aparecían registrados como detenidos, y hasta el día de hoy continúan con las mismas incertidumbres, sin saber que fue de ellos y lo claro es que están desaparecidos. Anexa que su madre Aurora Arriagada, falleció en 1974

En diligencia de careo con Eduardo Vergara, de fecha 1 de junio de 1999, rolante de **fs. 143 (Tomo I)**, ratifica su declaración y agrega que su madre le dijo que los carabineros Vergara y Krause, le habrían dicho que sus hijos habían sido detenidos, en Pucón. Que es cierto, que Guido Krause en esa época trabajaba en Villarrica. Anexa que su madre le dijo que sus hermanos habían sido detenidos en Pucón y luego trasladados a Temuco, y fue allí donde ella comenzó con las indagaciones y en ninguna parte aparecieron registrados.

En declaración extrajudicial de fecha 25 de julio de 1990, rolante de **fs. 635 (Tomo II)** (cuya copia consta de fs. 1.041 a fs. 1.042 Tomo III), insiste en que es hermana de Carlos y Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, ambos chilenos, nacidos el 24 de octubre de 1951 y 25 de diciembre de 1952, respectivamente en la ciudad de Pucón. Que estos en el año 1973 el día 13 de septiembre se tuvieron que ir, hacia el lugar de Ñancalil, lado de Huife Alto, sector Pucón- Curarrehue, pues ambas pertenecían al partido Socialista de Villarrica. Carlos, trabajaba en CORVI, de esa ciudad y tenía su residencia en José Miguel Carrera con Inés de Aguilera y vivía con su hermano Ricardo Augusto. Le consta que sus hermanos, por temor a ser detenidos tuvieron que tomar esa determinación. Que a pesar de sus constantes indagaciones ante la autoridad y ante el regimiento Tucapel de Temuco, comisaría de carabineros, cárcel, fiscalía, nunca se le dio una respuesta concreta del paradero de sus hermanos. Que a su madre Aurora del Carmen

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Arriagada Vergara (fallecida) le fue informada a través del cabo Eduardo Vergara, que a sus hermanos los habían asesinado en Temuco, y que no se hiciera ninguna ilusión con respecto a ellos de encontrarlos con vida. Lo mismo se le dijo a ella por el carabinero Guido Krause, este.

En declaración extrajudicial de fecha 29 de agosto de 1990, ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, rolante de **fs. 1.043 a fs. 1.044 (Tomo III)** expuso que los hermanos Carlos y Ricardo Augusto Schmidt se alejaron de Villarrica, pueblo donde vivían, el día 13 de septiembre de 1973, por temor a ser detenidos, dado que eran miembros de las juventudes socialistas de Villarrica. Que al parecer tenían la intención de cruzar la frontera por el lado de Huife Alto, ubicado en el sector de Pucón- Curarrehue, desde entonces no se ha sabido de ellos. El sargento primero Eduardo Vergara González y el carabinero Guido Krause informaron a la madre de la compareciente, doña Aurora del Carmen Arriagada Vergara, que Carlos y Ricardo Augusto habían sido capturado en esa oportunidad y traídos hasta la comisaria de Pucón y posteriormente trasladados a Temuco, ciudad en donde presumiblemente habían sido asesinados.

A.159. Luis Robinson Bustos Letelier (38 años a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 58 a fs. 59 (Tomo I), de fs. 84 a fs. 84 vuelta (Tomo I), de fs. 94 a fs. 95 (Tomo I), de fs. 181 a fs. 181 vuelta (Tomo I), de fs. 370 a fs. 370 vuelta (Tomo I), de fs. 413 a fs. 413 vuelta (Tomo II), de fs. 1.061 a fs. 1.062 (Tomo III), de fs. 1.235 a fs. 1.236 (Tomo IV) y de fs. 2.009 a fs. 2.010 (Tomo VI).

En declaración extrajudicial de fecha 11 de diciembre de 1995, rolante de **fs. 58 a fs. 59 (Tomo I)** (copia de la cual se encuentra fs. 94 a fs. 95 Tomo I) y de fs. 1.061 a fs. 1.062 Tomo III), explicita que ingresó a carabineros de Chile en el año 1954, correspondiéndole desempeñarse en diferentes unidades del país. Y desde el año 1971 hasta 1975 en la subcomisaria Pucón. Llegó a esa unidad con el grado de teniente y en año 1972 ascendió al grado de capitán. Consecuente con lo anterior, el 11 septiembre de 1973, se encontraba cumpliendo funciones como subcomisario jefe de la subcomisaria de Pucón. Respecto de lo que se le consulta y relación con la detención de ocho jóvenes que intentaban cruzar a Argentina, exclama que no recuerda fecha exacta, pero entre el 13 y el 15 de septiembre de ese año, le correspondió efectuar un patrullaje desde Pucón hasta Curarrehue. Cuando se dirigieron a ese lugar optó por desviarse hacia el lago

Caburgua y desde el puente El Turbio, unos tres kilómetros aproximadamente desde el lago hacia el camino a Curarrehue, ubicaron a un grupo de jóvenes tipo mochileros, los cuales andaban muy sucios y llevaban las frazadas enrolladas y terciadas en el pecho. La cantidad de éstos no la recuerda, pero eran más de seis. Al interceptarlos, personalmente les preguntó que hacia donde iban, a lo que le respondieron que se dirigían a Curarrehue, en ese momento les pidió su cédula de identidad, pero como ninguno de ellos portaba este documento, optó por detenerlos y subirlos a la camioneta en la cual se movilizaban. En ese momento dispuso que el cabo Monsalve, junto a dos funcionarios más que no recuerda los llevaran hasta el cuartel, mientras que él se quedó en el lugar junto a otros funcionarios y se trasladó a pie hasta el sector de Caburgua. Posteriormente cuando llegó la camioneta el cabo Monsalve le informó que los detenidos habían sido entregados en el cuartel sin novedad. Recuerda que esta detención se practicó alrededor de las 10:00 y 12:00 horas. Los patrullajes a esos sectores obedecían a que se temía que desde el complejo maderero Panguipulli podían huir sus integrantes, en especial el “Comandante Pepe” hacia Argentina. Continuando con el relato de este hecho, puede decir que ese día regresó a su unidad alrededor de las 17:30 a 18:00 horas y al preguntar por los detenidos fue informado por el suboficial de guardia que estos habían sido trasladados a Temuco en un helicóptero de la fuerza aérea por orden del coronel de carabineros de apellido Arias. De esta entrega quedó constancia en el libro de novedades de la guardia, incluso en esta constancia aparecía el nombre del piloto al cual fueron entregados, del cual en este momento no se recuerda. Al ver que todo estaba en regla, las constancias estampadas en los libros correspondientes y además que había sido ordenado por un superior jerárquico, no se preocupó más del asunto. Hacer presente, que ignora cómo fueron informados los estamentos superiores, de la detención de estos jóvenes, pero presume que este helicóptero llegó en forma ocasional hasta la comisaría, por cuanto era costumbre que así lo hicieran, ya que ahí existía un helipuerto ocasional. Desde que llegó a Pucón ya los helicópteros llegaban a la comisaría, debido a que efectuaban todos los años revisión a los hitos fronterizos. Respecto de los nombres de los jóvenes que fueron detenidos por su patrulla, explana que no los sabe, pero quedaron consignados en el libro de novedades de la guardia. En relación de las personas que se le mencionan con los nombres de Alberto Colpihueque Navarrete y Eleuterio Ramón Colpihueque Lican,

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

explaya que le son totalmente desconocidos. Pero aclara que según lo que se le indica, estas personas eran del sector de puente Basa Chico, el cual no era de su jurisdicción.

En declaración judicial de fecha 03 de abril de 1996, rolante de **fs. 84 a fs. 84 vuelta (Tomo I)**, expone que al 11 de septiembre de 1973 tenía el grado de capitán de Carabineros, cumpliendo funciones como subcomisario de la subcomisaria de Pucón y el día 13 de septiembre se detuvo a unos jóvenes, no recuerda si eran seis u ocho, se les detuvo en el camino saliendo de Pucón a Curarrehue, hacia el sector de Caburgua, caminaban hacia el puente, esto ocurrió en horas de la mañana, alrededor de las diez horas, venían todos con pelo desordenado, barbones y con frazadas amarradas en un costado todos ellos, se les interrogó y ninguno portaba identificación, ni dieron explicaciones claras de donde se dirigían, ni que andaban haciendo. En vista de eso, ordenó que fueran llevados detenidos a la comisaría que quedaba a unos cinco kilómetros de distancia, lo que fue cumplido por el cabo Monsálvez y dos carabineros más. Continuó con dos funcionarios hacia el lago Caburgua a pie. La camioneta que trasladó a los detenidos debe haberse demorado una media hora o tres cuartos de hora en regresar al lugar en que se encontraba, informándole que los detenidos habían sido entregados sin novedad en el cuerpo de guardia. Después de haber ido a Curarrehue, regresó a la unidad alrededor de las diecisiete horas, ya que cumplió labores de patrullaje para evitar la salida hacia Argentina de individuos, según se le había ordenado. En la unidad se le informó que los detenidos no estaban, ya que por orden de la prefectura de Temuco se había ordenado que éstos fueran puestos a disposición de la fuerza aérea y un helicóptero había llegado a la unidad y los había trasladado. Aclara que en la época era normal que aterrizaran helicópteros en la subcomisaria, ya que normalmente se hacían labores de patrullaje de los hitos fronterizos y el aeropuerto de Pucón no estaba habilitado para la erupción del volcán. Incluso en el libro de guardia de la época se dejó constancia que los detenidos que se individualizaban eran entregados al comandante, cuyo nombre se consignó, pero no lo recuerda y eran llevados al regimiento Tucapel de Temuco. En esa época todos los detenidos por estas situaciones especiales iban a dar al regimiento Tucapel de Temuco.

En diligencia de careo con Gonzalo Enrique Arias González, de fecha 26 de noviembre de 1999, rolante de **fs. 181 a 181 vuelta (Tomo I)**, ratifica

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

íntegramente su declaración prestada ante el Juzgado del Crimen de San Antonio, sin tener nada que modificar. Dicha declaración es la que rola a fs. 84 y 84 vuelta, agregando que el piloto del helicóptero era el comandante de la fuerza aérea Benjamín Fernández, quien se llevó a los detenidos. El firmó el libro de novedades de la guardia y se llevó el parte respectivo de la detención a la Fiscalía Militar del regimiento Tucapel de Temuco. Funda que en ningún momento ha declarado que el señor Gonzalo Arias había dado la orden de retirar a los detenidos en el helicóptero. No sabe más datos de Benjamín Fernández. No ratifica la declaración policial prestada en San Antonio y que rola a fs. 58 de estos autos, en la parte que se señala que el señor Arias habría ordenado trasladar a los detenidos en un helicóptero a Temuco. Eso nunca lo ha afirmado, si dijo que el 11 de septiembre de 1973 a las once de la mañana estuvo con el teniente coronel Gonzalo Arias cuando escucharon por radio el cambio de gobierno. De inmediato éste lo mando que se viniera a su unidad de Pucón, ya que estaba con éste en Temuco cuando esto ocurrió. Por lo tanto, manifiesta que, con respecto a los detenidos, fueron sacados de su unidad en un helicóptero de la fuerza aérea piloteado por el comandante Benjamín Fernández y por orden de la prefectura Cautín. Iban con destino al regimiento Tucapel e Temuco, donde ignora si llegaron. Justifica que vino a saber de la desaparición de los jóvenes cuando llegó investigaciones a interrogarlo a su casa. Agrega que el comandante Arias nunca vino a Pucón en los años que el encartado estuvo como subcomisario. Desde 1971 a 1975.

En declaración judicial de fecha 23 de julio de 2003, rolante de **fs. 370 a fs. 370 vuelta (Tomo I)**, el Tribunal le dice que individualice los carabineros que acompañaron al cabo Monsalve en el traslado de los detenidos hasta la subcomisaria de Pucón, a lo que el encartado responde que, atendido el tiempo transcurrido, no podría identificarlos. El Tribunal le pide individualice la persona que le informó al llegar a su unidad que los detenidos habían sido trasladados por orden de la prefectura de Temuco, a lo que responde que tiene entendido que la persona que le informó lo anterior fue el cabo Diógenes Bravo, quien se encontraba en servicio de guardia y acompañaba o lo acompañaba otro funcionario, ya que siempre son dos los funcionarios que hacen el servicio de guardia, uno desempeña el puesto de suboficial de guardia, que se ocupa de la parte administrativa y el otro de cuartelero, que es el que atiende público y está encargado de la vigilancia de los detenidos. Reseña que le preguntó a Bravo por

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

los detenidos y éste le informó que por orden de la prefectura habían sido trasladados en helicóptero al regimiento Tucapel de Temuco. Al revisar el libro de telefonemas se percató que decía más o menos textual “por orden de la Prefectura de Cautín deben ser entregado los detenidos al personal de la Fuerza Aérea para ser trasladados al Regimiento Tucapel. Dese cumplimiento. Por orden del Prefecto”. Y firmaba el capitán ayudante. El Tribunal le dice que señale los nombres de la dotación de la subcomisaria de Pucón, respecto de lo que indica que recuerda a Monsalve, Quezada, Diógenes Bravo, Burgos, Eduardo Vergara, Roberto Curilaf, un carabinero de apellido Riquelme y Arriagada.

En declaración judicial de fecha 06 de diciembre de 2004, rolante de **fs. 413 a fs. 413 vuelta (Tomo II)**, el Tribunal le pregunta si las personas que les correspondió detener portaban cédulas de identidad, a lo que responde que no portaban cédulas de identidad. Invoca que personalmente vio el parte firmado por el suboficial mayor de apellido Burgos, que ordenaba poner a disposición de la Fiscalía Militar de Temuco a los ocho jóvenes que detuvo. El traslado lo efectuó personal de la fuerza aérea en un helicóptero al mando del comandante Benjamín Fernández. Todos estos hechos fueron anotados tanto en el libro de guardia como en el libro de población de la unidad. El Tribunal le pregunta si Eduardo Vergara González pertenecía a la dotación de la subcomisaria de Pucón y en caso afirmativo, si ha conversado sobre los hechos investigados con él, a lo que el encartado responde que sí pertenecía a la unidad, pero no ha conversado con él. Con el único que ha conversado es con un cabo de apellido Rivas, pero por teléfono. El Tribunal le pregunta si en alguna oportunidad vio pasar detenidos en tránsito hacia Temuco, ya sea trasladado por personal de ejército, carabineros o la fuerza aérea, a lo que contesta que no, sólo tuvieron detenidos los primeros días después del golpe, los que eran dirigentes políticos y a quienes trasladaron hasta Temuco y al tiempo después volvieron todos, debiendo firmar en la subcomisaria, para lo cual se abrió un libro especial. El Tribunal le pregunta si vio sobrevolar helicópteros en la zona, a lo que responde que vio sobrevolar y aterrizar helicópteros de la fuerza aérea antes y después del 11 de septiembre. Esto ocurría constantemente antes del 11 y esporádicamente después de esta fecha. Salvo en la oportunidad que se llevaron a los detenidos, no recuerda que hayan efectuado aterrizajes después de esta fecha. En todo caso, de haber ocurrido esto le tendrían que haber comunicado este hecho. El Tribunal le pregunta si la

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

subcomisaria de Pucón fue visitada alguna vez por algún oficial de alguna rama de las fuerzas armadas o de carabineros, respecto de lo cual inquiriere que después del once el intendente fue varias veces a visitarlos con motivo de la erupción del volcán. También fueron el coronel San Martín acompañado del coronel Prado. Al coronel Arias nunca lo vio en Pucón. No recuerda quien era el Prefecto de la época, pero por antigüedad debería ser el coronel Prado. El Tribunal le pregunta si existió el SICAR en Pucón y en caso afirmativo, quiénes lo formaban, respecto de lo cual manifiesta que había dos funcionarios en el SICAR de Pucón. Uno, sólo lo veían cuando se iba a pagar y otro quedó trabajando en la aduana. No dependían de su mando, por lo que presume que dependían de Temuco, aunque ignora de qué unidad. Uno era de apellido Moncada y otro de apellido Reyes. Musita que la prefectura de Temuco le pidió que designara a dos funcionarios para ser trasladados, por lo que señaló a estas dos personas por ser los más ineficientes de la unidad, pensando que se desharía de ellos. Sin embargo, volvieron a la unidad con la misión de formar la SICAR. Estas personas andaban de civil y jamás se reportaron con él, por lo que ignora cuales eran sus funciones. Además, nunca llevaron detenidos a la unidad.

En declaración judicial de fecha 02 de julio de 2013, rolante de **fs. 1.235 a fs. 1.236 (Tomo IV)**, explica respecto de la manera en que fueron detenidos los ocho jóvenes que encontraron camino a Caburgua, una vez que les pidió sus cédulas de identidad y que éstos manifestaran que no las portaban, procedió a detenerlos y le ordenó al cabo Monsalve que los llevara al cuartel en la camioneta C-10 en que se movilizaba. El Tribunal le solicita que individualice los carabineros que acompañaron al cabo Monsalve en el traslado de los detenidos hasta la subcomisaria de Pucón, respondiendo que, atendido el tiempo transcurrido, no podría identificarlos, pero en esa oportunidad andaba junto a los carabineros Quezada, Burgos, Vergara, Monsalve y otros dos cuyos nombres no recuerda. Respecto de quién dio la orden de entregar a los detenidos al oficial de la fuerza aérea que llegó en el helicóptero, puede indicar que según lo que le señaló el cabo Bravo en la oportunidad llegó un telefonema procedente de la prefectura de Cautín en que se ordenaba entregar los detenidos al personal de fuerza aérea que los fue a buscar en helicóptero. Según su recuerdo el oficial que retiró los detenidos era el comandante Fernández. Respecto de su consulta, sin bien tiene una declaración extrajudicial, en la que señaló que los detenidos fueron retirados por orden del

subprefecto Arias González, no tiene recuerdo de que esto haya sido así. Menos puede asegurar que el teniente coronel Arias haya ido a Pucón a retirar los detenidos. Proclama que en aquel tiempo el retén Puesco se había recogido hacia la base por las nevazones que ocurrían. Por este motivo había contingente de esa unidad en Pucón, como es el caso del carabinero Arriagada, Burgos y Bravo. Comunica que no hubo más detenidos en Pucón, salvo los presidentes comunales de los partidos políticos, puesto que recibió una orden de la Prefectura de Carabineros de Cautín para que estas personas fueran remitidas con oficio a la Fiscalía Militar de Temuco. Ese mismo día fueron llevados por el civil Carlos Barra Matamala acompañado de carabineros, quien facilitó su camioneta para este fin. Los detenidos regresaron ese mismo día a Pucón. También hubo detenidos por toque de queda, los que eran liberados al día siguiente. Rememora que hubo contingente militar en Pucón, los que se instalaron a las afueras de la ciudad en un recinto de ferrocarriles. Este grupo estaba a cargo de un mayor del regimiento Tucapel, cuyo nombre no recuerda. No supo que los militares hayan dado muerte a alguna persona o que hayan detenido civiles.

En declaración judicial de fecha 16 de diciembre de 2014, rolante de **fs. 2.009 a fs. 2.010 (Tomo VI)**, recalca que detuvo a los jóvenes que sorprendió camino a Caburgua porque le parecieron sospechosos. Que efectivamente los jóvenes no estaban cometiendo ningún delito, pero cuando los vio y les preguntó hacia dónde iban, estos le dijeron que iban a Caburgua, cosa que no era cierta porque notó que ellos venían desde ese lugar. Por esto sospechó que su intención era cruzar la frontera hacia Argentina por Curarrehue. Su propósito era interrogarlos a su regreso a Pucón, pero se los llevaron antes. Relata que andaba en esa patrulla con el cabo Monsalve, que era el chofer, más los cabos Ramón Quezada Reyes, Ramón Rivas Pinilla y el sargento Eduardo Vergara González. En el cuartel estaban Diógenes Bravo y el suboficial Burgos. Este último era del retén Puesco, al igual que Bravo, quien junto a otros funcionarios habrían sido agregados a la unidad base. Seguramente el resto de los carabineros también estaban en la unidad cuando los detenidos llegaron. Soflama que no existía un protocolo establecido para dar cuenta a la superioridad acerca de estas detenciones. Tiene la sospecha que quien avisó a Temuco sobre estas detenciones fue el doctor Pedro Acuña Macuada (fallecido). Esto porque éste era un líder patria y libertad en Pucón. No sabía que fueron los propios carabineros de

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

la subcomisaria quienes avisaron a la prefectura. El Tribunal le lee la declaración de Diógenes Bravo, de fs. 72 vuelta, respecto de lo cual siguiere que el cabo Diógenes Bravo era un excelente funcionario, por lo que no podría señalar que lo que éste dice no es efectivo en el sentido de que en el helicóptero venía el teniente Coronel Gonzalo Arias González. Sin embargo, en el libro de novedades de la unidad no aparece registrada la presencia de este oficial. Solo quedó constancia que, por orden de la Prefectura de Carabineros de Cautín, a través de un telefonema, las personas fueron retiradas por el personal de la fuerza aérea que piloteaba el aparato en el que se los llevó, entre ellos el Comandante Benjamín Fernández.

A.1. Declaraciones contenidas en Cuaderno Secreto, según resolución de fecha 17 de agosto de 2021, rolante a fs. 3.538 (Tomo X).

A.1.1. Manuel Vásquez Chahuán

En diligencia de careo de fecha 30 de mayo de 2017, rolante de **fs. 40 a fs. 41** (Cuaderno secreto), en lo pertinente, no conoce a la persona con quien se le carea. El Tribunal le lee en lo pertinente su declaración de fs. 346 y de fs. 346 vuelta, la que ratifica precisando que estuvo en Panguipulli hasta el 27 de septiembre y luego estuvo con Tifus hasta el 15 de octubre de 1973, por lo que deduce que lo que está señalando la persona con quien se le carea, es falso. El señor Carranza estuvo detenido a partir del 11 de septiembre de 1973 por estar en desacuerdo con la institución. Que también es falso que en el regimiento Tucapel existiera un centro de tortura. Se mantiene en sus dichos.

A.1.2. Manuel Fernández Carranza

En diligencia de careo de fecha 26 de marzo de 2019 rolante de **fs. 97 a fs. 98 (cuaderno secreto)**. No reconoce a la persona que está a su lado. El Tribunal le leyó en lo pertinente de sus declaraciones de fs. 2.764 a fs. 2.765 (Tomo VIII), y de fs. 3.007 a fs. 3.008, a lo que el deponente indico que ratifica sus dichos y expreso que lo declarado por el señor con quien se le carea no es efectivo, nunca estuvo en una sala de torturas, nunca presencio un fusilamiento. Que él estaba en una línea opuesta al régimen militar y fue marginado de todo ese asunto. Se mantiene en sus dichos en el sentido que no participó en ninguna actuación contra los detenidos, ya sea apremios, fusilamientos; nunca estuvo en lugares que se produjeran hechos ilícitos y que ha tomado conocimiento con posterioridad.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

A.1.3. Nelson Enrique Schaaff Mora

En diligencia de careo de fecha 27 de marzo de 2019, rolante a **fs. 100 (cuaderno secreto)**, expresa en lo pertinente que no reconoce a la persona con quien se le carea. Ratifica sus declaraciones y expresa que no es efectivo lo señalado por el señor C., nunca estuvo en la isla recogiendo cadáveres o presenciando el acto. Que no sabe porque este señor dice aquello. El comandante de la compañía de morteros era el capitán Fernández. Que desconoce esa situación y nunca se enteró de aquello. Se mantiene en sus dichos.

A.1.4. Mario Hernán Arias Díaz

En diligencia de careo de fecha 12 de julio de 2019, rolante de **fs. 128 a fs. 129 (cuaderno secreto)**, no reconoce a la persona sentada a su lado, ratifica declaraciones de fs. 3.153 a fs. 3.154 y el Tribunal le pregunta qué tiene que decir respecto de la declaración del señor M.C. El deponente pregunta; de qué escuadra era. Qué especialidad tenía mediante el periodo de instrucción. Y qué se le ordenaba. Anexa que no está de acuerdo con esta persona dice, puesto que la unidad solamente cumplía la guardia. Puntos estratégicos, la compañía no desempeñaba eso, porque los conscriptos tenían que estar en condiciones de hacer la guardia, debían tener tiempo para descansar. El Tribunal le manifiesta que lo relevante del careo es que el señor M.C. dice que “usted” estuvo presente cuando a él le tocó recoger los cuerpos de las personas ejecutadas. El señor Arias responde: eso es total y absolutamente falso. Porque esa actividad la supo después, no desempeñó ninguna, la única misión que tenía era la instrucción de la sección. Luego refiere que lo que él dijo que era falso es que haya ido a recoger cadáveres. El Tribunal le indica que el señor M.C. no dice que “usted recogió, sino que usted estuvo presente”. El señor Arias responde: que eso no es efectivo, se está falseando las cosas. Que recuerde bien el señor M.C. que no estaba ahí. Que, si se le quiere involucrar en una acción determinada, eso es distinto, pero la realidad indica que no estuvo porque no estuvo. Que acaba de interiorizarse que fueron dos veces. Él tiene conocimiento que solo una vez habían ido a recoger personas, no dos. Se mantiene en sus dichos, que no está de acuerdo en lo que éste dice, su juramento no fue ir a matar gente ni recoger gente muerta, su juramento fue defender la patria.

En diligencia de careo con M.J. C. S, rolante de **fs. 196 (Cuaderno secreto)** (cuya copia consta a fs. 206 de Cuaderno secreto) ratifica su declaración

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

de fs. 951 a la que consta en estos autos de fs. 1.461 a fs. 1.462 (Tomo V), insiste que su única función era hacer guardia e instrucción a la sección de telecomunicaciones, por el hecho de tener esa especialidad. Que algo recuerda al conscripto, pero desconoce por qué lo sindicaba como interrogador. Niega haber pertenecido a inteligencia militar. Se mantiene en sus dichos.

En declaración judicial de fecha 12 de julio de 2019, rolante de **fs. 236 a fs. 242 (Cuaderno secreto)**, en lo pertinente el Tribunal le lee declaración extrajudicial de fs. 3.153 a fs. 3.154 (corregida la foliación del proceso las que corresponden fs. 3.187 a fs. 3.188 Tomo IX), ratifica su declaración, preguntado por el Tribunal en cuanto al mando de la compañía de plana mayor y servicios. El deponente dice: que el mando estaba a cargo del capitán Nelson Ubilla Toledo, este era el comandante de la compañía. Inquirido por el Tribunal en que indique cuantas escuadras existían, refiere que si mal no recuerda estaba la sección montada y la de telecomunicaciones. La sección de telecomunicaciones era la que él tenía a su cargo, con treinta conscriptos aproximadamente. Siendo el jefe de la sección y en la otra sección, tenían instrucción las personas de montadas, no recordando a cargo de quien se encontraba. A la pregunta, qué tenientes estaban a cargo de la compañía de plana mayor y servicios del regimiento Tucapel de Temuco, a partir del 11 de septiembre de 1973, con la creación de la sección segunda de inteligencia, en la compañía de plana mayor y servicios. Y quién quedó a cargo luego de que Nelson Ubilla Toledo se fuera a esa sección. Responde que prácticamente la sección segunda en un ochenta por ciento como debería haber sido, la dirigía él, él no abandonó la compañía cuando fue nombrado jefe del departamento segundo; cumplía las dos funciones simultáneamente. Preguntado dice que le seguía en el mando al capitán Nelson Ubilla el sargento Quilodrán, si mal no recuerda, Sigisfredo. Indagado con que otros suboficiales, cabos, sargentos trabajaba. Revela que trabajaba directamente con el sargento Peña, eran los dos que se dedicaban exclusivamente a la parte de instrucción del contingente, porque cómo la organización de la unidad para el 11 de septiembre la hizo un mayor, a cada compañía le dio su misión y la de ellos, la de plana mayor, como ahí estaban los cocineros, los zapateros, los albañiles y todos los servicios, nos dejaron a cargo de la seguridad del cuartel; por lo tanto ellos los integrantes de la compañía, no desempeñaron ninguna labor exterior de ir a tomar detenidos, de ir a buscar, ir a dejar, de ninguna especie. Entonces,

además su responsabilidad en la sección de telecomunicaciones tenía que mantener los equipos de radio y teléfonos que eran los que se tenían a cargo en esa unidad, en condiciones de ser usados en cualquier momento si alguien lo necesitaba. Preguntado si en el caso de Nelson Ubilla; el qué coordinación tenía con otros oficiales del regimiento. A quién le daba cuenta. Con quien se comunicaba, a propósito de que él estaba en esta unidad de inteligencia. Refiere que éste tenía contacto directamente con el comandante de la unidad, directamente, no tenía intermediarios y había personal del departamento segundo del cuadro permanente. Preguntado quiénes estaban en el cuadro permanente. Manifiesta que el sargento Schaaff, el sargento Moreno, que son los que recuerda. Que después hubo un aumento de personal, con personal de investigaciones y de carabineros. De quienes no conoce los nombres, porque “nosotros no interveníamos en nada de eso”. Aclarado en cuanto a cómo sabía que era personal de investigaciones y de carabineros, responde que: porque a él le tocaba a veces dos veces a la semana, a veces una vez a la semana, hacer de comandante de guardia. En el cual se está a la entrada del cuartel, en la guardia, entonces ahí “uno a esas personas al entrar había que registrarlas y ya, al poco andar, los conocíamos; entonces ya ni siquiera les pedíamos identidad”. Consultado si recuerda cuantos detectives era, dice que hubo en una oportunidad dos le parece, después quedó uno, que no está muy seguro. Recordando a uno que le decían “el chico Quiroz”, a quien lo llamaban de esa forma por su estatura, no recordando el nombre de la otra persona, que era alta y fornida. En cuanto a los carabineros dice que eran irregulares, que llegaban a veces en la mañana, salían y no regresaban en todo el día. Preguntado si recuerda cuanto tiempo estuvieron estas personas anexas de detectives y carabineros, refiere que le es difícil recordar. Que probablemente estuvieron hasta el año 1974 el “chico Quiroz” que era el más conocido de ellos. Se le pregunta por una persona de 30 años joven, instruido que hubiera estado detenido en lo que se llamaba la prevención, más de un mes. A finca que no, que detenidos permanente no existían. Que los que llegaban detenidos pasaban directo al departamento segundo y de ahí para la cárcel. Preguntado por el circuito respecto de los detenidos y la fiscalía militar, si pasaban donde Nelson Ubilla, responde que: claro, que llegaban al departamento segundo, ahí se imagina que los interrogaban, les conversarían cual era (...) eso lo desconoce y después llegaban a la guardia y después se irían. Los que no se

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

iban los pasaban a la cárcel. Que en la guardia jamás estuvo una persona detenida por más de un día. Se le pregunta si en el gimnasio y en otro lugar de detención, refiere que no. Consultado donde era el interrogatorio, responde que: en el departamento segundo, una dependencia que quedaba en la comandancia del regimiento. El Tribunal le da a conocer que tiene bastantes antecedentes que indicarían que al interior del regimiento Tucapel de Temuco había varios lugares de detención, incluso había un lugar de tortura, donde había un catre, el gimnasio, se le pregunta que conocimiento tiene de eso. A lo que responde que: esa era una dependencia que había en la compañía de plana mayor y servicios, pero eso lo manejaba exclusivamente el departamento segundo. Preguntado en torno al departamento segundo, qué relación tiene Pedro Tichauer, el suboficial Romilio Lavín, el subteniente Raimundo García con esa unidad. Responde que lo desconoce. Que Tichauer estaba en administración, finanzas, este pertenecía a la compañía, pero a su llegada al cuartel, no recuerda si era soltero o casado, pero si era soltero llegaba a un pieza. Lavín era oficial de material de guerra, tenía su oficina. Se le pregunta si Raimundo García era la compañía de plana mayor. Refiere que le parece que de la segunda compañía cazadores. El Tribunal le da a conocer los hechos de este proceso que dicen relación con ocho jóvenes que fueron detenidos cuando se dirigían camino a Curarrehue con el objeto de intentar cruzar la frontera, para posteriormente ser trasladados hasta la subcomisaria de Pucón y presumiblemente conducidos hasta el regimiento Tucapel de Temuco, lugar donde de acuerdo con los antecedentes del proceso, habrían fallecido. Que en autos se encuentra consignada la declaración de don M.C. S., conscripto de la compañía de plana mayor y servicios, quien reconoce a tres de las víctimas de esta causa porque le tocó recoger los cuerpos de estas personas en el polígono de tiro de la isla cautín y señala que presentes en esa noche habían varios oficiales y conscriptos, entre los cuales estaría el deponente. Por lo que el Tribunal le pregunta ¿Qué puede indicar respecto a aquello? Responde que: “yo” de lo ocurrió en la isla, donde se llevó a cabo, se enteró por los comentarios al día siguiente. No supo si los recogieron, donde los llevaron, no tiene ningún conocimiento. Que esa labor la desarrollarían las compañías que estarían a cargo. El Tribunal le pregunta qué compañía. El testigo responde que: de la compañía de morteros, la segunda de cazadores y la andina. Preguntado de qué forma se enteró, aduce que por comentarios. Que no faltaba quien le digiera, “oye so subí lo

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

que paso anoche ¿Qué pasó? Tal cosa”. En ese sentido, esa forma ellos se informaban, después eso salió en el diario. Que él no sabía lo que había pasado porque no tenían conocimiento de nada. Alude a otros hechos que dicen relación con el “asalto al polvorín”. El Tribunal le pregunta si se enteró de otras muertes, de otros fusilamientos. Responde que había una persona, Espinoza. Se le pregunta ¿El teniente Espinoza? señala: Que, si esa persona ejemplar porque fue bastante especial, que se comentaba que todas las noches salía a fusilar personas, simulaba. Que eso lo supo después, iba a una población y “tiraba tiros al aire entonces las personas creían que ejecutaba, lo que no era efectivo”.

A.1.5. Celedonio Aníbal Aburto Fuentes

En declaración judicial de fecha 02 de julio de 2019, rolante **de fs. 125 a fs. 126 (Cuaderno Secreto)**, ratifico su declaración extrajudicial, rolante de fs. 3.150 a 3.150 bis. Exclama que para el año 11 de septiembre de 1973 se encontraba prestando funciones como soldado conscripto en la **compañía de plana mayor y servicios** del regimiento Tucapel de Temuco. Sus funciones consistían en realizar guardia tanto dentro del regimiento, como efectuar labores de patrullaje principalmente en los bancos y agua potable. En muchas ocasiones realizó puntos fijos en la base aérea de Maquehue. Efectivamente, como señaló en su declaración policial, existieron a contar del 11 de septiembre de 1973 personas detenidas por motivos políticos al interior del regimiento Tucapel de Temuco. Las salas de torturas quedaban ubicadas en la compañía de cazadores, para el lado norte, casi orillando la muralla de cemento, lugar donde habría como una caseta (que antes era un tipo de bodega), recinto en que los detectives agregados al regimiento junto a sus instructores Peña, Arias y el suboficial mayor Quilodrán castigaban a los detenidos. También existía una sala de interrogatorios al interior de la compañía de plana mayor y servicios, donde también ingresaban los funcionarios antes mencionados. Las ordenes de interrogar a los detenidos, mediante la aplicación de corriente eléctrica (máquina de pila), provenían del teniente Manuel Espinoza, Manuel Vásquez Chahuán, Sargento Mario Hernán Arias Díaz y Hernán Peña Andaur y los detectives, cuyas identidades no recuerda. Todas estas acciones provenían a su vez del comandante del ejército, coronel del regimiento, Manuel Iturriaga Marchesse. Lo anterior lo sabe, porque era un hecho de público conocimiento. El Tribunal le lee en lo pertinente la declaración del señor M.C.S. de fs. 2.309, 2.638 y fs. 3.109 a lo que el deponente señala que es posible

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

que lo narrado por este señor haya sucedido. El deponente pudo haber estado presente esa noche, pero no cargó los cuerpos. Ellos eran mandados y no podían decir nada porque si no los castigaban. Explana que jamás van a encontrar a esos muertos, porque si están en la tierra se carcomieron y si están en el agua, también porque el agua incluso carcome la roca. Han pasado más de cuarenta años, ahora es tarde, no van a encontrar nada. Recuerda que el conscripto M.C. prestaba funciones en la compañía de plana mayor y servicios igual que él. Los nombres de Ambrosio Badilla Vasey, Santiago Faúndez Bustos y Victoriano Fernández Coloma, según se le indica en este acto, no le son conocidos. Ellos no tenían contacto con los detenidos políticos. Aunque vio muchos detenidos botados en plena noche, en el patio cubierto principal del regimiento, quienes pasaban la noche en esas condiciones. En una oportunidad y alrededor de las 9 am, en momentos en que se encontraba descansando en el patio del Regimiento ayudó a una señorita de alrededor de 16 años, ojos verdes, a quien le habían aplicado corriente en la sala de plana mayor y servicios; llegó tiritando y le convidó un café.

En diligencia de careo de fecha 19 de julio de 2019, rolante de **fs. 130 a fs. 131 (Cuaderno Secreto)**, con M.C.S., reconoce a la persona que está sentada a su lado, es don M.C., su compañero en la compañía de plana mayor y servicios, sección segunda del regimiento Tucapel de Temuco. El Tribunal le lee en lo pertinente sus declaraciones de fs. 3.150 a 3.150 bis y de fs. 3.209 a 3.210 a lo que el deponente señala que ratifica aquellas declaraciones que en este acto le han sido leídas. Se enteró que personas fueron ejecutadas en el regimiento, pero no tuvo conocimiento quien cargo sus cuerpos. Se mantiene en sus dichos y declaraciones

En declaración judicial de fecha 13 de febrero de 2020, rolante de **fs. 172 (Cuaderno Secreto)**, reafirma aquella parte de su declaración de fs. 3.209 en la que señala que lo manifestado por el señor M.C. es perfectamente posible. Éste está diciendo la verdad. Si bien el deponente no estuvo en el polígono de tiro de la isla Cautín la noche en que estuvo el señor M.C., el comentario al interior del regimiento, tras esos hechos, era lo mismo que el señor C., ha venido a narrar al Tribunal.

A.1.6. Norberto Francisco Uribe Moroni

En diligencia de careo de fecha 5 de abril de 2011 rolante de **fs. 207 (cuaderno secreto)**, barbullo que en aquella época era normal oír balazos detrás

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

del regimiento, ya que en la noche se hacía instrucciones al menos hasta el 11 de septiembre. Después de esa fecha con su compañía concurrían a hacer instrucción, pero de día, después de esa época nunca más hicieron instrucción nocturna en la isla Cautín. Afirmo que no es efectiva la imputación que se le formulo en ese acto, jamás le tocó integrar una misión como la que se le indica.

A.1.7. Pablo Domingo Gran López

En diligencia de careo de fecha 5 de abril de 2011, rolante de **fs. 208 (cuaderno secreto)**, ratifica declaraciones que se le leen e insiste que no ha participado en los hechos que indica la persona con la cual se le carea. Y respecto del interrogatorio de detenidos, no ha participado en ese hecho, porque él no vio detenidos en el interior del regimiento, cuando volvió a fines de noviembre, ni tampoco los vio en diciembre. Se mantiene en sus dichos.

A.1.8. Declaraciones de testigo protegido M.J.C.S.

En declaración extrajudicial de fecha 08 de mayo de 2009, rolante a **fs. 187 a fs. 189 (Cuaderno Secreto)** (cuya copia consta de fs. 200 a fs. 202 Cuaderno Secreto) interpreta que para el año 1973, tenía 19 años y a contar del mes de abril de ese año ingresó a efectuar su servicio militar obligatorio en el regimiento de Infantería N° 8 Tucapel, el cual finalizó el año 1975; no precisa fecha exacta. Manifiesta que efectivamente durante su permanencia en ese destacamento militar, estuvo inserto dentro de la **compañía de plana mayor y servicios**, cuyo comandante era el capitán Nelson Ubilla Toledo, quien según su recuerdo era el oficial encargado de las investigaciones de los presos políticos que se encontraban en el regimiento. Dentro de la compañía, se encontraba dentro de la segunda sección de ingenieros y telecomunicaciones, recordando al teniente Romilio Lavín Muñoz, como el oficial a cargo de esta sección. Musita que pudo ver detenidos políticos dentro del regimiento Tucapel, dentro de ellos una mujer joven, que era estudiante y venía al parecer de la ciudad de La Serena, recuerda que le imputaban el ser un tal "Kika", que finalmente no resultó ser ella, esta mujer recibió los más crueles tratos por parte del personal que trabajaba con los detenidos. Ahora bien, puede decir que estos prisioneros eran rapados tanto en su cabellera como de sus barbas en el caso de los varones, generalmente se les cubría la vista con vendas de color negro y rojo y eran mantenidos, por ejemplo, en la sala contigua a la guardia, llamada "sala de visita de conscriptos", "en el gimnasio chico" que era una bodega donde se almacenaba pertrechos, "una dependencia

ubicada al lado de los baños de la compañía de plana mayor y servicios. Respecto de las fotografías que le son exhibidas y que corresponden a las personas que fallecieron la noche del 10 de noviembre del año 1973 en lo que se denominó “El asalto del polvorín”, narra que puede reconocer como prisioneros del Tucapel a dos de ellos cuyas identidades se le indican como Juan Antonio Chávez Rivas y Florentino Molina Ruíz; este último a quien le faltaba un brazo. Puntualiza que por lo general la compañía de plana mayor y servicios a la cual pertenecía, efectuaba los servicios de guardia tanto de la unidad como las guardias perimetrales; esto incluía la “guardia del polvorín de la isla cautín”. Por otra parte, la compañía andina, la de cazadores y la de morteros pasaban generalmente fuera del regimiento, también ubicando gente que era detenida y traída al cuartel. En relación con los hechos ocurridos la noche del 10 de noviembre de 1973, sobre los cuales se le consulta, proclama que, aunque no precisa la fecha, sí puede indicar que una noche de ese mes, mientras se encontraba intentando dormir al interior de la cuadra de su compañía, escuchó bastantes ruidos de disparos provenientes de la isla Cautín, a lo cual no tomó mayormente en cuenta. Al día siguiente, en la formación de la compañía les informaron que la noche anterior un grupo de extremistas había intentado atacar el polvorín, pero habían sido aniquilados por completos por lo centinelas. Propone que efectivamente esa noche en ese lugar estaba de turno el conscripto Ernesto García Isla, pero no recuerda con quien, debió haber sido alguien de su compañía. Que nunca creyó en esta versión que les dieron de los hechos aquella mañana, siempre pensó desde un principio que aquella era tan solo una matanza de detenidos del mismo regimiento, porque resulta imposible pensar que por aquella fecha un grupo no superior a las veinte personas iban a intentar atacar el regimiento, con la cantidad de efectivos y armamentos que allí existían. Relata que recuerda como soldado clase de su sección al sargento Mario Arias Díaz, a quien apodaban “El Huracán”, hombre de características muy violentas con ellos; quien constantemente los amenazaba de que no podían hablar nada de lo que allí vieran, de lo contrario pagarían con sus vidas. También rememora al otro sargento de nombre Luís Peña Andaur. Soflama que efectivamente existía un grupo operativo a cargo de los detenidos, a quienes interrogaban, este grupo estaba compuesto principalmente por oficiales y suboficiales, entre los que puede mencionar al capitán Manuel Fernández Carranza, al teniente Manuel Vásquez Chahuán, el teniente Manuel Espinoza

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Ponce, el teniente Nolberto Oribe Moroni, el teniente Pablo Gran López, el sargento Mario Arias Díaz, entre otros. Señala también, que este grupo era apoyado por efectivos de la policía de investigaciones, quienes también operaban en el mismo regimiento. Debe mencionar que esta matanza no fue la única ocurrida al interior del regimiento Tucapel, puesto que a ellos se les obligaba, casi todas las noches a cargar camiones con cuerpos de víctimas o ejecutados políticos, los que por lo general eran trasladados hasta el puente Allipen, donde finalmente eran arrojados al río.

En declaración judicial de fecha 23 de junio de 2009, rolante de **fs. 190 a fs. 192 (Cuaderno Secreto)** (copia de lo cual se encuentra de fs. 203 a 205 Cuaderno Secreto), ratifica su declaración extrajudicial, debiendo aclarar aquella parte en la que señala que casi todas las noches le correspondió cargar camiones con cuerpos de personas fallecidas. En realidad, esta actividad la realizó en dos oportunidades, aunque sabe que hubo más muertos, por los comentarios que se hacían al interior de la compañía por parte de los otros conscriptos. La mayoría de estos cuerpos provenían de la isla Cautín. Recuerda haber recibido órdenes en dos oportunidades de subirse a un camión junto con otros conscriptos, para dirigirse a la isla Cautín. Al llegar a ese lugar, ya de noche en ambas ocasiones, tuvieron que subir diez cuerpos al camión; en la segunda oportunidad subieron ocho. En todos los casos los cuerpos fueron llevados al puente Allipen, donde fueron arrojados al río. Recuerda que en una de las oportunidades iba al mando de este operativo el teniente Espinoza. En la otra oportunidad le parece que iban bajo las órdenes del teniente Uribe o del teniente Gran. También rememora al sargento segundo Mario Arias Díaz. Suma que los camiones eran conducidos por lo general, por personal de mantenimiento. Respecto de los conscriptos que integraban aquellas misiones recuerda haber concurrido al menos en una de ellas junto a José Cortés, que era de Pucón o Villarrica; José Chávez Etchepare, que era de Temuco; Óscar Muñoz Venegas, que era de Galpones; Jaime Retamal Molina, (fallecido), y Luis Ángel Valeria Candía, que era de Cunco. Rememora que existía un grupo de conscriptos que a veces salía vestido de civil a efectuar pesquisas. Este grupo era seleccionado de entre los conscriptos que habían ingresado en enero, aunque también salían algunos de la promoción de abril. Sustenta que las personas muertas que le correspondió subir a los camiones eran todos varones, quienes presentaban varios impactos de bala, las manos

amarradas con cáñamo o alambre y estaban con su vista vendada. Estos cuerpos estaban todos en el sector del polígono de tiro. Antes y después de efectuar las misiones les advertían de guardar silencio respecto de lo que habían visto. Urde que al día siguiente de ocurrido “el asalto al polvorín” los formaron en el patio principal, como de costumbre y cuando regresaron a la cuadra de su compañía el cabo segundo Marcos Bravo Bravo les dio la noticia de lo ocurrido la noche anterior. No recuerda que en el patio principal se hubiera dicho algo referente a este hecho. Respecto de los oficiales encargados de interrogar a los detenidos recuerda a Manuel Vásquez Chahuán, Nolberto Uribe Moroni, Pablo Gran López, Manuel Fernández Carranza y Manuel Espinoza Ponce. También cumplía esta función el suboficial Moreno Vásquez, quien estaba a cargo de una comisión civil y el sargento Mario Arias Díaz. Era de público conocimiento que estos oficiales trataban con detenidos y los interrogaban.

En diligencia de careo de fecha 26 de marzo de 2010, rolante a **fs. 196 (Cuaderno Secreto)** (copia de lo cual se encuentra a fs. 206 Cuaderno Secreto), ratifica sus declaraciones extrajudicial y judicial prestadas en autos con excepción de aquella parte en la que señaló que le correspondió ir a la isla Cautín en dos oportunidades a cargar un camión con ejecutados políticos. La verdad es que sólo fue en una oportunidad y no recuerda quién era el oficial al mando. Tampoco recuerda que el sargento Mario Arias Díaz, presente, tuviera participación en esas actividades. Ratifica eso sí, aquella parte en que señaló que el sargento Arias participaba en los interrogatorios de detenidos políticos. El sargento Arias pertenecía al grupo de inteligencia y se relacionaba con el suboficial Moreno Vásquez y con efectivos de investigaciones. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo de fecha 05 de abril de 2011, rolante a **fs. 207 (Cuaderno Secreto)**, ratifica la declaración y glosa que efectivamente en una de las misiones que hace referencia iba a cargo del teniente Uribe. A la época en que ocurrieron los hechos estaba asignado a la **compañía de plana mayor y servicios**, la que estaba a cargo del teniente Rubio Balladares que reemplazaba al capitán Nelson Ubilla Toledo. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo de fecha 05 de abril de 2011, rolante a **fs. 208 (Cuaderno Secreto)**, ratifica la declaración y ensaya que efectivamente el teniente a la época de los acontecimientos de apellido Gran participó en los hechos que se le acaban de leer. Esgrime que no recuerda la fecha exacta de

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

ocurrencia de los hechos a que se ha referido. Desde abril de 1973 hasta principio del año 1976 realizó su servicio militar obligatorio. El interrogatorio a que hace referencia se llevaba a cabo en dependencia de los comedores de los soldados, que estaba ubicada al centro del regimiento.

En declaración extrajudicial de fecha 01 de septiembre de 2015, rolante de **fs. 3 a fs. 4 (Cuaderno Secreto)**, reafirma que era conscripto de la compañía de plana mayor y servicios del regimiento Tucapel de Temuco, perteneciendo a la sección de telecomunicaciones, la que estaba a cargo del sargento Mario Hernán Arias Díaz. Que es efectivo que a los días posteriores al golpe de Estado le correspondió cargar cuerpos de fallecidos en camiones militares en el polígono de tiro de la isla Cautín, recordando que en la primera oportunidad en que fue hasta dicho lugar fue por orden del teniente Manuel Espinoza Ponce, quien era oficial de la segunda compañía de cazadores. Conforme a su recuerdo en esa oportunidad fue al polígono de tiro junto a un grupo de conscriptos de su compañía, dentro de los que recuerda a Jaime Retamal Molina, Juan Salazar Cereceda. También en ese lugar estaban presentes el sargento Arias Díaz y un cabo de la compañía de morteros de apellido Schaaff y un grupo de cuatro conscriptos de la compañía de cazadores, cuyas identidades no recuerda, de quienes se sabía que eran los de confianza de Espinoza. Que también, concurrieron a dicho lugar los soldados Valeria Candía y Chávez Etchepare, quienes siempre andaban con el sargento Arias. Aparte del teniente Espinoza en dicho lugar también estaba presente el teniente Manuel Vásquez Chahuán, quien también pertenecía a la segunda compañía de cazadores. Hace presente, que en dos oportunidades le correspondió cargar el camión militar con personas fallecidas, en la primera de ellas recuerda que eran diez cuerpos, todos de sexo masculino, cuyas edades fluctuaban entre los 25 a 30 años, no puede precisarlo. En la segunda oportunidad, no tiene claro si fue al día siguiente o a los dos días del primer hecho, cargaron ocho cuerpos más, también de sexo masculino, pero en esta ocasión eran más jóvenes que en el caso anterior. En ambas oportunidades el camión salió en dirección al puente Allipen, conforme a lo que se comentaba en ese momento, quedando el deponente junto a los conscriptos de su compañía en el regimiento y el personal antes mencionado de la segunda de cazadores, se hizo cargo del traslado de los cadáveres hasta el mencionado río. Barbulla que todos los cuerpos presentaban múltiples impactos de bala, incluso alguno de ellos

presentaba un impacto en la cabeza, agregando que casi todos tenían sus manos amarradas y a rostro descubierto. Respecto a las fotografías que en el acto se le exhiben y cuyas identidades se le dan a conocer, como Héctor Aguayo Olavarría y los hermanos Elías y Hugo Gonzalez Ortega, comenta que recuerda los rostros de los hermanos antes mencionados, ya que conforme a lo recordado vio que los estaban torturando en una sala ubicada al interior de su compañía, donde estaban presentes los oficiales Vásquez Chahuán y Fernández Carranza, junto a un grupo de detectives. Hace referencia a esta situación, ya que parte de los detenidos eran llevados a esa "Sala de tortura", ante la vista de todos los que se encontraban en la compañía. De acuerdo con lo anterior, decanta que de los cuerpos que recogió en el polígono de tiro, recuerda al de identidad Elías Gonzalez Ortega, en cuya fotografía lo reconoce. Delibera que no solamente fue el camión hasta el puente Allipen, sino también un par de vehículos menores, donde se movilizaba el personal de planta y confirmó que el puente Allipen fue el destino final de esos cuerpos, donde eran lanzados a sus aguas, ya que el conscripto Valeria, jactándose de ese hecho les comentó la situación. Que probablemente participaron en esa diligencia otros funcionarios de planta, pero no recuerda sus identidades, como tampoco las de los conscriptos de Espinoza, quienes se denominaban la "Patrulla Chacal".

En declaración judicial de fecha 30 de mayo de 2017, rolante de **fs. 35 a fs. 38 (Cuaderno Secreto)**, ratifico su declaración extrajudicial y desarrolla que respecto de la vestimenta de los primeros diez cuerpos que le toco cargar, puede señalar que en ese tiempo era muy difícil grabarse el rostro de las personas, porque en ese tiempo a las personas detenidas las rasuraban. Descarga que todos los cuerpos tenían los brazos amarrados. El destino final era lanzarlos al rio, entonces si alguno estaba moribundo no iba a poder sobrevivir. Que quien daba las órdenes directas de estas ejecuciones era Alfonso Podlech, se comentaba. El levantamiento de los diez y ocho cuerpos fue en días posteriores al 11 de septiembre de 1973. En los hechos descritos precedentemente estaba presente Manuel Vásquez Chahuán. Los oficiales que estaban involucrados eran Espinoza, Vásquez Chahuán, Fernández Carranza. Detalla que cuando retiró los ocho cuerpos, estaba de noche y con la luz de los vehículos pudo observar que eran personas jóvenes. Sabe que el primer grupo de cuerpos que recogió eran diez porque los iba tirando de a uno al camión (como sacos de papas). Sabe que el

segundo grupo eran ocho, pues al igual que en el caso anterior, los iba contando. Distingue que la sala donde vio que estaban torturando a Héctor Aguayo Olavarría y a los hermanos Elías y Hugo Gonzalez Ortega estaba ubicada en el perímetro de la plana mayor. En esa oportunidad estaban presentes los oficiales Vásquez Chahuán y Fernández Carranza. Que veía a la gente cuando los llevaban vendados, ya que estaba a diez metros aproximadamente de la sala de tortura mencionada precedentemente. Se escuchaban los gritos de las personas. Vio que a los detenidos le ponían bolsas de nylon, le aplicaban corriente. Ellos por su parte, veían los implementos que utilizaban. Para los torturadores eso era tan normal, ni se preocupaban de disimular tal situación. Ensaya que el comandante de plana mayor era el capitán Nelson Ubilla Toledo. Luego seguía el teniente Romilio Lavín Muñoz. Luego los sargentos y suboficiales, suboficial mayor Quilodrán. Toda la compañía sabía que había esa sala de torturas. La compañía de morteros también sabía. No sabe si otras compañías. Esgrime que ellos escuchaban los gritos de dolor. Para él, toda la oficialidad sabía de esto, se divertían realizando este tipo de hechos. Reiterando que la oficialidad sabía que existía. Puede decir también que esta sala se hizo chica, porque incluso posteriormente se implementó otra, que era donde se guardaban los pertrechos militares (otra más grade). El deponente realiza un croquis de la ubicación de la sala de torturas ubicada al interior del regimiento Tucapel de Temuco, en la compañía de plana mayor y servicios. El Tribunal ordena agregarlo a la causa. Posteriormente escruta que a la sala de torturas llevaban mujeres. Incluso a una mujer la trastornaron, era una chica de la Serena, buscaban a una tal "Quica", y la confundieron con ella. Respecto a la persona que en este acto se le pregunta, quien habría estado detenido en la sala de prevención, no tiene conocimiento. Pero puede señalar que también a los soldados los castigaban por cualquier falta que según los superiores eran faltas gravísimas. Eran azotados a regimiento formado. Era para escarmiento del resto. Estima que cuando declaró en la causa del "Polvorín" recibió amenazas de familiares de las personas que había nombrado. Le decían "mira tal por cual, tienes que retirar lo que dijiste en contra de mi pariente". Evidencia que luego de producido el golpe militar no sabría responder que militares fueron a Santiago. Expresa que declaró en la causa del Polvorín. El caso es que esa noche estaban libres. No fue un asalto del Polvorín, eso fue una matanza. Él estaba acostado. El Tribunal le exhibe las fotografías de

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Héctor Aguayo Olavarría, Elías y Hugo, ambos de apellidos González Ortega, que rolan de fs. 2.317 a fs. 2.319 a lo que el deponente declara reconocer a aquellas personas, como aquellas tres de las ocho que levantó ese día. Explicita que cuando recogió los ocho cuerpos, que fue en una fecha posterior al 13 o 14 de septiembre de 1973, pero de todas maneras durante septiembre de aquel año. Lo que está relatando al Tribunal es un hecho emocionalmente difícil para él. Le ha traído consecuencias familiares y psíquicas, al tal punto que ha estado con depresión por este hecho. Sus relaciones familiares han sido difíciles, se irrita con facilidad.

En diligencia de careo de fecha 30 de mayo de 2017, rolante de **fs. 40 a fs. 41 (Cuaderno Secreto)**, exclama que conoce la persona que está sentada a su lado, es Manuel Vásquez Chahuán, quien para 1973 era teniente de la compañía de cazadores del regimiento Tucapel de Temuco. El Tribunal le lee, en lo pertinente, su declaración de fs. 2.309 a fs. 2.310 (correspondiente a su declaración de fs. 3 a 4 del Cuaderno Secreto), lo que el deponente ratifica. Explana que para todos los que eran oficiales en ese entonces es fácil desmentir lo que él pueda decir. El señor Manuel Fernández Carranza estaba en el regimiento ejerciendo sus funciones en la compañía de morteros, durante varios días posteriores al 11 de septiembre y luego no lo vio más, porque el teniente Alejandro Rubio Valladares pasó a hacerse cargo de la compañía. Se mantiene en sus dichos.

En declaración judicial de fecha 26 de marzo de 2019, rolante de **fs. 93 a fs. 95 (Cuaderno Secreto)**, el Tribunal le lee lo pertinente de sus declaraciones de fs. 2.309 y siguiente y de fs. 2.638 y le consulta: ¿Qué víctimas de la presente causa, cuyas fotografías se le exhiben de fs. 2.317 a 2.319, habrían estado torturando al interior de la sala de tortura ubicada en la compañía de plana mayor y servicios del regimiento Tucapel de Temuco con fecha posterior al 11 de septiembre de 1973 y dentro de ese mismo mes? A lo que el deponente expresa que reconoce a Héctor Aguayo Olavarría y a los hermanos Elías y Hugo González Ortega, cuyas fotografías se le exhiben, a quienes los estaban torturando al interior de la mencionada sala. Respecto a lo que se le consulta en relación con cuándo estaban torturando a estos jóvenes de nombre Héctor Aguayo Olavarría y a los hermanos Elías y Hugo González Ortega, indica que fue aproximadamente un día antes de recoger sus cuerpos e ingresarlos al camión. De los ocho cuerpos

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

que refiere haber recogido desde el polígono de tiro y cargado en un camión ¿Qué víctimas recuerda de las fotografías exhibidas en el párrafo precedente? Respondiendo el deponente que reconoce a esos tres jóvenes, dentro de los ocho que cargó. Precisa además que presenció como tres personas que murieron al interior de la misma sala de torturas ubicada en la compañía de plana mayor y servicios al interior del regimiento Tucapel de Temuco con fecha posterior al 11 de septiembre de 1973 dentro del mismo mes. Recuerda que estas personas eran de sexo masculino, de alrededor de treinta años y le aplicaron corriente en sus cuerpos y de tanta electricidad fallecieron. Además, recuerda que su habitación estaba a unos metros de esta sala, razón por la cual pudo observar cuando sacaron estos cuerpos. Además, realizaba servicios de guardia. Explaya que efectivamente las personas que ingresaban a esa sala estaban cubiertas con capucha. Respecto a estos tres jóvenes, los pudo reconocer siendo torturados, porque al entrar lo hacían vendados, pero al salir no. En cuanto a qué otro compañero de guardia estaba en la misma posición suya, rememora a Jaime Retamal, Juan Salazar. Se le pregunta si al momento de cargar los cuerpos ¿era muy fácil identificar que eran jóvenes? A lo que el deponente expresa que para él no fue difícil reconocer que aquellas personas eran jóvenes. Tiene conocimiento que otras personas también vivieron situaciones similares. Se le pregunta por otros hechos. Anexa que como integrantes de la compañía de plana mayor y servicios recuerda a Quilodrán, sargento primero Silva, Mario Arias Díaz, sargento Peña, cabo Krause, Pablo Silva y el teniente Romilio Lavín Muñoz. Expone al Tribunal que efectivamente sabe de otra persona que estaba presente la noche en que cargó los ocho cuerpos y pudo observar todo el procedimiento que ha narrado. Su nombre es Celedonio Aburto. Revisada por el Tribunal la nómina de conscriptos de la compañía de plana mayor y servicios del regimiento Tucapel de Temuco para la fecha de los hechos investigados se encontró al conscripto Celedonio Aníbal Aburto Fuentes. El deponente indica que la persona que menciona en el párrafo precedente se trata de aquel.

En diligencia de careo de fecha 26 de marzo de 2019, rolante a **fs. 100 (Cuaderno Secreto)**, reconoce a la persona a su lado, el cabo Schaaff, era de la compañía de morteros. El Tribunal le lee lo pertinente sus declaraciones de fs. 2.309 y siguiente, de fs. 2.638 y siguiente y de fs. 3.005, a lo que el deponente indica que ratifica aquellas declaraciones. Que estos mandaban no más. Es la

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

palabra de él contra la suya. Explica que lo vio en la isla. Ahora todos los involucrados lo niegan. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo de fecha 12 de julio de 2019, rolante de **fs. 128 a fs. 129 (Cuaderno Secreto)**, el Tribunal le pregunta si ¿reconoce a la persona que está en la pantalla? A lo que el deponente expresa sí. El Tribunal le consulta ¿Quién es?, respondiendo el deponente que es don Mario Hernán Arias Díaz. En ese entonces era sargento segundo. El Tribunal le lee lo pertinente de sus declaraciones, las cuales se encuentran a fs. 2.309 y siguientes, de fecha 01 de septiembre de 2015; de fs. 2.638 a 2.641, de fecha 30 de mayo de 2017; y de fs. 3.109 a 3.111, de fecha 26 de marzo de 2019; y le consulta si ratifica aquellas declaraciones, a lo que responde que totalmente. Posteriormente, Arias pregunta ¿de qué escuadra era?, a lo que el deponente responde que era de la sección de telecomunicaciones, segunda escuadra. Arias pregunta ¿Qué especialidad tenía mediante el periodo de instrucción? Respondiendo el testigo que la especialidad, telecomunicaciones. Las instrucciones específicas, normalmente ninguna responsabilidad, soldado y obedecer a lo que se les ordenaba. Arias consulta ¿Y qué se le ordenaba? contestando el deponente que muchas cosas...Si él sabe. El Tribunal le pide enumerarlas. Por lo que justifica que dentro del regimiento hacían guardia por lo general, en las noches hacían imaginaria, cosas así. De repente salían a patrullajes y puntos fijos a puntos estratégicos. Habla que anteriormente no era como Arias menciona, después se ordenó eso, la compañía del deponente hacia solamente guardia. Pero anterior a eso están expuestos a cualquier otro tipo de ordenanzas. Indica que efectivamente el señor Arias era sargento instructor. El Tribunal le dice ¿pero el señor Arias indica que todo lo que usted narra es falso? A lo que responde que todos dicen que es falso. Invoca que lo único que puede añadir es que todas estas personas que están involucradas en estos hechos niegan rotundamente, porque no sabe qué acuerdo tendrán, o el hecho de haber jurado, juramentado. Se me mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo de fecha 19 de julio de 2019, rolante de **fs. 130 a fs. 131 (Cuaderno Secreto)**, reconoce a la persona que está sentado a su lado. Es Celedonio Aburto, exsoldado conscripto de su compañía, la plana mayor y servicios, segunda sección del regimiento Tucapel de Temuco. El Tribunal le lee en lo pertinente sus declaraciones de fs. 2.309 a 2.310, de fs. 2.638 a 2.640 y de fs. 3.109 a 3.111, a lo que el deponente señala que ratifica aquellas declaraciones,

haciendo presente que no quiso involucrar al señor Celedonio Aburto, sino que quiso manifestar que él puede aportar antecedentes en esta causa, pero él no estuvo en el momento en que el deponente recogió los cuerpos. Entre las personas que estuvieron presentes y que podrían haber aportado antecedentes están Juan Salazar y Jaime Retamal, quienes están muertos. Se me mantiene en sus dichos.

En declaración judicial de fecha 27 de noviembre de 2019, rolante a **fs. 157 (Cuaderno Secreto)**, inquiriere que ha comparecido voluntariamente, a efectos de precisar aquella parte de su declaración de fs. 3.109, en donde dice que la noche en que cargó ocho cuerpos de personas fallecidas, desde el polígono de tiro de la isla Cautín, se encontraba presente Celedonio Aburto. Quiso decir que el señor Celedonio Aburto pudo haberlo visto cuando un guardia lo fue a buscar al regimiento para ser llevado al polígono de tiro de la isla cautín, lugar donde levantó los cuerpos.

En declaración judicial de fecha 16 de agosto de 2021, rolante de **fs. 193 a fs. 195 (Cuaderno Secreto)**, ratifica la declaración e indica que efectivamente la primera oportunidad de la orden de concurrir al lugar fue dada por Manuel Espinoza Ponce y los conscriptos Retamal Molina, Salazar Cereceda, el cabo Schaaff, los conscriptos que eran del grupo de Espinoza; además, los soldados Valeria Candía y Chávez Etchepare, estaban en ese lugar. También en esta primera oportunidad estaba el sargento Arias y el teniente Manuel Vázquez Chahuán. Todo esto fue hacia fines de septiembre y principios de octubre de 1973. Respecto a la segunda oportunidad en que le tocó cargar ocho cuerpos, no estaba presente el sargento Arias. Ratifica la declaración que rola a fs. 2.638 y siguientes, que le ha sido leída, reconociendo la firma estampada en ella. Precisa que fueron dos veces en que le correspondió cargar cuerpos, la primera vez estaba saliendo del rancho, era tarde de noche, tiene que haber sido como a las 22:00 o 22:30. Se quedaban viendo tele en el casino. Recuerda que salió del rancho junto a otro conscripto y "los pilla en el patio Chávez Etchepare y les dice oye en un rato más vayan a la guardia", así que en una hora más se presentó en la guardia y allí estaba Chávez, quien les dice que ahora tienen que dirigirse a la isla, al polígono. Se fueron caminando y cuando llegaron se encontraron con un grupo de personas, entre ellos los conscriptos Retamal Molina, Salazar Cereceda, el Cabo Schafk; los conscriptos que eran del grupo de Espinoza; además los

soldados Valeria Candía y Chaves Etchepare, estaban en ese lugar. También en esta primera oportunidad estaba el sargento Arias y el teniente Manuel Vázquez Chahuán. Pudo distinguir a estas personas por las luces de los vehículos que los alumbraban. Había un camión y vehículos chicos, unos Toyota. Cargaron los cuerpos y después se fue a acostar, no contándole esta situación a ninguno de sus compañeros, por temor a ser sancionado. Luego, hubo una segunda oportunidad que también le tocó cargar ocho cuerpos a un camión. Ese día también era de noche, estaba haciendo la “imaginaria”, que consistía en el cuidado de la compañía, que no llegara gente extraña, era una guardia. Estaba en esa función y llega el mismo Chávez Etchepare que casualmente también estaba de servicio en la guardia. Le dice “C., vas a tener que acercarte a la guardia nuevamente”. Al preguntarle para qué, le dice “anda no más”. Entonces, una hora más tarde va a la guardia, tiene que haber sido como a las 23:00 h., y en ese lugar había un conscripto, Muñoz Venegas. Chávez les da la orden de irse al polígono, así que fueron los dos con Muñoz y un soldado de guardia hasta ese lugar. Al llegar, vieron varios cuerpos amontonados, uno sobre otro, con las manos amarradas, algunas atrás y otras adelante. A los cuerpos les habían rasurado la cabeza y con la barba cortada. En el lugar había un camión y dos o tres vehículos chicos. Con las luces de los vehículos pudieron observar lo que había, quienes estaban y lo que iban a hacer. En esta segunda oportunidad estaba el teniente Espinoza Ponce junto a su grupo de soldados que eran de confianza, denominado “patrulla chacal”. No vio a más oficiales en ese lugar. Por otra parte, acota que pertenecía a la sección telecomunicaciones, pero igual los mandaban a hacer “imaginarias” u otras funciones de vigilancia, no eran excluyentes. Ratifica la declaración que rola a fs. 3.109 y siguientes y 3.341. Hace presente lo declarado a fs. 3.341 sobre Celedonio Aburto. El Tribunal le lee la declaración que rola a fs. 3.461 de la causa rol 113.089 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, respecto de lo cual el deponente ratifica la declaración, precisa que, en la segunda oportunidad, no tiene claro qué otros oficiales estaban en el lugar, sólo vio a Espinoza. Asimismo, respecto a los conscriptos recuerda que estaban los de confianza de Espinoza, los denominado “patrulla chacal”, además del conscripto Muñoz Venegas. Aduce que, en este grupo de Espinoza, la “patrulla chacal” siempre andaban como tres o cuatro conscriptos, pero no recuerda sus nombres. El Tribunal le lee la declaración que rola a fs. 1.075 de la causa rol 113.089 del

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Primer Juzgado del Crimen de Temuco. Respecto de lo cual reitera sus declaraciones en cuanto a que fue dos veces a la isla Cautín a cargar cuerpos y subirlos a un camión. Advierte que en el caso del sargento Mario Arias recuerda que él estuvo en la primera oportunidad cuando se cargaron diez cuerpos, pero no estuvo en la segunda cuando se cargaron ocho cuerpos. El Tribunal le consulta respecto a la línea de mando de la compañía de plana mayor y servicios del regimiento Tucapel de Temuco para septiembre de 1973, señalando el deponente que habría estado conformada de la siguiente manera: comandante de la compañía, Nelson Ubilla Toledo; subteniente Raimundo García Covarrubias; subteniente, Romilio Lavín. Adosa que Nelson Ubilla se hizo cargo de inteligencia, pero no dejó sus labores como comandante de la compañía. No recuerda a otro García Covarrubias que haya estado al mando de la compañía. Precisa, además, que el oficial Fernández Carranza se mantuvo activo en sus labores en el regimiento Tucapel luego del 11 de septiembre de 1973, es decir, la compañía dependía de él, él también daba órdenes a la compañía morteros. Pero luego de un mes aproximadamente se ausentó y no lo vieron más en el regimiento. Afirma que ellos sabían que eran detectives quienes estaban en los interrogatorios, pues personal de planta decían "llegaron los tiras" y tiras se les dice comúnmente a los detectives. Esos funcionarios de investigaciones eran siempre los mismos y por lo general eran dos personas. Había uno bien imponente, grandote, el otro era más bajo, más delgado. Estos detectives se relacionaban con los oficiales. Quienes deberían tener conocimiento de los hechos que ha narrado, es decir, de la ejecución y cargar los cuerpos a los camiones, son los oficiales del regimiento, porque se comunicaban entre ellos. Los soldados, los conscriptos, los suboficiales y los oficiales dependían cada uno de una compañía y en ese sentido cada uno de los oficiales que integraban o mandaban esas compañías debieron enterarse de lo ocurrido. El Tribunal ordena agregar al proceso las declaraciones que rolan de fs. 1.075 y de fs. 3.461 y siguientes del Primer Juzgado del Crimen de Temuco. Agrega que quiere pedir nuevamente al Tribunal que teme por su integridad, por lo que requiere protección para sí y su familia. Además, que sus declaraciones sean reservadas. El Tribunal ordena el desglose de todas sus declaraciones y la formación de un cuaderno separado secreto, atendido lo dispuesto en el artículo 189 del Código de Procedimiento Penal, quedando prohibida la divulgación; en

cualquier forma, de su identidad o de antecedentes que conduzcan a ella, como asimismo otorgar copia de ella, bajo el apercibimiento legal que corresponda.

A.1.10. Oscar Alejandro Muñoz Venegas

En declaración extrajudicial de fecha 09 de noviembre de 2021, rolante de **fs. 224 a fs. 225 (Cuaderno Secreto)**, espeta que efectuó su servicio militar obligatorio en el regimiento de Infantería N°8 Tucapel de Temuco desde el mes de abril del año 1973 hasta abril del año 1975, quedando encuadrado en la **compañía de plana mayor y servicios**, la que estaba a cargo del capitán Ubilla. Conforme su recuerdo, perteneció a la sección de telecomunicaciones la que estaba a cargo del sargento Mario Arias Díaz, recordando también a los soldados conscriptos Manuel Ortega entre otros. Que sus labores consistían en efectuar servicios de guardia, patrullajes y puntos fijos, labores que comenzaron a ejecutarse una vez ocurrido el pronunciamiento militar. El año 1974, fue designado a cumplir funciones en la comandancia como junior, en la sección administración de cajas, cumpliendo esa función hasta cuando finalizó su servicio militar. Conforme su recuerdo, a partir del día 11 de septiembre hubo muchas personas detenidas en el regimiento, las cuales generalmente eran llevadas al gimnasio de la unidad militar, en su caso particular, le correspondió participar en allanamientos, pero generalmente se le asignaba a efectuar labores de perímetro, no correspondiéndole nunca ingresar a los domicilios que eran allanados. En lo principal, rememora la ocasión en que se allanó un domicilio en avenida Alemania, el cual estaba a cargo del sargento Brito, quien era parte del servicio de inteligencia. De los detenidos que vio en el regimiento, recuerda a don Oscar Seguel Jofré, quien era profesor, oriundo de Los Galpones al igual que él. Éste estaba al interior del gimnasio junto a otro grupo de detenidos, estaba en buenas condiciones físicas, motivo por el cual tomó contacto con él y le entregó un mensaje para que se lo entregara a su esposa. Posteriormente no tuvo mayores antecedentes respecto a su destino final. Que se sabía que parte de los detenidos eran llevados a una dependencia de la compañía andina, negando que en las dependencias de su compañía se hubiese habilitado una sala para alojar detenidos. Sin embargo, nunca supo que hubiesen llegado detectives al regimiento, siendo las únicas personas que vestían de civil el sargento Moreno, el sargento Yévenes, los soldados Arrollo, Schwartenski y Chávez Etchepare. Según su recuerdo, los antes mencionados eran parte del servicio de inteligencia que

existía al interior del regimiento. Respecto al Sargento Díaz, estima que nunca lo vio vestido de civil, pero podría decir que lo relaciona con los detenidos del cuartel, ya que generalmente participaba en patrullajes. En relación con lo anterior, nunca supo si este señor participó en interrogatorios bajo la aplicación de tortura, sin embargo, lo anterior, puede hacer mención que había un teniente de apellido Espinoza, quien era de la compañía de cazadores, sobre quien se comentaba mucho que tenía participación en detenciones políticas junto a conscriptos de su compañía. Sobre un soldado conscripto de su compañía cuyo apellido sería C., recuerda a un soldado de ese apellido, quien con el paso del tiempo fue nombrado Sargento de Reserva, no recuerda su nombre, ya que no eran cercanos, siendo lo único que sabía de su persona, era que provenía de la ciudad de Pitrufrquén. Respecto al hecho investigado, que dice relación con la detención y desaparición de ocho jóvenes que fueron llevados en calidad de detenidos al regimiento Tucapel durante el mes de septiembre de 1973, cuyas identidad corresponden a los hermanos Hugo Arner y Elías Dagoberto González Ortega, los hermanos Juan Carlos y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, cuyas edades oscilaban entre los 17 y 24 años, evidencia que es la primera vez que escucha sus nombres e ignora todo antecedente relacionado con sus detenciones y permanencia al interior del Regimiento. Con relación a su participación en subir a los cuerpos de unas personas fallecidas a un camión militar en el polígono de tiro del regimiento, expresa que ignora la situación que se le comenta, agregando que nunca le correspondió efectuar esa labor, nunca vio fallecidos al interior del regimiento.

En declaración judicial de fecha 09 de septiembre de 2022, rolante **de 226 a fs. 227 (cuaderno secreto)**, en lo pertinente el Tribunal le lee su declaración policial y le consulta ¿ratifica esa declaración?, el deponente responde sí, la ratifica. El Tribunal le lee las siguientes declaraciones, las cuales fueron otorgadas en esta causa por un testigo reservado de iniciales M.J.C.S, las cuales se dan por reproducidas: 1) Declaración extrajudicial de fecha 01 de septiembre de 2015. 2) Declaración judicial de fecha 30 de mayo de 2017. 3) Declaración judicial de fecha 26 de marzo de 2019. 4) Declaración judicial de fecha 27 de noviembre de 2019. 5) Declaración judicial de fecha 16 de agosto de 2021. Debido a la lectura de las declaraciones anteriores, el Tribunal le consulta qué puede decir

de este testigo de iniciales M.J.C.S? El tribunal le ha tomado varias declaraciones a esta persona y no solamente eso, sino que cuando son declaraciones de tanta relevancia, se les hace un examen psiquiátrico por si la persona pudiera estar inventando, por si la persona pudiera estar con sus facultades mentales alteradas y el examen psiquiátrico arrojó que esta persona se encontraba normal. Entonces, el Tribunal le pregunta, ¿Qué puede opinar de estos dichos?, a lo que el deponente responde que la verdad de las cosas es que niega rotundamente todas esas calificaciones, porque jamás vio ni participó en esos hechos. Después con los días recibió comentarios, pero jamás participó en ver personas fusiladas o cargando camiones. El Tribunal le consulta, pero ¿Por qué esta persona lo nombra con tanta precisión?, a lo que el deponente responde que eso es lo que le llama la atención, pero jura por Dios que jamás participó en eso. El Tribunal le consulta ¿y qué comentarios había?, a lo que el deponente responde que no, solamente eso del asalto al cuartel, les designaron puestos fijos para resguardar los alrededores y las balaceras, pero jamás vio cuerpos. El Tribunal le consulta respecto a la dependencia que existía en la compañía de plana mayor y servicios ¿vio personas apremiadas allí?, a lo que el deponente explicita que como lo dijo en una declaración anteriormente, él jamás. Sabe que había personas detenidas, vio muchas personas que llegaban al regimiento detenidas, pero jamás vio una tortura o presenciar un fusilamiento. El Tribunal le indica que el testigo de iniciales M.J.C.S no lo hace partícipe a él de algún acto ilícito, que haya estado en la presencia de torturas, fusilamientos. Lo que él dice es que a ellos los superiores les dieron la orden de ir a cargar unos cadáveres. Éste quiso contar al Tribunal, dado que tenía la consciencia intranquila, ha tenido problemas, quería contar lo que le tocó vivir a él en el regimiento Tucapel de Temuco, como muchos otros soldados, a lo que el deponente responde que eso no. El Tribunal le consulta respecto a la línea de mando de la compañía de plana mayor y servicios del regimiento Tucapel para esa época ¿a qué oficiales recuerda?, a lo que el deponente justifica que ahí estaba el capitán Ubilla, el teniente Lavín, el teniente García.

A.1.11. José Anselmo Matamala Cofre

En declaración judicial de fecha 22 de marzo de 2018, rolante de **fs. 230 a fs. 231 (Cuaderno secreto)**, reitera que se encontraba para el año 1973 realizando el servicio militar obligatorio al interior del regimiento Tucapel de

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Temuco, **compañía de plana mayor y servicios**, al mando del capitán Ubilla. Lo seguían en el mando el subteniente Romilio Lavín. A partir del 11 de septiembre de 1973, y encontrándose encuadrado en la misma compañía, se desempeñó como guardia dentro de las dependencias del regimiento Tucapel de Temuco. Expresa que al interior de la compañía existía una sala de torturas, lo sabe puesto que se encontraba de guardia cuando observaba aquello. A la sala de tortura veía ingresar a los conscriptos Chávez Etchepare y a Valeria. Sabe que la sala que estaba ubicada en la compañía era una sala de tortura, puesto que en muchas ocasiones le correspondió trasladar a los presos políticos hasta aquella, los cuales eran conducidos vendados; momentos en que podía observar la implementación que existía en aquella. En muchas ocasiones visualizó un catre, lugar donde recostaban a los detenidos para aplicarles corriente. Nunca se enteró de las identidades de los detenidos ni el destino final de aquellos. Recuerda como compañeros de guardia a Renato Ortiz, Jaime Medina, Nicanor Poblete. Dice que ellos suponen observaron lo mismo que él. Por otra parte, en relación con fusilamientos que ocurrieron en el interior del regimiento, efectivamente tomó conocimiento por comentarios, que en la isla Cautín se realizaban esas maniobras de las cuales nunca participó u observó, además era de conocimiento general de los conscriptos que, en horas de la noche en oportunidades, se trasladaban cuerpos a distinto lugares, los cuales desconoce. Los nombres de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Juan Carlos Smith Arriagada, Ricardo Smith Arriagada, Juan de Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt no le son conocidos. El tribunal le pregunta respecto a lo pertinente de la declaración de don M. J. C. S., de fs. 2.309 a fs. 2.310 y de fs. 2.638 a lo que el deponente indica que nunca presencié una situación de ese tipo, pero si escuchó comentarios que de ese tipo.

A.1.12. Jorge Luis Godoy Valdebenito

En declaración extrajudicial de fecha 17 de octubre de 2018, que rola de **fs. 232 a fs. 235 (Cuaderno secreto)**, ratifica su declaración extrajudicial rolante de fs. 826 a fs. 827, de otros hechos y en lo pertinente supo que después del 11 de septiembre de 1973 existió al interior del regimiento Tucapel de Temuco una patrulla especial formada por conscriptos que se ofrecieron como voluntarios para practicar detenciones por temas políticos, entre los que se encontraban José

Chávez Etchepare, Libardo Schwarzenski, Juan Mario Fuente Henríquez, Juan Carrillo y al parecer Leopoldo Villagrán Alvarado, entre otros. Que a fines de noviembre de 1973 Luis Valeria Candía dejó de hacer guardia junto al declarante en la casa del comandante y se unió a esa patrulla. Este grupo era dirigido por el sargento Mario Arias Díaz, quien actuaba bajo las órdenes directas del teniente Jaime García Covarrubias. Grupo que se destacaba por su crueldad con los detenidos y por participar en allanamientos y detenciones. Recuerda que siempre llegaban con especies sustraídas desde las casas que allanaban. Respecto de los detenidos en el regimiento Tucapel, agrega que el teniente García Covarrubias y el grupo (el señalado precedentemente) los interrogaba en la sala donde funcionaba la banda del regimiento, en un principio. Luego los interrogaban en una sala ubicada dentro de las dependencias de la compañía de plana mayor y servicios. En esta dependencia existía dos catres y cuatro máquinas generadoras de corriente dispuestas para ser accionadas en contra de los detenidos por motivos políticos que eran trasladados por el grupo señalado precedentemente hasta esta verdadera sala de tortura; lugar donde también fue torturado en una oportunidad por el sargento Arias. Dice que los detenidos por motivos políticos que llegaban a la Fiscalía Militar, se imagina, que posteriormente eran trasladados a la sala de torturas. Lo anterior, según su parecer, para sacarles alguna información porque todos decían que eran inocentes. Que siempre veía cuando entraban los detenidos a esta sala de torturas ubicada en la compañía de plana mayor y servicios. Que estas personas se encontraban vendadas y amarradas. Veía que Chávez Etchepare concurría constantemente a la sala de bandas a buscar detenidos, para luego ingresarlos a esta sala y proceder a torturarlos. Lo anterior lo dice, porque lo veía. Añade que nunca estuvo adentro de esa sala en el momento en que estaba siendo torturada una persona, pero sí sentía sus gritos de dolor porque se encontraba afuera. Le parece que a esta sala hacían ingresar a dos detenidos a la vez y afuera de ella quedaban los otros. Todos siempre con la vista vendada. Expresa que en muchas ocasiones vio que Chávez Etchepare cuando mareaba a los detenidos, dándoles vueltas en el patio del regimiento y luego los trasladaba a la sala de torturas. Piensa que ello lo hacía para que los detenidos no supieran dónde serían conducidos. Nunca supo las identidades de aquellos detenidos que veía ingresar a esta sala de torturas porque como señaló, ya se encontraban vendados, razón por la cual los nombres de Hugo Arner

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Juan Carlos. Schmidt Arriagada, Ricardo Schmidt Arriagada, Juan de Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, víctimas, de la causa rol 4.473 según se le da a conocer, no le son conocidos; como tampoco el nombre de Luis Alberto Chihuailaf Arriagada. El Tribunal le lee lo pertinente la declaración de don M. C. S., rolante de fs. 2.309 y siguientes de la causa rol 4.473 a lo que el deponente señala que respecto a la participación del teniente Manuel Vásquez Chahuán en lo relatado por aquel conscripto, puede decir que no duda que en un hecho de esa naturaleza haya ocurrido dado que estos oficiales se prestaban para todo. Lo anterior lo dice, porque en más de una ocasión visualizó al teniente Vásquez Chahuán al interior de la sala de tortura en cuyo interior también se encontraban muchos detenidos vendados dispuestos para ser torturados. Agrega que el teniente García mandaba más que el capitán Ubilla en cuanto al tratamiento de los detenidos, destacándose por su crueldad para con ellos. Su hermano, el subteniente Raimundo García en un principio fue una persona muy amable y no quiso inmiscuirse con los detenidos, pero después fue influenciado por su hermano y cambió su conducta. Posteriormente, ambos participaban en los interrogatorios de los detenidos en la dependencia de la banda del regimiento.

B. DOCUMENTOS

B.1. A fs. 1 a fs. 3 vta. (Tomo I), denuncia por inhumaciones ilegales presentada por el abogado Alejandro González Poblete en representación de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, indicando como víctimas a Hugo Arnés González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Juan Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Schmidt Arriagada, Juan de Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría, Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

B.2. A fs. 106 (Tomo I) y de fs. 112 (Tomo I), informes del Comandante en Jefe de la IV. División del Ejército de Chile que señala que no existe antecedentes respecto de haber dispuesto algún patrullaje con helicópteros en las comunas de Pucón y Curarrehue durante el curso del mes de septiembre y meses inmediatos del año 1973.

B.3. A fs. 110 (Tomo I), informe de la Fuerza Aérea de Chile que comunica que de conformidad a los antecedentes con que cuenta la comandancia

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

en jefe de la Brigada, no existe constancia actual sobre patrullajes de helicópteros dispuestos por la base aérea Maquehue en las comunas de Pucón y Curarrehue durante el curso del mes de septiembre y meses inmediatos del año 1973.

B.4. Actas de inspecciones del Tribunal, que rolan de:

B.4.1. A **fs. 152 a fs. 153 (Cuaderno secreto)**, consta acta de inspección personal del Tribunal, 27 de noviembre de dos mil 2019, que en lo pertinentes suscribe que: se constituye el Tribunal en dependencias del Regimiento Tucapel de Temuco, participando en la diligencia el Ministro en Visita Extraordinaria don Álvaro Mesa Latorre; el Fiscal Militar de Temuco, don Francisco Bravo Soto; el Secretario de la Fiscalía Militar de Temuco, don Giovanni Taito Schmidt; el abogado del Programa Continuación Ley 19.123 del Ministerio de Justicia, Ricardo Lavín Salazar; los Peritos Planimetrista y Fotógrafo del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, don Juan Vega Norambuena y don Frantz Beissinger Bart; y de los Testigos M. J. C. S. y Celedonio Aburto Fuentes. En primer término, el Tribunal ordena comenzar la diligencia disponiendo que el testigo Manuel Contreras Salazar indique el lugar donde estaba ubicada la Compañía de Plana Mayor y Servicios del Regimiento Tucapel de Temuco para el año 1973. El Tribunal y los testigos se desplazan hasta ese punto, donde se detienen para ingresar a aquella dependencia. En este sentido, tanto el señor C. como el señor Aburto, coinciden en señalar que aquella dependencia era la utilizada por la Compañía de Plana Mayor y Servicios para la fecha señalada. A continuación el señor Ministro le solicita al señor C. manifestar su conocimiento respecto a lo acontecido en aquella dependencia a partir del 11 de septiembre de 1973; en este sentido el señor C., reitera lo señalado en sus declaraciones de fs. 2.309, 2.638, indicando que observó en una fecha posterior al 11 de septiembre de 1973, desde el exterior de esta sala, que allí se encontraban torturando a tres de las víctimas de esta causa, cuyas fotografías le fueron exhibidas por el Tribunal en sus declaraciones de la causa. Acota que presentes en el lugar se encontraba el oficial Manuel Vásquez Chahuán. Luego, el señor Ministro le otorga la palabra a don Caledonio Aburto Fuentes para que señale lo pertinente, indicando este que tuvo conocimiento que en aquel lugar era una de las dependencias destinadas para detenidos por motivos políticos tras el 11 de septiembre de 1973. Los peritos de la Policía de Investigaciones fijan los puntos indicados. Posteriormente el Tribunal y los testigos se desplazan hacia un lugar,

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

dentro del mismo Regimiento, señalado por el testigo Celedonio Aburto Fuentes, quien señala que habría una edificación tipo caseta en donde operaba una oficina de la Policía de Investigaciones de Chile. Los peritos de la Policía de Investigaciones fijan los puntos indicados.

B.4.2. A fs. 154 a fs. 155 (cuaderno secreto), consta acta de inspección personal del Tribunal. De fecha, 27 de noviembre de 2019, que en lo pertinente refiere que: se constituye el Tribunal en el ex polígono de tiro de la isla Cautín; lugar donde actualmente se encuentra bajo la administración del SERVIU, participando en la diligencia el Ministro en Visita Extraordinaria don Álvaro Mesa Latorre; el abogado del Programa Continuación Ley 19.123 del Ministerio de Justicia, Ricardo Lavín Salazar; los Peritos Planimetrista y Fotógrafo del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, don Juan Vega Norambuena y don Frantz Beissinger Bart; y de los Testigos M. J. C. S., y Celedonio Aburto Fuentes. En primer término, el Tribunal ordena comenzar la diligencia disponiendo al señor M.J.C.S., situarse en el lugar indicado por el en sus declaraciones de fs. 2.309 y 2.638 de autos. En este sentido, el testigo C. S., se dirige hasta un lugar determinado del ex polígono de tiro de la isla Cautín. Estando allí, el señor C.S. indica al Tribunal el lugar exacto en donde se encontraba la noche en que cargó ocho cuerpos de personas fallecidas, en una fecha posterior al 11 de septiembre de 1973. Reitera al tribunal que reconoció tres de las víctimas de la presente causa, tal como señaló a fs. 2.640. Luego menciona los nombres de los oficiales presentes aquella noche, los tenientes Espinoza y Manuel Vásquez Chahuán. Los peritos de la policía de investigaciones fijan los puntos indicados. Posteriormente el Tribunal le solicita al testigo Celedonio Aburto Fuentes manifestar su conocimiento respecto a los hechos narrados por el señor C.S. En este sentido, el señor Aburto señalada que lo indicado por el señor C.S. pudo haber ocurrido, pero él no se encontraba presente aquella noche en el lugar, sin embargo, aquello era lo que se comentaba en esa época.

B.4.3. A fs. 406 vta. (Tomo II), consta acta de inspección personal del Tribunal, en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco. De fecha 22 de noviembre de 2019, que señala en lo pertinente que: se constituyó el Tribunal en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco a fin de practicar la diligencia decretada en autos con el fin de inspeccionar los Libros de Estadísticas de Detenidos y Procesados correspondientes al año 1973. En primer término, se

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

procedió a examinar el Libro de Estadísticas de Detenidos, apareciendo de los datos estampados en éste que, aun cuando no figuran todos los nombres buscados, existen similitudes como las que se señalan a continuación: 1. Rogelio Hernán Schmidt Muñoz, 17 años, ingresó el 14 de septiembre de 1973, según Parte N° 1.116 de la Fiscalía Militar de Cautín, por infracción a la Ley 17.798. Registra domicilio en calle Ercilla N° 860 de Villarrica y se indica como fecha de egreso el 15 de octubre de 1973. 2. Ricardo Virginio Aguayo Olavarría, 20 años, ingresó el 14 de septiembre de 1973, según Parte N° 1.200 de la Fiscalía Militar de Cautín, por infracción a la Ley 17.798. Registra domicilio en calle Pedro Montt N° 967 de Villarrica y se indica como fecha de egreso el 27 de septiembre de 1973. 3. Abdiel González Ortega, 22 años, ingresó el 14 de septiembre de 1973, según Parte N° 1.116 de la Fiscalía Militar de Cautín, por infracción a la Ley 17.798. Registra domicilio en calle Aldunate sin número de Villarrica y se indica como fecha de egreso el 15 de octubre de 1973. En segundo lugar, se dispuso la revisión del Libro de Estadísticas de Procesados correspondiente al año 1973, sin que registraran coincidencias en los nombres de las personas buscadas

B.4.4. A fs. 1.721 a fs. 1.726 (Tomo V), consta acta de inspección personal del Tribunal, de fecha 23 de marzo de 2012, que en lo pertinente rubrica que: se constituyó el Tribunal en dependencias del R.I. N°8 TUCAPEL, participando en la diligencia el Ministro en Visita Extraordinaria don Álvaro Mesa Latorre; del Fiscal Militar de Temuco, Teniente Coronel (J) José Valentín Pinto Aparicio; Secretaria de la Fiscalía Militar, Mayor (J) Ema Fabiola Maturana Meneses; de los Peritos Planimetrista y Fotógrafo del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, don Cristian Sil a Barra y don Franz Beissinger Barty de los Testigos Raimundo García Covarrubias, Romilio Lavín Muñoz, Pedro Tichauer Salcedo, Juan Carlos. Concha Belmar, Manuel Rafael Campos Ceballos, Héctor Mauricio Villablanca Huenulao, Héctor Joaquín Celedón Fuentes, Gerardo Jaime Araneda Muñoz, Ernesto G. reía Isla, Manuel Reinaldo Canales Valdés, Oscar Inostroza Segura, Daniel San Juan Clavería, Orlando Moreno Vásquez, Carlos Luco Astroza, Hernán Raúl Quiroz Barra, Raúl Binaldo Schonherr Frías y Omar Burgos Dejean. El Ministro, en primer término, se dirige junto a los demás al pabellón de solteros del casino de oficiales, ordenándole al testigo Raimundo García Covarrubias que identifique el dormitorio donde se encontraba alojando, ya que en su declaración señala que se encontraba ese día

enfermo. Se procede a visualizar una habitación la cual tiene una ventana y la cual es fijada por los funcionarios de peritos de la policía de investigaciones. Luego el Ministro consulta al testigo Romilio Lavín cuál era su dormitorio, dirigiéndose el testigo y las demás personas a otro lugar del casino de oficiales, señalando Lavín que él como más antiguo dormía en esa habitación, ya que tenía a cargo el rancho de oficiales, inspeccionada la habitación se constata que posee una ventana que da a un patio ciego, la que es fijada por personal de perito de la policía de investigaciones. Posteriormente, el Ministro consulta a otro testigo, señor Orlando Moreno Vásquez, para que indique dónde funcionaba la Fiscalía Militar en aquella época, el testigo manifiesta que, en la comandancia, dirigiéndose todos a la comandancia del regimiento. En ese lugar, el señor Moreno, indica que funcionaba en el interior de la actual comandancia y que estaba a cargo del mayor Cofre, pero después funcionaba con el señor Podlech, en el interior de la comandancia. Señala el señor Moreno, y también el testigo Raimundo García Covarrubias, cuando se le consulta, que había dos oficinas, en una funcionaban los actuarios y en la otra el Fiscal. A continuación, el Ministro junto a los demás testigos y personas consulta dónde se ubicaba la compañía de plana mayor, indicando García el lugar de esta compañía, identificando también la compañía de morteros y luego la compañía cazadores que antes era la compañía andina. Moreno, señala que él trabajaba en la plana mayor, con soldados conscriptos en instrucción. Consultados por el Ministro dónde funcionaba el gimnasio, siendo indicado por Lavín el lugar donde se encontraba el gimnasio del regimiento. El Ministro, consulta a Moreno, por la gente que llegaba detenida al regimiento, respondiendo Moreno que llegó gente detenida y ésta era llevada al gimnasio y el Fiscal era el que decidía quién iba a la cárcel o quién quedaba en libertad. El Ministro consulta por la existencia de baños en el lugar señalándose por los testigos, específicamente por Moreno, el lugar donde se encuentran los baños, fijándose el lugar por los funcionarios de peritos. Posteriormente, el Ministro, consulta por el matadero, siendo indicado por Moreno, el lugar donde se encontraba en esos tiempos esa dependencia, la que corresponde actualmente al rancho de soldados, se fija este lugar por los funcionarios peritos. El Ministro consulta por la distancia que existía entre el matadero y la isla Cautín, respondiéndole los peritos lo que pueden existir unos 500 metros, en seguida el Ministro pregunta a otro testigo, personal de la Policía de Investigaciones en situación de retiro, a fin de que

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

indiquen el lugar donde trabajaban, señalando que fueron destinados al regimiento para efectos de prestar colaboración al Fiscal Podlech, señalando que había actuarios que eran civiles y que existieron muchos detenidos los cuales eran asignados a los detectives, aproximadamente veinte detenidos, por detective. El testigo Hernán Quiroz Barra señala que a él le toco interrogar a muchos de estos detenidos, al consultar el Ministró al testigo si durante la interrogación eran observados por militares, el testigo dice que no. En seguida, el Ministro, consulta al otro detective en retiro, testigo Luco, quien indica que él en esos tiempos era chofer, y sólo llegaba hasta la guardia del regimiento, en ese lugar se le indicaba que tramite debía hacer, y él tenía expresa orden de llegar solo hasta la guardia del regimiento. Siguiendo con la diligencia el Ministro pregunta a Omar Burgos Dejean, que indique dónde se desempeñaba él, señalando el testigo que trabajaba en el archivo, el cual quedaba en la comandancia, al fondo a la izquierda, la oficina no tenía nombre, se fija fotográficamente por los peritos. Posteriormente, Burgos, señala que él daba los salvoconductos, que trabajaba hasta el viernes, que no interrogó nunca a detenidos y que, por necesidad y orden superior, solo participo en la detención del caso polvorín. Señala que normalmente tenía un banco de colegio ubicado antes de la guardia del Regimiento, en el cual trabajaba entregando a la gente los salvoconductos que eran documentos firmados por el Fiscal Cofré, tales documentos autorizaban, por ejemplo, al camión que llegaba a entregar víveres o cuando la gente tenía que trasladarse de un lugar a otro, fuera del horario establecido, se fija por los funcionarios peritos el lugar. El Ministro, luego de escuchar al testigo Burgos, pregunta al testigo Raúl Schonherr Frías, este indica que trabajó en la segunda comandancia después del 11 de septiembre de 1973 señalando que en la segunda comandancia, en su interior, habían tres dependencias: la oficina del dactilógrafo funcionaba en este lugar como también la del segundo comandante, y otra dependencia en que habían tres oficinas, allí funcionó el Fiscal Cofre, después llegó Podlech, se fijan el lugar. Más tarde, y en el desarrollo de la misma diligencia, el Ministro, se reúne con otros testigos: Héctor Mauricio Villa blanca Huenulao, Manuel Reinaldo Canales Valdés, Manuel Rafael Campos Ceballos, Héctor Joaquín Celedón Fuentes, Gerardo Jaime Araneda Muñoz y Oscar Inostroza Segura, quienes fueron conscriptos. El Ministro les dice que se refieran a la noche del 10 de noviembre de 1973, indicándose por estos que se encontraban en la compañía de morteros y compañía de plana mayor.

Señalan Celedón y Araneda, que ellos esa noche se encontraban durmiendo, y sintieron unos ruidos, pero no hubo mayor movimiento, nadie ordeno salir del lugar. Inostroza dice que él estaba de franco y estaba en su casa, no en el regimiento. Villablanca manifiesta que él esa noche, se encontraba dormido, dormía en la primera litera, señala que despertó al sentir unos disparos o granadas, dice que era él de la segunda escuadra. Canales, declara que él esa noche estaba en el Cerro Nielol, y sintió unos disparos desde ese lugar, señalando que él se encontraba en la copa de agua. El Ministro, consulta a Inostroza, ya que en su declaración dice que le correspondió entregar detenidos a la segunda comandancia, desde donde sacaba a los detenidos y hasta donde los llevaba, trasladándose el testigo junto al Ministro y las demás personas a una dependencia ubicada al lado de la guardia, donde Inostroza indica que esa era una sala de espera, donde se dejaba a los detenidos. La dependencia tiene una sola puerta de entrada y salida, señalando Inostroza que desde ese lugar se sacaba a los detenidos y los llevaban a la compañía de plana mayor, lugar donde los interrogaban en la quinta cuadra, había en el interior unos somieres metálicos, a las personas se las dejaba en ese lugar para que las interrogaran, como uno no ingresaba, luego salían del lugar siempre custodiados, señala que a él varias veces le tocó llevar gente que salió bien físicamente, estas personas salieron caminando, señala que en esa sala se sentían ruidos de tortura. El Ministro consulta a los otros testigos; exsoldados, que dormían en las cuadras de al lado, si ellos sentían algún ruido, señalando que sí, que habían veces que sentían gritos y ruidos de tortura. Luego el Ministro solicita que le indiquen estos testigos donde se encontraba el polvorín de la unidad, siendo señalados por uno de los testigos el lugar donde funcionaba el polvorín, lugar que es fijado. Ulteriormente, el Ministro, le pregunta al testigo Guillermo Tichauer Salcedo que indique dónde se encontraba él esa noche de noviembre del año 1973, dirigiéndose el Tichauer, junto al Ministro y los demás funcionarios afuera del regimiento, cruzando la calle Prat, señalando el testigo, que él vivía frente al regimiento, en el segundo piso, diciendo que se había casado hacía poco y se encontraba con su mujer y su cuñado y familia de éste, y mientras comían escucharon unos disparos, razón por la que se dirigió al regimiento, encontrándose antes de ingresar a este con el mayor Cofre, quién le dijo que no pasaba nada, que había sido un asalto al cuartel, por esta razón regreso a su domicilio, toda vez que su mando le dijo que

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

se devolviera atender a su familia, se fijan el lugar. Se presenta Jorge Luis Godoy Valdebenito, soldado, conscripto a la fecha de ocurrencia de los hechos, el Ministro le solicita que indique el lugar donde, él habría sido torturado, se desplaza al lugar donde están las compañías, indicando que había una pieza grande en la cual tenían una cama, específicamente somier y que el sargento Mario Arias, lo habría acostado y le habría aplicado corriente. El Ministro le pide que indique el lugar donde él veía a los detenidos, señalando el testigo Godoy que él veía que llegaban detenidos con venda en los ojos y que se escuchaban ruidos y gritaba gente, señala que había un conscripto de apellido Etchepare, el cual mareaba a los detenidos, luego Godoy señala que en la sala de banda era el lugar donde pasaban los detenidos, los cuales eran golpeados por los mismos soldados, por orden de los más antiguos, indica que el mayor Cofre nunca se metía en nada, eran los menos antiguos los que ordenaban golpear a los detenidos con la fusta de los caballos, en este lugar, indicando la sala de banda llegaban los detenidos y luego eran llevados a la compañía.

B.4.5. A fs. 2.011 (Tomo VI), consta acta de inspección personal del Tribunal, de fecha 16 de diciembre de 2014, que en lo adecuado refiere que: constituyéndose el Tribunal en el camino que une Pucón con la localidad de Caburgua, con la presencia del personal de la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos de la Policía de investigaciones de Chile, Comisarios Hernán Villena Morales y Luis Castillo Farías; de los Peritos Fotógrafo y Planimetrista del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, doña Ana Luisa Pizarra López y don Juan Vega Norambuena; y del testigo don Luis Robinson Bustos Letelier. En primer término, a sugerencia del testigo el Tribunal se traslada hasta el km. 12 del camino precitado. En ese lugar el testigo Luis Robinson Bustos Letelier indica un sector cercano a la calzada donde habría divisado a las víctimas de autos y después de haberles practicado un control de identidad, decidió proceder a su detención. Acto seguido, el testigo precisa la manera como fueron subidos al carro policial en el cual los detenidos, víctimas de autos, fueron llevados hasta la Subcomisaria de Carabineros de Pucón.

B.5. Informes periciales de la Policía de Investigaciones de:

B.5.1. A fs. 161 a fs. 168 (Cuaderno secreto), informe Pericial Planimétrico y Dibujo, remitido por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Investigaciones de Temuco, realizado en inspección ocular en el destacamento de Montaña N° 8 Tucapel y polígono de tiro en isla Cautín de Temuco, mediante el cual se fijan la localización de edificaciones y proyección de los lugares señalados por los testigos durante la diligencia.

B.5.2. A fs. 170 a fs. 171 vta. (Cuaderno secreto), informe Pericial fotográfico, remitido por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, realizado en inspección ocular en el destacamento de Montaña N°8 Tucapel y polígono de tiro en isla Cautín de Temuco, cuyas fotografías son acompañadas en formato digital disco compacto, que refieren a las nueve tomas fotográficas, detallando cada una de ellas. En la fotografía N°5 vista del interior de dormitorio, lugar donde los testigos señalan haber tenido conocimiento de que llegaban detenidos el año 1973. Fotografía N°8 y N°9 vista del lugar donde se habría emplazado el polígono de tiro de la isla Cautín. En donde el testigo M.J.C.S., el año 1973 encontrándose en condición de soldado conscripto se le habría ordenado por los jefes militares directos, subir cuerpos de personas jóvenes con herida de proyectil balístico hasta el interior de un camión tres cuarto.

B.5.3. A fs. 1.664 a fs. 1.671 (Tomo V), informe Pericial Planimétrico, remitido por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, realizado en reconstitución de escena en el Regimiento de Infantería N° 8 Tucapel, Temuco, ordenado en causa rol 113.089 del ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco seguida antes este Tribunal, que en lo pertinente contiene antecedentes de relevancia criminalísticas obtenidos en el sitio del suceso, expresado en plano de planta a escala en láminas.

B.5.4. A fs. 2.024 a fs. 2.027 (Tomo VI), (copia del cual se encuentra de fs. 2.028 a fs. 2.031 Tomo VI), informe Pericial Planimétrico, remitido por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, realizado en levantamiento en kilómetro doce de la ruta S-905, desde Pucón a Caburgua, mediante el cual se ilustra fotografías aéreas de la ruta, destacando el sector de la ruta señalado por el señor Bustos Letelier, como lugar de la detención por sospecha de ocho personas.

B.5.5. A fs. 2.041 a fs. 2.043 (Tomo VI), informe Pericial Fotográfico, remitidos por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, que contiene registro fotográfico de las dependencias de la Tenencia de

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Carabineros Curarrehue ubicada en Avenida O'Higgins N° 63 de la comuna de Curarrehue, según lo señalado por los carabineros (en la época) teniente César Jaña Toro, cabo primero Héctor Sepúlveda Chacón y carabinero Luis Hernández Rojas y por los profesores que habrían estado detenidos en dicha unidad policial, en la época de los hechos, don Manuel Humaña Jiménez, don Rubén Leal Riquelme, don Renato Saravia Flore y don Baldomero Salazar Salgado, compuesto de treinta tomas.

B.5.6. A fs. 2.044 a fs. 2.046 (Tomo VI), informe Pericial Fotográfico, remitidos por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, que contiene registro fotográfico del lugar en la ruta S-905 (Pucón-Caburgua) donde habrían sido detenidas ocho personas, según lo señalado por el ex oficial de carabineros don Luis Robinson Bustos Letelier.

B.5.7. A fs. 2.266 a fs. 2.271 (Tomo VII), informe Pericial Planimétrico remitido por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, que corresponde a terreno situado al costado Este de la Plaza de Villarrica, donde se encuentra una edificación de Carabineros de Chile. Prefectura Villarrica N°3 séptima Comisaría Villarrica, ubicada en calle Manuel Antonio Matta N°230 de la ciudad de Villarrica.

B.5.8. A fs. 2.322 a fs. 2.324 (Tomo VII), informe Pericial Fotográfico, remitidos por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, correspondiente a la inspección ocular en la séptima Comisaria de Carabineros de Villarrica, ubicada en Calle Manuel Matta N° 230, de la ciudad de Villarrica.

B.6. A fs. 2.070 (tomo VI), extracto de filiación y antecedentes de Luis Robinson Bustos Letelier.

B.7. Informes del Estado Mayor General del Ejército de Chile, que se detallan de:

B.7.1. A fs. 2.423 a fs. 2.431 (Tomo VII), informe del Estado Mayor General del Ejército de Chile en que se adjunta fotocopia de reglamentos. En lo pertinente el Servicio de Guarnición de las FF. AA, edición 1959, (Considera grados de acuartelamiento). El que en su capítulo V numeral 121 refiere que: "En general, el acuartelamiento constituye el hecho de disponer medidas para asegurar la permanencia del personal en las Unidades, Reparticiones, o en algún determinado lugar, que permita la rápida concurrencia a cualquier llamado. En el

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

acuartelamiento se distinguen los siguientes grados, que se aplicarán de acuerdo con las circunstancias: a) Primer grado: Todo el personal, sin excepción deberá permanecer en el recinto del cuartel”.

B.7.2. A fs. 2.976 (Tomo IX), informe del Estado Mayor General del Ejército de Chile que remite fotografías cercanas 1973 de las siguientes personas: Carlos Oviedo Arriagada, Raimundo García Covarrubias, Romilio Lavín Muñoz, Mario Alvarado Verdugo y Norbeto Uribe Moroni, las que fueron ordenadas desglosar según resolución de fs. 3.178 del 25 de junio de 2019.

B.7.3. A fs. 3.399 a fs. 3.400 (Tomo X), informe del Estado Mayor General del Ejército mediante el cual se constata estructura orgánica de la compañía de plana mayor y servicio según lista de revista de comisario del año 1973, correspondiente al regimiento de Infantería de Montaña N°8 Tucapel, en lo pertinente ilustrando los oficiales encuadra en los cargos que detalla, tales como: Compañía plana mayor, comando de compañía capitán comandante de compañía Nelson Manuel Ubilla Toledo. Sección intendencia, comando de sección teniente comandante de sección y jefe administración de fondo, Pedro Guillermo Manuel Tichauer Salcedo. Sección material de guerra, comando de sección subteniente comandante de sección Romilio Osvaldo Lavín Muñoz.

B.8. A fs. 261 a fs. 264 (Tomo I), informe de la Dirección de Planificación y Desarrollo de Carabineros de Chile, que contiene relación nominal del personal que prestó servicios durante los meses de agosto a octubre de 1973, en la subcomisaría de Villarrica.

B.9. A fs. 362 (Tomo I), informe del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, que informa que: una vez revisados los libros de registro de ingreso de detenidos, correspondiente al año 1973, no se encuentran señaladas las personas mencionadas, no obstante se encuentran registro de ingresos de detenidos los que podrían corresponder a los consultados: “Obdiel González Ortega: ingresa el 14.09.1973, por orden de la Fiscalía Militar de Temuco, por el delito de Infracción a la Ley N°17.798, egresado en libertad el 27.09.1973”. Ricardo Virginio Aguayo Olavarría: Ingresa el 14.09.2973, por orden de la Fiscalía Militar de Temuco, por el delito de Infracción a la Ley N°17.798, egresado en libertad el 27.09.1973. Carlos Schmidt Arriagada: Ingresa el 17.09.1973, por orden de la Fiscalía Militar, por el delito de Daños a la Propiedad Pública Fiscal, egresado en libertad el 16.02.1973”.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

B.10. A fs. 425 (Tomo II), informe del III Juzgado Militar, Fiscalía Militar Letrada Ejercito Cautín Temuco, señala que no se tienen antecedentes de las causas iniciadas por los partes mencionados por el Tribunal.

B.11. A fs. 429 (Tomo II), informe de la Dirección del Personal de Carabineros de Chile, indica que: “se estableció que no se mantiene copia del Decreto Nro. 10, de fecha 16.01.1973, que nombró Fiscal Titular de la Fiscalía de Carabineros de Cautín, a contar del 20.01.1973 al General Inspector (R) Sr. Gonzalo Enrique Arias Gonzalez”. Y que: “Revisado los registros del Departamento Pensiones de esta dependencia, se pudo establecer que en la Prefectura de Carabineros de Cautín entre los años 1972 y 1973, figura agregado a la citada Fiscalía el entonces Teniente Sr. German Antonio Uribe Santana”.

B.12. A fs. 654 a fs. 657 (Tomo II), informe de la Dirección del Personal de Carabineros de Chile, que contiene relación de personal de Carabineros de Chile en que figura dotación de la subcomisaria de carabineros de Villarrica, de la secta Comisaria de Loncoche, en septiembre de 1973.

B.13. A fs. 494 a fs. 497 (Tomo II), copia simple de denuncia por presunta desgracia interpuesta por doña Evita Aguayo Olavarría, de fecha 21 de enero de 1991, en la cual se indica que: viene en presentar denuncia por presunta desgracia en favor de su hermano legítimo Héctor Domingo Aguayo Olavarría, estudiante, domiciliado en Pedro Montt N° 697 Villarrica, nacido el 10 de junio de 1956 en Curarrehue. Su hermano pertenecía al partido socialista del entonces gobierno del presidente Allende, de las juventudes socialistas de la ciudad de Villarrica. En 1972 fue detenido por Carabineros de Curarrehue, junto con otros jóvenes de filiación comunista por tenencia de armas. Ambos fueron trasladados a Villarrica y después de una semana fueron dejados en libertad. Habían sido denunciados por esa tenencia ilegal por un tío de su hermano llamado Pedro Rubilar, ignora segundo apellido, agricultor, domiciliado en Curarrehue camino internacional, predio Santa Sara. Por segunda vez fue detenido el 14 de septiembre de 1973 ignorándose el lugar por personal del regimiento Tucapel. En circunstancias que con otros compañeros (Carlos y Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, el primero funcionario del Corvi y el ultimo estudiante de enseñanza media, hermanos González Ortega, Alejandro Escobar Vásquez, Juan de Dios Cabrera Figueroa) en circunstancias que se disponían a cruzar la frontera hacia Argentina, por el lado de Huife alto, sector Pucón-Curarrehue. Sus padres,

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

familiares y amigos hicieron vanos esfuerzos por obtener información en el regimiento Tucapel de Temuco, donde permaneció detenido por un tiempo que se ignora y donde fue visto por diferentes personas que estaban en el mismo regimiento en calidad de detenidos, siendo testigos de este hecho don Manuel Umaña, profesor, domiciliado en Ñancul, Villarrica y don Luis Díaz, ignora actividad y domicilio, pero que por ser conocido o amigo del primero, éste podría proporcionar su domicilio al Tribunal. En el listado de detenidos que existía en el regimiento Tucapel en esa época no figuraba a su hermano Héctor Domingo, pero si, en cambio aparecía en esa lista su otro hermano, Ricardo Virginio Aguayo Olavarría, quien después de un mes aproximadamente fue dejado en libertad, casi medio muerto por recibir tanto brutal y despiadado castigo. Al no figurar en la lista de detenidos, su hermano, Héctor Domingo, presumieron fundadamente que habría sido muerto con otras personas, que también se sabía habían sido detenidas por personal militar, y de las cuales tampoco se daba ninguna información concreta, no obstante, los ruegos de sus familiares.

B.14. A fs. 535 a fs. 537 (Tomo II), copia simple de denuncia por presunta desgracia interpuesta por doña Lidia Cártter Leiva, en favor de su cuñado Alejandro Escobar Vásquez, estudiante, nacido el 11 de octubre de 1954, quien pertenecía a las juventudes socialistas en el gobierno de Allende y su participación era activa, como miembro de esa colectividad. Con ocasión del pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973. Su cuñado sintió un gran temor de ser detenido, ya que en ese tiempo hubo gran cantidad de personas con ideologías políticas del depuesto gobierno que eran constantemente perseguidos, castigados y allanados, razón por la que toda su familia coincide en que su cuñado escapó hacia el lado de Argentina, el día 13 de septiembre de 1973. Esa fecha su cuñado tenía 18 años. Presume que su cuñado Alejandro no logró su objetivo, ya que por terceras personas han sabido que fue detenido junto con otras personas y llevado hasta la comisaría en Pucón. Para luego ser trasladados al regimiento Tucapel de Temuco, donde permanecieron detenidos, sin que supieran más de él hasta la fecha.

B.15. A fs. 908 (Tomo III), informe del Departamento de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile, que informa que existen los ciudadanos Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Chileno, nacido en Pucón, el 25 de diciembre de 1952, 59 años, soltero, cedula de identidad N°

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

6.816.771-K, domiciliado en calle Natalio Stein N° 4913, Comuna de Ñuñoa. Respecto de Juan Carlos Schmidt Arriagada, solo registra como Carlos Schmidt Arriagada, Chileno, nacido en Pucón el 24 de octubre de 1951, 61 años, casado, cédula de identidad N° 5.879.584- 4, sin registro de domicilio, ambos no registran movimientos migratorios en nuestro sistema. Finalmente se informa que efectuadas las consultas en nuestro sistema computacional "GEPOL", la persona requerida no cuenta con antecedentes policiales, ni encargos judiciales pendientes, sin embargo, para Carlos Schmidt Arriagada, existe un encargo vigente por presunta desgracia, causa N° 2597, de fecha 14.NOV.1990, emanado del Juzgado del Crimen de Pucón.

B.16. A fs. 1.026 (Tomo III), informe del Departamento de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile, que indica que respecto de Hugo González Ortega, Elías González Ortega, Juan Schmidt Arriagada, Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa y Raúl Figueroa Burkhardt no registran movimientos migratorios a contar del 01 de enero de 1973.

B.17. Informe de la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad que contiene:

B.17.1. A fs. 991 (Tomo III), informe de la Vicaría de la Solidaridad, respecto de **Raúl Marcial Figueroa Burkhardt**, señala detenido desaparecido, septiembre de 1973. Raúl Figueroa, de 22 años, soltero, militante de las juventudes socialistas. El 13 de septiembre de 1973, junto a un grupo de jóvenes intentó cruzar la frontera por el sector Curarrehue, siendo detenido en las cercanías de Pucón. Desde esa fecha se desconoce su paradero.

B.17.2. A fs. 993 a fs. 996 (Tomo III), individualiza en lo pertinente a: Hugo González Ortega 23 años a la fecha de la detención, militante del partido Socialista, secretario local del partido Socialista en Villarrica, fecha detención 13 de septiembre de 1973. Elías Dagoberto González Ortega, 24 años a la fecha de la detención, militante del partido Socialista, encargado de propaganda de Villarrica, fecha detención 13 de septiembre de 1973. Juan de Dios Cabrera Figueroa 20 años a la fecha de la detención, militante de las juventudes socialistas, fecha detención el 13 de septiembre de 1973. Juan Carlos Schmidt Arriagada, 21 años a la fecha de la detención, militante del partido socialista, fecha detención 13 de septiembre de 1973. Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, 18 años a la fecha de la detención, militante del partido socialista, fecha de detención 13 de

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

septiembre de 1973. Alejandro Escobar Vásquez, 18 años a la fecha de la detención, militante de las juventudes socialistas, fecha detención 13 de septiembre de 1973, y Héctor Domingo Aguayo Olavarría, 17 años a la fecha de la detención, militante de las juventudes socialistas, fecha de detención 13 de septiembre de 1973. Reseña como situación represiva lo siguiente: Hubo Arner González Ortega, 23 años, su hermano Elías Dagoberto González Ortega, 24 años, los hermanos Juan Carlos y Ricardo Schmidt Arriagada, de 21 y 20 años de edad, respectivamente, Juan de Dios Cabrera Figueroa, de 20 años, Alejandro Escobar Vásquez, de 18 años y Héctor Domingo Aguayo Olavarría, de 17 años de edad todos militantes del partido socialista se encuentran desaparecidos desde el día 13 de septiembre de 1973, luego que al ser allanados sus domicilios en la ciudad de Villarrica por personal de carabineros, decidieron cruzar la frontera por un paso cordillerano, en el sector de Curarrehue. Tiempo después, personal de investigaciones se hizo presente en el domicilio de los hermanos Schmidt Arriagada e informó a sus familiares que los jóvenes habían sido detenidos. Informaciones obtenidas por la familia de Héctor Aguayo indican que el grupo de jóvenes fue detenido en el sector del puente del río Turbio, ocho kilómetros hacia Pichares cuando intentaban cruzar a pie hacia el lado argentino. La aprehensión la habría realizado personal de carabineros que se movilizaban en una camioneta particular de propiedad de un habitante de la ciudad de Pucón. En una primera instancia los detenidos fueron conducidos al retén de Pucón, posteriormente a Villarrica y desde allí enviados al regimiento Tucapel de Temuco desde donde desaparecieron. Versionas extraoficiales indican que habrían sido ejecutados en ese lugar. Gestiones Judiciales. Los familiares de las víctimas realizaron indagaciones en la zona de búsqueda, sin resultado positivo alguno. Con fecha 24 de agosto de 1990, la familia de Alejandro escobar Vásquez inició una denuncia por presunta desgracia ante el Juzgado de Letras de Villarrica, la que roló con el N°28451. Con fecha 27 de agosto el juez de Villarrica se declaró incompetente, remitiendo los autos a Juez de Letras de Pucón (...).

B.18. Informe del Museo de la Memoria y Derechos Humanos, el que se detalla en lo pertinente:

B.18.1. A fs. 1.072 (Tomo IV), inscripción de nacimiento de Héctor Domingo Aguayo Olavarría,

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

B.18.2. A fs. 1.075 a fs. 1.078 (Tomo IV), consta denuncia por presunta desgracia interpuesta por Evita Aguayo, resumida precedentemente.

B.18.3. A fs. 1.081 a fs. 1.082 (Tomo IV), ficha del arzobispado de Santiago Vicaria de la solidaridad "detenidos desaparecidos". Documento de trabajo, 1993. Respecto de Héctor Domingo Aguayo Olavarría, situación represiva Hugo Arner González Ortega, 23 años, su hermano Elías Dagoberto González Ortega, 24 años, los hermanos Juan Carlos y Ricardo .Schmidt Arriagada, de 21 y 20 años de edad, respectivamente, Juan de Dios Cabrera Figueroa, de 20 años, Alejandro Escobar Vásquez, de 18 años y Héctor Domingo Aguayo Olavarría, de 17 años de edad, todos militantes del partido Socialista se encuentran desaparecidos desde el día 13 de septiembre de 1973, luego que al ser allanados sus domicilios en la ciudad de Villarrica por personal de carabineros, decidieron cruzar la frontera por un paso cordillerano, en el sector de Curarrehue. Tiempo después, personal de Investigaciones se hizo presente en el domicilio de los hermanos Schmidt Arriagada e informó a sus familiares que los jóvenes habían sido detenidos. Informaciones obtenidas por la familia de Héctor Aguayo indican que el grupo de jóvenes fue detenido en el sector del puente del río Turbio, ocho kilómetros hacia Pichares cuando intentaban cruzar a pie hacia el lado argentino. La aprehensión la habría realizado personal de carabineros que se movilizaban en una camioneta particular de propiedad de un habitante de la ciudad de Pucón. En una primera instancia los detenidos fueron conducidos al retén de Pucón, posteriormente a Villarrica, y desde allí enviados al Regimiento Tucapel de Temuco desde donde desaparecieron versiones extraoficiales indican que habrían sido ejecutados en ese lugar (...), reseñando las gestiones judiciales realizadas por los familiares de las víctimas.

B.18.4. A fs. 1.091 (Tomo IV), consta inscripción de nacimiento de Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

B.18.5. A fs. 1.095 (Tomo IV), oficio del directo de obras municipales de Villarrica que indica que no existe registro de sepultación de Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

B.18.6. A fs. 1.096 (Tomo IV), certificado de nacimiento de Hugo Arner González Ortega.

B.18.7. A fs. 1.099 a fs. 1.101 (Tomo IV), protocolos de autopsia NN, causas de muerte, compatibles con la acción de armas de guerra.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

B.18.8. A fs. 1.141 (Tomo IV), consta inscripción de nacimiento de Elías Dagoberto González Ortega. Padres Marcos Justiniano González González y Rita Aurora Ortega Muñoz.

B.18.9. A fs. 1.143 a fs. 1.145 (Tomo IV), declaración ante la Comisión de Verdad y Reconciliación de Ruth Alicia Gonzalez Ortega.

B.18.10. A fs. 1.146 (Tomo IV), oficio del director de obras municipales de Villarrica que señala: “revisados los antecedentes de archivados en el departamento de obras, no existe registro sobre sepultación de Elías Dagoberto González Ortega.

B.18.11. A fs. 1.162 (Tomo IV), certificado de nacimiento de Carlos Schmid Arriagada, padres Otto Schmidt Weber y Aurora del Carmen Arriagada Vergara.

B.18.12. A fs. 1.164 (Tomo IV), acta de inscripción de Carlos Schmidt Arriagada, padres Otto Schmidt Weber y Aurora del Carmen Arriagada Vergara.

B.18.13. A fs. 1.169 a fs. 1.170 (Tomo IV), declaración jurada de Silvia Luz Schmidt Arriagada, fecha 25 de julio de 1990, que en lo pertinente refiere que es hermana de Carlos y Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, nacidos el 24 de octubre de 1951 y el 25 de diciembre 1952, respectivamente. Que ellos en el año 1973 el día 13 de septiembre se “tuvieron que ir, hacia el lugar Ñancalil, lado Huife Alto, sector Pucón Curarrehue, pues ambos pertenecían al partido Socialista de Villarrica”. Carlos trabajaba en CORVI, de esa ciudad y vivía con su hermano Ricardo Augusto. Le consta que sus hermanos, por temor a ser detenidos tuvieron que tomar esa determinación. Que a pesar de sus constantes indagaciones ante la autoridad y ante el regimiento Tucapel de Temuco, comisaría de carabineros, cárcel y fiscalía, nunca se le dio una respuesta concreta del paradero de sus hermanos. Señala que a su madre Aurora del Carmen Arriagada Vergara (fallecida), fue informada a través del cabo Eduardo Vergara que a sus hermanos los habían asesinado en Temuco, y que no se hiciera ninguna ilusión con respecto de ellos de encontrarlos con vida. Lo mismo le dijo el carabinero Guido Krausse, y por Ramón Quezada.

B.18.14. A fs. 1.174 a fs. 1.176 (Tomo IV), consta declaración extrajudicial ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de Silvia Luz Schmidt Arriagada, de fecha 29 de agosto de 1990, alude en lo pertinente que los hermanos Carlos y Ricardo Augusto Schmidt se alejaron de Villarrica, pueblo en

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

donde vivían, el día 13 de Septiembre de 1973, por temor a ser detenidos, dado que eran miembros de las juventudes socialistas de Villarrica. A su parecer tenían la intención de cruzar la frontera por el lado de Huife Alto, ubicado en el sector de Pucón Curarrehue, desde entonces no se ha sabido de ellos. Los carabineros Eduardo Vergara González y Guido Krausse le informaron a su madre Aurora Arriagada Vergara que Carlos y Ricardo Augusto habían sido capturados en esa oportunidad y traídos hasta la comisaria de Pucón y posteriormente trasladados a Temuco, ciudad en donde presumiblemente habían sido asesinados.

B.18.15. A fs. 1.182 (Tomo IV), consta inscripción de nacimiento de Juan de Dios Cabrera Figueroa. Padres Ricardo Cabrera Henríquez y Eufemia Figueroa Arias.

B.18.16. A fs. 1.189 (Tomo IV), certificado de nacimiento de Alejandro Escobar Vásquez, padres Daniel Escobar Núñez y Inés Vásquez Ceballos.

B.18.17. A fs. 1.190 (Tomo IV), consta inscripción de nacimiento de Alejandro Escobar Vásquez. Padres Daniel Escobar Núñez y Inés Vásquez Ceballos.

B.19. A fs. 1.208 a fs. 1.232 (Tomo IV), informes del Servicio de Registro Civil e Identificación, que contiene:

B.19.1. A fs. 1.208 (Tomo IV), certificado de nacimiento de **Carlos Schmidt Arriagada**, el 24 de octubre de 1951, madre: Aurora del Carmen Arriagada Vergara, padre: Otto Schmidt Weber.

B.19.2. A fs. 1.209 a fs. 1.210 (Tomo IV), extracto de filiación y antecedentes de Carlos Arriagada Reyes, sin antecedentes.

B.19.3. A fs. 1.211 (Tomo IV), certificado de nacimiento de **Ricardo Augusto Schmidt Arriagada**, el 25 de diciembre de 1952, madre: Aurora del Carmen Arriagada Vergara, padre: Otto Schmidt Weber.

B.19.4. A fs. 1.212 (Tomo IV), extracto de filiación y antecedentes de Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, sin antecedentes.

B.19.5. A fs. 1.213 (Tomo IV), certificado de nacimiento de **Juan de Dios Cabrera Figueroa**, el 03 de noviembre de 1952, madre: Eufemia Figueroa Arias, Padre: Ricardo Cabrera Henríquez.

B.19.6. A fs. 1.214 (Tomo IV), extracto de filiación y antecedentes de Juan de Dios Cabrera Figueroa, sin antecedentes.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

B.19.6. A fs. 1215 (Tomo IV), certificado de nacimiento de **Alejandro Escobar Vásquez**, el 11 de octubre de 1954, madre: María Inés Vásquez Zeballos, padre: Daniel Escobar niñez.

B.19.7. A fs. 1216 (Tomo IV), extracto de filiación y antecedentes de Alejandro Escobar Vásquez, sin antecedentes.

B.19.8. A fs. 1217 (Tomo IV), certificado de **defunción de Alejandro Escobar Vásquez**, fecha de defunción 31 de diciembre de 1975, causa de muerte: muerte presunta.

B.19.9. A fs. 1.219 (Tomo IV), certificado de nacimiento de **Héctor Domingo Aguayo Olavarría**, el 10 de junio de 1956, madre: Cirila Olavarría Jaramillo, padre: Francisco Aguayo Gallegos.

B.19.10. A fs. 1.220 (Tomo IV) (copia a fs. 2.773 Tomo VIII), extracto de filiación y antecedentes de Héctor Domingo Aguayo Olavarría, "4 Milita Fiscalía de Carabinero de Cautín. Declarado reo: 6 septiembre de 1973. Delito: Tenencia y porte ilegal de arma de fuego".

B.19.11. A fs. 1.221 (Tomo IV), certificado de nacimiento de **Raúl Marcial Figueroa Burkhardt**, el 08 de febrero de 1951, madre: Olga Enriqueta Burkhardt Gavilán, padre: Raúl Flavio Figueroa Espinoza.

B.19.12. A fs. 1.222 a fs. 1.223 (Tomo IV) (copia a fs. 2.789 Tomo VIII), extracto de filiación y antecedentes de Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, que en registro general de condenas lleva anotado causa rol 3.588, Tribunal Fiscalía Naval de Valparaíso, declaración de reo: 21 de octubre de 1971, delito: deserción simple. Resolución 4 de febrero de 1972, condenado a 41 días de arresto militar.

B.19.13. A fs. 1224 (Tomo IV), certificado de nacimiento de Elías Dagoberto González Ortega, el 28 de diciembre de 1948, madre: Rita Aurora Ortega Muñoz, padre: Marcos Justiniano González González.

B.19.14. A fs. 1225 (Tomo IV), extracto de filiación y antecedentes de Elías Dagoberto González Ortega. Sin anotaciones.

B.19.15. A fs. 1226 (Tomo IV), certificado de nacimiento de Hugo Arner González Ortega, el 06 de junio de 1950 madre: Rita Aurora Ortega Muñoz, padre: Marcos Justiniano González González.

B.19.16. A fs. 1227 (Tomo IV), extracto de filiación y antecedentes de Hugo Arner González Ortega.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

B.19.17. A fs. 1.228 (Tomo IV), consta red familiar de **Hugo Arner González Ortega**. Padre Marcos Justiniano González, madre Rita Aurora Ortega Muñoz. Hermanos Elibeth González Ortega, Juana Eugenia González Ortega, Luisa Noemí González Ortega, Neftalí González Ortega, Othniel Isaac González Ortega, Ruth Alicia González Ortega, Rita Aurora González Ortega y Elías Dagoberto González Ortega.

B.19.18. A fs. 1229 (Tomo IV), consta red familiar de **Elías Dagoberto González Ortega**, Padre Marcos Justiniano González, madre Rita Aurora Ortega Muñoz. Hermanos: Elibeth González Ortega, Juana Eugenia González Ortega, Luisa Noemí González Ortega, Neftalí González Ortega, Othniel Isaac González Ortega, Ruth Alicia González Ortega, Rita Aurora González Ortega y Elías Dagoberto González Ortega.

B.19.19. A fs. 1.229 (Tomo IV), consta red familiar de **Raúl Marcial Figueroa Burkhardt**. Padre Raúl Flavio Figueroa Espinoza, madre Olga Enriqueta Burkhardt Gavilán. Hermanos: David Iván Figueroa Burkhardt y Ricardo Secundino Figueroa Burkhardt.

B.19.20. A fs. 1.229 (Tomo IV), consta red familiar de **Héctor Domingo Aguayo Olavarría**. Padre Francisco Aguayo Gallegos, madre Cirila Olavarría Jaramillo. Hermanos: Evita Valentina Aguayo Olavarría, Nelly Sara Aguayo Olavarría, y Ricardo Virginia Aguayo Olavarría.

B.19.21. A fs. 1.230 (Tomo IV), consta red familiar de **Alejandro Escobar Vásquez**. Padre Daniel Escobar Núñez, madre Maria Inés Vásquez Ceballos. Hermanos: Adela Escobar Vásquez, Vicente Edmundo Escobar Vásquez, Daniel Segundo Escobar Vásquez, Érica Escobar Vásquez, Francisca Irene Escobar Vásquez, Isaías Guillermo Escobar Vásquez, Juan Escobar Vásquez, Carmela Escobar Vásquez, Maria Haydee Escobar Vásquez, Matilde Escobar Vásquez y Pedro Juan Escobar Vásquez.

B.19.22. A fs. 1.230 (Tomo IV), consta red familiar de **Juan de Dios Cabrera Figueroa**. Padre Ricardo Cabrera Henríquez, madre Eufemia Figueroa Arias. No registra hermanos en el sistema.

B.19.23. A fs. 1.231 (Tomo IV), consta red familiar de Ricardo Augusto Schmidt Arriagada. Padre Otto Schmidt Weber, madre Aurora del Carmen Arriagada Vergara. Hermanos: Susana Elena Apablaza Arriagada, Maria del

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Carmen Arriagada, Carlos Schmidt Arriagada, Silvia Luz Schmidt Arriagada, Isolde Yolanda Schmidt Arriagada y Elisa Margarita Schmidt Arriagada.

B.19.24. A fs. 1.232 (Tomo IV), Juan Carlos Schmidt Arriagada, indica que no figura persona con dicho nombre en sistema; sí figura don Carlos Schmidt Arriagada, nacido el 24-10-1951 según inscripción de nacimiento N°103, año 1965 circunscripción Pucón. Sin fallecimiento en el sistema. Registrando en el sistema la red familiar como su cónyuge Elena del Carmen Santibáñez Fernández. Que, de acuerdo con lo antecedentes, la persona es hermano de Ricardo Augusto Schmidt Arriagada. Correspondiéndola la misma red familiar, detallada precedentemente.

B.20. A fs. 2.194 (Tomo VII), informe del Alcaide del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, informa que Ricardo Virginio Aguayo Olavarría, estuvo en el recinto penitenciario conforme a los siguientes antecedentes: fecha de ingreso: 14.09.1973, Juzgado: Fiscalía del Ejercito de Cautín. Causa: no se indica, Delito: Ley 17.798, fecha de egreso: 27.09.1973, libertad N° 24.

B.21. A fs. 2.938 a fs. 2.957 (Tomo IX), copia de la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema en recurso de revisión de causa rol 1488- 2018, debido a los consejos de Guerra realizados en la ciudad de Temuco en el año 1973.

B.22. A fs. 2.979 a fs. 2.998 (Tomo IX), copia de Consejos de Bandos Militares para la Providencia de Cautín. Entre ellos de la Junta Provincial de Gobierno de Cautín, 1°er suplemento documental, colección de bandos para la provincia de Cautín, del diario Austral.

B.23. A fs. 3.042 a fs. 3.043 (Tomo IX) (copia a fs. 3.786 a fs. 3.787 Tomo XI), copia del acta suscrita por el pleno de la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco, de fecha 17 de septiembre de 1973. Que en lo pertinente suscribe que: “El señor Presidente dio cuenta de haber recibido momentos antes en audiencia al abogado don Alfonso Podlech, quien le manifestó que habría sido designado Fiscal Militar ad-hoc y que con motivo del estado de sitio en que se encuentra el país, había a disposición de la Fiscalía Militar gran cantidad de detenidos, por lo que el número de actuarios con que contaba no era suficiente para interrogar con las exigencias del caso de esas personas. Que ante la situación presentada el señor Coronel Intendente... le habría encomendado que se entrevistara con el

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Presidente de la Corte, a fin de pedirle una cooperación para que se pusiera a disposición de la Fiscalía...”.

B.24. A fs. 3.235 a fs. 3.240 (Tomo IX), documento elaborado con fecha 09 de septiembre de 2015 por el periodista Juan Pablo Jarufe Bader de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, titulado “Los Consejos de Guerra tras el 11 de septiembre de 1973”. Que aduce en lo pertinente: “De acuerdo al artículo 81 del Código de Justicia Militar, los consejos de guerra son concebidos como la única instancia para conocer delitos propios del "tiempo de guerra". Si bien los acusados tenían una oportunidad de defensa y dos de apelación, ante la Corte Marcial y la Corte Suprema, respectivamente; en la práctica las sentencias de estos órganos especiales eran inapelables, toda vez que, tras el 11 de septiembre de 1973, el máximo tribunal de justicia adujo falta de competencia sobre los tribunales militares en tiempo de guerra”.

B.25. Certificado de defunciones:

B.25.1. A fs. 3.500 (Tomo X), certificado de defunción de Nelson Manuel Uldarico Ubilla Toledo.

B.25.2. A fs. 3.501 (Tomo X), certificado de defunción de Manuel Hugo Espinoza Ponce.

B.25.3. A fs. 3.502 (Tomo X), certificado de defunción de Luis Valeria Candia.

B.25.4. A fs. 3.503 (Tomo X), certificado de defunción de Jaime Alberto Retamal Molina.

B.25.5. A fs. 3.504 (Tomo X), certificado de defunción de Juan Omar Salazar Cereceda.

B.25.6. A fs. 3.505 (Tomo X), certificado de defunción de José Máximo Chávez Etchepare.

B.25.7. A fs. 3.506 (Tomo X), certificado de defunción de Pablo Exequiel Silva Gómez.

B.25.8 A fs. 4.147 (Tomo XII), certificado de defunción de Aquiles Alfonso Poblete Müller.

B.26. A fs. 3.799 (Tomo XI), fotografía del año 1973, en que aparecen entre otros, Jaime García Covarrubias y Nelson Ubilla Toledo.

B.27. A fs. 3.903 a fs. 3.979 (Tomo XI), copia simple de las páginas pertinentes de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

caso "Almonacid Arellano y otros versus Chile, de fecha 26 de septiembre de 2006.

B.28. A fs. 3.981 a fs. 4.012 (Tomo XI y XII), copia simple de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recaída en el caso "Barrios Altos versus Perú", de fecha 14 de marzo de 2001.

B.29. A fs. 4.014 a fs. 4.132 (Tomo XI), copia simple del informe final "Reflexiones sobre las actuaciones del Ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el ethos militar". En lo pertinente refiere que es un análisis crítico que busca, revisar el pasado reciente y la expresión de un deber genuino que nace de los preceptos de la ordenanza general que rige a partir del siglo XXI.

B.30. Extractos de filiación y antecedentes de las siguientes personas:

B.30.1. A fs. 4.134 a fs. 4.135 (Tomo XII), Raimundo Ignacio García Covarrubias, sin antecedentes a la fecha de los hechos.

B.30.2. A fs. 4.136 a fs. 4.137 (Tomo XII), Pedro Guillermo Manuel Tichauer Salcedo, sin antecedentes a la fecha de los hechos.

B.30.3. A fs. 4.138 a fs. 4.139 (Tomo XII), Romilio Osvaldo Lavín Muñoz, si antecedentes a la fecha de los hechos.

B.30.4. A fs. 4.149 a fs. 4.151 (Tomo XII), Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, no registra condenas para la fecha de los hechos.

B.31. A fs. 4.156 (Tomo XII), orden de libertad emitida por la Fiscalía Militar Cautín de Temuco. Dirigida a carabineros de Chile, subcomisaria de Villarrica, la cual dispone la libertad de Fernando Cortes Bornard y Ubildo Antonio Jiménez Varas Firmada por fiscal.

B.32. A fs. 4.157 a fs. 4.185 (tomo XII), informe Pericial Documental N°548 elaborado por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile, análisis de firma que concluye que los antecedentes examinados en esta oportunidad facultan para establecer que la firma impugnada trazada sobre el texto que indica Fiscal, en la orden de libertad N° S/N, de la Fiscalía Militar de Cautín Temuco, de fecha 28 de septiembre de 1973, dirigida a carabineros de Chile, subcomisaria de Villarrica, la cual dispone la libertad de Fernando Cortes Bornard y Ubildo Antonio Jiménez Varas, es genuina de Oscar Alfonso Podlech Michaud. No se emite pronunciamiento respecto a la eventual intervención escrituraria de Oscar Alfonso Podlech Michaud, en la confección del texto se indica "Peligroso pasarlo SIM", en la declaración de fecha 26 de

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

septiembre de 1973, otorgada por Osvaldo Bastías Zeron, director del tránsito de la Municipalidad de Villarrica, acorde a lo señalado en el punto respectivo del informe.

B.33. A fs. 4.186 a fs. 4.192 (Tomo XII), informe Pericial Documental N° 465 elaborado por el Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones de Chile, que concluye que la evolución de los antecedentes examinados en esta oportunidad, permiten establecer que la firma impugnada, suscrita sobre el texto “Luis A. Jofré Soto Mayor Fiscal” en la copia de autorización fechada en Temuco el 18 de diciembre de 1973, dirigida al doctor Wolfgang Reuter B, Hospital Regional, emanada de la Fiscalía Militar de Cautín Temuco del Ejército de Chile, es genuina de Oscar Alfonso Podlech Michaud.

B.34. Órdenes de investigar debidamente diligenciada por el Departamento V de Asuntos Internos de la Policía de Investigaciones de Chile, que se desglosan de la siguiente forma:

B.34.1. A fs. 9 a fs. 12 (Tomo I), informe policial N° 303 contiene individualización de carabineros que servían en las unidades de Curarrehue, Pucón y Villarrica el 13 de septiembre de 1973.

B.34.2. A fs. 15 a fs. 19 vta. (Tomo I), informe policial N° 302 que contiene individualización de oficiales y suboficiales que servían en el regimiento Tucapel de Temuco el 13 de septiembre de 1973. En lo pertinente Fiscalía Militar de Temuco, Fiscal, mayor Luis Armando Jofre Soto. Asesor Oscar Alfonso Podlech Michaud.

B.34.3. A fs. 21 a fs. 65 (Tomo I), informe policial N° 305 que contiene declaración voluntaria de Ruth Alicia González Ortega, Silvia Luz Schmidt Arriagada, Guido Krause Pardo, José Eliseo Arriagada Vergara, Diógenes Segundo Bravo Bernal, Luis Armando Jofré Soto, Adrián Segundo González Maldonado.

B.34.4. A fs. 1.261 a fs. 1.291 (Tomo IV), informe policial N°2181 contiene declaración voluntaria de Víctor Maturana Burgos, Teodoro Salomon Ribera Beneit, Sigisfredo Jara Contreras, Nelson Thieleman Rodríguez, Orlando Moreno Vásquez, Gonzalo Enrique Arias González, Oscar Alfonso Podlech Michaud, Nelson Ubilla Toledo, Elías Amar Amar, Elcídes Gubelín Duran.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

B.35. Ordenes de investigar debidamente diligenciadas por la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile, que se desglosan de la siguiente forma:

B.35.1. A fs. 8 a fs. 23 (**cuaderno secreto**), informe policial N° 1037 contiene declaración voluntaria de Arnoldo Aedo Matus, José Marihueque Muñoz, Sigisfredo Concha San Martín, José Krause Álvarez, Arturo Padilla Bascuñán, Luis Peña Gatica, Enrique Castro Obreque, Héctor Celedón Fuentes, José Curiqueo Colicheo.

B.35.2. A fs. 46 a fs. 89 (**cuaderno secreto**), informe policial N°5579 que contiene declaración voluntaria de Luis Manríquez Figueroa, Jaime Soto Valdivieso, Bernardo Lizama Moraga, José Matamala Cofré, Pedro Ortiz Quiroz, José Insunza Reyes, Nelson Schaaff Mora, Carlos Herrera Muñoz, Víctor Contreras Briones, Juan Campos Valdebenito, Juan Obreque Castillo, Juvenal Lagos Osses, Héctor Saavedra Peña, Jaime medina Caro, Manuel Fernández Carranza, Rafael Vidal Pérez.

B.35.3. A fs. 116 a fs. 122 (**cuaderno secreto**), informe policial N° 207 que contiene declaración voluntaria de Celedonio Aburto Fuentes, Mario Arias Díaz, Raimundo García Covarrubias, Pedro Tichauer Salcedo.

B.35.4. A 467 a fs. 480 (**Tomo II**), informe policial N°1550/202/514 que contiene declaración voluntaria de René Díaz Cortés, Juan Díaz Cortés y Manuel Humaña Jiménez.

B.35.5. A fs. 560 a fs. 589 (**Tomo II**), informe policial N° 5038/202/514 que contiene declaración voluntaria de Luis Cid Hernández, Renato Saravia Flores, Baldomero Salazar Salgado, Renato Santana Dubreuil, René Díaz Cortez.

B.35.6. A fs. 601 a fs. 647 (**Tomo II**), informe policial N° 147/202 que contiene declaración voluntaria de Rubén Enrique Leal Riquelme, Serbando Castillo Morales, Luisa González Ortega, Evita Aguayo Olavarría, Elisa Schmidt Arriagada, Julio Guevara Guevara, Francisco Matta Iturra, se adjunta al informe policial lo siguiente: copia fotostática del certificado de nacimiento de Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, copia fotostática de carta direccionada a Víctor Maturana Burgos, presidente del centro de investigación y promoción de los derechos humanos, copia fotostática de declaración jurada de Silvia Schmidt Arriagada, artículo de prensa del diario la tercera de fecha 20 de junio de 1990, copia fotostática de fotografía de Ricardo Augusto Schmidt

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Arriagada, copia fotostática de documento de fiscalía militar de Cautín, de fecha 28 de noviembre de 1973.

B.35.7. A fs. 723 a fs. 781 (Tomo III), informe policial N.° 309/514/202 que contiene declaración voluntaria de Matilde Escobar Vásquez, David Figueroa Burkhardt, Laura Pinilla Fuentes, Carlos Barra Matamala, Joaquín López Bizama, Guido Krause Pardo, Plácido Regolo Zúñiga, Francisco Sandoval Hernández, Ricardo Espinoza Pailaqueo.

B.35.8. A fs. 812 a fs. 845 (Tomo III), informe policial N° 4260/514/202 que contiene declaración voluntaria de Eduardo Vergara González, Robinson Vergara Vergara, Medardo Medrano Torres, Guido Troncoso Ávila, José Carrasco Rodríguez, Raúl Aedo, Ramón González Navarro.

B.35.9. A fs. 889 a fs. 895 (Tomo III), informe policial N° 5402/514/202 que contiene Ramón Torrealba Guzmán, René García Villegas.

B.35.10. A fs. 968 a fs. 974 (Tomo III), informe policial N° 1102/514/202, que contiene ubicación e individualización de testigos de la época.

B.35.11. A fs. 1.000 a fs. 1.024 (Tomo III), informe policial N° 2399/702/514 que contiene declaración voluntaria de Roden Rivas Vega, Guillermo Rosales Pérez, Eduardo Vergara González, Ignacio Cofre Leal, Aliro Canario Rodríguez, José Mancilla Yáñez, Enrique Rebolledo Sotelo.

B.35.12. A fs. 1.678 a fs. 1.702 (Tomo V), informe policial N° 3152/703 que contiene declaración voluntaria de Daniel San Juan Clavería, Hernán Quiroz Barra, Carlos Luco Astroza, Aquiles Poblete Meller, Fernando More Paredes.

B.35.13. A fs. 1.731 a fs. 1.744 (Tomo V), informe policial 5498/0702 que contiene declaración voluntaria de Víctor Terán Vásquez, Libardo Schwarzenski Rubio, María Antonieta Meza Moncada.

B.35.14. A fs. 1.866 a fs. 1.877 (Tomo VI), informe policial N° 3597/514 que contiene Luis Ovalle Pino, Juan Quinteros Ñanculef, Hernán Quinteros Ñanculef.

B.35.15. A fs. 1.930 a fs. 1.934 (Tomo VI), informe policial N° 1710 que contiene declaración voluntaria de Raimundo Quezada Chandía.

B.35.16. A fs. 1.937 a fs. 1.941 (Tomo VI), informe policial N° 5857/514 que contiene declaración voluntaria de Sergio Poblete Poblete.

B.35.17. A fs. 1.943 a fs. 1.945 (Tomo VI), informe policial N° 5865/202 que contiene individualización de Luis Raimundo Quezada Chandía.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

B.35.18. A fs. 2.078 a fs. 2.099 (Tomo VI), informe policial N° 2959/519 que contiene declaración voluntaria de Carlos Lagos Suazo, Ricardo Aguayo Olavarría, Rodolfo Fonseca Fernández, Carlos González Aguayo.

B.35.19. A fs. 2.273 a fs. 2.320 (Tomo VII), informe policial N° 6097/519 que contiene declaración voluntaria de Raúl Roa de la Jara Juan Ortiz Parra, Miguel Calderón Sepúlveda, Rigoberto Gutiérrez Ancamilla, Rubén Sandoval Muñoz, Norbeto Uribe Moroni, José Palazuelos Sáez, Manuel Contreras Salazar, Agustín Reyes Reyes, Juan Millacan Burgos, José Cortez Aedo, Juan Ortiz Parra.

B.35.20. A fs. 2.658 a fs. 2.663 (Tomo VIII), informe policial N° 3511/202 que contiene individualización de testigos de la época.

B.35.21. A fs. 3.068 a fs. 3.091 (Tomo IX), informe policial N°20190031901/00253/207 que contiene individualización de testigos de la época y declaración voluntaria de Juan Evangelista Benavente Jara, Fernando Cruzat Cortés, José Gutiérrez Salamanca, Ricardo Fuentes Cruzat, Rolando Fonseca Venegas.

B.35.22. A fs. 3.777 a fs. 3.783 (tomo XI) informe policial N°20220080897/00812/207 que contiene individualización de testigos de la época, y declaración voluntaria de Esmerildo Castro Torres.

C. Documentos en cuaderno secreto

C.1. A fs. 180 a fs. 183 (cuaderno secreto), informe pericial psiquiátrico remitido por el Servicio Médico Legal, respecto del testigo M.J.C.S., mediante el cual concluye que: “se trata de un hombre sin alteraciones de juicio de realidad. Con un nivel intelectual que por clínica se encuentra en rango normal”.

16°) Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal. Que los elementos de convicción antes reseñados constituyen presunciones judiciales, que por reunir las exigencias del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permiten tener legalmente acreditado que:

A.- 33.- Que inmediatamente ocurrido el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, las nuevas autoridades del país ordenaron la persecución y detención sistemática de los militantes y simpatizantes de los partidos de la Unidad Popular, especialmente de aquellos que ejercían cargos en la depuesta administración pública, según consta, entre otras pruebas, en declaraciones de Luis Robinson Bustos Letelier, de fs. 413 a fs. 414 vta. (Tomo II); de Ricardo Virginio Aguayo Olavarría, de fs. 2.055 a fs. 2.057 (Tomo VI) y de fs. 2.061 a fs.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

2.062 (Tomo VI); bandos militares publicados en la prensa de la época, de fs. 2.979 a fs. 2.998 (Tomo IX).

B.-34.- Que en Temuco las fuerzas armadas y de orden tomaron el control de la ciudad, erigiéndose como Gobernador de Temuco, el Coronel Pablo Iturriaga Marchesse (fallecido, según consta a fs. 3.898 Tomo XI) Comandante del Regimiento de Infantería N.º 8 Tucapel de esta ciudad, quien además quedó como Jefe de la Guarnición de Temuco, según consta por ejemplo en declaración de Oscar Alfonso Podlech Michaud, de fs. 3.788 a fs. 3.796 (Tomo XI).

C.- 35.- Que, en este sentido, el mismo día 11 de septiembre de 1973 fue llamado a colaborar con el nuevo régimen el abogado Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, que además era Teniente de Reserva del Ejército de Chile, quien se presentó en el Regimiento Tucapel para apoyar la gestión de la Fiscalía Militar que funcionaba al interior de la unidad, y que estaba a cargo del Segundo Comandante, Mayor Luis Jofré Soto (Fallecido, según consta a fs. 3.899 Tomo XI). Este oficial, sin embargo, debió asumir mayores funciones como Segundo Comandante del Regimiento Tucapel poco tiempo después, a partir de ese día en adelante comenzaron a llegar personas civiles al Regimiento que fueron llamadas a presentarse ante la Fiscalía Militar mediante bandos publicados en la prensa escrita y en las radios, o que fueron traídas en carácter de detenidas, por patrullas de carabineros y/o militares, desde diferentes puntos de la región, principalmente desde Comisarias y retenes, según consta, entre otras pruebas, en los bandos militares publicados en la prensa de la época, los cuales rolan de fs. 2.979 a fs. 2.998 (Tomo IX); declaraciones de José Heriberto Mansilla Gatica, de fs. 3.806 bis a fs. 3.808 (Tomo XI), fs. 3.809 a fs. 3.810 (Tomo XI) y fs. 3.811 (Tomo XI); y de Orlando Moreno Vásquez, de fs. 3.842 (Tomo XI).

D.- 36.- Que ante el alto número de detenidos y de personas llamadas a prestar declaración, la Fiscalía Militar, fue reforzada para realizar su trabajo con funcionarios del Poder Judicial que fueron solicitados a la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco, por el abogado anteriormente indicado, quien actuando como Fiscal Ad - Hoc realizó una presentación al Pleno del Tribunal de Alzada, tras lo cual fueron asignados en comisión de servicios algunos actuarios de diferentes tribunales y un Relator de la Corte, según consta en declaración de Adrián Segundo González Maldonado, de fs. 70 vta. a fs. 71 (Tomo I); Copia de

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

acta de Pleno de la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco, de fs. 3.786 a fs. 3.787 (Tomo XI), entre otras pruebas.

E.- 37.- Que debido a la falta de conocimiento en materias procesales penales sumado al poco carácter que tenía y al trabajo como Segundo Comandante del Regimiento, el Mayor Luis Jofré Soto fue delegando funciones como Fiscal Militar al abogado asesor de la Fiscalía, don Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, quien comenzó a detentar el cargo de Fiscal de hecho, al punto que efectuó visitas de cárcel y los abogados, familiares e incluso dignatarios eclesiásticos le consultaban a él por el destino de los detenidos, sin embargo, el Mayor Jofré Soto continuó firmando la mayoría de las veces el despacho administrativo y participó en algunos interrogatorios de detenidos, según consta en declaraciones de Rodolfo Fonseca Fernández, de fs. 2.052 a fs. 2.054 (Tomo VI) y de fs. 2.506 a 2.507 (Tomo VII); de Eliana Pichón Seguel, de fs. 4.211 a fs. 4.214 (Tomo XII), y de fs. 4.237 a fs. 4.240 (Tomo XII); de Bernardita del Carmen Weisser Soto, de fs. 4.215 a fs. 4.218 (Tomo XII); de Monseñor Bernardino Piñera Carvallo, de fs. 4.219 a fs. 4.220 (Tomo XII); de Erasmo Ricardo Villanueva Simón, de fs. 4.221 a fs. 4.224 (Tomo XII); de Mario Carril Huenumán, de fs. 4.225 a fs. 4.226 (Tomo XII); de Octavio Zúñiga Corvalán, de fs. 4.241 a fs. 4.242 (Tomo XII); y de Audito Gavilán Tapia, de fs. 4.243 a fs. 4.245 (Tomo XII), entre otras pruebas.

F.- 38.- Que las personas llamadas a presentarse a la Fiscalía Militar y las que fueron traídas en carácter de detenidas desde diferentes puntos de la región eran mantenidas en unas dependencias ubicadas junto a la guardia y en el gimnasio grande. Una vez interrogadas por personal de la Fiscalía Militar, por los detectives agregados al Regimiento o por los propios oficiales que participaban en estas actividades, entre los que se encontraban, Raimundo Ignacio García Covarrubias, Pedro Guillermo Manuel Tichauer Salcedo, Romilio Osvaldo Lavín Muñoz, entre otros integrantes del ejército, algunas eran dejadas en libertad, para posteriormente ser aprendidas nuevamente según se detallará en el punto en el numeral 44.-, otras enviadas a sus casas con arresto domiciliario y otras conducidas hasta la cárcel pública donde permanecían mientras se resolvía su situación procesal, según consta entre otras pruebas, en declaraciones de Héctor Omar Barra Reyes, de fs. 1.394 a fs. 1.395 (Tomo IV); de José Sebastián Venegas Umanzor, de fs. 1.448 a fs. 1.449 (Tomo V); de Daniel San Juan Clavería, de fs. 3.617 a fs. 3.618 (Tomo X), de fs. 3.619 a fs. 3.620 (Tomo X); de Raúl Cerda

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Aquilef, de fs. 3.804 a fs. 3.805 (Tomo XI); y de José Heriberto Mansilla Gatica, de fs. 3.819 (Tomo XI).

G.- 39.- Que también para septiembre de 1973 en el Regimiento de Infantería N° 8 “Tucapel” de Temuco existía la Sección Segunda de Informaciones e Inteligencia, la cual se encontraba a cargo del Capitán Nelson Manuel Uldaricio Ubilla Toledo (fallecido según consta a fs. 3.500 Tomo X), quien, además, ejercía una dualidad de funciones por ser también el Comandante de la Compañía de Plana Mayor y Servicios de dicho Regimiento. En cuya Sección Segunda, y bajo la dependencia, también desarrollaban funciones, además, algunos suboficiales de esa institución, labor que fue reforzada después del 11 de septiembre de 1973 con la agregación de funcionarios de Investigaciones y de Carabineros, los que entregaban información de carácter político al mencionado oficial de todas aquellas personas sujetas a una investigación por parte de la Fiscalía Militar. De igual modo se sumaron a las tareas de inteligencia algunos oficiales, clases y conscriptos del Regimiento, hechos que constan entre otras pruebas, en declaraciones de Manuel Fernández Carranza, de fs. 2.764 a fs. 2.765 (Tomo VIII); de Mario Hernán Arias Díaz, de fs. 236 a fs. 242 (Cuaderno secreto); de Hernán Quiroz Barra, de fs. 3.621 a fs. 3.622 (Tomo X); y de Edison Armando Coronado Ormeño, de fs. 4.231 a fs. 4.232 (Tomo XII).

H.- 40.- Que con el correr de los días la Fiscalía Militar y la Sección Segunda de Inteligencia comenzaron a trabajar mancomunadamente para interrogar a los detenidos, los cuales permanecían reclusos en la cárcel o en alguna dependencia del Regimiento Tucapel. Para articular este trabajo se habilitaron dos locaciones en la unidad militar, ubicadas una entre las Compañías de Plana Mayor y la de Morteros y otra en un antiguo gimnasio en desuso que se ubicaba a un costado del “rancho” de soldados conscriptos. De este modo los detenidos eran interrogados en la Fiscalía Militar y apremiados físicamente en alguna de las dependencias antes indicadas para “ablandarlos” antes o después de estos interrogatorios, según consta, entre otras pruebas, en declaraciones de Ernesto García Isla, de fs. 1.381 a fs. 1.382 (Tomo IV); de Víctor Manuel Terán Vásquez, de fs. 3.820 (Tomo XI), de Pedro Misael Elgueta Muñoz, de fs. 3.825 a fs. 3.826 (Tomo XI) y de Orlando Moreno Vásquez, de fs. 3.840 a fs. 3.841 (Tomo XI).

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

I.- 41.- Que en ambas salas de interrogatorio y de tortura existían implementos para amarrar a los detenidos y aplicarles electricidad en diferentes partes del cuerpo, además de aplicarles otro tipo de tormentos como golpes de pies y puños. En esta tarea participaban soldados conscriptos, que colaboraban con el Capitán Nelson Ubilla Toledo. También participaron en las sesiones de interrogatorios y/o tortura de detenidos en esos lugares algunos oficiales del Regimiento “Tucapel” y algunos soldados clases de las Compañías de Plana Mayor y Servicios; todos quienes en distintos momentos ingresaban a estas dependencias, según consta en las declaraciones de Rigoberto Antonio Gutiérrez Ancamilla, de fs. 2.168 (Tomo VII); de Miguel Arcángel Calderón Sepúlveda, de fs. 2.169 a fs. 2.170 (Tomo VII); de José Raúl Inzunza Reyes, de fs. 2.741 a fs. 2.743 (tomo VIII); de Libardo Hernán Schwartenski Rubio, de fs. 3.830 a fs. 3.831 (Tomo XI); y de Juan Humberto Carrillo Rebolledo, de fs. 4.208 a fs. 4.210 (Tomo XII).

J.- 42.- Que, sumado todo lo anterior, dentro de la mencionada unidad militar se formó un grupo especial denominado “Patrulla Brava” o “Patrulla Chacal” integrado por soldados Clase y conscriptos de la Segunda Compañía de Cazadores, quienes a su vez recibía órdenes de un oficial. Este grupo se encargaba, entre otras funciones, de custodiar a los detenidos que eran mantenidos en las dependencias del Regimiento “Tucapel” de Temuco, según consta en las declaraciones de Plácido Exequiel Regolo Zúñiga de fs. 756 a fs. 757 (tomo III) y de fs. 913 a fs. 914 (tomo III); Manuel Rafael Campos Ceballos, de fs. 3.541 a fs. 3.542 (tomo X); de Héctor Villablanca Huenulao, de fs. 3.556 a fs. 3.557 (tomo X); de Sergio Orlando Vallejos Garcés, de fs. 3.571 a fs. 3.573 (tomo X) y de fs. 3.574 a fs. 3.576 (tomo X); y de Juan Carlos Concha Belmar, de fs. 3.591 a fs. 3.593 (tomo X).

K.- 43.- Que a nivel regional, en la comuna de Villarrica las Fuerzas de Orden y Seguridad encabezadas por Carabineros procedieron a allanar los domicilios de personas que eran reconocidamente partidarios del gobierno recientemente derrocado, con el objeto de proceder a su detención, y en muchos casos, posterior traslado vía terrestre o aérea hasta las dependencias del Regimiento Tucapel de Temuco, con el objeto de ser puestas a disposición de la Fiscalía Militar, según consta en las declaraciones de Diógenes Segundo Bravo Bernal, de fs. 60 a fs. 61 (Tomo I) y de fs. 72 vuelta a fs. 73 (Tomo I); de Eduardo Vergara González, de fs. 397 a fs. 397 vuelta (Tomo II); de José Eve

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Mancilla Yáñez, de fs. 399 a fs. 400 (Tomo II); y de Guillermo Segundo Rosales Pérez de fs. 719 (Tomo II).

L.- 44.- Que, tras la dinámica de detenciones y posterior traslado, en muchos casos, hasta las dependencias de Regimiento Tucapel de Temuco durante los días posteriores al 11 de septiembre de 1973, resultaron muertas o desaparecidas un número importante de personas en la IX región, siendo explicadas varias de estas muertes por las autoridades militares regionales, mediante la publicación de bandos emanados ya sea desde la Intendencia o desde la Guarnición Militar de Temuco. En otros casos, las víctimas fueron puestas en libertad para inmediatamente ser aprendidas e ingresadas nuevamente en calidad de detenidas a las dependencias del mismo Regimiento o a otra institución, con el objeto de ser apremiadas físicamente a tal punto que muchas de ellas fallecieron producto de las torturas recibidas. Finalmente, en otros casos, como el de autos, ha existido un total y permanente ocultamiento acerca del paradero de las víctimas tras permanecer recluidos al interior del mismo Regimiento.

LL.- 45.- Que Hugo Arner González Ortega 23 años, Jefe de Vías y Obras de la Municipalidad de Villarrica y militante del Partido Socialista; Elías Dagoberto González Ortega, 24 años, Jefe de Bodegas del Balneario del Banco del Estado de Villarrica, militante del Partido Socialista y encargado de Propaganda en Villarrica; Juan De Dios Cabrera Figueroa, 20 años, estudiante y militante de las Juventudes Socialistas; Carlos Schmidt Arriagada 21 años, empleado de la Corporación de la Vivienda (CORVI) y militante del Partido Socialista; Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, 18 años, estudiante y militante del Partido Socialista; Alejandro Escobar Vásquez, 18 años, estudiante y militante del Partido Socialista; Héctor Domingo Aguayo Olavarría, 17 años, estudiante y militante de las Juventudes Socialistas; y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, 22 años, militante de las Juventudes Socialistas decidieron salir del país por estimar que sus vidas o a lo menos su integridad física corrían serio peligro, porque los domicilios de algunos de estos ya habían sido allanados por Carabineros de Villarrica quienes los buscaban intensamente, según consta en auto de procesamiento de fs. 2.071 y siguiente de esta causa; además en las declaraciones de Rita Aurora Ortega Muñoz, de fs. 48 (Tomo I) y de fs. 1.051 (Tomo III); de Silvia Luz Schmidt Arriagada, de fs. 50 a fs. 51 (Tomo I), de fs. 137 a fs. 138 (Tomo I), fs. 143 (Tomo

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

I), de fs. 635 (Tomo II), de fs. 1.041 a fs. 1.042 (tomo III), de fs. 1.043 a fs. 1.044 (Tomo III) y de fs. 1.053 a fs. 1.054 (Tomo III); de Ruth Alicia González Ortega, de fs. 679 (tomo II); Ricardo Virginio Aguayo Olavarría, de fs. 2.055 a fs. 2.057 (tomo VI), de fs. 2.061 a fs. 2.062 (tomo VI) y de Luis Alberto Romero Molina, de fs. 2.222 a fs. 2.223 (tomo VII) y de fs. 3.312 a fs. 3.313 (tomo X), entre otras pruebas.

M.- 46.- Que el día 13 de septiembre de 1973 los ocho jóvenes antes individualizados tomaron un microbús que los llevaría hacia Curarrehue donde intentarían cruzar hacia la Argentina por algún paso fronterizo. Sin embargo, uno de los jóvenes se arrepintió y lloró, motivo por el cual todos decidieron bajarse del vehículo de movilización colectiva en el sector del puente Río Turbio, cerca de la bifurcación del camino que lleva hacia la localidad de Caburgua y la comuna de Curarrehue, respectivamente. Acto seguido emprendieron la marcha hacia Caburgua, cuidándose de no encontrarse con patrullas militares o de carabineros para no ser detectados, según consta en auto de procesamiento de fs. 2.071 y siguiente de esta causa; además en la declaración de Juan Luis Díaz Cortés, de fs. 4.141 a fs. 4.144 (Tomo XII).

N.- 47.- Que tras haber caminado alrededor de ocho kilómetros divisaron un vehículo que se acercaba desde Pucón. Héctor Domingo Aguayo Olavarría reconoció el vehículo como la camioneta que había pertenecido a su padre y que tiempo atrás había sido vendida a un conocido comerciante de Pucón, por lo que no sospecharon que podría tratarse de una patrulla. Sin embargo, en dicho móvil se trasladaban Luis Robinson Bustos Letelier (fallecido según consta a fs. 6.349 Tomo XVIII), Capitán de Carabineros, jefe de la Subcomisaria de Pucón (procesado a fs. 2.071 y siguiente de esta causa) y otros uniformados de la misma unidad, quienes al ver al grupo de jóvenes en el camino detuvieron su marcha junto a ellos, según consta en auto de procesamiento de fs. 2.071 y siguiente de esta causa; además en las declaraciones de Luis Robinson Bustos Letelier de fs. 58 (Tomo I) y de fs. 84 a fs. 84 vta. (Tomo I); de Diógenes Segundo Bravo Bernal, de fs. 60 (Tomo I) y de fs. 73 (Tomo I), fs. 397 (Tomo II).

Ñ.- 48.- Que Luis Robinson Bustos Letelier (fallecido según consta a fs. 6.349 Tomo XVIII), jefe de la patrulla, después de un breve interrogatorio, dispuso la detención de los ocho jóvenes sin portar, aparentemente, una orden ni facultad legal para tal acto, ordenando su traslado hasta dependencias de la Subcomisaria

de Pucón. Para tales efectos, el Capitán de Carabineros, oficial antes mencionado, y algunos de sus acompañantes se quedaron en el lugar, en tanto que el Cabo Monsalve, chofer del móvil, y otro efectivo se llevaron a los detenidos hasta la Subcomisaria, según consta en declaración de Diógenes Segundo Bravo Bernal, de fs. 60 a fs. 61 (Tomo I) y de fs. 72 vta. a fs. 73 (Tomo I). En aquel lugar, se encontraban también otras personas en su misma calidad, todas detenidas por motivos políticos, entre ellos, Juan Luis Díaz Cortés, simpatizante del gobierno de Salvador Allende, detenido en una primera oportunidad el 14 de septiembre de 1973 en la comuna de Curarrehue y trasladado hasta ese recinto policial, lugar donde observó a Héctor Aguayo Olavarría, a quien conocía desde niño, pudiendo percatarse que aquel se encontraba muy maltratado físicamente, presentaba un testículo inflamado y tenía el pelo rapado en la parte superior de la cabeza. El “Chachi” le comentó donde habían sido detenidos y los motivos por los cuales decidieron regresar a Villarrica, momentos en que fueron interceptados por una patrulla que los detuvo. Agregó que fueron interrogados respecto a la posesión de armas y lugar donde las escondían, al mismo tiempo en que los sometían a golpizas interminables. Posteriormente Juan Luis Díaz Cortés, junto a otros detenidos fueron retirados de ese recinto policial. Hechos que constan, entre otras pruebas, en declaración de Luis Robinson Bustos Letelier de fs. 58 (Tomo I); y de Juan Luis Díaz Cortés, de fs. 4.141 a fs. 4.144 (Tomo XII).

O.- 49.- Que cuando Bustos Letelier regresó a la unidad, fue informado por el Suboficial de guardia Diógenes Bravo Bernal que los detenidos habían sido trasladados hacia el Regimiento Tucapel de Temuco, según consta en declaración de Luis Robinson Bustos Letelier, de fs. 58 (Tomo I).

P.- 50.- Que las víctimas fueron efectivamente ingresados hasta las dependencias del Regimiento de Infantería N°8 Tucapel de Temuco, lugar donde, como se dijo, a partir del 11 de septiembre de 1973 se mantuvieron en calidad de detenidos únicamente por su filiación política un gran número de personas provenientes de diferentes puntos de la región. Tras ello, habrían sido dejadas momentáneamente en libertad, según consta en declaración de Rolando Chávez Godoy, de fs. 3.314 a fs. 3.315 (Tomo X) y de fs. 3.316 (Tomo X); para luego ser nuevamente detenidos y en esta ocasión, apremiados y torturados al interior del mismo Regimiento. Y por razones no esclarecidas en autos, trasladadas hasta la cárcel pública de la ciudad de Temuco, según consta en declaración de Julio

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Cesar Guevara Guevara a de fs. 213 bis a fs. 215 (Tomo I), para finalmente regresar en calidad de detenidas nuevamente a las dependencias del Regimiento Tucapel de Temuco.

Q.- 51.- Que en el citado Regimiento, las víctimas fueron vistas por otras personas que se encontraban en su misma calidad, tal es el caso, del ciudadano español Francisco Jerónimo Matta Aro, detenido entre Pucón y Curarrehue aproximadamente el día 13 de septiembre de 1973, quien le confesó a su hijo que conocía a Héctor Aguayo Olavarría dado que el padre de aquel era del partido socialista y amigo de su familia, que ambos fueron trasladados en calidad de detenidos hasta las dependencias del Regimiento Tucapel de Temuco, y quedaron a disposición del Fiscal Militar Alfonso Podlech Michaud, quien dispuso la expulsión de su padre del territorio nacional por ser supuestamente financista de la guerrilla del MIR y del Partido Socialista, y ordenó a Héctor Aguayo junto a otra persona, permanecer en la Fiscalía dado que serían interrogados, según consta a fs. 626 a fs. 627 (Tomo II) y de fs. 786 a fs. 787 (Tomo III). Por su parte, Manuel Antonio Humaña Jiménez, Director para esa época de la escuela N° 17 de Curarrehue y Secretario de la Asamblea Cristiana de esa comuna, detenido allí el día 17 de septiembre de 1973 y trasladado hasta las dependencias del Regimiento Tucapel de Temuco, no solamente vio en dicho recinto a Héctor Aguayo Olavarría, su alumno de aquel colegio, sino que además, este se le acercó, abrazó y lloró en sus brazos, manifestándole que había sido detenido el día anterior junto a un grupo de amigos en el sector de El Turbio de Pucón, para finalmente ser trasladados hasta ese lugar; hechos que constan de fs. 478 a fs. 479 (Tomo II), de fs. 501 a fs. 506 (Tomo II), de fs. 559 (Tomo II) y de fs. 3.854 a fs. 3.857 (Tomo XI). Así también, en el gimnasio del Regimiento, pero en los baños de este recinto, Renato Arturo Santana Dubreuil, Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), pudo intercambiar palabras con Héctor Aguayo Olavarría, a quien conocía con el apodo “el Chachi” y sabía que tenía tan sólo 16 años, según consta de fs. 581 a fs. 583 (Tomo II), de fs. 799 (Tomo III). Lo mismo ocurre con René Esteban Díaz Cortés, simpatizante del gobierno de Salvador Allende para ese entonces, detenido el día 17 de septiembre de 1973 en la comuna de Curarrehue, y traslado hasta el gimnasio del citado Regimiento, lugar donde observó un número indeterminado de personas detenidas y particularmente a un grupo de 8 jóvenes, entre los que se encontraba Héctor Aguayo Olavarría, a quien

también reconocía con el apodo “el Chachi” desde hace años en Curarrehue, pudiendo percatarse que todos los jóvenes se encontraban sentados en el suelo con las piernas cruzadas, amordazados y con sus manos amarradas a la espalda, según consta de fs. 474 a fs. 475 (Tomo II), y de fs. 800 (Tomo III). En este mismo sentido, Juan Luis Díaz Cortés, simpatizante del mismo gobierno, quien como se dijo, en su primera detención había visualizado a Héctor Aguayo en la Subcomisaria de Carabineros de Pucón, fue detenido en una segunda oportunidad en la comuna de Curarrehue junto a su hermano René Díaz el 17 de septiembre de 1973, para posteriormente ser trasladado al Regimiento Tucapel de Temuco, lugar donde Héctor Aguayo Olavarría, directamente le señaló que sabía que los militares de ese lugar lo matarían, dado que ya se lo habían manifestado. Posterior a ese episodio y en horas de la tarde, les ordenaron formarse en el patio del Regimiento, lugar donde un oficial, del cual el Sr. Díaz desconoce identidad, leyó un documento, nombrando a algunos detenidos, entre los que se encontraba su hermano, René Díaz Cortés, Héctor Aguayo Olavarría y a los hermanos Schmidt, prisioneros que fueron trasladados hasta la guardia del Regimiento, puntualizando que sólo su hermano regresó y que jamás volvió a ver a los demás detenidos, según consta a fs. 476 a fs. 477 (Tomo II) y de fs. 666 (Tomo II). Que como se observa, la dinámica respecto a los 8 jóvenes detenidos y secuestrados correspondió a una forma habitual que tenían las fuerzas armadas y de orden de aquella época respecto a los opositores al régimen militar que consistía que, una vez detenidos un par de días o semanas, eran puestos en libertad (falsa libertad) para luego cuando salían del recinto ser detenidos nuevamente y llevados a esa dependencia. Los hechos hasta el momento descritos dan cuenta de esta situación. Sin perjuicio de lo que a continuación se expondrá.

R.- 52.- Que por esos días, al interior del Regimiento Tucapel de Temuco, se encontraba cumpliendo servicios en la Compañía de Plana Mayor y Servicios, un conscripto de iniciales M.J.C.S, quien tras observar las fotografías de Héctor Aguayo Olavarría, Elías González Ortega y Hugo González Ortega, las cuales rolan de fs. 5 a fs. 7 Del cuaderno secreto de autos, pudo reconocer perfectamente a aquellos, cuando estos estaban siendo torturados en una sala ubicada en la Compañía de Plana Mayor y Servicios del Regimiento Tucapel de Temuco, lugar donde estaban presentes dos oficiales y un grupo de detectives; manifestando que los detenidos eran trasladados a esta dependencia ante la vista

de todos los que se encontraban en la Compañía, dado que todos tenían conocimiento acerca de la existencia de la misma. Este conscripto estaba situado a 10 metros de aquella sala y era testigo ocular de cuando a los detenidos se les introducían bolsas de nylon y se les aplicaba corriente en diferentes partes de su cuerpo, así como también, podía escuchar los gritos de dolor producto de lo mismo. Que si bien, manifiesta que en ese tiempo era difícil grabarse los rostros de los detenidos debido a que los rasuraban, se grabó los rostros de las víctimas señaladas porque al ingresar a la sala de torturas se encontraban vendados, pero al salir lo hacían sin venda, motivo por el cual pudo reconocerlos perfectamente, según consta en sus declaraciones de fs.3 a fs. 4, de fs. 35 a fs. 38, de fs. 93 a fs. 95, todas del cuaderno secreto de esta causa.

S.- 53.- Que días posteriores a los hechos descritos en el párrafo precedente, el conscripto de iniciales M.J.C.S en dos ocasiones le correspondió cargar un camión militar con cuerpos de personas fallecidas desde el polígono de tiro de la isla Cautín. En la primera oportunidad cargó 10 cuerpos, todos de sexo masculino cuyas edades fluctuaban entre los 25 y 30 años; mientras que en la segunda vez cargó 8 cuerpos, también de sexo masculino, pero en esta ocasión eran personas más jóvenes que en el caso anterior. Que presentes en el lugar, entre otros, se encontraban algunos conscriptos de su compañía, entre los que recuerda a José Chávez Etchepare y Luis Valeria Candia (fallecidos según consta a fs. 3.505 Tomo X y fs. 3.502 Tomo X). Que si bien era de noche, con la luz de los vehículos pudo observar que efectivamente se trataba de personas jóvenes, los cuales presentaban múltiples impactos de bala, incluso uno de ellos presentaba un impacto de bala en la cabeza, agregando que casi todos tenían sus manos amarradas y a rostro descubierto, pudiendo reconocer según las fotografías de fs. 5 a 7 del cuaderno secreto, que de estos 8 cuerpos, 3 correspondían a Héctor Aguayo Olavarría, y a los hermanos Hugo y Elías González Ortega, según consta en sus declaraciones de fs.3 a fs. 4, de fs. 35 a fs. 38, de fs. 93 a fs. 95, todas del cuaderno secreto de esta causa. Se hace presente que a este testigo reservado de iniciales M.J.C.S se le realizó un peritaje sobre sus facultades mentales, el que indicó que se trata una persona lúcida, orientado en tiempo y espacio; psicomotricidad normal; sin sintomatología productiva al corte; sin alteraciones en el curso ni el contenido del pensamiento ni del lenguaje. Lenguaje notificativo, de buena calidad; Eutímico, con adecuada resonancia

afectiva. No se constata sintomatología ansiosa ni depresiva; en las pruebas de rendimiento se constata memoria conservada. Posee una buena capacidad de abstracción. En definitiva, el peritaje concluyó que se trata de un hombre sin alteración de juicio de realidad, con un nivel intelectual que por clínica se encuentra en rango normal y tiene todas sus funciones corticales superiores conservadas. Peritaje psiquiátrico que rola de fs. 180 a fs. 183, del cuaderno secreto de autos.

T.- 54.- Que tras lo cual, y en ambas oportunidades, el camión salió en dirección al puente Allipén, quedando el junto a los conscriptos de su compañía en el Regimiento, y el personal de la segunda de cazadores se hizo cargo del traslado de los cadáveres hasta el mencionado río. Que este conscripto posteriormente pudo confirmar que el puente Allipén fue el destino final de estos cuerpos, donde eran lanzados a sus aguas, ya que el conscripto Luis Valeria Candia (fallecido a fs. 3.502 tomo X) jactándose de estos hechos le contó de la situación, según consta de fs. 3 a fs. 4 y de fs. 35 a fs. 37 del cuaderno secreto.

U.- 55.- Que en este sentido, días posteriores al 11 de septiembre de 1973, en circunstancias que Rubén Ernesto Sandoval Muñoz, civil que se dedicaba a la pesca recreativa en el río Toltén, entre el tramo Pitrufrquén – Faja Maisan, se encontraba realizando esta actividad junto a José Tomás Palazuelos, cuando encontró alrededor de 12 cuerpos en distintos sectores, todos de sexo masculino, pudiendo recordar que 4 de estos cadáveres eran personas de mayor edad y el resto correspondían a personas muy jóvenes. Que entre los cuerpos que visualizó en el río, especial atención le llamo el de un joven, el cual se encontraba varado en un quebradero del río entre el sector bajada de Piedra y Chesta, y presentaba una perforación en el lado derecho de su cráneo; causándole la impresión que aquello era producto de un disparo. Recuerda que, sobre su cuerpo, en la arena, se encontraban sus documentos de identidad, los cuales indicaban la palabra Villarrica, no pudiendo distinguir su nombre. Que las vestimentas de este joven correspondían a un chaquetón, jeans y zapatillas. No se percató si presentaba otras heridas, dado que por temor prefirió retirarse del lugar, sin embargo, del hallazgo de cadáveres dio cuenta al carabinero Lukowiak (Suboficial Mayor que por ese entonces pertenecía a la dotación de la 5° Comisaria de Carabineros de Pitrufrquén), sin embargo, aquel lo amenazó, motivo por el cual no denunció el hecho en su momento. Que, ante la exhibición de

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

fotografías por parte de este tribunal, Rubén Sandoval Muñoz manifestó que efectivamente el joven que vio en el río se trababa de Héctor Aguayo Olavarría, toda vez que su imagen le quedó muy marcada, principalmente debido a la forma de su nariz, la cual era muy ancha por lo que parecía boxeador, hechos que constan a fs. 2.156 (Tomo VI), fs. 2.645 (Tomo VIII), y fs. 2.305 (Tomo VII).

V.- 56.- Que así también, Juan Esteban Ortiz Parra, botero para esa época, manifiesta que días posteriores al 11 de septiembre de 1973, encontró flotando en las aguas del río Toltén una gran cantidad de cuerpos, y otros; varados en la ribera del río cerca del sector Galpones de la comuna de Pitrufrquén, fijándose particularmente en uno de ellos. Lo anterior, debido que aquel, se trataba de una persona muy joven y pensó que podía tratarse de una persona conocida, motivo por el cual procedió a revisarlo percatándose inmediatamente que no era el caso, dado que entre sus vestimentas encontró un papel de un colegio de Villarrica y alcanzó a distinguir que su apellido era Aguayo; haciendo presente que el cuerpo de este joven presentaba una perforación en la parte posterior de su cráneo, sus manos se encontraban amarradas con alambre de púa, vestía pantalones tipo jeans azul y una chomba. Que, en cuanto a sus características físicas, aparentemente, no superaba los 15 o 16 años, era de baja estatura, no pudiendo precisar más características debido a que el cuerpo se encontraba muy golpeado producto de la acción de las rocas. Que también boteros vieron los cuerpos, mencionando entre ellos, precisamente a Rubén Sandoval, según consta a fs. 2.154 (Tomo VI).

W.- 57.- Que finalmente, tras la detención del día 13 de septiembre del año 1973, los familiares de las víctimas jamás volvieron a tener noticias acerca de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan de Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, motivo por el cual iniciaron una infructuosa búsqueda en los distintos recintos de detención que albergaban prisioneros políticos en aquella época; así por ejemplo, la familia de Héctor Aguayo Olavarría, tras enterarse por Luis Díaz y Esteban Díaz, que Héctor se encontraba detenido al interior del Regimiento Tucapel de Temuco, se dirigieron inmediatamente a este lugar, donde se les negó su detención. Lo mismo ocurrió cuando consultaron por él en la Comisaría de Villarrica. Luego, y debido a la persecución política que sufría la

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

familia, la madre de Héctor Aguayo Olavarría, junto a sus hermano y hermanas, decidieron emigrar hacia Argentina, sin embargo, el padre de Héctor permaneció en Curarrehue en búsqueda de su hijo, lugar donde falleció sin encontrarlo.

X.- 58.- Que en la actualidad permanece sólo el relato existente en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el que da cuenta de la desaparición de estos jóvenes tras su detención del día 13 de septiembre de 1973; pudiéndose comprobar hasta ahora, como se ha dicho, que efectivamente de acuerdo a lo relatado, las víctimas fueron detenidas, al margen de todo proceso judicial, en el sector del puente Río Turbio, cerca de la bifurcación del camino que lleva hacia la localidad de Caburgua y la comuna de Curarrehue por Luis Robinson Bustos Letelier, Capitán de Carabineros, jefe de la Subcomisaria de Pucón, para inmediatamente ser trasladadas hacia dicha unidad Policial, luego conducidas en calidad de detenidos hasta las dependencias del Regimiento Tucapel de Temuco, dejadas momentáneamente en libertad, para luego ser nuevamente aprehendidas; y en esta ocasión, apremiados y torturados al interior del mismo Regimiento. Y como se dijo, por razones no esclarecidas en autos, trasladadas hasta la cárcel pública de la ciudad de Temuco, para finalmente regresar en la misma calidad a las dependencias del Regimiento Tucapel de Temuco, ya que como describe el testigo de iniciales M.J.C.S, cuando le correspondió cargar 8 cuerpos de personas fallecidas desde el polígono de tiro de la isla cautín, reconoció a Héctor Aguayo Olavarría, a Hugo Arner González Ortega y a Elías Dagoberto González Ortega, al menos 3 de las 8 víctimas de autos. Dinámica de detener, otorgar la libertad y luego volver a aprehender a las mismas personas, para ingresarlas nuevamente en calidad de detenidos políticos, era una práctica habitual utilizada por los agentes del Estado.

Y.- 59.- Que los hechos antes mencionados, debieron ser conocidos por la oficialidad al mando de la Compañía de Plana Mayor y Servicios del Regimiento Tucapel de Temuco, entre ellos, Raimundo Ignacio García Covarrubias, Pedro Guillermo Manuel Tichauer Salcedo y Romilio Osvaldo Lavín Muñoz, a la cual pertenecía este conscripto de iniciales M.J.C.S. Y tal como se detalla en el numeral 37 de esta resolución, el señor Alfonso Podlech Michaud actuaba desde el 11 de septiembre de 1973 como Abogado asesor y Fiscal Militar ad-hoc del Regimiento Tucapel de Temuco, interrogando a los detenidos y decidiendo el destino de las personas privadas de libertad, teniendo en esa fecha las facultades

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

decisorias y de orden al interior de las dependencias del mencionado Regimiento. Asimismo, y según se detalló en el numeral 51, en relación con lo manifestado por el ciudadano español Francisco Jerónimo Matta Aro, los hechos fueron conocidos por el abogado Alfonso Podlech Michaud, ya que según lo manifestado por el Sr. Matta a su hijo, fue el señor Podlech quien le ordenó a Héctor Aguayo junto a otra persona, permanecer en la Fiscalía dado que serían interrogados. En este sentido, en su calidad de Fiscal Ad-hoc y Abogado Asesor de la Fiscalía Militar, no denunció ni informó a la superioridad militar ni a otra autoridad de los ilícitos investigados, ni consta que se haya efectuado una investigación, ni la existencia de un registro como consecuencia de la comisión de estos hechos. Eran tales las facultades que tenía este abogado que los propios dichos del Jefe de Guardia de la cárcel pública de Temuco, para octubre de 1973, en su declaración de fs. 4.195 a fs. 4.196 (Tomo XII), manifestó que, atendida la sobrepoblación luego del 11 de septiembre de 1973, fue a hablar con el encargado de la fiscalía militar, aludiendo al abogado antes mencionado, quien “normalizó la situación”. Consecuencia de lo anteriormente expuesto, son las múltiples aseveraciones que han efectuado miembros que prestaron funciones al interior del Regimiento para la época de los hechos investigados, a saber: dichos de Aquiles Poblete Müller (fallecido según consta a fs. 4.147 Tomo XII) Comisario en situación de retiro de la Policía de Investigaciones de Chile, en su declaración de fs. 3.665 (Tomo X) expreso que “el gran responsable de todo esto y quien decidía el destino de los detenidos es el abogado Alfonso Podlech, quien estaba a cargo de la fiscalía militar”. En este mismo orden de ideas resulta relevante tener presente lo explicitado por el Sargento Primero del Regimiento Tucapel, José Heriberto Mansilla Gatica, quien en su declaración judicial de fs. 3.809 (Tomo XI) señaló: “...a septiembre de 1973, el segundo comandante del Regimiento de apellido Jofré, no tomaba declaraciones. Iturriaga Marchesse solo se ocupaba de cosas generales. El trabajo cotidiano de la fiscalía, como interrogar, tomar decisiones con respecto a los detenidos, era de Alfonso Podlech”. Asimismo y para reforzar lo manifestado ut-supra, es de suma importancia mencionar el documento que rola a fs. 4.156 (Tomo XII) que da cuenta de una orden de libertad de dos personas, de fecha 28 de septiembre de 1973, emitido por la Fiscalía Militar de Temuco y firmada por el abogado y fiscal militar ad-hoc en comento, aquello en relación con lo que concluye en el informe pericial documental rolante de fs. 4.157 a fs. 4.185 (Tomo

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

XII), emitido por el Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones de Chile, que entre otras cosas expresa lo siguiente: “los antecedentes examinados en esta oportunidad facultan para establecer, que la firma impugnada trazada sobre el texto que indica FISCAL, en la orden de “LIBERTAT” N° S/N, de la Fiscalía Militar Cautín Temuco, de fecha 28 de septiembre de 1973, dirigida a Carabineros de Chile, Subcomisaria Villarrica, la cual dispone la Libertad de Mario Fernando Cortes Bornard y Ubildo Antonio Jiménez Vargas, es Genuina de Oscar Alfonso Podlech Michaud”, que de igual forma se vincula directamente con el informe pericial documental elaborado por el Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones de Chile, rolante de fs. 4.186 a fs. 4.192 (Tomo XII), en cuanto concluye lo siguiente: “la evaluación de los antecedentes examinados en esta oportunidad, permiten establecer que la firma impugnada, suscrita sobre el texto Luis A. Jofre Soto Mayor Fiscal, en la copia de autorización fechada en Temuco el 18.DIC.973, dirigida al doctor Wolfgang REUTER, Hospital Regional, emanada de la Fiscalía Militar Cautín - Temuco del Ejército de Chile, es genuina de Oscar Alfonso Podlech Michaud” Lo anteriormente expresado corrobora la responsabilidad en estos hechos, del Abogado asesor y Fiscal Militar ad-hoc, antes mencionado.

Z.- 60.- Que hasta la fecha ningún funcionario público del Ejército de Chile o de otra rama de las Fuerzas Armadas y/o de Orden y Seguridad que se desempeñaban en la época de los hechos, han dado algún antecedente a la autoridad respectiva en relación a lo sucedido con Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Juan Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Schmidt Arriagada, Juan de Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, manteniendo hasta el día de hoy el ocultamiento de todo tipo de información acerca de sus paraderos.

AA.- 61.- Que los hechos antes reseñados en este auto acusatorio constituyen los **delitos de detención ilegal** en las personas de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Juan Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Schmidt Arriagada, Juan de Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, previsto y sancionado en el artículo 148 del Código Penal, en su texto

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

vigente a la fecha de los hechos, en su carácter de lesa humanidad, ilícitos ocurridos el 13 de septiembre de 1973.

B.B.- 62.- Asimismo, constituyen los delitos de **Secuestro con grave daño** de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan de Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, previsto y sancionado en el artículo 141 inciso tercero del Código Penal, en su texto vigente a la fecha de los hechos, en su carácter de lesa humanidad, ilícitos ocurridos entre fines de septiembre e inicios de octubre de 1973.

17°) Calificación. Que los hechos reseñados en esta etapa procesal son constitutivos de los delitos de **detención ilegal y secuestro con grave daño**, en su carácter de lesa humanidad, en las personas de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, previsto y sancionado en los artículos 148 y 141 inciso tercero del Código Penal, en su texto vigente a la época de los hechos, en su carácter de lesa humanidad.

18°) Calificación. Que el ilícito antes reseñado, es además delito de **lesa humanidad**. Así se ha pronunciado este Tribunal, la ltma. Corte de Apelaciones de Temuco y la Excma. Corte Suprema en las siguientes causas tramitadas ante este Ministro en Visita Extraordinaria:

A. Causa rol 27.525 del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidios calificados de Segundo Cayul Tranamil, sentencia de 26 de diciembre de 2014;

B. Causa rol 27.526 del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el homicidio calificado de Juan Segundo Palma Arévalo y Arcenio del Carmen Saravia Fritz, sentencia de 18 de diciembre de 2014;

C. Causa rol 45.345 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidios calificados de Juan Tralcal Huenchumán, sentencia de 11 de diciembre de 2014;

D. Causa rol 113.990 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Manuel Alberto Burgos Muñoz, sentencia de fecha 06 de noviembre de 2015;

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

E. Causa rol 113.989, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Segundo Enrique Candía Reyes, sentencia de fecha 18 de abril de 2016;

F. Causa rol 18.780 del Juzgado de Letras de Curacautín, seguida por el delito de homicidio de Jorge San Martín Lizama, sentencia de fecha 28 de septiembre de 2015;

G. Causa rol 29.877, del ingreso del Juzgado de Letras de Pitrufquén, seguida por el delito de homicidios calificados de Nicanor Moyano Valdés, sentencia de 25 de enero de 2016;

H. Causa rol 45.344, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de Homicidio calificado de Osvaldo Moreira Bustos y apremios ilegítimos de Juana Rojas Viveros, sentencia de 23 de marzo de 2016;

I. Causa rol 45.371, del Juzgado de Letras de Lautaro, por el delito de apremios ilegítimos de Jorge Contreras Villagra y otros, sentencia de 17 de agosto de 2016;

J. Causa rol 45.342, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio en la persona de Gumerindo Gutiérrez Contreras, sentencia de 09 de octubre de 2015;

K. Causa rol 29.869, del Juzgado de Letras de Pitrufquén, por el homicidio de Guillermo Hernández Elgueta, sentencia de 29 de diciembre de 2016;

L. Causa rol 27.527, del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio de Anastasio Molina Zambrano, sentencia de 15 de septiembre de 2016;

M. Causa rol 114.001, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Osvaldo y Gardenio, ambos de apellido Sepúlveda Torres, sentencia de 17 de noviembre de 2016;

N. Causa rol 113.986, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el homicidio de Moisés Marilao Pichún, sentencia de fecha 24 de junio de 2016;

O. Causa rol 63.541, del Juzgado de Letras de Angol, seguida por el homicidio de Sergio Navarro Mellado, sentencia de 27 de mayo de 2016;

P. Causa rol 45.363, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de secuestro calificado de Gervasio Huaiquil Calviqueo, sentencia de 19 de mayo de 2017;

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Q. Causa rol 114.048, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Arturo Navarrete Leiva, sentencia de 10 de febrero de 2017;

R. Causa rol 10.868, del Primer Juzgado del Crimen de Puerto Montt, seguida por el delito de apremios ilegítimos o aplicación de tormentos seguida de muerte en la persona de Juan Lleucún Lleucún, sentencia de 22 de noviembre de 2017;

S. Causa rol 114.003, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Gabriel Salinas Martínez, sentencia de 10 de noviembre de 2017;

T. Causa rol 10.851, de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, seguida por el homicidio simple, en carácter de reiterado de Pedro Antonio Bahamonde Rogel, José Santiago Soto Muñoz, Héctor Hugo Maldonado Ulloa y José Mañao Ampuero, sentencia de 20 de enero de 2016;

U. Causa rol 10.854, del Primer Juzgado de Letras de Puerto Montt, seguida por los homicidios calificados en las personas de Dagoberto Segundo Cárcamo Navarro, José René Argel Marilicán, Adolfo Omar Arismendi Pérez, Carlos Mansilla Coñuecar, Jorge Melipillán Aros, José Armando Ñancuman Maldonado, sentencia de 28 de octubre de 2017;

V. Causa rol 45.359 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado en la persona de Domingo Huenul Huaquil, sentencia de 31 de agosto de 2017.

W. Causa rol 54.035 del Primer Juzgado de Crimen de Puerto Montt, apremios ilegítimos en las personas de Mario Enrique Contreras Vega, Cesar Vladimir Leiva Garrido, Domingo Álvarez Cárdenas, Raúl Ángel Andrade Oyarzun, Marco Antonio Romero Arias, Enrique Becker Álvarez, Carlos Jerges Torres Vera, Noé Alejandro Cárdenas Alvarado, Werne Víctor Haro Oyarzun, sentencia de 23 de diciembre de 2017.

X. Causa rol 65.535 del Juzgado de Letras de Angol, seguida por los apremios ilegítimos en las personas de Manuel Marcelino Ramírez Zurita, sentencia de 25 de mayo de 2018.

Y. Causa rol 45.343, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por los homicidios calificados en las personas de Segundo Lepín Antilaf, Juan Segundo

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Nahuel Huaiquimil, Julio Augusto Ñiripil Paillao, Segundo Levío Llaupe, Víctor Yanquin Tropa y Heriberto Collío Naín, sentencia de 09 de noviembre de 2020.

Z. Causa rol 1-2013 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Pucón, seguida por detención ilegal de Alberto Colpihueque Navarrete, Eleuterio Colpihueque Lican y Abel Florencio Colpihueque Lican; apremios ilegítimos de Alberto Colpihueque Navarrete y Eleuterio Colpihueque Lican; y homicidios calificados de Alberto Colpihueque Navarrete y Eleuterio Colpihueque Licán, sentencia de 24 de mayo de 2019.

A.1. Causa rol 57.071, del Juzgado de Letras de Victoria seguida por el Homicidios calificados en la persona de Jorge Arturo Toy Vergara, perpetrado en la comuna de Victoria, sentencia de 09 abril de 2021.

B.2. Causa rol 113.997, del Juzgado de Juzgado del Crimen de Temuco para investigar el delito de secuestro calificado en la persona de Segundo Elías Llancaqueo Millán, perpetrado en la comuna de Lautaro en el mes de abril de 1975, sentencia de 02 de junio de 2021.

C.3. Causa rol 45.354, del Juzgado de Letras de Lautaro seguida por el secuestro calificado de Samuel Huichallán Levián, Ceferino Antonio Yaufulem Mañil, Miguel Eduardo Yaufulem Mañil y Oscar Rumualdo Yaufulem Mañil, sentencia de 16 de junio de 2021.

D.4. Causa rol 45.361, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de Manuel Elías Catalán Paillal, sentencia de 23 de diciembre de 2020;

E.5. Causa rol 114.000, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio simple de Waldo Enrique Rivera Concha, sentencia de 29 de abril de 2020;

F.6. Causa rol 4-2010, de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el homicidio calificado en la persona de Víctor Carreño Zúñiga, sentencia de 16 de abril de 2018;

G.7 Causa rol 45.362, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado en la persona de José Domingo Llabulén Pilquinao, sentencia de 16 de febrero de 2018.

H.8 Causa rol 114.007, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de Exequiel Zigomar Contreras Plotsqui, sentencia de 23 de octubre de 2018.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

I.9 Causa rol 114.042, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de José Alberto Fuentes Fuentes, sentencia de 17 de agosto de 2018.

J.10 Causa rol 113.996, del Primer Juzgado del crimen de Temuco, seguida por el Homicidios calificados y apremios ilegítimos en la persona de Tomás Segundo Esparza Osorio y apremios ilegítimos en la persona de Javier Enrique Esparza Osorio, sentencia de 30 de junio de 2018.

K.11 Causa rol 29.979 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el homicidio calificado de Domingo Obreque Obreque, sentencia de 07 de abril de 2014.

L.12 Causa rol 45.365, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el Secuestro Calificado de Luis Armando Horn Roa, sentencia de 25 de febrero de 2021.

M.13 Causa rol 45.367 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de Pedro Millalén Huenchuñir, sentencia de 11 de mayo de 2022.

N.14 Causa rol 44.305 del juzgado del Crimen de Puerto Varas, seguida por los homicidios calificados en las personas de Abraham Oliva Espinoza y Luis Espinoza Villalobos, sentencia de 25 de enero de 2019.

O.15 Causa rol 45.368 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de secuestro calificado de José Bernardino Cuevas Cifuentes, sentencia de 30 de marzo de 2019.

P.16. Causa rol 114.103 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el delito de secuestro calificado en la persona de Alejandro Ancao Paine, sentencia de 03 de septiembre de 2021.

Q.17. Causa rol 113.991 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el delito de homicidio calificado en la persona de Ramón Carrero Chanqueo, sentencia de 21 de noviembre de 2022.

R.18. Causa rol 113.478 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el delito de homicidio calificado en la persona de Luis Omar Torres Antinao, sentencia del 13 de junio de 2019.

S.19. Causa rol 114.051 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el delito de secuestro calificado en la persona de José Edulio Muñoz

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Concha, sentencia del 30 de abril de 2021. Todos los anteriores fallos condenatorios y ejecutoriados.

T.19. Causa rol 5-2013 del ingreso criminal de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por aplicación de tormentos de Harry Cohen Vera, sentencia de fecha 30 de septiembre de 2019.

U.20. Causa rol 113.999 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por aplicación de tormentos con resultado de muerte de Nolberto Seiffert Dossow, sentencia de fecha 03 de octubre de 2019.

V.21. Causa rol 114.058 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco seguida por el delito de apremios ilegítimos de Manuel Antivil Huenunqueo, sentencia de 30 de octubre de 2019.

W.22. Causa rol 6.345 del ingreso criminal del Juzgado del Crimen de Chile Chico, seguida por el delito de homicidio calificado de José Ananías Zapata Carrasco, sentencia de fecha 09 de marzo de 2020.

X.23. Causa rol 114.043 del ingreso criminal Primer Juzgado del Crimen de Temuco seguida por el homicidio calificado de Gonzalo Hernández Morales, sentencia de fecha 15 de mayo de 2020.

Y.24. Causa rol 45.464 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de Benedicto Poo Álvarez, sentencia de fecha 06 de junio de 2021.

Z.25. Causa rol 114.103 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el secuestro calificado de Alejandro Ancao Paine, sentencia de fecha 03 de septiembre de 2021.

AA.1. Causa rol 18.782 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Curacautín, seguida por secuestro simple, apremios ilegítimos y homicidio calificado de Julio San Martín San Martín, sentencia de fecha 28 de julio de 2022.

BB.2. Causa rol 114.039 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Diego Celso Saldías Cid, sentencia de fecha 21 de septiembre de 2022.

CC.3. Causa rol 45.355 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de José Ignacio Beltrán Meliqueo, sentencia de 20 de abril de 2023.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

DD.4. Causa rol 18-2011 del ingreso criminal de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el homicidio simple de José Avelino Runca, sentencia de 27 de julio de 2020.

EE.5. Causa rol 63.551 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Angol, seguida por el secuestro calificado de Patricio Rivas Sepúlveda, sentencia de 23 de diciembre de 2022.

FF.6. Causa rol 113.969 de ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Hernán Henríquez Aravena y Alejandro Flores Rivera, sentencia de 2 de enero de 2020.

GG.7. Causa rol 2-2013 del ingreso criminal de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el delito de homicidio de Domingo Pérez San Martín, sentencia de 14 de octubre de 2020.

HH.8. Causa rol 24.428 del ingreso del Juzgado de Letras de Traiguén, seguida por el delito de apremios ilegítimos de Antonio Inostroza Segura y otros, sentencia de 31 de octubre de 2023. Todos los fallos anteriores condenatorios.

II.9 Causa rol 114.034 del ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el delito de apremios ilegítimos de Luis Alberto Chihuailaf, sentencia del 03 de agosto de 2022.

19°) Concepto de Lesa Humanidad. Que sobre lo anterior y en cuanto al origen, evolución histórica y definición de los delitos de lesa humanidad el concepto de delitos de "lesa humanidad" o de "leyes o normas de la humanidad", surgieron durante el siglo XX y ha permanecido en constante evolución a través del tiempo. Este concepto, tuvo su origen en varios instrumentos internacionales a saber:

A. Convención de la Haya sobre las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre de 1899 y 1907. Fundamento del concepto de: "leyes de la humanidad" plasmado en la Cláusula Martens: "Mientras que se forma un código más completo de las leyes de la guerra, las altas partes contratantes juzgan oportuno declarar que en los casos no comprendidos en las disposiciones reglamentarias adoptadas por ellas, las poblaciones y los beligerantes permanecen bajo la garantía y el régimen de los principios del derecho de gentes preconizados por los usos establecidos entre las naciones civilizadas, por las leyes de la humanidad y por las exigencias de la conciencia pública" (**Óscar López Goldaracena**. Derecho

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Internacional y crímenes contra la humanidad. 2008. Fundación de Cultura Universitaria, Uruguay. pp. 29 – 34).

B. Que, en la Declaración de 28 de mayo de 1915 de los Gobiernos de Francia, Gran Bretaña y Rusia en la que denunciaron las masacres a los armenios por parte del Imperio Otomano como crímenes de lesa humanidad, tal como lo expresan los autores (Derechos Humanos: Justicia y Reparación. **Ricardo Lorenzetti**, editorial Sudamericana). Hay que precisar, como lo ha dicho la literatura, que el crimen contra la humanidad excede con mucho en su conducta el contenido ilícito de cualquier otro delito. Asimismo, el Derecho Penal no está legitimado para exigir la prescripción de las acciones emergentes de estos delitos y si lo hiciere sufriría un grave desmedro ético: no hay argumento jurídico ni ético que le permita invocar la prescripción (Nueva Doctrina Penal, “Notas Sobre el Fundamentos de la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad” **Eugenio Raúl Zaffaroni**, pág. 437 a 446). Del mismo modo, el crimen de lesa humanidad es aquel injusto que no solo contraviene los bienes jurídicos comúnmente garantizados por las leyes penales, sino que al mismo tiempo suponen una negación de la personalidad moral del hombre, esto es, se mira al individuo como cosa. La característica principal es la forma cruel y bestial con que diversos hechos criminales son perpetrados. Sin perjuicio de otros elementos que también lo constituyen como son la indefensión, la impunidad, que serán analizados con posterioridad. Es un ultraje a la dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales pertinentes.

20°) Que en una reflexión más integral podemos indicar que una perspectiva para abordar la justicia de transición es el valor social y jurídico de la verdad, esto es, la función que asume el concepto de verdad no sólo en contextos específicos, sino también en la justicia de transición y en especial en el plano más amplio de la dinámica social política y jurídica. Así Bernard Williams nos plantea las virtudes de la verdad como la sinceridad y la precisión en referencia a la realidad, son factores esenciales en la dinámica social. El mismo autor plantea la conexión entre verdad y política e indica que la verdad constituye una característica esencial de la democracia por cuanto asegura la libertad de los ciudadanos contra el poder tiránico. Plantea también que la exigencia de que el

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

poder actúe el valor de la verdad determina el factor efectivamente democrático en el ámbito del sistema político liberal. Esto es, el valor político de la verdad deriva del hecho de que la medida de un sistema político funda sus relaciones entre el poder y los ciudadanos en la verdad y determina el grado de democracia del sistema. El poder tiránico se funda en una verdad envenenada, es decir, sobre una mentira, mientras que el sistema democrático se funda en el principio de verdad. Por su lado, Michael Lynch insiste en el valor fundamental de la verdad en el contexto de la democracia liberal, puesto que señala que, si nos importan los valores liberales, nos debe importar la verdad. Por otro lado, desde un punto de vista más amplio el principio de la verdad se configura como una condición esencial para la efectividad del ordenamiento jurídico, esto es, la efectividad del ordenamiento jurídico se funda en la hipótesis de que el sistema sea capaz de establecer la verdad respecto de tales conductas. Más específico, la consideración del valor jurídico de la verdad se refiera a la administración de justicia. En términos más simples, en palabras de Gerome Frank, no existe una decisión justa que se funde en hechos equivocados. Es decir, la verdad de los hechos es una condición necesaria para que se arribe a una decisión justa. A propósito de la justicia de transición ha habido un discurso ambiguo, puesto que se ha expresado que el silencio y el olvido respecto de los crímenes pasados son el mejor método para facilitar la construcción de la nueva sociedad. Esto puede ser respondido no solo por las víctimas sino por la sociedad entera en cuanto puede ser difícil o imposible aceptar que los graves actos de violencia cometidos contra miles de personas sean silenciados en nombre de la pacificación social. Hay que reflexionar sobre las dudas que surgen, sobre el tipo de paz social que se quiere lograr sobre la base de la falta de verdad efectiva sobre los crímenes y las correspondientes responsabilidades relacionadas con los hechos cometidos. El principal efecto del silencio es que antiguos criminales escapan masivamente de la justicia (ejemplos caso del Alemania post nazista y la Italia post fascista) se convierten en buenos y honorables ciudadanos de la democracia, en ese sentido se pregunta el autor si realmente se puede hablar de democracia cuando se habla de un sistema político que evita sistemáticamente la búsqueda de la verdad sobre sus precedentes históricos inmediatos, no obstante ser clara la cantidad y calidad de los crímenes cometidos. En consecuencia, citando nuevamente a Williams, es que el diagnóstico es negativo respecto a las pretendidas democracias que

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

sistemáticamente rechazan la búsqueda de la verdad. (**Michele Taruffo** (2018): “La verdad. Consideraciones sobre la verdad y justicia de transición” En Revista de Estudios Judiciales, año 2018, N°5, ediciones DER. pp. 19 – 30).

DECLARACIONES INDAGATORIAS

21°) Que prestando declaración indagatoria **ÓSCAR ALFONSO ERNESTO PODLECH MICHAUD**, de fs. 6 vta. (Tomo I), fs. 1.244 (Tomo IV), de fs. 1.281 a fs. 1.283 (Tomo IV), de fs. 1.828 a fs. 1.830 (Tomo VI), de fs. 1.831 a fs. 1.832 (Tomo VI), fs. 1.834 (Tomo VI), fs. 1.836 (Tomo VI), fs. 1.837 (Tomo VI), de fs. 1.846 a fs. 1.847 (Tomo VI), de fs. 3.812 (Tomo XI) y de fs. 3.788 a fs. 3.796 (Tomo XI).

En declaración judicial de fecha 12 de diciembre de 1995, rolante de **fs. 6 vuelta (Tomo I)** respecto a los hechos que se le interrogan dice que asumió como Fiscal Militar de la Provincia de Cautín, con fecha 2 de marzo de 1974, y en relación a las personas quienes se le pregunta Hugo González Ortega, Elías González Ortega, Juan Carlos y Ricardo Schmidt, Juan de Dios Cabrera, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Aguayo y Raúl Figueroa, jamás tuvo conocimiento de su existencia, ni menos de los hechos que se le mencionan.

En diligencia de careo con Sergio Zapata Camus, de fecha 1 de agosto de 2013, rolante de **fs. 1.244 (Tomo IV)**, proclamó que recuerda al señor Sergio Zapata Camus, quien actuó como abogado defensor en aquella época, como muchos otros abogados de la plaza. Sin embargo, no recuerda el hecho puntual al que se refiere el señor Zapata Camus. No obstante, aquello, si éste le dice que conversó con él, seguramente debió haber sido así, pero en su calidad de asesor del Fiscal Militar, sin que le correspondiera tomar ninguna decisión al respecto. Se mantiene en sus dichos.

En declaración extrajudicial de fecha 8 de julio de 2003, rolante de **fs. 1.281 a fs. 1.283 (Tomo IV)**, refirió que el día 11 de septiembre de 1973, oportunidad en la que ocurrió el pronunciamiento militar en nuestro país, encontrándose en la ciudad de Temuco y en su calidad de ex cadete militar, con su profesión de abogado fue llamado por el comandante del regimiento Tucapel coronel Pablo Iturriaga Marchesse, quien le solicita como una forma de reforzar la función de la Fiscalía Militar, que asesore y ayude a dar mayor agilidad al tránsito de centenares de personas detenidas que se encontraban en el patio de la unidad

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

militar; hace presente que estos detenidos provenían de los organismos policiales respectivos y con respectiva documentación (partes), no recordando alguna que haya llegado en otras condiciones o indocumentado. Aduce que sí recuerda que muchos de ellos eran militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria los que a la luz de sus ideales buscaban el enfrentamiento con sus opositores razón por la que significa un riesgo para la seguridad de la zona. Que ante tal situación que se estaba viviendo en la zona y en general en el país, es que accedió a la petición del coronel Iturriaga, por lo que pasó a formar parte de la Fiscalía Militar en calidad de asesor y como organizador de los Consejos de Guerra que se formarían a partir de esta fecha. Por esta razón tuvo que hacer las coordinaciones con el presidente de la Corte de Apelaciones de esta ciudad, con la finalidad de reforzar la cantidad de personal, por que accedió a enviarlo en comisión de servicio a la fiscalía, dentro de los cuales recuerda a Adrián González Maldonado, Héctor Toloza Fierro (fallecido) y Dorian Novoa Godoy. Arguye que, en la Fiscalía Militar para la fecha de su ingreso, recuerda que se encontraba como fiscal militar el mayor de ejército Luis Jofre Soto (Segundo comandante del regimiento Tucapel), y una persona que tenía como actuario Leonel Quilodrán y las causas que se veían antes del 11 de septiembre de 1973, eran en su gran mayoría por la ley de reclutamiento. Que su función fue exclusivamente la conversación con los abogados, para que estos acudieran a la defensa de los detenidos, quienes tenían que pasar al Consejo de Guerra, para darle una debida defensa. Recordando que tuvo la colaboración del colegio de abogados, razón por la cual tenía una disposición absoluta de su tiempo para la fiscalía, ya que este trabajo no era renumerado y tenía muchas causas en los tribunales por expropiación, de las que tenía que hacerse cargo, razón por la que su concurrencia en la fiscalía Militar era solo momentánea durante el día. Preguntado por el funcionamiento de la fiscalía militar, dice que era en el mismo recinto de la comandancia de esta unidad militar, pero no lo tiene claro y a raíz de esto es que muchas personas pudieron verlo transitar por dicho recinto. Que debe aclarar que nunca participó en interrogatorios, puesto que estos eran llevados a cabo por los actuarios, sin que tuviera conocimiento que se aplicara algún tipo de tortura o malos tratos a las personas que concurrían a estas diligencias. Recuerda, además, que una vez que se trató de normalizar la situación de los detenidos y debido a la gran cantidad de estos, es que fueron enviados a la cárcel de la ciudad, por lo que creó un libro de

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

ingreso y egreso de detenidos, conforme se hacía de manera común en los tribunales del crimen. Refiere ignorar quienes eran las personas que tenían a su cargo el traslado de los detenidos desde la fiscalía hasta la cárcel, presumiendo que lo hacía persona de gendarmería. Glosa que no tiene conocimiento que la base aérea de helicópteros N°3 de la Fuerza Aérea de Chile, con asiento en Temuco, haya servido como recinto de detención o de tránsito de prisioneros políticos, por lo que nunca tuvo contacto con el personal de esta institución, como asimismo que estos hubieran participado de operativos en la compañía de militares o solos para detener a dirigentes de izquierda o militantes políticos. Que la función de asesor de la fiscalía le duró hasta el mes de marzo de 1974, asumiendo a partir de esa fecha como fiscal militar de la ciudad de Temuco, dependiendo para los efectos legales del IV Juzgado Militar de Valdivia, cargo que ocupó hasta el mes de febrero de 1983, oportunidad en la que por un problema que aquejó a su hermano en relación con los derechos humanos renunció. Espeta que algunos consejos de guerra estaban presididos por Mario Olate Melo, e integrado por el coronel Hernán Mardones Díaz, Eduardo Soto Parada, Benjamín Fernández Hernández, Luis Puebla Leiva, Jaime Rowe del Río, Jorge Verdugo Álvarez y Jaime García Covarrubias, lo que aparece consignado en el resolución N°1449-73 (que adjunto a otros autos), siendo todas estas personas funcionarios de las fuerzas armadas. Consultado señala que mientras fue cadete de la escuela militar el año 1951 aproximadamente, recuerda que el comandante de su compañía era el entonces capitán Sergio Arellano Stark, debiendo agregar que una vez que se retiró de la escuela militar, no volvió a ver a este oficial, sino hasta después de producido el pronunciamiento militar, no pudiendo precisar fecha, en que en dependencias de la comandancia del regimiento Tucapel, se percató de su presencia, acercándose a saludarlo y en esa oportunidad comentó informalmente que en materia penal operaba la irretroactividad, palabra que le llamaron la atención, ya que provenían de un militar, aclarando que no se podía procesar a ninguna persona por hechos anteriores. Hace presente que desconoce cómo fue el arribo del general Arellano al regimiento Tucapel, debiendo señalar que por lo general este tendría que haber sido por un medio de transporte aéreo, sin poder precisar si fue en avión o helicóptero, ignorando además cuantos días permaneció en la zona este alto oficial y que actividades desarrolló y que misión debía cumplir. Refiriendo a otras víctimas que se le mencionan como Omar Roberto Venturelli,

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Dixon Retamal Cornejo, José Maria Ortigosa Ansoleaga y Daniel de los Ángeles Mateluna Gomez, señala que solamente por Ortigosa recuerda que mientras se desempeñó en la fiscalía militar, un familiar de éste consultó por él, debiendo agregar que ignora todo tipo de antecedentes con respecto a las otras personas, de las demás solo ha oído informaciones de prensa.

En diligencia de careo con Bernardita del Carmen Weisser Soto, de fecha 19 de julio de 2013, rolante de **fs. 1.828 a fs. 1.830 (Tomo VI)**, ratificó declaraciones y refiere que la persona sentada a su lado es doña Bernardita del Carmen Weisser Soto, quien fue sometida a consejo de guerra en una fecha que no puede precisar. Que en lo particular no es cierto lo que ella afirma en el sentido de que él haya tomado algún libro de los que fueron requisados, como tampoco es cierto que la haya interrogado en alguna oportunidad. Que es muy posible que si el consejo de guerra fue en 1975 él haya estado presente, puesto que en ese tiempo era el fiscal militar. Acompaña una declaración prestada por doña Bernardita del Carmen Weisser Soto en aquel tiempo. Que no recuerda los hechos que esta señora ha declarado. Piensa que todo es inventado. Que jamás tuvo oficina en la fiscalía militar del regimiento Tucapel, y solo se dedicó a organizar los consejos de guerra y a buscar a los abogados idóneos para que defendieran a los detenidos. Arguye que la persona con la cual se le carea fue acusada en la oportunidad de ser la jefa de la sub Jefatura de avenida Alemania del "MIR" en 1973. Que la declaración de la señora Weisser obedece a un resentimiento y afán de venganza por el hecho de haber sido condenada en un consejo de guerra. Que incluso fue a Italia a declarar en su contra. Piensa que su nombre fue deslizado en Italia por Víctor Maturana Burgos. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo con Herman Carrasco Paul de fecha 12 de agosto de 2013, rolante de **fs. 1.831 a fs. 1.832 (Tomo VI)**, ratifica declaración judicial y en lo pertinente dice que la persona sentada a su lado con la cual se le carea es don Herman Carrasco Paúl, quien fue a declarar a Italia en su contra. Todo lo que esta persona declara es absolutamente falso, desconociendo el motivo por el cual declara en su contra. Tiene en su poder una declaración hecha por el señor Carrasco en la cual señala haberlo visto de uniforme en la fiscalía militar, sin que indicara que tuviera alguna otra función. Que el señor Carrasco Paúl en distintas ocasiones ha ido agregando hechos nuevos, como es el caso de la dama que supuestamente era su amante, situación que es falsa. Igualmente, en alguna

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

declaración extrajudicial dijo que tenía responsabilidad en los hechos ocurridos con motivo del asalto al polvorín hecho que es también falso, por cuanto estaba en Santiago en esa fecha. Que no conocía al señor Carrasco desde niño. Sólo lo conoció en Italia, en lo demás se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo con Nelio Gastón Holzapfel Gross, de fecha 12 de agosto de 2013, rolante de **fs. 1.834 (Tomo VI)**, ratifica declaración y en lo pertinente reconoce a la persona con la cual se le carea como Nelio Gastón Holzapfel Gross, a quien conoce desde hace muchos años. Aduce que no recuerda el incidente que esta persona refiere. Que en todo caso de haber ocurrido como lo expresa el señor Holzapfel, con toda seguridad él debió haber consultado al mayor Jofré, quien era la persona que resolvía las situaciones de los detenidos. Que de todos modos piensa que el señor Holzapfel está confundido y que Dorian Novoa conversó con el mayor Jofré y no con él, porque él no tenía poder de decisión. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo con Daniel Aguirre Mora, de fecha 13 de agosto de 2013, rolante de **fs. 1.836 (Tomo VI)**, ratifica su declaración judicial y en lo pertinente que la persona sentada a su lado con la cual se le carea es don Daniel Aguirre Mora, a quien ha conocido previo a entrar a esta audiencia. Que sin embargo no lo conocía de antes. Respecto de los dichos del señor Aguirre musita que son absolutamente falsos. Nunca fue a la Prefectura de Investigaciones para requerir información de tipo político, quizás sólo lo hizo para requerir información de algún detenido. Jamás pidió información de tipo político. Anexa que no participó de lo que el señor Aguirre sindicó como la "Junta Chica" ni participó de la reunión que sostuvo esta persona con el coronel Iturriaga con motivo del asalto al polvorín del regimiento. Se mantiene en sus dichos.

En declaración judicial de fecha 13 de agosto de 2013, rolante de **fs. 1.837 (Tomo VI)**, expone que viene a declarar con el objeto de rectificar aquella parte de su declaración que prestó el día anterior en el sentido que el secretario de la fiscalía no letrado antes de su designación como fiscal letrado habría sido don Jaime García Covarrubias. No es así, pues lo confundió con el rol que éste desarrolló como secretario de algunos consejos de Guerra. Una de las motivaciones que indicó a la Corte para obtener la colaboración de miembros del Poder judicial, fue que en el regimiento solamente había un dactilógrafo calificado, el señor Leonel Quilodrán, encargado de las causas del regimiento y que el Fiscal

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

don Luis Jofré lo designaba a él como secretario, sin perjuicio de otras situaciones en que tiene que haberlo remplazado otra persona. Hace esta aclaración para evitar confusiones y malas interpretaciones.

En diligencia de careo con José Heriberto Mansilla Gatica, de fecha 12 de septiembre de 2013, rolante de **fs. 1.846 a fs. 1.847 (Tomo VI)**, (cuya copia consta a fs. 3.812 Tomo XI), conjetura que no es efectivo lo que éste declara respecto a que interrogó a personas junto a José Heriberto Mansilla por orden del fiscal militar de apellido Jofré. Puntualiza que el fiscal militar era el mayor Jofré y el deponente sólo era el asesor de la fiscalía. Jamás tomó declaraciones siendo asesor de la fiscalía militar. Tampoco lo hizo Guido Sepúlveda. Ni recuerda que a su hermano le hayan tomado un fundo y menos que Mansilla Gatica haya intercedido ante el deponente por esta persona. Acompaña documentos copia simple de carta presentada al ministro de fuero, copia simple de 8 extractos de diario de circulación nacional y regional, copia simple de extracto del diario El Clarín de Buenos Aires (los que son agregados a otros autos).

En declaración judicial de fecha 28 de junio de 2012, rolante de **fs. 3.788 a fs. 3.796 (Tomo XI)**, ensaya que, para septiembre de 1973, en su calidad de excadete militar, lo llamó el comandante del regimiento Tucapel, don Pablo Iturriaga Marchesse, hoy fallecido, que le señaló que el país estaba viviendo un ambiente de casi guerra civil y que por tanto las fuerzas armadas habían decidido tomar el control de éste para salvar la situación. Que además, le pidió que lo ayudara a organizar la fiscalía militar y el funcionamiento de los Consejos de Guerra que iban a tener lugar de ahí en adelante. Que hasta antes del 11 de septiembre de 1973 funcionaba una fiscalía militar en tiempo de paz, que estaba bajo las ordenes del mayor Jofré, quien era asistido por tres suboficiales de ejército cuyos apellidos eran Moreno, Schonherr y Quilodrán, quienes no tenían la preparación para afrontar los juicios que se vendrían a raíz de estos problemas. Comunica que entre el 11 y 12 de septiembre de 1973 hubo alrededor de doscientos detenidos a disposición de la fiscalía militar y con motivo de esa situación le sugirió al fiscal militar don Luis Jofré y al comandante del regimiento que se solicitara al presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, don Oscar Carrasco, la designación de funcionarios judiciales en comisión de servicios en la fiscalía militar con el objeto de ayudar en la toma de declaraciones. Que gracias a esta gestión fueron designados don Héctor Toloza Fierro, Adrián González

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Maldonado, el relator Gastón Mecklenburg y el secretario del Juzgado de Indias, Dorian Novoa Godoy. Que además estuvo algunos días doña Victoria Gálvez, quien fue llamada por el señor Mecklenburg. Preguntado dice que él era asesor jurídico del señor fiscal, mayor Jofré en la parte procedimental. Éste era quien tomaba las decisiones, pero las resoluciones importantes las redactaba el abogado Dorian Novoa. En lo demás, recuerda que aconsejó a los actuarios, quienes tenían gran experiencia, en el sentido que actuaran igual como lo hacían en los tribunales ordinarios. Consultado, exploya que debe haber concurrido al regimiento Tucapel, al menos durante el primer mes, día por medio. Que en aquel entonces él debía atender, además a sus clientes por expropiación, ya que en el regimiento no percibía remuneración. Interrogado afirma que vio detenidos al interior del regimiento Tucapel, los que eran mantenidos en el patio de la unidad. Eran más de cien personas. Piensa que posteriormente estos detenidos fueron puestos en libertad o derivados a la cárcel, según fuese el caso. Desconoce si hubo alguna dependencia al interior del regimiento en la que fuese dejadas estas personas. En cuanto a los consejos de guerra, indica que estos comenzaron a partir del 26 o 29 de septiembre de 1973. Su tarea consistió en asesorar al comandante para gestionar la rápida instauración del tribunal mediante la designación de los vocales integrantes del consejo de guerra. Hace presente que aquel tiempo había dos fiscalías: la de ejército y la de carabineros. Que esta última estaba a cargo del teniente coronel Gonzalo Arias González. Que también hubo un abogado del servicio jurídico de carabineros de Cautín, de nombre Hernán Morales, quien fue designado fiscal Ad-Hoc para investigar un delito de tenencia ilegal de armas y explosivos y otros, por parte de una escuela de guerrilleros que hubo en Nehuentúe. El rol de esta causa era 1198-73. Que, además, recuerda a Juan Michelsen Délano, quien era auditor de la cuarta división del ejército, con asiento en Valdivia. Éste investigó una causa por incitación a la formación de milicias o grupos de combate. Aduce que también conoció una causa contra de Víctor Molfiqueo Cayufil y otros, por ofensas públicas a las fuerzas armadas. Esta última causa llevaba el rol 1076-7. Afirma no recordar cuanto tiempo estuvo en la región. No sabe si vino con su propio equipo ni tampoco sabe dónde se instaló en el regimiento. Preguntado, acota que según su recuerdo la fiscalía militar recibió la colaboración de carabineros e investigaciones para efectuar sus investigaciones. Consultado, afinca que no prestó asesoría al intendente de la época coronel

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Ramírez, quien tenía su propio asesor jurídico, quien a su parecer era el abogado Francisco Contreras. Solo recuerda la oportunidad en que le pidió que se constituyera en la Corte de Apelaciones de Temuco para solicitar ayuda del Poder Judicial para los efectos de echar a andar la fiscalía militar. Interrogado, dice que la fiscalía militar en 1973 funcionaba en la oficina del segundo comandante del regimiento, ubicada en el edificio de la comandancia. Que los actuarios antiguos de la fiscalía, es decir, Moreno Schonherr y Quilodrán continuaron sus labores interrogando a los detenidos. Estos interrogaron “poco”, porque tenían otras tareas en la sección segunda que estaba al mando del capitán Ubilla. Que recuerda que el comandante Iturriaga le encargó al capitán Ubilla que investigara todo lo relativo al “MIR” en la región. Que él no prestó colaboración en la investigación que realizó este oficial, ni sabe quienes trabajaron con éste. Sin embargo, tuvo conocimiento de esta causa en el año 1974, una vez en que él había asumido como fiscal militar en propiedad. Consultado adosa que nunca el mayor Jofré le pidió consejo sobre qué hacer con un determinado detenido. No recuerda haber efectuado alguna visita de cárcel mientras estuvo prestando colaboración para la fiscalía militar, aunque no lo descarta. Que, sin embargo, a partir de su designación como fiscal militar sí fue varias oportunidades. Fue designado mediante Decreto N°59 del 14 de febrero de 1974 mayor de justicia militar, desempeñando funciones como fiscal de ejército y de carabineros de la provincia de Cautín dependiente del IV Juzgado Militar con asiento en Valdivia. Que a mediados de 1974 consiguió trasladar la fiscalía militar hasta el cuarto piso del edificio donde funciona el Banco Santander Santiago en calle Prat esquina Claro Solar. En el cargo de fiscal estuvo hasta el 16 de diciembre de 1982, fecha en la cual pidió su baja voluntaria luego de que su hermano Carlos Podlech Michaud, quien era en esa fecha presidente de los trigueros fuera expulsado del país. Recordando que el grupo de investigaciones que colaboró con la fiscalía militar estaba formado, entre otros, por Hernán Quiroz y un chofer de apellido Luco. Se le pregunta por Santiago Omar Faúndez Bustos, quien alega que no le resulta conocido ni se enteró de su muerte. El Tribunal le lee declaración de doña Rosalía Bustos, de fs. 30. El deponente señala: que esos dichos no son efectivos, son falsos en todas sus partes. En primer lugar, porque esa no es su manera de actuar y porque el hecho jamás sucedió. Él no recuerda a doña Rosalía Bustos. Expresa que esta persona dice esto porque está incentivada por otros para acusar perjuicio y daño a su persona. El Tribunal le lee la

declaración de doña Rosa Adriana Faúndez Bustos, de fs. 142. El deponente expresa que esta es una clara muestra de una estrategia tendiente a crear un ambiente por el cual él sería una persona que habría tenido “un tremendo poder en aquella época”. Que esta estrategia se aplicó preferentemente mientras estuvo detenido injustamente en Italia. Jamás ha actuado imprudentemente. Cita como ejemplo el caso de una persona que durante los años 90 lo denunció públicamente por el delito de torturas sufridas durante septiembre de 1973. Él se querelló por injurias y calumnias en contra de esta persona y se demostró que jamás estuvo detenido ni había sido alcalde de Curacautín, como lo señaló en esa oportunidad. Quien públicamente tuvo que retractarse de los hechos imputados a su persona. En relación con los dichos de Víctor Maturana Burgos, de fs. 272, puede indicar que nada de lo que se sostiene es efectivo. Que éste tiene una animadversión manifiesta en su contra porque ha pensado que él como fiscal militar habría pedido la pena de muerte para éste por el delito de traición y espionaje. Eso no es efectivo, ya que el dictamen lo hizo el fiscal señor Jofré y él no tiene nada que ver con ello. Que no ha interpuesto ninguna querella por injurias en contra de esta persona porque no tiene sentido, ya que tiene una tremenda maquinaria dispuesta a perjudicarlo. “Lo anterior sería una pérdida de tiempo”. El Tribunal le lee la declaración de doña Bernardita Weisser Soto, de fs. 282. El declarante manifiesta que recuerda a doña Bernardita Weisser Soto, porque fue sometida a consejo de guerra en 1973. Que quizás la haya visto en la fiscalía militar en aquella época, pero en ningún caso es cierto lo que ella afirma, puesto que nunca ha tenido una colección de libros como la que ella afirma que él le quitó. Que esta persona declaró en su contra en Italia mientras estuvo privado de libertad en ese país. El Tribunal le lee declaración judicial de Mario Carril Huenumán de fs. 285. El declarante responde que son absurdos los dichos de esta persona. Que jamás interrogó junto con el capitán Ubilla ni con alguien más. Que el señor Carril Huenumán fue interrogado por el abogado Hernán Morales en la causa de Nehuentúe. Que es probable que el dictamen de esa causa le haya correspondido a él, pero no la recuerda. El Tribunal le lee la declaración de Aquiles Alfonso Poblete Müller, de fs. 287. El deponente señala que no recuerda a Aquiles Poblete Müller y no tiene idea del motivo por el cual lo sindicó como el responsable del destino de los detenidos en la fiscalía militar en 1973. El Tribunal le lee la declaración prestada por don Pedro Segundo Carrillo Gonzalez a fs. 294. El

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

declarante responde que no conoce a don Pedro Carrillo, ni recuerda haberle tomado declaración en la fiscalía militar de Temuco. Insiste en que jamás tomó declaración alguna persona mientras fue fiscal militar en propiedad. No sabe el motivo por el cual esta persona menciona su nombre. El Tribunal le lee declaración prestada por doña Eliana Pichón Seguel a fs. 297. El indagado expresa no conocer a doña Eliana Pichón Seguel, ni jamás la interrogó. Preguntado advierte que para septiembre de 1973 él pertenecía al partido Nacional. Recuerda a una persona de apellido Gudenschwager que era empresario y seguramente fue reservista de la fuerza aérea, porque era piloto. Sin embargo, no lo vio en el regimiento Tucapel. El Tribunal le lee declaración prestada por don José Heriberto Mansilla Gatica a fs. 304. El deponente señala, que recuerda el nombre de esta persona, pero lo que allí señala es falso. Él jamás le pidió colaboración para interrogar a nadie, porque nunca interrogó a alguna persona. Desconoce por qué este señor le hace esa imputación. Que tampoco es efectivo que él pudiera tener injerencia para ayudar a algún detenido. Preguntado glosa que seguramente en más de una ocasión le debe haber correspondido interceder por algún detenido ante el fiscal Jofré, pero no recuerda ningún nombre. El Tribunal le pregunta si durante la época en que colaboró con el fiscal Jofré o en que actuó como fiscal judicial en propiedad, aplicó apremios ilegítimos. El deponente responde que jamás aplicó apremios ilegítimos. Por el contrario, si pidió ayuda a la Corte de Apelaciones fue para precaver que hechos de esta naturaleza no ocurrieran. El Tribunal le lee la declaración de Eleodoro Rubilar Bascur, de fs. 308. El deponente señala que es posible que en alguna oportunidad haya ido a la cárcel durante el periodo septiembre octubre de 1973 para revisar si existía alguna irregularidad. Todo esto mandatado por el señor fiscal Jofré. Sin embargo, él no era fiscal en aquella, época. Que efectivamente hubo un tiempo durante ese periodo en que usó el uniforme militar. El Tribunal le lee declaración prestada por don Sotero Guevara Guevara a fs. 309. El deponente refiere que no es efectivo lo que esta persona señala. Que jamás tomó declaraciones en la cárcel, ni siquiera cuando fue fiscal militar. Desconoce el motivo por el cual se le indica efectuando esta acción. El Tribunal le lee la declaración prestada por don Bernardino Piñera Carvallo a fs. 312. El declarante señala que conoce a Monseñor Piñera, quien siempre tuvo un trato cordial y caballero con él. Que efectivamente lo recibió en la fiscalía militar y debe haber recibido sus consultas acerca de

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

detenidos. Todas estas peticiones las acogió y se las transmitió al fiscal Jofré. Sin embargo, no recuerda ningún caso en particular. El Tribunal le lee la declaración prestada por Erasmo Ricardo Villanueva Simón a fs. 314. El indagado responde que no conoció a esta persona y todo lo que ella señala es falso. Que jamás interrogó a nadie, ni recuerda que haya habido una sala de interrogatorios distintas a la de la fiscalía. Tampoco le consta que haya habido torturas. Respecto de la redacción de bandos militares, puede indicar que nunca fue consultado al respecto. Tampoco tuvo conocimiento de los hechos que motivaron la redacción y publicación de los bandos. No recuerda a ningún oficial de la fuerza aérea de nombre Juan Videla.

22°) Que, haciéndonos cargo de las declaraciones indagatorias del acusado, **Oscar Alfonso Podlech Michaud**, quien fue sometido a proceso a **fs. 4.254 a fs. 4.335 (Tomo XII)**, con fecha 17 de junio de 2022. **Acusado** según el auto de **fs. 4.600 a fs. 4.662 (Tomo XIII)**, con fecha 04 de noviembre de 2022, como **cómplice** de los delitos de secuestro con grave daño en su carácter de lesa humanidad, en las personas de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, perpetrado entre fines de septiembre e inicio de octubre de 1973. Que, si bien el acusado se ubica en la fecha, lugar y sitio del suceso, agrega factores que podrían eximirlo de responsabilidad en los hechos. No obstante, lo anterior, según el mérito del proceso, las pruebas rendidas y ponderadas en conformidad a la ley, obran en su contra los siguientes elementos de convicción.

Desde ya, por síntesis y economía procesal se dan por reproducidos todos los elementos probatorios generales antes ponderados y específicos relacionados y aquilatados, puntualizando lo siguiente:

A. DECLARACIONES

A parte de lo que se ha detallado en la prueba de los testigos conviene puntualizar respecto de estas personas lo siguiente:

A.1. Diógenes Segundo Bravo Bernal

En declaración extrajudicial de fecha 14 de diciembre de 1995, rolante de fs. 60 a fs. 61 (Tomo I), en lo pertinente a Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Schmidt

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría, Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, no los recuerda por sus nombres, pero puede indicar que dentro de los primeros días del pronunciamiento militar, en circunstancias que se encontraba en la subcomisaria, llegó hasta la unidad el cabo primero Francisco Monsalve (fallecido), con un grupo de jóvenes, no recuerda la totalidad, pero eran varios, en calidad de detenidos, por cuanto habían sido sorprendidos huyendo hacia Argentina por una patrulla que estaba al mando del capitán don Luis Robinson Bustos Letelier, quien a la vez era el jefe de la unidad. Los detenidos fueron ingresados a los calabozos, mientras que el suboficial de guardia, del cual no recuerda su nombre, comunicaba esta novedad a la Prefectura de Temuco en forma telefónica.

A.2. José Eve Mancilla Yáñez

En declaración judicial de fecha 17 noviembre de 2004, rolante de **fs. 399** a fs. 400 (Tomo II), arguye que respecto de las personas que se le señalan, no las recuerda, pero dice que, si llegaron detenidos hasta la subcomisaria, es muy probable que hayan sido derivados hacia Temuco vía aérea, ya que ese era el medio más usual de transporte de detenidos.

A.3. Sara Ester Valdés Velásquez

En declaración extrajudicial de fecha 13 de octubre de 2015, rolante de fs. 2.886 a fs. 2.887 (Tomo VIII), expone que para el año 1973, no militaba ni participaba en ningún partido político, solo participaba en actividades de tipo social en la sede del partido Socialista. En esas reuniones participaba un joven de apellido Aguayo, a quien conocía, ya que iban al mismo colegio y también unos vecinos de nombres Alejandro Escobar y Juan Cabrera. También conoció en esas reuniones a los hermanos Schmidt y Gonzalez, quienes eran funcionarios municipales y estaban a cargo de la distribución de unos terrenos, los cuales se habían tomado en el año 1971. La última vez que vio a estos jóvenes fue unos días antes del golpe de Estado y nunca le hicieron comentario alguno respecto a un posible viaje al extranjero en este caso a Argentina. Se enteró, por comentarios de los padres de Alejandro Escobar y de Juan Cabrera que ellos se habían ido de la ciudad sin dar explicación alguna respecto a su lugar de destino, esto fue a los tres días del 11 de septiembre cuando sus padres consultaron a su madre si sabían algo respecto a sus paraderos.

A.4. Roden Rivas Vergara

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

En declaración judicial de fecha 16 de noviembre de 2004, rolante de fs. 394 (Tomo I), comunica en lo pertinente que recuerda la detención de siete personas, todas adultas, entre ellos un tal Colihueque, que fueron citados al cuartel por órdenes del regimiento Tucapel y luego de ello le correspondió trasladarlos hasta Temuco, donde los entregó a la guardia del regimiento Tucapel. Que esas personas regresaron a Pucón como a los cinco días y debieron presentarse a firmar todos los fines de semana en el cuartel.

En declaración judicial de fecha 09 de julio de 2012, rolante de fs. 718 (Tomo II), recuerda a un señor de apellido Barra Matamala, quien colaboró en una oportunidad con carabineros para septiembre de 1973, facilitando su camioneta para trasladar detenidos al regimiento Tucapel.

A.5. Guillermo Segundo Rosales Pérez

En declaración judicial de fecha 09 de julio de 2012, rolante de fs. 719 (Tomo II), interrogado dice que hubo detenidos por motivos políticos en la subcomisaria de Pucón, pero lo fueron el mismo 11 de septiembre de 1973. Al día siguiente, esos detenidos fueron retirados por personal militar del regimiento Tucapel de Temuco.

En declaración extrajudicial de fecha 08 de junio de 2012, rolante de fs. 770 a fs. 771 (Tomo III), replica su desarrollo funcionario y recuerda que llegado el pronunciamiento militar se encontraba cumpliendo el servicio de guardia y en aquella oportunidad hubo entre veintiocho a treinta personas detenidas, las cuales quedaron en los calabozos de la unidad policial. Según su apreciación, estas personas fueron detenidas por temas políticos las cuales al día siguiente fueron trasladadas a Temuco en camiones militares.

En declaración extrajudicial de fecha 15 de mayo de 2013, rolante de fs. 1.012 a fs. 1.013 (Tomo III), puntualiza que el 11 de septiembre de 1973 cumplió funciones de encargado de guardia de la unidad policial, en horas de tarde fueron llevadas a la unidad cerca de 30 personas, las cuales entregó al encargado de guardia del turno entrante, quien hizo entrega de los detenidos a personal de ejército, quienes los trasladaron en camiones militares de Temuco, por lo que comentaron en su momento, ya que ese día estaba saliente de turno.

A.6. Eduardo Vergara González,

En declaración extrajudicial del 15 de noviembre de 1995, rolante de fs. 52 (Tomo I), en lo pertinente manifiesto que su función específica era la oficina de

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

partes y el rol administrativo de la unidad. En cuanto a los hermanos Schmidt Arriagada, conocía a la madre de nombre Aurora Arriagada Vergara, la cual tenía un restaurant en Villarrica, quien convivía con Otto Schmidt. En el año 1957 cuando se desempeñaba como jefe del retén Llafenco, conoció a sus hijos, los cuales a esa fecha eran pequeños. Desde esa fecha no los volvió a ver. Que no es efectivo lo que ha manifestado la señora Aurora Arriagada, que su hijo fue capturado y llevado a la unidad de Pucón.

En declaración judicial del 17 de noviembre de 2004, rolante de fs. 397 a fs. 397 vuelta (Tomo II), ratifica su declaración exponiendo que, en enero de ese año, pasó a visitarlo Luis Bustos Letelier, subcomisario de Pucón en 1973, conversando acerca de los hechos acaecidos con motivo de la detención de unos jóvenes desaparecidos. Estuvieron de acuerdo, en que efectivamente estuvo en el cuartel cuando estos fueron detenidos y que los habrían entregado al regimiento Tucapel. El Tribunal le pregunta si vio pasar detenidos en tránsito hacia Temuco, ya sea trasladados por personal del ejército carabineros o de la fuerza aérea, responde: que sí, en dos o tres oportunidades vio a los militares, que fueron a buscar detenidos. El Tribunal le pregunta si tuvo conocimiento que algunos detenidos hayan sido transportados vía aérea hacia Temuco o vio sobrevolar helicópteros en la zona. El deponente responde: que vio sobrevolar helicópteros antes y después del 11 de septiembre, que también aterrizaban a buscar detenidos.

En declaración extrajudicial del 09 de agosto de 2012, rolante de fs. 824 a fs. 825 (Tomo III), replica que, respecto a la detención de Hugo y Elías González Ortega, Juan y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa, Héctor Aguayo Olavarría, Raúl Figueroa Burkhardt y Alejandro Escobar Vásquez, recuerda a los hermanos Schmidt, por conocer a su padre Otto, quien tenía domicilio en Menetúe, cuando trabajó en el retén de Llafenco. En cuanto a la detención de estos jóvenes, señala que en una oportunidad el capitán Bustos, le comento que había detenido a un grupo de jóvenes que aparentemente intentaban cruzar la frontera cerca de Caburgua. Que, según Bustos, la detención la habría hecho el suboficial Heleo Raúl Burgos Burgos, junto al carabinero Francisco Monsalve Hidalgo y otros funcionarios que no recuerda. Por lo comentado por el capitán Bustos, esos jóvenes fueron entregados al ejército, motivo por el cual se les

trasladó hasta el regimiento Tucapel de Temuco, por vía terrestre en un vehículo particular.

En declaración extrajudicial del 16 de mayo de 2013, rolante de fs. 1.014 a fs. 1.015 (Tomo III), en relación con los ocho detenidos, se enteró en una oportunidad sobre la detención de unos jóvenes, pero no puede precisar si son ocho, quienes fueron detenidos por el sargento Burgos, Ramón Quezada Reyes, Monsalve y otros funcionarios. Que posterior a la detención de los jóvenes, leyó un oficio en el cual se hacía referencia a los detenidos, recordando que en este oficio figuraban los hermanos Schmidt y Olavarría, quien era hijo de un comerciante en la ciudad de Curarrehue. Ese oficio no lo confeccionó él, en dicho documento se mencionaba la entrega de los detenidos al regimiento de Infantería N°8 Tucapel de Temuco. Que estos detenidos fueron trasladados vía terrestre a Temuco, ignora si fueron llevados en vehículo policial o de propiedad de Carlos Barra Matamala, quien siempre les prestó colaboración.

A.7. Juan Esteban Ortiz Parra

En declaraciones extrajudiciales de fecha 17 de julio de 2015, rolante de fs. 2.154 a fs. 2.155 (Tomo VI), ciñe que efectivamente días posteriores al golpe de Estado, encontró en el río Toltén una gran cantidad de cuerpos flotando en las aguas y otros varados en la ribera del mismo río. El caso es que en esa ocasión se fijó especialmente en un cuerpo que estaba varado en la ribera del río cerca del sector Galpones, se fijó en este cuerpo porque era de una persona muy joven, por lo que se bajó del bote y procedió a revisarlo, ya que podía tratarse de un conocido, pero no era el caso, ya que inmediatamente se dio cuenta que no lo era, sumado que al revisar sus vestimentas se percató que tenía un papel que era de un colegio de Villarrica y alcanzó a distinguir que su apellido era Aguayo y probablemente su nombre era Pedro, es lo que recuerda. El cuerpo de ese joven presentaba una perforación por la parte posterior de su cráneo y sus manos estaban amarradas con alambre de púa y estaba vestido con pantalones tipo jeans color azul y una chomba. Las características físicas de ese joven, señala que aparentemente no superaba los quince o dieciséis años, era de baja estatura y no pudo percatarse de otras características, ya que el cuerpo estaba muy golpeado por la acción de las rocas del río.

A.8. Rubén Ernesto Sandoval Muñoz

En declaraciones extrajudiciales de fecha 20 de julio de 2015, rolante de fs. 2.156 a fs. 2157(Tomo VI), respecto a los cadáveres que vio en el río, especial atención le llamó un joven que vio varado en un quebradero del río entre el sector Bajada de Piedra y Chesta, ya que presentaba una perforación al lado derecho de su cráneo y otra perforación en la parte posterior de este, dándole la impresión de que le habían dado un balazo. Recuerda que junto a su cuerpo sobre la arena estaban sus documentos de identidad, recordando que decía Villarrica, no distinguiendo su identidad. Las vestimentas del cadáver correspondían a un chaquetón, blue jeans y zapatillas, no pudo percatarse si presentaba otras heridas porque por temor prefirió retirarse del lugar. Respecto a la fotografía que se le exhibe, señala que efectivamente se trata del joven que vio en el río, ahora bien, el nombre que se le da a conocer como Héctor Aguayo Olavarría. Solo del que mencionó pudo observar sus documentos ya que estaban en la arena, incluso le dio la impresión de que había sido revisado con anterioridad.

En declaración judicial de fecha 31 de mayo de 2017, rolante de fs. 2.645 a fs. 2.646, (Tomo VIII), señala que ratifica su declaración e indica que en diciembre de 1973 pudo observar la presencia de distintos cuerpos en el río Toltén, en circunstancias que se encontraba prestando servicios remando un bote. Precisa que sólo pudo identificar uno de los cuerpos, a la altura de Chesta, en el kilómetro quince, pues cuando bajó del bote a tomar café lo vio y le quedó muy marcada su imagen, persona que en este acto reconoce tras exhibirle la fotografía que rola a fs. 2.317, cuyo nombre se le da a conocer como Héctor Aguayo Olavarría, quien tenía una perforación en el cráneo, al parecer por un impacto de bala, el cual vestía chaquetón oscuro, jean azules y zapatillas. Pudo observar que al lado de su cuerpo se encontraba su cedula de identidad, la cual sólo se lograba observar que decía "Villarrica".

A.9. Antonio Sergio Monserrat Mena

En declaración judicial de fecha 26 de junio de 2013, rolante de fs. 1.786 a fs. 1.788 (Tomo VI), replica sus funciones y dice que en estos operativos los militares trajeron personas civiles, las que fueron subidas al "aparato", regresando a Temuco con ellos más los militares. Recuerda que en dos o tres oportunidades más o menos le correspondió trasladar militares que llevaban civiles al Tucapel.

A.10. Ignacio Cofré Leal

En declaración extrajudicial de fecha 07 de junio de 2012, rolante de fs. 766 a fs. 766 vuelta (Tomo III), reseña de su carrera funcionaria y en lo pertinente por comentarios tomó conocimiento que hasta el cuartel llegaron aproximadamente seis detenidos jóvenes, desconociendo todo antecedentes, ya que, había sido detenidos por personal del ejército, presumiendo que fueron traídos y llevados en helicóptero, a algún lugar del cual desconoce.

A.11. Juan Humberto Carrillo Rebolledo

En declaración extrajudicial de fecha 29 de abril de 2009, rolante de fs.1.346 a fs.1.347 (Tomo IV), en cuanto a la permanencia de personas detenidas al interior del regimiento Tucapel, proclamo que efectivamente vio prisioneros políticos al interior de este, específicamente, en una sala contigua a la guardia. Además, recuerda haber visto en esa calidad a Juan Antonio Chávez Rivas y a Herman Carrasco Paul.

En diligencia de careo con Herman Carrasco Paul, de fecha 19 de mayo de 2009 rolante de fs. 1.351 a fs.1.352 (Tomo IV), ratifica su declaración y musita que esa fue la única oportunidad que lo vio, quien se veía muy deprimido, pero no tenía señales de haber sido torturado.

En declaración judicial de fecha 26 de julio de 2010, rolante de fs.1.533 a fs.1.534 (Tomo V), en lo concerniente respecto a su destinación al llegar al regimiento Tucapel, inquirió que en abril de 1973 paso a la compañía de plana mayor cuyo comandante era el capitán Nelson Ubilla Toledo; específicamente encuadrado en la primera sección bajo las órdenes de un sargento cuyo nombre no recuerda. A mediados de 1973 se hizo cargo de su sección el teniente Raimundo García Covarrubias.

A.12. Andrés Rigoberto Pacheco Cárdenas,

En declaración judicial de fecha 22 de septiembre de 2006, rolante de fs. 454 a fs. 454 Vuelta (Tomo II), anexa que, además, carabineros solicitaba algunas veces helicópteros para efectuar traslado de detenidos desde puntos lejanos a Temuco, como el sector cordillerano. En Temuco el Fiscal Militar era a quien le correspondía ver todos los demás casos que ocurrían tanto en la base aérea Maquehue como en el resto de las unidades, derivando a ese Tribunal los detenidos.

A.13. Luis Armando Jofré Soto

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

En declaración extrajudicial de fecha 12 de diciembre de 1995 de fs. 62 a fs. 63 (Tomo I), afirma que en el año 1972 era mayor de ejército y fue trasladado al regimiento Tucapel de Temuco, por el lapso de tres años. Durante su desempeño en esa ciudad, ocurrió el pronunciamiento militar, razón por la cual se le designó como fiscal militar. Que junto a Alfonso Podlech Michaud, abogado, organizaron el funcionamiento de la fiscalía, para la situación reinante. Que incluso para el mejor funcionamiento se tuvo la cooperación de actuarios de los juzgados de crimen, entre ellos González y Solorza. Que uno de los primeros consejos del abogado asesor y actuarios, fue que todos los movimientos que se efectuara en la Fiscalía debían ser ajustados a derecho y transparente, lo cual encontró muy acertado y así actuó.

En declaración judicial de fecha 23 de julio de 1999, rolante de fs. 1.275 (Tomo IV), soslaya que jamás se le interrogó a una persona torturada o con signos de un castigo físico ni moral, de lo contrario se habría seguido algún proceso al respecto. Revela que personas que regresaron al país lo han buscado para darle las gracias por su actuación favorable, con regalos para el deponente y sus hijos.

A.14. Adrián Segundo González Maldonado

En declaración extrajudicial de fecha 14 de diciembre de 1995, rolante de fs. 64 a 65 (Tomo I) explica que para el 11 de septiembre de 1973 trabajaba en el Primer Juzgado del Crimen de Temuco, como oficial tercero de la sección criminal. Dentro de los primeros días de pronunciamiento militar, fue destinado en comisión de servicio a la Fiscalía de Ejército de Cautín, junto a Héctor Toloza Fierro (fallecido), siendo recibidos por el mayor y fiscal militar don Luis Jofre Soto junto al abogado asesor Alfonso Podlech Michaud. Se le dio la misión de actuarios y de inmediato comenzar a organizar la fiscalía y proceder a los interrogatorios de los detenidos que se encontraban en la cárcel y otros en el recinto de militar del Regimiento N° 8 Tucapel de Temuco. Que la fiscalía en un principio se encontraba al interior del citado Regimiento.

En declaración judicial de fecha 09 de enero de 1996, rolante de fs. 70 vuelta a fs. 71 (Tomo I), esgrime que efectivamente para el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, era oficial tercero del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, en tal razón fue destinado en comisión de servicio a la Fiscalía Militar de Cautín junto a su colega Héctor Toloza Fierro (fallecido). Alrededor de una semana después del 11, fue llamado por el presidente de ese entonces de la

Corte de Apelaciones, quien le comunicó que estaba destinado a dicho servicio. Al presentarse a la fiscalía fue recibido por el fiscal Luis Jofré Soto junto al abogado asesor Alfonso Podlech Michaud. La misión específica que realizó fue la de actuario, al igual que Toloza, vale decir, tomar las declaraciones de los detenidos o inculcados, y de todas las personas que aparecían implicados, tramitando todo el proceso.

En declaración judicial de fecha 11 de junio de 2009, rolante de fs. 1.367 a fs. 1.370 (Tomo IV), replica que la Fiscalía Militar funcionaba al interior del regimiento en una oficina ubicada en el edificio de la comandancia. Que Oscar Podlech Michaud prestaba asesoría legal al fiscal Jofré, no participando en los interrogatorios a detenidos y testigos.

A.15. Mario Hernán Arias Díaz

En diligencia de careo con Oscar Inostroza Segura, de fecha 26 de marzo de 2010, rolante de fs. 1.468 (Tomo V), aporta que en alguna oportunidad le correspondió entregar detenidos desde la guardia a conscriptos para que llevaran detenidos a la dependencia a que hace referencia el señor Inostroza.

En diligencia de careo con Libardo Schwartenski Rubio de fecha 26 de marzo de 2010, rolante de fs. 1469 (Tomo V), en lo pertinente, aunque no recuerda a la persona con la que se carea, pero si el nombre de Libardo Schwartenski como un conscripto de confianza del grupo de suboficiales y oficiales a cargo de los detenidos.

En declaración judicial de fecha 6 de julio de 2013, rolante de fs. 1.817 a fs. 1.819 (Tomo VI), consultado dice que vio detenidos en una dependencia ubicada en la guardia del regimiento, los que no se registraban en ese lugar, es decir, no se dejaba constancia de su detención e ingreso a la unidad en el libro de novedades. Sin embargo, le parece que había otro grupo de detenidos que eran llevados hacia la compañía de plana mayor, que iban con su vista vendada. Tiene entendido que todos los oficiales concurrían al lugar donde trabajaba Ubilla y su grupo, porque cuando llegaban con detenidos debían informarle al capitán respecto de la razón por la cual estas personas estaban privadas de libertad. También debían darle cuenta al fiscal respecto de lo mismo. Anexa que el fiscal en 1973 era el mayor Jofré, quien se hizo asesorar por personal de la Corte de Apelaciones de Temuco y por un abogado de nombre Alfonso Podlech. A este abogado lo veía casi todos los días cuando llegaba al regimiento. Siempre lo vio

de civil, salvo en los consejos de guerra, en que vistió uniforme. El Tribunal le lee las declaraciones extrajudicial y judicial prestadas por José Raúl Inzunza Reyes, de fs. 3.307 y fs. 3.310. El deponente señala: que supo de interrogatorios efectuados en la compañía de plana mayor y servicio, pero nunca participó de ellos. Que se comentaba eso sí, que los hermanos García Covarrubias participaban de estas actividades, sobre todo el menor de ellos que “medio loco”, sometiendo a los conscriptos a actividades de instrucción no programadas durante las noches.

En declaración extrajudicial de fecha 9 de mayo de 2019, rolante de fs. 3.187 a fs. 3.188 (Tomo IX), señala que el capitán Nelson Ubilla se hizo cargo de la inteligencia de la unidad militar, departamento segundo, además de encargarse de la compañía de plana mayor y servicios. Sobre la existencia de una sala ubicada entre la compañía de plana mayor y servicios y la compañía de morteros, donde después del día 11 de septiembre fue habilitada para efectuar interrogatorios a detenidos bajo aplicación de tortura, expresa que era manejada por el departamento segundo.

En declaración judicial de fecha 12 de julio de 2019, rolante de fs. 236 a fs. 242 (Cuaderno secreto), en lo pertinente dice que los que llegaban detenidos pasaban directo al departamento segundo y de ahí para la cárcel. Preguntado por el circuito respecto de los detenidos y la fiscalía militar, si pasaban donde Nelson Ubilla, responde que: claro, que llegaban al departamento segundo, ahí se imagina que los interrogaban, les conversarían cual era (...) eso lo desconoce y después llegaban a la guardia y después se irían. Los que no se iban los pasaban a la cárcel. El Tribunal le da a conocer que tiene bastantes antecedentes que indicarían que al interior del regimiento Tucapel de Temuco había varios lugares de detención, incluso había un lugar de tortura, donde había un catre, el gimnasio, se le pregunta que conocimiento tiene de eso. A lo que responde que: esa era una dependencia que había en la compañía de plana mayor y servicios, pero eso lo manejaba exclusivamente el departamento segundo. Preguntado en torno al departamento segundo, qué relación tiene Pedro Tichauer, el suboficial Romilio Lavín, el subteniente Raimundo García con esa unidad. Responde que lo desconoce. Que Tichauer estaba en administración, finanzas, este pertenecía a la compañía, pero a su llegada al cuartel, no recuerda si era soltero o casado, pero si era soltero llegaba a una pieza. Lavín era oficial de material de guerra, tenía su

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

oficina. Se le pregunta si Raimundo García era la compañía de plana mayor. Refiere que le parece que de la segunda compañía cazadores.

A.16. Alfredo García Díaz

En diligencia de careo con Alfonso Podlech Michaud, de fecha 23 de enero de 2002, rolante de fs. 244 a 246 (Tomo I), ratifica íntegramente su declaración, que, en septiembre de 1973, se encontraba como jefe interno de la penitenciaría, y le sorprendió cuando Alfonso Podlech llegó vestido de militar y en ese momento quedaron en libertad los detenidos de patria y libertad, con una orden judicial.

En declaración judicial de fecha 07 de enero de 2002, rolante de fs. 247 a fs. 249 (Tomo I), rememora que Alfonso Podlech los primeros días llegaba a la penitenciaría vestido de oficial de ejército o civil, indistintamente. Pero que el 11 de septiembre de 1973, llegó Alfonso Podlech como oficial de ejército con su respectivo uniforme, incluso le llamo mucho la atención porque lo conocía como abogado, llegó con una orden judicial para que quedará un grupo de patria y libertad que estaban detenidos. Dice que siempre entregaban a los detenidos con orden escrita y firmada por el fiscal militar del tiempo. Que muchas veces no regresaban con los detenidos que salían, porque llegan órdenes donde les comunicaban que se habían dado a la fuga, y ahí procedían a rebajarlo de los libros de novedades, tanto de la guardia armada y guardia interna.

En declaración judicial de fecha 15 de julio de 2003, rolante de fs. 360 a fs. 361 (Tomo I), en lo pertinente, anexa a sus dichos anteriores que a partir del 11 de septiembre aumentó considerablemente la población penal, porque comenzaron a llegar detenidos de toda la provincia en camiones del ejército, porque lo que se tuvo que habilitar una oficina especial para la estadística de detenidos.

A.17. Miguel Arcángel Calderón Sepúlveda

En declaraciones extrajudiciales de fecha 19 de julio de 2015, rolante de fs. 2.160 a fs. 2.161 (Tomo VI), señala que en 1973 estaba encuadrado en la sección de telecomunicaciones de la compañía de plana mayor y servicios del regimiento Tucapel, a cargo del capitán Nelson Ubilla Toledo, siendo su instructor el sargento Arias. Que llegado el 11 de septiembre de 1973, al regimiento comenzaron a llegar personas detenidas, las cuales quedaban alojadas en el gimnasio. En esa época fue elegido para ser estafeta de la Fiscalía Militar. Sus funciones eran la de repartir la correspondencia de la fiscalía, y, además, debía

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

trasladar detenidos desde la cárcel pública al regimiento para presentarlos en los consejos de guerra que se llevaban a cabo en el gimnasio los miércoles y viernes.

En declaración judicial de fecha 29 de julio de 2015, rolante de fs. 2.169 a fs. 2.170 (Tomo VII), ratifica su declaración y en relación de la sala de interrogatorios que había en la compañía de plana mayor señala que en ese lugar existía una sala de interrogatorio y tortura de detenidos. Pasado un tiempo, y ante la escasez de personal, le tocó ir buscar detenidos a la cárcel y llevarlos al regimiento para ser interrogados. Los detenidos no eran interrogados en la Fiscalía, sino que por orden del Fiscal Militar Podlech debía llevarlos hasta el regimiento, donde eran ingresados a la sala de interrogatorios a la que hizo referencia anteriormente. Él se quedaba afuera de la sala esperando a que se desocuparan. Las personas interrogadas eran torturadas. Escuchó gritos y llantos que provenían desde el interior de la sala de interrogatorios. Las personas eran sometidas a la aplicación de electricidad. Cuando salían de ese lugar debía esperar a que se recuperaran. Pero si escuchó comentarios que se hicieron, no recuerda por quiénes, en que se decía que habían ejecutado personas en el puente Allipén, o que las habrían ido a arrojar en ese lugar.

A.18. Carlos Luco Astroza

En declaración extrajudicial de fecha 11 de octubre de 2006, rolante de fs. 1.587 a fs. 1.588 (Tomo V), señala que fue enviado en calidad de agregado a cumplir funciones a la Fiscalía Militar del Regimiento Tucapel a partir del 14 de septiembre de 1973. Espeta que en más de una oportunidad pudo ver a don Alfonso Podlech al interior de la Fiscalía Militar del Tucapel sosteniendo reuniones con el mando y en oportunidades vistiendo de uniforme, sin dejar de mencionar que para todos los efectos era el señor Luis Jofré, el fiscal militar. Que también se destacaba la figura del capitán Nelson Ubilla Toledo, a quien recuerda como el hombre que tomaba las decisiones en cuanto a los detenidos junto a sus ayudantes los sargentos Schonherr Frías y Orlando Moreno Vásquez.

En declaración judicial de fecha 08 de abril de 2013, rolante de fs. 3.640 a fs. 3.642 (Tomo X), reitera que en el regimiento dependían directamente del capitán Nelson Ubilla Toledo, quien además tenía a su cargo a los detenidos. Indica que el mayor Jofré no se inmiscuía en nada, por lo que le parece que el abogado Alfonso Podlech estaba a cargo de hecho en la Fiscalía Militar, quien andaba de uniforme en el regimiento.

En declaración judicial de fecha 15 de noviembre de 2013, rolante de fs. 3.644 a fs. 3.646 (Tomo X), reproduce que en el regimiento dependían directamente del capitán Nelson Ubilla Toledo, quien además tenía a su cargo a los detenidos. Indica que el mayor Jofré no interfería en nada, por lo que le parece que el abogado Alfonso Podlech estaba a cargo de hecho en la Fiscalía Militar, quien andaba de uniforme en el regimiento y se entendía con el capitán Ubilla. Deja claro que nunca presencié una conversación entre ellos, pero sí era evidente que existía un nexo entre la Fiscalía Militar y el trabajo de inteligencia que ejercía Ubilla. Que tanto Podlech como Ubilla estaban constantemente en la Fiscalía Militar. Respecto a los detenidos en el regimiento Tucapel indica que ignora quiénes los interrogaban, pero supone que eran los demás detectives agregados, más el capitán Ubilla y los suboficiales Moreno Vásquez y Schonherr, que siempre andaban con este oficial.

A.19. Daniel San Juan Clavería

En declaración extrajudicial de fecha 18 de abril de 2012, rolante de fs.1.690 a fs.1.691 (Tomo V), afina su desempeño funcionario y en lo adecuado que para el año 1973, ostentaba el grado de detective cuarto y después del 11 de septiembre de ese año a solicitud del mando del regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco, fue asignado por sus superiores a cumplir funciones en dicho destacamento militar. Atestiguo que el lugar que se les asignó para trabajar correspondía a una oficina que a su parecer se encontraba en la comandancia del regimiento, donde también había una oficina de partes, donde trabajaban los sargentos Moreno y Schonherr, también en esas dependencias operaba la Fiscalía Militar.

A.20. Nelson Manuel Uldaricio Ubilla Toledo

En declaración extrajudicial de fecha 23 de julio de 2003, rolante de fs. 1.284 a fs. 1.285 (Tomo IV), en lo pertinente acerca de la Fiscalía Militar de Temuco y su funcionamiento en fechas posteriores al 11 de septiembre de 1973, recuerda que el fiscal militar, en primera instancia, fue el mayor Luis Jofre Soto, quien se desempeñó por espacio de dos o tres meses, no recuerda exactamente, pero sí que luego de éste pasó a desempeñarse el abogado Alfonso Podlech Michaud no precisando fecha. Del funcionamiento de la fiscalía, recuerda que los detenidos eran llevados al regimiento por funcionarios de carabinero o investigaciones, los cuales se les llevaba a prestar declaración o de lo contrario se

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

dejaban en calidad de tránsito de la guardia del recinto, hasta que declaraban; una vez hecho eran dejados en libertad o enviados a la cárcel.

En diligencia de careo con Herman Carrasco Paul, de fecha 12 de diciembre de 2003, rolante de fs. 1.303 a fs. 1.304 (Tomo IV), ratifica su declaración y proclama que no prestó funciones de ninguna naturaleza en la intendencia de Temuco, como tampoco es efectivo que haya interrogado o torturado a detenidos al interior del regimiento Tucapel. Enfatiza que los detenidos no estuvieron bajo su responsabilidad, sino bajo la responsabilidad de la Fiscalía Militar y estando encuadrado y subordinado en el regimiento no podría tener disponibilidad de la vida de las personas en sus manos.

A.21. Nelson Rodolfo Thielemann Rodríguez

En declaración extrajudicial de fecha 03 de julio de 2003, rolante de fs. 1.272 a fs. 1.273 (Tomo IV), expone que en cuanto a la muerte de personas que eran trasladadas hacia o desde la Fiscalía Militar, también escuchó del personal del regimiento Tucapel, que a veces estos hechos acontecían producto que los detenidos trataban de escapar de las patrullas militares que los custodiaban.

A.22. Ramón Armando Torrealba Guzmán

En declaración judicial de fecha 20 de noviembre de 2012, rolante de fs. 867 a fs. 869 (Tomo III), dice que hubo una instrucción que impartió la Fiscalía Militar del Ejército desde Temuco que ordenaba la detención de ciertas personas y el allanamiento de domicilios en Villarrica. Los detenidos eran derivados a la Fiscalía Militar de Temuco. En aquel tiempo el fiscal militar era Alfonso Podlech Michaud.

A.23. Hernán Alejandro Morales Gómez

En declaración judicial de fecha 26 de junio de 2012, rolante de fs. 1.789 a fs. 1.792 (Tomo VI), soslaya que se le designó Fiscal Ad-Hoc para efecto de una investigación, que conoce a Alfonso Podlech Michaud, quien es abogado, respecto del caso en particular por el que se le pregunta, indica que esta persona lo llamó por teléfono a poco de haber tomado su cargo de Fiscal Ad-Hoc para pedirle que dejara a todos los detenidos presos, porque eran extremistas. Que en aquel tiempo Podlech tenía buenas relaciones tanto con los oficiales de la fuerza aérea como con los del regimiento Tucapel. Que en este último lugar se le veía a menudo, puesto que había sido militar anteriormente. Después del 11 de

septiembre de 1973, Podlech acudía frecuentemente al regimiento, vestido de militar.

A.24. Manuel Vásquez Chahuán

En declaración judicial de fecha 25 de junio de 2003, rolante de fs. 346 a fs. 346 vuelta (Tomo I), cuenta que al 11 de septiembre de 1973 se desempeñaba como oficial subalterno en el regimiento Tucapel de Temuco, con el grado de teniente. Al mando del regimiento estaba el coronel Pablo Iturriaga Marchesse, le seguía el teniente coronel Jofre, después el mayor Leal Manzer, A continuación venían los capitanes, que eran comandantes de compañía, entré los que recuerda a Mario Alvarado Verdugo, Fernández Carranza, Nelson Ubilla Toledo, González, Vargas (fallecido); luego venían los tenientes recordando a los hermanos Jaime y Raimundo García Covarrubias y los subtenientes Grant, Oviedo, Espinoza, y Armando Maldonado Valdivia, oficial de reserva.

En declaración judicial de fecha 04 de septiembre de 2009, rolante de fs. 1.403 a fs. 1.404 (Tomo IV), atestigua respecto de la presencia de detenidos al interior del regimiento Tucapel, que sólo vio personas privadas de libertad que estaban en tránsito hacia la fiscalía o hacia la cárcel.

En declaración extrajudicial de fecha 20 de agosto de 2009, rolante de fs. 1.410 a fs. 1.412 (Tomo IV), alude que respecto de las personas que ingresaron detenidas al regimiento, específicamente Fiscalía Militar, funcionó en un principio en el pabellón de comandancia de la unidad, donde tenía la oficina el comandante Jofre y luego al costado de la guardia de unidad, indica que efectivamente luego del 11 de septiembre ingresaron personas en esa calidad. Anexa que el abogado Alfonso Podlech Michaud era el asesor del fiscal militar y efectivamente en oportunidades vestía uniforme, siendo al parecer su grado oficial de justicia, desde antes del 11 de septiembre de 1973.

En declaración extrajudicial de fecha 06 de agosto de 2015, rolante de fs. 2.307 a fs. 2.308 (Tomo VII), aquilata su desempeño funcionario, y replica que la fiscalía militar, probablemente tenía relación con las determinaciones que se hacían respecto a los detenidos del regimiento, en el sentido de disponer en que condición quedarían estos. Que el fiscal militar de la unidad militar era el mayor Luis Jofré Soto, siendo apoyado en sus funciones por un abogado de apellido Podlech, a quien se le asimiló al grado de oficial de ejército.

A.25. Gonzalo Enrique Arias González

En declaración extrajudicial de fecha 11 de julio de 2003, rolante de fs.1.279 a fs. 1.280 (Tomo IV), comunica que, transcurrido el 11 de septiembre, llegaron a su despacho procesos derivados de la Fiscalía Militar, propiamente tal y cuyo fiscal era un abogado de apellido Podlech, por cuanto dichos documentos, eran firmados por esa persona, no así las actuaciones judiciales que había en cada proceso, por cuanto esto no lo recuerda.

A.26. Eleodoro Rubilar Bascur

En declaración judicial de fecha 25 de junio de 2003, rolante de fs. 348 a fs. 348 vta. (Tomo I), depone que Alfonso Podlech Michaud era fiscal militar y concurría periódicamente a la penitenciaría, la mayoría de las veces en tenida militar y pasaba donde el oficial de guardia, quien daba las novedades y anunciaba con el Alcaide, con él cual conversaba.

A.27. Orlando Moreno Vásquez

En declaración extrajudicial de fecha 18 de julio de 2003, rolante de fs. 1.276 a fs.1.278 (Tomo IV), musito en cuanto al funcionamiento de la fiscalía militar y sus integrantes que estas personas fueron llevadas por un abogado, quien fue el que se hizo cargo de la fiscalía militar de Temuco a los pocos días después del 11 de septiembre de 1973, de nombre Alfonso Podlech Michaud; quien para todos los efectos era el Fiscal Militar letrado, ignorando cuál era su función específica por cuanto nunca trabajó en forma directa con él. Alude que Alfonso Podlech Michaud cumplía sus funciones de Fiscal en el regimiento Tucapel, recordando que era cotidiano verlo en el interior de esa unidad militar, pero no pudiendo agregar que este se encontraba durante todo el día. Con relación al servicio de inteligencia militar indico que cumplió funciones, pero de este servicio estaba a cargo el entonces capitán Nelson Ubilla Toledo, que a su vez era comandante de la compañía de plana mayor. Otro de los integrantes de este grupo era el sargento Schonherr. Reconoció que cuando la fiscalía militar necesitaba algún preso político, era enviado con una orden de esta para retirarlo de la cárcel y una vez que era interrogado, era trasladado nuevamente al recinto carcelario.

En declaración extrajudicial de fecha 11 de febrero de 2009, rolante de fs. 1.329 a fs.1.331 (tomo IV), insiste que, para el septiembre de 1973, el mayor Luís Jofré siguió cumpliendo funciones de fiscal militar, pero era asistido por el abogado Alfonso Podlech Michaud. Que efectivamente y cree que por su

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

especialidad la que es "Especialista en seguridad militar", le correspondía ir hasta la cárcel pública de Temuco, en vehículo militar (jeep) escoltado por patrulla de la unidad a dejar detenidos de la fiscalía del regimiento o llevar detenidos que eran requeridos; todos por causas políticas.

En declaración judicial de fecha 25 de junio de 2012, rolante de fs. 3.840 a fs. 3.841 (Tomo XI), a la pregunta, explico que el fiscal era Luis Jofré Soto, pero era asesorado por Alfonso Podlech Michaud. Este abogado iba constantemente a la fiscalía a conversar con el mayor Jofré encerrándose ambos en la oficina del mayor. Este procedimiento era rutinario y permanente desde el mismo 11 de septiembre de 1973 y hasta que el abogado Podlech asumió como Fiscal. Este vestía de uniforme, porque antes había sido militar. Interrogado musita que los detenidos políticos eran mantenidos en un gimnasio pequeño que estaba a un costado del rancho de tropa. Estos detenidos eran interrogados en la Fiscalía o viceversa.

En declaración judicial de fecha 26 de junio de 2013, rolante de fs. 3.842 (Tomo XI), expone que no le consta que el señor Podlech haya confeccionado los bandos. Tampoco es efectivo que él fuera fiscal militar en 1973, pero sí le consta que este señor estaba permanentemente en la fiscalía y que, junto al mayor Jofré, que sí era el fiscal militar, tomaban decisiones respecto de los detenidos. Que los oficiales Jaime García Covarrubias, Raimundo García Covarrubias, Manuel Vásquez Chahuán, Nelson Ubilla Toledo y en general todo el resto debieron necesariamente saber acerca de la existencia de detenidos en el regimiento y el destino final de estos.

A.28. Pedro Misael Elgueta Muñoz

En declaración extrajudicial de fecha 15 de enero de 2013, rolante de fs. 1.750 a fs. 1.752 (Tomo V), que para septiembre de 1973 se encontraba efectuando su servicio militar en el regimiento de Infantería N°8 Tucapel de Temuco, encasillado en la sección de plana mayor de la compañía mortero, al mando del capitán Manuel Fernández Carranza, le correspondió cumplir servicios de guardia, siendo testigo en muchas ocasiones del ingreso durante el día de personas detenidas a la unidad militar, debiendo hacer mención que en horas de la noche y de la madrugada, ingresaban dos a tres personas detenidas, con sus rostros cubiertos, a la sala de descanso por unos minutos y luego eran subidos a camiones tres cuartos, los cuales eran trasladados al sector de la isla, logrando

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

escuchar a los minutos posteriores el sonido de disparos, presumiendo de inmediato que estas personas habían sido ejecutadas. Que estas “labores” de llevar a cabo las ejecuciones de las personas detenidas en la isla, según como pudo apreciar durante el desarrollo de su servicio, eran bajo las órdenes del oficial de ronda, recordando al capitán Nelson Ubilla de manera frecuente en estos procedimientos, debiendo agregar que quienes podrían haber cooperado o participado en estas funciones, personal de las compañías andina, plana mayor y cazadores. Que otra situación que logró observar cuando fue designado como policía militar, correspondiéndole en el casino, desempeñar labores de seguridad, mientras se realizaban los consejos de guerra, instancias donde el abogado Alfonso Podlech y el comandante del regimiento Pablo Iturriaga Marchesse, sentenciaban las condenas de los detenidos en presencia de éstos, escuchando siempre la pena de muerte o fusilamiento. Que también pudo observar cuando trasladaban a los detenidos a la sala de instrucción de la compañía de morteros, lugar donde se escuchaba los desesperados gritos de estas personas que eran interrogadas.

En declaración judicial de fecha 17 de enero de 2013, rolante de fs. 1.754 a fs. 1.756 (Tomo V), ratifica su declaración extrajudicial agregando que vio de detenidos en el regimiento Tucapel, los que estaban en la guardia de la unidad y en la sala de instrucción de la compañía de morteros. Que en ese lugar los detenidos eran torturados. Pudo escuchar muchas veces los gritos de dolor que salían de esa dependencia. Allí eran sometidos a apremios tanto hombres como mujeres. Que los oficiales a cargo de los detenidos eran Nelson Ubilla Toledo, Jaime y Raimundo García Covarrubias, Manuel Espinoza Ponce, Manuel Vásquez Chahuán y Alejandro Rubio Valladares. Que estos oficiales eran ayudados por los sargentos y clases de la compañía de plana mayor y servicios, más algunos soldados conscriptos entre los que recuerda a Etchepare y Schwarstensi. Que mientras estuvo de guardia en cuatro o cinco oportunidades pudo ver durante la noche que llegaban a la sala de descanso de su compañía dos o tres detenidos vendados. Estos eran traídos se imagina desde la cárcel o de otra parte. Quedaban un rato detenidos en ese lugar y más tarde eran sacados, generalmente por Nelson Ubilla Toledo y los oficiales de la plana mayor y servicios y sus ayudantes, para ser subidos a un camión y se los llevaban a la isla Cautín. Al poco rato se escuchaban disparos provenientes de ese lugar. Respecto a

Alfonso Podlech Michaud dice que lo recuerda bien porque como dijo en su declaración extrajudicial lo vio en los consejos de guerra. Esta persona a su parecer leía la sentencia que casi siempre era de fusilamiento.

A29. Daniel Arnoldo Aguirre Mora

En declaración judicial de fecha 01 de agosto de 2012, rolante de fs. 1.711 a fs. 1.714 (Tomo V), en lo pertinente dice que los funcionarios asignados al regimiento pasaron a depender de la inteligencia militar, que estaba bajo las órdenes del capitán Nelson Ubilla Toledo. En cuanto a Alfonso Podlech, señala que un año antes que ocurriera el golpe militar este abogado iba al cuartel a requerir información de tipo político. Recuerda que se entrevistaba con el prefecto Leonel Hormazábal y con el detective Quiroz. Sabe que le entregaba esta información a alguien en el regimiento Tucapel, pero desconoce a quién. Que esta información la obtenía desde los archivos que la inteligencia de investigaciones tenía. Esta información la usaba con el grupo de Patria y Libertad de Temuco, según comentaban los mismos funcionarios. Que después del 11 de septiembre de 1973 Podlech siempre se mantuvo muy cercano y activo dentro el regimiento Tucapel. Que incluso en una oportunidad en que el prefecto lo presentó ante la "Junta Chica" de Temuco, éste estaba con ellos. Suma en una oportunidad del mes de noviembre de 1973 con ocasión de haber quedado como prefecto subrogante, se produjo una fuga de personas que estaban detenidas en el regimiento Tucapel, los que fueron "dados de baja". Concurrió al regimiento para pedir antecedentes sobre este hecho para tenérselas al prefecto cuando regresara. Cuando llegó a ese lugar se entrevistó con el comandante Iturriaga Marchesse y con Alfonso Podlech. Entonces el comandante le dijo que sólo le comunicara al prefecto que los detenidos habían intentado fugarse y que eso era todo. Agrega que Ortiz le comentó que en alguna ocasión algunos detenidos murieron en las sesiones de interrogatorios y torturas. Que además le dijo que los militares no sabían interrogar porque maltrataban demasiados a los detenidos al punto de dejarlos semi inconscientes. No sabe que oficiales del ejército practicaban interrogatorios en el Tucapel, pero sí recuerda que el capitán Nelson Ubilla Toledo y el teniente o capitán Manuel Vásquez Chahuán concurrieron en dos o tres ocasiones a buscar detenidos políticos, para llevarlos al regimiento. "Estos detenidos eran casi todos miristas".

En diligencia de careo con Hernán Quiroz Barra, de fecha 05 de julio de 2013, rolante de fs. 1.811 a fs. 1.812 (Tomo VI), ratifica sus dichos y comunica que Alfonso Podlech antes del 11 de septiembre de 1973 iba siempre al cuartel de investigaciones a buscar información de inteligencia. Para esto pasaba al segundo piso de la unidad y en algunas oportunidades lo vio junto al señor Quiroz.

En diligencia de careo con Oscar Alfonso Podlech Michaud, de fecha 13 de agosto de 2013, rolante de fs. 1.836 (Tomo VI), ratifica sus dichos reconoce a la persona con quien se le carea como Alfonso Podlech Michaud de quien ha hecho referencia porque éste se presentó ante el suscrito previamente. Aclara que nunca en el pasado este sostuvo alguna conversación con él. Que quien puede avalar sus dichos es el ayudante del prefecto.

A.30. Hernán Raúl Quiroz Barra

En declaración extrajudicial de fecha 18 de abril de 2012, rolante de fs. 1.692 a fs. 1.694 (Tomo V), en lo concerniente dice que, una vez llegado el 11 de septiembre de 1973, y debido a los hechos que ocurrieron ese día fue destinado por el mando de su unidad a cumplir funciones al interior del Regimiento de Infantería N°8 Tucapel de Temuco. Que una vez que llegaron al regimiento Tucapel, se les puso bajo las órdenes de la Fiscalía Militar la cual estaba a cargo del mayor Luis Jofre Soto, siendo su ayudante el capitán Nelson Ubilla Toledo. Se le asignaron labores de toma de declaraciones a detenidos, efectuar citaciones, detenciones y allanamientos ordenados por la Fiscalía Militar. Que la dependencia que se le asignó correspondía a una oficina ubicada en la comandancia del regimiento. Señala que el fiscal militar ordenó que los detenidos que no colaboraran con ellos fueran entregados directamente al teniente de ejército Manuel Espinoza Ponce, quien se haría cargo de estas personas. En cuanto a los sargentos Schonner y Moreno, los recuerda trabajando como dactilógrafos en una oficina que estaba en la misma dependencia donde ellos trabajaban, recordando haberlos visto en más de alguna oportunidad tomándoles declaraciones a detenidos. Y agrega que siempre se enteraban de fallecimiento de detenidos al interior del regimiento durante las mañanas y de acuerdo con la información que se les entregaba a las personas, fallecían, producto de disparos efectuados por personal militar por intentar fugarse del regimiento en horas de la noche. Reiterando que mientras estuvieron agregados al regimiento siempre estuvieron

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

bajo las órdenes de la Fiscalía Militar, recordando que ésta, estaba asesorada por el abogado Alfonso Podlech Michaud.

En declaración judicial de fecha 04 de junio de 2003, rolante de fs. 1.770 a fs. 1.771 (Tomo V), replica que al presentarse en la ayudantía del regimiento Tucapel fueron derivados al señor fiscal militar de ese entonces Luis Jofre Soto, quien les indico que debían cumplir las mismas funciones que cumplían en investigaciones, pero al mando de este. Las que consistían en detenciones, citaciones, allanamientos, búsqueda de armas, bombas. Todas las órdenes que cumplieron fueron mediante decreto de la fiscalía, tal como se hacía con los tribunales ordinarios de justicia. Manifiesta que a ellos se les asignó una oficina en el interior del regimiento Tucapel frente a la fiscalía misma. En ella tomaban declaraciones a los detenidos. Respecto a los detenidos “difíciles” eran entregados al teniente de ejército de apellido Espinoza, quien era comando, boina negra, alto de ojos claros, le decían “el gato Espinoza”. Que este oficial era el encargado del interrogatorio de esas personas difíciles, precisa que se trataban de detenidos que “se iban de negativa y no querían reconocer, habiéndoles encontrado explosivos o armamentos en su poder”. En cuanto a Alfonso Podlech Michaud, sabe que este asesoraba al fiscal militar Luis Jofre Soto, en la parte legal. Este era abogado y concurría en esa época al regimiento donde lo vio personalmente. Que a petición de Podlech, se llevó a la fiscalía gente profesional, esto es, funcionarios actuarios de los tribunales de justicia. Que también tiene conocimiento que este pidió asesoría a un Ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, para llevar un buena forma el funcionamiento de la Fiscalía Militar.

En declaración extrajudicial de fecha 08 de noviembre de 2002, rolante de fs. 1.772 (Tomo V) y que continua a fs. 1.774 (Tomo VI) insiste que las órdenes las impartía el señor fiscal directamente al grupo comisario Poblete, y posteriormente salían a darle cumplimiento. En estas labores le correspondió realizar diferentes investigaciones, citaciones de personas y también detenciones. Que cuando se detenía a una persona, era interrogada en los cuarteles de investigaciones y luego puesta a disposición de la fiscalía. En algunas oportunidades cuando se trataba de detenidos “difíciles” eran entregados al teniente de ejército de apellido Espinoza, quien se hacía cargo de su interrogatorio. Que su desplazamiento dentro del regimiento estaba un poco restringido, ya que, para el ingreso pasaban por la guardia, luego contiguo a esta sala estaba una dependencia habilitada como

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

calabozo. Por el frente de la guardia estaba la sala de la comandancia, en cuyo interior funcionaba la fiscalía. A un costado de la oficina de la fiscalía existía una oficina donde trabajaban los detectives. La oficina estaba equipada con un escritorio, dos máquinas de escribir y unas cuantas sillas.

En declaración judicial de fecha 24 de junio de 2013, rolante de fs. 1.777 a fs. 1.782 (Tomo VI), esboza que el jefe de Inteligencia era el capitán Nelson Ubilla Toledo, pero desconoce que otros militares componían ese departamento. Que el grupo de detectives que fue comisionado para trabajar las órdenes emanadas de la Fiscalía Militar estaba a cargo del comisario Aquiles Poblete Müller. Que cuando llegaron al regimiento Tucapel había más de ochocientos detenidos en el patio de la unidad, los que permanecieron por lo menos cinco días allí, ya que, ellos debían tomarles declaraciones y anotar sus datos. Le parece que los detenidos fueron mantenidos en un gimnasio que había al fondo del patio de la unidad o en las caballerizas, no recuerda exactamente. Sin embargo, ellos siempre permanecían tomando declaraciones en el patio. En esa tarea fueron ayudados por el suboficial Schonherr de ejército. El Tribunal le pregunta si le correspondió participar en interrogatorios de detenidos en el regimiento Tucapel. El declarante responde: "Sí me correspondió hacerlo, pero siempre en la oficina que teníamos asignada en el recinto de la comandancia". Respecto de los dichos expresados en su declaración extrajudicial sobre los detenidos difíciles y que eran entregados al teniente Espinoza, esto era una orden expresa que el mayor Jofre le dio a su jefe el comisario Poblete. En este sentido, muchas veces llegaron personas detenidas por patrullas de carabineros, militares o de la fuerza aérea, que venían catalogadas como extremistas, a quienes interrogaban en "nuestra oficina". Que estas personas eran derivadas al teniente Espinoza por orden del mayor Jofre. Para esto ellos llamaban a la guardia para que un soldado viniera a buscar al detenido, el que era llevado al calabozo de esa dependencia. Desde ese lugar el detenido era sacado por algún conscripto, más tarde para ser llevado a la presencia del teniente Espinoza. Respecto a las personas que resultaban muertas tras intentar fugarse o quitarles el arma a los centinelas, puede señalar que este tipo de noticias ellos las recibían cuando llegaban en la mañana a trabajar al regimiento.

En diligencia de careo con Daniel Arnoldo Aguirre Mora, de fecha 05 de julio de 2013, rolante de fs. 1.811 a fs. 1.812 (Tomo VI), ratifica declaraciones y

que por otra parte él sólo atendió al señor Podlech en el cuartel de investigaciones, en una oportunidad en que éste se presentó en la guardia y solicitó subir al segundo piso a la oficina de informaciones, donde trabajaba el detective Ortiz.

En declaración judicial de fecha 27 de octubre de 2021, rolante de fs. 3.680 a fs. 3.683 (Tomo XI), en lo pertinente el Tribunal le consulta quién le ordenaba interrogar a los detenidos. El deponente indica: que los militares entregaban detenidos en la oficina que ellos tenían y ordenados por el señor Poblete, interrogaban a los detenidos. Luego los mismos militares retiraban a los detenidos desde la oficina. Que la oficina donde estaban es la que se vio en la inspección ocular. El suscrito trabajaba con San Juan y Morales, en otra oficina estaba Poblete y Ortiz, pero estos últimos se fueron a trabajar al interior del regimiento con el grupo que tenía Ubilla. Que a ellos les llegaba un detenido con un temario, estas preguntas tenían que ver con asuntos políticos y con el correr del tiempo se ha dado cuenta que la información que les entregaban, lo que decía de los detenidos, era falso. El Tribunal le da a conocer la identidad de las víctimas de un hecho y lee lo pertinente de las declaraciones del testigo M.C.S, rolante de fs. 2.309, de fs. 2.638; de fs. 3.109 y la de fecha 16 de agosto de 2021. El deponente indica: que no solo ellos estaban ahí para interrogar. El capitán Ubilla solicitó a investigaciones más personal. Cuando empezaron a morir detenidos a cargo del grupo del capitán Ubilla, el señor Ortiz se retiró y les dijo “no se metan por ningún motivo a trabajar con ese grupo, porque a los militares se les están muriendo los detenidos”. Sobre las muertes de personas al interior del regimiento dice que debió enterarse la oficialidad del regimiento, porque es un hecho grave. Que es posible, pero no le consta lo que dice el testigo M.C.S. sobre las torturas que efectuaban los militares y que se le murieron detenidos, pero que ellos los detectives no estaban ahí, por lo menos San Juan, Morales y el deponente, quienes trabajaron en la comandancia. Insiste que no solo se dedicaban a los interrogatorios por motivos políticos. Respecto a muertes por patrullas militares, estos hechos eran investigados por el grupo donde estaban los actuarios Toloza y Gonzalez.

A.31. Sigisfredo Jara Contreras

En declaración extrajudicial de fecha 3 de julio de 2003, rolante de fs. 1.270 a fs.1.271 (Tomo IV), quien narro que recuerda que en el mes de noviembre

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

de 1973 y en circunstancias que había quedado como jefe del penal, fue a exponer la situación antes relatada al entonces fiscal Alfonso Podlech Michaud, quien a partir de ese momento cooperó en solucionar el procedimiento y de esta forma, en el corto plazo, el sistema volvió a ser como correspondía, pudiendo llevar el control de los detenidos. Preciso que anterior a Podlech, el fiscal militar en Temuco era el señor Luis Jofré. Referente a las libertades que daba la fiscalía militar, expuso que estas eran entregadas por funcionarios de gendarmería o de las instituciones militares.

En declaración judicial de fecha 04 de marzo de 1991, rolante de fs. 4.195 a fs. 4.196 (Tomo XII), afirma en lo pertinente que no tuvo ninguna relación con el personal militar que traía y llevaba gente desde la cárcel. Comunica que los presos políticos eran sacados de la cárcel por personas de ejército y de la fuerza aérea, siendo éstos los que los sacaban con unas órdenes que dejaban en la guardia, las que llevaban una firma ilegible y un timbre, pero para poder realizar estas situaciones hubo que conversar con el fiscal, don Alfonso Podlech o el secretario, para poder normalizar el ingreso y egreso de los presos.

A.32. Bernardino Piñera Carvallo

En declaración judicial de fecha 01 de octubre de 2010, rolante de fs. 4.219 a fs. 4.220 (Tomo XII), en lo pertinente recuerda haber hecho algunas gestiones ante el comandante del regimiento Tucapel de Temuco para preguntar por algún detenido, a petición de familiares de personas que estaban en esa calidad. Usualmente, el comandante Iturriaga lo enviaba a conversar con el abogado Podlech. Rememora que sus entrevistas con el abogado Podlech se efectuaban en el regimiento Tucapel.

A.33. Octavio Zúñiga Corvalán

En declaración judicial de fecha 06 de junio de 2003, rolante de fs. 4.241 a fs. 4.242 (Tomo XII), expresa que el día 13 de septiembre, llega un radio patrullas de carabineros, quienes proceden a detenerlo, lo llevan a la segunda comisaría de Temuco. Desde dicha comisaría, los trasladaron caminando hacia el regimiento Tucapel N°8. Que esto ocurrió aproximadamente el 15 de septiembre de 1973. En la Fiscalía Militar le tomaron una declaración, la que puede calificar que fue muy formal, versó fundamentalmente acerca de su militancia, reconociendo de inmediato que era Socialista de Chile y del sector más democrático, al cual pertenecía el senador Aniceto Rodríguez. Recuerda que la declaración la tomó un

actuuario de apellido Toloza. También vio ahí en la fiscalía al abogado don Alfonso Podlech, gente de la misma época suya, por lo cual se conocían todos, este vestía uniforme de oficial de ejército, pero no de campaña. Ese día estuvo alrededor de algunas horas en la Fiscalía Militar que funcionaba en el regimiento y fue dejado en libertad, con arresto domiciliario, autorizándosele para viajar a Pitrufuquén, dándosele un documento de que no podía ser detenido, sino por orden expresa de la Fiscalía Militar.

A.34. Audito Gavilán Tapia

En declaración judicial de fecha 10 de agosto de 2007, rolante de fs. 4.243 a fs. 4.245 (Tomo XII), comunica que hasta el 11 de septiembre de 1973 era gobernador del departamento de Nueva Imperial, que dos días después del 11 de septiembre salió un bando militar en el que se pedía que las autoridades del gobierno depuesto se presentaran hasta la Fiscalía Militar de Temuco. Concurrió entonces al regimiento Tucapel y se presentó en la guardia como exgobernador. Lo derivaron a una sala ubicada en el interior de la unidad militar, donde se entrevistó con el abogado Alfonso Podlech Michaud, quien le dijo que nada había en contra suya, por lo que debía irse a Nueva Imperial y presentarse ante el mayor de carabineros. Sin embargo, cuando salía de la sala de la fiscalía, se acercó a la oficina el segundo comandante de la base aérea Maquehue, cuyo nombre no recuerda, quién le manifestó al fiscal Podlech que el deponente había tenido conocimiento del operativo en el sector de Nehuentúe, donde funcionaba una escuela de guerrillas. Ante esta situación Podlech le dijo que iba a quedar detenido en la cárcel de Temuco en libre plática, además de pedirle que elaborara un informe escrito acerca de lo que sabía sobre lo ocurrido en Nehuentúe con una escuela de guerrillas. Hizo su informe y se lo entregó a Héctor Toloza, quién era un actuuario de la fiscalía militar. Luego de ocho días el señor Podlech lo mandó llamar y ordenó su libertad.

A.35. Rodolfo Fonseca Fernández.

En declaración extrajudicial de fecha 15 de abril de 2015 rolante a fs. 2.052 a fs. 2.054 (Tomo VI), que estuvo detenido en una fecha posterior al 11 de septiembre, a manos de personal de ejército quienes probablemente venían desde Temuco. Expresa que cerca del mediodía, llegaron al regimiento Tucapel donde estuvieron casi todo el día apoyados con los brazos en alto y piernas abiertas frente a un muro, siempre apuntados por un militar y recuerda además que en un

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

determinado momento los mandaron a comer con la vista vendada dentro del regimiento mientras los soldados los apuntaban según presume. Entre las siete y ocho de la tarde los sacaron de ese lugar para llevarlos a la fiscalía donde se enteró que se le había denunciado de extremista peligroso y también se le acusaba de haber querido matar a un carabinero de apellido Vergara, cosa que era totalmente falsa. Según recuerda el nombre del fiscal era Alfonso Podlech quien era el fiscal militar. Hace presente que el mencionado fiscal procedió a interrogar a los ocho detenidos que estaban ahí, dictaminando su libertad condicional, ya que les advirtió que debían quedar firmando en la tenencia de carabineros, situación que se prolongó por tres años. Complementando lo anterior, señala que el fiscal fue enfático en indicar que, si caían detenidos nuevamente, serían fusilados en el acto.

A.36. Elías Amar Amar

En declaración extrajudicial de fecha 5 de noviembre de 2003, rolante de fs. 1.288 a fs.1.289 (Tomo IV), expuso en lo pertinente que fue detenido el 14 septiembre 1973 en horas de la noche, que esa misma tarde los mismos soldados de la fuerza aérea lo trasladaron a la Fiscalía Militar del regimiento Tucapel, donde fue llevado ante el fiscal militar, percatándose que se trataba de un conocido abogado llamado Alfonso Podlech, quien lo envió incomunicado a la cárcel pública de Temuco.

A.37. Víctor Hernán Maturana Burgos

En declaración extrajudicial de fecha 3 de julio de 2013, rolante de fs. 1.266 a fs. 1.268 (Tomo IV), relato en lo pertinente que cuenta lo acontecido con su persona y agrega que durante el tiempo que estuvo detenido en la cárcel de Temuco y las veces que fue llevado a prestar declaración fue bajo sesiones de torturas en el regimiento Tucapel. Recuerda haber visto pasar muchas personas que tenían igual condición a la suya, entre otros Luis Almonacid Dumenes, Dixon Retamal Cornejo, Jaime Eltit Spielmann y Omar Venturelli Leonelli. Además dentro de las personas que fueron ejecutadas por razones políticas José Ortigosa Anseolaga, Juan Antonio Chávez Rivas y Daniel Mateluna Gómez. Con estas personas tuvo algún tipo de contacto en la cárcel o en el regimiento, por ejemplo, con Ortigosa, con quien fue sacado en el mismo vehículo con dirección al regimiento, pero en la tarde sólo volvió él, a los días después se sabía que le habían dado muerte. Respecto a los funcionarios de la Fiscalía Militar, que operaban los primeros días de octubre de

1973, recuerda que el fiscal era el mayor Luis Jofré Soto, quien además era el segundo comandante del regimiento; el asesor jurídico Alfonso Podlech Michaud, quien en su condición de abogado asumió el puesto, pero debido a la personalidad que tenía Jofré, "un poco tímido, este (Podlech) era quien hacía y deshacía en la Fiscalía".

En declaración extrajudicial de fecha 5 de noviembre de 2003, rolante de fs. 1.286 a fs. 1.287 (Tomo IV), reitera haber sido detenido el 13 de septiembre de 1973 y en lo preciso que mientras permaneció detenido hasta el mes de enero de 1976, se percató que la constante de la muerte o desapariciones de los detenidos políticos de Temuco, fue mediante el mecanismo de sacarlos desde el lugar donde se encontraban y nunca más regresaban, justificándose a través de la "Ley de Fuga" algunas de las muertes.

En declaración extrajudicial de fecha 10 de febrero de 2009, rolante de fs. 1.325 a fs. 1.326 (Tomo IV), en lo pertinente luego del relato de otros hechos, manifestó que al ingresar a la fiscalía fue el abogado Alfonso Podlech Michaud, vistiendo de militar con el grado de mayor; ordenó sin consulta alguna al personal de esa fiscalía, proceder a su detención, incomunicación y reclusión en la cárcel pública de Temuco, sin argumento alguno, lo que demuestra que este abogado era quien tomaba las determinaciones al interior de esa fiscalía, sin tomar siquiera el parecer de las autoridades militares que se encontraban.

En declaración judicial de fecha 19 de julio de 2013, rolante de fs. 1.824 a fs. 1.825 (Tomo VI), preguntado asevero que Alfonso Podlech Michaud fue la persona que ordenó su detención e incomunicación el 13 de septiembre de 1973, además de disponer su traslado a la cárcel. Que vestía uniforme en aquella oportunidad, lo interrogó a lo menos en cinco oportunidades en la Fiscalía Militar mientras estuvo privado de libertad, éste dirigía el interrogatorio mientras que un actuario tomaba nota a máquina de lo que declaraba. Constantemente Podlech le decía que, si no entregaba toda la información que se le estaba pidiendo en el interrogatorio, iba a ser devuelto a otro equipo para que ellos le sacaran las respuestas que él requería.

A.38. Herman Carrasco Paul

En declaración judicial de fecha 11 de diciembre de 2003, rolante de fs.1.298 a fs.1.302 (Tomo IV), expuso que para septiembre de 1973 era dirigente de las juventudes comunistas y el 17 de septiembre de 1973 detenido por

personas de la fuerza aérea trasladando al recinto de dicha unidad, donde relata apremios físicos y torturas sufridos, luego dejado en libertad. Posteriormente fue nuevamente detenido por carabineros de la segunda comisaria de Temuco, quienes al día siguiente lo trasladaron al regimiento Tucapel y los ingresaron a un calabozo que estaba detrás de la guardia. Allí fueron recibidos entre otros, por Orlando Moreno Vásquez, a quien conocía porque eran vecinos. Estando en ese lugar fue vendado y conducido por Juan Carrillo hacia el gimnasio del regimiento donde fue sometido a tortura, mediante la aplicación de electricidad en todo el cuerpo. Calcula que eran cinco personas las que lo torturaban, entre las cuales reconoció la voz de Nelson Ubilla Toledo y Orlando Moreno Vásquez. En otra ocasión fue conducido a las dependencias de la segunda compañía en donde le sacaron la venda y conversó cara a cara con Nelson Ubilla Toledo y en presencia al parecer de Orlando Moreno, quien le dijo que lo sabían todo y que dijera dónde estaban las armas. Que el día 8 de noviembre, aún en el gimnasio, los sacan de a uno hacia la Fiscalía Militar para firmar su libertad. Esto sucedió en presencia del cabo Schonherr y de Alfonso Podlech Michaud.

En diligencia de careo con Nelson Ubilla Toledo, de fecha 12 de diciembre de 2003, rolante de fs. 1.303 a fs.1.304 (Tomo IV), ratifica su declaración y agrego que el señor Nelson Ubilla Toledo, es a quien se ha referido en su declaración. Que el señor Ubilla es quien lo torturó y dirigía los interrogatorios. Quien argumentó que el motivo de conversar con él era el aprecio que le tenía a su suegro e iba a intentar salvarlo pues estaban todos condenados a muerte.

En declaración judicial de fecha 29 de diciembre de 2008, rolante de fs.1.314 a fs. 1.317 (Tomo IV), reitera sus detenciones y que dos días después fue llevado junto a Juan Antonio Chávez hasta la oficina de la Fiscalía Militar, ubicada al interior del regimiento donde fue conminado a firmar un documento autoinculpatorio, el cual se negaron a suscribir. En ese lugar se encontraban Alfonso Podlech, Nelson Ubilla Toledo y Orlando Moreno Vásquez. Reproduce que se salvó gracias a su suegro René Beltrán Valdebenito, quien intercedió por él y conversó con Nelson Ubilla Toledo, sumando detalle.

En declaración extrajudicial, de fecha 5 de enero de 2009, rolante de fs. 1.323 a fs. 1.324 (Tomo IV), comienza refiriendo a lo acontecido en episodio denominado "el asalto polvorín", y relatando su situación cuando fue detenido. En lo pertinente soslaya que el fiscal del regimiento Tucapel, el abogado Alfonso

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Podlech Michaud, este sí participaba de los interrogatorios, vestido de militar y con el grado de mayor, y fue éste quien, le insistió en firmar un documento; que negaron a firmar y donde se hacían responsables como los jefes del “Plan Z”.

En diligencia de careo con Alfonso Podlech Michaud, de fecha 12 de agosto de 2013, rolante de fs. 1.831 a fs. 1.832 (Tomo VI), en lo pertinente comunica que conoce a Alfonso Podlech Michaud desde niño.

A.39. Erasmo Ricardo Villanueva Simón

En declaración judicial de fecha 18 de junio de 2012, rolante de fs. 1.674 a fs. 1.677 (Tomo V), soslaya que para el año 1973 se desempeñaba en una oficina de contabilidad de Sergio Riquelme Inostroza. Un día del mes de noviembre del año 1973, no recuerda fecha exacta, fue al Seguro Social a efectuar un trámite. En ese lugar la señora María Antonieta Meza Moncada le preguntó por la dirección de la familia de Alejandro Flores Rivera, pues quería ir a darle el pésame por la muerte de éste. A su parecer esta señora estaba siendo vigilada, pues a los pocos días fue detenida y llevada al regimiento Tucapel, donde fue brutalmente torturada. Días más tarde llegó hasta su casa una patrulla de militares del regimiento Tucapel, quienes allanaron su domicilio. Un suboficial, cuyo grado, características y nombre no recuerda, le dijo que por orden del capitán Nelson Ubilla Toledo quedaba detenido. Lo llevaron a la guardia del regimiento Tucapel y allí fue ingresado a una dependencia contigua, donde había varios detenidos más, con quienes no conversó. Que también durante ese lapso iban sacando a los detenidos hacia otro sector, quienes regresaban más tarde con visibles signos de haber sido torturados. En ese lugar existía un banco similar a los que están en las plazas; lugar que era utilizado para dejar a los prisioneros que quedaban en muy malas condiciones. Al tercer día fue sacado de la guardia y llevado hacia una dependencia ubicada en una de las cuadras donde se alojaban los conscriptos. Esta cuadra era la tercera construcción dispuesta hacia el poniente de la entrada al regimiento. En esa sala cuando entró pudo ver una mesa larga, en la que estaban sentadas cinco personas, entre las que puede recordar un oficial vestido con uniforme de la fuerza aérea y cuatro civiles, uno de los cuales era el abogado Alfonso Podlech Michaud, persona a quien ubicaba de vista con anterioridad. También pudo ver una banca similar a las de las plazas. No recuerda quién le preguntó el nombre, pero luego de que revelara su identidad el abogado Alfonso Podlech buscó en un tarjetero que tenía junto a él sobre la mesa y sacó un papel.

Luego de mirarlo dio una orden señalando que quedaba detenido y que al día siguiente pasaba a interrogatorio. Que pudo percatarse que se dirigían hacia la misma sala, donde el día anterior había sido interrogado por Podlech. En ese lugar lo hicieron desvestir y lo sentaron en la banca que había visto el día anterior. Acto seguido comenzaron a aplicarle electricidad con un magneto. Que por el lenguaje utilizado por las personas presentes en la sesión de tortura presume que era gente con instrucción y cultura superior a la de un soldado clase. Una semana antes fue llevado al regimiento Tucapel y allí lo ingresaron a una dependencia ubicada hacia el fondo de la unidad militar, donde se entrevistó con el abogado Alfonso Podlech. En ese lugar esta persona le dijo que por decisión del tribunal quedaba en libertad a partir del 22 de diciembre, por lo que debía avisarle a su familia para que se preparara.

A.40. Edison Chihuailaf Arriagada

En declaración judicial de fecha 17 de marzo de 2012, rolante de fs. 1.656 a fs. 1.659 (Tomo V), expreso que los primeros días de octubre de 1973 llegó hasta su domicilio una patrulla militar que tenía órdenes para detenerlo, siendo llevado al regimiento Tucapel de Temuco. Allí permaneció todo el día en una dependencia ubicada en la guardia de la unidad militar. Estando en ese lugar pudo ver mucha gente detenida, algunos de los cuales habían sido torturados, pues presentaban claras muestras de haber sido golpeados. Entre éstos puede recordar a un joven de apellido Cortés, al parecer de nombre Fernando, esta persona llegó en muy malas condiciones traída por militares pues casi no podía mantenerse en pie. Que durante ese mismo día en que estuvo detenido en la guardia del Regimiento Tucapel pudo ver al abogado Alfonso Podlech vestido de traje de campaña, calzando botas y dos pistolas al cinto. Este hombre entró al guardia, visiblemente alterado, y comenzó a increpar a los soldados que se encontraba allí reunidos. Les dijo más o menos textualmente lo siguiente: "Oye po' esta es la última vez que les digo, no me dejen entrar más a estas mujeres y viejas de mierda, que me tienen loco con sus reclamos. Yo ya se los dije y si no me hacen caso los hago fusilar a ustedes también". Poco rato después entró al calabozo el mismo soldado que anteriormente le había pedido que le diera un plato de comida al detenido torturado. Se le veía muy apesadumbrado por lo que había sucedido con el abogado Podlech, al punto que se quejó diciendo que estaba harto de lo que estaba sucediendo y que no hallaba la hora de que todo esto terminara.

Además, indicó hacia el lugar donde Podlech había estado señalando que ahora mandaban ellos, como dejando entrever que había personas ajenas al regimiento con mando.

A.41. Mario Carril Huenumán

En declaración judicial de fecha 19 de julio de 2013, rolante de fs. 1.822 a fs. 1.823 (Tomo VI) y en lo tangente dice que cuando estaba siendo interrogado y torturado en el regimiento Tucapel, se encontraba desnudo, mojado y con la vista vendada. Detallando lo acontecido y que en un momento se le cayó la venda de la vista y pudo ver a varios militares a su alrededor y que frente a él estaba una persona sentada con una máquina de escribir, después supo que esta persona era Alfonso Podlech Michaud, a quien no conocía. Tiempo después estando en la cárcel, llegó una comisión de ministros de justicia y de militares, entre ellos el Intendente, quienes pasaron revista de los detenidos, reconociendo a la persona que había visto sentada frente a la máquina de escribir cuando lo torturaron y preguntó por su identidad a una persona y le dijo que era Alfonso Podlech Michaud, quien estaba a cargo de los detenidos políticos. Es enfático en insistir que la persona que estaba en sus torturas en el regimiento era claramente el señor Podlech.

En declaración judicial de fecha 21 de noviembre de 2003, rolante de fs. 4.225 a fs. 4.226 (Tomo XII), relata que el 02 de octubre de 1973 militares de boina negra llegaron hasta la residencia de su madre en Carahue donde se encontraba, lo amarraron de pies y manos siendo trasladado hasta la comisaría de Carahue, lugar donde estuvo un momento para posteriormente ser trasladado hasta el patio de una escuela donde fue interrogado y golpeado. A la mañana siguiente lo trasladan hasta el retén de Cholchol, lugar donde fue golpeado por un sargento de carabineros. Más tarde lo trasladan al regimiento Tucapel, donde permaneció por una semana alojado en un calabozo que estaba en la guardia. Que en ese lugar fue interrogado en varias oportunidades por el señor Podlech y por el señor Ubilla, en los interrogatorios amenazaron con matarlo, los hacían con la vista vendada. Que una vez lo llevaron a una especie de enfermería en donde le dijeron que “me iban a capar”, por lo que se sacó la venda y reconoció al señor Podlech. Aclarando que el señor Podlech no estaba torturando, sino que estaba presenciando la situación.

A.42. Eliana Pichón Seguel

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

En declaración judicial de fecha 13 de agosto de 2013, rolante de fs. 1.835 (Tomo VI), en lo pertinente a su estadía en el regimiento Tucapel, señala que debió haberse extendido por cinco a seis días, que puede que haya estado detenida desde el 13 o 14 de septiembre en adelante. En cuanto a Alejandro Flores Rivera lo conocía muy bien. Por ese motivo puede asegurar que lo vio en muy malas condiciones al interior del regimiento Tucapel, mientras era arrastrado por militares en el patio de esa unidad.

En declaración judicial de fecha 05 de septiembre de 2006, rolante de fs. 4.211 a fs. 4.214 (Tomo XII), en lo tangente dice que el día 14 o 15 de septiembre apareció en su casa una patrulla de militares integrada por dos jeep y un grupo de motoristas, quienes procedieron a detenerla trasladándola hasta el regimiento Tucapel, en dicho lugar fue conducida hacia el fondo del patio donde habían construido cubículos del tamaño de la oficina en la que se le interroga. Que estando en el patio del regimiento vio pasar a Alejandro Flores dirigente de los funcionarios del hospital de Temuco, quien tenía su rostro desfigurado por los golpes e iba siendo arrastrado por dos militares, y lo seguían dos o tres militares más. Posteriormente fue llevada a las caballerías del regimiento, lugar habilitado para el encierro de detenidos. Desde ese lugar fue sacada dos veces a prestar declaración en la Fiscalía Militar. En ambas oportunidades declaró con la vista vendadas; sin embargo, en la segunda de estas sesiones pudo quitarse la venda parcialmente para restregarse el ojo derecho entonces pudo ver sentado frente a ella a Alfonso Podlech Michaud, a quien conocía desde antes. Que esta persona la interrogó largamente y como no obtuvo información levantó el teléfono “muy encolerizado dando órdenes de preparar un pelotón de fusilamiento para su ejecución”.

A.43. Nelio Gastón Holzapfel Gross

En declaración judicial de fecha 12 de agosto de 2013, rolante de fs. 1.833 (Tomo VI), afirma que fue interrogado en la cárcel por un abogado que era fiscal de carabineros de nombre Dorian Novoa Godoy (fallecido). De quien había sido compañero en el liceo Pablo Neruda de Temuco, por ese motivo éste decidió interceder por él, ante Alfonso Podlech, comunicándose telefónicamente con éste para darle cuenta de su situación y su estado de salud. Luego de esa conversación su declaración fue destruida y fue dejado en libertad. Le consta que

Dorian se comunicó con Podlech porque lo llamo por su nombre cuando conversaron y escucho la conversación.

En diligencia de careo con Alfonso Podlech Michaud, de fecha 12 de agosto de 2013, rolante de fs. 1.834 (Tomo VI), ratifica declaración y que a pesar de que han pasado muchos años está seguro de que Dorian Novoa habló con Alfonso Podlech, aunque puede ser que Podlech haya consultado a alguien más respecto de su situación.

A.44. Bernardita del Carmen Weisser Soto

En declaración judicial de fecha 19 de julio de 2013, rolante de fs. 1.820 a fs. 1.821 (Tomo VI), en lo pertinente que cuando estaba sentada en un oficina de la Fiscalía Militar y vio llegar a los conscriptos con libros requisados y que fueron tirado en el piso junto con otros, pudo ver uno de Gabriela Mistral, se lo pidió al mayor Jofré, quien estaba en ese lugar, “lo recogió justo en el momento en que entraba Alfonso Podlech a la sala”; continua su relato en esa dinámica, sumando que Alfonso Podlech vestía uniforme militar y recuerda que en una o dos oportunidades la interrogó en la Fiscalía Militar junto con su actuario de apellido Gonzalez.

En diligencia de careo con Alfonso Podlech Michaud, de fecha 19 de julio de 2013, rolante de fs. 1.828 a fs. 1.830 (Tomo VI), ratifica su declaración y que la persona sentada a su lado es el abogado Alfonso Podlech Michaud, quien la interrogó a fines de octubre de 1973, en la Fiscalía Militar ubicada al interior del regimiento Tucapel. Comunica que fue sometida a Consejo de Guerra en 1975, y “usted” refiriendo a Alfonso Podlech, era fiscal en esa oportunidad. Que en esa ocasión fue muy irónico con los detenidos que allí estaban, pues señaló que habían sido muy bien tratados. En lo atinente replica haber sido interrogada por Podlech, en una oficina ubicada hacia el fondo del edificio que estaba situado hacia la izquierda de la entrada del regimiento. Que Podlech y el mayor Jofré usaban uniforme, mientras que sus actuarios y el señor Novoa vestían de civil. Le parece que la relación que tenía Podlech con el resto de los integrantes de la Fiscalía Militar, incluido el mayor Jofré era de superioridad, por cuanto daba la sensación de que todos le tomaban el parecer a él para actuar.

En declaración judicial de fecha 18 de noviembre de 2003, rolante de fs. 4.215 a fs. 4.218 (Tomo XII), soslaya en lo pertinente que fue trasladada al regimiento Tucapel, donde los recibieron en una oficina que a su parecer era el

lugar de funcionamiento de la Fiscalía Militar, lugar donde fue interrogada. Posteriormente fue trasladada al "Buen Pastor", donde estuvo más de 15 días incomunicada. Que un día fue trasladada al regimiento por el sargento Moreno y la llevaron a una declaración en la Fiscalía, que en ese lugar vio pasar a unos militares con libros requisados, los que iban a ser destruidos, que apareció Alfonso Podlech Michaud quien revisó los libros.

A.45. Héctor Ulises González Castro

En declaración judicial de fecha 27 de noviembre de 2012, rolante a fs. 876 a fs. 878 (Tomo III), en lo pertinente sostiene que, para el 11 de septiembre de 1973, se encontraba sirviendo en la policía de investigaciones de Villarrica, era jefe de unidad. Que el regimiento en septiembre de 1973 pedía que se les llevara detenidos a dirigentes sociales de Villarrica. Los solicitaba telefónicamente, sin órdenes escritas. Al ver esta situación, llamo al Fiscal Militar Alfonso Podlech Michaud y coordinaron una reunión para analizar la situación en la que regularizaron la forma en que se solicitaban a los detenidos. Desde esa fecha el Fiscal Militar Podlech, ordenó que toda se hiciera por escrito. Recuerda como detenidos políticos a toda la directiva del campamento "Che Guevara", que se presentaron voluntariamente en la comisaría. Los que fueron enviados detenidos a la Fiscalía Militar de Temuco.

A.46. José Albino Krause Álvarez

En declaración extrajudicial de fecha 10 de febrero de 2009, rolante de fs.1.327 a fs.1.328 (Tomo IV), en lo pertinente sostiene que para el año 1973 ostentaba el grado de cabo primero y cumplía funciones en el regimiento de Infantería N° 8 Tucapel de Temuco. Que efectivamente el regimiento Tucapel luego del 11 de septiembre de 1973, fue utilizado como lugar base para la permanencia de detenidos políticos; que eran requeridos por las autoridades militares y de la Fiscalía Militar que funcionaba al interior del regimiento. Recuerda al abogado Alfonso Podlech Michaud, quien vistiendo uniforme militar asimilado al grado de mayor era el fiscal militar del regimiento.

En declaración extrajudicial de fecha 11 de enero de 2017, rolante de fs. 2.575 a fs. 2.577 (Tomo VIII), señaló que en la compañía de plana mayor y servicios existió una sala donde torturaban a los detenidos, donde siempre se veía gente de civil que pertenecía a la policía de investigaciones de Temuco, recordando que uno de ellos era de apellido Quiroz.

A.47. María Antonieta Meza Moncada

En declaración extrajudicial de fecha 08 de noviembre de 2012, rolante de fs. 1.742 a fs. 1.744 (Tomo V), que ingresó en el año 1970 como militante del partido comunista, que fue detenida el 03 de noviembre por un teniente de carabineros el cual vestía de huaso, trasladándola hasta la segunda comisaria de Temuco, al día siguiente es llevada hasta el regimiento Tucapel de Temuco, donde es ingresada a la guardia, donde la dejan junto al sargento de apellido Pino, al cual conocía porque era vecino de su tío Juan Moncada. Indica que observó que al recinto ingresaban muchos de sus compañeros entre los cuales recuerda a Luis Cruz Cruces, el cual era trasladado desde un sector hasta la dependencia de la Fiscalía Militar. Es llevada hacia el interior del recinto por un conscripto de nombre Fernando Vega al cual conocía porque era su vecino, a mitad de camino la lleva el cabo Schonherr, el cual se hace cargo de su persona, este le venda la vista y traslada al gimnasio narrando las torturas y apremios a las que fue sometida, percatándose que en el interrogatorio eran tres las voces que se escuchaban, pero eran más personas las que estaban dentro de la sala. Posteriormente con la vista vendada se le obligo a firmar un documento y luego es trasladada a la fiscalía del recinto, en ese lugar es entrevistada por el sargento Mansilla. Luego es trasladada nuevamente al recinto de la guardia donde escucho nombre de personas que eran subidas a un camión, siendo trasladada por el sargento Leiva a una Citroneta y este le señaló que era la única forma de salvar su vida, ya que los del camión no tenían destino conocido.

A.48. José Heriberto Mansilla Gatica

En declaración judicial de fecha 30 de agosto de 2012, rolante de fs. 1.717 a fs. 1.719 (Tomo V), adiciona que después del 11 de septiembre de 1973, se desempeñaba en la sección de administración de fondos del regimiento Tucapel de Temuco, como dactilógrafo, con el grado de sargento primero. A cargo de esa sección estaba el teniente Tichauer Salcedo. Las dependencias de su sección se ubicaban en la comandancia del regimiento, que posteriormente fueron ocupadas por el servicio de inteligencia. El trabajo cotidiano de la fiscalía, como interrogar, tomar decisiones con respecto de los detenidos era de Alfonso Podlech. Que se intercedía ante Alfonso Podlech, porque éste decidía la suerte de los detenidos que una vez llegaron en camiones. El comandante Jofré le dijo personalmente, cuando estaba de guardia, que las decisiones respecto a un grupo de detenidos

que llegaron, entre los que había dos mujeres, debía tomarla Alfonso Podlech. Por esa razón intercedió ante Podlech por las mujeres que conocía. Que la oficina de plana mayor era ocupada por la Fiscalía Militar. En lo formal el comandante Jofre era el Fiscal Militar, pero todas las decisiones de la Fiscalía Militar las tomaba Podlech. Insiste que Alfonso Podlech tenía el poder para decidir lo que pasaba con los detenidos. Por esa razón se intercedía ante éste por ellos. Comenta que Alfonso Podlech le gustaba el fútbol, por esa razón en una oportunidad intercedió ante este por Rolando Núñez, quien en una oportunidad “se tomó, junto a otras personas uno de los fundos de don Alfonso Podlech”. Cuando esta persona se presentó ante la fiscalía, Alfonso le dijo que le agradeciera al deponente por haber intercedido por él, porque si no lo hubiese hecho, “hace rato lo hubiera tenido apuntado”. Agrega que había una sala de torturas en la primera compañía de cazadores. En una oportunidad andaba buscando a su jefe Tichauer y vio por el “ojo de la llave como le aplicaban electricidad a una mujer en sus senos”. Que Tichauer y los oficiales García Covarrubias tenían que ver con las torturas y los detenidos.

En declaración judicial de fecha 12 de septiembre de 2013, rolante de fs. 1.844 (Tomo VI), ratifica declaración judicial y advierte que estuvo trabajando una tarde con Alfonso Podlech Michaud. Éste tomada declaraciones y el deponente era el dactilógrafo. Que esta situación solo fue por una tarde y fue por orden del mayor Jofré.

En diligencia de careo con Oscar Alfonso Podlech Michaud, de fecha 12 de septiembre de 2013, rolante de fs. 1.846 a fs. 1.847 (Tomo VI), ratifica declaraciones y adiciona que en la guardia de la unidad se encontró con la señora Meza Moncada en calidad de detenida. En esa oportunidad fue a conversar con don Alfonso, quien le dijo que se la llevara. Que, por orden del mayor Jofré, tuvo que servir como dactilógrafo a Alfonso Podlech mientras interrogaba a la señora Meza Moncada. En cuanto a las funciones de Alfonso Podlech era tomar declaraciones a los detenidos. Replicando haber intercedido ante Alfonso Podlech por un deportista amigo, recordando muy bien lo relatado porque fue lo único que efectuó con Alfonso Podlech en el regimiento Tucapel de Temuco.

En declaración judicial de fecha 20 de diciembre de 2006, rolante de fs. 3.806 bis a fs. 3.808 (Tomo XI), alude que para septiembre de 1973 prestaba funciones en el regimiento Tucapel de Temuco, trabajando en administración de

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

fondos como dactilógrafo. Que es posible que haya interrogado a esta persona, porque estuvo, al parecer una tarde cooperándole a Alfonso Podlech en la toma de declaraciones. Lo anterior, por órdenes. Sin embargo, solo tomó declaraciones a dos personas, pero quien interrogaba era Alfonso Podlech, a quien ese mismo día le pidió que ayudara a dos civiles que el deponente conocía y que estaban detenidas. Las declaraciones las tomo en la oficina del jefe de la plana mayor. Que a la única persona que recuerda haber visto “muy maltratada producto de las torturas” fue a Rubén Morales Quijada, apodado “milico”, quien era su amigo, quien estaba detenido en el calabozo de la sala de guardia del regimiento. Refiere que el capitán Ubilla y su grupo tenían habilitada una cuadra en la primera compañía para interrogar. Lo que sí sabe es que los militares disponían de los detenidos a “su antojo”.

En declaración judicial de fecha 30 de agosto de 2012, rolante de fs. 3.809 a fs. 3.810 (Tomo XI), ratifica declaraciones y dice que el trabajo cotidiano de la fiscalía, como interrogar, tomar decisiones con respecto de los detenidos era de Alfonso Podlech. Comunica que se intercedía ante Alfonso Podlech, porque este decidía la suerte de los detenidos. Que el comandante Jofré le dijo personalmente cuando estaba de guardia, que las decisiones respecto a un grupo de detenidos que llegaron entre los que había mujeres, debía tomarlas Alfonso Podlech. Por esa razón intercedió ante Podlech por las mujeres que conocía. Replica que la oficina de plana mayor era ocupada por la Fiscalía Militar. Que en lo formal el comandante Jofre era el fiscal militar, pero todas las decisiones de la Fiscalía Militar las tomaba Podlech. Aduce que Alfonso Podlech tenía el poder de decidir lo que pasaba con los detenidos. Por esa razón se intercedía ante él por ellos. En una oportunidad andaba buscando a su “jefe Tichauer” y vio por el ojo de la llave como le aplicaban electricidad a una mujer en sus senos. Que Tichauer y los oficiales García Covarrubias tenían que ver con las torturas y los detenidos.

En declaración judicial de fecha 12 de septiembre de 2013, rolante de fs. 3.811 (Tomo XI), expone que efectivamente estuvo por una tarde trabajando con Alfonso Podlech Michaud. Este tomaba declaraciones y el suscrito era el dactilógrafo. Situación que fue solo por una tarde y fue por orden del mayor Jofré. Replica haber intercedido por una profesora y la asistente social, ocasión donde conversó con el mayor Jofré, quien lo mandó a hablar con Alfonso Podlech, la decisión tomada por éste fue dejar en libertad a las mujeres y citarlas para el día

siguiente. Interrogado dice que el mayor Jofré lo mandó a hablar con Alfonso Podlech.

En declaración judicial de fecha 20 de diciembre de 2006, rolante de fs. 3.813 a fs. 3.814 (Tomo XI), afirma que jamás trabajó tomando declaraciones en la Fiscalía Militar. En lo pertinente señala que es posible que haya interrogado a esta persona (refiriendo a María Meza Moncada), porque estuvo al parecer una tarde cooperándole a Alfonso Podlech en la toma de declaraciones. Sin embargo, solo tomó declaración a estas dos personas, pero quien interrogaba era Alfonso Podlech, a quien ese mismo día le pidió que ayudara a dos civiles que el deponente conocía y que estaban detenidas. A la única persona que recuerda haber visto muy maltratada producto de las torturas, fue a Rubén Morales Quijada, quien era su amigo, relatando donde lo vio y las condiciones en que se encontraba. Recuerda que entre los detenidos venían una profesora con su hijo y una asistente social por quienes intercedió ante Alfonso Podlech para que quedasen en libertad. Que el capitán Ubilla y su grupo tenían habilitada una cuadra en la primera compañía para interrogar personas. Recordando que en una oportunidad se acercó a ese lugar para conversar con el teniente Tichauer, quien estaba presente en los interrogatorios.

En declaración judicial de fecha 12 de septiembre de 2013, rolante de fs. 3.817 (Tomo XI), ratifica declaraciones judiciales insistiendo que efectivamente estuvo una tarde trabajando con Alfonso Podlech Michaud. Este tomaba declaraciones y el deponente era el dactilógrafo, todo por orden del mayor "Cofré". Refiere que intercedido por las personas que mencionan en sus declaraciones, que conversó con el mayor "Cofré", quien lo mandó hablar con Alfonso Podlech. La decisión la tomaba éste, y fue dejar en libertad a esas mujeres y citarlas para el día siguiente.

En declaración judicial de fecha 10 de mayo de 2017, rolante de fs. 3.819 a fs. 3.819 vuelta (Tomo XI), ratifica declaración y el Tribunal le lee las preguntas acompañadas en otros autos por la defensa de Pedro Guillermo Tichauer Salcedo. Y dice que lo conoce porque era el oficial de intendencia para la época de 1973. Que Pedro Tichauer era el contador del regimiento Tucapel. Respecto a los hechos que menciona en la relación a la sala de tortura, agrega que en esa oportunidad había una llamada urgente desde la jefatura de Valdivia para su jefe, Tichauer. Entonces salió a buscarlo para avisarle de la llamada, dirigiéndose a la

primera compañía y le preguntó al soldado que estaba ahí, si es que había visto al teniente Tichauer, respondiéndole afirmativamente, pero que el deponente no podía pasar. Le dijo al soldado que al teniente Tichauer lo estaban llamando de Valdivia, que era urgente. En eso se dirigió a la sala y escuchó un lamento de una mujer, miró por el ojo de la llave, vio bultos, medios de espaldas el cuerpo de un hombre, pero no la cara, sin embargo, reconoció la voz de su jefe, Tichauer, que decía “perrita, es mejor que hables”. Que el mismo soldado que estaba en la entrada le dijo que el teniente Tichauer estaba en la sala que mencionó. Replica que era Pedro Tichauer, que ya lo ha declarado. Que, en esa oportunidad, cuando escucho lo que relató, Tichauer no andaba sacando firma, ya que no era la oficina del capitán Ubilla. Que la oficina donde fue a buscar a Tichauer estaba ubicada en la primera compañía, al final de esa dependencia.

A.49. Julio Cesar Guevara Guevara

En declaración judicial de fecha 11 de febrero de 2002, rolante de fs. 213 bis a fs. 215 (Tomo I), soslaya en lo pertinente que entre esas personas detenidas estaba Elías Dagoberto González Ortega, joven de Villarrica a quien conocía en Huiscaپی desde pequeño y eran amigos. Comunica que el 12 de octubre quedó en libertad. Que estando detenidos de pronto se realizaban llamados a los detenidos a presentarse a la guardia de la cárcel, entre esos llamados salió su amigo Elías, y desde esa ocasión no supo más de éste, ni lo volvió a ver. En cuanto al hermano de Elías, a saber, Hugo Arner no lo vio detenido, de haberlo visto lo recordaría, porque eran amigo de familia, pero no lo vio. Con relación a otras personas, solo escucho entre los llamados que hacían, a unos señores de apellido Schmidt Arriagada, pero no los vio. Conmemora que Elías le conto las circunstancias en que fueron detenidos, esto es cuando se disponían a salir del país, por un paso fronterizo de Curarrehue, siendo detenido junto a su hermano, pero a su parecer lo habrían separados, pero dice estar seguro de que nunca vio a Hugo Arner en la cárcel. Insiste que escuchó entre los llamados a Elías, a quien desde esa ocasión no volvió a ver. No puede precisar la fecha del llamado, pero pensó que había quedado en libertad, aunque nunca más supo su suerte. Recuerda que otras personas llamadas a la guardia al igual que Elías, posteriormente eran ejecutados en el regimiento, acusados de haber querido escapar, recién ahí se dieron cuenta que los detenidos llamados a la guardia, no era para quedar en libertad, sino que corrían otra suerte, que quizás eso fue lo que ocurrió al joven González, aunque

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

no tiene la certeza de lo ocurrido con éste. Relata su situación en la cárcel. Suma que pasado un tiempo se encontró con una prima de Elías González, llamada Zudelia Castro González, a quien le contó que había estado con Elías en la cárcel de Temuco en aquella época.

En declaración judicial de fecha 07 de diciembre de 2004 de fs. 416 a fs. 417 (Tomo II), arguye que conocía a la familia de Elías González Ortega, especialmente a sus padres y el día que se encontró con él en la cárcel pública de Temuco, éste se veía muy maltratado. Le preguntó por su hermano Hugo, sin embargo, no se acuerda qué fue lo que le dijo. No obstante esto, él se veía muy preocupado por su hermano y por el resto de sus amigos. Le parece que este le dijo que su hermano habría huido junto a otros de sus amigos al momento de la detención. Que diariamente se leían listados de cinco o seis personas que eran requeridas en la guardia. Estas personas salían con sus cosas y ellos pensaban que era para otorgarles la libertad; sin embargo, después supieron que muchas de estas personas fueron dadas de baja en el regimiento por haber intentado fugarse.

En declaración extrajudicial de fecha 09 de marzo de 2012, rolante de fs. 624 a fs. 625 (Tomo II), revela en lo pertinente que tomó contacto durante su reclusión con uno de los hermanos González Ortega, que nunca estuvo detenido al interior del Regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco, pero durante su permanencia en la Cárcel Pública de Temuco, se contactó con uno de los hermanos González, no recuerda cuál de ellos era, lo único que recuerda es que le preguntó por su hermano Elías, a quien conocía desde Villarrica, contestándole éste joven que Elías, había escapado por un paso fronterizo junto a otros amigos hacia Argentina.

A.50. Francisco Jerónimo Matta Iturra

En declaración extrajudicial de fecha 13 de marzo de 2012, rolante de fs. 626 a fs. 627 (Tomo II) arguye que es hijo de don Francisco Matta Aro, quien fue detenido en su fundo de Palguin Bajo, entre los días 13 y 14 de septiembre del año 1973 a manos de personal de carabineros de la comisaría de Pucón, recordando que uno de sus aprehensores correspondía a un capitán de carabineros de apellido Partarriet. Su padre fue detenido y trasladado en su propia camioneta, en primera instancia hasta la comisaría de Pucón, para luego ser derivado junto a Héctor Aguayo Olavarría y otro joven hasta la ciudad de Temuco, específicamente hasta el regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco, lugar

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

donde al llegar quedaron a disposición del fiscal militar Alfonso Podlech Michaud, quien dispuso la expulsión de su padre por ser financista del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, hecho que era totalmente falso. Su padre, en más de una ocasión le hizo referencia que en el caso de Héctor Aguayo Olavarría y el joven que lo acompañaba, el fiscal Podlech, hizo mención, que se encargaría de ellos, no haciendo mayores comentarios. Esa fue la última vez que su padre vio a Héctor, debido a que en horas de esa misma noche fue trasladado hasta la cárcel pública de Temuco, lugar donde permaneció recluso cerca de diez días. Interrogado sobre Héctor Aguayo Olavarría, señala que lo conocía, ya que su padre era del partido Socialista y también amigo de su familia.

En declaración judicial de fecha 31 de julio de 2012, rolante de fs. 786 a fs. 787 (Tomo III), ratifica su declaración extrajudicial y afirma que está seguro de que fue el abogado Alfonso Podlech Michaud quien interrogó a su padre y a Héctor Aguayo Olavarría, porque su padre se lo dijo. Está seguro de que éste era el verdadero fiscal militar en Temuco y utilizaba al mayor Jofré como pantalla, ya que fue el propio Podlech quien le dijo a su padre que lo iba a expulsar y pudo comprobar su autoridad cuando conversó con éste. En cuanto a Héctor Aguayo Olavarría, lo conoció puesto que su padre Francisco Aguayo, fue candidato a regidor en 1967 junto con su persona. Reitera que su padre le dijo que Podlech junto con asegurarle que se iría expulsado, ordenó a Aguayo y a otra persona quedarse en la fiscalía para ser interrogados. Adiciona que Podlech ordenó la expulsión de otros ciudadanos extranjeros como Aberto Malvaldi que era el dueño de la radio La Frontera y concesionario del teatro municipal de Temuco, don Máximo Eitel, presidente del Banco Sur.

A.51. Sergio Zapata Camus

En declaración judicial de fecha 07 de agosto de 2012, rolante a fs. 791 a fs. 792 (Tomo III), en lo pertinente dice que fue a hablar con el señor Podlech, ya que éste tenía incidencia en la Fiscalía Militar, el llevaba el caso del señor Matta, pero no recuerda si era o no fiscal militar. Dice estar seguro de que éste tomaba decisiones importantes en la Fiscalía Militar, por eso fue a conversar con él.

En declaración judicial de fecha 01 de agosto de 2013, rolante a fs. 1.243 (Tomo IV), afirma que atendido el tiempo transcurrido no está en condiciones de poder afirmar que el señor Podlech tomaba decisiones en la fiscalía.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Efectivamente fue a conversar con el señor Podlech, porque así se lo insinuó el hijo de Francisco Matta Haro, y que además lo acompañó en la diligencia.

A.52. Aquiles Alfonso Poblete Müller

En declaración judicial de fecha 29 de diciembre de 2008, rolante de fs. 1.320 a fs. 1.322 (Tomo IV), atestigua que fue destinado al regimiento Tucapel de Temuco, desde fines de septiembre de 1973 hasta los primeros días de enero de 1974. En el regimiento fueron recibidos por el comandante de la unidad quien le presentó al capitán Ubilla, informándoles que a partir de ese momento trabajarían bajo sus órdenes. Los detenido no prestaban un interrogatorio formal en el sentido que firmaran alguna declaración, sino que ellos obtenían la información y le informaban de los avances de los interrogatorios al capitán Ubilla, quien muchas veces presenciaba esas entrevistas. Hace presente que el gran responsable de todo y quien decidía el destino de los detenidos era el abogado Alfonso Podlech, quien estaba a cargo de la Fiscalía Militar. Toda la información se la entregaban a Ubilla y este a su vez, entregaba los antecedentes a la fiscalía militar. En esa repartición quien decidía el destino de los detenidos era Alfonso Podlech, que según supo, era el fiscal.

En declaración extrajudicial de fecha 11 de julio de 2012, rolante de fs. 1.697 a fs. 1.698 (Tomo V), soslaya que es efectivo que estaba a cargo del grupo de detectives agregados al regimiento Tucapel de Temuco. Cumplió funciones ordenadas por un capitán de ejército de apellido Ubilla, quien dispuso que se hiciera cargo de los interrogatorios de las personas que llegaban en calidad de detenidas al regimiento Tucapel. Para efectuar dichas labores se situaron en el gimnasio del regimiento, donde personal del ejército les entregaba a los detenidos, quienes ya venían en malas condiciones físicas y procedían a interrogarlos bajo la aplicación de corriente eléctrica producida por un dinamo, también recuerda que, con un cochayuyo mojado, lo pasaban por el cuerpo de los detenidos simulando que se trataba de una culebra. Recordando que al final del periodo ya se encontraba aburrido de las situaciones que ocurrían al interior del regimiento, sobre todo lo que les comentaban algunos militares referente a los detenidos que interrogaban, ya que, en más de una oportunidad se le comentó que la mayoría de estas personas se les daba muerte.

En declaración judicial de fecha 30 de julio de 2012, rolante de fs. 1.703 a fs. 1.704 (Tomo V), ratifica declaraciones y dice que sabía de las decisiones que

tomaba el abogado Alfonso Podlech con respecto de los detenidos, porque los propios soldados que los llevaban y traían les decían que era esta persona quien determinaba sus destinos. Recuerda haber interrogado a un joven que decía haber pertenecido al "GAP". Esta persona cuando se la entregaron estaba muy "frisquedada" es decir, los militares de inteligencia lo habían torturado bastante. Un soldado, cuya identidad ignora le dijo que a este joven "se lo había llevado el Señor". Que había otro oficial que estaba al tanto de lo que pasaba con los detenidos, el teniente Rubio. Sin embargo, no le cabe duda de que todos los oficiales sabían sobre esto. Anexa que le correspondió interrogar detenidos en una sala ubicada en una cuadra del regimiento, en donde les aplicaban electricidad a estas personas.

En declaración judicial de fecha 3 de julio de 2013, rolante de fs.1.805 (Tomo VI), consultado destacó que el abogado Alfonso Podlech era quien determinaba el destino de los detenidos.

En declaración judicial de fecha 26 de julio de 2006, rolante de fs. 3.650 a fs. 3.652 (Tomo X), replica su desempeño funcionario para septiembre de 1973, reitera que el gran responsable de todo era el abogado Alfonso Podlech, quien estaba a cargo de la fiscalía militar.

En declaración judicial de fecha 26 de julio de 2006, rolante de fs. 3.653 a fs. 3.654 (Tomo X), ratifica su declaración y consultado dice que él sabía de las decisiones que tomaba el abogado Alfonso Podlech con respecto de los detenidos, porque los propios soldados que los llevaban y traían, les decían que era esta persona quien determinaba sus destinos. Recordando que había otro oficial que estaba al tanto de lo que pasaba con los detenidos, que era el teniente Rubio. Sin embargo, no le cabe duda de que todos los oficiales sabían sobre esto. Insiste que le correspondió interrogar detenidos en una sala ubicada en una cuadra del regimiento, en donde les aplicaban electricidad a estas personas. Las terminales eléctricas se las ponían en cualquier parte del cuerpo.

A.53. Oscar Manuel Seguel Jofre

En declaración extrajudicial de fecha 29 de agosto de 2017, rolante de fs. 2.766 a fs. 2.768 (Tomo VIII), proclama que el día 23 de septiembre de 1973, es detenido por funcionarios de carabineros y militares, en su domicilio. Luego de su detención en la comisaría de Pitrufquén es trasladado al regimiento Tucapel, donde es dejado en un gimnasio el cual se encontraba lleno de personas

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

torturadas, lugar en donde es torturado en diversas oportunidades. Precisa que permaneció detenido en el regimiento Tucapel a los días posteriores del golpe de Estado, recuerda que fueron seis días los que ahí estuvo, siendo torturado bajo la aplicación de corriente eléctrica en una dependencia de este, distinta al gimnasio, reconociendo dentro de sus torturadores al capitán Nelson Ubilla Toledo, estando en su conocimiento que también en esos interrogatorios participaban dos tenientes cuyas identidades desconoce. Respecto al señor Podlech, quien asumió la labor de Fiscal, lo recuerda en una oportunidad que lo golpeó en una oficina ya que él quería que entregara las identidades de algunas personas, incluso quería que los acusara falsamente de la tenencia de explosivos.

A.54. Rolando Chávez Godoy

En declaración extrajudicial de fecha 04 de abril de 2016, rolante de fs. 3.314 a fs. 3.315 (Tomo X), invoca que en relación a su conocimiento sobre la detención de Héctor Aguayo en el mes de septiembre de 1973, inquiere que no se enteró de dicha situación, sino hasta el día en que éste apareció en la oficina de correos consultando por su persona, en aquella oportunidad recuerda que lo atendió apenas le avisaron y al tomar contacto con él lo saludó y le comentó que había estado detenido en el regimiento Tucapel y que incluso recién le habían dado la libertad. Dentro de la conversación que sostuvo con éste, le comentó también que había visto al interior del regimiento calidad de detenido a un profesor de Curarrehue, cuyo nombre es Manuel Humaña Jiménez. Por otra parte, interpreta que en una oportunidad se enteró por comentario de una persona, cuya identidad no puede recordar, que el carnet de identidad de Héctor fue encontrado a orillas del río Toltén a la altura de la comuna de Pitrufuquén.

A.55. Baldomero Osvaldo Salazar Salgado

En declaración extrajudicial de fecha 12 de octubre de 2011, rolante de fs. 578 a fs. 580, (Tomo II), escruta en lo pertinente que para el año 1973 tenía 21 años y se desempeñaba como profesor de historia y geografía en la Escuela N° 17 de Curarrehue, de la cual su director era Manuel Humaña Jiménez. Que era militante del Partido Comunista para la época y fue detenido el 11 de septiembre de 1973 a manos de personal de carabineros del retén de Curarrehue, quedando bajo arresto domiciliario, el cual duro hasta el día 17 de septiembre, día en que los funcionarios de carabineros decidieron ir a buscarlo a su domicilio y comunicarle que sería trasladado hasta la ciudad de Temuco. Recuerda que lo hicieron abordar

un Jeep de color verde en cuyo interior estaba en calidad de detenido Renato Santana, funcionario de la Corporación Nacional Forestal. Ese vehículo iba a cargo de unos carabineros, cuya identidad no recuerda, los llevaron hasta la comisaría de carabineros de Pucón, lugar donde abordó el Jeep, en calidad de detenido, un señor de avanzada edad cuyo apellido era Matta. Posteriormente, siguieron el trayecto llegando a la ciudad de Temuco hacia el regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco, lugar donde los efectivos militares los llevaron hasta un patio, donde había otros detenidos, no superando las cincuenta personas, según lo que recuerda. Agrega que en otros vehículos iban otros detenidos provenientes de Curarrehue y otros sectores, recordando que uno de ellos iba su colega de nombre Renato Saravia, junto a Manuel Humaña, los hermanos René y Luis Díaz Cortez, Luis Cid y otro profesor de nombre Rubén Leal Riquelme. Una vez a disposición de los efectivos militares, recuerda que estos los hicieron formar en dos filas, quedando separado momentáneamente del resto de sus colegas. Consecutivamente, los hicieron ingresar a un recinto cerrado similar a un gimnasio, donde les dijeron que se acomodaran ahí porque pasarían la noche en el lugar, cosa que no sucedió porque esa misma noche a eso de las 23:30 horas fueron trasladados hasta la cárcel pública de Temuco, ignorando el destino de las personas que estaban en la otra fila. Permaneció en la Cárcel Pública de Temuco hasta el día 05 de octubre del año 1973. Recuerda que, al interior de la Cárcel Pública, el señor Humaña le presentó a Servando Castillo, quien era de Pucón y a quien había llevado detenido con anterioridad al 11 de septiembre junto a una persona que le apodaban el "Pillé Carrasco", otro apodado el "Piden", quien era botero de Pucón, y otra persona de apellido Muñoz, apodado el "Pluma", quien era hermano de un profesor de Loncoche de nombre Alfonso Muñoz. Las personas antes mencionadas fueron detenidas por efectivos militares quienes, según la información que maneja, llegaron a Curarrehue en un helicóptero. También en la cárcel pública de Temuco pudo ver a aun conocido al que conocía por el apodo de el "Flaco Chávez", quien era secretario general de las juventudes comunistas. Recuerda que no pudo conversar con él, pero sí tiene claro que una noche, cree que, durante las fiestas patrias, lo sacaron de la cárcel y no lo volvió a ver. Tiempo después por medio de la prensa local se enteró que Chávez, junto a otras personas había muerto en un intento de asalto al Polvorín del Regimiento Tucapel, hecho que bajo ningún concepto creyó. Respecto a

Héctor Aguayo Olavarría, Hugo y Elías González Ortega, Juan y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa y Raúl Figueroa Burkhardt, por nombre no los conoció, pero si tiene en su recuerdo que al interior del regimiento Tucapel conversó con un muchacho joven, de aproximadamente dieciocho a veinte años, que le comentó que estaba con su hermano y que su padre era dueño de un aserradero en Curarrehue. Hace presente que ese joven no lo volvió a ver más, como al resto de las personas que estaban en la fila en la cual estaba él en un principio. Prosigue relatando la segunda vez que fue detenido por personal de la fuerza aérea.

En declaración judicial de fecha 30 de mayo de 2012, rolante de fs. 692 a fs. 693 (Tomo II), ratifica su declaración y en lo pertinente dice que en el regimiento fue interrogado, pero no recuerda quién lo hizo. Que desconoce las identidades de las personas desaparecidas, pero, sin embargo, los asocia con los jóvenes que vio en el regimiento de Temuco, en la fila en que inicialmente estaba ubicado. Recuerda que dos eran hermanos cuyo padre tenía aserradero, según dijo uno de ellos. Además, le dijo que ellos se iban a Argentina cuando fueron atrapados en la cordillera. Reanuda su relato en cuanto a su segunda detención, detallando la misma.

A.56. Renato Santana Dubreuil

En declaración extrajudicial de fecha 13 de octubre de 2011, rolante de fs. 581 a fs. 583 (Tomo II), en lo pertinente cuenta que fue detenido en tres oportunidades, la primera el 12 de septiembre de 1973, por carabineros que no eran dotación del retén de Curarrehue, y un grupo de civiles. Lo llevaron hasta el retén de Curarrehue junto a su compañero de labores Luis Cid. En el lugar también estaba detenido Luis Díaz, los tres abordan un vehículo y los trasladan hasta la comisaria de Pucón, donde pernoctaron y vio detenido a Benito Tapia. Al día siguiente, fueron trasladados por carabineros hasta la ciudad de Temuco, hasta la segunda comisaría de esa ciudad, posteriormente, fueron llevados hasta el regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco, para quedar en libertad al día siguiente. El 14 de septiembre, fue notificado por carabinero que quedaba bajo arresto domiciliario hasta el día 17 de septiembre, nuevamente detenido por carabinero. En esa oportunidad el grupo de detenidos aumentó, recordando a los profesores Manuel Humaña, uno de apellido Barrales, Renato Saravia, Rubén Leal, los hermanos René y Luis Díaz y su colega Luis Cid. Siendo nuevamente

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

trasladados hasta la comisaría de Carabineros de Pucón, seguidamente a segunda comisaría de Carabineros de Temuco, y posteriormente entregados a efectivos militares del regimiento Tucapel de Temuco, lugar en que permanecieron unas horas para ser llevados finalmente a la cárcel pública de Temuco. En cuanto a Héctor Aguayo Olavarría, Hugo y Elías González Ortega, Juan y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa y Raúl Figueroa Burkhardt, recuerda solamente a Héctor Aguayo Olavarría, a quien conocía por el apodo del "Chachi", quien para la época tenía cerca de 16 años. A "ese muchacho lo vi al interior del regimiento Tucapel", no recuerda en cuál de sus estadías, solo recuerda que al verlo intercambió un par de palabras con él en el baño del gimnasio del regimiento, pero no recuerda lo que alcanzaron a conversar, el hecho es que fue la última vez que lo vio.

En declaración judicial de fecha 25 de junio de 2015, rolante de fs. 3.858 a fs. 3.861 (Tomo XI), reitera que fue detenido junto a Luis Cid y un señor de apellido Brevis, replicando sus dichos en cuanto fueron trasladados a diferentes unidades y que el día 17 de septiembre de 1973 fue nuevamente detenido por carabineros, esta vez junto a Luis y René Díaz Cortez, más los profesores Humaña, Leal, Salazar, Saravia y otros más cuyos nombres no recuerda. Que llegaron ese mismo día al Regimiento Tucapel de Temuco, donde fueron ingresados un gimnasio; en él había mucha gente. Allí vio al "Chachi" Aguayo, quien estaba junto a otras personas en la unidad militar antes señalada. Recuerda que este pidió ir al baño y él también, por lo que pudo intercambiar algunas palabras en ese lugar. A su parecer estaba con el pelo como "mordisqueado". Después fueron separados en grupos y en filas, quedando René Díaz en una distinta a la de ellos, aunque después lo juntaron con ellos nuevamente. Después fueron llevados a la cárcel al igual que Santana, Humaña y los demás que iban de Curarrehue. Al "Chachi" no lo volvió a ver. Pormenorizando lo que le acaeció.

A57. Renato Ariel Saravia Flores

En declaración extrajudicial de fecha 12 de octubre de 2011, rolante de fs. 575 a fs. 577 (Tomo II), en lo pertinente declara que para el año 1973 vivía en la localidad de Curarrehue, se desempeñaba como profesor de enseñanza básica en la Escuela N° 17 de esa localidad. El director de ese establecimiento era Manuel Humaña Jiménez. Para el año 1973 era simpatizante del gobierno del Presidente Salvador Allende. Que fue detenido el día 11 de septiembre por carabineros del

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

retén de Curarrehue quedando bajo arresto domiciliario, con firma diaria. El día 17 de septiembre, mientras realizaba ese trámite un carabinero le comunicó que lo trasladarían hasta Temuco. Lo subieron a una camioneta, que según recuerda pertenecía a la Corporación Nacional Forestal, en ese vehículo también iban Manuel Humaña Jiménez, Baldomero Salazar, Rubén Leal Riquelme, los hermanos René y Luis Díaz Cortez y los funcionarios de "CONAF" de apellidos Santana y Cid. La camioneta iba a cargo del carabinero Orlando Reyes Fernández, quien se acompañaba de dos carabineros más, siendo uno de ellos Castilla. En horas de la tarde llegaron a Temuco, dejándolos en dependencias del Regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco. Personal militar los llevó hasta el gimnasio de ese recinto militar; donde había cerca de cien personas, los dividieron en grupos, no recordando quienes eran los integrantes de su grupo. Les dieron comida y los mantuvieron hasta cerca de las veinte horas, para posteriormente trasladarlo junto al grupo con que había llegado hasta dependencias de la cárcel pública de Temuco, no pudiendo precisar cuánto tiempo. Cuando salió de la cárcel pública de Temuco, junto con una parte del grupo con que había llegado, fueron llevados por personal militar nuevamente hasta el regimiento Tucapel, hasta la oficina de fiscal militar Podlech, quien de manera prepotente y grosera les manifestó que "no nos metiéramos más en problemas y que volviéramos a nuestros lugares de origen". En cuanto a Héctor Aguayo Olavarría, Hugo y Elías Gonzalez Ortega, Juan y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa y Raúl Figueroa Burkhardt, solamente recuerda a la persona de apellido Aguayo, a quien vio junto a un grupo de jóvenes al interior de la cárcel pública de Temuco. Esta persona era el más joven del grupo y lo conoció por intermedio de Manuel Humaña al interior de la cárcel.

En declaración judicial de fecha 30 de mayo de 2012, rolante de fs. 690 a fs. 691 (Tomo II), ratifica su declaración extrajudicial y de lo que está seguro es que, esos jóvenes, que eran entre siete y nueve, se les acercaron cuando supieron que también venían detenidos desde Curarrehue. Esos jóvenes no superaban los veinte años en promedio, y a uno de ellos le decían "Chuma". Esa persona era quien le daba ánimo sus compañeros. Que en el regimiento fue interrogado por el abogado Podlech, quien según todos los comentarios que escuchó en la cárcel, era el fiscal militar de la época. Esta persona fue muy prepotente con ellos. En un principio pensó que era un militar porque se

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

comportaba con mucho odio hacia los detenidos. Que Podlech fue quien los interrogó uno por uno ese día fueron a la fiscalía militar. Relata otros hechos y respecto de las víctimas de autos dice desconocerlos. Sin embargo, los asocia con los jóvenes que vio en Temuco junto a ellos.

A.58. Luis Brunel Cid Hernández

En declaración judicial de fecha 22 de junio de 2013, rolante de fs. 1.205 a fs. 1.207 (Tomo IV), en lo pertinente suma que cuando ingresó al gimnasio del regimiento Tucapel pudo ver a Héctor Aguayo Olavarría, a quien le decían "el Chachi", quien era un joven de Curarrehue a quien conocía. Se acercó y le preguntó cómo estaba y qué hacía allí. Éste le dijo que había sido detenido junto con otros jóvenes con quienes había intentado cruzar la frontera hacia Argentina. Sin embargo, durante el viaje uno de ellos se desistió de huir y quiso regresar por lo que todos se volvieron, siendo detenidos por carabineros durante el trayecto. Le señaló también, que estaba muy maltratado y que apenas se podía tocar los genitales. Además, su cara y su cuerpo lo noto visiblemente hinchado, por lo que no era difícil pensar que había sido torturado. En un momento determinado Héctor Aguayo y René Díaz fueron sacados juntos del gimnasio, siendo esta la última vez que vio a Aguayo. A René Díaz lo volvió a ver en 1976, pero no conversaron sobre el tema. Ese mismo día fueron llevados a la cárcel de Temuco, donde permanecieron hasta el día 27 de septiembre de 1973. Fue liberado junto a Renato Santana.

A.59. Juan Luis Díaz Cortés,

En declaración extrajudicial de fecha 13 de abril de 2011, rolante de fs. 476 a fs. 477 (Tomo II), refiere para el año 1973 tenía veintidós años, vivía en Curarrehue, simpatizante del gobierno de Salvador Allende, por tanto, era una persona conocidamente de izquierda. Con lo ocurrido el once de septiembre de ese año, y a raíz de sus ideales políticos y sociales fue detenido en unas oportunidades por personal de carabineros del retén de Curarrehue, quienes lo trasladaron hasta Temuco. La primera detención ocurrió el día 13 de septiembre de 1973, cuando concurrió a presentarse previa citación a carabineros, los que de inmediato lo trasladaron hasta la segunda Comisaría de Carabineros de Temuco, junto a Luís Cid, Renato Santana, ambos trabajadores de "CONAF", y al jefe de esa repartición cuyo nombre no recuerda y durante la mañana del día siguiente lo trasladan a la base aérea Maquehue, para luego dejarlo en libertad. La segunda

detención fue el dieciséis de septiembre de ese mismo año; esa vez lo detuvieron desde la casa de sus padres en horas de la mañana. En esa oportunidad lo detuvieron junto a René Esteban, su hermano, y los llevaron a Temuco, pero esta vez directamente al regimiento de Infantería de Montaña N° 8 Tucapel. En ese lugar, los juntaron con otros detenidos dentro de los cuales estaba Ricardo Aguayo, hermano de una de las víctimas de la presente causa Héctor Aguayo Olavarría, quien también estaba en ese lugar, el cual recuerda como una cuadra de batallón. Afirma que conversó con Héctor, apodado "El Chachi", quien le señaló directamente que sabía que lo iban a matar los militares de ese lugar, pues ya se lo habían dicho. Recuerda que Héctor Aguayo le presentó a unos jóvenes hermanos que habían sido detenidos junto a él, cuyos apellidos eran Schmidt Arriagada, quienes eran de Villarrica. Que en horas de la tarde les ordenan formarse en el patio del regimiento, en el cual se encontraba un oficial, quien leyó un documento en el cual nombró a algunos de los detenidos, entre esos su hermano René Díaz Cortes a Héctor Aguayo Olavarría y a los hermanos Schmidt, entre los que recuerda. Esos prisioneros fueron llevados hasta la guardia del regimiento, lugar donde, luego de un par de horas, solamente sacaron a su hermano, quien se reunió con él y los demás detenidos, quedando en el calabozo el resto de los prisioneros a quienes nunca más volvieron a ver. Posteriormente, fueron llevados hasta la cárcel pública de Temuco, quedando en libertad, según recuerda, el día dieciocho o diecinueve de septiembre de ese año. Que el oficial que apartó a los detenidos, dentro de los cuales estaban Héctor Aguayo, los hermanos Schmidt y su hermano, era una persona de unos veinticinco años, un metro setenta de altura, de contextura delgada, pelo rubio, ojos de color azul, piel blanca y ocupaba bigote. Suma que fue el abogado Alfonso Podlech Michaud quien firmó como fiscal su orden de libertad y la de su hermano, lo anterior fue porque pudo ver dicho documento, recordando la firma de ese señor.

En declaración judicial de fecha 7 de junio de 2011, rolante de fs. 486 a fs. 488 (Tomo II), ratifica su declaración extrajudicial y complementa sus dichos en el sentido de aclarar que se encontró en dos oportunidades con Héctor Aguayo cuando fue detenido, siendo la primera de ellas en la comisaría de Pucón. En ese lugar pudo constatar que Héctor había sido torturado, pues presentaba evidentes signos de maltrato físico. Después se encontraron en el regimiento Tucapel. No recuerda si fueron trasladados juntos o por separado, por eso tiene la impresión

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

de haberlo visto dos veces mientras estuvo cautivo. El grupo de carabineros que lo detuvo en las dos oportunidades en Curarrehue pertenecía a un destacamento que había llegado hace poco a esa comuna, no reconociendo a ninguno de ellos como pertenecientes a la dotación permanente. Recuerda que un capitán de nombre Juan, llegó junto con ellos y era quien daba las órdenes para detener personas. Que en la segunda detención fue trasladado desde Curarrehue a Pucón, y de allí hasta el regimiento Tucapel. Estuvo una noche en ese lugar junto a los ya nombrados más Manuel Humaña, su hermano René Esteban Díaz y otras personas cuyos nombres no recuerda. En aquella oportunidad fueron trasladados en una camioneta de un particular cuyo nombre es Clorindo Mena. En el regimiento fueron mantenidos en una cuadra cercana a la guardia, custodiados por conscriptos. Respecto del oficial que leyó el listado de detenidos entre los que figuraban los hermanos Schmidt y Héctor Aguayo, recuerda que era rubio, de ojos azules y usaba bigote. Al día siguiente fueron trasladados a la cárcel. Dos días más tarde su hermano y él fueron liberados. Héctor Aguayo y los hermanos Schmidt no llegaron a la cárcel junto con ellos e ignora que sucedió con ellos, pues fueron apartados del grupo en el regimiento. Respecto de las demás personas que aparecen como víctimas en autos, sólo recuerda los nombres de los hermanos Schmidt y de Elías González, pues fue el propio Héctor Aguayo quien se los presentó mientras estuvieron detenidos en el regimiento.

En declaración judicial de fecha 20 de mayo de 1991, rolante de fs. 517 a fs. 518 (Tomo II), replica que, en el mes de septiembre de 1973, fue detenido por carabineros de Curarrehue, llevado hasta Pucón, y desde ahí llevado hasta el regimiento Tucapel de Temuco. La primera vez fueron cuatro personas y la segunda detención iban más personas, el profesor Humaña y dos profesores más, tres funcionarios de "CONAF", él y su hermano Esteban Díaz Cortés; los transportaron en una camioneta de propiedad de Cloro Mena, los llevó personal de carabineros hasta la subcomisaría de Pucón y desde allí los llevaron al regimiento Tucapel de Temuco. En ese lugar se encontraron con los hermanos Schmidt Arriagada y Héctor Aguayo. Recuerda que les contaron que ellos eran un grupo de seis muchachos entre quince a dieciocho años y decidieron arrancar a Argentina, pero como algunos de ellos eran muy jóvenes, se pusieron a llorar por la mamá y tuvieron que regresar. Rememora que Aguayo dijo que venían por Caburgua cuando fueron detenidos por carabineros. Que efectivamente después

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

de unos días llamaron a diez personas, entre las cuales se encontraban los hermanos Schmidt, Héctor Aguayo y su hermano Esteban Díaz, los llevaron a otras dependencias; los nueve restantes nunca más regresaron al regimiento y no los volvieron a ver. Su hermano regresó casi inmediatamente, ya que al pasarles lista lo dejaron inmediatamente. Posteriormente, cuando fue llevado a la cárcel de Temuco, encontró a otro joven conocido como Ricardo Aguayo y le comentó lo sucedido con su hermano, manifestando que no lo había visto. Después ya no volvió a verlos, porque junto a su hermano fueron puestos en libertad el dieciséis de septiembre de ese año y nunca más fueron detenidos. Quedó con la obligación de presentarse a firmar todas las mañanas en el cuartel de carabineros de Curarrehue. Que solo vio una vez a esos jóvenes ya que el mismo día que llegó, los llamaron y no los volvieron a ver. Ignora que sucedió con ellos, solo existen comentarios de que fueron fusilados.

En declaración judicial de fecha 18 de junio de 2015, rolante de fs. 2.101 a fs. 2.102 (Tomo VI), viene en complementar sus dichos en el sentido de que fue detenido la primera vez entre el doce y catorce de septiembre de 1973. Sus aprehensores fueron carabineros de Curarrehue, siendo trasladado junto a Luis Cid, Renato Santana y el jefe de "CONAF" de esa localidad, que era de apellido Tapia. Recuerda que pasaron a la comisaría de Pucón donde los bajaron a todos e ingresaron a los calabozos. Allí estuvieron por lo menos un par de horas. De pronto reconoció de entre los detenidos a Héctor Aguayo Olavarría, alias "Chachi", a quien conocía desde que era un niño. Adiciona que este se veía muy maltratado físicamente, presentaba un testículo inflamado y tenía rapado el pelo en la parte superior de la cabeza. Que el "Chachi" le dijo que había sido detenido camino de Caburgua junto a otras personas con quienes pretendía huir hacia la Argentina, pero que en el trayecto uno de ellos se había arrepentido y se había puesto a llorar, por lo que decidieron regresar a Villarrica. En eso fueron interceptados por una patrulla que los detuvo, que habían sido interrogados respecto de la posesión de armas y el lugar donde las tenían escondidas, al tiempo que los sometieron a golpizas interminables. Que quienes venían de Curarrehue fueron nuevamente subidos un vehículo, no recuerda cual, y llevados a la segunda Comisaría de Temuco, donde pasaron la noche. Que Aguayo y los demás quedaron en Pucón. La segunda vez que vio al "Chachi" fue el día diecisiete de septiembre, cuando fueron nuevamente detenidos en Curarrehue y llevados al regimiento Tucapel de

Temuco. Aguayo y otras personas estaban en esa oportunidad en la unidad militar. Recuerda que este se le acercó y conversaron nuevamente. A su parecer estaba con el pelo completamente rapado. Allí le presentó a unos jóvenes, dos de apellido Schmidt y dos de apellido González. El “Chachi” le dijo que sabía que los iban a matar porque alguno de los militares se lo había dicho. Que tenía mucho temor. Después fueron separados en grupos y en filas, quedando el “Chachi” en una fila junto a sus compañeros y a su hermano René Díaz; en tanto que él quedó en otra. Que de la fila del “Chachi” solo regresó su hermano, junto a quien después fueron llevados a la cárcel, al igual que Santana, Humaña y los demás que habían llegado de Curarrehue. Al “Chachi” y a sus amigos no los volvió a ver.

En declaración de fecha 19 de junio de 2015, rolante de fs. 4.141 a fs. 4.144, (Tomo XII), insiste que en 1973 vivía en Curarrehue junto a sus padres y sus hermanos, que fue detenido en dos oportunidades, una de ella fue el día 13 de septiembre de 1973 por carabineros, quienes llegaron hasta su domicilio, llevándolo al retén, donde estaban ya detenidos Renato Santana Dubreuil, Luis Cid Hernández y Benito Tapia. En el retén estuvieron en la guardia, lugar en el que había un teniente de apellido Figueroa Nieto, quién ordenó que fueran llevados a Temuco. Los subieron a una camioneta de propiedad de un civil de nombre Clorindo Mena y emprendieron el viaje. Pasaron a la Comisaría de Pucón, donde los ingresaron a los calabozos. Allí estuvieron por lo menos un par de horas. Reconociendo de entre los detenidos a Héctor Aguayo Olavarría, alias “Chachi”, a quien conocía desde que era un niño. Adiciona que este se veía muy maltratado físicamente, presentaba un testículo inflamado y tenía rapado el pelo en la parte superior de la cabeza. El “Chachi” le dijo que había sido detenido camino de Caburgua junto a otras personas con quienes pretendía huir hacia Argentina, pero que en el trayecto uno de ellos se había arrepentido y se había puesto a llorar, por lo que decidieron regresar a Villarrica. En eso fueron interceptados por una patrulla que los detuvo, que habían sido interrogados respecto de la posesión de armas y el lugar donde las tenían escondidas, al tiempo que los sometieron a golpizas interminables. Los que iban de Curarrehue fueron nuevamente subidos a un vehículo, no recuerda cual, y llevados a la segunda Comisaría de Temuco, donde pasaron la noche. Replica que Aguayo y los demás quedaron en Pucón, continua relatado lo que le aconteció y en lo adecuado que el 17 de septiembre de 1973, cuando fue nuevamente detenido por

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

carabineros, esa vez junto a su hermano René Díaz Cortez y los profesores Humaña, Leal, Salazar, Saravia y otros más cuyos nombres no recuerda, fueron trasladados a su parecer en un vehículo particular y llegaron ese mismo día al regimiento Tucapel del Temuco, donde fueron ingresados a un gimnasio en el que había mucha gente. Esa fue la segunda vez que vio al “Chachi” Aguayo, quien estaba junto a otras personas en la unidad militar antes señalada. Recuerda que se le acercó y conversaron nuevamente. A su parecer esta con el pelo completamente rapado. Allí le presentó a unos jóvenes, dos de apellido Schmidt y dos de apellido González. El “Chachi” le dijo que sabía que los iban a matar porque alguno de los militares se lo había dicho. Que tenía mucho temor. Después fueron separados en grupos y en filas, quedando el “Chachi” en una fila junto a sus compañeros y a su hermano René Díaz; en tanto que ellos quedaron en otra fila. De la fila del “Chachi” solo regresó su hermano junto a quién después fueron llevados a la cárcel al igual que Santana, Humaña y los demás que llegaron de Curarrehue. Al “Chachi” y a sus amigos no los volvió a ver. Continúa su relato en relación con lo que le sucedió.

A.60. Manuel Antonio Humaña Jiménez

En declaración judicial de fecha 8 de febrero de 1991, rolante de fs. 501 a fs. 506 (Tomo II), en lo atinente replica que fue detenido por carabineros en Curarrehue y comunicado por el teniente Nieto Figueroa que debía ser llevado a Temuco, porque se había recibido instrucciones desde esa ciudad. Que había nueve personas en total, entre ellos Renato Saravia, Baldomero Salazar y otro de apellido Leal, Renato Santana y un tal “Luchín” y dos exalumnos suyos, Luis y Esteban Díaz Cortez. Que los llevaron hasta la unidad de carabineros en Pucón y posteriormente al regimiento Tucapel de Temuco. Allí pasaron por la guardia, los identificaron y quitaron la cédula de identidad y los llevaron a una especie de gimnasio cerrado, donde había aproximadamente ciento cincuenta o doscientas personas más. Al primero que reconoció fue a su alumno Héctor Domingo Aguayo Olavarría, quién al verlo se acercó y lo abrazó, poniéndose a llorar; le preguntó qué estaba haciendo allí y le dijo que el día antes, en circunstancias que iba a Curarrehue con un grupo de amigos, no dijo cuántos, fueron detenidos en el sector El Turbio de Pucón y que los habían llevado al regimiento. No recuerda si especificó quién lo había detenido, ni quienes eran sus compañeros de detención y por las circunstancias que estaban viviendo no se percató si él posteriormente se

juntaba con otros jóvenes que hubiesen sido sus compañeros a los que había aludido. Recuerda que un sargento de ejército entró al gimnasio y conversó con muchas personas, les hacía preguntas y aconsejaba que dijeran la verdad que a nadie castigaron en esos momentos. Estuvieron allí hasta las dieciocho horas, cuando ingresó un capitán de ejército, de quién no sabe su identidad, les ordenó que se formaran y nombró a diez personas, las cuales debían dar un paso al frente, entre los nombrados estaban Héctor Aguayo y Esteban Díaz; los sacaron en dirección a la guardia y aproximadamente a las 20:30 horas regresó solo Esteban Díaz, ninguno de los otros nueve regresó al gimnasio. Que según versiones de Díaz, los interrogaban uno a uno y cuando le tocó el turno a él, no lo interrogaron y lo mandaron de vuelta al gimnasio; no sabe que sucedió con las nueve personas restantes, lo que si tiene seguro es que hasta las veintidós horas, en que fueron conducidos a la cárcel pública, no regresaron esas personas al gimnasio. Fueron llevados en camiones y buses del regimiento hasta la cárcel. En la cárcel se encontró con un hermano de Héctor Aguayo, llamado Ricardo y le dijo que su hermano estaba en el regimiento Tucapel y que allí había quedado al ser ellos trasladados hasta la cárcel. Que permaneció en la cárcel diecinueve días; a los doce días llamaron voluntarios a declarar y reunió ciento veinte personas, los mismos que habían llegado detenidos desde Curarrehue, y se presentaron uno a uno frente a una comisión interrogadora compuesta por oficiales de ejército, no pudiendo distinguir grados, porque usaban el traje mimetizado; recuerda que a cargo del interrogatorio estaba un capitán, porque así lo nombraron sus compañeros que estaban de civil, como igualmente el jefe a cargo de los interrogatorios que era un señor de apellido Podlech de Temuco, que tenía el cargo de Fiscal Militar. Prosigue relatando lo que le acaeció y en lo adecuado que hasta su casa llegó en el mes de noviembre de 1973 el padre de Héctor Aguayo a requerir datos sobre su hijo ya que no supieron más de él desde que fue detenido y llamado en el regimiento Tucapel junto a ocho personas, de las cuales no se sabe nada hasta la fecha.

En declaración extrajudicial, de fecha 27 de noviembre de 2013, rolante de fs. 3.854 a fs. 3.857 (Tomo XI), replica sus dichos y en lo pertinente reitera que fue detenido el día 17 de septiembre de 1973 en su domicilio en Curarrehue, por dos carabineros del retén Curarrehue. Lo llevaron detenido junto a los profesores Saravia, Salazar y Leal, hasta el mencionado retén donde se les informó que por

un bando militar quedaban en calidad de detenidos y debían ser puestos a disposición de la Fiscalía Militar de Temuco. Fueron trasladados hasta la tenencia de Carabineros de Pucón, para posteriormente continuar viaje a Temuco al Regimiento de Infantería de Temuco, al cual llegaron a eso de las 13:00 o 14:00 horas. Cuando pasaron por la Tenencia de Carabineros de Pucón, solicitó hablar con el capitán Bustos Letelier, a quien conocía y le comentó lo que le estaba pasando, respondiéndole que éste que no estaba en conocimiento del bando militar u orden que disponía su detención, limitándose a decir que debía quedarse tranquilo. Agrega que junto a los profesores iban también detenidos unos funcionarios de “CONAF” y un señor de apellido Matta. Al llegar a Temuco les quitaron las cédulas de identidad y los ingresaron a un gimnasio, el cual estaba lleno de personas detenidas, recordando que encontró a un alumno y vecino de Curarrehue de nombre Héctor Aguayo Olavarría, a quién conocía por el apodo del “Chachi”, quien al verlo le comentó que había sido detenido por una patrulla de carabineros cuando junto a unos amigos iba camino a Caburgua o Curarrehue; no recuerda bien, pero el caso es que lloraba cuando le contaba esa situación, dándose cuenta que estaba muy asustado, por lo que trató de calmarlo. Posteriormente, a eso de las 18:00 horas, un oficial con el grado de capitán, les ordenó a todos los detenidos salir del gimnasio y les pidió que se formaran. Ese militar sacó una lista y llamó a diez personas dentro de las cuales estaba “El Chachi”, Esteban Díaz Cortés y un señor de apellido González; a ellos los separaron del grupo y cerca de las 22:00 horas regresa al gimnasio solamente Esteban, quién les comentó que al resto de los detenidos los habían ingresado a una dependencia y a él le habían ordenado regresar, perdiendo todo tipo de contacto con las demás personas. Que posteriormente a eso de las 00:00 horas fue trasladado, junto a los profesores antes mencionados y otros detenidos, hasta la cárcel pública de Temuco, donde permaneció cerca de 19 días. Señala que la última semana que estuvo en la cárcel, escuchó que el Fiscal Militar necesitaba diez voluntarios para declarar, esa situación se la informó a sus colegas, por lo que se inscribieron en el listado; es así que al día siguiente los comenzaron a llamar y fue presentado ante el Fiscal Militar Alfonso Podlech Michaud, quien le consultó su filiación política y otros antecedentes, recordando que le manifestó que nunca hubo orden en su contra y le dio a entender que su detención y la de los demás profesores fue por iniciativa propia de los carabineros de Curarrehue,

representándole su molestia por ese hecho, ya que según el fiscal, ellos no debían estar detenidos, declarándole en ese momento que quedaría en libertad, situación que se llevó a cabo el día 5 de octubre de 1973. Refiere que el 7 de octubre de 1973, nuevamente fue detenido por una patrulla de la Fuerza Aérea de Chile de dotación de la Base Aérea Maquehue, y junto a los mismos profesores fue trasladado hasta el Retén de carabineros de Curarrehue relatando lo acontecido en esa oportunidad.

A.61. René Esteban Díaz Cortez

En declaración extrajudicial de fecha 13 de abril de 2011, rolante de fs. 474 a fs. 475 (Tomo II), proclama en lo apropiado que viajó a Curarrehue a la casa de sus padres a celebrar el cumpleaños de su madre. Recuerda que fue la mañana del día siguiente cuando se encontraba en la casa de sus padres, llegó una patrulla de carabineros del retén del sector, quienes se llevaron detenido a su hermano Juan Luis, para posteriormente regresar una hora más tarde a detenerlo a él. Los trasladaron hasta la ciudad de Temuco, hasta el regimiento de Infantería N° 08 Tucapel, donde fueron ingresados en un gimnasio, lugar donde había más personas detenidas y particularmente un grupo de ocho detenidos aproximadamente todos sentados en el suelo con las piernas cruzadas, amordazadas y con sus manos amarradas a la espalda. Dentro de ese grupo de se encontraba Héctor Domingo Aguayo Olavarría, a quien conocía desde Curarrehue con el apodo del "Chachi". Ese mismo día, pero ya en horas de la tarde sacaron a todos los detenidos al patio del regimiento, lugar donde los formaron y un militar, del cual desconoce rango e identidad, escogió un grupo de ocho a diez personas dentro de las cuales estaba Aguayo Olavarría y él, y los llevó hasta un calabozo ubicado en la sala de guardia que se ubica en la entrada del regimiento Tucapel. Pasada algunas horas, lo sacaron del calabozo y lo devolvieron al gimnasio integrándose al resto de los detenidos, dentro de los cuales se encontraban su hermano Juan Luis y Manuel Humaña Jiménez, quien era profesor y también iba detenido desde Curarrehue junto a ellos. Esta fue la última vez que vio a Domingo Aguayo, quien quedó en el calabozo de la guardia del regimiento. Respecto a la militancia política de Héctor Aguayo Olavarría, ignora si era militante de algún partido político y solo sabe que fue detenido en un paso fronterizo por una patrulla de carabineros, la cual estaba a cargo de un oficial que no pertenecía al retén de Curarrehue.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

En declaración extrajudicial de fecha 13 de octubre de 2011, rolante de fs. 584 a fs. 585 (Tomo II), reitera en lo concerniente que en su estadía en calidad de prisionero en el regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco, pudo ver que se encontraba detenido Héctor Aguayo Olavarría, quien también era oriundo de la ciudad de Curarrehue. Que las demás personas y cuyas identidades corresponden a Hugo y Elías González Ortega, Juan y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa y Raúl Figueroa Burkhardt, no recuerda haberlas conocido. Preguntado dice que no fue interrogado por personal militar, a pesar de que en un momento uno de los militares lo sacó del gimnasio y lo llevó junto al grupo donde estaba Héctor Aguayo, pero sin mediar explicación uno de los militares ahí presentes lo regresó nuevamente al gimnasio, lugar donde estaban sus conocidos de Curarrehue, junto a su hermano Juan Luis. Recordando que el lugar donde lo habían llevado los militares se ubicaba, a su parecer, a la entrada del regimiento, cree que ese lugar correspondía a la guardia del regimiento, siendo ese lugar la última vez donde vio a Héctor Aguayo. Se le preguntan otras cosas.

A.62. José Eliseo Arriagada Vergara

En declaración extrajudicial de fecha 15 de noviembre de 1995, rolante de fs. 54 (Tomo I), funda que es tío de Carlos y Ricardo Schmidt Arriagada, desaparecidos desde el 13 de septiembre de 1973, que el 11 de septiembre de 1973, concurrió a Temuco a realizar diligencias a la oficina de tierras. Debido a que ese día ocurrió el golpe de Estado, debiendo quedar en la ciudad hasta el 13 en la mañana, fecha en la cual le autorización regresar a su casa. Al llegar al domicilio, su esposa le informó que los sobrinos Carlos y Ricardo, junto a los hermanos Hugo y Elías González Ortega, Juan de Dios Cabrera Figueroa y Héctor Aguayo Olavarría, había pasado la noche en su casa, y que se habían ido el día 12, en horas de la tarde con dirección a la frontera, tomando el camino Faja Molco, con la intención de pasar a Argentina. Según le dijo su esposa, esta determinación la tomaban porque tenía miedo a ser detenido, por cuanto todos pertenecían a juventudes socialistas. Después de lo narrado no se supo más de ellos, y uno diez años después, por comentarios se enteró que el grupo de jóvenes los había detenido en el trayecto y que lo habrían trasladados a la tenencia de carabineros de Pucón. También se le informó que el carabinero Quezada (fallecido), le comentó que no buscarán más a los jóvenes por cuanto ya no existían. De acuerdo con las averiguaciones de parte de la familia, no tuvieron una respuesta

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

oficial sobre la suerte corrida por sus sobrinos. Que su hermana Aurora falleció intentando obtener antecedentes en la intendencia de Temuco.

A.63. Maria Inés Vásquez Ceballos

En declaración extrajudicial de fecha 15 de noviembre de 1995, rolante de fs. 55 a fs. 56 (Tomo I), explaya que es madre de Alejandro Escobar Vásquez desaparecido desde el día 13 de septiembre de 1973. Su hijo desapareció a los 18 años, soltero y trabajaba en una tornería, como operario. Pertenecía a las juventudes socialistas. Con relación a la desaparición de su hijo, señala que el 11 o 12 de ese mes, carabineros allanó su domicilio al igual que otros del vecindario, en busca de armas o elementos políticos. Ese día estaba sola con sus hijos pequeños, Alejandro estaba en la casa de su hermana Adela. Carabineros al ver que no había lo que buscaban, se retiraron. El 13 de septiembre de ese año, Alejandro le comunicó en la mañana, que se iba con unos amigos del partido a Argentina, debido a que temía ser detenido o muertos por la represión. Alrededor de las 14:00 horas, sacó ropa de vestir y abrigo, le preparó cosas para comer. Desde ese momento nunca más ha vuelto a ver su hijo. En ese tiempo nunca tuvo ningún tipo de información sobre lo que ocurrió con esos jóvenes, no obstante haber conversado con madres de los otros muchachos que salieron con su hijo. Que hubo muchos comentarios entre los que recuerda, es que habían sido detenidos cuando trataron de cruzar la frontera y otro que decía que se encontraba viviendo en Argentina. No tiene conocimiento de lo ocurrido con ellos, ni quienes pudieron ser los autores de la detención.

A.64. Ricardo Secundino Figueroa Burkhardt.

En declaración extrajudicial en la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de fecha 29 de agosto de 1990, rolante de fs. 1.049 a fs. 1.050 (Tomo III). Expuso que el día 14 de septiembre un grupo de muchachos vinculados al partido socialista de Villarrica, su hermano, dos hermanos de apellido Gonzalez y uno o dos de apellido Schmidt, deciden huir hacia Argentina, por la ruta de Pucón. Hasta ese día estos jóvenes no habían sido perseguidos ni hostigados y piensa que su huida había mucho de aventura. No hay certeza de su detención, pero hasta hoy no se han vuelto a tener noticias de ellos. En los días posteriores hubo un suicidio en el río Toltén y en la búsqueda de su cuerpo, alguien vio el de su hermano, un señor Villalobos. Agregó que en Villarrica se sabe que hubo fusilamientos en el río Toltén.

A.65. Luis Alberto Romero Molina

En declaración extrajudicial de fecha 13 de octubre de 2015, rolante de fs. 2.222 a fs. 2.223 (Tomo VII), señala que debido a los hechos que comenzaron a ocurrir a partir del día 11 de septiembre, por temor a ser detenidos Alejandro y Juan le propusieron escapar de Chile en dirección a Argentina, país al cual accederían por un paso fronterizo no habilitado por el sector de Curarrehue. Según su recuerdo, dicha proposición se la hicieron el día 12 de septiembre con el objeto de salir del país al día siguiente junto a otros jóvenes a quienes no conocía, pero sabía que eran del partido y con ellos debían juntarse al mediodía del día trece en el sector denominado "El Monte de Los Curas", lugar donde hoy se encuentra el colegio Laura Vicuña. La idea era salir más o menos tarde y a pie por el campo, ya que por carretera los podían encontrar y detener. Es así como el día 13 de septiembre salió retrasado de su casa, ya que sus padres no querían que se fuera, cosa que hizo igual, llegando al lugar de encuentro retrasado una media hora donde lo esperaban sus amigos, no teniendo claro si los otros jóvenes que debían estar ahí con ellos se habían ido. Fue en ese lugar donde se arrepintió de irse y luego de comunicarles su decisión a Alejandro y Juan, le representaron su molestia, pero respetaron su decisión, marchándose del lugar en dirección a Pucón, pero por el campo, tal como lo habían pensado. Nunca más supo de sus amigos, solo tiene claro que en una oportunidad una hermana de Alejandro conversó con él al objeto de ver si tenía una fotografía de su hermano, y de la familia de Juan no supo nunca más.

A.66. Juan Escobar Vásquez (20 años a la época de los hechos).

En declaración extrajudicial de fecha 5 de octubre de 2015, rolante de fs. 2.226 a fs. 2.227 (Tomo VII), señala que es hermano de la víctima Alejandro Escobar Vásquez, quién se encuentra desaparecido desde el día 13 de septiembre de 1973, cuando dejó el domicilio familiar tratando de escapar de Villarrica junto a un grupo de amigos. Respecto a su hermano Alejandro, señala que, para septiembre de 1973, tenía la edad de 17 años, ya había salido del colegio y solamente se dedicaba a trabajar de manera esporádica. Hace presente que era simpatizante de las juventudes socialistas. Sobre sus amistades, recuerda a los hermanos Schmidt, principalmente porque con ellos fue con los que intentó escapar a Argentina junto a otros jóvenes. Éste habría salido a la una de la tarde del hogar, sin dar información respecto a dónde se dirigía, solo sabe que le dijo a

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

su madre que se tenía que ir, para lo cual ella le pasó una frazada y alimentos. Posteriormente, estando en Concepción, se enteró que el hogar de sus padres fue allanado por personal de ejército, siendo esa situación la que hizo decidir a sus padres de manera definitiva no hacer mayores averiguaciones. Lo único que supo en una fecha posterior, fue que del grupo que escapó con su hermano había dos o tres personas más de las ocho que se conoce, quienes a mitad de camino decidieron regresar a Villarrica.

A.67. Vicente Edmundo Escobar Vásquez

En declaración extrajudicial de fecha 9 de octubre de 2015, rolante de fs. 2252 a fs. 2253, (Tomo VII), señala que es hermano de la víctima Alejandro Escobar Vásquez, quien desde el día 13 de septiembre de 1973 se encuentra detenido-desaparecido. Deja en claro que por los antecedentes que le aportó en vida su hermana Carmela, pudo enterarse que su hermano había intentado huir de Chile junto a un grupo de personas, de las cuales regresaron tres a Villarrica

A.68. David Iván Figueroa Burkhardt

En declaración extrajudicial de fecha 14 de noviembre de 1995, rolante de fs. 57 (Tomo I), arguye que es hermano de Marcial Figueroa Burkhardt desaparecido en los días posteriores al 11 de septiembre de 1973. En esa época se encontraba trabajando en Temuco, aproximadamente el 17 de septiembre de ese año, llamó a su madre Olga Burkhardt Gabilan a Villarrica, quien le informó que su hermano se había marchado días antes hacia Argentina, en compañía de unos amigos. Desde esa fecha no volvieron a tener noticias de su hermano. Posteriormente escucho una serie de rumores, relacionado con el paradero de Raúl, que lo habrían visto en Argentina, que amigos de él habían vuelto a Chile, que lo habían matado en el puente del río Toltén, todos esos dichos resultaron ser rumores, ya que nunca más supo noticias concretas de su hermano. En lo personal no efectuó diligencias para dar con el paradero de su hermano, al parecer su madre tampoco las efectuó, debido al clima reinante en la época.

En declaración extrajudicial de fecha 11 de mayo de 2012, rolante de fs. 746 a fs. 747 (Tomo III), en lo pertinente dice que Raúl Marcial, era el menor de sus hermanos, para esa época tenía 23 años, residía en Villarrica, junto a su madre. Que Raúl perteneció a la Armada de Chile hasta 1970, cuando fue dado de baja. Dice no tener antecedentes en cuanto a la detención de su hermano, salvo que se había ido a Argentina junto a un grupo de amigos. Lo anterior, le fue

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

informado por su madre vía telefónica. En ese momento no le dio mayor importancia a esa situación, ya que creyó que éste se había ido en busca de trabajo a ese país. Con el paso de los años, circulaban rumores con relación al destino de su hermano, les comentaron que fue visto en la ciudad de Neuquén, que incluso que estaba en Brasil, pero eran rumores sin relevancia, porque está seguro de que Raúl hubiera tomado contacto con algún integrante de la familia. Espeta que su hermano Ricardo asumió el liderazgo en la familia para efectuar averiguaciones sobre el paradero de su hermano. Eso fue cuando regresó la democracia a Chile, incluso este declaró en Pucón, y dio muestras de sangre, al objeto de constatarlas con los cuerpos encontrados en la época, pero no hubo resultados positivos. Señala que, en el año 1980, mientras estaba de paso en Villarrica, se le acercó un hombre, cuya identidad desconoce, pero trabajaba como pescador o botero, quien le comentó que había visto el cadáver de su hermano flotando en el río Toltén junto a otros cuerpos enredados en unos matorrales que había a orilla de ese río. Ese hombre le comentó que dicho lugar estaba en la Curva del Toro, río Toltén.

A.69. Ruth Alicia González Ortega

En declaración extrajudicial de fecha 15 de noviembre de 1995, rolante a fs. 49 (Tomo I), proclama que es hermana de Hugo Arner y Elías Dagoberto González Ortega, ambos desaparecidos desde el 13 de septiembre de 1973. Después del 11 de septiembre del año en cuestión, sus hermanos Hugo y Elías, les comunicaron a sus padres que se irían el día 13 hacia Argentina, debido a que eran requeridos por carabineros de Villarrica, por pertenecer a las juventudes socialistas. El día 12 de septiembre del año en mención, sus hermanos salieron de la casa alrededor de las cuatro de la tarde, en dirección a la población Vista Hermosa, donde se iban a encontrar con los hermanos Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Aguayo Olavarría y Raúl Figueroa Burkhardt, desde esa fecha no ha tenido noticias de sus hermanos. Posteriormente su madre con su hermana Luisa realizaron diversas diligencias, con la finalidad de poder ubicar a sus hermanos, tales como en el regimiento Tucapel, cárcel, estadio de Temuco, comisaria de carabineros de Villarrica, en todos los lugares, no obtuvieron ninguna respuesta positiva del paradero de Hugo y Elías. Aproximadamente en el año 1991, interpuso una denuncia en el Juzgado del Crimen de Pucón, por presunta desgracia en favor de sus hermanos y los

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

demás muchachos que los acompañaron en su huida hacia Argentina. Por último, debe señalar que desde esa fecha que sus hermanos se fueron a Argentina, nunca más ha tenido noticias de ellos.

En declaración judicial de fecha 17 de mayo de 2012 rolante de fs. 679 (Tomo II), ratifica su declaración extrajudicial de fs. 49. Y en lo pertinente dice que inmediatamente después de ocurrido el golpe militar su casa fue allanada por militares que estaban en el sector y carabineros de Villarrica. Recuerda que los uniformados apuntaron sus armas en contra de su padre a la vez que le preguntaban por armas. Este procedimiento se repitió en varias oportunidades, antes de que sus hermanos decidieran huir. También estos allanamientos sucedieron después de que sus hermanos se fueron, incluso hasta pasado dos años de ocurrido el golpe militar. Que incluso en una oportunidad su hermano mayor Otniel, se asustó tanto por un allanamiento que huyó de la casa, siendo perseguido por carabineros quienes le dispararon sin herirlo y lo detuvieron. Su hermano fue llevado al regimiento Tucapel donde fue torturado.

En declaración extrajudicial ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de fecha 29 de agosto de 1990 rolante a fs. 1.036 a fs. 1.037 (Tomo III), agrega que Elías era el hijo mayor de 25 años, trabajaba en un balneario del Banco Estado en Villarrica, hasta el 13 de septiembre de 1973, salió a su trabajo como cualquier día, se quedó de juntar en la casa de un padre de los “chicos, hacia Licanray, era en la casa del padre de Juan Cabrera. Hugo estaba en la casa y dijo que se iba con Elías, los Schmidt Escobar y Cabrera. Se iban a la Argentina, llevó ropas, pretendían escapar, los estaban buscando, habían ido carabinero de Villarrica. Un carabinero amigo de ellos de apellido Krause, les dio la idea de que se fueran. Nunca supieron si se reunieron o no en esa casa, eran todos, los seis militantes del Partido Socialista en Villarrica, los carabineros iban y preguntaban por ellos, según ha sabido, era un grupo de diez “muchachos, los que huyeron”. Según se piensa que los tomaron presos en Curarrehue, fueron llevados en una camioneta particular, tuvieron un accidente, llegaron todos al hospital, tal vez está registrado su ingreso (que tendría que ser a partir del 13 de septiembre), luego fueron sacados, llevados al puente del río Toltén para ser fusilados. Recientemente les han contado esta historia. Los padres aún no se enteran de esta versión, piensan que aún están vivos. Ellos habían escuchado antes que habían fusilado en el puente, se supo que en el río había un cuerpo flotando, luego

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

los carabineros acordonaron el lugar. En las noches se escuchaban metralletas y luego llegaban los bomberos a lavar allí. Hay una persona que vio sangre y masa encefálica allí, se llamaba Minerva Toro, también vio un cadáver que flotaba. Ambos eran solteros, sin hijos, vivían los once en la casa familiar, ellos hicieron gran cantidad de averiguaciones, incluso gente que llegaba a la casa decía haberlos visto, se hospedaban y comían gratuitamente hasta que descubrían el engaño. El padre de las víctimas es pastor evangélico. Con posterioridad carabineros siguió llegando regularmente a la casa, siempre buscando armas, todo esto hasta el año 1980, registraban todo. Daban vuelta todo, lo hacían con gran prepotencia. En una oportunidad un hermano suyo tuvo miedo, huyó, le dispararon y posteriormente lo detuvieron, así estuvo tres meses, en la cárcel o el regimiento de Temuco, nunca quiso contar. Respecto del caso de Cabrera, puede decir que tenía dieciocho años, estudiaba, militaba el partido socialista, huyó con todo el grupo. Suma que los familiares de los Schmidt, puede que tengan otros datos, hay quienes decían que los habrían visto en Huife de Pucón hacia la cordillera, un lugar con cajones cordilleranos.

A.70. Luisa Noemí González Ortega

En declaraciones extrajudiciales de fecha 26 de febrero de 2012, rolante de fs. 594 a fs. 595 (Tomo II), indica que es la hermana de Elías Dagoberto y Hugo Arner González Ortega. Para el año 1973 tenían la edad de 25 y 23 años respectivamente, y según su recuerda eran militantes de la juventud del Partido Socialista. En esa época residían en la casa de sus padres en Villarrica. Llegado el 11 de septiembre del año 1973, fecha en que ocurrió el golpe de Estado, sus hermanos se colocaron nerviosos debido a los constantes bandos militares que se publicaban en los medios de comunicación y por ese motivo, creyendo que serían llamados en algún momento decidieron, junto a otros integrantes del Partido Socialista, planificar su salida de Chile hacia Argentina por un paso no habilitado ubicado en la comuna de Curarrehue. Esta situación está en su conocimiento porque recuerda que se lo manifestaron a su padre Marcos (fallecido). El día 14 de septiembre del año 1973, en horas de la tarde, sus hermanos se fueron junto a los hermanos Juan y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Aguayo Olavarría y Raúl Figueroa Burkhardt, con quienes se reunirían esa tarde en la subida de "Piedra", la que se encuentra a la salida de Villarrica. Esa fue la última vez que vio a sus hermanos. Posteriormente,

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

durante el mes de noviembre del año 1973, mientras visitaba a su hermano Othniel, quien estaba detenido en la cárcel pública de Temuco, decidió, por consejo del familiar de una persona detenida en ese lugar, concurrir hasta el Regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco a consultar si ellos se encontraban en ese lugar. Concurrió en dos oportunidades al mencionado recinto militar se presentó en la guardia de este y uno de los soldados le permitió revisar los listados de los detenidos que ahí se encontraban, no logrando ubicar a sus hermanos. Creyendo que habían logrado llegar hasta Argentina, fue entre los meses de febrero a diciembre del año 1974, hasta las ciudades de Junín, Cinco Saltos, General Roca, Luis Beltrán y Buenos Aires, lugares donde publicó avisos en las distintas radioemisoras sin lograr resultados positivos. Desde ese entonces perdió las esperanzas en encontrarlos, y debido a la situación que vivía el país en ese momento, por temor, no quiso seguir efectuando averiguaciones, sino hasta cuando regresó la democracia al país. Por intermedio de una hermana de Héctor Aguayo Olavarría, supo que el grupo de jóvenes integrado por sus hermanos había sido detenido en Curarrehue por efectivos de carabineros de la comisaría de Pucón y que posteriormente habrían sido trasladados en helicóptero hasta el Regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco. Lo anterior concuerda, porque un amigo de la familia de apellido Guevara, quién estuvo detenido en el regimiento Tucapel, le mencionó a una prima Sudelia Castro González, que pudo ver a sus hermanos llegar al mencionado regimiento en calidad de detenidos.

A.71. Rita Aurora Ortega Muñoz

En declaración extrajudicial de fecha 15 de noviembre de 1995, rolante de fs. 48 (Tomo I), ciñe que es la madre de Hugo Arner y Elías Dagoberto González Ortega, quienes se encuentran desaparecidos desde el 13 de septiembre de 1973. Comunica que el día 12 de septiembre del mismo año, sus hijos le comunicaron que se irían hacia Argentina, debido a que con anterioridad habían sido amenazados por carabineros, ya que ambos eran militantes de las juventudes socialistas. Ese día en horas de la tarde, salieron de la casa a reunirse con sus compañeros; los hermanos Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Aguayo Olavarría y Raúl Figueroa Burkhardt, con los cuales realizarían el viaje. Siendo esta la última vez que vio a sus hijos. Dado que pasó el tiempo y no tuvo noticias de ellos, como estaba acordado, comenzó junto a su hija a realizar diversas averiguaciones con el propósito de obtener algún

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

antecedente respecto a estos jóvenes, para tal efecto concurrió hasta el regimiento Tucapel, hospitales de la zona, cárceles y comisarías de carabineros. En ninguno de estos organismos se le dio una información que permitiera saber de ellos.

A.72. Silvia Luz Schmidt Arriagada

En declaración extrajudicial de fecha 14 de noviembre de 1995, rolante de fs. 50 a fs. 51 (Tomo I), que, debido a los sucesos del 11 de septiembre de 1973, hubo mucha persecución a los que eran partidarios del depuesto gobierno. Debido a lo anterior sus hermanos optaron por huir de Villarrica por temor a que fuesen detenidos. El día 13 de septiembre de ese año, al parecer ellos decidieron cruzar la frontera hacia Argentina, por el lado de Huife Alto, ubicado en el sector de Pucón – Curarrehue, según tiene entendido, esta operación la tenían pensada con otros jóvenes, entre ellos los hermanos Hugo y Elías González Ortega, Héctor Aguayo y Raúl Figueroa, entre otros que no recuerda sus nombres. Que en los días posteriores a la huida de sus hermanos y debido a que ellos no se habían comunicado con su mamá, personalmente concurrió a indagar sobre el paradero de ambos en el regimiento Tucapel de Temuco, fiscalía militar y cárcel de la ciudad, además de la segunda comisaría de carabineros, organismos en los cuales no obtuvo respuestas positivas de sus hermanos. Transcurrido aproximadamente un mes del desaparecimiento de sus hermanos, su madre fue informada a través del cabo Eduardo Vergara y el carabinero Guido Krausse, ambos domiciliado en Villarrica, que, a sus hermanos, los habían capturado en la ocasión y que habían sido llevados hasta la comisaría de Pucón para posteriormente trasladados a la ciudad de Temuco, donde presumiblemente habían sido asesinados. Su madre Aurora del Carmen Arriagada Vergara, falleció en el año 1974, víctima de un ataque cardíaco, sin haber alcanzado a conocer el paradero de sus hermanos Carlos y Ricardo Augusto, quienes se encuentran desaparecido. Hace presente que su hermano Carlos era casado con Elena del Carmen Santibáñez Fernández.

En declaración judicial de fecha 14 de mayo de 1999, rolante de fs. 137 a fs. 138 (Tomo I), esgrime que es hermana de Carlos y Ricardo Schmidt Arriagada, desaparecidos desde el 13 de septiembre de 1973. Que en aquella época sus hermanos pertenecían las juventudes socialistas y a raíz del golpe de Estado del 11 de septiembre, y por temor a ser detenidos, decidieron junto a un grupo de

amigos el día 13 de septiembre, intentar cruzar la frontera hacia la república de Argentina. Sus hermanos salieron de la casa de su madre en esa época, quien en esa época residía en Villarrica, en dirección a Huife Alto, pues allí intentarían efectuar la travesía. Que está completamente segura de que ese era su destino, pues se lo dijeron a madre, que incluso la esposa de uno de ellos se quedó con su madre. Que en esa época ella se encontraba en Temuco. El caso es que como no tuvieron noticias de sus hermanos, ya que no se comunicaban con ellos, que eran su familia, se preocuparon porque, además, sabían que había innumerables personas detenidas. Ante ello decidió comenzar a indagar en diferentes partes, por si acaso ellos hubieran sido detenidos, y es así como concurrió al regimiento Tucapel de Temuco, a la fiscalía militar, a cárcel y también a la segunda comisaria de Temuco, pero en ninguno de esos lugares aparecían ellos como detenidos, ni obtenía ningún dato tendiente a ubicarlos. Agrega que una hermana indagó con algún familiar de los otros jóvenes, con los cuales habían partido sus hermanos, pero estaban en las mismas condiciones que ellos, tampoco sabían nada del paradero de estos. Asimismo, pasado unos días, unos carabineros llamados Eduardo Vergara y Guido Krause quienes conocían a su madre, le comentaron que sus hermanos habían sido detenidos, que ellos los habrían visto, esto lo sabe porque su madre le manifestó, pero al continuar con las indagaciones, siguieron sin obtener respuestas positivas, porque en ningún lado aparecían registrados como detenidos, y hasta el día de hoy continúan con las mismas incertidumbres, sin saber que fue de ellos y lo claro es que están desaparecidos.

En declaración extrajudicial de fecha 25 de julio de 1990, rolante de fs. 635 (Tomo II), insiste en que a su madre Aurora del Carmen Arriagada Vergara (fallecida) le fue informada a través del cabo Eduardo Vergara, que a sus hermanos los habían asesinado en Temuco, y que no se hiciera ninguna ilusión con respecto a ellos de encontrarlos con vida.

En declaración extrajudicial de fecha 29 de agosto de 1990, ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, rolante de fs. 1.043 a fs. 1.044 (Tomo III) expuso que el sargento primero Eduardo Vergara González y el carabinero Guido Krause informaron a la madre de la compareciente, doña Aurora del Carmen Arriagada Vergara, que Carlos y Ricardo Augusto habían sido capturados en esa oportunidad y traídos hasta la comisaria de Pucón y

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

posteriormente trasladados a Temuco, ciudad en donde presumiblemente habían sido asesinados.

A.73. Elisa Margarita Schmidt Arriagada

En declaración extrajudicial de fecha 07 de marzo de 2012, rolante de fs. 621 a fs. 623 (Tomo II), aduce en lo respectivo que es hermana de Carlos y Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, quienes desde el día 13 de septiembre del año 1973, se encuentran en calidad de desaparecidos. Para el año 1973, su hermano Carlos tenía la edad de 21 años, trabajaba como empleado de la Corporación de la Vivienda "CORVI" en Villarrica y vivía con su esposa de nombre Elena Santibáñez Fernández (fallecida), su hermano era militante del Partido Juventudes Socialistas, para lo cual se encontraba inscrito. Ricardo Augusto, tenía la edad de 20 años, cursaba el cuarto año medio del Liceo Industrial de Villarrica y vivía con su hermano Carlos y su esposa, en el inmueble ubicado en la calle José Miguel Carrera esquina Inés de Aguilera, comuna de Villarrica, debiendo hacer presente que éste no tenía militancia política. En su caso, vivía con su madre de nombre Aurora Arriagada Vergara (fallecida), en el inmueble ubicado en la calle Gerónimo de Alderete, de la comuna de Villarrica, existiendo además dos hermanas de nombres Isolda Yolanda y Silvia Luz, quienes residían y trabajaban en la ciudad de Temuco. Una vez producido el golpe militar el día 11 de septiembre de 1973, recuerda que la sorprendió en la ciudad de Temuco, por lo que no pudo regresar a Villarrica ese día, haciéndolo el día 13 de septiembre, en horas de la tarde. Al llegar a la casa su madre le señala que sus hermanos Carlos y Ricardo, se encontraban preparando sus cosas en la casa de un tío de nombre Eliseo Arriagada Vergara (fallecido), ya que iban a cruzar la frontera hacia Argentina por la cordillera. A raíz de lo anterior, se trasladó de inmediato donde se encontraban y pudo conversar con ellos por última vez, percatándose que en la misma situación estaban los hermanos Hugo y Elías González, Juan Cabrera, Raúl Figueroa, Alejandro Escobar y Héctor Aguayo. Recuerda que le señalaron que abandonarían el país, ya que temían por sus vidas, ya que por sus militancias políticas las cuales eran de todo conocimiento de Villarrica y alrededores, serían pronto detenidos por las fuerzas armadas. Posteriormente, permaneció con ellos hasta que iniciaron su viaje a pie, recordando que todo el grupo tomó un camino interior que va hacia Curarrehue, llamado Llancalil, sector Huife Alto, ellos le manifestaron que harían abandono del país por ese sector cordillerano. Pasados

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

dos semanas y al no tener noticias de sus hermanos, su madre comenzó a efectuar consultas a los familiares de los otros jóvenes, donde tuvo como respuesta que ninguno de ellos se había comunicado con sus respectivas familias. Luego de varios meses, su madre se enteró por otra persona, de quien ignora su identidad, que sus hermanos y el resto del grupo, habían sido detenidos en la cordillera y ejecutados posteriormente, razón por la cual su madre quiso en cierta medida olvidar este comentario, pero le trajo bastantes complicaciones de salud, falleciendo al año después. El año 1990, su hermana Silvia se acercó a los estamentos de los Derechos Humanos de la ciudad de Temuco, con la finalidad de entregar los antecedentes respecto a la situación de sus hermanos Carlos y Ricardo, instancia donde en conversaciones con familiares de los otros jóvenes que formaban parte del grupo, se informó de varios comentarios y antecedentes con respecto a las circunstancias en que fueron detenidos y en los posibles lugares donde fueron ejecutados, como también donde podrían encontrarse sepultados. Afirma que en una oportunidad y en fecha posterior a la desaparición de sus hermanos, su madre le comentó que el carabinero de apellido Vergara, perteneciente a la tenencia de Villarrica, se habría acercado a la casa y le había manifestado que sus hijos los habían matado. Del mismo modo, en fecha posterior al 11 de septiembre de 1973, don Carlos Barra persona conocida en Villarrica facilitó su camioneta blanca a carabineros de Villarrica para llevar a cabo detenciones de personas en la zona, presumiendo que posiblemente si sus hermanos y el grupo fueron detenidos por los carabineros en la cordillera, hayan sido trasladados en dicho vehículo. Finalmente hace entrega de documentos.

A.74. Ricardo Virginio Aguayo Olavarría

En declaración extrajudicial de 15 de abril de 2015 rolante a fs. 2.055 a fs. 2.057 (Tomo VI), que respecto a las circunstancias que rodearon la detención de su hermano, expresa que no fue testigo de esa situación, pero tiene claro que días posteriores al golpe de Estado, su hermano y sus amigos decidieron abandonar el país por temor a ser detenidos conforme a la información que diariamente salía en bandos militares y en la prensa local en el sentido que se mencionaba que toda persona de pensamiento distinto al régimen recién instaurado iba a ser exterminada. Esa situación la apoyó su padre por temor a que a Héctor le sucediera algo. Por esa razón, Héctor y sus amigos emprendieron viaje hacia la República Argentina, para lo cual pretendían pasar por el paso Huife tratando de

eludir los controles fronterizos que existían en los otros pasos, es así como, cuando iba camino a Pichares en un bus, deciden bajarse antes de la bifurcación Caburgua-Huife donde emprenden caminata. Por lo que sabe, al cabo de un rato son interceptados por un vehículo particular en el cual iba personal de Carabineros de Chile de la tenencia de Pucón, siendo detenidos en ese lugar. Posteriormente, son trasladados a la tenencia de Pucón, donde les habrían cortado parte de su cabello, para ser trasladados a la comisaría de Villarrica donde también les fue cortado el cabello. Por los antecedentes que maneja después de su estadía en Villarrica que no pasó más de un día, fueron trasladados hasta el regimiento Tucapel de Temuco donde permanecen detenidos dos días aproximadamente. En ese lugar encontró al profesor Humaña quien le comentó que vio a su hermano en el Tucapel y que habían conversado dentro de lo cual le dijo que Héctor le había dado los detalles de su detención. Que tomó contacto directo con don Gregorio y su esposa, quienes le comentaron que Héctor había pasado a su casa días atrás a solicitarles ayuda económica para regresar a Villarrica junto a unos amigos, dándole a conocer que había estado detenido en el regimiento Tucapel y que había sido dejado en libertad. Conforme a lo que le señaló don Gregorio le habría entregado ayuda y una vez que Héctor se retiró del domicilio, llegó personal de carabineros y ejército consultándole qué había pasado a hacer a su domicilio, a lo cual don Gregorio le respondió lo mismo que le comentó al declarante, y los efectivos militares procedieron a retirarse presumiendo que andaban siguiendo a su hermano y a sus amigos. Desde ese día no supieron nunca más de Héctor y hasta la fecha desconocen su actual paradero.

En declaración judicial de fecha 17 de abril de 2015 rolante a fs. 2.061 a fs. 2.062 (Tomo VI), ratifica su declaración y precisa además que la patrulla de carabineros y ejército que pasó a la casa de Gregario Seguel Capitán lo hizo media hora después de que su hermano se había ido desde ese lugar. Añade que por las conversaciones sostenidas con varias personas a lo largo de los años, especialmente con los señores Humaña y Díaz quienes estuvieron detenidos en la cárcel de Temuco y que conocían a su hermano, el grupo fue detenido mientras caminaban hacia la frontera cerca del cruce del camino de Caburgua hacia Curarrehue, por carabineros de Pucón que se movilizaban en una camioneta particular que pertenecía a Carlos Barra. Esto se lo dijo su hermano Héctor a Humaña y a Díaz porque esa camioneta antes había sido de su padre y esté se la

vendió a Barra. Que en ese momento los jóvenes caminaban cuidándose de no toparse con un vehículo militar o de carabineros y no le tomaron importancia al móvil particular que se acercaba. Cuenta que su hermano reconoció el vehículo por sus colores blanco y celeste. Después de la detención fueron llevados a Pucón donde les cortaron el pelo a todos a media cabeza. Acto seguido los llevaron a Villarrica donde los carabineros de esa Comisaría les cortaron totalmente el cabello y se burlaban de ellos. Esto lo supo por comentarios efectuados por el carabinero Joaquín López a una vecina de nombre Laura Pinilla hace muchos años.

En declaración judicial de fecha 17 de junio de 2015 rolante a fs. 2.103 a fs. 2.108 (Tomo VI), expresa que su hermana Sara Aguayo Olavarría, quien le dijo que una persona que trabajaba en correos de Chile y que era amigo de la familia encontró la cédula de identidad de su hermano en la orilla del río Toltén. A quien le gustaba mucho la pesca y siempre lo hacía en diferentes ríos. Fue durante esas jornadas que encontró el carné de su hermano a fines de 1973 mientras pescaba en el río Toltén. El 13 de septiembre de 1973 carabineros de Villarrica fue hasta su domicilio ubicado en calle Pedro Montt N° 967 en horas de la mañana. Recuerda que estaban tomando desayuno cuando tocaron a la puerta y su madre abrió. Entonces carabineros irrumpieron violentamente y allanaron la casa al tiempo que preguntaban por su hermano Héctor Aguayo. Como no lo encontraron salieron del domicilio y cuando estaban a punto de irse uno de ellos sugirió que lo llevaran detenido a él, cosa que hicieron. Relata que lo subieron al furgón policial y lo llevaron a la comisaría. Allí fue dejado junto a otras muchas personas en las pesebreras de las caballerizas. Después del mediodía apareció un microbús particular en el cual fueron todos subidos y llevados hasta el regimiento Tucapel. Cuenta que en la cárcel de Temuco estuvo junto Manuel Humaña, los hermanos Díaz, René Turumpil, todos de Curarrehue.

En declaración judicial de fecha 5 de noviembre de 2018 rolante a fojas 3.030 a fs. 3.031 (Tomo IX), atestigua que supo de la detención de su hermano Héctor y de su posterior traslado hasta el regimiento Tucapel de Temuco, dado que en una de las oportunidades en que estuvo detenido, se encontró con el mismo grupo de personas que fueron detenidos en Curarrehue y fueron quienes vieron a Héctor en el Regimiento Tucapel de Temuco, entre ellos, Manuel Humaña y los hermanos Díaz. Cree que su hermano efectivamente fue liberado del

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

regimiento Tucapel de Temuco tras su paso aproximadamente el 16 de septiembre de 1973, pero sin embargo y por los antecedentes que maneja éste fue nuevamente detenido por militares de regimiento Tucapel de Temuco. Lo anterior lo dice porque Gregario Seguel Capitán, padrino de su hermana Evita, le señaló que cuando Héctor fue dejado en libertad, alrededor del 16 o 17 de septiembre de 1973, pasó a su casa y minutos más tarde su casa fue allanada por carabineros y militares quienes le preguntaron "que había pasado a hacer mi hermano a su casa"; a consecuencia de ello es que militares le allanaron su casa inmediatamente. Gregario le señaló que Héctor andaba ese día junto a un grupo de jóvenes y fue el motivo el motivo por el cual él se fue rápidamente de la casa, sólo pasó a pedir dinero para regresar a la suya. Además, le indicó que junto a su esposa, quisieron curar la herida de Héctor, pero éste no accedió dado que deseaba regresar pronto junto a sus compañeros a casa. Su detención surge como consecuencia que buscaban a Héctor y como aquel no se encontraba, carabineros se llevó al declarante. Es conducido a la cárcel pública de Temuco; según consta en el certificado de fs. 2.194. En la cárcel pública estuvo detenido con el grupo de Curarrehue, los cuales llegaron detenidos después que él; los hermanos Díaz, Manuel Humaña, Osvaldo Salazar.

A.75. Luis Robinson Bustos Letelier

En declaración extrajudicial de fecha 11 de diciembre de 1995, rolante de fs. 58 a fs. 59 (Tomo I), en lo pertinente respecto de lo que se le consulta y en relación con la detención de ocho jóvenes que intentaban cruzar a Argentina, exclama que no recuerda fecha exacta, pero entre el 13 y el 15 de septiembre de ese año, le correspondió efectuar un patrullaje desde Pucón hasta Curarrehue. Cuando se dirigieron a ese lugar optó por desviarse hacia el lago Caburgua y desde el puente El Turbio, unos tres kilómetros aproximadamente desde el lago hacia el camino a Curarrehue, ubicaron a un grupo de jóvenes tipo mochileros, los cuales andaban muy sucios y llevaban las frazadas enrolladas y terciadas en el pecho. La cantidad de éstos no la recuerda, pero eran más de seis. Al interceptarlos, personalmente les preguntó que hacia donde iban, a lo que le respondieron que se dirigían a Curarrehue, en ese momento les pidió su cédula de identidad, pero como ninguno de ellos portaba este documento, optó por detenerlos y subirlos a la camioneta en la cual se movilizaban. En ese momento dispuso que el cabo Monsalve, junto a dos funcionarios más que no recuerda los

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

llevaran hasta el cuartel, mientras que él se quedó en el lugar junto a otros funcionarios y se trasladó a pie hasta el sector de Caburgua. Posteriormente cuando llegó la camioneta el cabo Monsalve le informó que los detenidos habían sido entregados en el cuartel sin novedad. Recuerda que esta detención se practicó alrededor de las 10:00 y 12:00 horas.

En declaración judicial de fecha 03 de abril de 1996, rolante de fs. 84 a fs. 84 vuelta (Tomo I), expone que el día 13 de septiembre se detuvo a unos jóvenes, no recuerda si eran seis u ocho, se les detuvo en el camino saliendo de Pucón a Curarrehue, hacia el sector de Caburgua, caminaban hacia el puente, esto ocurrió en horas de la mañana, alrededor de las diez horas, venían todos con pelo desordenado, barbones y con frazadas amarradas en un costado todos ellos, se les interrogó y ninguno portaba identificación, ni dieron explicaciones claras de donde se dirigían, ni que andaban haciendo. En vista de eso, ordenó que fueran llevados detenidos a la comisaría que quedaba a unos cinco kilómetros de distancia, lo que fue cumplido por el cabo Monsálvez y dos carabineros más. Incluso en el libro de guardia de la época se dejó constancia que los detenidos que se individualizaban eran entregados al comandante, cuyo nombre se consignó, pero no lo recuerda y eran llevados al regimiento Tucapel de Temuco. En esa época todos los detenidos por estas situaciones especiales iban a dar al regimiento Tucapel de Temuco.

En diligencia de careo con Gonzalo Enrique Arias González, de fecha 26 de noviembre de 1999, rolante de fs. 181 a 181 vuelta (Tomo I), ratifica íntegramente su declaración y que él firmó el libro de novedades de la guardia y se llevó el parte respectivo de la detención a la Fiscalía Militar del regimiento Tucapel de Temuco. Manifiesta que, con respecto a los detenidos, fueron sacados de su unidad en un helicóptero de la fuerza aérea piloteado por el comandante Benjamín Fernández y por orden de la prefectura Cautín. Iban con destino al regimiento Tucapel e Temuco, donde ignora si llegaron.

En declaración judicial de fecha 23 de julio de 2003, rolante de fs. 370 a fs. 370 vuelta (Tomo I), en lo atinente dice que al revisar el libro de telefonemas se percató que decía más o menos textual “por orden de la Prefectura de Cautín deben ser entregado los detenidos al personal de la Fuerza Aérea para ser trasladados al Regimiento Tucapel. Dese cumplimiento. Por orden del Prefecto”.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

En declaración judicial de fecha 06 de diciembre de 2004, rolante de fs. 413 a fs. 413 vuelta (Tomo II), invoca que personalmente vio el parte firmado por el suboficial mayor de apellido Burgos, que ordenaba poner a disposición de la Fiscalía Militar de Temuco a los ocho jóvenes que detuvo.

Declaraciones contenidas en cuaderno secreto

A.76. Celedonio Aníbal Aburto Fuentes,

En declaración judicial de fecha 02 de julio de 2019, rolante de fs. 125 a fs. 126 (cuaderno secreto), que para el año 11 de septiembre de 1973 se encontraba prestando funciones como soldado conscripto en la compañía de plana mayor y servicios del regimiento Tucapel de Temuco. Que efectivamente, como señaló en su declaración policial, existieron a contar del 11 de septiembre de 1973 personas detenidas por motivos políticos al interior del regimiento Tucapel de Temuco. Las salas de torturas quedaban ubicadas en la compañía de cazadores, para el lado norte, casi orillando la muralla de cemento, lugar donde habría como una caseta.

En diligencia de careo de fecha 19 de julio de 2019, rolante de fs. 130 a fs. 131 (Cuaderno Secreto), en lo pertinente comunica que se enteró que personas fueron ejecutadas en el regimiento, pero no tuvo conocimiento quien cargo sus cuerpos.

En declaración judicial de fecha 13 de febrero de 2020, rolante de fs. 172 (cuaderno secreto), reafirma aquella parte de su declaración de fs. 3.209 en la que señala que lo manifestado por el señor M.C. es perfectamente posible.

A.77. Oscar Alejandro Muñoz Venegas

En declaración judicial de fecha 09 de septiembre de 2022, rolante de 226 a fs. 227 (cuaderno secreto), en lo pertinente a la lectura de las declaraciones del testigo de iniciales M.J.C.S., el Tribunal le pregunta, ¿Qué puede opinar de estos dichos?, a lo que el deponente responde que la verdad de las cosas es que niega rotundamente todas esas calificaciones, porque jamás vio ni participó en esos hechos. Después con los días recibió comentarios, pero jamás participó en ver personas fusiladas o cargando camiones.

A.78. Declaraciones de testigo protegido M.J.C.S.

En declaración extrajudicial de fecha 08 de mayo de 2009, rolante a fs. 187 a fs. 189 (cuaderno secreto) interpreta que para el año 1973, tenía 19 años y a contar del mes de abril de ese año ingresó a efectuar su servicio militar obligatorio en el regimiento de Infantería N° 8 Tucapel. Manifiesta que

efectivamente durante su permanencia en ese destacamento militar, estuvo inserto dentro de la compañía de plana mayor y servicios, cuyo comandante era el capitán Nelson Ubilla Toledo, quien según su recuerdo era el oficial encargado de las investigaciones de los presos políticos que se encontraban en el regimiento. Dentro de la compañía, se encontraba dentro de la segunda sección de ingenieros y telecomunicaciones, recordando al teniente Romilio Lavín Muñoz, como el oficial a cargo de esta sección. Sofloma que efectivamente existía un grupo operativo a cargo de los detenidos, a quienes interrogaban, este grupo estaba compuesto principalmente por oficiales y suboficiales. Que esta matanza no fue la única ocurrida al interior del regimiento Tucapel, puesto que a ellos se les obligaba, casi todas las noches a cargar camiones con cuerpos de víctimas o ejecutados políticos, los que por lo general.

En declaración judicial de fecha 23 de junio de 2009, rolante de fs. 190 a fs. 192 (cuaderno secreto), ratifica su declaración debiendo aclarar aquella parte en la que señala que casi todas las noches le correspondió cargar camiones con cuerpos de personas fallecidas. En realidad, esta actividad la realizó en dos oportunidades, aunque sabe que hubo más muertos, por los comentarios que se hacían al interior de la compañía por parte de los otros conscriptos. Recuerda haber recibido órdenes en dos oportunidades de subirse a un camión junto con otros conscriptos, para dirigirse a la isla Cautín. Al llegar a ese lugar, ya de noche en ambas ocasiones, tuvieron que subir diez cuerpos al camión; en la segunda oportunidad subieron ocho. En todos los casos los cuerpos fueron llevados al puente Allipen, donde fueron arrojados al río. Sustenta que las personas muertas que le correspondió subir a los camiones eran todos varones, quienes presentaban varios impactos de bala, las manos amarradas con cáñamo o alambre y estaban con su vista vendada. Estos cuerpos estaban todos en el sector del polígono de tiro. Antes y después de efectuar las misiones les advertían de guardar silencio respecto de lo que habían visto.

En declaración extrajudicial de fecha 01 de septiembre de 2015, rolante de fs. 3 a fs. 4 (cuaderno secreto), reafirma que era conscripto de la compañía de plana mayor y servicios del regimiento Tucapel de Temuco, perteneciendo a la sección de telecomunicaciones, que es efectivo que a los días posteriores al golpe de Estado le correspondió cargar cuerpos de fallecidos en camiones militares en el polígono de tiro de la isla Cautín, recordando que en la primera oportunidad en

que fue hasta dicho lugar fue por orden del teniente Manuel Espinoza Ponce, quien era oficial de la segunda compañía de cazadores. Hace presente, que en dos oportunidades le correspondió cargar el camión militar con personas fallecidas, en la primera de ellas recuerda que eran diez cuerpos, todos de sexo masculino, cuyas edades fluctuaban entre los 25 a 30 años, no puede precisarlo. En la segunda oportunidad, no tiene claro si fue al día siguiente o a los dos días del primer hecho, cargaron ocho cuerpos más, también de sexo masculino, pero en esta ocasión eran más jóvenes que en el caso anterior. En ambas oportunidades el camión salió en dirección al puente Allipen, conforme a lo que se comentaba en ese momento. Respecto a las fotografías que en el acto se le exhiben y cuyas identidades se le dan a conocer, como Héctor Aguayo Olavarría y los hermanos Elías y Hugo Gonzalez Ortega, comenta que recuerda los rostros de los hermanos antes mencionados, ya que conforme a lo recordado vio que los estaban torturando en una sala ubicada al interior de su compañía, donde estaban presentes los oficiales Vásquez Chahuán y Fernández Carranza, junto a un grupo de detectives. Hace referencia a esta situación, ya que parte de los detenidos eran llevados a esa "Sala de tortura", ante la vista de todos los que se encontraban en la compañía. De acuerdo con lo anterior, decanta que de los cuerpos que recogió en el polígono de tiro, recuerda al de identidad Elías Gonzalez Ortega, en cuya fotografía lo reconoce. Que el conscripto Valeria, jactándose de ese hecho les comentó la situación.

En declaración judicial de fecha 30 de mayo de 2017, rolante de fs. 35 a fs. 38 (cuaderno secreto), ratifico su declaración extrajudicial y desarrolla que el destino final era lanzarlos al río, entonces si alguno estaba moribundo no iba a poder sobrevivir. Que quien daba las órdenes directas de estas ejecuciones era Alfonso Podlech, se comentaba. Detalla que cuando retiró los ocho cuerpos, estaba de noche y con la luz de los vehículos pudo observar que eran personas jóvenes. Distingue que la sala donde vio que estaban torturando a Héctor Aguayo Olavarría y a los hermanos Elías y Hugo Gonzalez Ortega estaba ubicada en el perímetro de la plana mayor. En esa oportunidad estaban presentes los oficiales Vásquez Chahuán y Fernández Carranza. Que veía a la gente cuando los llevaban vendados, ya que estaba a diez metros aproximadamente de la sala de tortura mencionada precedentemente. Se escuchaban los gritos de las personas. Toda la compañía sabía que había esa sala de torturas. Para él, toda la oficialidad

sabía de esto, se divertían realizando este tipo de hechos. Reiterando que la oficialidad sabía que existía. El deponente realiza un croquis de la ubicación de la sala de torturas ubicada al interior del regimiento Tucapel de Temuco, en la compañía de plana mayor y servicios. Estima que cuando declaró en la causa del “Polvorín” recibió amenazas de familiares de las personas que había nombrado. Le decían “mira tal por cual, tienes que retirar lo que dijiste en contra de mi pariente”. El Tribunal le exhibe las fotografías de Héctor Aguayo Olavarría, Elías y Hugo, ambos de apellidos González Ortega, que rolan de fs. 2.317 a fs. 2.319 a lo que el deponente declara reconocer a aquellas personas, como aquellas tres de las ocho que levantó ese día.

En declaración judicial de fecha 26 de marzo de 2019, rolante de fs. 93 a fs. 95 (cuaderno secreto), el Tribunal le lee lo pertinente de sus declaraciones de fs. 2.309 y siguiente y de fs. 2.638 y le consulta: ¿Qué víctimas de la presente causa, cuyas fotografías se le exhiben de fs. 2.317 a 2.319, habrían estado torturando al interior de la sala de tortura ubicada en la compañía de plana mayor y servicios del regimiento Tucapel de Temuco con fecha posterior al 11 de septiembre de 1973 y dentro de ese mismo mes? A lo que el deponente expresa que reconoce a Héctor Aguayo Olavarría y a los hermanos Elías y Hugo González Ortega, cuyas fotografías se le exhiben, a quienes los estaban torturando al interior de la mencionada sala. Respecto a lo que se le consulta con relación a cuándo estaban torturando a estos jóvenes de nombre Héctor Aguayo Olavarría y a los hermanos Elías y Hugo González Ortega, indica que fue aproximadamente un día antes de recoger sus cuerpos e ingresarlos al camión. De los ocho cuerpos que refiere haber recogido desde el polígono de tiro y cargado en un camión. Precisa además que presenció como tres personas que murieron al interior de la misma sala de torturas ubicada en la compañía de plana mayor y servicios al interior del regimiento Tucapel de Temuco con fecha posterior al 11 de septiembre de 1973 dentro del mismo mes. Recuerda que estas personas eran de sexo masculino, de alrededor de treinta años y le aplicaron corriente en sus cuerpos y de tanta electricidad fallecieron. Además, recuerda que su habitación estaba a unos metros de esta sala, razón por la cual pudo observar cuando sacaron estos cuerpos. Anexa que como integrantes de la compañía de plana mayor y servicios recuerda a Quilodrán, sargento primero Silva, Mario Arias Díaz, sargento Peña, cabo Krause, Pablo Silva y el teniente Romilio Lavín Muñoz.

En declaración judicial de fecha 16 de agosto de 2021, rolante de fs. 193 a fs. 195 (cuaderno secreto), ratifica la declaración e indica que respecto a la segunda oportunidad en que le tocó cargar ocho cuerpos, no estaba presente el sargento Arias. Precisa que fueron dos veces en que le correspondió cargar cuerpos, la primera vez estaba saliendo del rancho, era tarde de noche, tiene que haber sido como a las 22:00 o 22:30. Cargaron los cuerpos y después se fue a acostar, no contándole esta situación a ninguno de sus compañeros, por temor a ser sancionado. Luego, hubo una segunda oportunidad que también le tocó cargar ocho cuerpos a un camión. Ese día también era de noche, estaba haciendo la "imaginaria", que consistía en el cuidado de la compañía, que no llegara gente extraña, era una guardia. Estaba en esa función y llega el mismo Chávez Etchepare que casualmente también estaba de servicio en la guardia. Le dice "C., vas a tener que acercarte a la guardia nuevamente". Al preguntarle para qué, le dice "anda no más". Entonces, una hora más tarde va a la guardia, tiene que haber sido como a las 23:00 h., y en ese lugar había un conscripto, Muñoz Venegas. Chávez les da la orden de irse al polígono, así que fueron los dos con Muñoz y un soldado de guardia hasta ese lugar. Al llegar, vieron varios cuerpos amontonados, uno sobre otro, con las manos amarradas, algunas atrás y otras adelante. A los cuerpos les habían rasurado la cabeza y con la barba cortada. En el lugar había un camión y dos o tres vehículos chicos. Con las luces de los vehículos. Que la línea de mando de la compañía de plana mayor y servicios del regimiento Tucapel de Temuco para septiembre de 1973, señalando el deponente que habría estado conformada de la siguiente manera: comandante de la compañía, Nelson Ubilla Toledo; subteniente Raimundo García Covarrubias; subteniente, Romilio Lavín. En cuanto a los detectives dice que estos se relacionaban con los oficiales. Quienes deberían tener conocimiento de los hechos que ha narrado, es decir, de la ejecución y cargar los cuerpos a los camiones, son los oficiales del regimiento, porque se comunicaban entre ellos.

B. DOCUMENTOS

B.1. A fs. 1 a fs. 3 vta. (Tomo I) denuncia por inhumaciones ilegales presentada por el abogado Alejandro González Poblete en representación de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, indicando como víctimas a Hugo Arnés González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Juan Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Schmidt Arriagada, Juan de Dios Cabrera Figueroa,

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría, Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

B.2. Actas de inspecciones del Tribunal, que rolan de:

B.2.1. A fs. 152 a fs. 153 (Cuaderno secreto) consta acta de inspección personal del Tribunal, 27 de noviembre de dos mil 2019, que en lo pertinentes suscribe que: se constituye el Tribunal en dependencias del Regimiento Tucapel de Temuco, participando en la diligencia el Ministro en Visita Extraordinaria don Álvaro Mesa Latorre; el Fiscal Militar de Temuco, don Francisco Bravo Soto; el Secretario de la Fiscalía Militar de Temuco, don Giovanni Taito Schmidt; el abogado del Programa Continuación Ley 19.123 del Ministerio de Justicia, Ricardo Lavín Salazar; los Peritos Planimetrista y Fotógrafo del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, don Juan Vega Norambuena y don Frantz Beissinger Bart; y de los Testigos M. J. C. S. y Celedonio Aburto Fuentes. En primer término, el Tribunal ordena comenzar la diligencia disponiendo que el testigo Manuel Contreras Salazar indique el lugar donde estaba ubicada la Compañía de Plana Mayor y Servicios del Regimiento Tucapel de Temuco para el año 1973. El Tribunal y los testigos se desplazan hasta ese punto, donde se detienen para ingresar a aquella dependencia. En este sentido, tanto el señor C. como el señor Aburto, coinciden en señalar que aquella dependencia era la utilizada por la Compañía de Plana Mayor y Servicios para la fecha señalada. A continuación el señor Ministro le solicita al señor C. manifestar su conocimiento respecto a lo acontecido en aquella dependencia a partir del 11 de septiembre de 1973; en este sentido el señor C., reitera lo señalado en sus declaraciones de fs. 2.309, 2.638, indicando que observó en una fecha posterior al 11 de septiembre de 1973, desde el exterior de esta sala, que allí se encontraban torturando a tres de las víctimas de esta causa, cuyas fotografías le fueron exhibidas por el Tribunal en sus declaraciones de la causa. Acota que presentes en el lugar se encontraba el oficial Manuel Vásquez Chahuán. Luego, el señor Ministro le otorga la palabra a don Caledonio Aburto Fuentes para que señale lo pertinente, indicando este que tuvo conocimiento que en aquel lugar era una de las dependencias destinadas para detenidos por motivos políticos tras el 11 de septiembre de 1973. Los peritos de la Policía de Investigaciones fijan los puntos indicados. Posteriormente el Tribunal y los testigos se desplazan hacia un lugar, dentro del mismo Regimiento, señalado por el testigo Celedonio Aburto Fuentes,

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

quien señala que habría una edificación tipo caseta en donde operaba una oficina de la Policía de Investigaciones de Chile. Los peritos de la Policía de Investigaciones fijan los puntos indicados.

B.2.2. A fs. 154 a fs. 155 (cuaderno secreto), consta acta de inspección personal del Tribunal. De fecha, 27 de noviembre de 2019, que en lo pertinente refiere que: se constituye el Tribunal en el ex polígono de tiro de la isla Cautín; lugar donde actualmente se encuentra bajo la administración del SERVIU, participando en la diligencia el Ministro en Visita Extraordinaria don Álvaro Mesa Latorre; el abogado del Programa Continuación Ley 19.123 del Ministerio de Justicia, Ricardo Lavín Salazar; los Peritos Planimetrista y Fotógrafo del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, don Juan Vega Norambuena y don Frantz Beissinger Bart; y de los Testigos M. J. C. S., y Celedonio Aburto Fuentes. En primer término, el Tribunal ordena comenzar la diligencia disponiendo al señor M.J.C.S., situarse en el lugar indicado por el en sus declaraciones de fs. 2.309 y 2.638 de autos. En este sentido, el testigo C. S., se dirige hasta un lugar determinado del ex polígono de tiro de la isla Cautín. Estando allí, el señor C.S. indica al Tribunal el lugar exacto en donde se encontraba la noche en que cargó ocho cuerpos de personas fallecidas, en una fecha posterior al 11 de septiembre de 1973. Reitera al tribunal que reconoció tres de las víctimas de la presente causa, tal como señaló a fs. 2.640. Luego menciona los nombres de los oficiales presentes aquella noche, los tenientes Espinoza y Manuel Vásquez Chahuán. Los peritos de la policía de investigaciones fijan los puntos indicados. Posteriormente el Tribunal le solicita al testigo Celedonio Aburto Fuentes manifestar su conocimiento respecto a los hechos narrados por el señor C.S. En este sentido, el señor Aburto señalada que lo indicado por el señor C.S. pudo haber ocurrido, pero él no se encontraba presente aquella noche en el lugar, sin embargo, aquello era lo que se comentaba en esa época.

B.2.3. A fs. 406 vta. (Tomo II), consta acta de inspección personal del Tribunal, en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco. De fecha 22 de noviembre de 2019, que señala en lo pertinente que: se constituyó el Tribunal en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco a fin de practicar la diligencia decretada en autos con el fin de inspeccionar los Libros de Estadísticas de Detenidos y Procesados correspondientes al año 1973. En primer término, se procedió a examinar el Libro de Estadísticas de Detenidos, apareciendo de los

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

datos estampados en éste que, aun cuando no figuran todos los nombres buscados, existen similitudes como las que se señalan a continuación: 1. Rogelio Hernán Schmidt Muñoz, 17 años, ingresó el 14 de septiembre de 1973, según Parte N° 1.116 de la Fiscalía Militar de Cautín, por infracción a la Ley 17.798. Registra domicilio en calle Ercilla N° 860 de Villarrica y se indica como fecha de egreso el 15 de octubre de 1973. 2. Ricardo Virginio Aguayo Olavarría, 20 años, ingresó el 14 de septiembre de 1973, según Parte N° 1.200 de la Fiscalía Militar de Cautín, por infracción a la Ley 17.798. Registra domicilio en calle Pedro Montt N° 967 de Villarrica y se indica como fecha de egreso el 27 de septiembre de 1973. 3. Abdiel González Ortega, 22 años, ingresó el 14 de septiembre de 1973, según Parte N° 1.116 de la Fiscalía Militar de Cautín, por infracción a la Ley 17.798. Registra domicilio en calle Aldunate sin número de Villarrica y se indica como fecha de egreso el 15 de octubre de 1973. En segundo lugar, se dispuso la revisión del Libro de Estadísticas de Procesados correspondiente al año 1973, sin que registraran coincidencias en los nombres de las personas buscadas

B.2.4. A fs. 1.721 a fs. 1.726 (Tomo V), consta acta de inspección personal del Tribunal, de fecha 23 de marzo de 2012, que en lo pertinente rubrica que: se constituyó el Tribunal en dependencias del R.I. N°8 TUCAPEL, participando en la diligencia el Ministro en Visita Extraordinaria don Álvaro Mesa Latorre; del Fiscal Militar de Temuco, Teniente Coronel (J) José Valentín Pinto Aparicio; Secretaria de la Fiscalía Militar, Mayor (J) Ema Fabiola Maturana Meneses; de los Peritos Planimetría y Fotografía del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, don Cristian Sil a Barra y don Franz Beissinger Barty de los Testigos Raimundo García Covarrubias, Romilio Lavín Muñoz, Pedro Tichauer Salcedo, Juan Carlos. Concha Belmar, Manuel Rafael Campos Ceballos, Héctor Mauricio Villablanca Huenulao, Héctor Joaquín Celedón Fuentes, Gerardo Jaime Araneda Muñoz, Ernesto G. reía Isla, Manuel Reinaldo Canales Valdés, Oscar Inostroza Segura, Daniel San Juan Clavería, Orlando Moreno Vásquez, Carlos Luco Astroza, Hernán Raúl Quiroz Barra, Raúl Binaldo Schonherr Frías y Omar Burgos Dejean. El Ministro, en primer término, se dirige junto a los demás al pabellón de solteros del casino de oficiales, ordenándole al testigo Raimundo García Covarrubias que identifique el dormitorio donde se encontraba alojando, ya que en su declaración señala que se encontraba ese día enfermo. Se procede a visualizar una habitación la cual tiene una ventana y la cual

es fijada por los funcionarios de peritos de la policía de investigaciones. Luego el Ministro consulta al testigo Romilio Lavín cuál era su dormitorio, dirigiéndose el testigo y las demás personas a otro lugar del casino de oficiales, señalando Lavín que él como más antiguo dormía en esa habitación, ya que tenía a cargo el rancho de oficiales, inspeccionada la habitación se constata que posee una ventana que da a un patio ciego, la que es fijada por personal de perito de la policía de investigaciones. Posteriormente, el Ministro consulta a otro testigo, señor Orlando Moreno Vásquez, para que indique dónde funcionaba la Fiscalía Militar en aquella época, el testigo manifiesta que, en la comandancia, dirigiéndose todos a la comandancia del regimiento. En ese lugar, el señor Moreno, indica que funcionaba en el interior de la actual comandancia y que estaba a cargo del mayor Cofre, pero después funcionaba con el señor Podlech, en el interior de la comandancia. Señala el señor Moreno, y también el testigo Raimundo García Covarrubias, cuando se le consulta, que había dos oficinas, en una funcionaban los actuarios y en la otra el Fiscal. A continuación, el Ministro junto a los demás testigos y personas consulta dónde se ubicaba la compañía de plana mayor, indicando García el lugar de esta compañía, identificando también la compañía de morteros y luego la compañía cazadores que antes era la compañía andina. Moreno, señala que él trabajaba en la plana mayor, con soldados conscriptos en instrucción. Consultados por el Ministro dónde funcionaba el gimnasio, siendo indicado por Lavín el lugar donde se encontraba el gimnasio del regimiento. El Ministro, consulta a Moreno, por la gente que llegaba detenida al regimiento, respondiendo Moreno que llegó gente detenida y ésta era llevada al gimnasio y el Fiscal era el que decidía quién iba a la cárcel o quién quedaba en libertad. El Ministro consulta por la existencia de baños en el lugar señalándose por los testigos, específicamente por Moreno, el lugar donde se encuentran los baños, fijándose el lugar por los funcionarios de peritos. Posteriormente, el Ministro, consulta por el matadero, siendo indicado por Moreno, el lugar donde se encontraba en esos tiempos esa dependencia, la que corresponde actualmente al rancho de soldados, se fija este lugar por los funcionarios peritos. El Ministro consulta por la distancia que existía entre el matadero y la isla Cautín, respondiéndole los peritos lo que pueden existir unos 500 metros, en seguida el Ministro pregunta a otro testigo, personal de la Policía de Investigaciones en situación de retiro, a fin de que indiquen el lugar donde trabajaban, señalando que fueron destinados al regimiento

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

para efectos de prestar colaboración al Fiscal Podlech, señalando que había actuados que eran civiles y que existieron muchos detenidos los cuales eran asignados a los detectives, aproximadamente veinte detenidos, por detective. El testigo Hernán Quiroz Barra señala que a él le toco interrogar a muchos de estos detenidos, al consultar el Ministró al testigo si durante la interrogación eran observados por militares, el testigo dice que no. En seguida, el Ministro, consulta al otro detective en retiro, testigo Luco, quien indica que él en esos tiempos era chofer, y sólo llegaba hasta la guardia del regimiento, en ese lugar se le indicaba que tramite debía hacer, y él tenía expresa orden de llegar solo hasta la guardia del regimiento. Siguiendo con la diligencia el Ministro pregunta a Omar Burgos Dejean, que indique dónde se desempeñaba él, señalando el testigo que trabajaba en el archivo, el cual quedaba en la comandancia, al fondo a la izquierda, la oficina no tenía nombre, se fija fotográficamente por los peritos. Posteriormente, Burgos, señala que él daba los salvoconductos, que trabajaba hasta el viernes, que no interrogó nunca a detenidos y que por necesidad y orden superior, solo participo en la detención del caso polvorín. Señala que normalmente tenía un banco de colegio ubicado antes de la guardia del Regimiento, en el cual trabajaba entregando a la gente los salvoconductos que eran documentos firmados por el Fiscal Cofré, tales documentos autorizaban, por ejemplo, al camión que llegaba a entregar víveres o cuando la gente tenía que trasladarse de un lugar a otro, fuera del horario establecido, se fija por los funcionarios peritos el lugar. El Ministro, luego de escuchar al testigo Burgos, pregunta al testigo Raúl Schonherr Frías, este indica que trabajó en la segunda comandancia después del 11 de septiembre de 1973 señalando que en la segunda comandancia, en su interior, habían tres dependencias: la oficina del dactilógrafo funcionaba en este lugar como también la del segundo comandante, y otra dependencia en que habían tres oficinas, allí funcionó el Fiscal Cofre, después llegó Podlech, se fijan el lugar. Más tarde, y en el desarrollo de la misma diligencia, el Ministro, se reúne con otros testigos: Héctor Mauricio Villa blanca Huenulao, Manuel Reinaldo Canales Valdés, Manuel Rafael Campos Ceballos, Héctor Joaquín Celedón Fuentes, Gerardo Jaime Araneda Muñoz y Oscar Inostroza Segura, quienes fueron conscriptos. El Ministro les dice que se refieran a la noche del 10 de noviembre de 1973, indicándose por estos que se encontraban en la compañía de morteros y compañía de plana mayor. Señalan Celedón y Araneda, que ellos esa noche se encontraban durmiendo, y

sintieron unos ruidos, pero no hubo mayor movimiento, nadie ordeno salir del lugar. Inostroza dice que él estaba de franco y estaba en su casa, no en el regimiento. Villablanca manifiesta que él esa noche, se encontraba dormido, dormía en la primera litera, señala que despertó al sentir unos disparos o granadas, dice que era él de la segunda escuadra. Canales, declara que él esa noche estaba en el Cerro Ñielol, y sintió unos disparos desde ese lugar, señalando que él se encontraba en la copa de agua. El Ministro, consulta a Inostroza, ya que en su declaración dice que le correspondió entregar detenidos a la segunda comandancia, desde donde sacaba a los detenidos y hasta donde los llevaba, trasladándose el testigo junto al Ministro y las demás personas a una dependencia ubicada al lado de la guardia, donde Inostroza indica que esa era una sala de espera, donde se dejaba a los detenidos. La dependencia tiene una sola puerta de entrada y salida, señalando Inostroza que desde ese lugar se sacaba a los detenidos y los llevaban a la compañía de plana mayor, lugar donde los interrogaban en la quinta cuadra, había en el interior unos somieres metálicos, a las personas se las dejaba en ese lugar para que las interrogaran, como uno no ingresaba, luego salían del lugar siempre custodiados, señala que a él varias veces le tocó llevar gente que salió bien físicamente, estas personas salieron caminando, señala que en esa sala se sentían ruidos de tortura. El Ministro consulta a los otros testigos; exsoldados, que dormían en las cuadras de al lado, si ellos sentían algún ruido, señalando que sí, que habían veces que sentían gritos y ruidos de tortura. Luego el Ministro solicita que le indiquen estos testigos donde se encontraba el polvorín de la unidad, siendo señalados por uno de los testigos el lugar donde funcionaba el polvorín, lugar que es fijado. Ulteriormente, el Ministro, le pregunta al testigo Guillermo Tichauer Salcedo que indique dónde se encontraba él esa noche de noviembre del año 1973, dirigiéndose el Tichauer, junto al Ministro y los demás funcionarios afuera del regimiento, cruzando la calle Prat, señalando el testigo, que él vivía frente al regimiento, en el segundo piso, diciendo que se había casado hacía poco y se encontraba con su mujer y su cuñado y familia de éste, y mientras comían escucharon unos disparos, razón por la que se dirigió al regimiento, encontrándose antes de ingresar a este con el mayor Cofre, quién le dijo que no pasaba nada, que había sido un asalto al cuartel, por esta razón regreso a su domicilio, toda vez que su mando le dijo que se devolviera atender a su familia, se fijan el lugar. Se presenta Jorge Luis Godoy

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Valdebenito, soldado, conscripto a la fecha de ocurrencia de los hechos, el Ministro le solicita que indique el lugar donde, él habría sido torturado, se desplaza al lugar donde están las compañías, indicando que había una pieza grande en la cual tenían una cama, específicamente somier y que el sargento Mario Arias, lo habría acostado y le habría aplicado corriente. El Ministro le pide que indique el lugar donde él veía a los detenidos, señalando el testigo Godoy que él veía que llegaban detenidos con venda en los ojos y que se escuchaban ruidos y gritaba gente, señala que había un conscripto de apellido Etchepare, el cual mareaba a los detenidos, luego Godoy señala que en la sala de banda era el lugar donde pasaban los detenidos, los cuales eran golpeados por los mismos soldados, por orden de los más antiguos, indica que el mayor Cofre nunca se metía en nada, eran los menos antiguos los que ordenaban golpear a los detenidos con la fusta de los caballos, en este lugar, indicando la sala de banda llegaban los detenidos y luego eran llevados a la compañía.

B.2.5. A fs. 2.011 (Tomo VI), consta acta de inspección personal del Tribunal, de fecha 16 de diciembre de 2014, que en lo adecuado refiere que: constituyéndose el Tribunal en el camino que une Pucón con la localidad de Caburgua, con la presencia del personal de la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos de la Policía de investigaciones de Chile, Comisarios Hernán Villena Morales y Luis Castillo Farías; de los Peritos Fotógrafo y Planimetrísta del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, doña Ana Luisa Pizarra López y don Juan Vega Norambuena; y del testigo don Luis Robinson Bustos Letelier. En primer término, a sugerencia del testigo el Tribunal se traslada hasta el km. 12 del camino precitado. En ese lugar el testigo Luis Robinson Bustos Letelier indica un sector cercano a la calzada donde habría divisado a las víctimas de autos y después de haberles practicado un control de identidad, decidió proceder a su detención. Acto seguido, el testigo precisa la manera como fueron subidos al carro policial en el cual los detenidos, víctimas de autos, fueron llevados hasta la Subcomisaría de Carabineros de Pucón.

B.3. Informes periciales de la Policía de Investigaciones de:

B.3.1. A fs. 161 a fs. 168 (cuaderno secreto), informe Pericial Planimétrico y Dibujo, remitido por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, realizado en inspección ocular en el destacamento de

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Montaña N° 8 Tucapel y polígono de tiro en isla Cautín de Temuco, mediante el cual se fijan la localización de edificaciones y proyección de los lugares señalados por los testigos durante la diligencia.

B.3.2. A fs. 170 a fs. 171 vta. (Cuaderno secreto), informe Pericial fotográfico, remitido por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, realizado en inspección ocular en el destacamento de Montaña N°8 Tucapel y polígono de tiro en isla Cautín de Temuco, cuyas fotografías son acompañadas en formato digital disco compacto, que refieren a las nueve tomas fotográficas, detallando cada una de ellas. En la fotografía N°5 vista del interior de dormitorio, lugar donde los testigos señalan haber tenido conocimiento de que llegaban detenidos el año 1973. Fotografía N°8 y N°9 vista del lugar donde se habría emplazado el polígono de tiro de la isla Cautín. En donde el testigo M.J.C.S., el año 1973 encontrándose en condición de soldado conscripto se le habría ordenado por los jefes militares directos, subir cuerpos de personas jóvenes con herida de proyectil balístico hasta el interior de un camión tres cuarto.

B.3.3. A fs. 1.664 a fs. 1.671 (Tomo V), informe Pericial Planimétrico, remitido por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, realizado en reconstitución de escena en el Regimiento de Infantería N° 8 Tucapel, Temuco, ordenado en causa rol 113.089 del ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco seguida antes este Tribunal, que en lo pertinente contiene antecedentes de relevancia criminalísticas obtenidos en el sitio del suceso, expresado en plano de planta a escala en láminas.

B.3.4. A fs. 2.024 a fs. 2.027 (Tomo VI), (copia del cual se encuentra de fs. 2.028 a fs. 2.031 Tomo VI), informe Pericial Planimétrico, remitido por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, realizado en levantamiento en kilómetro doce de la ruta S-905, desde Pucón a Caburgua, mediante el cual se ilustra fotografías aéreas de la ruta, destacando el sector de la ruta señalado por el señor Bustos Letelier, como lugar de la detención por sospecha de ocho personas.

B.3.5. A fs. 2.041 a fs. 2.043 (Tomo VI), informe Pericial Fotográfico, remitidos por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, que contiene registro fotográfico de las dependencias de la Tenencia de Carabineros Curarrehue ubicada en Avenida O'Higgins N° 63 de la comuna de

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Curarrehue, según lo señalado por los carabineros (en la época) teniente César Jaña Toro, cabo primero Héctor Sepúlveda Chacón y carabinero Luis Hernández Rojas y por los profesores que habrían estado detenidos en dicha unidad policial, en la época de los hechos, don Manuel Humaña Jiménez, don Rubén Leal Riquelme, don Renato Saravia Flore y don Baldomero Salazar Salgado, compuesto de treinta tomas.

B.3.6. A fs. 2.044 a fs. 2.046 (Tomo VI), informe Pericial Fotográfico, remitidos por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, que contiene registro fotográfico del lugar en la ruta S-905 (Pucón-Caburgua) donde habrían sido detenidas ocho personas, según lo señalado por el ex oficial de carabineros don Luis Robinson Bustos Letelier.

B.4. A fs. 362 (Tomo I), informe del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, que informa que: una vez revisados los libros de registro de ingreso de detenidos, correspondiente al año 1973, no se encuentran señaladas las personas mencionadas, no obstante se encuentran registro de ingresos de detenidos los que podrían corresponder a los consultados: "Obdiel González Ortega: ingresa el 14.09.1973, por orden de la Fiscalía Militar de Temuco, por el delito de Infracción a la Ley N°17.798, egresado en libertad el 27.09.1973". Ricardo Virginio Aguayo Olavarría: Ingresa el 14.09.2973, por orden de la Fiscalía Militar de Temuco, por el delito de Infracción a la Ley N°17.798, egresado en libertad el 27.09.1973. Carlos Schmidt Arriagada: Ingresa el 17.09.1973, por orden de la Fiscalía Militar, por el delito de Daños a la Propiedad Pública Fiscal, egresado en libertad el 16.02.1973".

B.5. A fs. 425 (Tomo II), informe del III Juzgado Militar, Fiscalía Militar Letrada Ejercito Cautín Temuco, señala que no se tienen antecedentes de las causas iniciadas por los partes mencionados por el Tribunal.

B.6. A fs. 494 a fs. 497 (Tomo II), Copia simple de denuncia por presunta desgracia interpuesta por doña Evita Aguayo Olavarría, de fecha 21 de enero de 1991, en la cual se indica que: viene en presentar denuncia por presunta desgracia en favor de su hermano legítimo Héctor Domingo Aguayo Olavarría, estudiante, domiciliado en Pedro Montt N° 697 Villarrica, nacido el 10 de junio de 1956 en Curarrehue. Su hermano pertenecía al partido socialista del entonces gobierno del presidente Allende, de las juventudes socialistas de la ciudad de Villarrica. En 1972 fue detenido por Carabineros de Curarrehue, junto con otros

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

jóvenes de filiación comunista por tenencia de armas. Ambos fueron trasladados a Villarrica y después de una semana fueron dejados en libertad. Habían sido denunciados por esa tenencia ilegal por un tío de su hermano llamado Pedro Rubilar, ignora segundo apellido, agricultor, domiciliado en Curarrehue camino internacional, predio Santa Sara. Por segunda vez fue detenido el 14 de septiembre de 1973 ignorándose el lugar por personal del regimiento Tucapel. En circunstancias que con otros compañeros (Carlos y Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, el primero funcionario del Corvi y el último estudiante de enseñanza media, hermanos González Ortega, Alejandro Escobar Vásquez, Juan de Dios Cabrera Figueroa) en circunstancias que se disponían a cruzar la frontera hacia Argentina, por el lado de Huife alto, sector Pucón-Curarrehue. Sus padres, familiares y amigos hicieron vanos esfuerzos por obtener información en el regimiento Tucapel de Temuco, donde permaneció detenido por un tiempo que se ignora y donde fue visto por diferentes personas que estaban en el mismo regimiento en calidad de detenidos, siendo testigos de este hecho don Manuel Umaña, profesor, domiciliado en Ñancul, Villarrica y don Luis Díaz, ignora actividad y domicilio, pero que por ser conocido o amigo del primero, éste podría proporcionar su domicilio al Tribunal. En el listado de detenidos que existía en el regimiento Tucapel en esa época no figuraba a su hermano Héctor Domingo, pero si, en cambio aparecía en esa lista su otro hermano, Ricardo Virginio Aguayo Olavarría, quien después de un mes aproximadamente fue dejado en libertad, casi medio muerto por recibir tanto brutal y despiadado castigo. Al no figurar en la lista de detenidos, su hermano, Héctor Domingo, presumieron fundadamente que habría sido muerto con otras personas, que también se sabía habían sido detenidas por personal militar, y de las cuales tampoco se daba ninguna información concreta, no obstante, los ruegos de sus familiares.

B.7. A fs. 535 a fs. 537 (Tomo II), copia simple de denuncia por presunta desgracia interpuesta por doña Lidia Cártter Leiva, en favor de su cuñado Alejandro Escobar Vásquez, estudiante, nacido el 11 de octubre de 1954, quien pertenecía a las juventudes socialistas en el gobierno de Allende y su participación era activa, como miembro de esas colectividades. Con ocasión del pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973. Su cuñado sintió un gran temor de ser detenido, ya que en ese tiempo hubo gran cantidad de personas con ideologías políticas del depuesto gobierno que eran constantemente perseguidos,

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

castigados y allanados, razón por la que toda su familia coincide en que su cuñado escapó hacia el lado de Argentina, el día 13 de septiembre de 1973. Esa fecha su cuñado tenía 18 años. Presume que su cuñado Alejandro no logró su objetivo, ya que por terceras personas han sabido que fue detenido junto con otras personas y llevado hasta la comisaría en Pucón. Para luego ser trasladados al regimiento Tucapel de Temuco, donde permanecieron detenidos, sin que supieran más de él hasta la fecha.

B.8. A fs. 908 (Tomo III), informe del Departamento de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile, que informa que existen los ciudadanos Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, chileno, nacido en Pucón, el 25 de diciembre de 1952, 59 años, soltero, cedula de identidad N° 6.816.771-K, domiciliado en calle Natalio Stein N° 4913, Comuna de Ñuñoa. Respecto de Juan Carlos Schmidt Arriagada, solo registra como Carlos Schmidt Arriagada, chileno, nacido en Pucón el 24 de octubre de 1951, 61 años, casado, cédula de identidad N° 5.879.584- 4, sin registro de domicilio, ambos no registran movimientos migratorios en nuestro sistema. Finalmente se informa que efectuadas las consultas en nuestro sistema computacional "GEPOL", la persona requerida no cuenta con antecedentes policiales, ni encargos judiciales pendientes, sin embargo, para Carlos Schmidt Arriagada, existe un encargo vigente por presunta desgracia, causa N° 2597, de fecha 14.NOV.1990, emanado del Juzgado del Crimen de Pucón.

B.9. A fs. 1.026 (Tomo III), informe del Departamento de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile, que indica que, respecto de Hugo González Ortega, Elías González Ortega, Juan Schmidt Arriagada, Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa y Raúl Figueroa Burkhardt no registran movimientos migratorios a contar del 01 de enero de 1973

B.10. Informe de la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad que contiene:

B.10.1. A fs. 991 (Tomo III), informe de la Vicaría de la Solidaridad, respecto de Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, señala detenido desaparecido, septiembre de 1973. Raúl Figueroa, de 22 años, soltero, militante de las juventudes socialistas. El 13 de septiembre de 1973, junto a un grupo de jóvenes intentó cruzar la frontera por el sector Curarrehue, siendo detenido en las cercanías de Pucón. Desde esa fecha se desconoce su paradero.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

B.10.2. A fs. 993 a fs. 996 (Tomo III), individualiza en lo pertinente a: Hugo González Ortega 23 años a la fecha de la detención, militante del partido Socialista, secretario local del partido Socialista en Villarrica, fecha detención 13 de septiembre de 1973. Elías Dagoberto González Ortega, 24 años a la fecha de la detención, militante del partido Socialista, encargado de propaganda de Villarrica, fecha detención 13 de septiembre de 1973. Juan de Dios Cabrera Figueroa 20 años a la fecha de la detención, militante de las juventudes socialistas, fecha detención el 13 de septiembre de 1973. Juan Carlos Schmidt Arriagada, 21 años a la fecha de la detención, militante del partido socialista, fecha detención 13 de septiembre de 1973. Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, 18 años a la fecha de la detención, militante del partido socialista, fecha de detención 13 de septiembre de 1973. Alejandro Escobar Vásquez, 18 años a la fecha de la detención, militante de las juventudes socialistas, fecha detención 13 de septiembre de 1973, y Héctor Domingo Aguayo Olavarría, 17 años a la fecha de la detención, militante de las juventudes socialistas, fecha de detención 13 de septiembre de 1973. Reseña como situación represiva lo siguiente: Hubo Arner González Ortega, 23 años, su hermano Elías Dagoberto González Ortega, 24 años, los hermanos Juan Carlos y Ricardo Schmidt Arriagada, de 21 y 20 años de edad, respectivamente, Juan de Dios Cabrera Figueroa, de 20 años, Alejandro Escobar Vásquez, de 18 años y Héctor Domingo Aguayo Olavarría, de 17 años de edad todos militantes del partido socialista se encuentran desaparecidos desde el día 13 de septiembre de 1973, luego que al ser allanados sus domicilios en la ciudad de Villarrica por personal de carabineros, decidieron cruzar la frontera por un paso cordillerano, en el sector de Curarrehue. Tiempo después, personal de investigaciones se hizo presente en el domicilio de los hermanos Schmidt Arriagada e informó a sus familiares que los jóvenes habían sido detenidos. Informaciones obtenidas por la familia de Héctor Aguayo indican que el grupo de jóvenes fue detenido en el sector del puente del río Turbio, ocho kilómetros hacia Pichares cuando intentaban cruzar a pie hacia el lado argentino. La aprehensión la habría realizado personal de carabineros que se movilizaban en una camioneta particular de propiedad de un habitante de la ciudad de Pucón. En una primera instancia los detenidos fueron conducidos al retén de Pucón, posteriormente a Villarrica y desde allí enviados al regimiento Tucapel de Temuco desde donde desaparecieron. Versionas extraoficiales indican que habrían sido ejecutados en

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

ese lugar. Gestiones Judiciales. Los familiares de las víctimas realizaron indagaciones en la zona de búsqueda, sin resultado positivo alguno. Con fecha 24 de agosto de 1990, la familia de Alejandro escobar Vásquez inició una denuncia por presunta desgracia ante el Juzgado de Letras de Villarrica, la que roló con el N°28451. Con fecha 27 de agosto el juez de Villarrica se declaró incompetente, remitiendo los autos a Juez de Letras de Pucón (...).

B.11. Informe del Museo de la Memoria y Derechos Humanos, el que se detalla en lo pertinente:

B.11.1. A fs. 1.081 a fs. 1.082 (Tomo IV), ficha del arzobispado de Santiago Vicaria de la solidaridad “detenidos desaparecidos”. Documento de trabajo, 1993. Respecto de Héctor Domingo Aguayo Olavarría, situación represiva Hugo Arner González Ortega, 23 años, su hermano Elías Dagoberto González Ortega, 24 años, los hermanos Juan Carlos y Ricardo .Schmidt Arriagada, de 21 y 20 años de edad, respectivamente, Juan de Dios cabrera Figueroa, de 20 años, Alejandro Escobar Vásquez, de 18 años y Héctor Domingo Aguayo Olavarría, de 17 años de edad, todos militantes del partido Socialista se encuentran desaparecidos desde el día 13 de septiembre de 1973, luego que al ser allanados sus domicilios en la ciudad de Villarrica por personal de carabineros, decidieron cruzar la frontera por un paso cordillerano, eh el sector de Curarrehue. Tiempo después, personal de Investigaciones se hizo presente en el domicilio de los hermanos Schmidt Arriagada e informó a sus familiares que los jóvenes habían sido detenidos. Informaciones obtenidas por la familia de Héctor Aguayo indican que el grupo de jóvenes fue detenido en el sector del puente del río Turbio, ocho kilómetros hacia Pichares cuando intentaban cruzar a pie hacia el lado argentino. La aprehensión la habría realizado personal de carabineros que se movilizaban en una camioneta particular de propiedad de un habitante de la ciudad de Pucón. En una primera instancia los detenidos fueron conducidos al retén de Pucón, posteriormente a Villarrica, y desde allí enviados al Regimiento Tucapel de Temuco desde donde desaparecieron versiones extraoficiales indican que habrían sido ejecutados en ese lugar (...), reseñando las gestiones judiciales realizadas por los familiares de las víctimas.

B.11.2. A fs. 1.095 (Tomo IV) oficio del directo de obras municipales de Villarrica que indica que no existe registro de sepultación de Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

B.11.3. A fs. 1.146 (Tomo IV), oficio del director de obras municipales de Villarrica que señala: “revisados los antecedentes de archivados en el departamento de obras, no existe registro sobre sepultación de Elías Dagoberto González Ortega.

B.11.4. A fs. 1.169 a fs. 1.170 (Tomo IV), declaración jurada de Silvia Luz Schmidt Arriagada, fecha 25 de julio de 1990, que en lo pertinente refiere que es hermana de Carlos y Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, nacidos el 24 de octubre de 1951 y el 25 de diciembre 1952, respectivamente. Que ellos en el año 1973 el día 13 de septiembre se “tuvieron que ir, hacia el lugar Ñancalil, lado Huife Alto, sector Pucón Curarrehue, pues ambos pertenecían al partido Socialista de Villarrica”. Carlos trabajaba en CORVI, de esa ciudad y vivía con su hermano Ricardo Augusto. Le consta que sus hermanos, por temor a ser detenidos tuvieron que tomar esa determinación. Que a pesar de sus constantes indagaciones ante la autoridad y ante el regimiento Tucapel de Temuco, comisaría de carabineros, cárcel y fiscalía, nunca se le dio una respuesta concreta del paradero de sus hermanos. Señala que a su madre Aurora del Carmen Arriagada Vergara (fallecida), fue informada a través del cabo Eduardo Vergara que a sus hermanos los habían asesinado en Temuco, y que no se hiciera ninguna ilusión con respecto de ellos de encontrarlos con vida. Lo mismo le dijo el carabinero Guido Krausse, y por Ramón Quezada.

B.11.5. A fs. 1.174 a fs. 1.176 (Tomo IV), consta declaración extrajudicial ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de Silvia Luz Schmidt Arriagada, de fecha 29 de agosto de 1990, alude en lo pertinente que los hermanos Carlos y Ricardo Augusto Schmidt se alejaron de Villarrica, pueblo en donde vivían, el día 13 de Septiembre de 1973, por temor a ser detenidos, dado que eran miembros de las juventudes socialistas de Villarrica. A su parecer tenían la intención de cruzar la frontera por el lado de Huife Alto, ubicado en el sector de Pucón Curarrehue, desde entonces no se ha sabido de ellos. Los carabineros Eduardo Vergara González y Guido Krausse le informaron a su madre Aurora Arriagada Vergara que Carlos y Ricardo Augusto habían sido capturados en esa oportunidad y traídos hasta la comisaria de Pucón y posteriormente trasladados a Temuco, ciudad en donde presumiblemente habían sido asesinados.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

B.12. A fs. 1217 (Tomo IV), certificado de defunción de Alejandro Escobar Vásquez, fecha de defunción 31 de diciembre de 1975, causa de muerte: muerte presunta.

B.13. A fs. 1.220 (Tomo IV) (copia a fs. 2.773 Tomo VIII), extracto de filiación y antecedentes de Héctor Domingo Aguayo Olavarría, “4 Milita Fiscalía de Carabinero de Cautín. Declarado reo: 6 septiembre de 1973. Delito: Tenencia y porte ilegal de arma de fuego”.

B.14. A fs. 1.222 a fs. 1.223 (Tomo IV) (copia a fs. 2.789 Tomo VIII), extracto de filiación y antecedentes de Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, que en registro general de condenas lleva anotado causa rol 3.588, Tribunal Fiscalía Naval de Valparaíso, declaración de reo: 21 de octubre de 1971, delito: deserción simple. Resolución 4 de febrero de 1972, condenado a 41 días de arresto militar.

B.15. A fs. 2.194 (Tomo VII), informe del Alcaide del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, informa que Ricardo Virginio Aguayo Olavarría, estuvo en el recinto penitenciario conforme a los siguientes antecedentes: fecha de ingreso: 14.09.1973, Juzgado: Fiscalía del Ejército de Cautín. Causa: no se indica, Delito: Ley 17.798, fecha de egreso: 27.09.1973, libertad N° 24.

B.16. A fs. 3.042 a fs. 3.043 (Tomo IX) (copia a fs. 3.786 a fs. 3.787 Tomo XI) Copia del acta suscrita por el pleno de la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco, de fecha 17 de septiembre de 1973. Que en lo pertinente suscribe que: “El señor Presidente dio cuenta de haber recibido momentos antes en audiencia al abogado don Alfonso Podlech, quien le manifestó que habría sido designado Fiscal Militar ad-hoc y que con motivo del estado de sitio en que se encuentra el país, había a disposición de la Fiscalía Militar gran cantidad de detenidos, por lo que el número de actuarios con que contaba no era suficiente para interrogar con las exigencias del caso de esas personas. Que ante la situación presentada el señor Coronel Intendente... le habría encomendado que se entrevistara con el Presidente de la Corte, a fin de pedirle una cooperación para que se pusiera a disposición de la Fiscalía...”.

B.17. A fs. 4.157 a fs. 4.185 (tomo XII), informe Pericial Documental N° 548 elaborado por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile, análisis de firma que concluye que los antecedentes examinados en esta oportunidad facultan para establecer que la firma impugnada trazada sobre el

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

texto que indica Fiscal, en la orden de libertad N° S/N, de la Fiscalía Militar de Cautín Temuco, de fecha 28 de septiembre de 1973, dirigida a carabineros de Chile, subcomisaria de Villarrica, la cual dispone la libertad de Fernando Cortes Bornard y Ubildo Antonio Jiménez Varas, es genuina de Oscar Alfonso Podlech Michaud. No se emite pronunciamiento respecto a la eventual intervención escrituraria de Oscar Alfonso Podlech Michaud, en la confección del texto se indica "Peligroso pasarlo SIM", en la declaración de fecha 26 de septiembre de 1973, otorgada por Osvaldo Bastías Zeron, director del tránsito de la Municipalidad de Villarrica, acorde a lo señalado en el punto respectivo del informe.

B.18. A fs. 4.186 a fs. 4.192 (Tomo XII), informe Pericial Documental N° 465 elaborado por el Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones de Chile, que concluye que la evolución de los antecedentes examinados en esta oportunidad, permiten establecer que la firma impugnada, suscrita sobre el texto "Luis A. Jofré Soto Mayor Fiscal" en la copia de autorización fechada en Temuco el 18 de diciembre de 1973, dirigida al doctor Wolfgang Reuter B, Hospital Regional, emanada de la Fiscalía Militar de Cautín Temuco del Ejército de Chile, es genuina de Oscar Alfonso Podlech Michaud.

B.19. A fs.4.149 a fs. 4.151 (Tomo XII), extracto filiación y antecedentes de Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, no registra condenas para la fecha de los hechos.

23°) Que del conjunto de elementos probatorios antes detallados y relacionados generales y específicos, ponderados consistentes en testigos directos, indirectos, documentos y pericias antes señaladas. Como además se indica en el auto acusatorio **fs. 4.600 a fs. 4.662 (Tomo XIII)**, permiten al Tribunal a través de los medios de prueba legal que se han detallado y relacionados, llegar a la convicción:

A. Primero: que han existido los delitos de **secuestro con grave daño**, en las personas de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, previsto y sancionado en el artículo 141 inciso tercero del Código Penal vigente a la época de los hechos, ilícito en su carácter de lesa humanidad.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

B. Segundo: que en esos ilícitos le ha correspondido la participación en calidad de **cómplice** en los términos del artículo 16 del Código Penal al acusado **Oscar Alfonso Podlech Michaud**, ello sin perjuicio de otras reflexiones que puedan hacerse al analizar los escritos de los querellantes y la defensa.

24°) Que prestando declaración indagatoria **PEDRO GUILLERMO MANUEL TICHAUER SALCEDO**, de fs. 1.400 a fs. 1.402 (Tomo IV), de fs. 3.166 a fs. 3.167 (Tomo IX), de fs. 3.191 a fs. 3.192 (Tomo IX), de fs. 3.525 a fs. 3.527 (Tomo X), de fs. 3.528 a fs. 3.530 (Tomo X) y de fs. 141 a fs. 144 (cuaderno secreto).

En declaración judicial de fecha 3 de septiembre de 2009, rolante de **fs. 1.400 a fs. 1.402 (Tomo IV)**, exclamo que llegó al regimiento Tucapel de Temuco con el grado de teniente en septiembre de 1970 y fue destinado en comisión de servicios a la academia de guerra en diciembre de 1973. Preguntado dice que su función de oficial de intendencia tiene que ver con administración, específicamente con finanzas, vestuario y equipo, subsistencias, que es todo lo referido a la parte de alimentación del contingente; útiles de escritorio e inventariables. Respecto a la consulta que se le hace alude que él dependía directamente del comandante del regimiento. Además, trabajaban en la plana administrativa el ayudante, teniente Jaime García Covarrubias y el mayor Luis Jofré Soto. Que para aquella época estaba casado y vivía en un departamento ubicado en calle Prat, a un costado del regimiento. Antes de este domicilio, vivía en la población Llaima donde había un grupo de casas que eran fiscales que eran ocupadas por todos los oficiales casados. Recuerda que también vivían allí Gustavo Leal Manzer, Rodolfo Vargas, Mario Alvarado, Luis Jofré, Nelson Ubilla y Vásquez Chahuán. En agosto de 1973 se entregaron los departamentos ubicados en calle Prat, como dijo anteriormente, y todos los oficiales que ha nombrado estaban viviendo en estos nuevos inmuebles. No recuerda que algún oficial haya quedado viviendo en la población Llaima. En cuanto a los hechos materia de otro proceso, refiere que recuerda perfectamente la situación, porque aquella noche tenía como invitados en su casa a su cuñado y su esposa. Acababan de cenar y estaban incluso bailando. De pronto, no recuerda la hora exacta, sintió una explosión como de granada y ráfagas que provenían de la isla Cautín que duraron no más de cinco minutos. Entonces, salió con dirección al regimiento y entró por la puerta que daba a calle Prat. Allí fue informado por algún oficial, no recuerda nombre, aunque puede haber

sido el mayor Jofré, que un grupo de extremistas habían intentado atacar el polvorín de la isla Cautín, pero que no se preocupara, ya que todo estaba controlado. Regresó a su casa sin tener más antecedentes al respecto. Que es probable que al día siguiente el comandante del regimiento les hubiera informado de lo ocurrido la noche anterior, aunque no lo recuerda claramente. De lo que está seguro es que no se le dio mayor trascendencia al incidente. Preguntada basa que el block de departamentos en que vivía estaba ubicado a la altura del casino de oficiales y su domicilio estaba en el segundo piso, orientado hacia calle Prat. Consultado, no recuerda que haya resultado herido algún oficial, suboficial o soldado conscripto a raíz de este atentado al polvorín. El Tribunal le lee algunas declaraciones de soldados conscriptos del regimiento Tucapel, que se refieren a los hechos (asalto al polvorín). El deponente señala que le parece que las declaraciones que se le han dado a conocer han distorsionado la realidad producto del tiempo transcurrido y están influidas por ciertos factores externos que han modificado la manera de pensar de las personas que aparecen declarando. Alude que, por ejemplo, sabe del caso de muchos conscriptos que están exigiendo que se les paguen imposiciones o los indemnicen por haber servido un tiempo determinado en el ejército. En relación de la patrulla de reacción, puede decir que ésta se articuló mucho tiempo después del año 1973. Recuerda que cuando fue comandante del regimiento se formó la URI (unidad de reacción) destinada para la defensa del cuartel. Para el año 1973 no recuerda que existiera esta patrulla, aunque existía un plan de defensa del cuartel en que cada unidad operativa sabía lo que tenía que hacer. Este plan de defensa se practicaba tres veces en el año. Que seguramente, la noche del 10 de noviembre de 1973 los hechos se sucedieron muy rápido por lo que este plan no se alcanzó a desplegar totalmente, pues de otro modo se hubiese correspondió participar en el operativo. Se imagina que aquella noche reaccionó sólo la guardia del polvorín que en aquella oportunidad estaba integrada por un punto fijo más una patrulla móvil. Además, en aquel lugar vivía un suboficial de apellido Soto que era el cuidador del recinto. Consultado indica que existía un oficial de guardia del grado de subteniente o teniente; más un oficial de ronda, que debía ser del grado de capitán al menos.

En declaración extrajudicial de fecha 5 de junio de 2019, rolante de **fs. 3.166 a fs. 3.167 (Tomo IX)** (cuya copia consta de fs. 3.191 a fs. 3.192 Tomo IX), destaca que en el regimiento infantería N°8 Tucapel de Temuco, cumplió

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

funciones entre septiembre de 1970 a noviembre de 1973, no precisa fecha exacta. Que para 1973, ostentaba el grado de teniente de ejército y se desempeñaba como jefe de sección administración de fondos y jefe de la sección de intendencia de la compañía de plana mayor y servicios. Su lugar de desempeño se encontraba en el pabellón comandancia, donde estaban las oficinas de la comandancia, ayudantía, registratura, segunda comandancia, sección segunda y otras secciones administrativas como la oficina de personal. En relación con el mando de la compañía de plana mayor y servicios, recuerda que al mando de esta estaba el capitán Nelson Ubilla Toledo, quien a partir del día 11 de septiembre se hizo cargo de la sección de inteligencia, ubicada en la comandancia, teniendo una dualidad de funciones tanto en la compañía como en la sección segunda. Los oficiales que le seguían en la línea jerárquica estaba el declarante, el subteniente Raimundo García Covarrubias, el subteniente Romilio Lavín Muñoz, y los oficiales de sanidad dental y veterinaria, recordando al mayor Arretx, Verdugo y el capitán Boero, quienes a pesar de que eran oficiales de planta habían sido contratados para cumplir esas labores. Hace presente que con las nuevas funciones del capitán Nelson Ubilla, el subteniente Raimundo García, quedó a cargo de la instrucción militar de los conscriptos de la compañía, el subteniente Lavín, quedó a cargo de la sección de material de guerra, donde tenía que ver con los armamentos, munición y combustible del regimiento y el deponente que seguía en sus funciones habituales como oficial de intendencia, sin tener labor operativo, ni de instrucción sobre los conscriptos. Preguntado respecto a si durante esa época cumplió labores operativas, debe señalar que solo las cumplió a nivel de régimen interno, como oficial de ronda, haciendo presente que nunca salió en patrullajes de control de toque de queda. En cuanto a lo que se le informa y que dice relación con la participación de persona de su compañía en ir a recoger a unos cuerpos de personas ejecutadas al polígono de tiro y cargarlos a un camión militar el cual habría emprendido rumbo al puente Allipen, señala que esa situación nunca estuvo bajo su conocimiento y que por lo menos a él no le correspondió efectuar esas labores. Respecto de las víctimas Hugo Arner y Elías Dagoberto González Ortega, los hermanos Juan Carlos y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan de Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Raúl Figueroa Burkhardt y Héctor Aguayo Olavarría, manifiesta que es la primera vez que escucha sus nombres e ignora sus actuales paraderos. Conjetura que nunca

fue enviado en alguna misión especial al sector del puente Allipen, el cual se le comenta en este acto que queda camino a Villarrica. A lo anterior dice que nunca supo si en dicho lugar se practicaron ejecuciones de detenidos de su unidad militar.

En declaración judicial de fecha 3 de septiembre de 2009, rolante de **fs. 3.525 a fs. 3.527 (Tomo X)**, comunica que llegó al regimiento Tucapel de Temuco con el grado de teniente en septiembre de 1970 y se fue destinado en comisión de servicios a la academia de guerra en diciembre de 1973. Preguntado, aduce que su función como oficial de intendencia tiene que ver con administración, específicamente con finanzas, vestuario y equipo, subsistencias, que es todo lo referido a la parte de alimentación del contingente, útiles de escrito e inventariables. Consultado afín a que dependía directamente del comandante del regimiento. Además, trabajaban en la plana administrativa el ayudante, teniente Jaime García Covarrubias y el mayor Luis Jofré Soto. Que para aquella época él estaba casado y vivía en un departamento ubicado en calle Prat, a un costado del regimiento. Antes de este domicilio, vivía en la población Llaima donde había un grupo de casas que eran fiscales, las que eran ocupadas por todos los oficiales casados. Recuerda que también vivían allí Gustavo Leal Manzer, Rodolfo Vargas, Mario Alvarado, Luis Jofré, Nelson Ubilla y Vásquez Chahuán. Que en agosto de 1973 se entregaron los departamentos ubicados en calle Prat, que como dijo anteriormente y todos los oficiales que ha nombrado estaban viviendo en estos inmuebles. Que no recuerda que algún oficial haya quedado viviendo en la población Llaima. En cuanto a los hechos (que dicen relación con el asalto al polvorín) cuenta que recuerda perfectamente la situación, porque aquella noche tenía como invitados en su casa a su cuñado y su esposa. Acababan de cenar y estaban incluso bailando. De pronto, no recuerda la hora exacta, sintió una explosión como de granada y ráfaga que provenían de la isla Cautín que duraron no más de cinco minutos. Entonces, salió con dirección al regimiento y entró por la puerta que daba a calle Prat. Allí fue informado por algún oficial, no recuerda nombre, aunque puede haber sido el mayor Jofré, que un grupo de extremistas había intentado atacar el polvorín de la isla Cautín, pero que no se preocupara, ya que todo estaba controlado. Acota que regreso a su casa sin tener más antecedentes al respecto. Que es probable que al día siguiente el comandante del regimiento les hubiera informado de lo ocurrido la noche anterior, aunque no lo

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

recuerda claramente. De lo que está seguro es que no se dio mayor trascendencia al incidente. Preguntado, colige que el block de departamentos en que vivía estaba ubicado a la altura del casino de oficiales y su domicilio estaba en el segundo piso, orientado hacia calle Prat. Consultado no recuerda que haya resultado herido algún oficial, suboficial o soldado conscripto a raíz de este atentado al polvorín. El Tribunal le lee algunas declaraciones de soldados conscriptos del regimiento Tucapel, que se refieren a los hechos. El indagado señala que le parece que las declaraciones que se le han dado a conocer han distorsionado la realidad producto del tiempo transcurrido y están influidas por cierto factores externos que han modificado la manera de pensar de las personas que aparecen declarando. Que, por ejemplo, sabe del caso de muchos conscriptos que están exigiendo que se les paguen imposiciones o los indemnicen por haber servido un tiempo determinado en el ejército. Con relación a la patrulla de reacción, puede decir que ésta se articuló mucho tiempo después del año 1973. Recuerda que cuando fue comandante del regimiento se formó la URI (unidad de reacción) destinada para la defensa del cuartel. Para el año 1973 no recuerda que existiera esta patrulla, aunque existía un plan de defensa del cuartel en que cada unidad operativa sabía lo que tenía que hacer. Este plan de defensa se practicaba tres veces en el año. Que seguramente, la noche del 10 de noviembre de 1973 los hechos se sucedieron muy rápido por lo que este plan no se alcanzó a desplegar totalmente, pues de otro modo le hubiese correspondido participar en el operativo. Se imagina que aquella noche reaccionó solo la guardia del polvorín que en aquella oportunidad estaba integrada por un punto fijo, más una patrulla móvil. Además, en aquel lugar vivía un suboficial de apellido Soto que era el cuidador del recinto. Consultado adosa que existía un oficial de guardia del grado subteniente o teniente; más un oficial de ronda que debía ser del grado capitán al menos.

En declaración judicial de fecha 7 de noviembre de 2006, rolante de **fs. 3.528 a fs. 3.530 (Tomo X)**, insiste que llegó al regimiento Tucapel de Temuco con el grado de teniente en septiembre de 1970 y se fue destinado en comisión de servicios a la academia de guerra en diciembre de 1973. Preguntado, aduce que su función como oficial de intendencia tiene que ver con administración, específicamente con finanzas, vestuario y equipo, subsistencias, que es todo lo referido a la parte de alimentación del contingente, útiles de escrito e inventariables. Consultado afinca que dependía directamente del comandante del

regimiento. Además, trabajaban en la plana administrativa el ayudante, teniente Jaime García Covarrubias y el mayor Luis Jofré Soto. Al capitán Nelson Ubilla Toledo lo asocia desde antes del 11 de septiembre de 1973 con el área de seguridad del regimiento, es decir con el S-2, que es el organismo de inteligencia. Recuerda que este oficial trabajaba con unos señores de investigaciones. Que con toda seguridad además colaboraban en esta actividad los suboficiales Moreno y Schonherr. Preguntado dice que inmediatamente después del 11 de septiembre pasó a "Dirinco" como parte de un equipo destinado a normalizar la distribución de los alimentos y posteriormente a las agencias Graham como interventor. Posteriormente fue nombrado interventor del IDI. Que desconoce quién era el director de "Dirinco" antes de su llegada a esa institución ni sabe que sucedió con éste. Espeta que no vio detenidos al interior del regimiento Tucapel de Temuco, pero se comentaba que de vez en cuando llegaban personas en esa calidad. Desconoce en qué lugar eran mantenidas, aunque puede ser que hayan sido dispuestas en el gimnasio o en el rancho de tropas. Lo más probable es que haya sido el primero de los inmuebles mencionados por sus características. Preguntado refiere que la fiscalía militar funcionaba en el interior del regimiento Tucapel, pudiendo recordar que el fiscal era el mayor Jofré Soto quien era asesorado por un abogado de apellido Podlech, quien a veces vestía de uniforme. Que también había un suboficial de apellido Quilodrán, quien era el actuario. Recuerda un coronel de apellido Canessa en el regimiento Tucapel, quien estuvo hasta fines de 1970 en la unidad. No recuerda otro oficial de apellido Canessa durante su estadía en Temuco. No de planta al menos. Tampoco recuerda que haya pasado en comisión de servicios un oficial con ese apellido. Que Pablo Gran era infante y llegó a fines de 1971 a Temuco con el grado de subteniente. En relación con Romilio Lavín, este era de la especialidad de material de guerra, llegó a fines de 1972 junto con Valdebenito, Uribe y Espinoza (fallecido). Mario Alvarado era capitán y llegó después que Gran, pero antes que el grupo mencionado precedentemente.

En declaración judicial de fecha 5 de noviembre de 2019, rolante de **fs. 141 a fs. 144 (cuaderno secreto)**, ratifica su declaración extrajudicial que rola de fs. 3.166 a fs. 3.167. El Tribunal le solicita que señale la línea de mando de la compañía de plana mayor y servicios del regimiento Tucapel de Temuco para septiembre de 1973. Se le lee la declaración de fs. 3.125 de Romilio Lavín Muñoz

subteniente de aquella compañía quien señala que la línea de mando de la compañía estaba integrada de la siguiente manera: "La compañía antes señalada estaba integrada por el capitán Nelson Ubilla Toledo, quien era el comandante, siendo secundado en antigüedad por el teniente Pedro Tichauer Salcedo, quien también trabajaba en la comandancia en la oficina de administración de fondos y el subteniente Raimundo García Covarrubias". A lo que el deponente responde: que dos cosas, desea declarar algo que es peyorativo para su persona, era oficial de servicio, tenían funciones muy puntuales, no trabajan en otras áreas, su función dependía del comandante de regimiento, en una línea de grado, no de mando era el segundo, y en una línea de mando era Raimundo García Covarrubias, en la práctica el capitán Ubilla nunca dejó de ser comandante de plana mayor y también era S-2. Una vez al mes que se efectuaban pagos de los conscriptos de su compañía él tenía que ir a sacarle la firma éste. A él no le correspondía mando, pues era de servicio. Raimundo García Covarrubias, estaba a cargo de la instrucción de toda la compañía, "yo era más antiguo que él", pero cada uno con sus funciones técnicas. Él daba orden, pero nosotros no obedecíamos las voces de mando. Se le exhibe recortes de diario de los bandos militares que comenzaron a surgir en la prensa de la época a contar del 11 de septiembre de 1973, los cuales ordenaban a diferentes personas presentarse ante las dependencias del regimiento Tucapel de Temuco, la mayoría de las cuales quedó detenida en aquel regimiento (Edición del 14 de septiembre de 1973 del Diario Austral de Temuco, donde Aparece el nombre; por ejemplo, de Ambrosio Badilla Vasey, detenido desaparecido de causa rol 113.950). El Tribunal le pide que ¿mencione la cantidad de detenidos por motivos políticos que pudo observar en el regimiento Tucapel tras el 11 de septiembre de 1973? A lo que el deponente contesta que existía una cantidad de personas indeterminadas que enfrentaban por una serie de motivos, toque de queda entre otros. Pero también se veían detenidas personas llamadas a través de los bandos, estos eran por motivos políticos. Se le pregunta que de acuerdo con su conocimiento ¿En qué dependencia eran mantenidos aquellos detenidos políticos? A lo que el exhortado señala que, en la guardia, dejaban a los detenidos, había un sector que se llamaba descanso de centinelas. El Tribunal le recuerda al declarante que este ha señalado anteriormente que su labor de desempeño se encontraba en la comandancia, lugar donde estaba la sección segunda de inteligencia. ¿Cómo eran los interrogatorios que se les efectuaban a

los detenidos, preguntas que se le realizaban? ¿Existieron apremios físicos? ¿Qué pudo observar sobre la labor que efectuó esta sección? A lo que exhortado indica que en el pabellón comandancia no se interrogaba a personas, era un lugar en que entraban muchas personas a hacer tramites personales. Que debe señalar que en el gimnasio se encontraba Nelson Ubilla, lugar donde se practicaban interrogatorios. Que se comentaba que en el gimnasio existían apremios ilegítimos. Por otra parte, indica que, con Ubilla, tenía una relación, pero muy leve pues su función principal como jefe de la sección administración de fondo y otros, dependía directamente del comandante de la unidad o del regimiento. Se le lee en lo pertinente la declaración de don Romilio Lavín Muñoz de fs. 3.125 a fs. 3.126 quien indica "respecto a la dependencia que existía en la compañía de plana mayor y servicios, donde se efectuaban interrogatorios a detenidos, debo señalar que efectivamente esta dependencia existía... y por antecedentes que manejo en esa sala trabajaba personal de policía de investigaciones de Temuco". Se le pregunta ¿Qué puede indicar acerca de esta sala? ¿Dónde específicamente estaba ubicada? El exhortado explaya que Romilio debe estar confundido, pues cree que el lugar era el gimnasio. El Tribunal le pregunta, en su labor como oficial de la compañía de plana mayor y servicios ¿Se le daba cuenta de estos interrogatorios? A lo que el deponente señala, que no se le daba cuenta de interrogatorios. Consultado sobre si ¿Personalmente alguna vez interrogó o presencié interrogatorios? A lo que el deponente contesta que no participo en interrogatorios, pero si vio algunos, sobre todo cuando iba a buscar alguna firma del comandante de la plana mayor Nelson Ubilla, esto era una vez al mes. Preguntado si ¿Vio ingresar alguna vez a los oficiales Manuel Fernández Carranza o Manuel Vásquez Chahuán hasta esta dependencia? El declarante manifiesta que no. El Tribunal le pide que señale ¿Quién realizaba y quienes ordenaban aquellos interrogatorios? El exhortado expresa que Ubilla y su equipo. El Tribunal le pregunta ¿Quiénes ordenaban aquellos interrogatorios? El deponente responde que Nelson Ubilla era la persona encargada de estos interrogatorios. Respecto a la pregunta de ¿En qué condiciones eran ingresados los detenidos políticos a esta sala? El declarante contesta no tener conocimiento. Se le pide que manifieste ¿quién se encargaba del traslado de estos detenidos hasta aquella sala? A lo que el declarante indica los centinelas. El Tribunal le pregunta una vez terminados los interrogatorios ¿Cuál era el procedimiento adoptado para estos detenidos? El

exhortado expresa no tener conocimiento de esto. Por otra parte, dice que conoció a Fernández Carranza, tenían un grado de amistad. El Tribunal le lee lo pertinente de las declaraciones de M.C.S. de fs. 2.309 "Hago presente que en dos oportunidades me correspondió cargar el camión militar con personas fallecidas, en la segunda oportunidad, no tengo claro si fue al día siguiente a los días del primer hecho, cargamos ocho cuerpos más, también de sexo masculino, pero en esta ocasión eran más jóvenes que en el caso anterior. En ambas oportunidades, el camión salió en dirección al puente Allipen, conforme a lo que comentaba en ese momento, quedando yo junto a los conscriptos de mi compañía en el regimiento y el personal antes mencionado de la segunda de cazadores, se hizo cargo del traslado de los cadáveres hasta el mencionado río... debo señalar que todos los cuerpos presentaban múltiples impactos de bala". Respecto a las fotografías que en este acto se me exhiben y cuyas identidades se me dan a conocer, como Héctor Aguayo Olavarría y los hermanos Elías y Hugo González Ortega, debo señalar que recuerdo a los rostros de los hermanos antes mencionados, ya que conforme a lo recordado vi, que los estaban torturando en una sala ubicada al interior de mi compañía, donde estaban presentes los oficiales Vázquez Chahuán y Fernández Carranza, junto a un grupo de detective. Hago referencia a ésta situación, ya que parte de los detenidos eran llevados a esa "Sala de tortura", ante la vista de todos los que nos encontrábamos en la compañía", de fs. 2.638 "Cuando retire los 8 cuerpos estaba de noche y con la luz de los vehículos pude observar que eran personas jóvenes, sé que el primer grupo de cuerpos que recogí eran 10 porque unos los iban tirando de a uno al camión (como sacos de papa) sé que el segundo grupo eran 8, pues al igual que en el caso anterior, los iba contando... El comandante de plana mayor era el capitán Nelson Ubilla Toledo. Luego el que seguía era Romilio Lavín Muñoz" y de fs.3.109 "Con relación a cuando estaban torturando a estos jóvenes, de nombres Héctor Aguayo Olavarría y a los hermanos Elías y Hugo González Ortega, puedo indicar que fue aproximadamente un día antes de recoger sus cuerpos e ingresarlos al camión". En virtud de lo anterior se le pregunta ¿Si estuvo presente en la isla Cautín en el procedimiento que da cuenta el señor M. C. el cual indica que le tocó cargar 8 cuerpos de personas fallecidas, entre los que reconoce a los hermanos González Ortega, víctimas de la presente causa (porque como se señaló, que aquellos los estaban torturando en la sala de la compañía de plana mayor y

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

servicios)? A lo que el deponente manifiesta no tener conocimiento de lo acontecido y que se le lee.

25°) Que, haciéndonos cargo de las declaraciones indagatorias del acusado, **Pedro Guillermo Manuel Tichauer Salcedo**, quien fue sometido a proceso a **fs. 4.254 a 4.335 (Tomo XII)**, con fecha 17 de junio de 2022. **Acusado** según el auto de **fs. 4.600 a fs. 4.662 (Tomo XIII)**, con fecha 04 de noviembre de 2022, como **cómplice** de los delitos de secuestro con grave daño en su carácter de lesa humanidad, en las personas de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, perpetrado entre fines de septiembre e inicio de octubre de 1973. Que, si bien el acusado se ubica en la fecha, lugar y sitio del suceso, agrega factores que podrían eximirlo de responsabilidad en los hechos. No obstante, lo anterior, según el mérito del proceso, las pruebas rendidas y ponderadas en conformidad a la ley, obran en su contra los siguientes elementos de convicción.

Desde ya, por síntesis y economía procesal se dan por reproducidos todos los elementos probatorios generales antes ponderados y los específicos relacionados y aquilatados respecto del anterior acusado, puntualizando lo siguiente:

A. DECLARACIONES

A parte de lo que se ha detallado en la prueba de los testigos conviene puntualizar respecto de estas personas lo siguiente:

A.1. Diógenes Segundo Bravo Bernal

En declaración extrajudicial de fecha 14 de diciembre de 1995, rolante de fs. 60 a fs. 61 (Tomo I), en lo pertinente a Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría, Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, no los recuerda por sus nombres, pero puede indicar que dentro de los primeros días del pronunciamiento militar, en circunstancias que se encontraba en la subcomisaria, llegó hasta la unidad el cabo primero Francisco Monsalve (fallecido), con un grupo de jóvenes, no recuerda la totalidad, pero eran varios, en calidad de detenidos, por cuanto habían sido sorprendidos huyendo hacia Argentina por una patrulla que

estaba al mando del capitán don Luis Robinson Bustos Letelier, quien a la vez era el jefe de la unidad. Que los detenidos fueron ingresados a los calabozos, mientras que el suboficial de guardia, del cual no recuerda su nombre, comunicaba esta novedad a la Prefectura de Temuco en forma telefónica.

A.2. Ramón Armando Torrealba Guzmán

En declaración judicial de fecha 20 de noviembre de 2012, rolante de fs. 867 a fs. 869 (Tomo III), dice que hubo una instrucción que impartió la Fiscalía Militar del Ejército desde Temuco que ordenaba la detención de ciertas personas y el allanamiento de domicilios en Villarrica. Los detenidos eran derivados a la Fiscalía Militar de Temuco. En aquel tiempo el fiscal militar era Alfonso Podlech Michaud.

A.3. Guillermo Segundo Rosales Pérez

Declaración judicial de fecha 09 de julio de 2012, rolante de fs. 719 (Tomo II), interrogado dice que hubo detenidos por motivos políticos en la subcomisaria de Pucón, pero lo fueron el mismo 11 de septiembre de 1973. Al día siguiente, esos detenidos fueron retirados por personal militar del regimiento Tucapel de Temuco.

En declaración extrajudicial de fecha 08 de junio de 2012, rolante de fs. 770 a fs. 771 (Tomo III), replica su desarrollo funcionario y recuerda que llegado el pronunciamiento militar se encontraba cumpliendo el servicio de guardia y en aquella oportunidad hubo entre veintiocho a treinta personas detenidas, las cuales quedaron en los calabozos de la unidad policial. Según su apreciación, estas personas fueron detenidas por temas políticos las cuales al día siguiente fueron trasladadas a Temuco en camiones militares.

En declaración extrajudicial de fecha 15 de mayo de 2013, rolante de fs. 1.012 a fs. 1.013 (Tomo III), puntualiza que el 11 de septiembre de 1973 cumplió funciones de encargado de guardia de la unidad policial, en horas de tarde fueron llevadas a la unidad, cerca de 30 personas, las cuales entregó al encargado de guardia del turno entrante, quien hizo entrega de los detenidos a personal de ejército, quienes los trasladaron en camiones militares de Temuco, por lo que comentaron en su momento, ya que ese día estaba saliente de turno.

A.4. Roden Rivas Vergara

En declaración judicial de fecha 16 de noviembre de 2004, rolante de fs. 394 (Tomo I), comunica que recuerda la detención de siete personas, todas

adultas, entre ellos un tal Colihueque, que fueron citados al cuartel por órdenes del regimiento Tucapel y luego de ello le correspondió trasladarlos hasta Temuco, donde los entregó a la guardia del regimiento Tucapel. Que esas personas regresaron a Pucón como a los cinco días y debieron presentarse a firmar todos los fines de semana en el cuartel.

En declaración judicial de fecha 09 de julio de 2012, rolante de fs. 718 (Tomo II), recuerda a un señor de apellido Barra Matamala, quien colaboró en una oportunidad con carabineros para septiembre de 1973, facilitando su camioneta para trasladar detenidos al regimiento Tucapel.

A.5. Ignacio Cofré Leal

En declaración extrajudicial de fecha 07 de junio de 2012, rolante de fs. 766 a fs. 766 vuelta (Tomo III), reseña su carrera funcionaria y que por comentarios tomó conocimiento que hasta el cuartel llegaron aproximadamente seis detenidos jóvenes, desconociendo todo antecedentes, ya que, había sido detenidos por personal del ejército, presumiendo que fueron traídos y llevados en helicóptero, a algún lugar del cual desconoce.

A.6. José Eve Mancilla Yáñez

En declaración judicial de fecha 17 noviembre de 2004, rolante de fs. 399 a fs. 400 (Tomo II), arguye que respecto de las personas que se le señala, no las recuerda, pero dice que, si llegaron detenidos hasta la subcomisaria, es muy probable que hayan sido derivados hacia Temuco vía aérea, ya que ese era el medio más usual de transporte de detenidos.

A.7. Andrés Rigoberto Pacheco Cárdenas,

En declaración judicial de fecha 22 de septiembre de 2006, rolante de fs. 454 a fs. 454 Vuelta (Tomo II), anexa que, además, carabineros solicitaba algunas veces helicópteros para efectuar traslado de detenidos desde puntos lejanos a Temuco, como el sector cordillerano. En Temuco el Fiscal Militar era a quien le correspondía ver todos los demás casos que ocurrían tanto en la Base Aérea Maquehue como en el resto de las unidades, derivando a ese Tribunal los detenidos.

A.8. Antonio Sergio Monserrat Mena

En declaración judicial de fecha 26 de junio de 2013, rolante de fs. 1.786 a fs. 1.788 (Tomo VI), replica sus funciones y dice que en estos operativos los militares trajeron personas civiles, las que fueron subidas al “aparato”, regresando

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

a Temuco con ellos más los militares. Recuerda que en dos o tres oportunidades más o menos le correspondió trasladar militares que llevaban civiles al Tucapel.

A.9. Eduardo Vergara González,

En declaración extrajudicial del 15 de noviembre de 1995, rolante de fs. 52 (Tomo I), expreso que su función específica era la oficina de partes y el rol administrativo de la unidad. En cuanto a los hermanos Schmidt Arriagada, conocía a la madre de nombre Aurora Arriagada Vergara, la cual tenía un restaurant en Villarrica, quien convivía con Otto Schmidt. En el año 1957 cuando se desempeñaba como jefe del Retén Llafenca, conoció a sus hijos, los cuales a esa fecha eran pequeños. Desde esa fecha no los volvió a ver. Que no es efectivo lo que ha manifestado la señora Aurora Arriagada, que su hijo fue capturado y llevado a la unidad de Pucón.

En declaración judicial del 17 de noviembre de 2004, rolante de fs. 397 a fs. 397 vuelta (Tomo II), ratifica su declaración de fs. 71 exponiendo que, en enero de ese año, pasó a visitarlo Luis Bustos Letelier, subcomisario de Pucón en 1973, conversando acerca de los hechos acaecidos con motivo de la detención de unos jóvenes desaparecidos. Estuvieron de acuerdo, en que efectivamente estuvo en el cuartel cuando estos fueron detenidos y que los habrían entregado al regimiento Tucapel. El Tribunal le pregunta si vio pasar detenidos en tránsito hacia Temuco, ya sea trasladados por personal del ejército carabineros o de la Fuerza Aérea, responde: que sí, en dos o tres oportunidades vio a los militares, que fueron a buscar detenidos. El Tribunal le pregunta si tuvo conocimiento que algunos detenidos hayan sido transportados vía aérea hacia Temuco o vio sobrevolar helicópteros en la zona. El deponente responde: que vio sobrevolar helicópteros antes y después del 11 de septiembre, que también aterrizaban a buscar detenidos.

En declaración extrajudicial del 09 de agosto de 2012, rolante de fs. 824 a fs. 825 (Tomo III), replica que, respecto a la detención de Hugo y Elías González Ortega, Juan y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa, Héctor Aguayo Olavarría, Raúl Figueroa Burkhardt y Alejandro Escobar Vásquez, recuerda a los hermanos Schmidt, por conocer a su padre Otto, quien tenía domicilio en Menetúe, cuando trabajó en el retén de Llafenco. En cuanto a la detención de estos jóvenes, señala que en una oportunidad el capitán Bustos, le comento que había detenido a un grupo de jóvenes que aparentemente intentaban cruzar la

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

frontera cerca de Caburgua. Que, según Bustos, la detención la habría hecho el suboficial Heleo Raúl Burgos Burgos, junto al carabinero Francisco Monsalve Hidalgo y otros funcionarios que no recuerda. Por lo comentado por el capitán Bustos, esos jóvenes fueron entregados al ejército, motivo por el cual se les trasladó hasta el regimiento Tucapel de Temuco, por vía terrestre en un vehículo particular.

En declaración extrajudicial del 16 de mayo de 2013, rolante de fs. 1.014 a fs. 1.015 (Tomo III), en relación con los ocho detenidos, se enteró en una oportunidad sobre la detención de unos jóvenes, pero no puede precisar si son ocho, quienes fueron detenidos por el sargento Burgos, Ramón Quezada Reyes, Monsalve y otros funcionarios. Que posterior a la detención de los jóvenes, leyó un oficio en el cual se hacía referencia a los detenidos, recordando que en este oficio figuraban los hermanos Schmidt y Olavarría, quien era hijo de un comerciante en la ciudad de Curarrehue. Ese oficio no lo confeccionó él, en dicho documento se mencionaba la entrega de los detenidos al regimiento de Infantería N°8 Tucapel de Temuco. Que estos detenidos fueron trasladados vía terrestre a Temuco, ignora si fueron llevados en vehículo policial o de propiedad de Carlos Barra Matamala, quien siempre les prestó colaboración.

A.10. Sara Ester Valdés Velásquez

En declaración extrajudicial de fecha 13 de octubre de 2015, rolante de fs. 2.886 a fs. 2.887 (Tomo VIII), exploya que para el año 1973, no militaba ni participaba en ningún partido político, solo participaba en actividades de tipo social en la sede del partido Socialista. En esas reuniones participaba un joven de apellido Aguayo, a quien conocía ya que iban al mismo colegio y también unos vecinos cuyos nombres corresponden a Alejandro Escobar y Juan Cabrera. También conoció en esas reuniones a los hermanos Schmidt y Gonzalez, quienes eran funcionarios municipales y estaban a cargo de la distribución de unos terrenos los cuales se habían tomado en el año 1971. La última vez que vio a estos jóvenes fue unos días antes del golpe de Estado y nunca le hicieron comentario alguno respecto a un posible viaje al extranjero en este caso a Argentina. Se enteró, por comentarios de los padres de Alejandro Escobar y de Juan Cabrera que ellos se habían ido de la ciudad sin dar explicación alguna respecto a su lugar de destino, esto fue a los tres días del 11 de septiembre

cuando sus padres consultaron a su madre si sabían algo respecto a sus paraderos.

A.11. Juan Esteban Ortiz Parra

En declaraciones extrajudiciales de fecha 17 de julio de 2015, rolante de fs. 2.154 a fs. 2.155 (Tomo VI), ciñe que efectivamente días posteriores al golpe de Estado, encontró en el río Toltén una gran cantidad de cuerpos flotando en las aguas y otros varados en la ribera del mismo río. El caso es que en esa ocasión se fijó especialmente en un cuerpo que estaba varado en la ribera del río cerca del sector Galpones, se fijó en este cuerpo porque era de una persona muy joven, por lo que se bajó del bote y procedió a revisarlo, ya que podía tratarse de un conocido, pero no era el caso, ya que inmediatamente se dio cuenta que no lo era, sumado que al revisar sus vestimentas se percató que tenía un papel que era de un colegio de Villarrica y alcanzó a distinguir que su apellido era Aguayo y probablemente su nombre era Pedro, es lo que recuerda. El cuerpo de ese joven presentaba una perforación por la parte posterior de su cráneo y sus manos estaban amarradas con alambre de púa y estaba vestido con pantalones tipo jeans color azul y una chomba. Las características físicas de ese joven, señala que aparentemente no superaba los quince o dieciséis años, era de baja estatura y no pudo percatarse de otras características, ya que el cuerpo estaba muy golpeado por la acción de las rocas del río.

A.12. Rubén Ernesto Sandoval Muñoz

En declaraciones extrajudiciales de fecha 20 de julio de 2015, rolante de fs. 2.156 a fs. 2.157 (Tomo VI), respecto a los cadáveres que vio en el río, especial atención le llamó un joven que vio varado en un quebradero del río entre el sector Bajada de Piedra y Chesta, ya que presentaba una perforación al lado derecho de su cráneo y otra perforación en la parte posterior de este, dándole la impresión de que le habían dado un balazo. Recuerda que junto a su cuerpo sobre la arena estaban sus documentos de identidad, recordando que decía Villarrica, no distinguiendo su identidad. Las vestimentas del cadáver correspondían a un chaquetón, blue jeans y zapatillas, no pudo percatarse si presentaba otras heridas porque por temor prefirió retirarse del lugar. Respecto a la fotografía que se le exhibe, señala que efectivamente se trata del joven que vio en el río, ahora bien, el nombre que se le da a conocer como Héctor Aguayo Olavarría. Solo del que

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

mencionó pude observar sus documentos ya que estaban en la arena, incluso le dio la impresión de que había sido revisado con anterioridad.

En declaración judicial de fecha 31 de mayo de 2017, rolante de fs. 2.645 a fs. 2.646, (Tomo VIII), ratifica su declaración e indica que en diciembre de 1973 pudo observar la presencia de distintos cuerpos en el río Toltén, en circunstancias que se encontraba prestando servicios remando un bote. Precisa que sólo pudo identificar uno de los cuerpos, a la altura de Chesta, en el kilómetro quince, pues cuando bajó del bote a tomar café lo vio y le quedó muy marcada su imagen, persona que en este acto reconoce tras exhibirle la fotografía que rola a fs. 2.317, cuyo nombre se le da a conocer como Héctor Aguayo Olavarría, quien tenía una perforación en el cráneo, al parecer por un impacto de bala, el cual vestía chaquetón oscuro, jean azules y zapatillas. Pudo observar que al lado de su cuerpo se encontraba su cedula de identidad, la cual sólo se lograba observar que decía "Villarrica".

A.13. Francisco Hueche Human

En declaración extrajudicial de fecha 03 de junio de 2010, rolante a de fs. 1.484 a fs. 1.485 (Tomo V), relató que para el año 1973 tenía la edad de 18 años e ingresó al regimiento de Infantería N° 8 Tucapel de Temuco a cumplir con su servicio militar obligatorio, arguyendo que es cierto que todo lo relativo a las ejecuciones de prisioneros dentro del regimiento Tucapel se hacía de noche, en el sector de la isla Cautín donde está el polígono.

A.14. Omar Burgos Dejean

En declaración extrajudicial prestada con fecha 18 de abril de 2012, rolante de fs. 1.699 a fs. 1.700 (Tomo V), afirma respecto a su calidad de agregado al regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco. El día que llegó, se tuvo que presentar con el capitán Nelson Ubilla Toledo, quien dispuso que él se hiciera cargo de confeccionar un archivo político. Recuerda, que se le otorgó una oficina, la cual estaba llena de papeles, con datos de personas que habían pertenecido a instituciones públicas y de partidos políticos. Recuerda que el capitán Ubilla le ordenó confeccionar ficha de cada una de las personas que indicaban los papeles que allí se encontraban, recordando que tuvo que clasificar la información de acuerdo con la tendencia política que cada una de estas personas registraba en dichos documentos.

A.15. Manuel Reinaldo Canales Valdés

En diligencia de careo con Manuel Vásquez Chahuán, de fecha 03 de agosto de 2010, rolante de fs. 1.548 (Tomo V), reitera que hubo detenidos en el gimnasio del regimiento, teniendo acceso a este lugar solo los oficiales.

A.16. Juan Carlos Concha Belmar

En declaración judicial de fecha 28 de diciembre de 2011, rolante de fs. 3.711 a fs. 3.716 (Tomo XI), el Tribunal le indica que ha señalado que en ocasiones integró la patrulla del teniente Espinoza y le pregunta: En estas ocasiones señor Concha ¿esta patrulla detuvo a personas?, ¿Cómo era la dinámica, trasladaban a las personas al regimiento Tucapel?, ¿Quién las trasladaba?, ¿Dónde eran ingresadas? ¿En la guardia? ¿Qué puede señalar acerca de aquello? El declarante responde que siempre habían detenidos en la noche, hasta por “curados se los llevaban”, por ebriedad. Pero igual había detenidos, los llevaban a la guardia. De la guardia del Tucapel abajo hay un galpón grande y ahí llevaban a los detenidos, ahí los dejaban.

A.17. Manuel Rafael Campos Ceballos

En declaración judicial de fecha 15 de julio de 2010, rolante de fs. 1.515 a fs. 1.517 (Tomo V) en lo pertinente rectifica aquella parte en la que señaló que no vio detenidos al interior del regimiento Tucapel, puesto que en realidad si vio a varios, los que eran mantenidos en dependencias del casino de oficiales o en el gimnasio, también en el racho de los soldados. Recordando una situación en cuanto que subieron el cuerpo del detenido y el subteniente ordenó tirar su cadáver al río, aludiendo que no recuerda el lugar en que lo hicieron.

En declaración judicial de fecha 04 de agosto de 2010, rolante de fs. 1.549 a fs. 1.551 (Tomo V), reitera donde se encontraba encuadrado y que conformaba una patrulla que estaba dirigida por el subteniente Espinoza. Agrega que vio detenidos en el regimiento Tucapel, específicamente en el gimnasio de la unidad. Aquellos detenidos eran hombres y mujeres, quienes por toque de queda habían sido privados de su libertad. Explicita que ellos no tenían acceso al gimnasio del regimiento donde se encontraban los detenidos. Pero los oficiales sí lo hacían, aunque no recuerda quienes eran.

En declaración judicial de fecha 31 de mayo de 2011, rolante de fs. 3.708 a fs. 3.709 (Tomo XI), reitera lo señalado en declaraciones anteriores y afirma que, si vio detenidos en el regimiento Tucapel, específicamente en el gimnasio de la

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

unidad, en el casino y en el rancho. Añade que eso fue muy notorio inmediatamente después del golpe militar.

A.18. Roberto Ismael Concha Muñoz

En declaración extrajudicial de fecha 06 de julio de 2010, rolante de fs. 1.509 a fs. 1.510 (Tomo V), evidencia que la "patrulla chacal", la cual estaba integrada mayoritariamente por soldados de su compañía, los que se destacaban del resto por tener mayores estudios. Este grupo, lo recuerda por estar aislado del resto de los conscriptos, se entendían directamente con el teniente Espinoza, no participando de los servicios de la unidad, ya que generalmente salían de noche. Relata que encontrándose en la entrada principal del regimiento cumpliendo servicio de guardia vio a la patrulla antes señalada salir de noche en uno de los camiones de la unidad. Respecto de personas detenidas al interior del regimiento, señala que en alguna oportunidad vio personas en esta calidad al interior del gimnasio del cuartel. En cuanto a los integrantes de la denominada "patrulla chacal", recuerda principalmente a Juan Carlos Concha Belmar, Héctor Villablanca Huenulao, Sergio Vallejos Garcés, Manuel Campos Ceballos, Eliecer Antitur Ñancufil y también a un conscripto apodado "el petizo Sandoval" oriundo de Vilcún.

A.19. Gerardo Jaime Araneda Muñoz

En declaración extrajudicial de 06 de mayo de 2009, que rola de fs. 1.358 a fs. 1.360 (Tomo IV), indico que para el año 1973, tenía 18 años y estaba efectuando su servicio militar obligatorio en el regimiento de Infantería N° 8 Tucapel, en cuanto a Manuel Espinoza Ponce lo recuerda como un oficial inserto en la segunda compañía de cazadores siendo apodado "El Loco Espinoza", por sus actitudes agresivas, tanto con los prisioneros políticos allí detenidos como con los propios conscriptos del cuartel, llegaba con perros que mataba en plena vía pública para hacerle instrucción a su compañía. No recuerda con un grupo especial de trabajo, pero sí constantemente relacionado con los prisioneros.

En declaración judicial de 17 de junio de 2009 que rola de fs. 1.372 a fs. 1.373 (tomo IV), ratifica su declaración extrajudicial y comunica que recuerda que hubo comentarios entre los conscriptos que indicaban que las personas muertas fueron ejecutadas, por lo que no se trataría de un "asalto al polvorín", prosigue su relato en tal sentido.

A.20. Jorge Gonzalez Curiqueo

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

En declaración extrajudicial de fecha 8 de julio de 2010, rolante de fs. 1.511 a fs. 1.512 (Tomo V), aduce que muchas veces vio personas detenidas al interior del gimnasio del Tucapel, las que estaban con la vista vendada. También recuerda que vio a varios centinelas del cuartel pasear a detenidos cuyas identidades desconoce. Que el teniente Manuel Espinoza Ponce, se encontraba a cargo de la cuarta sección de su compañía, que este hombre era “muy malo” con los conscriptos, gustaba de andar metido con los detenidos que estaban en el gimnasio del regimiento, al igual que todos los oficiales de la unidad.

En declaración judicial de fecha 19 de julio de 2010, rolante a de fs. 1.522 a fs. 1.523 (Tomo X), ratifica su declaración extrajudicial y destaca que vio varios detenidos al interior del regimiento Tucapel, quienes estaban con su vista vendada y eran mantenidos en el gimnasio de la unidad. Recuerda que casi todos los oficiales se paseaban por ese lugar, pero no puede asegurar si tenían que ver con los detenidos.

A.21. Juan Ociel Schneider Martín

En declaración extrajudicial de fecha 17 de agosto de 2010, rolante de fs. 1.580 a fs. 1.581 (Tomo V), dice que dentro las funciones que le correspondían en tal calidad, se encontraba la limpieza y orden de la oficina del comandante de compañía, la que se encontraba ubicada detrás de las compañías andina y segunda de cazadores. Que efectuaba esporádicamente los servicios de patrullaje junto a su sección a cargo del subteniente Espinoza, quien salía junto a su grupo denominado efectivamente la “patrulla chacal”, la que recuerda era integrada por Sergio Vallejos Garcés, quien eran el hombre de confianza y ordenanza de Espinoza Ponce, el cabo de reserva Héctor Villablanca Huenulao, quien era el hombre de confianza del teniente Manuel Vásquez Chahuán, Juan Carlos Concha Belmar, Manuel Campos Ceballos, Manuel Canales Valdés y Gabriel Dittus Marín, también muy cercano al teniente Vásquez Chahuán.

En declaración judicial de fecha 19 de agosto de 2010, rolante de fs. 1.582 fs. 1.585 (Tomo V), ratifica su declaración extrajudicial y agrega que en unas ocho oportunidades le tocó integrar la denominada “patrulla chacal”. Relatando que también ocurría a veces que el subteniente Espinoza ordenaba bajar a los detenidos del vehículo militar, de a uno y en un sitio eriazo realizaba simulacro de fusilamiento, para lo cual le ordenaba ponerse de pie, con la vista vendada y las

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

manos amarradas, para luego efectuar un disparo al aire y un culatazo en el estómago.

A.22. Luis Raimundo Quezada Chandía

En declaración extrajudicial de fecha 25 de septiembre de 2014, rolante a fs. 1.931 a fs. 1.934 (Tomo VI), informa que los detenidos que comenzaron a llegar al regimiento a partir del día 11 de septiembre eran alojados en un “gimnasio chico” que estaba al costado de los comedores de los conscriptos y añade que nunca le correspondió efectuar la custodia de estos, ya que esas funciones casi siempre las efectuaba el contingente de las compañías de plana mayor y servicios y la de cazadores. Continúa su declaración señalando que dentro del gimnasio había una dependencia donde se torturaba. Que se comentaba que había un catre donde se le aplicaba corriente eléctrica a los detenidos, esto lo supo por el comentario de la gente que trabajaba en el casino y también porque a veces se escuchaban gritos provenientes de esa dependencia. Que es efectivo que, en la enfermería, cuadra de plana mayor y servicios y un baño ubicado entre las cuadras de las compañías de cazadores y andina, se efectuaban interrogatorios.

A.23. Nelson Manuel Uldaricio Ubilla Toledo

En declaración extrajudicial de fecha 23 de julio de 2003, rolante de fs. 1.284 a fs. 1.285 (Tomo IV), en lo pertinente acerca de la Fiscalía Militar de Temuco y su funcionamiento en fechas posteriores al 11 de septiembre de 1973, recuerda que el fiscal militar, en primera instancia, fue el mayor Luis Jofre Soto, quien se desempeñó por espacio de dos o tres meses, no recuerda exactamente, pero sí que luego de éste pasó a desempeñarse el abogado Alfonso Podlech Michaud no precisando fecha. Del funcionamiento de la fiscalía, recuerda que los detenidos eran llevados al regimiento por funcionarios de carabinero o investigaciones, los cuales se les llevaba a prestar declaración o de lo contrario se dejaban en calidad de tránsito de la guardia del recinto, hasta que declaraban; una vez hecho eran dejados en libertad o enviados a la cárcel.

En diligencia de careo con Herman Carrasco Paul, de fecha 12 de diciembre de 2003, rolante de fs. 1.303 a fs. 1.304 (Tomo IV), ratifica su declaración de fs. 171 (la que consta en estos autos a fs. 1.292 a fs. 1.293 Tomo IV). Declara que no prestó funciones de ninguna naturaleza en la intendencia de Temuco, como tampoco es efectivo que haya interrogado o torturado a detenidos al interior del regimiento Tucapel. Enfatiza que los detenidos no estuvieron bajo su

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

responsabilidad, sino bajo la responsabilidad de la fiscalía militar y estando encuadrado y subordinado en el regimiento no podría tener disponibilidad de la vida de las personas en sus manos.

A.24. Carlos Luco Astroza

En declaración extrajudicial de fecha 11 de octubre de 2006, rolante de fs. 1.587 a fs. 1.588 (Tomo V), señala que fue enviado en calidad de agregado a cumplir funciones a la Fiscalía Militar del Regimiento Tucapel a partir del 14 de septiembre de 1973. Espeta que en más de una oportunidad pudo ver a don Alfonso Podlech al interior de la Fiscalía Militar del Tucapel sosteniendo reuniones con el mando y en oportunidades vistiendo de uniforme, sin dejar de mencionar que para todos los efectos era el señor Luis Jofré, el fiscal militar. Que también se destacaba la figura del capitán Nelson Ubilla Toledo, a quien recuerda como el hombre que tomaba las decisiones en cuanto a los detenidos junto a sus ayudantes los sargentos Schonherr Frías y Orlando Moreno Vásquez.

En declaración judicial de fecha 08 de abril de 2013, rolante de fs. 3.640 a fs. 3.642 (Tomo X), reitera que en el regimiento dependían directamente del capitán Nelson Ubilla Toledo, quien además tenía a su cargo a los detenidos. Indica que el mayor Jofré no se inmiscuía en nada, por lo que le parece que el abogado Alfonso Podlech estaba a cargo de hecho en la Fiscalía Militar, quien andaba de uniforme en el regimiento.

En declaración judicial de fecha 15 de noviembre de 2013, rolante de fs. 3.644 a fs. 3.646 (Tomo X), reproduce que en el regimiento dependían directamente del capitán Nelson Ubilla Toledo, quien además tenía a su cargo a los detenidos. Indica que el mayor Jofré no interfería en nada, por lo que le parece que el abogado Alfonso Podlech estaba a cargo de hecho en la Fiscalía Militar, quien andaba de uniforme en el regimiento y se entendía con el capitán Ubilla. Deja claro que nunca presencié una conversación entre ellos, pero sí era evidente que existía un nexo entre la Fiscalía Militar y el trabajo de inteligencia que ejercía Ubilla. Que tanto Podlech como Ubilla estaban constantemente en la Fiscalía Militar. Respecto a los detenidos en el regimiento Tucapel indica que ignora quiénes los interrogaban, pero supone que eran los demás detectives agregados, más el capitán Ubilla y los suboficiales Moreno Vásquez y Schonherr, que siempre andaban con este oficial.

A.25. Sergio Luis Campos Torres

En declaración extrajudicial de fecha 6 de mayo de 2009, rolante de fs.1.353 a fs.1.354 (Tomo IV), narró que para el año 1973 en enero ingresó a efectuar su servicio militar obligatorio en el regimiento de Infantería N° 8 Tucapel, se encontraba inserto en la compañía de logística plana mayor, cuyo comandante era el capitán Nelson Ubilla Toledo. En cuanto a personas detenidas, no recuerda haber visto personas en esa calidad en el regimiento, pero apreciaba un alto flujo de personas que entraba y salía del recinto constantemente acompañada de oficiales y soldados.

A.26. Manuel Vásquez Chahuán

En declaración judicial de fecha 25 de junio de 2003, rolante de fs. 346 a fs. 346 vuelta (Tomo I), dice que al 11 de septiembre de 1973 se desempeñaba como oficial subalterno en el regimiento Tucapel de Temuco, con el grado de teniente. Al mando del regimiento estaba el coronel Pablo Iturriaga Marchesse, le seguía el teniente coronel Jofre, después el mayor Leal Manzer, A continuación venían los capitanes, que eran comandantes de compañía, entré los que recuerda a Mario Alvarado Verdugo, Fernández Carranza, Nelson Ubilla Toledo, González, Vargas (fallecido); luego venían los tenientes recordando a los hermanos Jaime y Raimundo García Covarrubias y los subtenientes Grant, Oviedo, Espinoza, y Armando Maldonado Valdivia, oficial de reserva.

En declaración judicial de fecha 04 de septiembre de 2009, rolante de fs. 1.403 a fs. 1.404 (Tomo IV), atestigua que respecto de la presencia de detenidos al interior del regimiento Tucapel, que sólo vio personas privadas de libertad que estaban en tránsito hacia la fiscalía o hacia la cárcel.

En declaración extrajudicial de fecha 20 de agosto de 2009, rolante de fs. 1.410 a fs. 1.412 (Tomo IV), alude que respecto de las personas que ingresaron detenidas al regimiento, específicamente Fiscalía Militar, funciono en un principio en el pabellón de comandancia de la unidad, donde tenía la oficina el comandante Jofre y luego al costado de la guardia de unidad, indica que efectivamente luego del 11 de septiembre ingresaron personas en esa calidad. Anexa que el abogado Alfonso Podlech Michaud era el asesor del fiscal militar y efectivamente en oportunidades vestía uniforme, siendo al parecer su grado oficial de justicia, desde antes del 11 de septiembre de 1973.

En declaración extrajudicial de fecha 06 de agosto de 2015, rolante de fs. 2.307 a fs. 2.308 (Tomo VII), aquilata su desempeño funcionario, y replica que la

fiscalía militar, probablemente tenía relación con las determinaciones que se hacían respecto a los detenidos del regimiento, en el sentido de disponer en que condición quedarían estos. Que el fiscal militar de la unidad militar era el mayor Luis Jofré Soto, siendo apoyado en sus funciones por un abogado de apellido Podlech, a quien se le asimiló al grado de oficial de ejército.

A.27. Jaime Guillermo García Covarrubias

En diligencia de careo Héctor Omar Barra Reyes de fecha 21 de septiembre de 2010, rolante de fs. 1.606 (Tomo V), ratifica declaraciones y refiere que existió una dependencia especialmente habilitada por el capitán Ubilla junto a la comandancia, donde eran interrogados los detenidos por el personal de inteligencia, pero jamás entro a ese lugar mientras estuvo ocupado por ese grupo, ni participo de interrogatorios y menos aún de torturas de detenidos. Se mantiene en sus dichos.

En declaración judicial de fecha 24 de septiembre de 2013, rolante de fs.1.848 a fs.1.852 (Tomo VI) interrogado sustentó que el capitán Ubilla habilitó una dependencia ubicada frente a la comandancia, cercana al patio de mantenimiento, donde además intervenía personal de investigaciones, que fue expresamente llamado para apoyar a la inteligencia en los interrogatorios. Otro grupo de detectives, según lo recuerda, trabajó con la Fiscalía Militar. Que puede ser que el capitán Ubilla haya interrogado personas en ese lugar o quizás se habilitaron dependencias en el gimnasio grande.

En declaración judicial de fecha 16 de abril de 2015, rolante de fs.3.883 a fs.3.886 (Tomo XI), ratifica declaraciones y en lo pertinente el Tribunal le pregunta si el regimiento Tucapel fue centro de detención. El deponente respondió: que inmediatamente después del 11 de septiembre hubo mucha gente que llegó al regimiento llamada por bando, las que fueron interrogadas en el patio de la unidad por personal de inteligencia y algunos suboficiales que fueron comisionados para tales efectos. También vio carros de gendarmería que estaban en el regimiento en los que algunos civiles eran llevados a la cárcel tras los interrogatorios. Que también hubo personas detenidas por toque de queda, los que eran liberados al día siguiente. Asevera que el capitán Nelson Ubilla Toledo era el comandante de la compañía, de plana mayor y servicios, además, era el oficial de inteligencia del regimiento. Éste tenía personal especializado bajo su mando más un grupo de funcionarios de la policía de investigaciones, con quienes interrogaba personas.

Algunos de estos civiles, puede ser que hayan quedado detenidos al interior del regimiento, pero por breve tiempo para ser interrogados por Ubilla. El capitán Ubilla tenía una oficina ubicada cerca de la Banda Instrumental donde interrogaba a las personas. Personalmente vio en alguna oportunidad que este oficial interrogaba personas junto a su grupo.

En declaración judicial prestada por video llamada con fecha 12 de abril de 2022, rolante de fs.3.887 a fs.3.896 (Tomo XI), el Tribunal le pregunta ¿Cuál era la oficialidad al mando de la compañía de plana mayor y servicios del regimiento Tucapel de Temuco, después del 11 de septiembre de 1973? ¿Cuál era la cadena de mando? Musita el declarante que estaba Ubilla, su hermano (Raimundo García Covarrubias) como subteniente y Romilio Lavín también como subteniente. La compañía de plana mayor era una compañía que para términos operativos no era como la compañía andina o la compañía de cazadores, o la compañía de fusileros, que eran todos juntos. Para el caso de una guerra, probablemente el oficial de intendencia estaba en la compañía de plana mayor, pero en la paz no lo está. En la paz cumple función de administración de fondos de intendencia.

A.28. José Albino Krause Álvarez

En declaración extrajudicial de fecha 10 de febrero de 2009, rolante de fs.1.327 a fs.1.328 (Tomo IV), sostiene que para el año 1973 ostentaba el grado de cabo primero y cumplía funciones en el regimiento de Infantería N° 8 Tucapel de Temuco. Que efectivamente el regimiento Tucapel luego del 11 de septiembre de 1973, fue utilizado como lugar base para la permanencia de detenidos políticos; que eran requeridos por las autoridades militares y de la Fiscalía Militar que funcionaba al interior del regimiento. Recuerda al abogado Alfonso Podlech Michaud, quien vistiendo uniforme militar asimilado al grado de mayor era el fiscal militar del regimiento.

En declaración extrajudicial de fecha 11 de enero de 2017, rolante de fs. 2.575 a fs. 2.577 (Tomo VIII), señaló que en la compañía de plana mayor y servicios existió una sala donde torturaban a los detenidos, donde siempre se veía gente de civil que pertenecía a la policía de investigaciones de Temuco, recordando que uno de ellos era de apellido Quiroz.

A.29. José Arturo Fuentes Carrasco

En declaración extrajudicial prestada con fecha 28 de septiembre de 2010, rolante de fs. 1.629 a fs. 1.630 (Tomo V), exclama que para el año 1973, se

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

encontraba inserto en la segunda compañía de cazadores, agrega que, recuerda haber visto a personas detenidas, las cuales eran trasladadas desde un punto a otro del regimiento con escolta de soldados conscriptos, se imagina que, para realizarles algún tipo de interrogatorio, labor que no le correspondió realizar. Manifiesta que efectivamente había una patrulla liderada por el teniente Manuel Espinoza Ponce, quien era el comandante de la cuarta sección "armas de apoyo" de la segunda compañía de cazadores, integrada por los conscriptos Sergio Vallejos Garcés, Héctor Villablanca Huenulao, Guillermo Pincheira Farías y Juan Carlos Concha Belmar. Sobre el capitán Manuel Vásquez Chahuán agrega que lo recuerda como integrante del grupo de inteligencia del regimiento Tucapel, para lo cual tenía gente en la compañía de plana mayor y servicios, la que se encontraba a cargo del capitán Nelson Ubilla Toledo. Que en las oportunidades que el capitán Manuel Vásquez, se encontraba ausente de su compañía, era el teniente Jaime García Covarrubias quien lo reemplazaba en sus funciones. Comenta otras situaciones y se le pregunta por otros hechos.

A.30. Orlando Moreno Vásquez

En declaración extrajudicial de fecha 18 de julio de 2003, rolante de fs. 1.276 a fs.1.278 (Tomo IV), musito en cuanto al funcionamiento de la fiscalía militar y sus integrantes que estas personas fueron llevadas por un abogado, quien fue el que se hizo cargo de la fiscalía militar de Temuco a los pocos días después del 11 de septiembre de 1973, de nombre Alfonso Podlech Michaud; quien para todos los efectos era el Fiscal Militar letrado, ignorando cuál era su función específica por cuanto nunca trabajó en forma directa con él. Alude que Alfonso Podlech Michaud cumplía sus funciones de Fiscal en el regimiento Tucapel, recordando que era cotidiano verlo en el interior de esa unidad militar, pero no pudiendo agregar que este se encontraba durante todo el día. Con relación al servicio de inteligencia militar indico que cumplió funciones, pero de este servicio estaba a cargo el entonces capitán Nelson Ubilla Toledo, que a su vez era comandante de la compañía de plana mayor. Otro de los integrantes de este grupo era el sargento Schonherr. Reconoció que cuando la fiscalía militar necesitaba algún preso político, era enviado con una orden de esta para retirarlo de la cárcel y una vez que era interrogado, era trasladado nuevamente al recinto carcelario.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

En declaración extrajudicial de fecha 11 de febrero de 2009, rolante de fs. 1.329 a fs.1.331 (tomo IV), insiste que, para el septiembre de 1973, el mayor Luís Jofré siguió cumpliendo funciones de fiscal militar, pero era asistido por el abogado Alfonso Podlech Michaud. Que efectivamente y cree que por su especialidad la que es "Especialista en seguridad militar", le correspondía ir hasta la cárcel pública de Temuco, en vehículo militar (jeep) escoltado por patrulla de la unidad a dejar detenidos de la fiscalía del regimiento o llevar detenidos que eran requeridos; todos por causas políticas.

En declaración judicial de fecha 25 de junio de 2012, rolante de fs. 3.840 a fs. 3.841 (Tomo XI), a la pregunta, explico que el fiscal era Luis Jofré Soto, pero era asesorado por Alfonso Podlech Michaud. Este abogado iba constantemente a la Fiscalía a conversar con el mayor Jofré encerrándose ambos en la oficina del mayor. Este procedimiento era rutinario y permanente desde el mismo 11 de septiembre de 1973 y hasta que el abogado Podlech asumió como Fiscal. Este vestía de uniforme, porque antes había sido militar. Interrogado musita que los detenidos políticos eran mantenidos en un gimnasio pequeño que estaba a un costado del rancho de tropa. Estos detenidos eran interrogados en la Fiscalía o viceversa.

En declaración judicial de fecha 26 de junio de 2013, rolante de fs. 3.842 (Tomo XI), expone que no le consta que el señor Podlech haya confeccionado los bandos. Tampoco es efectivo que él fuera fiscal militar en 1973, pero sí le consta que este señor estaba permanentemente en la Fiscalía y que, junto al mayor Jofré, que sí era el fiscal militar, tomaban decisiones respecto de los detenidos. Que los oficiales Jaime García Covarrubias, Raimundo García Covarrubias, Manuel Vásquez Chahuán, Nelson Ubilla Toledo y en general todo el resto debieron necesariamente saber acerca de la existencia de detenidos en el regimiento y el destino final de estos.

A.31. Manuel Ángel Fernández Carranza

En declaración judicial de fecha 2 de julio de 2013, rolante de fs.1.802 a fs.1.804 (Tomo VI), en lo pertinente desarrollo que todos los oficiales iban al gimnasio a ver lo que ocurría.

En declaración extrajudicial de fecha 29 de agosto de 2017, rolante de fs. 2.764 a fs. 2.765 (Tomo VIII), replica desempeño en el regimiento de Tucapel de Temuco, y proclama que toda labor operativa o represiva que se comenzó a

realizar en Temuco, la cual iba orientada a las detenciones e interrogatorios de personas opositoras al régimen militar. Se canalizó directamente desde la comandancia del regimiento hacia la compañía de plana mayor y servicios, la cual estaba a cargo del capitán Nelson Ubilla Toledo, quien asumió labores de inteligencia. Dentro de los colaboradores de Ubilla, estaba el sargento Arias, recordando que en la comandancia había otro cabo o sargento que también veía esos temas cuyo apellido era Schonherr.

A.32. Ricardo Del Tránsito Esparza Rocha

En declaración judicial de fecha 14 de octubre de 2010, rolante de fs. 1.617 a fs. 1.618 (Tomo V), soslaya que los detenidos eran mantenidos en el gimnasio del regimiento desde donde eran sacados por personal de planta de turno, siendo trasladados hasta otras dependencias para ser interrogados. Después no los volvían a ver. Agrega que al le correspondió custodiar la entrada del gimnasio en alguna oportunidad.

A.33. Juan Bautista Labraña Luvecce

En declaración extrajudicial de fecha 23 de marzo de 2010, rolante de fs. 1.472 a fs. 1.473 (Tomo V), arguyo que para el año 1973 y hasta fines de ese año permaneció en el regimiento de Infantería N°8 Tucapel de Temuco. Sobre la sección segunda, que se encontraba bajo el mando de Nelson Ubilla Toledo, puede decir que recuerda al sargento Orlando Moreno Vásquez, Raúl Schonherr Frías, Luís Barrenechea Calderón cabo primero, Luís Campos Espinoza y Roberto Astete Cea. Además, dentro de este grupo se encontraban los oficiales Jaime y Raimundo García Covarrubias.

En declaración judicial de fecha 12 de mayo de 2010, rolante de fs. 1.478 a fs. 1.479 (Tomo V), ratifica declaración extrajudicial y anexa que solo concurrían allí los miembros de la sección segunda, quienes vestían de civil. Además, concurrían a ver a los detenidos los oficiales Vásquez Chahuán, Espinoza Ponce y los hermanos García Covarrubias, quienes trabajaban en la comandancia del regimiento.

En declaración extrajudicial de fecha 14 de abril de 2011, rolante de fs. 1.642 a fs. 1.643 (Tomo V), reitera que la sección segunda que se encontraba bajo el mando del capitán Nelson Ubilla Toledo (fallecido), que es efectivo que los detenidos que llegaban al regimiento eran llevados hasta el gimnasio. Lugar donde eran custodiados por los conscriptos de la compañía que estuviera cumpliendo

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

servicios de guardia. Por otra parte, también le es preciso señalar que los únicos que podían ingresar a dicha dependencia eran los oficiales y funcionarios del cuadro permanente que cumplían funciones en la sección segunda, recordando entre estos al teniente Manuel Vásquez Chahuán, Manuel Hugo Espinoza Ponce, los hermanos Jaime y Raimundo Garcia Covarrubias, quienes también tenían el grado de teniente.

A.34. Juan Humberto Carrillo Rebolledo

En declaración extrajudicial de fecha 29 de abril de 2009, rolante de fs.1.346 a fs.1.347 (Tomo IV), en cuanto a la permanencia de personas detenidas al interior del regimiento Tucapel, proclamo que efectivamente vio prisioneros políticos al interior de este, específicamente, en una sala contigua a la guardia. Además, recuerda haber visto en esa calidad a Juan Antonio Chávez Rivas y a Herman Carrasco Paul.

En diligencia de careo con Herman Carrasco Paul, de fecha 19 de mayo de 2009 rolante de fs. 1.351 a fs.1.352 (tomo IV), ratifica su declaración y musita que esa fue la única oportunidad que lo vio, quien se veía muy deprimido, pero no tenía señales de haber sido torturado.

En declaración judicial de fecha 26 de julio de 2010, rolante de fs.1.533 a fs.1.534 (Tomo V), en lo concerniente respecto a su destinación al llegar al regimiento Tucapel, inquirió que en abril de 1973 paso a la compañía de plana mayor cuyo comandante era el capitán Nelson Ubilla Toledo; específicamente encuadrado en la primera sección bajo las órdenes de un sargento cuyo nombre no recuerda. A mediados de 1973 se hizo cargo de su sección el teniente Raimundo García Covarrubias.

A.35. Daniel San Juan Clavería

En declaración extrajudicial de fecha 18 de abril de 2012, rolante de fs.1.690 a fs.1.691 (tomo V), afinsa su desempeño funcionario y que para el año 1973, ostentaba el grado de detective cuarto y después del 11 de septiembre de ese año a solicitud del mando del regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco, fue asignado por sus superiores a cumplir funciones en dicho destacamento militar. Atestiguo que el lugar que se les asignó para trabajar correspondía a una oficina que a su parecer se encontraba en la comandancia del regimiento, donde también había una oficina de partes, donde trabajaban los

sargentos Moreno y Schonherr, también en esas dependencias operaba la Fiscalía Militar.

A.36. Carlos Salvador Zurita Panguilef

En declaración extrajudicial de fecha 18 de marzo de 2009, rolante de fs.1.339 a fs.1.340 (Tomo IV), relato que partir del 11 de septiembre de 1973, el trabajo en la oficina de informaciones se intensificó, recuerda que diariamente concurrían hasta el cuartel dos funcionarios del regimiento antes referido, a quienes identifico como Orlando Moreno y Raúl Schonherr, los que trabajaban con el capitán Nelson Ubilla Toledo; a quien vio en un par de oportunidades en el cuartel y claramente se entrevistaba con su jefe de prefectura, el señor Carlos Aranda.

En declaración judicial de fecha 3 de abril de 2009, rolante de fs.1.344 a fs.1.345 (Tomo IV), ratifica declaración extrajudicial y respecto de Orlando Moreno Vásquez y Raúl Schonherr Frías, evidencio que, a poco tiempo de ocurrido el golpe militar, la autoridad habló con su jefe, el prefecto Aranda, solicitando que le entregaran todo tipo de información al ejército. Acto seguido, comenzaron a llegar al cuartel alternadamente Moreno y Schonherr; quienes llevaban un listado con nombres y ellos le entregaban toda la información que poseían respecto de cada uno de los nombres. En varias oportunidades le correspondió atenderlos.

A.37. Mario Hernán Arias Díaz

En diligencia de careo con Oscar Inostroza Segura, de fecha 26 de marzo de 2010, rolante de fs. 1.468 (Tomo V), aporta que en alguna oportunidad le correspondió entregar detenidos desde la guardia a conscriptos para que llevaran detenidos a la dependencia a que hace referencia el señor Inostroza.

En diligencia de careo con Libardo Schwartenski Rubio de fecha 26 de marzo de 2010, rolante de fs. 1469 (Tomo V), en lo pertinente, aunque no recuerda a la persona con la que se carea, pero si el nombre de Libardo Schwartenski como un conscripto de confianza del grupo de suboficiales y oficiales a cargo de los detenidos.

En declaración judicial de fecha 6 de julio de 2013, rolante de fs. 1.817 a fs. 1.819 (Tomo VI), consultado dice que vio detenidos en una dependencia ubicada en la guardia del regimiento, los que no se registraban en ese lugar, es decir, no se dejaba constancia de su detención e ingreso a la unidad en el libro de novedades. Sin embargo, le parece que había otro grupo de detenidos que eran

llevados hacia la compañía de plana mayor, que iban con su vista vendada. Tiene entendido que todos los oficiales concurrían al lugar donde trabajaba Ubilla y su grupo, porque cuando llegaban con detenidos debían informarle al capitán respecto de la razón por la cual estas personas estaban privadas de libertad. También debían darle cuenta al fiscal respecto de lo mismo. Anexa que el fiscal en 1973 era el mayor Jofré, quien se hizo asesorar por personal de la Corte de Apelaciones de Temuco y por un abogado de nombre Alfonso Podlech. A este abogado lo veía casi todos los días cuando llegaba al regimiento. Siempre lo vio de civil, salvo en los consejos de guerra, en que vistió uniforme. El Tribunal le lee las declaraciones extrajudicial y judicial prestadas por José Raúl Inzunza Reyes, de fs. 3.307 y fs. 3.310. El deponente señala: que supo de interrogatorios efectuados en la compañía de plana mayor y servicio, pero nunca participó de ellos. Que se comentaba eso sí, que los hermanos García Covarrubias participaban de estas actividades, sobre todo el menor de ellos que “medio loco”, sometiendo a los conscriptos a actividades de instrucción no programadas durante las noches.

En declaración extrajudicial de fecha 9 de mayo de 2019, rolante de fs. 3.187 a fs. 3.188 (Tomo IX), señala que el capitán Nelson Ubilla se hizo cargo de la inteligencia de la unidad militar, departamento segundo, además de encargarse de la compañía de plana mayor y servicios. Sobre la existencia de una sala ubicada entre la compañía de plana mayor y servicios y la compañía de morteros, donde después del día 11 de septiembre fue habilitada para efectuar interrogatorios a detenidos bajo aplicación de tortura, expresa que era manejada por el departamento segundo.

En declaración judicial de fecha 12 de julio de 2019, rolante de fs. 236 a fs. 242 (cuaderno secreto), dice que, los que llegaban detenidos, pasaban directo al departamento segundo y de ahí para la cárcel. Preguntado por el circuito respecto de los detenidos y la fiscalía militar, si pasaban donde Nelson Ubilla, responde que: claro, que llegaban al departamento segundo, ahí se imagina que los interrogaban, les conversarían cual era (...) eso lo desconoce y después llegaban a la guardia y después se irían. Los que no se iban los pasaban a la cárcel. El Tribunal le da a conocer que tiene bastantes antecedentes que indicarían que al interior del regimiento Tucapel de Temuco había varios lugares de detención, incluso había un lugar de tortura, donde había un catre, el gimnasio, se le

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

pregunta que conocimiento tiene de eso. A lo que responde que: esa era una dependencia que había en la compañía de plana mayor y servicios, pero eso lo manejaba exclusivamente el departamento segundo. Preguntado en torno al departamento segundo, qué relación tiene Pedro Tichauer, el suboficial Romilio Lavín, el subteniente Raimundo García con esa unidad. Responde que lo desconoce. Que Tichauer estaba en administración, finanzas, este pertenecía a la compañía, pero a su llegada al cuartel, no recuerda si era soltero o casado, pero si era soltero llegaba a una pieza. Lavín era oficial de material de guerra, tenía su oficina. Se le pregunta si Raimundo García era la compañía de plana mayor. Refiere que le parece que de la segunda compañía cazadores.

A.38. Enrique Abzalón Castro Obreque

En declaración extrajudicial de fecha 6 de mayo de 2009, rolante de fs.1.355 a fs.1.357 (Tomo IV), sostuvo que para el año 1973 se encontraba inserto en la compañía de plana mayor y servicios del regimiento Tucapel de Temuco. Que particularmente estaba dentro de la sección de ingenieros y telecomunicaciones, siendo el oficial a cargo de su sección, el teniente Romilio Lavín Muñoz. Dice que recuerda haber visto a personas en calidad de detenidos al interior del regimiento. Da fe que en una noche en la que se encontraba de guardia en la puerta de ingreso principal al recinto, este oficial salió acompañado por al menos tres soldados, en un camión tres cuartos de la unidad, llevando consigo a un prisionero amarrado, vendado y amordazado, pero vivo al interior de ese vehículo, volviendo al rato después sin él.

En declaración extrajudicial de fecha 25 de enero de 2017, rolante de fs. 2.582 a fs. 2.583 (tomo VIII), replica su ingreso y encuadramiento dentro del regimiento Tucapel y en lo pertinente en la compañía de plana mayor y servicios, la que estaba al mando del capitán Nelson Ubilla Toledo, quien dejó ese cargo el día 11 de septiembre asumiendo el mando el teniente Raimundo García Covarrubias, quien subrogó al mencionado capitán. De los clases de su compañía, recuerda al sargento Luis Peña Andaur, el sargento Mario Arias Díaz, cabo segundo Pablo Silva, junto con ellos también había otro oficial de apellido Lavín, quien era teniente.

A.39. José Sebastián Venegas Umanzor

En declaración judicial de fecha 7 de diciembre de 2009, rolante de fs. 1.448 a fs. 1.449 (Tomo V), proclama que sabe por comentarios que los detenidos

eran torturados al interior de la sala de conferencias, que era una oficina ubicada entre la cuadra de plana mayor y la de morteros.

A.40. Juan Guillermo Bórquez Escobar

En declaración judicial de fecha 25 de junio de 2019, rolante de fs. 3.198 a fs. 3.201 (Tomo IX), que como ha señalado en otras ocasiones, efectivamente en el regimiento Tucapel de Temuco a contar del 11 de septiembre de 1973 existieron detenidos por motivos políticos. Lo anterior lo dice, porque en varias ocasiones junto a muchos soldados y oficiales de la compañía andina en conjunto con otros oficiales y conscriptos de otras compañías fueron a practicar allanamientos a distintos domicilios de personas que eran tildadas de comunistas. Que es efectivo que al interior de la compañía de plana mayor y servicios del regimiento Tucapel de Temuco existía una sala de torturas donde se interrogaba a los detenidos mediante la aplicación de corriente. Lo anterior lo dice porque en muchas ocasiones pasó por afuera de aquella, pudiendo escuchar los gritos de dolor de estas. A esta sala ingresaban oficiales y personal de investigaciones.

A.41. Héctor Omar Barra Reyes

En declaración extrajudicial de fecha 09 de enero de 2009, que rola de fs. 1.387 a fs. 1.389 (Tomo IV), manifiesta que para el año 1973, tenía 19 años y se encontraba realizando el servicio militar obligatorio en el regimiento de Infantería N°8 Tucapel de Temuco. Se encontraba inserto dentro de la compañía de plana mayor y servicios, la que se encontraba al mando del capitán Nelson Ubilla Toledo. Con relación a los detenidos y su permanencia al interior de la unidad, dice recordar que éstos eran llevados hasta una sala que se encontraba ubicada entre la compañía de plana mayor y la de morteros, desde ese lugar se escuchaban gritos y quejidos de dolor, claramente esta dependencia era usada para la tortura de detenidos.

En declaración judicial de fecha 20 de agosto de 2009, que rola de fs. 1.394 a fs. 1.395 (Tomo IV), ratifica su declaración extrajudicial y dice que le consta que el capitán Nelson Ubilla Toledo, los hermanos Covarrubias y algunas personas de civil interrogaban detenidos, porque en más de una oportunidad los vio entrar a una pieza que estaba en un pabellón entre la compañía de morteros y de plana mayor. Que en ese lugar torturaban a los detenidos, pues se escuchaban múltiples alaridos de dolor. Precisa que había dos soldados que los oficiales antes indicados utilizaban para trasladar a los detenidos, de nombres Luis Valeria y

Libardo Schwartenski. Estas dos personas se entendían directamente con el capitán Ubilla.

A.42. Ernesto García Isla

En declaración extrajudicial de fecha 7 de mayo de 2009, rolante de fs.1.361 a fs.1.363 (Tomo IV), manifestó que perteneció a la compañía plana mayor y servicios que en ese entonces estaba a cargo del capitán Nelson Ubilla Toledo. Consultado en cuanto a la permanencia de detenidos al interior del regimiento, manifestó que vio detenidos en dicho recinto militar, dentro de los que pudo ver estaba su exprofesor en el liceo de Gorbea, cuyo nombre es Omar Venturelli Leonelli. También dentro de las personas que en fotografía se le exhibieron, dice que recuerda haber visto a un hombre, delgado, alto, de barba; a quien tuvo que vendar y llevar ante la presencia de oficiales de la unidad. Agrega que los detenidos estaban a cargo de un grupo especializado denominado servicio de inteligencia regional, compuesto por los oficiales Nelson Ubilla Toledo, Manuel Espinoza Ponce, Jaime García Covarrubias, Raimundo García Covarrubias y los funcionarios de planta Orlando Moreno Vásquez, el suboficial de apellido Atala y el cabo primero Bahamondes, quienes interrogaban a los detenidos. Por lo general, era en una sala que estaba en el pabellón que albergaba a las compañías de plana mayor y servicios, y compañía morteros, a un costado de los baños de la compañía.

En declaración judicial de fecha 23 de junio de 2009, rolante de fs.1.381 a fs.1.382 (Tomo IV), ratifica declaración extrajudicial y divulgo que le parece que los interrogatorios se efectuaban en el pabellón de plana mayor. Esos interrogatorios eran efectuados por el capitán Ubilla Toledo quien era ayudado por Orlando Moreno Vásquez, Raúl Schonherr y un suboficial de apellido Atala.

A.43. Hernán Raúl Quiroz Barra

En declaración extrajudicial de fecha 18 de abril de 2012, rolante de fs. 1.692 a fs. 1.694 (Tomo V) dice que, una vez llegado el 11 de septiembre de 1973, y debido a los hechos que ocurrieron ese día fue destinado por el mando de su unidad a cumplir funciones al interior del Regimiento de Infantería N°8 Tucapel de Temuco. Que una vez que llegaron al regimiento Tucapel, se les puso bajo las órdenes de la Fiscalía Militar la cual estaba a cargo del mayor Luis Jofre Soto, siendo su ayudante el capitán Nelson Ubilla Toledo. Se le asignaron labores de toma de declaraciones a detenidos, efectuar citaciones, detenciones y

allanamientos ordenados por la Fiscalía Militar. Que la dependencia que se le asignó correspondía a una oficina ubicada en la comandancia del regimiento. Señala que el fiscal militar ordenó que los detenidos que no colaboraran con ellos fueran entregados directamente al teniente de ejército Manuel Espinoza Ponce, quien se haría cargo de estas personas. En cuanto a los sargentos Schonherr y Moreno, los recuerda trabajando como dactilógrafos en una oficina que estaba en la misma dependencia donde ellos trabajaban, recordando haberlos visto en más de alguna oportunidad tomándoles declaraciones a detenidos. Y agrega que siempre se enteraban de fallecimiento de detenidos al interior del regimiento durante las mañanas y de acuerdo con la información que se les entregaba a las personas, fallecían, producto de disparos efectuados por personal militar por intentar fugarse del regimiento en horas de la noche. Reiterando que mientras estuvieron agregados al regimiento siempre estuvieron bajo las órdenes de la Fiscalía Militar, recordando que ésta, estaba asesorada por el abogado Alfonso Podlech Michaud.

En declaración judicial de fecha 04 de junio de 2003, rolante de fs. 1.770 a fs. 1.771 (Tomo V), replica que al presentarse en la ayudantía del regimiento Tucapel fueron derivados al señor fiscal militar de ese entonces Luis Jofre Soto, quien les indico que debían cumplir las mismas funciones que cumplían en investigaciones, pero al mando de este. Las que consistían en detenciones, citaciones, allanamientos, búsqueda de armas, bombas. Todas las órdenes que cumplieron fueron mediante decreto de la fiscalía, tal como se hacía con los tribunales ordinarios de justicia. Manifiesta que a ellos se les asignó una oficina en el interior del regimiento Tucapel frente a la fiscalía misma. En ella tomaban declaraciones a los detenidos. Respecto a los detenidos “difíciles” eran entregados al teniente de ejército de apellido Espinoza, quien era comando, boina negra, alto de ojos claros, le decían “el gato Espinoza”. Que este oficial era el encargado del interrogatorio de esas personas difíciles, precisa que se trataban de detenidos que “se iban de negativa y no querían reconocer, habiéndoles encontrado explosivos o armamentos en su poder”. En cuanto a Alfonso Podlech Michaud, sabe que este asesoraba al fiscal militar Luis Jofre Soto, en la parte legal. Este era abogado y concurría en esa época al regimiento donde lo vio personalmente. Que a petición de Podlech, se llevó a la fiscalía gente profesional, esto es, funcionarios actuarios de los tribunales de justicia. Que también tiene conocimiento que este pidió

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

asesoría a un Ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, para llevar una buena forma el funcionamiento de la Fiscalía Militar.

En declaración extrajudicial de fecha 08 de noviembre de 2002, rolante de fs. 1.772 (Tomo V) y que continua a fs. 1.774 (Tomo VI) insiste que las órdenes las impartía el señor fiscal directamente al grupo comisario Poblete, y posteriormente salían a darle cumplimiento. En estas labores le correspondió realizar diferentes investigaciones, citaciones de personas y también detenciones. Que cuando se detenía a una persona, era interrogada en los cuarteles de investigaciones y luego puesta a disposición de la fiscalía. En algunas oportunidades cuando se trataba de detenidos “difíciles” eran entregados al teniente de ejército de apellido Espinoza, quien se hacía cargo de su interrogatorio. Que su desplazamiento dentro del regimiento estaba un poco restringido, ya que, para el ingreso pasaban por la guardia, luego contiguo a esta sala estaba una dependencia habilitada como calabozo. Por el frente de la guardia estaba la sala de la comandancia, en cuyo interior funcionaba la fiscalía. A un costado de la oficina de la fiscalía existía una oficina donde trabajaban los detectives. La oficina estaba equipada con un escrito, dos máquinas de escribir y unas cuantas sillas.

En declaración judicial de fecha 24 de junio de 2013, rolante de fs. 1.777 a fs. 1.782 (Tomo VI), esboza que el jefe de inteligencia era el capitán Nelson Ubilla Toledo, pero desconoce que otros militares componían ese departamento. Que el grupo de detectives que fue comisionado para trabajar las órdenes emanadas de la Fiscalía Militar estaba a cargo del comisario Aquiles Poblete Müller. Que cuando llegaron al regimiento Tucapel había más de ochocientos detenidos en el patio de la unidad, los que permanecieron por lo menos cinco días allí, ya que, ellos debían tomarles declaraciones y anotar sus datos. Le parece que los detenidos fueron mantenidos en un gimnasio que había al fondo del patio de la unidad o en las caballerizas, no recuerda exactamente. Sin embargo, ellos siempre permanecían tomando declaraciones en el patio. En esa tarea fueron ayudados por el suboficial Schonherr de ejército. El Tribunal le pregunta si le correspondió participar en interrogatorios de detenidos en el regimiento Tucapel. El declarante responde: “Sí me correspondió hacerlo, pero siempre en la oficina que teníamos asignada en el recinto de la comandancia”. Respecto de los dichos expresados en su declaración extrajudicial sobre los detenidos difíciles y que eran entregados al teniente Espinoza, esto era una orden expresa que el mayor Jofre le dio a su jefe el

comisario Poblete. En este sentido, muchas veces llegaron personas detenidas por patrullas de carabineros, militares o de la fuerza aérea, que venían catalogadas como extremistas, a quienes interrogaban en “nuestra oficina”. Que estas personas eran derivadas al teniente Espinoza por orden del mayor Jofre. Para esto ellos llamaban a la guardia para que un soldado viniera a buscar al detenido, el que era llevado al calabozo de esa dependencia. Desde ese lugar el detenido era sacado por algún conscripto, más tarde para ser llevado a la presencia del teniente Espinoza. Respecto a las personas que resultaban muertas tras intentar fugarse o quitarles el arma a los centinelas, puede señalar que este tipo de noticias ellos las recibían cuando llegaban en la mañana a trabajar al regimiento.

En diligencia de careo con Daniel Arnoldo Aguirre Mora, de fecha 05 de julio de 2013, rolante de fs. 1.811 a fs. 1.812 (Tomo VI) ratifica declaraciones y que por otra parte él sólo atendió al señor Podlech en el cuartel de investigaciones, en una oportunidad en que éste se presentó en la guardia y solicitó subir al segundo piso a la oficina de informaciones, donde trabajaba el detective Ortiz.

En declaración judicial de fecha 27 de octubre de 2021, rolante de fs. 3.680 a fs. 3.683 (Tomo XI), en lo pertinente el Tribunal le consulta quién le ordenaba interrogar a los detenidos. El deponente indica: que los militares entregaban detenidos en la oficina que ellos tenían y ordenados por el señor Poblete, interrogaban a los detenidos. Luego los mismos militares retiraban a los detenidos desde la oficina. Que la oficina donde estaban es la que se vio en la inspección ocular. El suscrito trabajaba con San Juan y Morales, en otra oficina estaba Poblete y Ortiz, pero estos últimos se fueron a trabajar al interior del regimiento con el grupo que tenía Ubilla. Que a ellos les llegaba un detenido con un temario, estas preguntas tenían que ver con asuntos políticos y con el correr del tiempo se ha dado cuenta que la información que les entregaban, lo que decía de los detenidos, era falso. El Tribunal le da a conocer la identidad de las víctimas de un hecho y lee lo pertinente de las declaraciones del testigo M.C.S, rolante de fs. 2.309, de fs. 2.638; de fs. 3.109 y la de fecha 16 de agosto de 2021. El deponente indica: que no solo ellos estaban ahí para interrogar. El capitán Ubilla solicitó a investigaciones más personal. Cuando empezaron a morir detenidos a cargo del grupo del capitán Ubilla, el señor Ortiz se retiró y les dijo “no se metan

por ningún motivo a trabajar con ese grupo, porque a los militares se les están muriendo los detenidos”. Sobre las muertes de personas al interior del regimiento dice que debió enterarse la oficialidad del regimiento, porque es un hecho grave. Que es posible, pero no le consta lo que dice el testigo M.C.S. sobre las torturas que efectuaban los militares y que se le murieron detenidos, pero que ellos los detectives no estaban ahí, por lo menos San Juan, Morales y el deponente, quienes trabajaron en la comandancia. Insiste que no solo se dedicaban a los interrogatorios por motivos políticos. Respecto a muertes por patrullas militares, estos hechos eran investigados por el grupo donde estaban los actuarios Toloza y Gonzalez.

A.44. Miguel Arcángel Calderón Sepúlveda

En declaraciones extrajudiciales de fecha 19 de julio de 2015, rolante de fs. 2.160 a fs. 2.161 (Tomo VI), señala que en 1973 estaba encuadrado en la sección de telecomunicaciones de la compañía de plana mayor y servicios del regimiento Tucapel, a cargo del capitán Nelson Ubilla Toledo, siendo su instructor el sargento Arias. Que llegado el 11 de septiembre de 1973, al regimiento comenzaron a llegar personas detenidas, las cuales quedaban alojadas en el gimnasio. En esa época fue elegido para ser estafeta de la Fiscalía Militar. Sus funciones eran la de repartir la correspondencia de la fiscalía, y, además, debía trasladar detenidos desde la cárcel pública al regimiento para presentarlos en los consejos de guerra que se llevaban a cabo en el gimnasio los miércoles y viernes.

En declaración judicial de fecha 29 de julio de 2015, rolante de fs. 2.169 a fs. 2.170 (Tomo VII), ratifica su declaración y con relación a la sala de interrogatorios que había en la compañía de plana mayor señala que en ese lugar existía una sala de interrogatorio y tortura de detenidos. Pasado un tiempo, y ante la escasez de personal, le tocó ir buscar detenidos a la cárcel y llevarlos al regimiento para ser interrogados. Los detenidos no eran interrogados en la Fiscalía, sino que por orden del Fiscal Militar Podlech debía llevarlos hasta el regimiento, donde eran ingresados a la sala de interrogatorios a la que hizo referencia anteriormente. Él se quedaba afuera de la sala esperando a que se desocuparan. Las personas interrogadas eran torturadas. Escuchó gritos y llantos que provenían desde el interior de la sala de interrogatorios. Las personas eran sometidas a la aplicación de electricidad. Cuando salían de ese lugar debía esperar a que se recuperaran. Pero si escuchó comentarios que se hicieron, no

recuerda por quiénes, en que se decía que habían ejecutado personas en el puente Allipén, o que las habrían ido a arrojar en ese lugar.

A.45. Aquiles Alfonso Poblete Müller

En declaración judicial de fecha 29 de diciembre de 2008, rolante de fs. 1.320 a fs. 1.322 (Tomo IV), atestigua que fue destinado al regimiento Tucapel de Temuco, desde fines de septiembre de 1973 hasta los primeros días de enero de 1974. En el regimiento fueron recibidos por el comandante de la unidad quien le presentó al capitán Ubilla, informándoles que a partir de ese momento trabajarían bajo sus órdenes. Los detenidos no prestaban un interrogatorio formal en el sentido que firmaran alguna declaración, sino que ellos obtenían la información y le informaban de los avances de los interrogatorios al capitán Ubilla, quien muchas veces presenciaba esas entrevistas. Hace presente que el gran responsable de todo y quien decidía el destino de los detenidos era el abogado Alfonso Podlech, quien estaba a cargo de la Fiscalía Militar. Toda la información se la entregaban a Ubilla y este a su vez, entregaba los antecedentes a la fiscalía militar. En esa repartición quien decidía el destino de los detenidos era Alfonso Podlech, que según supo, era el fiscal.

En declaración extrajudicial de fecha 11 de julio de 2012, rolante de fs. 1.697 a fs. 1.698 (Tomo V), soslaya que es efectivo que estaba a cargo del grupo de detectives agregados al regimiento Tucapel de Temuco. Cumplió funciones ordenadas por un capitán de ejército de apellido Ubilla, quien dispuso que se hiciera cargo de los interrogatorios de las personas que llegaban en calidad de detenidas al regimiento Tucapel. Para efectuar dichas labores se situaron en el gimnasio del regimiento, donde personal del ejército les entregaba a los detenidos, quienes ya venían en malas condiciones físicas y procedían a interrogarlos bajo la aplicación de corriente eléctrica producida por un dinamo, también recuerda que, con un cochayuyo mojado, lo pasaban por el cuerpo de los detenidos simulando que se trataba de una culebra. Recordando que al final del periodo ya se encontraba aburrido de las situaciones que ocurrían al interior del regimiento, sobre todo lo que les comentaban algunos militares referentes a los detenidos que interrogaban, ya que, en más de una oportunidad se le comentó que la mayoría de estas personas se les daba muerte.

En declaración judicial de fecha 30 de julio de 2012, rolante de fs. 1.703 a fs. 1.704 (Tomo V), ratifica declaraciones y dice que sabía de las decisiones que

tomaba el abogado Alfonso Podlech con respecto de los detenidos, porque los propios soldados que los llevaban y traían les decían que era esta persona quien determinaba sus destinos. Recuerda haber interrogado a un joven que decía haber pertenecido al "GAP". Esta persona cuando se la entregaron estaba muy "frisquedada" es decir, los militares de inteligencia lo habían torturado bastante. Un soldado, cuya identidad ignora le dijo que a este joven "se lo había llevado el Señor". Que había otro oficial que estaba al tanto de lo que pasaba con los detenidos, el teniente Rubio. Sin embargo, no le cabe duda de que todos los oficiales sabían sobre esto. Anexa que le correspondió interrogar detenidos en una sala ubicada en una cuadra del regimiento, en donde les aplicaban electricidad a estas personas.

En declaración judicial de fecha 3 de julio de 2013, rolante de fs.1.805 (Tomo VI), consultado destacó que el abogado Alfonso Podlech era quien determinaba el destino de los detenidos.

En declaración judicial de fecha 26 de julio de 2006, rolante de fs. 3.650 a fs. 3.652 (Tomo X), replica su desempeño funcionario para septiembre de 1973, reitera que el gran responsable de todo era el abogado Alfonso Podlech, quien estaba a cargo de la fiscalía militar.

En declaración judicial de fecha 26 de julio de 2006, rolante de fs. 3.653 a fs. 3.654 (Tomo X), ratifica su declaración y consultado dice que él sabía de las decisiones que tomaba el abogado Alfonso Podlech con respecto de los detenidos, porque los propios soldados que los llevaban y traían, les decían que era esta persona quien determinaba sus destinos. Recordando que había otro oficial que estaba al tanto de lo que pasaba con los detenidos, que era el teniente Rubio. Sin embargo, no le cabe duda de que todos los oficiales sabían sobre esto. Insiste que le correspondió interrogar detenidos en una sala ubicada en una cuadra del regimiento, en donde les aplicaban electricidad a estas personas. Las terminales eléctricas se las ponían en cualquier parte del cuerpo.

A.46. Héctor Benedicto Hernández Viscarra

En declaración judicial de fecha 16 de enero de 2013, rolante de fs. 1.746 a fs. 1.749 (Tomo V), alude que ingreso al servicio militar el 26 de junio de 1973 en el regimiento Tucapel de Temuco, encuadrado en la compañía de mortero, cuyo comandante era el capitán Manuel Fernández Carranza. En lo pertinente dice que vio detenidos en el regimiento Tucapel, los que estaban en la guardia de la unidad

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

y en una dependencia que estaba junto a las caballerizas. Recuerda que el grupo de oficiales de inteligencia estaba conformado por el capitán Nelson Ubilla Toledo, de plana mayor y servicios y en cuya compañía funcionaba la oficina de inteligencia, más el capitán Manuel Vásquez Chahuán y los tenientes Alejandro Rubio Valladares, Pablo Gran López. Estos tres últimos, siempre andaban juntos. Que pudo ver en varias ocasiones a estos oficiales entrar a la sala contigua a las caballerizas donde estaban los detenidos. Recordando haber visto regresar a los detenidos desde ese lugar hacia la guardia en muy malas condiciones. Algunos señalaban que los habían colgado por horas de cabeza. Que en una oportunidad el capitán Vásquez Chahuán le ordenó mojar a los detenidos que estaban en la guardia utilizando una manguera para que no se les notaran las lesiones provocadas por las torturas. Que vio todas estas cosas porque le correspondió efectuar guardias internas.

A.47. Pedro Misael Elgueta Muñoz

En declaración extrajudicial de fecha 15 de enero de 2013, rolante de fs. 1.750 a fs. 1.752 (Tomo V), que para septiembre de 1973 se encontraba efectuando su servicio militar en el regimiento de Infantería N°8 Tucapel de Temuco, encasillado en la sección de plana mayor de la compañía mortero, al mando del capitán Manuel Fernández Carranza, le correspondió cumplir servicios de guardia, siendo testigo en muchas ocasiones del ingreso durante el día de personas detenidas a la unidad militar, debiendo hacer mención que en horas de la noche y de la madrugada, ingresaban de a dos a tres personas detenidas, con sus rostros cubiertos, a la sala de descanso por unos minutos y luego eran subidos a camiones tres cuartos, los cuales eran trasladados al sector de la isla, logrando escuchar a los minutos posteriores el sonido de disparos, presumiendo de inmediato que estas personas habían sido ejecutadas. Que estas "labores" de llevar a cabo las ejecuciones de las personas detenidas en la isla, según como pudo apreciar durante el desarrollo de su servicio, eran bajo las órdenes del oficial de ronda, recordando al capitán Nelson Ubilla de manera frecuente en estos procedimientos, debiendo agregar que quienes podrían haber cooperado o participado en estas funciones, personal de las compañías andina, plana mayor y cazadores. Que otra situación que logró observar cuando fue designado como policía militar, correspondiéndole en el casino, desempeñar labores de seguridad, mientras se realizaban los consejos de guerra, instancias donde el abogado

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Alfonso Podlech y el comandante del regimiento Pablo Iturriaga Marchesse, sentenciaban las condenas de los detenidos en presencia de éstos, escuchando siempre la pena de muerte o fusilamiento. Que también pudo observar cuando trasladaban a los detenidos a la sala de instrucción de la compañía de morteros, lugar donde se escuchaba los desesperados gritos de estas personas que eran interrogadas.

En declaración judicial de fecha 17 de enero de 2013, rolante de fs. 1.754 a fs. 1.756 (Tomo V), ratifica su declaración extrajudicial agregando que vio de detenidos en el regimiento Tucapel, los que estaban en la guardia de la unidad y en la sala de instrucción de la compañía de morteros. Que en ese lugar los detenidos eran torturados. Pudo escuchar muchas veces los gritos de dolor que salían de esa dependencia. Allí eran sometidos a apremios tanto hombres como mujeres. Que los oficiales a cargo de los detenidos eran Nelson Ubilla Toledo, Jaime y Raimundo García Covarrubias, Manuel Espinoza Ponce, Manuel Vásquez Chahuán y Alejandro Rubio Valladares. Que estos oficiales eran ayudados por los sargentos y clases de la compañía de plana mayor y servicios, más algunos soldados conscriptos entre los que recuerda a Etchepare y Schwarstensi. Que mientras estuvo de guardia en cuatro o cinco oportunidades pudo ver que durante la noche llegaban hacia la sala de descanso de su compañía dos o tres detenidos vendados. Estos eran traídos se imagina desde la cárcel o, de otra parte. Quedaban un rato detenidos en ese lugar y más tarde eran sacados, generalmente por Nelson Ubilla Toledo y los oficiales de la plana mayor y servicios y sus ayudantes, para ser subidos a un camión y se los llevaban a la isla Cautín. Al poco rato se escuchaban disparos provenientes de ese lugar. Respecto a Alfonso Podlech Michaud dice que lo recuerda bien porque como dijo en su declaración extrajudicial lo vio en los consejos de guerra. Esta persona a su parecer leía la sentencia que casi siempre era de fusilamiento.

A.48. Rigoberto Antonio Gutiérrez Ancamilla

En declaraciones extrajudiciales de fecha 19 de julio de 2015, rolante de fs. 2.158 a fs. 2.159 (Tomo VI), señala que ingresó a cumplir su servicio militar obligatorio durante el mes de enero del año 1973 al Regimiento de Infantería N° 8 Tucapel de Temuco, quedando encuadrado en la segunda sección de la compañía plana mayor y servicios, la que estaba a cargo del capitán Nelson Ubilla Toledo, siendo su instructor el sargento Silva. Conforme su recuerdo, llegado el 11 de

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

septiembre de 1973, al regimiento comenzaron a llegar personas detenidas, las cuales quedaban en la guardia, gimnasio y el rancho, recordando que en su compañía se habilitó una sala que ocupaban los conscriptos para efectuar interrogatorios bajo la aplicación de tortura, recordando que en más de una oportunidad vio ingresar a esa sala funcionarios de planta del regimiento. En lo personal, recuerda haber ido a dejar detenidos a esa sala, pero llegaba hasta la entrada, ya que personal de planta se hacía cargo de esas personas. Por lo que puede recordar en dicha sala había un catre y un par de sillas.

En declaración judicial de fecha 29 de julio de 2015, rolante de fs. 2.168 (Tomo VII), ratifica su declaración y en cuanto a la sala de interrogatorios que había en la compañía de plana mayor, afirma que en ese lugar existía una sala de interrogatorio y tortura de detenidos. Eso lo sabe porque le tocó ir a dejar detenidos a ese lugar que se encontraban en la guardia de la unidad. Luego, recibía la orden de retirarse inmediatamente. En ese lugar trabajaba el capitán Nelson Ubilla Toledo con personal de planta y detectives. Las personas interrogadas en ese lugar eran torturadas.

A.49. Héctor Florentino Navarrete Jara

En declaración judicial de fecha 18 de enero de 2013, rolante de fs. 1.757 a fs. 1.759 (Tomo V), expone que vio detenidos al interior del regimiento Tucapel. Que estos se encontraban en una dependencia ubicada entre el edificio de la compañía de plana mayor y la de morteros. Que en alguna oportunidad le correspondió ir a darles el rancho a unos detenidos que habían traído en helicóptero durante la noche y que venían según supo del sur. Que el camión que le correspondió limpiar al día siguiente estaba lleno de restos de carne humana y sesos.

A.50. Juan Alfonso Campos Valdebenito

En declaración extrajudicial de fecha 08 de agosto de 2017, que rola de fs. 2.752 a fs. 2.753 (Tomo VIII), indica que efectuó el servicio militar obligatorio en el regimiento de Infantería N° 8 Tucapel de Temuco, se desempeñó como soldado conscripto en la **compañía de plana mayor y servicios**, y en lo oportuno que es efectiva la existencia de una sala donde se interrogaban a los detenidos del regimiento, esta estaba entre las compañías de morteros y la de plana mayor. Siempre los detenidos se los entregaban vendados, se los entregaba a Ubilla en la sala de la compañía de plana mayor y posteriormente se los entregaban

nuevamente para regresarlos al gimnasio y algunas veces debía llevarlos a la guardia donde en un par de ocasiones les dieron la libertad.

A.51. Jorge Luis Godoy Valdebenito

En declaración extrajudicial de fecha 25 de agosto de 2009, que rola de fs. 1.412 a fs. 1.413 (Tomo IV), dice que, para el mes de septiembre de 1973, tenía 18 años y se encontraba efectuando el servicio militar obligatorio en el regimiento N° 8 de Infantería Tucapel, inserto dentro de la **compañía de plana mayor y servicios**, cuyo comandante era el capitán Nelson Ubilla Toledo. El 11 de septiembre de 1973, incluso recuerda el hecho de que el hermano de un conscripto de su compañía cuya identidad no recuerda, mientras permanecía prisionero en el patio de la unidad juntó a otros detenidos, de rodillas y con sus brazos extendidos los cuales debían sostener ladrillos, fue brutalmente golpeado por otro conscripto de la compañía de nombre José Chávez Etchepare, quien estaba designado por el mando de la unidad para vendar a los detenidos, marearlos mediante la técnicas de dar vueltas sobre su eje para posteriormente pasarlos a la pieza que se encontraba dentro de la compañía de plana mayor, la cual contaba con un catre metálico y dos dínamos eléctricos. Que conoció el funcionamiento de estos aparatos, cuando por reírse el sargento Mario Hernán Arias Díaz lo puso sobre este catre y le aplicó golpes de corriente en su cuerpo, al menos por unos diez minutos, lo cual le causó mucho dolor, vómitos y diarrea, lo que hasta el día de hoy no ha podido olvidar.

En declaración judicial de fecha 25 de septiembre de 2009, que rola de fs. 1.423 a fs. 1.425 (Tomo V), ratifica su declaración extrajudicial y en lo pertinente refiriendo a Jaime García Covarrubias indica que el teniente García mandaba más que el capitán Ubilla en cuanto al tratamiento de detenidos, destacándose por su crueldad para con ellos. Su hermano, el subteniente Raimundo García, en un principio fue una persona muy amable y no se quiso meter con los detenidos, pero después fue influenciado por su hermano y cambió su conducta. Posteriormente, ambos participaban en los interrogatorios de los detenidos en la dependencia de la banda del regimiento.

En diligencia de careo con Jaime García Covarrubias, de fecha 21 de septiembre de 2010, que rola de fs. 1.608 (Tomo V), ratifica sus dichos y manifiesta que siente mucho temor de esta persona, por lo que no desea seguir

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

declarando, ya que está seguro de que su vida correría peligro si agrega algo más. “Este señor es muy peligroso”.

En declaración extrajudicial de fecha 17 de octubre de 2018, que rola de fs. 232 a fs. 235 (Cuaderno secreto), ratifica su declaración extrajudicial y refiere en cuanto a los detenidos que eran interrogados en una sala ubicada dentro de las dependencias de la compañía de plana mayor y servicios. En esta dependencia existía dos catres y cuatro máquinas generadoras de corriente dispuestas para ser accionadas en contra de los detenidos por motivos políticos que eran trasladados por el grupo señalado precedentemente hasta esta verdadera sala de tortura; lugar donde también fue torturado en una oportunidad por el sargento Arias. Dice que los detenidos por motivos políticos que llegaban a la Fiscalía Militar se imaginan que posteriormente eran trasladados a la sala de torturas. Lo anterior, según su parecer, para sacarles alguna información porque todos decían que eran inocentes. Que siempre veía cuando entraban los detenidos a esta sala de torturas ubicada en la compañía de plana mayor y servicios. Que estas personas se encontraban vendadas y amarradas. Veía que Chávez Etchepare concurría constantemente a la sala de bandas a buscar detenidos, para luego ingresarlos a esta sala y proceder a torturarlos. Lo anterior lo dice, porque lo veía. Añade que nunca estuvo adentro de esa sala en el momento en que estaba siendo torturada una persona, pero sí sentía sus gritos de dolor porque se encontraba afuera. Le parece que a esta sala hacían ingresar a dos detenidos a la vez y afuera de ella quedaban los otros. Todos siempre con la vista vendada.

A.52. Víctor Manuel Terán Vásquez

En declaración extrajudicial de fecha 07 de noviembre de 2012, rolante de fs. 1.737 a fs. 1.739 (Tomo V), arguyo que ingreso hacer su servicio militar en abril de 1973 en el regimiento Tucapel de Temuco, quedando encuadrado en la **compañía de plana mayor y servicio**, al mando del capitán Nelson Ubilla Toledo. Adiciona que el comandante de la compañía de plana mayor y servicios también estaba a cargo de la sección de inteligencia militar. Que ocurrido el golpe militar era frecuente que diariamente llegaran personas detenidas, las cuales eran dejadas en el gimnasio del regimiento. Señala que había dos detectives que se encargaban de interrogar bajo tortura a los detenidos al interior del gimnasio, recordando que uno de estos detectives era de apellido Morales. Según su recuerda, ellos interrogaban a las personas bajo la aplicación de corriente eléctrica

la cual era generada por un dinamo manual. Afirma dar fe de esta situación, porque vio la maquina con la cual “trabajaban” y muchas veces le correspondió ir a limpiar al gimnasio las orinas y excrementos de las personas torturadas. Que otra dependencia donde se torturaba, correspondía a una sala que en principio ocupaban los conscriptos para ver televisión y realizaban reuniones, la cual se ubicaba en la cuadra de la compañía de plana mayor y servicios y que fue habilitada como sala de interrogatorios, donde constantemente eran llevados los detenidos para ser torturados por personal militar en base a golpes y aplicación de corriente eléctrica. Según recuerda cuando se ingresaban detenidos a esa sala, se les ordenaba que hicieran abandono de esa cuadra y siempre vio ingresar a dicho lugar al capitán Nelson Ubilla Toledo, a los tenientes Jaime y Raimundo García Covarrubias y Manuel Espinoza Ponce. Agrega que estos oficiales eran los encargados de interrogar a los detenidos en dicho lugar y también de torturar, ya que “vez que los veía ingresar con detenidos se comenzaban a escuchar los gritos de dolor de las personas desde esa sala”.

En declaración judicial de fecha 02 de octubre de 2013, rolante de fs. 1.856 a fs. 1.857 (Tomo VI), ratifica declaración extrajudicial y suma que el teniente Alejandro Rubio Balladares era de la compañía de cazadores y amigo del capitán Ubilla. Estos dos oficiales, más los tenientes Jaime y Raimundo García Covarrubias y Manuel Espinoza Ponce formaban un grupo de oficiales que tenían que ver con los detenidos. Los vio en varias oportunidades entrar a la sala de plana mayor cuando se torturaba detenidos. Que el gimnasio al que hace referencia en sus dichos estaba ubicado a un costado del rancho de conscriptos. Era un gimnasio viejo que estaba en desuso, distinto al gimnasio grande. En ese lugar se torturaba a los detenidos. Recuerda que traían detenidos de la cárcel, los que eran interrogados por Alfonso Podlech y Adrián González.

En diligencia de careo con Jaime García Covarrubias de fecha 16 de abril de 2015, rolante de fs. 3.478 a fs. 3.479 (Tomo X), insiste en que vio entrar con detenidos a la sala de tortura al señor García, a su hermano y otros oficiales, tras lo cual comenzaban a sentirse gritos de dolor. Aunque no lo vio personalmente, le es posible deducir que a lo menos presenció estas sesiones.

A.53. Héctor Orlando Saavedra Peña

En declaración extrajudicial de fecha 23 de agosto de 2017, rolante de fs. 2.758 a fs. 2.759 (Tomo VIII), escruta que efectuó su servicio militar obligatorio en

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

el regimiento de Infantería N°8 Tucapel de Temuco, integró la **compañía de plana mayor y servicios** la que estaba a cargo del capitán Ubilla, recordando a otros oficiales como los tenientes Lavín y Espinoza, los cabos Silva y Krause, los sargentos Arias y Peña Andaur. Rememorando a otros soldados como Chávez Etchepare, García y Carrillo por la cercanía que tenían con el personal de planta. Sobre los detenidos que hubo en el regimiento señala que no tuvo contacto con ellos, a pesar de que se sabía que había personas en esa condición en el gimnasio de la unidad militar. En relación con las dependencias de su compañía, expresa que es efectivo que existía una sala que se ocupaba para fines de instrucción la cual una vez iniciado el gobierno militar fue cerrada y ocupada por personal de planta prohibiéndoles a ellos, los soldados, se acercaran a ella. En una oportunidad, recuerda que el soldado Chávez Etchepare les recomendó no acercarse ahí porque en dicha sala se efectuaban los interrogatorios de los detenidos. También a esa sala ingresaban algunos oficiales como es el caso del teniente Espinoza y otro cuyo apellido a su parecer era García, quien tenía otro hermano al interior del regimiento.

A.54. Oscar Inostroza Segura

En declaración extrajudicial de fecha 26 de agosto de 2009, que rola de fs. 1.414 a fs. 1.416 (Tomo IV), acota que ingresó a efectuar el servicio militar obligatorio el día 06 de enero del año 1973, al regimiento N° 8 de infantería y Montaña Tucapel, se encontraba inserto dentro de la **compañía de plana mayor y servicios**, la que se encontraba bajo el mando del capitán Nelson Ubilla Toledo, siendo su segundo comandante el subteniente Raimundo García Covarrubias, recordando que su hermano el teniente Jaime García, se destacaba por su crueldad y tratos inhumanos hacia los detenidos y los propios conscriptos. Añade que dentro de los lugares o dependencias que eran usadas para mantener prisioneros políticos dentro del regimiento estaban, la sala de banda de música de la unidad, el "gimnasio chico" donde se practicaba boxeo, el calabozo de la guardia y la "sala de conferencias" existente dentro de la compañía de plana mayor y servicio. Esta última dependencia se encontraba ubicada al medio de la compañía, allí se encontraba un catre metálico de los que ellos usaban y que era de una plaza, con los instrumentos necesarios para la tortura. En alguna oportunidad le correspondió llevar a esta sala a su propio cuñado de nombre Ricardo Villanueva, quien por ese tiempo era simpatizante de la unidad popular.

Se le pregunta por otros hechos y en lo pertinente dice que recuerda a quienes realizaban interrogatorios a los detenidos del regimiento al capitán Nelson Ubilla Toledo, sargento Mario Arias Díaz, y los conscriptos sargento segundo de reserva José Chávez Etchepare, Libardo Schwartenski Rubio y Luis Ángel Valeria Candía y el teniente Jaime Garcia, entre otros.

En declaración judicial de fecha 28 de septiembre de 2009, que rola de fs. 1.426 a fs. 1.428 (Tomo V), ratifica su declaración extrajudicial y narra que le correspondió trasladar a varios de detenidos desde la guardia del regimiento hasta una sala ubicada entre el pabellón de plana mayor y la compañía de morteros. A esta sala le llamaban “sala de conferencias de alto nivel”. Hasta ese lugar llevó a Ricardo Villanueva. En esa oficina se torturaba a las personas mediante la aplicación de corriente. Que también le correspondió custodiar detenidos en el “gimnasio chico”, lugar al que llegaban personas muy golpeadas, tanto hombres como mujeres.

A.55. Luis Eduardo Manríquez Figueroa

En declaración extrajudicial de fecha 19 de julio de 2017, rolante de fs. 2.730 a fs. 2.731 (Tomo VIII), afirma que se desempeñó en las **compañías de plana mayor y servicios** y primera de cazadores. Afirma que efectivamente existía una sala al interior de su compañía donde se ingresaban personas detenidas, quienes generalmente eran trasladadas ahí con la vista vendada, se rumoreaba mucho que en dicha sala se interrogaba a los detenidos bajo la aplicación de tortura, incluso se decía que a los detenidos se les aplicaba corriente. Que a esta sala siempre veía ingresar a algunos oficiales del regimiento como el capitán Ubilla y los hermanos Garcia. El hecho es que se sabía que ellos frecuentemente ingresaban a esta sala cuando había detenidos. Agrega que, a los meses de ocurrido el golpe de Estado, cree a fines de 1973, se supo que una persona fue sacada moribunda desde la mencionada sala de su compañía, quien habría fallecido posteriormente al interior del regimiento.

A.56. José Anselmo Matamala Cofré

En declaración extrajudicial de fecha 20 de julio de 2017, rolante de fs. 2.736 a fs. 2.737 (Tomo VIII), expone que efectuó el servicio militar obligatorio en el regimiento de Infantería N° 8 Tucapel de Temuco. Se desempeñó en las **compañías de plana mayor y servicios** y primera cazadores. Dice que existía una sala al interior de su compañía donde se ingresaban personas detenidas,

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

quienes generalmente eran trasladadas ahí desde la guardia con la vista vendada, se rumoreaba mucho que en dicha sala se interrogaba a los detenidos bajo la aplicación de tortura, mediante el uso de electricidad. A la sala que señalaba anteriormente ingresaban algunos oficiales del regimiento como el capitán Ubilla, subteniente Espinoza y otros que no recuerda.

En declaración judicial de fecha 22 de marzo de 2018, rolante de fs. 230 a fs. 231 (cuaderno secreto), reitera que se encontraba para el año 1973 realizando el servicio militar obligatorio al interior del regimiento Tucapel de Temuco, compañía de plana mayor y servicios, al mando del capitán Ubilla. Lo seguían en el mando el subteniente Romilio Lavín. A partir del 11 de septiembre de 1973, y encontrándose encuadrado en la misma compañía, se desempeñó como guardia dentro de las dependencias del regimiento Tucapel de Temuco. Expresa que al interior de la compañía existía una sala de torturas, lo sabe puesto que se encontraba de guardia cuando observaba aquello. A la sala de tortura veía ingresar a los conscriptos Chávez Etchepare y a Valeria. Sabe que la sala que estaba ubicada en la compañía era una sala de tortura, puesto que en muchas ocasiones le correspondió trasladar a los presos políticos hasta aquella, los cuales eran conducidos vendados; momentos en que podía observar la implementación que existía en aquella. En muchas ocasiones visualizó un catre, lugar donde recostaban a los detenidos para aplicarles corriente. Nunca se enteró de las identidades de los detenidos ni el destino final de aquellos. Que además era de conocimiento general de los conscriptos que, en horas de la noche en oportunidades, se trasladaban cuerpos a distintos lugares, los cuales desconoce.

A.57. Pedro Renato Ortiz Quiroz

En declaración extrajudicial de fecha 20 de julio de 2017, rolante de fs. 2.738 a fs. 2.740 (Tomo VIII), desarrolla que efectuó el servicio militar obligatorio en el regimiento de Infantería N° 8 Tucapel de Temuco, y se desempeñaba en las **compañías de plana mayor y servicios**. Que existía una sala al interior de las instalaciones de su compañía, que estaba prohibido su ingreso, pero después del día 11 de septiembre era habitual escuchar lamentos y gritos de dolor tanto de hombres y mujeres, por lo que se comentaba que ahí se torturaban a los detenidos mediante golpes y aplicación de corriente eléctrica.

En declaración judicial de fecha 16 de mayo de 2019, rolante de fs. 3.155 a fs. 3.157 (Tomo IX), ratifica su declaración y persiste en que al interior del

regimiento Tucapel de Temuco vio muchos detenidos por motivos políticos, al lado de la guardia, cerca de la enfermería y en la sala habilitada para las torturas de los detenidos en la compañía de plana mayor y servicios. Recuerda que veía ingresar a estos detenidos, los cuales se encontraban vendados, con capucha, esposados, apuntados con armas, a cada uno de los lugares que ha nombrado. Que efectivamente a contar del 11 de septiembre de 1973, al interior de su compañía, la de plana mayor y servicios del regimiento Tucapel de Temuco existía una dependencia, o más bien sala, especialmente habilitada para torturar mediante la aplicación de corriente eléctrica y golpes a los detenidos de carácter político. Esto lo dice porque en muchas ocasiones sintió los gritos de dolor, lamentos, llantos desde el interior de aquella. Respecto a las personas que ingresaban a esa sala vio a veces ingresar oficiales de distintas compañías, el capitán Rodolfo Vargas Campos, también al comandante subrogante de la compañía de plana mayor de apellido García Covarrubias (quien asesoraba al capitán Nelson Ubilla Toledo).

A.58. Libardo Hernán Schwartenski Rubio

En declaración extrajudicial de fecha 14 de enero de 2010, rolante de fs. 1.463 a fs. 1.464 (Tomo V), narra que para el año 1973 y posterior a la restructuración del regimiento fue encuadrado en la **compañía de plana mayor y servicios**, la que se encontraba al mando del entonces capitán Nelson Ubilla Toledo, a quien recuerda como el encargado del servicio de inteligencia militar. Sobre la existencia de un grupo encargado de la entrevista de los prisioneros políticos, recuerda que este lo integraban el capitán Ubilla, los sargentos Orlando Moreno Vásquez y Raúl Schonherr Frías, además del sargento Mario Arias Díaz.

En declaración judicial de fecha 27 de marzo de 2010, rolante de fs. 1.467 (Tomo V), ratifica declaración extrajudicial y suma que el sargento Arias Díaz pertenecía a la plana mayor y servicios. A su parecer se integró a la sección segunda después del golpe de militar, pues lo veía junto a Schonherr, Moreno Vásquez y el capitán Ubilla participando en el grupo que se ocupaba de los detenidos para su interrogatorio.

En declaración extrajudicial de fecha 8 de noviembre de 2012, rolante de fs. 1.740 a fs. 1.741 (Tomo V), insiste que para 1973 se encontraba encuadrado en la compañía de plana mayor y servicios, al mando del capitán Nelson Ubilla Toledo. En cuanto a la existencia de un grupo encargado de los interrogatorios de los prisioneros políticos, indica que recuerda que este lo integraban el capitán

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Ubilla, el teniente Jaime Garcia Covarrubias, apodado “el yango”, el subteniente Romilio Lavín, los sargentos Orlando Moreno Vásquez y Raúl Schonherr Frías, además del sargento Mario Arias Díaz, los cuales realizaban su labor en una sala de interrogatorios habilitada en la cuadra de la compañía de plana mayor y servicios, donde era recurrente observar los detenidos que ingresaban a esa sala, los cuales se sabía que eran torturados. De la misma forma, existía un grupo de detectives que estaba integrado por Carlos Luco Astroza y Hernán Quiroz Barra, quienes efectuaban interrogatorios, los que en más de una vez presenciaron oportunidades en que debía entregarles documentación, como eran torturados los detenidos. Menciona como otro interrogador al fallecido teniente Manuel Espinoza Ponce. En cuanto a las condiciones en las que observó a las personas cuando estaban siendo torturadas, señala que estas se encontraban desnudas, con la vista vendada y sobre un somier metálico, junto a sus torturadores que eran los detectives Quiroz y Morales, quienes eran acompañados en muchas oportunidades por el sargento Mario Arias Díaz. Se le interroga respecto de los detenidos asesinados por ley de fuga, lo que dice desconocer, agregando otros comentarios.

En declaración judicial de fecha 25 de junio de 2013, rolante de fs. 1.784 a fs. 1.785 (Tomo VI), ratifica declaraciones y recuerda al teniente Jaime García Covarrubias y a su hermano Raimundo. Dice que estos oficiales siempre andaban juntos. En una oportunidad pudo ver al teniente Jaime García y al subteniente Raimundo García al interior de la sala donde se torturaban personas en la compañía de plana mayor y servicios. En esos momentos había una persona desnuda y con su vista vendada, tendida sobre un somier. En cuanto al subteniente Lavín puede indicar que éste era uno de sus jefes en la compañía de plana mayor y servicios y pudo verlo entrar en más de una ocasión a la sala donde se interrogaba y torturaba personas. No puede asegurar que éste participó en torturas, pero por lo menos sabía lo que allí pasaba y debió haber presenciado alguna sesión de estas. Que de los hechos ocurridos en el regimiento con relación a los detenidos lo sabían todos los oficiales, por lo menos el comandante Iturriaga, el segundo comandante Jofré y el ayudante Jaime García Covarrubias, además de todos los oficiales involucrados en los interrogatorios y torturas.

En diligencia de careo con José Raúl Inzunza Reyes, de fecha 5 de julio de 2013, rolante de fs. 1.813 a fs. 1.814 (Tomo VI), recuerda haber visto entrar a

la sala de interrogatorios al cabo Salgado Goyeneche, que era de la compañía andina y también estaba a cargo del material de guerra, trabajando junto al teniente Lavín. Que también vio ingresar frecuentemente a Jaime García Covarrubias y a Raimundo García Covarrubias. Sin embargo, era común que todos los oficiales fueran a mirar de vez en cuando, porque la novedad. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo con Jaime García Covarrubias, de fecha 4 de octubre de 2013, rolante de fs. 1.860 (Tomo VI), ratifica declaraciones y reconoce a la persona con la cual se le carea como el teniente Jaime García Covarrubias de quien ha hecho referencias. Acota que se refiere a hechos que ocurrieron entre el 11 de septiembre y mediados de octubre de 1973, fecha que se fue a Santiago. Que su nombre lo dio posteriormente porque le preguntaron si conocía a otros oficiales a los que él hubiese visto en la sala donde se interrogaban y torturaba detenidos. Se mantiene en sus dichos.

A.59. José Raúl Inzunza Reyes

En diligencia de careo con Hernán Quiroz Barra de fecha 05 de julio de 2013, rolante de fs. 1.809 a fs. 1.810 (Tomo VI), en lo pertinente lo recuerda porque trabajo con él en la **compañía de plana mayor y servicios** junto con el capitán Nelson Ubilla Toledo.

En diligencia de careo con Libardo Schwartenski Rubio, de fecha 05 de julio de 2013, rolante de fs. 1.813 a fs. 1.814 (Tomo VI), ratifica sus dichos y reconoce a la persona con quien se le carea, de quien hizo referencia en declaración. Que éste estuvo presente durante los interrogatorios, pero no lo vio aplicar electricidad a los detenidos, ni interrogados. Que es cierto lo que señala Schwartenski, en el sentido que todos los oficiales del regimiento iban a la sala de interrogatorios a curiosear. No sabe si ellos interrogaban o no, pero sí que entraban a mirar.

En declaración extrajudicial de fecha 25 de julio de 2017, rolante de fs. 2.741 a fs. 2.743 (Tomo VIII), destaca que realizó su servicio militar en el regimiento Infantería N° 8 Tucapel de Temuco, se desempeñó como soldado conscripto fue en la compañía de plana mayor y servicios. Deja claro que integró el grupo de soldados que participaba en labores con detenidos, cuando los soldados Schwartenski, Chávez y Valeria, fueron enviados al curso de inteligencia en la región Metropolitana, no recuerda muy bien si esto fue a mediados de

octubre o noviembre, el hecho es que se integró a ese grupo por esa fecha. Con relación a las labores que pasó a cumplir, señala que estas tenían que ver con el trato con los detenidos que llegaban a la unidad militar, labores que estaban a cargo del capitán Nelson Ubilla Toledo, y el sargento Mario Arias quienes se hacían apoyar por dos detectives, recordando solamente a Quiroz. Ratificando sus dichos en el sentido que estos funcionarios interrogaban a los detenidos bajo aplicación de tortura, la que consistía en golpe y corriente, al interior de una sala ubicada en la compañía de plana mayor y servicios, a la cual ingresaban también otros oficiales como el teniente Jaime García Covarrubias y un suboficial de apellido Silva. En relación con las dos personas fallecidas que debieron sacar de la sala de tortura de la compañía de plana mayor y servicios, ambos casos fueron de manera separada, cree que con una semana o poco más de diferencia. Aclarando que ese día se encontraba de clase de servicio y recibió la orden de un funcionario que no recuerda, que debía despejar el pasillo de la cuadra de su compañía, ya que había que sacar un cadáver de la sala, esto en las dos ocasiones que recuerda. Que no tomó los cuerpos, sino que solo vio cuando los sacaron de la sala, envueltos en frazadas, para posteriormente subirlos a un camión que se aculató a las dependencias de la compañía, para posteriormente ser llevados en ambas ocasiones al hospital Regional de Temuco.

A.60. Raúl Cerda Aguilaf

En declaración judicial de fecha 25 de abril de 2012, rolante de fs.1.660 a fs. 1.662 (Tomo V), refiere que, para septiembre de 1973, estaba por salir del servicio pues duraba un año. Además, estaba listo para irse con un grupo de soldados conscriptos a la escuela de suboficiales específicamente a Tejas Verdes donde iba a recibir instrucción de ingeniería. Preguntado dice que hubo muchos detenidos en el regimiento Tucapel después del 11 de septiembre de 1973. Estos eran mantenidos en la guardia de la unidad, en el “gimnasio chico y en el gimnasio grande”. A cargo de los interrogatorios de estos detenidos, había un grupo de oficiales, suboficiales y civiles. Entre los oficiales recuerda al capitán Nelson Ubilla Toledo, a los tenientes Jaime García Covarrubias y Alejandro Rubio Valladares y a los subtenientes Raimundo García Covarrubias, Manuel Espinoza Ponce, y Carlos Oviedo Arriagada; de los soldados clase recuerda al suboficial mayor Quilodrán, sargento Silva San Martín, sargento Mario Arias Díaz y Alberto Cerda Miere, este último conductor, Víctor Juvenal Del Río Poveda, Albino Krause Álvarez. Todos

ellos pertenecían a la plana mayor, que dependía de Ubilla. Explaya que era conocido por todos en el regimiento que los detenidos eran torturados en una dependencia ubicada en la compañía de la plana mayor y servicios. Hasta ese lugar llevaban a los detenidos para interrogarlos, pudiendo ver a los oficiales antes indicados pasar con detenidos hacia ese lugar o mandar en su nombre a buscar detenidos al gimnasio o a la guardia para ser llevado a la sala mencionada.

A.61 José Heriberto Mansilla Gatica

En declaración judicial de fecha 30 de agosto de 2012, rolante de fs. 1.717 a fs. 1.719 (Tomo V), adiciona que después del 11 de septiembre de 1973, se desempeñaba en la sección de administración de fondos del regimiento Tucapel de Temuco, como dactilógrafo, con el grado de sargento primero. A cargo de esa sección estaba el teniente Tichauer Salcedo. Las dependencias de su sección se ubicaban en la comandancia del regimiento, que posteriormente fueron ocupadas por el servicio de inteligencia. El trabajo cotidiano de la fiscalía, como interrogar, tomar decisiones con respecto de los detenidos era de Alfonso Podlech. Que se intercedía ante Alfonso Podlech, porque éste decidía la suerte de los detenidos que una vez llegaron en camiones. El comandante Jofré le dijo personalmente, cuando estaba de guardia, que las decisiones respecto a un grupo de detenidos que llegaron, entre los que había dos mujeres, debía tomarla Alfonso Podlech. Por esa razón intercedió ante Podlech por las mujeres que conocía. Que la oficina de plana mayor era ocupada por la Fiscalía Militar. En lo formal el comandante Jofre era el Fiscal Militar, pero todas las decisiones de la Fiscalía Militar las tomaba Podlech. Insiste que Alfonso Podlech tenía el poder para decidir lo que pasaba con los detenidos. Por esa razón se intercedía ante éste por ellos. Comenta que Alfonso Podlech le gustaba el fútbol, por esa razón en una oportunidad intercedió ante este por Rolando Núñez, quien en una oportunidad “se tomó, junto a otras personas uno de los fundos de don Alfonso Podlech”. Cuando esta persona se presentó ante la fiscalía, Alfonso le dijo que le agradeciera al deponente por haber intercedido por él, porque si no lo hubiese hecho, “hace rato lo hubiera tenido apuntado”. Agrega que había una sala de torturas en la primera compañía de cazadores. En una oportunidad andaba buscando a su jefe Tichauer y vio por el “ojo de la llave como le aplicaban electricidad a una mujer en sus senos”. Que Tichauer y los oficiales García Covarrubias tenían que ver con las torturas y los detenidos.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

En declaración judicial de fecha 12 de septiembre de 2013, rolante de fs. 1.844 (Tomo VI), ratifica declaración judicial y advierte que estuvo trabajando una tarde con Alfonso Podlech Michaud. Éste tomaba declaraciones y el deponente era el dactilógrafo. Que esta situación solo fue por una tarde y fue por orden del mayor Jofré.

En diligencia de careo con Oscar Alfonso Podlech Michaud, de fecha 12 de septiembre de 2013, rolante de fs. 1.846 a fs. 1.847 (Tomo VI), ratifica declaraciones y suma que en la guardia de la unidad se encontró con la señora Meza Moncada en calidad de detenida. En esa oportunidad fue a conversar con don Alfonso, quien le dijo que se la llevara. Que, por orden del mayor Jofré, tuvo que servir como dactilógrafo a Alfonso Podlech mientras interrogaba a la señora Meza Moncada. En cuanto a las funciones de Alfonso Podlech era tomar declaraciones a los detenidos. Replicando haber intercedido ante Alfonso Podlech por un deportista amigo, recordando muy bien lo relatado porque fue lo único que efectuó con Alfonso Podlech en el regimiento Tucapel de Temuco.

En declaración judicial de fecha 20 de diciembre de 2006, rolante de fs. 3.806 bis a fs. 3.808 (Tomo XI), alude que para septiembre de 1973 prestaba funciones en el regimiento Tucapel de Temuco, trabajando en administración de fondos como dactilógrafo. Que es posible que haya interrogado a esta persona, porque estuvo, al parecer una tarde cooperándole a Alfonso Podlech en la toma de declaraciones. Lo anterior, por órdenes. Sin embargo, solo tomó declaraciones a dos personas, pero quien interrogaba era Alfonso Podlech, a quien ese mismo día le pidió que ayudara a dos civiles que el deponente conocía y que estaban detenidas. Las declaraciones las tomo en la oficina del jefe de la plana mayor. Que a la única persona que recuerda haber visto “muy maltratada producto de las torturas” fue a Rubén Morales Quijada, apodado “milico”, quien era su amigo, quien estaba detenido en el calabozo de la sala de guardia del regimiento. Refiere que el capitán Ubilla y su grupo tenían habilitada una cuadra en la primera compañía para interrogar. Lo que sí sabe es que los militares disponían de los detenidos a “su antojo”.

En declaración judicial de fecha 30 de agosto de 2012, rolante de fs. 3.809 a fs. 3.810 (Tomo XI), ratifica declaraciones y dice que el trabajo cotidiano de la fiscalía, como interrogar, tomar decisiones con respecto de los detenidos era de Alfonso Podlech. Comunica que se intercedía ante Alfonso Podlech, porque este

decidía la suerte de los detenidos. Que el comandante Jofré le dijo personalmente cuando estaba de guardia, que las decisiones respecto a un grupo de detenidos que llegaron entre los que había mujeres, debía tomarlas Alfonso Podlech. Por esa razón intercedió ante Podlech por las mujeres que conocía. Replica que la oficina de plana mayor era ocupada por la Fiscalía Militar. Que en lo formal el comandante Jofre era el fiscal militar, pero todas las decisiones de la Fiscalía Militar las tomaba Podlech. Aduce que Alfonso Podlech tenía el poder de decidir lo que pasaba con los detenidos. Por esa razón se intercedía ante él por ellos. En una oportunidad andaba buscando a su “jefe Tichauer” y vio por el ojo de la llave como le aplicaban electricidad a una mujer en sus senos. Que Tichauer y los oficiales García Covarrubias tenían que ver con las torturas y los detenidos.

En declaración judicial de fecha 12 de septiembre de 2013, rolante de fs. 3.811 (Tomo XI), expone que efectivamente estuvo por una tarde trabajando con Alfonso Podlech Michaud. Este tomaba declaraciones y el suscrito era el dactilógrafo. Situación que fue solo por una tarde y fue por orden del mayor Jofré. Replica haber intercedido por una profesora y la asistente social, ocasión donde conversó con el mayor Jofré, quien lo mandó a hablar con Alfonso Podlech, la decisión tomada por éste fue dejar en libertad a las mujeres y citarlas para el día siguiente. Interrogado dice que el mayor Jofré lo mandó a hablar con Alfonso Podlech.

En declaración judicial de fecha 20 de diciembre de 2006, rolante de fs. 3.813 a fs. 3.814 (Tomo XI), afirma que jamás trabajó tomando declaraciones en la Fiscalía Militar. En lo pertinente señala que es posible que haya interrogado a esta persona (refiriendo a María Meza Moncada), porque estuvo al parecer una tarde cooperándole a Alfonso Podlech en la toma de declaraciones. Sin embargo, solo tomó declaración a estas dos personas, pero quien interrogaba era Alfonso Podlech, a quien ese mismo día le pidió que ayudara a dos civiles que el deponente conocía y que estaban detenidas. A la única persona que recuerda haber visto muy maltratada producto de las torturas, fue a Rubén Morales Quijada, quien era su amigo, relatando donde lo vio y las condiciones en que se encontraba. Recuerda que entre los detenidos venían una profesora con su hijo y una asistente social por quienes intercedió ante Alfonso Podlech para que quedasen en libertad. Que el capitán Ubilla y su grupo tenían habilitada una cuadra en la primera compañía para interrogar personas. Recordando que en una

oportunidad se acercó a ese lugar para conversar con el teniente Tichauer, quien estaba presente en los interrogatorios.

En declaración judicial de fecha 12 de septiembre de 2013, rolante de fs. 3.817 (Tomo XI), ratifica declaraciones judiciales insistiendo que efectivamente estuvo una tarde trabajando con Alfonso Podlech Michaud. Este tomaba declaraciones y el deponente era el dactilógrafo, todo por orden del mayor “Cofré”. Refiere que intercedido por las personas que mencionan en sus declaraciones, que conversó con el mayor “Cofré”, quien lo mandó hablar con Alfonso Podlech. La decisión la tomaba éste, y fue dejar en libertad a esas mujeres y citarlas para el día siguiente.

En declaración judicial de fecha 10 de mayo de 2017, rolante de fs. 3.819 a fs. 3.819 vuelta (Tomo XI), ratifica declaración y el Tribunal le lee las preguntas acompañadas en otros autos por la defensa de Pedro Guillermo Tichauer Salcedo. Y dice que lo conoce porque era el oficial de intendencia para la época de 1973. Que Pedro Tichauer era el contador del regimiento Tucapel. Respecto a los hechos que menciona en la relación a la sala de tortura, agrega que en esa oportunidad había una llamada urgente desde la jefatura de Valdivia para su jefe, Tichauer. Entonces salió a buscarlo para avisarle de la llamada, dirigiéndose a la primera compañía y le preguntó al soldado que estaba ahí, si es que había visto al teniente Tichauer, respondiéndole afirmativamente, pero que el deponente no podía pasar. Le dijo al soldado que al teniente Tichauer lo estaban llamando de Valdivia, que era urgente. En eso se dirigió a la sala y escuchó un lamento de una mujer, miró por el ojo de la llave, vio bultos, medios de espaldas el cuerpo de un hombre, pero no la cara, sin embargo, reconoció la voz de su jefe, Tichauer, que decía “perrita, es mejor que hables”. Que el mismo soldado que estaba en la entrada le dijo que el teniente Tichauer estaba en la sala que mencionó. Replica que era Pedro Tichauer, que ya lo ha declarado. Que, en esa oportunidad, cuando escucho lo que relató, Tichauer no andaba sacando firma, ya que no era la oficina del capitán Ubilla. Que la oficina donde fue a buscar a Tichauer estaba ubicada en la primera compañía, al final de esa dependencia.

A.62. Oscar Manuel Seguel Jofre

En declaración extrajudicial de fecha 29 de agosto de 2017, rolante de fs. 2.766 a fs. 2.768 (Tomo VIII), proclama que el día 23 de septiembre de 1973, es detenido por funcionarios de carabineros y militares, en su domicilio. Luego de su

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

detención en la comisaría de Pitrufquén es trasladado al regimiento Tucapel, donde es dejado en un gimnasio el cual se encontraba lleno de personas torturadas, lugar en donde es torturado en diversas oportunidades. Precisa que permaneció detenido en el regimiento Tucapel a los días posteriores del golpe de Estado, recuerda que fueron seis días los que ahí estuvo, siendo torturado bajo la aplicación de corriente eléctrica en una dependencia de este, distinta al gimnasio, reconociendo dentro de sus torturadores al capitán Nelson Ubilla Toledo, estando en su conocimiento que también en esos interrogatorios participaban dos tenientes cuyas identidades desconoce. Respecto al señor Podlech, quien asumió la labor de Fiscal, lo recuerda en una oportunidad que lo golpeó en una oficina ya que él quería que entregara las identidades de algunas personas, incluso quería que los acusara falsamente de la tenencia de explosivos.

A.63. Raúl Dagoberto Roa De La Jara

En declaración extrajudicial de fecha 17 de julio de 2015, rolante de fs. 2162 a fs. 2163 (Tomo VI), comunica que fue detenido 12 de septiembre de 1973, por carabineros de Pucón. Que junto con él fueron detenidos Faustino Escobar, Bernardino Quinteros y otros más cuyas identidades no recuerda. Recuerda que pasaron la noche en la unidad de carabineros de Pucón, siendo trasladados en horas de la mañana del día siguiente al regimiento Tucapel de Temuco, en una camioneta de propiedad de Guillermo Polack, la que al parecer fue conducida por él. Una vez que llegaron al regimiento, permaneció encerrado en un calabozo junto a otro grupo de detenidos, de los cuales no recuerda sus identidades. Es así, que era sacado del calabozo para ser interrogado por funcionarios militares, al tenor de que confesara dónde mantenía las armas escondidas y su participación en el adiestramiento de mil quinientos guerrilleros al interior de las instalaciones de "CONAF" en Pucón. En ese sentido, recuerdo que durante su estadía en alguno de los centros de detención por los cuales pasó, conoció a una persona de apellido Figueroa, desconociendo mayores antecedentes al respecto.

En declaración judicial de fecha 29 de julio de 2015, rolante de fs. 2.171 a fs. 2.172 (Tomo VII), ratifico su declaración y complementa sus dichos en el sentido que al día siguiente fueron llevados al regimiento Tucapel, donde estuvieron hasta la noche. Durante ese período fueron interrogados por distintas personas, todos militares, aunque no todos los uniformes eran del mismo tipo, por lo que presume que había oficiales, suboficiales y conscriptos en el grupo. En la

noche les vendaron la vista, y fueron subidos a un camión militar, aunque al parecer iban más móviles. Recuerdo que por los giros que hizo el camión los llevaron al sector de la isla Cautín, pero finalmente el móvil tomó rumbo hacia la base aérea Maquehue.

A.64. Erasmo Ricardo Villanueva Simón

En declaración judicial de fecha 18 de junio de 2012, rolante de fs. 1.674 a fs. 1.677 (Tomo V), soslaya que para el año 1973 se desempeñaba en una oficina de contabilidad de Sergio Riquelme Inostroza. Un día del mes de noviembre del año 1973, no recuerda fecha exacta, fue al Seguro Social a efectuar un trámite. En ese lugar la señora María Antonieta Meza Moncada le preguntó por la dirección de la familia de Alejandro Flores Rivera, pues quería ir a darle el pésame por la muerte de éste. A su parecer esta señora estaba siendo vigilada, pues a los pocos días fue detenida y llevada al regimiento Tucapel, donde fue brutalmente torturada. Días más tarde llegó hasta su casa una patrulla de militares del regimiento Tucapel, quienes allanaron su domicilio. Un suboficial, cuyo grado, características y nombre no recuerda, le dijo que por orden del capitán Nelson Ubilla Toledo quedaba detenido. Lo llevaron a la guardia del regimiento Tucapel y allí fue ingresado a una dependencia contigua, donde había varios detenidos más, con quienes no converso. Que también durante ese lapso iban sacando a los detenidos hacia otro sector, quienes regresaban más tarde con visibles signos de haber sido torturados. En ese lugar existía un banco similar a los que están en las plazas; lugar que era utilizado para dejar a los prisioneros que quedaban en muy malas condiciones. Al tercer día fue sacado de la guardia y llevado hacia una dependencia ubicada en una de las cuadras donde se alojaban los conscriptos. Esta cuadra era la tercera construcción dispuesta hacia el poniente de la entrada al regimiento. En esa sala cuando entró pudo ver una mesa larga, en la que estaban sentadas cinco personas, entre las que puede recordar un oficial vestido con uniforme de la fuerza aérea y cuatro civiles, uno de los cuales era el abogado Alfonso Podlech Michaud, persona a quien ubicaba de vista con anterioridad. También pudo ver una banca similar a las de las plazas. No recuerda quién le preguntó el nombre, pero luego de que revelara su identidad el abogado Alfonso Podlech buscó en un tarjetero que tenía junto a él sobre la mesa y sacó un papel. Luego de mirarlo dio una orden señalando que quedaba detenido y que al día siguiente pasaba a interrogatorio. Que pudo percatarse que se dirigían hacia la

misma sala, donde el día anterior había sido interrogado por Podlech. En ese lugar lo hicieron desvestir y lo sentaron en la banca que había visto el día anterior. Acto seguido comenzaron a aplicarle electricidad con un magneto. Que por el lenguaje utilizado por las personas presentes en la sesión de tortura presume que era gente con instrucción y cultura superior a la de un soldado clase. Una semana antes fue llevado al regimiento Tucapel y allí lo ingresaron a una dependencia ubicada hacia el fondo de la unidad militar, donde se entrevistó con el abogado Alfonso Podlech. En ese lugar esta persona le dijo que por decisión del tribunal quedaba en libertad a partir del 22 de diciembre, por lo que debía avisarle a su familia para que se preparara.

A.65. Elías Amar Amar

En declaración extrajudicial de fecha 5 de noviembre de 2003, rolante de fs. 1.288 a fs.1.289 (Tomo IV), expuso que fue detenido el 14 septiembre 1973 en horas de la noche, que esa misma tarde los mismos soldados de la fuerza aérea lo trasladaron a la fiscalía militar del regimiento Tucapel, donde fue llevado ante el fiscal militar, percatándose que se trataba de un conocido abogado llamado Alfonso Podlech, quien lo envió incomunicado a la cárcel pública de Temuco.

A.66. Herman Carrasco Paul

En declaración judicial de fecha 11 de diciembre de 2003, rolante de fs.1.298 a fs.1.302 (Tomo IV), expuso que para septiembre de 1973 era dirigente de las juventudes comunistas y el 17 de septiembre de 1973 detenido por personas de la fuerza aérea trasladando al recinto de dicha unidad, donde relata apremios físicos y torturas, luego dejado en libertad. Posteriormente fue nuevamente detenido por carabineros de la segunda comisaria de Temuco, y al día siguiente lo trasladaron al regimiento Tucapel y los ingresaron a un calabozo que estaba detrás de la guardia. Allí fueron recibidos entre otros, por Orlando Moreno Vásquez, a quien conocía porque eran vecinos. Estando en ese lugar fue vendado y conducido por Juan Carrillo hacia el gimnasio del regimiento donde fue sometido a tortura, mediante la aplicación de electricidad en todo el cuerpo. Calcula que eran cinco personas las que lo torturaban, entre las cuales reconoció la voz de Nelson Ubilla Toledo y Orlando Moreno Vásquez. En otra ocasión fue conducido a las dependencias de la segunda compañía en donde le sacaron la venda y conversó cara a cara con Nelson Ubilla Toledo y en presencia al parecer de Orlando Moreno, quien le dijo que lo sabían todo y que dijera dónde estaban

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

las armas. Que el día 8 de noviembre, aún en el gimnasio, los sacan de a uno hacia la fiscalía militar para firmar su libertad. Esto sucedió en presencia del cabo Schonherr y de Alfonso Podlech Michaud.

En diligencia de careo con Nelson Ubilla Toledo, de fecha 12 de diciembre de 2003, rolante de fs. 1.303 a fs.1.304 (Tomo IV), ratifica su declaración y agrego que el señor Nelson Ubilla Toledo, es a quien se ha referido en su declaración. Que el señor Ubilla es quien lo torturó y dirigía los interrogatorios. Quien argumentó que el motivo de conversar con él era el aprecio que le tenía a su suegro e iba a intentar salvarlo pues estaban todos condenados a muerte.

En declaración judicial de fecha 29 de diciembre de 2008, rolante de fs.1.314 a fs. 1.317 (Tomo IV), reitera sus detenciones y anexa que dos días después fue llevado junto a Juan Antonio Chávez hasta la oficina de la fiscalía militar, ubicada al interior del regimiento donde fue conminado a firmar un documento autoinculpatorio, el cual se negaron a suscribir. En ese lugar se encontraban Alfonso Podlech, Nelson Ubilla Toledo y Orlando Moreno Vásquez. Reproduce que se salvó gracias a su suegro René Beltrán Valdebenito, quien intercedió por él y conversó con Nelson Ubilla Toledo, sumando detalle.

En declaración extrajudicial, de fecha 5 de enero de 2009, rolante de fs. 1.323 a fs. 1.324 (Tomo IV), comienza refiriendo a lo acontecido en episodio denominado “el asalto polvorín”, y relatando su situación cuando fue detenido. En lo pertinente que el fiscal del regimiento Tucapel, el abogado Alfonso Podlech Michaud, este sí participaba de los interrogatorios, vestido de militar y con el grado de mayor, y fue él quien, les insistió en firmar un documento; que negaron a firmar y donde se hacían responsables como los jefes del “Plan Z”.

En diligencia de careo con Alfonso Podlech Michaud, de fecha 12 de agosto de 2013, rolante de fs. 1.831 a fs. 1.832 (Tomo VI), en lo pertinente comunica que conoce a Alfonso Podlech Michaud desde niño.

A.67. Edison Chihuailaf Arriagada

En declaración judicial de fecha 17 de marzo de 2012, rolante de fs. 1.656 a fs. 1.659 (Tomo V), expreso que los primeros días de octubre de 1973 llegó hasta su domicilio una patrulla militar que tenía órdenes para detenerlo, siendo llevado al regimiento Tucapel de Temuco. Allí permaneció todo el día en una dependencia ubicada en la guardia de la unidad militar. Estando en ese lugar pudo ver mucha gente detenida, algunos de los cuales habían sido torturados, pues

presentaban claras muestras de haber sido golpeados. Entre éstos puede recordar a un joven de apellido Cortés, al parecer de nombre Fernando, esta persona llegó en muy malas condiciones traída por militares pues casi no podía mantenerse en pie. Que durante ese mismo día en que estuvo detenido en la guardia del Regimiento Tucapel pudo ver al abogado Alfonso Podlech vestido de traje de campaña, calzando botas y dos pistolas al cinto. Este hombre entró al guardia, visiblemente alterado, y comenzó a increpar a los soldados que se encontraba allí reunidos. Les dijo más o menos textualmente lo siguiente: "Oye po' esta es la última vez que les digo, no me dejen entrar más a estas mujeres y viejas de mierda, que me tienen loco con sus reclamos. Yo ya se los dije y si no me hacen caso los hago fusilar a ustedes también". Poco rato después entró al calabozo el mismo soldado que anteriormente le había pedido que le diera un plato de comida al detenido torturado. Se le veía muy apesadumbrado por lo que había sucedido con el abogado Podlech, al punto que se quejó diciendo que estaba harto de lo que estaba sucediendo y que no hallaba la hora de que todo esto terminara. Además, indicó hacia el lugar donde Podlech había estado señalando que ahora mandaban ellos, como dejando entrever que había personas ajenas al regimiento con mando.

A.68. Julio Cesar Guevara Guevara

En declaración judicial de fecha 11 de febrero de 2002, rolante de fs. 213 bis a fs. 215 (Tomo I), soslaya que entre esas personas detenidas estaba Elías Dagoberto González Ortega, joven de Villarrica a quien conocía en Huiscapi desde pequeño y eran amigos. Comunica que el 12 de octubre quedó en libertad. Que estando detenidos de pronto se realizaban llamados a los detenidos a presentarse a la guardia de la cárcel, entre esos llamados salió su amigo Elías, y desde esa ocasión no supo más de éste, ni lo volvió a ver. En cuanto al hermano de Elías, a saber, Hugo Arner no lo vio detenido, de haberlo visto lo recordaría, porque eran amigo de familia, pero no lo vio. Con relación a otras personas, solo escucho entre los llamados que hacían, a unos señores de apellido Schmidt Arriagada, pero no los vio. Conmemora que Elías le conto las circunstancias en que fueron detenidos, esto es cuando se disponían a salir del país, por un paso fronterizo de Curarrehue, siendo detenido junto a su hermano, pero a su parecer lo habrían separados, pero dice estar seguro de que nunca vio a Hugo Arner en la cárcel. Insiste que escuchó entre los llamados a Elías, a quien desde esa ocasión no volvió a ver. No puede

precisar la fecha del llamado, pero pensó que había quedado en libertad, aunque nunca más supo su suerte. Recuerda que otras personas llamadas a la guardia al igual que Elías, posteriormente eran ejecutados en el regimiento, acusados de haber querido escapar, recién ahí se dieron cuenta que los detenidos llamados a la guardia, no era para quedar en libertad, sino que corrían otra suerte, que quizás eso fue lo que ocurrió al joven González, aunque no tiene la certeza de lo ocurrido con éste. Relata su situación en la cárcel. Suma que pasado un tiempo se encontró con una prima de Elías González, llamada Zudelia Castro González, a quien le contó que había estado con Elías en la cárcel de Temuco en aquella época.

En declaración judicial de fecha 07 de diciembre de 2004 de fs. 416 a fs. 417 (Tomo II), arguye que conocía a la familia de Elías González Ortega, especialmente a sus padres y el día que se encontró con él en la cárcel pública de Temuco, éste se veía muy maltratado. Le preguntó por su hermano Hugo, sin embargo, no se acuerda qué fue lo que le dijo. No obstante, esto, él se veía muy preocupado por su hermano y por el resto de sus amigos. Le parece que este le dijo que su hermano habría huido junto a otros de sus amigos al momento de la detención. Que diariamente se leían listados de cinco o seis personas que eran requeridas en la guardia. Estas personas salían con sus cosas y ellos pensaban que era para otorgarles la libertad; sin embargo, después supieron que muchas de estas personas fueron dadas de baja en el regimiento por haber intentado fugarse.

En declaración extrajudicial de fecha 09 de marzo de 2012, rolante de fs. 624 a fs. 625 (Tomo II), revela que tomó contacto durante su reclusión con uno de los hermanos González Ortega, que nunca estuvo detenido al interior del Regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco, pero durante su permanencia en la Cárcel Pública de Temuco, se contactó con uno de los hermanos González, no recuerda cuál de ellos era, lo único que recuerda es que le preguntó por su hermano Elías, a quien conocía desde Villarrica, contestándole éste joven que Elías, había escapado por un paso fronterizo junto a otros amigos hacia Argentina.

A.69. Rolando Chávez Godoy

En declaración extrajudicial de fecha 04 de abril de 2016, rolante de fs. 3.314 a fs. 3.315 (Tomo X), invoca que en relación con su conocimiento sobre la detención de Héctor Aguayo en el mes de septiembre de 1973, inquiriere que no se enteró de dicha situación, sino hasta el día en que éste apareció en la oficina de

correos consultando por su persona, en aquella oportunidad recuerda que lo atendió apenas le avisaron y al tomar contacto con él lo saludó y le comentó que había estado detenido en el regimiento Tucapel y que incluso recién le habían dado la libertad. Dentro de la conversación que sostuvo con éste, le comentó también que había visto al interior del regimiento calidad de detenido a un profesor de Curarrehue, cuyo nombre es Manuel Humaña Jiménez. Por otra parte, interpreta que en una oportunidad se enteró por comentario de una persona, cuya identidad no puede recordar, que el carnet de identidad de Héctor fue encontrado a orillas del río Toltén a la altura de la comuna de Pitrufulquén.

A.70. Renato Ariel Saravia Flores

En declaración extrajudicial de fecha 12 de octubre de 2011, rolante de fs. 575 a fs. 577 (Tomo II), declara que para el año 1973 vivía en la localidad de Curarrehue, se desempeñaba como profesor de enseñanza básica en la Escuela N° 17 de esa localidad. El director de ese establecimiento era Manuel Humaña Jiménez. Para el año 1973 era simpatizante del gobierno del presidente Salvador Allende. Que fue detenido el día 11 de septiembre por carabineros del retén de Curarrehue quedando bajo arresto domiciliario, con firma diaria. El día 17 de septiembre, mientras realizaba ese trámite un carabinero le comunicó que lo trasladarían hasta Temuco. Lo subieron a una camioneta, que según recuerda pertenecía a la Corporación Nacional Forestal, en ese vehículo también iban Manuel Humaña Jiménez, Baldomero Salazar, Rubén Leal Riquelme, los hermanos René y Luis Díaz Cortez y los funcionarios de "CONAF" de apellidos Santana y Cid. La camioneta iba a cargo del carabinero Orlando Reyes Fernández, quien se acompañaba de dos carabineros más, siendo uno de ellos Castilla. En horas de la tarde llegaron a Temuco, dejándolos en dependencias del Regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco. Personal militar los llevó hasta el gimnasio de ese recinto militar; donde había cerca de cien personas, los dividieron en grupos, no recordando quienes eran los integrantes de su grupo. Les dieron comida y los mantuvieron hasta cerca de las veinte horas, para posteriormente trasladarlo junto al grupo con que había llegado hasta dependencias de la cárcel pública de Temuco, no pudiendo precisar cuánto tiempo. Cuando salió de la cárcel pública de Temuco, junto con una parte del grupo con que había llegado, fueron llevados por personal militar nuevamente hasta el regimiento Tucapel, hasta la oficina de fiscal militar Podlech, quien de

manera prepotente y grosera les manifestó que “no nos metiéramos más en problemas y que volviéramos a nuestros lugares de origen”. En cuanto a Héctor Aguayo Olavarría, Hugo y Elías Gonzalez Ortega, Juan y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa y Raúl Figueroa Burkhardt, solamente recuerda a la persona de apellido Aguayo, a quien vio junto a un grupo de jóvenes al interior de la cárcel pública de Temuco. Esta persona era el más joven del grupo y lo conoció por intermedio de Manuel Humaña al interior de la cárcel.

En declaración judicial de fecha 30 de mayo de 2012, rolante de fs. 690 a fs. 691 (Tomo II), ratifica su declaración extrajudicial y de lo que está seguro es que, esos jóvenes, que eran entre siete y nueve, se les acercaron cuando supieron que también venían detenidos desde Curarrehue. Esos jóvenes no superaban los veinte años en promedio, y a uno de ellos le decían "Chuma". Esa persona era quien le daba ánimo sus compañeros. Que en el regimiento fue interrogado por el abogado Podlech, quien según todos los comentarios que escuchó en la cárcel, era el fiscal militar de la época. Esta persona fue muy prepotente con ellos. En un principio pensó que era un militar porque se comportaba con mucho odio hacia los detenidos. Que Podlech fue quien los interrogó uno por uno ese día fueron a la fiscalía militar. Relata otros hechos y respecto de las víctimas de autos dice desconocerlos. Sin embargo, los asocia con los jóvenes que vio en Temuco junto a ellos.

A.71. Baldomero Osvaldo Salazar Salgado

En declaración extrajudicial de fecha 12 de octubre de 2011, rolante de fs. 578 a fs. 580, (Tomo II), escruta que para el año 1973 tenía 21 años y se desempeñaba como profesor de historia y geografía en la Escuela N° 17 de Curarrehue, de la cual su director era Manuel Humaña Jiménez. Que era militante del Partido Comunista para la época y fue detenido el 11 de septiembre de 1973 a manos de personal de carabineros del retén de Curarrehue, quedando bajo arresto domiciliario, el cual duro hasta el día 17 de septiembre, día en que los funcionarios de carabineros decidieron ir a buscarlo a su domicilio y comunicarle que sería trasladado hasta la ciudad de Temuco. Recuerda que lo hicieron abordar un Jeep de color verde en cuyo interior estaba en calidad de detenido Renato Santana, funcionario de la Corporación Nacional Forestal. Ese vehículo iba a cargo de unos carabineros, cuya identidad no recuerda, los llevaron hasta la comisaría de carabineros de Pucón, lugar donde abordó el Jeep, en calidad de

detenido, un señor de avanzada edad cuyo apellido era Matta. Posteriormente, siguieron el trayecto llegando a la ciudad de Temuco hacia el regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco, lugar donde los efectivos militares los llevaron hasta un patio, donde había otros detenidos, no superando las cincuenta personas, según lo que recuerda. Agrega que en otros vehículos iban otros detenidos provenientes de Curarrehue y otros sectores, recordando que uno de ellos iba su colega de nombre Renato Saravia, junto a Manuel Humaña, los hermanos René y Luis Díaz Cortez, Luis Cid y otro profesor de nombre Rubén Leal Riquelme. Una vez a disposición de los efectivos militares, recuerda que estos los hicieron formar en dos filas, quedando separado momentáneamente del resto de sus colegas. Consecutivamente, los hicieron ingresar a un recinto cerrado similar a un gimnasio, donde les dijeron que se acomodaran ahí porque pasarían la noche en el lugar, cosa que no sucedió porque esa misma noche a eso de las 23:30 horas fueron trasladados hasta la cárcel pública de Temuco, ignorando el destino de las personas que estaban en la otra fila. Permaneció en la Cárcel Pública de Temuco hasta el día 05 de octubre del año 1973. Recuerda que, al interior de la Cárcel Pública, el señor Humaña le presentó a Servando Castillo, quien era de Pucón y a quien había llevado detenido con anterioridad al 11 de septiembre junto a una persona que le apodaban el "Pillé Carrasco", otro apodado el "Piden", quien era botero de Pucón, y otra persona de apellido Muñoz, apodado el "Pluma", quien era hermano de un profesor de Loncoche de nombre Alfonso Muñoz. Las personas antes mencionadas fueron detenidas por efectivos militares quienes, según la información que maneja, llegaron a Curarrehue en un helicóptero. También en la cárcel pública de Temuco pudo ver a aun conocido al que conocía por el apodo de el "Flaco Chávez", quien era secretario general de las juventudes comunistas. Recuerda que no pudo conversar con él, pero sí tiene claro que una noche, cree que, durante las fiestas patrias, lo sacaron de la cárcel y no lo volvió a ver. Tiempo después por medio de la prensa local se enteró que Chávez, junto a otras personas había muerto en un intento de asalto al Polvorín del Regimiento Tucapel, hecho que bajo ningún concepto creyó. Respecto a Héctor Aguayo Olavarría, Hugo y Elías González Ortega, Juan y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa y Raúl Figueroa Burkhardt, por nombre no los conoció, pero si tiene en su recuerdo que al interior del regimiento Tucapel conversó con un muchacho joven, de aproximadamente dieciocho a veinte años,

que le comentó que estaba con su hermano y que su padre era dueño de un aserradero en Curarrehue. Hace presente que ese joven no lo volvió a ver más, como al resto de las personas que estaban en la fila en la cual estaba él en un principio. Prosigue relatando la segunda vez que fue detenido por personal de la fuerza aérea.

En declaración judicial de fecha 30 de mayo de 2012, rolante de fs. 692 a fs. 693 (Tomo II), ratifica su declaración extrajudicial de fs. 578 a fs. 580. Y en lo pertinente dice que en el regimiento fue interrogado, pero no recuerda quién lo hizo. Que desconoce las identidades de las personas desaparecidas, pero, sin embargo, los asocia con los jóvenes que vio en el regimiento de Temuco, en la fila en que inicialmente estaba ubicado. Recuerda que dos eran hermanos cuyo padre tenía aserradero, según dijo uno de ellos. Además, le dijo que ellos se iban a Argentina cuando fueron atrapados en la cordillera. Reanuda su relato en cuanto a su segunda detención, detallando la misma.

A.72. Luis Brunel Cid Hernández

En declaración judicial de fecha 22 de junio de 2013, rolante de fs. 1.205 a fs. 1.207 (Tomo IV), suma a sus dichos que cuando ingresó al gimnasio del regimiento Tucapel pudo ver a Héctor Aguayo Olavarría, a quien le decían "el Chachi", quien era un joven de Curarrehue a quien conocía. Se acercó y le preguntó cómo estaba y qué hacía allí. Éste le dijo que había sido detenido junto con otros jóvenes con quienes había intentado cruzar la frontera hacia Argentina. Sin embargo, durante el viaje uno de ellos se desistió de huir y quiso regresar por lo que todos se volvieron, siendo detenidos por carabineros durante el trayecto. Le señaló también, que estaba muy maltratado y que apenas se podía tocar los genitales. Además, su cara y su cuerpo lo noto visiblemente hinchado, por lo que no era difícil pensar que había sido torturado. En un momento determinado Héctor Aguayo y René Díaz fueron sacados juntos del gimnasio, siendo esta la última vez que vio a Aguayo. A René Díaz lo volvió a ver en 1976, pero no conversaron sobre el tema. Ese mismo día fueron llevados a la cárcel de Temuco, donde permanecieron hasta el día 27 de septiembre de 1973. Fue liberado junto a Renato Santana.

A.73 Renato Santana Dubreuil

En declaración extrajudicial de fecha 13 de octubre de 2011, rolante de fs. 581 a fs. 583 (Tomo II), cuenta que fue detenido en tres oportunidades, la primera

el 12 de septiembre de 1973, por carabineros que no eran dotación del retén de Curarrehue, y un grupo de civiles. Lo llevaron hasta el retén de Curarrehue junto a su compañero de labores Luis Cid. En el lugar también estaba detenido Luis Díaz, los tres abordan un vehículo y los trasladan hasta la comisaría de Pucón, donde pernoctaron y vio detenido a Benito Tapia. Al día siguiente, fueron trasladados por carabineros hasta la ciudad de Temuco, hasta la segunda comisaría de esa ciudad, posteriormente, fueron llevados hasta el regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco, para quedar en libertad al día siguiente. El 14 de septiembre, fue notificado por carabinero que quedaba bajo arresto domiciliario hasta el día 17 de septiembre, nuevamente detenido por carabinero. En esa oportunidad el grupo de detenidos aumentó, recordando a los profesores Manuel Humaña, uno de apellido Barrales, Renato Saravia, Rubén Leal, los hermanos René y Luis Díaz y su colega Luis Cid. Siendo nuevamente trasladados hasta la comisaría de Carabineros de Pucón, seguidamente a segunda comisaría de Carabineros de Temuco, y posteriormente entregados a efectivos militares del regimiento Tucapel de Temuco, lugar en que permanecieron unas horas para ser llevados finalmente a la cárcel pública de Temuco. En cuanto a Héctor Aguayo Olavarría, Hugo y Elías González Ortega, Juan y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa y Raúl Figueroa Burkhardt, recuerda solamente a Héctor Aguayo Olavarría, a quien conocía por el apodo del "Chachi", quien para la época tenía cerca de 16 años. A "ese muchacho lo vi al interior del regimiento Tucapel", no recuerda en cuál de sus estadías, solo recuerda que al verlo intercambió un par de palabras con él en el baño del gimnasio del regimiento, pero no recuerda lo que alcanzaron a conversar, el hecho es que fue la última vez que lo vio.

En declaración judicial de fecha 25 de junio de 2015, rolante de fs. 3.858 a fs. 3.861 (Tomo XI), reitera que fue detenido junto a Luis Cid y un señor de apellido Brevis, replicando sus dichos en cuanto fueron trasladados a diferentes unidades y que el día 17 de septiembre de 1973 fue nuevamente detenido por carabineros, esta vez junto a Luis y René Díaz Cortez, más los profesores Humaña, Leal, Salazar, Saravia y otros más cuyos nombres no recuerda. Que llegaron ese mismo día al Regimiento Tucapel de Temuco, donde fueron ingresados un gimnasio; en él había mucha gente. Allí vio al "Chachi" Aguayo, quien estaba junto a otras personas en la unidad militar antes señalada. Recuerda que este pidió ir al baño y él también, por lo que pudo intercambiar algunas

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

palabras en ese lugar. A su parecer estaba con el pelo como "mordisqueado". Después fueron separados en grupos y en filas, quedando René Díaz en una distinta a la de ellos, aunque después lo juntaron con ellos nuevamente. Después fueron llevados a la cárcel al igual que Santana, Humaña y los demás que iban de Curarrehue. Al "Chachi" no lo volvió a ver. Pormenorizando lo que le acaeció.

A.74. Juan Luis Díaz Cortés,

En declaración extrajudicial de fecha 13 de abril de 2011, rolante de fs. 476 a fs. 477 (Tomo II), refiere para el año 1973 tenía veintidós años, vivía en Curarrehue, simpatizante del gobierno de Salvador Allende, por tanto, era una persona conocidamente de izquierda. Con lo ocurrido el once de septiembre de ese año, y a raíz de sus ideales políticos y sociales fue detenido en unas oportunidades por personal de carabineros del retén de Curarrehue, quienes lo trasladaron hasta Temuco. La primera detención ocurrió el día 13 de septiembre de 1973, cuando concurrió a presentarse previa citación a carabineros, los que de inmediato lo trasladaron hasta la segunda Comisaría de Carabineros de Temuco, junto a Luís Cid, Renato Santana, ambos trabajadores de "CONAF", y al jefe de esa repartición cuyo nombre no recuerda y durante la mañana del día siguiente lo trasladan a la base aérea Maquehue, para luego dejarlo en libertad. La segunda detención fue el dieciséis de septiembre de ese mismo año; esa vez lo detuvieron desde la casa de sus padres en horas de la mañana. En esa oportunidad lo detuvieron junto a René Esteban, su hermano, y los llevaron a Temuco, pero esta vez directamente al regimiento de Infantería de Montaña N° 8 Tucapel. En ese lugar, los juntaron con otros detenidos dentro de los cuales estaba Ricardo Aguayo, hermano de una de las víctimas de la presente causa Héctor Aguayo Olavarría, quien también estaba en ese lugar, el cual recuerda como una cuadra de batallón. Afirma que conversó con Héctor, apodado "El Chachi", quien le señaló directamente que sabía que lo iban a matar los militares de ese lugar, pues ya se lo habían dicho. Recuerda que Héctor Aguayo le presentó a unos jóvenes hermanos que habían sido detenidos junto a él, cuyos apellidos eran Schmidt Arriagada, quienes eran de Villarrica. Que en horas de la tarde les ordenan formarse en el patio del regimiento, en el cual se encontraba un oficial, quien leyó un documento en el cual nombró a algunos de los detenidos, entre esos su hermano René Díaz Cortes a Héctor Aguayo Olavarría y a los hermanos Schmidt, entre los que recuerda. Esos prisioneros fueron llevados hasta la guardia del

regimiento, lugar donde, luego de un par de horas, solamente sacaron a su hermano, quien se reunió con él y los demás detenidos, quedando en el calabozo el resto de los prisioneros a quienes nunca más volvieron a ver. Posteriormente, fueron llevados hasta la cárcel pública de Temuco, quedando en libertad, según recuerda, el día dieciocho o diecinueve de septiembre de ese año. Que el oficial que apartó a los detenidos, dentro de los cuales estaban Héctor Aguayo, los hermanos Schmidt y su hermano, era una persona de aproximadamente veinticinco años, un metro setenta de altura, de contextura delgada, pelo rubio, ojos de color azul, piel blanca y ocupaba bigote. Suma que fue el abogado Alfonso Podlech Michaud quien firmó como fiscal su orden de libertad y la de su hermano, lo anterior fue porque pudo ver dicho documento, recordando la firma de ese señor.

En declaración judicial de fecha 7 de junio de 2011, rolante de fs. 486 a fs. 488 (Tomo II), ratifica su declaración extrajudicial de fs. 476 a fs. 477 y complementa sus dichos en el sentido de aclarar que se encontró en dos oportunidades con Héctor Aguayo cuando fue detenido, siendo la primera de ellas en la comisaría de Pucón. En ese lugar pudo constatar que Héctor había sido torturado, pues presentaba evidentes signos de maltrato físico. Después se encontraron en el regimiento Tucapel. No recuerda si fueron trasladados juntos o por separado, por eso tiene la impresión de haberlo visto dos veces mientras estuvo cautivo. El grupo de carabineros que lo detuvo en las dos oportunidades en Curarrehue pertenecía a un destacamento que había llegado hace poco a esa comuna, no reconociendo a ninguno de ellos como pertenecientes a la dotación permanente. Recuerda que un capitán de nombre Juan, llegó junto con ellos y era quien daba las órdenes para detener personas. Que en la segunda detención fue trasladado desde Curarrehue a Pucón, y de allí hasta el regimiento Tucapel. Estuvo una noche en ese lugar junto a los ya nombrados más Manuel Humaña, su hermano René Esteban Díaz y otras personas cuyos nombres no recuerda. En aquella oportunidad fueron trasladados en una camioneta de un particular cuyo nombre es Clorindo Mena. En el regimiento fueron mantenidos en una cuadra cercana a la guardia, custodiados por conscriptos. Respecto del oficial que leyó el listado de detenidos entre los que figuraban los hermanos Schmidt y Héctor Aguayo, recuerda que era rubio, de ojos azules y usaba bigote. Al día siguiente fueron trasladados a la cárcel. Dos días más tarde su hermano y él fueron

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

liberados. Héctor Aguayo y los hermanos Schmidt no llegaron a la cárcel junto con ellos e ignora que sucedió con ellos, pues fueron apartados del grupo en el regimiento. Respecto de las demás personas que aparecen como víctimas en autos, sólo recuerda los nombres de los hermanos Schmidt y de Elías González, pues fue el propio Héctor Aguayo quien se los presentó mientras estuvieron detenidos en el regimiento.

En declaración judicial de fecha 20 de mayo de 1991, rolante de fs. 517 a fs. 518 (Tomo II), replica que, en el mes de septiembre de 1973, fue detenido por carabineros de Curarrehue, llevado hasta Pucón, y desde ahí llevado hasta el regimiento Tucapel de Temuco. La primera vez fueron cuatro personas y la segunda detención iban más personas, el profesor Humaña y dos profesores más, tres funcionarios de "CONAF", él y su hermano Esteban Díaz Cortés; los transportaron en una camioneta de propiedad de Cloro Mena, los llevó personal de carabineros hasta la subcomisaria de Pucón y desde allí los llevaron al regimiento Tucapel de Temuco. En ese lugar se encontraron con los hermanos Schmidt Arriagada y Héctor Aguayo. Recuerda que les contaron que ellos eran un grupo de seis muchachos entre quince a dieciocho años y decidieron arrancar a Argentina, pero como algunos de ellos eran muy jóvenes, se pusieron a llorar por la mamá y tuvieron que regresar. Rememora que Aguayo dijo que venían por Caburgua cuando fueron detenidos por carabineros. Que efectivamente después de unos días llamaron a diez personas, entre las cuales se encontraban los hermanos Schmidt, Héctor Aguayo y su hermano Esteban Díaz, los llevaron a otras dependencias; los nueve restantes nunca más regresaron al regimiento y no los volvieron a ver. Su hermano regresó casi inmediatamente, ya que al pasarles lista lo dejaron inmediatamente. Posteriormente, cuando fue llevado a la cárcel de Temuco, encontró a otro joven conocido como Ricardo Aguayo y le comentó lo sucedido con su hermano, manifestando que no lo había visto. Después ya no volvió a verlos, porque junto a su hermano fueron puestos en libertad el dieciséis de septiembre de ese año y nunca más fueron detenidos. Quedó con la obligación de presentarse a firmar todas las mañanas en el cuartel de carabineros de Curarrehue. Que solo vio una vez a esos jóvenes ya que el mismo día que llegó, los llamaron y no los volvieron a ver. Ignora que sucedió con ellos, solo existen comentarios de que fueron fusilados.

En declaración judicial de fecha 18 de junio de 2015, rolante de fs. 2.101 a fs. 2.102 (Tomo VI), viene en complementar sus dichos en el sentido de que fue detenido la primera vez entre el doce y catorce de septiembre de 1973. Sus aprehensores fueron carabineros de Curarrehue, siendo trasladado junto a Luis Cid, Renato Santana y el jefe de "CONAF" de esa localidad, que era de apellido Tapia. Recuerda que pasaron a la comisaría de Pucón donde los bajaron a todos e ingresaron a los calabozos. Allí estuvieron por lo menos un par de horas. De pronto reconoció de entre los detenidos a Héctor Aguayo Olavarría, alias "Chachi", a quien conocía desde que era un niño. Adiciona que este se veía muy maltratado físicamente, presentaba un testículo inflamado y tenía rapado el pelo en la parte superior de la cabeza. Que el "Chachi" le dijo que había sido detenido camino de Caburgua junto a otras personas con quienes pretendía huir hacia la Argentina, pero que en el trayecto uno de ellos se había arrepentido y se había puesto a llorar, por lo que decidieron regresar a Villarrica. En eso fueron interceptados por una patrulla que los detuvo, que habían sido interrogados respecto de la posesión de armas y el lugar donde las tenían escondidas, al tiempo que los sometieron a golpizas interminables. Que quienes venían de Curarrehue fueron nuevamente subidos un vehículo, no recuerda cual, y llevados a la segunda Comisaría de Temuco, donde pasaron la noche. Que Aguayo y los demás quedaron en Pucón. La segunda vez que vio al "Chachi" fue el día diecisiete de septiembre, cuando fueron nuevamente detenidos en Curarrehue y llevados al regimiento Tucapel de Temuco. Aguayo y otras personas estaban en esa oportunidad en la unidad militar. Recuerda que este se le acercó y conversaron nuevamente. A su parecer estaba con el pelo completamente rapado. Allí le presentó a unos jóvenes, dos de apellido Schmidt y dos de apellido González. El "Chachi" le dijo que sabía que los iban a matar porque alguno de los militares se lo había dicho. Que tenía mucho temor. Después fueron separados en grupos y en filas, quedando el "Chachi" en una fila junto a sus compañeros y a su hermano René Díaz; en tanto que él quedó en otra. Que de la fila del "Chachi" solo regresó su hermano, junto a quien después fueron llevados a la cárcel, al igual que Santana, Humaña y los demás que habían llegado de Curarrehue. Al "Chachi" y a sus amigos no los volvió a ver.

En declaración de fecha 19 de junio de 2015, rolante de fs. 4.141 a fs. 4.144, (Tomo XII), insiste que en 1973 vivía en Curarrehue junto a sus padres y sus hermanos, que fue detenido en dos oportunidades, una de ella fue el día 13 de

septiembre de 1973 por carabineros, quienes llegaron hasta su domicilio, llevándolo al retén, donde estaban ya detenidos Renato Santana Dubreuil, Luis Cid Hernández y Benito Tapia. En el retén estuvieron en la guardia, lugar en el que había un teniente de apellido Figueroa Nieto, quién ordenó que fueran llevados a Temuco. Los subieron a una camioneta de propiedad de un civil de nombre Clorindo Mena y emprendieron el viaje. Pasaron a la Comisaría de Pucón, donde los ingresaron a los calabozos. Allí estuvieron por lo menos un par de horas. Reconociendo de entre los detenidos a Héctor Aguayo Olavarría, alias "Chachi", a quien conocía desde que era un niño. Adiciona que este se veía muy maltratado físicamente, presentaba un testículo inflamado y tenía rapado el pelo en la parte superior de la cabeza. El "Chachi" le dijo que había sido detenido camino de Caburgua junto a otras personas con quienes pretendía huir hacia Argentina, pero que en el trayecto uno de ellos se había arrepentido y se había puesto a llorar, por lo que decidieron regresar a Villarrica. En eso fueron interceptados por una patrulla que los detuvo, que habían sido interrogados respecto de la posesión de armas y el lugar donde las tenían escondidas, al tiempo que los sometieron a golpizas interminables. Los que iban de Curarrehue fueron nuevamente subidos a un vehículo, no recuerda cual, y llevados a la segunda Comisaría de Temuco, donde pasaron la noche. Replica que Aguayo y los demás quedaron en Pucón, continua relatado lo que le aconteció y en lo adecuado que el 17 de septiembre de 1973, cuando fue nuevamente detenido por carabineros, esa vez junto a su hermano René Díaz Cortez y los profesores Humaña, Leal, Salazar, Saravia y otros más cuyos nombres no recuerda, fueron trasladados a su parecer en un vehículo particular y llegaron ese mismo día al regimiento Tucapel del Temuco, donde fueron ingresados a un gimnasio en el que había mucha gente. Esa fue la segunda vez que vio al "Chachi" Aguayo, quien estaba junto a otras personas en la unidad militar antes señalada. Recuerda que se le acercó y conversaron nuevamente. A su parecer esta con el pelo completamente rapado. Allí le presentó a unos jóvenes, dos de apellido Schmidt y dos de apellido González. El "Chachi" le dijo que sabía que los iban a matar porque alguno de los militares se lo había dicho. Que tenía mucho temor. Después fueron separados en grupos y en filas, quedando el "Chachi" en una fila junto a sus compañeros y a su hermano René Díaz; en tanto que ellos quedaron en otra fila. De la fila del "Chachi" solo regresó su hermano junto a quién después fueron

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

llevados a la cárcel al igual que Santana, Humaña y los demás que llegaron de Curarrehue. Al “Chachi” y a sus amigos no los volvió a ver. Continúa su relato con relación a lo que le sucedió.

A.75. Manuel Antonio Humaña Jiménez

En declaración judicial de fecha 8 de febrero de 1991, rolante de fs. 501 a fs. 506 (Tomo II), replica que fue detenido por carabineros en Curarrehue y comunicado por el teniente Nieto Figueroa que debía ser llevado a Temuco, porque se había recibido instrucciones desde esa ciudad. Que había nueve personas en total, entre ellos Renato Saravia, Baldomero Salazar y otro de apellido Leal, Renato Santana y un tal “Luchín” y dos exalumnos suyos, Luis y Esteban Díaz Cortez. Que los llevaron hasta la unidad de carabineros en Pucón y posteriormente al regimiento Tucapel de Temuco. Allí pasaron por la guardia, los identificaron y quitaron la cédula de identidad y los llevaron a una especie de gimnasio cerrado, donde había aproximadamente ciento cincuenta o doscientas personas más. Al primero que reconoció fue a su alumno Héctor Domingo Aguayo Olavarría, quién al verlo se acercó y lo abrazó, poniéndose a llorar; le preguntó qué estaba haciendo allí y le dijo que el día antes, en circunstancias que iba a Curarrehue con un grupo de amigos, no dijo cuántos, fueron detenidos en el sector El Turbio de Pucón y que los habían llevado al regimiento. No recuerda si especificó quién lo había detenido, ni quienes eran sus compañeros de detención y por las circunstancias que estaban viviendo no se percató si él posteriormente se juntaba con otros jóvenes que hubiesen sido sus compañeros a los que había aludido. Recuerda que un sargento de ejército entró al gimnasio y conversó con muchas personas, les hacía preguntas y aconsejaba que dijeran la verdad que a nadie castigaron en esos momentos. Estuvieron allí hasta las dieciocho horas, cuando ingresó un capitán de ejército, de quién no sabe su identidad, les ordenó que se formaran y nombró a diez personas, las cuales debían dar un paso al frente, entre los nombrados estaban Héctor Aguayo y Esteban Díaz; los sacaron en dirección a la guardia y aproximadamente a las 20:30 horas regresó solo Esteban Díaz, ninguno de los otros nueve regresó al gimnasio. Que, según versiones de Díaz, los interrogaban uno a uno y cuando le tocó el turno a él, no lo interrogaron y lo mandaron de vuelta al gimnasio; no sabe que sucedió con las nueve personas restantes, lo que si tiene seguro es que, hasta las veintidós horas, en que fueron conducidos a la cárcel pública, no regresaron esas personas al

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

gimnasio. Fueron llevados en camiones y buses del regimiento hasta la cárcel. En la cárcel se encontró con un hermano de Héctor Aguayo, llamado Ricardo y le dijo que su hermano estaba en el regimiento Tucapel y que allí había quedado al ser ellos trasladados hasta la cárcel. Que permaneció en la cárcel diecinueve días; a los doce días llamaron voluntarios a declarar y reunió ciento veinte personas, los mismos que habían llegado detenidos desde Curarrehue, y se presentaron uno a uno frente a una comisión interrogadora compuesta por oficiales de ejército, no pudiendo distinguir grados, porque usaban el traje mimetizado; recuerda que a cargo del interrogatorio estaba un capitán, porque así lo nombraron sus compañeros que estaban de civil, como igualmente el jefe a cargo de los interrogatorios que era un señor de apellido Podlech de Temuco, que tenía el cargo de Fiscal Militar. Prosigue relatando lo que le acaeció y en lo adecuado que hasta su casa llegó en el mes de noviembre de 1973 el padre de Héctor Aguayo a requerir datos sobre su hijo ya que no supieron más de él desde que fue detenido y llamado en el regimiento Tucapel junto a ocho personas, de las cuales no se sabe nada hasta la fecha.

En declaración extrajudicial, de fecha 27 de noviembre de 2013, rolante de fs. 3.854 a fs. 3.857 (Tomo XI), reitera que fue detenido el día 17 de septiembre de 1973 en su domicilio en Curarrehue, por dos carabineros del retén Curarrehue. Lo llevaron detenido junto a los profesores Saravia, Salazar y Leal, hasta el mencionado retén donde se les informó que por un bando militar quedaban en calidad de detenidos y debían ser puestos a disposición de la Fiscalía Militar de Temuco. Fueron trasladados hasta la tenencia de Carabineros de Pucón, para posteriormente continuar viaje a Temuco al Regimiento de Infantería de Temuco, al cual llegaron a eso de las 13:00 o 14:00 horas. Cuando pasaron por la Tenencia de Carabineros de Pucón, solicitó hablar con el capitán Bustos Letelier, a quien conocía y le comentó lo que le estaba pasando, respondiéndole que éste que no estaba en conocimiento del bando militar u orden que disponía su detención, limitándose a decir que debía quedarse tranquilo. Agrega que junto a los profesores iban también detenidos unos funcionarios de "CONAF" y un señor de apellido Matta. Al llegar a Temuco les quitaron las cédulas de identidad y los ingresaron a un gimnasio, el cual estaba lleno de personas detenidas, recordando que encontró a un alumno y vecino de Curarrehue de nombre Héctor Aguayo Olavarría, a quién conocía por el apodo del "Chachi", quien al verlo le comentó

que había sido detenido por una patrulla de carabineros cuando junto a unos amigos iba camino a Caburgua o Curarrehue; no recuerda bien, pero el caso es que lloraba cuando le contaba esa situación, dándose cuenta que estaba muy asustado, por lo que trató de calmarlo. Posteriormente, a eso de las 18:00 horas, un oficial con el grado de capitán, les ordenó a todos los detenidos salir del gimnasio y les pidió que se formaran. Ese militar sacó una lista y llamó a diez personas dentro de las cuales estaba “El Chachi”, Esteban Díaz Cortés y un señor de apellido González; a ellos los separaron del grupo y cerca de las 22:00 horas regresa al gimnasio solamente Esteban, quién les comentó que al resto de los detenidos los habían ingresado a una dependencia y a él le habían ordenado regresar, perdiendo todo tipo de contacto con las demás personas. Que posteriormente a eso de las 00:00 horas fue trasladado, junto a los profesores antes mencionados y otros detenidos, hasta la cárcel pública de Temuco, donde permaneció cerca de 19 días. Señala que la última semana que estuvo en la cárcel, escuchó que el Fiscal Militar necesitaba diez voluntarios para declarar, esa situación se la informó a sus colegas, por lo que se inscribieron en el listado; es así que al día siguiente los comenzaron a llamar y fue presentado ante el Fiscal Militar Alfonso Podlech Michaud, quien le consultó su filiación política y otros antecedentes, recordando que le manifestó que nunca hubo orden en su contra y le dio a entender que su detención y la de los demás profesores fue por iniciativa propia de los carabineros de Curarrehue, representándole su molestia por ese hecho, ya que según el fiscal, ellos no debían estar detenidos, declarándole en ese momento que quedaría en libertad, situación que se llevó a cabo el día 5 de octubre de 1973. Refiere que el 7 de octubre de 1973, nuevamente fue detenido por una patrulla de la Fuerza Aérea de Chile de dotación de la Base Aérea Maquehue, y junto a los mismos profesores fue trasladado hasta el Retén de carabineros de Curarrehue relatando lo acontecido en esa oportunidad.

A.76. René Esteban Díaz Cortez

En declaración extrajudicial de fecha 13 de abril de 2011, rolante de fs. 474 a fs. 475 (Tomo II), proclama que viajó a Curarrehue a la casa de sus padres a celebrar el cumpleaños de su madre. Recuerda que fue la mañana del día siguiente cuando se encontraba en la casa de sus padres, llegó una patrulla de carabineros del retén del sector, quienes se llevaron detenido a su hermano Juan Luis, para posteriormente regresar una hora más tarde a detenerlo a él. Los

trasladaron hasta la ciudad de Temuco, hasta el regimiento de Infantería N° 08 Tucapel, donde fueron ingresados en un gimnasio, lugar donde había más personas detenidas y particularmente un grupo de ocho detenidos aproximadamente todos sentados en el suelo con las piernas cruzadas, amordazadas y con sus manos amarradas a la espalda. Dentro de ese grupo de se encontraba Héctor Domingo Aguayo Olavarría, a quien conocía desde Curarrehue con el apodo del "Chachi". Ese mismo día, pero ya en horas de la tarde sacaron a todos los detenidos al patio del regimiento, lugar donde los formaron y un militar, del cual desconoce rango e identidad, escogió un grupo de ocho a diez personas dentro de las cuales estaba Aguayo Olavarría y él, y los llevó hasta un calabozo ubicado en la sala de guardia que se ubica en la entrada del regimiento Tucapel. Pasada algunas horas, lo sacaron del calabozo y lo devolvieron al gimnasio integrándose al resto de los detenidos, dentro de los cuales se encontraban su hermano Juan Luis y Manuel Humaña Jiménez, quien era profesor y también iba detenido desde Curarrehue junto a ellos. Esta fue la última vez que vio a Domingo Aguayo, quien quedó en el calabozo de la guardia del regimiento. Respecto a la militancia política de Héctor Aguayo Olavarría, ignora si era militante de algún partido político y solo sabe que fue detenido en un paso fronterizo por una patrulla de carabineros, la cual estaba a cargo de un oficial que no pertenecía al retén de Curarrehue.

En declaración extrajudicial de fecha 13 de octubre de 2011, rolante de fs. 584 a fs. 585 (Tomo II), insiste que en su estadía en calidad de prisionero en el regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco, pudo ver que se encontraba detenido Héctor Aguayo Olavarría, quien también era oriundo de la ciudad de Curarrehue. Que las demás personas y cuyas identidades corresponden a Hugo y Elías González Ortega, Juan y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa y Raúl Figueroa Burkhardt, no recuerda haberlas conocido. Preguntado dice que no fue interrogado por personal militar, a pesar de que en un momento uno de los militares lo sacó del gimnasio y lo llevó junto al grupo donde estaba Héctor Aguayo, pero sin mediar explicación uno de los militares ahí presentes lo regresó nuevamente al gimnasio, lugar donde estaban sus conocidos de Curarrehue, junto a su hermano Juan Luis. Recordando que el lugar donde lo habían llevado los militares se ubicaba, a su parecer, a la entrada del regimiento, cree que ese lugar

correspondía a la guardia del regimiento, siendo ese lugar la última vez donde vio a Héctor Aguayo. Se le preguntan otras cosas.

A.77. Francisco Jerónimo Matta Iturra

En declaración extrajudicial de fecha 13 de marzo de 2012, rolante de fs. 626 a fs. 627 (Tomo II) arguye que es hijo de don Francisco Matta Aro, quien fue detenido en su fundo de Palguin Bajo, entre los días 13 y 14 de al año 1973 a manos de personal de carabineros de la comisaría de Pucón, recordando que uno de sus aprehensores correspondía a un capitán de carabineros de apellido Partarriet. Su padre fue detenido y trasladado en su propia camioneta, en primera instancia hasta la comisaría de Pucón, para luego ser derivado junto a Héctor Aguayo Olavarría y otro joven hasta la ciudad de Temuco, específicamente hasta el regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco, lugar donde al llegar quedaron a disposición del fiscal militar Alfonso Podlech Michaud, quien dispuso la expulsión de su padre por ser financista del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, hecho que era totalmente falso. Su padre, en más de una ocasión le hizo referencia que en el caso de Héctor Aguayo Olavarría y el joven que lo acompañaba, el fiscal Podlech, hizo mención, que se encargaría de ellos, no haciendo mayores comentarios. Esa fue la última vez que su padre vio a Héctor, debido a que en horas de esa misma noche fue trasladado hasta la cárcel pública de Temuco, lugar donde permaneció recluso cerca de diez días. Interrogado sobre Héctor Aguayo Olavarría, señala que lo conocía, ya que su padre era del partido Socialista y también amigo de su familia.

En declaración judicial de fecha 31 de julio de 2012, rolante de fs. 786 a fs. 787 (Tomo III), ratifica su declaración extrajudicial y afínica que está seguro de que fue el abogado Alfonso Podlech Michaud quien interrogó a su padre y a Héctor Aguayo Olavarría, porque su padre se lo dijo. Está seguro de que éste era el verdadero fiscal militar en Temuco y utilizaba al mayor Jofré como pantalla, ya que fue el propio Podlech quien le dijo a su padre que lo iba a expulsar y pudo comprobar su autoridad cuando conversó con éste. En cuanto a Héctor Aguayo Olavarría, lo conoció puesto que su padre Francisco Aguayo, fue candidato a regidor en 1967 junto con su persona. Reitera que su padre le dijo que Podlech junto con asegurarle que se iría expulsado, ordenó a Aguayo y a otra persona quedarse en la fiscalía para ser interrogados. Adiciona que Podlech ordenó la expulsión de otros ciudadanos extranjeros como Aberto Malvaldi que era el dueño

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

de la radio La Frontera y concesionario del teatro municipal de Temuco, don Máximo Eitel, presidente del Banco Sur.

A.78. José Eliseo Arriagada Vergara

En declaración extrajudicial de fecha 15 de noviembre de 1995, rolante de fs. 54 (Tomo I), funda que es tío de Carlos y Ricardo Schmidt Arriagada, desaparecidos desde el 13 de septiembre de 1973, que el 11 de septiembre de 1973, concurrió a Temuco a realizar diligencias a la oficina de tierras. Debido a que ese día ocurrió el golpe de Estado, debiendo quedar en la ciudad hasta el 13 en la mañana, fecha en la cual le autorización regresar a su casa. Al llegar al domicilio, su esposa le informó que los sobrinos Carlos y Ricardo, junto a los hermanos Hugo y Elías González Ortega, Juan de Dios Cabrera Figueroa y Héctor Aguayo Olavarría, había pasado la noche en su casa, y que se habían ido el día 12, en horas de la tarde con dirección a la frontera, tomando el camino Faja Molco, con la intención de pasar a Argentina. Según le dijo su esposa, esta determinación la tomaban porque tenía miedo a ser detenido, por cuanto todos pertenecían a juventudes socialistas. Después de lo narrado no se supo más de ellos, y uno diez años después, por comentarios se enteró que el grupo de jóvenes los había detenido en el trayecto y que lo habrían trasladados a la tenencia de carabineros de Pucón. También se le informó que el carabinero Quezada (fallecido), le comentó que no buscarán más a los jóvenes por cuanto ya no existían. De acuerdo con las averiguaciones de parte de la familia, no tuvieron una respuesta oficial sobre la suerte corrida por sus sobrinos. Que su hermana Aurora falleció intentando obtener antecedentes en la intendencia de Temuco.

A.79 Maria Inés Vásquez Ceballos

En declaración extrajudicial de fecha 15 de noviembre de 1995, rolante de fs. 55 a fs. 56 (Tomo I), explaya que es madre de Alejandro Escobar Vásquez desaparecido desde el día 13 de septiembre de 1973. Su hijo desapareció a los 18 años, soltero y trabajaba en una tornería, como operario. Pertenecía a las juventudes socialistas. En relación con la desaparición de su hijo, señala que el 11 o 12 de ese mes, carabineros allanó su domicilio al igual que otros del vecindario, en busca de armas o elementos políticos. Ese día estaba sola con sus hijos pequeños, Alejandro estaba en la casa de su hermana Adela. Carabineros al ver que no había lo que buscaban, se retiraron. El 13 de septiembre de ese año, Alejandro le comunicó en la mañana, que se iba con unos amigos del partido a

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Argentina, debido a que temía ser detenido o muertos por la represión. Alrededor de las 14:00 horas, sacó ropa de vestir y abrigo, le preparó cosas para comer. Desde ese momento nunca más ha vuelto a ver su hijo. En ese tiempo nunca tuvo ningún tipo de información sobre lo que ocurrió con esos jóvenes, no obstante haber conversado con madres de los otros muchachos que salieron con su hijo. Que hubo muchos comentarios entre los que recuerda, es que habían sido detenidos cuando trataron de cruzar la frontera y otro que decía que se encontraba viviendo en Argentina. No tiene conocimiento de lo ocurrido con ellos, ni quienes pudieron ser los autores de la detención.

A.80. Ricardo Secundino Figueroa Burkhardt.

En declaración extrajudicial en la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de fecha 29 de agosto de 1990, rolante de fs. 1.049 a fs. 1.050 (Tomo III). Expuso que el día 14 de septiembre un grupo de muchachos vinculados al partido socialista de Villarrica, su hermano, dos hermanos de apellido Gonzalez y uno o dos de apellido Schmidt, deciden huir hacia Argentina, por la ruta de Pucón. Hasta ese día estos jóvenes no habían sido perseguidos ni hostigados y piensa que su huida había mucho de aventura. No hay certeza de su detención, pero hasta hoy no se han vuelto a tener noticias de ellos. En los días posteriores hubo un suicidio en el río Toltén y en la búsqueda de su cuerpo, alguien vio el de su hermano, un señor Villalobos. Agregó que en Villarrica se sabe que hubo fusilamientos en el río Toltén.

A.81. Juan Escobar Vásquez

En declaración extrajudicial de fecha 5 de octubre de 2015, rolante de fs. 2.226 a fs. 2.227 (Tomo VII), señala que es hermano de la víctima Alejandro Escobar Vásquez, quién se encuentra desaparecido desde el día 13 de septiembre de 1973, cuando dejó el domicilio familiar tratando de escapar de Villarrica junto a un grupo de amigos. Respecto a su hermano Alejandro, señala que, para septiembre de 1973, tenía la edad de 17 años, ya había salido del colegio y solamente se dedicaba a trabajar de manera esporádica. Hace presente que era simpatizante de las juventudes socialistas. Sobre sus amistades, recuerda a los hermanos Schmidt, principalmente porque con ellos fue con los que intentó escapar a Argentina junto a otros jóvenes. Éste habría salido a la una de la tarde del hogar, sin dar información respecto a dónde se dirigía, solo sabe que le dijo a su madre que se tenía que ir, para lo cual ella le pasó una frazada y alimentos.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Posteriormente, estando en Concepción, se enteró que el hogar de sus padres fue allanado por personal de ejército, siendo esa situación la que hizo decidir a sus padres de manera definitiva no hacer mayores averiguaciones. Lo único que supo en una fecha posterior, fue que del grupo que escapó con su hermano había dos o tres personas más de las ocho que se conoce, quienes a mitad de camino decidieron regresar a Villarrica.

A.82. Vicente Edmundo Escobar Vásquez

En declaración extrajudicial de fecha 9 de octubre de 2015, rolante de fs. 2252 a fs. 2253, (Tomo VII), señala que es hermano de la víctima Alejandro Escobar Vásquez, quien desde el día 13 de septiembre de 1973 se encuentra detenido-desaparecido. Deja en claro que por los antecedentes que le aportó en vida su hermana Carmela, pudo enterarse que su hermano había intentado huir de Chile junto a un grupo de personas, de las cuales regresaron tres a Villarrica.

A.83. David Iván Figueroa Burkhardt

En declaración extrajudicial de fecha 14 de noviembre de 1995, rolante de fs. 57 (Tomo I), arguye que es hermano de Marcial Figueroa Burkhardt desaparecido en los días posteriores al 11 de septiembre de 1973. En esa época se encontraba trabajando en Temuco, aproximadamente el 17 de septiembre de ese año, llamó a su madre Olga Burkhardt Gabilan a Villarrica, quien le informó que su hermano se había marchado días antes hacia Argentina, en compañía de unos amigos. Desde esa fecha no volvieron a tener noticias de su hermano. Posteriormente escucho una serie de rumores, relacionado con el paradero de Raúl, que lo habrían visto en Argentina, que amigos de él habían vuelto a Chile, que lo habrían matado en el puente del río Toltén, todos esos dichos resultaron ser rumores, ya que nunca más supo noticias concretas de su hermano. En lo personal no efectuó diligencias para dar con el paradero de su hermano, al parecer su madre tampoco las efectuó, debido al clima reinante en la época.

En declaración extrajudicial de fecha 11 de mayo de 2012, rolante de fs. 746 a fs. 747 (Tomo III), en lo pertinente dice que Raúl Marcial, era el menor de sus hermanos, para esa época tenía 23 años, residía en Villarrica, junto a su madre. Que Raúl perteneció a la Armada de Chile hasta 1970, cuando fue dado de baja. Dice no tener antecedentes en cuanto a la detención de su hermano, salvo que se había ido a Argentina junto a un grupo de amigos. Lo anterior, le fue informado por su madre vía telefónica. En ese momento no le dio mayor

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

importancia a esa situación, ya que creyó que éste se había ido en busca de trabajo a ese país. Con el paso de los años, circulaban rumores en relación con el destino de su hermano, les comentaron que fue visto en la ciudad de Neuquén, que incluso que estaba en Brasil, pero eran rumores sin relevancia, porque está seguro de que Raúl hubiera tomado contacto con algún integrante de la familia. Espeta que su hermano Ricardo asumió el liderazgo en la familia para efectuar averiguaciones sobre el paradero de su hermano. Eso fue cuando regresó la democracia a Chile, incluso este declaró en Pucón, y dio muestras de sangre, al objeto de constatarlas con los cuerpos encontrados en la época, pero no hubo resultados positivos. Señala que, en el año 1980, mientras estaba de paso en Villarrica, se le acercó un hombre, cuya identidad desconoce, pero trabajaba como pescador o botero, quien le comentó que había visto el cadáver de su hermano flotando en el río Toltén junto a otros cuerpos enredados en unos matorrales que había a orilla de ese río. Ese hombre le comentó que dicho lugar estaba en la Curva del Toro, río Toltén.

A.84. Luisa Noemí González Ortega

En declaraciones extrajudiciales de fecha 26 de febrero de 2012, rolante de fs. 594 a fs. 595 (Tomo II), indica que es la hermana de Elías Dagoberto y Hugo Arner González Ortega. Para el año 1973 tenían la edad de 25 y 23 años respectivamente, y según su recuerda eran militantes de la juventud del Partido Socialista. En esa época residían en la casa de sus padres en Villarrica. Llegado el 11 de septiembre del año 1973, fecha en que ocurrió el golpe de Estado, sus hermanos se colocaron nerviosos debido a los constantes bandos militares que se publicaban en los medios de comunicación y por ese motivo, creyendo que serían llamados en algún momento decidieron, junto a otros integrantes del Partido Socialista, planificar su salida de Chile hacia Argentina por un paso no habilitado ubicado en la comuna de Curarrehue. Esta situación está en su conocimiento porque recuerda que se lo manifestaron a su padre Marcos (fallecido). El día 14 de septiembre del año 1973, en horas de la tarde, sus hermanos se fueron junto a los hermanos Juan y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Aguayo Olavarría y Raúl Figueroa Burkhardt, con quienes se reunirían esa tarde en la subida de "Piedra", la que se encuentra a la salida de Villarrica. Esa fue la última vez que vio a sus hermanos. Posteriormente, durante el mes de noviembre del año 1973, mientras visitaba a su hermano

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Othniel, quien estaba detenido en la cárcel pública de Temuco, decidió, por consejo del familiar de una persona detenida en ese lugar, concurrir hasta el Regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco a consultar si ellos se encontraban en ese lugar. Concurrió en dos oportunidades al mencionado recinto militar se presentó en la guardia de este y uno de los soldados le permitió revisar los listados de los detenidos que ahí se encontraban, no logrando ubicar a sus hermanos. Creyendo que habían logrado llegar hasta Argentina, fue entre los meses de febrero a diciembre del año 1974, hasta las ciudades de Junín, Cinco Saltos, General Roca, Luis Beltrán y Buenos Aires, lugares donde publicó avisos en las distintas radioemisoras sin lograr resultados positivos. Desde ese entonces perdió las esperanzas en encontrarlos, y debido a la situación que vivía el país en ese momento, por temor, no quiso seguir efectuando averiguaciones, sino hasta cuando regresó la democracia al país. Por intermedio de una hermana de Héctor Aguayo Olavarría, supo que el grupo de jóvenes integrado por sus hermanos había sido detenido en Curarrehue por efectivos de carabineros de la comisaría de Pucón y que posteriormente habrían sido trasladados en helicóptero hasta el Regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco. Lo anterior concuerda, porque un amigo de la familia de apellido Guevara, quién estuvo detenido en el regimiento Tucapel, le mencionó a una prima Sudelia Castro González, que pudo ver a sus hermanos llegar al mencionado regimiento en calidad de detenidos.

A.85. Ruth Alicia González Ortega

En declaración extrajudicial de fecha 15 de noviembre de 1995, rolante a fs. 49 (Tomo I), proclama que es hermana de Hugo Arner y Elías Dagoberto González Ortega, ambos desaparecidos desde el 13 de septiembre de 1973. Después del 11 de septiembre del año en cuestión, sus hermanos Hugo y Elías, les comunicaron a sus padres que se irían el día 13 hacia Argentina, debido a que eran requeridos por carabineros de Villarrica, por pertenecer a las juventudes socialistas. El día 12 de septiembre del año en mención, sus hermanos salieron de la casa alrededor de las cuatro de la tarde, en dirección a la población Vista Hermosa, donde se iban a encontrar con los hermanos Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Aguayo Olavarría y Raúl Figueroa Burkhardt, desde esa fecha no ha tenido noticias de sus hermanos. Posteriormente su madre con su hermana Luisa realizaron diversas diligencias, con la finalidad de poder ubicar a sus hermanos, tales como en el regimiento

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Tucapel, cárcel, estadio de Temuco, comisaria de carabineros de Villarrica, en todos los lugares, no obtuvieron ninguna respuesta positiva del paradero de Hugo y Elías. Aproximadamente en el año 1991, interpuso una denuncia en el Juzgado del Crimen de Pucón, por presunta desgracia en favor de sus hermanos y los demás muchachos que los acompañaron en su huida hacia Argentina. Por último, debe señalar que desde esa fecha que sus hermanos se fueron a Argentina, nunca más ha tenido noticias de ellos.

En declaración judicial de fecha 17 de mayo de 2012 rolante de fs. 679 (Tomo II), ratifica su declaración extrajudicial de fs. 49. Y en lo pertinente dice que inmediatamente después de ocurrido el golpe militar su casa fue allanada por militares que estaban en el sector y carabineros de Villarrica. Recuerda que los uniformados apuntaron sus armas en contra de su padre a la vez que le preguntaban por armas. Este procedimiento se repitió en varias oportunidades, antes de que sus hermanos decidieran huir. También estos allanamientos sucedieron después de que sus hermanos se fueron, incluso hasta pasado dos años de ocurrido el golpe militar. Que incluso en una oportunidad su hermano mayor Otniel, se asustó tanto por un allanamiento que huyó de la casa, siendo perseguido por carabineros quienes le dispararon sin herirlo y lo detuvieron. Su hermano fue llevado al regimiento Tucapel donde fue torturado.

En declaración extrajudicial ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de fecha 29 de agosto de 1990 rolante a fs. 1.036 a fs. 1.037 (Tomo III), agrega que Elías era el hijo mayor de 25 años, trabajaba en un balneario del Banco Estado en Villarrica, hasta el 13 de septiembre de 1973, salió a su trabajo como cualquier día, se quedó de juntar en la casa de un padre de los “chicos, hacia Licanray, era en la casa del padre de Juan Cabrera. Hugo estaba en la casa y dijo que se iba con Elías, los Schmidt Escobar y Cabrera. Se iban a la Argentina, llevó ropas, pretendían escapar, los estaban buscando, habían ido carabinero de Villarrica. Un carabinero amigo de ellos de apellido Krause, les dio la idea de que se fueran. Nunca supieron si se reunieron o no en esa casa, eran todos, los seis militantes del Partido Socialista en Villarrica, los carabineros iban y preguntaban por ellos, según ha sabido, era un grupo de diez “muchachos, los que huyeron”. Según se piensa que los tomaron presos en Curarrehue, fueron llevados en una camioneta particular, tuvieron un accidente, llegaron todos al hospital, tal vez está registrado su ingreso (que tendría que ser a partir del 13 de septiembre),

luego fueron sacados, llevados al puente del río Toltén para ser fusilados. Recientemente les han contado esta historia. Los padres aún no se enteran de esta versión, piensan que aún están vivos. Ellos habían escuchado antes que habían fusilado en el puente, se supo que en el río había un cuerpo flotando, luego los carabineros acordonaron el lugar. En las noches se escuchaban metralletas y luego llegaban los bomberos a lavar allí. Hay una persona que vio sangre y masa encefálica allí, se llamaba Minerva Toro, también vio un cadáver que flotaba. Ambos eran solteros, sin hijos, vivían los once en la casa familiar, ellos hicieron gran cantidad de averiguaciones, incluso gente que llegaba a la casa decía haberlos visto, se hospedaban y comían gratuitamente hasta que descubrían el engaño. El padre de las víctimas es pastor evangélico. Con posterioridad carabineros siguió llegando regularmente a la casa, siempre buscando armas, todo esto hasta el año 1980, registraban todo. Daban vuelta todo, lo hacían con gran prepotencia. En una oportunidad un hermano suyo tuvo miedo, huyó, le dispararon y posteriormente lo detuvieron, así estuvo tres meses, en la cárcel o el regimiento de Temuco, nunca quiso contar. Respecto del caso de Cabrera, puede decir que tenía dieciocho años, estudiaba, militaba el partido socialista, huyó con todo el grupo. Suma que los familiares de los Schmidt, puede que tengan otros datos, hay quienes decían que los habrían visto en Huife de Pucón hacia la cordillera, un lugar con cajones cordilleranos.

A.86. Rita Aurora Ortega Muñoz

En declaración extrajudicial de fecha 15 de noviembre de 1995, rolante de fs. 48 (Tomo I), ciñe que es la madre de Hugo Arner y Elías Dagoberto González Ortega, quienes se encuentran desaparecidos desde el 13 de septiembre de 1973. Comunica que el día 12 de septiembre del mismo año, sus hijos le comunicaron que se irían hacia Argentina, debido a que con anterioridad habían sido amenazados por carabineros, ya que ambos eran militantes de las juventudes socialistas. Ese día en horas de la tarde, salieron de la casa a reunirse con sus compañeros; los hermanos Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Aguayo Olavarría y Raúl Figueroa Burkhardt, con los cuales realizarían el viaje. Siendo esta la última vez que vio a sus hijos. Dado que pasó el tiempo y no tuvo noticias de ellos, como estaba acordado, comenzó junto a su hija a realizar diversas averiguaciones con el propósito de obtener algún antecedente respecto a estos jóvenes, para tal efecto concurrió hasta el

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

regimiento Tucapel, hospitales de la zona, cárceles y comisarías de carabineros. En ninguno de estos organismos se le dio una información que permitiera saber de ellos.

A.87. Elisa Margarita Schmidt Arriagada

En declaración extrajudicial de fecha 07 de marzo de 2012, rolante de fs. 621 a fs. 623 (Tomo II), aduce en lo respectivo que es hermana de Carlos y Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, quienes desde el día 13 de septiembre del año 1973, se encuentran en calidad de desaparecidos. Para el año 1973, su hermano Carlos tenía la edad de 21 años, trabajaba como empleado de la Corporación de la Vivienda "CORVI" en Villarrica y vivía con su esposa de nombre Elena Santibáñez Fernández (fallecida), su hermano era militante del Partido Juventudes Socialistas, para lo cual se encontraba inscrito. Ricardo Augusto, tenía la edad de 20 años, cursaba el cuarto año medio del Liceo Industrial de Villarrica y vivía con su hermano Carlos y su esposa, en el inmueble ubicado en la calle José Miguel Carrera esquina Inés de Aguilera, comuna de Villarrica, debiendo hacer presente que éste no tenía militancia política. En su caso, vivía con su madre de nombre Aurora Arriagada Vergara (fallecida), en el inmueble ubicado en la calle Gerónimo de Alderete, de la comuna de Villarrica, existiendo además dos hermanas de nombres Isolde Yolanda y Silvia Luz, quienes residían y trabajaban en la ciudad de Temuco. Una vez producido el golpe militar el día 11 de septiembre de 1973, recuerda que la sorprendió en la ciudad de Temuco, por lo que no pudo regresar a Villarrica ese día, haciéndolo el día 13 de septiembre, en horas de la tarde. Al llegar a la casa su madre le señala que sus hermanos Carlos y Ricardo, se encontraban preparando sus cosas en la casa de un tío de nombre Eliseo Arriagada Vergara (fallecido), ya que iban a cruzar la frontera hacia Argentina por la cordillera. A raíz de lo anterior, se trasladó de inmediato donde se encontraban y pudo conversar con ellos por última vez, percatándose que en la misma situación estaban los hermanos Hugo y Elías González, Juan Cabrera, Raúl Figueroa, Alejandro Escobar y Héctor Aguayo. Recuerda que le señalaron que abandonarían el país, ya que temían por sus vidas, ya que por sus militancias políticas las cuales eran de todo conocimiento de Villarrica y alrededores, serían pronto detenidos por las fuerzas armadas. Posteriormente, permaneció con ellos hasta que iniciaron su viaje a pie, recordando que todo el grupo tomó un camino interior que va hacia Curarrehue, llamado Llancañil, sector Huife Alto, ellos le

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

manifestaron que harían abandono del país por ese sector cordillerano. Pasados dos semanas y al no tener noticias de sus hermanos, su madre comenzó a efectuar consultas a los familiares de los otros jóvenes, donde tuvo como respuesta que ninguno de ellos se había comunicado con sus respectivas familias. Luego de varios meses, su madre se enteró por otra persona, de quien ignora su identidad, que sus hermanos y el resto del grupo, habían sido detenidos en la cordillera y ejecutados posteriormente, razón por la cual su madre quiso en cierta medida olvidar este comentario, pero le trajo bastantes complicaciones de salud, falleciendo al año después. El año 1990, su hermana Silvia se acercó a los estamentos de los Derechos Humanos de la ciudad de Temuco, con la finalidad de entregar los antecedentes respecto a la situación de sus hermanos Carlos y Ricardo, instancia donde en conversaciones con familiares de los otros jóvenes que formaban parte del grupo, se informó de varios comentarios y antecedentes con respecto a las circunstancias en que fueron detenidos y en los posibles lugares donde fueron ejecutados, como también donde podrían encontrarse sepultados. Afirma que en una oportunidad y en fecha posterior a la desaparición de sus hermanos, su madre le comentó que el carabinero de apellido Vergara, perteneciente a la tenencia de Villarrica, se habría acercado a la casa y le había manifestado que sus hijos los habían matado. Del mismo modo, en fecha posterior al 11 de septiembre de 1973, don Carlos Barra persona conocida en Villarrica facilitó su camioneta blanca a carabineros de Villarrica para llevar a cabo detenciones de personas en la zona, presumiendo que posiblemente si sus hermanos y el grupo fueron detenidos por los carabineros en la cordillera, hayan sido trasladados en dicho vehículo. Finalmente hace entrega de documentos.

A.88. Silvia Luz Schmidt Arriagada

En declaración extrajudicial de fecha 14 de noviembre de 1995, rolante de fs. 50 a fs. 51 (Tomo I), que, debido a los sucesos del 11 de septiembre de 1973, hubo mucha persecución a los que eran partidarios del depuesto gobierno. Debido a lo anterior sus hermanos optaron por huir de Villarrica por temor a que fuesen detenidos. El día 13 de septiembre de ese año, al parecer ellos decidieron cruzar la frontera hacia Argentina, por el lado de Huife Alto, ubicado en el sector de Pucón – Curarrehue, según tiene entendido, esta operación la tenían pensada con otros jóvenes, entre ellos los hermanos Hugo y Elías González Ortega, Héctor Aguayo y Raúl Figueroa, entre otros que no recuerda sus nombres. Que en los

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

días posteriores a la huida de sus hermanos y debido a que ellos no se habían comunicado con su mamá, personalmente concurrió a indagar sobre el paradero de ambos en el regimiento Tucapel de Temuco, fiscalía militar y cárcel de la ciudad, además de la segunda comisaría de carabineros, organismos en los cuales no obtuvo respuestas positivas de sus hermanos. Transcurrido aproximadamente un mes del desaparecimiento de sus hermanos, su madre fue informada a través del cabo Eduardo Vergara y el carabinero Guido Krausse, ambos domiciliado en Villarrica, que, a sus hermanos, los habían capturado en la ocasión y que habían sido llevados hasta la comisaría de Pucón para posteriormente trasladados a la ciudad de Temuco, donde presumiblemente habían sido asesinados. Su madre Aurora del Carmen Arriagada Vergara, falleció en el año 1974, víctima de un ataque cardíaco, sin haber alcanzado a conocer el paradero de sus hermanos Carlos y Ricardo Augusto, quienes se encuentran desaparecido. Hace presente que su hermano Carlos era casado con Elena del Carmen Santibáñez Fernández.

En declaración judicial de fecha 14 de mayo de 1999, rolante de fs. 137 a fs. 138 (Tomo I), esgrime que es hermana de Carlos y Ricardo Schmidt Arriagada, desaparecidos desde el 13 de septiembre de 1973. Que en aquella época sus hermanos pertenecían las juventudes socialistas y a raíz del golpe de Estado del 11 de septiembre, y por temor a ser detenidos, decidieron junto a un grupo de amigos el día 13 de septiembre, intentar cruzar la frontera hacia la república de Argentina. Sus hermanos salieron de la casa de su madre en esa época, quien en esa época residía en Villarrica, en dirección a Huife Alto, pues allí intentarían efectuar la travesía. Que está completamente segura de que ese era su destino, pues se lo dijeron a madre, que incluso la esposa de uno de ellos se quedó con su madre. Que en esa época ella se encontraba en Temuco. El caso es que como no tuvieron noticias de sus hermanos, ya que no se comunicaban con ellos, que eran su familia, se preocuparon porque, además, sabían que había innumerables personas detenidas. Ante ello decidió comenzar a indagar en diferentes partes, por si acaso ellos hubieran sido detenidos, y es así como concurrió al regimiento Tucapel de Temuco, a la fiscalía militar, a cárcel y también a la segunda comisaria de Temuco, pero en ninguno de esos lugares aparecían ellos como detenidos, ni obtenía ningún dato tendiente a ubicarlos. Agrega que una hermana indagó con algún familiar de los otros jóvenes, con los cuales habían partido sus hermanos,

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

pero estaban en las mismas condiciones que ellos, tampoco sabían nada del paradero de estos. Asimismo, pasado unos días, unos carabineros llamados Eduardo Vergara y Guido Krause quienes conocían a su madre, le comentaron que sus hermanos habían sido detenidos, que ellos los habrían visto, esto lo sabe porque su madre le manifestó, pero al continuar con las indagaciones, siguieron sin obtener respuestas positivas, porque en ningún lado aparecían registrados como detenidos, y hasta el día de hoy continúan con las mismas incertidumbres, sin saber que fue de ellos y lo claro es que están desaparecidos.

En declaración extrajudicial de fecha 25 de julio de 1990, rolante de fs. 635 (Tomo II), insiste en que a su madre Aurora del Carmen Arriagada Vergara (fallecida) le fue informada a través del cabo Eduardo Vergara, que a sus hermanos los habían asesinado en Temuco, y que no se hiciera ninguna ilusión con respecto a ellos de encontrarlos con vida.

En declaración extrajudicial de fecha 29 de agosto de 1990, ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, rolante de fs. 1.043 a fs. 1.044 (Tomo III), expuso que el sargento primero Eduardo Vergara González y el carabinero Guido Krause informaron a la madre de la compareciente, doña Aurora del Carmen Arriagada Vergara, que Carlos y Ricardo Augusto habían sido capturados en esa oportunidad y traídos hasta la comisaria de Pucón y posteriormente trasladados a Temuco, ciudad en donde presumiblemente habían sido asesinados.

A.89. Ricardo Virginio Aguayo Olavarría

En declaración extrajudicial de 15 de abril de 2015 rolante a fs. 2.055 a fs. 2.057 (Tomo VI), que respecto a las circunstancias que rodearon la detención de su hermano, expresa que no fue testigo de esa situación, pero tiene claro que días posteriores al golpe de Estado, su hermano y sus amigos decidieron abandonar el país por temor a ser detenidos conforme a la información que diariamente salía en bandos militares y en la prensa local en el sentido que se mencionaba que toda persona de pensamiento distinto al régimen recién instaurado iba a ser exterminada. Esa situación la apoyó su padre por temor a que a Héctor le sucediera algo. Por esa razón, Héctor y sus amigos emprendieron viaje hacia la República Argentina, para lo cual pretendían pasar por el paso Huife tratando de eludir los controles fronterizos que existían en los otros pasos, es así como, cuando iba camino a Pichares en un bus, deciden bajarse antes de la bifurcación

Caburgua-Huife donde emprenden caminata. Por lo que sabe, al cabo de un rato son interceptados por un vehículo particular en el cual iba personal de Carabineros de Chile de la tenencia de Pucón, siendo detenidos en ese lugar. Posteriormente, son trasladados a la tenencia de Pucón, donde les habrían cortado parte de su cabello, para ser trasladados a la comisaría de Villarrica donde también les fue cortado el cabello. Por los antecedentes que maneja después de su estadía en Villarrica que no pasó más de un día, fueron trasladados hasta el regimiento Tucapel de Temuco donde permanecen detenidos dos días aproximadamente. En ese lugar encontró al profesor Humaña quien le comentó que vio a su hermano en el Tucapel y que habían conversado dentro de lo cual le dijo que Héctor le había dado los detalles de su detención. Que tomó contacto directo con don Gregorio y su esposa, quienes le comentaron que Héctor había pasado a su casa días atrás a solicitarles ayuda económica para regresar a Villarrica junto a unos amigos, dándole a conocer que había estado detenido en el regimiento Tucapel y que había sido dejado en libertad. Conforme a lo que le señaló don Gregorio le habría entregado ayuda y una vez que Héctor se retiró del domicilio, llegó personal de carabineros y ejército consultándole qué había pasado a hacer a su domicilio, a lo cual don Gregorio le respondió lo mismo que le comentó al declarante, y los efectivos militares procedieron a retirarse presumiendo que andaban siguiendo a su hermano y a sus amigos. Desde ese día no supieron nunca más de Héctor y hasta la fecha desconocen su actual paradero.

En declaración judicial de fecha 17 de abril de 2015 rolante a fs. 2.061 a fs. 2.062 (Tomo VI), ratifica su declaración y precisa además que la patrulla de carabineros y ejército que pasó a la casa de Gregario Seguel Capitán lo hizo media hora después de que su hermano se había ido desde ese lugar. Añade que, por las conversaciones sostenidas con varias personas a lo largo de los años, especialmente con los señores Humaña y Díaz quienes estuvieron detenidos en la cárcel de Temuco y que conocían a su hermano, el grupo fue detenido mientras caminaban hacia la frontera cerca del cruce del camino de Caburgua hacia Curarrehue, por carabineros de Pucón que se movilizaban en una camioneta particular que pertenecía a Carlos Barra. Esto se lo dijo su hermano Héctor a Humaña y a Díaz porque esa camioneta antes había sido de su padre y éste se la vendió a Barra. Que en ese momento los jóvenes caminaban cuidándose de no toparse con un vehículo militar o de carabineros y no le tomaron importancia al

móvil particular que se acercaba. Cuenta que su hermano reconoció el vehículo por sus colores blanco y celeste. Después de la detención fueron llevados a Pucón donde les cortaron el pelo a todos a media cabeza. Acto seguido los llevaron a Villarrica donde los carabineros de esa Comisaría les cortaron totalmente el cabello y se burlaban de ellos. Esto lo supo por comentarios efectuados por el carabinero Joaquín López a una vecina de nombre Laura Pinilla hace muchos años.

En declaración judicial de fecha 17 de junio de 2015 rolante a fs. 2.103 a fs. 2.108 (Tomo VI), expresa que su hermana Sara Aguayo Olavarría, quien le dijo que una persona que trabajaba en correos de Chile y que era amigo de la familia encontró la cédula de identidad de su hermano en la orilla del río Toltén. A quien le gustaba mucho la pesca y siempre lo hacía en diferentes ríos. Fue durante esas jornadas que encontró el carné de su hermano a fines de 1973 mientras pescaba en el río Toltén. El 13 de septiembre de 1973 carabineros de Villarrica fue hasta su domicilio ubicado en calle Pedro Montt N° 967 en horas de la mañana. Recuerda que estaban tomando desayuno cuando tocaron a la puerta y su madre abrió. Entonces carabineros irrumpieron violentamente y allanaron la casa al tiempo que preguntaban por su hermano Héctor Aguayo. Como no lo encontraron salieron del domicilio y cuando estaban a punto de irse uno de ellos sugirió que lo llevaran detenido a él, cosa que hicieron. Relata que lo subieron al furgón policial y lo llevaron a la comisaría. Allí fui dejado junto a otras muchas personas en las pesebreras de las caballerizas. Después del mediodía apareció un microbús particular en el cual fueron todos subidos y llevados hasta el regimiento Tucapel. Cuenta que en la cárcel de Temuco estuvo junto Manuel Humaña, los hermanos Díaz, René Turumpil, todos de Curarrehue.

En declaración judicial de fecha 5 de noviembre de 2018 rolante a fojas 3.030 a fs. 3.031 (Tomo IX), atestigua que supo de la detención de su hermano Héctor y de su posterior traslado hasta el regimiento Tucapel de Temuco, dado que en una de las oportunidades en que estuvo detenido, se encontró con el mismo grupo de personas que fueron detenidos en Curarrehue y fueron quienes vieron a Héctor en el Regimiento Tucapel de Temuco, entre ellos, Manuel Humaña y los hermanos Díaz. Cree que su hermano efectivamente fue liberado del regimiento Tucapel de Temuco tras su paso aproximadamente el 16 de septiembre de 1973, pero sin embargo y por los antecedentes que maneja éste

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

fue nuevamente detenido por militares de regimiento Tucapel de Temuco. Lo anterior lo dice porque Gregario Seguel Capitán, padrino de su hermana Evita, le señaló que cuando Héctor fue dejado en libertad, alrededor del 16 o 17 de septiembre de 1973, pasó a su casa y minutos más tarde su casa fue allanada por carabineros y militares quienes le preguntaron "que había pasado a hacer mi hermano a su casa"; a consecuencia de ello es que militares le allanaron su casa inmediatamente. Gregario le señaló que Héctor andaba ese día junto a un grupo de jóvenes y fue el motivo el motivo por el cual él se fue rápidamente de la casa, sólo pasó a pedir dinero para regresar a la suya. Además, le indicó que, junto a su esposa, quisieron curar la herida de Héctor, pero éste no accedió dado que deseaba regresar pronto junto a sus compañeros a casa. Su detención surge como consecuencia que buscaban a Héctor y como aquel no se encontraba, carabineros se llevó al declarante. Es conducido a la cárcel pública de Temuco; según consta en el certificado de fs. 2.194. En la cárcel pública estuvo detenido con el grupo de Curarrehue, los cuales llegaron detenidos después que él; los hermanos Díaz, Manuel Humaña, Osvaldo Salazar.

A.90. Luis Robinson Bustos Letelier

En declaración extrajudicial de fecha 11 de diciembre de 1995, rolante de fs. 58 a fs. 59 (Tomo I), en lo pertinente respecto de lo que se le consulta y en relación con la detención de ocho jóvenes que intentaban cruzar a Argentina, exclama que no recuerda fecha exacta, pero entre el 13 y el 15 de septiembre de ese año, le correspondió efectuar un patrullaje desde Pucón hasta Curarrehue. Cuando se dirigieron a ese lugar optó por desviarse hacia el lago Caburgua y desde el puente El Turbio, unos tres kilómetros aproximadamente desde el lago hacia el camino a Curarrehue, ubicaron a un grupo de jóvenes tipo mochileros, los cuales andaban muy sucios y llevaban las frazadas enrolladas y terciadas en el pecho. La cantidad de éstos no la recuerda, pero eran más de seis. Al interceptarlos, personalmente les preguntó que hacia donde iban, a lo que le respondieron que se dirigían a Curarrehue, en ese momento les pidió su cédula de identidad, pero como ninguno de ellos portaba este documento, optó por detenerlos y subirlos a la camioneta en la cual se movilizaban. En ese momento dispuso que el cabo Monsalve, junto a dos funcionarios más que no recuerda los llevaran hasta el cuartel, mientras que él se quedó en el lugar junto a otros funcionarios y se trasladó a pie hasta el sector de Caburgua. Posteriormente

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

cuando llegó la camioneta el cabo Monsalve le informó que los detenidos habían sido entregados en el cuartel sin novedad. Recuerda que esta detención se practicó alrededor de las 10:00 y 12:00 horas.

En declaración judicial de fecha 03 de abril de 1996, rolante de fs. 84 a fs. 84 vuelta (Tomo I), expone que el día 13 de septiembre se detuvo a unos jóvenes, no recuerda si eran seis u ocho, se les detuvo en el camino saliendo de Pucón a Curarrehue, hacia el sector de Caburgua, caminaban hacia el puente, esto ocurrió en horas de la mañana, alrededor de las diez horas, venían todos con pelo desordenado, barbones y con frazadas amarradas en un costado todos ellos, se les interrogó y ninguno portaba identificación, ni dieron explicaciones claras de donde se dirigían, ni que andaban haciendo. En vista de eso, ordenó que fueran llevados detenidos a la comisaría que quedaba a unos cinco kilómetros de distancia, lo que fue cumplido por el cabo Monsálvez y dos carabineros más. Incluso en el libro de guardia de la época se dejó constancia que los detenidos que se individualizaban eran entregados al comandante, cuyo nombre se consignó, pero no lo recuerda y eran llevados al regimiento Tucapel de Temuco. En esa época todos los detenidos por estas situaciones especiales iban a dar al regimiento Tucapel de Temuco.

En diligencia de careo con Gonzalo Enrique Arias González, de fecha 26 de noviembre de 1999, rolante de fs. 181 a 181 vuelta (Tomo I), ratifica íntegramente su declaración y que él firmó el libro de novedades de la guardia y se llevó el parte respectivo de la detención a la Fiscalía Militar del regimiento Tucapel de Temuco. Manifiesta que, con respecto a los detenidos, fueron sacados de su unidad en un helicóptero de la fuerza aérea piloteado por el comandante Benjamín Fernández y por orden de la prefectura Cautín. Iban con destino al regimiento Tucapel e Temuco, donde ignora si llegaron.

En declaración judicial de fecha 23 de julio de 2003, rolante de fs. 370 a fs. 370 vuelta (Tomo I), dice que al revisar el libro de telefonemas se percató que decía más o menos textual “por orden de la Prefectura de Cautín deben ser entregado los detenidos al personal de la Fuerza Aérea para ser trasladados al Regimiento Tucapel. Dese cumplimiento. Por orden del Prefecto”.

En declaración judicial de fecha 06 de diciembre de 2004, rolante de fs. 413 a fs. 413 vuelta (Tomo II), invoca que personalmente vio el parte firmado por

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

el suboficial mayor de apellido Burgos, que ordenaba poner a disposición de la Fiscalía Militar de Temuco a los ocho jóvenes que detuvo.

Declaraciones contenidas en Cuaderno Secreto

A.91. Celedonio Aníbal Aburto Fuentes,

En declaración judicial de fecha 02 de julio de 2019, rolante de fs. 125 a fs. 126 (cuaderno secreto), que para el año 11 de septiembre de 1973 se encontraba prestando funciones como soldado conscripto en la **compañía de plana mayor y servicios** del regimiento Tucapel de Temuco. Que efectivamente, como señaló en su declaración policial, existieron a contar del 11 de septiembre de 1973 personas detenidas por motivos políticos al interior del regimiento Tucapel de Temuco. Las salas de torturas quedaban ubicadas en la compañía de cazadores, para el lado norte, casi orillando la muralla de cemento, lugar donde habría como una caseta.

En diligencia de careo de fecha 19 de julio de 2019, rolante de fs. 130 a fs. 131 (cuaderno secreto), en lo pertinente comunica que se enteró que personas fueron ejecutadas en el regimiento, pero no tuvo conocimiento quien cargo sus cuerpos.

En declaración judicial de fecha 13 de febrero de 2020, rolante de fs. 172 (cuaderno secreto), reafirma aquella parte de su declaración de fs. 3.209 en la que señala que lo manifestado por el señor M.C. es perfectamente posible.

A.92. Oscar Alejandro Muñoz Venegas

En declaración judicial de fecha 09 de septiembre de 2022, rolante de 226 a fs. 227 (cuaderno secreto), en lo pertinente a la lectura de las declaraciones del testigo de iniciales M.J.C.S., el Tribunal le pregunta, ¿Qué puede opinar de estos dichos?, a lo que el deponente responde que la verdad de las cosas es que niega rotundamente todas esas calificaciones, porque jamás vio ni participó en esos hechos. Después con los días recibió comentarios, pero jamás participó en ver personas fusiladas o cargando camiones.

A.93. Declaraciones de testigo protegido M.J.C.S.

En declaración extrajudicial de fecha 08 de mayo de 2009, rolante a fs. 187 a fs. 189 (cuaderno secreto) interpreta que para el año 1973, tenía 19 años y a contar del mes de abril de ese año ingresó a efectuar su servicio militar obligatorio en el regimiento de Infantería N° 8 Tucapel. Manifiesta que efectivamente durante su permanencia en ese destacamento militar, estuvo inserto dentro de la **compañía de plana mayor y servicios**, cuyo comandante era

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

el capitán Nelson Ubilla Toledo, quien según su recuerdo era el oficial encargado de las investigaciones de los presos políticos que se encontraban en el regimiento. Dentro de la compañía, se encontraba dentro de la segunda sección de ingenieros y telecomunicaciones, recordando al teniente Romilio Lavín Muñoz, como el oficial a cargo de esta sección. Soflama que efectivamente existía un grupo operativo a cargo de los detenidos, a quienes interrogaban, este grupo estaba compuesto principalmente por oficiales y suboficiales. Que esta matanza no fue la única ocurrida al interior del regimiento Tucapel, puesto que a ellos se les obligaba, casi todas las noches a cargar camiones con cuerpos de víctimas o ejecutados políticos, los que por lo general.

En declaración judicial de fecha 23 de junio de 2009, rolante de fs. 190 a fs. 192 (cuaderno secreto), ratifica su declaración debiendo aclarar aquella parte en la que señala que casi todas las noches le correspondió cargar camiones con cuerpos de personas fallecidas. En realidad, esta actividad la realizó en dos oportunidades, aunque sabe que hubo más muertos, por los comentarios que se hacían al interior de la compañía por parte de los otros conscriptos. Recuerda haber recibido órdenes en dos oportunidades de subirse a un camión junto con otros conscriptos, para dirigirse a la isla Cautín. Al llegar a ese lugar, ya de noche en ambas ocasiones, tuvieron que subir diez cuerpos al camión; en la segunda oportunidad subieron ocho. En todos los casos los cuerpos fueron llevados al puente Allipen, donde fueron arrojados al río. Sustenta que las personas muertas que le correspondió subir a los camiones eran todos varones, quienes presentaban varios impactos de bala, las manos amarradas con cáñamo o alambre y estaban con su vista vendada. Estos cuerpos estaban todos en el sector del polígono de tiro. Antes y después de efectuar las misiones les advertían de guardar silencio respecto de lo que habían visto.

En declaración extrajudicial de fecha 01 de septiembre de 2015, rolante de fs. 3 a fs. 4 (cuaderno secreto), reafirma que era conscripto de la compañía de plana mayor y servicios del regimiento Tucapel de Temuco, perteneciendo a la sección de telecomunicaciones, que es efectivo que a los días posteriores al golpe de Estado le correspondió cargar cuerpos de fallecidos en camiones militares en el polígono de tiro de la isla Cautín, recordando que en la primera oportunidad en que fue hasta dicho lugar fue por orden del teniente Manuel Espinoza Ponce, quien era oficial de la segunda compañía de cazadores. Hace presente, que en

dos oportunidades le correspondió cargar el camión militar con personas fallecidas, en la primera de ellas recuerda que eran diez cuerpos, todos de sexo masculino, cuyas edades fluctuaban entre los 25 a 30 años, no puede precisarlo. En la segunda oportunidad, no tiene claro si fue al día siguiente o a los dos días del primer hecho, cargaron ocho cuerpos más, también de sexo masculino, pero en esta ocasión eran más jóvenes que en el caso anterior. En ambas oportunidades el camión salió en dirección al puente Allipen, conforme a lo que se comentaba en ese momento. Respecto a las fotografías que en el acto se le exhiben y cuyas identidades se le dan a conocer, como Héctor Aguayo Olavarría y los hermanos Elías y Hugo Gonzalez Ortega, comenta que recuerda los rostros de los hermanos antes mencionados, ya que conforme a lo recordado vio que los estaban torturando en una sala ubicada al interior de su compañía, donde estaban presentes los oficiales Vásquez Chahuán y Fernández Carranza, junto a un grupo de detectives. Hace referencia a esta situación, ya que parte de los detenidos eran llevados a esa "Sala de tortura", ante la vista de todos los que se encontraban en la compañía. De acuerdo con lo anterior, decanta que de los cuerpos que recogió en el polígono de tiro, recuerda al de identidad Elías Gonzalez Ortega, en cuya fotografía lo reconoce. Que el conscripto Valeria, jactándose de ese hecho les comentó la situación.

En declaración judicial de fecha 30 de mayo de 2017, rolante de fs. 35 a fs. 38 (cuaderno secreto), ratifico su declaración extrajudicial y desarrolla que el destino final era lanzarlos al rio, entonces si alguno estaba moribundo no iba a poder sobrevivir. Que quien daba las órdenes directas de estas ejecuciones era Alfonso Podlech, se comentaba. Detalla que cuando retiró los ocho cuerpos, estaba de noche y con la luz de los vehículos pudo observar que eran personas jóvenes. Distingue que la sala donde vio que estaban torturando a Héctor Aguayo Olavarría y a los hermanos Elías y Hugo Gonzalez Ortega estaba ubicada en el perímetro de la plana mayor. En esa oportunidad estaban presentes los oficiales Vásquez Chahuán y Fernández Carranza. Que veía a la gente cuando los llevaban vendados, ya que estaba a diez metros aproximadamente de la sala de tortura mencionada precedentemente. Se escuchaban los gritos de las personas. Toda la compañía sabía que había esa sala de torturas. Para él, toda la oficialidad sabía de esto, se divertían realizando este tipo de hechos. Reiterando que la oficialidad sabía que existía. El deponente realiza un croquis de la ubicación de la

sala de torturas ubicada al interior del regimiento Tucapel de Temuco, en la compañía de plana mayor y servicios. Estima que cuando declaró en la causa del “Polvorín” recibió amenazas de familiares de las personas que había nombrado. Le decían “mira tal por cual, tienes que retirar lo que dijiste en contra de mi pariente”. El Tribunal le exhibe las fotografías de Héctor Aguayo Olavarría, Elías y Hugo, ambos de apellidos González Ortega, que rolan de fs. 2.317 a fs. 2.319 a lo que el deponente declara reconocer a aquellas personas, como aquellas tres de las ocho que levantó ese día.

En declaración judicial de fecha 26 de marzo de 2019, rolante de fs. 93 a fs. 95 (cuaderno secreto), el Tribunal le lee lo pertinente de sus declaraciones de fs. 2.309 y siguiente y de fs. 2.638 y le consulta: ¿Qué víctimas de la presente causa, cuyas fotografías se le exhiben de fs. 2.317 a 2.319, habrían estado torturando al interior de la sala de tortura ubicada en la compañía de plana mayor y servicios del regimiento Tucapel de Temuco con fecha posterior al 11 de septiembre de 1973 y dentro de ese mismo mes? A lo que el deponente expresa que reconoce a Héctor Aguayo Olavarría y a los hermanos Elías y Hugo González Ortega, cuyas fotografías se le exhiben, a quienes los estaban torturando al interior de la mencionada sala. Respecto a lo que se le consulta con relación a cuándo estaban torturando a estos jóvenes de nombre Héctor Aguayo Olavarría y a los hermanos Elías y Hugo González Ortega, indica que fue aproximadamente un día antes de recoger sus cuerpos e ingresarlos al camión. De los ocho cuerpos que refiere haber recogido desde el polígono de tiro y cargado en un camión. Precisa además que presencié como tres personas que murieron al interior de la misma sala de torturas ubicada en la compañía de plana mayor y servicios al interior del regimiento Tucapel de Temuco con fecha posterior al 11 de septiembre de 1973 dentro del mismo mes. Recuerda que estas personas eran de sexo masculino, de alrededor de treinta años y le aplicaron corriente en sus cuerpos y de tanta electricidad fallecieron. Además, recuerda que su habitación estaba a unos metros de esta sala, razón por la cual pudo observar cuando sacaron estos cuerpos. Anexa que como integrantes de la compañía de plana mayor y servicios recuerda a Quilodrán, sargento primero Silva, Mario Arias Díaz, sargento Peña, cabo Krause, Pablo Silva y el teniente Romilio Lavín Muñoz.

En declaración judicial de fecha 16 de agosto de 2021, rolante de fs. 193 a fs. 195 (cuaderno secreto), ratifica la declaración e indica que respecto a la

segunda oportunidad en que le tocó cargar ocho cuerpos, no estaba presente el sargento Arias. Precisa que fueron dos veces en que le correspondió cargar cuerpos, la primera vez estaba saliendo del rancho, era tarde de noche, tiene que haber sido como a las 22:00 o 22:30. Cargaron los cuerpos y después se fue a acostar, no contándole esta situación a ninguno de sus compañeros, por temor a ser sancionado. Luego, hubo una segunda oportunidad que también le tocó cargar ocho cuerpos a un camión. Ese día también era de noche, estaba haciendo la "imaginaria", que consistía en el cuidado de la compañía, que no llegara gente extraña, era una guardia. Estaba en esa función y llega el mismo Chávez Etchepare que casualmente también estaba de servicio en la guardia. Le dice "C., vas a tener que acercarte a la guardia nuevamente". Al preguntarle para qué, le dice "anda no más". Entonces, una hora más tarde va a la guardia, tiene que haber sido como a las 23:00 h., y en ese lugar había un conscripto, Muñoz Venegas. Chávez les da la orden de irse al polígono, así que fueron los dos con Muñoz y un soldado de guardia hasta ese lugar. Al llegar, vieron varios cuerpos amontonados, uno sobre otro, con las manos amarradas, algunas atrás y otras adelante. A los cuerpos les habían rasurado la cabeza y con la barba cortada. En el lugar había un camión y dos o tres vehículos chicos. Con las luces de los vehículos. Que la línea de mando de la compañía de plana mayor y servicios del regimiento Tucapel de Temuco para septiembre de 1973, señalando el deponente que habría estado conformada de la siguiente manera: comandante de la compañía, Nelson Ubilla Toledo; subteniente Raimundo García Covarrubias; subteniente, Romilio Lavín. En cuanto a los detectives dice que estos se relacionaban con los oficiales. Quienes deberían tener conocimiento de los hechos que ha narrado, es decir, de la ejecución y cargar los cuerpos a los camiones, son los oficiales del regimiento, porque se comunicaban entre ellos.

A.94. Raimundo Ignacio García Covarrubias

En declaración judicial de fecha 3 de septiembre de 2009, rolante de fs. 1.397 a fs. 1.399 (Tomo IV), en lo pertinente dice que estaba encuadrado en la **compañía de plana mayor y servicios** en septiembre de 1973. Allí estaba a cargo de la instrucción de los soldados conscriptos y además, estaba a cargo de los servicios de guardia. En febrero de 1973 se fue a Santiago para realizar un curso oficial básico de subalterno en la Escuela de Infantería, regresando a fines de agosto o principios de septiembre de 1973 a Temuco. Desde ese momento

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

quedó encuadrado en la compañía de plana mayor a cargo de la sección soldados conscriptos. El comandante de la compañía era el capitán Nelson Ubilla Toledo, pero éste tomó otras actividades en plana mayor a partir del 11 de septiembre de 1973, por lo que la compañía quedó encargada a los oficiales que conformaban dicha compañía, entre ellos el subteniente Romilio Lavín. Consultado responde que recuerda que en la compañía de plana mayor había dos secciones, la de soldados conscriptos, bajo su mando y la sección de vehículos motorizados, bajo las órdenes del subteniente Lavín.

En declaración judicial de fecha 27 de enero de 2010, rolante de fs. 1.459 a fs. 1.460 (Tomo V), musita que turnos le correspondió efectuar patrullajes nocturnos a cargo de la unidad de emergencia. Que debe señalar que todos los subtenientes y tenientes estaban sujetos a este turno.

En declaración extrajudicial de fecha 7 de mayo de 2019, rolante de fs. 3.151 a fs. 3.152 (Tomo IX), expresa que llegó al mencionado regimiento recién egresado de la escuela militar el día 8 de marzo de 1972, cumpliendo funciones en este hasta el mes de diciembre de 1974, ya que fue destinado como instructor a la escuela militar. Hace presente que para 1973, pertenecía a la compañía de plana mayor y servicios, la que antes del 11 de septiembre de 1973, estaba bajo el mando del capitán Nelson Ubilla Toledo, quien por razones impuestas por el mando del regimiento dejó su cargo en la compañía, para hacerse cargo de la sección segunda de la unidad militar, quedando como más antiguos en la línea de mando el teniente Tichauer, él y el subteniente Lavín.

En declaración judicial de fecha 3 de agosto de 2019, rolante de fs. 3.285 a fs. 3.288 (Tomo IX), el Tribunal le consulta sobre los otros oficiales que estaba a cargo de la compañía plana mayor y servicios del regimiento Tucapel de Temuco para septiembre de 1973, señalando que en orden jerárquico estaba el capitán Ubilla, el teniente Tichauer, el declarante y el subteniente Lavín. Recuerda que varias veces llegaban desde gendarmería con vehículos y los tenían todo el día allí. Estos detenidos eran de Ubilla. En cuanto a las condiciones de los detenidos que ingresaban en la sala, no iban vendados, por lo menos en espacios comunes nunca vio vendados. Moreno y Schonherr eran los encargados del traslado de los detenidos porque ellos eran parte del grupo de Ubilla. En cuanto a los nombres de los funcionarios que ingresaban a la sala señalada puede indicar que ingresaban allí un equipo de soldados que eran de diferentes compañías. El Tribunal le

consulta quien dispuso que la sala señalada fuera ocupada para interrogatorios, responde que cree que el mismo Ubilla fue quien dispuso la utilización de la sala que ha hecho referencia. Era su compañía, así que podía disponer de ello. Esto es de su competencia, el como capitán de su compañía tiene libre acceso a cualquier dependencia.

A.95. Romilio Osvaldo Lavín Muñoz

En declaración judicial de fecha 04 de septiembre de 2009, rolante de fs. 1.407 a fs. 1.409 (Tomo IV), acota que llegó al regimiento Tucapel de Temuco con el grado de subteniente en enero de 1973 estaba encuadrado en **la compañía de plana mayor**, que estaba al mando del capitán Nelson Ubilla Toledo. En esa misma compañía estaban Raimundo García Covarrubias y Pedro Tichauer Salcedo.

En declaración extrajudicial de fecha 27 de febrero de 2017, rolante de fs. 3.125 a fs. 3.126 (Tomo IX), complementa que la compañía antes mencionada estaba integrada por el capitán Nelson Ubilla Toledo, quien era el comandante, siendo secundado en antigüedad por el teniente Pedro Tichauer Salcedo, quien también trabajaba en la comandancia en la oficina de administración de fondos y el subteniente Raimundo García Covarrubias. Respecto a una dependencia que existía en la compañía de plana mayor y servicios, donde se efectuaban interrogatorios a detenidos, anexa que efectivamente esa dependencia existía, se ubicaba en la parte central de la edificación donde se encontraba la compañía de plana mayor y servicios y la compañía de morteros.

En declaración judicial de fecha 01 de agosto de 2019, rolante de fs. 3.279 a fs. 3.283 (Tomo IX), rememora que después del 11 de septiembre de 1973 no vio más al capitán Ubilla en sus labores habituales, realizando sus labores el teniente Tichauer. Que después del 11 de septiembre siguió como oficial ranchero. Además, tenía la agresión permanente de Tichauer y del teniente Jaime García Covarrubias. Se acuerda que todo el mundo se burlaba del mayor Jofré, porque decía “guatón guatón”, por ejemplo, uno le pedía algo y decía “no guatón, porque mi coronelcito se puede enojar”. Rememora que era un hombre absolutamente manejable. El Tribunal le consulta sobre los otros oficiales que estaban a cargo de la compañía plana mayor y servicios del regimiento Tucapel de Temuco para septiembre de 1973, señalando que Ubilla, Tichauer, Raimundo García Covarrubias y el encartado. Esos eran los oficiales de plana mayor, en el mismo

orden de jerarquía que ha mencionado. El Tribunal le consulta si alguna vez vio ingresar a esta sala al capitán Manuel Fernández Carranza, a lo que responde que nunca lo vio ingresar a esa sala. Solo puede decir que todo el regimiento sabía dónde estaba esa sala. Nadie podría desconocer la existencia de esa sala, principalmente porque tenía un ingreso prohibido. El Tribunal le consulta quien impartía las órdenes para que los detenidos fueran interrogados en ese lugar. El deponente indica que cree que el departamento segundo. No cree que el comandante Jofré, porque por su personalidad, no cree que haya mandado a hacer eso, pero debió estar en su conocimiento por el grado que tenía en el regimiento. El Tribunal le consulta en qué condiciones eran ingresados los detenidos a la sala que ha mencionado, responde que solo vio detenidos pasar desde el patio principal. Que, si se aplica la lógica, deberían ir encapuchados o vendados. El traslado de los detenidos hasta la sala eran los soldados de guardia, pero todos los días eran diferentes. Le parece que para torturar había categoría A, B y C, según lo que percibió. Desconoce que pasaba con los detenidos una vez terminado los interrogatorios. Pero por lo que ha leído eran cosas horribles. Rememora que Espinoza se metía dónde estaban los detenidos del departamento segundo y les decía “esto va a ser mío” refiriéndose a las cosas personales que algunos poseían, como relojes, zapatos, etc. Respecto a la sala de torturas que ha mencionado, todo el regimiento sabía de su existencia. Hace presente que el ejército respeta la verticalidad del mando. Según su parecer nadie andaba matando por gusto.

B. DOCUMENTOS

B.1. A fs. 1 a fs. 3 vta. (Tomo I), denuncia por inhumaciones ilegales presentada por el abogado Alejandro González Poblete en representación de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, indicando como víctimas a Hugo Arnés González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Juan Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Schmidt Arriagada, Juan de Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría, Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

B.2. Actas de inspecciones del Tribunal, que rolan de:

B.2.1. A fs. 152 a fs. 153 (cuaderno secreto) consta acta de inspección personal del Tribunal, 27 de noviembre de dos mil 2019, que en lo pertinentes suscribe que: se constituye el Tribunal en dependencias del Regimiento Tucapel

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

de Temuco, participando en la diligencia el Ministro en Visita Extraordinaria don Álvaro Mesa Latorre; el Fiscal Militar de Temuco, don Francisco Bravo Soto; el Secretario de la Fiscalía Militar de Temuco, don Giovanni Taito Schmidt; el abogado del Programa Continuación Ley 19.123 del Ministerio de Justicia, Ricardo Lavín Salazar; los Peritos Planimetrista y Fotógrafo del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, don Juan Vega Norambuena y don Frantz Beissinger Bart; y de los Testigos M. J. C. S. y Celedonio Aburto Fuentes. En primer término, el Tribunal ordena comenzar la diligencia disponiendo que el testigo Manuel Contreras Salazar indique el lugar donde estaba ubicada la Compañía de Plana Mayor y Servicios del Regimiento Tucapel de Temuco para el año 1973. El Tribunal y los testigos se desplazan hasta ese punto, donde se detienen para ingresar a aquella dependencia. En este sentido, tanto el señor C. como el señor Aburto, coinciden en señalar que aquella dependencia era la utilizada por la Compañía de Plana Mayor y Servicios para la fecha señalada. A continuación el señor Ministro le solicita al señor C. manifestar su conocimiento respecto a lo acontecido en aquella dependencia a partir del 11 de septiembre de 1973; en este sentido el señor C., reitera lo señalado en sus declaraciones de fs. 2.309, 2.638, indicando que observó en una fecha posterior al 11 de septiembre de 1973, desde el exterior de esta sala, que allí se encontraban torturando a tres de las víctimas de esta causa, cuyas fotografías le fueron exhibidas por el Tribunal en sus declaraciones de la causa. Acota que presentes en el lugar se encontraba el oficial Manuel Vásquez Chahuán. Luego, el señor Ministro le otorga la palabra a don Caledonio Aburto Fuentes para que señale lo pertinente, indicando este que tuvo conocimiento que en aquel lugar era una de las dependencias destinadas para detenidos por motivos políticos tras el 11 de septiembre de 1973. Los peritos de la Policía de Investigaciones fijan los puntos indicados. Posteriormente el Tribunal y los testigos se desplazan hacia un lugar, dentro del mismo Regimiento, señalado por el testigo Celedonio Aburto Fuentes, quien señala que habría una edificación tipo caseta en donde operaba una oficina de la Policía de Investigaciones de Chile. Los peritos de la Policía de Investigaciones fijan los puntos indicados.

B.2.2. A fs. 154 a fs. 155 (cuaderno secreto), consta acta de inspección personal del Tribunal. De fecha, 27 de noviembre de 2019, que en lo pertinente refiere que: se constituye el Tribunal en el ex polígono de tiro de la isla Cautín;

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

lugar donde actualmente se encuentra bajo la administración del SERVIU, participando en la diligencia el Ministro en Visita Extraordinaria don Álvaro Mesa Latorre; el abogado del Programa Continuación Ley 19.123 del Ministerio de Justicia, Ricardo Lavín Salazar; los Peritos Planimetrista y Fotógrafo del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, don Juan Vega Norambuena y don Frantz Beissinger Bart; y de los Testigos M. J. C. S., y Celedonio Aburto Fuentes. En primer término, el Tribunal ordena comenzar la diligencia disponiendo al señor M.J.C.S., situarse en el lugar indicado por el en sus declaraciones de fs. 2.309 y 2.638 de autos. En este sentido, el testigo C. S., se dirige hasta un lugar determinado del ex polígono de tiro de la isla Cautín. Estando allí, el señor C.S. indica al Tribunal el lugar exacto en donde se encontraba la noche en que cargó ocho cuerpos de personas fallecidas, en una fecha posterior al 11 de septiembre de 1973. Reitera al tribunal que reconoció tres de las víctimas de la presente causa, tal como señaló a fs. 2.640. Luego menciona los nombres de los oficiales presentes aquella noche, los tenientes Espinoza y Manuel Vásquez Chahuán. Los peritos de la policía de investigaciones fijan los puntos indicados. Posteriormente el Tribunal le solicita al testigo Celedonio Aburto Fuentes manifestar su conocimiento respecto a los hechos narrados por el señor C.S. En este sentido, el señor Aburto señalada que lo indicado por el señor C.S. pudo haber ocurrido, pero él no se encontraba presente aquella noche en el lugar, sin embargo, aquello era lo que se comentaba en esa época.

B.2.3. A fs. 406 vta. (Tomo II), consta acta de inspección personal del Tribunal, en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco. De fecha 22 de noviembre de 2019, que señala en lo pertinente que: se constituyó el Tribunal en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco a fin de practicar la diligencia decretada en autos con el fin de inspeccionar los Libros de Estadísticas de Detenidos y Procesados correspondientes al año 1973. En primer término, se procedió a examinar el Libro de Estadísticas de Detenidos, apareciendo de los datos estampados en éste que, aun cuando no figuran todos los nombres buscados, existen similitudes como las que se señalan a continuación: 1. Rogelio Hernán Schmidt Muñoz, 17 años, ingresó el 14 de septiembre de 1973, según Parte N° 1.116 de la Fiscalía Militar de Cautín, por infracción a la Ley 17. 798. Registra domicilio en calle Ercilla N° 860 de Villarrica y se indica como fecha de egreso el 15 de octubre de 1973. 2. Ricardo Virginio Aguayo Olavarría, 20 años,

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

ingresó el 14 de septiembre de 1973, según Parte N° 1.200 de la Fiscalía Militar de Cautín, por infracción a la Ley 17.798. Registra domicilio en calle Pedro Montt N° 967 de Villarrica y se indica como fecha de egreso el 27 de septiembre de 1973. 3. Abdiel González Ortega, 22 años, ingresó el 14 de septiembre de 1973, según Parte N° 1.116 de la Fiscalía Militar de Cautín, por infracción a la Ley 17.798. Registra domicilio en calle Aldunate sin número de Villarrica y se indica como fecha de egreso el 15 de octubre de 1973. En segundo lugar, se dispuso la revisión del Libro de Estadísticas de Procesados correspondiente al año 1973, sin que registraran coincidencias en los nombres de las personas buscadas

B.2.4. A fs. 1.721 a fs. 1.726 (Tomo V), consta acta de inspección personal del Tribunal, de fecha 23 de marzo de 2012, que en lo pertinente rubrica que: se constituyó el Tribunal en dependencias del R.I. N°8 TUCAPEL, participando en la diligencia el Ministro en Visita Extraordinaria don Álvaro Mesa Latorre; del Fiscal Militar de Temuco, Teniente Coronel (J) José Valentín Pinto Aparicio; Secretaria de la Fiscalía Militar, Mayor (J) Ema Fabiola Maturana Meneses; de los Peritos Planimetrista y Fotógrafo del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, don Cristian Sil a Barra y don Franz Beissinger Barty de los Testigos Raimundo García Covarrubias, Romilio Lavín Muñoz, Pedro Tichauer Salcedo, Juan Carlos. Concha Belmar, Manuel Rafael Campos Ceballos, Héctor Mauricio Villablanca Huenulao, Héctor Joaquín Celedón Fuentes, Gerardo Jaime Araneda Muñoz, Ernesto G. reía Isla, Manuel Reinaldo Canales Valdés, Oscar Inostroza Segura, Daniel San Juan Clavería, Orlando Moreno Vásquez, Carlos Luco Astroza, Hernán Raúl Quiroz Barra, Raúl Binaldo Schonherr Frías y Omar Burgos Dejean. El Ministro, en primer término, se dirige junto a los demás al pabellón de solteros del casino de oficiales, ordenándole al testigo Raimundo García Covarrubias que identifique el dormitorio donde se encontraba alojando, ya que en su declaración señala que se encontraba ese día enfermo. Se procede a visualizar una habitación la cual tiene una ventana y la cual es fijada por los funcionarios de peritos de la policía de investigaciones. Luego el Ministro consulta al testigo Romilio Lavín cuál era su dormitorio, dirigiéndose el testigo y las demás personas a otro lugar del casino de oficiales, señalando Lavín que él como más antiguo dormía en esa habitación, ya que tenía a cargo el rancho de oficiales, inspeccionada la habitación se constata que posee una ventana que da a un patio ciego, la que es fijada por personal de perito de la policía de

investigaciones. Posteriormente, el Ministro consulta a otro testigo, señor Orlando Moreno Vásquez, para que indique dónde funcionaba la Fiscalía Militar en aquella época, el testigo manifiesta que, en la comandancia, dirigiéndose todos a la comandancia del regimiento. En ese lugar, el señor Moreno, indica que funcionaba en el interior de la actual comandancia y que estaba a cargo del mayor Cofre, pero después funcionaba con el señor Podlech, en el interior de la comandancia. Señala el señor Moreno, y también el testigo Raimundo García Covarrubias, cuando se le consulta, que había dos oficinas, en una funcionaban los actuarios y en la otra el Fiscal. A continuación, el Ministro junto a los demás testigos y personas consulta dónde se ubicaba la compañía de plana mayor, indicando García el lugar de esta compañía, identificando también la compañía de morteros y luego la compañía cazadores que antes era la compañía andina. Moreno, señala que él trabajaba en la plana mayor, con soldados conscriptos en instrucción. Consultados por el Ministro dónde funcionaba el gimnasio, siendo indicado por Lavín el lugar donde se encontraba el gimnasio del regimiento. El Ministro, consulta a Moreno, por la gente que llegaba detenida al regimiento, respondiendo Moreno que llegó gente detenida y ésta era llevada al gimnasio y el Fiscal era el que decidía quién iba a la cárcel o quién quedaba en libertad. El Ministro consulta por la existencia de baños en el lugar señalándose por los testigos, específicamente por Moreno, el lugar donde se encuentran los baños, fijándose el lugar por los funcionarios de peritos. Posteriormente, el Ministro, consulta por el matadero, siendo indicado por Moreno, el lugar donde se encontraba en esos tiempos esa dependencia, la que corresponde actualmente al rancho de soldados, se fija este lugar por los funcionarios peritos. El Ministro consulta por la distancia que existía entre el matadero y la isla Cautín, respondiéndole los peritos lo que pueden existir unos 500 metros, en seguida el Ministro pregunta a otro testigo, personal de la Policía de Investigaciones en situación de retiro, a fin de que indiquen el lugar donde trabajaban, señalando que fueron destinados al regimiento para efectos de prestar colaboración al Fiscal Podlech, señalando que había actuarios que eran civiles y que existieron muchos detenidos los cuales eran asignados a los detectives, aproximadamente veinte detenidos, por detective. El testigo Hernán Quiroz Barra señala que a él le tocó interrogar a muchos de estos detenidos, al consultar el Ministro al testigo si durante la interrogación eran observados por militares, el testigo dice que no. En seguida, el Ministro, consulta

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

al otro detective en retiro, testigo Luco, quien indica que él en esos tiempos era chofer, y sólo llegaba hasta la guardia del regimiento, en ese lugar se le indicaba que trámite debía hacer, y él tenía expresa orden de llegar solo hasta la guardia del regimiento. Siguiendo con la diligencia el Ministro pregunta a Omar Burgos Dejean, que indique dónde se desempeñaba él, señalando el testigo que trabajaba en el archivo, el cual quedaba en la comandancia, al fondo a la izquierda, la oficina no tenía nombre, se fija fotográficamente por los peritos. Posteriormente, Burgos, señala que él daba los salvoconductos, que trabajaba hasta el viernes, que no interrogó nunca a detenidos y que, por necesidad y orden superior, solo participo en la detención del caso polvorín. Señala que normalmente tenía un banco de colegio ubicado antes de la guardia del Regimiento, en el cual trabajaba entregando a la gente los salvoconductos que eran documentos firmados por el Fiscal Cofré, tales documentos autorizaban, por ejemplo, al camión que llegaba a entregar víveres o cuando la gente tenía que trasladarse de un lugar a otro, fuera del horario establecido, se fija por los funcionarios peritos el lugar. El Ministro, luego de escuchar al testigo Burgos, pregunta al testigo Raúl Schonherr Frías, este indica que trabajó en la segunda comandancia después del 11 de septiembre de 1973 señalando que en la segunda comandancia, en su interior, habían tres dependencias: la oficina del dactilógrafo funcionaba en este lugar como también la del segundo comandante, y otra dependencia en que habían tres oficinas, allí funcionó el Fiscal Cofre, después llegó Podlech, se fijan el lugar. Más tarde, y en el desarrollo de la misma diligencia, el Ministro, se reúne con otros testigos: Héctor Mauricio Villa blanca Huenulao, Manuel Reinaldo Canales Valdés, Manuel Rafael Campos Ceballos, Héctor Joaquín Celedón Fuentes, Gerardo Jaime Araneda Muñoz y Oscar Inostroza Segura, quienes fueron conscriptos. El Ministro les dice que se refieran a la noche del 10 de noviembre de 1973, indicándose por estos que se encontraban en la compañía de morteros y compañía de plana mayor. Señalan Celedón y Araneda, que ellos esa noche se encontraban durmiendo, y sintieron unos ruidos, pero no hubo mayor movimiento, nadie ordeno salir del lugar. Inostroza dice que él estaba de franco y estaba en su casa, no en el regimiento. Villablanca manifiesta que él esa noche, se encontraba dormido, dormía en la primera litera, señala que despertó al sentir unos disparos o granadas, dice que era él de la segunda escuadra. Canales, declara que él esa noche estaba en el Cerro Ñielol, y sintió unos disparos desde ese lugar,

señalando que él se encontraba en la copa de agua. El Ministro, consulta a Inostroza, ya que en su declaración dice que le correspondió entregar detenidos a la segunda comandancia, desde donde sacaba a los detenidos y hasta donde los llevaba, trasladándose el testigo junto al Ministro y las demás personas a una dependencia ubicada al lado de la guardia, donde Inostroza indica que esa era una sala de espera, donde se dejaba a los detenidos. La dependencia tiene una sola puerta de entrada y salida, señalando Inostroza que desde ese lugar se sacaba a los detenidos y los llevaban a la compañía de plana mayor, lugar donde los interrogaban en la quinta cuadra, había en el interior unos somieres metálicos, a las personas se las dejaba en ese lugar para que las interrogaran, como uno no ingresaba, luego salían del lugar siempre custodiados, señala que a él varias veces le tocó llevar gente que salió bien físicamente, estas personas salieron caminando, señala que en esa sala se sentían ruidos de tortura. El Ministro consulta a los otros testigos; exsoldados, que dormían en las cuadras de al lado, si ellos sentían algún ruido, señalando que sí, que habían veces que sentían gritos y ruidos de tortura. Luego el Ministro solicita que le indiquen estos testigos donde se encontraba el polvorín de la unidad, siendo señalados por uno de los testigos el lugar donde funcionaba el polvorín, lugar que es fijado. Ulteriormente, el Ministro, le pregunta al testigo Guillermo Tichauer Salcedo que indique dónde se encontraba él esa noche de noviembre del año 1973, dirigiéndose el Tichauer, junto al Ministro y los demás funcionarios afuera del regimiento, cruzando la calle Prat, señalando el testigo, que él vivía frente al regimiento, en el segundo piso, diciendo que se había casado hacía poco y se encontraba con su mujer y su cuñado y familia de éste, y mientras comían escucharon unos disparos, razón por la que se dirigió al regimiento, encontrándose antes de ingresar a este con el mayor Cofre, quién le dijo que no pasaba nada, que había sido un asalto al cuartel, por esta razón regreso a su domicilio, toda vez que su mando le dijo que se devolviera atender a su familia, se fijan el lugar. Se presenta Jorge Luis Godoy Valdebenito, soldado, conscripto a la fecha de ocurrencia de los hechos, el Ministro le solicita que indique el lugar donde, él habría sido torturado, se desplaza al lugar donde están las compañías, indicando que había una pieza grande en la cual tenían una cama, específicamente somier y que el sargento Mario Arias, lo habría acostado y le habría aplicado corriente. El Ministro le pide que indique el lugar donde él veía a los detenidos, señalando el testigo Godoy que él veía que

llegaban detenidos con venda en los ojos y que se escuchaban ruidos y gritaba gente, señala que había un conscripto de apellido Etchepare, el cual mareaba a los detenidos, luego Godoy señala que en la sala de banda era el lugar donde pasaban los detenidos, los cuales eran golpeados por los mismos soldados, por orden de los más antiguos, indica que el mayor Cofre nunca se metía en nada, eran los menos antiguos los que ordenaban golpear a los detenidos con la fusta de los caballos, en este lugar, indicando la sala de banda llegaban los detenidos y luego eran llevados a la compañía.

B.2.5. A fs. 2.011 (Tomo VI), consta acta de inspección personal del Tribunal, de fecha 16 de diciembre de 2014, que en lo adecuado refiere que: constituyéndose el Tribunal en el camino que une Pucón con la localidad de Caburgua, con la presencia del personal de la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos de la Policía de investigaciones de Chile, Comisarios Hernán Villena Morales y Luis Castillo Farías; de los Peritos Fotógrafo y Planimetrísta del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, doña Ana Luisa Pizarra López y don Juan Vega Norambuena; y del testigo don Luis Robinson Bustos Letelier. En primer término, a sugerencia del testigo el Tribunal se traslada hasta el km. 12 del camino precitado. En ese lugar el testigo Luis Robinson Bustos Letelier indica un sector cercano a la calzada donde habría divisado a las víctimas de autos y después de haberles practicado un control de identidad, decidió proceder a su detención. Acto seguido, el testigo precisa la manera como fueron subidos al carro policial en el cual los detenidos, víctimas de autos, fueron llevados hasta la Subcomisaria de Carabineros de Pucón.

B.3. Informes periciales de la Policía de Investigaciones de:

B.3.1. A fs. 161 a fs. 168 (Cuaderno secreto), informe Pericial Planimétrico y Dibujo, remitido por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, realizado en inspección ocular en el destacamento de Montaña N°8 Tucapel y polígono de tiro en isla Cautín de Temuco, mediante el cual se fijan la localización de edificaciones y proyección de los lugares señalados por los testigos durante la diligencia.

B.3.2. A fs. 170 a fs. 171 vta. (Cuaderno secreto), informe Pericial fotográfico, remitido por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, realizado en inspección ocular en el destacamento de

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Montaña N° 8 Tucapel y polígono de tiro en isla Cautín de Temuco, cuyas fotografías son acompañadas en formato digital disco compacto, que refieren a las nueve tomas fotográficas, detallando cada una de ellas. En la fotografía N°5 vista del interior de dormitorio, lugar donde los testigos señalan haber tenido conocimiento de que llegaban detenidos el año 1973. Fotografía N°8 y N°9 vista del lugar donde se habría emplazado el polígono de tiro de la isla Cautín. En donde el testigo M.J.C.S., el año 1973 encontrándose en condición de soldado conscripto se le habría ordenado por los jefes militares directos, subir cuerpos de personas jóvenes con herida de proyectil balístico hasta el interior de un camión tres cuarto.

B.3.3. A fs. 1.664 a fs. 1.671 (Tomo V), informe Pericial Planimétrico, remitido por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, realizado en reconstitución de escena en el Regimiento de Infantería N° 8 Tucapel, Temuco, ordenado en causa rol 113.089 del ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco seguida antes este Tribunal, que en lo pertinente contiene antecedentes de relevancia criminalísticas obtenidos en el sitio del suceso, expresado en plano de planta a escala en láminas.

B.3.4. A fs. 2.024 a fs. 2.027 (Tomo VI), (copia del cual se encuentra de fs. 2.028 a fs. 2.031 Tomo VI), informe Pericial Planimétrico, remitido por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, realizado en levantamiento en kilómetro doce de la ruta S-905, desde Pucón a Caburgua, mediante el cual se ilustra fotografías aéreas de la ruta, destacando el sector de la ruta señalado por el señor Bustos Letelier, como lugar de la detención por sospecha de ocho personas.

B.3.5. A fs. 2.041 a fs. 2.043 (Tomo VI), informe Pericial Fotográfico, remitidos por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, que contiene registro fotográfico de las dependencias de la Tenencia de Carabineros Curarrehue ubicada en Avenida O'Higgins N°63 de la comuna de Curarrehue, según lo señalado por los carabineros (en la época) teniente César Jaña Toro, cabo primero Héctor Sepúlveda Chacón y carabinero Luis Hernández Rojas y por los profesores que habrían estado detenidos en dicha unidad policial, en la época de los hechos, don Manuel Humaña Jiménez, don Rubén Leal Riquelme, don Renato Saravia Flore y don Baldomero Salazar Salgado, compuesto de treinta tomas.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

B.3.6. A fs. 2.044 a fs. 2.046 (Tomo VI), informe Pericial Fotográfico, remitidos por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, que contiene registro fotográfico del lugar en la ruta S-905 (Pucón-Caburgua) donde habrían sido detenidas ocho personas, según lo señalado por el ex oficial de carabineros don Luis Robinson Bustos Letelier.

B.4. Informes del Estado Mayor General del Ejército de Chile, que se detallan de:

B.4.1. A fs. 2.423 a fs. 2.431 (Tomo VII), informe del Estado Mayor General del Ejército de Chile en que se adjunta fotocopia de reglamentos. En lo pertinente el Servicio de Guarnición de las FF. AA, edición 1959, (Considera grados de acuartelamiento). El que en su capítulo V numeral 121 refiere que: “En general, el acuartelamiento constituye el hecho de disponer medidas para asegurar la permanencia del persona en las Unidades, Reparticiones, o en algún determinado lugar, que permita la rápida concurrencia a cualquier llamado. En el acuartelamiento se distinguen los siguientes grados, que se aplicarán de acuerdo con las circunstancias: a) Primer grado: Todo el personal, sin excepción deberá permanecer en el recinto del cuartel”.

B.4.2. A fs. 2.976 (Tomo IX), informe del Estado Mayor General del Ejército de Chile que remite fotografías cercanas 1973 de las siguientes personas: Carlos Oviedo Arriagada, Raimundo García Covarrubias, Romilio Lavín Muñoz, Mario Alvarado Verdugo y Norbeto Uribe Moroni, las que fueron ordenadas desglosar según resolución de fs. 3.178 del 25 de junio de 2019.

B.4.3. A fs. 3.399 a fs. 3.400 (Tomo X), informe del Estado Mayor General del Ejército mediante el cual se constata estructura orgánica de la compañía de plana mayor y servicio según lista de revista de comisario del año 1973, correspondiente al regimiento de Infantería de Montaña N°8 Tucapel, en lo pertinente ilustrando los oficiales encuadra en los cargos que detalla, tales como: Compañía plana mayor, comando de compañía capitán comandante de compañía Nelson Manuel Ubilla Toledo. Sección intendencia, comando de sección teniente comandante de sección y jefe administración de fondo, Pedro Guillermo Manuel Tichauer Salcedo. Sección material de guerra, comando de sección subteniente comandante de sección Romilio Osvaldo Lavín Muñoz.

B.5. A fs. 362 (Tomo I), informe del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, que informa que: una vez revisados los libros de registro de ingreso

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

de detenidos, correspondiente al año 1973, no se encuentran señaladas las personas mencionadas, no obstante se encuentran registro de ingresos de detenidos los que podrían corresponder a los consultados: "Obdiel González Ortega: ingresa el 14.09.1973, por orden de la Fiscalía Militar de Temuco, por el delito de Infracción a la Ley N°17.798, egresado en libertad el 27.09.1973". Ricardo Virginio Aguayo Olavarría: Ingresa el 14.09.2973, por orden de la Fiscalía Militar de Temuco, por el delito de Infracción a la Ley N°17.798, egresado en libertad el 27.09.1973. Carlos Schmidt Arriagada: Ingresa el 17.09.1973, por orden de la Fiscalía Militar, por el delito de Daños a la Propiedad Pública Fiscal, egresado en libertad el 16.02.1973".

B.6. A fs. 425 (Tomo II), informe del III Juzgado Militar, Fiscalía Militar Letrada Ejercito Cautín Temuco, señala que no se tienen antecedentes de las causas iniciadas por los partes mencionados por el Tribunal.

B.7. A fs. 494 a fs. 497 (Tomo II), copia simple de denuncia por presunta desgracia interpuesta por doña Evita Aguayo Olavarría, de fecha 21 de enero de 1991, en la cual se indica que: viene en presentar denuncia por presunta desgracia en favor de su hermano legítimo Héctor Domingo Aguayo Olavarría, estudiante, domiciliado en Pedro Montt N° 697 Villarrica, nacido el 10 de junio de 1956 en Curarrehue. Su hermano pertenecía al partido socialista del entonces gobierno del presidente Allende, de las juventudes socialistas de la ciudad de Villarrica. En 1972 fue detenido por Carabineros de Curarrehue, junto con otros jóvenes de filiación comunista por tenencia de armas. Ambos fueron trasladados a Villarrica y después de una semana fueron dejados en libertad. Habían sido denunciados por esa tenencia ilegal por un tío de su hermano llamado Pedro Rubilar, ignora segundo apellido, agricultor, domiciliado en Curarrehue camino internacional, predio Santa Sara. Por segunda vez fue detenido el 14 de septiembre de 1973 ignorándose el lugar por personal del regimiento Tucapel. En circunstancias que con otros compañeros (Carlos y Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, el primero funcionario del Corvi y el ultimo estudiante de enseñanza media, hermanos González Ortega, Alejandro Escobar Vásquez, Juan de Dios Cabrera Figueroa) en circunstancias que se disponían a cruzar la frontera hacia Argentina, por el lado de Huife alto, sector Pucón-Curarrehue. Sus padres, familiares y amigos hicieron vanos esfuerzos por obtener información en el regimiento Tucapel de Temuco, donde permaneció detenido por un tiempo que se

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

ignora y donde fue visto por diferentes personas que estaban en el mismo regimiento en calidad de detenidos, siendo testigos de este hecho don Manuel Umaña, profesor, domiciliado en Ñancul, Villarrica y don Luis Díaz, ignora actividad y domicilio, pero que por ser conocido o amigo del primero, éste podría proporcionar su domicilio al Tribunal. En el listado de detenidos que existía en el regimiento Tucapel en esa época no figuraba a su hermano Héctor Domingo, pero si, en cambio aparecía en esa lista su otro hermano, Ricardo Virginio Aguayo Olavarría, quien después de un mes aproximadamente fue dejado en libertad, casi medio muerto por recibir tanto brutal y despiadado castigo. Al no figurar en la lista de detenidos, su hermano, Héctor Domingo, presumieron fundadamente que habría sido muerto con otras personas, que también se sabía habían sido detenidas por personal militar, y de las cuales tampoco se daba ninguna información concreta, no obstante, los ruegos de sus familiares.

B.8. A fs. 535 a fs. 537 (Tomo II), copia simple de denuncia por presunta desgracia interpuesta por doña Lidia Cáster Leiva, en favor de su cuñado Alejandro Escobar Vásquez, estudiante, nacido el 11 de octubre de 1954, quien pertenecía a las juventudes socialistas en el gobierno de Allende y su participación era activa, como miembro de esas colectividades. Con ocasión del pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973. Su cuñado sintió un gran temor de ser detenido, ya que en ese tiempo hubo gran cantidad de personas con ideologías políticas del depuesto gobierno que eran constantemente perseguidos, castigados y allanados, razón por la que toda su familia coincide en que su cuñado escapó hacia el lado de Argentina, el día 13 de septiembre de 1973. Esa fecha su cuñado tenía 18 años. Presume que su cuñado Alejandro no logró su objetivo, ya que por terceras personas han sabido que fue detenido junto con otras personas y llevado hasta la comisaría en Pucón. Para luego ser trasladados al regimiento Tucapel de Temuco, donde permanecieron detenidos, sin que supieran más de él hasta la fecha.

B.9. A fs. 908 (Tomo III), informe del Departamento de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile, que informa que existen los ciudadanos Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, chileno, nacido en Pucón, el 25 de diciembre de 1952, 59 años, soltero, cedula de identidad N° 6.816.771-K, domiciliado en calle Natalio Stein N° 4913, Comuna de Ñuñoa. Respecto de Juan Carlos Schmidt Arriagada, solo registra como Carlos Schmidt

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Arriagada, chileno, nacido en Pucón el 24 de octubre de 1951, 61 años, casado, cédula de identidad N° 5.879.584- 4, sin registro de domicilio, ambos no registran movimientos migratorios en nuestro sistema. Finalmente se informa que efectuadas las consultas en nuestro sistema computacional "GEPOL", la persona requerida no cuenta con antecedentes policiales, ni encargos judiciales pendientes, sin embargo, para Carlos Schmidt Arriagada, existe un encargo vigente por presunta desgracia, causa N° 2597, de fecha 14.NOV.1990, emanado del Juzgado del Crimen de Pucón.

B.10. A fs. 1.026 (Tomo III), informe del Departamento de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile, que indica que respecto de Hugo González Ortega, Elías González Ortega, Juan Schmidt Arriagada, Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa y Raúl Figueroa Burkhardt no registran movimientos migratorios a contar del 01 de enero de 1973.

B.11. Informe de la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad que contiene:

B.11.1. A fs. 991 (Tomo III), informe de la Vicaría de la Solidaridad, respecto de Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, señala detenido desaparecido, septiembre de 1973. Raúl Figueroa, de 22 años, soltero, militante de las juventudes socialistas. El 13 de septiembre de 1973, junto a un grupo de jóvenes intentó cruzar la frontera por el sector Curarrehue, siendo detenido en las cercanías de Pucón. Desde esa fecha se desconoce su paradero.

B.11.2. A fs. 993 a fs. 996 (Tomo III), individualiza en lo pertinente a: Hugo González Ortega 23 años a la fecha de la detención, militante del partido Socialista, secretario local del partido Socialista en Villarrica, fecha detención 13 de septiembre de 1973. Elías Dagoberto González Ortega, 24 años a la fecha de la detención, militante del partido Socialista, encargado de propaganda de Villarrica, fecha detención 13 de septiembre de 1973. Juan de Dios Cabrera Figueroa 20 años a la fecha de la detención, militante de las juventudes socialistas, fecha detención el 13 de septiembre de 1973. Juan Carlos Schmidt Arriagada, 21 años a la fecha de la detención, militante del partido socialista, fecha detención 13 de septiembre de 1973. Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, 18 años a la fecha de la detención, militante del partido socialista, fecha de detención 13 de septiembre de 1973. Alejandro Escobar Vásquez, 18 años a la fecha de la detención, militante de las juventudes socialistas, fecha detención 13 de

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

septiembre de 1973, y Héctor Domingo Aguayo Olavarría, 17 años a la fecha de la detención, militante de las juventudes socialistas, fecha de detención 13 de septiembre de 1973. Reseña como situación represiva lo siguiente: Hubo Arner González Ortega, 23 años, su hermano Elías Dagoberto González Ortega, 24 años, los hermanos Juan Carlos y Ricardo Schmidt Arriagada, de 21 y 20 años de edad, respectivamente, Juan de Dios Cabrera Figueroa, de 20 años, Alejandro Escobar Vásquez, de 18 años y Héctor Domingo Aguayo Olavarría, de 17 años de edad todos militantes del partido socialista se encuentran desaparecidos desde el día 13 de septiembre de 1973, luego que al ser allanados sus domicilios en la ciudad de Villarrica por personal de carabineros, decidieron cruzar la frontera por un paso cordillerano, en el sector de Curarrehue. Tiempo después, personal de investigaciones se hizo presente en el domicilio de los hermanos Schmidt Arriagada e informó a sus familiares que los jóvenes habían sido detenidos. Informaciones obtenidas por la familia de Héctor Aguayo indican que el grupo de jóvenes fue detenido en el sector del puente del río Turbio, ocho kilómetros hacia Pichares cuando intentaban cruzar a pie hacia el lado argentino. La aprehensión la habría realizado personal de carabineros que se movilizaban en una camioneta particular de propiedad de un habitante de la ciudad de Pucón. En una primera instancia los detenidos fueron conducidos al retén de Pucón, posteriormente a Villarrica y desde allí enviados al regimiento Tucapel de Temuco desde donde desaparecieron. Versionas extraoficiales indican que habrían sido ejecutados en ese lugar. Gestiones Judiciales. Los familiares de las víctimas realizaron indagaciones en la zona de búsqueda, sin resultado positivo alguno. Con fecha 24 de agosto de 1990, la familia de Alejandro escobar Vásquez inició una denuncia por presunta desgracia ante el Juzgado de Letras de Villarrica, la que roló con el N°28451. Con fecha 27 de agosto el juez de Villarrica se declaró incompetente, remitiendo los autos a Juez de Letras de Pucón (...).

B.12. Informe del Museo de la Memoria y Derechos Humanos, el que se detalla en lo pertinente:

B.12.1. A fs. 1.081 a fs. 1.082 (Tomo IV), ficha del arzobispado de Santiago Vicaria de la solidaridad "detenidos desaparecidos". Documento de trabajo, 1993. Respecto de Héctor Domingo Aguayo Olavarría, situación represiva Hugo Arner González Ortega, 23 años, su hermano Elías Dagoberto González Ortega, 24 años, los hermanos Juan Carlos y Ricardo .Schmidt Arriagada, de 21 y

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

20 años de edad, respectivamente, Juan de Dios Cabrera Figueroa, de 20 años, Alejandro Escobar Vásquez, de 18 años y Héctor Domingo Aguayo Olavarría, de 17 años de edad, todos militantes del partido Socialista se encuentran desaparecidos desde el día 13 de septiembre de 1973, luego que al ser allanados sus domicilios en la ciudad de Villarrica por personal de carabineros, decidieron cruzar la frontera por un paso cordillerano, en el sector de Curarrehue. Tiempo después, personal de Investigaciones se hizo presente en el domicilio de los hermanos Schmidt Arriagada e informó a sus familiares que los jóvenes habían sido detenidos. Informaciones obtenidas por la familia de Héctor Aguayo indican que el grupo de jóvenes fue detenido en el sector del puente del río Turbio, ocho kilómetros hacia Pichares cuando intentaban cruzar a pie hacia el lado argentino. La aprehensión la habría realizado personal de carabineros que se movilizaban en una camioneta particular de propiedad de un habitante de la ciudad de Pucón. En una primera instancia los detenidos fueron conducidos al retén de Pucón, posteriormente a Villarrica, y desde allí enviados al Regimiento Tucapel de Temuco desde donde desaparecieron versiones extraoficiales indican que habrían sido ejecutados en ese lugar (...), reseñando las gestiones judiciales realizadas por los familiares de las víctimas.

B.12.2. A fs. 1.095 (Tomo IV), oficio del director de obras municipales de Villarrica que indica que no existe registro de sepultación de Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

B.12.3. A fs. 1.146 (Tomo IV), oficio del director de obras municipales de Villarrica que señala: “revisados los antecedentes de archivados en el departamento de obras, no existe registro sobre sepultación de Elías Dagoberto González Ortega.

B.12.4. A fs. 1.169 a fs. 1.170 (Tomo IV), declaración jurada de Silvia Luz Schmidt Arriagada, fecha 25 de julio de 1990, que en lo pertinente refiere que es hermana de Carlos y Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, nacidos el 24 de octubre de 1951 y el 25 de diciembre 1952, respectivamente. Que ellos en el año 1973 el día 13 de septiembre se “tuvieron que ir, hacia el lugar Ñancalil, lado Huife Alto, sector Pucón Curarrehue, pues ambos pertenecían al partido Socialista de Villarrica”. Carlos trabajaba en CORVI, de esa ciudad y vivía con su hermano Ricardo Augusto. Le consta que sus hermanos, por temor a ser detenidos tuvieron que tomar esa determinación. Que a pesar de sus constantes indagaciones ante la

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

autoridad y ante el regimiento Tucapel de Temuco, comisaría de carabineros, cárcel y fiscalía, nunca se le dio una respuesta concreta del paradero de sus hermanos. Señala que a su madre Aurora del Carmen Arriagada Vergara (fallecida), fue informada a través del cabo Eduardo Vergara que a sus hermanos los habían asesinado en Temuco, y que no se hiciera ninguna ilusión con respecto de ellos de encontrarlos con vida. Lo mismo le dijo el carabinero Guido Krausse, y por Ramón Quezada.

B.12.5. A fs. 1.174 a fs. 1.176 (Tomo IV), consta declaración extrajudicial ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de Silvia Luz Schmidt Arriagada, de fecha 29 de agosto de 1990, alude en lo pertinente que los hermanos Carlos y Ricardo Augusto Schmidt se alejaron de Villarrica, pueblo en donde vivían, el día 13 de septiembre de 1973, por temor a ser detenidos, dado que eran miembros de la juventud socialista de Villarrica. A su parecer tenían la intención de cruzar la frontera por el lado de Huife Alto, ubicado en el sector de Pucón Curarrehue, desde entonces no se ha sabido de ellos. Los carabineros Eduardo Vergara González y Guido Krausse le informaron a su madre Aurora Arriagada Vergara que Carlos y Ricardo Augusto habían sido capturados en esa oportunidad y traídos hasta la comisaria de Pucón y posteriormente trasladados a Temuco, ciudad en donde presumiblemente habían sido asesinados.

B.13. A fs. 1.220 (Tomo IV) (copia a fs. 2.773 Tomo VIII), extracto de filiación y antecedentes de Héctor Domingo Aguayo Olavarría, “4 Milita Fiscalía de Carabinero de Cautín. Declarado reo: 6 septiembre de 1973. Delito: Tenencia y porte ilegal de arma de fuego”.

B.14. A fs. 1.222 a fs. 1.223 (Tomo IV) (copia a fs. 2.789 Tomo VIII), extracto de filiación y antecedentes de Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, que en registro general de condenas lleva anotado causa rol 3.588, Tribunal Fiscalía Naval de Valparaíso, declaración de reo: 21 de octubre de 1971, delito: deserción simple. Resolución 4 de febrero de 1972, condenado a 41 días de arresto militar.

B.15. A fs. 2.194 (Tomo VII), informe del Alcaide del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, informa que Ricardo Virginio Aguayo Olavarría, estuvo en el recinto penitenciario conforme a los siguientes antecedentes: fecha de ingreso: 14.09.1973, Juzgado: Fiscalía del Ejército de Cautín. Causa: no se indica, Delito: Ley 17.798, fecha de egreso: 27.09.1973, libertad N° 24.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

B.16. A fs. 3.042 a fs. 3.043 (Tomo IX) (copia a fs. 3.786 a fs. 3.787 Tomo XI) Copia del acta suscrita por el pleno de la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco, de fecha 17 de septiembre de 1973. Que en lo pertinente suscribe que: “El señor presidente dio cuenta de haber recibido momentos antes en audiencia al abogado don Alfonso Podlech, quien le manifestó que habría sido designado Fiscal Militar ad-hoc y que con motivo del estado de sitio en que se encuentra el país, había a disposición de la Fiscalía Militar gran cantidad de detenidos, por lo que el número de actuarios con que contaba no era suficiente para interrogar con las exigencias del caso de esas personas. Que ante la situación presentada el señor coronel Intendente... le habría encomendado que se entrevistara con el presidente de la Corte, a fin de pedirle una cooperación para que se pusiera a disposición de la Fiscalía...”.

B.17. A fs. 4.136 a fs. 4.137 (Tomo XII), extracto filiación y antecedentes de Pedro Guillermo Manuel Tichauer Salcedo, sin antecedentes a la fecha de los hechos.

26°) Que del conjunto de elementos probatorios antes detallados y relacionados generales y específicos, ponderados consistentes en testigos directos, indirectos, documentos y pericias antes señaladas. Como además se indica en el auto acusatorio **fs. 4.600 a fs. 4.662 (Tomo XIII)**, permiten al Tribunal a través de los medios de prueba legal que se han detallado y relacionados, llegar a la convicción:

A. Primero: que han existido los delitos de **secuestro con grave daño**, en las personas de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, previsto y sancionado en el artículo 141 inciso tercero del Código Penal vigente a la época de los hechos, ilícito en su carácter de lesa humanidad.

B. Segundo: que en esos ilícitos le ha correspondido la participación en calidad de **cómplice** en los términos del artículo 16 del Código Penal al acusado **Pedro Guillermo Manuel Tichauer Salcedo**, ello sin perjuicio de otras reflexiones que puedan hacerse al analizar los escritos de los querellantes y la defensa.

27°) Que prestando declaración indagatoria **RAIMUNDO IGNACIO GARCÍA COVARRUBIAS**, quien declaró de fs. 1.294 a fs. 1.295 (Tomo IV), de fs.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

1.397 a fs. 1.399 (Tomo IV), de fs. 1.438 (Tomo V), de fs. 1.459 a fs. 1.460 (Tomo V), de fs. 1.838 a fs. 1.840 (Tomo VI), de fs. 3.151 a fs. 3.152 (Tomo IX), de fs. 3.189 a fs. 3.190 (Tomo IX), de fs. 3.285 a fs. 3.288 (Tomo IX), de fs. 3.514 a fs. 3.515 (Tomo X), de fs. 3.516 a fs. 3.518 (Tomo X), de fs. 3.519 (Tomo X), de fs. 3.520 a fs. 3.521 (Tomo X) y de fs. 3.522 a fs. 3.524 (Tomo X).

En declaración judicial de fecha 10 de diciembre de 2003, rolante de **fs. 1.294 a fs. 1.295 (Tomo IV)** (cuya copia consta a fs. 3.514 a fs. 3.515 Tomo X), cita que se desempeñó en el regimiento Tucapel de Temuco desde el año 1972 como subteniente. Posteriormente, en enero de 1973 se fue a un curso de oficial básico en la escuela de infantería regresando en julio o agosto de ese año. Para el 11 de septiembre de 1973, dice que había cinco subtenientes en el regimiento, entre los cuales recuerda a Pablo Gran, Carlos Oviedo, Norberto Uribe y Manuel Espinoza (fallecido). Respecto a los hechos a que refiere la querella de otros autos, manifiesta que tomó conocimiento por comentarios al día siguiente de ocurridos los hechos. El Tribunal le pregunta si dormía en el casino de oficiales del regimiento y a qué distancia del polvorín se encontraba este. El deponente responde que sí, dormía en el casino estaba a dos mil u tres mil metros del polvorín, y no recuerda haber escuchado disparos la noche en que ocurrieron los hechos ni haber presenciado ningún tipo de actividad que se hubiera desplegado con motivo de estos hechos. Hace presente que en esa época estaba afectado por úlcera duodenal activa, que le impedía hacer sus actividades normales por lo que con toda seguridad estaba bajo régimen de servicio liviano, ya que recuerda haber estado un mes en cama, en reposo absoluto por prescripción médica. El Tribunal le pregunta si a raíz del enfrentamiento que originó el asalto al polvorín hubo militares heridos o fallecidos. El deponente responde que no supo de militares heridos o fallecidos. El Tribunal le pregunta si el regimiento Tucapel fue centro de detención. El deponente responde que en los períodos en que estuvo de guardia vio vehículos de gendarmería que transportaban detenidos que eran llevado a un edificio donde se encontraba, entre otras, las oficinas de la comandancia, pero eran detenidos en tránsito que llegaban en la mañana y se iban en la tarde. Por otra parte, los detenidos por toque de queda pasaban la noche en la guardia y les daban desayuno, luego de lo cual se iban a sus casas. No recuerda haber levantado actas con motivo de estas detenciones. Que no le consta haya habido detenidos en gimnasio del regimiento Tucapel. Hace presente que por calidad de

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

subteniente el grado de responsabilidad asignado era mínimo y desconocía muchas de las actividades desarrolladas por los oficiales de rango superior. Que él estaba encuadrado en una compañía que estaba al mando del capitán Nelson Ubilla Toledo y específicamente su labor en ella era la de estar a cargo de los soldados conscriptos, con quienes hacía guardia e instrucción.

En declaración judicial de fecha 3 de septiembre de 2009, rolante **de fs. 1.397 a fs. 1.399 (Tomo IV)** (cuya copia consta de fs. 3.516 a fs. 3.518 Tomo X), ratifica declaración judicial que rola a fs. 172 a fs. 172 vuelta, la que consta en estos autos a fs. 1.294 a fs. 1.295 (Tomo IV), comienza haciendo presente que, durante un mes, entre octubre y noviembre de 1973 estuvo afectado por una úlcera duodenal, lo que le impidió realizar sus labores de manera normal. Que incluso estuvo en cama alrededor de un mes, desde el 15 de octubre de ese año. Inmediatamente después se fue a Santiago de vacaciones por quince días. Preguntado alude que estaba encuadrado en **la compañía de plana mayor y servicios** en septiembre de 1973. Allí estaba a cargo de la instrucción de los soldados conscriptos y además, estaba a cargo de los servicios de guardia. El Tribunal le da a conocer lo informado por el Ejército de Chile, en la que figura encuadrado en la segunda compañía de cazadores, a cargo del teniente Manuel Vásquez Chahuán, específicamente como comandante de la tercera sección. El deponente señala que efectivamente, estuvo encuadrado en la compañía de cazadores, bajo las órdenes del capitán Juan Carlos Herrera Villena, pero esto fue en 1972. En febrero de 1973 se fue a Santiago para realizar un curso oficial básico de subalterno en la Escuela de Infantería, regresando a fines de agosto o principios de septiembre de 1973 a Temuco. Desde ese momento quedó encuadrado en la compañía de plana mayor a cargo de la sección soldados conscriptos. El comandante de la compañía era el capitán Nelson Ubilla Toledo, pero éste tomó otras actividades en plana mayor a partir del 11 de septiembre de 1973, por lo que la compañía quedó encargada a los oficiales que conformaban dicha compañía, entre ellos el subteniente Romilio Lavín. Consultado responde que recuerda que en la compañía de plana mayor había dos secciones, la de soldados conscriptos, bajo su mando y la sección de vehículos motorizados, bajo las órdenes del subteniente Lavín. En cuanto a los hechos del polvorín, indica que se enteró de lo sucedido al día siguiente, pues la noche en que asaltaron el polvorín no sintió disparos. En aquella oportunidad él dormía en el casino de

oficiales. Se informó de manera genérica y puede ser que los hayan formado en el patio de la unidad para darles la noticia. Sin embargo, no maneja mayores detalles de lo ocurrido. Preguntado acota que los conscriptos dormían en las cuadras respectivas de cada compañía que estaban a doscientos o trescientos metros de distancia del casino donde él dormía. Que, según su experiencia, un evento como el ocurrido en el polvorín aquella noche con toda la cantidad disparos y detonaciones que se describen, debiera haberse escuchado a la distancia en que se encontraba el casino de oficiales. Interrogado dice que existía una patrulla de reacción a cargo de un suboficial que estaba dispuesta para intervenir ante este tipo de situaciones. Esta patrulla estaba integrada por alrededor de quince hombres. La conformación de la patrulla de reacción cambiaba todos los días, pudiendo ser integrada por elementos de cualquier compañía. Existía un turno de oficial de ronda que era ejecutado siempre por un teniente o capitán, nunca un subteniente, quien estaba físicamente en el regimiento y era el que ordenaba la intervención de la patrulla de reacción. Soslaya que los oficiales solteros dormían en el casino, en tanto que los oficiales casados dormían en las casas o los edificios que estaban a un costado del regimiento. No recuerda que algún oficial casado viviera lejos del regimiento, pero si este era el caso, estaba obligado a permanecer físicamente en el regimiento cuando le correspondía el turno de ronda. El Tribunal le lee las declaraciones de algunos conscriptos que la noche del 10 de noviembre de 1973 se encontraban al interior del regimiento Tucapel. El deponente señala que en lo personal no tiene recuerdo del hecho y por lo que se le ha dado a conocer debe concluir que no hubo tal ataque al polvorín. Más aún, si este hecho hubiese sido real, con toda seguridad todos los oficiales hubiesen sido despertados para repeler el ataque o para estar alertas. No recuerda haber conocido una "Patrulla brava" y no asocia ese nombre con la patrulla de reacción. Consultado dice que jamás le correspondió participar en interrogatorios de detenidos o presenciar dichos eventos. Que esta tarea estaba a cargo del capitán Ubilla y de otras personas que colaboraban con este oficial. Los nombres de Libardo Schwartenski, Luis Valeria, Juan Carrillo y Oscar Inostroza Segura no le son conocidos. Que en alguna oportunidad le debe haber correspondido estar a cargo de la unidad de reacción, pero en ningún caso lo estuvo la noche del 10 de noviembre de 1973.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

En declaración judicial de fecha 15 de octubre de 2009, rolante de **fs. 1.438 (Tomo V)** (cuya copia consta de fs. 3.519 Tomo X), amplía su declaración en el sentido que durante el año 1973 sufrió de una úlcera duodenal activa que hizo crisis el 15 de octubre de ese año; fecha desde la cual estuvo en cama por un período de veinte días, siendo dado de alta el día 5 de noviembre. Producto de lo anterior, además le adelantaron el feriado legal a partir del 15 de noviembre de ese año hasta el 1 de diciembre de 1973, período en el que se fue a la ciudad de Santiago. Acompaña hoja simple de su hoja de vida en donde refiere que se indican las fechas que ha señalado.

En declaración judicial de fecha 27 de enero de 2010, rolante de **fs. 1.459 a fs. 1.460 (Tomo V)** (cuya copia consta de fs. 3.520 a fs. 3.521 Tomo X), consultado comunica que debe señalar que la noche del 10 de noviembre de 1973 no estuvo al mando de la unidad de reacción. Esto lo asegura porque en aquel tiempo él estaba con régimen liviano después de haber sido dado de alta el día cinco de ese mes por haber estado afectado con una úlcera duodenal. En este período especial estuvo liberado de efectuar guardias y hacer servicios de patrullaje. Que de hecho, el día 15 de noviembre de ese año salió de vacaciones y se fue Santiago para mejorarse definitivamente de la úlcera. El médico tratante era el mayor Verdugo (fallecido). Por todo lo anterior, descarta absolutamente la imputación que se le hace como jefe de la unidad de reacción aquella noche. Consultado adopta que por un procedimiento de turnos le correspondió efectuar patrullajes nocturnos a cargo de la unidad de emergencia. Que debe señalar que todos los subtenientes y tenientes estaban sujetos a este turno. Preguntado, manifiesta que no le correspondía seleccionar los conscriptos con que salía, sino que esa era labor del sargento primero, quien llevaba el rol de guardia, de patrullas y de emergencia, que era una nómina donde se incluía a los conscriptos y oficiales que participaban en esas labores. No recuerda haber conversado respecto del asalto al polvorín con su hermano Jaime García la mañana siguiente de ocurridos los hechos. Que se inclina más a pensar que tomó conocimiento de esto a través de un comunicado hecho por el comandante en la formación del día. Que la noche en que se produjo el asalto al polvorín no escucho ningún ruido ni sintió movimientos al interior del casino, como por ejemplo que algún otro oficial se haya levantado y salido hacia el patio para participar en la defensa del cuartel. Esa

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

noche debe entender que había más oficiales en el casino, pero con excepción de su hermano que reconoce haber estado allí, no recuerda quién más estaba.

En declaración judicial de fecha 13 de agosto de 2013, rolante de **fs. 1.838 a fs. 1.840 (Tomo VI)** (cuya copia consta de fs. 3.522 a fs. 3.524 Tomo X), ratifica sus dichos anteriores en esta causa y que se le han leído. Dice que debe agregar que durante el período en que estuvo afectado por la úlcera duodenal activa le administraron remedios muy potentes que afectaban su capacidad operativa. Por este motivo estaba muy alejado de los servicios. Consultado soslaya que, entre el 11 de septiembre de 1973 y hasta el 15 de octubre de ese año, fecha en que comenzó su licencia, se desempeñó normalmente en sus funciones dentro del regimiento. El Tribunal le lee la declaración de Ernesto García Isla de fs. 462 y siguiente. El deponente señala que, lo que esta persona dice es totalmente falso, puesto que jamás perteneció a inteligencia militar. Quien sí era de inteligencia era el capitán Ubilla. Además, él sólo era un subteniente en aquella época. Recuerda que los suboficiales Moreno Vásquez y Schonherr trabajaban con éste. El Tribunal le lee la declaración de Héctor Omar Barra Reyes de fs. 670 y fs. 701. El deponente señala que no es efectivo lo que esta persona señala en el sentido que él haya participado de torturas en una sala ubicada en la compañía de plana mayor. Desconoce el motivo por el cual se le implica en estos hechos. El Tribunal le lee la declaración de Jorge Luis Godoy Valdebenito de fs. 769 y siguiente. El deponente señala que lo que dice esta persona no se ajusta a la verdad. Jamás participó en interrogatorios ni torturas de detenidos. Preguntado dice que había una dependencia ubicada frente a la comandancia más o menos que era de madera, donde la banda ensayaba, pero jamás supo que allí se efectuarán interrogatorios. El Tribunal le lee la declaración de Juan Isaías Zurita Alarcón de fs. 91. El deponente señala que nunca sacó soldados conscriptos durante las noches, salvo aquellos que le asignaban por la orden del día para los patrullajes. Jamás él los escogió. El Tribunal le lee la declaración de Juan Labraña Luvecce de fs. 1.109 y fs.1.135. El deponente señala que no es efectivo que haya formado parte de la sección segunda ni tuvo que ver con los detenidos. Preguntado dice desconocer qué actividades tenía su hermano aparte de ser ayudante del regimiento. El Tribunal le lee la declaración de Raúl Cerda Agüilef de fs. 1.931 y siguiente. El deponente insiste en que nunca participó de interrogatorios de detenidos. El Tribunal le lee la declaración de Juan Nicolás

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Pérez Zúñiga de fs. 1.944 y fs. 1.947. El deponente afirma que por la enfermedad que lo aquejaba no participaba de las reuniones de los otros oficiales en el casino. Por este motivo es imposible que se hubiera enterado de las conversaciones que allí se sostenían. Que, por otra parte, es una mentira que él bebiera aguardiente con pólvora. El Tribunal le lee la declaración de José Heriberto Mansilla Gatica de fs. 2.361. El deponente manifiesta que recuerda al señor Mansilla Gatica, puesto que jugaba fútbol en el regimiento. Sin embargo, éste está equivocado en sus dichos. Nunca tuvo que ver con detenidos. El Tribunal le lee la declaración de Víctor Manuel Terán Vásquez de fs. 3.352. El deponente aduce que no es efectivo lo que esta persona indica. No recuerda que haya habido una sala habilitada para detenidos en su compañía. Todo el tema de detenidos lo veía el capitán Ubilla y su grupo. El Tribunal le lee la declaración de Pedro Misael Elgueta Muñoz de fs. 3.372 y siguientes. El deponente expone que es falso lo que esta persona señala. Nada tiene que ver con detenidos. El Tribunal le lee la declaración de Navor Sufrido Soto Cereceda de fs. 3.383 y siguiente. El deponente musita que nunca vio detenidos en la cantidad y en el lugar que esta persona indica. El Tribunal le lee la declaración de Libardo Hernán Schwartenski Rubio de fs. 3.445 y siguiente. El deponente declara que nunca participó en las actividades que señala el señor Schwartenski. Todo lo que éste dice es falso. El Tribunal le lee la declaración de Orlando Moreno Vásquez de fecha veintiuno de octubre de 2011. El deponente alega que el señor Moreno está tratando de desligarse de su posible responsabilidad. Nunca perteneció a inteligencia ni tuvo algo que ver con los detenidos.

En declaración extrajudicial de fecha 7 de mayo de 2019, rolante de **fs. 3.151 a fs. 3.152 (Tomo IX)** (cuya copia consta de fs. 3.189 a fs. 3.190 Tomo IX), expresa que llegó al mencionado regimiento recién egresado de la escuela militar el día 8 de marzo de 1972, cumpliendo funciones en este hasta el mes de diciembre de 1974, ya que fue destinado como instructor a la escuela militar. Hace presente que para 1973, pertenecía a **la compañía de plana mayor y servicios**, la que antes del 11 de septiembre de 1973, estaba bajo el mando del capitán Nelson Ubilla Toledo, quien por razones impuestas por el mando del regimiento dejó su cargo en la compañía, para hacerse cargo de la sección segunda de la unidad militar, quedando como más antiguos en la línea de mando el teniente Tichauer, él y el subteniente Lavín. Comunica que Tichauer, no fue removido de

su puesto, éste estaba a cargo del área de finanzas del regimiento, por lo que el deponente debió quedar al mando de los soldados de la compañía, esto de manera informal, ya que nunca se generó algún documento que lo dejara oficialmente como comandante de compañía, sin embargo, era el más antiguo después de Tichauer. Refiere que la sala donde se efectuaban los interrogatorios a detenidos, conforme a lo que supo por terceros y por lo existente en los procesos judiciales, se encontraba entre la compañía de plana mayor y la de morteros, pudiendo hacer mención que en el periodo comprendido entre el día 11 de septiembre al 05 de octubre esta sala no era ocupada para esos efectos, pues, nunca vio que llevaran detenidos ahí durante esos días. Que da fe de esto, puesto que el día 5 de octubre, estuvo con licencia médica hasta el 1 de diciembre de 1973, por una úlcera duodenal activa. En cuanto a las funciones del subteniente Lavín, debe señalar que éste estaba a cargo del material de guerra y a cargo de los soldados de los servicios, como gasfiter, carpinteros, talleres en general. Que administrativamente, toda la documentación era elaborada por el sargento Quilodrán, quien se encargaba de confeccionar los servicios del regimiento en los cuales se debía incluir a personal y soldados de la compañía, debiendo ser el indagado informado de la disposición del personal de su unidad. En relación con el sargento Mario Hernán Arias Díaz, espeta que no lo posiciona en la compañía de plana mayor para septiembre de 1973, tiene recuerdo que con anterioridad a ese año se desempeñó ahí, como dactilógrafo del ayudante del regimiento, cargo que recaía en la persona del capitán Ubilla. Evidencia que hubo detenidos en el regimiento, pero como lo dijo en párrafos anteriores no vio detenidos en su compañía, por lo menos hasta antes que se enfermara. En cuanto a lo que se le informa y que dice relación con la participación de personal de su compañía, en ir a recoger unos cuerpos de personas ejecutadas al polígono de tiro y cargarlos a un camión militar el cual habría emprendido rumbo al puente Allipen, expresa que esa situación nunca estuvo bajo su conocimiento y que por los menos a él nadie le solicitó personal para efectuar esa labor. Agrega en que existe la posibilidad que el capitán Ubilla, pudiese haber dispuesto del personal para efectuar esa labor, debido que éste tenía a cargo las labores de inteligencia. En lo referente a las víctimas Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Raúl Marcial Figueroa Burkhardt y Héctor

Domingo Aguayo Olavarría, sobre quienes se le menciona que eran oriundo de Villarrica y que fueron detenidos los primeros días del pronunciamiento militar y que habría llegado en esa calidad al regimiento Tucapel de Temuco, dice que es la primera vez que escucha sus nombres e ignora sus actuales paraderos. Explica que nunca fue enviado en alguna misión especial al sector del puente Allipen, el cual se le comenta que queda camino a Villarrica. A lo anterior señala que nunca supo si en dicho lugar se practicaron ejecuciones de detenidos de su unidad militar.

En declaración judicial de fecha 3 de agosto de 2019, rolante de **fs. 3.285 a fs. 3.288 (Tomo IX)**, ratifica su declaración extrajudicial que rola a fs. 3.151 y siguientes, y espeta que quiere rectificar algunas partes, por ejemplo, que el capitán Ubilla nunca dejó la compañía, éste siempre fue comandante de ella. El capitán Ubilla se organizó luego del 11 de septiembre, toda su gente, inteligencia, con los soldados que éste tuvo. El capitán Ubilla se relacionaba con el sargento Quilodrán. En cuanto a la labor del indagado, puede decir que llegó a finales de julio de 1973 al regimiento Tucapel. Lo destinaron a la compañía al mando del capitán Ubilla. Llegado el 11 de septiembre el capitán se puso a hacer su equipo y el teniente Tichauer seguía en administración de fondos. El indagado dice que lo hicieron hacerse cargo de la sección montada, había ciento veinte caballares. También había una segunda sección del subteniente Lavín que veía todo lo referente al material de guerra. La tercera sección estaba a cargo de un sargento que era el que tenía telecomunicaciones e ingenieros, encargados de los teléfonos de campaña. Preguntado, enuncia que según su recuerdo Lavín era de armamento, pero no ranchero. Éste estaba en la compañía. Recuerda que ambos hicieron instrucción con soldados de esa época. Que nunca escucho malos tratos hacia Lavín en esa época. Adiciona que nunca firmó un documento, nadie lo nombró comandante de compañía. Que siempre fue de plana mayor, pero durante el año 1973 fue muy poco lo que estuvo allí. Afirma que es efectivo que Tichauer era oficial de finanza. Suma el indagado que tuvo un problema de salud que nombro en su declaración extrajudicial. Fue donde el doctor Verdugo en la enfermería y lo mandaron un mes en cama, luego en noviembre de 1973 le dieron permiso para ir a Santiago. El Tribunal le consulta sobre los otros oficiales que estaba a cargo de la compañía plana mayor y servicios del regimiento Tucapel de Temuco para septiembre de 1973, señalando que en orden jerárquico estaba el

capitán Ubilla, el teniente Tichauer, el declarante y el subteniente Lavín. La tercera sección estaba al mando de un suboficial que es las telecomunicaciones de ingenieros. Quilodrán era el sargento primero de la compañía, era el ejecutor del capitán, era el brazo derecho del capitán Ubilla. El Tribunal le consulta sobre qué tipo de detenidos eran los que se interrogaban en la sala que ha mencionado en su declaración y que indique las condiciones en que eran ingresados allí, señalando el indagado que supone que estos detenidos eran los que tenía el capitán Ubilla y toda su gente. Los detenidos por toque de queda siempre se mantenían en la guardia. Recuerda que varias veces llegaban desde gendarmería con vehículos y los tenían todo el día allí. Estos detenidos eran de Ubilla. En cuanto a las condiciones de los detenidos que ingresaban en la sala, no iban vendados, por lo menos en espacios comunes nunca vio vendados. Moreno y Schonherr eran los encargados del traslado de los detenidos porque ellos eran parte del grupo de Ubilla. En cuanto a los nombres de los funcionarios que ingresaban a la sala señalada puede indicar que ingresaban allí un equipo de soldados que eran de diferentes compañías y funcionarios de la policía de investigaciones. Que eran del grupo de Ubilla. El Tribunal le consulta si alguna vez vio un interrogatorio realizado en esa sala, responde que no, nunca se metió a esa sala, nunca se metió en las tareas del capitán Ubilla, es decir, en las tareas de esa índole. El Tribunal le consulta si vio o supo de la aplicación de apremios bajo corriente eléctrica en la sala de interrogatorios, manifestando el indagado que él nunca entró a esa sala de interrogatorios. Que en esa época estuvo muy ausente del regimiento, por su enfermedad y un permiso para ir a Santiago, así que no sabe sobre ello. El Tribunal le consulta quien dispuso que la sala señalada fuera ocupada para interrogatorios, responde que cree que el mismo Ubilla fue quien dispuso la utilización de la sala que ha hecho referencia. Era su compañía, así que podía disponer de ello. Esto es de su competencia, el como capitán de su compañía tiene libre acceso a cualquier dependencia. El Tribunal le consulta si supo quién ordenaba que los detenidos debían ser interrogados en la sala, expresando el indagado que lo desconoce, porque eran disposiciones superiores a él. El Tribunal le consulta quien se encargaba del traslado de los detenidos hasta esa sala, contestando que el capitán Ubilla tenía su gente y ellos se encargaban de los traslados. Entre ellos Moreno y Schonherr que eran de su grupo y otros más que no recuerda sus nombres. El Tribunal le lee en lo pertinente la

declaración que rola de fs. 2.309, fs. 2.638 y fs. 3.109 de M.C S. El deponente indica que desconoce a la persona que hace esta declaración. Según lo que declara esta persona, él era de otra sección, por lo que no podría haberme relacionado mayormente. No podría haber tenido potestad sobre él. Consultado escruta que Arias Díaz era muy apegado a Ubilla. El año 1972 el capitán Ubilla era el ayudante del regimiento y Arias era ayudante de Ubilla. Al año siguiente, 1973, el capitán Ubilla se lleva a Arias a plana mayor. No le consta que Arias estuviera en telecomunicaciones, pero sí que tenía una relación cercana con Ubilla, porque además era de la compañía. Respecto a que soldados hayan cargado cuerpos en la isla Cautín, puede decir que lo más grande que supo fue sobre el caso del polvorín. Que desconoce los hechos que relata el señor C. Se consulta por rol 39.296 del Juzgado de Letras de Villarrica, sobre el homicidio calificado de una persona N.N., cuyas circunstancias se le dan a conocer, precisa que, puede declarar que no tiene relación con este hecho, pues Velásquez llegó después que él. Cree que su especialidad era comando. Indica que la compañía de contraguerrilla es del año 1975, así que tal vez el soldado está confundido en la fecha. El hecho que se le ha leído lo desconoce, pues en esa fecha estaba en la escuela militar. Que le último contacto con Velásquez fue hace como tres años, porque trabaja en la Dirección de Movilización del Ejército. No tiene amistad con éste. Que sobre las declaraciones de Manuel Segundo Mora Torres que rola de fs. 365 y siguientes y la judicial de 06 de agosto de 2015 de causa rol 39.296 del Juzgado de Letras de Villarrica en que se narran los hechos de la muerte de una persona en el lago Villarrica, indica que lo desconoce. Que en esa fecha estaba en la escuela militar.

28°) Que, haciéndonos cargo de las declaraciones indagatorias del acusado, **Raimundo Ignacio García Covarrubias**, quien fue sometido a proceso a **fs. 4.254 a 4.335 (Tomo XII)**, con fecha 17 de junio de 2022. **Acusado** según el auto de **fs. 4.600 a fs. 4.662 (Tomo XIII)**, con fecha 04 de noviembre de 2022, como **cómplice** de los delitos de secuestro con grave daño en su carácter de lesa humanidad, en las personas de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, perpetrado entre fines de septiembre e inicio de octubre de 1973. Que, si bien el acusado se ubica en la

fecha, lugar y sitio del suceso, agrega factores que podrían eximirlo de responsabilidad en los hechos. No obstante, lo anterior, según el mérito del proceso, las pruebas rendidas y ponderadas en conformidad a la ley, obran en su contra los siguientes elementos de convicción.

Desde ya, por síntesis y economía procesal se dan por reproducidos todos los elementos probatorios generales antes ponderados y los específicos relacionados y aquilatados respecto de los anteriores acusados, puntualizando lo siguiente:

A. DECLARACIONES

A parte de lo que se ha detallado en la prueba de los testigos conviene puntualizar respecto de estas personas lo siguiente:

A.1. Diógenes Segundo Bravo Bernal

En declaración extrajudicial de fecha 14 de diciembre de 1995, rolante de fs. 60 a fs. 61 (Tomo I), en lo pertinente a Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría, Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, no los recuerda por sus nombres, pero puede indicar que dentro de los primeros días del pronunciamiento militar, en circunstancias que se encontraba en la subcomisaria, llegó hasta la unidad el cabo primero Francisco Monsalve (fallecido), con un grupo de jóvenes, no recuerda la totalidad, pero eran varios, en calidad de detenidos, por cuanto habían sido sorprendidos huyendo hacia Argentina por una patrulla que estaba al mando del capitán don Luis Robinson Bustos Letelier, quien a la vez era el jefe de la unidad. Que los detenidos fueron ingresados a los calabozos, mientras que el suboficial de guardia, del cual no recuerda su nombre, comunicaba esta novedad a la Prefectura de Temuco en forma telefónica.

A.2. Ramón Armando Torrealba Guzmán

En declaración judicial de fecha 20 de noviembre de 2012, rolante de fs. 867 a fs. 869 (Tomo III), dice que hubo una instrucción que impartió la Fiscalía Militar del Ejército desde Temuco que ordenaba la detención de ciertas personas y el allanamiento de domicilios en Villarrica. Los detenidos eran derivados a la Fiscalía Militar de Temuco. En aquel tiempo el fiscal militar era Alfonso Podlech Michaud.

A.3. Guillermo Segundo Rosales Pérez

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Declaración judicial de fecha 09 de julio de 2012, rolante de fs. 719 (Tomo II), interrogado dice que hubo detenidos por motivos políticos en la subcomisaria de Pucón, pero lo fueron el mismo 11 de septiembre de 1973. Al día siguiente, esos detenidos fueron retirados por personal militar del regimiento Tucapel de Temuco.

En declaración extrajudicial de fecha 08 de junio de 2012, rolante de fs. 770 a fs. 771 (Tomo III), replica su desarrollo funcionario y recuerda que llegado el pronunciamiento militar se encontraba cumpliendo el servicio de guardia y en aquella oportunidad hubo entre veintiocho a treinta personas detenidas, las cuales quedaron en los calabozos de la unidad policial. Según su apreciación, estas personas fueron detenidas por temas políticos las cuales al día siguiente fueron trasladadas a Temuco en camiones militares.

En declaración extrajudicial de fecha 15 de mayo de 2013, rolante de fs. 1.012 a fs. 1.013 (Tomo III), puntualiza que el 11 de septiembre de 1973 cumplió funciones de encargado de guardia de la unidad policial, en horas de tarde fueron llevadas a la unidad, cerca de 30 personas, las cuales entregó al encargado de guardia del turno entrante, quien hizo entrega de los detenidos a personal de ejército, quienes los trasladaron en camiones militares de Temuco, por lo que comentaron en su momento, ya que ese día estaba saliente de turno.

A.4. Roden Rivas Vergara

En declaración judicial de fecha 16 de noviembre de 2004, rolante de fs. 394 (Tomo I), comunica que recuerda la detención de siete personas, todas adultas, entre ellos un tal Colihueque, que fueron citados al cuartel por órdenes del regimiento Tucapel y luego de ello le correspondió trasladarlos hasta Temuco, donde los entregó a la guardia del regimiento Tucapel. Que esas personas regresaron a Pucón como a los cinco días y debieron presentarse a firmar todos los fines de semana en el cuartel.

En declaración judicial de fecha 09 de julio de 2012, rolante de fs. 718 (Tomo II), recuerda a un señor de apellido Barra Matamala, quien colaboró en una oportunidad con carabineros para septiembre de 1973, facilitando su camioneta para trasladar detenidos al regimiento Tucapel.

A.5. Ignacio Cofré Leal

En declaración extrajudicial de fecha 07 de junio de 2012, rolante de fs. 766 a fs. 766 vuelta (Tomo III), reseña de su carrera funcionaria y que por

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

comentarios tomó conocimiento que hasta el cuartel llegaron aproximadamente seis detenidos jóvenes, desconociendo todo antecedentes, ya que, había sido detenidos por personal del ejército, presumiendo que fueron traídos y llevados en helicóptero, a algún lugar del cual desconoce.

A.6. José Eve Mancilla Yáñez

En declaración judicial de fecha 17 noviembre de 2004, rolante de fs. 399 a fs. 400 (Tomo II), arguye que respecto de las personas que se le señala, no las recuerda, pero dice que, si llegaron detenidos hasta la subcomisaria, es muy probable que hayan sido derivados hacia Temuco vía aérea, ya que ese era el medio más usual de transporte de detenidos.

A.7. Andrés Rigoberto Pacheco Cárdenas,

En declaración judicial de fecha 22 de septiembre de 2006, rolante de fs. 454 a fs. 454 Vuelta (Tomo II), anexa que, además, carabineros solicitaba algunas veces helicópteros para efectuar traslado de detenidos desde puntos lejanos a Temuco, como el sector cordillerano. En Temuco el Fiscal Militar era a quien le correspondía ver todos los demás casos que ocurrían tanto en la Base Aérea Maquehue como en el resto de las unidades, derivando a ese Tribunal los detenidos.

A.8. Antonio Sergio Monserrat Mena

En declaración judicial de fecha 26 de junio de 2013, rolante de fs. 1.786 a fs. 1.788 (Tomo VI), replica sus funciones y dice que en estos operativos los militares trajeron personas civiles, las que fueron subidas al “aparato”, regresando a Temuco con ellos más los militares. Recuerda que en dos o tres oportunidades más o menos le correspondió trasladar militares que llevaban civiles al Tucapel.

A.9. Eduardo Vergara González,

En declaración extrajudicial del 15 de noviembre de 1995, rolante de fs. 52 (Tomo I), expreso que su función específica era la oficina de partes y el rol administrativo de la unidad. En cuanto a los hermanos Schmidt Arriagada, conocía a la madre de nombre Aurora Arriagada Vergara, la cual tenía un restaurant en Villarrica, quien convivía con Otto Schmidt. En el año 1957 cuando se desempeñaba como jefe del Retén Llafenca, conoció a sus hijos, los cuales a esa fecha eran pequeños. Desde esa fecha no los volvió a ver. Que no es efectivo lo que ha manifestado la señora Aurora Arriagada, que su hijo fue capturado y llevado a la unidad de Pucón.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

En declaración judicial del 17 de noviembre de 2004, rolante de fs. 397 a fs. 397 vuelta (Tomo II), ratifica su declaración de fs. 71 exponiendo que, en enero de ese año, pasó a visitarlo Luis Bustos Letelier, subcomisario de Pucón en 1973, conversando acerca de los hechos acaecidos con motivo de la detención de unos jóvenes desaparecidos. Estuvieron de acuerdo, en que efectivamente estuvo en el cuartel cuando estos fueron detenidos y que los habrían entregado al regimiento Tucapel. El Tribunal le pregunta si vio pasar detenidos en tránsito hacia Temuco, ya sea trasladados por personal del ejército carabineros o de la Fuerza Aérea, responde: que sí, en dos o tres oportunidades vio a los militares, que fueron a buscar detenidos. El Tribunal le pregunta si tuvo conocimiento que algunos detenidos hayan sido transportados vía aérea hacia Temuco o vio sobrevolar helicópteros en la zona. El deponente responde: que vio sobrevolar helicópteros antes y después del 11 de septiembre, que también aterrizaban a buscar detenidos.

En declaración extrajudicial del 09 de agosto de 2012, rolante de fs. 824 a fs. 825 (Tomo III), replica que, respecto a la detención de Hugo y Elías González Ortega, Juan y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa, Héctor Aguayo Olavarría, Raúl Figueroa Burkhardt y Alejandro Escobar Vásquez, recuerda a los hermanos Schmidt, por conocer a su padre Otto, quien tenía domicilio en Menetúe, cuando trabajó en el retén de Llafenco. En cuanto a la detención de estos jóvenes, señala que en una oportunidad el capitán Bustos, le comentó que había detenido a un grupo de jóvenes que aparentemente intentaban cruzar la frontera cerca de Caburgua. Que, según Bustos, la detención la habría hecho el suboficial Heleo Raúl Burgos Burgos, junto al carabinero Francisco Monsalve Hidalgo y otros funcionarios que no recuerda. Por lo comentado por el capitán Bustos, esos jóvenes fueron entregados al ejército, motivo por el cual se les trasladó hasta el regimiento Tucapel de Temuco, por vía terrestre en un vehículo particular.

En declaración extrajudicial del 16 de mayo de 2013, rolante de fs. 1.014 a fs. 1.015 (Tomo III), en relación con los ocho detenidos, se enteró en una oportunidad sobre la detención de unos jóvenes, pero no puede precisar si son ocho, quienes fueron detenidos por el sargento Burgos, Ramón Quezada Reyes, Monsalve y otros funcionarios. Que posterior a la detención de los jóvenes, leyó un oficio en el cual se hacía referencia a los detenidos, recordando que en este oficio

figuraban los hermanos Schmidt y Olavarría, quien era hijo de un comerciante en la ciudad de Curarrehue. Ese oficio no lo confeccionó él, en dicho documento se mencionaba la entrega de los detenidos al regimiento de Infantería N°8 Tucapel de Temuco. Que estos detenidos fueron trasladados vía terrestre a Temuco, ignora si fueron llevados en vehículo policial o de propiedad de Carlos Barra Matamala, quien siempre les prestó colaboración.

A.10. Sara Ester Valdés Velásquez

En declaración extrajudicial de fecha 13 de octubre de 2015, rolante de fs. 2.886 a fs. 2.887 (Tomo VIII), exploya que para el año 1973, no militaba ni participaba en ningún partido político, solo participaba en actividades de tipo social en la sede del partido Socialista. En esas reuniones participaba un joven de apellido Aguayo, a quien conocía ya que iban al mismo colegio y también unos vecinos cuyos nombres corresponden a Alejandro Escobar y Juan Cabrera. También conoció en esas reuniones a los hermanos Schmidt y Gonzalez, quienes eran funcionarios municipales y estaban a cargo de la distribución de unos terrenos los cuales se habían tomado en el año 1971. La última vez que vio a estos jóvenes fue unos días antes del golpe de Estado y nunca le hicieron comentario alguno respecto a un posible viaje al extranjero en este caso a Argentina. Se enteró, por comentarios de los padres de Alejandro Escobar y de Juan Cabrera que ellos se habían ido de la ciudad sin dar explicación alguna respecto a su lugar de destino, esto fue a los tres días del 11 de septiembre cuando sus padres consultaron a su madre si sabían algo respecto a sus paraderos.

A.11. Juan Esteban Ortiz Parra

En declaraciones extrajudiciales de fecha 17 de julio de 2015, rolante de fs. 2.154 a fs. 2.155 (Tomo VI), ciñe que efectivamente días posteriores al golpe de Estado, encontró en el río Toltén una gran cantidad de cuerpos flotando en las aguas y otros varados en la ribera del mismo río. El caso es que en esa ocasión se fijó especialmente en un cuerpo que estaba varado en la ribera del río cerca del sector Galpones, se fijó en este cuerpo porque era de una persona muy joven, por lo que se bajó del bote y procedió a revisarlo, ya que podía tratarse de un conocido, pero no era el caso, ya que inmediatamente se dio cuenta que no lo era, sumado que al revisar sus vestimentas se percató que tenía un papel que era de un colegio de Villarrica y alcanzó a distinguir que su apellido era Aguayo y

probablemente su nombre era Pedro, es lo que recuerda. El cuerpo de ese joven presentaba una perforación por la parte posterior de su cráneo y sus manos estaban amarradas con alambre de púa y estaba vestido con pantalones tipo jeans color azul y una chomba. Las características físicas de ese joven, señala que aparentemente no superaba los quince o dieciséis años, era de baja estatura y no pudo percatarse de otras características, ya que el cuerpo estaba muy golpeado por la acción de las rocas del río.

A.12. Rubén Ernesto Sandoval Muñoz

En declaraciones extrajudiciales de fecha 20 de julio de 2015, rolante de fs. 2.156 a fs. 2157(Tomo VI), respecto a los cadáveres que vio en el río, especial atención le llamó un joven que vio varado en un quebradero del río entre el sector Bajada de Piedra y Chesta, ya que presentaba una perforación al lado derecho de su cráneo y otra perforación en la parte posterior de este, dándole la impresión de que le habían dado un balazo. Recuerda que junto a su cuerpo sobre la arena estaban sus documentos de identidad, recordando que decía Villarrica, no distinguiendo su identidad. Las vestimentas del cadáver correspondían a un chaquetón, blue jeans y zapatillas, no pudo percatarse si presentaba otras heridas porque por temor prefirió retirarse del lugar. Respecto a la fotografía que se le exhibe, señala que efectivamente se trata del joven que vio en el río, ahora bien, el nombre que se le da a conocer como Héctor Aguayo Olavarría. Solo del que mencionó pudo observar sus documentos ya que estaban en la arena, incluso le dio la impresión de que había sido revisado con anterioridad.

En declaración judicial de fecha 31 de mayo de 2017, rolante de fs. 2.645 a fs. 2.646, (Tomo VIII), ratifica su declaración e indica que en diciembre de 1973 pudo observar la presencia de distintos cuerpos en el río Toltén, en circunstancias que se encontraba prestando servicios remando un bote. Precisa que sólo pudo identificar uno de los cuerpos, a la altura de Chesta, en el kilómetro quince, pues cuando bajó del bote a tomar café lo vio y le quedó muy marcada su imagen, persona que en este acto reconoce tras exhibirle la fotografía que rola a fs. 2.317, cuyo nombre se le da a conocer como Héctor Aguayo Olavarría, quien tenía una perforación en el cráneo, al parecer por un impacto de bala, el cual vestía chaquetón oscuro, jean azules y zapatillas. Pudo observar que al lado de su cuerpo se encontraba su cedula de identidad, la cual sólo se lograba observar que decía "Villarrica".

A.13. Francisco Hueche Human

En declaración extrajudicial de fecha 03 de junio de 2010, rolante a de fs. 1.484 a fs. 1.485 (Tomo V), relató que para el año 1973 tenía la edad de 18 años e ingresó al regimiento de Infantería N° 8 Tucapel de Temuco a cumplir con su servicio militar obligatorio, arguyendo que es cierto que todo lo relativo a las ejecuciones de prisioneros dentro del regimiento Tucapel se hacía de noche, en el sector de la isla Cautín donde está el polígono.

A.14. Omar Burgos Dejean

En declaración extrajudicial prestada con fecha 18 de abril de 2012, rolante de fs. 1.699 a fs. 1.700 (Tomo V), afirma respecto a su calidad de agregado al regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco. El día que llegó, se tuvo que presentar con el capitán Nelson Ubilla Toledo, quien dispuso que él se hiciera cargo de confeccionar un archivo político. Recuerda, que se le otorgó una oficina, la cual estaba llena de papeles, con datos de personas que habían pertenecido a instituciones públicas y de partidos políticos. Recuerda que el capitán Ubilla le ordenó confeccionar ficha de cada una de las personas que indicaban los papeles que allí se encontraban, recordando que tuvo que clasificar la información de acuerdo con la tendencia política que cada una de estas personas registraba en dichos documentos.

A.15. Manuel Reinaldo Canales Valdés

En diligencia de careo con Manuel Vásquez Chahuán, de fecha 03 de agosto de 2010, rolante de fs. 1.548 (Tomo V), reitera que hubo detenidos en el gimnasio del regimiento, teniendo acceso a este lugar solo los oficiales.

A.16. Juan Carlos Concha Belmar

En declaración judicial de fecha 28 de diciembre de 2011, rolante de fs. 3.711 a fs. 3.716 (Tomo XI), el Tribunal le indica que ha señalado que en ocasiones integró la patrulla del teniente Espinoza y le pregunta: En estas ocasiones señor Concha ¿esta patrulla detuvo a personas?, ¿Cómo era la dinámica, trasladaban a las personas al regimiento Tucapel?, ¿Quién las trasladaba?, ¿Dónde eran ingresadas? ¿En la guardia? ¿Qué puede señalar acerca de aquello? El declarante responde que siempre habían detenidos en la noche, hasta por “curados se los llevaban”, por ebriedad. Pero igual había detenidos, los llevaban a la guardia. De la guardia del Tucapel abajo hay un galpón grande y ahí llevaban a los detenidos, ahí los dejaban.

A.17. Manuel Rafael Campos Ceballos

En declaración judicial de fecha 15 de julio de 2010, rolante de fs. 1.515 a fs. 1.517 (Tomo V) en lo pertinente rectifica aquella parte en la que señaló que no vio detenidos al interior del regimiento Tucapel, puesto que en realidad si vio a varios, los que eran mantenidos en dependencias del casino de oficiales o en el gimnasio, también en el rancho de los soldados. Recordando una situación en cuanto que subieron el cuerpo del detenido y el subteniente ordenó tirar su cadáver al río, aludiendo que no recuerda el lugar en que lo hicieron.

En declaración judicial de fecha 04 de agosto de 2010, rolante de fs. 1.549 a fs. 1.551 (Tomo V), reitera donde se encontraba encuadrado y que conformaba una patrulla que estaba dirigida por el subteniente Espinoza. Agrega que vio detenidos en el regimiento Tucapel, específicamente en el gimnasio de la unidad. Aquellos detenidos eran hombres y mujeres, quienes por toque de queda habían sido privados de su libertad. Explicita que ellos no tenían acceso al gimnasio del regimiento donde se encontraban los detenidos. Pero los oficiales sí lo hacían, aunque no recuerda quienes eran.

En declaración judicial de fecha 31 de mayo de 2011, rolante de fs. 3.708 a fs. 3.709 (Tomo XI), reitera lo señalado en declaraciones anteriores y afirma que, si vio detenidos en el regimiento Tucapel, específicamente en el gimnasio de la unidad, en el casino y en el rancho. Añade que eso fue muy notorio inmediatamente después del golpe militar.

A.18. Roberto Ismael Concha Muñoz

En declaración extrajudicial de fecha 06 de julio de 2010, rolante de fs. 1.509 a fs. 1.510 (Tomo V), evidencia que la "patrulla chacal", la cual estaba integrada mayoritariamente por soldados de su compañía, los que se destacaban del resto por tener mayores estudios. Este grupo, lo recuerda por estar aislado del resto de los conscriptos, se entendían directamente con el teniente Espinoza, no participando de los servicios de la unidad, ya que generalmente salían de noche. Relata que encontrándose en la entrada principal del regimiento cumpliendo servicio de guardia vio a la patrulla antes señalada salir de noche en uno de los camiones de la unidad. Respecto de personas detenidas al interior del regimiento, señala que en alguna oportunidad vio personas en esta calidad al interior del gimnasio del cuartel. En cuanto a los integrantes de la denominada "patrulla chacal", recuerda principalmente a Juan Carlos Concha Belmar, Héctor Villablanca

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Huenulao, Sergio Vallejos Garcés, Manuel Campos Ceballos, Eliecer Antitur Ñancufil y también a un conscripto apodado “el petizo Sandoval” oriundo de Vilcún.

A.19. Gerardo Jaime Araneda Muñoz

En declaración extrajudicial de 06 de mayo de 2009, que rola de fs. 1.358 a fs. 1.360 (Tomo IV), indico que para el año 1973, tenía 18 años de edad y estaba efectuando su servicio militar obligatorio en el regimiento de Infantería N° 8 Tucapel, en cuanto a Manuel Espinoza Ponce lo recuerda como un oficial inserto en la segunda compañía de cazadores siendo apodado "El Loco Espinoza", por sus actitudes agresivas, tanto con los prisioneros políticos allí detenidos como con los propios conscriptos del cuartel, llegaba con perros que mataba en plena vía pública para hacerle instrucción a su compañía. No recuerda con un grupo especial de trabajo, pero sí constantemente relacionado con los prisioneros.

En declaración judicial de 17 de junio de 2009 que rola de fs. 1.372 a fs. 1.373 (tomo IV), ratifica su declaración extrajudicial y comunica que recuerda que hubo comentarios entre los conscriptos que indicaban que las personas muertas fueron ejecutadas, por lo que no se trataría de un “asalto al polvorín”, prosigue su relato en tal sentido.

A.20. Jorge Gonzalez Curiqueo

En declaración extrajudicial de fecha 8 de julio de 2010, rolante de fs. 1.511 a fs. 1.512 (Tomo V), aduce que muchas veces vio personas detenidas al interior del gimnasio del Tucapel, las que estaban con la vista vendada. También recuerda que vio a varios centinelas del cuartel pasear a detenidos cuyas identidades desconoce. Que el teniente Manuel Espinoza Ponce, se encontraba a cargo de la cuarta sección de su compañía, que este hombre era “muy malo” con los conscriptos, gustaba de andar metido con los detenidos que estaban en el gimnasio del regimiento, al igual que todos los oficiales de la unidad.

En declaración judicial de fecha 19 de julio de 2010, rolante a de fs. 1.522 a fs. 1.523 (Tomo X), ratifica su declaración extrajudicial y destaca que vio varios detenidos al interior del regimiento Tucapel, quienes estaban con su vista vendada y eran mantenidos en el gimnasio de la unidad. Recuerda que casi todos los oficiales se paseaban por ese lugar, pero no puede asegurar si tenían que ver con los detenidos.

A.21. Juan Ociel Schneider Martín

En declaración extrajudicial de fecha 17 de agosto de 2010, rolante de fs. 1.580 a fs. 1.581 (Tomo V), dice que dentro las funciones que le correspondían en tal calidad, se encontraba la limpieza y orden de la oficina del comandante de compañía, la que se encontraba ubicada detrás de las compañías andina y segunda de cazadores. Que efectuaba esporádicamente los servicios de patrullaje junto a su sección a cargo del subteniente Espinoza, quien salía junto a su grupo denominado efectivamente la “patrulla chacal”, la que recuerda era integrada por Sergio Vallejos Garcés, quien eran el hombre de confianza y ordenanza de Espinoza Ponce, el cabo de reserva Héctor Villablanca Huenulao, quien era el hombre de confianza del teniente Manuel Vásquez Chahuán, Juan Carlos Concha Belmar, Manuel Campos Ceballos, Manuel Canales Valdés y Gabriel Dittus Marín, también muy cercano al teniente Vásquez Chahuán.

En declaración judicial de fecha 19 de agosto de 2010, rolante de fs. 1.582 fs. 1.585 (Tomo V), ratifica su declaración extrajudicial y agrega que en unas ocho oportunidades le tocó integrar la denominada “patrulla chacal”. Relatando que también ocurría a veces que el subteniente Espinoza ordenaba bajar a los detenidos del vehículo militar, de a uno y en un sitio eriazo realizaba simulacro de fusilamiento, para lo cual le ordenaba ponerse de pie, con la vista vendada y las manos amarradas, para luego efectuar un disparo al aire y un culatazo en el estómago.

A.22. Luis Raimundo Quezada Chandía

En declaración extrajudicial de fecha 25 de septiembre de 2014, rolante a fs. 1.931 a fs. 1.934 (Tomo VI), informa que los detenidos que comenzaron a llegar al regimiento a partir del día 11 de septiembre eran alojados en un “gimnasio chico” que estaba al costado de los comedores de los conscriptos y añade que nunca le correspondió efectuar la custodia de estos, ya que esas funciones casi siempre las efectuaba el contingente de las compañías de plana mayor y servicios y la de cazadores. Continúa su declaración señalando que dentro del gimnasio había una dependencia donde se torturaba. Que se comentaba que había un catre donde se le aplicaba corriente eléctrica a los detenidos, esto lo supo por el comentario de la gente que trabajaba en el casino y también porque a veces se escuchaban gritos provenientes de esa dependencia. Que es efectivo que, en la enfermería, cuadra de plana mayor y servicios y un baño ubicado entre las cuadras de las compañías de cazadores y andina, se efectuaban interrogatorios.

A.23. Nelson Manuel Uldaricio Ubilla Toledo

En declaración extrajudicial de fecha 23 de julio de 2003, rolante de fs. 1.284 a fs. 1.285 (Tomo IV), en lo pertinente acerca de la Fiscalía Militar de Temuco y su funcionamiento en fechas posteriores al 11 de septiembre de 1973, recuerda que el fiscal militar, en primera instancia, fue el mayor Luis Jofre Soto, quien se desempeñó por espacio de dos o tres meses, no recuerda exactamente, pero sí que luego de éste pasó a desempeñarse el abogado Alfonso Podlech Michaud no precisando fecha. Del funcionamiento de la fiscalía, recuerda que los detenidos eran llevados al regimiento por funcionarios de carabinero o investigaciones, los cuales se les llevaba a prestar declaración o de lo contrario se dejaban en calidad de tránsito de la guardia del recinto, hasta que declaraban; una vez hecho eran dejados en libertad o enviados a la cárcel.

En diligencia de careo con Herman Carrasco Paul, de fecha 12 de diciembre de 2003, rolante de fs. 1.303 a fs. 1.304 (Tomo IV), ratifica su declaración de fs. 171 (la que consta en estos autos a fs. 1.292 a fs. 1.293 Tomo IV). Declara que no prestó funciones de ninguna naturaleza en la intendencia de Temuco, como tampoco es efectivo que haya interrogado o torturado a detenidos al interior del regimiento Tucapel. Enfatiza que los detenidos no estuvieron bajo su responsabilidad, sino bajo la responsabilidad de la fiscalía militar y estando encuadrado y subordinado en el regimiento no podría tener disponibilidad de la vida de las personas en sus manos.

A.24. Carlos Luco Astroza

En declaración extrajudicial de fecha 11 de octubre de 2006, rolante de fs. 1.587 a fs. 1.588 (Tomo V), señala que fue enviado en calidad de agregado a cumplir funciones a la Fiscalía Militar del Regimiento Tucapel a partir del 14 de septiembre de 1973. Espeta que en más de una oportunidad pudo ver a don Alfonso Podlech al interior de la Fiscalía Militar del Tucapel sosteniendo reuniones con el mando y en oportunidades vistiendo de uniforme, sin dejar de mencionar que para todos los efectos era el señor Luis Jofré, el fiscal militar. Que también se destacaba la figura del capitán Nelson Ubilla Toledo, a quien recuerda como el hombre que tomaba las decisiones en cuanto a los detenidos junto a sus ayudantes los sargentos Schonherr Frías y Orlando Moreno Vásquez.

En declaración judicial de fecha 08 de abril de 2013, rolante de fs. 3.640 a fs. 3.642 (Tomo X), reitera que en el regimiento dependían directamente del

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

capitán Nelson Ubilla Toledo, quien además tenía a su cargo a los detenidos. Indica que el mayor Jofré no se inmiscuía en nada, por lo que le parece que el abogado Alfonso Podlech estaba a cargo de hecho en la Fiscalía Militar, quien andaba de uniforme en el regimiento.

En declaración judicial de fecha 15 de noviembre de 2013, rolante de fs. 3.644 a fs. 3.646 (Tomo X), reproduce que en el regimiento dependían directamente del capitán Nelson Ubilla Toledo, quien además tenía a su cargo a los detenidos. Indica que el mayor Jofré no interfería en nada, por lo que le parece que el abogado Alfonso Podlech estaba a cargo de hecho en la Fiscalía Militar, quien andaba de uniforme en el regimiento y se entendía con el capitán Ubilla. Deja claro que nunca presencié una conversación entre ellos, pero sí era evidente que existía un nexo entre la Fiscalía Militar y el trabajo de inteligencia que ejercía Ubilla. Que tanto Podlech como Ubilla estaban constantemente en la Fiscalía Militar. Respecto a los detenidos en el regimiento Tucapel indica que ignora quiénes los interrogaban, pero supone que eran los demás detectives agregados, más el capitán Ubilla y los suboficiales Moreno Vásquez y Schonherr, que siempre andaban con este oficial.

A.25. Sergio Luis Campos Torres

En declaración extrajudicial de fecha 6 de mayo de 2009, rolante de fs.1.353 a fs.1.354 (Tomo IV), narró que para el año 1973 en enero ingresó a efectuar su servicio militar obligatorio en el regimiento de Infantería N° 8 Tucapel, se encontraba inserto en la **compañía de logística plana mayor**, cuyo comandante era el capitán Nelson Ubilla Toledo. En cuanto a personas detenidas, no recuerda haber visto personas en esa calidad en el regimiento, pero apreciaba un alto flujo de personas que entraba y salía del recinto constantemente acompañada de oficiales y soldados.

A.26. Manuel Vásquez Chahuán

En declaración judicial de fecha 25 de junio de 2003, rolante de fs. 346 a fs. 346 vuelta (Tomo I), dice que al 11 de septiembre de 1973 se desempeñaba como oficial subalterno en el regimiento Tucapel de Temuco, con el grado de teniente. Al mando del regimiento estaba el coronel Pablo Iturriaga Marchesse, le seguía el teniente coronel Jofre, después el mayor Leal Manzer, A continuación venían los capitanes, que eran comandantes de compañía, entré los que recuerda a Mario Alvarado Verdugo, Fernández Carranza, Nelson Ubilla Toledo, González,

Vargas (fallecido); luego venían los tenientes recordando a los hermanos Jaime y Raimundo García Covarrubias y los subtenientes Grant, Oviedo, Espinoza, y Armando Maldonado Valdivia, oficial de reserva.

En declaración judicial de fecha 04 de septiembre de 2009, rolante de fs. 1.403 a fs. 1.404 (Tomo IV), atestigua que respecto de la presencia de detenidos al interior del regimiento Tucapel, que sólo vio personas privadas de libertad que estaban en tránsito hacia la fiscalía o hacia la cárcel.

En declaración extrajudicial de fecha 20 de agosto de 2009, rolante de fs. 1.410 a fs. 1.412 (Tomo IV), alude que respecto de las personas que ingresaron detenidas al regimiento, específicamente Fiscalía Militar, funciono en un principio en el pabellón de comandancia de la unidad, donde tenía la oficina el comandante Jofre y luego al costado de la guardia de unidad, indica que efectivamente luego del 11 de septiembre ingresaron personas en esa calidad. Anexa que el abogado Alfonso Podlech Michaud era el asesor del fiscal militar y efectivamente en oportunidades vestía uniforme, siendo al parecer su grado oficial de justicia, desde antes del 11 de septiembre de 1973.

En declaración extrajudicial de fecha 06 de agosto de 2015, rolante de fs. 2.307 a fs. 2.308 (Tomo VII), aquilata su desempeño funcionario, y replica que la fiscalía militar, probablemente tenía relación con las determinaciones que se hacían respecto a los detenidos del regimiento, en el sentido de disponer en que condición quedarían estos. Que el fiscal militar de la unidad militar era el mayor Luis Jofré Soto, siendo apoyado en sus funciones por un abogado de apellido Podlech, a quien se le asimiló al grado de oficial de ejército.

A.27. Jaime Guillermo García Covarrubias

En diligencia de careo Héctor Omar Barra Reyes de fecha 21 de septiembre de 2010, rolante de fs. 1.606 (Tomo V), ratifica declaraciones y refiere que existió una dependencia especialmente habilitada por el capitán Ubilla junto a la comandancia, donde eran interrogados los detenidos por el personal de inteligencia, pero jamás entro a ese lugar mientras estuvo ocupado por ese grupo, ni participo de interrogatorios y menos aún de torturas de detenidos. Se mantiene en sus dichos.

En declaración judicial de fecha 24 de septiembre de 2013, rolante de fs.1.848 a fs.1.852 (Tomo VI) interrogado sustentó que el capitán Ubilla habilitó una dependencia ubicada frente a la comandancia, cercana al patio de

mantenimiento, donde además intervenía personal de investigaciones, que fue expresamente llamado para apoyar a la inteligencia en los interrogatorios. Otro grupo de detectives, según lo recuerda, trabajó con la Fiscalía Militar. Que puede ser que el capitán Ubilla haya interrogado personas en ese lugar o quizás se habilitaron dependencias en el gimnasio grande.

En declaración judicial de fecha 16 de abril de 2015, rolante de fs.3.883 a fs.3.886 (Tomo XI), ratifica declaraciones y en lo concerniente el Tribunal le pregunta si el regimiento Tucapel fue centro de detención. El deponente respondió: que inmediatamente después del 11 de septiembre hubo mucha gente que llegó al regimiento llamada por bando, las que fueron interrogadas en el patio de la unidad por personal de inteligencia y algunos suboficiales que fueron comisionados para tales efectos. También vio carros de gendarmería que estaban en el regimiento en los que algunos civiles eran llevados a la cárcel tras los interrogatorios. Que también hubo personas detenidas por toque de queda, los que eran liberados al día siguiente. Asevera que el capitán Nelson Ubilla Toledo era el comandante de la compañía, de plana mayor y servicios, además, era el oficial de inteligencia del regimiento. Éste tenía personal especializado bajo su mando más un grupo de funcionarios de la policía de investigaciones, con quienes interrogaba personas. Algunos de estos civiles, puede ser que hayan quedado detenidos al interior del regimiento, pero por breve tiempo para ser interrogados por Ubilla. El capitán Ubilla tenía una oficina ubicada cerca de la Banda Instrumental donde interrogaba a las personas. Personalmente vio en alguna oportunidad que este oficial interrogaba personas junto a su grupo.

En declaración judicial prestada por video llamada con fecha 12 de abril de 2022, rolante de fs.3.887 a fs.3.896 (Tomo XI), el Tribunal le pregunta ¿Cuál era la oficialidad al mando de la compañía de plana mayor y servicios del regimiento Tucapel de Temuco, después del 11 de septiembre de 1973? ¿Cuál era la cadena de mando? Musita el declarante que estaba Ubilla, su hermano (Raimundo García Covarrubias) como subteniente y Romilio Lavín también como subteniente. La compañía de plana mayor era una compañía que para términos operativos no era como la compañía andina o la compañía de cazadores, o la compañía de fusileros, que eran todos juntos. Para el caso de una guerra, probablemente el oficial de intendencia estaba en la compañía de plana mayor, pero en la paz no lo está. En la paz cumple función de administración de fondos de intendencia.

A.28. José Albino Krause Álvarez

En declaración extrajudicial de fecha 10 de febrero de 2009, rolante de fs.1.327 a fs.1.328 (Tomo IV), sostiene que para el año 1973 ostentaba el grado de cabo primero y cumplía funciones en el regimiento de Infantería N° 8 Tucapel de Temuco. Que efectivamente el regimiento Tucapel luego del 11 de septiembre de 1973, fue utilizado como lugar base para la permanencia de detenidos políticos; que eran requeridos por las autoridades militares y de la Fiscalía Militar que funcionaba al interior del regimiento. Recuerda al abogado Alfonso Podlech Michaud, quien vistiendo uniforme militar asimilado al grado de mayor era el fiscal militar del regimiento.

En declaración extrajudicial de fecha 11 de enero de 2017, rolante de fs. 2.575 a fs. 2.577 (Tomo VIII), señaló que en la compañía de plana mayor y servicios existió una sala donde torturaban a los detenidos, donde siempre se veía gente de civil que pertenecía a la policía de investigaciones de Temuco, recordando que uno de ellos era de apellido Quiroz.

A.29. José Arturo Fuentes Carrasco

En declaración extrajudicial prestada con fecha 28 de septiembre de 2010, rolante de fs. 1.629 a fs. 1.630 (Tomo V), exclama que para el año 1973, se encontraba inserto en la segunda compañía de cazadores, agrega que, recuerda haber visto a personas detenidas, las cuales eran trasladadas desde un punto a otro del regimiento con escolta de soldados conscriptos, se imagina que, para realizarles algún tipo de interrogatorio, labor que no le correspondió realizar. Manifiesta que efectivamente había una patrulla liderada por el teniente Manuel Espinoza Ponce, quien era el comandante de la cuarta sección "armas de apoyo" de la segunda compañía de cazadores, integrada por los conscriptos Sergio Vallejos Garcés, Héctor Villablanca Huenulao, Guillermo Pincheira Farías y Juan Carlos Concha Belmar. Sobre el capitán Manuel Vásquez Chahuán agrega que lo recuerda como integrante del grupo de inteligencia del regimiento Tucapel, para lo cual tenía gente en la compañía de plana mayor y servicios, la que se encontraba a cargo del capitán Nelson Ubilla Toledo. Que en las oportunidades que el capitán Manuel Vásquez, se encontraba ausente de su compañía, era el teniente Jaime García Covarrubias quien lo reemplazaba en sus funciones. Comenta otras situaciones y se le pregunta por otros hechos.

A.30. Orlando Moreno Vásquez

En declaración extrajudicial de fecha 18 de julio de 2003, rolante de fs. 1.276 a fs.1.278 (Tomo IV), musito en cuanto al funcionamiento de la fiscalía militar y sus integrantes que estas personas fueron llevadas por un abogado, quien fue el que se hizo cargo de la fiscalía militar de Temuco a los pocos días después del 11 de septiembre de 1973, de nombre Alfonso Podlech Michaud; quien para todos los efectos era el Fiscal Militar letrado, ignorando cuál era su función específica por cuanto nunca trabajó en forma directa con él. Alude que Alfonso Podlech Michaud cumplía sus funciones de Fiscal en el regimiento Tucapel, recordando que era cotidiano verlo en el interior de esa unidad militar, pero no pudiendo agregar que este se encontraba durante todo el día. Con relación al servicio de inteligencia militar indico que cumplió funciones, pero de este servicio estaba a cargo el entonces capitán Nelson Ubilla Toledo, que a su vez era comandante de la compañía de plana mayor. Otro de los integrantes de este grupo era el sargento Schonherr. Reconoció que cuando la fiscalía militar necesitaba algún preso político, era enviado con una orden de esta para retirarlo de la cárcel y una vez que era interrogado, era trasladado nuevamente al recinto carcelario.

En declaración extrajudicial de fecha 11 de febrero de 2009, rolante de fs. 1.329 a fs.1.331 (tomo IV), insiste que, para el septiembre de 1973, el mayor Luís Jofré siguió cumpliendo funciones de fiscal militar, pero era asistido por el abogado Alfonso Podlech Michaud. Que efectivamente y cree que por su especialidad la que es "Especialista en seguridad militar", le correspondía ir hasta la cárcel pública de Temuco, en vehículo militar (jeep) escoltado por patrulla de la unidad a dejar detenidos de la fiscalía del regimiento o llevar detenidos que eran requeridos; todos por causas políticas.

En declaración judicial de fecha 25 de junio de 2012, rolante de fs. 3.840 a fs. 3.841 (Tomo XI), a la pregunta, explico que el fiscal era Luis Jofré Soto, pero era asesorado por Alfonso Podlech Michaud. Este abogado iba constantemente a la Fiscalía a conversar con el mayor Jofré encerrándose ambos en la oficina del mayor. Este procedimiento era rutinario y permanente desde el mismo 11 de septiembre de 1973 y hasta que el abogado Podlech asumió como Fiscal. Este vestía de uniforme, porque antes había sido militar. Interrogado musita que los detenidos políticos eran mantenidos en un gimnasio pequeño que estaba a un

costado del rancho de tropa. Estos detenidos eran interrogados en la Fiscalía o viceversa.

En declaración judicial de fecha 26 de junio de 2013, rolante de fs. 3.842 (Tomo XI), expone que no le consta que el señor Podlech haya confeccionado los bandos. Tampoco es efectivo que él fuera fiscal militar en 1973, pero sí le consta que este señor estaba permanentemente en la Fiscalía y que, junto al mayor Jofré, que sí era el fiscal militar, tomaban decisiones respecto de los detenidos. Que los oficiales Jaime García Covarrubias, Raimundo García Covarrubias, Manuel Vásquez Chahuán, Nelson Ubilla Toledo y en general todo el resto debieron necesariamente saber acerca de la existencia de detenidos en el regimiento y el destino final de estos.

A.31. Manuel Ángel Fernández Carranza

En declaración judicial de fecha 2 de julio de 2013, rolante de fs.1.802 a fs.1.804 (Tomo VI), en lo pertinente desarrollo que todos los oficiales iban al gimnasio a ver lo que ocurría.

En declaración extrajudicial de fecha 29 de agosto de 2017, rolante de fs. 2.764 a fs. 2.765 (Tomo VIII), replica desempeño en el regimiento de Tucapel de Temuco, y en lo pertinente proclama que toda labor operativa o represiva que se comenzó a realizar en Temuco, la cual iba orientada a las detenciones e interrogatorios de personas opositoras al régimen militar. Se canalizó directamente desde la comandancia del regimiento hacia la compañía de plana mayor y servicios, la cual estaba a cargo del capitán Nelson Ubilla Toledo, quien asumió labores de inteligencia. Dentro de los colaboradores de Ubilla, estaba el sargento Arias, recordando que en la comandancia había otro cabo o sargento que también veía esos temas cuyo apellido era Schonherr.

A.32. Ricardo Del Tránsito Esparza Rocha

En declaración judicial de fecha 14 de octubre de 2010, rolante de fs. 1.617 a fs. 1.618 (Tomo V), soslaya que los detenidos eran mantenidos en el gimnasio del regimiento desde donde eran sacados por personal de planta de turno, siendo trasladados hasta otras dependencias para ser interrogados. Después no los volvían a ver. Agrega que al le correspondió custodiar la entrada del gimnasio en alguna oportunidad.

A.33. Juan Nicolás Pérez Zúñiga

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

En declaración judicial de fecha 17 de mayo de 2012, rolante de fs. 1.663 (Tomo V), afinca que en cuanto a los comentarios que los oficiales hacían en el casino puede señalar que escucho en más de una oportunidad hablar al teniente Espinoza, a Maldonado y a Raimundo García Covarrubias hablar acerca de detenidos. Ellos expresaban que habían detenido personas y que las estaban interrogando, acerca de la existencia de armas y de explosivos.

A.34. Juan Bautista Labraña Luvecce

En declaración extrajudicial de fecha 23 de marzo de 2010, rolante de fs. 1.472 a fs. 1.473 (Tomo V), arguyo que para el año 1973 y hasta fines de ese año permaneció en el regimiento de Infantería N°8 Tucapel de Temuco. Sobre la sección segunda, que se encontraba bajo el mando de Nelson Ubilla Toledo, puede decir que recuerda al sargento Orlando Moreno Vásquez, Raúl Schonherr Frías, Luís Barrenechea Calderón cabo primero, Luís Campos Espinoza y Roberto Astete Cea. Además, dentro de este grupo se encontraban los oficiales Jaime y Raimundo García Covarrubias.

En declaración judicial de fecha 12 de mayo de 2010, rolante de fs. 1.478 a fs. 1.479 (Tomo V), ratifica declaración extrajudicial y anexa que solo concurrían allí los miembros de la sección segunda, quienes vestían de civil. Además, concurrían a ver a los detenidos los oficiales Vásquez Chahuán, Espinoza Ponce y los hermanos García Covarrubias, quienes trabajaban en la comandancia del regimiento.

En declaración extrajudicial de fecha 14 de abril de 2011, rolante de fs. 1.642 a fs. 1.643 (Tomo V), reitera que la sección segunda que se encontraba bajo el mando del capitán Nelson Ubilla Toledo (fallecido), que es efectivo que los detenidos que llegaban al regimiento eran llevados hasta el gimnasio. Lugar donde eran custodiados por los conscriptos de la compañía que estuviera cumpliendo servicios de guardia. Por otra parte, también le es preciso señalar que los únicos que podían ingresar a dicha dependencia eran los oficiales y funcionarios del cuadro permanente que cumplían funciones en la sección segunda, recordando entre estos al teniente Manuel Vásquez Chahuán, Manuel Hugo Espinoza Ponce, los hermanos Jaime y Raimundo García Covarrubias, quienes también tenían el grado de teniente.

A.35. Juan Humberto Carrillo Rebolledo

En declaración extrajudicial de fecha 29 de abril de 2009, rolante de fs.1.346 a fs.1.347 (Tomo IV), en cuanto a la permanencia de personas detenidas al interior del regimiento Tucapel, proclamo que efectivamente vio prisioneros políticos al interior de este, específicamente, en una sala contigua a la guardia. Además, recuerda haber visto en esa calidad a Juan Antonio Chávez Rivas y a Herman Carrasco Paul.

En diligencia de careo con Herman Carrasco Paul, de fecha 19 de mayo de 2009 rolante de fs. 1.351 a fs.1.352 (tomo IV), ratifica su declaración y musita que esa fue la única oportunidad que lo vio, quien se veía muy deprimido, pero no tenía señales de haber sido torturado.

En declaración judicial de fecha 26 de julio de 2010, rolante de fs.1.533 a fs.1.534 (Tomo V), respecto a su destinación al llegar al regimiento Tucapel, inquirió que en abril de 1973 paso a la **compañía de plana mayor** cuyo comandante era el capitán Nelson Ubilla Toledo; específicamente encuadrado en la primera sección bajo las órdenes de un sargento cuyo nombre no recuerda. A mediados de 1973 se hizo cargo de su sección el teniente Raimundo García Covarrubias.

A.36. Mario Hernán Arias Díaz

En diligencia de careo con Oscar Inostroza Segura, de fecha 26 de marzo de 2010, rolante de fs. 1.468 (Tomo V), aporta que en alguna oportunidad le correspondió entregar detenidos desde la guardia a conscriptos para que llevaran detenidos a la dependencia a que hace referencia el señor Inostroza.

En diligencia de careo con Libardo Schwartenski Rubio de fecha 26 de marzo de 2010, rolante de fs. 1469 (Tomo V), en lo pertinente, aunque no recuerda a la persona con la que se carea, pero si el nombre de Libardo Schwartenski como un conscripto de confianza del grupo de suboficiales y oficiales a cargo de los detenidos.

En declaración judicial de fecha 6 de julio de 2013, rolante de fs. 1.817 a fs. 1.819 (Tomo VI), consultado dice que vio detenidos en una dependencia ubicada en la guardia del regimiento, los que no se registraban en ese lugar, es decir, no se dejaba constancia de su detención e ingreso a la unidad en el libro de novedades. Sin embargo, le parece que había otro grupo de detenidos que eran llevados hacia la compañía de plana mayor, que iban con su vista vendada. Tiene entendido que todos los oficiales concurrían al lugar donde trabajaba Ubilla y su

grupo, porque cuando llegaban con detenidos debían informarle al capitán respecto de la razón por la cual estas personas estaban privadas de libertad. También debían darle cuenta al fiscal respecto de lo mismo. Anexa que el fiscal en 1973 era el mayor Jofré, quien se hizo asesorar por personal de la Corte de Apelaciones de Temuco y por un abogado de nombre Alfonso Podlech. A este abogado lo veía casi todos los días cuando llegaba al regimiento. Siempre lo vio de civil, salvo en los consejos de guerra, en que vistió uniforme. El Tribunal le lee las declaraciones extrajudicial y judicial prestadas por José Raúl Inzunza Reyes, de fs. 3.307 y fs. 3.310. El deponente señala: que supo de interrogatorios efectuados en la compañía de plana mayor y servicio, pero nunca participó de ellos. Que se comentaba eso sí, que los hermanos García Covarrubias participaban de estas actividades, sobre todo el menor de ellos que “medio loco”, sometiendo a los conscriptos a actividades de instrucción no programadas durante las noches.

En declaración extrajudicial de fecha 9 de mayo de 2019, rolante de fs. 3.187 a fs. 3.188 (Tomo IX), señala que el capitán Nelson Ubilla se hizo cargo de la inteligencia de la unidad militar, departamento segundo, además de encargarse de la compañía de plana mayor y servicios. Sobre la existencia de una sala ubicada entre la compañía de plana mayor y servicios y la compañía de morteros, donde después del día 11 de septiembre fue habilitada para efectuar interrogatorios a detenidos bajo aplicación de tortura, expresa que era manejada por el departamento segundo.

En declaración judicial de fecha 12 de julio de 2019, rolante de fs. 236 a fs. 242 (cuaderno secreto), dice que los que llegaban detenidos pasaban directo al departamento segundo y de ahí para la cárcel. Preguntado por el circuito respecto de los detenidos y la fiscalía militar, si pasaban donde Nelson Ubilla, responde que: claro, que llegaban al departamento segundo, ahí se imagina que los interrogaban, les conversarían cual era (...) eso lo desconoce y después llegaban a la guardia y después se irían. Los que no se iban los pasaban a la cárcel. El Tribunal le da a conocer que tiene bastantes antecedentes que indicarían que al interior del regimiento Tucapel de Temuco había varios lugares de detención, incluso había un lugar de tortura, donde había un catre, el gimnasio, se le pregunta que conocimiento tiene de eso. A lo que responde que: esa era una dependencia que había en la compañía de plana mayor y servicios, pero eso lo

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

manejaba exclusivamente el departamento segundo. Preguntado en torno al departamento segundo, qué relación tiene Pedro Tichauer, el suboficial Romilio Lavín, el subteniente Raimundo García con esa unidad. Responde que lo desconoce. Que Tichauer estaba en administración, finanzas, este pertenecía a la compañía, pero a su llegada al cuartel, no recuerda si era soltero o casado, pero si era soltero llegaba a una pieza. Lavín era oficial de material de guerra, tenía su oficina. Se le pregunta si Raimundo García era la compañía de plana mayor. Refiere que le parece que de la segunda compañía cazadores.

A.37. Enrique Abzalón Castro Obreque

En declaración extrajudicial de fecha 6 de mayo de 2009, rolante de fs.1.355 a fs.1.357 (Tomo IV), sostuvo que para el año 1973 se encontraba inserto en la **compañía de plana mayor y servicios** del regimiento Tucapel de Temuco. Que particularmente estaba dentro de la sección de ingenieros y telecomunicaciones, siendo el oficial a cargo de su sección, el teniente Romilio Lavín Muñoz. Dice que recuerda haber visto a personas en calidad de detenidos al interior del regimiento. Da fe que en una noche en la que se encontraba de guardia en la puerta de ingreso principal al recinto, este oficial salió acompañado por al menos tres soldados, en un camión tres cuartos de la unidad, llevando consigo a un prisionero amarrado, vendado y amordazado, pero vivo al interior de ese vehículo, volviendo al rato después sin él.

En declaración extrajudicial de fecha 25 de enero de 2017, rolante de fs. 2.582 a fs. 2.583 (tomo VIII), replica su ingreso y encuadramiento dentro del regimiento Tucapel y en lo pertinente en la compañía de plana mayor y servicios, la que estaba al mando del capitán Nelson Ubilla Toledo, quien dejó ese cargo el día 11 de septiembre asumiendo el mando el teniente Raimundo García Covarrubias, quien subrogó al mencionado capitán. De los clases de su compañía, recuerda al sargento Luis Peña Andaur, el sargento Mario Arias Díaz, cabo segundo Pablo Silva, junto con ellos también había otro oficial de apellido Lavín, quien era teniente.

A.38. José Sebastián Venegas Umanzor

En declaración judicial de fecha 7 de diciembre de 2009, rolante de fs. 1.448 a fs. 1.449 (Tomo V), proclama que sabe por comentarios que los detenidos eran torturados al interior de la sala de conferencias, que era una oficina ubicada entre la cuadra de plana mayor y la de morteros.

A.39. Juan Guillermo Bórquez Escobar

En declaración judicial de fecha 25 de junio de 2019, rolante de fs. 3.198 a fs. 3.201 (Tomo IX), que como ha señalado en otras ocasiones, efectivamente en el regimiento Tucapel de Temuco a contar del 11 de septiembre de 1973 existieron detenidos por motivos políticos. Lo anterior lo dice, porque en varias ocasiones junto a muchos soldados y oficiales de la compañía andina en conjunto con otros oficiales y conscriptos de otras compañías fueron a practicar allanamientos a distintos domicilios de personas que eran tildadas de comunistas. Que es efectivo que al interior de la compañía de plana mayor y servicios del regimiento Tucapel de Temuco existía una sala de torturas donde se interrogaba a los detenidos mediante la aplicación de corriente. Lo anterior lo dice porque en muchas ocasiones pasó por afuera de aquella, pudiendo escuchar los gritos de dolor de estas. A esta sala ingresaban oficiales y personal de investigaciones.

A.40. Héctor Omar Barra Reyes

En declaración extrajudicial de fecha 09 de enero de 2009, que rola de fs. 1.387 a fs. 1.389 (Tomo IV), manifiesta que para el año 1973, tenía 19 años y se encontraba realizando el servicio militar obligatorio en el regimiento de Infantería N°8 Tucapel de Temuco. Se encontraba inserto dentro de la **compañía de plana mayor y servicios**, la que se encontraba al mando del capitán Nelson Ubilla Toledo. Con relación a los detenidos y su permanencia al interior de la unidad, dice recordar que éstos eran llevados hasta una sala que se encontraba ubicada entre la compañía de plana mayor y la de morteros, desde ese lugar se escuchaban gritos y quejidos de dolor, claramente esta dependencia era usada para la tortura de detenidos.

En declaración judicial de fecha 20 de agosto de 2009, que rola de fs. 1.394 a fs. 1.395 (Tomo IV), ratifica su declaración extrajudicial y dice que le consta que el capitán Nelson Ubilla Toledo, los hermanos Covarrubias y algunas personas de civil interrogaban detenidos, porque en más de una oportunidad los vio entrar a una pieza que estaba en un pabellón entre la compañía de morteros y de plana mayor. Que en ese lugar torturaban a los detenidos, pues se escuchaban múltiples alaridos de dolor. Precisa que había dos soldados que los oficiales antes indicados utilizaban para trasladar a los detenidos, de nombres Luis Valeria y Libardo Schwartenski. Estas dos personas se entendían directamente con el capitán Ubilla.

A.41. Héctor Benedicto Hernández Viscarra

En declaración judicial de fecha 16 de enero de 2013, rolante de fs. 1.746 a fs. 1.749 (Tomo V), alude que ingreso al servicio militar el 26 de junio de 1973 en el regimiento Tucapel de Temuco, encuadrado en la compañía de mortero, cuyo comandante era el capitán Manuel Fernández Carranza. En lo pertinente dice que vio detenidos en el regimiento Tucapel, los que estaban en la guardia de la unidad y en una dependencia que estaba junto a las caballerizas. Recuerda que el grupo de oficiales de inteligencia estaba conformado por el capitán Nelson Ubilla Toledo, de plana mayor y servicios y en cuya compañía funcionaba la oficina de inteligencia, más el capitán Manuel Vásquez Chahuán y los tenientes Alejandro Rubio Valladares, Pablo Gran López. Estos tres últimos, siempre andaban juntos. Que pudo ver en varias ocasiones a estos oficiales entrar a la sala contigua a las caballerizas donde estaban los detenidos. Recordando haber visto regresar a los detenidos desde ese lugar hacia la guardia en muy malas condiciones. Algunos señalaban que los habían colgado por horas de cabeza. Que en una oportunidad el capitán Vásquez Chahuán le ordenó mojar a los detenidos que estaban en la guardia utilizando una manguera para que no se les notaran las lesiones provocadas por las torturas. Que vio todas estas cosas porque le correspondió efectuar guardias internas.

A.42. Ernesto García Isla

En declaración extrajudicial de fecha 7 de mayo de 2009, rolante de fs.1.361 a fs.1.363 (Tomo IV), sustentó que perteneció a la **compañía plana mayor y servicios** que en ese entonces estaba a cargo del capitán Nelson Ubilla Toledo. Consultado en cuanto a la permanencia de detenidos al interior del regimiento, manifestó que vio detenidos en dicho recinto militar, dentro de los que pudo ver estaba su exprofesor en el liceo de Gorbea, cuyo nombre es Omar Venturelli Leonelli. También dentro de las personas que en fotografía se le exhibieron, dice que recuerda haber visto a un hombre, delgado, alto, de barba; a quien tuvo que vendar y llevar ante la presencia de oficiales de la unidad. Agrega que los detenidos estaban a cargo de un grupo especializado denominado servicio de inteligencia regional, compuesto por los oficiales Nelson Ubilla Toledo, Manuel Espinoza Ponce, Jaime García Covarrubias, Raimundo García Covarrubias y los funcionarios de planta Orlando Moreno Vásquez, el suboficial de apellido Atala y el cabo primero Bahamondes, quienes interrogaban a los detenidos. Por lo general,

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

era en una sala que estaba en el pabellón que albergaba a las compañías de plana mayor y servicios, y compañía morteros, a un costado de los baños de la compañía.

En declaración judicial de fecha 23 de junio de 2009, rolante de fs.1.381 a fs.1.382 (Tomo IV), ratifica declaración extrajudicial y proclamo que le parece que los interrogatorios se efectuaban en el pabellón de plana mayor. Esos interrogatorios eran efectuados por el capitán Ubilla Toledo quien era ayudado por Orlando Moreno Vásquez, Raúl Schonherr y un suboficial de apellido Atala.

A.43. Hernán Raúl Quiroz Barra

En declaración extrajudicial de fecha 18 de abril de 2012, rolante de fs. 1.692 a fs. 1.694 (Tomo V) dice que, una vez llegado el 11 de septiembre de 1973, y debido a los hechos que ocurrieron ese día fue destinado por el mando de su unidad a cumplir funciones al interior del Regimiento de Infantería N°8 Tucapel de Temuco. Que una vez que llegaron al regimiento Tucapel, se les puso bajo las órdenes de la Fiscalía Militar la cual estaba a cargo del mayor Luis Jofre Soto, siendo su ayudante el capitán Nelson Ubilla Toledo. Se le asignaron labores de toma de declaraciones a detenidos, efectuar citaciones, detenciones y allanamientos ordenados por la Fiscalía Militar. Que la dependencia que se le asignó correspondía a una oficina ubicada en la comandancia del regimiento. Señala que el fiscal militar ordenó que los detenidos que no colaboraran con ellos fueran entregados directamente al teniente de ejército Manuel Espinoza Ponce, quien se haría cargo de estas personas. En cuanto a los sargentos Schonherr y Moreno, los recuerda trabajando como dactilógrafos en una oficina que estaba en la misma dependencia donde ellos trabajaban, recordando haberlos visto en más de alguna oportunidad tomándoles declaraciones a detenidos. Y agrega que siempre se enteraban de fallecimiento de detenidos al interior del regimiento durante las mañanas y de acuerdo con la información que se les entregaba a las personas, fallecían, producto de disparos efectuados por personal militar por intentar fugarse del regimiento en horas de la noche. Reiterando que mientras estuvieron agregados al regimiento siempre estuvieron bajo las órdenes de la Fiscalía Militar, recordando que ésta, estaba asesorada por el abogado Alfonso Podlech Michaud.

En declaración judicial de fecha 04 de junio de 2003, rolante de fs. 1.770 a fs. 1.771 (Tomo V), replica que al presentarse en la ayudantía del regimiento

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Tucapel fueron derivados al señor fiscal militar de ese entonces Luis Jofre Soto, quien les indico que debían cumplir las mismas funciones que cumplían en investigaciones, pero al mando de este. Las que consistían en detenciones, citaciones, allanamientos, búsqueda de armas, bombas. Todas las órdenes que cumplieron fueron mediante decreto de la fiscalía, tal como se hacía con los tribunales ordinarios de justicia. Manifiesta que a ellos se les asignó una oficina en el interior del regimiento Tucapel frente a la fiscalía misma. En ella tomaban declaraciones a los detenidos. Respecto a los detenidos “difíciles” eran entregados al teniente de ejército de apellido Espinoza, quien era comando, boina negra, alto de ojos claros, le decían “el gato Espinoza”. Que este oficial era el encargado del interrogatorio de esas personas difíciles, precisa que se trataban de detenidos que “se iban de negativa y no querían reconocer, habiéndoles encontrado explosivos o armamentos en su poder”. En cuanto a Alfonso Podlech Michaud, sabe que este asesoraba al fiscal militar Luis Jofre Soto, en la parte legal. Este era abogado y concurría en esa época al regimiento donde lo vio personalmente. Que a petición de Podlech, se llevó a la fiscalía gente profesional, esto es, funcionarios actuarios de los tribunales de justicia. Que también tiene conocimiento que este pidió asesoría a un Ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, para llevar una buena forma el funcionamiento de la Fiscalía Militar.

En declaración extrajudicial de fecha 08 de noviembre de 2002, rolante de fs. 1.772 (Tomo V) y que continua a fs. 1.774 (Tomo VI) insiste que las órdenes las impartía el señor fiscal directamente al grupo comisario Poblete, y posteriormente salían a darle cumplimiento. En estas labores le correspondió realizar diferentes investigaciones, citaciones de personas y también detenciones. Que cuando se detenía a una persona, era interrogada en los cuarteles de investigaciones y luego puesta a disposición de la fiscalía. En algunas oportunidades cuando se trataba de detenidos “difíciles” eran entregados al teniente de ejército de apellido Espinoza, quien se hacía cargo de su interrogatorio. Que su desplazamiento dentro del regimiento estaba un poco restringido, ya que, para el ingreso pasaban por la guardia, luego contiguo a esta sala estaba una dependencia habilitada como calabozo. Por el frente de la guardia estaba la sala de la comandancia, en cuyo interior funcionaba la fiscalía. A un costado de la oficina de la fiscalía existía una oficina donde trabajaban los detectives. La oficina estaba equipada con un escrito, dos máquinas de escribir y unas cuantas sillas.

En declaración judicial de fecha 24 de junio de 2013, rolante de fs. 1.777 a fs. 1.782 (Tomo VI), esboza que el jefe de inteligencia era el capitán Nelson Ubilla Toledo, pero desconoce que otros militares componían ese departamento. Que el grupo de detectives que fue comisionado para trabajar las órdenes emanadas de la Fiscalía Militar estaba a cargo del comisario Aquiles Poblete Müller. Que cuando llegaron al regimiento Tucapel había más de ochocientos detenidos en el patio de la unidad, los que permanecieron por lo menos cinco días allí, ya que, ellos debían tomarles declaraciones y anotar sus datos. Le parece que los detenidos fueron mantenidos en un gimnasio que había al fondo del patio de la unidad o en las caballerizas, no recuerda exactamente. Sin embargo, ellos siempre permanecían tomando declaraciones en el patio. En esa tarea fueron ayudados por el suboficial Schonherr de ejército. El Tribunal le pregunta si le correspondió participar en interrogatorios de detenidos en el regimiento Tucapel. El declarante responde: “Sí me correspondió hacerlo, pero siempre en la oficina que teníamos asignada en el recinto de la comandancia”. Respecto de los dichos expresados en su declaración extrajudicial sobre los detenidos difíciles y que eran entregados al teniente Espinoza, esto era una orden expresa que el mayor Jofre le dio a su jefe el comisario Poblete. En este sentido, muchas veces llegaron personas detenidas por patrullas de carabineros, militares o de la fuerza aérea, que venían catalogadas como extremistas, a quienes interrogaban en “nuestra oficina”. Que estas personas eran derivadas al teniente Espinoza por orden del mayor Jofre. Para esto ellos llamaban a la guardia para que un soldado viniera a buscar al detenido, el que era llevado al calabozo de esa dependencia. Desde ese lugar el detenido era sacado por algún conscripto, más tarde para ser llevado a la presencia del teniente Espinoza. Respecto a las personas que resultaban muertas tras intentar fugarse o quitarles el arma a los centinelas, puede señalar que este tipo de noticias ellos las recibían cuando llegaban en la mañana a trabajar al regimiento.

En diligencia de careo con Daniel Arnoldo Aguirre Mora, de fecha 05 de julio de 2013, rolante de fs. 1.811 a fs. 1.812 (Tomo VI) ratifica declaraciones y que por otra parte él sólo atendió al señor Podlech en el cuartel de investigaciones, en una oportunidad en que éste se presentó en la guardia y solicitó subir al segundo piso a la oficina de informaciones, donde trabajaba el detective Ortiz.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

En declaración judicial de fecha 27 de octubre de 2021, rolante de fs. 3.680 a fs. 3.683 (Tomo XI), en lo pertinente el Tribunal le consulta quién le ordenaba interrogar a los detenidos. El deponente indica: que los militares entregaban detenidos en la oficina que ellos tenían y ordenados por el señor Poblete, interrogaban a los detenidos. Luego los mismos militares retiraban a los detenidos desde la oficina. Que la oficina donde estaban es la que se vio en la inspección ocular. El suscrito trabajaba con San Juan y Morales, en otra oficina estaba Poblete y Ortiz, pero estos últimos se fueron a trabajar al interior del regimiento con el grupo que tenía Ubilla. Que a ellos les llegaba un detenido con un temario, estas preguntas tenían que ver con asuntos políticos y con el correr del tiempo se ha dado cuenta que la información que les entregaban, lo que decía de los detenidos, era falso. El Tribunal le da a conocer la identidad de las víctimas de un hecho y lee lo pertinente de las declaraciones del testigo M.C.S, rolante de fs. 2.309, de fs. 2.638; de fs. 3.109 y la de fecha 16 de agosto de 2021. El deponente indica: que no solo ellos estaban ahí para interrogar. El capitán Ubilla solicitó a investigaciones más personal. Cuando empezaron a morir detenidos a cargo del grupo del capitán Ubilla, el señor Ortiz se retiró y les dijo “no se metan por ningún motivo a trabajar con ese grupo, porque a los militares se les están muriendo los detenidos”. Sobre las muertes de personas al interior del regimiento dice que debió enterarse la oficialidad del regimiento, porque es un hecho grave. Que es posible, pero no le consta lo que dice el testigo M.C.S. sobre las torturas que efectuaban los militares y que se le murieron detenidos, pero que ellos los detectives no estaban ahí, por lo menos San Juan, Morales y el deponente, quienes trabajaron en la comandancia. Insiste que no solo se dedicaban a los interrogatorios por motivos políticos. Respecto a muertes por patrullas militares, estos hechos eran investigados por el grupo donde estaban los actuarios Toloza y Gonzalez.

A.44. Aquiles Alfonso Poblete Müller

En declaración judicial de fecha 29 de diciembre de 2008, rolante de fs. 1.320 a fs. 1.322 (Tomo IV), atestigua que fue destinado al regimiento Tucapel de Temuco, desde fines de septiembre de 1973 hasta los primeros días de enero de 1974. En el regimiento fueron recibidos por el comandante de la unidad quien le presentó al capitán Ubilla, informándoles que a partir de ese momento trabajarían bajo sus órdenes. Los detenidos no prestaban un interrogatorio formal en el

sentido que firmaran alguna declaración, sino que ellos obtenían la información y le informaban de los avances de los interrogatorios al capitán Ubilla, quien muchas veces presenciaba esas entrevistas. Hace presente que el gran responsable de todo y quien decidía el destino de los detenidos era el abogado Alfonso Podlech, quien estaba a cargo de la Fiscalía Militar. Toda la información se la entregaban a Ubilla y este a su vez, entregaba los antecedentes a la fiscalía militar. En esa repartición quien decidía el destino de los detenidos era Alfonso Podlech, que según supo, era el fiscal.

En declaración extrajudicial de fecha 11 de julio de 2012, rolante de fs. 1.697 a fs. 1.698 (Tomo V), soslaya que es efectivo que estaba a cargo del grupo de detectives agregados al regimiento Tucapel de Temuco. Cumplió funciones ordenadas por un capitán de ejército de apellido Ubilla, quien dispuso que se hiciera cargo de los interrogatorios de las personas que llegaban en calidad de detenidas al regimiento Tucapel. Para efectuar dichas labores se situaron en el gimnasio del regimiento, donde personal del ejército les entregaba a los detenidos, quienes ya venían en malas condiciones físicas y procedían a interrogarlos bajo la aplicación de corriente eléctrica producida por un dinamo, también recuerda que, con un cochayuyo mojado, lo pasaban por el cuerpo de los detenidos simulando que se trataba de una culebra. Recordando que al final del periodo ya se encontraba aburrido de las situaciones que ocurrían al interior del regimiento, sobre todo lo que les comentaban algunos militares referentes a los detenidos que interrogaban, ya que, en más de una oportunidad se le comentó que la mayoría de estas personas se les daba muerte.

En declaración judicial de fecha 30 de julio de 2012, rolante de fs. 1.703 a fs. 1.704 (Tomo V), ratifica declaraciones y dice que sabía de las decisiones que tomaba el abogado Alfonso Podlech con respecto de los detenidos, porque los propios soldados que los llevaban y traían les decían que era esta persona quien determinaba sus destinos. Recuerda haber interrogado a un joven que decía haber pertenecido al "GAP". Esta persona cuando se la entregaron estaba muy "frisquedada" es decir, los militares de inteligencia lo habían torturado bastante. Un soldado, cuya identidad ignora le dijo que a este joven "se lo había llevado el Señor". Que había otro oficial que estaba al tanto de lo que pasaba con los detenidos, el teniente Rubio. Sin embargo, no le cabe duda de que todos los oficiales sabían sobre esto. Anexa que le correspondió interrogar detenidos en una

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

sala ubicada en una cuadra del regimiento, en donde les aplicaban electricidad a estas personas.

En declaración judicial de fecha 3 de julio de 2013, rolante de fs.1.805 (Tomo VI), consultado destacó que el abogado Alfonso Podlech era quien determinaba el destino de los detenidos.

En declaración judicial de fecha 26 de julio de 2006, rolante de fs. 3.650 a fs. 3.652 (Tomo X), replica su desempeño funcionario para septiembre de 1973, reitera que el gran responsable de todo era el abogado Alfonso Podlech, quien estaba a cargo de la fiscalía militar.

En declaración judicial de fecha 26 de julio de 2006, rolante de fs. 3.653 a fs. 3.654 (Tomo X), ratifica su declaración y consultado dice que él sabía de las decisiones que tomaba el abogado Alfonso Podlech con respecto de los detenidos, porque los propios soldados que los llevaban y traían, les decían que era esta persona quien determinaba sus destinos. Recordando que había otro oficial que estaba al tanto de lo que pasaba con los detenidos, que era el teniente Rubio. Sin embargo, no le cabe duda de que todos los oficiales sabían sobre esto. Insiste que le correspondió interrogar detenidos en una sala ubicada en una cuadra del regimiento, en donde les aplicaban electricidad a estas personas. Las terminales eléctricas se las ponían en cualquier parte del cuerpo.

A.45. José Heriberto Mansilla Gatica

En declaración judicial de fecha 30 de agosto de 2012, rolante de fs. 1.717 a fs. 1.719 (Tomo V), adiciona que después del 11 de septiembre de 1973, se desempeñaba en la sección de administración de fondos del regimiento Tucapel de Temuco, como dactilógrafo, con el grado de sargento primero. A cargo de esa sección estaba el teniente Tichauer Salcedo. Las dependencias de su sección se ubicaban en la comandancia del regimiento, que posteriormente fueron ocupadas por el servicio de inteligencia. El trabajo cotidiano de la fiscalía, como interrogar, tomar decisiones con respecto de los detenidos era de Alfonso Podlech. Que se intercedía ante Alfonso Podlech, porque éste decidía la suerte de los detenidos que una vez llegaron en camiones. El comandante Jofré le dijo personalmente, cuando estaba de guardia, que las decisiones respecto a un grupo de detenidos que llegaron, entre los que había dos mujeres, debía tomarla Alfonso Podlech. Por esa razón intercedió ante Podlech por las mujeres que conocía. Que la oficina de plana mayor era ocupada por la Fiscalía Militar. En lo formal el comandante Jofre

era el Fiscal Militar, pero todas las decisiones de la Fiscalía Militar las tomaba Podlech. Insiste que Alfonso Podlech tenía el poder para decidir lo que pasaba con los detenidos. Por esa razón se intercedía ante éste por ellos. Comenta que Alfonso Podlech le gustaba el fútbol, por esa razón en una oportunidad intercedió ante este por Rolando Núñez, quien en una oportunidad “se tomó, junto a otras personas uno de los fundos de don Alfonso Podlech”. Cuando esta persona se presentó ante la fiscalía, Alfonso le dijo que le agradeciera al deponente por haber intercedido por él, porque si no lo hubiese hecho, “hace rato lo hubiera tenido apuntado”. Agrega que había una sala de torturas en la primera compañía de cazadores. En una oportunidad andaba buscando a su jefe Tichauer y vio por el “ojo de la llave como le aplicaban electricidad a una mujer en sus senos”. Que Tichauer y los oficiales García Covarrubias tenían que ver con las torturas y los detenidos.

En declaración judicial de fecha 12 de septiembre de 2013, rolante de fs. 1.844 (Tomo VI), ratifica declaración judicial y advierte que estuvo trabajando una tarde con Alfonso Podlech Michaud. Éste tomaba declaraciones y el deponente era el dactilógrafo. Que esta situación solo fue por una tarde y fue por orden del mayor Jofré.

En diligencia de careo con Oscar Alfonso Podlech Michaud, de fecha 12 de septiembre de 2013, rolante de fs. 1.846 a fs. 1.847 (Tomo VI), ratifica declaraciones y adiciona que en la guardia de la unidad se encontró con la señora Meza Moncada en calidad de detenida. En esa oportunidad fue a conversar con don Alfonso, quien le dijo que se la llevara. Que, por orden del mayor Jofré, tuvo que servir como dactilógrafo a Alfonso Podlech mientras interrogaba a la señora Meza Moncada. En cuanto a las funciones de Alfonso Podlech era tomar declaraciones a los detenidos. Replicando haber intercedido ante Alfonso Podlech por un deportista amigo, recordando muy bien lo relatado porque fue lo único que efectuó con Alfonso Podlech en el regimiento Tucapel de Temuco.

En declaración judicial de fecha 20 de diciembre de 2006, rolante de fs. 3.806 bis a fs. 3.808 (Tomo XI), alude que para septiembre de 1973 prestaba funciones en el regimiento Tucapel de Temuco, trabajando en administración de fondos como dactilógrafo. Que es posible que haya interrogado a esta persona, porque estuvo, al parecer una tarde cooperándole a Alfonso Podlech en la toma de declaraciones. Lo anterior, por órdenes. Sin embargo, solo tomó declaraciones

a dos personas, pero quien interrogaba era Alfonso Podlech, a quien ese mismo día le pidió que ayudara a dos civiles que el deponente conocía y que estaban detenidas. Las declaraciones las tomo en la oficina del jefe de la plana mayor. Que a la única persona que recuerda haber visto “muy maltratada producto de las torturas” fue a Rubén Morales Quijada, apodado “milico”, quien era su amigo, quien estaba detenido en el calabozo de la sala de guardia del regimiento. Refiere que el capitán Ubilla y su grupo tenían habilitada una cuadra en la primera compañía para interrogar. Lo que sí sabe es que los militares disponían de los detenidos a “su antojo”.

En declaración judicial de fecha 30 de agosto de 2012, rolante de fs. 3.809 a fs. 3.810 (Tomo XI), ratifica declaraciones y dice que el trabajo cotidiano de la fiscalía, como interrogar, tomar decisiones con respecto de los detenidos era de Alfonso Podlech. Comunica que se intercedía ante Alfonso Podlech, porque este decidía la suerte de los detenidos. Que el comandante Jofré le dijo personalmente cuando estaba de guardia, que las decisiones respecto a un grupo de detenidos que llegaron entre los que había mujeres, debía tomarlas Alfonso Podlech. Por esa razón intercedió ante Podlech por las mujeres que conocía. Replica que la oficina de plana mayor era ocupada por la Fiscalía Militar. Que en lo formal el comandante Jofre era el fiscal militar, pero todas las decisiones de la Fiscalía Militar las tomaba Podlech. Aduce que Alfonso Podlech tenía el poder de decidir lo que pasaba con los detenidos. Por esa razón se intercedía ante él por ellos. En una oportunidad andaba buscando a su “jefe Tichauer” y vio por el ojo de la llave como le aplicaban electricidad a una mujer en sus senos. Que Tichauer y los oficiales García Covarrubias tenían que ver con las torturas y los detenidos.

En declaración judicial de fecha 12 de septiembre de 2013, rolante de fs. 3.811 (Tomo XI), expone que efectivamente estuvo por una tarde trabajando con Alfonso Podlech Michaud. Este tomaba declaraciones y el suscrito era el dactilógrafo. Situación que fue solo por una tarde y fue por orden del mayor Jofré. Replica haber intercedido por una profesora y la asistente social, ocasión donde conversó con el mayor Jofré, quien lo mandó a hablar con Alfonso Podlech, la decisión tomada por éste fue dejar en libertad a las mujeres y citarlas para el día siguiente. Interrogado dice que el mayor Jofré lo mandó a hablar con Alfonso Podlech.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

En declaración judicial de fecha 20 de diciembre de 2006, rolante de fs. 3.813 a fs. 3.814 (Tomo XI), afirma que jamás trabajó tomando declaraciones en la Fiscalía Militar. En lo pertinente señala que es posible que haya interrogado a esta persona (refiriendo a María Meza Moncada), porque estuvo al parecer una tarde cooperándole a Alfonso Podlech en la toma de declaraciones. Sin embargo, solo tomó declaración a estas dos personas, pero quien interrogaba era Alfonso Podlech, a quien ese mismo día le pidió que ayudara a dos civiles que el deponente conocía y que estaban detenidas. A la única persona que recuerda haber visto muy maltratada producto de las torturas, fue a Rubén Morales Quijada, quien era su amigo, relatando donde lo vio y las condiciones en que se encontraba. Recuerda que entre los detenidos venían una profesora con su hijo y una asistente social por quienes intercedió ante Alfonso Podlech para que quedasen en libertad. Que el capitán Ubilla y su grupo tenían habilitada una cuadra en la primera compañía para interrogar personas. Recordando que en una oportunidad se acercó a ese lugar para conversar con el teniente Tichauer, quien estaba presente en los interrogatorios.

En declaración judicial de fecha 12 de septiembre de 2013, rolante de fs. 3.817 (Tomo XI), ratifica declaraciones judiciales insistiendo que efectivamente estuvo una tarde trabajando con Alfonso Podlech Michaud. Este tomaba declaraciones y el deponente era el dactilógrafo, todo por orden del mayor "Cofré". Refiere que intercedido por las personas que mencionan en sus declaraciones, que conversó con el mayor "Cofré", quien lo mandó hablar con Alfonso Podlech. La decisión la tomaba éste, y fue dejar en libertad a esas mujeres y citarlas para el día siguiente.

En declaración judicial de fecha 10 de mayo de 2017, rolante de fs. 3.819 a fs. 3.819 vuelta (Tomo XI), ratifica declaración y el Tribunal le lee las preguntas acompañadas en otros autos por la defensa de Pedro Guillermo Tichauer Salcedo. Y dice que lo conoce porque era el oficial de intendencia para la época de 1973. Que Pedro Tichauer era el contador del regimiento Tucapel. Respecto a los hechos que menciona en la relación a la sala de tortura, agrega que en esa oportunidad había una llamada urgente desde la jefatura de Valdivia para su jefe, Tichauer. Entonces salió a buscarlo para avisarle de la llamada, dirigiéndose a la primera compañía y le preguntó al soldado que estaba ahí, si es que había visto al teniente Tichauer, respondiéndole afirmativamente, pero que el deponente no

podía pasar. Le dijo al soldado que al teniente Tichauer lo estaban llamando de Valdivia, que era urgente. En eso se dirigió a la sala y escuchó un lamento de una mujer, miró por el ojo de la llave, vio bultos, medios de espaldas el cuerpo de un hombre, pero no la cara, sin embargo, reconoció la voz de su jefe, Tichauer, que decía “perrita, es mejor que hables”. Que el mismo soldado que estaba en la entrada le dijo que el teniente Tichauer estaba en la sala que mencionó. Replica que era Pedro Tichauer, que ya lo ha declarado. Que, en esa oportunidad, cuando escucho lo que relató, Tichauer no andaba sacando firma, ya que no era la oficina del capitán Ubilla. Que la oficina donde fue a buscar a Tichauer estaba ubicada en la primera compañía, al final de esa dependencia.

A.46. Miguel Arcángel Calderón Sepúlveda

En declaraciones extrajudiciales de fecha 19 de julio de 2015, rolante de fs. 2.160 a fs. 2.161 (Tomo VI), señala que en 1973 estaba encuadrado en la sección de telecomunicaciones de la **compañía de plana mayor y servicios** del regimiento Tucapel, a cargo del capitán Nelson Ubilla Toledo, siendo su instructor el sargento Arias. Que llegado el 11 de septiembre de 1973, al regimiento comenzaron a llegar personas detenidas, las cuales quedaban alojadas en el gimnasio. En esa época fue elegido para ser estafeta de la Fiscalía Militar. Sus funciones eran la de repartir la correspondencia de la fiscalía, y, además, debía trasladar detenidos desde la cárcel pública al regimiento para presentarlos en los consejos de guerra que se llevaban a cabo en el gimnasio los miércoles y viernes.

En declaración judicial de fecha 29 de julio de 2015, rolante de fs. 2.169 a fs. 2.170 (Tomo VII), ratifica su declaración y con relación a la sala de interrogatorios que había en la compañía de plana mayor señala que en ese lugar existía una sala de interrogatorio y tortura de detenidos. Pasado un tiempo, y ante la escasez de personal, le tocó ir buscar detenidos a la cárcel y llevarlos al regimiento para ser interrogados. Los detenidos no eran interrogados en la Fiscalía, sino que por orden del Fiscal Militar Podlech debía llevarlos hasta el regimiento, donde eran ingresados a la sala de interrogatorios a la que hizo referencia anteriormente. Él se quedaba afuera de la sala esperando a que se desocuparan. Las personas interrogadas eran torturadas. Escuchó gritos y llantos que provenían desde el interior de la sala de interrogatorios. Las personas eran sometidas a la aplicación de electricidad. Cuando salían de ese lugar debía esperar a que se recuperaran. Pero si escuchó comentarios que se hicieron, no

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

recuerda por quiénes, en que se decía que habían ejecutado personas en el puente Allipén, o que las habrían ido a arrojar en ese lugar.

A.47. Pedro Misael Elgueta Muñoz

En declaración extrajudicial de fecha 15 de enero de 2013, rolante de fs. 1.750 a fs. 1.752 (Tomo V), que para septiembre de 1973 se encontraba efectuando su servicio militar en el regimiento de Infantería N°8 Tucapel de Temuco, encasillado en la sección de plana mayor de la compañía mortero, al mando del capitán Manuel Fernández Carranza, le correspondió cumplir servicios de guardia, siendo testigo en muchas ocasiones del ingreso durante el día de personas detenidas a la unidad militar, debiendo hacer mención que en horas de la noche y de la madrugada, ingresaban de a dos a tres personas detenidas, con sus rostros cubiertos, a la sala de descanso por unos minutos y luego eran subidos a camiones tres cuartos, los cuales eran trasladados al sector de la isla, logrando escuchar a los minutos posteriores el sonido de disparos, presumiendo de inmediato que estas personas habían sido ejecutadas. Que estas “labores” de llevar a cabo las ejecuciones de las personas detenidas en la isla, según como pudo apreciar durante el desarrollo de su servicio, eran bajo las órdenes del oficial de ronda, recordando al capitán Nelson Ubilla de manera frecuente en estos procedimientos, debiendo agregar que quienes podrían haber cooperado o participado en estas funciones, personal de las compañías andina, plana mayor y cazadores. Que otra situación que logró observar cuando fue designado como policía militar, correspondiéndole en el casino, desempeñar labores de seguridad, mientras se realizaban los consejos de guerra, instancias donde el abogado Alfonso Podlech y el comandante del regimiento Pablo Iturriaga Marchesse, sentenciaban las condenas de los detenidos en presencia de éstos, escuchando siempre la pena de muerte o fusilamiento. Que también pudo observar cuando trasladaban a los detenidos a la sala de instrucción de la compañía de morteros, lugar donde se escuchaba los desesperados gritos de estas personas que eran interrogadas.

En declaración judicial de fecha 17 de enero de 2013, rolante de fs. 1.754 a fs. 1.756 (Tomo V), ratifica su declaración extrajudicial agregando que vio de detenidos en el regimiento Tucapel, los que estaban en la guardia de la unidad y en la sala de instrucción de la compañía de morteros. Que en ese lugar los detenidos eran torturados. Pudo escuchar muchas veces los gritos de dolor que

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

salían de esa dependencia. Allí eran sometidos a apremios tanto hombres como mujeres. Que los oficiales a cargo de los detenidos eran Nelson Ubilla Toledo, Jaime y Raimundo García Covarrubias, Manuel Espinoza Ponce, Manuel Vásquez Chahuán y Alejandro Rubio Valladares. Que estos oficiales eran ayudados por los sargentos y clases de la compañía de plana mayor y servicios, más algunos soldados conscriptos entre los que recuerda a Etchepare y Schwarstensi. Que mientras estuvo de guardia en cuatro o cinco oportunidades pudo ver que durante la noche llegaban hacia la sala de descanso de su compañía dos o tres detenidos vendados. Estos eran traídos se imagina desde la cárcel o, de otra parte. Quedaban un rato detenidos en ese lugar y más tarde eran sacados, generalmente por Nelson Ubilla Toledo y los oficiales de la plana mayor y servicios y sus ayudantes, para ser subidos a un camión y se los llevaban a la isla Cautín. Al poco rato se escuchaban disparos provenientes de ese lugar. Respecto a Alfonso Podlech Michaud dice que lo recuerda bien porque como dijo en su declaración extrajudicial lo vio en los consejos de guerra. Esta persona a su parecer leía la sentencia que casi siempre era de fusilamiento.

A.48. Rigoberto Antonio Gutiérrez Ancamilla

En declaraciones extrajudiciales de fecha 19 de julio de 2015, rolante de fs. 2.158 a fs. 2.159 (Tomo VI), señala que ingresó a cumplir su servicio militar obligatorio durante el mes de enero del año 1973 al Regimiento de Infantería N° 8 Tucapel de Temuco, quedando encuadrado en la segunda sección de la **compañía plana mayor y servicios**, la que estaba a cargo del capitán Nelson Ubilla Toledo, siendo su instructor el sargento Silva. Conforme su recuerdo, llegado el 11 de septiembre de 1973, al regimiento comenzaron a llegar personas detenidas, las cuales quedaban en la guardia, gimnasio y el rancho, recordando que en su compañía se habilitó una sala que ocupaban los conscriptos para efectuar interrogatorios bajo la aplicación de tortura, recordando que en más de una oportunidad vio ingresar a esa sala funcionarios de planta del regimiento. En lo personal, recuerda haber ido a dejar detenidos a esa sala, pero llegaba hasta la entrada, ya que personal de planta se hacía cargo de esas personas. Por lo que puede recordar en dicha sala había un catre y un par de sillas.

En declaración judicial de fecha 29 de julio de 2015, rolante de fs. 2.168 (Tomo VII), ratifica su declaración y en cuanto a la sala de interrogatorios que había en la compañía de plana mayor, afirma que en ese lugar existía una sala de

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

interrogatorio y tortura de detenidos. Eso lo sabe porque le tocó ir a dejar detenidos a ese lugar que se encontraban en la guardia de la unidad. Luego, recibía la orden de retirarse inmediatamente. En ese lugar trabajaba el capitán Nelson Ubilla Toledo con personal de planta y detectives. Las personas interrogadas en ese lugar eran torturadas.

A.49. Héctor Florentino Navarrete Jara

En declaración judicial de fecha 18 de enero de 2013, rolante de fs. 1.757 a fs. 1.759 (Tomo V), expone que vio detenidos al interior del regimiento Tucapel. Que estos se encontraban en una dependencia ubicada entre el edificio de la compañía de plana mayor y la de morteros. Que en alguna oportunidad le correspondió ir a darles el rancho a unos detenidos que habían traído en helicóptero durante la noche y que venían según supo del sur. Que el camión que le correspondió limpiar al día siguiente estaba lleno de restos de carne humana y sesos.

A.50. Juan Alfonso Campos Valdebenito

En declaración extrajudicial de fecha 08 de agosto de 2017, que rola de fs. 2.752 a fs. 2.753 (Tomo VIII), indica que efectuó el servicio militar obligatorio en el regimiento de Infantería N° 8 Tucapel de Temuco, se desempeñó como soldado conscripto en la **compañía de plana mayor y servicios**, y en lo oportuno que es efectiva la existencia de una sala donde se interrogaban a los detenidos del regimiento, esta estaba entre las compañías de morteros y la de plana mayor. Siempre los detenidos se los entregaban vendados, se los entregaba a Ubilla en la sala de la compañía de plana mayor y posteriormente se los entregaban nuevamente para regresarlos al gimnasio y algunas veces debía llevarlos a la guardia donde en un par de ocasiones les dieron la libertad.

A.51. Juan Isaías Zurita Alarcón

En declaración judicial de fecha 7 de diciembre de 2009, rolante de fs. 1.445 (Tomo V), proclamo que puede agregar a sus dichos que el teniente Raimundo García Covarrubias algunas veces sacaba algunos conscriptos de madrugada o en la noche para participar en actividades que desconoce. Entre los conscriptos recuerda a Heriberto Carrillo como uno de los que García Covarrubias seleccionaba esas noches.

A.52. Jorge Luis Godoy Valdebenito

En declaración extrajudicial de fecha 25 de agosto de 2009, que rola de fs. 1.412 a fs. 1.413 (Tomo IV), dice que, para el mes de septiembre de 1973, tenía 18 años y se encontraba efectuando el servicio militar obligatorio en el regimiento N°8 de Infantería Tucapel, inserto dentro de la **compañía de plana mayor y servicios**, cuyo comandante era el capitán Nelson Ubilla Toledo. El 11 de septiembre de 1973, incluso recuerda el hecho de que el hermano de un conscripto de su compañía cuya identidad no recuerda, mientras permanecía prisionero en el patio de la unidad juntó a otros detenidos, de rodillas y con sus brazos extendidos los cuales debían sostener ladrillos, fue brutalmente golpeado por otro conscripto de la compañía de nombre José Chávez Etchepare, quien estaba designado por el mando de la unidad para vendar a los detenidos, marearlos mediante la técnicas de dar vueltas sobre su eje para posteriormente pasarlos a la pieza que se encontraba dentro de la compañía de plana mayor, la cual contaba con un catre metálico y dos dínamos eléctricos. Que conoció el funcionamiento de estos aparatos, cuando por reírse el sargento Mario Hernán Arias Díaz lo puso sobre este catre y le aplicó golpes de corriente en su cuerpo, al menos por unos diez minutos, lo cual le causó mucho dolor, vómitos y diarrea, lo que hasta el día de hoy no ha podido olvidar.

En declaración judicial de fecha 25 de septiembre de 2009, que rola de fs. 1.423 a fs. 1.425 (Tomo V), ratifica su declaración extrajudicial y en lo pertinente refiriendo a Jaime García Covarrubias indica que el teniente García mandaba más que el capitán Ubilla en cuanto al tratamiento de detenidos, destacándose por su crueldad para con ellos. Su hermano, el subteniente Raimundo García, en un principio fue una persona muy amable y no se quiso meter con los detenidos, pero después fue influenciado por su hermano y cambió su conducta. Posteriormente, ambos participaban en los interrogatorios de los detenidos en la dependencia de la banda del regimiento.

En diligencia de careo con Jaime García Covarrubias, de fecha 21 de septiembre de 2010, que rola de fs. 1.608 (Tomo V), ratifica sus dichos y manifiesta que siente mucho temor de esta persona, por lo que no desea seguir declarando, ya que está seguro de que su vida correría peligro si agrega algo más. "Este señor es muy peligroso".

En declaración extrajudicial de fecha 17 de octubre de 2018, que rola de fs. 232 a fs. 235 (cuaderno secreto), ratifica su declaración extrajudicial y refiere

en cuanto a los detenidos que eran interrogados en una sala ubicada dentro de las dependencias de la compañía de plana mayor y servicios. En esta dependencia existía dos catres y cuatro máquinas generadoras de corriente dispuestas para ser accionadas en contra de los detenidos por motivos políticos que eran trasladados por el grupo señalado precedentemente hasta esta verdadera sala de tortura; lugar donde también fue torturado en una oportunidad por el sargento Arias. Dice que los detenidos por motivos políticos que llegaban a la Fiscalía Militar se imaginan que posteriormente eran trasladados a la sala de torturas. Lo anterior, según su parecer, para sacarles alguna información porque todos decían que eran inocentes. Que siempre veía cuando entraban los detenidos a esta sala de torturas ubicada en la compañía de plana mayor y servicios. Que estas personas se encontraban vendadas y amarradas. Veía que Chávez Etchepare concurría constantemente a la sala de bandas a buscar detenidos, para luego ingresarlos a esta sala y proceder a torturarlos. Lo anterior lo dice, porque lo veía. Añade que nunca estuvo adentro de esa sala en el momento en que estaba siendo torturada una persona, pero si sentía sus gritos de dolor porque se encontraba afuera. Le parece que a esta sala hacían ingresar a dos detenidos a la vez y afuera de ella quedaban los otros. Todos siempre con la vista vendada.

A.53. Víctor Manuel Terán Vásquez

En declaración extrajudicial de fecha 07 de noviembre de 2012, rolante de fs. 1.737 a fs. 1.739 (Tomo V), arguyo que ingreso hacer su servicio militar en abril de 1973 en el regimiento Tucapel de Temuco, quedando encuadrado en la **compañía de plana mayor y servicio**, al mando del capitán Nelson Ubilla Toledo. Adiciona que el comandante de la compañía de plana mayor y servicios también estaba a cargo de la sección de inteligencia militar. Que ocurrido el golpe militar era frecuente que diariamente llegaran personas detenidas, las cuales eran dejadas en el gimnasio del regimiento. Señala que había dos detectives que se encargaban de interrogar bajo tortura a los detenidos al interior del gimnasio, recordando que uno de estos detectives era de apellido Morales. Según su recuerda, ellos interrogaban a las personas bajo la aplicación de corriente eléctrica la cual era generada por un dinamo manual. Afirmar dar fe de esta situación, porque vio la maquina con la cual “trabajaban” y muchas veces le correspondió ir a limpiar al gimnasio las orinas y excrementos de las personas torturadas. Que otra dependencia donde se torturaba, correspondía a una sala que en principio

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

ocupaban los conscriptos para ver televisión y realizaban reuniones, la cual se ubicaba en la cuadra de la compañía de plana mayor y servicios y que fue habilitada como sala de interrogatorios, donde constantemente eran llevados los detenidos para ser torturados por personal militar en base a golpes y aplicación de corriente eléctrica. Según recuerda cuando se ingresaban detenidos a esa sala, se les ordenaba que hicieran abandono de esa cuadra y siempre vio ingresar a dicho lugar al capitán Nelson Ubilla Toledo, a los tenientes Jaime y Raimundo García Covarrubias y Manuel Espinoza Ponce. Agrega que estos oficiales eran los encargados de interrogar a los detenidos en dicho lugar y también de torturar, ya que “vez que los veía ingresar con detenidos se comenzaban a escuchar los gritos de dolor de las personas desde esa sala”.

En declaración judicial de fecha 02 de octubre de 2013, rolante de fs. 1.856 a fs. 1.857 (Tomo VI), ratifica declaración extrajudicial y suma que el teniente Alejandro Rubio Balladares era de la compañía de cazadores y amigo del capitán Ubilla. Estos dos oficiales, más los tenientes Jaime y Raimundo García Covarrubias y Manuel Espinoza Ponce formaban un grupo de oficiales que tenían que ver con los detenidos. Los vio en varias oportunidades entrar a la sala de plana mayor cuando se torturaba detenidos. Que el gimnasio al que hace referencia en sus dichos estaba ubicado a un costado del rancho de conscriptos. Era un gimnasio viejo que estaba en desuso, distinto al gimnasio grande. En ese lugar se torturaba a los detenidos. Recuerda que traían detenidos de la cárcel, los que eran interrogados por Alfonso Podlech y Adrián González.

En diligencia de careo con Jaime García Covarrubias de fecha 16 de abril de 2015, rolante de fs. 3.478 a fs. 3.479 (Tomo X), insiste en que vio entrar con detenidos a la sala de tortura al señor García, a su hermano y otros oficiales, tras lo cual comenzaban a sentirse gritos de dolor. Aunque no lo vio personalmente, le es posible deducir que a lo menos presenció estas sesiones.

A.54. Héctor Orlando Saavedra Peña

En declaración extrajudicial de fecha 23 de agosto de 2017, rolante de fs. 2.758 a fs. 2.759 (Tomo VIII), escruta que efectuó su servicio militar obligatorio en el regimiento de Infantería N°8 Tucapel de Temuco, integró la **compañía de plana mayor y servicios** la que estaba a cargo del capitán Ubilla, recordando a otros oficiales como los tenientes Lavín y Espinoza, los cabos Silva y Krause, los sargentos Arias y Peña Andaur. Rememorando a otros soldados como Chávez

Etchepare, García y Carrillo por la cercanía que tenían con el personal de planta. Sobre los detenidos que hubo en el regimiento señala que no tuvo contacto con ellos, a pesar de que se sabía que había personas en esa condición en el gimnasio de la unidad militar. En relación con las dependencias de su compañía, expresa que es efectivo que existía una sala que se ocupaba para fines de instrucción la cual una vez iniciado el gobierno militar fue cerrada y ocupada por personal de planta prohibiéndoles a ellos, los soldados, se acercaran a ella. En una oportunidad, recuerda que el soldado Chávez Etchepare les recomendó no acercarse ahí porque en dicha sala se efectuaban los interrogatorios de los detenidos. También a esa sala ingresaban algunos oficiales como es el caso del teniente Espinoza y otro cuyo apellido a su parecer era García, quien tenía otro hermano al interior del regimiento.

A.55. Oscar Inostroza Segura

En declaración extrajudicial de fecha 26 de agosto de 2009, que rola de fs. 1.414 a fs. 1.416 (Tomo IV), acota que ingresó a efectuar el servicio militar obligatorio el día 06 de enero del año 1973, al regimiento N° 8 de infantería y Montaña Tucapel, se encontraba inserto dentro de la **compañía de plana mayor y servicios**, la que se encontraba bajo el mando del capitán Nelson Ubilla Toledo, siendo su segundo comandante el subteniente Raimundo García Covarrubias, recordando que su hermano el teniente Jaime García, se destacaba por su crueldad y tratos inhumanos hacia los detenidos y los propios conscriptos. Añade que dentro de los lugares o dependencias que eran usadas para mantener prisioneros políticos dentro del regimiento estaban, la sala de banda de música de la unidad, el "gimnasio chico" donde se practicaba boxeo, el calabozo de la guardia y la "sala de conferencias" existente dentro de la compañía de plana mayor y servicio. Esta última dependencia se encontraba ubicada al medio de la compañía, allí se encontraba un catre metálico de los que ellos usaban y que era de una plaza, con los instrumentos necesarios para la tortura. En alguna oportunidad le correspondió llevar a esta sala a su propio cuñado de nombre Ricardo Villanueva, quien por ese tiempo era simpatizante de la unidad popular. Se le pregunta por otros hechos y en lo pertinente dice que recuerda a quienes realizaban interrogatorios a los detenidos del regimiento al capitán Nelson Ubilla Toledo, sargento Mario Arias Díaz, y los conscriptos sargento segundo de reserva

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

José Chávez Etchepare, Libardo Schwartenski Rubio y Luis Ángel Valeria Candía y el teniente Jaime Garcia, entre otros.

En declaración judicial de fecha 28 de septiembre de 2009, que rola de fs. 1.426 a fs. 1.428 (Tomo V), ratifica su declaración extrajudicial y narra que le correspondió trasladar a varios de detenidos desde la guardia del regimiento hasta una sala ubicada entre el pabellón de plana mayor y la compañía de morteros. A esta sala le llamaban “sala de conferencias de alto nivel”. Hasta ese lugar llevó a Ricardo Villanueva. En esa oficina se torturaba a las personas mediante la aplicación de corriente. Que también le correspondió custodiar detenidos en el “gimnasio chico”, lugar al que llegaban personas muy golpeadas, tanto hombres como mujeres.

A.56. Luis Eduardo Manríquez Figueroa

En declaración extrajudicial de fecha 19 de julio de 2017, rolante de fs. 2.730 a fs. 2.731 (Tomo VIII), afinsa que se desempeñó en las **compañías de plana mayor y servicios** y primera de cazadores. Afirma que efectivamente existía una sala al interior de su compañía donde se ingresaban personas detenidas, quienes generalmente eran trasladadas ahí con la vista vendada, se rumoreaba mucho que en dicha sala se interrogaba a los detenidos bajo la aplicación de tortura, incluso se decía que a los detenidos se les aplicaba corriente. Que a esta sala siempre veía ingresar a algunos oficiales del regimiento como el capitán Ubilla y los hermanos Garcia. El hecho es que se sabía que ellos frecuentemente ingresaban a esta sala cuando había detenidos. Agrega que, a los meses de ocurrido el golpe de Estado, cree a fines de 1973, se supo que una persona fue sacada moribunda desde la mencionada sala de su compañía, quien habría fallecido posteriormente al interior del regimiento.

A.57. José Anselmo Matamala Cofré

En declaración extrajudicial de fecha 20 de julio de 2017, rolante de fs. 2.736 a fs. 2.737 (Tomo VIII), expone que efectuó el servicio militar obligatorio en el regimiento de Infantería N° 8 Tucapel de Temuco. Se desempeñó en las **compañías de plana mayor y servicios** y primera cazadores. Dice que existía una sala al interior de su compañía donde se ingresaban personas detenidas, quienes generalmente eran trasladadas ahí desde la guardia con la vista vendada, se rumoreaba mucho que en dicha sala se interrogaba a los detenidos bajo la aplicación de tortura, mediante el uso de electricidad. A la sala que señaló

anteriormente ingresaban algunos oficiales del regimiento como el capitán Ubilla, subteniente Espinoza y otros que no recuerda.

En declaración judicial de fecha 22 de marzo de 2018, rolante de fs. 230 a fs. 231 (Cuaderno secreto), reitera que se encontraba para el año 1973 realizando el servicio militar obligatorio al interior del regimiento Tucapel de Temuco, compañía de plana mayor y servicios, al mando del capitán Ubilla. Lo seguían en el mando el subteniente Romilio Lavín. A partir del 11 de septiembre de 1973, y encontrándose encuadrado en la misma compañía, se desempeñó como guardia dentro de las dependencias del regimiento Tucapel de Temuco. Expresa que al interior de la compañía existía una sala de torturas, lo sabe puesto que se encontraba de guardia cuando observaba aquello. A la sala de tortura veía ingresar a los conscriptos Chávez Etchepare y a Valeria. Sabe que la sala que estaba ubicada en la compañía era una sala de tortura, puesto que en muchas ocasiones le correspondió trasladar a los presos políticos hasta aquella, los cuales eran conducidos vendados; momentos en que podía observar la implementación que existía en aquella. En muchas ocasiones visualizó un catre, lugar donde recostaban a los detenidos para aplicarles corriente. Nunca se enteró de las identidades de los detenidos ni el destino final de aquellos. Que además era de conocimiento general de los conscriptos que, en horas de la noche en oportunidades, se trasladaban cuerpos a distinto lugares, los cuales desconoce.

A.58. Pedro Renato Ortiz Quiroz

En declaración extrajudicial de fecha 20 de julio de 2017, rolante de fs. 2.738 a fs. 2.740 (Tomo VIII), desarrolla que efectuó el servicio militar obligatorio en el regimiento de Infantería N° 8 Tucapel de Temuco, y se desempeñaba en las **compañías de plana mayor y servicios**. Que existía una sala al interior de las instalaciones de su compañía, que estaba prohibido su ingreso, pero después del día 11 de septiembre era habitual escuchar lamentos y gritos de dolor tanto de hombres y mujeres, por lo que se comentaba que ahí se torturaban a los detenidos mediante golpes y aplicación de corriente eléctrica.

En declaración judicial de fecha 16 de mayo de 2019, rolante de fs. 3.155 a fs. 3.157 (Tomo IX), ratifica su declaración y persiste en que al interior del regimiento Tucapel de Temuco vio muchos detenidos por motivos políticos, al lado de la guardia, cerca de la enfermería y en la sala habilitada para las torturas de los detenidos en la compañía de plana mayor y servicios. Recuerda que veía ingresar

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

a estos detenidos, los cuales se encontraban vendados, con capucha, esposados, apuntados con armas, a cada uno de los lugares que ha nombrado. Que efectivamente a contar del 11 de septiembre de 1973, al interior de su compañía, la de plana mayor y servicios del regimiento Tucapel de Temuco existía una dependencia, o más bien sala, especialmente habilitada para torturar mediante la aplicación de corriente eléctrica y golpes a los detenidos de carácter político. Esto lo dice porque en muchas ocasiones sintió los gritos de dolor, lamentos, llantos desde el interior de aquella. Respecto a las personas que ingresaban a esa sala vio a veces ingresar oficiales de distintas compañías, el capitán Rodolfo Vargas Campos, también al comandante subrogante de la compañía de plana mayor de apellido García Covarrubias (quien asesoraba al capitán Nelson Ubilla Toledo).

A.59. Libardo Hernán Schwartenski Rubio

En declaración extrajudicial de fecha 14 de enero de 2010, rolante de fs. 1.463 a fs. 1.464 (Tomo V), narra que para el año 1973 y posterior a la restructuración del regimiento fue encuadrado en la **compañía de plana mayor y servicios**, la que se encontraba al mando del entonces capitán Nelson Ubilla Toledo, a quien recuerda como el encargado del servicio de inteligencia militar. Sobre la existencia de un grupo encargado de la entrevista de los prisioneros políticos, recuerda que este lo integraban el capitán Ubilla, los sargentos Orlando Moreno Vásquez y Raúl Schonherr Frías, además del sargento Mario Arias Díaz.

En declaración judicial de fecha 27 de marzo de 2010, rolante de fs. 1.467 (Tomo V), ratifica declaración extrajudicial y suma que el sargento Arias Díaz pertenecía a la plana mayor y servicios. A su parecer se integró a la sección segunda después del golpe de militar, pues lo veía junto a Schonherr, Moreno Vásquez y el capitán Ubilla participando en el grupo que se ocupaba de los detenidos para su interrogatorio.

En declaración extrajudicial de fecha 8 de noviembre de 2012, rolante de fs. 1.740 a fs. 1.741 (Tomo V), insiste que para 1973 se encontraba encuadrado en la compañía de plana mayor y servicios, al mando del capitán Nelson Ubilla Toledo. En cuanto a la existencia de un grupo encargado de los interrogatorios de los prisioneros políticos, indica que recuerda que este lo integraban el capitán Ubilla, el teniente Jaime García Covarrubias, apodado "el yango", el subteniente Romilio Lavín, los sargentos Orlando Moreno Vásquez y Raúl Schonherr Frías, además del sargento Mario Arias Díaz, los cuales realizaban su labor en una sala

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

de interrogatorios habilitada en la cuadra de la compañía de plana mayor y servicios, donde era recurrente observar los detenidos que ingresaban a esa sala, los cuales se sabía que eran torturados. De la misma forma, existía un grupo de detectives que estaba integrado por Carlos Luco Astroza y Hernán Quiroz Barra, quienes efectuaban interrogatorios, los que en más de una vez presencié en oportunidades en que debía entregarles documentación, como eran torturados los detenidos. Menciona como otro interrogador al fallecido teniente Manuel Espinoza Ponce. En cuanto a las condiciones en las que observó a las personas cuando estaban siendo torturadas, señala que estas se encontraban desnudas, con la vista vendada y sobre un somier metálico, junto a sus torturadores que eran los detectives Quiroz y Morales, quienes eran acompañados en muchas oportunidades por el sargento Mario Arias Díaz. Se le interroga respecto de los detenidos asesinados por ley de fuga, lo que dice desconocer, agregando otros comentarios.

En declaración judicial de fecha 25 de junio de 2013, rolante de fs. 1.814 a fs. 1.785 (Tomo VI), ratifica declaraciones y recuerda al teniente Jaime García Covarrubias y a su hermano Raimundo. Dice que estos oficiales siempre andaban juntos. En una oportunidad pudo ver al teniente Jaime García y al subteniente Raimundo García al interior de la sala donde se torturaban personas en la compañía de plana mayor y servicios. En esos momentos había una persona desnuda y con su vista vendada, tendida sobre un somier. En cuanto al subteniente Lavín puede indicar que éste era uno de sus jefes en la compañía de plana mayor y servicios y pudo verlo entrar en más de una ocasión a la sala donde se interrogaba y torturaba personas. No puede asegurar que éste participó en torturas, pero por lo menos sabía lo que allí pasaba y debió haber presenciado alguna sesión de estas. Que de los hechos ocurridos en el regimiento con relación a los detenidos lo sabían todos los oficiales, por lo menos el comandante Iturriaga, el segundo comandante Jofré y el ayudante Jaime García Covarrubias, además de todos los oficiales involucrados en los interrogatorios y torturas.

En diligencia de careo con José Raúl Inzunza Reyes, de fecha 5 de julio de 2013, rolante de fs. 1.813 a fs. 1.814 (Tomo VI), recuerda haber visto entrar a la sala de interrogatorios al cabo Salgado Goyeneche, que era de la compañía andina y también estaba a cargo del material de guerra, trabajando junto al teniente Lavín. Que también vio ingresar frecuentemente a Jaime García

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Covarrubias y a Raimundo García Covarrubias. Sin embargo, era común que todos los oficiales fueran a mirar de vez en cuando, porque la novedad. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo con Jaime García Covarrubias, de fecha 4 de octubre de 2013, rolante de fs. 1.860 (Tomo VI), ratifica declaraciones y reconoce a la persona con la cual se le carea como el teniente Jaime García Covarrubias de quien ha hecho referencias. Acota que se refiere a hechos que ocurrieron entre el 11 de septiembre y mediados de octubre de 1973, fecha que se fue a Santiago. Que su nombre lo dio posteriormente porque le preguntaron si conocía a otros oficiales a los que él hubiese visto en la sala donde se interrogaban y torturaba detenidos. Se mantiene en sus dichos.

A.60. José Raúl Inzunza Reyes

En diligencia de careo con Hernán Quiroz Barra de fecha 05 de julio de 2013, rolante de fs. 1.809 a fs. 1.810 (Tomo VI), en lo pertinente lo recuerda porque trabajo con él en la **compañía de plana mayor y servicios** junto con el capitán Nelson Ubilla Toledo.

En diligencia de careo con Libardo Schwartenski Rubio, de fecha 05 de julio de 2013, rolante de fs. 1.813 a fs. 1.814 (Tomo VI), ratifica sus dichos y reconoce a la persona con quien se le carea, de quien hizo referencia en declaración. Que éste estuvo presente durante los interrogatorios, pero no lo vio aplicar electricidad a los detenidos, ni interrogados. Que es cierto lo que señala Schwartenski, en el sentido que todos los oficiales del regimiento iban a la sala de interrogatorios a curiosear. No sabe si ellos interrogaban o no, pero sí que entraban a mirar.

En declaración extrajudicial de fecha 25 de julio de 2017, rolante de fs. 2.741 a fs. 2.743 (Tomo VIII), destaca que realizó su servicio militar en el regimiento Infantería N° 8 Tucapel de Temuco, se desempeñó como soldado conscripto fue en la compañía de plana mayor y servicios. Deja claro que integró el grupo de soldados que participaba en labores con detenidos, cuando los soldados Schwartenski, Chávez y Valeria, fueron enviados al curso de inteligencia en la región Metropolitana, no recuerda muy bien si esto fue a mediados de octubre o noviembre, el hecho es que se integró a ese grupo por esa fecha. Con relación a las labores que pasó a cumplir, señala que estas tenían que ver con el trato con los detenidos que llegaban a la unidad militar, labores que estaban a

cargo del capitán Nelson Ubilla Toledo, y el sargento Mario Arias quienes se hacían apoyar por dos detectives, recordando solamente a Quiroz. Ratificando sus dichos en el sentido que estos funcionarios interrogaban a los detenidos bajo aplicación de tortura, la que consistía en golpe y corriente, al interior de una sala ubicada en la compañía de plana mayor y servicios, a la cual ingresaban también otros oficiales como el teniente Jaime García Covarrubias y un suboficial de apellido Silva. En relación con las dos personas fallecidas que debieron sacar de la sala de tortura de la compañía de plana mayor y servicios, ambos casos fueron de manera separada, cree que con una semana o poco más de diferencia. Aclarando que ese día se encontraba de clase de servicio y recibió la orden de un funcionario que no recuerda, que debía despejar el pasillo de la cuadra de su compañía, ya que había que sacar un cadáver de la sala, esto en las dos ocasiones que recuerda. Que no tomó los cuerpos, sino que solo vio cuando los sacaron de la sala, envueltos en frazadas, para posteriormente subirlos a un camión que se aculató a las dependencias de la compañía, para posteriormente ser llevados en ambas ocasiones al hospital Regional de Temuco.

A.61. Raúl Cerda Aguilera

En declaración judicial de fecha 25 de abril de 2012, rolante de fs.1.660 a fs. 1.662 (Tomo V), refiere que, para septiembre de 1973, estaba por salir del servicio pues duraba un año. Además, estaba listo para irse con un grupo de soldados conscriptos a la escuela de suboficiales específicamente a Tejas Verdes donde iba a recibir instrucción de ingeniería. Preguntado dice que hubo muchos detenidos en el regimiento Tucapel después del 11 de septiembre de 1973. Estos eran mantenidos en la guardia de la unidad, en el "gimnasio chico y en el gimnasio grande". A cargo de los interrogatorios de estos detenidos, había un grupo de oficiales, suboficiales y civiles. Entre los oficiales recuerda al capitán Nelson Ubilla Toledo, a los tenientes Jaime García Covarrubias y Alejandro Rubio Valladares y a los subtenientes Raimundo García Covarrubias, Manuel Espinoza Ponce, y Carlos Oviedo Arriagada; de los soldados clase recuerda al suboficial mayor Quilodrán, sargento Silva San Martín, sargento Mario Arias Díaz y Alberto Cerda Miere, este último conductor, Víctor Juvenal Del Río Poveda, Albino Krause Álvarez. Todos ellos pertenecían a la plana mayor, que dependía de Ubilla. Explaya que era conocido por todos en el regimiento que los detenidos eran torturados en una dependencia ubicada en la compañía de la plana mayor y servicios. Hasta ese

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

lugar llevaban a los detenidos para interrogarlos, pudiendo ver a los oficiales antes indicados pasar con detenidos hacia ese lugar o mandar en su nombre a buscar detenidos al gimnasio o a la guardia para ser llevado a la sala mencionada.

A.62. Oscar Manuel Seguel Jofre

En declaración extrajudicial de fecha 29 de agosto de 2017, rolante de fs. 2.766 a fs. 2.768 (Tomo VIII), proclama que el día 23 de septiembre de 1973, es detenido por funcionarios de carabineros y militares, en su domicilio. Luego de su detención en la comisaría de Pitrufquén es trasladado al regimiento Tucapel, donde es dejado en un gimnasio el cual se encontraba lleno de personas torturadas, lugar en donde es torturado en diversas oportunidades. Precisa que permaneció detenido en el regimiento Tucapel a los días posteriores del golpe de Estado, recuerda que fueron seis días los que ahí estuvo, siendo torturado bajo la aplicación de corriente eléctrica en una dependencia de este, distinta al gimnasio, reconociendo dentro de sus torturadores al capitán Nelson Ubilla Toledo, estando en su conocimiento que también en esos interrogatorios participaban dos tenientes cuyas identidades desconoce. Respecto al señor Podlech, quien asumió la labor de Fiscal, lo recuerda en una oportunidad que lo golpeó en una oficina ya que él quería que entregara las identidades de algunas personas, incluso quería que los acusara falsamente de la tenencia de explosivos.

A.63. Raúl Dagoberto Roa De La Jara

En declaración extrajudicial de fecha 17 de julio de 2015, rolante de fs. 2162 a fs. 2163 (Tomo VI), comunica que fue detenido 12 de septiembre de 1973, por carabineros de Pucón. Que junto con él fueron detenidos Faustino Escobar, Bernardino Quinteros y otros más cuyas identidades no recuerda. Recuerda que pasaron la noche en la unidad de carabineros de Pucón, siendo trasladados en horas de la mañana del día siguiente al regimiento Tucapel de Temuco, en una camioneta de propiedad de Guillermo Polack, la que al parecer fue conducida por él. Una vez que llegaron al regimiento, permaneció encerrado en un calabozo junto a otro grupo de detenidos, de los cuales no recuerda sus identidades. Es así, que era sacado del calabozo para ser interrogado por funcionarios militares, al tenor de que confesara dónde mantenía las armas escondidas y su participación en el adiestramiento de mil quinientos guerrilleros al interior de las instalaciones de "CONAF" en Pucón. En ese sentido, recuerdo que durante su estadía en alguno

de los centros de detención por los cuales pasó, conoció a una persona de apellido Figueroa, desconociendo mayores antecedentes al respecto.

En declaración judicial de fecha 29 de julio de 2015, rolante de fs. 2.171 a fs. 2.172 (Tomo VII), ratifico su declaración y complementa sus dichos en el sentido que al día siguiente fueron llevados al regimiento Tucapel, donde estuvieron hasta la noche. Durante ese período fueron interrogados por distintas personas, todos militares, aunque no todos los uniformes eran del mismo tipo, por lo que presume que había oficiales, suboficiales y conscriptos en el grupo. En la noche les vendaron la vista, y fueron subidos a un camión militar, aunque al parecer iban más móviles. Recuerdo que por los giros que hizo el camión los llevaron al sector de la isla Cautín, pero finalmente el móvil tomó rumbo hacia la base aérea Maquehue.

A.64. Erasmo Ricardo Villanueva Simón

En declaración judicial de fecha 18 de junio de 2012, rolante de fs. 1.674 a fs. 1.677 (Tomo V), soslaya que para el año 1973 se desempeñaba en una oficina de contabilidad de Sergio Riquelme Inostroza. Un día del mes de noviembre del año 1973, no recuerda fecha exacta, fue al Seguro Social a efectuar un trámite. En ese lugar la señora María Antonieta Meza Moncada le preguntó por la dirección de la familia de Alejandro Flores Rivera, pues quería ir a darle el pésame por la muerte de éste. A su parecer esta señora estaba siendo vigilada, pues a los pocos días fue detenida y llevada al regimiento Tucapel, donde fue brutalmente torturada. Días más tarde llegó hasta su casa una patrulla de militares del regimiento Tucapel, quienes allanaron su domicilio. Un suboficial, cuyo grado, características y nombre no recuerda, le dijo que por orden del capitán Nelson Ubilla Toledo quedaba detenido. Lo llevaron a la guardia del regimiento Tucapel y allí fue ingresado a una dependencia contigua, donde había varios detenidos más, con quienes no converso. Que también durante ese lapso iban sacando a los detenidos hacia otro sector, quienes regresaban más tarde con visibles signos de haber sido torturados. En ese lugar existía un banco similar a los que están en las plazas; lugar que era utilizado para dejar a los prisioneros que quedaban en muy malas condiciones. Al tercer día fue sacado de la guardia y llevado hacia una dependencia ubicada en una de las cuadras donde se alojaban los conscriptos. Esta cuadra era la tercera construcción dispuesta hacia el poniente de la entrada al regimiento. En esa sala cuando entró pudo ver una mesa larga, en la que

estaban sentadas cinco personas, entre las que puede recordar un oficial vestido con uniforme de la fuerza aérea y cuatro civiles, uno de los cuales era el abogado Alfonso Podlech Michaud, persona a quien ubicaba de vista con anterioridad. También pudo ver una banca similar a las de las plazas. No recuerda quién le preguntó el nombre, pero luego de que revelara su identidad el abogado Alfonso Podlech buscó en un tarjetero que tenía junto a él sobre la mesa y sacó un papel. Luego de mirarlo dio una orden señalando que quedaba detenido y que al día siguiente pasaba a interrogatorio. Que pudo percatarse que se dirigían hacia la misma sala, donde el día anterior había sido interrogado por Podlech. En ese lugar lo hicieron desvestir y lo sentaron en la banca que había visto el día anterior. Acto seguido comenzaron a aplicarle electricidad con un magneto. Que por el lenguaje utilizado por las personas presentes en la sesión de tortura presume que era gente con instrucción y cultura superior a la de un soldado clase. Una semana antes fue llevado al regimiento Tucapel y allí lo ingresaron a una dependencia ubicada hacia el fondo de la unidad militar, donde se entrevistó con el abogado Alfonso Podlech. En ese lugar esta persona le dijo que por decisión del tribunal quedaba en libertad a partir del 22 de diciembre, por lo que debía avisarle a su familia para que se preparara.

A.65. Juan José Salgado Goyeneche

En declaración judicial de fecha 26 de noviembre de 2012, rolante de fs. 1.793 a fs. 1.797 (Tomo VI), sostuvo que el año 1973 cumplía funciones en el Regimiento de Infantería N° 8 Tucapel de Temuco, con el grado de sargento segundo. Encuadrado en la compañía andina cuyo comandante era el capitán Mario Alvarado Verdugo. Refiere a un operativo en el sector de Nehuentue, donde resultaron personas detenidas e interrogadas, siendo derivadas al regimiento Tucapel, “donde la sección de inteligencia se hizo cargo de ellos”. Continúa su relato y en lo pertinente agrega que después de su regreso a Temuco, le correspondió acompañar al capitán Mario Alvarado a efectuar un patrullaje al sector cordillerano de Pucón, específicamente a Curarrehue. Recuerda que fueron en un helicóptero de la fuerza aérea y aterrizaron cerca de una cabaña. En ese lugar detuvieron a doce personas que intentaban cruzar hacia Argentina. Todos los que fueron derivados hacia el regimiento Tucapel de Temuco. Este hecho debió haber ocurrido entre fines de septiembre y mediados de octubre antes de irse a Santiago. Del personal de inteligencia del regimiento Tucapel recuerda al

capitán Ubilla, a los suboficiales Moreno y Schonherr. Además, participaban en los interrogatorios de detenidos los tenientes Vásquez Chahuán, Jaime Covarrubias y Raimundo García Covarrubias. Esto le consta porque era comentario generalizado en el regimiento. Adiciona que hubo varios detenidos en el regimiento durante los primeros días después del 11 de septiembre, los que eran mantenidos en el gimnasio. Que supo de la existencia de una sala de interrogatorios en la cuadra de la compañía de plana mayor, que él no participó de esos interrogatorios, pero se comentaba que los oficiales Jaime García, Raimundo García, Nelson Ubilla Toledo, Vásquez Chahuán y Rubio Balladares interrogaban a los prisioneros que estaban en el regimiento Tucapel.

En declaración judicial de fecha 04 de julio de 2013, rolante de fs. 1.806 a fs. 1.807 (Tomo VI), ratifica declaración judicial suma que la oportunidad en que fue al sector de Curarrehue y se detuvo a las 12 personas, recuerda que andaban en tres helicópteros de la Base Aérea Maquehue. Los detenidos fueron trasladados en uno de estos aparatos y él se regresó posteriormente por tierra desde Curarrehue a Temuco. Que “seguramente el servicio de inteligencia se hizo cargo de ellos en el regimiento Tucapel”. Está seguro de que el servicio de inteligencia se encargaba de interrogar a los detenidos en el regimiento. El grupo de inteligencia estaba encabezado por el capitán Nelson Ubilla más los suboficiales Orlando Moreno Vásquez y Raúl Schonherr. Junto con ellos participaban de los interrogatorios los tenientes Vásquez Chahuán, Jaime y Raimundo García Covarrubias. Aunque él nunca presencié estos interrogatorios, “todo el mundo sabía dónde estaban los detenidos y quiénes los interrogaban”.

En declaración judicial de fecha 27 de marzo de 2017, rolante de fs. 2.594 a fs. 2.597 (Tomo VIII), replica su desempeño en el regimiento Tucapel y reitera la detención de doce personas en el sector de Curarrehue a los que trasladaron a la base aérea Maquehue y posteriormente al regimiento Tucapel de Temuco en calidad de detenidos. Refiere que puede decir que esas debieron ser las personas que tomó detenidas en el operativo que realizaron a Curarrehue y que narró precedentemente. Sin embargo, las personas que tomaron detenidas eran doce personas y que estaban listas para cruzar la frontera, los pillaron como a las seis o siete de la mañana del mes de septiembre de 1973, no está seguro, pero era posterior al 11 de septiembre de 1973. De esos detenidos reconoció a uno de apellido Muñoz, que era conscripto. Que estos detenidos fueron trasladados a la

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

fuerza aérea o al regimiento, que eso lo manejaban los de inteligencia. Que en aquella oportunidad cree que andaba el capitán Alvarado, Pablo Grand.

A.66. Elías Amar Amar

En declaración extrajudicial de fecha 5 de noviembre de 2003, rolante de fs. 1.288 a fs.1.289 (Tomo IV), expuso que fue detenido el 14 septiembre 1973 en horas de la noche, que esa misma tarde los mismos soldados de la fuerza aérea lo trasladaron a la fiscalía militar del regimiento Tucapel, donde fue llevado ante el fiscal militar, percatándose que se trataba de un conocido abogado llamado Alfonso Podlech, quien lo envió incomunicado a la cárcel pública de Temuco.

A.67. Herman Carrasco Paul

En declaración judicial de fecha 11 de diciembre de 2003, rolante de fs.1.298 a fs.1.302 (Tomo IV), expuso que para septiembre de 1973 era dirigente de las juventudes comunistas y el 17 de septiembre de 1973 detenido por personas de la fuerza aérea trasladando al recinto de dicha unidad, donde relata apremios físicos y torturas, luego dejado en libertad. Posteriormente fue nuevamente detenido por carabineros de la segunda comisaria de Temuco, y al día siguiente lo trasladaron al regimiento Tucapel y los ingresaron a un calabozo que estaba detrás de la guardia. Allí fueron recibidos entre otros, por Orlando Moreno Vásquez, a quien conocía porque eran vecinos. Estando en ese lugar fue vendado y conducido por Juan Carrillo hacia el gimnasio del regimiento donde fue sometido a tortura, mediante la aplicación de electricidad en todo el cuerpo. Calcula que eran cinco personas las que lo torturaban, entre las cuales reconoció la voz de Nelson Ubilla Toledo y Orlando Moreno Vásquez. En otra ocasión fue conducido a las dependencias de la segunda compañía en donde le sacaron la venda y conversó cara a cara con Nelson Ubilla Toledo y en presencia al parecer de Orlando Moreno, quien le dijo que lo sabían todo y que dijera dónde estaban las armas. Que el día 8 de noviembre, aún en el gimnasio, los sacan de a uno hacia la fiscalía militar para firmar su libertad. Esto sucedió en presencia del cabo Schonherr y de Alfonso Podlech Michaud.

En diligencia de careo con Nelson Ubilla Toledo, de fecha 12 de diciembre de 2003, rolante de fs. 1.303 a fs.1.304 (Tomo IV), ratifica su declaración y agrego que el señor Nelson Ubilla Toledo, es a quien se ha referido en su declaración. Que el señor Ubilla es quien lo torturó y dirigía los interrogatorios. Quien

argumentó que el motivo de conversar con él era el aprecio que le tenía a su suegro e iba a intentar salvarlo pues estaban todos condenados a muerte.

En declaración judicial de fecha 29 de diciembre de 2008, rolante de fs.1.314 a fs. 1.317 (Tomo IV), reitera sus detenciones y que dos días después fue llevado junto a Juan Antonio Chávez hasta la oficina de la fiscalía militar, ubicada al interior del regimiento donde fue conminado a firmar un documento autoinculpatorio, el cual se negaron a suscribir. En ese lugar se encontraban Alfonso Podlech, Nelson Ubilla Toledo y Orlando Moreno Vásquez. Reproduce que se salvó gracias a su suegro René Beltrán Valdebenito, quien intercedió por él y conversó con Nelson Ubilla Toledo, sumando detalle.

En declaración extrajudicial, de fecha 5 de enero de 2009, rolante de fs. 1.323 a fs. 1.324 (Tomo IV), comienza refiriendo a lo acontecido en episodio denominado “el asalto polvorín”, y relatando su situación cuando fue detenido. En lo pertinente soslaya que el fiscal del regimiento Tucapel, el abogado Alfonso Podlech Michaud, este sí participaba de los interrogatorios, vestido de militar y con el grado de mayor, y fue él quien, les insistió en firmar un documento; que negaron a firmar y donde se hacían responsables como los jefes del “Plan Z”.

En diligencia de careo con Alfonso Podlech Michaud, de fecha 12 de agosto de 2013, rolante de fs. 1.831 a fs. 1.832 (Tomo VI), en lo pertinente comunica que conoce a Alfonso Podlech Michaud desde niño.

A.68. Edison Chihuailaf Arriagada

En declaración judicial de fecha 17 de marzo de 2012, rolante de fs. 1.656 a fs. 1.659 (Tomo V), expreso que los primeros días de octubre de 1973 llegó hasta su domicilio una patrulla militar que tenía órdenes para detenerlo, siendo llevado al regimiento Tucapel de Temuco. Allí permaneció todo el día en una dependencia ubicada en la guardia de la unidad militar. Estando en ese lugar pudo ver mucha gente detenida, algunos de los cuales habían sido torturados, pues presentaban claras muestras de haber sido golpeados. Entre éstos puede recordar a un joven de apellido Cortés, al parecer de nombre Fernando, esta persona llegó en muy malas condiciones traída por militares pues casi no podía mantenerse en pie. Que durante ese mismo día en que estuvo detenido en la guardia del Regimiento Tucapel pudo ver al abogado Alfonso Podlech vestido de traje de campaña, calzando botas y dos pistolas al cinto. Este hombre entró al guardia, visiblemente alterado, y comenzó a increpar a los soldados que se encontraba allí

reunidos. Les dijo más o menos textualmente lo siguiente: "Oye po' esta es la última vez que les digo, no me dejen entrar más a estas mujeres y viejas de mierda, que me tienen loco con sus reclamos. Yo ya se los dije y si no me hacen caso los hago fusilar a ustedes también". Poco rato después entró al calabozo el mismo soldado que anteriormente le había pedido que le diera un plato de comida al detenido torturado. Se le veía muy apesadumbrado por lo que había sucedido con el abogado Podlech, al punto que se quejó diciendo que estaba harto de lo que estaba sucediendo y que no hallaba la hora de que todo esto terminara. Además, indicó hacia el lugar donde Podlech había estado señalando que ahora mandaban ellos, como dejando entrever que había personas ajenas al regimiento con mando.

A.69. Julio Cesar Guevara Guevara

En declaración judicial de fecha 11 de febrero de 2002, rolante de fs. 213 bis a fs. 215 (Tomo I), soslaya que entre esas personas detenidas estaba Elías Dagoberto González Ortega, joven de Villarrica a quien conocía en Huiscapi desde pequeño y eran amigos. Comunica que el 12 de octubre quedó en libertad. Que estando detenidos de pronto se realizaban llamados a los detenidos a presentarse a la guardia de la cárcel, entre esos llamados salió su amigo Elías, y desde esa ocasión no supo más de éste, ni lo volvió a ver. En cuanto al hermano de Elías, a saber, Hugo Arner no lo vio detenido, de haberlo visto lo recordaría, porque eran amigo de familia, pero no lo vio. Con relación a otras personas, solo escucho entre los llamados que hacían, a unos señores de apellido Schmidt Arriagada, pero no los vio. Conmemora que Elías le conto las circunstancias en que fueron detenidos, esto es cuando se disponían a salir del país, por un paso fronterizo de Curarrehue, siendo detenido junto a su hermano, pero a su parecer lo habrían separados, pero dice estar seguro de que nunca vio a Hugo Arner en la cárcel. Insiste que escuchó entre los llamados a Elías, a quien desde esa ocasión no volvió a ver. No puede precisar la fecha del llamado, pero pensó que había quedado en libertad, aunque nunca más supo su suerte. Recuerda que otras personas llamadas a la guardia al igual que Elías, posteriormente eran ejecutados en el regimiento, acusados de haber querido escapar, recién ahí se dieron cuenta que los detenidos llamados a la guardia, no era para quedar en libertad, sino que corrían otra suerte, que quizás eso fue lo que ocurrió al joven González, aunque no tiene la certeza de lo ocurrido con éste. Relata su situación en la cárcel. Suma que pasado un tiempo se

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

encontró con una prima de Elías González, llamada Zudelia Castro González, a quien le contó que había estado con Elías en la cárcel de Temuco en aquella época.

En declaración judicial de fecha 07 de diciembre de 2004 de fs. 416 a fs. 417 (Tomo II), arguye que conocía a la familia de Elías González Ortega, especialmente a sus padres y el día que se encontró con él en la cárcel pública de Temuco, éste se veía muy maltratado. Le preguntó por su hermano Hugo, sin embargo, no se acuerda qué fue lo que le dijo. No obstante, esto, él se veía muy preocupado por su hermano y por el resto de sus amigos. Le parece que este le dijo que su hermano habría huido junto a otros de sus amigos al momento de la detención. Que diariamente se leían listados de cinco o seis personas que eran requeridas en la guardia. Estas personas salían con sus cosas y ellos pensaban que era para otorgarles la libertad; sin embargo, después supieron que muchas de estas personas fueron dadas de baja en el regimiento por haber intentado fugarse.

En declaración extrajudicial de fecha 09 de marzo de 2012, rolante de fs. 624 a fs. 625 (Tomo II), revela que tomó contacto durante su reclusión con uno de los hermanos González Ortega, que nunca estuvo detenido al interior del Regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco, pero durante su permanencia en la Cárcel Pública de Temuco, se contactó con uno de los hermanos González, no recuerda cuál de ellos era, lo único que recuerda es que le preguntó por su hermano Elías, a quien conocía desde Villarrica, contestándole éste joven que Elías, había escapado por un paso fronterizo junto a otros amigos hacia Argentina.

A.70. Rolando Chávez Godoy

En declaración extrajudicial de fecha 04 de abril de 2016, rolante de fs. 3.314 a fs. 3.315 (Tomo X), invoca que en relación con su conocimiento sobre la detención de Héctor Aguayo en el mes de septiembre de 1973, inquiera que no se enteró de dicha situación, sino hasta el día en que éste apareció en la oficina de correos consultando por su persona, en aquella oportunidad recuerda que lo atendió apenas le avisaron y al tomar contacto con él lo saludó y le comentó que había estado detenido en el regimiento Tucapel y que incluso recién le habían dado la libertad. Dentro de la conversación que sostuvo con éste, le comentó también que había visto al interior del regimiento calidad de detenido a un profesor de Curarrehue, cuyo nombre es Manuel Humaña Jiménez. Por otra parte, interpreta que en una oportunidad se enteró por comentario de una persona, cuya

identidad no puede recordar, que el carnet de identidad de Héctor fue encontrado a orillas del río Toltén a la altura de la comuna de Pitrufuquén.

A.71. Renato Ariel Saravia Flores

En declaración extrajudicial de fecha 12 de octubre de 2011, rolante de fs. 575 a fs. 577 (Tomo II), declara que para el año 1973 vivía en la localidad de Curarrehue, se desempeñaba como profesor de enseñanza básica en la Escuela N° 17 de esa localidad. El director de ese establecimiento era Manuel Humaña Jiménez. Para el año 1973 era simpatizante del gobierno del presidente Salvador Allende. Que fue detenido el día 11 de septiembre por carabineros del retén de Curarrehue quedando bajo arresto domiciliario, con firma diaria. El día 17 de septiembre, mientras realizaba ese trámite un carabinero le comunicó que lo trasladarían hasta Temuco. Lo subieron a una camioneta, que según recuerda pertenecía a la Corporación Nacional Forestal, en ese vehículo también iban Manuel Humaña Jiménez, Baldomero Salazar, Rubén Leal Riquelme, los hermanos René y Luis Díaz Cortez y los funcionarios de “CONAF” de apellidos Santana y Cid. La camioneta iba a cargo del carabinero Orlando Reyes Fernández, quien se acompañaba de dos carabineros más, siendo uno de ellos Castilla. En horas de la tarde llegaron a Temuco, dejándolos en dependencias del Regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco. Personal militar los llevó hasta el gimnasio de ese recinto militar; donde había cerca de cien personas, los dividieron en grupos, no recordando quienes eran los integrantes de su grupo. Les dieron comida y los mantuvieron hasta cerca de las veinte horas, para posteriormente trasladarlo junto al grupo con que había llegado hasta dependencias de la cárcel pública de Temuco, no pudiendo precisar cuánto tiempo. Cuando salió de la cárcel pública de Temuco, junto con una parte del grupo con que había llegado, fueron llevados por personal militar nuevamente hasta el regimiento Tucapel, hasta la oficina de fiscal militar Podlech, quien de manera prepotente y grosera les manifestó que “no nos metiéramos más en problemas y que volviéramos a nuestros lugares de origen”. En cuanto a Héctor Aguayo Olavarría, Hugo y Elías González Ortega, Juan y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa y Raúl Figueroa Burkhardt, solamente recuerda a la persona de apellido Aguayo, a quien vio junto a un grupo de jóvenes al interior de la cárcel pública de Temuco. Esta persona era el más joven del grupo y lo conoció por intermedio de Manuel Humaña al interior de la cárcel.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

En declaración judicial de fecha 30 de mayo de 2012, rolante de fs. 690 a fs. 691 (Tomo II), ratifica su declaración extrajudicial y de lo que está seguro es que, esos jóvenes, que eran entre siete y nueve, se les acercaron cuando supieron que también venían detenidos desde Curarrehue. Esos jóvenes no superaban los veinte años en promedio, y a uno de ellos le decían "Chuma". Esa persona era quien le daba ánimo sus compañeros. Que en el regimiento fue interrogado por el abogado Podlech, quien según todos los comentarios que escuchó en la cárcel, era el fiscal militar de la época. Esta persona fue muy prepotente con ellos. En un principio pensó que era un militar porque se comportaba con mucho odio hacia los detenidos. Que Podlech fue quien los interrogó uno por uno ese día fueron a la fiscalía militar. Relata otros hechos y respecto de las víctimas de autos dice desconocerlos. Sin embargo, los asocia con los jóvenes que vio en Temuco junto a ellos.

A.72. Baldomero Osvaldo Salazar Salgado

En declaración extrajudicial de fecha 12 de octubre de 2011, rolante de fs. 578 a fs. 580, (Tomo II), escruta que para el año 1973 tenía 21 años y se desempeñaba como profesor de historia y geografía en la Escuela N° 17 de Curarrehue, de la cual su director era Manuel Humaña Jiménez. Que era militante del Partido Comunista para la época y fue detenido el 11 de septiembre de 1973 a manos de personal de carabineros del retén de Curarrehue, quedando bajo arresto domiciliario, el cual duro hasta el día 17 de septiembre, día en que los funcionarios de carabineros decidieron ir a buscarlo a su domicilio y comunicarle que sería trasladado hasta la ciudad de Temuco. Recuerda que lo hicieron abordar un Jeep de color verde en cuyo interior estaba en calidad de detenido Renato Santana, funcionario de la Corporación Nacional Forestal. Ese vehículo iba a cargo de unos carabineros, cuya identidad no recuerda, los llevaron hasta la comisaría de carabineros de Pucón, lugar donde abordó el Jeep, en calidad de detenido, un señor de avanzada edad cuyo apellido era Matta. Posteriormente, siguieron el trayecto llegando a la ciudad de Temuco hacia el regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco, lugar donde los efectivos militares los llevaron hasta un patio, donde había otros detenidos, no superando las cincuenta personas, según lo que recuerda. Agrega que en otros vehículos iban otros detenidos provenientes de Curarrehue y otros sectores, recordando que uno de ellos iba su colega de nombre Renato Saravia, junto a Manuel Humaña, los

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

hermanos René y Luis Díaz Cortez, Luis Cid y otro profesor de nombre Rubén Leal Riquelme. Una vez a disposición de los efectivos militares, recuerda que estos los hicieron formar en dos filas, quedando separado momentáneamente del resto de sus colegas. Consecutivamente, los hicieron ingresar a un recinto cerrado similar a un gimnasio, donde les dijeron que se acomodaran ahí porque pasarían la noche en el lugar, cosa que no sucedió porque esa misma noche a eso de las 23:30 horas fueron trasladados hasta la cárcel pública de Temuco, ignorando el destino de las personas que estaban en la otra fila. Permaneció en la Cárcel Pública de Temuco hasta el día 05 de octubre del año 1973. Recuerda que, al interior de la Cárcel Pública, el señor Humaña le presentó a Servando Castillo, quien era de Pucón y a quien había llevado detenido con anterioridad al 11 de septiembre junto a una persona que le apodaban el "Pillé Carrasco", otro apodado el "Piden", quien era botero de Pucón, y otra persona de apellido Muñoz, apodado el "Pluma", quien era hermano de un profesor de Loncoche de nombre Alfonso Muñoz. Las personas antes mencionadas fueron detenidas por efectivos militares quienes, según la información que maneja, llegaron a Curarrehue en un helicóptero. También en la cárcel pública de Temuco pudo ver a aun conocido al que conocía por el apodo de el "Flaco Chávez", quien era secretario general de las juventudes comunistas. Recuerda que no pudo conversar con él, pero sí tiene claro que una noche, cree que, durante las fiestas patrias, lo sacaron de la cárcel y no lo volvió a ver. Tiempo después por medio de la prensa local se enteró que Chávez, junto a otras personas había muerto en un intento de asalto al Polvorín del Regimiento Tucapel, hecho que bajo ningún concepto creyó. Respecto a Héctor Aguayo Olavarría, Hugo y Elías González Ortega, Juan y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa y Raúl Figueroa Burkhardt, por nombre no los conoció, pero si tiene en su recuerdo que al interior del regimiento Tucapel conversó con un muchacho joven, de aproximadamente dieciocho a veinte años, que le comentó que estaba con su hermano y que su padre era dueño de un aserradero en Curarrehue. Hace presente que ese joven no lo volvió a ver más, como al resto de las personas que estaban en la fila en la cual estaba él en un principio. Prosigue relatando la segunda vez que fue detenido por personal de la fuerza aérea.

En declaración judicial de fecha 30 de mayo de 2012, rolante de fs. 692 a fs. 693 (Tomo II), ratifica su declaración extrajudicial de fs. 578 a fs. 580. Y en lo

pertinente dice que en el regimiento fue interrogado, pero no recuerda quién lo hizo. Que desconoce las identidades de las personas desaparecidas, pero, sin embargo, los asocia con los jóvenes que vio en el regimiento de Temuco, en la fila en que inicialmente estaba ubicado. Recuerda que dos eran hermanos cuyo padre tenía aserradero, según dijo uno de ellos. Además, le dijo que ellos se iban a Argentina cuando fueron atrapados en la cordillera. Reanuda su relato en cuanto a su segunda detención, detallando la misma.

A.73. Luis Brunel Cid Hernández

En declaración judicial de fecha 22 de junio de 2013, rolante de fs. 1.205 a fs. 1.207 (Tomo IV), suma a sus dichos que cuando ingresó al gimnasio del regimiento Tucapel pudo ver a Héctor Aguayo Olavarría, a quien le decían "el Chachi", quien era un joven de Curarrehue a quien conocía. Se acercó y le preguntó cómo estaba y qué hacía allí. Éste le dijo que había sido detenido junto con otros jóvenes con quienes había intentado cruzar la frontera hacia Argentina. Sin embargo, durante el viaje uno de ellos se desistió de huir y quiso regresar por lo que todos se volvieron, siendo detenidos por carabineros durante el trayecto. Le señaló también, que estaba muy maltratado y que apenas se podía tocar los genitales. Además, su cara y su cuerpo lo noto visiblemente hinchado, por lo que no era difícil pensar que había sido torturado. En un momento determinado Héctor Aguayo y René Díaz fueron sacados juntos del gimnasio, siendo esta la última vez que vio a Aguayo. A René Díaz lo volvió a ver en 1976, pero no conversaron sobre el tema. Ese mismo día fueron llevados a la cárcel de Temuco, donde permanecieron hasta el día 27 de septiembre de 1973. Fue liberado junto a Renato Santana.

A.74. Renato Santana Dubreuil

En declaración extrajudicial de fecha 13 de octubre de 2011, rolante de fs. 581 a fs. 583 (Tomo II), cuenta que fue detenido en tres oportunidades, la primera el 12 de septiembre de 1973, por carabineros que no eran dotación del retén de Curarrehue, y un grupo de civiles. Lo llevaron hasta el retén de Curarrehue junto a su compañero de labores Luis Cid. En el lugar también estaba detenido Luis Díaz, los tres abordan un vehículo y los trasladan hasta la comisaria de Pucón, donde pernoctaron y vio detenido a Benito Tapia. Al día siguiente, fueron trasladados por carabineros hasta la ciudad de Temuco, hasta la segunda comisaría de esa ciudad, posteriormente, fueron llevados hasta el regimiento de Infantería N° 08

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Tucapel de Temuco, para quedar en libertad al día siguiente. El 14 de septiembre, fue notificado por carabinero que quedaba bajo arresto domiciliario hasta el día 17 de septiembre, nuevamente detenido por carabinero. En esa oportunidad el grupo de detenidos aumentó, recordando a los profesores Manuel Humaña, uno de apellido Barrales, Renato Saravia, Rubén Leal, los hermanos René y Luis Díaz y su colega Luis Cid. Siendo nuevamente trasladados hasta la comisaría de Carabineros de Pucón, seguidamente a segunda comisaría de Carabineros de Temuco, y posteriormente entregados a efectivos militares del regimiento Tucapel de Temuco, lugar en que permanecieron unas horas para ser llevados finalmente a la cárcel pública de Temuco. En cuanto a Héctor Aguayo Olavarría, Hugo y Elías González Ortega, Juan y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa y Raúl Figueroa Burkhardt, recuerda solamente a Héctor Aguayo Olavarría, a quien conocía por el apodo del "Chachi", quien para la época tenía cerca de 16 años. A "ese muchacho lo vi al interior del regimiento Tucapel", no recuerda en cuál de sus estadías, solo recuerda que al verlo intercambió un par de palabras con él en el baño del gimnasio del regimiento, pero no recuerda lo que alcanzaron a conversar, el hecho es que fue la última vez que lo vio.

En declaración judicial de fecha 25 de junio de 2015, rolante de fs. 3.858 a fs. 3.861 (Tomo XI), reitera que fue detenido junto a Luis Cid y un señor de apellido Brevis, replicando sus dichos en cuanto fueron trasladados a diferentes unidades y que el día 17 de septiembre de 1973 fue nuevamente detenido por carabineros, esta vez junto a Luis y René Díaz Cortez, más los profesores Humaña, Leal, Salazar, Saravia y otros más cuyos nombres no recuerda. Que llegaron ese mismo día al Regimiento Tucapel de Temuco, donde fueron ingresados un gimnasio; en él había mucha gente. Allí vio al "Chachi" Aguayo, quien estaba junto a otras personas en la unidad militar antes señalada. Recuerda que este pidió ir al baño y él también, por lo que pudo intercambiar algunas palabras en ese lugar. A su parecer estaba con el pelo como "mordisqueado". Después fueron separados en grupos y en filas, quedando René Díaz en una distinta a la de ellos, aunque después lo juntaron con ellos nuevamente. Después fueron llevados a la cárcel al igual que Santana, Humaña y los demás que iban de Curarrehue. Al "Chachi" no lo volvió a ver. Pormenorizando lo que le acaeció.

A.75. Juan Luis Díaz Cortés,

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

En declaración extrajudicial de fecha 13 de abril de 2011, rolante de fs. 476 a fs. 477 (Tomo II), refiere para el año 1973 tenía veintidós años, vivía en Curarrehue, simpatizante del gobierno de Salvador Allende, por tanto, era una persona conocidamente de izquierda. Con lo ocurrido el once de septiembre de ese año, y a raíz de sus ideales políticos y sociales fue detenido en unas oportunidades por personal de carabineros del retén de Curarrehue, quienes lo trasladaron hasta Temuco. La primera detención ocurrió el día 13 de septiembre de 1973, cuando concurrió a presentarse previa citación a carabineros, los que de inmediato lo trasladaron hasta la segunda Comisaría de Carabineros de Temuco, junto a Luís Cid, Renato Santana, ambos trabajadores de "CONAF", y al jefe de esa repartición cuyo nombre no recuerda y durante la mañana del día siguiente lo trasladan a la base aérea Maquehue, para luego dejarlo en libertad. La segunda detención fue el dieciséis de septiembre de ese mismo año; esa vez lo detuvieron desde la casa de sus padres en horas de la mañana. En esa oportunidad lo detuvieron junto a René Esteban, su hermano, y los llevaron a Temuco, pero esta vez directamente al regimiento de Infantería de Montaña N° 8 Tucapel. En ese lugar, los juntaron con otros detenidos dentro de los cuales estaba Ricardo Aguayo, hermano de una de las víctimas de la presente causa Héctor Aguayo Olavarría, quien también estaba en ese lugar, el cual recuerda como una cuadra de batallón. Afirma que conversó con Héctor, apodado "El Chachi", quien le señaló directamente que sabía que lo iban a matar los militares de ese lugar, pues ya se lo habían dicho. Recuerda que Héctor Aguayo le presentó a unos jóvenes hermanos que habían sido detenidos junto a él, cuyos apellidos eran Schmidt Arriagada, quienes eran de Villarrica. Que en horas de la tarde les ordenan formarse en el patio del regimiento, en el cual se encontraba un oficial, quien leyó un documento en el cual nombró a algunos de los detenidos, entre esos su hermano René Díaz Cortes a Héctor Aguayo Olavarría y a los hermanos Schmidt, entre los que recuerda. Esos prisioneros fueron llevados hasta la guardia del regimiento, lugar donde, luego de un par de horas, solamente sacaron a su hermano, quien se reunió con él y los demás detenidos, quedando en el calabozo el resto de los prisioneros a quienes nunca más volvieron a ver. Posteriormente, fueron llevados hasta la cárcel pública de Temuco, quedando en libertad, según recuerda, el día dieciocho o diecinueve de septiembre de ese año. Que el oficial que apartó a los detenidos, dentro de los cuales estaban Héctor Aguayo, los

hermanos Schmidt y su hermano, era una persona de aproximadamente veinticinco años, un metro setenta de altura, de contextura delgada, pelo rubio, ojos de color azul, piel blanca y ocupaba bigote. Suma que fue el abogado Alfonso Podlech Michaud quien firmó como fiscal su orden de libertad y la de su hermano, lo anterior fue porque pudo ver dicho documento, recordando la firma de ese señor.

En declaración judicial de fecha 7 de junio de 2011, rolante de fs. 486 a fs. 488 (Tomo II), ratifica su declaración extrajudicial de fs. 476 a fs. 477 y complementa sus dichos en el sentido de aclarar que se encontró en dos oportunidades con Héctor Aguayo cuando fue detenido, siendo la primera de ellas en la comisaría de Pucón. En ese lugar pudo constatar que Héctor había sido torturado, pues presentaba evidentes signos de maltrato físico. Después se encontraron en el regimiento Tucapel. No recuerda si fueron trasladados juntos o por separado, por eso tiene la impresión de haberlo visto dos veces mientras estuvo cautivo. El grupo de carabineros que lo detuvo en las dos oportunidades en Curarrehue pertenecía a un destacamento que había llegado hace poco a esa comuna, no reconociendo a ninguno de ellos como pertenecientes a la dotación permanente. Recuerda que un capitán de nombre Juan, llegó junto con ellos y era quien daba las órdenes para detener personas. Que en la segunda detención fue trasladado desde Curarrehue a Pucón, y de allí hasta el regimiento Tucapel. Estuvo una noche en ese lugar junto a los ya nombrados más Manuel Humaña, su hermano René Esteban Díaz y otras personas cuyos nombres no recuerda. En aquella oportunidad fueron trasladados en una camioneta de un particular cuyo nombre es Clorindo Mena. En el regimiento fueron mantenidos en una cuadra cercana a la guardia, custodiados por conscriptos. Respecto del oficial que leyó el listado de detenidos entre los que figuraban los hermanos Schmidt y Héctor Aguayo, recuerda que era rubio, de ojos azules y usaba bigote. Al día siguiente fueron trasladados a la cárcel. Dos días más tarde su hermano y él fueron liberados. Héctor Aguayo y los hermanos Schmidt no llegaron a la cárcel junto con ellos e ignora que sucedió con ellos, pues fueron apartados del grupo en el regimiento. Respecto de las demás personas que aparecen como víctimas en autos, sólo recuerda los nombres de los hermanos Schmidt y de Elías González, pues fue el propio Héctor Aguayo quien se los presentó mientras estuvieron detenidos en el regimiento.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

En declaración judicial de fecha 20 de mayo de 1991, rolante de fs. 517 a fs. 518 (Tomo II), replica que, en el mes de septiembre de 1973, fue detenido por carabineros de Curarrehue, llevado hasta Pucón, y desde ahí llevado hasta el regimiento Tucapel de Temuco. La primera vez fueron cuatro personas y la segunda detención iban más personas, el profesor Humaña y dos profesores más, tres funcionarios de "CONAF", él y su hermano Esteban Díaz Cortés; los transportaron en una camioneta de propiedad de Cloro Mena, los llevó personal de carabineros hasta la subcomisaría de Pucón y desde allí los llevaron al regimiento Tucapel de Temuco. En ese lugar se encontraron con los hermanos Schmidt Arriagada y Héctor Aguayo. Recuerda que les contaron que ellos eran un grupo de seis muchachos entre quince a dieciocho años y decidieron arrancar a Argentina, pero como algunos de ellos eran muy jóvenes, se pusieron a llorar por la mamá y tuvieron que regresar. Rememora que Aguayo dijo que venían por Caburgua cuando fueron detenidos por carabineros. Que efectivamente después de unos días llamaron a diez personas, entre las cuales se encontraban los hermanos Schmidt, Héctor Aguayo y su hermano Esteban Díaz, los llevaron a otras dependencias; los nueve restantes nunca más regresaron al regimiento y no los volvieron a ver. Su hermano regresó casi inmediatamente, ya que al pasarles lista lo dejaron inmediatamente. Posteriormente, cuando fue llevado a la cárcel de Temuco, encontró a otro joven conocido como Ricardo Aguayo y le comentó lo sucedido con su hermano, manifestando que no lo había visto. Después ya no volvió a verlos, porque junto a su hermano fueron puestos en libertad el dieciséis de septiembre de ese año y nunca más fueron detenidos. Quedó con la obligación de presentarse a firmar todas las mañanas en el cuartel de carabineros de Curarrehue. Que solo vio una vez a esos jóvenes ya que el mismo día que llegó, los llamaron y no los volvieron a ver. Ignora que sucedió con ellos, solo existen comentarios de que fueron fusilados.

En declaración judicial de fecha 18 de junio de 2015, rolante de fs. 2.101 a fs. 2.102 (Tomo VI), viene en complementar sus dichos en el sentido de que fue detenido la primera vez entre el doce y catorce de septiembre de 1973. Sus aprehensores fueron carabineros de Curarrehue, siendo trasladado junto a Luis Cid, Renato Santana y el jefe de "CONAF" de esa localidad, que era de apellido Tapia. Recuerda que pasaron a la comisaría de Pucón donde los bajaron a todos e ingresaron a los calabozos. Allí estuvieron por lo menos un par de horas. De

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

pronto reconoció de entre los detenidos a Héctor Aguayo Olavarría, alias “Chachi”, a quien conocía desde que era un niño. Adiciona que este se veía muy maltratado físicamente, presentaba un testículo inflamado y tenía rapado el pelo en la parte superior de la cabeza. Que el “Chachi” le dijo que había sido detenido camino de Caburgua junto a otras personas con quienes pretendía huir hacia la Argentina, pero que en el trayecto uno de ellos se había arrepentido y se había puesto a llorar, por lo que decidieron regresar a Villarrica. En eso fueron interceptados por una patrulla que los detuvo, que habían sido interrogados respecto de la posesión de armas y el lugar donde las tenían escondidas, al tiempo que los sometieron a golpizas interminables. Que quienes venían de Curarrehue fueron nuevamente subidos un vehículo, no recuerda cual, y llevados a la segunda Comisaría de Temuco, donde pasaron la noche. Que Aguayo y los demás quedaron en Pucón. La segunda vez que vio al “Chachi” fue el día diecisiete de septiembre, cuando fueron nuevamente detenidos en Curarrehue y llevados al regimiento Tucapel de Temuco. Aguayo y otras personas estaban en esa oportunidad en la unidad militar. Recuerda que este se le acercó y conversaron nuevamente. A su parecer estaba con el pelo completamente rapado. Allí le presentó a unos jóvenes, dos de apellido Schmidt y dos de apellido González. El “Chachi” le dijo que sabía que los iban a matar porque alguno de los militares se lo había dicho. Que tenía mucho temor. Después fueron separados en grupos y en filas, quedando el “Chachi” en una fila junto a sus compañeros y a su hermano René Díaz; en tanto que él quedó en otra. Que de la fila del “Chachi” solo regresó su hermano, junto a quien después fueron llevados a la cárcel, al igual que Santana, Humaña y los demás que habían llegado de Curarrehue. Al “Chachi” y a sus amigos no los volvió a ver.

En declaración de fecha 19 de junio de 2015, rolante de fs. 4.141 a fs. 4.144, (Tomo XII), insiste que en 1973 vivía en Curarrehue junto a sus padres y sus hermanos, que fue detenido en dos oportunidades, una de ella fue el día 13 de septiembre de 1973 por carabineros, quienes llegaron hasta su domicilio, llevándolo al retén, donde estaban ya detenidos Renato Santana Dubreuil, Luis Cid Hernández y Benito Tapia. En el retén estuvieron en la guardia, lugar en el que había un teniente de apellido Figueroa Nieto, quién ordenó que fueran llevados a Temuco. Los subieron a una camioneta de propiedad de un civil de nombre Clorindo Mena y emprendieron el viaje. Pasaron a la Comisaría de Pucón, donde los ingresaron a los calabozos. Allí estuvieron por lo menos un par de

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

horas. Reconociendo de entre los detenidos a Héctor Aguayo Olavarría, alias "Chachi", a quien conocía desde que era un niño. Adiciona que este se veía muy maltratado físicamente, presentaba un testículo inflamado y tenía rapado el pelo en la parte superior de la cabeza. El "Chachi" le dijo que había sido detenido camino de Caburgua junto a otras personas con quienes pretendía huir hacia Argentina, pero que en el trayecto uno de ellos se había arrepentido y se había puesto a llorar, por lo que decidieron regresar a Villarrica. En eso fueron interceptados por una patrulla que los detuvo, que habían sido interrogados respecto de la posesión de armas y el lugar donde las tenían escondidas, al tiempo que los sometieron a golpizas interminables. Los que iban de Curarrehue fueron nuevamente subidos a un vehículo, no recuerda cual, y llevados a la segunda Comisaría de Temuco, donde pasaron la noche. Replica que Aguayo y los demás quedaron en Pucón, continua relatado lo que le aconteció y en lo adecuado que el 17 de septiembre de 1973, cuando fue nuevamente detenido por carabineros, esa vez junto a su hermano René Díaz Cortez y los profesores Humaña, Leal, Salazar, Saravia y otros más cuyos nombres no recuerda, fueron trasladados a su parecer en un vehículo particular y llegaron ese mismo día al regimiento Tucapel del Temuco, donde fueron ingresados a un gimnasio en el que había mucha gente. Esa fue la segunda vez que vio al "Chachi" Aguayo, quien estaba junto a otras personas en la unidad militar antes señalada. Recuerda que se le acercó y conversaron nuevamente. A su parecer esta con el pelo completamente rapado. Allí le presentó a unos jóvenes, dos de apellido Schmidt y dos de apellido González. El "Chachi" le dijo que sabía que los iban a matar porque alguno de los militares se lo había dicho. Que tenía mucho temor. Después fueron separados en grupos y en filas, quedando el "Chachi" en una fila junto a sus compañeros y a su hermano René Díaz; en tanto que ellos quedaron en otra fila. De la fila del "Chachi" solo regresó su hermano junto a quién después fueron llevados a la cárcel al igual que Santana, Humaña y los demás que llegaron de Curarrehue. Al "Chachi" y a sus amigos no los volvió a ver. Continúa su relato con relación a lo que le sucedió.

A.76. Manuel Antonio Humaña Jiménez

En declaración judicial de fecha 8 de febrero de 1991, rolante de fs. 501 a fs. 506 (Tomo II), replica que fue detenido por carabineros en Curarrehue y comunicado por el teniente Nieto Figueroa que debía ser llevado a Temuco,

porque se había recibido instrucciones desde esa ciudad. Que había nueve personas en total, entre ellos Renato Saravia, Baldomero Salazar y otro de apellido Leal, Renato Santana y un tal "Luchín" y dos exalumnos suyos, Luis y Esteban Díaz Cortez. Que los llevaron hasta la unidad de carabineros en Pucón y posteriormente al regimiento Tucapel de Temuco. Allí pasaron por la guardia, los identificaron y quitaron la cédula de identidad y los llevaron a una especie de gimnasio cerrado, donde había aproximadamente ciento cincuenta o doscientas personas más. Al primero que reconoció fue a su alumno Héctor Domingo Aguayo Olavarría, quién al verlo se acercó y lo abrazó, poniéndose a llorar; le preguntó qué estaba haciendo allí y le dijo que el día antes, en circunstancias que iba a Curarrehue con un grupo de amigos, no dijo cuántos, fueron detenidos en el sector El Turbio de Pucón y que los habían llevado al regimiento. No recuerda si especificó quién lo había detenido, ni quienes eran sus compañeros de detención y por las circunstancias que estaban viviendo no se percató si él posteriormente se juntaba con otros jóvenes que hubiesen sido sus compañeros a los que había aludido. Recuerda que un sargento de ejército entró al gimnasio y conversó con muchas personas, les hacía preguntas y aconsejaba que dijeran la verdad que a nadie castigaron en esos momentos. Estuvieron allí hasta las dieciocho horas, cuando ingresó un capitán de ejército, de quién no sabe su identidad, les ordenó que se formaran y nombró a diez personas, las cuales debían dar un paso al frente, entre los nombrados estaban Héctor Aguayo y Esteban Díaz; los sacaron en dirección a la guardia y aproximadamente a las 20:30 horas regresó solo Esteban Díaz, ninguno de los otros nueve regresó al gimnasio. Que, según versiones de Díaz, los interrogaban uno a uno y cuando le tocó el turno a él, no lo interrogaron y lo mandaron de vuelta al gimnasio; no sabe que sucedió con las nueve personas restantes, lo que si tiene seguro es que, hasta las veintidós horas, en que fueron conducidos a la cárcel pública, no regresaron esas personas al gimnasio. Fueron llevados en camiones y buses del regimiento hasta la cárcel. En la cárcel se encontró con un hermano de Héctor Aguayo, llamado Ricardo y le dijo que su hermano estaba en el regimiento Tucapel y que allí había quedado al ser ellos trasladados hasta la cárcel. Que permaneció en la cárcel diecinueve días; a los doce días llamaron voluntarios a declarar y reunió ciento veinte personas, los mismos que habían llegado detenidos desde Curarrehue, y se presentaron uno a uno frente a una comisión interrogadora compuesta por oficiales de ejército, no

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

pudiendo distinguir grados, porque usaban el traje mimetizado; recuerda que a cargo del interrogatorio estaba un capitán, porque así lo nombraron sus compañeros que estaban de civil, como igualmente el jefe a cargo de los interrogatorios que era un señor de apellido Podlech de Temuco, que tenía el cargo de Fiscal Militar. Prosigue relatando lo que le acaeció y en lo adecuado que hasta su casa llegó en el mes de noviembre de 1973 el padre de Héctor Aguayo a requerir datos sobre su hijo ya que no supieron más de él desde que fue detenido y llamado en el regimiento Tucapel junto a ocho personas, de las cuales no se sabe nada hasta la fecha.

En declaración extrajudicial, de fecha 27 de noviembre de 2013, rolante de fs. 3.854 a fs. 3.857 (Tomo XI), replica sus dichos y reitera que fue detenido el día 17 de septiembre de 1973 en su domicilio en Curarrehue, por dos carabineros del retén Curarrehue. Lo llevaron detenido junto a los profesores Saravia, Salazar y Leal, hasta el mencionado retén donde se les informó que por un bando militar quedaban en calidad de detenidos y debían ser puestos a disposición de la Fiscalía Militar de Temuco. Fueron trasladados hasta la tenencia de Carabineros de Pucón, para posteriormente continuar viaje a Temuco al Regimiento de Infantería de Temuco, al cual llegaron a eso de las 13:00 o 14:00 horas. Cuando pasaron por la Tenencia de Carabineros de Pucón, solicitó hablar con el capitán Bustos Letelier, a quien conocía y le comentó lo que le estaba pasando, respondiéndole que éste que no estaba en conocimiento del bando militar u orden que disponía su detención, limitándose a decir que debía quedarse tranquilo. Agrega que junto a los profesores iban también detenidos unos funcionarios de "CONAF" y un señor de apellido Matta. Al llegar a Temuco les quitaron las cédulas de identidad y los ingresaron a un gimnasio, el cual estaba lleno de personas detenidas, recordando que encontró a un alumno y vecino de Curarrehue de nombre Héctor Aguayo Olavarría, a quién conocía por el apodo del "Chachi", quien al verlo le comentó que había sido detenido por una patrulla de carabineros cuando junto a unos amigos iba camino a Caburgua o Curarrehue; no recuerda bien, pero el caso es que lloraba cuando le contaba esa situación, dándose cuenta que estaba muy asustado, por lo que trató de calmarlo. Posteriormente, a eso de las 18:00 horas, un oficial con el grado de capitán, les ordenó a todos los detenidos salir del gimnasio y les pidió que se formaran. Ese militar sacó una lista y llamó a diez personas dentro de las cuales estaba "El Chachi", Esteban Díaz

Cortés y un señor de apellido González; a ellos los separaron del grupo y cerca de las 22:00 horas regresa al gimnasio solamente Esteban, quién les comentó que al resto de los detenidos los habían ingresado a una dependencia y a él le habían ordenado regresar, perdiendo todo tipo de contacto con las demás personas. Que posteriormente a eso de las 00:00 horas fue trasladado, junto a los profesores antes mencionados y otros detenidos, hasta la cárcel pública de Temuco, donde permaneció cerca de 19 días. Señala que la última semana que estuvo en la cárcel, escuchó que el Fiscal Militar necesitaba diez voluntarios para declarar, esa situación se la informó a sus colegas, por lo que se inscribieron en el listado; es así que al día siguiente los comenzaron a llamar y fue presentado ante el Fiscal Militar Alfonso Podlech Michaud, quien le consultó su filiación política y otros antecedentes, recordando que le manifestó que nunca hubo orden en su contra y le dio a entender que su detención y la de los demás profesores fue por iniciativa propia de los carabineros de Curarrehue, representándole su molestia por ese hecho, ya que según el fiscal, ellos no debían estar detenidos, declarándole en ese momento que quedaría en libertad, situación que se llevó a cabo el día 5 de octubre de 1973. Refiere que el 7 de octubre de 1973, nuevamente fue detenido por una patrulla de la Fuerza Aérea de Chile de dotación de la Base Aérea Maquehue, y junto a los mismos profesores fue trasladado hasta el Retén de carabineros de Curarrehue relatando lo acontecido en esa oportunidad.

A.77. René Esteban Díaz Cortez

En declaración extrajudicial de fecha 13 de abril de 2011, rolante de fs. 474 a fs. 475 (Tomo II), proclama que viajó a Curarrehue a la casa de sus padres a celebrar el cumpleaños de su madre. Recuerda que fue la mañana del día siguiente cuando se encontraba en la casa de sus padres, llegó una patrulla de carabineros del retén del sector, quienes se llevaron detenido a su hermano Juan Luis, para posteriormente regresar una hora más tarde a detenerlo a él. Los trasladaron hasta la ciudad de Temuco, hasta el regimiento de Infantería N° 08 Tucapel, donde fueron ingresados en un gimnasio, lugar donde había más personas detenidas y particularmente un grupo de ocho detenidos aproximadamente todos sentados en el suelo con las piernas cruzadas, amordazadas y con sus manos amarradas a la espalda. Dentro de ese grupo de se encontraba Héctor Domingo Aguayo Olavarría, a quien conocía desde Curarrehue con el apodo del "Chachi". Ese mismo día, pero ya en horas de la

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

tarde sacaron a todos los detenidos al patio del regimiento, lugar donde los formaron y un militar, del cual desconoce rango e identidad, escogió un grupo de ocho a diez personas dentro de las cuales estaba Aguayo Olavarría y él, y los llevó hasta un calabozo ubicado en la sala de guardia que se ubica en la entrada del regimiento Tucapel. Pasada algunas horas, lo sacaron del calabozo y lo devolvieron al gimnasio integrándose al resto de los detenidos, dentro de los cuales se encontraban su hermano Juan Luis y Manuel Humaña Jiménez, quien era profesor y también iba detenido desde Curarrehue junto a ellos. Esta fue la última vez que vio a Domingo Aguayo, quien quedó en el calabozo de la guardia del regimiento. Respecto a la militancia política de Héctor Aguayo Olavarría, ignora si era militante de algún partido político y solo sabe que fue detenido en un paso fronterizo por una patrulla de carabineros, la cual estaba a cargo de un oficial que no pertenecía al retén de Curarrehue.

En declaración extrajudicial de fecha 13 de octubre de 2011, rolante de fs. 584 a fs. 585 (Tomo II), reitera que en su estadía en calidad de prisionero en el regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco, pudo ver que se encontraba detenido Héctor Aguayo Olavarría, quien también era oriundo de la ciudad de Curarrehue. Que las demás personas y cuyas identidades corresponden a Hugo y Elías González Ortega, Juan y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa y Raúl Figueroa Burkhardt, no recuerda haberlas conocido. Preguntado dice que no fue interrogado por personal militar, a pesar de que en un momento uno de los militares lo sacó del gimnasio y lo llevó junto al grupo donde estaba Héctor Aguayo, pero sin mediar explicación uno de los militares ahí presentes lo regresó nuevamente al gimnasio, lugar donde estaban sus conocidos de Curarrehue, junto a su hermano Juan Luis. Recordando que el lugar donde lo habían llevado los militares se ubicaba, a su parecer, a la entrada del regimiento, cree que ese lugar correspondía a la guardia del regimiento, siendo ese lugar la última vez donde vio a Héctor Aguayo. Se le preguntan otras cosas.

A.78. Francisco Jerónimo Matta Iturra

En declaración extrajudicial de fecha 13 de marzo de 2012, rolante de fs. 626 a fs. 627 (Tomo II) arguye que es hijo de don Francisco Matta Aro, quien fue detenido en su fundo de Palguin Bajo, entre los días 13 y 14 de al año 1973 a manos de personal de carabineros de la comisaría de Pucón, recordando que uno de sus aprehensores correspondía a un capitán de carabineros de apellido

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Partarriet. Su padre fue detenido y trasladado en su propia camioneta, en primera instancia hasta la comisaría de Pucón, para luego ser derivado junto a Héctor Aguayo Olavarría y otro joven hasta la ciudad de Temuco, específicamente hasta el regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco, lugar donde al llegar quedaron a disposición del fiscal militar Alfonso Podlech Michaud, quien dispuso la expulsión de su padre por ser financista del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, hecho que era totalmente falso. Su padre, en más de una ocasión le hizo referencia que en el caso de Héctor Aguayo Olavarría y el joven que lo acompañaba, el fiscal Podlech, hizo mención, que se encargaría de ellos, no haciendo mayores comentarios. Esa fue la última vez que su padre vio a Héctor, debido a que en horas de esa misma noche fue trasladado hasta la cárcel pública de Temuco, lugar donde permaneció recluso cerca de diez días. Interrogado sobre Héctor Aguayo Olavarría, señala que lo conocía, ya que su padre era del partido Socialista y también amigo de su familia.

En declaración judicial de fecha 31 de julio de 2012, rolante de fs. 786 a fs. 787 (Tomo III), ratifica su declaración extrajudicial y afirma que está seguro de que fue el abogado Alfonso Podlech Michaud quien interrogó a su padre y a Héctor Aguayo Olavarría, porque su padre se lo dijo. Está seguro de que éste era el verdadero fiscal militar en Temuco y utilizaba al mayor Jofré como pantalla, ya que fue el propio Podlech quien le dijo a su padre que lo iba a expulsar y pudo comprobar su autoridad cuando conversó con éste. En cuanto a Héctor Aguayo Olavarría, lo conoció puesto que su padre Francisco Aguayo, fue candidato a regidor en 1967 junto con su persona. Reitera que su padre le dijo que Podlech junto con asegurarle que se iría expulsado, ordenó a Aguayo y a otra persona quedarse en la fiscalía para ser interrogados. Adiciona que Podlech ordenó la expulsión de otros ciudadanos extranjeros como Aberto Malvaldi que era el dueño de la radio La Frontera y concesionario del teatro municipal de Temuco, don Máximo Eitel, presidente del Banco Sur.

A.79. José Eliseo Arriagada Vergara

En declaración extrajudicial de fecha 15 de noviembre de 1995, rolante de fs. 54 (Tomo I), funda que es tío de Carlos y Ricardo Schmidt Arriagada, desaparecidos desde el 13 de septiembre de 1973, que el 11 de septiembre de 1973, concurrió a Temuco a realizar diligencias a la oficina de tierras. Debido a que ese día ocurrió el golpe de Estado, debiendo quedar en la ciudad hasta el 13

en la mañana, fecha en la cual le autorización regresar a su casa. Al llegar al domicilio, su esposa le informó que los sobrinos Carlos y Ricardo, junto a los hermanos Hugo y Elías González Ortega, Juan de Dios Cabrera Figueroa y Héctor Aguayo Olavarría, había pasado la noche en su casa, y que se habían ido el día 12, en horas de la tarde con dirección a la frontera, tomando el camino Faja Molco, con la intención de pasar a Argentina. Según le dijo su esposa, esta determinación la tomaban porque tenía miedo a ser detenido, por cuanto todos pertenecían a juventudes socialistas. Después de lo narrado no se supo más de ellos, y uno diez años después, por comentarios se enteró que el grupo de jóvenes los había detenido en el trayecto y que lo habrían trasladados a la tenencia de carabineros de Pucón. También se le informó que el carabinero Quezada (fallecido), le comentó que no buscarán más a los jóvenes por cuanto ya no existían. De acuerdo con las averiguaciones de parte de la familia, no tuvieron una respuesta oficial sobre la suerte corrida por sus sobrinos. Que su hermana Aurora falleció intentando obtener antecedentes en la intendencia de Temuco.

A.80. Maria Inés Vásquez Ceballos

En declaración extrajudicial de fecha 15 de noviembre de 1995, rolante de fs. 55 a fs. 56 (Tomo I), explaya que es madre de Alejandro Escobar Vásquez desaparecido desde el día 13 de septiembre de 1973. Su hijo desapareció a los 18 años, soltero y trabajaba en una tornería, como operario. Pertenecía a las juventudes socialistas. En relación con la desaparición de su hijo, señala que el 11 o 12 de ese mes, carabineros allanó su domicilio al igual que otros del vecindario, en busca de armas o elementos políticos. Ese día estaba sola con sus hijos pequeños, Alejandro estaba en la casa de su hermana Adela. Carabineros al ver que no había lo que buscaban, se retiraron. El 13 de septiembre de ese año, Alejandro le comunicó en la mañana, que se iba con unos amigos del partido a Argentina, debido a que temía ser detenido o muertos por la represión. Alrededor de las 14:00 horas, sacó ropa de vestir y abrigo, le preparó cosas para comer. Desde ese momento nunca más ha vuelto a ver su hijo. En ese tiempo nunca tuvo ningún tipo de información sobre lo que ocurrió con esos jóvenes, no obstante haber conversado con madres de los otros muchachos que salieron con su hijo. Que hubo muchos comentarios entre los que recuerda, es que habían sido detenidos cuando trataron de cruzar la frontera y otro que decía que se

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

encontraba viviendo en Argentina. No tiene conocimiento de lo ocurrido con ellos, ni quienes pudieron ser los autores de la detención.

A.81. Ricardo Secundino Figueroa Burkhardt.

En declaración extrajudicial en la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de fecha 29 de agosto de 1990, rolante de fs. 1.049 a fs. 1.050 (Tomo III). Expuso que el día 14 de septiembre un grupo de muchachos vinculados al partido socialista de Villarrica, su hermano, dos hermanos de apellido Gonzalez y uno o dos de apellido Schmidt, deciden huir hacia Argentina, por la ruta de Pucón. Hasta ese día estos jóvenes no habían sido perseguidos ni hostigados y piensa que su huida había mucho de aventura. No hay certeza de su detención, pero hasta hoy no se han vuelto a tener noticias de ellos. En los días posteriores hubo un suicidio en el río Toltén y en la búsqueda de su cuerpo, alguien vio el de su hermano, un señor Villalobos. Agregó que en Villarrica se sabe que hubo fusilamientos en el río Toltén.

A.82. Juan Escobar Vásquez (20 años a la época de los hechos).

En declaración extrajudicial de fecha 5 de octubre de 2015, rolante de fs. 2.226 a fs. 2.227 (Tomo VII), señala que es hermano de la víctima Alejandro Escobar Vásquez, quién se encuentra desaparecido desde el día 13 de septiembre de 1973, cuando dejó el domicilio familiar tratando de escapar de Villarrica junto a un grupo de amigos. Respecto a su hermano Alejandro, señala que, para septiembre de 1973, tenía la edad de 17 años, ya había salido del colegio y solamente se dedicaba a trabajar de manera esporádica. Hace presente que era simpatizante de las juventudes socialistas. Sobre sus amistades, recuerda a los hermanos Schmidt, principalmente porque con ellos fue con los que intentó escapar a Argentina junto a otros jóvenes. Éste habría salido a la una de la tarde del hogar, sin dar información respecto a dónde se dirigía, solo sabe que le dijo a su madre que se tenía que ir, para lo cual ella le pasó una frazada y alimentos. Posteriormente, estando en Concepción, se enteró que el hogar de sus padres fue allanado por personal de ejército, siendo esa situación la que hizo decidir a sus padres de manera definitiva no hacer mayores averiguaciones. Lo único que supo en una fecha posterior, fue que del grupo que escapó con su hermano había dos o tres personas más de las ocho que se conoce, quienes a mitad de camino decidieron regresar a Villarrica.

A.83. Vicente Edmundo Escobar Vásquez

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

En declaración extrajudicial de fecha 9 de octubre de 2015, rolante de fs. 2252 a fs. 2253, (Tomo VII), señala que es hermano de la víctima Alejandro Escobar Vásquez, quien desde el día 13 de septiembre de 1973 se encuentra detenido-desaparecido. Deja en claro que por los antecedentes que le aportó en vida su hermana Carmela, pudo enterarse que su hermano había intentado huir de Chile junto a un grupo de personas, de las cuales regresaron tres a Villarrica.

A.84. David Iván Figueroa Burkhardt

En declaración extrajudicial de fecha 14 de noviembre de 1995, rolante de fs. 57 (Tomo I), arguye que es hermano de Marcial Figueroa Burkhardt desaparecido en los días posteriores al 11 de septiembre de 1973. En esa época se encontraba trabajando en Temuco, aproximadamente el 17 de septiembre de ese año, llamó a su madre Olga Burkhardt Gabilan a Villarrica, quien le informó que su hermano se había marchado días antes hacia Argentina, en compañía de unos amigos. Desde esa fecha no volvieron a tener noticias de su hermano. Posteriormente escucho una serie de rumores, relacionado con el paradero de Raúl, que lo habrían visto en Argentina, que amigos de él habían vuelto a Chile, que lo habrían matado en el puente del río Toltén, todos esos dichos resultaron ser rumores, ya que nunca más supo noticias concretas de su hermano. En lo personal no efectuó diligencias para dar con el paradero de su hermano, al parecer su madre tampoco las efectuó, debido al clima reinante en la época.

En declaración extrajudicial de fecha 11 de mayo de 2012, rolante de fs. 746 a fs. 747 (Tomo III), en lo pertinente dice que Raúl Marcial, era el menor de sus hermanos, para esa época tenía 23 años, residía en Villarrica, junto a su madre. Que Raúl perteneció a la Armada de Chile hasta 1970, cuando fue dado de baja. Dice no tener antecedentes en cuanto a la detención de su hermano, salvo que se había ido a Argentina junto a un grupo de amigos. Lo anterior, le fue informado por su madre vía telefónica. En ese momento no le dio mayor importancia a esa situación, ya que creyó que éste se había ido en busca de trabajo a ese país. Con el paso de los años, circulaban rumores en relación con el destino de su hermano, les comentaron que fue visto en la ciudad de Neuquén, que incluso que estaba en Brasil, pero eran rumores sin relevancia, porque está seguro de que Raúl hubiera tomado contacto con algún integrante de la familia. Espeta que su hermano Ricardo asumió el liderazgo en la familia para efectuar averiguaciones sobre el paradero de su hermano. Eso fue cuando regresó la

democracia a Chile, incluso este declaró en Pucón, y dio muestras de sangre, al objeto de constatarlas con los cuerpos encontrados en la época, pero no hubo resultados positivos. Señala que, en el año 1980, mientras estaba de paso en Villarrica, se le acercó un hombre, cuya identidad desconoce, pero trabajaba como pescador o botero, quien le comentó que había visto el cadáver de su hermano flotando en el río Toltén junto a otros cuerpos enredados en unos matorrales que había a orilla de ese río. Ese hombre le comentó que dicho lugar estaba en la Curva del Toro, río Toltén.

A.85. Luisa Noemí González Ortega

En declaraciones extrajudiciales de fecha 26 de febrero de 2012, rolante de fs. 594 a fs. 595 (Tomo II), indica que es la hermana de Elías Dagoberto y Hugo Arner González Ortega. Para el año 1973 tenían la edad de 25 y 23 años respectivamente, y según su recuerda eran militantes de la juventud del Partido Socialista. En esa época residían en la casa de sus padres en Villarrica. Llegado el 11 de septiembre del año 1973, fecha en que ocurrió el golpe de Estado, sus hermanos se colocaron nerviosos debido a los constantes bandos militares que se publicaban en los medios de comunicación y por ese motivo, creyendo que serían llamados en algún momento decidieron, junto a otros integrantes del Partido Socialista, planificar su salida de Chile hacia Argentina por un paso no habilitado ubicado en la comuna de Curarrehue. Esta situación está en su conocimiento porque recuerda que se lo manifestaron a su padre Marcos (fallecido). El día 14 de septiembre del año 1973, en horas de la tarde, sus hermanos se fueron junto a los hermanos Juan y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Aguayo Olavarría y Raúl Figueroa Burkhardt, con quienes se reunirían esa tarde en la subida de "Piedra", la que se encuentra a la salida de Villarrica. Esa fue la última vez que vio a sus hermanos. Posteriormente, durante el mes de noviembre del año 1973, mientras visitaba a su hermano Othniel, quien estaba detenido en la cárcel pública de Temuco, decidió, por consejo del familiar de una persona detenida en ese lugar, concurrir hasta el Regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco a consultar si ellos se encontraban en ese lugar. Concurrió en dos oportunidades al mencionado recinto militar se presentó en la guardia de este y uno de los soldados le permitió revisar los listados de los detenidos que ahí se encontraban, no logrando ubicar a sus hermanos. Creyendo que habían logrado llegar hasta Argentina, fue entre los

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

meses de febrero a diciembre del año 1974, hasta las ciudades de Junín, Cinco Saltos, General Roca, Luis Beltrán y Buenos Aires, lugares donde publicó avisos en las distintas radioemisoras sin lograr resultados positivos. Desde ese entonces perdió las esperanzas en encontrarlos, y debido a la situación que vivía el país en ese momento, por temor, no quiso seguir efectuando averiguaciones, sino hasta cuando regresó la democracia al país. Por intermedio de una hermana de Héctor Aguayo Olavarría, supo que el grupo de jóvenes integrado por sus hermanos había sido detenido en Curarrehue por efectivos de carabineros de la comisaría de Pucón y que posteriormente habrían sido trasladados en helicóptero hasta el Regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco. Lo anterior concuerda, porque un amigo de la familia de apellido Guevara, quién estuvo detenido en el regimiento Tucapel, le mencionó a una prima Sudelia Castro González, que pudo ver a sus hermanos llegar al mencionado regimiento en calidad de detenidos.

A.86. Ruth Alicia González Ortega

En declaración extrajudicial de fecha 15 de noviembre de 1995, rolante a fs. 49 (Tomo I), proclama que es hermana de Hugo Arner y Elías Dagoberto González Ortega, ambos desaparecidos desde el 13 de septiembre de 1973. Después del 11 de septiembre del año en cuestión, sus hermanos Hugo y Elías, les comunicaron a sus padres que se irían el día 13 hacia Argentina, debido a que eran requeridos por carabineros de Villarrica, por pertenecer a las juventudes socialistas. El día 12 de septiembre del año en mención, sus hermanos salieron de la casa alrededor de las cuatro de la tarde, en dirección a la población Vista Hermosa, donde se iban a encontrar con los hermanos Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Aguayo Olavarría y Raúl Figueroa Burkhardt, desde esa fecha no ha tenido noticias de sus hermanos. Posteriormente su madre con su hermana Luisa realizaron diversas diligencias, con la finalidad de poder ubicar a sus hermanos, tales como en el regimiento Tucapel, cárcel, estadio de Temuco, comisaria de carabineros de Villarrica, en todos los lugares, no obtuvieron ninguna respuesta positiva del paradero de Hugo y Elías. Aproximadamente en el año 1991, interpuso una denuncia en el Juzgado del Crimen de Pucón, por presunta desgracia en favor de sus hermanos y los demás muchachos que los acompañaron en su huida hacia Argentina. Por último, debe señalar que desde esa fecha que sus hermanos se fueron a Argentina, nunca más ha tenido noticias de ellos.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

En declaración judicial de fecha 17 de mayo de 2012 rolante de fs. 679 (Tomo II), ratifica su declaración extrajudicial de fs. 49. Y en lo pertinente dice que inmediatamente después de ocurrido el golpe militar su casa fue allanada por militares que estaban en el sector y carabineros de Villarrica. Recuerda que los uniformados apuntaron sus armas en contra de su padre a la vez que le preguntaban por armas. Este procedimiento se repitió en varias oportunidades, antes de que sus hermanos decidieran huir. También estos allanamientos sucedieron después de que sus hermanos se fueron, incluso hasta pasado dos años de ocurrido el golpe militar. Que incluso en una oportunidad su hermano mayor Otniel, se asustó tanto por un allanamiento que huyó de la casa, siendo perseguido por carabineros quienes le dispararon sin herirlo y lo detuvieron. Su hermano fue llevado al regimiento Tucapel donde fue torturado.

En declaración extrajudicial ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de fecha 29 de agosto de 1990 rolante a fs. 1.036 a fs. 1.037 (Tomo III), agrega que Elías era el hijo mayor de 25 años, trabajaba en un balneario del Banco Estado en Villarrica, hasta el 13 de septiembre de 1973, salió a su trabajo como cualquier día, se quedó de juntar en la casa de un padre de los “chicos, hacia Licanray, era en la casa del padre de Juan Cabrera. Hugo estaba en la casa y dijo que se iba con Elías, los Schmidt Escobar y Cabrera. Se iban a la Argentina, llevó ropas, pretendían escapar, los estaban buscando, habían ido carabinero de Villarrica. Un carabinero amigo de ellos de apellido Krause, les dio la idea de que se fueran. Nunca supieron si se reunieron o no en esa casa, eran todos, los seis militantes del Partido Socialista en Villarrica, los carabineros iban y preguntaban por ellos, según ha sabido, era un grupo de diez “muchachos, los que huyeron”. Según se piensa que los tomaron presos en Curarrehue, fueron llevados en una camioneta particular, tuvieron un accidente, llegaron todos al hospital, tal vez está registrado su ingreso (que tendría que ser a partir del 13 de septiembre), luego fueron sacados, llevados al puente del río Toltén para ser fusilados. Recientemente les han contado esta historia. Los padres aún no se enteran de esta versión, piensan que aún están vivos. Ellos habían escuchado antes que habían fusilado en el puente, se supo que en el río había un cuerpo flotando, luego los carabineros acordonaron el lugar. En las noches se escuchaban metrallas y luego llegaban los bomberos a lavar allí. Hay una persona que vio sangre y masa encefálica allí, se llamaba Minerva Toro, también vio un cadáver que flotaba.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Ambos eran solteros, sin hijos, vivían los once en la casa familiar, ellos hicieron gran cantidad de averiguaciones, incluso gente que llegaba a la casa decía haberlos visto, se hospedaban y comían gratuitamente hasta que descubrían el engaño. El padre de las víctimas es pastor evangélico. Con posterioridad carabineros siguió llegando regularmente a la casa, siempre buscando armas, todo esto hasta el año 1980, registraban todo. Daban vuelta todo, lo hacían con gran prepotencia. En una oportunidad un hermano suyo tuvo miedo, huyó, le dispararon y posteriormente lo detuvieron, así estuvo tres meses, en la cárcel o el regimiento de Temuco, nunca quiso contar. Respecto del caso de Cabrera, puede decir que tenía dieciocho años, estudiaba, militaba el partido socialista, huyó con todo el grupo. Suma que los familiares de los Schmidt, puede que tengan otros datos, hay quienes decían que los habrían visto en Huife de Pucón hacia la cordillera, un lugar con cajones cordilleranos.

A.87. Rita Aurora Ortega Muñoz

En declaración extrajudicial de fecha 15 de noviembre de 1995, rolante de fs. 48 (Tomo I), ciñe que es la madre de Hugo Arner y Elías Dagoberto González Ortega, quienes se encuentran desaparecidos desde el 13 de septiembre de 1973. Comunica que el día 12 de septiembre del mismo año, sus hijos le comunicaron que se irían hacia Argentina, debido a que con anterioridad habían sido amenazados por carabineros, ya que ambos eran militantes de las juventudes socialistas. Ese día en horas de la tarde, salieron de la casa a reunirse con sus compañeros; los hermanos Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Aguayo Olavarría y Raúl Figueroa Burkhardt, con los cuales realizarían el viaje. Siendo esta la última vez que vio a sus hijos. Dado que pasó el tiempo y no tuvo noticias de ellos, como estaba acordado, comenzó junto a su hija a realizar diversas averiguaciones con el propósito de obtener algún antecedente respecto a estos jóvenes, para tal efecto concurrió hasta el regimiento Tucapel, hospitales de la zona, cárceles y comisarías de carabineros. En ninguno de estos organismos se le dio una información que permitiera saber de ellos.

A.88. Elisa Margarita Schmidt Arriagada

En declaración extrajudicial de fecha 07 de marzo de 2012, rolante de fs. 621 a fs. 623 (Tomo II), aduce en lo respectivo que es hermana de Carlos y Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, quienes desde el día 13 de septiembre del

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

año 1973, se encuentran en calidad de desaparecidos. Para el año 1973, su hermano Carlos tenía la edad de 21 años, trabajaba como empleado de la Corporación de la Vivienda "CORVI" en Villarrica y vivía con su esposa de nombre Elena Santibáñez Fernández (fallecida), su hermano era militante del Partido Juventudes Socialistas, para lo cual se encontraba inscrito. Ricardo Augusto, tenía la edad de 20 años, cursaba el cuarto año medio del Liceo Industrial de Villarrica y vivía con su hermano Carlos y su esposa, en el inmueble ubicado en la calle José Miguel Carrera esquina Inés de Aguilera, comuna de Villarrica, debiendo hacer presente que éste no tenía militancia política. En su caso, vivía con su madre de nombre Aurora Arriagada Vergara (fallecida), en el inmueble ubicado en la calle Gerónimo de Alderete, de la comuna de Villarrica, existiendo además dos hermanas de nombres Isolde Yolanda y Silvia Luz, quienes residían y trabajaban en la ciudad de Temuco. Una vez producido el golpe militar el día 11 de septiembre de 1973, recuerda que la sorprendió en la ciudad de Temuco, por lo que no pudo regresar a Villarrica ese día, haciéndolo el día 13 de septiembre, en horas de la tarde. Al llegar a la casa su madre le señala que sus hermanos Carlos y Ricardo, se encontraban preparando sus cosas en la casa de un tío de nombre Eliseo Arriagada Vergara (fallecido), ya que iban a cruzar la frontera hacia Argentina por la cordillera. A raíz de lo anterior, se trasladó de inmediato donde se encontraban y pudo conversar con ellos por última vez, percatándose que en la misma situación estaban los hermanos Hugo y Elías González, Juan Cabrera, Raúl Figueroa, Alejandro Escobar y Héctor Aguayo. Recuerda que le señalaron que abandonarían el país, ya que temían por sus vidas, ya que por sus militancias políticas las cuales eran de todo conocimiento de Villarrica y alrededores, serían pronto detenidos por las fuerzas armadas. Posteriormente, permaneció con ellos hasta que iniciaron su viaje a pie, recordando que todo el grupo tomó un camino interior que va hacia Curarrehue, llamado Llançalil, sector Huife Alto, ellos le manifestaron que harían abandono del país por ese sector cordillerano. Pasados dos semanas y al no tener noticias de sus hermanos, su madre comenzó a efectuar consultas a los familiares de los otros jóvenes, donde tuvo como respuesta que ninguno de ellos se había comunicado con sus respectivas familias. Luego de varios meses, su madre se enteró por otra persona, de quien ignora su identidad, que sus hermanos y el resto del grupo, habían sido detenidos en la cordillera y ejecutados posteriormente, razón por la cual su madre quiso en cierta

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

medida olvidar este comentario, pero le trajo bastantes complicaciones de salud, falleciendo al año después. El año 1990, su hermana Silvia se acercó a los estamentos de los Derechos Humanos de la ciudad de Temuco, con la finalidad de entregar los antecedentes respecto a la situación de sus hermanos Carlos y Ricardo, instancia donde en conversaciones con familiares de los otros jóvenes que formaban parte del grupo, se informó de varios comentarios y antecedentes con respecto a las circunstancias en que fueron detenidos y en los posibles lugares donde fueron ejecutados, como también donde podrían encontrarse sepultados. Afirma que en una oportunidad y en fecha posterior a la desaparición de sus hermanos, su madre le comentó que el carabinero de apellido Vergara, perteneciente a la tenencia de Villarrica, se habría acercado a la casa y le había manifestado que sus hijos los habían matado. Del mismo modo, en fecha posterior al 11 de septiembre de 1973, don Carlos Barra persona conocida en Villarrica facilitó su camioneta blanca a carabineros de Villarrica para llevar a cabo detenciones de personas en la zona, presumiendo que posiblemente si sus hermanos y el grupo fueron detenidos por los carabineros en la cordillera, hayan sido trasladados en dicho vehículo. Finalmente hace entrega de documentos.

A.89. Silvia Luz Schmidt Arriagada

En declaración extrajudicial de fecha 14 de noviembre de 1995, rolante de fs. 50 a fs. 51 (Tomo I), que, debido a los sucesos del 11 de septiembre de 1973, hubo mucha persecución a los que eran partidarios del depuesto gobierno. Debido a lo anterior sus hermanos optaron por huir de Villarrica por temor a que fuesen detenidos. El día 13 de septiembre de ese año, al parecer ellos decidieron cruzar la frontera hacia Argentina, por el lado de Huife Alto, ubicado en el sector de Pucón – Curarrehue, según tiene entendido, esta operación la tenían pensada con otros jóvenes, entre ellos los hermanos Hugo y Elías González Ortega, Héctor Aguayo y Raúl Figueroa, entre otros que no recuerda sus nombres. Que en los días posteriores a la huida de sus hermanos y debido a que ellos no se habían comunicado con su mamá, personalmente concurrió a indagar sobre el paradero de ambos en el regimiento Tucapel de Temuco, fiscalía militar y cárcel de la ciudad, además de la segunda comisaría de carabineros, organismos en los cuales no obtuvo respuestas positivas de sus hermanos. Transcurrido aproximadamente un mes del desaparecimiento de sus hermanos, su madre fue informada a través del cabo Eduardo Vergara y el carabinero Guido Krausse,

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

ambos domiciliado en Villarrica, que, a sus hermanos, los habían capturado en la ocasión y que habían sido llevados hasta la comisaría de Pucón para posteriormente trasladados a la ciudad de Temuco, donde presumiblemente habían sido asesinados. Su madre Aurora del Carmen Arriagada Vergara, falleció en el año 1974, víctima de un ataque cardíaco, sin haber alcanzado a conocer el paradero de sus hermanos Carlos y Ricardo Augusto, quienes se encuentran desaparecido. Hace presente que su hermano Carlos era casado con Elena del Carmen Santibáñez Fernández.

En declaración judicial de fecha 14 de mayo de 1999, rolante de fs. 137 a fs. 138 (Tomo I), esgrime que es hermana de Carlos y Ricardo Schmidt Arriagada, desaparecidos desde el 13 de septiembre de 1973. Que en aquella época sus hermanos pertenecían las juventudes socialistas y a raíz del golpe de Estado del 11 de septiembre, y por temor a ser detenidos, decidieron junto a un grupo de amigos el día 13 de septiembre, intentar cruzar la frontera hacia la república de Argentina. Sus hermanos salieron de la casa de su madre en esa época, quien en esa época residía en Villarrica, en dirección a Huife Alto, pues allí intentarían efectuar la travesía. Que está completamente segura de que ese era su destino, pues se lo dijeron a madre, que incluso la esposa de uno de ellos se quedó con su madre. Que en esa época ella se encontraba en Temuco. El caso es que como no tuvieron noticias de sus hermanos, ya que no se comunicaban con ellos, que eran su familia, se preocuparon porque, además, sabían que había innumerables personas detenidas. Ante ello decidió comenzar a indagar en diferentes partes, por si acaso ellos hubieran sido detenidos, y es así como concurrió al regimiento Tucapel de Temuco, a la fiscalía militar, a cárcel y también a la segunda comisaria de Temuco, pero en ninguno de esos lugares aparecían ellos como detenidos, ni obtenía ningún dato tendiente a ubicarlos. Agrega que una hermana indagó con algún familiar de los otros jóvenes, con los cuales habían partido sus hermanos, pero estaban en las mismas condiciones que ellos, tampoco sabían nada del paradero de estos. Asimismo, pasado unos días, unos carabineros llamados Eduardo Vergara y Guido Krause quienes conocían a su madre, le comentaron que sus hermanos habían sido detenidos, que ellos los habrían visto, esto lo sabe porque su madre le manifestó, pero al continuar con las indagaciones, siguieron sin obtener respuestas positivas, porque en ningún lado aparecían registrados

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

como detenidos, y hasta el día de hoy continúan con las mismas incertidumbres, sin saber que fue de ellos y lo claro es que están desaparecidos.

En declaración extrajudicial de fecha 25 de julio de 1990, rolante de fs. 635 (Tomo II), insiste en que a su madre Aurora del Carmen Arriagada Vergara (fallecida) le fue informada a través del cabo Eduardo Vergara, que a sus hermanos los habían asesinado en Temuco, y que no se hiciera ninguna ilusión con respecto a ellos de encontrarlos con vida.

En declaración extrajudicial de fecha 29 de agosto de 1990, ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, rolante de fs. 1.043 a fs. 1.044 (Tomo III), expuso que el sargento primero Eduardo Vergara González y el carabinero Guido Krause informaron a la madre de la compareciente, doña Aurora del Carmen Arriagada Vergara, que Carlos y Ricardo Augusto habían sido capturados en esa oportunidad y traídos hasta la comisaria de Pucón y posteriormente trasladados a Temuco, ciudad en donde presumiblemente habían sido asesinados.

A.90. Ricardo Virginio Aguayo Olavarría

En declaración extrajudicial de 15 de abril de 2015 rolante a fs. 2.055 a fs. 2.057 (Tomo VI), que respecto a las circunstancias que rodearon la detención de su hermano, expresa que no fue testigo de esa situación, pero tiene claro que días posteriores al golpe de Estado, su hermano y sus amigos decidieron abandonar el país por temor a ser detenidos conforme a la información que diariamente salía en bandos militares y en la prensa local en el sentido que se mencionaba que toda persona de pensamiento distinto al régimen recién instaurado iba a ser exterminada. Esa situación la apoyó su padre por temor a que a Héctor le sucediera algo. Por esa razón, Héctor y sus amigos emprendieron viaje hacia la República Argentina, para lo cual pretendían pasar por el paso Huife tratando de eludir los controles fronterizos que existían en los otros pasos, es así como, cuando iba camino a Pichares en un bus, deciden bajarse antes de la bifurcación Caburgua-Huife donde emprenden caminata. Por lo que sabe, al cabo de un rato son interceptados por un vehículo particular en el cual iba personal de Carabineros de Chile de la tenencia de Pucón, siendo detenidos en ese lugar. Posteriormente, son trasladados a la tenencia de Pucón, donde les habrían cortado parte de su cabello, para ser trasladados a la comisaría de Villarrica donde también les fue cortado el cabello. Por los antecedentes que maneja después de su estadía en

Villarrica que no pasó más de un día, fueron trasladados hasta el regimiento Tucapel de Temuco donde permanecen detenidos dos días aproximadamente. En ese lugar encontró al profesor Humaña quien le comentó que vio a su hermano en el Tucapel y que habían conversado dentro de lo cual le dijo que Héctor le había dado los detalles de su detención. Que tomó contacto directo con don Gregorio y su esposa, quienes le comentaron que Héctor había pasado a su casa días atrás a solicitarles ayuda económica para regresar a Villarrica junto a unos amigos, dándole a conocer que había estado detenido en el regimiento Tucapel y que había sido dejado en libertad. Conforme a lo que le señaló don Gregorio le habría entregado ayuda y una vez que Héctor se retiró del domicilio, llegó personal de carabineros y ejército consultándole qué había pasado a hacer a su domicilio, a lo cual don Gregorio le respondió lo mismo que le comentó al declarante, y los efectivos militares procedieron a retirarse presumiendo que andaban siguiendo a su hermano y a sus amigos. Desde ese día no supieron nunca más de Héctor y hasta la fecha desconocen su actual paradero.

En declaración judicial de fecha 17 de abril de 2015 rolante a fs. 2.061 a fs. 2.062 (Tomo VI), ratifica su declaración y precisa además que la patrulla de carabineros y ejército que pasó a la casa de Gregario Seguel Capitán lo hizo media hora después de que su hermano se había ido desde ese lugar. Añade que, por las conversaciones sostenidas con varias personas a lo largo de los años, especialmente con los señores Humaña y Díaz quienes estuvieron detenidos en la cárcel de Temuco y que conocían a su hermano, el grupo fue detenido mientras caminaban hacia la frontera cerca del cruce del camino de Caburgua hacia Curarrehue, por carabineros de Pucón que se movilizaban en una camioneta particular que pertenecía a Carlos Barra. Esto se lo dijo su hermano Héctor a Humaña y a Díaz porque esa camioneta antes había sido de su padre y éste se la vendió a Barra. Que en ese momento los jóvenes caminaban cuidándose de no toparse con un vehículo militar o de carabineros y no le tomaron importancia al móvil particular que se acercaba. Cuenta que su hermano reconoció el vehículo por sus colores blanco y celeste. Después de la detención fueron llevados a Pucón donde les cortaron el pelo a todos a media cabeza. Acto seguido los llevaron a Villarrica donde los carabineros de esa Comisaría les cortaron totalmente el cabello y se burlaban de ellos. Esto lo supo por comentarios efectuados por el

carabinero Joaquín López a una vecina de nombre Laura Pinilla hace muchos años.

En declaración judicial de fecha 17 de junio de 2015 rolante a fs. 2.103 a fs. 2.108 (Tomo VI), expresa que su hermana Sara Aguayo Olavarría, quien le dijo que una persona que trabajaba en correos de Chile y que era amigo de la familia encontró la cédula de identidad de su hermano en la orilla del río Toltén. A quien le gustaba mucho la pesca y siempre lo hacía en diferentes ríos. Fue durante esas jornadas que encontró el carné de su hermano a fines de 1973 mientras pescaba en el río Toltén. El 13 de septiembre de 1973 carabineros de Villarrica fue hasta su domicilio ubicado en calle Pedro Montt N° 967 en horas de la mañana. Recuerda que estaban tomando desayuno cuando tocaron a la puerta y su madre abrió. Entonces carabineros irrumpieron violentamente y allanaron la casa al tiempo que preguntaban por su hermano Héctor Aguayo. Como no lo encontraron salieron del domicilio y cuando estaban a punto de irse uno de ellos sugirió que lo llevaran detenido a él, cosa que hicieron. Relata que lo subieron al furgón policial y lo llevaron a la comisaría. Allí fui dejado junto a otras muchas personas en las pesebreras de las caballerizas. Después del mediodía apareció un microbús particular en el cual fueron todos subidos y llevados hasta el regimiento Tucapel. Cuenta que en la cárcel de Temuco estuvo junto Manuel Humaña, los hermanos Díaz, René Turumpil, todos de Curarrehue.

En declaración judicial de fecha 5 de noviembre de 2018 rolante a fojas 3.030 a fs. 3.031 (Tomo IX), atestigua que supo de la detención de su hermano Héctor y de su posterior traslado hasta el regimiento Tucapel de Temuco, dado que en una de las oportunidades en que estuvo detenido, se encontró con el mismo grupo de personas que fueron detenidos en Curarrehue y fueron quienes vieron a Héctor en el Regimiento Tucapel de Temuco, entre ellos, Manuel Humaña y los hermanos Díaz. Cree que su hermano efectivamente fue liberado del regimiento Tucapel de Temuco tras su paso aproximadamente el 16 de septiembre de 1973, pero sin embargo y por los antecedentes que maneja éste fue nuevamente detenido por militares de regimiento Tucapel de Temuco. Lo anterior lo dice porque Gregario Seguel Capitán, padrino de su hermana Evita, le señaló que cuando Héctor fue dejado en libertad, alrededor del 16 o 17 de septiembre de 1973, pasó a su casa y minutos más tarde su casa fue allanada por carabineros y militares quienes le preguntaron "que había pasado a hacer mi

hermano a su casa"; a consecuencia de ello es que militares le allanaron su casa inmediatamente. Gregario le señaló que Héctor andaba ese día junto a un grupo de jóvenes y fue el motivo el motivo por el cual él se fue rápidamente de la casa, sólo pasó a pedir dinero para regresar a la suya. Además, le indicó que, junto a su esposa, quisieron curar la herida de Héctor, pero éste no accedió dado que deseaba regresar pronto junto a sus compañeros a casa. Su detención surge como consecuencia que buscaban a Héctor y como aquel no se encontraba, carabineros se llevó al declarante. Es conducido a la cárcel pública de Temuco; según consta en el certificado de fs. 2.194. En la cárcel pública estuvo detenido con el grupo de Curarrehue, los cuales llegaron detenidos después que él; los hermanos Díaz, Manuel Humaña, Osvaldo Salazar.

A.91. Luis Robinson Bustos Letelier

En declaración extrajudicial de fecha 11 de diciembre de 1995, rolante de fs. 58 a fs. 59 (Tomo I), en lo pertinente respecto de lo que se le consulta y en relación con la detención de ocho jóvenes que intentaban cruzar a Argentina, exclama que no recuerda fecha exacta, pero entre el 13 y el 15 de septiembre de ese año, le correspondió efectuar un patrullaje desde Pucón hasta Curarrehue. Cuando se dirigieron a ese lugar optó por desviarse hacia el lago Caburgua y desde el puente El Turbio, unos tres kilómetros aproximadamente desde el lago hacia el camino a Curarrehue, ubicaron a un grupo de jóvenes tipo mochileros, los cuales andaban muy sucios y llevaban las frazadas enrolladas y terciadas en el pecho. La cantidad de éstos no la recuerda, pero eran más de seis. Al interceptarlos, personalmente les preguntó que hacia donde iban, a lo que le respondieron que se dirigían a Curarrehue, en ese momento les pidió su cédula de identidad, pero como ninguno de ellos portaba este documento, optó por detenerlos y subirlos a la camioneta en la cual se movilizaban. En ese momento dispuso que el cabo Monsalve, junto a dos funcionarios más que no recuerda los llevaran hasta el cuartel, mientras que él se quedó en el lugar junto a otros funcionarios y se trasladó a pie hasta el sector de Caburgua. Posteriormente cuando llegó la camioneta el cabo Monsalve le informó que los detenidos habían sido entregados en el cuartel sin novedad. Recuerda que esta detención se practicó alrededor de las 10:00 y 12:00 horas.

En declaración judicial de fecha 03 de abril de 1996, rolante de fs. 84 a fs. 84 vuelta (Tomo I), expone que el día 13 de septiembre se detuvo a unos jóvenes,

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

no recuerda si eran seis u ocho, se les detuvo en el camino saliendo de Pucón a Curarrehue, hacia el sector de Caburgua, caminaban hacia el puente, esto ocurrió en horas de la mañana, alrededor de las diez horas, venían todos con pelo desordenado, barbones y con frazadas amarradas en un costado todos ellos, se les interrogó y ninguno portaba identificación, ni dieron explicaciones claras de donde se dirigían, ni que andaban haciendo. En vista de eso, ordenó que fueran llevados detenidos a la comisaría que quedaba a unos cinco kilómetros de distancia, lo que fue cumplido por el cabo Monsálvez y dos carabineros más. Incluso en el libro de guardia de la época se dejó constancia que los detenidos que se individualizaban eran entregados al comandante, cuyo nombre se consignó, pero no lo recuerda y eran llevados al regimiento Tucapel de Temuco. En esa época todos los detenidos por estas situaciones especiales iban a dar al regimiento Tucapel de Temuco.

En diligencia de careo con Gonzalo Enrique Arias González, de fecha 26 de noviembre de 1999, rolante de fs. 181 a 181 vuelta (Tomo I), ratifica íntegramente su declaración y que él firmó el libro de novedades de la guardia y se llevó el parte respectivo de la detención a la Fiscalía Militar del regimiento Tucapel de Temuco. Manifiesta que, con respecto a los detenidos, fueron sacados de su unidad en un helicóptero de la fuerza aérea piloteado por el comandante Benjamín Fernández y por orden de la prefectura Cautín. Iban con destino al regimiento Tucapel e Temuco, donde ignora si llegaron.

En declaración judicial de fecha 23 de julio de 2003, rolante de fs. 370 a fs. 370 vuelta (Tomo I), dice que al revisar el libro de telefonemas se percató que decía más o menos textual “por orden de la Prefectura de Cautín deben ser entregado los detenidos al personal de la Fuerza Aérea para ser trasladados al Regimiento Tucapel. Dese cumplimiento. Por orden del Prefecto”.

En declaración judicial de fecha 06 de diciembre de 2004, rolante de fs. 413 a fs. 413 vuelta (Tomo II), invoca que personalmente vio el parte firmado por el suboficial mayor de apellido Burgos, que ordenaba poner a disposición de la Fiscalía Militar de Temuco a los ocho jóvenes que detuvo.

Declaraciones contenidas en Cuaderno Secreto

A.92. Celedonio Aníbal Aburto Fuentes,

En declaración judicial de fecha 02 de julio de 2019, rolante de fs. 125 a fs. 126 (cuaderno secreto), que para el año 11 de septiembre de 1973 se encontraba

prestando funciones como soldado conscripto en la **compañía de plana mayor y servicios** del regimiento Tucapel de Temuco. Que efectivamente, como señaló en su declaración policial, existieron a contar del 11 de septiembre de 1973 personas detenidas por motivos políticos al interior del regimiento Tucapel de Temuco. Las salas de torturas quedaban ubicadas en la compañía de cazadores, para el lado norte, casi orillando la muralla de cemento, lugar donde habría como una caseta.

En diligencia de careo de fecha 19 de julio de 2019, rolante de fs. 130 a fs. 131 (cuaderno secreto), en lo pertinente comunica que se enteró que personas fueron ejecutadas en el regimiento, pero no tuvo conocimiento quien cargo sus cuerpos.

En declaración judicial de fecha 13 de febrero de 2020, rolante de fs. 172 (cuaderno secreto), reafirma aquella parte de su declaración de fs. 3.209 en la que señala que lo manifestado por el señor M.C. es perfectamente posible.

A.93. Oscar Alejandro Muñoz Venegas

En declaración judicial de fecha 09 de septiembre de 2022, rolante de 226 a fs. 227 (cuaderno secreto), en lo pertinente a la lectura de las declaraciones del testigo de iniciales M.J.C.S., el Tribunal le pregunta, ¿Qué puede opinar de estos dichos?, a lo que el deponente responde que la verdad de las cosas es que niega rotundamente todas esas calificaciones, porque jamás vio ni participó en esos hechos. Después con los días recibió comentarios, pero jamás participó en ver personas fusiladas o cargando camiones.

A.94. Declaraciones de testigo protegido M.J.C.S.

En declaración extrajudicial de fecha 08 de mayo de 2009, rolante a fs. 187 a fs. 189 (cuaderno secreto), interpreta que para el año 1973, tenía 19 años y a contar del mes de abril de ese año ingresó a efectuar su servicio militar obligatorio en el regimiento de Infantería N° 8 Tucapel. Manifiesta que efectivamente durante su permanencia en ese destacamento militar, estuvo inserto dentro de la **compañía de plana mayor y servicios**, cuyo comandante era el capitán Nelson Ubilla Toledo, quien según su recuerdo era el oficial encargado de las investigaciones de los presos políticos que se encontraban en el regimiento. Dentro de la compañía, se encontraba dentro de la segunda sección de ingenieros y telecomunicaciones, recordando al teniente Romilio Lavín Muñoz, como el oficial a cargo de esta sección. Soflama que efectivamente existía un grupo operativo a cargo de los detenidos, a quienes interrogaban, este grupo estaba compuesto

principalmente por oficiales y suboficiales. Que esta matanza no fue la única ocurrida al interior del regimiento Tucapel, puesto que a ellos se les obligaba, casi todas las noches a cargar camiones con cuerpos de víctimas o ejecutados políticos, los que por lo general.

En declaración judicial de fecha 23 de junio de 2009, rolante de fs. 190 a fs. 192 (cuaderno secreto), ratifica su declaración debiendo aclarar aquella parte en la que señala que casi todas las noches le correspondió cargar camiones con cuerpos de personas fallecidas. En realidad, esta actividad la realizó en dos oportunidades, aunque sabe que hubo más muertos, por los comentarios que se hacían al interior de la compañía por parte de los otros conscriptos. Recuerda haber recibido órdenes en dos oportunidades de subirse a un camión junto con otros conscriptos, para dirigirse a la isla Cautín. Al llegar a ese lugar, ya de noche en ambas ocasiones, tuvieron que subir diez cuerpos al camión; en la segunda oportunidad subieron ocho. En todos los casos los cuerpos fueron llevados al puente Allipen, donde fueron arrojados al río. Sustenta que las personas muertas que le correspondió subir a los camiones eran todos varones, quienes presentaban varios impactos de bala, las manos amarradas con cáñamo o alambre y estaban con su vista vendada. Estos cuerpos estaban todos en el sector del polígono de tiro. Antes y después de efectuar las misiones les advertían de guardar silencio respecto de lo que habían visto.

En declaración extrajudicial de fecha 01 de septiembre de 2015, rolante de fs. 3 a fs. 4 (cuaderno secreto), reafirma que era conscripto de la compañía de plana mayor y servicios del regimiento Tucapel de Temuco, perteneciendo a la sección de telecomunicaciones, que es efectivo que a los días posteriores al golpe de Estado le correspondió cargar cuerpos de fallecidos en camiones militares en el polígono de tiro de la isla Cautín, recordando que en la primera oportunidad en que fue hasta dicho lugar fue por orden del teniente Manuel Espinoza Ponce, quien era oficial de la segunda compañía de cazadores. Hace presente, que en dos oportunidades le correspondió cargar el camión militar con personas fallecidas, en la primera de ellas recuerda que eran diez cuerpos, todos de sexo masculino, cuyas edades fluctuaban entre los 25 a 30 años, no puede precisarlo. En la segunda oportunidad, no tiene claro si fue al día siguiente o a los dos días del primer hecho, cargaron ocho cuerpos más, también de sexo masculino, pero en esta ocasión eran más jóvenes que en el caso anterior. En ambas

oportunidades el camión salió en dirección al puente Allipen, conforme a lo que se comentaba en ese momento. Respecto a las fotografías que en el acto se le exhiben y cuyas identidades se le dan a conocer, como Héctor Aguayo Olavarría y los hermanos Elías y Hugo Gonzalez Ortega, comenta que recuerda los rostros de los hermanos antes mencionados, ya que conforme a lo recordado vio que los estaban torturando en una sala ubicada al interior de su compañía, donde estaban presentes los oficiales Vásquez Chahuán y Fernández Carranza, junto a un grupo de detectives. Hace referencia a esta situación, ya que parte de los detenidos eran llevados a esa "Sala de tortura", ante la vista de todos los que se encontraban en la compañía. De acuerdo con lo anterior, decanta que de los cuerpos que recogió en el polígono de tiro, recuerda al de identidad Elías Gonzalez Ortega, en cuya fotografía lo reconoce. Que el conscripto Valeria, jactándose de ese hecho les comentó la situación.

En declaración judicial de fecha 30 de mayo de 2017, rolante de fs. 35 a fs. 38 (cuaderno secreto), ratifico su declaración extrajudicial y desarrolla que el destino final era lanzarlos al río, entonces si alguno estaba moribundo no iba a poder sobrevivir. Que quien daba las órdenes directas de estas ejecuciones era Alfonso Podlech, se comentaba. Detalla que cuando retiró los ocho cuerpos, estaba de noche y con la luz de los vehículos pudo observar que eran personas jóvenes. Distingue que la sala donde vio que estaban torturando a Héctor Aguayo Olavarría y a los hermanos Elías y Hugo Gonzalez Ortega estaba ubicada en el perímetro de la plana mayor. En esa oportunidad estaban presentes los oficiales Vásquez Chahuán y Fernández Carranza. Que veía a la gente cuando los llevaban vendados, ya que estaba a diez metros aproximadamente de la sala de tortura mencionada precedentemente. Se escuchaban los gritos de las personas. Toda la compañía sabía que había esa sala de torturas. Para él, toda la oficialidad sabía de esto, se divertían realizando este tipo de hechos. Reiterando que la oficialidad sabía que existía. El deponente realiza un croquis de la ubicación de la sala de torturas ubicada al interior del regimiento Tucapel de Temuco, en la compañía de plana mayor y servicios. Estima que cuando declaró en la causa del "Polvorín" recibió amenazas de familiares de las personas que había nombrado. Le decían "mira tal por cual, tienes que retirar lo que dijiste en contra de mi pariente". El Tribunal le exhibe las fotografías de Héctor Aguayo Olavarría, Elías y Hugo, ambos de apellidos González Ortega, que rolan de fs. 2.317 a fs. 2.319 a lo

que el deponente declara reconocer a aquellas personas, como aquellas tres de las ocho que levantó ese día.

En declaración judicial de fecha 26 de marzo de 2019, rolante de fs. 93 a fs. 95 (cuaderno secreto), el Tribunal le lee lo pertinente de sus declaraciones de fs. 2.309 y siguiente y de fs. 2.638 y le consulta: ¿Qué víctimas de la presente causa, cuyas fotografías se le exhiben de fs. 2.317 a 2.319, habrían estado torturando al interior de la sala de tortura ubicada en la compañía de plana mayor y servicios del regimiento Tucapel de Temuco con fecha posterior al 11 de septiembre de 1973 y dentro de ese mismo mes? A lo que el deponente expresa que reconoce a Héctor Aguayo Olavarría y a los hermanos Elías y Hugo González Ortega, cuyas fotografías se le exhiben, a quienes los estaban torturando al interior de la mencionada sala. Respecto a lo que se le consulta con relación a cuándo estaban torturando a estos jóvenes de nombre Héctor Aguayo Olavarría y a los hermanos Elías y Hugo González Ortega, indica que fue aproximadamente un día antes de recoger sus cuerpos e ingresarlos al camión. De los ocho cuerpos que refiere haber recogido desde el polígono de tiro y cargado en un camión. Precisa además que presenció como tres personas que murieron al interior de la misma sala de torturas ubicada en la compañía de plana mayor y servicios al interior del regimiento Tucapel de Temuco con fecha posterior al 11 de septiembre de 1973 dentro del mismo mes. Recuerda que estas personas eran de sexo masculino, de alrededor de treinta años y le aplicaron corriente en sus cuerpos y de tanta electricidad fallecieron. Además, recuerda que su habitación estaba a unos metros de esta sala, razón por la cual pudo observar cuando sacaron estos cuerpos. Anexa que como integrantes de la compañía de plana mayor y servicios recuerda a Quilodrán, sargento primero Silva, Mario Arias Díaz, sargento Peña, cabo Krause, Pablo Silva y el teniente Romilio Lavín Muñoz.

En declaración judicial de fecha 16 de agosto de 2021, rolante de fs. 193 a fs. 195 (cuaderno secreto), ratifica la declaración e indica que respecto a la segunda oportunidad en que le tocó cargar ocho cuerpos, no estaba presente el sargento Arias. Precisa que fueron dos veces en que le correspondió cargar cuerpos, la primera vez estaba saliendo del rancho, era tarde de noche, tiene que haber sido como a las 22:00 o 22:30. Cargaron los cuerpos y después se fue a acostar, no contándole esta situación a ninguno de sus compañeros, por temor a ser sancionado. Luego, hubo una segunda oportunidad que también le tocó cargar

ocho cuerpos a un camión. Ese día también era de noche, estaba haciendo la "imaginaria", que consistía en el cuidado de la compañía, que no llegara gente extraña, era una guardia. Estaba en esa función y llega el mismo Chávez Etchepare que casualmente también estaba de servicio en la guardia. Le dice "C., vas a tener que acercarte a la guardia nuevamente". Al preguntarle para qué, le dice "anda no más". Entonces, una hora más tarde va a la guardia, tiene que haber sido como a las 23:00 h., y en ese lugar había un conscripto, Muñoz Venegas. Chávez les da la orden de irse al polígono, así que fueron los dos con Muñoz y un soldado de guardia hasta ese lugar. Al llegar, vieron varios cuerpos amontonados, uno sobre otro, con las manos amarradas, algunas atrás y otras adelante. A los cuerpos les habían rasurado la cabeza y con la barba cortada. En el lugar había un camión y dos o tres vehículos chicos. Con las luces de los vehículos. Que la línea de mando de la compañía de plana mayor y servicios del regimiento Tucapel de Temuco para septiembre de 1973, señalando el deponente que habría estado conformada de la siguiente manera: comandante de la compañía, Nelson Ubilla Toledo; subteniente Raimundo García Covarrubias; subteniente, Romilio Lavín. En cuanto a los detectives dice que estos se relacionaban con los oficiales. Quienes deberían tener conocimiento de los hechos que ha narrado, es decir, de la ejecución y cargar los cuerpos a los camiones, son los oficiales del regimiento, porque se comunicaban entre ellos.

A.95. Pedro Guillermo Manuel Tichauer Salcedo

En declaración extrajudicial de fecha 5 de junio de 2019, rolante de fs. 3.166 a fs. 3.167 (Tomo IX), en lo pertinente dice que para 1973, ostentaba el grado de teniente de ejército y se desempeñaba como jefe de sección administración de fondos y jefe de la sección de intendencia de la **compañía de plana mayor y servicios**. Los oficiales que le seguían en la línea jerárquica estaba el declarante, el subteniente Raimundo García Covarrubias, el subteniente Romilio Lavín Muñoz. Hace presente que con las nuevas funciones del capitán Nelson Ubilla, el subteniente Raimundo García, quedó a cargo de la instrucción militar de los conscriptos de la compañía, el subteniente Lavín, quedó a cargo de la sección de material de guerra, donde tenía que ver con los armamentos, munición y combustible del regimiento y el deponente que seguía en sus funciones habituales como oficial de intendencia.

A.96. Romilio Osvaldo Lavín Muñoz

En declaración judicial de fecha 04 de septiembre de 2009, rolante de fs. 1.407 a fs. 1.409 (Tomo IV), proclama que se desempeñaba en el regimiento Tucapel de Temuco con el grado de subteniente. Los oficiales de los servicios, como es su caso, estaban encuadrados en la **compañía de plana mayor**, que estaba al mando del capitán Nelson Ubilla Toledo. En esa misma compañía estaban Raimundo García Covarrubias y Pedro Tichauer Salcedo.

En declaración extrajudicial de fecha 27 de febrero de 2017, rolante de fs. 3.125 a fs. 3.126 (Tomo IX), complementa que para el año 1973 la compañía antes mencionada estaba integrada por el capitán Nelson Ubilla Toledo, quien era el comandante, siendo secundado en antigüedad por el teniente Pedro Tichauer Salcedo, quien también trabajaba en la comandancia en la oficina de administración de fondos y el subteniente Raimundo Garcia Covarrubias. Respecto a una dependencia que existía en la compañía de plana mayor y servicios, donde se efectuaban interrogatorios a detenidos, anexa que efectivamente esa dependencia existía, se ubicaba en la parte central de la edificación donde se encontraba la compañía de plana mayor y servicios y la compañía de morteros.

En declaración judicial de fecha 01 de agosto de 2019, rolante de fs. 3.279 a fs. 3.283 (Tomo IX), anima que después del 11 de septiembre siguió como oficial ranchero. Además, tenía la agresión permanente de Tichauer y del teniente Jaime García Covarrubias. Se acuerda que todo el mundo se burlaba del mayor Jofré, porque decía “guatón guatón”, por ejemplo, uno le pedía algo y decía “no guatón, porque mi coronelcito se puede enojar”. Rememora que era un hombre absolutamente manejable. El Tribunal le consulta sobre los otros oficiales que estaban a cargo de la compañía plana mayor y servicios del regimiento Tucapel de Temuco para septiembre de 1973, señalando que Ubilla, Tichauer, Raimundo García Covarrubias y el encartado. Esos eran los oficiales de plana mayor, en el mismo orden de jerarquía que ha mencionado. El Tribunal le consulta si alguna vez vio ingresar a esta sala al capitán Manuel Fernández Carranza, a lo que responde que nunca lo vio ingresar a esa sala. Solo puede decir que todo el regimiento sabía dónde estaba esa sala. Nadie podría desconocer la existencia de esa sala, principalmente porque tenía un ingreso prohibido. El Tribunal le consulta quien impartía las órdenes para que los detenidos fueran interrogados en ese lugar. No cree que el comandante Jofré, porque por su personalidad, no cree que

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

haya mandado a hacer eso, pero debió estar en su conocimiento por el grado que tenía en el regimiento. El Tribunal le consulta en qué condiciones eran ingresados los detenidos a la sala que ha mencionado, responde que solo vio detenidos pasar desde el patio principal. Que, si se aplica la lógica, deberían ir encapuchados o vendados. Porque le parece que para torturar había categoría A, B y C, según lo que percibió. Desconoce que pasaba con los detenidos una vez terminado los interrogatorios. Pero por lo que ha leído eran cosas horribles. Rememora que Espinoza se metía dónde estaban los detenidos del departamento segundo y les decía “esto va a ser mío” refiriéndose a las cosas personales que algunos poseían, como relojes, zapatos, etc. Respecto a la sala de torturas que ha mencionado, todo el regimiento sabía de su existencia. Hace presente que el ejército respeta la verticalidad del mando. Según su parecer nadie andaba matando por gusto.

B. DOCUMENTOS

B.1. A fs. 1 a fs. 3 vta. (Tomo I), denuncia por inhumaciones ilegales presentada por el abogado Alejandro González Poblete en representación de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, indicando como víctimas a Hugo Arnés González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Juan Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Schmidt Arriagada, Juan de Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría, Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

B.2. Actas de inspecciones del Tribunal, que rolan de:

B.2.1. A fs. 152 a fs. 153 (cuaderno secreto), consta acta de inspección personal del Tribunal, 27 de noviembre de dos mil 2019, que en lo pertinentes suscribe que: se constituye el Tribunal en dependencias del Regimiento Tucapel de Temuco, participando en la diligencia el Ministro en Visita Extraordinaria don Álvaro Mesa Latorre; el Fiscal Militar de Temuco, don Francisco Bravo Soto; el Secretario de la Fiscalía Militar de Temuco, don Giovanni Taito Schmidt; el abogado del Programa Continuación Ley 19.123 del Ministerio de Justicia, Ricardo Lavín Salazar; los Peritos Planimetría y Fotógrafo del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, don Juan Vega Norambuena y don Frantz Beissinger Bart; y de los Testigos M. J. C. S. y Celedonio Aburto Fuentes. En primer término, el Tribunal ordena comenzar la diligencia disponiendo que el testigo Manuel Contreras Salazar indique el lugar

donde estaba ubicada la Compañía de Plana Mayor y Servicios del Regimiento Tucapel de Temuco para el año 1973. El Tribunal y los testigos se desplazan hasta ese punto, donde se detienen para ingresar a aquella dependencia. En este sentido, tanto el señor C. como el señor Aburto, coinciden en señalar que aquella dependencia era la utilizada por la Compañía de Plana Mayor y Servicios para la fecha señalada. A continuación el señor Ministro le solicita al señor C. manifestar su conocimiento respecto a lo acontecido en aquella dependencia a partir del 11 de septiembre de 1973; en este sentido el señor C., reitera lo señalado en sus declaraciones de fs. 2.309, 2.638, indicando que observó en una fecha posterior al 11 de septiembre de 1973, desde el exterior de esta sala, que allí se encontraban torturando a tres de las víctimas de esta causa, cuyas fotografías le fueron exhibidas por el Tribunal en sus declaraciones de la causa. Acota que presentes en el lugar se encontraba el oficial Manuel Vásquez Chahuán. Luego, el señor Ministro le otorga la palabra a don Caledonio Aburto Fuentes para que señale lo pertinente, indicando este que tuvo conocimiento que en aquel lugar era una de las dependencias destinadas para detenidos por motivos políticos tras el 11 de septiembre de 1973. Los peritos de la Policía de Investigaciones fijan los puntos indicados. Posteriormente el Tribunal y los testigos se desplazan hacia un lugar, dentro del mismo Regimiento, señalado por el testigo Celedonio Aburto Fuentes, quien señala que habría una edificación tipo caseta en donde operaba una oficina de la Policía de Investigaciones de Chile. Los peritos de la Policía de Investigaciones fijan los puntos indicados.

B.2.2. A fs. 154 a fs. 155 (cuaderno secreto), consta acta de inspección personal del Tribunal. De fecha, 27 de noviembre de 2019, que en lo pertinente refiere que: se constituye el Tribunal en el ex polígono de tiro de la isla Cautín; lugar donde actualmente se encuentra bajo la administración del SERVIU, participando en la diligencia el Ministro en Visita Extraordinaria don Álvaro Mesa Latorre; el abogado del Programa Continuación Ley 19.123 del Ministerio de Justicia, Ricardo Lavín Salazar; los Peritos Planimetrista y Fotógrafo del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, don Juan Vega Norambuena y don Frantz Beissinger Bart; y de los Testigos M. J. C. S., y Celedonio Aburto Fuentes. En primer término, el Tribunal ordena comenzar la diligencia disponiendo al señor M.J.C.S., situarse en el lugar indicado por el en sus declaraciones de fs. 2.309 y 2.638 de autos. En este sentido, el testigo C. S., se

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

dirige hasta un lugar determinado del ex polígono de tiro de la isla Cautín. Estando allí, el señor C.S. indica al Tribunal el lugar exacto en donde se encontraba la noche en que cargó ocho cuerpos de personas fallecidas, en una fecha posterior al 11 de septiembre de 1973. Reitera al tribunal que reconoció tres de las víctimas de la presente causa, tal como señaló a fs. 2.640. Luego menciona los nombres de los oficiales presentes aquella noche, los tenientes Espinoza y Manuel Vásquez Chahuán. Los peritos de la policía de investigaciones fijan los puntos indicados. Posteriormente el Tribunal le solicita al testigo Celedonio Aburto Fuentes manifestar su conocimiento respecto a los hechos narrados por el señor C.S. En este sentido, el señor Aburto señalada que lo indicado por el señor C.S. pudo haber ocurrido, pero él no se encontraba presente aquella noche en el lugar, sin embargo, aquello era lo que se comentaba en esa época.

B.2.3. A fs. 406 vta. (Tomo II), consta acta de inspección personal del Tribunal, en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco. De fecha 22 de noviembre de 2019, que señala en lo pertinente que: se constituyó el Tribunal en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco a fin de practicar la diligencia decretada en autos con el fin de inspeccionar los Libros de Estadísticas de Detenidos y Procesados correspondientes al año 1973. En primer término, se procedió a examinar el Libro de Estadísticas de Detenidos, apareciendo de los datos estampados en éste que, aun cuando no figuran todos los nombres buscados, existen similitudes como las que se señalan a continuación: 1. Rogelio Hernán Schmidt Muñoz, 17 años, ingresó el 14 de septiembre de 1973, según Parte N° 1.116 de la Fiscalía Militar de Cautín, por infracción a la Ley 17. 798. Registra domicilio en calle Ercilla N° 860 de Villarrica y se indica como fecha de egreso el 15 de octubre de 1973. 2. Ricardo Virginio Aguayo Olavarría, 20 años, ingresó el 14 de septiembre de 1973, según Parte N° 1.200 de la Fiscalía Militar de Cautín, por infracción a la Ley 17.798. Registra domicilio en calle Pedro Montt N° 967 de Villarrica y se indica como fecha de egreso el 27 de septiembre de 1973. 3. Abdiel González Ortega, 22 años, ingresó el 14 de septiembre de 1973, según Parte N° 1.116 de la Fiscalía Militar de Cautín, por infracción a la Ley 17. 798. Registra domicilio en calle Aldunate sin número de Villarrica y se indica como fecha de egreso el 15 de octubre de 1973. En segundo lugar, se dispuso la revisión del Libro de Estadísticas de Procesados correspondiente al año 1973, sin que registraran coincidencias en los nombres de las personas buscadas

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

B.2.4. A fs. 1.721 a fs. 1.726 (Tomo V), consta acta de inspección personal del Tribunal, de fecha 23 de marzo de 2012, que en lo pertinente rubrica que: se constituyó el Tribunal en dependencias del R.I. N°8 TUCAPEL, participando en la diligencia el Ministro en Visita Extraordinaria don Álvaro Mesa Latorre; del Fiscal Militar de Temuco, Teniente Coronel (J) José Valentín Pinto Aparicio; Secretaria de la Fiscalía Militar, Mayor (J) Ema Fabiola Maturana Meneses; de los Peritos Planimetrista y Fotógrafo del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, don Cristian Sil a Barra y don Franz Beissinger Barty de los Testigos Raimundo García Covarrubias, Romilio Lavín Muñoz, Pedro Tichauer Salcedo, Juan Carlos. Concha Belmar, Manuel Rafael Campos Ceballos, Héctor Mauricio Villablanca Huenulao, Héctor Joaquín Celedón Fuentes, Gerardo Jaime Araneda Muñoz, Ernesto G. reía Isla, Manuel Reinaldo Canales Valdés, Oscar Inostroza Segura, Daniel San Juan Clavería, Orlando Moreno Vásquez, Carlos Luco Astroza, Hernán Raúl Quiroz Barra, Raúl Binaldo Schonherr Frías y Omar Burgos Dejean. El Ministro, en primer término, se dirige junto a los demás al pabellón de solteros del casino de oficiales, ordenándole al testigo Raimundo García Covarrubias que identifique el dormitorio donde se encontraba alojando, ya que en su declaración señala que se encontraba ese día enfermo. Se procede a visualizar una habitación la cual tiene una ventana y la cual es fijada por los funcionarios de peritos de la policía de investigaciones. Luego el Ministro consulta al testigo Romilio Lavín cuál era su dormitorio, dirigiéndose el testigo y las demás personas a otro lugar del casino de oficiales, señalando Lavín que él como más antiguo dormía en esa habitación, ya que tenía a cargo el rancho de oficiales, inspeccionada la habitación se constata que posee una ventana que da a un patio ciego, la que es fijada por personal de perito de la policía de investigaciones. Posteriormente, el Ministro consulta a otro testigo, señor Orlando Moreno Vásquez, para que indique dónde funcionaba la Fiscalía Militar en aquella época, el testigo manifiesta que, en la comandancia, dirigiéndose todos a la comandancia del regimiento. En ese lugar, el señor Moreno, indica que funcionaba en el interior de la actual comandancia y que estaba a cargo del mayor Cofre, pero después funcionaba con el señor Podlech, en el interior de la comandancia. Señala el señor Moreno, y también el testigo Raimundo García Covarrubias, cuando se le consulta, que había dos oficinas, en una funcionaban los actuarios y en la otra el Fiscal. A continuación, el Ministro junto a los demás testigos y

personas consulta dónde se ubicaba la compañía de plana mayor, indicando García el lugar de esta compañía, identificando también la compañía de morteros y luego la compañía cazadores que antes era la compañía andina. Moreno, señala que él trabajaba en la plana mayor, con soldados conscriptos en instrucción. Consultados por el Ministro dónde funcionaba el gimnasio, siendo indicado por Lavín el lugar donde se encontraba el gimnasio del regimiento. El Ministro, consulta a Moreno, por la gente que llegaba detenida al regimiento, respondiendo Moreno que llegó gente detenida y ésta era llevada al gimnasio y el Fiscal era el que decidía quién iba a la cárcel o quién quedaba en libertad. El Ministro consulta por la existencia de baños en el lugar señalándose por los testigos, específicamente por Moreno, el lugar donde se encuentran los baños, fijándose el lugar por los funcionarios de peritos. Posteriormente, el Ministro, consulta por el matadero, siendo indicado por Moreno, el lugar donde se encontraba en esos tiempos esa dependencia, la que corresponde actualmente al rancho de soldados, se fija este lugar por los funcionarios peritos. El Ministro consulta por la distancia que existía entre el matadero y la isla Cautín, respondiéndole los peritos lo que pueden existir unos 500 metros, en seguida el Ministro pregunta a otro testigo, personal de la Policía de Investigaciones en situación de retiro, a fin de que indiquen el lugar donde trabajaban, señalando que fueron destinados al regimiento para efectos de prestar colaboración al Fiscal Podlech, señalando que había actuarios que eran civiles y que existieron muchos detenidos los cuales eran asignados a los detectives, aproximadamente veinte detenidos, por detective. El testigo Hernán Quiroz Barra señala que a él le toco interrogar a muchos de estos detenidos, al consultar el Ministró al testigo si durante la interrogación eran observados por militares, el testigo dice que no. En seguida, el Ministro, consulta al otro detective en retiro, testigo Luco, quien indica que él en esos tiempos era chofer, y sólo llegaba hasta la guardia del regimiento, en ese lugar se le indicaba que tramite debía hacer, y él tenía expresa orden de llegar solo hasta la guardia del regimiento. Siguiendo con la diligencia el Ministro pregunta a Omar Burgos Dejean, que indique dónde se desempeñaba él, señalando el testigo que trabajaba en el archivo, el cual quedaba en la comandancia, al fondo a la izquierda, la oficina no tenía nombre, se fija fotográficamente por los peritos. Posteriormente, Burgos, señala que él daba los salvoconductos, que trabajaba hasta el viernes, que no interrogó nunca a detenidos y que, por necesidad y orden superior, solo participo

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

en la detención del caso polvorín. Señala que normalmente tenía un banco de colegio ubicado antes de la guardia del Regimiento, en el cual trabajaba entregando a la gente los salvoconductos que eran documentos firmados por el Fiscal Cofré, tales documentos autorizaban, por ejemplo, al camión que llegaba a entregar víveres o cuando la gente tenía que trasladarse de un lugar a otro, fuera del horario establecido, se fija por los funcionarios peritos el lugar. El Ministro, luego de escuchar al testigo Burgos, pregunta al testigo Raúl Schonherr Frías, este indica que trabajó en la segunda comandancia después del 11 de septiembre de 1973 señalando que, en la segunda comandancia, en su interior, habían tres dependencias: la oficina del dactilógrafo funcionaba en este lugar como también la del segundo comandante, y otra dependencia en que habían tres oficinas, allí funcionó el Fiscal Cofre, después llegó Podlech, se fijan el lugar. Más tarde, y en el desarrollo de la misma diligencia, el Ministro, se reúne con otros testigos: Héctor Mauricio Villa blanca Huenulao, Manuel Reinaldo Canales Valdés, Manuel Rafael Campos Ceballos, Héctor Joaquín Celedón Fuentes, Gerardo Jaime Araneda Muñoz y Oscar Inostroza Segura, quienes fueron conscriptos. El Ministro les dice que se refieran a la noche del 10 de noviembre de 1973, indicándose por estos que se encontraban en la compañía de morteros y compañía de plana mayor. Señalan Celedón y Araneda, que ellos esa noche se encontraban durmiendo, y sintieron unos ruidos, pero no hubo mayor movimiento, nadie ordeno salir del lugar. Inostroza dice que él estaba de franco y estaba en su casa, no en el regimiento. Villablanca manifiesta que él esa noche, se encontraba dormido, dormía en la primera litera, señala que despertó al sentir unos disparos o granadas, dice que era él de la segunda escuadra. Canales, declara que él esa noche estaba en el Cerro Nielol, y sintió unos disparos desde ese lugar, señalando que él se encontraba en la copa de agua. El Ministro, consulta a Inostroza, ya que en su declaración dice que le correspondió entregar detenidos a la segunda comandancia, desde donde sacaba a los detenidos y hasta donde los llevaba, trasladándose el testigo junto al Ministro y las demás personas a una dependencia ubicada al lado de la guardia, donde Inostroza indica que esa era una sala de espera, donde se dejaba a los detenidos. La dependencia tiene una sola puerta de entrada y salida, señalando Inostroza que desde ese lugar se sacaba a los detenidos y los llevaban a la compañía de plana mayor, lugar donde los interrogaban en la quinta cuadra, había en el interior unos somieres metálicos,

a las personas se las dejaba en ese lugar para que las interrogaran, como uno no ingresaba, luego salían del lugar siempre custodiados, señala que a él varias veces le tocó llevar gente que salió bien físicamente, estas personas salieron caminando, señala que en esa sala se sentían ruidos de tortura. El Ministro consulta a los otros testigos; exsoldados, que dormían en las cuadras de al lado, si ellos sentían algún ruido, señalando que sí, que habían veces que sentían gritos y ruidos de tortura. Luego el Ministro solicita que le indiquen estos testigos donde se encontraba el polvorín de la unidad, siendo señalados por uno de los testigos el lugar donde funcionaba el polvorín, lugar que es fijado. Ulteriormente, el Ministro, le pregunta al testigo Guillermo Tichauer Salcedo que indique dónde se encontraba él esa noche de noviembre del año 1973, dirigiéndose el Tichauer, junto al Ministro y los demás funcionarios afuera del regimiento, cruzando la calle Prat, señalando el testigo, que él vivía frente al regimiento, en el segundo piso, diciendo que se había casado hacía poco y se encontraba con su mujer y su cuñado y familia de éste, y mientras comían escucharon unos disparos, razón por la que se dirigió al regimiento, encontrándose antes de ingresar a este con el mayor Cofre, quién le dijo que no pasaba nada, que había sido un asalto al cuartel, por esta razón regreso a su domicilio, toda vez que su mando le dijo que se devolviera atender a su familia, se fijan el lugar. Se presenta Jorge Luis Godoy Valdebenito, soldado, conscripto a la fecha de ocurrencia de los hechos, el Ministro le solicita que indique el lugar donde, él habría sido torturado, se desplaza al lugar donde están las compañías, indicando que había una pieza grande en la cual tenían una cama, específicamente somier y que el sargento Mario Arias, lo habría acostado y le habría aplicado corriente. El Ministro le pide que indique el lugar donde él veía a los detenidos, señalando el testigo Godoy que él veía que llegaban detenidos con venda en los ojos y que se escuchaban ruidos y gritaba gente, señala que había un conscripto de apellido Etchepare, el cual mareaba a los detenidos, luego Godoy señala que en la sala de banda era el lugar donde pasaban los detenidos, los cuales eran golpeados por los mismos soldados, por orden de los más antiguos, indica que el mayor Cofre nunca se metía en nada, eran los menos antiguos los que ordenaban golpear a los detenidos con la fusta de los caballos, en este lugar, indicando la sala de banda llegaban los detenidos y luego eran llevados a la compañía.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

B.2.5. A fs. 2.011 (Tomo VI), consta acta de inspección personal del Tribunal, de fecha 16 de diciembre de 2014, que en lo adecuado refiere que: constituyéndose el Tribunal en el camino que une Pucón con la localidad de Caburgua, con la presencia del personal de la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos de la Policía de investigaciones de Chile, Comisarios Hernán Villena Morales y Luis Castillo Farías; de los Peritos Fotógrafo y Planimetrista del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, doña Ana Luisa Pizarra López y don Juan Vega Norambuena; y del testigo don Luis Robinson Bustos Letelier. En primer término, a sugerencia del testigo el Tribunal se traslada hasta el km. 12 del camino precitado. En ese lugar el testigo Luis Robinson Bustos Letelier indica un sector cercano a la calzada donde habría divisado a las víctimas de autos y después de haberles practicado un control de identidad, decidió proceder a su detención. Acto seguido, el testigo precisa la manera como fueron subidos al carro policial en el cual los detenidos, víctimas de autos, fueron llevados hasta la Subcomisaría de Carabineros de Pucón.

B.3. Informes periciales de la Policía de Investigaciones de:

B.3.1. A fs. 161 a fs. 168 (cuaderno secreto) informe Pericial Planimétrico y Dibujo, remitido por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, realizado en inspección ocular en el destacamento de Montaña N°8 Tucapel y polígono de tiro en isla Cautín de Temuco, mediante el cual se fijan la localización de edificaciones y proyección de los lugares señalados por los testigos durante la diligencia.

B.3.2. A fs. 170 a fs. 171 vta. (cuaderno secreto), informe Pericial fotográfico, remitido por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, realizado en inspección ocular en el destacamento de Montaña N°8 Tucapel y polígono de tiro en isla Cautín de Temuco, cuyas fotografías son acompañadas en formato digital disco compacto, que refieren a las nueve tomas fotográficas, detallando cada una de ellas. En la fotografía N°5 vista del interior de dormitorio, lugar donde los testigos señalan haber tenido conocimiento de que llegaban detenidos el año 1973. Fotografía N°8 y N°9 vista del lugar donde se habría emplazado el polígono de tiro de la isla Cautín. En donde el testigo M.J.C.S., el año 1973 encontrándose en condición de soldado conscripto se le habría ordenado por los jefes militares directos, subir cuerpos de

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

personas jóvenes con herida de proyectil balístico hasta el interior de un camión tres cuartos.

B.3.3. A fs. 1.664 a fs. 1.671 (Tomo V), informe Pericial Planimétrico, remitido por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, realizado en reconstitución de escena en el Regimiento de Infantería N°8 Tucapel, Temuco, ordenado en causa rol 113.089 del ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco seguida antes este Tribunal, que en lo pertinente contiene antecedentes de relevancia criminalísticas obtenidos en el sitio del suceso, expresado en plano de planta a escala en láminas.

B.3.4. A fs. 2.024 a fs. 2.027 (Tomo VI), (copia del cual se encuentra de fs. 2.028 a fs. 2.031 Tomo VI), informe Pericial Planimétrico, remitido por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, realizado en levantamiento en kilómetro doce de la ruta S-905, desde Pucón a Caburgua, mediante el cual se ilustra fotografías aéreas de la ruta, destacando el sector de la ruta señalado por el señor Bustos Letelier, como lugar de la detención por sospecha de ocho personas.

B.5.5. A fs. 2.041 a fs. 2.043 (Tomo VI), informe Pericial Fotográfico, remitidos por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, que contiene registro fotográfico de las dependencias de la Tenencia de Carabineros Curarrehue ubicada en Avenida O'Higgins N°63 de la comuna de Curarrehue, según lo señalado por los carabineros (en la época) teniente César Jaña Toro, cabo primero Héctor Sepúlveda Chacón y carabinero Luis Hernández Rojas y por los profesores que habrían estado detenidos en dicha unidad policial, en la época de los hechos, don Manuel Humaña Jiménez, don Rubén Leal Riquelme, don Renato Saravia Flore y don Baldomero Salazar Salgado, compuesto de treinta tomas.

B.3.6. A fs. 2.044 a fs. 2.046 (Tomo VI), informe Pericial Fotográfico, remitidos por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, que contiene registro fotográfico del lugar en la ruta S-905 (Pucón-Caburgua) donde habrían sido detenidas ocho personas, según lo señalado por el ex oficial de carabineros don Luis Robinson Bustos Letelier.

B.4. Informes del Estado Mayor General del Ejército de Chile, que se detallan de:

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

B.4.1. A fs. 2.423 a fs. 2.431 (Tomo VII), informe del Estado Mayor General del Ejército de Chile en que se adjunta fotocopia de reglamentos. En lo pertinente el Servicio de Guarnición de las FF. AA, edición 1959, (Considera grados de acuartelamiento). El que en su capítulo V numeral 121 refiere que: “En general, el acuartelamiento constituye el hecho de disponer medidas para asegurar la permanencia del personal en las Unidades, Reparticiones, o en algún determinado lugar, que permita la rápida concurrencia a cualquier llamado. En el acuartelamiento se distinguen los siguientes grados, que se aplicarán de acuerdo con las circunstancias: a) Primer grado: Todo el personal, sin excepción deberá permanecer en el recinto del cuartel”.

B.4.2. A fs. 2.976 (Tomo IX), informe del Estado Mayor General del Ejército de Chile que remite fotografías cercanas 1973 de las siguientes personas: Carlos Oviedo Arriagada, Raimundo García Covarrubias, Romilio Lavín Muñoz, Mario Alvarado Verdugo y Norbeto Uribe Moroni, las que fueron ordenadas desglosar según resolución de fs. 3.178 del 25 de junio de 2019.

B.4.3. A fs. 3.399 a fs. 3.400 (Tomo X), informe del Estado Mayor General del Ejército mediante el cual se constata estructura orgánica de la compañía de plana mayor y servicio según lista de revista de comisario del año 1973, correspondiente al regimiento de Infantería de Montaña N°8 Tucapel, en lo pertinente ilustrando los oficiales encuadra en los cargos que detalla, tales como: Compañía plana mayor, comando de compañía capitán comandante de compañía Nelson Manuel Ubilla Toledo. Sección intendencia, comando de sección teniente comandante de sección y jefe administración de fondo, Pedro Guillermo Manuel Tichauer Salcedo. Sección material de guerra, comando de sección subteniente comandante de sección Romilio Osvaldo Lavín Muñoz.

B.5. A fs. 362 (Tomo I), informe del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, que informa que: una vez revisados los libros de registro de ingreso de detenidos, correspondiente al año 1973, no se encuentran señaladas las personas mencionadas, no obstante se encuentran registro de ingresos de detenidos los que podrían corresponder a los consultados: “Obdiel González Ortega: ingresa el 14.09.1973, por orden de la Fiscalía Militar de Temuco, por el delito de Infracción a la Ley N°17.798, egresado en libertad el 27.09.1973”. Ricardo Virginio Aguayo Olavarría: Ingresa el 14.09.2973, por orden de la Fiscalía Militar de Temuco, por el delito de Infracción a la Ley N°17.798, egresado en

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

libertad el 27.09.1973. Carlos Schmidt Arriagada: Ingresa el 17.09.1973, por orden de la Fiscalía Militar, por el delito de Daños a la Propiedad Pública Fiscal, egresado en libertad el 16.02.1973”.

B.6. A fs. 494 a fs. 497 (Tomo II), copia simple de denuncia por presunta desgracia interpuesta por doña Evita Aguayo Olavarría, de fecha 21 de enero de 1991, en la cual se indica que: viene en presentar denuncia por presunta desgracia en favor de su hermano legítimo Héctor Domingo Aguayo Olavarría, estudiante, domiciliado en Pedro Montt N°697 Villarrica, nacido el 10 de junio de 1956 en Curarrehue. Su hermano pertenecía al partido socialista del entonces gobierno del presidente Allende, de las juventudes socialistas de la ciudad de Villarrica. En 1972 fue detenido por Carabineros de Curarrehue, junto con otros jóvenes de filiación comunista por tenencia de armas. Ambos fueron trasladados a Villarrica y después de una semana fueron dejados en libertad. Habían sido denunciados por esa tenencia ilegal por un tío de su hermano llamado Pedro Rubilar, ignora segundo apellido, agricultor, domiciliado en Curarrehue camino internacional, predio Santa Sara. Por segunda vez fue detenido el 14 de septiembre de 1973 ignorándose el lugar por personal del regimiento Tucapel. En circunstancias que con otros compañeros (Carlos y Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, el primero funcionario del Corvi y el último estudiante de enseñanza media, hermanos González Ortega, Alejandro Escobar Vásquez, Juan de Dios Cabrera Figueroa) en circunstancias que se disponían a cruzar la frontera hacia Argentina, por el lado de Huife alto, sector Pucón-Curarrehue. Sus padres, familiares y amigos hicieron vanos esfuerzos por obtener información en el regimiento Tucapel de Temuco, donde permaneció detenido por un tiempo que se ignora y donde fue visto por diferentes personas que estaban en el mismo regimiento en calidad de detenidos, siendo testigos de este hecho don Manuel Umaña, profesor, domiciliado en Ñancul, Villarrica y don Luis Díaz, ignora actividad y domicilio, pero que por ser conocido o amigo del primero, éste podría proporcionar su domicilio al Tribunal. En el listado de detenidos que existía en el regimiento Tucapel en esa época no figuraba a su hermano Héctor Domingo, pero si, en cambio aparecía en esa lista su otro hermano, Ricardo Virginio Aguayo Olavarría, quien después de un mes aproximadamente fue dejado en libertad, casi medio muerto por recibir tanto brutal y despiadado castigo. Al no figurar en la lista de detenidos, su hermano, Héctor Domingo, presumieron fundadamente que

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

habría sido muerto con otras personas, que también se sabía habían sido detenidas por personal militar, y de las cuales tampoco se daba ninguna información concreta, no obstante, los ruegos de sus familiares.

B.7. A fs. 535 a fs. 537 (Tomo II), copia simple de denuncia por presunta desgracia interpuesta por doña Lidia Cáster Leiva, en favor de su cuñado Alejandro Escobar Vásquez, estudiante, nacido el 11 de octubre de 1954, quien pertenecía a las juventudes socialistas en el gobierno de Allende y su participación era activa, como miembro de esas colectividades. Con ocasión del pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973. Su cuñado sintió un gran temor de ser detenido, ya que en ese tiempo hubo gran cantidad de personas con ideologías políticas del depuesto gobierno que eran constantemente perseguidos, castigados y allanados, razón por la que toda su familia coincide en que su cuñado escapó hacia el lado de Argentina, el día 13 de septiembre de 1973. Esa fecha su cuñado tenía 18 años. Presume que su cuñado Alejandro no logró su objetivo, ya que por terceras personas han sabido que fue detenido junto con otras personas y llevado hasta la comisaría en Pucón. Para luego ser trasladados al regimiento Tucapel de Temuco, donde permanecieron detenidos, sin que supieran más de él hasta la fecha.

B.8. A fs. 908 (Tomo III), informe del Departamento de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile, que informa que existen los ciudadanos Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, chileno, nacido en Pucón, el 25 de diciembre de 1952, 59 años, soltero, cedula de identidad N° 6.816.771-K, domiciliado en calle Natalio Stein N° 4913, Comuna de Ñuñoa. Respecto de Juan Carlos Schmidt Arriagada, solo registra como Carlos Schmidt Arriagada, chileno, nacido en Pucón el 24 de octubre de 1951, 61 años, casado, cédula de identidad N° 5.879.584- 4, sin registro de domicilio, ambos no registran movimientos migratorios en nuestro sistema. Finalmente se informa que efectuadas las consultas en nuestro sistema computacional "GEPOL", la persona requerida no cuenta con antecedentes policiales, ni encargos judiciales pendientes, sin embargo, para Carlos Schmidt Arriagada, existe un encargo vigente por presunta desgracia, causa N° 2597, de fecha 14.NOV.1990, emanado del Juzgado del Crimen de Pucón.

B.9. A fs. 1.026 (Tomo III), informe del Departamento de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile, que indica que,

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

respecto de Hugo González Ortega, Elías González Ortega, Juan Schmidt Arriagada, Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa y Raúl Figueroa Burkhardt no registran movimientos migratorios a contar del 01 de enero de 1973.

B.10. Informe de la **Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad** que contiene:

B.10.1. A fs. 991 (Tomo III), informe de la Vicaría de la Solidaridad, respecto de Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, señala detenido desaparecido, septiembre de 1973. Raúl Figueroa, de 22 años, soltero, militante de las juventudes socialistas. El 13 de septiembre de 1973, junto a un grupo de jóvenes intentó cruzar la frontera por el sector Curarrehue, siendo detenido en las cercanías de Pucón. Desde esa fecha se desconoce su paradero.

B.10.2. A fs. 993 a fs. 996 (Tomo III), individualiza en lo pertinente a: Hugo González Ortega 23 años a la fecha de la detención, militante del partido Socialista, secretario local del partido Socialista en Villarrica, fecha detención 13 de septiembre de 1973. Elías Dagoberto González Ortega, 24 años a la fecha de la detención, militante del partido Socialista, encargado de propaganda de Villarrica, fecha detención 13 de septiembre de 1973. Juan de Dios Cabrera Figueroa 20 años a la fecha de la detención, militante de las juventudes socialistas, fecha detención el 13 de septiembre de 1973. Juan Carlos Schmidt Arriagada, 21 años a la fecha de la detención, militante del partido socialista, fecha detención 13 de septiembre de 1973. Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, 18 años a la fecha de la detención, militante del partido socialista, fecha de detención 13 de septiembre de 1973. Alejandro Escobar Vásquez, 18 años a la fecha de la detención, militante de las juventudes socialistas, fecha detención 13 de septiembre de 1973, y Héctor Domingo Aguayo Olavarría, 17 años a la fecha de la detención, militante de las juventudes socialistas, fecha de detención 13 de septiembre de 1973. Reseña como situación represiva lo siguiente: Hubo Arner González Ortega, 23 años, su hermano Elías Dagoberto González Ortega, 24 años, los hermanos Juan Carlos y Ricardo Schmidt Arriagada, de 21 y 20 años de edad, respectivamente, Juan de Dios Cabrera Figueroa, de 20 años, Alejandro Escobar Vásquez, de 18 años y Héctor Domingo Aguayo Olavarría, de 17 años de edad todos militantes del partido socialista se encuentran desaparecidos desde el día 13 de septiembre de 1973, luego que al ser allanados sus domicilios en la ciudad de Villarrica por personal de carabineros, decidieron cruzar la frontera por

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

un paso cordillerano, en el sector de Curarrehue. Tiempo después, personal de investigaciones se hizo presente en el domicilio de los hermanos Schmidt Arriagada e informó a sus familiares que los jóvenes habían sido detenidos. Informaciones obtenidas por la familia de Héctor Aguayo indican que el grupo de jóvenes fue detenido en el sector del puente del río Turbio, ocho kilómetros hacia Pichares cuando intentaban cruzar a pie hacia el lado argentino. La aprehensión la habría realizado personal de carabineros que se movilizaban en una camioneta particular de propiedad de un habitante de la ciudad de Pucón. En una primera instancia los detenidos fueron conducidos al retén de Pucón, posteriormente a Villarrica y desde allí enviados al regimiento Tucapel de Temuco desde donde desaparecieron. Versionas extraoficiales indican que habrían sido ejecutados en ese lugar. Gestiones Judiciales. Los familiares de las víctimas realizaron indagaciones en la zona de búsqueda, sin resultado positivo alguno. Con fecha 24 de agosto de 1990, la familia de Alejandro escobar Vásquez inició una denuncia por presunta desgracia ante el Juzgado de Letras de Villarrica, la que roló con el N°28451. Con fecha 27 de agosto el juez de Villarrica se declaró incompetente, remitiendo los autos a Juez de Letras de Pucón (...).

B.11. Informe del Museo de la Memoria y Derechos Humanos, el que se detalla en lo pertinente:

B.11.1. A fs. 1.081 a fs. 1.082 (Tomo IV), ficha del arzobispado de Santiago Vicaria de la solidaridad "detenidos desaparecidos". Documento de trabajo, 1993. Respecto de Héctor Domingo Aguayo Olavarría, situación represiva Hugo Arner González Ortega, 23 años, su hermano Elías Dagoberto González Ortega, 24 años, los hermanos Juan Carlos y Ricardo .Schmidt Arriagada, de 21 y 20 años de edad, respectivamente, Juan de Dios cabrera Figueroa, de 20 años, Alejandro Escobar Vásquez, de 18 años y Héctor Domingo Aguayo Olavarría, de 17 años de edad, todos militantes del partido Socialista se encuentran desaparecidos desde el día 13 de septiembre de 1973, luego que al ser allanados sus domicilios en la ciudad de Villarrica por personal de carabineros, decidieron cruzar la frontera por un paso cordillerano, eh el sector de Curarrehue. Tiempo después, personal de Investigaciones se hizo presente en el domicilio de los hermanos Schmidt Arriagada e informó a sus familiares que los jóvenes habían sido detenidos. Informaciones obtenidas por la familia de Héctor Aguayo indican que el grupo de jóvenes fue detenido en el sector del puente del río Turbio, ocho

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

kilómetros hacia Pichares cuando intentaban cruzar a pie hacia el lado argentino. La aprehensión la habría realizado personal de carabineros que se movilizaban en una camioneta particular de propiedad de un habitante de la ciudad de Pucón. En una primera instancia los detenidos fueron conducidos al retén de Pucón, posteriormente a Villarrica, y desde allí enviados al Regimiento Tucapel de Temuco desde donde desaparecieron versiones extraoficiales indican que habrían sido ejecutados en ese lugar (...), reseñando las gestiones judiciales realizadas por los familiares de las víctimas.

B.11.2. A fs. 1.095 (Tomo IV) oficio del directo de obras municipales de Villarrica que indica que no existe registro de sepultación de Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

B.11.3. A fs. 1.146 (Tomo IV), oficio del director de obras municipales de Villarrica que señala: “revisados los antecedentes de archivados en el departamento de obras, no existe registro sobre sepultación de Elías Dagoberto González Ortega.

B.11.4. A fs. 1.169 a fs. 1.170 (Tomo IV), declaración jurada de Silvia Luz Schmidt Arriagada, fecha 25 de julio de 1990, que en lo pertinente refiere que es hermana de Carlos y Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, nacidos el 24 de octubre de 1951 y el 25 de diciembre 1952, respectivamente. Que ellos en el año 1973 el día 13 de septiembre se “tuvieron que ir, hacia el lugar Ñancalil, lado Huife Alto, sector Pucón Curarrehue, pues ambos pertenecían al partido Socialista de Villarrica”. Carlos trabajaba en CORVI, de esa ciudad y vivía con su hermano Ricardo Augusto. Le consta que sus hermanos, por temor a ser detenidos tuvieron que tomar esa determinación. Que a pesar de sus constantes indagaciones ante la autoridad y ante el regimiento Tucapel de Temuco, comisaría de carabineros, cárcel y fiscalía, nunca se le dio una respuesta concreta del paradero de sus hermanos. Señala que a su madre Aurora del Carmen Arriagada Vergara (fallecida), fue informada a través del cabo Eduardo Vergara que a sus hermanos los habían asesinado en Temuco, y que no se hiciera ninguna ilusión con respecto de ellos de encontrarlos con vida. Lo mismo le dijo el carabinero Guido Krausse, y por Ramón Quezada.

B.11.5. A fs. 1.174 a fs. 1.176 (Tomo IV), consta declaración extrajudicial ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de Silvia Luz Schmidt Arriagada, de fecha 29 de agosto de 1990, alude en lo pertinente que los

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

hermanos Carlos y Ricardo Augusto Schmidt se alejaron de Villarrica, pueblo en donde vivían, el día 13 de septiembre de 1973, por temor a ser detenidos, dado que eran miembros de la juventud socialista de Villarrica. A su parecer tenían la intención de cruzar la frontera por el lado de Huife Alto, ubicado en el sector de Pucón Curarrehue, desde entonces no se ha sabido de ellos. Los carabineros Eduardo Vergara González y Guido Krausse le informaron a su madre Aurora Arriagada Vergara que Carlos y Ricardo Augusto habían sido capturados en esa oportunidad y traídos hasta la comisaria de Pucón y posteriormente trasladados a Temuco, ciudad en donde presumiblemente habían sido asesinados.

B.12. A fs. 2.194 (Tomo VII), informe del Alcaide del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, informa que Ricardo Virginio Aguayo Olavarría, estuvo en el recinto penitenciario conforme a los siguientes antecedentes: fecha de ingreso: 14.09.1973, Juzgado: Fiscalía del Ejército de Cautín. Causa: no se indica, Delito: Ley 17.798, fecha de egreso: 27.09.1973, libertad N°24.

B.13. A fs. 4.134 a fs. 4.135 (Tomo XII), extracto filiación y antecedentes de Raimundo Ignacio García Covarrubias, sin antecedentes a la fecha de los hechos.

29°) Que del conjunto de elementos probatorios antes detallados y relacionados generales y específicos, ponderados consistentes en testigos directos, indirectos, documentos y pericias antes señaladas. Como además se indica en el auto acusatorio **fs. 4.600 a fs. 4.662 (Tomo XIII)**, permiten al Tribunal a través de los medios de prueba legal que se han detallado y relacionados, llegar a la convicción:

A. Primero: que han existido los delitos de **secuestro con grave daño**, en las personas de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, previsto y sancionado en el artículo 141 inciso tercero del Código Penal vigente a la época de los hechos, ilícito en su carácter de lesa humanidad.

B. Segundo: que en esos ilícitos le ha correspondido la participación en calidad de **cómplice** en los términos del artículo 16 del Código Penal al acusado

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Raimundo Ignacio García Covarrubias, ello sin perjuicio de otras reflexiones que puedan hacerse al analizar los escritos de los querellantes y la defensa.

30°) Que prestando declaración indagatoria **ROMILIO OSVALDO LAVÍN MUÑOZ**, quien declaró de fs. 1.407 a fs. 1.409 (Tomo IV), de fs. 3.125 a fs. 3.126 (Tomo IX), de fs. 3.279 a fs. 3.283 (Tomo IX) y de fs. 3.531 a fs. 3.533 (Tomo X).

En declaración judicial de fecha 04 de septiembre de 2009, rolante de **fs. 1.407 a fs. 1.409 (Tomo IV)** (copia de lo cual se encuentra de fs. 3.531 a fs. 3.533 (Tomo X), acota que llegó al regimiento Tucapel de Temuco con el grado de subteniente en enero de 1973 y fue destinado a Valdivia a mediados de 1975. Su función en el regimiento decía relación con su especialidad en material de guerra. Sus labores eran de tipo administrativo. Los oficiales de los servicios, como es su caso, estaban encuadrados en **la compañía de plana mayor**, que estaba al mando del capitán Nelson Ubilla Toledo. En esa misma compañía estaban Raimundo García Covarrubias y Pedro Tichauer Salcedo. Aduce que dependía directamente del capitán Ubilla. Que no le correspondió presenciar ni participar en interrogatorios de detenidos. Aunque sí vio detenidos al interior del regimiento Tucapel de Temuco. Recuerda haber visto el patio lleno de personas en esta calidad, quienes eran conducidos por turnos al edificio de la comandancia, donde eran interrogados, se imagina por personal del departamento segundo. Hace presente que era el oficial menos antiguo en el regimiento y sólo se relacionaba con sus compañeros de curso, que eran Espinoza, Valdebenito y Uribe Moroni. La noche que ocurrieron los hechos investigados en esta causa, se encontraba en cama enfermo de gripe y con fiebre. Sin embargo, sintió un gran estruendo aquella noche, seguido de una serie de ráfagas de armamento. Esto duró entre tres y cinco minutos. A pesar de este gran ruido no escuchó movimientos al interior del regimiento, no recordando que hubiesen salido vehículos hacia el sitio desde donde provenían los disparos. Al día siguiente se informó que la noche anterior habían intentado asaltar el polvorín. No recuerda por qué, medio supe la noticia, aunque tiene la impresión de que fueron informados en la iniciación de servicios, temprano en la mañana. Comunica que los oficiales solteros dormían en el casino de oficiales, en tanto que los casados tenían asignados departamentos que estaban ubicados a un costado del regimiento. Que existía en aquella época una unidad de reacción o de emergencia, que por orgánica estaba integrada por una sección de soldados conscriptos bajo las órdenes de un sargento o suboficial. Su

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

función fundamental era reforzar la guardia del regimiento y reaccionar ante algún ataque al regimiento. Respecto del turno de oficial de ronda, este debía ser efectuado por un capitán o un teniente antiguo, si es que había pocos capitanes el turno de oficial de guardia era efectuado por un teniente o subteniente. Respecto de cuáles oficiales estuvieron de guardia aquella noche, no lo recuerda. Sin embargo, se imagina que debe haber quedado constancia de esto en los libros de guardia del regimiento Tucapel. No tiene conocimiento de que haya habido alguna investigación relativa al asalto del polvorín. Se imagina que debió haberse hecho alguna averiguación, pero desconoce todo antecedente. Recuerda haber participado en un allanamiento a la sede del partido Comunista. Esta patrulla iba al mando del capitán Nelson Ubilla. Afirma que se le ordenó salir a la calle para dispersar a la gente que se agolpaba afuera para ver qué pasaba. No le correspondió salir a patrullar con el teniente Espinoza. Tampoco recuerda la existencia de la “patrulla brava”.

En declaración extrajudicial de fecha 27 de febrero de 2017, rolante de **fs. 3.125 a fs. 3.126 (Tomo IX)**, complementa que para el año 1973, ostentaba el grado de subteniente y era dotación del regimiento de Infantería N° 8 Tucapel de Temuco, recordando que estaba inserto en **la compañía de plana y servicio**, siendo el oficial menos antiguo de la compañía. La compañía antes mencionada estaba integrada por el capitán Nelson Ubilla Toledo, quien era el comandante, siendo secundado en antigüedad por el teniente Pedro Tichauer Salcedo, quien también trabajaba en la comandancia en la oficina de administración de fondos y el subteniente Raimundo García Covarrubias. De los funcionarios del cuadro permanente, recuerda a los sargentos Arias y Peña, los cabos Silva y Krause, el suboficial mayor Arturo Henríquez, quien era encargado de material de guerra. Respecto al ayudante del capitán Ubilla, alega que al parecer su apellido era Ibarra, quien ostentaba el grado de sargento primero. Por otra parte, recuerda al jefe del taller mecánico, dependencia que también dependía de la compañía de plana mayor cuyo apellido era Anriquez. Respecto a una dependencia que existía en la compañía de plana mayor y servicios, donde se efectuaban interrogatorios a detenidos, anexa que efectivamente esa dependencia existía, se ubicaba en la parte central de la edificación donde se encontraba la compañía de plana mayor y servicios y la compañía de morteros y por los antecedentes que maneja en esa sala trabajaba personal de la policía de investigaciones de Temuco. Por otra parte,

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

cuenta que, en las dependencias de la compañía de plana mayor y servicios, estaban las oficinas del capitán Ubilla y del capitán Fernández Carranza, quien era el oficial al mando de la compañía de morteros, recordando que ambas oficinas estaban contiguas. Dentro de la compañía de morteros recuerda al subteniente Gran, como único oficial a parte de Fernández. Añade que en esa época se le había designado como oficial encargado de la alimentación diaria, mantenimiento de la instalación, es decir estaba a cargo del casino de la unidad militar. Respecto a las víctimas los hermanos Hugo Arner y Elías Dagoberto Gonzalez Ortega, los hermanos Juan Carlos y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Raúl Figueroa Burkhardt y Héctor Aguayo Olavarría, sobre quienes se les menciona que eran oriundos de Villarrica y que fueron detenidos los primeros días del golpe de Estado y que habrían llegado en esa calidad al regimiento Tucapel de Temuco, apunta que nunca los conoció e ignora sus actuales paraderos. Sobre el episodio que se le da a conocer en este acto, ocurrido en el polígono de tiro de la isla Cautín, donde un grupo de funcionarios del regimiento habrían subido a dos camiones militares ocho y diez cadáveres, para ser trasladados al puente Allipen, expresa que de esa situación no fue testigo, ni tampoco tomó conocimiento. Hace presente, que el capitán Ubilla, a partir del mismo día 11 de septiembre se hizo cargo de las labores de inteligencia en dependencias de la comandancia, por lo que el mando de la compañía lo asumió el teniente Pedro Tichauer, entre septiembre y diciembre de 1973.

En declaración judicial de fecha 01 de agosto de 2019, rolante de **fs. 3.279 a fs. 3.283 (Tomo IX)**, ratifica la declaración que rola de fs. 3.125 y siguientes y comunica que respecto al sargento Ibarra, este llegó a trabajar con el nuevo teniente que llegó el año 1974, cree que era Alejandro Rubio Valladares. No se acuerda del nombre del sargento primero que trabajaba con Ubilla en 1973. Estas personas eran ayudantes administrativos de los comandantes de la compañía, realizan las órdenes del día, escriben documentos, etc. Ahora que recuerda el sargento que trabajaba con Ubilla era Quilodrán. Rememora que después del 11 de septiembre de 1973 no vio más al capitán Ubilla en sus labores habituales, realizando sus labores el teniente Tichauer. Este último tenía una relación diaria con el comandante del regimiento. Era quien manejaba los fondos del regimiento, cargo que era importante en la época. Cuando llegó al Tucapel se

presentó junto a Manuel Espinoza Ponce, Uribe y Valdebenito. Arguye que era de cargo administrativo, por lo que su posición de encuadramiento legal era de logística. Fue asignado como oficial de material de guerra del regimiento encuadrado en logística. Luego en la recepción en el regimiento le robaron su reloj “Seiko 5” que traía desde Panamá, cuando fue al finalizar la escuela militar. Luego de esto el capitán Ubilla le informa que por orden del comandante iba a asumir el puesto de encargado de la alimentación de los oficiales y el mantenimiento y que también le iban a entregar una sección de treinta conscriptos con tres clases a cargo, Peña, Arias y Silva y que se iban a ayudar en la instrucción de preparación de los soldados. A raíz de esto pidió hablar con el comandante y éste le dijo que en su regimiento se hacía lo que él decía y que si no le gustaba que tomara sus pilchas y se fuera. Además, le dijo que había un suboficial mayor de apellido Torres, que era el encargado de material de guerra. El 11 de septiembre de 1973 terminó todo esto, es decir, se le acabó la sección, había un caos interior que se levantaron las barreras, porque eran los vehículos que llegaban con detenidos. Vio vehículos con detenidos, le impresionó ver tanto detenido hincado en el patio con sus manos en la cabeza. Anima que después del 11 de septiembre siguió como oficial ranchero. Además, tenía la agresión permanente de Tichauer y del teniente Jaime García Covarrubias, que era ayudante del comandante, esto porque a raíz de la situación no había muchas cosas para comer, entonces eso se lo representaban de una manera agresiva. Añade que por su especialidad era el oficial menos antiguo del regimiento. Según su recuerdo el teniente Jaime García y el comandante Iturriaga tenían una buena relación, se notaba una relación de confianza. Además, el ayudante era la voz del comandante. A Fernández Carranza lo encontraba de un perfil muy silencioso, no recuerda que le haya dirigido alguna palabra. Según su recuerdo éste nunca fue separado del regimiento, por lo menos hasta la fecha que fue destinado a otro lugar. Apunta que escuchaba que había una suerte de aversión contra Fernández Carranza, porque tenía un pensamiento distinto a los demás militares. Se acuerda que todo el mundo se burlaba del mayor Jofré, porque decía “guatón guatón”, por ejemplo, uno le pedía algo y decía “no guatón, porque mi coronelcito se puede enojar”. Rememora que era un hombre absolutamente manejable. El Tribunal le consulta sobre los otros oficiales que estaban a cargo de la compañía plana mayor y servicios del regimiento Tucapel de Temuco para septiembre de 1973, señalando

que Ubilla, Tichauer, Raimundo García Covarrubias y el encartado. Esos eran los oficiales de plana mayor, en el mismo orden de jerarquía que ha mencionado. Agrega que había un oficial de nombre Héctor Saldaña Sepúlveda, que era el oficial de transporte que se manejaba independiente, tenía un predio en el sector de Pitrufquén - Villarrica. En ese predio había cursos de tractoristas. Respecto a los nombres de los funcionarios de la policía de investigaciones de Temuco que trabajaban en la sala de interrogatorios, aproxima que le suenan familiares un señor de apellido Quiroz, que era bajo y otro señor grande y corpulento, ellos tenían relación directa con el departamento segundo. Estaban en una dependencia de logística y morteros, pero tenían relación con ellos. El Tribunal le consulta si presenció algún interrogatorio donde se hubiera apremiado físicamente a los detenidos o con corriente eléctrica, a lo que responde que no, nunca lo presencié. Respecto a un detenido que habría estado alrededor de un mes en la comandancia, puede mencionar que lo desconoce. Sobre el teniente Velásquez, aquilata que tenía una especialidad de comando. Además, dirigía la compañía de comandos. Antes que éste había estado un oficial que fue llamado a servicio activo de apellido Huerta. El Tribunal le consulta si alguna vez vio ingresar a esta sala al capitán Manuel Fernández Carranza, a lo que responde que nunca lo vio ingresar a esa sala. Solo puede decir que todo el regimiento sabía dónde estaba esa sala. Nadie podría desconocer la existencia de esa sala, principalmente porque tenía un ingreso prohibido. El Tribunal le consulta quien impartía las órdenes para que los detenidos fueran interrogados en ese lugar. El deponente indica que cree que el departamento segundo. No cree que el comandante Jofré, porque por su personalidad, no cree que haya mandado a hacer eso, pero debió estar en su conocimiento por el grado que tenía en el regimiento. El Tribunal le consulta si algún oficial estuvo enfermo entre septiembre y octubre de 1973, respecto de lo cual recuerda que a Valdebenito Bugmann lo mandaron a hacer instrucción de montaña y allá se agarró una enfermedad que lo mantuvo en "guallacan". Cree que una vez destinados a cada compañía él se fue de inmediato a "guallacan". No sabe si volvió a principios de 1974 o fines de 1973. El Tribunal le consulta en qué condiciones eran ingresados los detenidos a la sala que ha mencionado, responde que solo vio detenidos pasar desde el patio principal. Que si se aplica la lógica, deberían ir encapuchados o vendados. El traslado de los detenidos hasta la sala eran los soldados de guardia, pero todos los días eran

diferentes. A lo mejor en algún momento alguien del departamento segundo. Porque parece que para torturar había categoría A, B y C, según lo que percibió. Desconoce que pasaba con los detenidos una vez terminado los interrogatorios. Pero por lo que ha leído eran cosas horribles. En el acto, acompaña un documento donde se relata una agresión en su contra sufrida el 19 de diciembre de 2018 y los datos de urgencia donde fue atendido. Asimismo, acompaña certificados médicos sobre la situación de salud de su hija. El Tribunal ordena agregarlos al proceso y le lee en lo pertinente, la declaración que rola de fs. 2.309, 2.638 y 3.109 de M.C.S., respecto de lo cual arguye que lo que puede decir es lo que le dio a conocer la policía, es decir, que un soldado habría manifestado que era su comandante de compañía. Pero no tiene nada que ver en labores operativas, especialmente en relación con los detenidos. No contaba con la confianza del coronel ni de otros oficiales. Tampoco tiene conocimiento de los hechos en relación con los cuerpos que menciona este conscripto. Por ejemplo, nunca habló con Fernández Carranza. Respecto a Manuel Espinoza, éste cambió totalmente su personalidad después del 11 de septiembre. Espinoza caminaba por el regimiento con un ayudante atrás, hablaba solo, tenía la mirada perdida. Recuerda que en una oportunidad hicieron una fiesta en el casino de oficiales y de repente sintieron un disparo, salieron y Espinoza había disparado su arma contra el techo de un vehículo. Dormía en la noche con un soldado en el suelo para que lo acompañara. Rememora que Espinoza se metía dónde estaban los detenidos del departamento segundo y les decía “esto va a ser mío” refiriéndose a las cosas personales que algunos poseían, como relojes, zapatos, etc. Con relación a esto el mando no decía nada, por lo menos que el encartado supiera. Quien debiera saber más es Manuel Vásquez, porque ellos trabajaban en la misma compañía. Respecto a la sala de torturas que ha mencionado, todo el regimiento sabía de su existencia. Ahora, respecto de la sala ubicada en el pertrecho, esto no lo sabía. Asegura que se enteró de otras muertes en la zona, esto fue a través de los bandos de la época. Hace presente que el ejército respeta la verticalidad del mando. Según su parecer nadie andaba matando por gusto. En este sentido todos dependían de un mando y se hacía lo que mandaban los superiores. La verticalidad del mando era importante, por lo tanto, nadie podría haber hecho algo así sin conocimiento de la superioridad.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

31°) Que, haciéndonos cargo de las declaraciones indagatorias del acusado, **Romilio Osvaldo Lavín Muñoz**, quien fue sometido a proceso a **fs. 4.254 a fs. 4.335 (Tomo XII)**, con fecha 17 de junio de 2022. A **fs. 4.396 a fs. 4.397 (Tomo XII)** con fecha 19 de julio de 2022, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco confirma la resolución de auto de procesamiento. **Acusado** según el auto de **fs. 4.600 a fs. 4.662 (Tomo XIII)**, con fecha 04 de noviembre de 2022, como **cómplice** de los delitos de secuestro con grave daño en su carácter de lesa humanidad, en las personas de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, perpetrado entre fines de septiembre e inicio de octubre de 1973. Que, si bien el acusado se ubica en la fecha, lugar y sitio del suceso, agrega factores que podrían eximirlo de responsabilidad en los hechos. No obstante, lo anterior, según el mérito del proceso, las pruebas rendidas y ponderadas en conformidad a la ley, obran en su contra los siguientes elementos de convicción.

Desde ya, por síntesis y economía procesal se dan por reproducidos todos los elementos probatorios generales antes ponderados y los específicos relacionados y aquilatados respecto de los anteriores acusados, puntualizando lo siguiente:

A. DECLARACIONES

A parte de lo que se ha detallado en la prueba de los testigos conviene puntualizar respecto de estas personas lo siguiente:

A.1. Diógenes Segundo Bravo Bernal

En declaración extrajudicial de fecha 14 de diciembre de 1995, rolante de fs. 60 a fs. 61 (Tomo I) , en lo pertinente a Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría, Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, no los recuerda por sus nombres, pero puede indicar que dentro de los primeros días del pronunciamiento militar, en circunstancias que se encontraba en la subcomisaria, llegó hasta la unidad el cabo primero Francisco Monsalve (fallecido), con un grupo de jóvenes, no recuerda la totalidad, pero eran varios, en calidad de detenidos, por cuanto habían sido sorprendidos huyendo hacia Argentina por una patrulla que

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

estaba al mando del capitán don Luis Robinson Bustos Letelier, quien a la vez era el jefe de la unidad. Que los detenidos fueron ingresados a los calabozos, mientras que el suboficial de guardia, del cual no recuerda su nombre, comunicaba esta novedad a la Prefectura de Temuco en forma telefónica.

A.2. Ramón Armando Torrealba Guzmán

En declaración judicial de fecha 20 de noviembre de 2012, rolante de fs. 867 a fs. 869 (Tomo III), dice que hubo una instrucción que impartió la Fiscalía Militar del Ejército desde Temuco que ordenaba la detención de ciertas personas y el allanamiento de domicilios en Villarrica. Los detenidos eran derivados a la Fiscalía Militar de Temuco. En aquel tiempo el fiscal militar era Alfonso Podlech Michaud.

A.3. Guillermo Segundo Rosales Pérez

Declaración judicial de fecha 09 de julio de 2012, rolante de fs. 719 (Tomo II), interrogado dice que hubo detenidos por motivos políticos en la subcomisaria de Pucón, pero lo fueron el mismo 11 de septiembre de 1973. Al día siguiente, esos detenidos fueron retirados por personal militar del regimiento Tucapel de Temuco.

En declaración extrajudicial de fecha 08 de junio de 2012, rolante de fs. 770 a fs. 771 (Tomo III), replica su desarrollo funcionario y recuerda que llegado el pronunciamiento militar se encontraba cumpliendo el servicio de guardia y en aquella oportunidad hubo entre veintiocho a treinta personas detenidas, las cuales quedaron en los calabozos de la unidad policial. Según su apreciación, estas personas fueron detenidas por temas políticos las cuales al día siguiente fueron trasladadas a Temuco en camiones militares.

En declaración extrajudicial de fecha 15 de mayo de 2013, rolante de fs. 1.012 a fs. 1.013 (Tomo III), puntualiza que el 11 de septiembre de 1973 cumplió funciones de encargado de guardia de la unidad policial, en horas de tarde fueron llevadas a la unidad, cerca de 30 personas, las cuales entregó al encargado de guardia del turno entrante, quien hizo entrega de los detenidos a personal de ejército, quienes los trasladaron en camiones militares de Temuco, por lo que comentaron en su momento, ya que ese día estaba saliente de turno.

A.4. Roden Rivas Vergara

En declaración judicial de fecha 16 de noviembre de 2004, rolante de fs. 394 (Tomo I), comunica que recuerda la detención de siete personas, todas

adultas, entre ellos un tal Colihueque, que fueron citados al cuartel por órdenes del regimiento Tucapel y luego de ello le correspondió trasladarlos hasta Temuco, donde los entregó a la guardia del regimiento Tucapel. Que esas personas regresaron a Pucón como a los cinco días y debieron presentarse a firmar todos los fines de semana en el cuartel.

En declaración judicial de fecha 09 de julio de 2012, rolante de fs. 718 (Tomo II), recuerda a un señor de apellido Barra Matamala, quien colaboró en una oportunidad con carabineros para septiembre de 1973, facilitando su camioneta para trasladar detenidos al regimiento Tucapel.

A.5. Ignacio Cofré Leal

En declaración extrajudicial de fecha 07 de junio de 2012, rolante de fs. 766 a fs. 766 vuelta (Tomo III), reseña de su carrera funcionaria y que por comentarios tomó conocimiento que hasta el cuartel llegaron aproximadamente seis detenidos jóvenes, desconociendo todo antecedentes, ya que, había sido detenidos por personal del ejército, presumiendo que fueron traídos y llevados en helicóptero, a algún lugar del cual desconoce.

A.6. José Eve Mancilla Yáñez

En declaración judicial de fecha 17 noviembre de 2004, rolante de fs. 399 a fs. 400 (Tomo II), arguye que respecto de las personas que se le señala, no las recuerda, pero dice que, si llegaron detenidos hasta la subcomisaria, es muy probable que hayan sido derivados hacia Temuco vía aérea, ya que ese era el medio más usual de transporte de detenidos.

A.7. Andrés Rigoberto Pacheco Cárdenas,

En declaración judicial de fecha 22 de septiembre de 2006, rolante de fs. 454 a fs. 454 Vuelta (Tomo II), anexa que, además, carabineros solicitaba algunas veces helicópteros para efectuar traslado de detenidos desde puntos lejanos a Temuco, como el sector cordillerano. En Temuco el Fiscal Militar era a quien le correspondía ver todos los demás casos que ocurrían tanto en la Base Aérea Maquehue como en el resto de las unidades, derivando a ese Tribunal los detenidos.

A.8. Antonio Sergio Monserrat Mena

En declaración judicial de fecha 26 de junio de 2013, rolante de fs. 1.786 a fs. 1.788 (Tomo VI), replica sus funciones y dice que en estos operativos los militares trajeron personas civiles, las que fueron subidas al "aparato", regresando

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

a Temuco con ellos más los militares. Recuerda que en dos o tres oportunidades más o menos le correspondió trasladar militares que llevaban civiles al Tucapel.

A.9. Eduardo Vergara González,

En declaración extrajudicial del 15 de noviembre de 1995, rolante de fs. 52 (Tomo I), expreso que su función específica era la oficina de partes y el rol administrativo de la unidad. En cuanto a los hermanos Schmidt Arriagada, conocía a la madre de nombre Aurora Arriagada Vergara, la cual tenía un restaurant en Villarrica, quien convivía con Otto Schmidt. En el año 1957 cuando se desempeñaba como jefe del Retén Llafenca, conoció a sus hijos, los cuales a esa fecha eran pequeños. Desde esa fecha no los volvió a ver. Que no es efectivo lo que ha manifestado la señora Aurora Arriagada, que su hijo fue capturado y llevado a la unidad de Pucón.

En declaración judicial del 17 de noviembre de 2004, rolante de fs. 397 a fs. 397 vuelta (Tomo II), ratifica su declaración de fs. 71 exponiendo que, en enero de ese año, pasó a visitarlo Luis Bustos Letelier, subcomisario de Pucón en 1973, conversando acerca de los hechos acaecidos con motivo de la detención de unos jóvenes desaparecidos. Estuvieron de acuerdo, en que efectivamente estuvo en el cuartel cuando estos fueron detenidos y que los habrían entregado al regimiento Tucapel. El Tribunal le pregunta si vio pasar detenidos en tránsito hacia Temuco, ya sea trasladados por personal del ejército carabineros o de la Fuerza Aérea, responde: que sí, en dos o tres oportunidades vio a los militares, que fueron a buscar detenidos. El Tribunal le pregunta si tuvo conocimiento que algunos detenidos hayan sido transportados vía aérea hacia Temuco o vio sobrevolar helicópteros en la zona. El deponente responde: que vio sobrevolar helicópteros antes y después del 11 de septiembre, que también aterrizaban a buscar detenidos.

En declaración extrajudicial del 09 de agosto de 2012, rolante de fs. 824 a fs. 825 (Tomo III), replica que, respecto a la detención de Hugo y Elías González Ortega, Juan y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa, Héctor Aguayo Olavarría, Raúl Figueroa Burkhardt y Alejandro Escobar Vásquez, recuerda a los hermanos Schmidt, por conocer a su padre Otto, quien tenía domicilio en Menetúe, cuando trabajó en el retén de Llafenco. En cuanto a la detención de estos jóvenes, señala que en una oportunidad el capitán Bustos, le comento que había detenido a un grupo de jóvenes que aparentemente intentaban cruzar la

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

frontera cerca de Caburgua. Que, según Bustos, la detención la habría hecho el suboficial Heleo Raúl Burgos Burgos, junto al carabinero Francisco Monsalve Hidalgo y otros funcionarios que no recuerda. Por lo comentado por el capitán Bustos, esos jóvenes fueron entregados al ejército, motivo por el cual se les trasladó hasta el regimiento Tucapel de Temuco, por vía terrestre en un vehículo particular.

En declaración extrajudicial del 16 de mayo de 2013, rolante de fs. 1.014 a fs. 1.015 (Tomo III), en relación con los ocho detenidos, se enteró en una oportunidad sobre la detención de unos jóvenes, pero no puede precisar si son ocho, quienes fueron detenidos por el sargento Burgos, Ramón Quezada Reyes, Monsalve y otros funcionarios. Que posterior a la detención de los jóvenes, leyó un oficio en el cual se hacía referencia a los detenidos, recordando que en este oficio figuraban los hermanos Schmidt y Olavarría, quien era hijo de un comerciante en la ciudad de Curarrehue. Ese oficio no lo confeccionó él, en dicho documento se mencionaba la entrega de los detenidos al regimiento de Infantería N°8 Tucapel de Temuco. Que estos detenidos fueron trasladados vía terrestre a Temuco, ignora si fueron llevados en vehículo policial o de propiedad de Carlos Barra Matamala, quien siempre les prestó colaboración.

A.10. Sara Ester Valdés Velásquez

En declaración extrajudicial de fecha 13 de octubre de 2015, rolante de fs. 2.886 a fs. 2.887 (Tomo VIII), expone que para el año 1973, no militaba ni participaba en ningún partido político, solo participaba en actividades de tipo social en la sede del partido Socialista. En esas reuniones participaba un joven de apellido Aguayo, a quien conocía ya que iban al mismo colegio y también unos vecinos cuyos nombres corresponden a Alejandro Escobar y Juan Cabrera. También conoció en esas reuniones a los hermanos Schmidt y Gonzalez, quienes eran funcionarios municipales y estaban a cargo de la distribución de unos terrenos los cuales se habían tomado en el año 1971. La última vez que vio a estos jóvenes fue unos días antes del golpe de Estado y nunca le hicieron comentario alguno respecto a un posible viaje al extranjero en este caso a Argentina. Se enteró, por comentarios de los padres de Alejandro Escobar y de Juan Cabrera que ellos se habían ido de la ciudad sin dar explicación alguna respecto a su lugar de destino, esto fue a los tres días del 11 de septiembre

cuando sus padres consultaron a su madre si sabían algo respecto a sus paraderos.

A.11. Juan Esteban Ortiz Parra

En declaraciones extrajudiciales de fecha 17 de julio de 2015, rolante de fs. 2.154 a fs. 2.155 (Tomo VI), ciñe que efectivamente días posteriores al golpe de Estado, encontró en el río Toltén una gran cantidad de cuerpos flotando en las aguas y otros varados en la ribera del mismo río. El caso es que en esa ocasión se fijó especialmente en un cuerpo que estaba varado en la ribera del río cerca del sector Galpones, se fijó en este cuerpo porque era de una persona muy joven, por lo que se bajó del bote y procedió a revisarlo, ya que podía tratarse de un conocido, pero no era el caso, ya que inmediatamente se dio cuenta que no lo era, sumado que al revisar sus vestimentas se percató que tenía un papel que era de un colegio de Villarrica y alcanzó a distinguir que su apellido era Aguayo y probablemente su nombre era Pedro, es lo que recuerda. El cuerpo de ese joven presentaba una perforación por la parte posterior de su cráneo y sus manos estaban amarradas con alambre de púa y estaba vestido con pantalones tipo jeans color azul y una chomba. Las características físicas de ese joven, señala que aparentemente no superaba los quince o dieciséis años, era de baja estatura y no pudo percatarse de otras características, ya que el cuerpo estaba muy golpeado por la acción de las rocas del río.

A.12. Rubén Ernesto Sandoval Muñoz

En declaraciones extrajudiciales de fecha 20 de julio de 2015, rolante de fs. 2.156 a fs. 2.157 (Tomo VI), respecto a los cadáveres que vio en el río, especial atención le llamó un joven que vio varado en un quebradero del río entre el sector Bajada de Piedra y Chesta, ya que presentaba una perforación al lado derecho de su cráneo y otra perforación en la parte posterior de este, dándole la impresión de que le habían dado un balazo. Recuerda que junto a su cuerpo sobre la arena estaban sus documentos de identidad, recordando que decía Villarrica, no distinguiendo su identidad. Las vestimentas del cadáver correspondían a un chaquetón, blue jeans y zapatillas, no pudo percatarse si presentaba otras heridas porque por temor prefirió retirarse del lugar. Respecto a la fotografía que se le exhibe, señala que efectivamente se trata del joven que vio en el río, ahora bien, el nombre que se le da a conocer como Héctor Aguayo Olavarría. Solo del que

mencionó pude observar sus documentos ya que estaban en la arena, incluso le dio la impresión de que había sido revisado con anterioridad.

En declaración judicial de fecha 31 de mayo de 2017, rolante de fs. 2.645 a fs. 2.646, (Tomo VIII), ratifica su declaración e indica que en diciembre de 1973 pudo observar la presencia de distintos cuerpos en el río Toltén, en circunstancias que se encontraba prestando servicios remando un bote. Precisa que sólo pudo identificar uno de los cuerpos, a la altura de Chesta, en el kilómetro quince, pues cuando bajó del bote a tomar café lo vio y le quedó muy marcada su imagen, persona que en este acto reconoce tras exhibirle la fotografía que rola a fs. 2.317, cuyo nombre se le da a conocer como Héctor Aguayo Olavarría, quien tenía una perforación en el cráneo, al parecer por un impacto de bala, el cual vestía chaquetón oscuro, jean azules y zapatillas. Pudo observar que al lado de su cuerpo se encontraba su cedula de identidad, la cual sólo se lograba observar que decía "Villarrica".

A.13. Francisco Hueche Human

En declaración extrajudicial de fecha 03 de junio de 2010, rolante a de fs. 1.484 a fs. 1.485 (Tomo V), relató que para el año 1973 tenía la edad de 18 años e ingresó al regimiento de Infantería N° 8 Tucapel de Temuco a cumplir con su servicio militar obligatorio, arguyendo que es cierto que todo lo relativo a las ejecuciones de prisioneros dentro del regimiento Tucapel se hacía de noche, en el sector de la isla Cautín donde está el polígono.

A.14. Omar Burgos Dejean

En declaración extrajudicial prestada con fecha 18 de abril de 2012, rolante de fs. 1.699 a fs. 1.700 (Tomo V), afirma respecto a su calidad de agregado al regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco. El día que llegó, se tuvo que presentar con el capitán Nelson Ubilla Toledo, quien dispuso que él se hiciera cargo de confeccionar un archivo político. Recuerda, que se le otorgó una oficina, la cual estaba llena de papeles, con datos de personas que habían pertenecido a instituciones públicas y de partidos políticos. Recuerda que el capitán Ubilla le ordenó confeccionar ficha de cada una de las personas que indicaban los papeles que allí se encontraban, recordando que tuvo que clasificar la información de acuerdo con la tendencia política que cada una de estas personas registraba en dichos documentos.

A.15. Manuel Reinaldo Canales Valdés

En diligencia de careo con Manuel Vásquez Chahuán, de fecha 03 de agosto de 2010, rolante de fs. 1.548 (Tomo V), reitera que hubo detenidos en el gimnasio del regimiento, teniendo acceso a este lugar solo los oficiales.

A.16. Juan Carlos Concha Belmar

En declaración judicial de fecha 28 de diciembre de 2011, rolante de fs. 3.711 a fs. 3.716 (Tomo XI), el Tribunal le indica que ha señalado que en ocasiones integró la patrulla del teniente Espinoza y le pregunta: En estas ocasiones señor Concha ¿esta patrulla detuvo a personas?, ¿Cómo era la dinámica, trasladaban a las personas al regimiento Tucapel?, ¿Quién las trasladaba?, ¿Dónde eran ingresadas? ¿En la guardia? ¿Qué puede señalar acerca de aquello? El declarante responde que siempre habían detenidos en la noche, hasta por “curados se los llevaban”, por ebriedad. Pero igual había detenidos, los llevaban a la guardia. De la guardia del Tucapel abajo hay un galpón grande y ahí llevaban a los detenidos, ahí los dejaban.

A.17. Manuel Rafael Campos Ceballos

En declaración judicial de fecha 15 de julio de 2010, rolante de fs. 1.515 a fs. 1.517 (Tomo V) en lo pertinente rectifica aquella parte en la que señaló que no vio detenidos al interior del regimiento Tucapel, puesto que en realidad si vio a varios, los que eran mantenidos en dependencias del casino de oficiales o en el gimnasio, también en el racho de los soldados. Recordando una situación en cuanto que subieron el cuerpo del detenido y el subteniente ordenó tirar su cadáver al río, aludiendo que no recuerda el lugar en que lo hicieron.

En declaración judicial de fecha 04 de agosto de 2010, rolante de fs. 1.549 a fs. 1.551 (Tomo V), reitera donde se encontraba encuadrado y que conformaba una patrulla que estaba dirigida por el subteniente Espinoza. Agrega que vio detenidos en el regimiento Tucapel, específicamente en el gimnasio de la unidad. Aquellos detenidos eran hombres y mujeres, quienes por toque de queda habían sido privados de su libertad. Explicita que ellos no tenían acceso al gimnasio del regimiento donde se encontraban los detenidos. Pero los oficiales sí lo hacían, aunque no recuerda quienes eran.

En declaración judicial de fecha 31 de mayo de 2011, rolante de fs. 3.708 a fs. 3.709 (Tomo XI), reitera lo señalado en declaraciones anteriores y afirma que, si vio detenidos en el regimiento Tucapel, específicamente en el gimnasio de la

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

unidad, en el casino y en el rancho. Añade que eso fue muy notorio inmediatamente después del golpe militar.

A.18. Roberto Ismael Concha Muñoz

En declaración extrajudicial de fecha 06 de julio de 2010, rolante de fs. 1.509 a fs. 1.510 (Tomo V), evidencia que la "patrulla chacal", la cual estaba integrada mayoritariamente por soldados de su compañía, los que se destacaban del resto por tener mayores estudios. Este grupo, lo recuerda por estar aislado del resto de los conscriptos, se entendían directamente con el teniente Espinoza, no participando de los servicios de la unidad, ya que generalmente salían de noche. Relata que encontrándose en la entrada principal del regimiento cumpliendo servicio de guardia vio a la patrulla antes señalada salir de noche en uno de los camiones de la unidad. Respecto de personas detenidas al interior del regimiento, señala que en alguna oportunidad vio personas en esta calidad al interior del gimnasio del cuartel. En cuanto a los integrantes de la denominada "patrulla chacal", recuerda principalmente a Juan Carlos Concha Belmar, Héctor Villablanca Huenulao, Sergio Vallejos Garcés, Manuel Campos Ceballos, Eliecer Antitur Ñancufil y también a un conscripto apodado "el petizo Sandoval" oriundo de Vilcún.

A.19. Gerardo Jaime Araneda Muñoz

En declaración extrajudicial de 06 de mayo de 2009, que rola de fs. 1.358 a fs. 1.360 (Tomo IV), indico que para el año 1973, tenía 18 años de edad y estaba efectuando su servicio militar obligatorio en el regimiento de Infantería N° 8 Tucapel, en cuanto a Manuel Espinoza Ponce lo recuerda como un oficial inserto en la segunda compañía de cazadores siendo apodado "El Loco Espinoza", por sus actitudes agresivas, tanto con los prisioneros políticos allí detenidos como con los propios conscriptos del cuartel, llegaba con perros que mataba en plena vía pública para hacerle instrucción a su compañía. No recuerda con un grupo especial de trabajo, pero sí constantemente relacionado con los prisioneros.

En declaración judicial de 17 de junio de 2009 que rola de fs. 1.372 a fs. 1.373 (tomo IV), ratifica su declaración extrajudicial y comunica que recuerda que hubo comentarios entre los conscriptos que indicaban que las personas muertas fueron ejecutadas, por lo que no se trataría de un "asalto al polvorín", prosigue su relato en tal sentido.

A.20. Jorge Gonzalez Curiqueo

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

En declaración extrajudicial de fecha 8 de julio de 2010, rolante de fs. 1.511 a fs. 1.512 (Tomo V), aduce que muchas veces vio personas detenidas al interior del gimnasio del Tucapel, las que estaban con la vista vendada. También recuerda que vio a varios centinelas del cuartel pasear a detenidos cuyas identidades desconoce. Que el teniente Manuel Espinoza Ponce, se encontraba a cargo de la cuarta sección de su compañía, que este hombre era “muy malo” con los conscriptos, gustaba de andar metido con los detenidos que estaban en el gimnasio del regimiento, al igual que todos los oficiales de la unidad.

En declaración judicial de fecha 19 de julio de 2010, rolante a de fs. 1.522 a fs. 1.523 (Tomo X), ratifica su declaración extrajudicial y destaca que vio varios detenidos al interior del regimiento Tucapel, quienes estaban con su vista vendada y eran mantenidos en el gimnasio de la unidad. Recuerda que casi todos los oficiales se paseaban por ese lugar, pero no puede asegurar si tenían que ver con los detenidos.

A.21. Juan Ociel Schneider Martín

En declaración extrajudicial de fecha 17 de agosto de 2010, rolante de fs. 1.580 a fs. 1.581 (Tomo V), dice que dentro las funciones que le correspondían en tal calidad, se encontraba la limpieza y orden de la oficina del comandante de compañía, la que se encontraba ubicada detrás de las compañías andina y segunda de cazadores. Que efectuaba esporádicamente los servicios de patrullaje junto a su sección a cargo del subteniente Espinoza, quien salía junto a su grupo denominado efectivamente la “patrulla chacal”, la que recuerda era integrada por Sergio Vallejos Garcés, quien eran el hombre de confianza y ordenanza de Espinoza Ponce, el cabo de reserva Héctor Villablanca Huenulao, quien era el hombre de confianza del teniente Manuel Vásquez Chahuán, Juan Carlos Concha Belmar, Manuel Campos Ceballos, Manuel Canales Valdés y Gabriel Dittus Marín, también muy cercano al teniente Vásquez Chahuán.

En declaración judicial de fecha 19 de agosto de 2010, rolante de fs. 1.582 fs. 1.585 (Tomo V), ratifica su declaración extrajudicial y agrega que en unas ocho oportunidades le tocó integrar la denominada “patrulla chacal”. Relatando que también ocurría a veces que el subteniente Espinoza ordenaba bajar a los detenidos del vehículo militar, de a uno y en un sitio eriazo realizaba simulacro de fusilamiento, para lo cual le ordenaba ponerse de pie, con la vista vendada y las

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

manos amarradas, para luego efectuar un disparo al aire y un culatazo en el estómago.

A.22. Luis Raimundo Quezada Chandía

En declaración extrajudicial de fecha 25 de septiembre de 2014, rolante a fs. 1.931 a fs. 1.934 (Tomo VI), informa que los detenidos que comenzaron a llegar al regimiento a partir del día 11 de septiembre eran alojados en un “gimnasio chico” que estaba al costado de los comedores de los conscriptos y añade que nunca le correspondió efectuar la custodia de estos, ya que esas funciones casi siempre las efectuaba el contingente de las compañías de plana mayor y servicios y la de cazadores. Continúa su declaración señalando que dentro del gimnasio había una dependencia donde se torturaba. Que se comentaba que había un catre donde se le aplicaba corriente eléctrica a los detenidos, esto lo supo por el comentario de la gente que trabajaba en el casino y también porque a veces se escuchaban gritos provenientes de esa dependencia. Que es efectivo que, en la enfermería, cuadra de plana mayor y servicios y un baño ubicado entre las cuadras de las compañías de cazadores y andina, se efectuaban interrogatorios.

A.23. Nelson Manuel Uldaricio Ubilla Toledo

En declaración extrajudicial de fecha 23 de julio de 2003, rolante de fs. 1.284 a fs. 1.285 (Tomo IV), en lo pertinente acerca de la Fiscalía Militar de Temuco y su funcionamiento en fechas posteriores al 11 de septiembre de 1973, recuerda que el fiscal militar, en primera instancia, fue el mayor Luis Jofre Soto, quien se desempeñó por espacio de dos o tres meses, no recuerda exactamente, pero sí que luego de éste pasó a desempeñarse el abogado Alfonso Podlech Michaud no precisando fecha. Del funcionamiento de la fiscalía, recuerda que los detenidos eran llevados al regimiento por funcionarios de carabinero o investigaciones, los cuales se les llevaba a prestar declaración o de lo contrario se dejaban en calidad de tránsito de la guardia del recinto, hasta que declaraban; una vez hecho eran dejados en libertad o enviados a la cárcel.

En diligencia de careo con Herman Carrasco Paul, de fecha 12 de diciembre de 2003, rolante de fs. 1.303 a fs. 1.304 (Tomo IV), ratifica su declaración de fs. 171 (la que consta en estos autos a fs. 1.292 a fs. 1.293 Tomo IV). Declara que no prestó funciones de ninguna naturaleza en la intendencia de Temuco, como tampoco es efectivo que haya interrogado o torturado a detenidos al interior del regimiento Tucapel. Enfatiza que los detenidos no estuvieron bajo su

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

responsabilidad, sino bajo la responsabilidad de la fiscalía militar y estando encuadrado y subordinado en el regimiento no podría tener disponibilidad de la vida de las personas en sus manos.

A.24. Carlos Luco Astroza

En declaración extrajudicial de fecha 11 de octubre de 2006, rolante de fs. 1.587 a fs. 1.588 (Tomo V), señala que fue enviado en calidad de agregado a cumplir funciones a la Fiscalía Militar del Regimiento Tucapel a partir del 14 de septiembre de 1973. Espeta que en más de una oportunidad pudo ver a don Alfonso Podlech al interior de la Fiscalía Militar del Tucapel sosteniendo reuniones con el mando y en oportunidades vistiendo de uniforme, sin dejar de mencionar que para todos los efectos era el señor Luis Jofré, el fiscal militar. Que también se destacaba la figura del capitán Nelson Ubilla Toledo, a quien recuerda como el hombre que tomaba las decisiones en cuanto a los detenidos junto a sus ayudantes los sargentos Schonherr Frías y Orlando Moreno Vásquez.

En declaración judicial de fecha 08 de abril de 2013, rolante de fs. 3.640 a fs. 3.642 (Tomo X), reitera que en el regimiento dependían directamente del capitán Nelson Ubilla Toledo, quien además tenía a su cargo a los detenidos. Indica que el mayor Jofré no se inmiscuía en nada, por lo que le parece que el abogado Alfonso Podlech estaba a cargo de hecho en la Fiscalía Militar, quien andaba de uniforme en el regimiento.

En declaración judicial de fecha 15 de noviembre de 2013, rolante de fs. 3.644 a fs. 3.646 (Tomo X), reproduce que en el regimiento dependían directamente del capitán Nelson Ubilla Toledo, quien además tenía a su cargo a los detenidos. Indica que el mayor Jofré no interfería en nada, por lo que le parece que el abogado Alfonso Podlech estaba a cargo de hecho en la Fiscalía Militar, quien andaba de uniforme en el regimiento y se entendía con el capitán Ubilla. Deja claro que nunca presenció una conversación entre ellos, pero sí era evidente que existía un nexo entre la Fiscalía Militar y el trabajo de inteligencia que ejercía Ubilla. Que tanto Podlech como Ubilla estaban constantemente en la Fiscalía Militar. Respecto a los detenidos en el regimiento Tucapel indica que ignora quiénes los interrogaban, pero supone que eran los demás detectives agregados, más el capitán Ubilla y los suboficiales Moreno Vásquez y Schonherr, que siempre andaban con este oficial.

A.25. Sergio Luis Campos Torres

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

En declaración extrajudicial de fecha 6 de mayo de 2009, rolante de fs.1.353 a fs.1.354 (Tomo IV), narró que para el año 1973 en enero ingresó a efectuar su servicio militar obligatorio en el regimiento de Infantería N° 8 Tucapel, se encontraba inserto en la **compañía de logística plana mayor**, cuyo comandante era el capitán Nelson Ubilla Toledo. En cuanto a personas detenidas, no recuerda haber visto personas en esa calidad en el regimiento, pero apreciaba un alto flujo de personas que entraba y salía del recinto constantemente acompañada de oficiales y soldados.

A.26. Manuel Vásquez Chahuán

En declaración judicial de fecha 25 de junio de 2003, rolante de fs. 346 a fs. 346 vuelta (Tomo I), cuenta que al 11 de septiembre de 1973 se desempeñaba como oficial subalterno en el regimiento Tucapel de Temuco, con el grado de teniente. Al mando del regimiento estaba el coronel Pablo Iturriaga Marchesse, le seguía el teniente coronel Jofre, después el mayor Leal Manzer, A continuación venían los capitanes, que eran comandantes de compañía, entré los que recuerda a Mario Alvarado Verdugo, Fernández Carranza, Nelson Ubilla Toledo, González, Vargas (fallecido); luego venían los tenientes recordando a los hermanos Jaime y Raimundo García Covarrubias y los subtenientes Grant, Oviedo, Espinoza, y Armando Maldonado Valdivia, oficial de reserva.

En declaración judicial de fecha 04 de septiembre de 2009, rolante de fs. 1.403 a fs. 1.404 (Tomo IV), atestigua que respecto de la presencia de detenidos al interior del regimiento Tucapel, que sólo vio personas privadas de libertad que estaban en tránsito hacia la fiscalía o hacia la cárcel.

En declaración extrajudicial de fecha 20 de agosto de 2009, rolante de fs. 1.410 a fs. 1.412 (Tomo IV), alude que respecto de las personas que ingresaron detenidas al regimiento, específicamente Fiscalía Militar, funciono en un principio en el pabellón de comandancia de la unidad, donde tenía la oficina el comandante Jofre y luego al costado de la guardia de unidad, indica que efectivamente luego del 11 de septiembre ingresaron personas en esa calidad. Anexa que el abogado Alfonso Podlech Michaud era el asesor del fiscal militar y efectivamente en oportunidades vestía uniforme, siendo al parecer su grado oficial de justicia, desde antes del 11 de septiembre de 1973.

En declaración extrajudicial de fecha 06 de agosto de 2015, rolante de fs. 2.307 a fs. 2.308 (Tomo VII), aquilata su desempeño funcionario, y replica que la

fiscalía militar, probablemente tenía relación con las determinaciones que se hacían respecto a los detenidos del regimiento, en el sentido de disponer en que condición quedarían estos. Que el fiscal militar de la unidad militar era el mayor Luis Jofré Soto, siendo apoyado en sus funciones por un abogado de apellido Podlech, a quien se le asimiló al grado de oficial de ejército.

A.27. Jaime Guillermo García Covarrubias

En diligencia de careo Héctor Omar Barra Reyes de fecha 21 de septiembre de 2010, rolante de fs. 1.606 (Tomo V), ratifica declaraciones y refiere que existió una dependencia especialmente habilitada por el capitán Ubilla junto a la comandancia, donde eran interrogados los detenidos por el personal de inteligencia, pero jamás entro a ese lugar mientras estuvo ocupado por ese grupo, ni participo de interrogatorios y menos aún de torturas de detenidos. Se mantiene en sus dichos.

En declaración judicial de fecha 24 de septiembre de 2013, rolante de fs.1.848 a fs.1.852 (Tomo VI) interrogado sustentó que el capitán Ubilla habilitó una dependencia ubicada frente a la comandancia, cercana al patio de mantenimiento, donde además intervenía personal de investigaciones, que fue expresamente llamado para apoyar a la inteligencia en los interrogatorios. Otro grupo de detectives, según lo recuerda, trabajó con la Fiscalía Militar. Que puede ser que el capitán Ubilla haya interrogado personas en ese lugar o quizás se habilitaron dependencias en el gimnasio grande.

En declaración judicial de fecha 16 de abril de 2015, rolante de fs.3.883 a fs.3.886 (Tomo XI), ratifica declaraciones y en lo concerniente el Tribunal le pregunta si el regimiento Tucapel fue centro de detención. El deponente respondió: que inmediatamente después del 11 de septiembre hubo mucha gente que llegó al regimiento llamada por bando, las que fueron interrogadas en el patio de la unidad por personal de inteligencia y algunos suboficiales que fueron comisionados para tales efectos. También vio carros de gendarmería que estaban en el regimiento en los que algunos civiles eran llevados a la cárcel tras los interrogatorios. Que también hubo personas detenidas por toque de queda, los que eran liberados al día siguiente. Asevera que el capitán Nelson Ubilla Toledo era el comandante de la compañía, de plana mayor y servicios, además, era el oficial de inteligencia del regimiento. Éste tenía personal especializado bajo su mando más un grupo de funcionarios de la policía de investigaciones, con quienes interrogaba personas.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Algunos de estos civiles, puede ser que hayan quedado detenidos al interior del regimiento, pero por breve tiempo para ser interrogados por Ubilla. El capitán Ubilla tenía una oficina ubicada cerca de la Banda Instrumental donde interrogaba a las personas. Personalmente vio en alguna oportunidad que este oficial interrogaba personas junto a su grupo.

En declaración judicial prestada por video llamada con fecha 12 de abril de 2022, rolante de fs.3.887 a fs.3.896 (Tomo XI), el Tribunal le pregunta ¿Cuál era la oficialidad al mando de la compañía de plana mayor y servicios del regimiento Tucapel de Temuco, después del 11 de septiembre de 1973? ¿Cuál era la cadena de mando? Musita el declarante que estaba Ubilla, su hermano (Raimundo García Covarrubias) como subteniente y Romilio Lavín también como subteniente. La compañía de plana mayor era una compañía que para términos operativos no era como la compañía andina o la compañía de cazadores, o la compañía de fusileros, que eran todos juntos. Para el caso de una guerra, probablemente el oficial de intendencia estaba en la compañía de plana mayor, pero en la paz no lo está. En la paz cumple función de administración de fondos de intendencia.

A.28. José Albino Krause Álvarez

En declaración extrajudicial de fecha 10 de febrero de 2009, rolante de fs.1.327 a fs.1.328 (Tomo IV), sostiene que para el año 1973 ostentaba el grado de cabo primero y cumplía funciones en el regimiento de Infantería N° 8 Tucapel de Temuco. Que efectivamente el regimiento Tucapel luego del 11 de septiembre de 1973, fue utilizado como lugar base para la permanencia de detenidos políticos; que eran requeridos por las autoridades militares y de la Fiscalía Militar que funcionaba al interior del regimiento. Recuerda al abogado Alfonso Podlech Michaud, quien vistiendo uniforme militar asimilado al grado de mayor era el fiscal militar del regimiento.

En declaración extrajudicial de fecha 11 de enero de 2017, rolante de fs. 2.575 a fs. 2.577 (Tomo VIII), señaló que en la compañía de plana mayor y servicios existió una sala donde torturaban a los detenidos, donde siempre se veía gente de civil que pertenecía a la policía de investigaciones de Temuco, recordando que uno de ellos era de apellido Quiroz.

A.29. José Arturo Fuentes Carrasco

En declaración extrajudicial prestada con fecha 28 de septiembre de 2010, rolante de fs. 1.629 a fs. 1.630 (Tomo V), exclama que para el año 1973, se

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

encontraba inserto en la segunda compañía de cazadores, agrega que, recuerda haber visto a personas detenidas, las cuales eran trasladadas desde un punto a otro del regimiento con escolta de soldados conscriptos, se imagina que, para realizarles algún tipo de interrogatorio, labor que no le correspondió realizar. Manifiesta que efectivamente había una patrulla liderada por el teniente Manuel Espinoza Ponce, quien era el comandante de la cuarta sección "armas de apoyo" de la segunda compañía de cazadores, integrada por los conscriptos Sergio Vallejos Garcés, Héctor Villablanca Huenulao, Guillermo Pincheira Farías y Juan Carlos Concha Belmar. Sobre el capitán Manuel Vásquez Chahuán agrega que lo recuerda como integrante del grupo de inteligencia del regimiento Tucapel, para lo cual tenía gente en la compañía de plana mayor y servicios, la que se encontraba a cargo del capitán Nelson Ubilla Toledo. Que en las oportunidades que el capitán Manuel Vásquez, se encontraba ausente de su compañía, era el teniente Jaime García Covarrubias quien lo reemplazaba en sus funciones. Comenta otras situaciones y se le pregunta por otros hechos.

A.30. Orlando Moreno Vásquez

En declaración extrajudicial de fecha 18 de julio de 2003, rolante de fs. 1.276 a fs.1.278 (Tomo IV), musito en cuanto al funcionamiento de la fiscalía militar y sus integrantes que estas personas fueron llevadas por un abogado, quien fue el que se hizo cargo de la fiscalía militar de Temuco a los pocos días después del 11 de septiembre de 1973, de nombre Alfonso Podlech Michaud; quien para todos los efectos era el Fiscal Militar letrado, ignorando cuál era su función específica por cuanto nunca trabajó en forma directa con él. Alude que Alfonso Podlech Michaud cumplía sus funciones de Fiscal en el regimiento Tucapel, recordando que era cotidiano verlo en el interior de esa unidad militar, pero no pudiendo agregar que este se encontraba durante todo el día. Con relación al servicio de inteligencia militar indico que cumplió funciones, pero de este servicio estaba a cargo el entonces capitán Nelson Ubilla Toledo, que a su vez era comandante de la compañía de plana mayor. Otro de los integrantes de este grupo era el sargento Schonherr. Reconoció que cuando la fiscalía militar necesitaba algún preso político, era enviado con una orden de esta para retirarlo de la cárcel y una vez que era interrogado, era trasladado nuevamente al recinto carcelario.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

En declaración extrajudicial de fecha 11 de febrero de 2009, rolante de fs. 1.329 a fs.1.331 (tomo IV), insiste que, para el septiembre de 1973, el mayor Luís Jofré siguió cumpliendo funciones de fiscal militar, pero era asistido por el abogado Alfonso Podlech Michaud. Que efectivamente y cree que por su especialidad la que es "Especialista en seguridad militar", le correspondía ir hasta la cárcel pública de Temuco, en vehículo militar (jeep) escoltado por patrulla de la unidad a dejar detenidos de la fiscalía del regimiento o llevar detenidos que eran requeridos; todos por causas políticas.

En declaración judicial de fecha 25 de junio de 2012, rolante de fs. 3.840 a fs. 3.841 (Tomo XI), a la pregunta, explico que el fiscal era Luis Jofré Soto, pero era asesorado por Alfonso Podlech Michaud. Este abogado iba constantemente a la Fiscalía a conversar con el mayor Jofré encerrándose ambos en la oficina del mayor. Este procedimiento era rutinario y permanente desde el mismo 11 de septiembre de 1973 y hasta que el abogado Podlech asumió como Fiscal. Este vestía de uniforme, porque antes había sido militar. Interrogado musita que los detenidos políticos eran mantenidos en un gimnasio pequeño que estaba a un costado del rancho de tropa. Estos detenidos eran interrogados en la Fiscalía o viceversa.

En declaración judicial de fecha 26 de junio de 2013, rolante de fs. 3.842 (Tomo XI), expone que no le consta que el señor Podlech haya confeccionado los bandos. Tampoco es efectivo que él fuera fiscal militar en 1973, pero sí le consta que este señor estaba permanentemente en la Fiscalía y que, junto al mayor Jofré, que sí era el fiscal militar, tomaban decisiones respecto de los detenidos. Que los oficiales Jaime García Covarrubias, Raimundo García Covarrubias, Manuel Vásquez Chahuán, Nelson Ubilla Toledo y en general todo el resto debieron necesariamente saber acerca de la existencia de detenidos en el regimiento y el destino final de estos.

A.31. Manuel Ángel Fernández Carranza

En declaración judicial de fecha 2 de julio de 2013, rolante de fs.1.802 a fs.1.804 (Tomo VI), en lo pertinente desarrollo que todos los oficiales iban al gimnasio a ver lo que ocurría.

En declaración extrajudicial de fecha 29 de agosto de 2017, rolante de fs. 2.764 a fs. 2.765 (Tomo VIII), replica desempeño en el regimiento de Tucapel de Temuco, y en lo pertinente proclama que toda labor operativa o represiva que se

comenzó a realizar en Temuco, la cual iba orientada a las detenciones e interrogatorios de personas opositoras al régimen militar. Se canalizó directamente desde la comandancia del regimiento hacia la compañía de plana mayor y servicios, la cual estaba a cargo del capitán Nelson Ubilla Toledo, quien asumió labores de inteligencia. Dentro de los colaboradores de Ubilla, estaba el sargento Arias, recordando que en la comandancia había otro cabo o sargento que también veía esos temas cuyo apellido era Schonherr.

A.32. Ricardo Del Tránsito Esparza Rocha

En declaración judicial de fecha 14 de octubre de 2010, rolante de fs. 1.617 a fs. 1.618 (Tomo V), soslaya que los detenidos eran mantenidos en el gimnasio del regimiento desde donde eran sacados por personal de planta de turno, siendo trasladados hasta otras dependencias para ser interrogados. Después no los volvían a ver. Agrega que al le correspondió custodiar la entrada del gimnasio en alguna oportunidad.

A.33. Juan Bautista Labraña Luvecce

En declaración extrajudicial de fecha 23 de marzo de 2010, rolante de fs. 1.472 a fs. 1.473 (Tomo V), arguyo que para el año 1973 y hasta fines de ese año permaneció en el regimiento de Infantería N°8 Tucapel de Temuco. Sobre la sección segunda, que se encontraba bajo el mando de Nelson Ubilla Toledo, puede decir que recuerda al sargento Orlando Moreno Vásquez, Raúl Schonherr Frías, Luís Barrenechea Calderón cabo primero, Luís Campos Espinoza y Roberto Astete Cea. Además, dentro de este grupo se encontraban los oficiales Jaime y Raimundo García Covarrubias.

En declaración judicial de fecha 12 de mayo de 2010, rolante de fs. 1.478 a fs. 1.479 (Tomo V), ratifica declaración extrajudicial y anexa que solo concurrían allí los miembros de la sección segunda, quienes vestían de civil. Además, concurrían a ver a los detenidos los oficiales Vásquez Chahuán, Espinoza Ponce y los hermanos García Covarrubias, quienes trabajaban en la comandancia del regimiento.

En declaración extrajudicial de fecha 14 de abril de 2011, rolante de fs. 1.642 a fs. 1.643 (Tomo V), reitera que la sección segunda que se encontraba bajo el mando del capitán Nelson Ubilla Toledo (fallecido), que es efectivo que los detenidos que llegaban al regimiento eran llevados hasta el gimnasio. Lugar donde eran custodiados por los conscriptos de la compañía que estuviera cumpliendo

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

servicios de guardia. Por otra parte, también le es preciso señalar que los únicos que podían ingresar a dicha dependencia eran los oficiales y funcionarios del cuadro permanente que cumplían funciones en la sección segunda, recordando entre estos al teniente Manuel Vásquez Chahuán, Manuel Hugo Espinoza Ponce, los hermanos Jaime y Raimundo Garcia Covarrubias, quienes también tenían el grado de teniente.

A.34. Juan Humberto Carrillo Rebolledo

En declaración extrajudicial de fecha 29 de abril de 2009, rolante de fs.1.346 a fs.1.347 (Tomo IV), en cuanto a la permanencia de personas detenidas al interior del regimiento Tucapel, proclamo que efectivamente vio prisioneros políticos al interior de este, específicamente, en una sala contigua a la guardia. Además, recuerda haber visto en esa calidad a Juan Antonio Chávez Rivas y a Herman Carrasco Paul.

En diligencia de careo con Herman Carrasco Paul, de fecha 19 de mayo de 2009 rolante de fs. 1.351 a fs.1.352 (tomo IV), ratifica su declaración y musita que esa fue la única oportunidad que lo vio, quien se veía muy deprimido, pero no tenía señales de haber sido torturado.

En declaración judicial de fecha 26 de julio de 2010, rolante de fs.1.533 a fs.1.534 (Tomo V), en lo concerniente respecto a su destinación al llegar al regimiento Tucapel, inquirió que en abril de 1973 paso a la compañía de plana mayor cuyo comandante era el capitán Nelson Ubilla Toledo; específicamente encuadrado en la primera sección bajo las órdenes de un sargento cuyo nombre no recuerda. A mediados de 1973 se hizo cargo de su sección el teniente Raimundo García Covarrubias.

A.35. Mario Hernán Arias Díaz

En diligencia de careo con Oscar Inostroza Segura, de fecha 26 de marzo de 2010, rolante de fs. 1.468 (Tomo V), aporta que en alguna oportunidad le correspondió entregar detenidos desde la guardia a conscriptos para que llevaran detenidos a la dependencia a que hace referencia el señor Inostroza.

En diligencia de careo con Libardo Schwartenski Rubio de fecha 26 de marzo de 2010, rolante de fs. 1469 (Tomo V), en lo pertinente, aunque no recuerda a la persona con la que se carea, pero si el nombre de Libardo Schwartenski como un conscripto de confianza del grupo de suboficiales y oficiales a cargo de los detenidos.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

En declaración judicial de fecha 6 de julio de 2013, rolante de fs. 1.817 a fs. 1.819 (Tomo VI), consultado dice que vio detenidos en una dependencia ubicada en la guardia del regimiento, los que no se registraban en ese lugar, es decir, no se dejaba constancia de su detención e ingreso a la unidad en el libro de novedades. Sin embargo, le parece que había otro grupo de detenidos que eran llevados hacia la compañía de plana mayor, que iban con su vista vendada. Tiene entendido que todos los oficiales concurrían al lugar donde trabajaba Ubilla y su grupo, porque cuando llegaban con detenidos debían informarle al capitán respecto de la razón por la cual estas personas estaban privadas de libertad. También debían darle cuenta al fiscal respecto de lo mismo. Anexa que el fiscal en 1973 era el mayor Jofré, quien se hizo asesorar por personal de la Corte de Apelaciones de Temuco y por un abogado de nombre Alfonso Podlech. A este abogado lo veía casi todos los días cuando llegaba al regimiento. Siempre lo vio de civil, salvo en los consejos de guerra, en que vistió uniforme. El Tribunal le lee las declaraciones extrajudicial y judicial prestadas por José Raúl Inzunza Reyes, de fs. 3.307 y fs. 3.310. El deponente señala: que supo de interrogatorios efectuados en la compañía de plana mayor y servicio, pero nunca participó de ellos. Que se comentaba eso sí, que los hermanos García Covarrubias participaban de estas actividades, sobre todo el menor de ellos que “medio loco”, sometiendo a los conscriptos a actividades de instrucción no programadas durante las noches.

En declaración extrajudicial de fecha 9 de mayo de 2019, rolante de fs. 3.187 a fs. 3.188 (Tomo IX), señala que el capitán Nelson Ubilla se hizo cargo de la inteligencia de la unidad militar, departamento segundo, además de encargarse de la compañía de plana mayor y servicios. Sobre la existencia de una sala ubicada entre la compañía de plana mayor y servicios y la compañía de morteros, donde después del día 11 de septiembre fue habilitada para efectuar interrogatorios a detenidos bajo aplicación de tortura, expresa que era manejada por el departamento segundo.

En declaración judicial de fecha 12 de julio de 2019, rolante de fs. 236 a fs. 242 (cuaderno secreto), en lo pertinente dice que los que llegaban detenidos pasaban directo al departamento segundo y de ahí para la cárcel. Preguntado por el circuito respecto de los detenidos y la fiscalía militar, si pasaban donde Nelson Ubilla, responde que: claro, que llegaban al departamento segundo, ahí se

imagina que los interrogaban, les conversarían cual era (...) eso lo desconoce y después llegaban a la guardia y después se irían. Los que no se iban los pasaban a la cárcel. El Tribunal le da a conocer que tiene bastantes antecedentes que indicarían que al interior del regimiento Tucapel de Temuco había varios lugares de detención, incluso había un lugar de tortura, donde había un catre, el gimnasio, se le pregunta que conocimiento tiene de eso. A lo que responde que: esa era una dependencia que había en la compañía de plana mayor y servicios, pero eso lo manejaba exclusivamente el departamento segundo. Preguntado en torno al departamento segundo, qué relación tiene Pedro Tichauer, el suboficial Romilio Lavín, el subteniente Raimundo García con esa unidad. Responde que lo desconoce. Que Tichauer estaba en administración, finanzas, este pertenecía a la compañía, pero a su llegada al cuartel, no recuerda si era soltero o casado, pero si era soltero llegaba a una pieza. Lavín era oficial de material de guerra, tenía su oficina. Se le pregunta si Raimundo García era la compañía de plana mayor. Refiere que le parece que de la segunda compañía cazadores.

A.36. Enrique Abzalón Castro Obreque

En declaración extrajudicial de fecha 6 de mayo de 2009, rolante de fs.1.355 a fs.1.357 (Tomo IV), sostuvo que para el año 1973 se encontraba inserto en la **compañía de plana mayor y servicios** del regimiento Tucapel de Temuco. Que particularmente estaba dentro de la sección de ingenieros y telecomunicaciones, siendo el oficial a cargo de su sección, el teniente Romilio Lavín Muñoz. Dice que recuerda haber visto a personas en calidad de detenidos al interior del regimiento. Da fe que en una noche en la que se encontraba de guardia en la puerta de ingreso principal al recinto, este oficial salió acompañado por al menos tres soldados, en un camión tres cuartos de la unidad, llevando consigo a un prisionero amarrado, vendado y amordazado, pero vivo al interior de ese vehículo, volviendo al rato después sin él.

En declaración extrajudicial de fecha 25 de enero de 2017, rolante de fs. 2.582 a fs. 2.583 (tomo VIII), replica su ingreso y encuadramiento dentro del regimiento Tucapel y en lo pertinente en la compañía de plana mayor y servicios, la que estaba al mando del capitán Nelson Ubilla Toledo, quien dejó ese cargo el día 11 de septiembre asumiendo el mando el teniente Raimundo García Covarrubias, quien subrogó al mencionado capitán. De los clases de su compañía, recuerda al sargento Luis Peña Andaur, el sargento Mario Arias Díaz, cabo

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

segundo Pablo Silva, junto con ellos también había otro oficial de apellido Lavín, quien era teniente.

A.37. José Sebastián Venegas Umanzor

En declaración judicial de fecha 7 de diciembre de 2009, rolante de fs. 1.448 a fs. 1.449 (Tomo V), proclama que sabe por comentarios que los detenidos eran torturados al interior de la sala de conferencias, que era una oficina ubicada entre la cuadra de plana mayor y la de morteros.

A.38. Juan Guillermo Bórquez Escobar

En declaración judicial de fecha 25 de junio de 2019, rolante de fs. 3.198 a fs. 3.201 (Tomo IX), que como ha señalado en otras ocasiones, efectivamente en el regimiento Tucapel de Temuco a contar del 11 de septiembre de 1973 existieron detenidos por motivos políticos. Lo anterior lo dice, porque en varias ocasiones junto a muchos soldados y oficiales de la compañía andina en conjunto con otros oficiales y conscriptos de otras compañías fueron a practicar allanamientos a distintos domicilios de personas que eran tildadas de comunistas. Que es efectivo que al interior de la compañía de plana mayor y servicios del regimiento Tucapel de Temuco existía una sala de torturas donde se interrogaba a los detenidos mediante la aplicación de corriente. Lo anterior lo dice porque en muchas ocasiones pasó por afuera de aquella, pudiendo escuchar los gritos de dolor de estas. A esta sala ingresaban oficiales y personal de investigaciones.

A.39. Héctor Omar Barra Reyes

En declaración extrajudicial de fecha 09 de enero de 2009, que rola de fs. 1.387 a fs. 1.389 (Tomo IV), manifiesta que para el año 1973, tenía 19 años y se encontraba realizando el servicio militar obligatorio en el regimiento de Infantería N°8 Tucapel de Temuco. Se encontraba inserto dentro de **la compañía de plana mayor y servicios**, la que se encontraba al mando del capitán Nelson Ubilla Toledo. Con relación a los detenidos y su permanencia al interior de la unidad, dice recordar que éstos eran llevados hasta una sala que se encontraba ubicada entre la compañía de plana mayor y la de morteros, desde ese lugar se escuchaban gritos y quejidos de dolor, claramente esta dependencia era usada para la tortura de detenidos.

En declaración judicial de fecha 20 de agosto de 2009, que rola de fs. 1.394 a fs. 1.395 (Tomo IV), ratifica su declaración extrajudicial y dice que le consta que el capitán Nelson Ubilla Toledo, los hermanos Covarrubias y algunas

personas de civil interrogaban detenidos, porque en más de una oportunidad los vio entrar a una pieza que estaba en un pabellón entre la compañía de morteros y de plana mayor. Que en ese lugar torturaban a los detenidos, pues se escuchaban múltiples alaridos de dolor. Precisa que había dos soldados que los oficiales antes indicados utilizaban para trasladar a los detenidos, de nombres Luis Valeria y Libardo Schwartenski. Estas dos personas se entendían directamente con el capitán Ubilla.

A.40. Héctor Benedicto Hernández Viscarra

En declaración judicial de fecha 16 de enero de 2013, rolante de fs. 1.746 a fs. 1.749 (Tomo V), alude que ingreso al servicio militar el 26 de junio de 1973 en el regimiento Tucapel de Temuco, encuadrado en la compañía de mortero, cuyo comandante era el capitán Manuel Fernández Carranza. En lo pertinente dice que vio detenidos en el regimiento Tucapel, los que estaban en la guardia de la unidad y en una dependencia que estaba junto a las caballerizas. Recuerda que el grupo de oficiales de inteligencia estaba conformado por el capitán Nelson Ubilla Toledo, de plana mayor y servicios y en cuya compañía funcionaba la oficina de inteligencia, más el capitán Manuel Vásquez Chahuán y los tenientes Alejandro Rubio Valladares, Pablo Gran López. Estos tres últimos, siempre andaban juntos. Que pudo ver en varias ocasiones a estos oficiales entrar a la sala contigua a las caballerizas donde estaban los detenidos. Recordando haber visto regresar a los detenidos desde ese lugar hacia la guardia en muy malas condiciones. Algunos señalaban que los habían colgado por horas de cabeza. Que en una oportunidad el capitán Vásquez Chahuán le ordenó mojar a los detenidos que estaban en la guardia utilizando una manguera para que no se les notaran las lesiones provocadas por las torturas. Que vio todas estas cosas porque le correspondió efectuar guardias internas.

A.41. Ernesto García Isla

En declaración extrajudicial de fecha 7 de mayo de 2009, rolante de fs.1.361 a fs.1.363 (Tomo IV), sustentó que perteneció a **la compañía plana mayor y servicios** que en ese entonces estaba a cargo del capitán Nelson Ubilla Toledo. Consultado en cuanto a la permanencia de detenidos al interior del regimiento, manifestó que vio detenidos en dicho recinto militar, dentro de los que pudo ver estaba su exprofesor en el liceo de Gorbea, cuyo nombre es Omar Venturelli Leonelli. También dentro de las personas que en fotografía se le

exhibieron, dice que recuerda haber visto a un hombre, delgado, alto, de barba; a quien tuvo que vendar y llevar ante la presencia de oficiales de la unidad. Agrega que los detenidos estaban a cargo de un grupo especializado denominado servicio de inteligencia regional, compuesto por los oficiales Nelson Ubilla Toledo, Manuel Espinoza Ponce, Jaime García Covarrubias, Raimundo García Covarrubias y los funcionarios de planta Orlando Moreno Vásquez, el suboficial de apellido Atala y el cabo primero Bahamondes, quienes interrogaban a los detenidos. Por lo general, era en una sala que estaba en el pabellón que albergaba a las compañías de plana mayor y servicios, y compañía morteros, a un costado de los baños de la compañía.

En declaración judicial de fecha 23 de junio de 2009, rolante de fs.1.381 a fs.1.382 (Tomo IV), ratifica declaración extrajudicial y proclamo que le parece que los interrogatorios se efectuaban en el pabellón de plana mayor. Esos interrogatorios eran efectuados por el capitán Ubilla Toledo quien era ayudado por Orlando Moreno Vásquez, Raúl Schonherr y un suboficial de apellido Atala.

A.42. Hernán Raúl Quiroz Barra

En declaración extrajudicial de fecha 18 de abril de 2012, rolante de fs. 1.692 a fs. 1.694 (Tomo V) dice que, una vez llegado el 11 de septiembre de 1973, y debido a los hechos que ocurrieron ese día fue destinado por el mando de su unidad a cumplir funciones al interior del Regimiento de Infantería N°8 Tucapel de Temuco. Que una vez que llegaron al regimiento Tucapel, se les puso bajo las órdenes de la Fiscalía Militar la cual estaba a cargo del mayor Luis Jofre Soto, siendo su ayudante el capitán Nelson Ubilla Toledo. Se le asignaron labores de toma de declaraciones a detenidos, efectuar citaciones, detenciones y allanamientos ordenados por la Fiscalía Militar. Que la dependencia que se le asignó correspondía a una oficina ubicada en la comandancia del regimiento. Señala que el fiscal militar ordenó que los detenidos que no colaboraran con ellos fueran entregados directamente al teniente de ejército Manuel Espinoza Ponce, quien se haría cargo de estas personas. En cuanto a los sargentos Schonherr y Moreno, los recuerda trabajando como dactilógrafos en una oficina que estaba en la misma dependencia donde ellos trabajaban, recordando haberlos visto en más de alguna oportunidad tomándoles declaraciones a detenidos. Y agrega que siempre se enteraban de fallecimiento de detenidos al interior del regimiento durante las mañanas y de acuerdo con la información que se les entregaba a las

personas, fallecían, producto de disparos efectuados por personal militar por intentar fugarse del regimiento en horas de la noche. Reiterando que mientras estuvieron agregados al regimiento siempre estuvieron bajo las órdenes de la Fiscalía Militar, recordando que ésta, estaba asesorada por el abogado Alfonso Podlech Michaud.

En declaración judicial de fecha 04 de junio de 2003, rolante de fs. 1.770 a fs. 1.771 (Tomo V), replica que al presentarse en la ayudantía del regimiento Tucapel fueron derivados al señor fiscal militar de ese entonces Luis Jofre Soto, quien les indico que debían cumplir las mismas funciones que cumplían en investigaciones, pero al mando de este. Las que consistían en detenciones, citaciones, allanamientos, búsqueda de armas, bombas. Todas las órdenes que cumplieron fueron mediante decreto de la fiscalía, tal como se hacía con los tribunales ordinarios de justicia. Manifiesta que a ellos se les asignó una oficina en el interior del regimiento Tucapel frente a la fiscalía misma. En ella tomaban declaraciones a los detenidos. Respecto a los detenidos “difíciles” eran entregados al teniente de ejército de apellido Espinoza, quien era comando, boina negra, alto de ojos claros, le decían “el gato Espinoza”. Que este oficial era el encargado del interrogatorio de esas personas difíciles, precisa que se trataban de detenidos que “se iban de negativa y no querían reconocer, habiéndoles encontrado explosivos o armamentos en su poder”. En cuanto a Alfonso Podlech Michaud, sabe que este asesoraba al fiscal militar Luis Jofre Soto, en la parte legal. Este era abogado y concurría en esa época al regimiento donde lo vio personalmente. Que a petición de Podlech, se llevó a la fiscalía gente profesional, esto es, funcionarios actuarios de los tribunales de justicia. Que también tiene conocimiento que este pidió asesoría a un Ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, para llevar una buena forma el funcionamiento de la Fiscalía Militar.

En declaración extrajudicial de fecha 08 de noviembre de 2002, rolante de fs. 1.772 (Tomo V) y que continua a fs. 1.774 (Tomo VI), insiste que las órdenes las impartía el señor fiscal directamente al grupo comisario Poblete, y posteriormente salían a darle cumplimiento. En estas labores le correspondió realizar diferentes investigaciones, citaciones de personas y también detenciones. Que cuando se detenía a una persona, era interrogada en los cuarteles de investigaciones y luego puesta a disposición de la fiscalía. En algunas oportunidades cuando se trataba de detenidos “difíciles” eran entregados al

teniente de ejército de apellido Espinoza, quien se hacía cargo de su interrogatorio. Que su desplazamiento dentro del regimiento estaba un poco restringido, ya que, para el ingreso pasaban por la guardia, luego contiguo a esta sala estaba una dependencia habilitada como calabozo. Por el frente de la guardia estaba la sala de la comandancia, en cuyo interior funcionaba la fiscalía. A un costado de la oficina de la fiscalía existía una oficina donde trabajaban los detectives. La oficina estaba equipada con un escritorio, dos máquinas de escribir y unas cuantas sillas.

En declaración judicial de fecha 24 de junio de 2013, rolante de fs. 1.777 a fs. 1.782 (Tomo VI), esboza que el jefe de inteligencia era el capitán Nelson Ubilla Toledo, pero desconoce que otros militares componían ese departamento. Que el grupo de detectives que fue comisionado para trabajar las órdenes emanadas de la Fiscalía Militar estaba a cargo del comisario Aquiles Poblete Müller. Que cuando llegaron al regimiento Tucapel había más de ochocientos detenidos en el patio de la unidad, los que permanecieron por lo menos cinco días allí, ya que, ellos debían tomarles declaraciones y anotar sus datos. Le parece que los detenidos fueron mantenidos en un gimnasio que había al fondo del patio de la unidad o en las caballerizas, no recuerda exactamente. Sin embargo, ellos siempre permanecían tomando declaraciones en el patio. En esa tarea fueron ayudados por el suboficial Schonherr de ejército. El Tribunal le pregunta si le correspondió participar en interrogatorios de detenidos en el regimiento Tucapel. El declarante responde: “Sí me correspondió hacerlo, pero siempre en la oficina que teníamos asignada en el recinto de la comandancia”. Respecto de los dichos expresados en su declaración extrajudicial sobre los detenidos difíciles y que eran entregados al teniente Espinoza, esto era una orden expresa que el mayor Jofre le dio a su jefe el comisario Poblete. En este sentido, muchas veces llegaron personas detenidas por patrullas de carabineros, militares o de la fuerza aérea, que venían catalogadas como extremistas, a quienes interrogaban en “nuestra oficina”. Que estas personas eran derivadas al teniente Espinoza por orden del mayor Jofre. Para esto ellos llamaban a la guardia para que un soldado viniera a buscar al detenido, el que era llevado al calabozo de esa dependencia. Desde ese lugar el detenido era sacado por algún conscripto, más tarde para ser llevado a la presencia del teniente Espinoza. Respecto a las personas que resultaban muertas tras intentar fugarse o quitarles el arma a los centinelas, puede señalar que este

tipo de noticias ellos las recibían cuando llegaban en la mañana a trabajar al regimiento.

En diligencia de careo con Daniel Arnoldo Aguirre Mora, de fecha 05 de julio de 2013, rolante de fs. 1.811 a fs. 1.812 (Tomo VI), ratifica declaraciones y que por otra parte él sólo atendió al señor Podlech en el cuartel de investigaciones, en una oportunidad en que éste se presentó en la guardia y solicitó subir al segundo piso a la oficina de informaciones, donde trabajaba el detective Ortiz.

En declaración judicial de fecha 27 de octubre de 2021, rolante de fs. 3.680 a fs. 3.683 (Tomo XI), en lo pertinente el Tribunal le consulta quién le ordenaba interrogar a los detenidos. El deponente indica: que los militares entregaban detenidos en la oficina que ellos tenían y ordenados por el señor Poblete, interrogaban a los detenidos. Luego los mismos militares retiraban a los detenidos desde la oficina. Que la oficina donde estaban es la que se vio en la inspección ocular. El suscrito trabajaba con San Juan y Morales, en otra oficina estaba Poblete y Ortiz, pero estos últimos se fueron a trabajar al interior del regimiento con el grupo que tenía Ubilla. Que a ellos les llegaba un detenido con un temario, estas preguntas tenían que ver con asuntos políticos y con el correr del tiempo se ha dado cuenta que la información que les entregaban, lo que decía de los detenidos, era falso. El Tribunal le da a conocer la identidad de las víctimas de un hecho y lee lo pertinente de las declaraciones del testigo M.C.S, rolante de fs. 2.309, de fs. 2.638; de fs. 3.109 y la de fecha 16 de agosto de 2021. El deponente indica: que no solo ellos estaban ahí para interrogar. El capitán Ubilla solicitó a investigaciones más personal. Cuando empezaron a morir detenidos a cargo del grupo del capitán Ubilla, el señor Ortiz se retiró y les dijo “no se metan por ningún motivo a trabajar con ese grupo, porque a los militares se les están muriendo los detenidos”. Sobre las muertes de personas al interior del regimiento dice que debió enterarse la oficialidad del regimiento, porque es un hecho grave. Que es posible, pero no le consta lo que dice el testigo M.C.S. sobre las torturas que efectuaban los militares y que se le murieron detenidos, pero que ellos los detectives no estaban ahí, por lo menos San Juan, Morales y el deponente, quienes trabajaron en la comandancia. Insiste que no solo se dedicaban a los interrogatorios por motivos políticos. Respecto a muertes por patrullas militares,

estos hechos eran investigados por el grupo donde estaban los actuarios Toloza y Gonzalez.

A.43. Aquiles Alfonso Poblete Müller

En declaración judicial de fecha 29 de diciembre de 2008, rolante de fs. 1.320 a fs. 1.322 (Tomo IV), atestigua que fue destinado al regimiento Tucapel de Temuco, desde fines de septiembre de 1973 hasta los primeros días de enero de 1974. En el regimiento fueron recibidos por el comandante de la unidad quien le presentó al capitán Ubilla, informándoles que a partir de ese momento trabajarían bajo sus órdenes. Los detenidos no prestaban un interrogatorio formal en el sentido que firmaran alguna declaración, sino que ellos obtenían la información y le informaban de los avances de los interrogatorios al capitán Ubilla, quien muchas veces presenciaba esas entrevistas. Hace presente que el gran responsable de todo y quien decidía el destino de los detenidos era el abogado Alfonso Podlech, quien estaba a cargo de la Fiscalía Militar. Toda la información se la entregaban a Ubilla y este a su vez, entregaba los antecedentes a la fiscalía militar. En esa repartición quien decidía el destino de los detenidos era Alfonso Podlech, que según supo, era el fiscal.

En declaración extrajudicial de fecha 11 de julio de 2012, rolante de fs. 1.697 a fs. 1.698 (Tomo V), soslaya que es efectivo que estaba a cargo del grupo de detectives agregados al regimiento Tucapel de Temuco. Cumplió funciones ordenadas por un capitán de ejército de apellido Ubilla, quien dispuso que se hiciera cargo de los interrogatorios de las personas que llegaban en calidad de detenidas al regimiento Tucapel. Para efectuar dichas labores se situaron en el gimnasio del regimiento, donde personal del ejército les entregaba a los detenidos, quienes ya venían en malas condiciones físicas y procedían a interrogarlos bajo la aplicación de corriente eléctrica producida por un dinamo, también recuerda que, con un cochayuyo mojado, lo pasaban por el cuerpo de los detenidos simulando que se trataba de una culebra. Recordando que al final del periodo ya se encontraba aburrido de las situaciones que ocurrían al interior del regimiento, sobre todo lo que les comentaban algunos militares referentes a los detenidos que interrogaban, ya que, en más de una oportunidad se le comentó que la mayoría de estas personas se les daba muerte.

En declaración judicial de fecha 30 de julio de 2012, rolante de fs. 1.703 a fs. 1.704 (Tomo V), ratifica declaraciones y dice que sabía de las decisiones que

tomaba el abogado Alfonso Podlech con respecto de los detenidos, porque los propios soldados que los llevaban y traían les decían que era esta persona quien determinaba sus destinos. Recuerda haber interrogado a un joven que decía haber pertenecido al "GAP". Esta persona cuando se la entregaron estaba muy "frisquedada" es decir, los militares de inteligencia lo habían torturado bastante. Un soldado, cuya identidad ignora le dijo que a este joven "se lo había llevado el Señor". Que había otro oficial que estaba al tanto de lo que pasaba con los detenidos, el teniente Rubio. Sin embargo, no le cabe duda de que todos los oficiales sabían sobre esto. Anexa que le correspondió interrogar detenidos en una sala ubicada en una cuadra del regimiento, en donde les aplicaban electricidad a estas personas.

En declaración judicial de fecha 3 de julio de 2013, rolante de fs.1.805 (Tomo VI), consultado destacó que el abogado Alfonso Podlech era quien determinaba el destino de los detenidos.

En declaración judicial de fecha 26 de julio de 2006, rolante de fs. 3.650 a fs. 3.652 (Tomo X), replica su desempeño funcionario para septiembre de 1973, reitera que el gran responsable de todo era el abogado Alfonso Podlech, quien estaba a cargo de la fiscalía militar.

En declaración judicial de fecha 26 de julio de 2006, rolante de fs. 3.653 a fs. 3.654 (Tomo X), ratifica su declaración y consultado dice que él sabía de las decisiones que tomaba el abogado Alfonso Podlech con respecto de los detenidos, porque los propios soldados que los llevaban y traían, les decían que era esta persona quien determinaba sus destinos. Recordando que había otro oficial que estaba al tanto de lo que pasaba con los detenidos, que era el teniente Rubio. Sin embargo, no le cabe duda de que todos los oficiales sabían sobre esto. Insiste que le correspondió interrogar detenidos en una sala ubicada en una cuadra del regimiento, en donde les aplicaban electricidad a estas personas. Las terminales eléctricas se las ponían en cualquier parte del cuerpo.

A.44. José Heriberto Mansilla Gatica

En declaración judicial de fecha 30 de agosto de 2012, rolante de fs. 1.717 a fs. 1.719 (Tomo V), adiciona que después del 11 de septiembre de 1973, se desempeñaba en la sección de administración de fondos del regimiento Tucapel de Temuco, como dactilógrafo, con el grado de sargento primero. A cargo de esa sección estaba el teniente Tichauer Salcedo. Las dependencias de su sección se

ubicaban en la comandancia del regimiento, que posteriormente fueron ocupadas por el servicio de inteligencia. El trabajo cotidiano de la fiscalía, como interrogar, tomar decisiones con respecto de los detenidos era de Alfonso Podlech. Que se intercedía ante Alfonso Podlech, porque éste decidía la suerte de los detenidos que una vez llegaron en camiones. El comandante Jofré le dijo personalmente, cuando estaba de guardia, que las decisiones respecto a un grupo de detenidos que llegaron, entre los que había dos mujeres, debía tomarla Alfonso Podlech. Por esa razón intercedió ante Podlech por las mujeres que conocía. Que la oficina de plana mayor era ocupada por la Fiscalía Militar. En lo formal el comandante Jofre era el Fiscal Militar, pero todas las decisiones de la Fiscalía Militar las tomaba Podlech. Insiste que Alfonso Podlech tenía el poder para decidir lo que pasaba con los detenidos. Por esa razón se intercedía ante éste por ellos. Comenta que Alfonso Podlech le gustaba el futbol, por esa razón en una oportunidad intercedió ante este por Rolando Núñez, quien en una oportunidad “se tomó, junto a otras personas uno de los fundos de don Alfonso Podlech”. Cuando esta persona se presentó ante la fiscalía, Alfonso le dijo que le agradeciera al deponente por haber intercedido por él, porque si no lo hubiese hecho, “hace rato lo hubiera tenido apuntado”. Agrega que había una sala de torturas en la primera compañía de cazadores. En una oportunidad andaba buscando a su jefe Tichauer y vio por el “ojo de la llave como le aplicaban electricidad a una mujer en sus senos”. Que Tichauer y los oficiales García Covarrubias tenían que ver con las torturas y los detenidos.

En declaración judicial de fecha 12 de septiembre de 2013, rolante de fs. 1.844 (Tomo VI), ratifica declaración judicial y advierte que estuvo trabajando una tarde con Alfonso Podlech Michaud. Éste tomada declaraciones y el deponente era el dactilógrafo. Que esta situación solo fue por una tarde y fue por orden del mayor Jofré.

En diligencia de careo con Oscar Alfonso Podlech Michaud, de fecha 12 de septiembre de 2013, rolante de fs. 1.846 a fs. 1.847 (Tomo VI), ratifica declaraciones y adiciona que en la guardia de la unidad se encontró con la señora Meza Moncada en calidad de detenida. En esa oportunidad fue a conversar con don Alfonso, quien le dijo que se la llevara. Que, por orden del mayor Jofré, tuvo que servir como dactilógrafo a Alfonso Podlech mientras interrogaba a la señora Meza Moncada. En cuanto a las funciones de Alfonso Podlech era tomar

declaraciones a los detenidos. Replicando haber intercedido ante Alfonso Podlech por un deportista amigo, recordando muy bien lo relatado porque fue lo único que efectuó con Alfonso Podlech en el regimiento Tucapel de Temuco.

En declaración judicial de fecha 20 de diciembre de 2006, rolante de fs. 3.806 bis a fs. 3.808 (Tomo XI), alude que para septiembre de 1973 prestaba funciones en el regimiento Tucapel de Temuco, trabajando en administración de fondos como dactilógrafo. Que es posible que haya interrogado a esta persona, porque estuvo, al parecer una tarde cooperándole a Alfonso Podlech en la toma de declaraciones. Lo anterior, por órdenes. Sin embargo, solo tomó declaraciones a dos personas, pero quien interrogaba era Alfonso Podlech, a quien ese mismo día le pidió que ayudara a dos civiles que el deponente conocía y que estaban detenidas. Las declaraciones las tomo en la oficina del jefe de la plana mayor. Que a la única persona que recuerda haber visto “muy maltratada producto de las torturas” fue a Rubén Morales Quijada, apodado “milico”, quien era su amigo, quien estaba detenido en el calabozo de la sala de guardia del regimiento. Refiere que el capitán Ubilla y su grupo tenían habilitada una cuadra en la primera compañía para interrogar. Lo que sí sabe es que los militares disponían de los detenidos a “su antojo”.

En declaración judicial de fecha 30 de agosto de 2012, rolante de fs. 3.809 a fs. 3.810 (Tomo XI), ratifica declaraciones y dice que el trabajo cotidiano de la fiscalía, como interrogar, tomar decisiones con respecto de los detenidos era de Alfonso Podlech. Comunica que se intercedía ante Alfonso Podlech, porque este decidía la suerte de los detenidos. Que el comandante Jofré le dijo personalmente cuando estaba de guardia, que las decisiones respecto a un grupo de detenidos que llegaron entre los que había mujeres, debía tomarlas Alfonso Podlech. Por esa razón intercedió ante Podlech por las mujeres que conocía. Replica que la oficina de plana mayor era ocupada por la Fiscalía Militar. Que en lo formal el comandante Jofre era el fiscal militar, pero todas las decisiones de la Fiscalía Militar las tomaba Podlech. Aduce que Alfonso Podlech tenía el poder de decidir lo que pasaba con los detenidos. Por esa razón se intercedía ante él por ellos. En una oportunidad andaba buscando a su “jefe Tichauer” y vio por el ojo de la llave como le aplicaban electricidad a una mujer en sus senos. Que Tichauer y los oficiales García Covarrubias tenían que ver con las torturas y los detenidos.

En declaración judicial de fecha 12 de septiembre de 2013, rolante de fs. 3.811 (Tomo XI), expone que efectivamente estuvo por una tarde trabajando con Alfonso Podlech Michaud. Este tomaba declaraciones y el suscrito era el dactilógrafo. Situación que fue solo por una tarde y fue por orden del mayor Jofré. Replica haber intercedido por una profesora y la asistente social, ocasión donde conversó con el mayor Jofré, quien lo mandó a hablar con Alfonso Podlech, la decisión tomada por éste fue dejar en libertad a las mujeres y citarlas para el día siguiente. Interrogado dice que el mayor Jofré lo mandó a hablar con Alfonso Podlech.

En declaración judicial de fecha 20 de diciembre de 2006, rolante de fs. 3.813 a fs. 3.814 (Tomo XI), afirma que jamás trabajó tomando declaraciones en la Fiscalía Militar. En lo pertinente señala que es posible que haya interrogado a esta persona (refiriendo a María Meza Moncada), porque estuvo al parecer una tarde cooperándole a Alfonso Podlech en la toma de declaraciones. Sin embargo, solo tomó declaración a estas dos personas, pero quien interrogaba era Alfonso Podlech, a quien ese mismo día le pidió que ayudara a dos civiles que el deponente conocía y que estaban detenidas. A la única persona que recuerda haber visto muy maltratada producto de las torturas, fue a Rubén Morales Quijada, quien era su amigo, relatando donde lo vio y las condiciones en que se encontraba. Recuerda que entre los detenidos venían una profesora con su hijo y una asistente social por quienes intercedió ante Alfonso Podlech para que quedasen en libertad. Que el capitán Ubilla y su grupo tenían habilitada una cuadra en la primera compañía para interrogar personas. Recordando que en una oportunidad se acercó a ese lugar para conversar con el teniente Tichauer, quien estaba presente en los interrogatorios.

En declaración judicial de fecha 12 de septiembre de 2013, rolante de fs. 3.817 (Tomo XI), ratifica declaraciones judiciales insistiendo que efectivamente estuvo una tarde trabajando con Alfonso Podlech Michaud. Este tomaba declaraciones y el deponente era el dactilógrafo, todo por orden del mayor "Cofré". Refiere que intercedido por las personas que mencionan en sus declaraciones, que conversó con el mayor "Cofré", quien lo mandó a hablar con Alfonso Podlech. La decisión la tomaba éste, y fue dejar en libertad a esas mujeres y citarlas para el día siguiente.

En declaración judicial de fecha 10 de mayo de 2017, rolante de fs. 3.819 a fs. 3.819 vuelta (Tomo XI), ratifica declaración y el Tribunal le lee las preguntas acompañadas en otros autos por la defensa de Pedro Guillermo Tichauer Salcedo. Y dice que lo conoce porque era el oficial de intendencia para la época de 1973. Que Pedro Tichauer era el contador del regimiento Tucapel. Respecto a los hechos que menciona en la relación a la sala de tortura, agrega que en esa oportunidad había una llamada urgente desde la jefatura de Valdivia para su jefe, Tichauer. Entonces salió a buscarlo para avisarle de la llamada, dirigiéndose a la primera compañía y le preguntó al soldado que estaba ahí, si es que había visto al teniente Tichauer, respondiéndole afirmativamente, pero que el deponente no podía pasar. Le dijo al soldado que al teniente Tichauer lo estaban llamando de Valdivia, que era urgente. En eso se dirigió a la sala y escuchó un lamento de una mujer, miró por el ojo de la llave, vio bultos, medios de espaldas el cuerpo de un hombre, pero no la cara, sin embargo, reconoció la voz de su jefe, Tichauer, que decía “perrita, es mejor que hables”. Que el mismo soldado que estaba en la entrada le dijo que el teniente Tichauer estaba en la sala que mencionó. Replica que era Pedro Tichauer, que ya lo ha declarado. Que, en esa oportunidad, cuando escucho lo que relató, Tichauer no andaba sacando firma, ya que no era la oficina del capitán Ubilla. Que la oficina donde fue a buscar a Tichauer estaba ubicada en la primera compañía, al final de esa dependencia.

A.45. Miguel Arcángel Calderón Sepúlveda

En declaraciones extrajudiciales de fecha 19 de julio de 2015, rolante de fs. 2.160 a fs. 2.161 (Tomo VI), señala que en 1973 estaba encuadrado en la sección de telecomunicaciones de la **compañía de plana mayor y servicios** del regimiento Tucapel, a cargo del capitán Nelson Ubilla Toledo, siendo su instructor el sargento Arias. Que llegado el 11 de septiembre de 1973, al regimiento comenzaron a llegar personas detenidas, las cuales quedaban alojadas en el gimnasio. En esa época fue elegido para ser estafeta de la Fiscalía Militar. Sus funciones eran la de repartir la correspondencia de la fiscalía, y, además, debía trasladar detenidos desde la cárcel pública al regimiento para presentarlos en los consejos de guerra que se llevaban a cabo en el gimnasio los miércoles y viernes.

En declaración judicial de fecha 29 de julio de 2015, rolante de fs. 2.169 a fs. 2.170 (Tomo VII), ratifica su declaración y con relación a la sala de interrogatorios que había en la compañía de plana mayor señala que en ese lugar

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

existía una sala de interrogatorio y tortura de detenidos. Pasado un tiempo, y ante la escasez de personal, le tocó ir buscar detenidos a la cárcel y llevarlos al regimiento para ser interrogados. Los detenidos no eran interrogados en la Fiscalía, sino que por orden del Fiscal Militar Podlech debía llevarlos hasta el regimiento, donde eran ingresados a la sala de interrogatorios a la que hizo referencia anteriormente. Él se quedaba afuera de la sala esperando a que se desocuparan. Las personas interrogadas eran torturadas. Escuchó gritos y llantos que provenían desde el interior de la sala de interrogatorios. Las personas eran sometidas a la aplicación de electricidad. Cuando salían de ese lugar debía esperar a que se recuperaran. Pero si escuchó comentarios que se hicieron, no recuerda por quiénes, en que se decía que habían ejecutado personas en el puente Allipén, o que las habrían ido a arrojar en ese lugar.

A.46. Pedro Misael Elgueta Muñoz

En declaración extrajudicial de fecha 15 de enero de 2013, rolante de fs. 1.750 a fs. 1.752 (Tomo V), que para septiembre de 1973 se encontraba efectuando su servicio militar en el regimiento de Infantería N°8 Tucapel de Temuco, encasillado en la sección de plana mayor de la compañía mortero, al mando del capitán Manuel Fernández Carranza, le correspondió cumplir servicios de guardia, siendo testigo en muchas ocasiones del ingreso durante el día de personas detenidas a la unidad militar, debiendo hacer mención que en horas de la noche y de la madrugada, ingresaban de a dos a tres personas detenidas, con sus rostros cubiertos, a la sala de descanso por unos minutos y luego eran subidos a camiones tres cuartos, los cuales eran trasladados al sector de la isla, logrando escuchar a los minutos posteriores el sonido de disparos, presumiendo de inmediato que estas personas habían sido ejecutadas. Que estas "labores" de llevar a cabo las ejecuciones de las personas detenidas en la isla, según como pudo apreciar durante el desarrollo de su servicio, eran bajo las órdenes del oficial de ronda, recordando al capitán Nelson Ubilla de manera frecuente en estos procedimientos, debiendo agregar que quienes podrían haber cooperado o participado en estas funciones, personal de las compañías andina, plana mayor y cazadores. Que otra situación que logró observar cuando fue designado como policía militar, correspondiéndole en el casino, desempeñar labores de seguridad, mientras se realizaban los consejos de guerra, instancias donde el abogado Alfonso Podlech y el comandante del regimiento Pablo Iturriaga Marchesse,

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

sentenciaban las condenas de los detenidos en presencia de éstos, escuchando siempre la pena de muerte o fusilamiento. Que también pudo observar cuando trasladaban a los detenidos a la sala de instrucción de la compañía de morteros, lugar donde se escuchaba los desesperados gritos de estas personas que eran interrogadas.

En declaración judicial de fecha 17 de enero de 2013, rolante de fs. 1.754 a fs. 1.756 (Tomo V), ratifica su declaración extrajudicial agregando que vio de detenidos en el regimiento Tucapel, los que estaban en la guardia de la unidad y en la sala de instrucción de la compañía de morteros. Que en ese lugar los detenidos eran torturados. Pudo escuchar muchas veces los gritos de dolor que salían de esa dependencia. Allí eran sometidos a apremios tanto hombres como mujeres. Que los oficiales a cargo de los detenidos eran Nelson Ubilla Toledo, Jaime y Raimundo García Covarrubias, Manuel Espinoza Ponce, Manuel Vásquez Chahuán y Alejandro Rubio Valladares. Que estos oficiales eran ayudados por los sargentos y clases de la compañía de plana mayor y servicios, más algunos soldados conscriptos entre los que recuerda a Etchepare y Schwarstensi. Que mientras estuvo de guardia en cuatro o cinco oportunidades pudo ver que durante la noche llegaban hacia la sala de descanso de su compañía dos o tres detenidos vendados. Estos eran traídos se imagina desde la cárcel o, de otra parte. Quedaban un rato detenidos en ese lugar y más tarde eran sacados, generalmente por Nelson Ubilla Toledo y los oficiales de la plana mayor y servicios y sus ayudantes, para ser subidos a un camión y se los llevaban a la isla Cautín. Al poco rato se escuchaban disparos provenientes de ese lugar. Respecto a Alfonso Podlech Michaud dice que lo recuerda bien porque como dijo en su declaración extrajudicial lo vio en los consejos de guerra. Esta persona a su parecer leía la sentencia que casi siempre era de fusilamiento.

A.47. Rigoberto Antonio Gutiérrez Ancamilla

En declaraciones extrajudiciales de fecha 19 de julio de 2015, rolante de fs. 2.158 a fs. 2.159 (Tomo VI), señala que ingresó a cumplir su servicio militar obligatorio durante el mes de enero del año 1973 al Regimiento de Infantería N° 8 Tucapel de Temuco, quedando encuadrado en la segunda sección de la **compañía plana mayor y servicios**, la que estaba a cargo del capitán Nelson Ubilla Toledo, siendo su instructor el sargento Silva. Conforme su recuerdo, llegado el 11 de septiembre de 1973, al regimiento comenzaron a llegar personas

detenidas, las cuales quedaban en la guardia, gimnasio y el rancho, recordando que en su compañía se habilitó una sala que ocupaban los conscriptos para efectuar interrogatorios bajo la aplicación de tortura, recordando que en más de una oportunidad vio ingresar a esa sala funcionarios de planta del regimiento. En lo personal, recuerda haber ido a dejar detenidos a esa sala, pero llegaba hasta la entrada, ya que personal de planta se hacía cargo de esas personas. Por lo que puede recordar en dicha sala había un catre y un par de sillas.

En declaración judicial de fecha 29 de julio de 2015, rolante de fs. 2.168 (Tomo VII), ratifica su declaración y en cuanto a la sala de interrogatorios que había en la compañía de plana mayor, afirma que en ese lugar existía una sala de interrogatorio y tortura de detenidos. Eso lo sabe porque le tocó ir a dejar detenidos a ese lugar que se encontraban en la guardia de la unidad. Luego, recibía la orden de retirarse inmediatamente. En ese lugar trabajaba el capitán Nelson Ubilla Toledo con personal de planta y detectives. Las personas interrogadas en ese lugar eran torturadas.

A.48. Héctor Florentino Navarrete Jara

En declaración judicial de fecha 18 de enero de 2013, rolante de fs. 1.757 a fs. 1.759 (Tomo V), expone que vio detenidos al interior del regimiento Tucapel. Que estos se encontraban en una dependencia ubicada entre el edificio de la compañía de plana mayor y la de morteros. Que en alguna oportunidad le correspondió ir a darles el rancho a unos detenidos que habían traído en helicóptero durante la noche y que venían según supo del sur. Que el camión que le correspondió limpiar al día siguiente estaba lleno de restos de carne humana y sesos.

A.49. Juan Alfonso Campos Valdebenito

En declaración extrajudicial de fecha 08 de agosto de 2017, que rola de fs. 2.752 a fs. 2.753 (Tomo VIII), indica que efectuó el servicio militar obligatorio en el regimiento de Infantería N° 8 Tucapel de Temuco, se desempeñó como soldado conscripto en la **compañía de plana mayor y servicios**, y en lo oportuno que es efectiva la existencia de una sala donde se interrogaban a los detenidos del regimiento, esta estaba entre las compañías de morteros y la de plana mayor. Siempre los detenidos se los entregaban vendados, se los entregaba a Ubilla en la sala de la compañía de plana mayor y posteriormente se los entregaban

nuevamente para regresarlos al gimnasio y algunas veces debía llevarlos a la guardia donde en un par de ocasiones les dieron la libertad.

A.50. Jorge Luis Godoy Valdebenito

En declaración extrajudicial de fecha 25 de agosto de 2009, que rola de fs. 1.412 a fs. 1.413 (Tomo IV), dice que, para el mes de septiembre de 1973, tenía 18 años y se encontraba efectuando el servicio militar obligatorio en el regimiento Nº 8 de Infantería Tucapel, inserto dentro de la **compañía de plana mayor y servicios**, cuyo comandante era el capitán Nelson Ubilla Toledo. El 11 de septiembre de 1973, incluso recuerda el hecho de que el hermano de un conscripto de su compañía cuya identidad no recuerda, mientras permanecía prisionero en el patio de la unidad juntó a otros detenidos, de rodillas y con sus brazos extendidos los cuales debían sostener ladrillos, fue brutalmente golpeado por otro conscripto de la compañía de nombre José Chávez Etchepare, quien estaba designado por el mando de la unidad para vendar a los detenidos, marearlos mediante la técnicas de dar vueltas sobre su eje para posteriormente pasarlos a la pieza que se encontraba dentro de la compañía de plana mayor, la cual contaba con un catre metálico y dos dínamos eléctricos. Que conoció el funcionamiento de estos aparatos, cuando por reírse el sargento Mario Hernán Arias Díaz lo puso sobre este catre y le aplicó golpes de corriente en su cuerpo, al menos por unos diez minutos, lo cual le causó mucho dolor, vómitos y diarrea, lo que hasta el día de hoy no ha podido olvidar.

En declaración judicial de fecha 25 de septiembre de 2009, que rola de fs. 1.423 a fs. 1.425 (Tomo V), ratifica su declaración extrajudicial y en lo pertinente refiriendo a Jaime García Covarrubias indica que el teniente García mandaba más que el capitán Ubilla en cuanto al tratamiento de detenidos, destacándose por su crueldad para con ellos. Su hermano, el subteniente Raimundo García, en un principio fue una persona muy amable y no se quiso meter con los detenidos, pero después fue influenciado por su hermano y cambió su conducta. Posteriormente, ambos participaban en los interrogatorios de los detenidos en la dependencia de la banda del regimiento.

En diligencia de careo con Jaime García Covarrubias, de fecha 21 de septiembre de 2010, que rola de fs. 1.608 (Tomo V), ratifica sus dichos y manifiesta que siente mucho temor de esta persona, por lo que no desea seguir

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

declarando, ya que está seguro de que su vida correría peligro si agrega algo más. “Este señor es muy peligroso”.

En declaración extrajudicial de fecha 17 de octubre de 2018, que rola de fs. 232 a fs. 235 (Cuaderno secreto), ratifica su declaración extrajudicial y refiere en cuanto a los detenidos que eran interrogados en una sala ubicada dentro de las dependencias de la compañía de plana mayor y servicios. En esta dependencia existía dos catres y cuatro máquinas generadoras de corriente dispuestas para ser accionadas en contra de los detenidos por motivos políticos que eran trasladados por el grupo señalado precedentemente hasta esta verdadera sala de tortura; lugar donde también fue torturado en una oportunidad por el sargento Arias. Dice que los detenidos por motivos políticos que llegaban a la Fiscalía Militar se imaginan que posteriormente eran trasladados a la sala de torturas. Lo anterior, según su parecer, para sacarles alguna información porque todos decían que eran inocentes. Que siempre veía cuando entraban los detenidos a esta sala de torturas ubicada en la compañía de plana mayor y servicios. Que estas personas se encontraban vendadas y amarradas. Veía que Chávez Etchepare concurría constantemente a la sala de bandas a buscar detenidos, para luego ingresarlos a esta sala y proceder a torturarlos. Lo anterior lo dice, porque lo veía. Añade que nunca estuvo adentro de esa sala en el momento en que estaba siendo torturada una persona, pero si sentía sus gritos de dolor porque se encontraba afuera. Le parece que a esta sala hacían ingresar a dos detenidos a la vez y afuera de ella quedaban los otros. Todos siempre con la vista vendada.

A.51. Víctor Manuel Terán Vásquez

En declaración extrajudicial de fecha 07 de noviembre de 2012, rolante de fs. 1.737 a fs. 1.739 (Tomo V), arguyo que ingreso hacer su servicio militar en abril de 1973 en el regimiento Tucapel de Temuco, quedando encuadrado en la **compañía de plana mayor y servicio**, al mando del capitán Nelson Ubilla Toledo. Adiciona que el comandante de la compañía de plana mayor y servicios también estaba a cargo de la sección de inteligencia militar. Que ocurrido el golpe militar era frecuente que diariamente llegaran personas detenidas, las cuales eran dejadas en el gimnasio del regimiento. Señala que había dos detectives que se encargaban de interrogar bajo tortura a los detenidos al interior del gimnasio, recordando que uno de estos detectives era de apellido Morales. Según su recuerda, ellos interrogaban a las personas bajo la aplicación de corriente eléctrica

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

la cual era generada por un dinamo manual. Afirma dar fe de esta situación, porque vio la maquina con la cual “trabajaban” y muchas veces le correspondió ir a limpiar al gimnasio las orinas y excrementos de las personas torturadas. Que otra dependencia donde se torturaba, correspondía a una sala que en principio ocupaban los conscriptos para ver televisión y realizaban reuniones, la cual se ubicaba en la cuadra de la compañía de plana mayor y servicios y que fue habilitada como sala de interrogatorios, donde constantemente eran llevados los detenidos para ser torturados por personal militar en base a golpes y aplicación de corriente eléctrica. Según recuerda cuando se ingresaban detenidos a esa sala, se les ordenaba que hicieran abandono de esa cuadra y siempre vio ingresar a dicho lugar al capitán Nelson Ubilla Toledo, a los tenientes Jaime y Raimundo García Covarrubias y Manuel Espinoza Ponce. Agrega que estos oficiales eran los encargados de interrogar a los detenidos en dicho lugar y también de torturar, ya que “vez que los veía ingresar con detenidos se comenzaban a escuchar los gritos de dolor de las personas desde esa sala”.

En declaración judicial de fecha 02 de octubre de 2013, rolante de fs. 1.856 a fs. 1.857 (Tomo VI), ratifica declaración extrajudicial y suma que el teniente Alejandro Rubio Balladares era de la compañía de cazadores y amigo del capitán Ubilla. Estos dos oficiales, más los tenientes Jaime y Raimundo García Covarrubias y Manuel Espinoza Ponce formaban un grupo de oficiales que tenían que ver con los detenidos. Los vio en varias oportunidades entrar a la sala de plana mayor cuando se torturaba detenidos. Que el gimnasio al que hace referencia en sus dichos estaba ubicado a un costado del rancho de conscriptos. Era un gimnasio viejo que estaba en desuso, distinto al gimnasio grande. En ese lugar se torturaba a los detenidos. Recuerda que traían detenidos de la cárcel, los que eran interrogados por Alfonso Podlech y Adrián González.

En diligencia de careo con Jaime García Covarrubias de fecha 16 de abril de 2015, rolante de fs. 3.478 a fs. 3.479 (Tomo X), insiste en que vio entrar con detenidos a la sala de tortura al señor García, a su hermano y otros oficiales, tras lo cual comenzaban a sentirse gritos de dolor. Aunque no lo vio personalmente, le es posible deducir que a lo menos presenció estas sesiones.

A.52. Héctor Orlando Saavedra Peña

En declaración extrajudicial de fecha 23 de agosto de 2017, rolante de fs. 2.758 a fs. 2.759 (Tomo VIII), escruta que efectuó su servicio militar obligatorio en

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

el regimiento de Infantería N°8 Tucapel de Temuco, integró la **compañía de plana mayor y servicios** la que estaba a cargo del capitán Ubilla, recordando a otros oficiales como los tenientes Lavín y Espinoza, los cabos Silva y Krause, los sargentos Arias y Peña Andaur. Rememorando a otros soldados como Chávez Etchepare, García y Carrillo por la cercanía que tenían con el personal de planta. Sobre los detenidos que hubo en el regimiento señala que no tuvo contacto con ellos, a pesar de que se sabía que había personas en esa condición en el gimnasio de la unidad militar. En relación con las dependencias de su compañía, expresa que es efectivo que existía una sala que se ocupaba para fines de instrucción la cual una vez iniciado el gobierno militar fue cerrada y ocupada por personal de planta prohibiéndoles a ellos, los soldados, se acercaran a ella. En una oportunidad, recuerda que el soldado Chávez Etchepare les recomendó no acercarse ahí porque en dicha sala se efectuaban los interrogatorios de los detenidos. También a esa sala ingresaban algunos oficiales como es el caso del teniente Espinoza y otro cuyo apellido a su parecer era García, quien tenía otro hermano al interior del regimiento.

A.53. Oscar Inostroza Segura

En declaración extrajudicial de fecha 26 de agosto de 2009, que rola de fs. 1.414 a fs. 1.416 (Tomo IV), acota que ingresó a efectuar el servicio militar obligatorio el día 06 de enero del año 1973, al regimiento N° 8 de infantería y Montaña Tucapel, se encontraba inserto dentro de la **compañía de plana mayor y servicios**, la que se encontraba bajo el mando del capitán Nelson Ubilla Toledo, siendo su segundo comandante el subteniente Raimundo García Covarrubias, recordando que su hermano el teniente Jaime García, se destacaba por su crueldad y tratos inhumanos hacia los detenidos y los propios conscriptos. Añade que dentro de los lugares o dependencias que eran usadas para mantener prisioneros políticos dentro del regimiento estaban, la sala de banda de música de la unidad, el "gimnasio chico" donde se practicaba boxeo, el calabozo de la guardia y la "sala de conferencias" existente dentro de la compañía de plana mayor y servicio. Esta última dependencia se encontraba ubicada al medio de la compañía, allí se encontraba un catre metálico de los que ellos usaban y que era de una plaza, con los instrumentos necesarios para la tortura. En alguna oportunidad le correspondió llevar a esta sala a su propio cuñado de nombre Ricardo Villanueva, quien por ese tiempo era simpatizante de la unidad popular.

Se le pregunta por otros hechos y en lo pertinente dice que recuerda a quienes realizaban interrogatorios a los detenidos del regimiento al capitán Nelson Ubilla Toledo, sargento Mario Arias Díaz, y los conscriptos sargento segundo de reserva José Chávez Etchepare, Libardo Schwartenski Rubio y Luis Ángel Valeria Candía y el teniente Jaime Garcia, entre otros.

En declaración judicial de fecha 28 de septiembre de 2009, que rola de fs. 1.426 a fs. 1.428 (Tomo V), ratifica su declaración extrajudicial y narra que le correspondió trasladar a varios de detenidos desde la guardia del regimiento hasta una sala ubicada entre el pabellón de plana mayor y la compañía de morteros. A esta sala le llamaban “sala de conferencias de alto nivel”. Hasta ese lugar llevó a Ricardo Villanueva. En esa oficina se torturaba a las personas mediante la aplicación de corriente. Que también le correspondió custodiar detenidos en el “gimnasio chico”, lugar al que llegaban personas muy golpeadas, tanto hombres como mujeres.

A.54. Luis Eduardo Manríquez Figueroa

En declaración extrajudicial de fecha 19 de julio de 2017, rolante de fs. 2.730 a fs. 2.731 (Tomo VIII), afirma que se desempeñó en las **compañías de plana mayor y servicios** y primera de cazadores. Afirma que efectivamente existía una sala al interior de su compañía donde se ingresaban personas detenidas, quienes generalmente eran trasladadas ahí con la vista vendada, se rumoreaba mucho que en dicha sala se interrogaba a los detenidos bajo la aplicación de tortura, incluso se decía que a los detenidos se les aplicaba corriente. Que a esta sala siempre veía ingresar a algunos oficiales del regimiento como el capitán Ubilla y los hermanos Garcia. El hecho es que se sabía que ellos frecuentemente ingresaban a esta sala cuando había detenidos. Agrega que, a los meses de ocurrido el golpe de Estado, cree a fines de 1973, se supo que una persona fue sacada moribunda desde la mencionada sala de su compañía, quien habría fallecido posteriormente al interior del regimiento.

A.55. José Anselmo Matamala Cofré

En declaración extrajudicial de fecha 20 de julio de 2017, rolante de fs. 2.736 a fs. 2.737 (Tomo VIII), expone que efectuó el servicio militar obligatorio en el regimiento de Infantería N° 8 Tucapel de Temuco. Se desempeñó en las **compañías de plana mayor y servicios** y primera cazadores. Dice que existía una sala al interior de su compañía donde se ingresaban personas detenidas,

quienes generalmente eran trasladadas ahí desde la guardia con la vista vendada, se rumoreaba mucho que en dicha sala se interrogaba a los detenidos bajo la aplicación de tortura, mediante el uso de electricidad. A la sala que señalaba anteriormente ingresaban algunos oficiales del regimiento como el capitán Ubilla, subteniente Espinoza y otros que no recuerda.

En declaración judicial de fecha 22 de marzo de 2018, rolante de fs. 230 a fs. 231 (cuaderno secreto), reitera que se encontraba para el año 1973 realizando el servicio militar obligatorio al interior del regimiento Tucapel de Temuco, compañía de plana mayor y servicios, al mando del capitán Ubilla. Lo seguían en el mando el subteniente Romilio Lavín. A partir del 11 de septiembre de 1973, y encontrándose encuadrado en la misma compañía, se desempeñó como guardia dentro de las dependencias del regimiento Tucapel de Temuco. Expresa que al interior de la compañía existía una sala de torturas, lo sabe puesto que se encontraba de guardia cuando observaba aquello. A la sala de tortura veía ingresar a los conscriptos Chávez Etchepare y a Valeria. Sabe que la sala que estaba ubicada en la compañía era una sala de tortura, puesto que en muchas ocasiones le correspondió trasladar a los presos políticos hasta aquella, los cuales eran conducidos vendados; momentos en que podía observar la implementación que existía en aquella. En muchas ocasiones visualizó un catre, lugar donde recostaban a los detenidos para aplicarles corriente. Nunca se enteró de las identidades de los detenidos ni el destino final de aquellos. Que además era de conocimiento general de los conscriptos que, en horas de la noche en oportunidades, se trasladaban cuerpos a distintos lugares, los cuales desconoce.

A.56. Pedro Renato Ortiz Quiroz

En declaración extrajudicial de fecha 20 de julio de 2017, rolante de fs. 2.738 a fs. 2.740 (Tomo VIII), desarrolla que efectuó el servicio militar obligatorio en el regimiento de Infantería N° 8 Tucapel de Temuco, y se desempeñaba en las **compañías de plana mayor y servicios**. Que existía una sala al interior de las instalaciones de su compañía, que estaba prohibido su ingreso, pero después del día 11 de septiembre era habitual escuchar lamentos y gritos de dolor tanto de hombres y mujeres, por lo que se comentaba que ahí se torturaban a los detenidos mediante golpes y aplicación de corriente eléctrica.

En declaración judicial de fecha 16 de mayo de 2019, rolante de fs. 3.155 a fs. 3.157 (Tomo IX), ratifica su declaración y persiste en que al interior del

regimiento Tucapel de Temuco vio muchos detenidos por motivos políticos, al lado de la guardia, cerca de la enfermería y en la sala habilitada para las torturas de los detenidos en la compañía de plana mayor y servicios. Recuerda que veía ingresar a estos detenidos, los cuales se encontraban vendados, con capucha, esposados, apuntados con armas, a cada uno de los lugares que ha nombrado. Que efectivamente a contar del 11 de septiembre de 1973, al interior de su compañía, la de plana mayor y servicios del regimiento Tucapel de Temuco existía una dependencia, o más bien sala, especialmente habilitada para torturar mediante la aplicación de corriente eléctrica y golpes a los detenidos de carácter político. Esto lo dice porque en muchas ocasiones sintió los gritos de dolor, lamentos, llantos desde el interior de aquella. Respecto a las personas que ingresaban a esa sala vio a veces ingresar oficiales de distintas compañías, el capitán Rodolfo Vargas Campos, también al comandante subrogante de la compañía de plana mayor de apellido García Covarrubias (quien asesoraba al capitán Nelson Ubilla Toledo).

A.57. Libardo Hernán Schwartenski Rubio

En declaración extrajudicial de fecha 14 de enero de 2010, rolante de fs. 1.463 a fs. 1.464 (Tomo V), narra que para el año 1973 y posterior a la restructuración del regimiento fue encuadrado en la **compañía de plana mayor y servicios**, la que se encontraba al mando del entonces capitán Nelson Ubilla Toledo, a quien recuerda como el encargado del servicio de inteligencia militar. Sobre la existencia de un grupo encargado de la entrevista de los prisioneros políticos, recuerda que este lo integraban el capitán Ubilla, los sargentos Orlando Moreno Vásquez y Raúl Schonherr Frías, además del sargento Mario Arias Díaz.

En declaración judicial de fecha 27 de marzo de 2010, rolante de fs. 1.467 (Tomo V), ratifica declaración extrajudicial y suma que el sargento Arias Díaz pertenecía a la plana mayor y servicios. A su parecer se integró a la sección segunda después del golpe de militar, pues lo veía junto a Schonherr, Moreno Vásquez y el capitán Ubilla participando en el grupo que se ocupaba de los detenidos para su interrogatorio.

En declaración extrajudicial de fecha 8 de noviembre de 2012, rolante de fs. 1.740 a fs. 1.741 (Tomo V), insiste que para 1973 se encontraba encuadrado en la compañía de plana mayor y servicios, al mando del capitán Nelson Ubilla Toledo. En cuanto a la existencia de un grupo encargado de los interrogatorios de los prisioneros políticos, indica que recuerda que este lo integraban el capitán

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Ubilla, el teniente Jaime Garcia Covarrubias, apodado “el yango”, el subteniente Romilio Lavín, los sargentos Orlando Moreno Vásquez y Raúl Schonherr Frías, además del sargento Mario Arias Díaz, los cuales realizaban su labor en una sala de interrogatorios habilitada en la cuadra de la compañía de plana mayor y servicios, donde era recurrente observar los detenidos que ingresaban a esa sala, los cuales se sabía que eran torturados. De la misma forma, existía un grupo de detectives que estaba integrado por Carlos Luco Astroza y Hernán Quiroz Barra, quienes efectuaban interrogatorios, los que en más de una vez presenciaron oportunidades en que debía entregarles documentación, como eran torturados los detenidos. Menciona como otro interrogador al fallecido teniente Manuel Espinoza Ponce. En cuanto a las condiciones en las que observó a las personas cuando estaban siendo torturadas, señala que estas se encontraban desnudas, con la vista vendada y sobre un somier metálico, junto a sus torturadores que eran los detectives Quiroz y Morales, quienes eran acompañados en muchas oportunidades por el sargento Mario Arias Díaz. Se le interroga respecto de los detenidos asesinados por ley de fuga, lo que dice desconocer, agregando otros comentarios.

En declaración judicial de fecha 25 de junio de 2013, rolante de fs. 1.814 a fs. 1.785 (Tomo VI), ratifica declaraciones y recuerda al teniente Jaime García Covarrubias y a su hermano Raimundo. Dice que estos oficiales siempre andaban juntos. En una oportunidad pudo ver al teniente Jaime García y al subteniente Raimundo García al interior de la sala donde se torturaban personas en la compañía de plana mayor y servicios. En esos momentos había una persona desnuda y con su vista vendada, tendida sobre un somier. En cuanto al subteniente Lavín puede indicar que éste era uno de sus jefes en la compañía de plana mayor y servicios y pudo verlo entrar en más de una ocasión a la sala donde se interrogaba y torturaba personas. No puede asegurar que éste participó en torturas, pero por lo menos sabía lo que allí pasaba y debió haber presenciado alguna sesión de estas. Que de los hechos ocurridos en el regimiento con relación a los detenidos lo sabían todos los oficiales, por lo menos el comandante Iturriaga, el segundo comandante Jofré y el ayudante Jaime García Covarrubias, además de todos los oficiales involucrados en los interrogatorios y torturas.

En diligencia de careo con José Raúl Inzunza Reyes, de fecha 5 de julio de 2013, rolante de fs. 1.813 a fs. 1.814 (Tomo VI), recuerda haber visto entrar a

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

la sala de interrogatorios al cabo Salgado Goyeneche, que era de la compañía andina y también estaba a cargo del material de guerra, trabajando junto al teniente Lavín. Que también vio ingresar frecuentemente a Jaime García Covarrubias y a Raimundo García Covarrubias. Sin embargo, era común que todos los oficiales fueran a mirar de vez en cuando, porque la novedad. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo con Jaime García Covarrubias, de fecha 4 de octubre de 2013, rolante de fs. 1.860 (Tomo VI), ratifica declaraciones y reconoce a la persona con la cual se le carea como el teniente Jaime García Covarrubias de quien ha hecho referencias. Acota que se refiere a hechos que ocurrieron entre el 11 de septiembre y mediados de octubre de 1973, fecha que se fue a Santiago. Que su nombre lo dio posteriormente porque le preguntaron si conocía a otros oficiales a los que él hubiese visto en la sala donde se interrogaban y torturaba detenidos. Se mantiene en sus dichos.

A.58. José Raúl Inzunza Reyes

En diligencia de careo con Hernán Quiroz Barra de fecha 05 de julio de 2013, rolante de fs. 1.809 a fs. 1.810 (Tomo VI), en lo pertinente lo recuerda porque trabajo con él en la **compañía de plana mayor y servicios** junto con el capitán Nelson Ubilla Toledo.

En diligencia de careo con Libardo Schwartenski Rubio, de fecha 05 de julio de 2013, rolante de fs. 1.813 a fs. 1.814 (Tomo VI), ratifica sus dichos y reconoce a la persona con quien se le carea, de quien hizo referencia en declaración. Que éste estuvo presente durante los interrogatorios, pero no lo vio aplicar electricidad a los detenidos, ni interrogados. Que es cierto lo que señala Schwartenski, en el sentido que todos los oficiales del regimiento iban a la sala de interrogatorios a curiosear. No sabe si ellos interrogaban o no, pero sí que entraban a mirar.

En declaración extrajudicial de fecha 25 de julio de 2017, rolante de fs. 2.741 a fs. 2.743 (Tomo VIII), destaca que realizó su servicio militar en el regimiento Infantería N° 8 Tucapel de Temuco, se desempeñó como soldado conscripto fue en la compañía de plana mayor y servicios. Deja claro que integró el grupo de soldados que participaba en labores con detenidos, cuando los soldados Schwartenski, Chávez y Valeria, fueron enviados al curso de inteligencia en la región Metropolitana, no recuerda muy bien si esto fue a mediados de

octubre o noviembre, el hecho es que se integró a ese grupo por esa fecha. Con relación a las labores que pasó a cumplir, señala que estas tenían que ver con el trato con los detenidos que llegaban a la unidad militar, labores que estaban a cargo del capitán Nelson Ubilla Toledo, y el sargento Mario Arias quienes se hacían apoyar por dos detectives, recordando solamente a Quiroz. Ratificando sus dichos en el sentido que estos funcionarios interrogaban a los detenidos bajo aplicación de tortura, la que consistía en golpe y corriente, al interior de una sala ubicada en la compañía de plana mayor y servicios, a la cual ingresaban también otros oficiales como el teniente Jaime García Covarrubias y un suboficial de apellido Silva. En relación con las dos personas fallecidas que debieron sacar de la sala de tortura de la compañía de plana mayor y servicios, ambos casos fueron de manera separada, cree que con una semana o poco más de diferencia. Aclarando que ese día se encontraba de clase de servicio y recibió la orden de un funcionario que no recuerda, que debía despejar el pasillo de la cuadra de su compañía, ya que había que sacar un cadáver de la sala, esto en las dos ocasiones que recuerda. Que no tomó los cuerpos, sino que solo vio cuando los sacaron de la sala, envueltos en frazadas, para posteriormente subirlos a un camión que se aculató a las dependencias de la compañía, para posteriormente ser llevados en ambas ocasiones al hospital Regional de Temuco.

A.59. Raúl Cerda Aguilaf

En declaración judicial de fecha 25 de abril de 2012, rolante de fs.1.660 a fs. 1.662 (Tomo V), refiere que, para septiembre de 1973, estaba por salir del servicio pues duraba un año. Además, estaba listo para irse con un grupo de soldados conscriptos a la escuela de suboficiales específicamente a Tejas Verdes donde iba a recibir instrucción de ingeniería. Preguntado dice que hubo muchos detenidos en el regimiento Tucapel después del 11 de septiembre de 1973. Estos eran mantenidos en la guardia de la unidad, en el “gimnasio chico y en el gimnasio grande”. A cargo de los interrogatorios de estos detenidos, había un grupo de oficiales, suboficiales y civiles. Entre los oficiales recuerda al capitán Nelson Ubilla Toledo, a los tenientes Jaime García Covarrubias y Alejandro Rubio Valladares y a los subtenientes Raimundo García Covarrubias, Manuel Espinoza Ponce, y Carlos Oviedo Arriagada; de los soldados clase recuerda al suboficial mayor Quilodrán, sargento Silva San Martín, sargento Mario Arias Díaz y Alberto Cerda Miere, este último conductor, Víctor Juvenal Del Río Poveda, Albino Krause Álvarez. Todos

ellos pertenecían a la plana mayor, que dependía de Ubilla. Explaya que era conocido por todos en el regimiento que los detenidos eran torturados en una dependencia ubicada en la compañía de la plana mayor y servicios. Hasta ese lugar llevaban a los detenidos para interrogarlos, pudiendo ver a los oficiales antes indicados pasar con detenidos hacia ese lugar o mandar en su nombre a buscar detenidos al gimnasio o a la guardia para ser llevado a la sala mencionada.

A.60. Oscar Manuel Seguel Jofre

En declaración extrajudicial de fecha 29 de agosto de 2017, rolante de fs. 2.766 a fs. 2.768 (Tomo VIII), proclama que el día 23 de septiembre de 1973, es detenido por funcionarios de carabineros y militares, en su domicilio. Luego de su detención en la comisaría de Pitrufrquén es trasladado al regimiento Tucapel, donde es dejado en un gimnasio el cual se encontraba lleno de personas torturadas, lugar en donde es torturado en diversas oportunidades. Precisa que permaneció detenido en el regimiento Tucapel a los días posteriores del golpe de Estado, recuerda que fueron seis días los que ahí estuvo, siendo torturado bajo la aplicación de corriente eléctrica en una dependencia de este, distinta al gimnasio, reconociendo dentro de sus torturadores al capitán Nelson Ubilla Toledo, estando en su conocimiento que también en esos interrogatorios participaban dos tenientes cuyas identidades desconoce. Respecto al señor Podlech, quien asumió la labor de Fiscal, lo recuerda en una oportunidad que lo golpeó en una oficina ya que él quería que entregara las identidades de algunas personas, incluso quería que los acusara falsamente de la tenencia de explosivos.

A.61. Raúl Dagoberto Roa De La Jara

En declaración extrajudicial de fecha 17 de julio de 2015, rolante de fs. 2162 a fs. 2163 (Tomo VI), comunica que fue detenido 12 de septiembre de 1973, por carabineros de Pucón. Que junto con él fueron detenidos Faustino Escobar, Bernardino Quinteros y otros más cuyas identidades no recuerda. Recuerda que pasaron la noche en la unidad de carabineros de Pucón, siendo trasladados en horas de la mañana del día siguiente al regimiento Tucapel de Temuco, en una camioneta de propiedad de Guillermo Polack, la que al parecer fue conducida por él. Una vez que llegaron al regimiento, permaneció encerrado en un calabozo junto a otro grupo de detenidos, de los cuales no recuerda sus identidades. Es así, que era sacado del calabozo para ser interrogado por funcionarios militares, al tenor de que confesara dónde mantenía las armas escondidas y su participación

en el adiestramiento de mil quinientos guerrilleros al interior de las instalaciones de “CONAF” en Pucón. En ese sentido, recuerdo que durante su estadía en alguno de los centros de detención por los cuales pasó, conoció a una persona de apellido Figueroa, desconociendo mayores antecedentes al respecto.

En declaración judicial de fecha 29 de julio de 2015, rolante de fs. 2.171 a fs. 2.172 (Tomo VII), ratifico su declaración y complementa sus dichos en el sentido que al día siguiente fueron llevados al regimiento Tucapel, donde estuvieron hasta la noche. Durante ese período fueron interrogados por distintas personas, todos militares, aunque no todos los uniformes eran del mismo tipo, por lo que presume que había oficiales, suboficiales y conscriptos en el grupo. En la noche les vendaron la vista, y fueron subidos a un camión militar, aunque al parecer iban más móviles. Recuerdo que por los giros que hizo el camión los llevaron al sector de la isla Cautín, pero finalmente el móvil tomó rumbo hacia la base aérea Maquehue.

A.62. Erasmo Ricardo Villanueva Simón

En declaración judicial de fecha 18 de junio de 2012, rolante de fs. 1.674 a fs. 1.677 (Tomo V), soslaya que para el año 1973 se desempeñaba en una oficina de contabilidad de Sergio Riquelme Inostroza. Un día del mes de noviembre del año 1973, no recuerda fecha exacta, fue al Seguro Social a efectuar un trámite. En ese lugar la señora María Antonieta Meza Moncada le preguntó por la dirección de la familia de Alejandro Flores Rivera, pues quería ir a darle el pésame por la muerte de éste. A su parecer esta señora estaba siendo vigilada, pues a los pocos días fue detenida y llevada al regimiento Tucapel, donde fue brutalmente torturada. Días más tarde llegó hasta su casa una patrulla de militares del regimiento Tucapel, quienes allanaron su domicilio. Un suboficial, cuyo grado, características y nombre no recuerda, le dijo que por orden del capitán Nelson Ubilla Toledo quedaba detenido. Lo llevaron a la guardia del regimiento Tucapel y allí fue ingresado a una dependencia contigua, donde había varios detenidos más, con quienes no conversó. Que también durante ese lapso iban sacando a los detenidos hacia otro sector, quienes regresaban más tarde con visibles signos de haber sido torturados. En ese lugar existía un banco similar a los que están en las plazas; lugar que era utilizado para dejar a los prisioneros que quedaban en muy malas condiciones. Al tercer día fue sacado de la guardia y llevado hacia una dependencia ubicada en una de las cuadras donde se alojaban los conscriptos.

Esta cuadra era la tercera construcción dispuesta hacia el poniente de la entrada al regimiento. En esa sala cuando entró pudo ver una mesa larga, en la que estaban sentadas cinco personas, entre las que puede recordar un oficial vestido con uniforme de la fuerza aérea y cuatro civiles, uno de los cuales era el abogado Alfonso Podlech Michaud, persona a quien ubicaba de vista con anterioridad. También pudo ver una banca similar a las de las plazas. No recuerda quién le preguntó el nombre, pero luego de que revelara su identidad el abogado Alfonso Podlech buscó en un tarjetero que tenía junto a él sobre la mesa y sacó un papel. Luego de mirarlo dio una orden señalando que quedaba detenido y que al día siguiente pasaba a interrogatorio. Que pudo percatarse que se dirigían hacia la misma sala, donde el día anterior había sido interrogado por Podlech. En ese lugar lo hicieron desvestir y lo sentaron en la banca que había visto el día anterior. Acto seguido comenzaron a aplicarle electricidad con un magneto. Que por el lenguaje utilizado por las personas presentes en la sesión de tortura presume que era gente con instrucción y cultura superior a la de un soldado clase. Una semana antes fue llevado al regimiento Tucapel y allí lo ingresaron a una dependencia ubicada hacia el fondo de la unidad militar, donde se entrevistó con el abogado Alfonso Podlech. En ese lugar esta persona le dijo que por decisión del tribunal quedaba en libertad a partir del 22 de diciembre, por lo que debía avisarle a su familia para que se preparara.

A.63. Juan José Salgado Goyeneche

En declaración judicial de fecha 26 de noviembre de 2012, rolante de fs. 1.793 a fs. 1.797 (Tomo VI), sostuvo que el año 1973 cumplía funciones en el Regimiento de Infantería N° 8 Tucapel de Temuco, con el grado de sargento segundo. Encuadrado en la compañía andina cuyo comandante era el capitán Mario Alvarado Verdugo. Refiere a un operativo en el sector de Nehuentue, donde resultaron personas detenidas e interrogadas, siendo derivadas al regimiento Tucapel, “donde la sección de inteligencia se hizo cargo de ellos”. Continúa su relato y en lo pertinente agrega que después de su regreso a Temuco, le correspondió acompañar al capitán Mario Alvarado a efectuar un patrullaje al sector cordillerano de Pucón, específicamente a Curarrehue. Recuerda que fueron en un helicóptero de la fuerza aérea y aterrizaron cerca de una cabaña. En ese lugar detuvieron a doce personas que intentaban cruzar hacia Argentina. Todos los que fueron derivados hacia el regimiento Tucapel de Temuco. Este hecho

debió haber ocurrido entre fines de septiembre y mediados de octubre antes de irse a Santiago. Del personal de inteligencia del regimiento Tucapel recuerda al capitán Ubilla, a los suboficiales Moreno y Schonherr. Además, participaban en los interrogatorios de detenidos los tenientes Vásquez Chahuán, Jaime Covarrubias y Raimundo García Covarrubias. Esto le consta porque era comentario generalizado en el regimiento. Adiciona que hubo varios detenidos en el regimiento durante los primeros días después del 11 de septiembre, los que eran mantenidos en el gimnasio. Que supo de la existencia de una sala de interrogatorios en la cuadra de la compañía de plana mayor, que él no participó de esos interrogatorios, pero se comentaba que los oficiales Jaime García, Raimundo García, Nelson Ubilla Toledo, Vásquez Chahuán y Rubio Balladares interrogaban a los prisioneros que estaban en el regimiento Tucapel.

En declaración judicial de fecha 04 de julio de 2013, rolante de fs. 1.806 a fs. 1.807 (Tomo VI), ratifica declaración judicial suma que la oportunidad en que fue al sector de Curarrehue y se detuvo a las 12 personas, recuerda que andaban en tres helicópteros de la Base Aérea Maquehue. Los detenidos fueron trasladados en uno de estos aparatos y él se regresó posteriormente por tierra desde Curarrehue a Temuco. Que “seguramente el servicio de inteligencia se hizo cargo de ellos en el regimiento Tucapel”. Está seguro de que el servicio de inteligencia se encargaba de interrogar a los detenidos en el regimiento. El grupo de inteligencia estaba encabezado por el capitán Nelson Ubilla más los suboficiales Orlando Moreno Vásquez y Raúl Schonherr. Junto con ellos participaban de los interrogatorios los tenientes Vásquez Chahuán, Jaime y Raimundo García Covarrubias. Aunque él nunca presenció estos interrogatorios, “todo el mundo sabía dónde estaban los detenidos y quiénes los interrogaban”.

En declaración judicial de fecha 27 de marzo de 2017, rolante de fs. 2.594 a fs. 2.597 (Tomo VIII), replica su desempeño en el regimiento Tucapel y reitera la detención de doce personas en el sector de Curarrehue a los que trasladaron a la base aérea Maquehue y posteriormente al regimiento Tucapel de Temuco en calidad de detenidos. Refiere que puede decir que esas debieron ser las personas que tomó detenidas en el operativo que realizaron a Curarrehue y que narró precedentemente. Sin embargo, las personas que tomaron detenidas eran doce personas y que estaban listas para cruzar la frontera, los pillaron como a las seis o siete de la mañana del mes de septiembre de 1973, no está seguro, pero era

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

posterior al 11 de septiembre de 1973. De esos detenidos reconoció a uno de apellido Muñoz, que era conscripto. Que estos detenidos fueron trasladados a la fuerza aérea o al regimiento, que eso lo manejaban los de inteligencia. Que en aquella oportunidad cree que andaba el capitán Alvarado, Pablo Grand.

A.64. Elías Amar Amar

En declaración extrajudicial de fecha 5 de noviembre de 2003, rolante de fs. 1.288 a fs.1.289 (Tomo IV), expuso que fue detenido el 14 septiembre 1973 en horas de la noche, que esa misma tarde los mismos soldados de la fuerza aérea lo trasladaron a la fiscalía militar del regimiento Tucapel, donde fue llevado ante el fiscal militar, percatándose que se trataba de un conocido abogado llamado Alfonso Podlech, quien lo envió incomunicado a la cárcel pública de Temuco.

A.65. Herman Carrasco Paul

En declaración judicial de fecha 11 de diciembre de 2003, rolante de fs.1.298 a fs.1.302 (Tomo IV), expuso que para septiembre de 1973 era dirigente de las juventudes comunistas y el 17 de septiembre de 1973 detenido por personas de la fuerza aérea trasladando al recinto de dicha unidad, donde relata apremios físicos y torturas, luego dejado en libertad. Posteriormente fue nuevamente detenido por carabineros de la segunda comisaria de Temuco, y al día siguiente lo trasladaron al regimiento Tucapel y los ingresaron a un calabozo que estaba detrás de la guardia. Allí fueron recibidos entre otros, por Orlando Moreno Vásquez, a quien conocía porque eran vecinos. Estando en ese lugar fue vendado y conducido por Juan Carrillo hacia el gimnasio del regimiento donde fue sometido a tortura, mediante la aplicación de electricidad en todo el cuerpo. Calcula que eran cinco personas las que lo torturaban, entre las cuales reconoció la voz de Nelson Ubilla Toledo y Orlando Moreno Vásquez. En otra ocasión fue conducido a las dependencias de la segunda compañía en donde le sacaron la venda y conversó cara a cara con Nelson Ubilla Toledo y en presencia al parecer de Orlando Moreno, quien le dijo que lo sabían todo y que dijera dónde estaban las armas. Que el día 8 de noviembre, aún en el gimnasio, los sacan de a uno hacia la fiscalía militar para firmar su libertad. Esto sucedió en presencia del cabo Schonherr y de Alfonso Podlech Michaud.

En diligencia de careo con Nelson Ubilla Toledo, de fecha 12 de diciembre de 2003, rolante de fs. 1.303 a fs.1.304 (Tomo IV), ratifica su declaración y agrega que el señor Nelson Ubilla Toledo, es a quien se ha referido en su declaración.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Que el señor Ubilla es quien lo torturó y dirigía los interrogatorios. Quien argumentó que el motivo de conversar con él era el aprecio que le tenía a su suegro e iba a intentar salvarlo pues estaban todos condenados a muerte.

En declaración judicial de fecha 29 de diciembre de 2008, rolante de fs.1.314 a fs. 1.317 (Tomo IV), reitera sus detenciones y que dos días después fue llevado junto a Juan Antonio Chávez hasta la oficina de la fiscalía militar, ubicada al interior del regimiento donde fue conminado a firmar un documento autoinculpatorio, el cual se negaron a suscribir. En ese lugar se encontraban Alfonso Podlech, Nelson Ubilla Toledo y Orlando Moreno Vásquez. Reproduce que se salvó gracias a su suegro René Beltrán Valdebenito, quien intercedió por él y conversó con Nelson Ubilla Toledo, sumando detalle.

En declaración extrajudicial, de fecha 5 de enero de 2009, rolante de fs. 1.323 a fs. 1.324 (Tomo IV), comienza refiriendo a lo acontecido en episodio denominado “el asalto polvorín”, y relatando su situación cuando fue detenido. En lo pertinente soslaya que el fiscal del regimiento Tucapel, el abogado Alfonso Podlech Michaud, este sí participaba de los interrogatorios, vestido de militar y con el grado de mayor, y fue él quien, les insistió en firmar un documento; que negaron a firmar y donde se hacían responsables como los jefes del “Plan Z”.

En diligencia de careo con Alfonso Podlech Michaud, de fecha 12 de agosto de 2013, rolante de fs. 1.831 a fs. 1.832 (Tomo VI), en lo pertinente comunica que conoce a Alfonso Podlech Michaud desde niño.

A.66. Edison Chihuilaf Arriagada

En declaración judicial de fecha 17 de marzo de 2012, rolante de fs. 1.656 a fs. 1.659 (Tomo V), expreso que los primeros días de octubre de 1973 llegó hasta su domicilio una patrulla militar que tenía órdenes para detenerlo, siendo llevado al regimiento Tucapel de Temuco. Allí permaneció todo el día en una dependencia ubicada en la guardia de la unidad militar. Estando en ese lugar pudo ver mucha gente detenida, algunos de los cuales habían sido torturados, pues presentaban claras muestras de haber sido golpeados. Entre éstos puede recordar a un joven de apellido Cortés, al parecer de nombre Fernando, esta persona llegó en muy malas condiciones traída por militares pues casi no podía mantenerse en pie. Que durante ese mismo día en que estuvo detenido en la guardia del Regimiento Tucapel pudo ver al abogado Alfonso Podlech vestido de traje de campaña, calzando botas y dos pistolas al cinto. Este hombre entró al guardia,

visiblemente alterado, y comenzó a increpar a los soldados que se encontraba allí reunidos. Les dijo más o menos textualmente lo siguiente: "Oye po' esta es la última vez que les digo, no me dejen entrar más a estas mujeres y viejas de mierda, que me tienen loco con sus reclamos. Yo ya se los dije y si no me hacen caso los hago fusilar a ustedes también". Poco rato después entró al calabozo el mismo soldado que anteriormente le había pedido que le diera un plato de comida al detenido torturado. Se le veía muy apesadumbrado por lo que había sucedido con el abogado Podlech, al punto que se quejó diciendo que estaba harto de lo que estaba sucediendo y que no hallaba la hora de que todo esto terminara. Además, indicó hacia el lugar donde Podlech había estado señalando que ahora mandaban ellos, como dejando entrever que había personas ajenas al regimiento con mando.

A.67. Julio Cesar Guevara Guevara

En declaración judicial de fecha 11 de febrero de 2002, rolante de fs. 213 bis a fs. 215 (Tomo I), soslaya que entre esas personas detenidas estaba Elías Dagoberto González Ortega, joven de Villarrica a quien conocía en Huiscaapi desde pequeño y eran amigos. Comunica que el 12 de octubre quedó en libertad. Que estando detenidos de pronto se realizaban llamados a los detenidos a presentarse a la guardia de la cárcel, entre esos llamados salió su amigo Elías, y desde esa ocasión no supo más de éste, ni lo volvió a ver. En cuanto al hermano de Elías, a saber, Hugo Arner no lo vio detenido, de haberlo visto lo recordaría, porque eran amigo de familia, pero no lo vio. Con relación a otras personas, solo escucho entre los llamados que hacían, a unos señores de apellido Schmidt Arriagada, pero no los vio. Conmemora que Elías le conto las circunstancias en que fueron detenidos, esto es cuando se disponían a salir del país, por un paso fronterizo de Curarrehue, siendo detenido junto a su hermano, pero a su parecer lo habrían separados, pero dice estar seguro de que nunca vio a Hugo Arner en la cárcel. Insiste que escuchó entre los llamados a Elías, a quien desde esa ocasión no volvió a ver. No puede precisar la fecha del llamado, pero pensó que había quedado en libertad, aunque nunca más supo su suerte. Recuerda que otras personas llamadas a la guardia al igual que Elías, posteriormente eran ejecutados en el regimiento, acusados de haber querido escapar, recién ahí se dieron cuenta que los detenidos llamados a la guardia, no era para quedar en libertad, sino que corrían otra suerte, que quizás eso fue lo que ocurrió al joven González, aunque no tiene la certeza de lo ocurrido

con éste. Relata su situación en la cárcel. Suma que pasado un tiempo se encontró con una prima de Elías González, llamada Zudelia Castro González, a quien le contó que había estado con Elías en la cárcel de Temuco en aquella época.

En declaración judicial de fecha 07 de diciembre de 2004 de fs. 416 a fs. 417 (Tomo II), arguye que conocía a la familia de Elías González Ortega, especialmente a sus padres y el día que se encontró con él en la cárcel pública de Temuco, éste se veía muy maltratado. Le preguntó por su hermano Hugo, sin embargo, no se acuerda qué fue lo que le dijo. No obstante, esto, él se veía muy preocupado por su hermano y por el resto de sus amigos. Le parece que este le dijo que su hermano habría huido junto a otros de sus amigos al momento de la detención. Que diariamente se leían listados de cinco o seis personas que eran requeridas en la guardia. Estas personas salían con sus cosas y ellos pensaban que era para otorgarles la libertad; sin embargo, después supieron que muchas de estas personas fueron dadas de baja en el regimiento por haber intentado fugarse.

En declaración extrajudicial de fecha 09 de marzo de 2012, rolante de fs. 624 a fs. 625 (Tomo II), revela que tomó contacto durante su reclusión con uno de los hermanos González Ortega, que nunca estuvo detenido al interior del Regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco, pero durante su permanencia en la Cárcel Pública de Temuco, se contactó con uno de los hermanos González, no recuerda cuál de ellos era, lo único que recuerda es que le preguntó por su hermano Elías, a quien conocía desde Villarrica, contestándole éste joven que Elías, había escapado por un paso fronterizo junto a otros amigos hacia Argentina.

A.68. Rolando Chávez Godoy

En declaración extrajudicial de fecha 04 de abril de 2016, rolante de fs. 3.314 a fs. 3.315 (Tomo X), invoca que en relación con su conocimiento sobre la detención de Héctor Aguayo en el mes de septiembre de 1973, inquiera que no se enteró de dicha situación, sino hasta el día en que éste apareció en la oficina de correos consultando por su persona, en aquella oportunidad recuerda que lo atendió apenas le avisaron y al tomar contacto con él lo saludó y le comentó que había estado detenido en el regimiento Tucapel y que incluso recién le habían dado la libertad. Dentro de la conversación que sostuvo con éste, le comentó también que había visto al interior del regimiento calidad de detenido a un profesor de Curarrehue, cuyo nombre es Manuel Humaña Jiménez. Por otra parte,

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

interpreta que en una oportunidad se enteró por comentario de una persona, cuya identidad no puede recordar, que el carnet de identidad de Héctor fue encontrado a orillas del río Toltén a la altura de la comuna de Pitrufulquén.

A.69. Renato Ariel Saravia Flores

En declaración extrajudicial de fecha 12 de octubre de 2011, rolante de fs. 575 a fs. 577 (Tomo II), declara que para el año 1973 vivía en la localidad de Curarrehue, se desempeñaba como profesor de enseñanza básica en la Escuela N° 17 de esa localidad. El director de ese establecimiento era Manuel Humaña Jiménez. Para el año 1973 era simpatizante del gobierno del presidente Salvador Allende. Que fue detenido el día 11 de septiembre por carabineros del retén de Curarrehue quedando bajo arresto domiciliario, con firma diaria. El día 17 de septiembre, mientras realizaba ese trámite un carabinero le comunicó que lo trasladarían hasta Temuco. Lo subieron a una camioneta, que según recuerda pertenecía a la Corporación Nacional Forestal, en ese vehículo también iban Manuel Humaña Jiménez, Baldomero Salazar, Rubén Leal Riquelme, los hermanos René y Luis Díaz Cortez y los funcionarios de "CONAF" de apellidos Santana y Cid. La camioneta iba a cargo del carabinero Orlando Reyes Fernández, quien se acompañaba de dos carabineros más, siendo uno de ellos Castilla. En horas de la tarde llegaron a Temuco, dejándolos en dependencias del Regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco. Personal militar los llevó hasta el gimnasio de ese recinto militar; donde había cerca de cien personas, los dividieron en grupos, no recordando quienes eran los integrantes de su grupo. Les dieron comida y los mantuvieron hasta cerca de las veinte horas, para posteriormente trasladarlo junto al grupo con que había llegado hasta dependencias de la cárcel pública de Temuco, no pudiendo precisar cuánto tiempo. Cuando salió de la cárcel pública de Temuco, junto con una parte del grupo con que había llegado, fueron llevados por personal militar nuevamente hasta el regimiento Tucapel, hasta la oficina de fiscal militar Podlech, quien de manera prepotente y grosera les manifestó que "no nos metiéramos más en problemas y que volviéramos a nuestros lugares de origen". En cuanto a Héctor Aguayo Olavarría, Hugo y Elías González Ortega, Juan y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa y Raúl Figueroa Burkhardt, solamente recuerda a la persona de apellido Aguayo, a quien vio junto a un grupo de jóvenes al interior

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

de la cárcel pública de Temuco. Esta persona era el más joven del grupo y lo conoció por intermedio de Manuel Humaña al interior de la cárcel.

En declaración judicial de fecha 30 de mayo de 2012, rolante de fs. 690 a fs. 691 (Tomo II), ratifica su declaración extrajudicial y de lo que está seguro es que, esos jóvenes, que eran entre siete y nueve, se les acercaron cuando supieron que también venían detenidos desde Curarrehue. Esos jóvenes no superaban los veinte años en promedio, y a uno de ellos le decían "Chuma". Esa persona era quien le daba ánimo sus compañeros. Que en el regimiento fue interrogado por el abogado Podlech, quien según todos los comentarios que escuchó en la cárcel, era el fiscal militar de la época. Esta persona fue muy prepotente con ellos. En un principio pensó que era un militar porque se comportaba con mucho odio hacia los detenidos. Que Podlech fue quien los interrogó uno por uno ese día fueron a la fiscalía militar. Relata otros hechos y respecto de las víctimas de autos dice desconocerlos. Sin embargo, los asocia con los jóvenes que vio en Temuco junto a ellos.

A.70. Baldomero Osvaldo Salazar Salgado

En declaración extrajudicial de fecha 12 de octubre de 2011, rolante de fs. 578 a fs. 580, (Tomo II), escruta que para el año 1973 tenía 21 años y se desempeñaba como profesor de historia y geografía en la Escuela N° 17 de Curarrehue, de la cual su director era Manuel Humaña Jiménez. Que era militante del Partido Comunista para la época y fue detenido el 11 de septiembre de 1973 a manos de personal de carabineros del retén de Curarrehue, quedando bajo arresto domiciliario, el cual duro hasta el día 17 de septiembre, día en que los funcionarios de carabineros decidieron ir a buscarlo a su domicilio y comunicarle que sería trasladado hasta la ciudad de Temuco. Recuerda que lo hicieron abordar un Jeep de color verde en cuyo interior estaba en calidad de detenido Renato Santana, funcionario de la Corporación Nacional Forestal. Ese vehículo iba a cargo de unos carabineros, cuya identidad no recuerda, los llevaron hasta la comisaría de carabineros de Pucón, lugar donde abordó el Jeep, en calidad de detenido, un señor de avanzada edad cuyo apellido era Matta. Posteriormente, siguieron el trayecto llegando a la ciudad de Temuco hacia el regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco, lugar donde los efectivos militares los llevaron hasta un patio, donde había otros detenidos, no superando las cincuenta personas, según lo que recuerda. Agrega que en otros vehículos iban otros

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

detenidos provenientes de Curarrehue y otros sectores, recordando que uno de ellos iba su colega de nombre Renato Saravia, junto a Manuel Humaña, los hermanos René y Luis Díaz Cortez, Luis Cid y otro profesor de nombre Rubén Leal Riquelme. Una vez a disposición de los efectivos militares, recuerda que estos los hicieron formar en dos filas, quedando separado momentáneamente del resto de sus colegas. Consecutivamente, los hicieron ingresar a un recinto cerrado similar a un gimnasio, donde les dijeron que se acomodaran ahí porque pasarían la noche en el lugar, cosa que no sucedió porque esa misma noche a eso de las 23:30 horas fueron trasladados hasta la cárcel pública de Temuco, ignorando el destino de las personas que estaban en la otra fila. Permaneció en la Cárcel Pública de Temuco hasta el día 05 de octubre del año 1973. Recuerda que, al interior de la Cárcel Pública, el señor Humaña le presentó a Servando Castillo, quien era de Pucón y a quien había llevado detenido con anterioridad al 11 de septiembre junto a una persona que le apodaban el "Pillé Carrasco", otro apodado el "Piden", quien era botero de Pucón, y otra persona de apellido Muñoz, apodado el "Pluma", quien era hermano de un profesor de Loncoche de nombre Alfonso Muñoz. Las personas antes mencionadas fueron detenidas por efectivos militares quienes, según la información que maneja, llegaron a Curarrehue en un helicóptero. También en la cárcel pública de Temuco pudo ver a aun conocido al que conocía por el apodo de el "Flaco Chávez", quien era secretario general de las juventudes comunistas. Recuerda que no pudo conversar con él, pero sí tiene claro que una noche, cree que, durante las fiestas patrias, lo sacaron de la cárcel y no lo volvió a ver. Tiempo después por medio de la prensa local se enteró que Chávez, junto a otras personas había muerto en un intento de asalto al Polvorín del Regimiento Tucapel, hecho que bajo ningún concepto creyó. Respecto a Héctor Aguayo Olavarría, Hugo y Elías González Ortega, Juan y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa y Raúl Figueroa Burkhardt, por nombre no los conoció, pero si tiene en su recuerdo que al interior del regimiento Tucapel conversó con un muchacho joven, de aproximadamente dieciocho a veinte años, que le comentó que estaba con su hermano y que su padre era dueño de un aserradero en Curarrehue. Hace presente que ese joven no lo volvió a ver más, como al resto de las personas que estaban en la fila en la cual estaba él en un principio. Prosigue relatando la segunda vez que fue detenido por personal de la fuerza aérea.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

En declaración judicial de fecha 30 de mayo de 2012, rolante de fs. 692 a fs. 693 (Tomo II), ratifica su declaración extrajudicial de fs. 578 a fs. 580. Y en lo pertinente dice que en el regimiento fue interrogado, pero no recuerda quién lo hizo. Que desconoce las identidades de las personas desaparecidas, pero, sin embargo, los asocia con los jóvenes que vio en el regimiento de Temuco, en la fila en que inicialmente estaba ubicado. Recuerda que dos eran hermanos cuyo padre tenía aserradero, según dijo uno de ellos. Además, le dijo que ellos se iban a Argentina cuando fueron atrapados en la cordillera. Reanuda su relato en cuanto a su segunda detención, detallando la misma.

A.71. Luis Brunel Cid Hernández

En declaración judicial de fecha 22 de junio de 2013, rolante de fs. 1.205 a fs. 1.207 (Tomo IV), suma a sus dichos que cuando ingresó al gimnasio del regimiento Tucapel pudo ver a Héctor Aguayo Olavarría, a quien le decían "el Chachi", quien era un joven de Curarrehue a quien conocía. Se acercó y le preguntó cómo estaba y qué hacía allí. Éste le dijo que había sido detenido junto con otros jóvenes con quienes había intentado cruzar la frontera hacia Argentina. Sin embargo, durante el viaje uno de ellos se desistió de huir y quiso regresar por lo que todos se volvieron, siendo detenidos por carabineros durante el trayecto. Le señaló también, que estaba muy maltratado y que apenas se podía tocar los genitales. Además, su cara y su cuerpo lo noto visiblemente hinchado, por lo que no era difícil pensar que había sido torturado. En un momento determinado Héctor Aguayo y René Díaz fueron sacados juntos del gimnasio, siendo esta la última vez que vio a Aguayo. A René Díaz lo volvió a ver en 1976, pero no conversaron sobre el tema. Ese mismo día fueron llevados a la cárcel de Temuco, donde permanecieron hasta el día 27 de septiembre de 1973. Fue liberado junto a Renato Santana.

A.72. Renato Santana Dubreuil

En declaración extrajudicial de fecha 13 de octubre de 2011, rolante de fs. 581 a fs. 583 (Tomo II), cuenta que fue detenido en tres oportunidades, la primera el 12 de septiembre de 1973, por carabineros que no eran dotación del retén de Curarrehue, y un grupo de civiles. Lo llevaron hasta el retén de Curarrehue junto a su compañero de labores Luis Cid. En el lugar también estaba detenido Luis Díaz, los tres abordan un vehículo y los trasladan hasta la comisaria de Pucón, donde pernoctaron y vio detenido a Benito Tapia. Al día siguiente, fueron trasladados por

carabineros hasta la ciudad de Temuco, hasta la segunda comisaría de esa ciudad, posteriormente, fueron llevados hasta el regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco, para quedar en libertad al día siguiente. El 14 de septiembre, fue notificado por carabinero que quedaba bajo arresto domiciliario hasta el día 17 de septiembre, nuevamente detenido por carabinero. En esa oportunidad el grupo de detenidos aumentó, recordando a los profesores Manuel Humaña, uno de apellido Barrales, Renato Saravia, Rubén Leal, los hermanos René y Luis Díaz y su colega Luis Cid. Siendo nuevamente trasladados hasta la comisaría de Carabineros de Pucón, seguidamente a segunda comisaría de Carabineros de Temuco, y posteriormente entregados a efectivos militares del regimiento Tucapel de Temuco, lugar en que permanecieron unas horas para ser llevados finalmente a la cárcel pública de Temuco. En cuanto a Héctor Aguayo Olavarría, Hugo y Elías González Ortega, Juan y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa y Raúl Figueroa Burkhardt, recuerda solamente a Héctor Aguayo Olavarría, a quien conocía por el apodo del "Chachi", quien para la época tenía cerca de 16 años. A "ese muchacho lo vi al interior del regimiento Tucapel", no recuerda en cuál de sus estadías, solo recuerda que al verlo intercambió un par de palabras con él en el baño del gimnasio del regimiento, pero no recuerda lo que alcanzaron a conversar, el hecho es que fue la última vez que lo vio.

En declaración judicial de fecha 25 de junio de 2015, rolante de fs. 3.858 a fs. 3.861 (Tomo XI), reitera que fue detenido junto a Luis Cid y un señor de apellido Brevis, replicando sus dichos en cuanto fueron trasladados a diferentes unidades y que el día 17 de septiembre de 1973 fue nuevamente detenido por carabineros, esta vez junto a Luis y René Díaz Cortez, más los profesores Humaña, Leal, Salazar, Saravia y otros más cuyos nombres no recuerda. Que llegaron ese mismo día al Regimiento Tucapel de Temuco, donde fueron ingresados un gimnasio; en él había mucha gente. Allí vio al "Chachi" Aguayo, quien estaba junto a otras personas en la unidad militar antes señalada. Recuerda que este pidió ir al baño y él también, por lo que pudo intercambiar algunas palabras en ese lugar. A su parecer estaba con el pelo como "mordisqueado". Después fueron separados en grupos y en filas, quedando René Díaz en una distinta a la de ellos, aunque después lo juntaron con ellos nuevamente. Después fueron llevados a la cárcel al igual que Santana, Humaña y los demás que iban de Curarrehue. Al "Chachi" no lo volvió a ver. Pormenorizando lo que le acaeció.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

A.73. Juan Luis Díaz Cortés,

En declaración extrajudicial de fecha 13 de abril de 2011, rolante de fs. 476 a fs. 477 (Tomo II), refiere para el año 1973 tenía veintidós años, vivía en Curarrehue, simpatizante del gobierno de Salvador Allende, por tanto, era una persona conocidamente de izquierda. Con lo ocurrido el once de septiembre de ese año, y a raíz de sus ideales políticos y sociales fue detenido en unas oportunidades por personal de carabineros del retén de Curarrehue, quienes lo trasladaron hasta Temuco. La primera detención ocurrió el día 13 de septiembre de 1973, cuando concurrió a presentarse previa citación a carabineros, los que de inmediato lo trasladaron hasta la segunda Comisaría de Carabineros de Temuco, junto a Luís Cid, Renato Santana, ambos trabajadores de "CONAF", y al jefe de esa repartición cuyo nombre no recuerda y durante la mañana del día siguiente lo trasladan a la base aérea Maquehue, para luego dejarlo en libertad. La segunda detención fue el dieciséis de septiembre de ese mismo año; esa vez lo detuvieron desde la casa de sus padres en horas de la mañana. En esa oportunidad lo detuvieron junto a René Esteban, su hermano, y los llevaron a Temuco, pero esta vez directamente al regimiento de Infantería de Montaña N° 8 Tucapel. En ese lugar, los juntaron con otros detenidos dentro de los cuales estaba Ricardo Aguayo, hermano de una de las víctimas de la presente causa Héctor Aguayo Olavarría, quien también estaba en ese lugar, el cual recuerda como una cuadra de batallón. Afirma que conversó con Héctor, apodado "El Chachi", quien le señaló directamente que sabía que lo iban a matar los militares de ese lugar, pues ya se lo habían dicho. Recuerda que Héctor Aguayo le presentó a unos jóvenes hermanos que habían sido detenidos junto a él, cuyos apellidos eran Schmidt Arriagada, quienes eran de Villarrica. Que en horas de la tarde les ordenan formarse en el patio del regimiento, en el cual se encontraba un oficial, quien leyó un documento en el cual nombró a algunos de los detenidos, entre esos su hermano René Díaz Cortes a Héctor Aguayo Olavarría y a los hermanos Schmidt, entre los que recuerda. Esos prisioneros fueron llevados hasta la guardia del regimiento, lugar donde, luego de un par de horas, solamente sacaron a su hermano, quien se reunió con él y los demás detenidos, quedando en el calabozo el resto de los prisioneros a quienes nunca más volvieron a ver. Posteriormente, fueron llevados hasta la cárcel pública de Temuco, quedando en libertad, según recuerda, el día dieciocho o diecinueve de septiembre de ese año. Que el oficial

que apartó a los detenidos, dentro de los cuales estaban Héctor Aguayo, los hermanos Schmidt y su hermano, era una persona de aproximadamente veinticinco años, un metro setenta de altura, de contextura delgada, pelo rubio, ojos de color azul, piel blanca y ocupaba bigote. Suma que fue el abogado Alfonso Podlech Michaud quien firmó como fiscal su orden de libertad y la de su hermano, lo anterior fue porque pudo ver dicho documento, recordando la firma de ese señor.

En declaración judicial de fecha 7 de junio de 2011, rolante de fs. 486 a fs. 488 (Tomo II), ratifica su declaración extrajudicial de fs. 476 a fs. 477 y complementa sus dichos en el sentido de aclarar que se encontró en dos oportunidades con Héctor Aguayo cuando fue detenido, siendo la primera de ellas en la comisaría de Pucón. En ese lugar pudo constatar que Héctor había sido torturado, pues presentaba evidentes signos de maltrato físico. Después se encontraron en el regimiento Tucapel. No recuerda si fueron trasladados juntos o por separado, por eso tiene la impresión de haberlo visto dos veces mientras estuvo cautivo. El grupo de carabineros que lo detuvo en las dos oportunidades en Curarrehue pertenecía a un destacamento que había llegado hace poco a esa comuna, no reconociendo a ninguno de ellos como pertenecientes a la dotación permanente. Recuerda que un capitán de nombre Juan, llegó junto con ellos y era quien daba las órdenes para detener personas. Que en la segunda detención fue trasladado desde Curarrehue a Pucón, y de allí hasta el regimiento Tucapel. Estuvo una noche en ese lugar junto a los ya nombrados más Manuel Humaña, su hermano René Esteban Díaz y otras personas cuyos nombres no recuerda. En aquella oportunidad fueron trasladados en una camioneta de un particular cuyo nombre es Clorindo Mena. En el regimiento fueron mantenidos en una cuadra cercana a la guardia, custodiados por conscriptos. Respecto del oficial que leyó el listado de detenidos entre los que figuraban los hermanos Schmidt y Héctor Aguayo, recuerda que era rubio, de ojos azules y usaba bigote. Al día siguiente fueron trasladados a la cárcel. Dos días más tarde su hermano y él fueron liberados. Héctor Aguayo y los hermanos Schmidt no llegaron a la cárcel junto con ellos e ignora que sucedió con ellos, pues fueron apartados del grupo en el regimiento. Respecto de las demás personas que aparecen como víctimas en autos, sólo recuerda los nombres de los hermanos Schmidt y de Elías González,

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

pues fue el propio Héctor Aguayo quien se los presentó mientras estuvieron detenidos en el regimiento.

En declaración judicial de fecha 20 de mayo de 1991, rolante de fs. 517 a fs. 518 (Tomo II), replica que, en el mes de septiembre de 1973, fue detenido por carabineros de Curarrehue, llevado hasta Pucón, y desde ahí llevado hasta el regimiento Tucapel de Temuco. La primera vez fueron cuatro personas y la segunda detención iban más personas, el profesor Humaña y dos profesores más, tres funcionarios de "CONAF", él y su hermano Esteban Díaz Cortés; los transportaron en una camioneta de propiedad de Cloro Mena, los llevó personal de carabineros hasta la subcomisaria de Pucón y desde allí los llevaron al regimiento Tucapel de Temuco. En ese lugar se encontraron con los hermanos Schmidt Arriagada y Héctor Aguayo. Recuerda que les contaron que ellos eran un grupo de seis muchachos entre quince a dieciocho años y decidieron arrancar a Argentina, pero como algunos de ellos eran muy jóvenes, se pusieron a llorar por la mamá y tuvieron que regresar. Rememora que Aguayo dijo que venían por Caburgua cuando fueron detenidos por carabineros. Que efectivamente después de unos días llamaron a diez personas, entre las cuales se encontraban los hermanos Schmidt, Héctor Aguayo y su hermano Esteban Díaz, los llevaron a otras dependencias; los nueve restantes nunca más regresaron al regimiento y no los volvieron a ver. Su hermano regresó casi inmediatamente, ya que al pasarles lista lo dejaron inmediatamente. Posteriormente, cuando fue llevado a la cárcel de Temuco, encontró a otro joven conocido como Ricardo Aguayo y le comentó lo sucedido con su hermano, manifestando que no lo había visto. Después ya no volvió a verlos, porque junto a su hermano fueron puestos en libertad el dieciséis de septiembre de ese año y nunca más fueron detenidos. Quedó con la obligación de presentarse a firmar todas las mañanas en el cuartel de carabineros de Curarrehue. Que solo vio una vez a esos jóvenes ya que el mismo día que llegó, los llamaron y no los volvieron a ver. Ignora que sucedió con ellos, solo existen comentarios de que fueron fusilados.

En declaración judicial de fecha 18 de junio de 2015, rolante de fs. 2.101 a fs. 2.102 (Tomo VI), viene en complementar sus dichos en el sentido de que fue detenido la primera vez entre el doce y catorce de septiembre de 1973. Sus aprehensores fueron carabineros de Curarrehue, siendo trasladado junto a Luis Cid, Renato Santana y el jefe de "CONAF" de esa localidad, que era de apellido

Tapia. Recuerda que pasaron a la comisaría de Pucón donde los bajaron a todos e ingresaron a los calabozos. Allí estuvieron por lo menos un par de horas. De pronto reconoció de entre los detenidos a Héctor Aguayo Olavarría, alias "Chachi", a quien conocía desde que era un niño. Adiciona que este se veía muy maltratado físicamente, presentaba un testículo inflamado y tenía rapado el pelo en la parte superior de la cabeza. Que el "Chachi" le dijo que había sido detenido camino de Caburgua junto a otras personas con quienes pretendía huir hacia la Argentina, pero que en el trayecto uno de ellos se había arrepentido y se había puesto a llorar, por lo que decidieron regresar a Villarrica. En eso fueron interceptados por una patrulla que los detuvo, que habían sido interrogados respecto de la posesión de armas y el lugar donde las tenían escondidas, al tiempo que los sometieron a golpizas interminables. Que quienes venían de Curarrehue fueron nuevamente subidos un vehículo, no recuerda cual, y llevados a la segunda Comisaría de Temuco, donde pasaron la noche. Que Aguayo y los demás quedaron en Pucón. La segunda vez que vio al "Chachi" fue el día diecisiete de septiembre, cuando fueron nuevamente detenidos en Curarrehue y llevados al regimiento Tucapel de Temuco. Aguayo y otras personas estaban en esa oportunidad en la unidad militar. Recuerda que este se le acercó y conversaron nuevamente. A su parecer estaba con el pelo completamente rapado. Allí le presentó a unos jóvenes, dos de apellido Schmidt y dos de apellido González. El "Chachi" le dijo que sabía que los iban a matar porque alguno de los militares se lo había dicho. Que tenía mucho temor. Después fueron separados en grupos y en filas, quedando el "Chachi" en una fila junto a sus compañeros y a su hermano René Díaz; en tanto que él quedó en otra. Que de la fila del "Chachi" solo regresó su hermano, junto a quien después fueron llevados a la cárcel, al igual que Santana, Humaña y los demás que habían llegado de Curarrehue. Al "Chachi" y a sus amigos no los volvió a ver.

En declaración de fecha 19 de junio de 2015, rolante de fs. 4.141 a fs. 4.144, (Tomo XII), insiste que en 1973 vivía en Curarrehue junto a sus padres y sus hermanos, que fue detenido en dos oportunidades, una de ella fue el día 13 de septiembre de 1973 por carabineros, quienes llegaron hasta su domicilio, llevándolo al retén, donde estaban ya detenidos Renato Santana Dubreuil, Luis Cid Hernández y Benito Tapia. En el retén estuvieron en la guardia, lugar en el que había un teniente de apellido Figueroa Nieto, quién ordenó que fueran llevados a Temuco. Los subieron a una camioneta de propiedad de un civil de

nombre Clorindo Mena y emprendieron el viaje. Pasaron a la Comisaría de Pucón, donde los ingresaron a los calabozos. Allí estuvieron por lo menos un par de horas. Reconociendo de entre los detenidos a Héctor Aguayo Olavarría, alias "Chachi", a quien conocía desde que era un niño. Adiciona que este se veía muy maltratado físicamente, presentaba un testículo inflamado y tenía rapado el pelo en la parte superior de la cabeza. El "Chachi" le dijo que había sido detenido camino de Caburgua junto a otras personas con quienes pretendía huir hacia Argentina, pero que en el trayecto uno de ellos se había arrepentido y se había puesto a llorar, por lo que decidieron regresar a Villarrica. En eso fueron interceptados por una patrulla que los detuvo, que habían sido interrogados respecto de la posesión de armas y el lugar donde las tenían escondidas, al tiempo que los sometieron a golpizas interminables. Los que iban de Curarrehue fueron nuevamente subidos a un vehículo, no recuerda cual, y llevados a la segunda Comisaría de Temuco, donde pasaron la noche. Replica que Aguayo y los demás quedaron en Pucón, continua relatado lo que le aconteció y en lo adecuado que el 17 de septiembre de 1973, cuando fue nuevamente detenido por carabineros, esa vez junto a su hermano René Díaz Cortez y los profesores Humaña, Leal, Salazar, Saravia y otros más cuyos nombres no recuerda, fueron trasladados a su parecer en un vehículo particular y llegaron ese mismo día al regimiento Tucapel del Temuco, donde fueron ingresados a un gimnasio en el que había mucha gente. Esa fue la segunda vez que vio al "Chachi" Aguayo, quien estaba junto a otras personas en la unidad militar antes señalada. Recuerda que se le acercó y conversaron nuevamente. A su parecer esta con el pelo completamente rapado. Allí le presentó a unos jóvenes, dos de apellido Schmidt y dos de apellido González. El "Chachi" le dijo que sabía que los iban a matar porque alguno de los militares se lo había dicho. Que tenía mucho temor. Después fueron separados en grupos y en filas, quedando el "Chachi" en una fila junto a sus compañeros y a su hermano René Díaz; en tanto que ellos quedaron en otra fila. De la fila del "Chachi" solo regresó su hermano junto a quién después fueron llevados a la cárcel al igual que Santana, Humaña y los demás que llegaron de Curarrehue. Al "Chachi" y a sus amigos no los volvió a ver. Continúa su relato con relación a lo que le sucedió.

A.74. Manuel Antonio Humaña Jiménez

En declaración judicial de fecha 8 de febrero de 1991, rolante de fs. 501 a fs. 506 (Tomo II), replica que fue detenido por carabineros en Curarrehue y comunicado por el teniente Nieto Figueroa que debía ser llevado a Temuco, porque se había recibido instrucciones desde esa ciudad. Que había nueve personas en total, entre ellos Renato Saravia, Baldomero Salazar y otro de apellido Leal, Renato Santana y un tal "Luchín" y dos exalumnos suyos, Luis y Esteban Díaz Cortez. Que los llevaron hasta la unidad de carabineros en Pucón y posteriormente al regimiento Tucapel de Temuco. Allí pasaron por la guardia, los identificaron y quitaron la cédula de identidad y los llevaron a una especie de gimnasio cerrado, donde había aproximadamente ciento cincuenta o doscientas personas más. Al primero que reconoció fue a su alumno Héctor Domingo Aguayo Olavarría, quién al verlo se acercó y lo abrazó, poniéndose a llorar; le preguntó qué estaba haciendo allí y le dijo que el día antes, en circunstancias que iba a Curarrehue con un grupo de amigos, no dijo cuántos, fueron detenidos en el sector El Turbio de Pucón y que los habían llevado al regimiento. No recuerda si especificó quién lo había detenido, ni quienes eran sus compañeros de detención y por las circunstancias que estaban viviendo no se percató si él posteriormente se juntaba con otros jóvenes que hubiesen sido sus compañeros a los que había aludido. Recuerda que un sargento de ejército entró al gimnasio y conversó con muchas personas, les hacía preguntas y aconsejaba que dijeran la verdad que a nadie castigaron en esos momentos. Estuvieron allí hasta las dieciocho horas, cuando ingresó un capitán de ejército, de quién no sabe su identidad, les ordenó que se formaran y nombró a diez personas, las cuales debían dar un paso al frente, entre los nombrados estaban Héctor Aguayo y Esteban Díaz; los sacaron en dirección a la guardia y aproximadamente a las 20:30 horas regresó solo Esteban Díaz, ninguno de los otros nueve regresó al gimnasio. Que, según versiones de Díaz, los interrogaban uno a uno y cuando le tocó el turno a él, no lo interrogaron y lo mandaron de vuelta al gimnasio; no sabe que sucedió con las nueve personas restantes, lo que si tiene seguro es que, hasta las veintidós horas, en que fueron conducidos a la cárcel pública, no regresaron esas personas al gimnasio. Fueron llevados en camiones y buses del regimiento hasta la cárcel. En la cárcel se encontró con un hermano de Héctor Aguayo, llamado Ricardo y le dijo que su hermano estaba en el regimiento Tucapel y que allí había quedado al ser ellos trasladados hasta la cárcel. Que permaneció en la cárcel diecinueve días; a

los doce días llamaron voluntarios a declarar y reunió ciento veinte personas, los mismos que habían llegado detenidos desde Curarrehue, y se presentaron uno a uno frente a una comisión interrogadora compuesta por oficiales de ejército, no pudiendo distinguir grados, porque usaban el traje mimetizado; recuerda que a cargo del interrogatorio estaba un capitán, porque así lo nombraron sus compañeros que estaban de civil, como igualmente el jefe a cargo de los interrogatorios que era un señor de apellido Podlech de Temuco, que tenía el cargo de Fiscal Militar. Prosigue relatando lo que le acaeció y en lo adecuado que hasta su casa llegó en el mes de noviembre de 1973 el padre de Héctor Aguayo a requerir datos sobre su hijo ya que no supieron más de él desde que fue detenido y llamado en el regimiento Tucapel junto a ocho personas, de las cuales no se sabe nada hasta la fecha.

En declaración extrajudicial, de fecha 27 de noviembre de 2013, rolante de fs. 3.854 a fs. 3.857 (Tomo XI), replica sus dichos y reitera que fue detenido el día 17 de septiembre de 1973 en su domicilio en Curarrehue, por dos carabineros del retén Curarrehue. Lo llevaron detenido junto a los profesores Saravia, Salazar y Leal, hasta el mencionado retén donde se les informó que por un bando militar quedaban en calidad de detenidos y debían ser puestos a disposición de la Fiscalía Militar de Temuco. Fueron trasladados hasta la tenencia de Carabineros de Pucón, para posteriormente continuar viaje a Temuco al Regimiento de Infantería de Temuco, al cual llegaron a eso de las 13:00 o 14:00 horas. Cuando pasaron por la Tenencia de Carabineros de Pucón, solicitó hablar con el capitán Bustos Letelier, a quien conocía y le comentó lo que le estaba pasando, respondiéndole que éste que no estaba en conocimiento del bando militar u orden que disponía su detención, limitándose a decir que debía quedarse tranquilo. Agrega que junto a los profesores iban también detenidos unos funcionarios de "CONAF" y un señor de apellido Matta. Al llegar a Temuco les quitaron las cédulas de identidad y los ingresaron a un gimnasio, el cual estaba lleno de personas detenidas, recordando que encontró a un alumno y vecino de Curarrehue de nombre Héctor Aguayo Olavarría, a quién conocía por el apodo del "Chachi", quien al verlo le comentó que había sido detenido por una patrulla de carabineros cuando junto a unos amigos iba camino a Caburgua o Curarrehue; no recuerda bien, pero el caso es que lloraba cuando le contaba esa situación, dándose cuenta que estaba muy asustado, por lo que trató de calmarlo. Posteriormente, a eso de

las 18:00 horas, un oficial con el grado de capitán, les ordenó a todos los detenidos salir del gimnasio y les pidió que se formaran. Ese militar sacó una lista y llamó a diez personas dentro de las cuales estaba “El Chachi”, Esteban Díaz Cortés y un señor de apellido González; a ellos los separaron del grupo y cerca de las 22:00 horas regresa al gimnasio solamente Esteban, quién les comentó que al resto de los detenidos los habían ingresado a una dependencia y a él le habían ordenado regresar, perdiendo todo tipo de contacto con las demás personas. Que posteriormente a eso de las 00:00 horas fue trasladado, junto a los profesores antes mencionados y otros detenidos, hasta la cárcel pública de Temuco, donde permaneció cerca de 19 días. Señala que la última semana que estuvo en la cárcel, escuchó que el Fiscal Militar necesitaba diez voluntarios para declarar, esa situación se la informó a sus colegas, por lo que se inscribieron en el listado; es así que al día siguiente los comenzaron a llamar y fue presentado ante el Fiscal Militar Alfonso Podlech Michaud, quien le consultó su filiación política y otros antecedentes, recordando que le manifestó que nunca hubo orden en su contra y le dio a entender que su detención y la de los demás profesores fue por iniciativa propia de los carabineros de Curarrehue, representándole su molestia por ese hecho, ya que según el fiscal, ellos no debían estar detenidos, declarándole en ese momento que quedaría en libertad, situación que se llevó a cabo el día 5 de octubre de 1973. Refiere que el 7 de octubre de 1973, nuevamente fue detenido por una patrulla de la Fuerza Aérea de Chile de dotación de la Base Aérea Maquehue, y junto a los mismos profesores fue trasladado hasta el Retén de carabineros de Curarrehue relatando lo acontecido en esa oportunidad.

A.75. René Esteban Díaz Cortez

En declaración extrajudicial de fecha 13 de abril de 2011, rolante de fs. 474 a fs. 475 (Tomo II), proclama que viajó a Curarrehue a la casa de sus padres a celebrar el cumpleaños de su madre. Recuerda que fue la mañana del día siguiente cuando se encontraba en la casa de sus padres, llegó una patrulla de carabineros del retén del sector, quienes se llevaron detenido a su hermano Juan Luis, para posteriormente regresar una hora más tarde a detenerlo a él. Los trasladaron hasta la ciudad de Temuco, hasta el regimiento de Infantería N° 08 Tucapel, donde fueron ingresados en un gimnasio, lugar donde había más personas detenidas y particularmente un grupo de ocho detenidos aproximadamente todos sentados en el suelo con las piernas cruzadas,

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

amordazadas y con sus manos amarradas a la espalda. Dentro de ese grupo de se encontraba Héctor Domingo Aguayo Olavarría, a quien conocía desde Curarrehue con el apodo del "Chachi". Ese mismo día, pero ya en horas de la tarde sacaron a todos los detenidos al patio del regimiento, lugar donde los formaron y un militar, del cual desconoce rango e identidad, escogió un grupo de ocho a diez personas dentro de las cuales estaba Aguayo Olavarría y él, y los llevó hasta un calabozo ubicado en la sala de guardia que se ubica en la entrada del regimiento Tucapel. Pasada algunas horas, lo sacaron del calabozo y lo devolvieron al gimnasio integrándose al resto de los detenidos, dentro de los cuales se encontraban su hermano Juan Luis y Manuel Humaña Jiménez, quien era profesor y también iba detenido desde Curarrehue junto a ellos. Esta fue la última vez que vio a Domingo Aguayo, quien quedó en el calabozo de la guardia del regimiento. Respecto a la militancia política de Héctor Aguayo Olavarría, ignora si era militante de algún partido político y solo sabe que fue detenido en un paso fronterizo por una patrulla de carabineros, la cual estaba a cargo de un oficial que no pertenecía al retén de Curarrehue.

En declaración extrajudicial de fecha 13 de octubre de 2011, rolante de fs. 584 a fs. 585 (Tomo II), reitera que en su estadía en calidad de prisionero en el regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco, pudo ver que se encontraba detenido Héctor Aguayo Olavarría, quien también era oriundo de la ciudad de Curarrehue. Que las demás personas y cuyas identidades corresponden a Hugo y Elías González Ortega, Juan y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa y Raúl Figueroa Burkhardt, no recuerda haberlas conocido. Preguntado dice que no fue interrogado por personal militar, a pesar de que en un momento uno de los militares lo sacó del gimnasio y lo llevó junto al grupo donde estaba Héctor Aguayo, pero sin mediar explicación uno de los militares ahí presentes lo regresó nuevamente al gimnasio, lugar donde estaban sus conocidos de Curarrehue, junto a su hermano Juan Luis. Recordando que el lugar donde lo habían llevado los militares se ubicaba, a su parecer, a la entrada del regimiento, cree que ese lugar correspondía a la guardia del regimiento, siendo ese lugar la última vez donde vio a Héctor Aguayo. Se le preguntan otras cosas.

A.76. Francisco Jerónimo Matta Iturra

En declaración extrajudicial de fecha 13 de marzo de 2012, rolante de fs. 626 a fs. 627 (Tomo II) arguye que es hijo de don Francisco Matta Aro, quien fue

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

detenido en su fundo de Palguin Bajo, entre los días 13 y 14 de al año 1973 a manos de personal de carabineros de la comisaría de Pucón, recordando que uno de sus aprehensores correspondía a un capitán de carabineros de apellido Partarriet. Su padre fue detenido y trasladado en su propia camioneta, en primera instancia hasta la comisaría de Pucón, para luego ser derivado junto a Héctor Aguayo Olavarría y otro joven hasta la ciudad de Temuco, específicamente hasta el regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco, lugar donde al llegar quedaron a disposición del fiscal militar Alfonso Podlech Michaud, quien dispuso la expulsión de su padre por ser financista del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, hecho que era totalmente falso. Su padre, en más de una ocasión le hizo referencia que en el caso de Héctor Aguayo Olavarría y el joven que lo acompañaba, el fiscal Podlech, hizo mención, que se encargaría de ellos, no haciendo mayores comentarios. Esa fue la última vez que su padre vio a Héctor, debido a que en horas de esa misma noche fue trasladado hasta la cárcel pública de Temuco, lugar donde permaneció recluido cerca de diez días. Interrogado sobre Héctor Aguayo Olavarría, señala que lo conocía, ya que su padre era del partido Socialista y también amigo de su familia.

En declaración judicial de fecha 31 de julio de 2012, rolante de fs. 786 a fs. 787 (Tomo III), ratifica su declaración extrajudicial y afirma que está seguro de que fue el abogado Alfonso Podlech Michaud quien interrogó a su padre y a Héctor Aguayo Olavarría, porque su padre se lo dijo. Está seguro de que éste era el verdadero fiscal militar en Temuco y utilizaba al mayor Jofré como pantalla, ya que fue el propio Podlech quien le dijo a su padre que lo iba a expulsar y pudo comprobar su autoridad cuando conversó con éste. En cuanto a Héctor Aguayo Olavarría, lo conoció puesto que su padre Francisco Aguayo, fue candidato a regidor en 1967 junto con su persona. Reitera que su padre le dijo que Podlech junto con asegurarle que se iría expulsado, ordenó a Aguayo y a otra persona quedarse en la fiscalía para ser interrogados. Adiciona que Podlech ordenó la expulsión de otros ciudadanos extranjeros como Aberto Malvaldi que era el dueño de la radio La Frontera y concesionario del teatro municipal de Temuco, don Máximo Eitel, presidente del Banco Sur.

A.77. José Eliseo Arriagada Vergara

En declaración extrajudicial de fecha 15 de noviembre de 1995, rolante de fs. 54 (Tomo I), funda que es tío de Carlos y Ricardo Schmidt Arriagada,

desaparecidos desde el 13 de septiembre de 1973, que el 11 de septiembre de 1973, concurrió a Temuco a realizar diligencias a la oficina de tierras. Debido a que ese día ocurrió el golpe de Estado, debiendo quedar en la ciudad hasta el 13 en la mañana, fecha en la cual le autorización regresar a su casa. Al llegar al domicilio, su esposa le informó que los sobrinos Carlos y Ricardo, junto a los hermanos Hugo y Elías González Ortega, Juan de Dios Cabrera Figueroa y Héctor Aguayo Olavarría, había pasado la noche en su casa, y que se habían ido el día 12, en horas de la tarde con dirección a la frontera, tomando el camino Faja Molco, con la intención de pasar a Argentina. Según le dijo su esposa, esta determinación la tomaban porque tenía miedo a ser detenido, por cuanto todos pertenecían a juventudes socialistas. Después de lo narrado no se supo más de ellos, y uno diez años después, por comentarios se enteró que el grupo de jóvenes los había detenido en el trayecto y que lo habrían trasladados a la tenencia de carabineros de Pucón. También se le informó que el carabinero Quezada (fallecido), le comentó que no buscarán más a los jóvenes por cuanto ya no existían. De acuerdo con las averiguaciones de parte de la familia, no tuvieron una respuesta oficial sobre la suerte corrida por sus sobrinos. Que su hermana Aurora falleció intentando obtener antecedentes en la intendencia de Temuco.

A.78. Maria Inés Vásquez Ceballos

En declaración extrajudicial de fecha 15 de noviembre de 1995, rolante de fs. 55 a fs. 56 (Tomo I), explaya que es madre de Alejandro Escobar Vásquez desaparecido desde el día 13 de septiembre de 1973. Su hijo desapareció a los 18 años, soltero y trabajaba en una tornería, como operario. Pertenecía a las juventudes socialistas. En relación con la desaparición de su hijo, señala que el 11 o 12 de ese mes, carabineros allanó su domicilio al igual que otros del vecindario, en busca de armas o elementos políticos. Ese día estaba sola con sus hijos pequeños, Alejandro estaba en la casa de su hermana Adela. Carabineros al ver que no había lo que buscaban, se retiraron. El 13 de septiembre de ese año, Alejandro le comunicó en la mañana, que se iba con unos amigos del partido a Argentina, debido a que temía ser detenido o muertos por la represión. Alrededor de las 14:00 horas, sacó ropa de vestir y abrigo, le preparó cosas para comer. Desde ese momento nunca más ha vuelto a ver su hijo. En ese tiempo nunca tuvo ningún tipo de información sobre lo que ocurrió con esos jóvenes, no obstante haber conversado con madres de los otros muchachos que salieron con su hijo.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Que hubo muchos comentarios entre los que recuerda, es que habían sido detenidos cuando trataron de cruzar la frontera y otro que decía que se encontraba viviendo en Argentina. No tiene conocimiento de lo ocurrido con ellos, ni quienes pudieron ser los autores de la detención.

A.79. Ricardo Secundino Figueroa Burkhardt.

En declaración extrajudicial en la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de fecha 29 de agosto de 1990, rolante de fs. 1.049 a fs. 1.050 (Tomo III). Expuso que el día 14 de septiembre un grupo de muchachos vinculados al partido socialista de Villarrica, su hermano, dos hermanos de apellido Gonzalez y uno o dos de apellido Schmidt, deciden huir hacia Argentina, por la ruta de Pucón. Hasta ese día estos jóvenes no habían sido perseguidos ni hostigados y piensa que su huida había mucho de aventura. No hay certeza de su detención, pero hasta hoy no se han vuelto a tener noticias de ellos. En los días posteriores hubo un suicidio en el río Toltén y en la búsqueda de su cuerpo, alguien vio el de su hermano, un señor Villalobos. Agregó que en Villarrica se sabe que hubo fusilamientos en el río Toltén.

A.80. Juan Escobar Vásquez (20 años a la época de los hechos).

En declaración extrajudicial de fecha 5 de octubre de 2015, rolante de fs. 2.226 a fs. 2.227 (Tomo VII), señala que es hermano de la víctima Alejandro Escobar Vásquez, quién se encuentra desaparecido desde el día 13 de septiembre de 1973, cuando dejó el domicilio familiar tratando de escapar de Villarrica junto a un grupo de amigos. Respecto a su hermano Alejandro, señala que, para septiembre de 1973, tenía la edad de 17 años, ya había salido del colegio y solamente se dedicaba a trabajar de manera esporádica. Hace presente que era simpatizante de las juventudes socialistas. Sobre sus amistades, recuerda a los hermanos Schmidt, principalmente porque con ellos fue con los que intentó escapar a Argentina junto a otros jóvenes. Éste habría salido a la una de la tarde del hogar, sin dar información respecto a dónde se dirigía, solo sabe que le dijo a su madre que se tenía que ir, para lo cual ella le pasó una frazada y alimentos. Posteriormente, estando en Concepción, se enteró que el hogar de sus padres fue allanado por personal de ejército, siendo esa situación la que hizo decidir a sus padres de manera definitiva no hacer mayores averiguaciones. Lo único que supo en una fecha posterior, fue que del grupo que escapó con su hermano había dos o

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

tres personas más de las ocho que se conoce, quienes a mitad de camino decidieron regresar a Villarrica.

A.81. Vicente Edmundo Escobar Vásquez

En declaración extrajudicial de fecha 9 de octubre de 2015, rolante de fs. 2252 a fs. 2253, (Tomo VII), señala que es hermano de la víctima Alejandro Escobar Vásquez, quien desde el día 13 de septiembre de 1973 se encuentra detenido-desaparecido. Deja en claro que por los antecedentes que le aportó en vida su hermana Carmela, pudo enterarse que su hermano había intentado huir de Chile junto a un grupo de personas, de las cuales regresaron tres a Villarrica.

A.82. David Iván Figueroa Burkhardt

En declaración extrajudicial de fecha 14 de noviembre de 1995, rolante de fs. 57 (Tomo I), arguye que es hermano de Marcial Figueroa Burkhardt desaparecido en los días posteriores al 11 de septiembre de 1973. En esa época se encontraba trabajando en Temuco, aproximadamente el 17 de septiembre de ese año, llamó a su madre Olga Burkhardt Gabilan a Villarrica, quien le informó que su hermano se había marchado días antes hacia Argentina, en compañía de unos amigos. Desde esa fecha no volvieron a tener noticias de su hermano. Posteriormente escucho una serie de rumores, relacionado con el paradero de Raúl, que lo habrían visto en Argentina, que amigos de él habían vuelto a Chile, que lo habían matado en el puente del río Toltén, todos esos dichos resultaron ser rumores, ya que nunca más supo noticias concretas de su hermano. En lo personal no efectuó diligencias para dar con el paradero de su hermano, al parecer su madre tampoco las efectuó, debido al clima reinante en la época.

En declaración extrajudicial de fecha 11 de mayo de 2012, rolante de fs. 746 a fs. 747 (Tomo III), en lo pertinente dice que Raúl Marcial, era el menor de sus hermanos, para esa época tenía 23 años, residía en Villarrica, junto a su madre. Que Raúl perteneció a la Armada de Chile hasta 1970, cuando fue dado de baja. Dice no tener antecedentes en cuanto a la detención de su hermano, salvo que se había ido a Argentina junto a un grupo de amigos. Lo anterior, le fue informado por su madre vía telefónica. En ese momento no le dio mayor importancia a esa situación, ya que creyó que éste se había ido en busca de trabajo a ese país. Con el paso de los años, circulaban rumores en relación con el destino de su hermano, les comentaron que fue visto en la ciudad de Neuquén, que incluso que estaba en Brasil, pero eran rumores sin relevancia, porque está

seguro de que Raúl hubiera tomado contacto con algún integrante de la familia. Espeta que su hermano Ricardo asumió el liderazgo en la familia para efectuar averiguaciones sobre el paradero de su hermano. Eso fue cuando regresó la democracia a Chile, incluso este declaró en Pucón, y dio muestras de sangre, al objeto de constatarlas con los cuerpos encontrados en la época, pero no hubo resultados positivos. Señala que, en el año 1980, mientras estaba de paso en Villarrica, se le acercó un hombre, cuya identidad desconoce, pero trabajaba como pescador o botero, quien le comentó que había visto el cadáver de su hermano flotando en el río Toltén junto a otros cuerpos enredados en unos matorrales que había a orilla de ese río. Ese hombre le comentó que dicho lugar estaba en la Curva del Toro, río Toltén.

A.83. Luisa Noemí González Ortega

En declaraciones extrajudiciales de fecha 26 de febrero de 2012, rolante de fs. 594 a fs. 595 (Tomo II), indica que es la hermana de Elías Dagoberto y Hugo Arner González Ortega. Para el año 1973 tenían la edad de 25 y 23 años respectivamente, y según su recuerda eran militantes de la juventud del Partido Socialista. En esa época residían en la casa de sus padres en Villarrica. Llegado el 11 de septiembre del año 1973, fecha en que ocurrió el golpe de Estado, sus hermanos se colocaron nerviosos debido a los constantes bandos militares que se publicaban en los medios de comunicación y por ese motivo, creyendo que serían llamados en algún momento decidieron, junto a otros integrantes del Partido Socialista, planificar su salida de Chile hacia Argentina por un paso no habilitado ubicado en la comuna de Curarrehue. Esta situación está en su conocimiento porque recuerda que se lo manifestaron a su padre Marcos (fallecido). El día 14 de septiembre del año 1973, en horas de la tarde, sus hermanos se fueron junto a los hermanos Juan y Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Aguayo Olavarría y Raúl Figueroa Burkhardt, con quienes se reunirían esa tarde en la subida de "Piedra", la que se encuentra a la salida de Villarrica. Esa fue la última vez que vio a sus hermanos. Posteriormente, durante el mes de noviembre del año 1973, mientras visitaba a su hermano Othniel, quien estaba detenido en la cárcel pública de Temuco, decidió, por consejo del familiar de una persona detenida en ese lugar, concurrir hasta el Regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco a consultar si ellos se encontraban en ese lugar. Concurrió en dos oportunidades al mencionado recinto

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

militar se presentó en la guardia de este y uno de los soldados le permitió revisar los listados de los detenidos que ahí se encontraban, no logrando ubicar a sus hermanos. Creyendo que habían logrado llegar hasta Argentina, fue entre los meses de febrero a diciembre del año 1974, hasta las ciudades de Junín, Cinco Saltos, General Roca, Luis Beltrán y Buenos Aires, lugares donde publicó avisos en las distintas radioemisoras sin lograr resultados positivos. Desde ese entonces perdió las esperanzas en encontrarlos, y debido a la situación que vivía el país en ese momento, por temor, no quiso seguir efectuando averiguaciones, sino hasta cuando regresó la democracia al país. Por intermedio de una hermana de Héctor Aguayo Olavarría, supo que el grupo de jóvenes integrado por sus hermanos había sido detenido en Curarrehue por efectivos de carabineros de la comisaría de Pucón y que posteriormente habrían sido trasladados en helicóptero hasta el Regimiento de Infantería N° 08 Tucapel de Temuco. Lo anterior concuerda, porque un amigo de la familia de apellido Guevara, quién estuvo detenido en el regimiento Tucapel, le mencionó a una prima Sudelia Castro González, que pudo ver a sus hermanos llegar al mencionado regimiento en calidad de detenidos.

A.84. Ruth Alicia González Ortega

En declaración extrajudicial de fecha 15 de noviembre de 1995, rolante a fs. 49 (Tomo I), comunica que es hermana de Hugo Arner y Elías Dagoberto González Ortega, ambos desaparecidos desde el 13 de septiembre de 1973. Después del 11 de septiembre del año en cuestión, sus hermanos Hugo y Elías, les comunicaron a sus padres que se irían el día 13 hacia Argentina, debido a que eran requeridos por carabineros de Villarrica, por pertenecer a las juventudes socialistas. El día 12 de septiembre del año en mención, sus hermanos salieron de la casa alrededor de las cuatro de la tarde, en dirección a la población Vista Hermosa, donde se iban a encontrar con los hermanos Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Aguayo Olavarría y Raúl Figueroa Burkhardt, desde esa fecha no ha tenido noticias de sus hermanos. Posteriormente su madre con su hermana Luisa realizaron diversas diligencias, con la finalidad de poder ubicar a sus hermanos, tales como en el regimiento Tucapel, cárcel, estadio de Temuco, comisaria de carabineros de Villarrica, en todos los lugares, no obtuvieron ninguna respuesta positiva del paradero de Hugo y Elías. Aproximadamente en el año 1991, interpuso una denuncia en el Juzgado del Crimen de Pucón, por presunta desgracia en favor de sus hermanos y los

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

demás muchachos que los acompañaron en su huida hacia Argentina. Por último, debe señalar que desde esa fecha que sus hermanos se fueron a Argentina, nunca más ha tenido noticias de ellos.

En declaración judicial de fecha 17 de mayo de 2012 rolante de fs. 679 (Tomo II), ratifica su declaración extrajudicial de fs. 49. Y en lo pertinente dice que inmediatamente después de ocurrido el golpe militar su casa fue allanada por militares que estaban en el sector y carabineros de Villarrica. Recuerda que los uniformados apuntaron sus armas en contra de su padre a la vez que le preguntaban por armas. Este procedimiento se repitió en varias oportunidades, antes de que sus hermanos decidieran huir. También estos allanamientos sucedieron después de que sus hermanos se fueron, incluso hasta pasado dos años de ocurrido el golpe militar. Que incluso en una oportunidad su hermano mayor Otniel, se asustó tanto por un allanamiento que huyó de la casa, siendo perseguido por carabineros quienes le dispararon sin herirlo y lo detuvieron. Su hermano fue llevado al regimiento Tucapel donde fue torturado.

En declaración extrajudicial ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de fecha 29 de agosto de 1990 rolante a fs. 1.036 a fs. 1.037 (Tomo III), agrega que Elías era el hijo mayor de 25 años, trabajaba en un balneario del Banco Estado en Villarrica, hasta el 13 de septiembre de 1973, salió a su trabajo como cualquier día, se quedó de juntar en la casa de un padre de los “chicos, hacia Licanray, era en la casa del padre de Juan Cabrera. Hugo estaba en la casa y dijo que se iba con Elías, los Schmidt Escobar y Cabrera. Se iban a la Argentina, llevó ropas, pretendían escapar, los estaban buscando, habían ido carabinero de Villarrica. Un carabinero amigo de ellos de apellido Krause, les dio la idea de que se fueran. Nunca supieron si se reunieron o no en esa casa, eran todos, los seis militantes del Partido Socialista en Villarrica, los carabineros iban y preguntaban por ellos, según ha sabido, era un grupo de diez “muchachos, los que huyeron”. Según se piensa que los tomaron presos en Curarrehue, fueron llevados en una camioneta particular, tuvieron un accidente, llegaron todos al hospital, tal vez está registrado su ingreso (que tendría que ser a partir del 13 de septiembre), luego fueron sacados, llevados al puente del río Toltén para ser fusilados. Recientemente les han contado esta historia. Los padres aún no se enteran de esta versión, piensan que aún están vivos. Ellos habían escuchado antes que habían fusilado en el puente, se supo que en el río había un cuerpo flotando, luego

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

los carabineros acordonaron el lugar. En las noches se escuchaban metralletas y luego llegaban los bomberos a lavar allí. Hay una persona que vio sangre y masa encefálica allí, se llamaba Minerva Toro, también vio un cadáver que flotaba. Ambos eran solteros, sin hijos, vivían los once en la casa familiar, ellos hicieron gran cantidad de averiguaciones, incluso gente que llegaba a la casa decía haberlos visto, se hospedaban y comían gratuitamente hasta que descubrían el engaño. El padre de las víctimas es pastor evangélico. Con posterioridad carabineros siguió llegando regularmente a la casa, siempre buscando armas, todo esto hasta el año 1980, registraban todo. Daban vuelta todo, lo hacían con gran prepotencia. En una oportunidad un hermano suyo tuvo miedo, huyó, le dispararon y posteriormente lo detuvieron, así estuvo tres meses, en la cárcel o el regimiento de Temuco, nunca quiso contar. Respecto del caso de Cabrera, puede decir que tenía dieciocho años, estudiaba, militaba el partido socialista, huyó con todo el grupo. Suma que los familiares de los Schmidt, puede que tengan otros datos, hay quienes decían que los habrían visto en Huife de Pucón hacia la cordillera, un lugar con cajones cordilleranos.

A.85. Rita Aurora Ortega Muñoz

En declaración extrajudicial de fecha 15 de noviembre de 1995, rolante de fs. 48 (Tomo I), ciñe que es la madre de Hugo Arner y Elías Dagoberto González Ortega, quienes se encuentran desaparecidos desde el 13 de septiembre de 1973. Comunica que el día 12 de septiembre del mismo año, sus hijos le comunicaron que se irían hacia Argentina, debido a que con anterioridad habían sido amenazados por carabineros, ya que ambos eran militantes de las juventudes socialistas. Ese día en horas de la tarde, salieron de la casa a reunirse con sus compañeros; los hermanos Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Aguayo Olavarría y Raúl Figueroa Burkhardt, con los cuales realizarían el viaje. Siendo esta la última vez que vio a sus hijos. Dado que pasó el tiempo y no tuvo noticias de ellos, como estaba acordado, comenzó junto a su hija a realizar diversas averiguaciones con el propósito de obtener algún antecedente respecto a estos jóvenes, para tal efecto concurrió hasta el regimiento Tucapel, hospitales de la zona, cárceles y comisarías de carabineros. En ninguno de estos organismos se le dio una información que permitiera saber de ellos.

A.86. Elisa Margarita Schmidt Arriagada

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

En declaración extrajudicial de fecha 07 de marzo de 2012, rolante de fs. 621 a fs. 623 (Tomo II), aduce en lo respectivo que es hermana de Carlos y Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, quienes desde el día 13 de septiembre del año 1973, se encuentran en calidad de desaparecidos. Para el año 1973, su hermano Carlos tenía la edad de 21 años, trabajaba como empleado de la Corporación de la Vivienda "CORVI" en Villarrica y vivía con su esposa de nombre Elena Santibáñez Fernández (fallecida), su hermano era militante del Partido Juventudes Socialistas, para lo cual se encontraba inscrito. Ricardo Augusto, tenía la edad de 20 años, cursaba el cuarto año medio del Liceo Industrial de Villarrica y vivía con su hermano Carlos y su esposa, en el inmueble ubicado en la calle José Miguel Carrera esquina Inés de Aguilera, comuna de Villarrica, debiendo hacer presente que éste no tenía militancia política. En su caso, vivía con su madre de nombre Aurora Arriagada Vergara (fallecida), en el inmueble ubicado en la calle Gerónimo de Alderete, de la comuna de Villarrica, existiendo además dos hermanas de nombres Isolde Yolanda y Silvia Luz, quienes residían y trabajaban en la ciudad de Temuco. Una vez producido el golpe militar el día 11 de septiembre de 1973, recuerda que la sorprendió en la ciudad de Temuco, por lo que no pudo regresar a Villarrica ese día, haciéndolo el día 13 de septiembre, en horas de la tarde. Al llegar a la casa su madre le señala que sus hermanos Carlos y Ricardo, se encontraban preparando sus cosas en la casa de un tío de nombre Eliseo Arriagada Vergara (fallecido), ya que iban a cruzar la frontera hacia Argentina por la cordillera. A raíz de lo anterior, se trasladó de inmediato donde se encontraban y pudo conversar con ellos por última vez, percatándose que en la misma situación estaban los hermanos Hugo y Elías González, Juan Cabrera, Raúl Figueroa, Alejandro Escobar y Héctor Aguayo. Recuerda que le señalaron que abandonarían el país, ya que temían por sus vidas, ya que por sus militancias políticas las cuales eran de todo conocimiento de Villarrica y alrededores, serían pronto detenidos por las fuerzas armadas. Posteriormente, permaneció con ellos hasta que iniciaron su viaje a pie, recordando que todo el grupo tomó un camino interior que va hacia Curarrehue, llamado Llancalil, sector Huife Alto, ellos le manifestaron que harían abandono del país por ese sector cordillerano. Pasados dos semanas y al no tener noticias de sus hermanos, su madre comenzó a efectuar consultas a los familiares de los otros jóvenes, donde tuvo como respuesta que ninguno de ellos se había comunicado con sus respectivas familias.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Luego de varios meses, su madre se enteró por otra persona, de quien ignora su identidad, que sus hermanos y el resto del grupo, habían sido detenidos en la cordillera y ejecutados posteriormente, razón por la cual su madre quiso en cierta medida olvidar este comentario, pero le trajo bastantes complicaciones de salud, falleciendo al año después. El año 1990, su hermana Silvia se acercó a los estamentos de los Derechos Humanos de la ciudad de Temuco, con la finalidad de entregar los antecedentes respecto a la situación de sus hermanos Carlos y Ricardo, instancia donde en conversaciones con familiares de los otros jóvenes que formaban parte del grupo, se informó de varios comentarios y antecedentes con respecto a las circunstancias en que fueron detenidos y en los posibles lugares donde fueron ejecutados, como también donde podrían encontrarse sepultados. Afirma que en una oportunidad y en fecha posterior a la desaparición de sus hermanos, su madre le comentó que el carabinero de apellido Vergara, perteneciente a la tenencia de Villarrica, se habría acercado a la casa y le había manifestado que sus hijos los habían matado. Del mismo modo, en fecha posterior al 11 de septiembre de 1973, don Carlos Barra persona conocida en Villarrica facilitó su camioneta blanca a carabineros de Villarrica para llevar a cabo detenciones de personas en la zona, presumiendo que posiblemente si sus hermanos y el grupo fueron detenidos por los carabineros en la cordillera, hayan sido trasladados en dicho vehículo. Finalmente hace entrega de documentos.

A.87. Silvia Luz Schmidt Arriagada

En declaración extrajudicial de fecha 14 de noviembre de 1995, rolante de fs. 50 a fs. 51 (Tomo I), que, debido a los sucesos del 11 de septiembre de 1973, hubo mucha persecución a los que eran partidarios del depuesto gobierno. Debido a lo anterior sus hermanos optaron por huir de Villarrica por temor a que fuesen detenidos. El día 13 de septiembre de ese año, al parecer ellos decidieron cruzar la frontera hacia Argentina, por el lado de Huife Alto, ubicado en el sector de Pucón – Curarrehue, según tiene entendido, esta operación la tenían pensada con otros jóvenes, entre ellos los hermanos Hugo y Elías González Ortega, Héctor Aguayo y Raúl Figueroa, entre otros que no recuerda sus nombres. Que en los días posteriores a la huida de sus hermanos y debido a que ellos no se habían comunicado con su mamá, personalmente concurrió a indagar sobre el paradero de ambos en el regimiento Tucapel de Temuco, fiscalía militar y cárcel de la ciudad, además de la segunda comisaría de carabineros, organismos en los

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

cuales no obtuvo respuestas positivas de sus hermanos. Transcurrido aproximadamente un mes del desaparecimiento de sus hermanos, su madre fue informada a través del cabo Eduardo Vergara y el carabinero Guido Krausse, ambos domiciliado en Villarrica, que, a sus hermanos, los habían capturado en la ocasión y que habían sido llevados hasta la comisaría de Pucón para posteriormente trasladados a la ciudad de Temuco, donde presumiblemente habían sido asesinados. Su madre Aurora del Carmen Arriagada Vergara, falleció en el año 1974, víctima de un ataque cardíaco, sin haber alcanzado a conocer el paradero de sus hermanos Carlos y Ricardo Augusto, quienes se encuentran desaparecido. Hace presente que su hermano Carlos era casado con Elena del Carmen Santibáñez Fernández.

En declaración judicial de fecha 14 de mayo de 1999, rolante de fs. 137 a fs. 138 (Tomo I), esgrime que es hermana de Carlos y Ricardo Schmidt Arriagada, desaparecidos desde el 13 de septiembre de 1973. Que en aquella época sus hermanos pertenecían las juventudes socialistas y a raíz del golpe de Estado del 11 de septiembre, y por temor a ser detenidos, decidieron junto a un grupo de amigos el día 13 de septiembre, intentar cruzar la frontera hacia la república de Argentina. Sus hermanos salieron de la casa de su madre en esa época, quien en esa época residía en Villarrica, en dirección a Huife Alto, pues allí intentarían efectuar la travesía. Que está completamente segura de que ese era su destino, pues se lo dijeron a madre, que incluso la esposa de uno de ellos se quedó con su madre. Que en esa época ella se encontraba en Temuco. El caso es que como no tuvieron noticias de sus hermanos, ya que no se comunicaban con ellos, que eran su familia, se preocuparon porque, además, sabían que había innumerables personas detenidas. Ante ello decidió comenzar a indagar en diferentes partes, por si acaso ellos hubieran sido detenidos, y es así como concurrió al regimiento Tucapel de Temuco, a la fiscalía militar, a cárcel y también a la segunda comisaria de Temuco, pero en ninguno de esos lugares aparecían ellos como detenidos, ni obtenía ningún dato tendiente a ubicarlos. Agrega que una hermana indagó con algún familiar de los otros jóvenes, con los cuales habían partido sus hermanos, pero estaban en las mismas condiciones que ellos, tampoco sabían nada del paradero de estos. Asimismo, pasado unos días, unos carabineros llamados Eduardo Vergara y Guido Krause quienes conocían a su madre, le comentaron que sus hermanos habían sido detenidos, que ellos los habrían visto, esto lo sabe

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

porque su madre le manifestó, pero al continuar con las indagaciones, siguieron sin obtener respuestas positivas, porque en ningún lado aparecían registrados como detenidos, y hasta el día de hoy continúan con las mismas incertidumbres, sin saber que fue de ellos y lo claro es que están desaparecidos.

En declaración extrajudicial de fecha 25 de julio de 1990, rolante de fs. 635 (Tomo II), insiste en que a su madre Aurora del Carmen Arriagada Vergara (fallecida) le fue informada a través del cabo Eduardo Vergara, que a sus hermanos los habían asesinado en Temuco, y que no se hiciera ninguna ilusión con respecto a ellos de encontrarlos con vida.

En declaración extrajudicial de fecha 29 de agosto de 1990, ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, rolante de fs. 1.043 a fs. 1.044 (Tomo III) expuso que el sargento primero Eduardo Vergara González y el carabinero Guido Krause informaron a la madre de la compareciente, doña Aurora del Carmen Arriagada Vergara, que Carlos y Ricardo Augusto habían sido capturados en esa oportunidad y traídos hasta la comisaria de Pucón y posteriormente trasladados a Temuco, ciudad en donde presumiblemente habían sido asesinados.

A.88. Ricardo Virginio Aguayo Olavarría

En declaración extrajudicial de 15 de abril de 2015 rolante a fs. 2.055 a fs. 2.057 (Tomo VI), que respecto a las circunstancias que rodearon la detención de su hermano, expresa que no fue testigo de esa situación, pero tiene claro que días posteriores al golpe de Estado, su hermano y sus amigos decidieron abandonar el país por temor a ser detenidos conforme a la información que diariamente salía en bandos militares y en la prensa local en el sentido que se mencionaba que toda persona de pensamiento distinto al régimen recién instaurado iba a ser exterminada. Esa situación la apoyó su padre por temor a que a Héctor le sucediera algo. Por esa razón, Héctor y sus amigos emprendieron viaje hacia la República Argentina, para lo cual pretendían pasar por el paso Huife tratando de eludir los controles fronterizos que existían en los otros pasos, es así como, cuando iba camino a Pichares en un bus, deciden bajarse antes de la bifurcación Caburgua-Huife donde emprenden caminata. Por lo que sabe, al cabo de un rato son interceptados por un vehículo particular en el cual iba personal de Carabineros de Chile de la tenencia de Pucón, siendo detenidos en ese lugar. Posteriormente, son trasladados a la tenencia de Pucón, donde les habrían cortado parte de su

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

cabello, para ser trasladados a la comisaría de Villarrica donde también les fue cortado el cabello. Por los antecedentes que maneja después de su estadía en Villarrica que no pasó más de un día, fueron trasladados hasta el regimiento Tucapel de Temuco donde permanecen detenidos dos días aproximadamente. En ese lugar encontró al profesor Humaña quien le comentó que vio a su hermano en el Tucapel y que habían conversado dentro de lo cual le dijo que Héctor le había dado los detalles de su detención. Que tomó contacto directo con don Gregorio y su esposa, quienes le comentaron que Héctor había pasado a su casa días atrás a solicitarles ayuda económica para regresar a Villarrica junto a unos amigos, dándole a conocer que había estado detenido en el regimiento Tucapel y que había sido dejado en libertad. Conforme a lo que le señaló don Gregorio le habría entregado ayuda y una vez que Héctor se retiró del domicilio, llegó personal de carabineros y ejército consultándole qué había pasado a hacer a su domicilio, a lo cual don Gregorio le respondió lo mismo que le comentó al declarante, y los efectivos militares procedieron a retirarse presumiendo que andaban siguiendo a su hermano y a sus amigos. Desde ese día no supieron nunca más de Héctor y hasta la fecha desconocen su actual paradero.

En declaración judicial de fecha 17 de abril de 2015 rolante a fs. 2.061 a fs. 2.062 (Tomo VI), ratifica su declaración y precisa además que la patrulla de carabineros y ejército que pasó a la casa de Gregorio Seguel Capitán lo hizo media hora después de que su hermano se había ido desde ese lugar. Añade que, por las conversaciones sostenidas con varias personas a lo largo de los años, especialmente con los señores Humaña y Díaz quienes estuvieron detenidos en la cárcel de Temuco y que conocían a su hermano, el grupo fue detenido mientras caminaban hacia la frontera cerca del cruce del camino de Caburgua hacia Curarrehue, por carabineros de Pucón que se movilizaban en una camioneta particular que pertenecía a Carlos Barra. Esto se lo dijo su hermano Héctor a Humaña y a Díaz porque esa camioneta antes había sido de su padre y éste se la vendió a Barra. Que en ese momento los jóvenes caminaban cuidándose de no toparse con un vehículo militar o de carabineros y no le tomaron importancia al móvil particular que se acercaba. Cuenta que su hermano reconoció el vehículo por sus colores blanco y celeste. Después de la detención fueron llevados a Pucón donde les cortaron el pelo a todos a media cabeza. Acto seguido los llevaron a Villarrica donde los carabineros de esa Comisaría les cortaron totalmente el

cabello y se burlaban de ellos. Esto lo supo por comentarios efectuados por el carabinero Joaquín López a una vecina de nombre Laura Pinilla hace muchos años.

En declaración judicial de fecha 17 de junio de 2015 rolante a fs. 2.103 a fs. 2.108 (Tomo VI), expresa que su hermana Sara Aguayo Olavarría, quien le dijo que una persona que trabajaba en correos de Chile y que era amigo de la familia encontró la cédula de identidad de su hermano en la orilla del río Toltén. A quien le gustaba mucho la pesca y siempre lo hacía en diferentes ríos. Fue durante esas jornadas que encontró el carné de su hermano a fines de 1973 mientras pescaba en el río Toltén. El 13 de septiembre de 1973 carabineros de Villarrica fue hasta su domicilio ubicado en calle Pedro Montt N° 967 en horas de la mañana. Recuerda que estaban tomando desayuno cuando tocaron a la puerta y su madre abrió. Entonces carabineros irrumpieron violentamente y allanaron la casa al tiempo que preguntaban por su hermano Héctor Aguayo. Como no lo encontraron salieron del domicilio y cuando estaban a punto de irse uno de ellos sugirió que lo llevaran detenido a él, cosa que hicieron. Relata que lo subieron al furgón policial y lo llevaron a la comisaría. Allí fui dejado junto a otras muchas personas en las pesebreras de las caballerizas. Después del mediodía apareció un microbús particular en el cual fueron todos subidos y llevados hasta el regimiento Tucapel. Cuenta que en la cárcel de Temuco estuvo junto Manuel Humaña, los hermanos Díaz, René Turumpil, todos de Curarrehue.

En declaración judicial de fecha 5 de noviembre de 2018 rolante a fojas 3.030 a fs. 3.031 (Tomo IX), atestigua que supo de la detención de su hermano Héctor y de su posterior traslado hasta el regimiento Tucapel de Temuco, dado que en una de las oportunidades en que estuvo detenido, se encontró con el mismo grupo de personas que fueron detenidos en Curarrehue y fueron quienes vieron a Héctor en el Regimiento Tucapel de Temuco, entre ellos, Manuel Humaña y los hermanos Díaz. Cree que su hermano efectivamente fue liberado del regimiento Tucapel de Temuco tras su paso aproximadamente el 16 de septiembre de 1973, pero sin embargo y por los antecedentes que maneja éste fue nuevamente detenido por militares de regimiento Tucapel de Temuco. Lo anterior lo dice porque Gregario Seguel Capitán, padrino de su hermana Evita, le señaló que cuando Héctor fue dejado en libertad, alrededor del 16 o 17 de septiembre de 1973, pasó a su casa y minutos más tarde su casa fue allanada por

carabineros y militares quienes le preguntaron "que había pasado a hacer mi hermano a su casa"; a consecuencia de ello es que militares le allanaron su casa inmediatamente. Gregario le señaló que Héctor andaba ese día junto a un grupo de jóvenes y fue el motivo el motivo por el cual él se fue rápidamente de la casa, sólo pasó a pedir dinero para regresar a la suya. Además, le indicó que, junto a su esposa, quisieron curar la herida de Héctor, pero éste no accedió dado que deseaba regresar pronto junto a sus compañeros a casa. Su detención surge como consecuencia que buscaban a Héctor y como aquel no se encontraba, carabineros se llevó al declarante. Es conducido a la cárcel pública de Temuco; según consta en el certificado de fs. 2.194. En la cárcel pública estuvo detenido con el grupo de Curarrehue, los cuales llegaron detenidos después que él; los hermanos Díaz, Manuel Humaña, Osvaldo Salazar.

A.89. Luis Robinson Bustos Letelier

En declaración extrajudicial de fecha 11 de diciembre de 1995, rolante de fs. 58 a fs. 59 (Tomo I), en lo pertinente respecto de lo que se le consulta y en relación con la detención de ocho jóvenes que intentaban cruzar a Argentina, exclama que no recuerda fecha exacta, pero entre el 13 y el 15 de septiembre de ese año, le correspondió efectuar un patrullaje desde Pucón hasta Curarrehue. Cuando se dirigieron a ese lugar optó por desviarse hacia el lago Caburgua y desde el puente El Turbio, unos tres kilómetros aproximadamente desde el lago hacia el camino a Curarrehue, ubicaron a un grupo de jóvenes tipo mochileros, los cuales andaban muy sucios y llevaban las frazadas enrolladas y terciadas en el pecho. La cantidad de éstos no la recuerda, pero eran más de seis. Al interceptarlos, personalmente les preguntó que hacia donde iban, a lo que le respondieron que se dirigían a Curarrehue, en ese momento les pidió su cédula de identidad, pero como ninguno de ellos portaba este documento, optó por detenerlos y subirlos a la camioneta en la cual se movilizaban. En ese momento dispuso que el cabo Monsalve, junto a dos funcionarios más que no recuerda los llevaran hasta el cuartel, mientras que él se quedó en el lugar junto a otros funcionarios y se trasladó a pie hasta el sector de Caburgua. Posteriormente cuando llegó la camioneta el cabo Monsalve le informó que los detenidos habían sido entregados en el cuartel sin novedad. Recuerda que esta detención se practicó alrededor de las 10:00 y 12:00 horas.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

En declaración judicial de fecha 03 de abril de 1996, rolante de fs. 84 a fs. 84 vuelta (Tomo I), expone que el día 13 de septiembre se detuvo a unos jóvenes, no recuerda si eran seis u ocho, se les detuvo en el camino saliendo de Pucón a Curarrehue, hacia el sector de Caburgua, caminaban hacia el puente, esto ocurrió en horas de la mañana, alrededor de las diez horas, venían todos con pelo desordenado, barbones y con frazadas amarradas en un costado todos ellos, se les interrogó y ninguno portaba identificación, ni dieron explicaciones claras de donde se dirigían, ni que andaban haciendo. En vista de eso, ordenó que fueran llevados detenidos a la comisaría que quedaba a unos cinco kilómetros de distancia, lo que fue cumplido por el cabo Monsálvez y dos carabineros más. Incluso en el libro de guardia de la época se dejó constancia que los detenidos que se individualizaban eran entregados al comandante, cuyo nombre se consignó, pero no lo recuerda y eran llevados al regimiento Tucapel de Temuco. En esa época todos los detenidos por estas situaciones especiales iban a dar al regimiento Tucapel de Temuco.

En diligencia de careo con Gonzalo Enrique Arias González, de fecha 26 de noviembre de 1999, rolante de fs. 181 a 181 vuelta (Tomo I), ratifica íntegramente su declaración y que él firmó el libro de novedades de la guardia y se llevó el parte respectivo de la detención a la Fiscalía Militar del regimiento Tucapel de Temuco. Manifiesta que, con respecto a los detenidos, fueron sacados de su unidad en un helicóptero de la fuerza aérea piloteado por el comandante Benjamín Fernández y por orden de la prefectura Cautín. Iban con destino al regimiento Tucapel e Temuco, donde ignora si llegaron.

En declaración judicial de fecha 23 de julio de 2003, rolante de fs. 370 a fs. 370 vuelta (Tomo I), dice que al revisar el libro de telefonemas se percató que decía más o menos textual “por orden de la Prefectura de Cautín deben ser entregado los detenidos al personal de la Fuerza Aérea para ser trasladados al Regimiento Tucapel. Dese cumplimiento. Por orden del Prefecto”.

En declaración judicial de fecha 06 de diciembre de 2004, rolante de fs. 413 a fs. 413 vuelta (Tomo II), invoca que personalmente vio el parte firmado por el suboficial mayor de apellido Burgos, que ordenaba poner a disposición de la Fiscalía Militar de Temuco a los ocho jóvenes que detuvo.

Declaraciones contenidas en Cuaderno Secreto

A.90. Celedonio Aníbal Aburto Fuentes,

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

En declaración judicial de fecha 02 de julio de 2019, rolante de fs. 125 a fs. 126 (Cuaderno Secreto), que para el año 11 de septiembre de 1973 se encontraba prestando funciones como soldado conscripto en la **compañía de plana mayor y servicios** del regimiento Tucapel de Temuco. Que efectivamente, como señaló en su declaración policial, existieron a contar del 11 de septiembre de 1973 personas detenidas por motivos políticos al interior del regimiento Tucapel de Temuco. Las salas de torturas quedaban ubicadas en la compañía de cazadores, para el lado norte, casi orillando la muralla de cemento, lugar donde habría como una caseta.

En diligencia de careo de fecha 19 de julio de 2019, rolante de fs. 130 a fs. 131 (Cuaderno Secreto), en lo pertinente comunica que se enteró que personas fueron ejecutadas en el regimiento, pero no tuvo conocimiento quien cargo sus cuerpos.

En declaración judicial de fecha 13 de febrero de 2020, rolante de fs. 172 (Cuaderno Secreto), reafirma aquella parte de su declaración de fs. 3.209 en la que señala que lo manifestado por el señor M.C. es perfectamente posible.

A.91. Oscar Alejandro Muñoz Venegas

En declaración judicial de fecha 09 de septiembre de 2022, rolante de 226 a fs. 227 (Cuaderno Secreto), en lo pertinente a la lectura de las declaraciones del testigo de iniciales M.J.C.S., el Tribunal le pregunta, ¿Qué puede opinar de estos dichos?, a lo que el deponente responde que la verdad de las cosas es que niega rotundamente todas esas calificaciones, porque jamás vio ni participó en esos hechos. Después con los días recibió comentarios, pero jamás participó en ver personas fusiladas o cargando camiones.

A.92. Declaraciones de testigo protegido M.J.C.S.

En declaración extrajudicial de fecha 08 de mayo de 2009, rolante a fs. 187 a fs. 189 (Cuaderno Secreto) interpreta que para el año 1973, tenía 19 años y a contar del mes de abril de ese año ingresó a efectuar su servicio militar obligatorio en el regimiento de Infantería N° 8 Tucapel. Manifiesta que efectivamente durante su permanencia en ese destacamento militar, estuvo inserto dentro de la **compañía de plana mayor y servicios**, cuyo comandante era el capitán Nelson Ubilla Toledo, quien según su recuerdo era el oficial encargado de las investigaciones de los presos políticos que se encontraban en el regimiento. Dentro de la compañía, se encontraba dentro de la segunda sección de ingenieros y telecomunicaciones, recordando al teniente Romilio Lavín Muñoz, como el oficial

a cargo de esta sección. Soflama que efectivamente existía un grupo operativo a cargo de los detenidos, a quienes interrogaban, este grupo estaba compuesto principalmente por oficiales y suboficiales. Que esta matanza no fue la única ocurrida al interior del regimiento Tucapel, puesto que a ellos se les obligaba, casi todas las noches a cargar camiones con cuerpos de víctimas o ejecutados políticos, los que por lo general.

En declaración judicial de fecha 23 de junio de 2009, rolante de fs. 190 a fs. 192 (Cuaderno Secreto), ratifica su declaración debiendo aclarar aquella parte en la que señala que casi todas las noches le correspondió cargar camiones con cuerpos de personas fallecidas. En realidad, esta actividad la realizó en dos oportunidades, aunque sabe que hubo más muertos, por los comentarios que se hacían al interior de la compañía por parte de los otros conscriptos. Recuerda haber recibido órdenes en dos oportunidades de subirse a un camión junto con otros conscriptos, para dirigirse a la isla Cautín. Al llegar a ese lugar, ya de noche en ambas ocasiones, tuvieron que subir diez cuerpos al camión; en la segunda oportunidad subieron ocho. En todos los casos los cuerpos fueron llevados al puente Allipen, donde fueron arrojados al río. Sustenta que las personas muertas que le correspondió subir a los camiones eran todos varones, quienes presentaban varios impactos de bala, las manos amarradas con cáñamo o alambre y estaban con su vista vendada. Estos cuerpos estaban todos en el sector del polígono de tiro. Antes y después de efectuar las misiones les advertían de guardar silencio respecto de lo que habían visto.

En declaración extrajudicial de fecha 01 de septiembre de 2015, rolante de fs. 3 a fs. 4 (Cuaderno Secreto), reafirma que era conscripto de la compañía de plana mayor y servicios del regimiento Tucapel de Temuco, perteneciendo a la sección de telecomunicaciones, que es efectivo que a los días posteriores al golpe de Estado le correspondió cargar cuerpos de fallecidos en camiones militares en el polígono de tiro de la isla Cautín, recordando que en la primera oportunidad en que fue hasta dicho lugar fue por orden del teniente Manuel Espinoza Ponce, quien era oficial de la segunda compañía de cazadores. Hace presente, que en dos oportunidades le correspondió cargar el camión militar con personas fallecidas, en la primera de ellas recuerda que eran diez cuerpos, todos de sexo masculino, cuyas edades fluctuaban entre los 25 a 30 años, no puede precisarlo. En la segunda oportunidad, no tiene claro si fue al día siguiente o a los dos días

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

del primer hecho, cargaron ocho cuerpos más, también de sexo masculino, pero en esta ocasión eran más jóvenes que en el caso anterior. En ambas oportunidades el camión salió en dirección al puente Allipen, conforme a lo que se comentaba en ese momento. Respecto a las fotografías que en el acto se le exhiben y cuyas identidades se le dan a conocer, como Héctor Aguayo Olavarría y los hermanos Elías y Hugo Gonzalez Ortega, comenta que recuerda los rostros de los hermanos antes mencionados, ya que conforme a lo recordado vio que los estaban torturando en una sala ubicada al interior de su compañía, donde estaban presentes los oficiales Vásquez Chahuán y Fernández Carranza, junto a un grupo de detectives. Hace referencia a esta situación, ya que parte de los detenidos eran llevados a esa "Sala de tortura", ante la vista de todos los que se encontraban en la compañía. De acuerdo con lo anterior, decanta que de los cuerpos que recogió en el polígono de tiro, recuerda al de identidad Elías Gonzalez Ortega, en cuya fotografía lo reconoce. Que el conscripto Valeria, jactándose de ese hecho les comentó la situación.

En declaración judicial de fecha 30 de mayo de 2017, rolante de fs. 35 a fs. 38 (Cuaderno Secreto), ratifico su declaración extrajudicial y desarrolla que el destino final era lanzarlos al rio, entonces si alguno estaba moribundo no iba a poder sobrevivir. Que quien daba las órdenes directas de estas ejecuciones era Alfonso Podlech, se comentaba. Detalla que cuando retiró los ocho cuerpos, estaba de noche y con la luz de los vehículos pudo observar que eran personas jóvenes. Distingue que la sala donde vio que estaban torturando a Héctor Aguayo Olavarría y a los hermanos Elías y Hugo Gonzalez Ortega estaba ubicada en el perímetro de la plana mayor. En esa oportunidad estaban presentes los oficiales Vásquez Chahuán y Fernández Carranza. Que veía a la gente cuando los llevaban vendados, ya que estaba a diez metros aproximadamente de la sala de tortura mencionada precedentemente. Se escuchaban los gritos de las personas. Toda la compañía sabía que había esa sala de torturas. Para él, toda la oficialidad sabía de esto, se divertían realizando este tipo de hechos. Reiterando que la oficialidad sabía que existía. El deponente realiza un croquis de la ubicación de la sala de torturas ubicada al interior del regimiento Tucapel de Temuco, en la compañía de plana mayor y servicios. Estima que cuando declaró en la causa del "Polvorín" recibió amenazas de familiares de las personas que había nombrado. Le decían "mira tal por cual, tienes que retirar lo que dijiste en contra de mi

pariente”. El Tribunal le exhibe las fotografías de Héctor Aguayo Olavarría, Elías y Hugo, ambos de apellidos González Ortega, que rolan de fs. 2.317 a fs. 2.319 a lo que el deponente declara reconocer a aquellas personas, como aquellas tres de las ocho que levantó ese día.

En declaración judicial de fecha 26 de marzo de 2019, rolante de fs. 93 a fs. 95 (Cuaderno Secreto), el Tribunal le lee lo pertinente de sus declaraciones de fs. 2.309 y siguiente y de fs. 2.638 y le consulta: ¿Qué víctimas de la presente causa, cuyas fotografías se le exhiben de fs. 2.317 a 2.319, habrían estado torturando al interior de la sala de tortura ubicada en la compañía de plana mayor y servicios del regimiento Tucapel de Temuco con fecha posterior al 11 de septiembre de 1973 y dentro de ese mismo mes? A lo que el deponente expresa que reconoce a Héctor Aguayo Olavarría y a los hermanos Elías y Hugo González Ortega, cuyas fotografías se le exhiben, a quienes los estaban torturando al interior de la mencionada sala. Respecto a lo que se le consulta con relación a cuándo estaban torturando a estos jóvenes de nombre Héctor Aguayo Olavarría y a los hermanos Elías y Hugo González Ortega, indica que fue aproximadamente un día antes de recoger sus cuerpos e ingresarlos al camión. De los ocho cuerpos que refiere haber recogido desde el polígono de tiro y cargado en un camión. Precisa además que presenció como tres personas que murieron al interior de la misma sala de torturas ubicada en la compañía de plana mayor y servicios al interior del regimiento Tucapel de Temuco con fecha posterior al 11 de septiembre de 1973 dentro del mismo mes. Recuerda que estas personas eran de sexo masculino, de alrededor de treinta años y le aplicaron corriente en sus cuerpos y de tanta electricidad fallecieron. Además, recuerda que su habitación estaba a unos metros de esta sala, razón por la cual pudo observar cuando sacaron estos cuerpos. Anexa que como integrantes de la compañía de plana mayor y servicios recuerda a Quilodrán, sargento primero Silva, Mario Arias Díaz, sargento Peña, cabo Krause, Pablo Silva y el teniente Romilio Lavín Muñoz.

En declaración judicial de fecha 16 de agosto de 2021, rolante de fs. 193 a fs. 195 (Cuaderno Secreto), ratifica la declaración e indica que respecto a la segunda oportunidad en que le tocó cargar ocho cuerpos, no estaba presente el sargento Arias. Precisa que fueron dos veces en que le correspondió cargar cuerpos, la primera vez estaba saliendo del rancho, era tarde de noche, tiene que haber sido como a las 22:00 o 22:30. Cargaron los cuerpos y después se fue a

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

acostar, no contándole esta situación a ninguno de sus compañeros, por temor a ser sancionado. Luego, hubo una segunda oportunidad que también le tocó cargar ocho cuerpos a un camión. Ese día también era de noche, estaba haciendo la "imaginaria", que consistía en el cuidado de la compañía, que no llegara gente extraña, era una guardia. Estaba en esa función y llega el mismo Chávez Etchepare que casualmente también estaba de servicio en la guardia. Le dice "C., vas a tener que acercarte a la guardia nuevamente". Al preguntarle para qué, le dice "anda no más". Entonces, una hora más tarde va a la guardia, tiene que haber sido como a las 23:00 h., y en ese lugar había un conscripto, Muñoz Venegas. Chávez les da la orden de irse al polígono, así que fueron los dos con Muñoz y un soldado de guardia hasta ese lugar. Al llegar, vieron varios cuerpos amontonados, uno sobre otro, con las manos amarradas, algunas atrás y otras adelante. A los cuerpos les habían rasurado la cabeza y con la barba cortada. En el lugar había un camión y dos o tres vehículos chicos. Con las luces de los vehículos. Que la línea de mando de la compañía de plana mayor y servicios del regimiento Tucapel de Temuco para septiembre de 1973, señalando el deponente que habría estado conformada de la siguiente manera: comandante de la compañía, Nelson Ubilla Toledo; subteniente Raimundo García Covarrubias; subteniente, Romilio Lavín. En cuanto a los detectives dice que estos se relacionaban con los oficiales. Quienes deberían tener conocimiento de los hechos que ha narrado, es decir, de la ejecución y cargar los cuerpos a los camiones, son los oficiales del regimiento, porque se comunicaban entre ellos.

A.93. Pedro Guillermo Manuel Tichauer Salcedo

En declaración extrajudicial de fecha 5 de junio de 2019, rolante de fs. 3.166 a fs. 3.167 (Tomo IX), en lo pertinente dice que para 1973, ostentaba el grado de teniente de ejército y se desempeñaba como jefe de sección administración de fondos y jefe de la sección de intendencia de la **compañía de plana mayor y servicios**. Los oficiales que le seguían en la línea jerárquica estaba el declarante, el subteniente Raimundo García Covarrubias, el subteniente Romilio Lavín Muñoz. Hace presente que con las nuevas funciones del capitán Nelson Ubilla, el subteniente Raimundo García, quedó a cargo de la instrucción militar de los conscriptos de la compañía, el subteniente Lavín, quedó a cargo de la sección de material de guerra, donde tenía que ver con los armamentos,

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

munición y combustible del regimiento y el deponente que seguía en sus funciones habituales como oficial de intendencia.

A.94. Raimundo Ignacio García Covarrubias

En declaración judicial de fecha 3 de septiembre de 2009, rolante de fs. 1.397 a fs. 1.399 (Tomo IV), en lo pertinente dice que estaba encuadrado en la **compañía de plana mayor y servicios** en septiembre de 1973. Allí estaba a cargo de la instrucción de los soldados conscriptos y además, estaba a cargo de los servicios de guardia. En febrero de 1973 se fue a Santiago para realizar un curso oficial básico de subalterno en la Escuela de Infantería, regresando a fines de agosto o principios de septiembre de 1973 a Temuco. Desde ese momento quedó encuadrado en la compañía de plana mayor a cargo de la sección soldados conscriptos. El comandante de la compañía era el capitán Nelson Ubilla Toledo, pero éste tomó otras actividades en plana mayor a partir del 11 de septiembre de 1973, por lo que la compañía quedó encargada a los oficiales que conformaban dicha compañía, entre ellos el subteniente Romilio Lavín. Consultado responde que recuerda que en la compañía de plana mayor había dos secciones, la de soldados conscriptos, bajo su mando y la sección de vehículos motorizados, bajo las órdenes del subteniente Lavín.

En declaración judicial de fecha 27 de enero de 2010, rolante de fs. 1.459 a fs. 1.460 (Tomo V), musita que turnos le correspondió efectuar patrullajes nocturnos a cargo de la unidad de emergencia. Que debe señalar que todos los subtenientes y tenientes estaban sujetos a este turno.

En declaración extrajudicial de fecha 7 de mayo de 2019, rolante de fs. 3.151 a fs. 3.152 (Tomo IX), expresa que llegó al mencionado regimiento recién egresado de la escuela militar el día 8 de marzo de 1972, cumpliendo funciones en este hasta el mes de diciembre de 1974, ya que fue destinado como instructor a la escuela militar. Hace presente que para 1973, pertenecía a la compañía de plana mayor y servicios, la que antes del 11 de septiembre de 1973, estaba bajo el mando del capitán Nelson Ubilla Toledo, quien por razones impuestas por el mando del regimiento dejó su cargo en la compañía, para hacerse cargo de la sección segunda de la unidad militar, quedando como más antiguos en la línea de mando el teniente Tichauer, él y el subteniente Lavín.

En declaración judicial de fecha 3 de agosto de 2019, rolante de fs. 3.285 a fs. 3.288 (Tomo IX), el Tribunal le consulta sobre los otros oficiales que estaba a

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

cargo de la compañía plana mayor y servicios del regimiento Tucapel de Temuco para septiembre de 1973, señalando que en orden jerárquico estaba el capitán Ubilla, el teniente Tichauer, el declarante y el subteniente Lavín. Recuerda que varias veces llegaban desde gendarmería con vehículos y los tenían todo el día allí. Estos detenidos eran de Ubilla. En cuanto a las condiciones de los detenidos que ingresaban en la sala, no iban vendados, por lo menos en espacios comunes nunca vio vendados. Moreno y Schonherr eran los encargados del traslado de los detenidos porque ellos eran parte del grupo de Ubilla. En cuanto a los nombres de los funcionarios que ingresaban a la sala señalada puede indicar que ingresaban allí un equipo de soldados que eran de diferentes compañías. El Tribunal le consulta quien dispuso que la sala señalada fuera ocupada para interrogatorios, responde que cree que el mismo Ubilla fue quien dispuso la utilización de la sala que ha hecho referencia. Era su compañía, así que podía disponer de ello. Esto es de su competencia, el como capitán de su compañía tiene libre acceso a cualquier dependencia.

B. DOCUMENTOS

B.1. A fs. 1 a fs. 3 vta. (Tomo I) denuncia por inhumaciones ilegales presentada por el abogado Alejandro González Poblete en representación de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, indicando como víctimas a Hugo Arnés González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Juan Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Schmidt Arriagada, Juan de Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría, Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

B.2. Actas de inspecciones del Tribunal, que rolan de:

B.2.1. A fs. 152 a fs. 153 (cuaderno secreto) consta acta de inspección personal del Tribunal, 27 de noviembre de dos mil 2019, que en lo pertinentes suscribe que: se constituye el Tribunal en dependencias del Regimiento Tucapel de Temuco, participando en la diligencia el Ministro en Visita Extraordinaria don Álvaro Mesa Latorre; el Fiscal Militar de Temuco, don Francisco Bravo Soto; el Secretario de la Fiscalía Militar de Temuco, don Giovanni Taito Schmidt; el abogado del Programa Continuación Ley 19.123 del Ministerio de Justicia, Ricardo Lavín Salazar; los Peritos Planimetría y Fotógrafo del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, don Juan Vega Norambuena y don Frantz Beissinger Bart; y de los Testigos M. J. C. S. y

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Celedonio Aburto Fuentes. En primer término, el Tribunal ordena comenzar la diligencia disponiendo que el testigo Manuel Contreras Salazar indique el lugar donde estaba ubicada la Compañía de Plana Mayor y Servicios del Regimiento Tucapel de Temuco para el año 1973. El Tribunal y los testigos se desplazan hasta ese punto, donde se detienen para ingresar a aquella dependencia. En este sentido, tanto el señor C. como el señor Aburto, coinciden en señalar que aquella dependencia era la utilizada por la Compañía de Plana Mayor y Servicios para la fecha señalada. A continuación el señor Ministro le solicita al señor C. manifestar su conocimiento respecto a lo acontecido en aquella dependencia a partir del 11 de septiembre de 1973; en este sentido el señor C., reitera lo señalado en sus declaraciones de fs. 2.309, 2.638, indicando que observó en una fecha posterior al 11 de septiembre de 1973, desde el exterior de esta sala, que allí se encontraban torturando a tres de las víctimas de esta causa, cuyas fotografías le fueron exhibidas por el Tribunal en sus declaraciones de la causa. Acota que presentes en el lugar se encontraba el oficial Manuel Vásquez Chahuán. Luego, el señor Ministro le otorga la palabra a don Caledonio Aburto Fuentes para que señale lo pertinente, indicando este que tuvo conocimiento que en aquel lugar era una de las dependencias destinadas para detenidos por motivos políticos tras el 11 de septiembre de 1973. Los peritos de la Policía de Investigaciones fijan los puntos indicados. Posteriormente el Tribunal y los testigos se desplazan hacia un lugar, dentro del mismo Regimiento, señalado por el testigo Celedonio Aburto Fuentes, quien señala que habría una edificación tipo caseta en donde operaba una oficina de la Policía de Investigaciones de Chile. Los peritos de la Policía de Investigaciones fijan los puntos indicados.

B.2.2. A fs. 154 a fs. 155 (cuaderno secreto), consta acta de inspección personal del Tribunal. De fecha, 27 de noviembre de 2019, que en lo pertinente refiere que: se constituye el Tribunal en el ex polígono de tiro de la isla Cautín; lugar donde actualmente se encuentra bajo la administración del SERVIU, participando en la diligencia el Ministro en Visita Extraordinaria don Álvaro Mesa Latorre; el abogado del Programa Continuación Ley 19.123 del Ministerio de Justicia, Ricardo Lavín Salazar; los Peritos Planimetría y Fotógrafo del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, don Juan Vega Norambuena y don Frantz Beissinger Bart; y de los Testigos M. J. C. S., y Celedonio Aburto Fuentes. En primer término, el Tribunal ordena comenzar la

diligencia disponiendo al señor M.J.C.S., situarse en el lugar indicado por el en sus declaraciones de fs. 2.309 y 2.638 de autos. En este sentido, el testigo C. S., se dirige hasta un lugar determinado del ex polígono de tiro de la isla Cautín. Estando allí, el señor C.S. indica al Tribunal el lugar exacto en donde se encontraba la noche en que cargó ocho cuerpos de personas fallecidas, en una fecha posterior al 11 de septiembre de 1973. Reitera al tribunal que reconoció tres de las víctimas de la presente causa, tal como señaló a fs. 2.640. Luego menciona los nombres de los oficiales presentes aquella noche, los tenientes Espinoza y Manuel Vásquez Chahuán. Los peritos de la policía de investigaciones fijan los puntos indicados. Posteriormente el Tribunal le solicita al testigo Celedonio Aburto Fuentes manifestar su conocimiento respecto a los hechos narrados por el señor C.S. En este sentido, el señor Aburto señalada que lo indicado por el señor C.S. pudo haber ocurrido, pero él no se encontraba presente aquella noche en el lugar, sin embargo, aquello era lo que se comentaba en esa época.

B.2.3. A fs. 406 vta. (Tomo II), consta acta de inspección personal del Tribunal, en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco. De fecha 22 de noviembre de 2019, que señala en lo pertinente que: se constituyó el Tribunal en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco a fin de practicar la diligencia decretada en autos con el fin de inspeccionar los Libros de Estadísticas de Detenidos y Procesados correspondientes al año 1973. En primer término, se procedió a examinar el Libro de Estadísticas de Detenidos, apareciendo de los datos estampados en éste que, aun cuando no figuran todos los nombres buscados, existen similitudes como las que se señalan a continuación: 1. Rogelio Hernán Schmidt Muñoz, 17 años, ingresó el 14 de septiembre de 1973, según Parte N° 1.116 de la Fiscalía Militar de Cautín, por infracción a la Ley 17. 798. Registra domicilio en calle Ercilla N° 860 de Villarrica y se indica como fecha de egreso el 15 de octubre de 1973. 2. Ricardo Virginio Aguayo Olavarría, 20 años, ingresó el 14 de septiembre de 1973, según Parte N° 1.200 de la Fiscalía Militar de Cautín, por infracción a la Ley 17.798. Registra domicilio en calle Pedro Montt N° 967 de Villarrica y se indica como fecha de egreso el 27 de septiembre de 1973. 3. Abdiel González Ortega, 22 años, ingresó el 14 de septiembre de 1973, según Parte N° 1.116 de la Fiscalía Militar de Cautín, por infracción a la Ley 17. 798. Registra domicilio en calle Aldunate sin número de Villarrica y se indica como fecha de egreso el 15 de octubre de 1973. En segundo lugar, se dispuso la

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

revisión del Libro de Estadísticas de Procesados correspondiente al año 1973, sin que registraran coincidencias en los nombres de las personas buscadas

B.2.4. A fs. 1.721 a fs. 1.726 (Tomo V), consta acta de inspección personal del Tribunal, de fecha 23 de marzo de 2012, que en lo pertinente rubrica que: se constituyó el Tribunal en dependencias del R.I. N°8 TUCAPEL, participando en la diligencia el Ministro en Visita Extraordinaria don Álvaro Mesa Latorre; del Fiscal Militar de Temuco, Teniente Coronel (J) José Valentín Pinto Aparicio; Secretaria de la Fiscalía Militar, Mayor (J) Ema Fabiola Maturana Meneses; de los Peritos Planimetrista y Fotógrafo del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, don Cristian Sil a Barra y don Franz Beissinger Barty de los Testigos Raimundo García Covarrubias, Romilio Lavín Muñoz, Pedro Tichauer Salcedo, Juan Carlos. Concha Belmar, Manuel Rafael Campos Ceballos, Héctor Mauricio Villablanca Huenulao, Héctor Joaquín Celedón Fuentes, Gerardo Jaime Araneda Muñoz, Ernesto G. reía Isla, Manuel Reinaldo Canales Valdés, Oscar Inostroza Segura, Daniel San Juan Clavería, Orlando Moreno Vásquez, Carlos Luco Astroza, Hernán Raúl Quiroz Barra, Raúl Binaldo Schonherr Frías y Omar Burgos Dejean. El Ministro, en primer término, se dirige junto a los demás al pabellón de solteros del casino de oficiales, ordenándole al testigo Raimundo García Covarrubias que identifique el dormitorio donde se encontraba alojando, ya que en su declaración señala que se encontraba ese día enfermo. Se procede a visualizar una habitación la cual tiene una ventana y la cual es fijada por los funcionarios de peritos de la policía de investigaciones. Luego el Ministro consulta al testigo Romilio Lavín cuál era su dormitorio, dirigiéndose el testigo y las demás personas a otro lugar del casino de oficiales, señalando Lavín que él como más antiguo dormía en esa habitación, ya que tenía a cargo el rancho de oficiales, inspeccionada la habitación se constata que posee una ventana que da a un patio ciego, la que es fijada por personal de perito de la policía de investigaciones. Posteriormente, el Ministro consulta a otro testigo, señor Orlando Moreno Vásquez, para que indique dónde funcionaba la Fiscalía Militar en aquella época, el testigo manifiesta que en la comandancia, dirigiéndose todos a la comandancia del regimiento. En ese lugar, el señor Moreno, indica que funcionaba en el interior de la actual comandancia y que estaba a cargo del mayor Cofre, pero después funcionaba con el señor Podlech, en el interior de la comandancia. Señala el señor Moreno, y también el testigo Raimundo García Covarrubias,

cuando se le consulta, que había dos oficinas, en una funcionaban los actuarios y en la otra el Fiscal. A continuación, el Ministro junto a los demás testigos y personas consulta dónde se ubicaba la compañía de plana mayor, indicando García el lugar de esta compañía, identificando también la compañía de morteros y luego la compañía cazadores que antes era la compañía andina. Moreno, señala que él trabajaba en la plana mayor, con soldados conscriptos en instrucción. Consultados por el Ministro dónde funcionaba el gimnasio, siendo indicado por Lavín el lugar donde se encontraba el gimnasio del regimiento. El Ministro, consulta a Moreno, por la gente que llegaba detenida al regimiento, respondiendo Moreno que llegó gente detenida y ésta era llevada al gimnasio y el Fiscal era el que decidía quién iba a la cárcel o quién quedaba en libertad. El Ministro consulta por la existencia de baños en el lugar señalándose por los testigos, específicamente por Moreno, el lugar donde se encuentran los baños, fijándose el lugar por los funcionarios de peritos. Posteriormente, el Ministro, consulta por el matadero, siendo indicado por Moreno, el lugar donde se encontraba en esos tiempos esa dependencia, la que corresponde actualmente al rancho de soldados, se fija este lugar por los funcionarios peritos. El Ministro consulta por la distancia que existía entre el matadero y la isla Cautín, respondiéndole los peritos lo que pueden existir unos 500 metros, en seguida el Ministro pregunta a otro testigo, personal de la Policía de Investigaciones en situación de retiro, a fin de que indiquen el lugar donde trabajaban, señalando que fueron destinados al regimiento para efectos de prestar colaboración al Fiscal Podlech, señalando que había actuarios que eran civiles y que existieron muchos detenidos los cuales eran asignados a los detectives, aproximadamente veinte detenidos, por detective. El testigo Hernán Quiroz Barra señala que a él le tocó interrogar a muchos de estos detenidos, al consultar el Ministro al testigo si durante la interrogación eran observados por militares, el testigo dice que no. En seguida, el Ministro, consulta al otro detective en retiro, testigo Luco, quien indica que él en esos tiempos era chofer, y sólo llegaba hasta la guardia del regimiento, en ese lugar se le indicaba que trámite debía hacer, y él tenía expresa orden de llegar solo hasta la guardia del regimiento. Siguiendo con la diligencia el Ministro pregunta a Omar Burgos Dejean, que indique dónde se desempeñaba él, señalando el testigo que trabajaba en el archivo, el cual quedaba en la comandancia, al fondo a la izquierda, la oficina no tenía nombre, se fija fotográficamente por los peritos. Posteriormente, Burgos,

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

señala que él daba los salvoconductos, que trabajaba hasta el viernes, que no interrogó nunca a detenidos y que, por necesidad y orden superior, solo participo en la detención del caso polvorín. Señala que normalmente tenía un banco de colegio ubicado antes de la guardia del Regimiento, en el cual trabajaba entregando a la gente los salvoconductos que eran documentos firmados por el Fiscal Cofré, tales documentos autorizaban, por ejemplo, al camión que llegaba a entregar víveres o cuando la gente tenía que trasladarse de un lugar a otro, fuera del horario establecido, se fija por los funcionarios peritos el lugar. El Ministro, luego de escuchar al testigo Burgos, pregunta al testigo Raúl Schonherr Frías, este indica que trabajó en la segunda comandancia después del 11 de septiembre de 1973 señalando que, en la segunda comandancia, en su interior, habían tres dependencias: la oficina del dactilógrafo funcionaba en este lugar como también la del segundo comandante, y otra dependencia en que habían tres oficinas, allí funcionó el Fiscal Cofre, después llegó Podlech, se fijan el lugar. Más tarde, y en el desarrollo de la misma diligencia, el Ministro, se reúne con otros testigos: Héctor Mauricio Villa blanca Huenulao, Manuel Reinaldo Canales Valdés, Manuel Rafael Campos Ceballos, Héctor Joaquín Celedón Fuentes, Gerardo Jaime Araneda Muñoz y Oscar Inostroza Segura, quienes fueron conscriptos. El Ministro les dice que se refieran a la noche del 10 de noviembre de 1973, indicándose por estos que se encontraban en la compañía de morteros y compañía de plana mayor. Señalan Celedón y Araneda, que ellos esa noche se encontraban durmiendo, y sintieron unos ruidos, pero no hubo mayor movimiento, nadie ordeno salir del lugar. Inostroza dice que él estaba de franco y estaba en su casa, no en el regimiento. Villablanca manifiesta que él esa noche, se encontraba dormido, dormía en la primera litera, señala que despertó al sentir unos disparos o granadas, dice que era él de la segunda escuadra. Canales, declara que él esa noche estaba en el Cerro Nielol, y sintió unos disparos desde ese lugar, señalando que él se encontraba en la copa de agua. El Ministro, consulta a Inostroza, ya que en su declaración dice que le correspondió entregar detenidos a la segunda comandancia, desde donde sacaba a los detenidos y hasta donde los llevaba, trasladándose el testigo junto al Ministro y las demás personas a una dependencia ubicada al lado de la guardia, donde Inostroza indica que esa era una sala de espera, donde se dejaba a los detenidos. La dependencia tiene una sola puerta de entrada y salida, señalando Inostroza que desde ese lugar se

sacaba a los detenidos y los llevaban a la compañía de plana mayor, lugar donde los interrogaban en la quinta cuadra, había en el interior unos somieres metálicos, a las personas se las dejaba en ese lugar para que las interrogaran, como uno no ingresaba, luego salían del lugar siempre custodiados, señala que a él varias veces le tocó llevar gente que salió bien físicamente, estas personas salieron caminando, señala que en esa sala se sentían ruidos de tortura. El Ministro consulta a los otros testigos; exsoldados, que dormían en las cuadras de al lado, si ellos sentían algún ruido, señalando que sí, que habían veces que sentían gritos y ruidos de tortura. Luego el Ministro solicita que le indiquen estos testigos donde se encontraba el polvorín de la unidad, siendo señalados por uno de los testigos el lugar donde funcionaba el polvorín, lugar que es fijado. Ulteriormente, el Ministro, le pregunta al testigo Guillermo Tichauer Salcedo que indique dónde se encontraba él esa noche de noviembre del año 1973, dirigiéndose el Tichauer, junto al Ministro y los demás funcionarios afuera del regimiento, cruzando la calle Prat, señalando el testigo, que él vivía frente al regimiento, en el segundo piso, diciendo que se había casado hacía poco y se encontraba con su mujer y su cuñado y familia de éste, y mientras comían escucharon unos disparos, razón por la que se dirigió al regimiento, encontrándose antes de ingresar a este con el mayor Cofre, quién le dijo que no pasaba nada, que había sido un asalto al cuartel, por esta razón regreso a su domicilio, toda vez que su mando le dijo que se devolviera atender a su familia, se fijan el lugar. Se presenta Jorge Luis Godoy Valdebenito, soldado, conscripto a la fecha de ocurrencia de los hechos, el Ministro le solicita que indique el lugar donde, él habría sido torturado, se desplaza al lugar donde están las compañías, indicando que había una pieza grande en la cual tenían una cama, específicamente somier y que el sargento Mario Arias, lo habría acostado y le habría aplicado corriente. El Ministro le pide que indique el lugar donde él veía a los detenidos, señalando el testigo Godoy que él veía que llegaban detenidos con venda en los ojos y que se escuchaban ruidos y gritaba gente, señala que había un conscripto de apellido Etchepare, el cual mareaba a los detenidos, luego Godoy señala que en la sala de banda era el lugar donde pasaban los detenidos, los cuales eran golpeados por los mismos soldados, por orden de los más antiguos, indica que el mayor Cofre nunca se metía en nada, eran los menos antiguos los que ordenaban golpear a los detenidos con la fusta

de los caballos, en este lugar, indicando la sala de banda llegaban los detenidos y luego eran llevados a la compañía.

B.2.5. A fs. 2.011 (Tomo VI), consta acta de inspección personal del Tribunal, de fecha 16 de diciembre de 2014, que en lo adecuado refiere que: constituyéndose el Tribunal en el camino que une Pucón con la localidad de Caburgua, con la presencia del personal de la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos de la Policía de investigaciones de Chile, Comisarios Hernán Villena Morales y Luis Castillo Farías; de los Peritos Fotógrafo y Planimetrista del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, doña Ana Luisa Pizarra López y don Juan Vega Norambuena; y del testigo don Luis Robinson Bustos Letelier. En primer término, a sugerencia del testigo el Tribunal se traslada hasta el km. 12 del camino precitado. En ese lugar el testigo Luis Robinson Bustos Letelier indica un sector cercano a la calzada donde habría divisado a las víctimas de autos y después de haberles practicado un control de identidad, decidió proceder a su detención. Acto seguido, el testigo precisa la manera como fueron subidos al carro policial en el cual los detenidos, víctimas de autos, fueron llevados hasta la Subcomisaría de Carabineros de Pucón.

B.3. Informes periciales de la Policía de Investigaciones de:

B.3.1. A fs. 161 a fs. 168 (cuaderno secreto) informe Pericial Planimétrico y Dibujo, remitido por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, realizado en inspección ocular en el destacamento de Montaña N°8 Tucapel y polígono de tiro en isla Cautín de Temuco, mediante el cual se fijan la localización de edificaciones y proyección de los lugares señalados por los testigos durante la diligencia.

B.3.2. A fs. 170 a fs. 171 vta. (cuaderno secreto), informe Pericial fotográfico, remitido por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, realizado en inspección ocular en el destacamento de Montaña N°8 Tucapel y polígono de tiro en isla Cautín de Temuco, cuyas fotografías son acompañadas en formato digital disco compacto, que refieren a las nueve tomas fotográficas, detallando cada una de ellas. En la fotografía N°5 vista del interior de dormitorio, lugar donde los testigos señalan haber tenido conocimiento de que llegaban detenidos el año 1973. Fotografía N°8 y N°9 vista del lugar donde se habría emplazado el polígono de tiro de la isla Cautín. En

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

donde el testigo M.J.C.S., el año 1973 encontrándose en condición de soldado conscripto se le habría ordenado por los jefes militares directos, subir cuerpos de personas jóvenes con herida de proyectil balístico hasta el interior de un camión tres cuartos.

B.3.3. A fs. 1.664 a fs. 1.671 (Tomo V), informe Pericial Planimétrico, remitido por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, realizado en reconstitución de escena en el Regimiento de Infantería N°8 Tucapel, Temuco, ordenado en causa rol 113.089 del ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco seguida antes este Tribunal, que en lo pertinente contiene antecedentes de relevancia criminalísticas obtenidos en el sitio del suceso, expresado en plano de planta a escala en láminas.

B.3.4. A fs. 2.024 a fs. 2.027 (Tomo VI), (copia del cual se encuentra de fs. 2.028 a fs. 2.031 Tomo VI), informe Pericial Planimétrico, remitido por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, realizado en levantamiento en kilómetro doce de la ruta S-905, desde Pucón a Caburgua, mediante el cual se ilustra fotografías aéreas de la ruta, destacando el sector de la ruta señalado por el señor Bustos Letelier, como lugar de la detención por sospecha de ocho personas.

B.5.5. A fs. 2.041 a fs. 2.043 (Tomo VI), informe Pericial Fotográfico, remitidos por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, que contiene registro fotográfico de las dependencias de la Tenencia de Carabineros Curarrehue ubicada en Avenida O'Higgins N°63 de la comuna de Curarrehue, según lo señalado por los carabineros (en la época) teniente César Jaña Toro, cabo primero Héctor Sepúlveda Chacón y carabinero Luis Hernández Rojas y por los profesores que habrían estado detenidos en dicha unidad policial, en la época de los hechos, don Manuel Humaña Jiménez, don Rubén Leal Riquelme, don Renato Saravia Flore y don Baldomero Salazar Salgado, compuesto de treinta tomas.

B.3.6. A fs. 2.044 a fs. 2.046 (Tomo VI), informe Pericial Fotográfico, remitidos por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Temuco, que contiene registro fotográfico del lugar en la ruta S-905 (Pucón-Caburgua) donde habrían sido detenidas ocho personas, según lo señalado por el ex oficial de carabineros don Luis Robinson Bustos Letelier.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

B.4. Informes del Estado Mayor General del Ejército de Chile, que se detallan de:

B.4.1. A fs. 2.423 a fs. 2.431 (Tomo VII), informe del Estado Mayor General del Ejército de Chile en que se adjunta fotocopia de reglamentos. En lo pertinente el Servicio de Guarnición de las FF. AA, edición 1959, (Considera grados de acuartelamiento). El que en su capítulo V numeral 121 refiere que: “En general, el acuartelamiento constituye el hecho de disponer medidas para asegurar la permanencia del personal en las Unidades, Reparticiones, o en algún determinado lugar, que permita la rápida concurrencia a cualquier llamado. En el acuartelamiento se distinguen los siguientes grados, que se aplicarán de acuerdo con las circunstancias: a) Primer grado: Todo el personal, sin excepción deberá permanecer en el recinto del cuartel”.

B.4.2. A fs. 2.976 (Tomo IX), informe del Estado Mayor General del Ejército de Chile que remite fotografías cercanas 1973 de las siguientes personas: Carlos Oviedo Arriagada, Raimundo García Covarrubias, Romilio Lavín Muñoz, Mario Alvarado Verdugo y Norbeto Uribe Moroni, las que fueron ordenadas desglosar según resolución de fs. 3.178 del 25 de junio de 2019.

B.4.3. A fs. 3.399 a fs. 3.400 (Tomo X), informe del Estado Mayor General del Ejército mediante el cual se constata estructura orgánica de la compañía de plana mayor y servicio según lista de revista de comisario del año 1973, correspondiente al regimiento de Infantería de Montaña N°8 Tucapel, en lo pertinente ilustrando los oficiales encuadra en los cargos que detalla, tales como: Compañía plana mayor, comando de compañía capitán comandante de compañía Nelson Manuel Ubilla Toledo. Sección intendencia, comando de sección teniente comandante de sección y jefe administración de fondo, Pedro Guillermo Manuel Tichauer Salcedo. Sección material de guerra, comando de sección subteniente comandante de sección Romilio Osvaldo Lavín Muñoz.

B.5. A fs. 362 (Tomo I), informe del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, que informa que: una vez revisados los libros de registro de ingreso de detenidos, correspondiente al año 1973, no se encuentran señaladas las personas mencionadas, no obstante se encuentran registro de ingresos de detenidos los que podrían corresponder a los consultados: “Obdiel González Ortega: ingresa el 14.09.1973, por orden de la Fiscalía Militar de Temuco, por el delito de Infracción a la Ley N°17.798, egresado en libertad el 27.09.1973”.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Ricardo Virginio Aguayo Olavarría: Ingresa el 14.09.1973, por orden de la Fiscalía Militar de Temuco, por el delito de Infracción a la Ley N°17.798, egresado en libertad el 27.09.1973. Carlos Schmidt Arriagada: Ingresa el 17.09.1973, por orden de la Fiscalía Militar, por el delito de Daños a la Propiedad Pública Fiscal, egresado en libertad el 16.02.1973”.

B.6. A fs. 494 a fs. 497 (Tomo II), copia simple de denuncia por presunta desgracia interpuesta por doña Evita Aguayo Olavarría, de fecha 21 de enero de 1991, en la cual se indica que: viene en presentar denuncia por presunta desgracia en favor de su hermano legítimo Héctor Domingo Aguayo Olavarría, estudiante, domiciliado en Pedro Montt N°697 Villarrica, nacido el 10 de junio de 1956 en Curarrehue. Su hermano pertenecía al partido socialista del entonces gobierno del presidente Allende, de las juventudes socialistas de la ciudad de Villarrica. En 1972 fue detenido por Carabineros de Curarrehue, junto con otros jóvenes de filiación comunista por tenencia de armas. Ambos fueron trasladados a Villarrica y después de una semana fueron dejados en libertad. Habían sido denunciados por esa tenencia ilegal por un tío de su hermano llamado Pedro Rubilar, ignora segundo apellido, agricultor, domiciliado en Curarrehue camino internacional, predio Santa Sara. Por segunda vez fue detenido el 14 de septiembre de 1973 ignorándose el lugar por personal del regimiento Tucapel. En circunstancias que con otros compañeros (Carlos y Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, el primero funcionario del Corvi y el último estudiante de enseñanza media, hermanos González Ortega, Alejandro Escobar Vásquez, Juan de Dios Cabrera Figueroa) en circunstancias que se disponían a cruzar la frontera hacia Argentina, por el lado de Huife alto, sector Pucón-Curarrehue. Sus padres, familiares y amigos hicieron vanos esfuerzos por obtener información en el regimiento Tucapel de Temuco, donde permaneció detenido por un tiempo que se ignora y donde fue visto por diferentes personas que estaban en el mismo regimiento en calidad de detenidos, siendo testigos de este hecho don Manuel Umaña, profesor, domiciliado en Ñancul, Villarrica y don Luis Díaz, ignora actividad y domicilio, pero que por ser conocido o amigo del primero, éste podría proporcionar su domicilio al Tribunal. En el listado de detenidos que existía en el regimiento Tucapel en esa época no figuraba a su hermano Héctor Domingo, pero sí, en cambio aparecía en esa lista su otro hermano, Ricardo Virginio Aguayo Olavarría, quien después de un mes aproximadamente fue dejado en libertad, casi

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

medio muerto por recibir tanto brutal y despiadado castigo. Al no figurar en la lista de detenidos, su hermano, Héctor Domingo, presumieron fundadamente que habría sido muerto con otras personas, que también se sabía habían sido detenidas por personal militar, y de las cuales tampoco se daba ninguna información concreta, no obstante, los ruegos de sus familiares.

B.7. A fs. 535 a fs. 537 (Tomo II), copia simple de denuncia por presunta desgracia interpuesta por doña Lidia Cáster Leiva, en favor de su cuñado Alejandro Escobar Vásquez, estudiante, nacido el 11 de octubre de 1954, quien pertenecía a las juventudes socialistas en el gobierno de Allende y su participación era activa, como miembro de esas colectividades. Con ocasión del pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973. Su cuñado sintió un gran temor de ser detenido, ya que en ese tiempo hubo gran cantidad de personas con ideologías políticas del depuesto gobierno que eran constantemente perseguidos, castigados y allanados, razón por la que toda su familia coincide en que su cuñado escapó hacia el lado de Argentina, el día 13 de septiembre de 1973. Esa fecha su cuñado tenía 18 años. Presume que su cuñado Alejandro no logró su objetivo, ya que por terceras personas han sabido que fue detenido junto con otras personas y llevado hasta la comisaría en Pucón. Para luego ser trasladados al regimiento Tucapel de Temuco, donde permanecieron detenidos, sin que supieran más de él hasta la fecha.

B.8. A fs. 908 (Tomo III), informe del Departamento de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile, que informa que existen los ciudadanos Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, chileno, nacido en Pucón, el 25 de diciembre de 1952, 59 años, soltero, cedula de identidad N° 6.816.771-K, domiciliado en calle Natalio Stein N° 4913, Comuna de Ñuñoa. Respecto de Juan Carlos Schmidt Arriagada, solo registra como Carlos Schmidt Arriagada, chileno, nacido en Pucón el 24 de octubre de 1951, 61 años, casado, cédula de identidad N° 5.879.584- 4, sin registro de domicilio, ambos no registran movimientos migratorios en nuestro sistema. Finalmente se informa que efectuadas las consultas en nuestro sistema computacional "GEPOL", la persona requerida no cuenta con antecedentes policiales, ni encargos judiciales pendientes, sin embargo, para Carlos Schmidt Arriagada, existe un encargo vigente por presunta desgracia, causa N° 2597, de fecha 14.NOV.1990, emanado del Juzgado del Crimen de Pucón.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

B.9. A fs. 1.026 (Tomo III), informe del Departamento de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile, que indica que, respecto de Hugo González Ortega, Elías González Ortega, Juan Schmidt Arriagada, Ricardo Schmidt Arriagada, Juan Cabrera Figueroa y Raúl Figueroa Burckhardt no registran movimientos migratorios a contar del 01 de enero de 1973.

B.10. Informe de la **Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad** que contiene:

B.10.1. A fs. 991 (Tomo III), informe de la Vicaría de la Solidaridad, respecto de Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, señala detenido desaparecido, septiembre de 1973. Raúl Figueroa, de 22 años, soltero, militante de las juventudes socialistas. El 13 de septiembre de 1973, junto a un grupo de jóvenes intentó cruzar la frontera por el sector Curarrehue, siendo detenido en las cercanías de Pucón. Desde esa fecha se desconoce su paradero.

B.10.2. A fs. 993 a fs. 996 (Tomo III), individualiza en lo pertinente a: Hugo González Ortega 23 años a la fecha de la detención, militante del partido Socialista, secretario local del partido Socialista en Villarrica, fecha detención 13 de septiembre de 1973. Elías Dagoberto González Ortega, 24 años a la fecha de la detención, militante del partido Socialista, encargado de propaganda de Villarrica, fecha detención 13 de septiembre de 1973. Juan de Dios Cabrera Figueroa 20 años a la fecha de la detención, militante de las juventudes socialistas, fecha detención el 13 de septiembre de 1973. Juan Carlos Schmidt Arriagada, 21 años a la fecha de la detención, militante del partido socialista, fecha detención 13 de septiembre de 1973. Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, 18 años a la fecha de la detención, militante del partido socialista, fecha de detención 13 de septiembre de 1973. Alejandro Escobar Vásquez, 18 años a la fecha de la detención, militante de las juventudes socialistas, fecha detención 13 de septiembre de 1973, y Héctor Domingo Aguayo Olavarría, 17 años a la fecha de la detención, militante de las juventudes socialistas, fecha de detención 13 de septiembre de 1973. Reseña como situación represiva lo siguiente: Hubo Arner González Ortega, 23 años, su hermano Elías Dagoberto González Ortega, 24 años, los hermanos Juan Carlos y Ricardo Schmidt Arriagada, de 21 y 20 años de edad, respectivamente, Juan de Dios Cabrera Figueroa, de 20 años, Alejandro Escobar Vásquez, de 18 años y Héctor Domingo Aguayo Olavarría, de 17 años de edad todos militantes del partido socialista se encuentran desaparecidos desde el

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

día 13 de septiembre de 1973, luego que al ser allanados sus domicilios en la ciudad de Villarrica por personal de carabineros, decidieron cruzar la frontera por un paso cordillerano, en el sector de Curarrehue. Tiempo después, personal de investigaciones se hizo presente en el domicilio de los hermanos Schmidt Arriagada e informó a sus familiares que los jóvenes habían sido detenidos. Informaciones obtenidas por la familia de Héctor Aguayo indican que el grupo de jóvenes fue detenido en el sector del puente del río Turbio, ocho kilómetros hacia Pichares cuando intentaban cruzar a pie hacia el lado argentino. La aprehensión la habría realizado personal de carabineros que se movilizaban en una camioneta particular de propiedad de un habitante de la ciudad de Pucón. En una primera instancia los detenidos fueron conducidos al retén de Pucón, posteriormente a Villarrica y desde allí enviados al regimiento Tucapel de Temuco desde donde desaparecieron. Versionas extraoficiales indican que habrían sido ejecutados en ese lugar. Gestiones Judiciales. Los familiares de las víctimas realizaron indagaciones en la zona de búsqueda, sin resultado positivo alguno. Con fecha 24 de agosto de 1990, la familia de Alejandro escobar Vásquez inició una denuncia por presunta desgracia ante el Juzgado de Letras de Villarrica, la que roló con el N°28451. Con fecha 27 de agosto el juez de Villarrica se declaró incompetente, remitiendo los autos a Juez de Letras de Pucón (...).

B.11. Informe del Museo de la Memoria y Derechos Humanos, el que se detalla en lo pertinente:

B.11.1. A fs. 1.081 a fs. 1.082 (Tomo IV), ficha del arzobispado de Santiago Vicaria de la solidaridad “detenidos desaparecidos”. Documento de trabajo, 1993. Respecto de Héctor Domingo Aguayo Olavarría, situación represiva Hugo Arner González Ortega, 23 años, su hermano Elías Dagoberto González Ortega, 24 años, los hermanos Juan Carlos y Ricardo .Schmidt Arriagada, de 21 y 20 años de edad, respectivamente, Juan de Dios cabrera Figueroa, de 20 años, Alejandro Escobar Vásquez, de 18 años y Héctor Domingo Aguayo Olavarría, de 17 años de edad, todos militantes del partido Socialista se encuentran desaparecidos desde el día 13 de septiembre de 1973, luego que al ser allanados sus domicilios en la ciudad de Villarrica por personal de carabineros, decidieron cruzar la frontera por un paso cordillerano, eh el sector de Curarrehue. Tiempo después, personal de Investigaciones se hizo presente en el domicilio de los hermanos Schmidt Arriagada e informó a sus familiares que los jóvenes habían

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

sido detenidos. Informaciones obtenidas por la familia de Héctor Aguayo indican que el grupo de jóvenes fue detenido en el sector del puente del río Turbio, ocho kilómetros hacia Pichares cuando intentaban cruzar a pie hacia el lado argentino. La aprehensión la habría realizado personal de carabineros que se movilizaban en una camioneta particular de propiedad de un habitante de la ciudad de Pucón. En una primera instancia los detenidos fueron conducidos al retén de Pucón, posteriormente a Villarrica, y desde allí enviados al Regimiento Tucapel de Temuco desde donde desaparecieron versiones extraoficiales indican que habrían sido ejecutados en ese lugar (...), reseñando las gestiones judiciales realizadas por los familiares de las víctimas.

B.11.2. A fs. 1.095 (Tomo IV), oficio del directo de obras municipales de Villarrica que indica que no existe registro de sepultación de Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

B.11.3. A fs. 1.146 (Tomo IV), oficio del director de obras municipales de Villarrica que señala: “revisados los antecedentes de archivados en el departamento de obras, no existe registro sobre sepultación de Elías Dagoberto González Ortega.

B.11.4. A fs. 1.169 a fs. 1.170 (Tomo IV), declaración jurada de Silvia Luz Schmidt Arriagada, fecha 25 de julio de 1990, que en lo pertinente refiere que es hermana de Carlos y Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, nacidos el 24 de octubre de 1951 y el 25 de diciembre 1952, respectivamente. Que ellos en el año 1973 el día 13 de septiembre se “tuvieron que ir, hacia el lugar Ñancalil, lado Huife Alto, sector Pucón Curarrehue, pues ambos pertenecían al partido Socialista de Villarrica”. Carlos trabajaba en CORVI, de esa ciudad y vivía con su hermano Ricardo Augusto. Le consta que sus hermanos, por temor a ser detenidos tuvieron que tomar esa determinación. Que a pesar de sus constantes indagaciones ante la autoridad y ante el regimiento Tucapel de Temuco, comisaría de carabineros, cárcel y fiscalía, nunca se le dio una respuesta concreta del paradero de sus hermanos. Señala que a su madre Aurora del Carmen Arriagada Vergara (fallecida), fue informada a través del cabo Eduardo Vergara que a sus hermanos los habían asesinado en Temuco, y que no se hiciera ninguna ilusión con respecto de ellos de encontrarlos con vida. Lo mismo le dijo el carabinero Guido Krausse, y por Ramón Quezada.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

B.11.5. A fs. 1.174 a fs. 1.176 (Tomo IV), consta declaración extrajudicial ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de Silvia Luz Schmidt Arriagada, de fecha 29 de agosto de 1990, alude en lo pertinente que los hermanos Carlos y Ricardo Augusto Schmidt se alejaron de Villarrica, pueblo en donde vivían, el día 13 de septiembre de 1973, por temor a ser detenidos, dado que eran miembros de la juventud socialista de Villarrica. A su parecer tenían la intención de cruzar la frontera por el lado de Huife Alto, ubicado en el sector de Pucón Curarrehue, desde entonces no se ha sabido de ellos. Los carabineros Eduardo Vergara González y Guido Krausse le informaron a su madre Aurora Arriagada Vergara que Carlos y Ricardo Augusto habían sido capturados en esa oportunidad y traídos hasta la comisaria de Pucón y posteriormente trasladados a Temuco, ciudad en donde presumiblemente habían sido asesinados.

B.12. A fs. 2.194 (Tomo VII), informe del Alcaide del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, informa que Ricardo Virginio Aguayo Olavarría, estuvo en el recinto penitenciario conforme a los siguientes antecedentes: fecha de ingreso: 14.09.1973, Juzgado: Fiscalía del Ejército de Cautín. Causa: no se indica, Delito: Ley 17.798, fecha de egreso: 27.09.1973, libertad N°24.

B.13. A fs. 4.138 a fs. 4.139 (Tomo XII), extracto filiación y antecedentes de Romilio Osvaldo Lavín Muñoz, si antecedentes a la fecha de los hechos.

32°) Que del conjunto de elementos probatorios antes detallados y relacionados generales y específicos, ponderados consistentes en testigos directos, indirectos, documentos y pericias antes señaladas. Como además se indica en el auto acusatorio **fs. 4.600 a fs. 4.662 (Tomo XIII)**, permiten al Tribunal a través de los medios de prueba legal que se han detallado y relacionados, llegar a la convicción:

A. Primero: que han existido los delitos de **secuestro con grave daño**, en las personas de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, previsto y sancionado en el artículo 141 inciso tercero del Código Penal vigente a la época de los hechos, ilícito en su carácter de lesa humanidad.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

B. Segundo: que en esos ilícitos le ha correspondido la participación en calidad de **cómplice** en los términos del artículo 16 del Código Penal al acusado **Romilio Osvaldo Lavín Muñoz**, ello sin perjuicio de otras reflexiones que puedan hacerse al analizar los escritos de los querellantes y la defensa.

EN CUANTO A LAS DEFENSAS

33°) Defensa de Oscar Alfonso Podlech Michaud,

Que a **fs. 5.731 y siguientes (Tomo XVI)** el abogado Alfonso Eduardo Podlech Delarze, en representación de **Oscar Alfonso Podlech Michaud**, en lo principal de su presentación opone excepciones de previo y especial pronunciamiento. En el primer otrosí, solicita se tenga presente documentos justificativos de los hechos a que refieren las excepciones de previo y especial pronunciamiento. En el segundo otrosí, en subsidio de las excepciones de previo y especial pronunciamiento, contesta la acusación fiscal y las particulares en los términos que señala y plantea excepciones de fondo. En el tercer otrosí, tacha a testigos, fundándolos y acreditándolos. En el cuarto otrosí, ofrece medios de prueba. En el quinto otrosí, presenta lista de testigos y minuta. En el sexto otrosí, acompaña documentos, en parte de prueba y en el séptimo otrosí, en subsidio, solicita beneficios de la ley 18.216.

A. Excepciones de previo y especial pronunciamiento: La defensa interpuso excepciones de previo y especial pronunciamiento de conformidad al artículo 433 N°6 y 433 N°7 del Código de Procedimiento Penal, las que ya fueron analizadas y falladas a fs. 6.068 a fs. 6.071 (Tomo XVII) con fecha 21 de agosto de 2023.

B. Contestación acusación fiscal y acusaciones particulares.

La defensa comienza solicitando la absolución de su representado, por no tener participación ni responsabilidad en los secuestros de las ocho personas de las cuales se le acusa. Musita que la acusación es absurda, ya que no existe prueba de ninguna especie en contra de su representado. Reseña las detenciones de su representado en el extranjero, aludiendo que en los juicios en Chile no habría testigos hábiles que declaren en su contra, sino que el Tribunal a través de conjeturas o sospechas y no presunciones, somete a proceso y acusa, como es el caso.

B.1. Asesor Jurídico y/o fiscal militar Ad-Hoc: comienza citando dictamen del 6 de julio de 1957 del ex fiscal de la Corte Suprema Urbano Marín,

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

recaído en la demanda de extradición de Héctor Cámpora, en cuanto “Que la jefatura de un cargo no significa, ni demuestra que tal jefe hubiese colaborado y concordado con un hecho determinado, ni que lo hubiesen aceptado y ni aun que lo hubiese conocido”. Que lo anterior lo cita con el motivo de que en la causa sub lite se le atribuye la responsabilidad de cómplice por el hecho de ser asesor jurídico, señalándose en otras oportunidades como fiscal militar Ad-Hoc o de hecho de una fiscalía militar y que razón de ello debía conocer de los hechos que se le imputan o cuando los hechos se daban a conocer por un bando militar de su contenido. Que sin embargo no es suficiente el cargo o supuesto cargo que se le atribuye si los antecedentes no tienen injerencia inmediata o directa con el agente. Reproduce el considerando 60 de la acusación fiscal y plantea que eso explicaría los tres sobreseimiento temporales que se han dictado con el transcurso de los años. Que el Tribunal debió haber considerado el contexto de la época, ciento de predios agrícolas tomados, inflación desbocada y otras situaciones que menciona. Que el hecho ocurrió hace cerca de cincuenta años, pero hay un hecho transcendental a contar del 11 de septiembre de 1973, que importó el surgimiento de hechos condenables que significó la pérdida de muchas personas que han sido investigados a lo largo de estos cincuenta años, lo que importa revivir hechos en que el tiempo juega un rol importante, dado que todo lo que se dice por algunas personas no corresponde en muchos casos a la realidad citando jurisprudencia al respecto. Reitera que se está hablado de hace cincuenta años apuntando breve reseña de los hechos de la acusación fiscal. Apunta a los dichos Eduardo Vergara Gonzalez, de Julio Cesar Guevara Guevara y al certificado de la cárcel de fs. 362 por cuanto certifica que no se encuentran registradas las personas señaladas, lo que aparece corroborado con el libro de estadística de fs. 406, preguntándose por qué ocurrió esa irregularidad. Que en lo que dice relación con su representado, según el considerando 51 de la acusación fiscal, ciñe los dichos del hijo de Francisco Jerónimo Matta Aro de, 86, de fs. 616 a fs. 627 y de fs. 786 a fs. 787. Alude la defensa que su representado jamás interrogó al señor Matta y Aguayo. Que debe haber sido el fiscal Jofré, dado que Matta hijo, acompañó un salvo conducto firmado por el fiscal Jofré de fs. 647, lo que probaría lo señalado. Que de esta manera la referencia a su representado es equivocada, como la mención del abogado Sergio Zapata Camus de fs. 787, quien en el careo con su representado de fs. 1.244 no recuerda el contenido de la conversación que sostuvo con su

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

representado, así como no le consta que el señor Podlech haya sido el fiscal militar en esa época o haya actuado de tal. Continúa refiriendo a los dichos del hijo del señor Matta de fs. 787 lo que sería falso y que lo deja claro lo declarado por Teodoro Ribera Beneit a fs. 1.269 (Tomo VII). Reitera la defensa el salvo conducto acompañado por el hijo del señor Matta, lo que manifiesta que demuestra, por una parte, que el fiscal mayor Jofré lo interrogó y no su representado. Además, demuestra que su representado no era el fiscal militar en aquella época, sino el mayor de ejército Luis Jofré Soto, y su representado se desempeñaba como asesor legal, organizando la Fiscalía con funcionarios del poder judicial y los consejos de guerra, obteniendo abogados para la defensa de los detenidos y también de intermediario para solucionar los problemas ante las autoridades militares. Proclama que Héctor Aguayo habría salido en libertad según los dichos por personas dentro de la cárcel y fuera de ella. Prueba de lo anterior serían los hermanos Díaz Cortez a fs. 469 y fs. 477, lo que vieron y agregaron que fueron dejados en libertad por orden de su representado, lo que no sucedió, ya que pueden estar confundido que quien debe haber sido por orden del fiscal militar Jofré, al igual que Manuel Humaña a fs. 478. Que al obtener la libertad fue visto por Rolando Chávez a fs. 1.317 y, su hermano Ricardo Virgilio Aguayo señala que fue liberado entre el 16 y 17 de septiembre, lo que le consta a Gregorio Seguel Capitan, a cuya casa fue y después llegaron carabineros y militares allanando la casa en búsqueda de Héctor, del que nada más se ha sabido. Arguye que lo anterior es importante, ya que, si fue dejado en libertad Aguayo para ser detenido después, importa que termine el secuestro por el que paso a la fiscalía y tuvo lugar otro delito de secuestro practicado por carabineros y funcionarios del ejército indeterminado en que al igual que en la situación anterior nada tiene que ver su representado. Ilustra el considerando 44 en que refiere a la dinámica de la detención y posterior traslado hasta la dependencias del regimiento Tucapel, que, si se lee la dinámica de la detención y el modus operandi, difieren en el caso de Aguayo, quien fue dejado en libertad y visto en la ciudad según los testigos precedentemente señalados, lo que fortalecería la versión que éste obtuvo su libertad y en un hecho posterior fue detenido sin que tenga relación con la detención primitiva.

B.2. Inexistencia de complicidad en este caso. Suscribe que la complicidad importa una acción complementaria por naturaleza y esencia, citando

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

el artículo 16 del Código Penal y doctrina al respecto. Que no se ve en que forma su representado puede ser considerado cómplice de delitos en que no tuvo intervención antes de su ejecución ni su colaboración al momento mismo. Que hay una persona calificada como autor, quien jamás conoció a su representado. Tampoco conoció a las personas que fueron llevadas al regimiento. Que de esta manera no hay razón legal para presumir que tenga alguna responsabilidad de cualquier tipo en estos hechos. Que las referencias hechas en el considerando 35 y 59 no tiene nada que ver con estos hechos y no tiene el alcance que indica, que se le atribuye que, en su calidad de teniente de reserva, calidad que jamás tuvo según documento adjunto con el N°1 (Documentos que según fojas 6.071 (Tomo XVII), se resolvió no ha lugar por no haberse acompañado en la presentación). Que se afirmaría que fue asesor legal de la fiscalía militar y no denunció ni informó a la autoridad militar ni a otra autoridad de los ilícitos investigados. Que, si su representado no tenía conocimiento de estos hechos, porque debía dar cuenta a autoridad alguna. Que la referencia a fiscal Ad-Hoc o de hecho es equivocada, puesto que se le designó en esa función de acuerdo con el artículo 29 del Código de Justicia Militar de la época, para una gestión determinada; obtener del Poder Judicial personal idóneo para interrogar a los detenidos. Lo que acredita según refiere con el certificado del Estado Mayor del ejército, N°2 (Documentos que según fojas 6.071 (Tomo XVII), se resolvió no ha lugar por no haberse acompañado en la presentación). Destaca las exigencias procedentes para ser fiscal Ad-Hoc en Tiempo de Paz, artículos 27, 127 en relación con el artículo 16 del Código de Justicia Militar, y que los fiscales en tiempo guerra debían ajustarse al artículo 79 del texto citado; que al atribuirse la función de fiscal Ad-Hoc a su representado no se ajusta a las situaciones planteadas y a lo más se encontraría en la situación planteada en el artículo 213 del Código Penal, delito de usurpación de funciones, refiriendo a ello. a). Delito que se encuentra prescrito: Comunica entrevista de los ministro señores Solís y Carreño, por cuanto señalan que “Podlech no había cometido ningún delito por cuanto era asesor, más aún el ministro Carreño aduce que se confundía el rol de Podlech a quien se le confundía como fiscal en algunas oportunidades”. Insiste que el fiscal militar el 11 de septiembre de 1973 era el mayor Luis Jofré. Podlech asumió esa calidad a partir de 1974, antes su rol era de asesor de fiscal militar. Lo que constaría en documento N°3 (Documentos que según fojas 6.071 (Tomo XVII), se resolvió no

ha lugar por no haberse acompañado en la presentación). Que el problema reside en la participación exponiendo jurisprudencia al efecto y vuelve a alegar el hecho de ser asesor de una fiscalía militar o hipotéticamente fiscal militar de facto, lo hace responsable de algún delito. Puntualiza los dichos de Sigisfredo Jara de fs. 4.195 a fs. 4.196 (Tomo XII), en relación con la irregularidades en que encapuchados sacaban detenidos durante la noche y algunos no eran devueltos, situación que habría dado a conocer al fiscal militar Luis Jofré; a lo declarado por Poblete Müller de fs. 3.665 y siguiente (Tomo X), en referencia a que el gran responsable sería el abogado Alfonso Podlech, quien estaba a cargo de la fiscalía militar. Señala que semejante expresión tendría el testigo M.J.C.S a fojas 3.690 del cuaderno reservado, al que no ha tenido acceso. La defensa recalca que acompaña en el N°4 documento de Gendarmería de Chile de fecha 14 de marzo de 1917, en que se establece que, en el Centro de cumplimiento Penitenciario de Temuco, no se registran antecedentes sobre ordenes de ingreso y egresos, firmadas por Alfonso Podlech Michaud entre el 11 de septiembre y 31 de diciembre de ese año (Documentos que según fojas 6.071 (Tomo XVII), se resolvió no ha lugar por no haberse acompañado en la presentación). Lo que evidencia que su representado no ha firmado ordenes de ningún tipo para la cárcel de Temuco, de ingreso y de egreso, por lo que las referencias en las declaraciones de algunas personas están confundidas por el transcurso del tiempo. Espeta lo declarado por Heriberto Mancilla a fs. 3.809 por cuanto habría tomado declaraciones con su representado en una sola oportunidad por orden del fiscal militar Jofré, lo que no sería efectivo. De la misma forma las pruebas caligráficas del Servicio Médico Legal, respecto de personas fallecidas y a una orden de libertad ajena a este proceso. Que la jurisprudencia ha sido muy clara al respecto, debe haber una íntima relación entre los antecedentes y el agente que ha cometido el delito con nexo de causalidad entre ellos. Que el examen de los antecedentes debe tener injerencia inmediata directa con el agente.

B.3. Falta de antecedentes y presunciones fundadas en relación con la participación. Las defensa insiste en los dichos del hijo de Matta, y que Héctor Aguayo habría salido en libertad, que de ello darían cuenta los dichos de los hermanos Díaz Cortez de fs. 469 y 477, persiste en indicar que su representado no firmó ningún documento refiriendo a los documento de libertad de estos. Que al obtener la libertad fue visto, por Rolando Chávez a fs. 1.317 y que su hermano

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Ricardo Virgilio Aguayo fue liberado entre el 16 y 17 de septiembre lo que constaría a Gregorio Seguel Capitan. Que al haber sido dejado en libertad Aguayo para ser detenido después, importa que terminó el secuestro por el que paso a la fiscalía y tuvo lugar otro delito de secuestro practicado por carabineros y militares. Que lo que se sabe del señor Aguayo es vago como para dar por establecido las exigencias del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, reproduciendo el N°1, que no es posible sacar una presunción de otra presunción. Ciñe que la jurisprudencia al efecto, lo mismo en relación con el artículo 16 de Código Penal y la calidad de cómplice de un delito. Que si se examinan estos hechos que se le imputan a su representado. Su referencia es intrascendente e insistente y no calza en absoluto con la calificación de cómplice del Código Penal. No conoció a estas personas, no tiene participación en su detención, ni prisión, ni supo de lo que decidió el capitán Bustos, solicitando sentencia absolutoria.

C. Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.

C.1. Circunstancias atenuantes: Artículo 11 N°6 del Código Penal. Por su irreproachable conducta anterior como muy calificada al tenor del 68 bis. Trayendo a colación jurisprudencia al respecto.

C.2. Artículo 103.

En cuanto a la ley 18.216, la defensa solo lo enuncia en la suma de su petitorio, sin desarrollarlo en el cuerpo del escrito.

34°) Defensa de Pedro Guillermo Tichauer Salcedo.

Que a fs. 5.683 y siguientes (Tomo XVI), la abogada Karen Valenzuela Jerez, en representación de Pedro Guillermo Tichauer Salcedo, en lo principal de su presentación opone excepciones de previo y especial pronunciamiento. En el primer otrosí, sobreseimiento parcial y definitivo. En el segundo otrosí, contesta acusación de oficio, adhesiones a la acusación y contesta acusación particular. En el tercer otrosí, invoca atenuantes. En el cuarto otrosí, señala medios de prueba. En el quinto otrosí, solicita beneficios. En el sexto otrosí, información sumaria y en el séptimo otrosí solicitud que indica.

A. Excepciones de previo y especial pronunciamiento: La defensa interpuso excepciones de previo y especial pronunciamiento de conformidad al artículo 433 N°6 y 433 N°7 del Código de Procedimiento Penal, las que ya fueron analizadas y falladas a fs. 6.072 a fs. 6.074 (Tomo XVII) con fecha 21 de agosto de 2023.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

B. Sobreseimiento parcial o definitivo.

La defensa solicita el sobreseimiento parcial o definitivo en favor de su representado, por desprenderse de los antecedentes su total inocencia en los delitos de secuestro con grave daño. Alude que con el pronunciamiento o golpe militar del 11 de septiembre de 1973, se generó una actividad legal de facto o no, pero que fue la orden que recibían las fuerzas militares y de orden llevar a cabo fundamentalmente al amparo de los decretos leyes 3 y 5 y sus modificaciones posteriores, como también el decreto supremo N°77. Su representado tenía veinticinco años y el grado de teniente de especialidad, oficial de intendencia, finanzas y logísticas, y por tanto no era un oficial operativo, en el regimiento de Infantería N°8 Tucapel Temuco. Para la fecha su representado se desempeñaba en la sección de administración de fondos del regimiento Tucapel de Temuco, transcribe el Decreto con Fuerza Ley N°1 de 1997, artículo 5. Arguye que en los regimiento de la época, existía la compañía de plana mayor y servicios, en la cual cohabitaban los escalafones de material de guerra e intendencia, entre otros. Que esta compañía es la única que posee una doble función, una para tiempo de paz y otra para tiempos de guerra, reseñando las funciones del personal de intendencia en tiempo de paz. Refiere la defensa que el hecho de pertenecer orgánicamente a la citada compañía, no lo hace conocedor de las actividades propias de dicha unidad y con mayor razón si, a su vez, el comandante de la compañía era el oficial S-2 (inteligencia), quien en esta actividad dependía directamente del comandante o segundo comandante del regimiento, se apoya en principios institucionales para ceñir que su representado no le correspondía conocer otro tipo de actividades que no sean las propias de su especialidad; trae a colación el reglamento orgánico y de funcionamiento en cuanto sitúa a la sección de administración de fondos dependiendo directamente del comandante del regimiento. Cita acusación fiscal fs. 4.328 numeral 59, en el sentido que su representado pertenecer a la compañía de plana mayor y servicios, debía estar en conocimiento de los hechos, situación que indica queda desvirtuada dada la aclaración de la función dual de la compañía. Insiste que su representado se desempeñaba en manejo de finanzas de la unidad, detallando comisiones matrices y administrativas, como el control de ellas, manifestando que las actividades las cumplió su representado desde 1970 hasta noviembre de 1973, oportunidad en que hace entrega de su cargo al teniente Jaime García C., toda vez que fue asignado en comisión de servicio a la Academia

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

de Guerra del Ejército. Reproduce el N°60 de la acusación fiscal, y señala que no se ha podido determinar autor o autores de los hechos, en consecuencia, su representado es acusado de ser cómplice conforme al artículo 16 del Código Penal, en el delito de secuestro con grave daño de las víctimas de autos, sin que la acusación señale y justifique de quien sería cómplice. Y como es que se produciría la complicidad, refiriendo a doctrina y jurisprudencia al respecto. La defensa plantea que no logra coincidir con lo razonado por el Tribunal, en cuanto a la participación que se le atribuye a su representado, toda vez, que no existe en todo el expediente declaración o prueba alguna que lo vincule en el secuestro de las víctimas de autos, o en sus interrogatorios, o apremiándolas. No existiendo cooperación, ni en la ejecución del hecho ni coetánea al mismo, por lo que, sin discutir el delito en sí, ni su calificación jurídica, la defensa reprocha y cuestiona la calidad en que se acusa a su representado, sin prueba alguna más que sus propias declaraciones, que solo lo sitúan en el lugar de los hechos, y con un grado dentro del ejército. Que no se le acusa por una conducta típica y antijurídica y culpable. La defensa reseña nuevamente las actividades de oficial de intendencia, y reproduce informe acerca de la oficialidad al mando de la compañía de plana mayor de fs. 3.399 a fs. 3.400. Transcribe parte de la acusación fiscal rolante de fs. 4.600 enunciando la página 10 Letra C); sin embargo, de acuerdo con lo transcrito el Tribunal entiende que refiere al N°38, y afínica que estas declaraciones pertenecen a otros hechos y respecto a las víctimas nada dice, menos menciona a su representado, como algunos de los oficiales que podría haber amedrentado en contra de las víctimas de autos. Que consta a fs. 3.532 copia de la declaración de Romilio Lavín Muñoz, prestada en causa "el polvorín", declaración que sería conteste con la de su representado en el orden de que sus labores eran de tipo administrativas. Que en el mismo sentido de todas las declaraciones restantes de fs. 3.623; de fs. 3.640, de fs. 3.644; de fs. 3.647 y de fs. 3.650 las que nada dicen sobre las víctimas de autos y menos nombran a su representado, insistiendo en que no habría claridad de quienes habrían participado en los hechos, siendo una acusación ambigua, carente de elementos objetivos, principio inspirador del derecho penal. Trae a colación declaración de Juan Luis Díaz Cortes de fs. 4.141 y siguientes, la cual aduce que en ningún momento de su declaración vincula a su representado con las víctimas de autos. De la misma forma las declaraciones de Juan Humberto Carrillo Rebolledo de fs. 4.208, Eliana

Pichón Seguel de fs. 4.211, y de Erasmo Villanueva Simón de fs. 4.221. Expone que en el punto N°39 de la acusación, el Tribunal dio por establecido que efectivamente existían una dualidad de funciones del comandante de la plana mayor, lo que esta conteste con la declaración de su representado de fs. 1.400 y siguientes y de fs. 3.525 y siguientes. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 408 N°3 del Código de Procedimiento Penal, solicita se decrete el sobreseimiento parcial o definitivo en favor de su representado.

C. En subsidio contesta la acusación fiscal y adhesiones particulares. La defensa comienza solicitando la absolución por falta de participación. Que los hechos no le son imputables a su representado, por no lograrse comprobar con los medios de prueba de la acusación que haya tenido participación en apremiar o causar daño a las víctimas de autos, ya que todos los medios de prueba conducirían a su inocencia. Reproduciendo como defensa todos y cada uno de los medios de prueba que esgrimen en el primer otrosí de su presentación.

C.1. Los hechos: transcribe parte del punto N°59 de la acusación fiscal y soslaya que el Tribunal presume el conocimiento de estos hechos de su representado, aun cuando éste no lo ha reconocido en su declaración. Que no existiría prueba material y testimonial que lo vincule. Que en el mismo sentido el punto N°64 de la acusación, por cuanto las declaraciones de su representado son copias que se han incorporado de otro episodio, y son reseña de su vida militar, expresando que en ningún momento el señor Tichauer reconoce participación en detenciones, interrogaciones y menos torturas a detenidos. Sus funciones eran absolutamente administrativas. Refiere la defensa que el Tribunal no detalla ni funda como lo exige la normativa penal de qué modo sus declaraciones se convierten en fundadas presunciones de su participación en calidad de cómplice en los hechos. Asimismo, no se detalla y funda de qué modo y cuáles serían los antecedentes que vendrían a ser presunciones de culpabilidad y del mismo modo no esclarece en cuál de las hipótesis del derecho penal de las presunciones estaría, lo que le ocasiona una indefensión a su representado, vulnerándose garantías constitucionales, citando el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal. Persistiendo la defensa en cuáles serían las acciones u omisiones típicas antijurídicas y culpables desarrollada por el señor Tichauer en relación con cada una de las víctimas. Por lo que no existirían elementos suficientes para fundar la

acusación deducida en contra de su representado y existiendo una duda razonable de su participación solicita se dicte absolución. Señala el artículo 502 del Código de Procedimiento Penal alegando que su defendido se encuentra en la indefensión y que, desde un punto de vista procesal, la defensa se ve ilegal y arbitrariamente obligada a intentar deducir todas y cada una de las alternativas posibles en que por alguna interpretación equivocada el Tribunal haya concluido que don Pedro Tichauer, hubiera interrogado a algún detenido, torturado o secuestrado o pudiese tener en sus manos el detenido de las víctimas de autos. De modo tanto la acusación fiscal como las acusaciones particulares, carecen de sustento, al simplemente señalar que se acusa a su representado como cómplice de los secuestros con grave daño de las víctimas de autos.

C.2. El derecho: 1) Comienza citado al profesor Künsemüller y apunta que don Pedro Tichauer, no desarrollo ninguna acción u obra participativa en estos hechos estos hechos. 2) Respecto a un posible encubrimiento. La defensa vuelve a proclamar que su representado no tuvo participación en un eventual encubrimiento en los delitos de autos, como tampoco podía saber lo que realmente sucedió, por cuanto llegó a la unidad con posterioridad y fue despachado inmediatamente a su domicilio. Que siempre cumplió con las disposiciones reglamentarias y específicamente las de seguridad militar del Reglamento RAI-01001 transcribiendo los artículos 26, 27, 28, expresando que su representado siempre cumplió con las normas reglamentarias de “necesidad de saber” y “compartimentaje”, tal como lo hacen y cumplen todos los miembros de las fuerzas armadas. Suscribe que lo anterior se encuentra avalado por la Constitución Política, en el capítulo III De los Derechos y Deberes Constitucionales, artículo 3. Que la mejor demostración que el personal del regimiento incluido su representado, solo conoció la verdad oficial, es que han pasado treinta años, recién se inició el proceso de este caso y después de más de catorce años de investigación no se puede conocer la “verdad judicial”, es decir solo los que participaron del hecho deben conocer lo que realmente sucedió. Espeta el artículo 17 del Código Penal, entre otros argumentos con relación al encubrimiento. Que por lo anterior es que no se puede invocar a que solo por el hecho de haber tenido conocimiento del Bando en que se comunicó el hecho, su representado sea encubridor por no denunciar los hechos, realizando comentarios al respecto y que estaría frente a una violación al artículo 1 y 7 de la Constitución

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Política de Chile. Recalcando que su representado no tiene ninguna responsabilidad como encubridor, resaltando los conceptos de complicidad pasiva y no exigibilidad de otra conducta. Que no se le puede invocar a que solo por el hecho de haber tenido conocimiento del bando en que se comunicó este hecho, ya si fuesen así, todos los que se enteraron de los bandos, que se publicaban si eran empleados de la policía o empleados públicos, serían encubridores. Asimismo, plantea que lo anterior no es lógico, sino que significaría en el caso en particular se estaría cometiendo una discriminación ya que no se procesó a todos los integrantes de la unidad militar, e incluso unos de mayor graduación que su representado, con lo cual se estaría frente a una flagrante violación de la Constitución Política capítulo I Base de la Institucionalidad, artículo 1 que reproduce. Considerando que su representado no tiene ninguna responsabilidad como encubridor, resalta la defensa que se ha elaborado recientemente el concepto de “complicidad pasiva”, el que se refiere a ilícitos cometidos durante el periodo del régimen militar, en el cual algunas personas tuvieron informaciones respecto de tales crímenes y delitos, sin embargo, mantuvieron el silencio y no lo denunciaron. Que, desde un punto de vista de la doctrina, jurisprudencia y legislación penal aplicable en Chile, esa conducta está exenta de responsabilidad, según dispone el artículo 10 del Código Penal, apoyando en comentarios de la profesora Clara Szczaranski. Prosigue que con mayor razón corresponde aplicar la misma norma y principio jurídico cuando la posible conducta ilícita que se investiga sería un posible encubrimiento o complicidad por haber tenido conocimiento de delitos cometidos en aquella época y que no se denunciaron.

C.3. De la acusación particular y adhesiones a la acusación fiscal:

Arguye la defensa que tanto la acusación particular como las adhesiones a la fiscal adolecen de defectos de forma y fondo, que inhiben al juez de tenerlas por acogidas a tramitación. Toda vez que no cumplirían con los requisitos exigidos por la ley, los que son de orden público y cuyo incumplimiento o preterición traen consigo la nulidad de esa actuación de parte, que se traduce en la resolución que debe tenerlos por abandonados de la acción, y respecto de las adhesiones por no presentadas en aquella parte que exceden la ley, reproduce el artículo 427 del Código de Procedimiento Penal. **a)** En cuanto a la acusación particular del abogado Ricardo Lavín Salazar, en representación de la Unidad Programa de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de fs. 4.735 y

siguientes, refiere la defensa que este realiza un análisis escueto de la acusación fiscal y solicita las más altas penas analizando las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, sin aportar elementos que contribuyan y cumplan con las normas establecidas en lo que debería ser una acusación particular. **b)** En relación con las adhesiones a la acusación fiscal del abogado Sebastián Saavedra Cea de fs. 4.933 y siguientes; de los abogados Manuel Lisboa Cordero y Juan Carlos Hernández de fs. 4.982 y siguientes; del abogado David Morales Troncoso de fs. 5.037 y siguientes, y del abogado José Luis Neira Vejar de fs. 5.091, proclama la defensa que dichas adhesiones no fundamentarían de qué modo comparte lo razonado con el Tribunal y cuáles serían sus pruebas de cargo para ello. Dejando constancia que en todas ellas a su representado no se le nombra. Insiste la defensa que tanto las pruebas físicas, como testimoniales y periciales demuestran que su representado el señor Tichauer no tuvo ningún tipo de relación, ni participación en los hechos como autor, coautor, cómplice o encubridor. Y al disponerse solo de presunciones judiciales como medios de probatorio para llegar a fijar los soportes facticos de que se trata, estos eventos no satisfacen el requisito de ser reales y estar probados por otros medios, no estaría permitido extraer otras presunciones, con las cuales arribar a la comprobación, con el grado de certeza que la ley exige para la participación culpable. Reiterando que su representado no tuvo participación alguna en los hechos que se le imputan, no habría indicios o hechos fundantes que permitan establecer una presunción fundada que lo vinculen con los hechos del “asalto al polvorín”, como lo exige el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal el que transcribe, replicando que su representado no tiene responsabilidad ni participación en los hechos, que el hecho que su representado fuera oficial de plana mayor de dotación del regimiento Tucapel, no lo hace culpable, ya que no existe responsabilidad por hechos delictivos ajenos, ni por actos reprochables cometidos por personas del mismo grupo al que un determinado sujeto pertenece, ya que una de las características de la responsabilidad es que es personalísima, aludiendo a doctrina al respecto

D. Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal:

D.1 Circunstancia atenuantes: alega la irreprochable conducta anterior de artículo 11 N°6 del Código Penal. Asimismo, la del artículo 11 N°9 del texto citado en orden a que sus declaraciones han colaborado en forma sustancial al esclarecimiento de los hechos y establecimiento de las responsabilidades.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

D.2 Artículo 103 del Código Penal: citando jurisprudencia al respecto.

E. Beneficios de la ley 18.216: ensaya la defensa que en el evento de dictarse sentencia condenatoria se acceda otorgarle a su representado la remisión condicional de pena, en subsidio conceder la libertad vigilada de artículo 14 de ese cuerpo legal.

35°) Defensa de Raimundo Ignacio García Covarrubias.

Que a **fs. 5.576 y siguientes (Tomo XVI)**, el abogado Luis Hernán Núñez Muñoz, en representación del acusado Raimundo Ignacio García Covarrubias. En lo principal de su presentación contesta la acusación fiscal, adhesión y acusación particular. En el primer otrosí solicita beneficios y segundo otrosí, señala medios de prueba.

Sostiene la defensa que viene en contestar las acusaciones particulares y adhesiones a la misma de los querellantes de autos, de la misma forma la acusación fiscal en contra de su representado por la supuesta complicidad del delito de secuestro perpetrado en contra de las víctimas.

A. Solicitud absolución:

Solicita la defensa se absuelva a su defendido por cuanto no serían suficientes haber tenido el grado de subteniente a la época de ocurrido los hechos por el cual se le acusa, no teniendo mando suficiente para determinar quienes debían ser detenidos, ordenar su traslado, interrogaciones y su destino final. Asimismo, que se encontraría prescrita la acción penal, por haber transcurrido el plazo legal establecido por la legislación común, en subsidio solicita se acojan atenuantes.

A.1. Alega la absolución de la acusación de la complicidad del delito de secuestro, por cuanto se encontraría acreditado que su representado en su grado de subteniente cumplió función de oficial de guardia, correspondiéndole el control de la seguridad perimetral del regimiento donde habían puesto de guardia y las actividades de régimen del regimiento fuera de las horas de servicio. Que de un examen de los antecedentes le permiten concluir que de ese cumulo de presuntas pruebas que obrarían en su contra, ninguna posee el mérito suficiente para tenerlo como cómplice del ilícito atribuido. Funda que Raimundo García no es un realizador de la conducta con la que se inicia el estado de antijuricidad que caracteriza el secuestro. De lo anterior no se le podría atribuir responsabilidad ni acreditar el: **a)** Origen de la detención de las víctimas de autos, **b)** La ejecución de

dicha acción como tampoco su traslado a los recintos, ya sea policiales o del regimiento. **c)** No existe ningún antecedente que vincule a su defendido con el destino final de las víctimas del proceso. Contextualizando que si bien está acreditado que con posterioridad al pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, se ordenó la detención e interrogatorios de los militantes y simpatizantes de la unidad popular, que fue llamado a colaborar con la Fiscalía Militar el abogado Oscar Alfonso Podlech Michaud, y en cumplimiento de sus funciones la fiscalía comenzó a tomar declaraciones a las personas llamadas a comparecer o ingresadas en carácter de detenidas y mantenidas en las dependencias y posteriormente dejadas en libertad; que existía una sección segunda de información e inteligencia a cargo del capitán Ubilla Toledo; que se estable la existencia de un grupo denominado “patrulla Brava o Chacal”, formada por clases y conscriptos, bajo las órdenes de un oficial, prosigue contextualizando los hechos reseñados en el auto acusatorio. La defensa refiere que en esos días se encontraba en el regimiento un conscripto de nombre (...) que se señala como testigo protegido de iniciales M.J.C.S, quien en causa rol 113.089 “Asalto al polvorín” declaró, indicando tomos y fojas alegando que este no dice la fuente de información ni que conscriptos habrían participado, ni otorga ningún otro antecedente para dar credibilidad a su relato, prosigue reproduciendo lo declarado por éste y suma que en ningún momento de su relato señala o recuerda a su defendido Raimundo García. Acota que al observar el testigo protegido de nombre (...) la fotografías de Héctor Aguayo, Elías y Hugo González reconoció cuando estaban siendo torturados, sin señalar quienes le estaban aplicando dichos tormentos, que pese a la data de los hechos más de cincuenta años, que estaba oscuro pudo observar que se trataba de personas jóvenes, recordando detalles como el impacto de bala en la cabeza de uno de ellos, pero no da antecedentes de quien habría dado la orden de cargar el camión con personas fallecidas o quienes participaron. Espeta la defensa en relación con el relato de Rubén Sandoval Muñoz, este nada aporta en cuanto a la participación o el origen de dichos cuerpos en ese lugar, lo mismo respecto de Juan Ortiz Parra. Por lo que no existiría ningún antecedente ni menos prueba concreta que lleve a la convicción, más allá de cualquier duda razonable que don Raimundo García Covarrubias haya tenido alguna participación en las diversas etapas o secuencias del relato de los hechos que sustentan la acusación. No tuvo participación en la detención de los

ochos jóvenes, no dio la orden que los detenidos fueran trasladados al regimiento Tucapel, tampoco integró la sección segunda de información e investigación a cargo del capitán Manuel Ubilla Toledo, no estuvo a cargo ni tuvo participación en la creación de la llamada “patrulla Brava o patrulla Chacal”. Enuncia que, pese a su nula participación en estos lamentables hechos, que en el auto acusatorio se señala que debieron ser conocidos por la oficialidad al mando de la compañía de plana mayor y servicios del regimiento Tucapel de Temuco. Afinca realizar un análisis del contenido del proceso y su relación con la causa rol 113.089 sustanciada por el Tribunal. Reitera que su representado no participó en los hechos que se acusa, lo que sería avalado por los tomos que contempla la causa en comento, donde no se individualiza a su defendido en las acciones concretas que son investigadas, solo se establece el pertenecer a una compañía en que el capitán era a su vez el oficial de inteligencia del regimiento. Que de esta forma se instaura un paradigma negativo involucrando a la unidad en su conjunto y a sus integrantes. Insiste en la declaración extrajudicial de fs. 3.689 del testigo protegido y sus demás declaraciones judiciales por cuanto no menciona a Raimundo García, pero si involucra a integrantes de la compañía de plana mayor que ocupaba el capitán Ubilla, cuyo control sostiene escapaba al conocimiento y al ámbito de acción de cualquier oficial o suboficial. Que a pesar de ser responsabilidades individuales no se encuentran procesados en la causa. Reproduce declaración de Enrique Segundo Muñoz Moreno de fs. 4.754 de causa rol 113.089, que expone tal declaración por cuanto el testigo M.J.C.S. menciona a Chávez Etchepare y Valeria, y trabajan directamente con el capitán Ubilla, ajenos al normal rodaje de la compañía. Aduce que su representado en agosto de 1973, se integró a la compañía de plana mayor, se encontró con una unidad ya estructurada desde comienzo del año militar en el mes de marzo. Con la misión de crear una nueva sección el cual se vio enfrentado al escenario ocasionado por el 11 de septiembre, donde tuvo que agilizar la tarea y por ende, no tener una planta definida de soldados. Por ello que en esas circunstancias no se le puede responsabilizar de personal que nunca estuvo a su cargo, o fueron sacados por el sargento Quilodrán para trabajar con el capitán Ubilla, quien tenía su propio equipo que ejercía sus actividades de inteligencia, las que no eran conocidas por el personal de oficiales y de planta de la compañía. Refiere a la declaración de fs. 2.315 de José Cortez Aedo por cuanto adosa que nunca se le dio una orden de ir a la isla Cautín a

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

recoger cadáveres. Escruta la defensa que, considerando la participación de carabineros, fuerza aérea, escenario del río Toltén y ejército, ellas configuran un elemento sustancial del proceso, cuyos funcionarios declarantes no se ubican en un nivel de responsabilidades, tanto colectivas como individuales.

A.2. Rol de su defendido y su relación con la compañía de plana mayor: Comienza refiriendo a la carrera funcionaria de su representado quien agosto de 1973 lo encuadran en la compañía de plana mayor, con la misión de organizar la unidad montada, cuya dotación de veintisiete soldados y ciento diez caballares, por cuanto sus funciones estuvieron focalizadas en interiorizarse de la instrucción de su nueva unidad y organizarla con los medios que se asignaron y que posterior al 11 de septiembre continuó en dicha actividad, sumado a la actividad de guardias, emergencias y control de toque de queda. Por tal razón a fs. 3.399 no figura en la lista de revista del comisario año 1973 en la compañía plana mayor. Aludiendo a la enfermedad de su representado a comienzos del mes de octubre y retomando sus actividades en diciembre de 1973. Respecto al encuadramiento de la sección montada de la compañía de plana mayor, trae a colación la declaración de Juan Humberto Carrillo Rebolledo de fs. 1.314 en cuanto manifiesta que a mediados de 1973 se hizo cargo de su sección el teniente García. Declaración de fs. 2.274 Sergio Concha San Martín.

A.3. Rol de la compañía de plana mayor del batallón, y su diferencia con la denominada plana mayor del regimiento, estamento en el cual el capitán Ubilla ejercía la función de inteligencia, pero donde Raimundo García, no formaba parte ni tenía relación alguna: Que el mando de la compañía de plana mayor donde fue encuadrado Raimundo Garcia en agosto de 1973, recaía en el capitán Nelson Ubilla Toledo, quien además era el S-2, sintetizando las funciones de este oficial. Glosa que su representado nunca asumió ni tuvo actuaciones y potestad de comandante de compañía, solo se limitó a sus funciones de comandante de sección, la cual era de su responsabilidad. Que es en esas condiciones y facultades, donde el capitán Ubilla contaba con el personal de suboficiales de la sección segunda, los funcionarios de investigaciones y algunos soldados de la compañía de plana mayor, para sus fines de inteligencia, lo que se avalaría en un sinnúmero de declaraciones, apoyándose en declaración de fs. 1.931 de Raimundo Quezada, por cuanto no mencionaría a su representado. Insiste la defensa en el auto de procesamiento de causa rol

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

113.089 por cuanto se dieron por establecido tres entidades, a saber: Fiscalía Militar, sección segunda de informaciones e inteligencia y “patrulla Brava o Chacal”, las cuales refiere habrían actuado mancomunadamente para la labor con los detenidos, acotando sucintamente mando y funciones. Hace presente que de igual manera se relata esta relación en la presente acusación. En ese orden de ideas señala la declaración de fs. 873, donde se menciona una patrulla de fuerza aérea apodada “los chicos malos”, quienes según los dichos habrían estado todos los días patrullando en Villarrica. Acotando que el ejército estaba la patrulla “brava o chacal” al mando del subteniente Espinoza, apuntando a los careos entre los integrantes de dicha patrulla y a la declaración de fs. 76 de Luis Jofre Soto, por cuanto se entendería que el teniente Espinoza no solo cumplía un rol de custodiar detenidos, quien según plantea no se relacionaba de manera alguna con los integrantes de la compañía de plana mayor y en absoluto con su representado. Señala declaración de fs. 2.601 de José Joel Matus Salazar con relación a las actividades en otras zonas.

A.4. Declaraciones relacionadas para hacer valer: Plantea la defensa que ninguna víctima relaciona a su defendido como torturador o victimario de apremios ilegítimos, anunciando acusación de rol 113.089. Que a fs. 1.286 declaración en causa rol 4.473 de Víctor Maturana Burgos quien no menciona a su representado. Asimismo, enuncia una serie de declaraciones y nombres de exintegrantes de la compañía de plana mayor, quienes no inculpan en acto punible a Raimundo García y solo hacen testimonio de su recto actuar.

A.5. Declaraciones traspasadas de la causa rol 113.089 que involucran a su representado, y posteriormente se retractan: apunta a los dichos de Juan José Salgado Goyeneche de fs. 2.594 a fs. 2.597, declaración de Ernesto García Isla de fs. 1.362, de Andrés Pacheco Cárdenas de fs. 424. Aludiendo a declaración de causa rol 113.089 y que la organización denominada SIRE no existía en Temuco según plantea que en el informe de Comisión Valech solo menciona su existencia en Concepción. Declaración de Jorge Godoy Valdebenito de fs. 3.024 por cuanto se desconocería que quiso decir y si vio a su representado en un acto de apremios. De Eduardo Manríquez Figueroa de fs. 2.730, José Raúl Inzunza Reyes de fs. 2.740, el primero sindicaliza su representado como quien ingresaba a la sala de interrogadores y el segundo no menciona a cuál de los hermanos García se refería. Que todo esto se vuelca a la

constante ambigüedades e imprecisiones con su representado, sería comentarios generalizados, rumores, de igual manera se expresaría unido con la figura de su hermano.

A.6. Lugares en tránsito o de uso, empleado por la sección segunda:

la defensa vuelve a reiterar el rol 113.089 por cuanto en dicho rol se deduce que el capitán Ubilla se iba trasladando con su personal por diferentes sectores de la unidad, que es por ello que su representado, respecto a los detenidos de la sección segunda no vio gente deambulando por sectores del regimiento con vista vendada que le llamara la atención, no se percató que había una sala de interrogatorios entre la compañía morteros y plana mayor. Por otra parte, refiere que los subtenientes no tenían oficinas en las compañías, por lo que se formaba a los soldados en los sectores aledaños de la unidad, y su representado realizaba instrucción montada en el picadero, ubicado al costado de las naves donde iniciaba actividades con su sección. Y como oficial de guardia le correspondía controlar la seguridad perimetral del regimiento y las actividades de régimen del regimiento fuera de las horas de servicio. En cuanto al ingreso de los detenidos provenientes de la cárcel, sostiene que eran transportados por vehículos de gendarmería y llevados a dependencia de la fiscalía, y eran estos los que llevaban el control de los detenidos, en la guardia solo se anotaba el ingreso del vehículo. En relación con los otros ingresos que podrían haber ocurrido de carabineros, fuerza aérea o de la misma unidad, que pudiesen no ser visados por la guardia, que existía en esa época un intenso tránsito vehicular fiscal y de uniformados en el regimiento. Además de persona civil citado por la fiscalía. Todo restringido por la necesidad del saber, grado de acceso y compartimentaje de la información, existente de los mandos superiores hacia los subalternos, era improbable que los oficiales de compañía de plana mayor supieran de los supuestos hechos que los acusan. Hace presente que el rol de oficial de guardia, lo efectuaban los suboficiales y oficiales del grado subtenientes, los turnos y horario.

A.7. La sección segunda de inteligencia, su dependencia, rol y efectos comunicacionales negativos sobre la compañía de plana mayor:

Afinca la defensa que la sección segunda bajo la dirección del capitán Ubilla y su personal asignado o designado, trabajaba en actividades diametralmente opuestas a las correspondientes compañías, con códigos técnicos diferentes y propias nomenclaturas que no eran de la orgánica propia de un regimiento; su

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

representado no estaba calificado para estar en conocimiento de las actividades y resoluciones internas de su superiores y de las acciones que ejercía la cúpula del regimiento, es decir, su plana mayor. Advierte que la compañía de plana mayor no se involucró en actividades de inteligencia, la unidad cumplió con las actividades de instrucción y seguridad interior. Añade que las responsabilidades de los hechos punibles distantes de la legalidad son individuales y no colectivas, que no por estar encuadrado en determinada unidad, por ese solo hecho se le puede sindicar o presumir un delito. Que, si bien la acusación fiscal imputa responsabilidad en calidad de cómplice a don Raimundo García, a entender la defensa, por el solo hecho de haber estado en el regimiento Tucapel de Temuco, en la fecha que habrían ingresado los detenidos, se le responsabiliza por estar y no por hacer u realizar tal o cual acción. Que antes para determinar el concierto previo, el cual requiere un acuerdo de voluntades que debe ser previo a la ejecución del hecho o hechos, cita doctrina al efecto. Finaliza planteando que del examen de los antecedentes del proceso permiten dos aseveraciones, la primera que don Raimundo García Covarrubias no estuvo en ninguna conspiración previa para ir a detener, trasladar, interrogar o disponer de los militantes y simpatizantes del partido socialista, no bastaría para responsabilizar a su representado el hecho que cumplía funciones en el lugar de detención, funciones que no estaban relacionadas con los hechos materia de la acusación.

B. Prescripción de la acción penal.

La defensa comienza mencionando la ley de amnistía, sin realizar fundamento para su petición. Alega que corresponde que se sobresea definitivamente el presente proceso por ser procedente la prescripción sobre los hechos investigados, según lo dispone el artículo 107 del Código de Procedimiento Penal, por cuanto han transcurrido casi cincuenta años desde la fecha del delito. Indicando el artículo 94 y 97 del Código Penal. Que con relación a su representado y de conformidad a lo que se trasunta del proceso no concurre ninguno de los presupuestos que el artículo 96 del Código Penal pueda hacer interrumpir o suspender la prescripción de la acción penal, lo que se desprendería claramente de autos sin necesidad de certificación especial. Por cuanto su cliente no se ha ausentado del territorio de la república, cita artículo 100 del Código Penal al respecto y que en consecuencia la responsabilidad penal que pudiere afectar si así hubiese sucedido con su representado, acusado por el delito de secuestro

simple y homicidio calificado, una vez agotada la investigación, se ha extinguido por la prescripción de la acción penal. Delito de secuestro, destaca la defensa los verbos rectores del delito de secuestro y reitera que la acción penal se encuentra prescrita y no es posible legalmente inclusive que se haya admitido a tramitación esta causa y mucho menos se acuse por ella. Vulnerándose las garantías constitucionales de su representado, lo que puede ser enmendado mediante la dictación del correspondiente sobreseimiento definitivo.

C. Acusación particular.

Expresa la defensa que los querellantes particulares solicitan las mismas circunstancias agravantes del artículo 12 número 8 y 11 las que reproduce, así también solicitan la regla de la reiteración del artículo 509 del Código de Procedimiento Penal. Acota que en ninguna de estas circunstancias agravantes su representado puede verse reflejada su conducta, ya que la primera de ella necesariamente está ligado al concepto de aprovechamiento, sin que se pueda determinar cuál fue el aprovechamiento o ventaja de Raimundo García pudo obtener. En la segunda tampoco se relaciona porque no se le imputa la calidad de autor.

D. Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.

D.1. Eximentes de responsabilidad: invoca el artículo 10 N°10 del Código Penal, solicitando que se considerada como circunstancia atenuante en virtud de lo dispuesto por el artículo 11 N°1 del mismo cuerpo legal.

D.2. Atenuantes de responsabilidad: solicita el artículo 11 N°6 y N°8 del Código Penal.

D.3. Artículo 103 del Código Penal: por cuanto se reunirían los presupuestos legales para su aplicación.

D.4. Artículo 211 en relación con el 241 del Código de Justicia Militar, los que reproduce.

E. Beneficios de la ley 18.216: requiere la defensa que en el evento de dictarse sentencia condenatoria se acceda otorgarle a su representado algunos de los beneficios contemplado en dicho cuerpo legal, en especial la remisión condicional de la pena.

F. Medios probatorios: La defensa enuncio en su presentación una serie de diligencias, lo que fue resuelto a fs. 5.612 (Tomo XVI), no dándose lugar a estos, atendido el mérito del proceso.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

36°) Defensa de Romilio Lavín Muñoz.

Que a **fs. 5.923 y siguientes (Tomo XVII)**, el abogado Rodrigo Cortés Carrasco, en representación de Romilio Lavín Muñoz, en lo principal de su presentación interpone incidente y eximente; en el primer otrosí, interpone excepciones de previo especial pronunciamiento, en carácter de defensa de fondo; en el segundo otrosí, contesta acusaciones particulares y adhesión a la misma, en subsidio solicita recalificación de los delitos, en subsidio atenuantes de responsabilidad penal; y en el tercer otrosí, penas sustitutivas de la ley 18.216. En su complemento de **fs. 5.978 y siguientes (Tomo XVII)**, en lo principal de su presentación interpone incidente y eximente; en el primer otrosí interpone excepciones de previo y especial pronunciamiento, en carácter de defensa de fondo; en subsidio solicita recalificación de los delitos; en subsidio atenuantes de responsabilidad penal; en el tercer otrosí, penas sustitutivas ley 18.216.

Advirtiendo el Tribunal que, para un mejor entendimiento de esta defensa, se tendrá por reproducido aquellos puntos de ambas presentaciones que sean coincidentes en sus fundamentos, y solo se transcribirá uno de ellos.

A. Incidente de Nulidad. La defensa interpuso incidente de nulidad, el cual ya fue analizado y fallado en los considerandos precedentes.

B. Excepciones de previo y especial pronunciamiento: La defensa interpuso como excepciones de previo y especial pronunciamiento del artículo 433 N°4 y N°7 del Código de Procedimiento Penal, las que ya fueron analizadas y falladas a fs. 6.080 a fs. 6.082 (Tomo XVII) con fecha 22 de agosto de 2023.

C. Excepción de fondo.

La defensa alega como excepción de fondo la prescripción de la acción penal, contemplada en el artículo 433 numeral 7 del Código de Procedimiento Penal, se apoya en el artículo 94 del Código Penal, en cuanto a los plazos de prescripción, artículos 48 del Código Civil y artículo 95 del Código Penal. Plantea que los hechos investigados habrían ocurrido en septiembre de 1973, habiendo entonces transcurrido a la fecha más de 49 años, encontrándose prescrita la acción penal, conforme a los artículos 94, 95 y 96 del Código Penal. Que los hechos no se enmarcan en el tipo penal de detención ilegal y secuestro con grave daño en carácter de lesa humanidad. Que no todo delito de detención ilegal y secuestro con grave daño es o reviste los caracteres de lesa humanidad. Por cuanto, esta clase de ilícitos están constituidas por acciones generalizadas o

sistemáticas contra la población civil, requiere para el agente una planificación metódica y una organización y planificación previa. Mencionando que su representado no participaba en los controles o detención de las personas que posteriormente serían interrogadas en el regimiento Tucapel. Que el hecho de autos al no ser lesa humanidad debe considerarse legalmente prescrito.

D. Contestación de la acusación fiscal, acusación particular y adhesión a la acusación fiscal.

La defensa comienza planteando eximentes de responsabilidad penal, las que serán reproducidas posteriormente para un mejor entendimiento. En cuanto a las acusaciones particulares y adhesión a la acusación fiscal, soslaya que, si bien su representado ejercía una función pública, no existen pruebas de que en base a la función que ejercía abusaba de su poder o cargo, ya que no se señala directamente que funciones ejercía dentro del regimiento Tucapel, tampoco se señalaría en las acusaciones en qué momento y de qué forma aseguró su impunidad. Lo referido dejaría de manifiesto que las agravantes de la circunstancia N°8 del artículo 12 del Código Penal es improcedente. En cuanto a la atenuante del artículo 11 N°6 del mismo cuerpo legal, espeta que la conducta de su representado no puede ser cuestionada como exenta o afecta a reproches, ya que en ningún momento se señala la conducta desplegada por él.

D.1. En cuanto a la supuesta complicidad en los delitos que en el acto acusatorio se describen (presentado en ambos escritos): A finca la defensa que la conducta de su representado en ningún momento coincide con los presupuestos que la ley impone en el artículo 16 del Código Penal. En el expediente de estos autos, no hay pruebas que permita aseverar fehacientemente que fue parte de los hechos. No se acreditaría su participación alguna en los hechos delictuales. Asimismo, alega la defensa que no hay antecedentes que permitan construir alguna presunción de que participó o fue responsable de alguno de los hechos delictuales de estos autos. Transcribe el artículo 16 del Código Penal, y suma que, en ningún momento se señalan las pruebas de que efectivamente su representado cooperó en la ejecución del hecho, ya sea por actos anteriores o simultáneos. Que solo se señala en la acusación que su representado Romilio Lavín, debía conocer los hechos, solo por haber prestado servicios en el regimiento Tucapel. Además, las declaraciones realizadas en el proceso que señalan a su representado en el lugar de los hechos, no pueden

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

constituir plena prueba para acusar a su representado. Insiste que no existen antecedentes suficientes para acusar a su representado, por lo que solicita se absuelva por falta de participación en los hechos. Alega la defensa que los hechos narrados en el expediente son constitutivos del delito de homicidio calificado de lesa humanidad. Para poder sostener esta premisa es indispensable que los hechos judicialmente asentados en el sumario, y que son objeto de reproche penal a su representado, tenga la debida congruencia con el delito objeto de la acusación. Es decir, el ejercicio judicial supone que los hechos acaecidos en el mes de septiembre de 1973, tiene relevancia penal considerable, pues se trata de detención ilegal y secuestro con grave daño. Refiere a los crímenes y delitos de lesa humanidad y genocidio por cuanto están regulados en la ley 20.357, y que en el artículo 1 y siguientes se definen las hipótesis factuales que importan estos ilícitos. Que el delito de autos por remisión normativa y por interpretación legal debería remitirnos a dicha norma, y que sea producto de un ataque de una política de Estado o de sus agentes, en el caso no se encontraría ninguna conexión entre los hechos objeto de la acusación y la calificación jurídica de los mismos. Sostiene que su representado no pertenecía a ningún órgano represivo, creado por la dictadura militar para detener, torturar y asesinar opositores políticos, en forma sistemática y generalizada. La participación de cómplice de su representado no se encontraría acreditada.

E. Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal:

E.1. Eximentes: La defensa plantea como eximente de responsabilidad penal el artículo 10 N°10 del Código Penal, aduciendo que su representado al momento de ocurridos los hechos pertenecía a la compañía de plana mayor y servicios del regimiento Tucapel, además había ingresado a la escuela militar solo dos años antes de ocurridos los hechos. Lo anterior demostraría que solo actuó de acuerdo con las órdenes que recibía de sus superiores, Oscar Alfonso Podlech Michaud quien detentaba el cargo de fiscal de hecho y firmaba la mayoría de las veces el despacho administrativo, el que además participó en algunos interrogatorios de detenidos, con quien su representado tenía una relación de subalterno.

E.2. Atenuantes: La defensa alega en subsidio como eximente el artículo 11 N°1 del Código Penal, para el caso de no acogerse la eximente completa de responsabilidad penal. De la misma forma requiriere se aplique la del artículo 11

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

N°6 del mismo cuerpo legal, por cuanto a la fecha de los hechos no existía condena alguna contra su representado. Además, del artículo 11 N°9 del texto punitivo, por cuanto invoca que su representado presto declaraciones acerca de los hechos investigados, lo que considera colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos.

E.3. Artículos 211 y 214 del Código de Justicia Militar: Suma que el superior que imparte una orden es el único responsable, salvo concierto previo. Es el caso de su representado pues prestaba servicios al regimiento Tucapel, por orden de superiores, lo cual queda claro considerando su rango en aquel entonces.

E. Beneficios ley 18.216: La defensa los solicita de manera generalizada.

37°) Defensa de Luis Bustos Letelier

Que a **fs. 5.646 y siguientes (Tomo XVI)** el abogado Víctor Hugo Risco Ferreira, en representación de Luis Bustos Letelier, presento excepciones de previo y especial pronunciamiento y asimismo contesto la acusación. Debido a que fue sobreseído con fecha 05 de enero de 2024 según consta a fs. 6.376 (Tomo XVIII) don Luis Bustos Letelier por fallecimiento cuyo certificado de defunción rola a fs. 6.349 (Tomo XVIII). Atendido lo anterior el Tribunal se estará al sobreseimiento indicado y en consecuencia no tiene que analizar dicha contestación.

ANÁLISIS DE LAS DEFENSAS

38°) Consideraciones previas al análisis de la defensa específica:

Que previo al análisis de la defensa específica es necesario tener en consideración los antecedentes y reflexiones que seguidamente se detallarán:

- A.** Resumen del auto acusatorio.
 - B.** Estado de derecho.
 - C.** Obligación de investigar
 - D.** Jurisprudencia Internacional sobre graves violaciones a los derechos humanos (delitos de lesa humanidad) pronunciada por los tribunales alemanes
 - E.** Análisis de la complicidad
 - F.** Convenio de Ginebra
- A. Resumen del auto acusatorio**

Que para una adecuada ponderación y razonamiento en el análisis de cada defensa específica se hace imprescindible hacer un resumen de los hechos establecido en el auto acusatorio de **fs.4.600 a fs. 4.662 (Tomo XIII)**, con fecha 4 de noviembre de 2022, en la parte pertinente de la descripción de los hechos:

A.1. En el N°33), se contextualiza que ocurrido el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 se ordenaron las persecuciones y detenciones de militantes y simpatizantes de la Unidad Popular.

A.2. En el N°34) se da cuenta que una vez producido el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas tomaron el control de la ciudad de Temuco, quedando como gobernador de la ciudad el coronel comandante Pablo Iturriaga Marchesse.

A.3. En el N°35) se especifica que el acusado Oscar Alfonso Podlech Michaud, el mismo día 11 de septiembre de 1973 fue llamado a colaborar con el nuevo régimen, presentándose en la Fiscalía Militar la que se encontraba a cargo del comandante mayor Luis Jofré Soto, quien debió asumir mayores funciones como segundo comandante del regimiento Tucapel. A partir de ese día comenzaron a llegar civiles los que fueron llamados a través de diferentes medios o traídos en carácter de detenidos.

A.4. En el N° 36) se explica que el alto número de detenidos y personas llevadas a la Fiscalía Militar tuvo que ser reforzada por funcionarios del Poder Judicial, petición que solicitó a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, el propio acusado Podlech Michaud, actuando como fiscal ad-hoc.

A.5. En el N° 37) se reitera las mayores labores del comandante mayor Luis Jofré Soto, además de su falta de conocimiento en materia procesales y penales, como su poco carácter fue delegando funciones como fiscal militar al abogado Oscar Alfonso Podlech Michaud, quien empezó a detentar el cargo como fiscal de hecho, realizando todas las gestiones pertinentes a tal cargo.

A.6. En el N°38) se puntualiza que las personas que debían presentarse a la Fiscalía Militar y los detenidos eran mantenidos en una dependencia ubicadas junto a la guardia o en el gimnasio. Una vez interrogadas, ya sea por la Fiscalía Militar, detectives agregados o por los oficiales Raimundo García Covarrubias, Pedro Tichauer Salcedo, Romilio Lavín Muñoz, entre otros eran dejados en libertad para posteriormente ser aprehendidos nuevamente, otros enviados a sus casas y otros conducidos hasta la cárcel pública.

A.7. En el N°39) se anexa que para septiembre de 1973 en el regimiento Tucapel existía la sección segunda de informaciones e inteligencia, a cargo del capitán Nelson Ubilla Toledo, quien ejercía dualidad de funciones por ser también comandante de la compañía de plana mayor y servicios de dicho regimiento. Así también en dicha sección segunda realizaban funciones suboficiales de la institución, labor reforzada desde esa fecha con funcionarios de investigaciones y carabineros, quienes entregaban información de carácter político de las personas sujetas a investigación por parte de la Fiscalía Militar. Sumándose a inteligencia algunos oficiales, clases y conscriptos de dicha unidad militar.

A.8. En el N°40) se da cuenta que con el correr de los días la Fiscalía Militar y la sección de inteligencia comenzaron a trabajar conjuntamente para interrogar a los detenidos. Habilitándose dos espacios en la unidad militar, ubicadas ente la compañía de plana mayor y la de morteros y otra en un antiguo gimnasio en desuso, donde los detenidos eran interrogados y apremiados físicamente.

A.9. En el N°41) se especifica que en ambas salas de interrogatorio y de tortura existían implementos para tales fines y en esta tarea participaban soldados conscriptos, que colaboraban con el capitán Ubilla Toledo, así como oficiales y clases de la compañía de plana mayor y servicios.

A. 10. En el N° 42) se da cuenta que existía una patrulla militar especial denominada “Patrulla Brava o Chacal” integrada por soldados clases y conscriptos de la segunda compañía cazadores, quienes recibían ordenes de un oficial, y era la encargada de custodiar los detenidos.

A.11. En el N° 43) se expone que en la comuna de Villarrica las fuerzas de orden y seguridad encabezadas por carabineros allanaron los domicilios de los partidarios del gobierno derrocado con el objeto de detenerlos y en muchos casos trasladarlos hasta el regimiento Tucapel de Temuco, para ser puesta a disposición de la Fiscalía Militar.

A.12. En el N° 44) destaca que tras la dinámica de detenciones y posterior traslado al regimiento Tucapel de Temuco, durante los días posteriores al 11 de septiembre de 1973, resultaron muertas o desaparecidas un número importante de personas de la novena región, siendo explicadas estas en algunos casos por bandos militares. Que en otros casos los civiles fueron dejados en libertad para inmediatamente se aprehendidos e ingresados a la unidad militar o a otra

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

institución, con el objeto de ser apremiadas físicamente a tal punto que algunos resultaron fallecidos producto de las torturas.

A.13. En el N° 45) se individualiza a las víctimas Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt; dándose a conocer que por su militancia política y en atención a lo acontecido, decidieron salir del país por estimar que sus vidas corrían peligro, por cuanto algunos de sus domicilios ya habían sido allanados por carabineros de Villarrica.

A.14. En el 46) se relata cómo sucedieron los hechos del día 13 de septiembre de 1973, los ocho jóvenes tomaron un microbús que los llevaría a Curarrehue donde intentarían cruzar hacia Argentina por algún paso fronterizo. Sin embargo, uno de los jóvenes se arrepintió, motivo por el cual todos decidieron bajarse del autobús y emprendieron marcha hacia Caburgua, cuidándose de no encontrarse con patrullas militares o de carabineros.

A.15. En el N°47) se agrega que tras recorrer ocho kilómetros divisaron un vehículo que se acercaba desde Pucón. Héctor Aguayo reconoció el vehículo que había pertenecido a su padre anteriormente y vendida a un comerciante, por lo que no sospecharon que se tratara de una patrulla. Pero en dicho móvil se trasladaba Luis Bustos Letelier, capitán de carabineros de la subcomisaria de Pucón y otros uniformados de la misma unidad, quienes se detuvieron al ver el grupo de jóvenes.

A.16. En el N° 48) se señala que Luis Bustos Letelier después de un breve interrogatorio dispuso la detención de los ocho jóvenes, sin orden judicial previa, ordenando su traslado hasta la subcomisaria de Pucón. En dicha unidad se encontraban otros detenidos por motivos políticos, quienes reconoce a Héctor Aguayo Olavarría, alias “El Chachi” pudiendo percatarse que se encontraba muy maltratado físicamente y les relato lo acontecido previamente.

A.17. En el N° 49) se especifica que Luis Bustos Letelier regresó a la unidad, siendo informado por el suboficial de guardia Diógenes Bravo Bernaldes que los detenidos habían sido trasladados hacia al regimiento Tucapel de Temuco.

A.18. En el N° 50) se evidencia que las víctimas fueron ingresados a las dependencias del regimiento de infantería N°8 Tucapel de Temuco. Tras ello habrían sido dejadas momentáneamente en libertad, para luego ser nuevamente

detenidos y en esta ocasión apremiados y torturados al interior del regimiento Tucapel.

A. 19. En el N°51) se precisa que el regimiento las víctimas fueron vistas por diferentes personas quienes los conocían y que se encontraban en su misma calidad, quienes narran en qué situación vieron a los ocho jóvenes y así también que pudieron conversar con Héctor Aguayo Olavarría. Puntualizando que la dinámica respecto de los ocho jóvenes detenidos y secuestrados correspondió a una forma habitual que tenían las fuerzas armadas y de orden en aquella época respecto de los opositores del régimen militar, la que consistía en que una vez detenidos eran puestos en libertad (falsa libertad) para luego ser detenidos nuevamente y llevados a esa dependencia.

A.20. En el N° 52) se reseña que en esa época se encontraba cumpliendo su servicio militar en la compañía de plana mayor y servicios el conscripto M.J.C.S, quien, al observar fotografías de Héctor Aguayo, Elías González Ortega y Hugo González Ortega, pudo reconocer a aquellos como quienes habían estado siendo torturados en una sala ubicada en la compañía de plana mayor y servicios del regimiento Tucapel, donde estaban presente dos oficiales y un grupo de detectives. Siendo testigo ocular de las torturas a las que se sometían los detenidos en dicha sala, y reconoció a estas víctimas porque cuando ingresaban lo hacían con la vista vendada, pero al salir no.

A.21. En el N°53) se da a conocer la dinámica de cómo se operaba en la unidad militar, por cuanto el testigo M.J.C.S en dos ocasiones le correspondió cargar un camión con cuerpos de personas fallecidas, desde el polígono de tiros de la isla Cautín. Siendo la primera vez diez cuerpos y la segunda vez ocho cuerpos de sexo masculino, jóvenes. Además, se menciona los otros conscriptos presentes en el lugar y se detalla en qué condiciones se encontraban los cuerpos. Así también para la credibilidad del relato del testigo reservado, se reseña los peritajes a los que fue sometido.

A. 22. En el N°54) se relata que ambas oportunidades el camión salió en dirección al puente Allipen y el personal de la segunda de cazadores se hizo cargo del traslado de los cadáveres hasta el mencionado río.

A.23. En el N°55) se agrega que días posteriores al 11 de septiembre de 1973, un civil que se dedicaba a la pesca recreativa en el río Toltén, entre el tramo Pitrufquén – Faja Maisan, encontraron alrededor de doce cuerpos en distintos

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

sectores, de sexos masculino, recordando que cuatro de ellos eran mayores y los demás personas jóvenes, llamándole la atención el de un joven que presentaba una perforación en el lado derecho de su cráneo y sobre el cual se encontraban su documento de identidad, el que indicaba la palabra Villarrica, no logrando distinguir su nombre. Que se dio cuenta a carabineros de Villarrica, siendo amenazado, motivo por el que no denunció. Testigo al que se le exhibieron las fotografías, reconociendo a Héctor Aguayo Olavarría.

A. 24. En el N°56) se suma a lo declarado anteriormente otro testigo quien era botero de la época y que es concordante en cuanto a que días posteriores al 11 de septiembre de 1973, encontró flotando en las aguas del río Toltén una gran cantidad de cuerpos, y otros varados en la ribera; llamándole la atención el de una persona joven a quien revisó sus vestimentas encontrando un papel de un colegio de Villarrica, alcanzando a distinguir su apellido Aguayo. Quien describe las condiciones en las que se encontraba el cuerpo, sus vestimentas y características físicas.

A.25. En el N° 57) se cuenta que tras la detención del día 13 de septiembre de 1973, los familiares de las víctimas jamás volvieron a tener noticias acerca de ellos, iniciando una infructuosa búsqueda en los distintos recintos de detención de prisioneros políticos en aquella época, dirigiendo algunos de ellos al regimiento Tucapel de Temuco, donde se les negó su detención.

A.26. En el N° 58) se exterioriza que en la actualidad permanece solo el relato existente en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que da cuenta de estos hechos y las declaraciones del testigo M.J.C.S que da cuenta de haber recogido ocho cuerpos desde el polígono de tiro de la isla Cautín y reconoció a Héctor Aguayo Olavarría a Hugo Arner González Ortega y Elías Dagoberto González Ortega, al menos tres de los ocho cuerpos. Reiterándose la dinámica de detener, dejar en libertad y volver a detener a las mismas personas.

A.27. En el N°59) el Tribunal afirma que estos hechos debieron ser conocidos por la oficialidad al mando de la compañía de plana mayor y servicios del regimiento Tucapel, entre ellos Raimundo Ignacio García Covarrubias, Pedro Guillermo Tichauer Salcedo y Romilio Osvaldo Lavín Muñoz, a la cual pertenecía el conscripto M.J.C.S. Asimismo el Tribunal asevera que Alfonso Podlech Michaud actuaba desde el 11 de septiembre de 1973 como abogado asesor y Fiscal Militar Ad-Hoc del regimiento Tucapel de Temuco, interrogando y decidiendo el destino

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

de los detenidos, lo que se demuestra con los testimonios de diferentes testigos que se citan en este numeral, documento que constan en el proceso y pericias realizadas.

A.28. En el N°60) el Tribunal acota que hasta la fecha ningún funcionario público del Ejército de Chile o de otra Fuerzas Armadas y/o Orden y Seguridad, que se desempeñaban en la época de los hechos, han dado algún antecedente de lo acontecido con Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, manteniendo el ocultamiento hasta la fecha.

A.29. Como puede observarse desde las detenciones de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, la descripción de los hechos del auto acusatorio dan cuenta de un procedimiento, de una coordinación y manera de proceder respecto de las múltiples personas que eran detenidas y trasladadas al regimiento de Infantería N°8 Tucapel de Temuco. La descripción de los hechos es precisa, detallada y está relacionada con la ponderación de la prueba, por lo que le corresponde tanto la tipificación del delito que se ha realizado como la calificación penal que se hace a los acusados. Sin perjuicio de todo el análisis que se realizará de las contestaciones por parte de las defensas.

B. Estado de Derecho

B.1. Estado Autoritario: “Un Estado autoritario, es aquel donde **el poder se encuentra concentrado en una persona o grupo de personas**. Hay una estructuración estatal, existe autoridad, pero las leyes no obedecen a órganos que tengan origen democrático y por lo general no hay subordinación ni respeto a ella. (Roberto Ruiz Díaz Labrano: El Estado de Derecho algunos elementos y condicionamientos para su efectiva vigencia, p.3. Disponible en: www.tprmercosur.org/es/doc/) (...) “La historia nos muestra demasiados casos de Estados autoritarios. Al hombre contemporáneo le resultan insoportables e indignos esos Estados autoritarios. Del mismo modo, el Estado autoritario- poder arbitrario- es la antítesis del Estado de Derecho. Las diversas perspectivas

políticas que apoyan el Estado de Derecho comparten su aversión hacia el uso arbitrario del poder. En una sociedad abierta y pluralista, que ofrece espacio para hacer competir ideales del bien público, la noción del Estado de Derecho se torna una protección común contra el poder arbitrario”. (Oscar Vilhena Vieira (2007): La desigualdad y la subversión del Estado de Derecho. Sur – Revista Internacional de Derechos Humanos. Número 6, Año 4. p.33). En esa línea el concepto de **Estado de Derecho es una respuesta al Estado absolutista**, caracterizado por la ausencia de libertades, la concentración del poder y la irresponsabilidad de los titulares de los órganos del poder. De ahí que la garantía jurídica del Estado de Derecho corresponda al constitucionalismo moderno. (Dante Jaime Haro Reyes: Estado de Derecho, Derechos Humanos y Democracia. www.juridicas.unam.mx. p. 123). “Puede sostenerse entonces, que su búsqueda va dirigida a limitar y restringir el poder del Estado en favor de la libertad de los individuos. Es decir, permite entender al Estado de Derecho como contraposición al estado de fuerza o de fuerza política”. (Pablo Marshall Barberán (2010): El Estado de Derecho como principio y su consagración en la Constitución Política. Revista de Derecho Universidad Católica del Norte sección ensayos, año 17 - N° 2, pp. 185-204).

B.2. Origen: “El Estado de Derecho nace como como un Estado respetuoso de la ley y de las libertades del ciudadano frente al poder despótico del Estado Absolutista. Luego su tarea es el aseguramiento de la libertad y propiedad del ciudadano, su objeto la promoción del bienestar del individuo. Se trata de un orden estatal justo expresado a través de una constitución escrita, el reconocimiento de los derechos del hombre, la separación de poderes y garantizado por leyes producidas y promulgadas conforme a procedimientos debidamente establecidos”. (Luis Villar Borda (2007): Estado de Derecho y Estado Social de Derecho. Revista de Derecho del Estado N° 20, p. 74). “(...) En todo caso, el Estado de Derecho surge como el servidor, rigurosamente controlado, de la sociedad; queda sometido a un sistema cerrado de normas jurídicas o, sencillamente, identificado con ese sistema de normas, así que se convierte en solo norma o procedimiento”. (Haro, p. 118).

B.3. Fundamento: “El fundamento del Estado de Derecho se encuentra en la doctrina del Derecho Natural Racional. En realidad, la explicación del término no debe entenderse, en su origen, como la sujeción del Estado al Derecho estatal, sino al Derecho Suprapositivo, permanente y universal que emana de la razón.

Así, su fundamento se encuentra en la naturaleza del individuo: en la libertad y la igualdad de las personas que se reúnen en una comunidad y que se desarrollan en la autonomía moral, la igualdad jurídica y la posibilidad de lograr el bienestar económico a través de la adquisición de la propiedad y el ejercicio libre de la empresa. Es decir, el Estado de Derecho proyecta así, un criterio de legitimidad para el dominio del Estado, en la garantía de la libertad y la propiedad de los individuos. En Alemania, el argumento del Derecho Natural ha revivido en la forma de un Derecho de rango superior, frente al cual el Derecho estatal tiene que ceder". (Marshall, pp. 187-188).

B.4. Concepto: "El Estado de Derecho es aquel Estado en el que autoridades e individuos se rigen por el derecho, y éste incorpora los derechos y las libertades fundamentales, y es aplicado por instituciones imparciales y accesibles que generan certidumbre". (Haro, p. 124). "(...) Del mismo modo, como expresa Guastini en primer sentido el Estado de Derecho es aquel en el que están garantizados los derechos de libertad de los ciudadanos, en un segundo sentido, Estado de Derecho es aquel Estado en el cual el poder político está limitado por el derecho, en un tercer sentido, Estado de Derecho es aquel Estado en el cual todo acto de ejercicio del poder político está sujeto al principio de legalidad". (Haro, p.123). "Resumiendo, para nuestro objetivo el Estado de Derecho alude a un particular diseño institucional que, con el objeto de proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas, intenta guiar, controlar y limitar el ejercicio del poder público a través de normas de carácter general, que conformen un sistema claro y conocido por todos" (Haro, p. 126).

B.5. Elementos: Marshall siguiendo Böckenförde, expresa que las características originales del Estado de Derecho es la siguiente: "**a)** el Estado es una creación de la comunidad política y está a su servicio, no es una creación de, ni está encomendado a, ningún orden superior o divino; **b)** los objetivos del Estado quedan restringidos a la garantía de la libertad, la seguridad y la propiedad de los individuos; y **c)** la organización y regulación de la actividad del Estado debe realizarse de acuerdo a principios racionales, incluyendo entre estos los siguientes: el reconocimiento de los derechos básicos de la ciudadanía (libertad, igualdad y propiedad), la independencia de los jueces, la responsabilidad del gobierno, el dominio de la ley, la representación del pueblo y la separación de funciones" (Marshall, p.191). En esa línea Benda considera que el Estado de

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Derecho involucra: “**a)** seguridad jurídica y justicia; **b)** que la Constitución sea la norma suprema; **c)** la vinculación de los poderes públicos a la ley y al Derecho; **d)** vinculación de los poderes públicos por la primacía y reserva de ley; **e)** división de poderes; **f)** protección de los derechos fundamentales; **g)** tutela judicial; **h)** protección de la confianza jurídica”. (Marshall, p.191). Sobre lo anterior Villar Borda (p. 74-81) realiza una buena síntesis de los elementos del Estado de Derecho- principios racionales dirá Böckenförde-. En realidad, en Estado de Derecho hay una acumulación de ideas de muchas fuentes y distintas épocas, así: “**a)** sometimiento del poder al derecho; **b)** el gobierno de la razón; **c)** El gobierno de la leyes y no de los hombres; **d)** La Obligación del gobernante de proteger el derecho, la separación del poder, las libertades de los ciudadanos, los derechos del hombre y Estado Constitucional”.

B.6. Chile y el Estado de Derecho: Chile siempre mantuvo una disposición a proteger los derechos fundamentales. La conciencia jurídica ya estaba instalada. Así, se aprecia en los albores de la república, se verifica esto en el Mensaje para la promulgación de la Constitución Política de 1828, que dentro de sus párrafos expresaba, que ha llegado el día solemne de la consolidación de nuestras libertades, cesaron para nosotros los tiempos en que la suerte nos condenada a la ciega obediencia de una autoridad sin límites. Los depositarios de la autoridad se convierten en verdaderos servidores de la causa pública. Del pueblo mismo. Depositarios de su seguridad. Barreras ante las cuales deben detenerse todas las usurpaciones y todas las injusticias. **La Constitución establece la más formidable garantía contra los abusos de toda especie de autoridad, de todo exceso de poder.** “La libertad, la igualdad, la facultad de publicar vuestras opiniones, de presentar reclamaciones y quejas a los diferentes órganos de la soberanía nacional, están al abrigo de todo ataque. La constitución es un tesoro que no podemos perder, ni menoscabar, sin degradarnos, ni envilecernos. En esa perspectiva la Constitución de 1925 mantuvo el mismo temple jurídico. En efecto, se presenta como un Estado de Derecho toda vez que al analizar las normas esta Constitución - vigentes al 11 de septiembre de 1973- Había Constitución escrita, **Separación de Poderes, Principio de la legalidad, Principio de garantía de los Derechos Fundamentales, Seguridad jurídica y protección de la confianza y Principio de proporcionalidad.** Lo anterior, de inicio es comprobable por la práctica democrática desde 1932 hasta 1973 en la

denominada Cuarta República o bien la República democrática”. (Renato Cristi y Pablo Ruiz- Tagle (2006): La República en Chile. Teoría y práctica del Constitucionalismo Republicano. Ediciones LOM. pp. 114-130). Además de la lectura de la Constitución de 1925 esta consagra, además, el principio constitucional del Estado de Derecho como un principio normativo. Así es verificable en sus **artículos 1 a 4** que consagra el gobierno republicano y democrático **(1)** la soberanía reside en la nación **(2)**. Ninguna magistratura, ni reunión de personas puede atribuirse ni aún pretexto de circunstancias extraordinarias otra autoridad o derechos que lo que expresamente le haya conferido por las leyes **(4)**. Del mismo modo, el capítulo III está consagrado a las garantías Constitucionales, que el capítulo IV está dedicado al Congreso Nacional; el capítulo V al Presidente de la República; el capítulo VII al Poder Judicial.

B.6.a. Por su lado la **Constitución de 1980** (con todas sus precariedades, limitaciones e infinitas críticas) con las reformas realizadas desde 1980 en forma incipiente nos anuncia en su **artículo 4** que Chile es una República democrática. En su **artículo 5** que la soberanía reside en la nación. El capítulo III prescribe De los Derechos y Deberes Constitucionales, el capítulo IV gobierno; el capítulo V Congreso Nacional; capítulo VI Poder Judicial. Marshall (pp.199-202) expresa de los **artículos 5 a 7 de la carta fundamental** se desprenden algunos **principios constitucionales que contribuyen a darle forma al Estado de Derecho en la Constitución Política**: Esta disposición plantea varias cuestiones interesantes. **(i)** El enunciado del **artículo 5 inciso 2º** como consagración del principio de distribución. La afirmación de que el Estado tiene un deber de respetar los derechos fundamentales es la afirmación central del Estado de Derecho e implementa de esa manera el principio de distribución entre lo permitido y lo no permitido para el Estado. Por su lado el principio de Organización en supremacía constitucional (art. 6 inc. 1º), legalidad en sentido amplio (arts. 6 inc. 1º y 7 inc. 1º), garantía del orden institucional (art. 6 inc. 1º), fuerza normativa de la Constitución (art. 6 inc. 2º); responsabilidad (art. 6 inc. 3º y 7 inc. 3º), distribución de competencias- separación de poderes- (art. 7 inc. 1º y 2º), legalidad en sentido estricto (art. 7º inc. 1º). Todas estas ideas sugieren que la idea del Estado de Derecho es la concreción institucional de las ideas de la filosofía política liberal racional. El lugar que tiene la institución de la ley para el Estado de Derecho es central para afirmar la primacía del individuo frente al Estado y va a ser el eje de

continuidad sobre el cual el concepto de Estado de Derecho se va a desarrollar. (Marshall, pp. 191-192). “En la actualidad la idea del Estado de Derecho se lo considera uno de los pilares principales de un régimen democrático Sería difícil encontrar otro ideal político encomiado por un público tan diverso”. (Vilhena, p.30). Luego se dan todos los elementos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los delitos de lesa humanidad para formularles a los acusados el reproche penal que se ha señalado. Ello sin perjuicio del análisis de las defensas.

B.6.b. Que como se aprecia, complementando e iluminando lo que ya se ha expresado con anterioridad, hay que tener presente que las autoridades que tomaron el poder tras el 11 de septiembre de 1973 tenían una mayor exigencia de respetar y garantizar sin discriminación los derechos de todas las personas. En especial, porque si desde ya, hay un **quiebre constitucional**, significa que las personas no pueden recurrir en forma normal a las instituciones que pueden resguardar sus derechos, por ello cualquier actuación de la autoridad debe ser con la mayor exigencia y cuidado respecto de los derechos de las personas, ya que, está actuando sin un mandato constitucional, legal y democrático. En este caso entonces, las víctimas fueron llevadas a un lugar de detención improvisado, estando en una alta indefensión. El secuestro con grave daño (tal como se indica en el mérito de proceso) de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, fueron al margen de todo derecho. En consecuencia, tanto el mando superior como los subordinados respectivos se encuentran en condiciones como se ha cavilado, de realizarles un reproche penal como se ha hecho en esta sentencia. Ello sin perjuicio del estudio de las defensas.

C. Obligación de investigar

Cabe hacer presente que para la ponderación y aquilatación de los medios de pruebas del proceso en materia de violación a los derechos humanos (delitos de Lesa Humanidad) debe estarse al contexto de la época y lo que significa la obligación de investigar como a continuación se indica:

C.1. “Los estándares normativos e interpretativos en materia de graves violaciones a los de derechos humanos (delitos de lesa humanidad) en relación a la obligación de investigar. Partamos expresando que un estándar normativo en

derechos humanos corresponde a la idea de descubrir mediante un razonamiento judicial una nueva regla que inspire la solución de un caso que puede ser perfectamente aplicable a casos similares. Un estándar importa alcanzar un determinado nivel, puesto que todas las herramientas interpretativas apuntan a una mayor realización de los derechos fundamentales. En este caso la interpretación debe ser plausible conforme al artículo 5° inciso 2° de nuestra Constitución que impele a reconocer y promover tales derechos fundamentales”. (García Pino, Gonzalo: “La consideración de los estándares sobre derechos fundamentales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Tribunal Constitucional”. En Actas XI Jornadas Constitucionales. Temuco 2015, pp. 27 -53). Agregando este Tribunal que a partir de la normativa aludida, está debe ser aplicada e interpretada en conformidad con lo que ha decidido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos humanos (Corte IDH) sobre determinado estándar normativo. En este caso sobre la **Obligación de investigar**.

C.2. Que sobre la normativa interna y las prácticas judiciales de los Estados y en este caso del Poder Judicial, ya la Corte IDH en el **fallo Almonacid Arellano y otros versus Chile**, de 26 de septiembre de 2006, en su párrafo 124, señaló: “La Corte es consciente que los jueces y Tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”.

C.3. “Que esta institución denominada control de convencionalidad puede ser definida, en términos simples, como el mecanismo que utiliza la Corte IDH tanto en sede contenciosa como consultiva para determinar la compatibilidad o no del derecho interno o los actos de los agentes de un Estado, con las disposiciones

de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Asimismo, como el ejercicio que realizan los jueces domésticos para realizar el mismo cotejo entre las normas internas, las que dispone la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana” (García, Gonzalo (2014): “Preguntas esenciales sobre el control de convencionalidad difuso aplicables a Chile”, en: Nogueira, Humberto (coord.) La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo con la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Santiago de Chile, Librotecnia. pp. 356-357).

C.4. Que para aplicar entonces el control de convencionalidad hay que observar por supuesto la **Convención Americana sobre Derechos Humanos**, en especial los artículos 1.1 y 2. Ello por cuanto los Estados tienen la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna (1.1). Por su lado, su artículo 2 nos expresa, que, si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Parte se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

C.5. Que del mismo modo, debemos analizar ahora si la Corte IDH en su jurisprudencia contenciosa o consultiva ha dictado al menos una sentencia o ha emitido alguna Opinión Consultiva sobre la materia, que permita al Juez respectivo aquilatar que se encuentra en presencia de un estándar normativo en materia de derechos humanos. En este caso (obligación de investigar) con relación a cómo se deben desarrollar las investigaciones cuando han ocurrido graves violaciones a los DDHH (delitos de lesa humanidad). En esta materia podemos observar que sí ha existido por parte de la Corte IDH un estándar y jurisprudencia robusta y contundente sobre la materia.

C.6. Que siguiendo el razonamiento anterior observamos lo siguiente:

Sentencia en caso Velásquez Rodríguez versus Honduras de 29 de julio de 1988. Párrafos 176 y 177, afirma en el **176** que: “(...) el Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención”. Por su lado en el **177** acota que: “(...) la de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado”.

Sentencia caso Villagrán Morales y otros versus Guatemala de 19 de noviembre de 1999. Párrafo **225**, añade que del artículo 1.1 se desprende claramente la obligación de investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos en la Convención como medio para garantizar tales derechos.

Sentencia caso Barrios Altos versus Perú de fecha 14 de marzo de 2001. Párrafo **41** asevera que esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Sentencia caso Las Palmeras versus Colombia de 6 de diciembre de 2001, en su párrafo **42** anexa que: “(...) La Corte estima que es posible que, en un caso determinado, se pueda interpretar la omisión de investigación como una forma de encubrir a los autores de un delito contra la vida, pero no puede erigirse este razonamiento en una norma válida para todos los casos. Independientemente

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

de la cuestión de la validez de la pretendida norma, es de señalar que ella sería aplicable en ausencia de una investigación seria (...).

Sentencia caso Juan Humberto Sánchez versus Honduras de 7 de junio de 2003. Párrafo 184 expresa que: "(...) el Estado parte de la Convención Americana tiene el deber de investigar las violaciones de los derechos humanos y sancionar a los autores y a quienes encubran dichas violaciones. Y toda persona que se considere víctima de éstas o bien sus familiares tienen derecho de acceder a la justicia para conseguir que se cumpla, en su beneficio y en el del conjunto de la sociedad, ese deber del Estado".

Sentencia caso Bulacio versus Argentina de 18 septiembre de 2003. En el párrafo 115 explícita que: "(...) el derecho a la tutela judicial efectiva exige entonces a los jueces que dirijan el proceso de modo de evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos, conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos".

Sentencia caso Myrna Mack Chang versus Guatemala de 25 de noviembre de 2003. Párrafo 277 expresa que: "(...) asimismo, en el cumplimiento de esta obligación, el Estado debe remover todos los obstáculos y mecanismos de hecho y derecho que mantienen la impunidad en el presente caso; otorgar las garantías de seguridad suficientes a las autoridades judiciales, fiscales, testigos, operadores de justicia y a los familiares de Myrna Mack Chang y utilizar todas las medidas a su alcance para diligenciar el proceso".

Sentencia caso Tibi versus Ecuador de 7 septiembre de 2004. Párrafo 159 acota que: "(...) la Corte entiende que, a la luz de la obligación general de los Estados partes de respetar y garantizar los derechos a toda persona sujeta a su jurisdicción, contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Estado tiene el deber de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables, cuando existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en violación del artículo 5 de la Convención Americana".

Sentencia caso de las Hermanas Serrano Cruz versus El Salvador de 1 de marzo de 2005. Párrafo 83 añade que: "(...) la Corte ya ha señalado que la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el

resultado que se persigue. De otro modo, la investigación no es efectiva en los términos de la Convención”.

Sentencia caso Comunidad Moiwana versus Suriname de 15 de junio 2005. Párrafo **145** anexa que: “(...) está expresamente reconocido por Suriname, que agentes estatales estuvieron involucrados en el ataque del 29 de noviembre de 1986 en el que murieron al menos 39 residentes indefensos de la aldea de Moiwana – entre los cuales había niños, mujeres y ancianos – y muchos otros resultaron heridos. De esta manera, los hechos muestran múltiples ejecuciones extrajudiciales; en tal situación, la jurisprudencia del Tribunal es inequívoca: el Estado tiene el deber de iniciar exoficio, sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva”.

Sentencia caso de la Masacre de Mapiripán versus Colombia de 15 de septiembre de 2005. En sus párrafos 137, 233 y 299. Afirma en el 137 “(...) Tal como se desarrolla en las consideraciones sobre los artículos 8 y 25 de la Convención una de las condiciones para garantizar efectivamente el derecho a la vida se refleja necesariamente en el deber de investigar las afectaciones a ese derecho. De tal manera, la obligación de investigar los casos de violaciones al derecho a la vida constituye un elemento central al momento de determinar la responsabilidad estatal en el presente caso”. **233 (...)** “Este deber de investigar deriva de la obligación general que tienen los Estados parte en la Convención de respetar y garantizar los derechos humanos consagrados en ella, es decir, de la obligación establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado en conjunto con el derecho sustantivo que debió ser amparado, protegido o garantizado. De tal manera, en casos de violaciones al derecho a la vida, el cumplimiento de la obligación de investigar constituye un elemento central al momento de determinar la responsabilidad estatal por la inobservancia de las debidas garantías judiciales y protección judiciales”; **299 (...)** “Para cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables en el presente caso, Colombia debe: **a)** remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; **b)** utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; y **c)** otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia, así como a los ex pobladores y actuales pobladores de Mapiripán”.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Sentencia caso de la Masacre de Pueblo Bello versus Colombia de 31 de enero de 2006. Párrafo 143 afínica que: “(...) en particular, por constituir el goce pleno del derecho a la vida la condición previa para la realización de los demás derechos una de esas condiciones para garantizar efectivamente este derecho está constituida por el deber de investigar las afectaciones al mismo. De tal manera, en casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva que no se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales”.

Sentencia caso Goiburú y otros versus Paraguay de 22 de septiembre de 2006. Párrafos 117, 129 y 130. Asevera que 117 “(...) Además, es preciso reiterar que esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Durante la investigación y el trámite judicial las víctimas o sus familiares deben tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa compensación, de acuerdo con la ley interna y la Convención Americana. No obstante, la investigación y el proceso deben tener un propósito y ser asumidos por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios”. **129** (...) “una vez establecido el amplio alcance de las obligaciones internacionales erga omnes contra la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos, la Corte reitera que en los términos del artículo 1.1 de la Convención Americana los Estados están obligados a investigar las violaciones de derechos humanos y a juzgar y sancionar a los responsables”. **130** “(...) Por ende, según la obligación general de garantía establecida en el artículo 1.1 de la

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Convención Americana, el Paraguay debe adoptar todas las medidas necesarias, de carácter judicial y diplomático, para juzgar y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas, inclusive impulsando por todos los medios a su alcance las solicitudes de extradición que correspondan. La inexistencia de tratados de extradición no constituye una base o justificación suficiente para dejar de impulsar una solicitud en ese sentido”.

Sentencia caso Almonacid Arellano y otros versus Chile de 26 de septiembre de 2006. Párrafos 111 y 114. Expresa **111** “(...) Los crímenes de lesa humanidad producen la violación de una serie de derechos inderogables reconocidos en la Convención Americana, que no pueden quedar impunes. En reiteradas oportunidades el Tribunal ha señalado que el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”. Asimismo, la Corte ha determinado que la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales”. Párrafo **114** “(...) Por las consideraciones anteriores, la Corte estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder amnistía”.

Sentencia caso del penal Miguel Castro versus Perú de 25 de noviembre de 2006. Párrafo **387**. “(...) Explicita que en primer término, esta Corte considera que el tiempo transcurrido entre el momento de los hechos y el inicio del proceso penal por la investigación de éstos sobrepasa por mucho un plazo razonable para que el Estado realice las primeras diligencias probatorias e investigativas para contar con los elementos necesarios para formular una acusación penal, máxime que a ese tiempo habrá que sumar el que tome la realización del proceso penal, con sus distintas etapas, hasta la sentencia firme. Esta falta de investigación durante tan largo período configura una violación al derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, por cuanto el

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Estado ha incumplido su obligación de adoptar todas las medidas necesarias para investigar las violaciones, sancionar a los eventuales responsables y reparar a las víctimas y sus familiares”.

Sentencia caso de la Masacre de La Rochela versus Colombia de 11 de mayo de 2007. Párrafos 155, 156 y 171. Explaya que: párrafo **155** “(...) La Corte estima que la ineffectividad de tales procesos penales queda claramente evidenciada al analizar la falta de debida diligencia en la conducción de las acciones oficiales de investigación. Esta falta de debida diligencia se manifiesta en la irrazonabilidad del plazo transcurrido en las investigaciones, la falta de adopción de las medidas necesarias de protección ante las amenazas que se presentaron durante las investigaciones, las demoras, obstáculos y obstrucciones en la realización de actuaciones procesales y graves omisiones en el seguimiento de líneas lógicas de investigación”. Párrafo **156** “(...) el eje central del análisis de la efectividad de los procesos en este caso es el cumplimiento de la obligación de investigar con debida diligencia. Según esta obligación, el órgano que investiga una violación de derechos humanos debe utilizar todos los medios disponibles para llevar a cabo, dentro de un plazo razonable, todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. Esta obligación de debida diligencia adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados. En este sentido, tienen que adoptarse todas las medidas necesarias para visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos”. Párrafo **171** “(...) este Tribunal considera que, para cumplir con la obligación de investigar en el marco de las garantías del debido proceso, el Estado debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismo”.

Sentencia caso Escué Zapata versus Colombia de 4 de julio de 2007. Párrafo **106** indica que: “(...) una debida diligencia en los procesos investigativos requiere que éstos tomen en cuenta la complejidad de los hechos, el contexto y las circunstancias en que ocurrieron y los patrones que explican su comisión, en seguimiento de todas las líneas lógicas de investigación. Las autoridades

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

judiciales deben intentar como mínimo, inter alia: **a)** identificar a la víctima; **b)** recuperar y preservar el material probatorio relacionado con los hechos; **c)** identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones; **d)** determinar la causa, forma, lugar y momento en que se produjo el ilícito, así como cualquier patrón o práctica que lo pueda haber causado; y **e)** en caso de fallecimientos, distinguir entre muerte natural, accidental, suicidio y homicidio”.

Sentencia caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz versus Perú de 10 de julio de 2007. Párrafo 131 manifiesta que: “(...) el Tribunal reitera que la obligación de investigar es una obligación de medio, no de resultados. Lo anterior no significa, sin embargo, que la investigación pueda ser emprendida como “una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Cada acto estatal que conforma el proceso investigativo, así como la investigación en su totalidad, debe estar orientado hacia una finalidad específica, la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento, y en su caso, la sanción de los responsables de los hechos”.

Sentencia caso García Prieto y otros versus El Salvador de 20 de noviembre de 2007. Párrafos 104, 112 y 115. Menciona en 104, “(...) que cabe señalar que la obligación de investigar no sólo se desprende de las normas convencionales de Derecho Internacional imperativas para los Estados Parte; sino que además se deriva de la legislación interna que haga referencia al deber de investigar de oficio ciertas conductas ilícitas y a las normas que permiten que las víctimas o sus familiares denuncien o presenten querellas, con la finalidad de participar procesalmente en la investigación penal con la pretensión de establecer la verdad de los hechos”. 112 “(...) la obligación a cargo del Estado de actuar con debida diligencia en la práctica de una investigación implica que todas las autoridades estatales están obligadas a colaborar en la recaudación de la prueba para que sea posible alcanzar los objetivos de una investigación. La autoridad encargada de la investigación debe velar para que se realicen las diligencias requeridas y, en el evento de que esto no ocurra, debe adoptar las medidas pertinentes conforme a la legislación interna. A su vez, las otras autoridades deben brindar al juez instructor la colaboración que éste les requiera y abstenerse de actos que impliquen obstrucciones para la marcha del proceso investigativo. En el presente caso se presentaron actos de esta naturaleza en lo que toca a la investigación relativa a la inspección de los libros de “entradas y salidas” del

personal del Batallón San Benito de la extinta Policía Nacional”. **115** “(...) Para la Corte la falta de respuesta estatal es un elemento determinante al valorar si se ha dado un incumplimiento del contenido de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, pues tiene relación directa con el principio de efectividad que debe irradiar el desarrollo de tales investigaciones. De tal forma el Estado al recibir una denuncia penal, debe realizar una investigación seria e imparcial, pero también debe brindar en un plazo razonable una resolución que resuelva el fondo de las circunstancias que le fueron planteadas”.

Sentencia caso Heliodoro Portugal versus Panamá de 12 de agosto de 2008. Párrafo **142** narra que: “(...) la obligación de investigar violaciones de derechos humanos se encuentra dentro de las medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convención. La Corte ha sostenido que, para cumplir con esta obligación de garantizar derechos, los Estados deben no sólo prevenir, sino también investigar las violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Convención, como las alegadas en el presente caso, y procurar, además, si es posible, el restablecimiento del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por las violaciones de los derechos humanos”.

Sentencia caso Tiu Tojín versus Guatemala de 26 de noviembre de 2008. Párrafo **77** acota que: “(...) en base en lo anterior, el Estado deberá asegurar, como una forma de garantizar que la investigación iniciada ante la justicia ordinaria sea conducida con la debida diligencia que las autoridades encargadas de la investigación tengan a su alcance y utilicen todos los medios necesarios para llevar a cabo con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales para esclarecer la suerte de las víctimas e identificar a los responsables de su desaparición forzada. Para ello, el Estado garantizará que las autoridades encargadas de la investigación cuenten con los recursos logísticos y científicos necesarios para la recaudación y procesamiento de pruebas y, en particular, tengan las facultades para acceder a la documentación e información pertinente para investigar los hechos denunciados y puedan obtener indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas. En este sentido, cabe reiterar que en caso de violaciones de derechos humanos, las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar

de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación o proceso pendientes”.

Sentencia caso Ríos y otros versus Venezuela de 28 de enero de 2009. Párrafo 283 añade “(...) que la investigación de la violación de determinado derecho sustantivo puede ser un medio para amparar, proteger o garantizar ese derecho. La obligación de investigar “adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados” incluso hasta alcanzar esa obligación, en algunos casos, el carácter de *Ius Cogens*. En casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Tribunal ha considerado que la realización de una investigación ex officio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos afectados por esas situaciones, como la libertad personal, la integridad personal y la vida. Se considera que en esos casos la impunidad no será erradicada sin la determinación de las responsabilidades generales –del Estado- e individuales –penales y de otra índole de sus agentes o de particulares-, complementarias entre sí. Por la naturaleza y gravedad de los hechos, más aún si existe un contexto de violación sistemática de derechos humanos, los Estados se hallan obligados a realizar una investigación con las características señaladas, de acuerdo con los requerimientos del debido proceso. El incumplimiento genera, en tales supuestos, responsabilidad internacional del Estado”.

Sentencia caso Perozo y otros versus Venezuela de 28 de enero de 2009. En su párrafo 298 apunta que: “(...) la obligación general de garantizar los derechos humanos reconocidos en la Convención, contenida en el artículo 1.1 de la misma, puede ser cumplida de diferentes maneras, en función del derecho específico que el Estado deba garantizar y de las particulares necesidades de protección. Por ello, corresponde determinar si en este caso, y en el contexto en que ocurrieron los hechos alegados, la obligación general de garantía imponía al Estado el deber de investigarlos efectivamente, como medio para garantizar el derecho a la libertad de expresión y a la integridad personal, y evitar que continuaran ocurriendo. La investigación de la violación de determinado derecho sustantivo puede ser un medio para amparar, proteger o garantizar ese derecho. La obligación de investigar “adquiere particular intensidad e importancia ante la

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados”, incluso hasta alcanzar esa obligación, en algunos casos, el carácter de los Cogens. En casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Tribunal ha considerado que la realización de una investigación ex officio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos afectados por esas situaciones, como la libertad personal, la integridad personal y la vida. Se considera que en esos casos la impunidad no será erradicada sin la determinación de las responsabilidades generales –del Estado- e individuales –penales y de otra índole de sus agentes o de particulares-, complementarias entre sí. Por la naturaleza y gravedad de los hechos, más aún si existe un contexto de violación sistemática de derechos humanos, los Estados se hallan obligados a realizar una investigación con las características señaladas, de acuerdo con los requerimientos del debido proceso. El incumplimiento genera, en tales supuestos, responsabilidad internacional del Estado”.

Sentencia caso Anzualdo Castro versus Perú de 22 de septiembre de 2009. Párrafo 135 apoya que: “(...) este Tribunal ha establecido que para que una investigación de desaparición forzada sea llevada adelante eficazmente y con la debida diligencia, las autoridades encargadas de la investigación deben utilizar todos los medios necesarios para realizar con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales y oportunas para esclarecer la suerte de las víctimas e identificar a los responsables de su desaparición forzada. Para ello, el Estado debe dotar a las correspondientes autoridades de los recursos logísticos y científicos necesarios para recabar y procesar las pruebas y, en particular, de las facultades para acceder a la documentación e información pertinente para investigar los hechos denunciados y obtener indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas. Asimismo, es fundamental que las autoridades a cargo de la investigación puedan tener acceso ilimitado a los lugares de detención, respecto a la documentación así como a las personas. La Corte reitera que el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación –y en algunos casos, la imposibilidad- para obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, la práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los posibles autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

penales. Cabe precisar que estos recursos y elementos coadyuvan a la efectiva investigación, pero la ausencia de los mismos no exime a las autoridades nacionales de realizar todos los esfuerzos necesarios en cumplimiento de esta obligación”.

Sentencia caso Manuel Cepeda Vargas versus Colombia de 26 de mayo de 2010. Párrafo 118 aproxima que: “(...) en casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de investigación. De tal forma, la determinación sobre los perpetradores de la ejecución extrajudicial del Senador Cepeda sólo puede resultar efectiva si se realiza a partir de una visión comprehensiva de los hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participación”.

Sentencia caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña versus Bolivia de 1 de septiembre de 2010. Párrafo 158 arguye que: “(...) la Corte considera pertinente reiterar, como lo ha hecho en otros casos, que la “verdad histórica” documentada en informes especiales, o las tareas, actividades o recomendaciones generadas por comisiones especiales, como la del presente caso, no completan o sustituyen la obligación del Estado de establecer la verdad e investigar delitos a través de procesos judiciales”.

Sentencia caso Gelman versus Uruguay de 24 febrero de 2011. Párrafo 194 asevera que: “(...) la Justicia, para ser tal, debe ser oportuna y lograr el efecto útil que se desea o se espera con su accionar y, particularmente tratándose de un caso de graves violaciones de derechos humanos, debe primar un principio de efectividad en la investigación de los hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables”.

C.7. Síntesis de estos estándares normativos citados. Como se puede verificar al observar los fallos citados, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de su jurisprudencia sólida y robusta ha sostenido un **estándar** en relación con la **obligación de investigar** en materia de derechos humanos, en cuanto tratándose de graves violaciones a los derechos humanos (entre otros el

delito lesa humanidad) los Estados deben realizar determinadas actividades. En concreto realizando un resumen de la Jurisprudencia anterior y apoyándonos además en Eduardo Ferrer Mac-Gregor- (Las siete principales líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplicable a la justicia penal. Revista IIDH v. 59 pp.45-48). Autor además que es Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

C.7.1. Investigar efectivamente los hechos. En casos de ejecuciones extrajudiciales es fundamental que los Estados investiguen efectivamente la privación del derecho a la vida y castiguen a todos los responsables, especialmente cuando están involucrados agentes estatales, ya que de no ser así se estarían creando, dentro de un ambiente de impunidad, las condiciones para que se repitan estos hechos, lo que es contrario al deber de respetar y garantizar el derecho a la vida.

C.7.2. Si los hechos violatorios a los derechos humanos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, favorecidos por el poder público, lo que compromete la responsabilidad internacional del Estado. En este sentido, la Corte IDH ha establecido que en casos de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, las autoridades de un Estado deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva, una vez que tengan conocimiento del hecho.

C.7.3. El deber de investigar es una obligación de medios, no de resultados, la investigación de este tipo de casos debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa o como una mera gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares, o de la aportación privada de elementos probatorios. Esto último no se contrapone con el derecho que tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares a ser escuchados durante el proceso de investigación y al trámite judicial, así como a participar ampliamente de los mismos.

C.7.4. Cabe destacar que cualquier carencia o defecto a los responsables materiales o intelectuales, implicará que no se cumpla con la obligación de proteger el derecho a la vida.

C.7.5. La Corte ya ha señalado que la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones

que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. De otro modo, la investigación no es efectiva en los términos de la Convención.

C.7.6. Para cumplir la **obligación de investigar** y sancionar a los responsables en el presente caso, se debe: **1)** remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; **2)** utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; y **3)** otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia.

C.7.7. La investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales.

C.7.8. El Estado tiene el deber de evitar y combatir la **impunidad**, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”.

C.7.9. Esta **obligación de debida diligencia** adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados. En este sentido, tienen que adoptarse todas las medidas necesarias para visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos.

C.7.10. El Tribunal considera que, para cumplir con la obligación de investigar en el marco de las garantías del debido proceso, el Estado debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de estos.

C.7.11. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reitera que el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación y en algunos casos, la imposibilidad- para obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, la práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los

posibles autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades penales. Cabe precisar que estos recursos y elementos coadyuvan a la efectiva investigación, pero la ausencia de los mismos no exime a las autoridades nacionales de realizar todos los esfuerzos necesarios en cumplimiento de esta obligación

C.7.12. En casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de investigación. De tal forma, la determinación sobre los perpetradores de la ejecución extrajudicial sólo puede resultar efectiva si se realiza a partir de una visión comprehensiva de los hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participación.

C.7.13. La Justicia, para ser tal, debe ser oportuna y lograr el efecto útil que se desea o se espera con su accionar y, particularmente tratándose de un caso de graves violaciones de derechos humanos, debe primar un principio de efectividad en la investigación de los hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables.

C.7.14. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido ciertos **Principios Rectores**, con base en el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas, para las investigaciones cuando se considera que una muerte pudo deberse a una ejecución extrajudicial. Las autoridades estatales que conducen una investigación deben: **1)** Identificar a la víctima; **2)** recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte con el fin de ayudar en cualquier investigación; **3)** Identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones con relación a la muerte que se investiga; **4)** determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier procedimiento o práctica que pueda haberla provocado, y **5)** distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen; se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma

rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados.

C.8. Que tal como se ha señalado latamente en los párrafos precedentes, estos son los estándares normativos e interpretativos que se deben ponderar tanto al momento de investigar, como al momento de valorar la prueba del proceso. El Tribunal debe considerar las dificultades de la época, el contexto para reunir la prueba y ver los patrones de conducta de los Agentes del Estado. **Tal como, lo que se ha realizado en esta sentencia** y que determinadas defensas nada expresan. Así del estudio de sus argumentos sucede que no hay un cotejo y ponderación adecuado de todos los testigos, documentos y peritajes, sino que se refieren a eventos parciales de su propio interés. Ocurre que estas defensas, deben situarse en la sede del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y lo que significa la violación de los Derechos Humanos y el delito de lesa humanidad.

D. Jurisprudencia Internacional sobre graves violaciones a los Derechos Humanos (Delitos De Lesa Humanidad) pronunciada por los Tribunales Alemanes

D.1. Que en todo caso a propósito de delitos de Lesa humanidad y la estructura legal y normativa que debe ponderarse en la sentencia (debe considerarse- con los ajustes hecho y derecho al contexto chileno- pues también los hechos investigados son graves violaciones a los derechos humanos, en este caso delitos de lesa humanidad y haremos los ajustes precisos y detallados al caso chileno, esto es, Centros de Detención, Regimientos, Destacamentos, Retenes, Tenencias, Comisarías, Bases Navales, Bases Aéreas, Cuarteles, Cárceles, Calabozos y todo otro lugar legal o ilegal que sirvió para detención, tortura o ejecución en la realidad chilena de la época) es muy significativo lo razonado en derecho comparado en los **casos de Iwan Nikolai de Demjanjuk** (condenado el 12 de mayo 2011) **y Oskar Gröning** (condenado 15 de julio de 2015), quienes tenían 91 y 94 años de edad , respectivamente, al ser condenados por Tribunales Alemanes. A continuación se realiza un síntesis en lo pertinente de los artículos de Gerhard Werle y Boris Burghardt-Universidad Humboldt- Berlín sobre el caso Demjanjuk y de Claus Roxin sobre el caso Oskar Gröning. Estos casos además han sido llevados a formato audiovisual en diferentes

documentales, tales como: “El nazi Iván el terrible” Netflix y “El contador de Auschwitz” de la plataforma Prime Video.

D.2. Que el primer artículo versa sobre la complicidad en matanzas ocurridas en campos de exterminio nacionalsocialistas (el caso Demjanjuk en el contexto de la jurisprudencia de la República Federal Alemana). Gerhard Werle y Boris Burghardt-Universidad Humboldt- Berlín. Revista Penal México. N°9 septiembre 2015- febrero 2016, pp.181-193. Corresponde al análisis de la sentencia recaída contra Iwan Nikolai Demjanjuk, quien fue considerado cómplice en el exterminio masivo de personas. El 12 de mayo de 2011, el segundo Landgericht (LG, Tribunal Estatal) de Múnich condenó a Iwan Nikolai Demjanjuk, quien se había dado como nombre John para su segunda vida en Estados Unidos, a una pena única de cinco años por complicidad en 16 casos de homicidios calificados, de los que resultaron un total de 28060 muertes. Antes de la revisión de los recursos pendientes, que habían presentado tanto el condenado como la Fiscalía, Demjanjuk murió el 20 de marzo de 2012, a los 91 años. Lo que se razona es que antes de esta sentencia habría valido, conforme a la jurisprudencia de la República Federal Alemana, que una condena requeriría de la prueba de un hecho delictivo concreto (konkreten Einzeltatnachweis) imputable a cada acusado. Pero lo cierto es que los querellantes alegaron que la fundamentación de la responsabilidad como **cómplice** de Demjanjuk no se fundaría en un novum jurídico, sino que se vincularía con una jurisprudencia que habría sido olvidada solamente por razones de oportunidad política. El caso Demjanjuk implicaría una vuelta a la valoración correcta de acuerdo con la dogmática jurídico-penal. En efecto el segundo Landgericht de Múnich comprobó que Demjanjuk llegó a Sobibór como Trawniki (Se conocía como Trawniki a prisioneros de guerra y personas sometidas a trabajos forzados que recibieron entrenamiento por parte de las SS (Escuadras de Defensa) para colaborar en los campos de concentración y en llevar a cabo el genocidio. En su mayoría se trataba de ucranianos y los así llamados alemanes étnicos (Volksdeutsche) de la Unión Soviética. La denominación tiene su origen en el campo de Trawniki –donde tenía lugar el entrenamiento– que se ubicaba aproximadamente a 40 kilómetros al este de Lublin) el día 27 de marzo de 1943, permaneciendo allí hasta mediados de septiembre del mismo año. El tribunal señaló que si bien no fue posible comprobar las actividades desarrolladas por Demjanjuk dentro del campo de concentración,

se consideró el hecho de que el campo de Sobibór se habría dedicado exclusivamente a la matanza de judíos deportados. Los Trawniki –y por lo mismo también Demjanjuk– habrían colaborado en todas las fases del exterminio bajo las órdenes del personal alemán del campo. Se habrían repartido en tres turnos: uno de ellos habría estado dedicado a la seguridad externa del campo, otro habría vigilado las labores en el campo y el tercero habría permanecido de guardia. Los turnos habrían durado ocho horas y habrían rotado entre tres días de turnos de vigilancia y tres días de turnos de guardia. Al arribo de un transporte, los Trawniki se habrían ocupado de vigilar a los judíos que llegaban y a los prisioneros que estaban sometidos a trabajos forzados, que consistían en descargar a los deportados, hacerlos pasar a las cámaras de gas, someterlos a gases letales, y luego el examen y la remoción de los cadáveres. Cada Trawniki –y por lo mismo también Demjanjuk– habría sabido que formaba parte de un aparato que no buscaba otra cosa que la manera más eficiente de matar al mayor número posible de personas. Además, todos los Trawniki habrían tenido conciencia de la manera en que los judíos eran exterminados, y de que esto acontecía exclusivamente por motivos de odio racial. Durante el periodo de tiempo en el que Demjanjuk cumplió labores como Trawniki en Sobibór habrían arribado comprobadamente 16 transportes con 29779 personas deportadas. De ellos, un total de 28060 fueron asesinadas inmediatamente tras su llegada, ya sea en las cámaras de gas o a tiros. En esa línea el homicidio de todas las personas que compartieron un transporte fue valorado por la sala como una unidad de acción desde el punto de vista jurídico. En cada uno de estos actos habría colaborado Demjanjuk como cómplice.

D.3. Que los principales hallazgos de la sentencia son, en este punto, que todos quienes formaban parte de la cadena de mando –comenzando con los miembros de la RSHA (Agencia Central de Seguridad Imperial) encargados de llevar adelante el exterminio de los judíos, pasando por los empleados ferroviarios, las personas en la administración del gobierno general, los directores de campos de concentración, los Oficiales de la SS (Schutzstaffel, fuerzas especiales nazis), los Oficiales de Policía en los campos de concentración individualmente considerados y el personal de vigilancia directamente comandado por ellos– tenían, cada uno, una tarea asignada en la expulsión de ciudadanos judíos de Alemania, planeada y organizada desde Berlín, hacia los países ocupados y

controlados por el ejército alemán; en su transporte en los campos de exterminio y –siempre que no fueran seleccionados para ser forzados a trabajar, lo que ocurría con un pequeño grupo de ellos– en su homicidio inmediato y organizado en las cámaras de gas, como en una línea de producción. Sostiene la sentencia que los tres campos de exterminio de Treblinka, Belzec y Sobibór sirvieron al solo propósito del asesinato masivo de la población judía de Europa, y que con ello toda actividad del imputado y de las demás personas que tenían a su cargo tareas de vigilancia era una promoción de la tarea principal del campo de exterminio. En ese contexto, daba lo mismo si debían vigilar los andenes de arribo del tren, guiar a los prisioneros hasta las cámaras de gas, vigilar a los judíos que debían incinerar los cadáveres de los muertos, vigilar a los prisioneros sujetos a trabajos forzados para mantener el funcionamiento del campo y apropiarse de las pertenencias de los difuntos, controlar desde la torre de vigilancia para contrarrestar sublevaciones desde el interior o defenderse ante eventuales ataques de partisanos o realizar el servicio de guardia de reserva para el caso de alguno de estos eventos. Sostiene el tribunal que el peso del actuar individual para el plan común no es relevante para satisfacer la tipicidad de la complicidad, sino que adquiere relevancia solamente para la determinación de la pena, y que, en particular, no es relevante una relación causal, en el sentido de que la contribución del cómplice deba originar la consumación del hecho principal.

D.4. Que asimismo la resolución con otros procesos seguidos por la justicia de la República Federal Alemana por matanzas en los campos de concentración exclusivamente dedicados al exterminio, la Jurisprudencia había seguido la misma posición que luego fue olvidada. Así es posible observarlo, ya en la **sentencia de la sala especial del Landgericht de 1950 contra Hubert Gomerski y Johann Klier** se dice con claridad ejemplar: “El campo Sobibór fue creado con el solo fin de dar muerte a un gran número de judíos”. La sala sigue: “Todos quienes trabajaban en ese campo –alemanes, ucranianos y judíos– tenían su tarea particular, sea que hayan participado inmediatamente de los homicidios o que hayan apoyado indirectamente las tareas del campo. Todas estas actividades fueron en último término causales para el resultado –la muerte de los judíos–, pues sólo por haber existido este conjunto de actividades fue posible el resultado”. Esta argumentación la mantuvo la sala especial del Landgericht incluso para el Klier, quien hizo valer irrefutablemente que el solamente había trabajado en la

panadería del campo y luego habría dirigido el comando de los zapatos (Schuhkommando), que se dedicaba a recolectar, seleccionar y almacenar los zapatos de los asesinados en las cámaras de gas. La sala especial del Landgericht hizo nuevamente hincapié en que “todas las personas que trabajaban en el campo de Sobibór eran engranajes de un sistema que tenía por única finalidad matar a judíos. Toda acción que se llevó a cabo en ese campo servía directa o indirectamente a ese fin. Todas esas acciones fueron necesarias para la operación del campo. De este modo, tanto la actividad del acusado Klier en la panadería como la actividad que tuvo a cargo de los zapatos fueron causales para el resultado”.

D.5. Que del mismo modo dieciséis años después, en el gran proceso de Sobibór, la sala especial del Landgericht tampoco dudó en clasificar como colaboraciones promotoras del resultado a aquellas que no estaban directamente vinculadas con la operación de exterminio, como por ejemplo el trabajo como tesorero o administrador del campo, o como responsable del abastecimiento de víveres y vestuario del personal del campo. La sentencia dijo sobre este punto: “Allí donde ellos [los acusados] formaban parte de la organización de los campos, [...] todos contribuyeron a hacer posible, por su colaboración funcional, los asesinatos masivos contra los judíos, siendo su causa y promoviéndolos en inmediata cercanía al hecho”. El Tribunal Federal alemán confirmó esa argumentación en cuanto conoció de la revisión de esas sentencias. Particularmente destacable resulta en ese contexto lo dicho respecto de la sentencia de primera instancia de hechos en el proceso Kulmhof, que se llevó adelante durante los años 1962 y 1963 ante el Landgericht de Bonn contra 12 acusados. Ante la alegación por parte de algunos acusados de que se los habría condenado como cómplices mediando un error jurídico, porque ellos solamente habrían llevado a cabo acciones “que [...] se enmarcaban dentro de las tareas entonces asignadas a la policía de protección [Schutzpolizei]”, y por lo mismo habrían sido “valorativamente neutrales” y no podrían ser valoradas como fundamento de complicidad en un asesinato, el Tribunal Federal Alemán respondió claramente: “Conforme a lo constatado [...] ya por su pertenencia al comando especial que fue creado para el sólo fin de aniquilar a la población judía de Polonia y ciertos otros grupos de personas cuya vida era considerada útil, **los acusados han colaborado en el asesinato de las víctimas.** La naturaleza de las tareas

que les correspondió realizar a cada uno en la ejecución de acciones individuales deviene en razón de ello –por lo menos en este contexto– irrelevante”. Tampoco en los procesos posteriores tuvieron éxito las revisiones fundadas en alegaciones contra la calificación del trabajo en campos de exterminio como complicidad en el asesinato masivo, que se llevó a cabo en esos campos de exterminio.

D.6. El caso Demjanjuk ha demostrado que el segundo Landgericht de Múnich en ningún caso ha penetrado en nuevo terreno jurídico en lo tocante a las valoraciones jurídicas centrales, sino que ha continuado con un camino que ya había sido trazado. La justicia de la República Federal alemana ha constatado desde siempre que toda función desempeñada en el funcionamiento de los campos de concentración de Treblinka, Belzec, Sobibór y Chelmno era complicidad en el asesinato masivo. La declaración principal podía resumirse diciendo que allí no había actividades neutrales. Es decir, esta valoración fundamental fue confirmada en el proceso contra Demjanjuk. Ella es correcta y resulta de la aplicación de los fundamentos de la complicidad que desde hace tiempo están fijados por la jurisprudencia. Según ellos, se presta una colaboración por medio de cada comportamiento que promueve la comisión del hecho principal objetivamente de cualquier manera. En el caso de formas de comportamiento que, miradas en sí mismas son cotidianas y permitidas, según la jurisprudencia la situación dependerá del conocimiento que tengan los partícipes: si saben que su actuar promueve la comisión del hecho principal, su acción pierde en todo caso su carácter de acción cotidiana. Luego el caso Demjanjuk no creó una nueva construcción de la punibilidad a título de complicidad. El proceso se deja entender más bien como una reactivación de principios reconocidos de la complicidad en relación con homicidios masivos en la época nacionalsocialista. El caso llevó la atención a que estos principios fueron pasados por alto en muchos procesos por largo tiempo.

D.7. Que el segundo artículo versa sobre la sentencia en el asesinato por medio del servicio en el campo de concentración de Auschwitz. Sentencia del BGH y comentario de Claus Roxin (Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano. CEDPAL, Editores Kai Ambos John Zuluaga, volumen 2, 2018, pp. 189-209). Se resumen en lo pertinente el análisis de la sentencia de la Tercera Sala Penal del Tribunal Supremo Federal, la que con fecha 20 de septiembre de 2016 decidió por unanimidad rechazar el recurso de

revisión solicitado por el acusado (Oskar Gröning) en contra de la sentencia del Tribunal Regional de Luneburgo del 15 de julio de 2015.

D.8. Que el Tribunal Regional (Landgericht) sentenció al acusado a una pena de cuatro años de prisión en **calidad de cómplice** de asesinato en 300.000 casos, todos los casos legalmente coincidentes. Contra su condena, el acusado promovió recurso de revisión basado en la invocación de la violación al derecho formal y sustantivo. El recurso deviene infructuoso. El sentenciado murió a los 94 años antes de empezar a cumplir la sentencia condenatoria. Los fundamentos son: **a)** Una vez trasladado al campo de concentración de Auschwitz, el acusado fue asignado a un puesto en el área de Administración del dinero de los prisioneros. Entretanto había sido promovido al grado de Sargento Segundo de las SS (SSUnterscharführer) y asignado a la Operación Hungría, de igual manera que en la Operación Reinhard. De tal modo que en el transcurso de la Operación Hungría, el acusado, uniformado y armado con una pistola, desempeñó durante al menos tres días -no mayormente precisables-, las funciones de servicio de rampa en la denominada nueva rampa. En primer lugar, tenía la tarea de custodiar en el campo de concentración de Auschwitz el equipaje allí depositado durante la descarga de los trenes que llegaban a Auschwitz y, de esta manera, evitar el robo. Aunque en Auschwitz el robo por parte de los miembros de la SS estaba a la orden del día, la mayoría de estos hechos no fueron perseguidos ya que los autores cedían subrepticamente una parte del botín, a fin de mantener la moral de las tropas. En la rampa, sin embargo, debía impedirse en todo momento que los equipajes fueran abiertos, inspeccionados y saqueados a la vista de los deportados, para no levantar sospechas y evitar revueltas, que pudieran poner en riesgo el procedimiento ulterior de selección y gaseado. Al mismo tiempo y mediante sus funciones en el servicio de rampa, el acusado formó parte del contexto de intimidación usado para sofocar, ya desde el origen, cualquier idea de resistencia o huida. Además, del servicio de rampa, el acusado estaba encargado, conforme a su función en la sección de administración del dinero de los prisioneros, de la clasificación monetaria, la contabilidad, la administración y el transporte hacia Berlín del dinero de los deportados. Allí, lo entregaba en intervalos irregulares a la Dirección General de Administración Financiera de las SS (SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt) o lo depositaba directamente en una cuenta de las SS en el Reichsbank. Asimismo, incumbía en todo momento a las

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

funciones de servicio del acusado, la supervisión de los deportados y, en caso necesario, el impedir por medio de las armas cualquier resistencia o intento de fuga; **b)** Desde su participación en la Operación Reinhard, el acusado conocía todos los detalles de los procedimientos empleados en el campo de concentración de Auschwitz. En particular, él sabía que los judíos deportados en forma masiva a Auschwitz eran masacrados aprovechándose deliberadamente de su calma e indefensión. Asimismo, él era consciente de que con sus actividades apoyaba la maquinaria de muerte que operaba en Auschwitz. Él fue -al menos- condescendiente con tal proceder, para evitar ser transferido a las unidades de las SS que combatían en el frente de batalla.

D.9. Que el profesor **Roxin** expresa que la afirmación de la Sala Penal según la cual el acusado ha prestado asistencia a todos estos hechos no resulta objetable por motivos legales. Además, continúa que esto se aplica en primer lugar con relación a las víctimas frente a cuyo arribo en Auschwitz-Birkenau el acusado se encontraba cumpliendo con el servicio de rampa. No exige mayores discusiones el hecho de que, con su accionar, el acusado prestaba asistencia a los miembros de las SS, los que a su vez cometían asesinatos mediante la previa selección en la rampa y la inmediata ejecución a través del rociamiento del Zyklon B en las cámaras de gas. Añade que el acusado prestó asistencia entonces en el sentido del Art. 27 inciso 1 del Código Penal, por un lado -mediante la vigilancia del equipaje-, a conservar la calma de quienes llegaban y, por el otro -como una parte del contexto de intimidación-, a sofocar toda idea de resistencia o fuga. Ahora bien, razona que también resulta punible el acusado por complicidad en el asesinato respecto de las víctimas que arribaron y a las cuales él no prestó el servicio de rampa. En efecto, aunque no pueda aseverarse que con su accionar el acusado haya prestado asistencia física o psicológica directa a los médicos que participaron en la selección o a los miembros de las SS que realizaron la matanza, el Tribunal Regional no obstante tomó acertadamente como punto de partida que el acusado por medio del ejercicio general de su servicio en Auschwitz, ya había prestado asistencia a los dirigentes estatales y a las SS, quienes a principios de 1944 ordenaron la Operación Hungría, la que subsecuentemente desde una posición de liderazgo, implementaron o dejaron implementar (para la autoría mediata en el marco de los aparatos de poder estatales).

D.10. Que desde esa perspectiva cavila el autor, que el acusado tuvo participación en esta facilitación de los hechos. Era parte del aparato de personal que ya estaba cumpliendo funciones al momento de la orden para llevar a cabo la Operación Hungría en Auschwitz. Él estaba vinculado a la organización de los asesinatos masivos, e independientemente de esto, le incumbía supervisar y vigilar la llegada de los deportados a la rampa y evitar por medio de las armas cualquier resistencia o intento de fuga. Finalmente, más allá de esto, también estuvo involucrado en el aprovechamiento de los bienes de las víctimas, lo que hizo que las SS se beneficiaran incluso luego de la muerte de las víctimas. El hecho de que estas funciones fueran ejercidas en el campo de concentración de Auschwitz por miembros de las SS que eran activos allí, era bien conocido por los responsables cuando se ordenó la Operación Hungría y fue de fundamental importancia para su resolución de actuar y emitir las respectivas órdenes y mandatos. El hecho de que ellos no conocieran personalmente al acusado es jurídicamente irrelevante. Bastaba con que ellos sepan que todas las tareas a desarrollarse para poner en marcha esa mortífera maquinaria, serían cumplidas por subordinados confiables y obedientes, lo que garantizaba una implementación sin obstáculos de la Operación Hungría.

D.11. Que todo según el contexto general de los fundamentos del veredicto, era también conocido por el acusado, quien lo aprobó -al menos- con condescendencia. Ya estaba plenamente informado de los acontecimientos, poco después de su llegada a Auschwitz. Sin embargo, en su empeño por no ser transferido al frente, se unió a la organización del campo y ejecutó todas las órdenes que se le impartieron. Él tenía en claro, por lo tanto, que a través de su servicio, en colaboración con otros, lograba asegurar en todo momento las condiciones necesarias para que las autoridades del Estado y de las SS pudieran decidir y ordenar la ejecución de una operación de exterminio en Auschwitz, ya que dependían de la ejecución a nivel local de sus órdenes criminales. Precisa Roxin que desde el punto de vista subjetivo, no se requiere más para tener por acreditada la contribución del acusado en todos los asesinatos que le fueran atribuidos en la sentencia impugnada por la Operación Hungría.

D.12. Que por ello **Claus Roxin** considera que la decisión anterior relatada, es correcta y cree que merece la relevancia que se le ha atribuido. Ella deja definitivamente en claro que los miembros del equipo de un campo de

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

concentración se hicieron culpables por complicidad en el asesinato, si ellos sabían de los asesinatos cometidos durante su pertenencia al campo y apoyaron la operación del campo dirigida al exterminio a gran escala de vidas humanas.

D.13. Que el autor recuerda que tampoco la **Sentencia de la Segunda Sala Penal del 20 de febrero de 1969**, a la que se ha remitido en la revisión del acusado y muchas órdenes de sobreseimiento de años anteriores, ha juzgado esto de un modo distinto. Allí se señala lo siguiente: “Una especificación más detallada de los hechos no era posible, pues las muertes en Auschwitz fueron tan numerosas que en su mayoría no pudieron ser identificadas por sus características específicas, como la persona del difunto o el momento exacto en que ello ocurrió... En ese sentido, si frente a asesinatos en masa uno quisiera colocar exigencias más estrictas respecto a la concretización de las ejecuciones individuales, entonces fracasaría la persecución de crímenes cometidos a escala masiva.”

D.14. Que precisa Roxin que no existen causales de exculpación. En especial, no viene en consideración el estado de necesidad como consecuencia de una orden (Befehlsnotstand). Tampoco el acusado mismo lo hizo valer para él. Tal como se dice en la sentencia de la Tercera Sala, él estaba “informado en su totalidad [sobre el suceso en el campo]. A pesar de ello, con el anhelo de no ser enviado al frente, él se integró en la organización del campo y ejecutó todas las órdenes que le fueron impartidas.” Esto corresponde al reconocimiento general de que los miembros del campo no fueron obligados a realizar sus actos. Quien se negaba a cooperar, era enviado al frente. A los líderes les interesaba que el funcionamiento de la maquinaria de muerte no fuera impedida por la oposición de algunos. “Hasta hoy no se ha documentado ningún caso en el que un miembro de la unidad militar o policial alemana hubiere sido condenado a muerte, asesinado o por lo menos maltratado, por haberse negado a ejecutar una orden de asesinato.” Con mayor razón no se puede hablar de un error de prohibición exculpante. Es difícilmente imaginable que quien actúa en un campo de concentración hubiera podido considerar que el asesinato de personas completamente inocentes resultaba conforme al derecho. Pero incluso de haber sido éste el caso – por ejemplo, debido a la autoría estatal –, una semejante “ceguera jurídica” no habría merecido ninguna disminución de la pena. En el caso que aquí se discute el acusado tampoco invocó un error de prohibición.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

D.15. Que trazando un razonamiento de lo anterior para el caso de Chile y en especial en esta causa podemos escrutar lo siguiente:

D.15.1. Al 11 de septiembre de 1973 en Chile no había Estado de Derecho. Se había quebrado el orden institucional pues los Fuerzas Armadas y de Orden dieron un Golpe de Estado, derribando al gobierno constitucional que había ascendido al poder.

D.15.2. Es decir se retrocedió de inmediato 200 años, y al retroceder estos 200 años y romper el freno de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 se retrocedió por lo menos otros 2000 años, volviendo a vivir la sociedad chilena bajo autoridades despóticas y arbitrarias. Situación que en la historia abundan. Ahora bien, el Estado de Derecho al menos desde la Declaración del hombre y del Ciudadano de 1789 y la misma Constitución francesa de 1791 tiene por fin último proteger a la persona, proteger sus derechos, salvaguardar la libertad. Podemos releer los artículos N°2 y N°16 de la citada declaración. Artículo 2, la finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del Hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión; artículo 16, Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución.

D.15.3. En este caso, como está documentado en forma amplia públicamente, durante 17 años de quiebre constitucional (régimen militar, dictadura militar), no hubo separación de poderes (al contrario, hubo concentración); se disolvió el poder más significativo de la representación popular como el congreso; el Poder Judicial no tuvo la independencia necesaria para salvaguardar los derechos de las personas. Luego en esa perspectiva, la autoridad tenía un doble resguardo de los derechos fundamentales de las personas. Primero, no había Estado de Derecho, en consecuencia el cuidado hacia los derechos y libertades de las personas le exigía un estándar mayor; en segundo lugar, reuniendo el poder político y militar en sus manos, cualquier afectación a los derechos de las persona se debía tener una necesidad, proporcionalidad y mayor fundamentación, pues de otro modo era sospechosa cualquier actuación pues no se estaba bajo un Estado de Derecho.

D.15.4. En este caso entonces las personas detenidas y llevadas al centro o lugar de detención (como es el Regimiento de Infantería N°8

Tucapel de Temuco) estaban en una alta indefensión, como puede observarse en las causas citadas por este Ministro en la ponderación de la prueba y en el análisis de las declaraciones indagatorias.

E. En cuanto a la complicidad: Que como ya se analizó en la causa 114.001 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, 1-2013 del Juzgado de Letras de Pucón y 113.969 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, es necesario cavilar sobre la complicidad. Tanto la doctrina Española como la Chilena, y tomando en cuenta la consagración legal que tiene la figura de la complicidad, esta tiene un carácter residual en el ámbito de la aplicabilidad. Es decir es una contribución a la realización del delito con actos anteriores o simultáneos a la misma, que no pueden en ningún caso ser considerados como de autoría. La complicidad según definición del artículo 16 del Código Penal, tiene una caracterización negativa; es decir, es cómplice aquel cuya contribución al delito no pueda calificarse, ni de autoría, ni de inducción, ni de cooperación necesaria. Francisco Muñoz Conde y otra (Derecho Penal, Parte General. Quinta edición. Editorial Tirant Lo Blanch, año 2002, páginas 357 a 413), expresa en síntesis que la conducta habrá de tener alguna eficacia causal, aunque sea mínima en el comportamiento del autor y reunir además una cierta peligrosidad. Precisa dicho autor que la conducta del cómplice ha de ser peligrosa de manera que, desde una perspectiva ex -ante represente un incremento relevante de las posibilidades de éxito del autor y con ello la de puesta en peligro o lesión del bien jurídico. Ello ocurrirá cuando, en el momento previo a la acción del cómplice, sea previsible que, con su aportación, la comisión del delito sea más rápida, más segura o más fácil o el resultado lesivo más intenso que sin ella. Se distingue entonces: 1.- Naturaleza de la cooperación. Dolosa, pero basta la idea que el auxilio facilite o haga más expedita la ejecución. Incluso el simple auxilio intelectual o moral es suficiente. 2.-Momento de la cooperación. Actos anteriores o simultáneos. 3.- Aprovechamiento de la cooperación por parte del autor. Que se haya servido efectivamente de ella. En el caso de autos, como se desprende del análisis de las declaraciones indagatorias analizadas precedentemente, es nítido que la complicidad es suficiente para que el auxilio facilite o haga más expedita la ejecución. Incluso el simple auxilio intelectual o moral es suficiente.

F. Convenio de Ginebra: Que a mayor abundamiento, además cabe hacer presente que sobre los Convenios de Ginebra la jurisprudencia ha sido

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

uniforme. Así en causa rol 2182-98 del ingreso de la ltma. Corte de Apelaciones de Santiago “**Caso Luis Almonacid Dúmenez**” de 29 de octubre de 2013, en su considerando 18, **párrafo 6**, señala que: “(...) los Convenios de Ginebra consagran el deber del Estado de persecución de los crímenes de guerra, sin poder "auto exonerarse" a su respecto. Tales convenios entraron en vigor en nuestro ordenamiento en las fechas en que fueron publicados en el Diario Oficial, esto es, entre los días 17 y 20 de abril de 1951. Los aludidos Convenios rigen también respecto de delitos cometidos en caso de conflictos armados sin carácter internacional, situación que, jurídicamente, existió en Chile a partir del 11 de septiembre 1973, como se ha afirmado por la doctrina; pero que también, aun cuando se estimare que dicha situación es una ficción, los aludidos convenios son aplicables en virtud de lo dispuesto en el artículo 3° común a todos ellos y ya citado, donde se plasma el principio de humanidad, así como por los principios que emanan de los Convenios de Ginebra son vinculantes por ser parte del derecho internacional consuetudinario, que pertenece a la categoría del *Ius Cogens*.” En efecto, el artículo 3°, común a los cuatro Convenios, prescribe: "en caso de conflicto armado sin carácter internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes contratantes, cada una de las Partes contendientes tendrá la obligación de aplicar por lo menos las disposiciones siguientes: 1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluso los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, herida, detención o cualquiera otra causa serán en toda circunstancia tratadas con humanidad. Al efecto, están y quedan prohibidas en cualquier tiempo y lugar, respecto de las personas arriba mencionadas: a) los atentados a la vida y a la integridad corporal, especialmente el homicidio en toda sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, las torturas y suplicios". En consecuencia, las normas sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad confirman el principio esencial en cuanto a que la imputabilidad, el juzgamiento y la condena por tales delitos son procedentes, cualquiera que sea la época en que se hubieren cometido. Se corrobora esta aseveración, por otra parte, en la sentencia de la Excma. Corte Suprema (Rol N°2664-04), en cuanto expresa en su considerando décimo séptimo “Que debe tenerse presente también la llamada Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de 1968 que surge en

la actualidad con categoría de norma de los Cogens o Principios Generales de Derecho Internacional”.

ANÁLISIS DE LA DEFENSA ESPECÍFICA

39°) En cuanto a la defensa de **Oscar Alfonso Podlech Michaud**.

Que haciéndonos cargos de la defensa de **fs. 5.731 y siguientes (Tomo XVI)**, interpuesta por el abogado Alfonso Podlech Delarze, en representación de Oscar Alfonso Podlech Michaud, el Tribunal estará a lo antes razonado, respecto a la ponderación de las declaraciones indagatorias del acusado y todos los fundamentos pertinentes que se han dado respecto a la relación y valoración de la prueba en general y específicas, en especial lo que se detalló y ponderó con precisión en el título de las consideraciones generales para las defensas. En relación con esta defensa se precisa lo siguiente:

A. Excepciones de previo y especial pronunciamiento: La defensa interpuso excepciones de previo y especial pronunciamiento de conformidad al artículo 433 N°6 y 433 N°7 del Código de Procedimiento Penal, las que ya fueron analizadas y falladas a fs. 6.068 a fs. 6.071 (Tomo XVII) con fecha 21 de agosto de 2023.

B. Sobre tachas de testigos y objeciones de documentos: La defensa alego tachas, las que fueron analizadas y resueltas precedentemente en este fallo, por otra parte, no objeto ningún documento en particular.

C. Excepciones de fondo: en cuanto a la lectura del escrito de la defensa se vislumbra que esta no alego excepciones de fondo en los términos que exige el artículo 433 del Código de Procedimiento Penal. Lo mismo al analizar el petitorio de su presentación, tampoco alego dichas excepciones.

D. Contestación a la acusación.

Sin perjuicio del resumen que ya se hizo del auto acusatorio, cabe precisar en el caso del acusado **Oscar Alfonso Podlech Michaud**, lo siguiente:

D. Del análisis de la defensa lo que resta valor a su consistencia y coherencia, es determinada satisfacciones de carácter general, que no se encuentran enlazadas con ninguna prueba ni con ningún argumento dado en el proceso. En efecto las siguientes afirmaciones “La acusación es absurda ya que no existe prueba de ninguna especie en contra de mi representado”, “La única razón por la que se acusa a Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud es porque los responsables están todos muertos”, “En que se basa su señoría ilustrísima

para acusar”, “No se ve en que forma mi representado puede ser considerado cómplice de delito en que no tuvo ninguna intervención ni antes de su ejecución ni se colaboración al momento del mismo”, entre otro tipo de afirmaciones similares.

D.1. Del estudio de la contestación del abogado Alfonso Eduardo Podlech Delarze, podemos indicar que realiza una serie de afirmaciones generales que le restan consistencia, coherencia y profundidad a su escrito. Afirmaciones generales además que no tienen un estudio analítico, en relación con toda la prueba ponderada por el Tribunal y con las consideraciones generales antes indicadas, los estándares normativos e interpretativos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en efecto:

D.2. En primer lugar, para derribar el auto acusatorio, la ponderación y valoración de las pruebas de este proceso, la defensa debe hacer un estudio pormenorizado relacionando las pruebas en conformidad al mérito del proceso y no una puesta parcial y particular como lo hace esta defensa. Asimismo, de la lectura del escrito del abogado defensor lo que se aprecia son reproducciones del auto acusatorio, declaraciones de testigos, de jurisprudencia parcial y no sostenida en el tiempo, y de normas jurídicas.

D.3. Se debe tener presente a diferencia de lo que expone la defensa, los estándares normativos e interpretativos de la obligación de investigar que se han señalado en las consideraciones generales y que en síntesis son: **a)** Investigar efectivamente los hechos. En casos de ejecuciones extrajudiciales es fundamental que los Estados investiguen efectivamente la privación del derecho a la vida y castiguen a todos los responsables, especialmente cuando están involucrados agentes estatales, ya que de no ser así se estarían creando, dentro de un ambiente de impunidad, las condiciones para que se repitan estos hechos, lo que es contrario al deber de respetar y garantizar el derecho a la vida; **b)** si los hechos violatorios a los derechos humanos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, favorecidos por el poder público, lo que compromete la responsabilidad internacional del Estado. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que en casos de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, las autoridades de un Estado deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva, una vez que tengan conocimiento del hecho; **c)** el deber de investigar es una obligación de medios, no de resultados, la investigación de este tipo de casos debe ser asumida

por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa o como una mera gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares, o de la aportación privada de elementos probatorios. Esto último no se contrapone con el derecho que tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares a ser escuchados durante el proceso de investigación y al trámite judicial, así como a participar ampliamente de los mismos; **d)** cabe destacar que cualquier carencia o defecto a los responsables materiales o intelectuales, implicará que no se cumpla con la obligación de proteger el derecho a la vida; **e)** la Corte ya ha señalado que la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. De otro modo, la investigación no es efectiva en los términos de la Convención; **f)** Para cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables en el presente caso, se debe: 1) remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; 2) utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; y 3) otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia; **g)** La investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales; **h)** El Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”; **i)** esta obligación de debida diligencia, adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados. En este sentido, tienen que adoptarse todas las medidas necesarias para visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos; **j)** El Tribunal considera que, para cumplir con la obligación de investigar en el marco de las garantías del debido proceso, el Estado debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores,

testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismo; **k)** La Corte reitera que el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación –y en algunos casos, la imposibilidad- para obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, la práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los posibles autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades penales. Cabe precisar que estos recursos y elementos coadyuvan a la efectiva investigación, pero la ausencia de los mismos no exime a las autoridades nacionales de realizar todos los esfuerzos necesarios en cumplimiento de esta obligación; **l)** en casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de investigación. De tal forma, la determinación sobre los perpetradores de la ejecución extrajudicial sólo puede resultar efectiva si se realiza a partir de una visión comprehensiva de los hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participación; **m)** la Justicia, para ser tal, debe ser oportuna y lograr el efecto útil que se desea o se espera con su accionar y, particularmente tratándose de un caso de graves violaciones de derechos humanos, debe primar un principio de efectividad en la investigación de los hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables; **n)** la Corte IDH ha establecido ciertos Principios Rectores, con base en el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas, para las investigaciones cuando se considera que una muerte pudo deberse a una ejecución extrajudicial. Las autoridades estatales que conducen una investigación deben n.1) Identificar a la víctima; n.2) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte con el fin de ayudar en cualquier investigación; n.3) Identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones con relación a la muerte que se investiga; n.4) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier procedimiento o práctica

que pueda haberla provocado, y n.5) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen; se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados. Lo que implica que en estas investigaciones y fallos se deba hacer, no solo una investigación exhaustiva, sino con una ponderación integral relacionando todos los medios de prueba en conformidad al tipo de delitos, delitos de lesa humanidad y al contexto de la época que es lo que se ha realizado en esta investigación, en el auto acusatorio y en este fallo.

D.4. Puntualizar a la defensa, las explicaciones y comentarios sobre la jurisprudencia alemana sobre delitos de lesa humanidad de los autores Gerhard Werle y Boris Burghardt. En efecto, en la sentencia de la sala especial del Landgericht de 1950 contra Huber Go-merski y Johann Klier se dice con claridad ejemplar: “El campo Sobibór fue creado con el solo fin de dar muerte a un gran número de judíos”. La sala sigue: “Todos quienes trabajaban en ese campo – alemanes, ucranianos y judíos– tenían su tarea particular, sea que hayan participado inmediatamente de los homicidios o que hayan apoyado indirectamente las tareas del campo. Todas estas actividades fueron en último término causales para el resultado –la muerte de los judíos–, pues sólo por haber existido este conjunto de actividades fue posible el resultado”. Esta argumentación la mantuvo la sala especial del Landgericht incluso para el Klier, quien hizo valer irrefutablemente que el solamente había trabajado en la panadería del campo y luego habría dirigido el comando de los zapatos (Schuhkommando), que se dedicaba a recolectar, seleccionar y almacenar los zapatos de los asesinados en las cámaras de gas. La sala especial del Landgericht hizo nuevamente hincapié en que “todas las personas que trabajaban en el campo de Sobibór eran engranajes de un sistema que tenía por única finalidad matar a judíos. Toda acción que se llevó a cabo en ese campo servía directa o indirectamente a ese fin. Todas esas acciones fueron necesarias para la operación del campo. De este modo, tanto la actividad del acusado Klier en la panadería como la actividad que tuvo a cargo de los zapatos fueron causales para el resultado”. Que del mismo modo dieciséis años después, en el gran proceso de Sobibór, la sala especial del Landgericht tampoco dudó en clasificar como colaboraciones promotoras del resultado a aquellas que no estaban directamente vinculadas con la operación de exterminio,

como por ejemplo el trabajo como tesorero o administrador del campo, o como responsable del abastecimiento de víveres y vestuario del personal del campo. La sentencia dijo sobre este punto: “Allí donde ellos [los acusados] formaban parte de la organización de los campos, [...] todos contribuyeron a hacer posible, por su colaboración funcional, los asesinatos masivos contra los judíos, siendo su causa y promoviéndolos en inmediata cercanía al hecho”. El Tribunal Federal alemán confirmó esa argumentación en cuanto conoció de la revisión de esas sentencias. (Sobre la complicidad en matanzas ocurridas en campos de exterminio nacionalsocialistas (el caso Demjanjuk en el contexto de la jurisprudencia de la República Federal Alemana) Werle, Gerhard; Burghardt, Boris. Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2016).

D.5. Un tema importante en las investigaciones de violación a los derechos humanos es el compromiso que tienen los participantes en estos hechos. No hay que olvidar que se estaba ante un quiebre institucional, luego hubo un régimen militar de 17 años y los hechos además suceden en un recinto de poder político militar, como es el regimiento Tucapel. Los múltiples testimonios dan cuenta de la cantidad de detenidos que pasaron por el regimiento Tucapel, que fueron interrogados, apremiados y muchos de ellos ejecutados. Y como quedó demostrado en el análisis de la declaración indagatoria del acusado Podlech Michaud, analizadas precedentemente, él decidía el destino de muchas personas detenidas, como además se acredita con la certificación de fs. 6.630 a fs. 6.633 (Tomo XX), donde se da cuenta de diferentes hechos criminales en el regimiento Tucapel, entre los meses de septiembre y diciembre de 1973.

D.6. En cuanto a que el acusado no era fiscal militar, la calidad de fiscal ad-hoc es real, lo que se demuestra el acta del pleno suscrita por la Corte de Apelaciones de Temuco, del 17 de septiembre de 1973 de fs. 3.042 a fs. 3.043 (Tomo IX), donde el encausado concurrió a la Corte de Apelaciones de Temuco, para solicitar actuarios, esto es indesmentible. Siguiendo con esa misma argumentación, entre otras pruebas están los informes periciales de fs. 4.157 a fs. 4.185 (tomo XII) y de fs. 4.186 a fs. 4.192 (Tomo XII) que concluyen que la firma es genuina de Oscar Alfonso Podlech Michaud. A lo anterior hay que agregarle, por ejemplo, la declaración de José Heriberto Mansilla quien declara fs. 1.717 a fs. 1.719 (Tomo V); de fs. 1.844 (Tomo VI), de fs. 1.846 a fs. 1.847 (Tomo VI), fs. 3.806 bis a fs. 3.808 (Tomo XI), de fs. 3.809 a fs. 3.810 (Tomo XI), de fs. 3.811

(Tomo XI), de fs. 3.813 a fs. 3.814 (Tomo XI), y de fs. 3.817 (Tomo XI). Del mismo modo, expresa la defensa que hay que considerar el contexto de la época y que han pasado 50 años. Pues bien, sobre esta materia la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos con su jurisprudencia ha manifestado que los Estados deben investigar estos hechos, establecer la verdad, determinar a los presuntos responsables y aplicar las penas, establece una serie de estándares, ya señalados precedentemente. Las autoridades estatales que conducen una investigación deben realizar lo enumerado precedentemente. Además, sobre esta materia, indicar a la defensa que el recordar un hecho de 50 años no resulta complejo, principalmente cuando ha sido traumático para la familia, por ejemplo, un accidente, una enfermedad y en este caso, el delito secuestro con grave daño. Aquí no se trata de dar un salto en el vacío, es decir los hechos ocurrieron en fines de septiembre e inicios de octubre de 1973 y luego la familia y los testigos olvidan los hechos y los vuelve a recordar 50 años después. Lo cierto que esto no es así, porque este delito se inmortaliza permanentemente en las reuniones sociales, en las agrupaciones de Derechos Humanos, de la misma forma en los informes de la Comisión Retting, entre otros. En cuanto a calidad del Teniente de Reserva, es una referencia a la historia del acusado que no tiene ninguna relevancia principal para efectos de determinar su participación.

D.7. En cuanto a que no denunció ni informó a la autoridad militar, el Tribunal reitera los argumentos dados con anterioridad respecto a las múltiples pruebas ya aquilatadas en este fallo, toda vez que, de la ponderación de ellas no resulta atendible que la defensa presente al acusado Podlech Michaud, como un simple abogado que asesoró a la Fiscalía Militar y no tuvo conocimiento de este hecho y muchos otros durante el régimen militar. Él no fue un abogado pasivo, sino que fue protagonista respecto a las personas que se presentaban al regimiento Tucapel o bien llevadas detenidas, como ha quedado demostrado en esta causa.

D.8. En relación con los dichos de Julio Cesar Guevara Guevara, la defensa hace una cita incompleta e inexacta, toda vez que este detenido agrega: a fs. 213 bis a fs. 215 (Tomo I), "En la cárcel de Temuco donde conoció a varios detenidos, que al igual que él, estaban según la policía por razones políticas, entre esas personas Elías Dagoberto González Ortega, joven de Villarrica a quien conocía en Huisapi desde pequeño y eran amigos (...). Aclara que la gente que

salía estando detenida, iba al regimiento, pero desde ese lugar no volvían, que después se enteraron de que habían sido ejecutados”. A fs. 416 a fs. 417 (Tomo II), “que conocía a la familia de Elías González Ortega, especialmente a sus padres y el día que se encontró con él en la cárcel pública de Temuco, éste se veía muy maltratado. Le preguntó por su hermano Hugo, sin embargo, no se acuerda qué fue lo que le dijo. No obstante, esto, él se veía muy preocupado por su hermano y por el resto de sus amigos (...), diariamente se leían listados de cinco o seis personas que eran requeridas en la guardia. Estas personas salían con sus cosas y ellos pensaban que era para otorgarles la libertad; sin embargo, después supieron que muchas de estas personas fueron dadas de baja en el regimiento por haber intentado fugarse”. Lo que es corroborado por diferentes hechos sucedidos tanto en Temuco como en el regimiento Tucapel, como consta en la certificación de fs. 6.630 a fs. 6.633 (Tomo XX). De la misma forma se le hace presente a la defensa que el acusado Podlech Michaud, ya ha sido condenado por hechos similares acontecidos en el regimiento Tucapel de Temuco, a modo de ejemplo los roles 113.089, episodio “Asalto al polvorín”; rol 114.017 apremios ilegítimos y homicidio calificados de Daniel de los Ángeles Mateluna y José María Ortigosa Ansoleaga; 113.975 homicidios calificados de Pedro Ríos Castillos y Guido Troncoso Pérez y apremios ilegítimos de Pedro Ríos Castillo; 113.950 secuestro calificado con grave daño de Ambrosio Badilla Vasey; 113.961 apremios ilegítimos con resultado de muerte de Santiago Faúndez Bustos; 114.011 apremios ilegítimos con resultado de muerte de Victoriano Segundo Fernández Coloma, y rol 2182-1998 episodio “Jaime Eltit Spielman”.

D.9. En cuanto a la cita de Francisco Matta Aros, cabe distinguir aquí una cosa, es que, se interroga a una persona por determinada autoridad y otra cosa, es quien firma el salvoconducto. Toda vez que a fs. 786 a fs. 787 (Tomo III), el señor Matta Iturra dice que quien interrogo a su padre fue el señor Podlech, no dice que firmo el salvoconducto. Lo que sí está claro es que, son hechos ocurridos en el año 1973, toda vez que, el salvoconducto de fs. 647 (Tomo II), dice que: “Ejército de Chile Fiscalía Militar Cautín Temuco. Temuco, 28 de noviembre de 1973. Nota Fiscalía deja constancia que don Francisco Matta Aros, se encuentra en libertad, autorizado para estar en su domicilio de Pucón (...)”. Ahora bien, la referencia al abogado Sergio Zapata Camus es descontextualizada, porque no se hace cargo de los documentos donde aparece el acusado Podlech Michaud no

solo como fiscal ad-hoc, sino que firmando determinados documentos y haciendo actuaciones como fiscal ad-hoc como se ha hecho referencia precedentemente. En todo caso el abogado Camus no conversa con el oficial Jofré, sino que conversa el acusado Podlech Michaud. En relación con la expulsión de ciudadanos extranjeros que el señor Matta señala a fs. 787 (Tomo III), lo cierto es que hace referencia a las actuaciones del momento y en el caso de su padre y en eso nada disminuye la acusación porque tiene que ver con otros hechos.

D.10. Respecto a lo que sucedió en Italia cuando estuvo detenido el acusado Oscar Alfonso Podlech Michaud, hay que hacer presente que ello corresponde a otro país, a otra jurisdicción y no tiene ninguna relación con el Estado soberano de Chile y los hechos que se investigan en esta causa.

D.11. Como se relata en el auto acusatorio antes citado, la estrategia de los agentes del Estado mantuvo un patrón en determinados hechos, que es la denominada “falsa ley de fuga”, esto es, se aparenta que un detenido se le otorga la libertad para luego seguirlo y detenerlo en un tiempo posterior. Y así consta en el numeral 50) del auto acusatorio, aquello dentro de otros elementos que hay en el proceso, se comprueba con los dichos del testigo reservado, quien reconoce a varios de estos jóvenes al interior del regimiento Tucapel y los vuelve a reconocer cuando le toco levantar los cuerpos de estas personas ejecutadas, y ello consta en los párrafos 52) y 53) del auto acusatorio.

D.12. En el caso de inexistencia de complicidad, el Tribunal sobre esta materia estará a las reflexiones que se hicieron en los análisis de la defensa de generales, bastando para ser cómplice una cooperación a la realización del delito con actos anteriores o simultáneos a la misma, que no pueden en ningún caso ser considerados como de autoría. La conducta del cómplice ha de ser peligrosa de manera que, desde una perspectiva ex-ante represente un incremento relevante de las posibilidades de éxito del autor y con ello la de puesta en peligro o lesión del bien jurídico. Además, se reitera la cita de los autores Gerhard Werle y Boris Burghardt precedentemente señalados. Situando en el contexto de la época los hechos sucedieron en la comuna de Temuco en un lugar específico en el regimiento Tucapel de Temuco, el que estaba estructurado en diferentes compañías, una de ella compañía de plana mayor y servicios donde trabajó el testigo reservado, en la cual también desarrollaban funciones los otros tres acusados y en cuya dependencia funcionaba la fiscalía militar, como la oficina de

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Nelson Ubilla. Dicho lo anterior según las reflexiones anteriores por un asunto de mérito del proceso y de coherencia, los cómplices desarrollaron estos hechos, la primera pregunta que cabe por qué habría que imputar responsabilidad a miembros de otras compañías como andina, cazadores u morteros, en circunstancias que el testigo reservados y los acusados trabajaron en la compañía de plana mayor y servicios, y en el caso del acusado Podlech Michaud trabajó en dependencia de esa compañía en la fiscalía militar. Cabe puntualizar en este tema los dichos del testigo reservado, en cuanto todos los oficiales o miembros sabían lo que pasaban, sino también los dichos José Raúl Inzunza Reyes a fs. 1.813 a fs. 1.814 (Tomo V), luego en este caso por la labor que ejerció como fiscal ad-hoc sin duda le corresponde la calidad cómplice.

D.13. En cuanto a la entrevista a los señores Ministros Solís y Carreño, cabe recordarle a la defensa que solo es una entrevista, correspondiente a un asunto extrajudicial, en segundo lugar, no es posible comparar la labor de lo que realiza cada Juez, cada Ministro sabrá cómo llevar la investigación y ponderar la prueba, cada Ministro es soberano y autónomo en sus decisiones. En consecuencia, la cita que hace la defensa resulta totalmente improcedente.

D.14. Con relación a la cita de Sigfredo Jara, también está relacionada con el contexto de la época por lo que no entiende mucho el Tribunal cual es la reflexión que quiere hacer la defensa. En cuanto al detective Aquiles Poblete Müller cabe hacer presente a diferencia de lo expone la defensa era el jefe de los detectives que estaban agregados en el regimiento Tucapel. En consecuencia en su persona llegaba mucha información, sobre lo anterior cabe hacer presente lo que manifestaron los otros detectives, entre ellos Hernán Raúl Quiroz Barra, a fs. 1.692 a fs. 1.694 (Tomo V), quien expresa que: “siempre se enteraban de fallecimiento de detenidos al interior del regimiento durante las mañanas y de acuerdo a la información que se les entregaba a las personas, fallecían, producto de disparos efectuados por personal militar por intentar fugarse del regimiento en horas de la noche”; de Daniel Arnoldo Aguirre Mora a fs. 1.711 a fs. 1.714 (Tomo V), manifiesta que: “en una oportunidad del mes de noviembre de 1973 con ocasión de haber quedado como prefecto subrogante, se produjo una fuga de personas que estaban detenidas en el regimiento Tucapel, los que fueron dados de baja (...) agrega que Ortiz le comentó que en alguna ocasión algunos detenidos murieron en las sesiones de interrogatorios y torturas. Que además le

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

dijo que los militares no sabían interrogar porque maltrataban demasiados a los detenidos al punto de dejarlos semi inconscientes”.

D.15. En cuanto a que no se firmaron órdenes de ingreso o egreso por el acusado Podlech Michaud respecto de personas detenidas en la cárcel pública, eso en nada arredra lo que se ha venido explicando más aún es el propio Sigfredo Jara que cita la defensa a fs. 4.195 a fs. 4.196 (Tomo XII), y que refiere que encapuchado sacaban detenidos en la noche y que algunos no eran devueltos. Del mismo modo, de la lectura del auto acusatorio y de los hechos establecidos en este fallo en ningún numeral se señala que el acusado Podlech Michaud firmó algún documento de ingreso o egreso de la cárcel pública.

D.16. En cuanto al testigo José Heriberto Mansilla Gatica, la defensa no ha podido desvirtuar sus dichos, la tacha presentada fue rechazada, porque el testimonio de Mansilla no es general, no es ambiguo, sino que le agrega una serie de detalles, así a fs. 1.717 a fs. 1.719 (Tomo V), precisa que: “El trabajo cotidiano de la fiscalía, como interrogar, tomar decisiones con respecto de los detenidos era de Alfonso Podlech. Que se intercedía ante Alfonso Podlech, porque éste decidía la suerte de los detenidos que una vez llegaron en camiones. El comandante Jofré le dijo personalmente, cuando estaba de guardia, que las decisiones respecto a un grupo de detenidos que llegaron, entre los que había dos mujeres, debía tomarla Alfonso Podlech. Por esa razón intercedió ante Podlech por las mujeres que conocía. Que la oficina de plana mayor era ocupada por la Fiscalía Militar. En lo formal el comandante Jofre era el Fiscal Militar, pero todas las decisiones de la Fiscalía Militar las tomaba Podlech”, a fs. 1.844 (Tomo VI) suma que: “estuvo trabajando una tarde con Alfonso Podlech Michaud. Éste tomada declaraciones y el deponente era el dactilógrafo. Que esta situación solo fue por una tarde y fue por orden del mayor Jofré”, entre otras declaraciones.

D.17. En cuanto a la falta de presunciones fundadas de la participación respecto de la situación de Héctor Aguayo Olavarría el Tribunal estará a lo razonado con anterioridad.

D.18. Respecto a la continuidad de los hechos y que habría terminado o no un secuestro y habría empezado otros, lo cierto es que no tiene mayor relevancia, porque como lo reconoce la defensa hubo finalmente un secuestro y este término con grave daño.

D.19. En relación con el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, el Tribunal estará a los hechos establecidos en esta sentencia y al mérito del proceso, como se desprende de la prueba hay múltiples elementos probatorios que permiten al Tribunal establecer los hechos y como se logró determinar que existieron estos delitos y en ellos le ha cabido participación a varias personas y entre ellos al acusado Oscar Alfonso Podlech Michaud. Sin perjuicio de reiterar este Tribunal que se cumplen los requisitos del 488 del texto citado y a modo de ejemplo se tiene presente lo señalado por la Excelentísima Corte Suprema en su considerando 14 “Que, los hechos reseñados precedentemente, desprendidos de las piezas procesales que en cada caso se ha indicado, son reales, desde que ocurrieron en determinado lugar y tiempo y están probados, esto es, acreditados legalmente en los autos a través de los medios probatorios detallados en el motivo precedente. Son hechos reales y probados, ha explicado esta Corte Suprema, “los indicios de cualquier género, el dicho de un testigo hábil o de varios inhábiles, la opinión de un perito singular, la declaración extrajudicial y otras semejantes, siempre que ellas formen parte del mérito de autos” (SCS,14.12.1967, R., t. 65. Secc. 4ª, p. 71). En cuanto a que son múltiples esos hechos, tal requisito está al margen del cuestionamiento dado su pluralidad respecto de cada uno de los encartados”. (Rol N° 65.358-2021 de fecha 09 de julio de 2024).

E. En cuanto a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal y beneficios de la ley 18.216. El Tribunal lo razonará en los considerandos posteriores.

F. Prueba del plenario: La defensa en su escrito de contestación presentó minuta y lista de testigos, lo que fue proveído a fs. 6.071 (Tomo XVII), y analizado el expediente y el término probatorio habiéndose citado legalmente dichos testigos no comparecieron a la respectiva audiencia testimonial fijada, según consta en certificación de fs. 6.271 (Tomo XVIII) de fecha 26 de octubre de 2023.

F.1. De la misma forma analizada el expediente el acusado en su declaración indagatoria de fs. 1828 a fs. 1829 Tomo VI), acompañó declaración Bernardita Del Carmen Weisser Soto, rolante de fs. 1.826 a fs. 1.827 (Tomo VI), quien expone: “He solicitado comparecer nuevamente en presencia del Sr. Fiscal con el objeto de rectificar las declaraciones prestadas en su presencia y que en este acto se me dan a conocer. Un mejor acuerdo me mueve a expresar y

reconocer que efectivamente fui primeramente simpatizante y luego militante del MIR (...) Si en principio negué ser militante de MIR, lo hice basada en la desesperada situación en que me encuentro, ya que soy casada legítimamente con Alonso Azocar, “El Sonaja”, quien también está detenido en esta misma causa y carecemos de todo medio económico con que subsistir”.

F.2. Declaración que en nada disminuyen los dichos de la testigo Bernardita Weisser Soto, y en todo caso, a diferencia de lo que expresa el acusado dan cuenta de la situación vivida en 1973, del temor que tenía la testigo y corrobora su detención por motivos políticos.

F.3. Asimismo, la defensa durante el plenario a fs. 5.749 a fs. 5.757 (Tomo XVI), acompañó los siguientes documentos:

F.3.1. Copia simple a fs. 5.750, de documento de fecha 22 de abril de 2009 titulado del Jefe de la Sección Archivo General del Ejército, que reseña en el punto 2 “que revisados los archivos Institucionales pertinentes, se pudo constatar que el TCL (R) Podlech Michaud no pertenecía al Ejército de Chile entre el 11 de sep 973 y el 13 feb 974, por cuanto fue nombrado Mayor de Justicia Militar a contar del 14 feb 974, conforme a Resolución DPE N°59 de esa misma fecha (...)”.

F.3.2. Copia simple a fs. 5.751 a fs. 5.752, carta de Miguel Muñoz Farías, General de División Jefe del Estado Mayor General del Ejército, de fecha 13 de julio de 2014, la que en síntesis refiere remitir copias de decretos mediante el cual se nombra Mayor de Justicia Militar al abogado Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud. Igualmente alude a la institución de fiscal ad-hoc en tiempo de paz.

F.3.3. Copia simple plana de diario a fs. 5.753 que aluden a Alfonso Podlech.

F.3.4. Copia simple de 5.754 del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, de fecha 14 de marzo de 2017, mediante el cual se informa que: “revisados los registros que a la fecha todavía existen en ese establecimiento, no se registran antecedentes sobre ordenes de ingreso y egresos firmadas por el ciudadano Alfonso Podlech Michaud en el año 1973”.

F.3.5. Copia simple a fs. 5.755, carta de Héctor Jensen Valenzuela, que en lo pertinente suscribe haber sido funcionario del Ministerio de Agricultura, a partir de septiembre de 1973, siendo nombrado director de la XI zonal de agricultura para las provincias de Cautín y Malleco hasta abril de 1976, en este carácter pudo recibir e interactuar entre otros abogados a don Alfonso Podlech

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Michaud, quien representaba a muchos agricultores expropiados. Quien, con motivo de asumir el puesto de fiscal militar en marzo de 1974, tuvo que renunciar a los patrocinios y poderes de sus clientes.

F.3.6. Copia simple a fs. 5.756, carta de Julio Jara González, quien expresa haber sido funcionario de la Corporación de Reforma Agraria desde 1972, a partir de septiembre de 1973 fue designado a cargo del Departamento de Tenencia de Tierra de la misma corporación para las zonas de Cautín y Malleco, realizando diferentes gestiones las que reseña y que muchas veces citó y se reunió con Alfonso Podlech Michaud quien representaba a agricultores expropiados. Que con motivo de asumir el puesto de fiscal militar en marzo de 1974, el señor Podlech Michaud renunció a los patrocinios y poderes de sus clientes.

F.3.7. Carta del Consejo de abogados a fs. 5.757, la cual ciñe acto homenaje por cumplimiento de 50 años en el ejercicio profesional.

F.3. Que, analizados los documentos precedentemente señalados, en nada altera lo ponderado y aquilatado por el Tribunal, se mantiene el razonamiento que se ha hecho en esta sentencia y que permiten acreditar la participación del acusado Podlech Michaud. Las cartas de Héctor Jensen Valenzuela y de Julio Jara González, refieren a otras circunstancias y nada dicen de la ocurrencia de los hechos y la participación del acusado, pues no disminuyen los razonamientos dados con anterioridad, hay testimonios de mayor coherencia y profundidad que permiten arribar a la participación que tuvo el señor Podlech Michaud; de la misma forma, el documento del Jefe de la Sección Archivo General del Ejército; carta de Miguel Muñoz Farías, General de División Jefe del Estado Mayor General del Ejército; el documento del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, la carta del consejo de abogados, copia de diario “El Mercurio”, todos estos documentos no logran desvirtuar lo que este Tribunal ha relacionado y ponderado en esta sentencia, algunos de ellos se refieren a la conducta del acusado, otros a simples declaraciones en la prensa, otros a hechos en Italia sobre lo cual ya el Tribunal ha razonado. En consecuencia, todos los documentos antes analizados no logran derribar el auto acusatorio y no logran derribar los hechos establecidos en esta sentencia, así como tampoco los razonamientos y ponderaciones que sobre los medios de prueba legal se han hechos, y que permiten acreditar la participación del acusado Podlech Michaud.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

G. Solicitud de sobreseimiento parcial o definitivo: A fs. 6.411 a fs. 6.412 (Tomo XIX), la defensa luego de exponer sus argumentos requiere el sobreseimiento definitivo de su representado. A lo que el Tribunal no dio lugar según consta a fs. 6.512 y siguientes (Tomo XIX), como se ha razonado en dicha resolución y en un análisis integral de toda la prueba acompañada al proceso y de las declaraciones indagatorias del acusado, el resultado apunta a que existió el delito de secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, y en ese delito le ha correspondido participación en calidad de cómplice al acusado Oscar Alfonso Podlech Michaud.

H. Calificación final: Atendido el mérito de los antecedentes y los argumentos de la defensa, el Tribunal mantiene la calificación que ha dado precedentemente en esta sentencia y además se ha dado en el auto acusatorio, esto es, **cómplice** del delito secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, en su carácter de lesa humanidad.

40°) En cuanto a la defensa de Pedro Guillermo Tichauer Salcedo

Que haciéndonos cargos de la defensa de **5.683 y siguientes (Tomo XVI)**, interpuesta por la abogada Karen Valenzuela Jerez, en representación de Pedro Guillermo Tichauer Salcedo, el Tribunal estará a lo antes razonado, respecto a la ponderación de las declaraciones indagatorias del acusado y todos los fundamentos pertinentes que se han dado respecto a la relación y valoración de la prueba general y específica, en especial lo que se detalló y ponderó con precisión en el título de las consideraciones generales para las defensas. Con relación a esta defensa se precisa lo siguiente:

A. Excepciones de previo y especial pronunciamiento: La defensa interpuso excepciones de previo y especial pronunciamiento de conformidad al artículo 433 N°6 y 433 N°7 del Código de Procedimiento Penal, las que ya fueron analizadas y falladas a fs. 6.072 a fs. 6.074 (Tomo XVII) con fecha 21 de agosto de 2023.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

B. Sobre tachas de testigos y objeciones de documentos: La defensa no realizó tachas a testigos en los términos que exige el artículo 492 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, ni tampoco objeto ningún documento en particular.

C. Excepciones de fondo: De acuerdo con la lectura del escrito de esta defensa, el Tribunal hace presente que no interpuso excepciones de fondo en los términos que exige el artículo 433 del Código de Procedimiento Penal. Además de la lectura de su petición concreta tampoco se alega esta institución.

D. Contestación a la acusación

Sin perjuicio del resumen que ya se hizo del auto acusatorio, cabe precisar en el caso del acusado **Pedro Guillermo Tichauer Salcedo**, lo siguiente:

D.1. En cuanto a los hechos, sobre esta materia la defensa, a través de todo su escrito, insiste en que no existe prueba material que lo vincule, ni menos prueba testimonial con las víctimas de autos. En este punto el Tribunal reitera las relaciones y ponderaciones de toda la prueba del proceso que se ha realizado anteriormente, partiendo con lo que ya este Tribunal ha manifestado en el sentido que los hechos ocurrieron en la comuna de Temuco, entre fines de septiembre e inicios de octubre de 1973. Además, los hechos sucedieron en un perímetro específico de la ciudad de Temuco, esto es el regimiento Tucapel, dentro del regimiento Tucapel. Al mismo tiempo los hechos están relacionados con la compañía de plana mayor y servicios, compañía a la que pertenecía tanto el testigo reservado como los acusados García Covarrubias, Lavín Muñoz y Tichauer Salcedo; sin perjuicio de la participación del acusado Podlech Michaud. Como este Tribunal lo ha razonado durante todo este fallo, la complicidad en conformidad al artículo 16 del Código Penal, está enfocada a la comisión de delitos de lesa humanidad, en este sentido es orientador lo que se ha aquilatado respecto a este tipo de delitos por la jurisprudencia alemana de los autores Gerhard Werle y Boris Burghardt. En efecto, en la sentencia de la sala especial del Landgericht de 1950 contra Huber Go-merski y Johann Klier se dice con claridad ejemplar: “El campo Sobibór fue creado con el solo fin de dar muerte a un gran número de judíos”. La sala sigue: “Todos quienes trabajaban en ese campo –alemanes, ucranianos y judíos– tenían su tarea particular, sea que hayan participado inmediatamente de los homicidios o que hayan apoyado indirectamente las tareas del campo. Todas estas actividades fueron en último término causales para el resultado –la muerte

de los judíos—, pues sólo por haber existido este conjunto de actividades fue posible el resultado”. Esta argumentación la mantuvo la sala especial del Landgericht incluso para el Klier, quien hizo valer irrefutablemente que el solamente había trabajado en la panadería del campo y luego habría dirigido el comando de los zapatos (Schuhkommando), que se dedicaba a recolectar, seleccionar y almacenar los zapatos de los asesinados en las cámaras de gas. La sala especial del Landgericht hizo nuevamente hincapié en que “todas las personas que trabajaban en el campo de Sobibór eran engranajes de un sistema que tenía por única finalidad matar a judíos. Toda acción que se llevó a cabo en ese campo servía directa o indirectamente a ese fin. Todas esas acciones fueron necesarias para la operación del campo. De este modo, tanto la actividad del acusado Klier en la panadería como la actividad que tuvo a cargo de los zapatos fueron causales para el resultado”. Que del mismo modo dieciséis años después, en el gran proceso de Sobibór, la sala especial del Landgericht tampoco dudó en clasificar como colaboraciones promotoras del resultado a aquellas que no estaban directamente vinculadas con la operación de exterminio, como por ejemplo el trabajo como tesorero o administrador del campo, o como responsable del abastecimiento de víveres y vestuario del personal del campo. La sentencia dijo sobre este punto: “Allí donde ellos [los acusados] formaban parte de la organización de los campos, [...] todos contribuyeron a hacer posible, por su colaboración funcional, los asesinatos masivos contra los judíos, siendo su causa y promoviéndolos en inmediata cercanía al hecho”. El Tribunal Federal alemán confirmó esa argumentación en cuanto conoció de la revisión de esas sentencias. (Sobre la complicidad en matanzas ocurridas en campos de exterminio nacionalsocialistas (el caso Demjanjuk en el contexto de la jurisprudencia de la República Federal Alemana) Werle, Gerhard; Burghardt, Boris. Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2016). En ese sentido, sin perjuicio del análisis particular del sobreseimiento pedido por la defensa, es el propio escrito del acusado Tichauer quien describe las labores que le correspondían, en síntesis, él tenía el grado de teniente, oficial de intendencia, finanzas y logísticas. La propia defensa indica que en el regimiento existía la compañía plana mayor y servicios en la cual cohabitan los escalafones de material de guerra e intendencia, y dentro de lo que le correspondía realizar era el manejo de la finanzas y era jefe de las siguientes comisiones: alimentación de hombre y ganado, comisión de vestuario y equipo,

comisión de bienes de uso, también en comisiones administrativas como: gasto de representación, economías generales, panadería y matadero. Agrega la defensa que la más delicada era de finanza, ya que, por ser exiguos los recursos se debía cumplir todas las necesidades propias para su institución, ya sea en tiempo de paz o de guerra (ejercicios y maniobras). También describe lo que se debía hacer en cada comisión con bastantes detalles. Como se desprende de lo razonado, sin la cooperación y colaboración del teniente Tichauer el regimiento Tucapel no habría podido funcionar. En ese sentido el engarza en lo que se viene relacionando que con su actividad y colaboración contribuyo a la ejecución de los ilícitos, haciendo presente que no está acusado en calidad de autor, sino que es de cómplice.

D.2. Con relación a la crítica que hace la defensa respecto del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, el Tribunal se ceñirá al resumen ejecutivo que se hizo del auto acusatorio y a la ponderación detallada de la prueba aportada al proceso. Haciéndole presente a la defensa, que la gran mayoría de las declaraciones y en general de la prueba del proceso corresponden a miembros del regimiento Tucapel para la época de los hechos y no a terceros civiles (que eventualmente pudieran contar alguna historia diferente), la prueba analizada corresponde a testimonios reales, de personas que trabajaron en el regimiento Tucapel, ya sea en la compañía de plana mayor y servicios u otra compañía, civiles que estuvieron detenidos y torturados en regimiento Tucapel, y que además conocieron a las víctimas, entre otras pruebas, documentación variada que permite ir completando el cuadro principal probatorio y determinar los hechos, informes periciales, y en especial las declaraciones del testigo reservado. En resumen, no hay ninguna prueba artificial para construir las presunciones judiciales en conformidad al artículo 488 del Código de Procedimiento Penal. Lo cierto es que, no es posible entender lo expuesto por la defensa, toda vez que, hace afirmaciones generales en el sentido que se ha vulnerado el debido proceso. Desde que sometió a proceso a fs. 4.254 y siguientes (Tomo XII) con fecha 17 de junio de 2022, con fecha 08 de julio de 2022 se le dio vista al sumario tal como consta a fs. 4.358 (Tomo XII). De forma tal que el tiempo que tuvo para estudiar el expediente desde que se sometió a proceso al acusado Tichauer hasta que se dictó la acusación fue de 4 meses y lo único que planteo la defensa fue el cambio de la medida cautelar impuesta. En ese mismo sentido en cuanto al artículo 488 del Código Procedimiento Penal, y sin perjuicio de reiterar este Tribunal que se

cumplen sus requisitos y a modo de ejemplo se tiene presente lo señalado por la Excelentísima Corte Suprema en su considerando 14: “Que, los hechos reseñados precedentemente, desprendidos de las piezas procesales que en cada caso se ha indicado, son reales, desde que ocurrieron en determinado lugar y tiempo y están probados, esto es, acreditados legalmente en los autos a través de los medios probatorios detallados en el motivo precedente. Son hechos reales y probados, ha explicado esta Corte Suprema, “los indicios de cualquier género, el dicho de un testigo hábil o de varios inhábiles, la opinión de un perito singular, la declaración extrajudicial y otras semejantes, siempre que ellas formen parte del mérito de autos” (SCS,14.12.1967, R., t. 65. Secc. 4ª, p. 71). En cuanto a que son múltiples esos hechos, tal requisito está al margen del cuestionamiento dado su pluralidad respecto de cada uno de los encartados”. (Rol N° 65.358-2021 de fecha 09 de julio de 2024).

D.3. En cuanto al derecho que explica la defensa, en primer lugar, se le hace presente, que el Tribunal se rige por el principio *Iura Novit Curia*. Asimismo, de acuerdo con el proceso y a la prueba ponderada como se ha establecido en los hechos, la conducta del acusado Tichauer corresponde a un cómplice, no siendo posible que se le pueda engarzar como encubridor.

D.4. Ahora sobre los principios de la jerarquía militar, necesidad de saber, compartimentaje de su unidad, lo cierto es que, en este caso, no tienen ninguna relevancia, en primer lugar porque la propia defensa ha manifestado la gran cantidad de comisiones en la que participaba el acusado Tichauer, con lo cual sabía perfectamente lo que se necesitaba para que funcionara el regimiento y las actividades que se estaban realizando. Además, como se detalló con anterioridad, las detenciones, torturas y ejecuciones no eran nada secreto, esto era visto por muchos soldados y por supuesto por los oficiales y en especial los oficiales de plana mayor y servicios. Haciendo presente que, en esta compañía trabajaban Nelson Ubilla Toledo, a modo de ilustración, están los dichos de: José Raúl Inzunza Reyes a de fs. 1.813 a fs. 1.814 (Tomo VI) quien indica que: “Que es cierto lo que señala Schwartenski, en el sentido que todos los oficiales del regimiento iban a la sala de interrogatorios a curiosear”, luego anexa a fs. 2.741 a fs. 2.743 (Tomo VIII) que: “se desempeñó como soldado conscripto fue en la compañía de plana mayor y servicios (...).En relación a las labores que pasó a cumplir, señala que estas tenían que ver con el trato con los detenidos que

llegaban a la unidad militar, labores que estaban a cargo del capitán Nelson Ubilla Toledo (...). Ratificando sus dichos en el sentido que estos funcionarios interrogaban a los detenidos bajo aplicación de tortura, la que consistía en golpe y corriente, al interior de una sala ubica en la compañía de plana mayor y servicios, a la cual ingresaban también otros oficiales". De la misma forma los dichos de Libardo Hernán Schwartenski Rubio a fs. 1.740 a fs. 1.741 (Tomo V), en lo oportuno: "insiste que para 1973 se encontraba encuadrado en la compañía de plana mayor y servicios, al mando del capitán Nelson Ubilla Toledo (...). En cuanto a la existencia de un grupo encargado de los interrogatorios de los prisioneros políticos, indica que recuerda que este lo integraban el capitán Ubilla, el teniente Jaime Garcia Covarrubias, apodado "el yango", el subteniente Romilio Lavín, los sargentos Orlando Moreno Vásquez y Raúl Schonherr Frías, además del sargento Mario Arias Díaz, los cuales realizaban su labor en una sala de interrogatorios habilitada en la cuadra de la compañía de plana mayor y servicios, donde era recurrente observar los detenidos que ingresaban a esa sala, los cuales se sabía que eran torturados", y a fs. 1.784 a fs. 1.785 (Tomo VI), adicionó que: "Que de los hechos ocurridos en el regimiento con relación a los detenidos lo sabían todos los oficiales", también a fs. 1.813 a fs. 1.814 (Tomo VI) declaro que: "era común que todos los oficiales fueran a mirar de vez en cuando, porque era la novedad", entre otros. Asimismo, cabe hacer presente a la defensa que no constituye ninguna excusa que no se haya procesado a otras personas, sobre lo anterior es necesario observar la certificación ordenada como medida para mejor resolver de fs. 6.630 y siguientes (Tomo XX), en cuanto refiere sobre hechos ocurridos en el regimiento Tucapel, en síntesis: homicidios, apremios ilegítimos, torturas, secuestro con grave daño y apremios ilegítimos con resultado de muerte, delitos que se cometieron entre los meses de septiembre a diciembre de 1973, en ella se menciona detalladamente la variedad de personas que fueron condenadas por esos ilícitos. En este punto lo que pide la defensa y las otras defensas, el Tribunal ha realizado lo que solicitan ellas. En efecto, en principio no se puede procesar a todo el regimiento Tucapel (aunque otros Ministros conociendo de otros hechos en causa en Santiago, respecto de la DINA o CNI han procesado a todos los miembros de ese cuartel). El Tribunal haciendo un trabajo de detalle, ha seguido lo que permite extraer de la ponderación de la prueba, primero donde sucedieron los hechos en el regimiento Tucapel, en qué fecha acontecieron los hechos entre fines

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

de septiembre e inicio de octubre de 1973, en que compañía trabajan los acusados, en que compañía trabajan los soldados, entre otros, José Raúl Inzunza Reyes, Libardo Schwartenski Rubio y el testigo reservado. Sería ilógico que el Tribunal imputara responsabilidad por ejemplo al personal de la compañía morteros, el trabajo de coherencia y sistematización es lo que corresponde frente a la prueba ofrecida en el proceso.

D.5. Respecto de las acusaciones particulares y adhesiones el Tribunal lo resolverá en los considerandos posteriores.

E. En cuanto a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal y beneficios de la ley 18.216. El Tribunal lo razonará en los considerandos posteriores.

F. Prueba del plenario: A fs. 6.269 (Tomo XVIII), el abogado Luis Mencarini Neumann, en representación del acusado Pedro Tichauer Salcedo, presento los siguientes documentos: **a)** copia simple de Bando N°5 de la Intendencia de la Provincia de Cautín, de fecha 11 de septiembre de 1973, que en lo pertinente 1. “Se designa a las siguientes personas para que con el carácter de Interventor asuman de inmediato la administración de los Servicios de Utilidad Pública que (ilegible) e) Agencia... TTE de Ejército Pedro Tichauer”. **b)** Bando N°130 de la Intendencia Militar de Cautín, de fecha 16 de noviembre de 1973, el que en su punto 2. Reseña: “Nombrase, a contar desde esta fecha, Interventor Militar del Instituto de Desarrollo Indígena (I.D.I.), al señor Teniente (E), don Pedro Tichauer Salcedo, quien asumirá de inmediato sus funciones”. **c)** Bando N°146, de fecha 10 de diciembre de 1973, refiere que: “Vistos y Teniendo Presente: Que el señor Interventor Militar del Instituto De Desarrollo Indígena (IDI) deberá asumir nuevas funciones que le impedirán continuar en el citado cargo; y En uso de las facultades que se me han conferido. Ordeno: 1.- Déjese sin efecto el Bando N°130, en su Punto 2.- de 16 de noviembre de 1973, que designó Interventor Militar del Instituto de Desarrollo Indígena (IDI) al señor Teniente (E) don Pedro Tichauer Salcedo”. **d)** Bando N°147 de la Intendencia Militar de Cautín de fecha 13 de diciembre de 1973, que crea una comisión fiscalizadora de pago de bonificaciones, nombrándose en la letra a). - Representante de las FF. AA y de Carabineros, TTE de Ejército don Pedro Tichauer Salcedo, que la presidirá”.

F.1. En relación con esta prueba presentada por la defensa del acusado Tichauer, en nada disminuyen lo acreditado en el auto acusatorio, en los hechos y

calificación establecidos en este fallo. Toda vez que, se refieren a bandos, los tres últimos a fechas noviembre y diciembre de 1973. En cuanto al primero se refiere al 11 de septiembre de 1973, en este caso a diferencia de lo que expone la defensa da cuenta que el acusado Tichauer (como ya además se demostró), no era un profesional de finanzas y contable que está en una oficina a puerta cerradas, sino que integraba diferentes comisiones para la mantención del regimiento Tucapel, y como en este caso fue nombrado interventor.

G. Solicitud de sobreseimiento parcial o definitivo: La defensa en su escrito de contestación a la acusación luego de presentar excepciones de previo y especial pronunciamiento, solicita el sobreseimiento parcial y definitivo de su representado, argumentos que fueron reseñados precedentemente.

G.1. A fs. 6.074 (Tomo XVII), con fecha 21 de agosto de 2023, el Tribunal dio traslado a los querellantes de autos.

G.2. A fs. 6.085 y siguientes (Tomo XVII) el abogado David Morales Troncoso, en representación de querellantes de autos evacuó traslado, esbozando que, si bien la defensora trata de hacer ver que el acusado Tichauer se desempeñaba en funciones administrativas y de Intendencia, para solicitar los sobreseimientos de su defendido, lo cierto es que existirían diversas declaraciones que sitúan al acusado en el lugar y tiempo en que ocurrieron los hechos que se ventilan en el proceso. Citando declaraciones de José Heriberto Mansilla Gatica y las propias declaraciones del acusado, sumado a las de Héctor Omar Barra Reyes, de las que se desprendería que ante la gran cantidad de detenidos los oficiales colaboraban en los interrogatorios, inclusive también lo hacían con personal de la policía de investigaciones, por lo que se puede presumir que efectivamente el oficial Tichauer participaba de los interrogatorios, teniendo pleno conocimiento de la ocurrencia de los ilícitos que allí se cometían, por lo que tal solicitud debe ser rechazada.

G.3. A fs. 6.088 y siguientes (Tomo XVII), el abogado Ricardo Lavín Salazar, en representación de querellante de autos, evacuó traslado solicitando se rechace la solicitud de sobreseimiento definitivo y parcial respecto del Pedro Tichauer Salcedo, por las siguientes razones: **A)** Consideraciones previas: Que la solicitud planteada por la defensa se resume en sostener la inocencia de su representado haciendo un análisis parcializado de la prueba allegada al proceso. Hace presente que el reclamo de justicia de las víctimas de violación de derechos

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

humanos no puede ser desatendida por el Estado, de ahí que no valgan amnistía, prescripción, indulto cualquiera otra forma que pretenda otorgar impunidad. Actuar en contrario acarrearía responsabilidad internacional del Estado de Chile debido a la suscripción y ratificación de tratados internacionales sobre la materia. **B)** Fuentes normativas que persiguen y sancionan los crímenes de lesa humanidad: arguye en lo pertinente a la consagración del derecho de gentes y su aceptación, que permite considerar que existía, a la época de los hechos un sistema de protección de derechos, obligatorios para el Estado de Chile, independiente del consentimiento expreso de las naciones vinculadas y que se conoce como las reglas imperativas de derecho internacional o ius cogens, reproduciendo el artículo 53 de la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados. Que tales patrones se imponen a los Estados y prohíben los crímenes de lesa humanidad, incluso durante el desarrollo de conflictos de carácter internacional o internos. Que así se ha establecido en la Resolución 60/147, de 21 de marzo de 2006, lo que reseña, apoyándose en jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema al efecto. **C)** Crímenes de guerra: Invoca los Convenios de Ginebra, citando que son claros e iluminadores al respecto, y al momento de la ejecución de los hechos de autos, se encontraban plenamente vigentes en atención a la incorporación que el derecho chileno llevó a cabo mediante su ratificación el año 1950 y publicado al año siguiente, por lo que eran aplicables, en tal sentido alude a jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema. **D)** Respecto de la solicitud de sobreseimiento definitivo y parcial respecto del acusado Pedro Tichauer Salcedo en conformidad al artículo 408 N°3 del Código de Procedimiento Penal: Transcribe el artículo 408 N°3 del texto legal y señala “que el auto acusatorio se dictó con fecha 17 de junio de 2022 a fs. 4.252 y siguientes y que no fue apelado por la defensa del acusado”, quedando firme la resolución de procesamiento. Que en su escrito la defensa hace un análisis parcializado de lo que fue el golpe militar, en ningún caso menciona que estaba en tiempo de guerra y tampoco aporta nuevos antecedentes que permitan establecer la inocencia de su representado. También se debe considerar el artículo 420 del Código de Procedimiento Penal el que copia, fundando que la solicitud figura como extemporánea ya que habla de la inocencia del procesado y no acusado. Hace presente, que es preciso considerar que este secuestro con grave daño tiene su principio de ejecución en un contexto de violaciones a los derechos humanos grave, masiva y sistemática, cometidas por

agentes del Estado de Chile, según lo declaró la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, precisando normas internacionales y jurisprudencia al respecto.

G.4. A fs. 6.100 (Tomo XVII), el habilitado en derecho Leonel Arriagada Sanzana, en representación de querellante de autos evacua el traslado y musita que se desestimen la petición de sobreseimiento formulada por la defensa del acusado Pedro Guillermo Tichauer Salcedo, dada que la aludida petición es improcedente en el caso pues se está en presencia de crímenes de lesa humanidad.

G.5. En cuanto a la petición de sobreseimiento parcial o definitivo, el Tribunal estará a lo que latamente ha expuesto, relacionado, argumentado, contra argumentado y ponderado en relación con toda la prueba del proceso, las indagatorias del acusado, su escrito de contestación y sus pruebas agregadas al proceso. Puntualizando que, a estas alturas del fallo han quedado determinados los hechos, la calificación del delito y la participación del acusado Pedro Tichauer Salcedo. Los fundamentos del sobreseimiento se basan en argumentos similares en el escrito de fondo de la contestación, esto es, por su cargo el acusado Tichauer no tendría responsabilidad en los hechos. Todos los argumentos de contra argumentación y sus reflexiones en relación con lo peticionado por la defensa este Tribunal lo reproduce. Ahora bien, se suma a lo anterior lo razonado por los abogados querellantes en cuanto en un análisis integral de toda la prueba acompañada al proceso y de las declaraciones indagatorias del acusado, no es posible dar lugar a dicha solicitud, toda vez que, el resultado apunta a que existió el delito de secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, y en ese delito le ha correspondido participación en calidad de cómplice al acusado Pedro Guillermo Tichauer Salcedo.

H. Calificación final: Atendido el mérito de los antecedentes y los argumentos de la defensa, el Tribunal mantiene la calificación que ha dado precedentemente en esta sentencia y además se ha dado en el auto acusatorio, esto es, **cómplice** del delito secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, en su carácter de lesa humanidad.

41°) En cuanto a la defensa de Raimundo Ignacio García Covarrubias

Que haciéndonos cargos de la defensa de **fs. 5.576 y siguientes (Tomo XVI)**, interpuesta por el abogado Luis Hernán Núñez Muñoz, en representación de Raimundo Ignacio García Covarrubias, el Tribunal estará a lo antes razonado, respecto a la ponderación de las declaraciones indagatorias del acusado y todos los fundamentos pertinentes que se han dado respecto a la relación y valoración de la prueba general y específica, en especial lo que se detalló y ponderó con precisión en el título de las consideraciones generales para las defensas. En relación con esta defensa se precisa lo siguiente:

A. Excepciones de previo y especial pronunciamiento: La defensa pudiendo hacerlo no interpuso excepciones de previo y especial pronunciamiento de conformidad al artículo 433 N°6 y 433 N°7 del Código de Procedimiento Penal.

B. Sobre tachas de testigos y objeciones de documentos: La defensa no realizó tachas a testigos en los términos que exige el artículo 492 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, ni tampoco objeto ningún documento en particular.

C. Excepciones de fondo: La defensa alega como excepción de fondo la prescripción de la acción penal según alega que corresponde que se sobresea definitivamente el presente proceso por ser procedente la prescripción sobre los hechos investigados, según lo dispone el artículo 107 del Código de Procedimiento Penal, por cuanto han transcurrido casi cincuenta años desde la fecha del delito. Indicando el artículo 94 y 97 del Código Penal. Que en relación con su representado y de conformidad a lo que se trasunta del proceso no concurre ninguno de los presupuestos que el artículo 96 del Código Penal pueda hacer interrumpir o suspender la prescripción de la acción penal, lo que se desprendería claramente de autos sin necesidad de certificación especial.

C.1. En cuanto a esta excepción de **prescripción de la acción penal**, el Tribunal reitera que del mérito de proceso el delito que se le imputa al acusado Raimundo Ignacio García Covarrubias, en calidad de cómplice, atentan contra los derechos humanos, entendiéndose por estos, aquellos que son inherentes a la persona humana y son anteriores al Estado. Este Tribunal ha establecido que

corresponden a delitos de lesa humanidad y tiene como uno de sus fundamentos el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Almonacid Arellano y otros versus Chile, de 26 de septiembre de 2006, que entre sus considerandos sostiene en el párrafo 114) que: “La Corte estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otra normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder prescripción de la acción penal”. En consecuencia, esta excepción de prescripción de la acción penal **se rechaza** y así se dirá en lo resolutivo del fallo.

D. Este Tribunal insiste en lo expresado respecto del anterior acusado, que se explica a continuación:

D.1. Contestación a la acusación- absolución: Sobre esta materia se estará a lo ponderado y razonado latamente con anterioridad respecto a toda la prueba incorporada en relación con el acusado Raimundo García Covarrubias. Como se expresó, la defensa olvida la situación que se vivía para septiembre de 1973, se había quebrantado el orden constitucional y el poder político lo había asumido las fuerzas armadas. En este caso, no se trata de algo general, sino que se trata de hechos vividos en la comuna de Temuco, en un lugar específico que es el regimiento Tucapel, tal como se dijo con anterioridad el acusado no era un simple soldado, sino que era un oficial en el cargo de subteniente en la compañía de plana mayor y servicios. El asunto es, como se ha relacionado y ponderado ampliamente, es decir los soldados, personas de menor rango y subordinados dan cuenta de los hechos que estaban sucediendo, detenciones, torturas, ejecución y en especial el testigo reservado. Por lo que no resulta verosímil que un oficial de la compañía plana mayor y servicios no tuviera conocimiento de estos hechos. Además, es el propio acusado quien indica sus funciones para la época de los hechos: se encontraba encuadrado en la compañía plana mayor y servicios, cumplía con la instrucción de los soldados conscriptos de la compañía, estaba a cargo de los servicios de guardia del regimiento Tucapel. En este sentido se hace presente a la defensa, los comentarios sobre la jurisprudencia alemana sobre delitos de lesa humanidad de los autores Gerhard Werle y Boris Burghardt. En efecto, en la sentencia de la sala especial del Landgericht de 1950 contra Huber Go-merski y Johann Klier se dice con claridad ejemplar: “El campo Sobibór fue

creado con el solo fin de dar muerte a un gran número de judíos”. La sala sigue: “Todos quienes trabajaban en ese campo –alemanes, ucranianos y judíos– tenían su tarea particular, sea que hayan participado inmediatamente de los homicidios o que hayan apoyado indirectamente las tareas del campo. Todas estas actividades fueron en último término causales para el resultado –la muerte de los judíos–, pues sólo por haber existido este conjunto de actividades fue posible el resultado”. Esta argumentación la mantuvo la sala especial del Landgericht incluso para el Klier, quien hizo valer irrefutablemente que el solamente había trabajado en la panadería del campo y luego habría dirigido el comando de los zapatos (Schuhkommando), que se dedicaba a recolectar, seleccionar y almacenar los zapatos de los asesinados en las cámaras de gas. La sala especial del Landgericht hizo nuevamente hincapié en que “todas las personas que trabajaban en el campo de Sobibór eran engranajes de un sistema que tenía por única finalidad matar a judíos. Toda acción que se llevó a cabo en ese campo servía directa o indirectamente a ese fin. Todas esas acciones fueron necesarias para la operación del campo. De este modo, tanto la actividad del acusado Klier en la panadería como la actividad que tuvo a cargo de los zapatos fueron causales para el resultado”. Que del mismo modo dieciséis años después, en el gran proceso de Sobibór, la sala especial del Landgericht tampoco dudó en clasificar como colaboraciones promotoras del resultado a aquellas que no estaban directamente vinculadas con la operación de exterminio, como por ejemplo el trabajo como tesorero o administrador del campo, o como responsable del abastecimiento de víveres y vestuario del personal del campo. La sentencia dijo sobre este punto: “Allí donde ellos [los acusados] formaban parte de la organización de los campos, [...] todos contribuyeron a hacer posible, por su colaboración funcional, los asesinatos masivos contra los judíos, siendo su causa y promoviéndolos en inmediata cercanía al hecho”. El Tribunal Federal alemán confirmó esa argumentación en cuanto conoció de la revisión de esas sentencias. (Sobre la complicidad en matanzas ocurridas en campos de exterminio nacionalsocialistas (el caso Demjanjuk en el contexto de la jurisprudencia de la República Federal Alemana) Werle, Gerhard; Burghardt, Boris. Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2016). Asimismo, el autor Claus Roxin, precisa que: “Es difícilmente imaginable que quien actúa en un campo de concentración hubiera podido considerar que el asesinato de personas completamente inocentes resultaba

conforme al derecho. Pero incluso de haber sido éste el caso – por ejemplo, debido a la autoría estatal, una semejante “ceguera jurídica” no habría merecido ninguna disminución de la pena. En el caso que aquí se discute el acusado tampoco invocó un error de prohibición. Más bien, en sus “alegatos de conclusión” ante el tribunal de instancia (Tribunal Regional de Lüneburg) reconoció lo siguiente: “Auschwitz fue un lugar en el que no se podía participar. Sinceramente me arrepiento de no haber llevado antes este conocimiento a la práctica.” (“Complicidad en el asesinato por medio del servicio en el campo de concentración de Auschwitz” páginas 189-209 del libro “Desarrollos actuales de las ciencias criminales en Alemania- Segunda y tercera escuela de verano en ciencias criminales y dogmática penal alemana” del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano). Como se ha reiterado en la citada jurisprudencia por los autores alemanes, todas estas actividades contribuyeron a que se realicen los actos ilícitos en el regimiento Tucapel y en este caso el secuestro con grave daño de las víctimas de esta causa. En esa línea se le indica a la defensa que estamos en la sede del derecho internacional de los derechos humanos, se trata de delitos de lesa humanidad los que para su investigación y juzgamiento tienen estándares normativos e interpretativos diferentes a la delincuencia común, como se ha explicado latamente. En esa línea también se le hace presente, que en la compañía de plana mayor funcionaba también las dependencias de fiscalía militar y la oficina a cargo del oficial Nelson Ubilla. En muchos párrafos de la defensa se dedican a reproducir el auto acusatorio y nuevamente a relatar los hechos, al contrario de lo que expone la defensa el punto fundamental es la actividad que se estaba desarrollando en el regimiento Tucapel por los agentes del Estado. En este caso por la compañía de plana mayor y servicios. La complicidad como se ha reiterado tiene que ver con esa cooperación y colaboración a toda esta estructura de detención, torturas y ejecución de civiles. Lo que resulta sorprendente de la defensa es que un soldado o varios soldados dan cuenta de una serie de hechos ilícitos y los oficiales en este caso García Covarrubias, quien además estaba a cargo de la instrucción entre otras materias, no tenga conocimiento de lo que estaba sucediendo, lo que es contrario a los propios principios del régimen militar, esto es, de jerarquización y obediencia. En la misma línea la defensa no puede responsabilizar a otros soldados de rango menor respecto de lo que sucedía en la compañía de plana mayor y servicios.

D.2. No constituye fundamento alguno de absolución, el que el Tribunal no haya imputado a otros miembros del regimiento Tucapel responsabilidad en estos hechos, por esta materia muchos oficiales se encuentran fallecidos entre ellos Pablo Iturriaga Marchesse, Luis Jofré Soto, Nelson Ubilla Toledo. Por otro lado, como consta en la certificación de fs. 6.630 y siguientes (Tomo XX), muchos miembros del regimiento Tucapel ya han sido condenado por otros hechos, y en tercer lugar no resulta lógico y sistemático que se impute responsabilidad penal de cómplice a otras compañías donde no se tomaban declaración, no se practicaba la torturas, no trabajaba el testigo reservado.

D.3. Respecto al reposo de la ulcera duodenal que acredita mediante copia simple de hoja de vida de fs. 1.437 (Tomo V), en nada lo exime de responsabilidad de los hechos que se han establecido en este fallo y en el auto acusatorio. Igualmente, no lo exime de responsabilidad los dichos de Juan Carrillo y Sergio Concha, quienes respecto de los hechos nada dicen. Toda la explicación que realiza respecto a las funciones que cumplía el capitán Nelson Ubilla en la compañía de plana mayor y servicios, en nada lo desligan de su responsabilidad de estos hechos. En especial por lo que dice la propia defensa. En efecto el acusado realizaba instrucción a los soldados y efectuaba un recorrido. Además, lo han reiterado varios testigos en este fallo no se trataba de algo clandestino, los detenidos y las torturas eran a vista y presencia de muchas personas, lo mismo en el caso del testigo reservado, en relación a los retiros de los cadáveres de la isla Cautín.

D.4. En cuanto los conceptos de fiscalía militar, sección segunda u patrulla brava, lo que se realiza en el auto acusatorio y en el establecimiento de los hechos de este fallo, es mostrar un diagnóstico y un patrón de las actividades que realizaban los agentes del Estado para detener, torturar y ejecutar. Es decir, era un ambiente totalmente contrario a derecho. La defensa trata de presentar al acusado Raimundo García Covarrubias como si fuera un simple soldado, que fue a realizar una simple actividad y a su alrededor estaba todo normal y no sucedía nada. Sobre Raimundo García Covarrubias, cabe puntualizar además como ya se dijo precedentemente que cumplía con la instrucción de los soldados conscriptos de la compañía plana mayor y servicios, estaba a cargo de los servicios de guardia del regimiento Tucapel, lo que se ratifica con lo expuesto por los soldados: Juan Humberto Carrillo Rebolledo, a fs.1.533 a fs.1.534 (Tomo V), manifestó que:

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

“en abril de 1973 paso a la compañía de plana mayor cuyo comandante era el capitán Nelson Ubilla Toledo (...). A mediados de 1973 se hizo cargo de su sección el teniente Raimundo García Covarrubias”. Enrique Abzalón Castro Obrequé, quien a fs. 2.582 a fs. 2.583 (Tomo VIII), comunico: “en lo pertinente en la compañía de plana mayor y servicios, la que estaba al mando del capitán Nelson Ubilla Toledo, quien dejó ese cargo el día 11 de septiembre asumiendo el mando el teniente Raimundo García Covarrubias, quien subrogó al mencionado capitán”. Juan Isaías Zurita Alarcón, a fs. 1.445 (Tomo V), afinsa que: “el teniente Raimundo García Covarrubias algunas veces sacaba algunos conscriptos de madrugada o en la noche para participar en actividades que desconoce”.

D.5. No se trata como esboza la defensa que específicamente ninguna víctima relacione a su defendido, en primer lugar, porque esas víctimas los ocho jóvenes secuestrado con grave daño, no se sabe dónde están sus cuerpos. En segundo lugar, se reitera una vez más que al acusado García Covarrubias no se le acusa como autor, se le acusa como cómplice con las ponderaciones y relaciones citadas precedentemente en conformidad a la investigación de delitos de lesa humanidad. Asimismo, se tiene presente el artículo 488 del Código Procedimiento Penal, en cuanto reitera el Tribunal que se cumplen sus requisitos y a modo de ejemplo se tiene presente lo señalado por la Excelentísima Corte Suprema en su considerando 14: “Que, los hechos reseñados precedentemente, desprendidos de las piezas procesales que en cada caso se ha indicado, son reales, desde que ocurrieron en determinado lugar y tiempo y están probados, esto es, acreditados legalmente en los autos a través de los medios probatorios detallados en el motivo precedente. Son hechos reales y probados, ha explicado esta Corte Suprema, “los indicios de cualquier género, el dicho de un testigo hábil o de varios inhábiles, la opinión de un perito singular, la declaración extrajudicial y otras semejantes, siempre que ellas formen parte del mérito de autos” (SCS,14.12.1967, R., t. 65. Secc. 4ª, p. 71). En cuanto a que son múltiples esos hechos, tal requisito está al margen del cuestionamiento dado su pluralidad respecto de cada uno de los encartados”. (Rol N° 65.358-2021 de fecha 09 de julio de 2024).

D.6. La referencia que hace la defensa a una serie de soldados se contrapone de lo que dicen otra serie de soldados respecto de Raimundo García Covarrubias, entre ellos Ernesto García Isla, a fs.1.361 a fs.1.363 (Tomo IV), manifestó en lo oportuno: “que perteneció a la compañía plana mayor y servicios

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

que en ese entonces estaba a cargo del capitán Nelson Ubilla Toledo (...). Agrega que los detenidos estaban a cargo de un grupo especializado denominado servicio de inteligencia regional, compuesto por los oficiales Nelson Ubilla Toledo, Manuel Espinoza Ponce, Jaime García Covarrubias, Raimundo García Covarrubias y los funcionarios de planta Orlando Moreno Vásquez, el suboficial de apellido Atala y el cabo primero Bahamondes, quienes interrogaban a los detenidos". Jorge Luis Godoy Valdebenito, a fs. 1.423 a fs. 1.425 (Tomo V), narró que: "el subteniente Raimundo García, en un principio fue una persona muy amable y no se quiso meter con los detenidos, pero después fue influenciado por su hermano y cambió su conducta. Posteriormente, ambos participaban en los interrogatorios de los detenidos en la dependencia de la banda del regimiento". Libardo Hernán Schwartenski Rubio a fs. 1.784 a fs. 1.785 (Tomo VI), expreso que: "recuerda al teniente Jaime García Covarrubias y a su hermano Raimundo. Dice que estos oficiales siempre andaban juntos. En una oportunidad pudo ver al teniente Jaime García y al subteniente Raimundo García al interior de la sala donde se torturaban personas en la compañía de plana mayor y servicios". Raúl Cerda Aguilef, quien a fs.1.660 a fs. 1.662 (Tomo V), declaró que: "A cargo de los interrogatorios de estos detenidos, había un grupo de oficiales, suboficiales y civiles. Entre los oficiales recuerda al capitán Nelson Ubilla Toledo, a los tenientes Jaime García Covarrubias y Alejandro Rubio Valladares y a los subtenientes Raimundo García Covarrubias, Manuel Espinoza Ponce, y Carlos Oviedo Arriagada". Víctor Manuel Terán Vásquez a fs. 1.737 a fs. 1.739 (Tomo V), preciso que: "Según recuerda cuando se ingresaban detenidos a esa sala, se les ordenaba que hicieran abandono de esa cuadra y siempre vio ingresar a dicho lugar al capitán Nelson Ubilla Toledo, a los tenientes Jaime y Raimundo García Covarrubias y Manuel Espinoza Ponce. Agrega que estos oficiales eran los encargados de interrogar a los detenidos en dicho lugar y también de torturar, ya que "vez que los veía ingresar con detenidos se comenzaban a escuchar los gritos de dolor de las personas desde esa sala". Pedro Misael Elgueta Muñoz a fs. 1.754 a fs. 1.756 (Tomo V), señaló: "Que los oficiales a cargo de los detenidos eran Nelson Ubilla Toledo, Jaime y Raimundo García Covarrubias, Manuel Espinoza Ponce, Manuel Vásquez Chahuán y Alejandro Rubio Valladares. Que estos oficiales eran ayudados por los sargentos y clases de la compañía de plana mayor y servicios, más algunos soldados conscriptos". Juan José Salgado Goyeneche a fs. 1.793 a

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

fs. 1.797 (Tomo VI), sostuvo que: “participaban en los interrogatorios de detenidos los tenientes Vásquez Chahuán, Jaime Covarrubias y Raimundo García Covarrubias. Esto le consta porque era comentario generalizado en el regimiento (...), que supo de la existencia de una sala de interrogatorios en la cuadra de la compañía de plana mayor, que él no participó de esos interrogatorios, pero se comentaba que los oficiales Jaime García, Raimundo García, Nelson Ubilla Toledo, Vásquez Chahuán y Rubio Balladares interrogaban a los prisioneros que estaban en el regimiento Tucapel”. Orlando Moreno Vásquez en declaración de fs. 3.842 (Tomo XI), expreso: “Que los oficiales Jaime García Covarrubias, Raimundo García Covarrubias, Manuel Vásquez Chahuán, Nelson Ubilla Toledo y en general todo el resto debieron necesariamente saber acerca de la existencia de detenidos en el regimiento y el destino final de estos, porque ellos tenían cargos de responsabilidad y recibían instrucciones directas del Comandante Iturriaga, quien tenía el control y el conocimiento de todo lo que ocurría en la unidad”.

D.7. La defensa cita la declaración del soldado Juan Salgado Goyeneche, sobre este punto solo cabe mencionar el certificado de fs. 6.630 y siguientes (Tomo XX), donde se da cuenta de los hechos ocurridos en un periodo de tiempo en el regimiento Tucapel, lo que desvirtúa plenamente los dichos. Ahora los dichos García Isla y Andres Pacheco Cárdenas, en nada disminuyen los cargos formulados en contra del acusado. A diferencia de lo expone la defensa los dichos de Ernesto Garcia Isla de fs.1.361 a fs. 1.363 (Tomo IV): “los detenidos estaban a cargo de un grupo especializado denominado servicio de inteligencia regional, compuesto por los oficiales Nelson Ubilla Toledo, Manuel Espinoza Ponce, Jaime García Covarrubias, Raimundo García Covarrubias y los funcionarios de planta Orlando Moreno Vásquez, el suboficial de apellido Atala y el cabo primero Bahamondes, quienes interrogaban a los detenidos. Por lo general, era en una sala que estaba en el pabellón que albergaba a las compañías de plana mayor y servicios, y compañía morteros, a un costado de los baños de la compañía”, confirman lo que estableció el Tribunal, toda vez que, quienes interrogaban a los detenidos era un grupo especializado entre ellos el acusado Raimundo García. Lo mismo acontece con lo expone la defensa respecto de las declaraciones de Jorge Godoy Valdebenito a fs. 232 a fs. 235 (Cuaderno secreto): “los interrogaban en una sala ubicada dentro de las dependencias de la compañía de plana mayor y servicios. En esta dependencia existía dos catres y cuatro máquinas generadoras

de corriente dispuestas para ser accionadas en contra de los detenidos por motivos políticos que eran trasladados por el grupo señalado precedentemente hasta esta verdadera sala de tortura; lugar donde también fue torturado en una oportunidad por el sargento Arias”. En el mismo sentido las declaraciones de Luis Eduardo Manríquez Figueroa de fs. 2.730 a fs. 2.731 (Tomo VIII): “que efectivamente existía una sala al interior de su compañía donde se ingresaban personas detenidas, quienes generalmente eran trasladadas ahí con la vista vendada, se rumoreaba mucho que en dicha sala se interrogaba a los detenidos bajo la aplicación de tortura, incluso se decía que a los detenidos se les aplicaba corriente (...) que a esta sala siempre veía ingresar a algunos oficiales del regimiento como el capitán Ubilla y los hermanos Garcia, junto con ellos también el sargento Santiesteban y el cabo Figueroa (...)el hecho es que se sabía que ellos frecuentemente ingresaban a esta sala cuando había detenidos”. Y de José Raúl Inzunza Reyes de fs. 2.741 a fs. 2.743 (Tomo VIII): “su desempeño como soldado conscripto fue en la compañía de plana mayor y servicios (...) Deja claro que integró el grupo de soldados que participaba en labores con detenidos, cuando los soldados Scxhwartensky, Chávez y Valeria, fueron enviados al curso de inteligencia en la región Metropolitana (...) En relación a las labores que pasó a cumplir, señala que estas tenían que ver con el trato con los detenidos que llegaban a la unidad militar, labores que estaban a cargo del capitán Nelson Ubilla Toledo, y el sargento Mario Arias quienes se hacían apoyar por dos detectives, recordando solamente a Quiroz. Ratificando sus dichos en el sentido que estos funcionarios interrogaban a los detenidos bajo aplicación de tortura, la que consistía en golpe y corriente, al interior de una sala ubica en la compañía de plana mayor y servicios, a la cual ingresaban también otros oficiales como el teniente Jaime García Covarrubias y un suboficial de apellido Silva”. No es ninguna ambigüedad e imprecisión lo que revelan estos soldados, esto es que los interrogatorios y las torturas no eran nada clandestino, tenían conocimiento los oficiales y por supuestos los oficiales de la compañía de plana mayor y servicios.

D.8. Por otro lado, lo que trata de argumentar la defensa que había diferentes actividades en el regimiento Tucapel, entrada y salida de vehículos con detenidos diferentes horarios y que la sección segunda cargo de capitán Nelson Ubilla trabajaba en actividades diferente a las compañías, toda esa argumentación se derrumba por las mismas declaraciones que la defensa cita, esto es, que

habían detención, que había torturas, que habían interrogatorios en la compañía de plana mayor y servicios. En consecuencia, el acusado no pudo exonerarse de responsabilidad en estos hechos.

D.9. Como conclusión, habría que indicar que la defensa no logra derribar el auto acusatorio y no logra captar el concepto de complicidad en estos hechos, en cuanto: “que la conducta del cómplice ha de ser peligrosa de manera que, desde una perspectiva ex -ante represente un incremento relevante de las posibilidades de éxito del autor y con ello la de puesta en peligro o lesión del bien jurídico. Ello ocurrirá cuando, en el momento previo a la acción del cómplice, sea previsible que, con su aportación, la comisión del delito sea más rápida, más segura o fácil o el resultado lesivo más intenso que sin ella. Se distingue entonces: 1) Naturaleza de la cooperación. Dolosa, pero basta la idea que el auxilio facilite o haga más expedita la ejecución. Incluso el simple auxilio intelectual o moral es suficiente. 2) Momento de la cooperación. Actos anteriores o simultáneos. 3) Aprovechamiento de la cooperación por parte del autor. Que se haya servido efectivamente de ella”. En el mismo sentido, los fallos dictados por el Ministro Hernán Crisosto Greisse, en Causa Rol 2182-98 “episodio Operación Colombo”, Víctima “Francisco Aedo y otros” donde condenó a 106 ex agentes de la DINA y episodio “Sergio Arturo Flores Ponce” donde fueron 76 los exagentes condenados.

E. En cuanto a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal y beneficios de la ley 18.216. El Tribunal lo razonará en los considerandos posteriores.

F. Prueba del plenario: analizado el expediente y el término probatorio, la defensa no ofreció ningún medio de prueba para sustentar su pretensión.

F.1. Sin embargo, revisado el expediente por el Tribunal, el acusado durante su declaración indagatoria de fs. 1.438 (Tomo V) acompañó copia simple de hoja de vida la que consta a fs. 1.437 (Tomo V) en el que se señala que: “Hoja de Vida del STE. (O.A) Raimundo Ignacio García Covarrubias, desde el 1 de agosto de 1973 hasta el 31 de julio de 1974, 15 X 973 anotaciones da parte de enfermo, Diagnostico úlcera duodenal”.

F.2. Ese elemento probatorio de acuerdo con los hechos establecidos en este fallo, en nada disminuye la responsabilidad penal que se le hace al acusado García Covarrubias, toda vez que, refiere a fecha diferente a los hechos de este proceso.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

G Sobreseimiento definitivo: en relación con esta materia el Tribunal, hace presente que al revisar el escrito de la defensa tanto en la suma como los petitorios no refieren a la solicitud de sobreseimiento. Sin embargo, en el cuerpo del escrito de la defensa al finalizar sus alegatos sobre la prescripción del delito y haciendo referencia al secuestro, enuncia se dicte el sobreseimiento definitivo.

G.1. Que una relación circunstanciada, relacionada y ponderada de todos los medios de prueba allegados al proceso, el Tribunal mantiene los razonamientos dados anteriormente y su calificación expuesta en esta sentencia y además se ha dado en el auto acusatorio, esto es, **cómplice** del delito secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, en su carácter de lesa humanidad. En consecuencia, se **rechaza el sobreseimiento** pedido y así se dirá en lo resolutivo de este fallo.

H. Calificación final: Atendido el mérito de los antecedentes y los argumentos de la defensa, el Tribunal mantiene la calificación que ha dado precedentemente en esta sentencia y además se ha dado en el auto acusatorio, esto es, **cómplice** del delito secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, en su carácter de lesa humanidad.

42°) En cuanto a la defensa de Romilio Osvaldo Lavín Muñoz

Que haciendo cargo de la defensa de **fs. 5.923 y siguientes (Tomo XVII)**, del abogado Rodrigo Cortés Carrasco, en representación de Romilio Lavín Muñoz, el Tribunal estará a lo antes razonado, respecto a la ponderación de las declaraciones indagatorias del acusado y todos los fundamentos pertinentes que se han dado respecto a la relación y valoración de la prueba general y específica, en especial lo que se detalló y ponderó con precisión en el título de las consideraciones generales para las defensas. En relación con esta defensa el Tribunal razona lo siguiente:

A. Excepciones de previo y especial pronunciamiento: La defensa interpuso como excepciones de previo y especial pronunciamiento del artículo 433

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

N°4 y N°7 del Código de Procedimiento Penal, las que ya fueron analizadas y falladas a fs. 6.080 a fs. 6.082 (Tomo XVII) con fecha 22 de agosto de 2023.

B. Sobre las tachas de testigos y objeciones de documentos: La defensa pudiendo haberlo hecho, no presentó ninguna tacha a los testigos, en los términos que exige el artículo 492 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. De la misma forma, no objetó ningún documento en particular.

C. Excepciones de fondo. La defensa alego como excepción de fondo la del artículo 433 numeral 7° del Código de Procedimiento Penal, prescripción de la acción penal, se apoya en el artículo 94 del Código Penal, en cuanto a los plazos de prescripción, artículos 48 del Código Civil y artículo 95 del Código Penal. Que los hechos investigados habrían ocurrido en septiembre de 1973, habiendo entonces transcurrido a la fecha más de 49 años, encontrándose prescrita la acción penal, conforme a los artículos 94, 95 y 96 del Código Penal. Que los hechos no se enmarcan en el tipo penal de detención ilegal y secuestro con grave daño en carácter de lesa humanidad. Que no todo delito de detención ilegal y secuestro con grave daño es o reviste los caracteres de lesa humanidad. Por cuanto, esta clase de ilícitos están constituidas por acciones generalizadas o sistemáticas contra la población civil, requiere para el agente una planificación metódica y una organización y planificación previa. Que el hecho de autos al no ser lesa humanidad debe considerarse legalmente prescrito.

C.1. Analizando esta excepción de fondo no hay nada nuevo que la defensa haya agregado y permita al Tribunal razonar de una manera distinta a esta excepción de **prescripción de la acción penal**, tal como ya lo ha desarrollado en resolución de fs. 6.080 a fs. 6.082 (Tomo XVII), con fecha 22 de agosto de 2023, en cuanto esta fue rechazada. Toda vez, que la jurisprudencia sobre esta materia no ha cambiado y se ha mantenido de forma sistemática y robusta en el tiempo. Del mismo modo el Tribunal ha establecido que corresponden a delitos de lesa humanidad y lo reitera para esta defensa, el delito que se le imputa al acusado Romilio Osvaldo Lavín Muñoz, en calidad de cómplice, atentan contra los derechos humanos, entendiéndose por estos, aquellos que son inherentes a la persona humana y son anteriores al Estado. Asimismo, se tiene como fundamentos el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Almonacid Arellano y otros versus Chile, de 26 de septiembre de 2006, que entre sus considerandos sostiene en el párrafo 114) que: “La Corte

estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otra normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder prescripción de la acción penal”. En consecuencia, esta excepción de prescripción de la acción penal **se rechaza** y así se dirá en lo resolutivo del fallo.

D. Contestación de la acusación. Sin perjuicio del resumen que ya se hizo del auto acusatorio, cabe precisar en el caso del acusado Romilio Osvaldo Lavín Muñoz, lo siguiente:

D.1. En cuanto a la supuesta complicidad en los delitos que se le imputan, sobre esta materia el Tribunal estará a todos y cada uno de los razonamientos y ponderaciones que en materia de complicidad se han hecho respecto de los demás acusados. En este punto y en conformidad al artículo 16 del Código Penal, la cooperación debe realizarse e interpretarse de conformidad a los delitos de lesa humanidad, en esta materia reproducimos nuevamente la jurisprudencia alemana de los autores Gerhard Werle y Boris Burghardt. En efecto, en la sentencia de la sala especial del Landgericht de 1950 contra Huber Go-merski y Johann Klier se dice con claridad ejemplar: “El campo Sobibór fue creado con el solo fin de dar muerte a un gran número de judíos”. La sala sigue: “Todos quienes trabajaban en ese campo –alemanes, ucranianos y judíos– tenían su tarea particular, sea que hayan participado inmediatamente de los homicidios o que hayan apoyado indirectamente las tareas del campo. Todas estas actividades fueron en último término causales para el resultado –la muerte de los judíos–, pues sólo por haber existido este conjunto de actividades fue posible el resultado”. Esta argumentación la mantuvo la sala especial del Landgericht incluso para el Klier, quien hizo valer irrefutablemente que el solamente había trabajado en la panadería del campo y luego habría dirigido el comando de los zapatos (Schuhkommando), que se dedicaba a recolectar, seleccionar y almacenar los zapatos de los asesinados en las cámaras de gas. La sala especial del Landgericht hizo nuevamente hincapié en que “todas las personas que trabajaban en el campo de Sobibór eran engranajes de un sistema que tenía por única finalidad matar a judíos. Toda acción que se llevó a cabo en ese campo servía directa o indirectamente a ese fin. Todas esas acciones fueron necesarias para la operación del campo. De este modo, tanto la actividad del acusado Klier en la panadería como la actividad que tuvo a cargo de

los zapatos fueron causales para el resultado”. Que del mismo modo dieciséis años después, en el gran proceso de Sobibór, la sala especial del Landgericht tampoco dudó en clasificar como colaboraciones promotoras del resultado a aquellas que no estaban directamente vinculadas con la operación de exterminio, como por ejemplo el trabajo como tesorero o administrador del campo, o como responsable del abastecimiento de víveres y vestuario del personal del campo. La sentencia dijo sobre este punto: “Allí donde ellos [los acusados] formaban parte de la organización de los campos, [...] todos contribuyeron a hacer posible, por su colaboración funcional, los asesinatos masivos contra los judíos, siendo su causa y promoviéndolos en inmediata cercanía al hecho”. El Tribunal Federal alemán confirmó esa argumentación en cuanto conoció de la revisión de esas sentencias. (Sobre la complicidad en matanzas ocurridas en campos de exterminio nacionalsocialistas (el caso Demjanjuk en el contexto de la jurisprudencia de la República Federal Alemana) Werle, Gerhard; Burkhardt, Boris. Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2016). Asimismo, el autor Claus Roxin, precisa que: “Es difícilmente imaginable que quien actúa en un campo de concentración hubiera podido considerar que el asesinato de personas completamente inocentes resultaba conforme al derecho. Pero incluso de haber sido éste el caso – por ejemplo, debido a la autoría estatal, una semejante “ceguera jurídica” no habría merecido ninguna disminución de la pena. En el caso que aquí se discute el acusado tampoco invocó un error de prohibición. Más bien, en sus “alegatos de conclusión” ante el tribunal de instancia (Tribunal Regional de Lüneburg) reconoció lo siguiente: “Auschwitz fue un lugar en el que no se podía participar. Sinceramente me arrepiento de no haber llevado antes este conocimiento a la práctica.” (Complicidad en el asesinato por medio del servicio en el campo de concentración de Auschwitz” páginas 189-209 del libro “Desarrollos actuales de las ciencias criminales en Alemania- Segunda y tercera escuela de verano en ciencias criminales y dogmática penal alemana” del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano).

D.2. En este punto además hay que señalar tanto de sus declaraciones indagatorias como lo que expone la defensa, este acusado ostentaba el grado de subteniente de la compañía plana mayor y servicios, siendo el oficial más antiguo de la compañía por especialidad, su posición de encuadramiento legal era de logística, asignado como oficial de material de guerra del regimiento, luego indica

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

el propio acusado ser el encargado de la alimentación de los oficiales y de mantenimiento; y refiere haber sido encargado de una sección de treinta conscriptos con tres clases en la instrucción de preparación de los soldados. De tal forma que, el Tribunal reitera lo mismo que con los demás acusados (en especial con lo expuesto para lo acusado Raimundo García Covarrubias), Romilio Lavín cooperaba a que los hechos delictivos puedan producirse, haciendo la siguiente reflexión, no es posible que se le impute responsabilidad algún miembro de otra compañía por ejemplo cazadores, o bien que el mando superior se desligue de los hechos sucedidos imputándoselos a los soldados o personas de menor rango. En la lectura de todo el proceso se desprende con nitidez y así además quedó establecido en los hechos de este fallo, que en el regimiento Tucapel hubo personas detenidas las cuales eran interrogadas tanto en la fiscalía militar como en la oficina del oficial Nelson Ubilla, habitaciones que quedaban en la compañía de plana mayor y servicios, donde todos los acusados trabajaban y en el caso de los oficiales eran integrantes. Los detenidos no solamente eran interrogados, sino que sufrieron torturas y como en este caso fueron ejecutados. Estas actuaciones penalmente reprochables no fueron secretas ni clandestinas, fueron realizadas a vista y paciencia de muchos integrantes de la compañía de plana mayor, como ha quedado demostrado en la relación y ponderación de la prueba testimonial. En consecuencia, no aparece sostenible y plausible que la oficialidad de la compañía de plana mayor y servicios se desligue sobre los hechos investigados en esta causa.

D.3. La defensa cita la ley 20.537, es una cita errada por cuanto dicha ley refiere: "Sobre el uso e izamiento del pabellón patrio". Ahora bien, se desprende de sus dichos que alude a la ley 20.357 que "Tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra", en ese sentido lo que esta ley dice en su artículo 44 es: "Los hechos de que trata esta ley, cometidos con anterioridad a su promulgación, continuarán rigiéndose por la normativa vigente a ese momento. En consecuencia, las disposiciones de la presente ley sólo serán aplicables a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior a su entrada en vigencia", es decir, hechos a futuro y esto sucedió 1973. Luego para conocer estos hechos se rige por el estatuido del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

D.4. Del mismo modo, no es efectivo lo que señala la defensa en cuanto a la participación del acusado Romilio Lavín se haya determinado con su sola confesión, basta leer la ponderación y relación de la prueba para darse cuenta de que existen múltiples pruebas para determinar los hechos, su calificación y la participación del acusado Romilio Lavín Muñoz. Se hace presente a la defensa que se cumplen los requisitos del artículo 488 del Código Procedimiento Penal, y a modo de ejemplo se transcribe lo señalado por la Excelentísima Corte Suprema en su considerando 14: “Que, los hechos reseñados precedentemente, desprendidos de las piezas procesales que en cada caso se ha indicado, son reales, desde que ocurrieron en determinado lugar y tiempo y están probados, esto es, acreditados legalmente en los autos a través de los medios probatorios detallados en el motivo precedente. Son hechos reales y probados, ha explicado esta Corte Suprema, “los indicios de cualquier género, el dicho de un testigo hábil o de varios inhábiles, la opinión de un perito singular, la declaración extrajudicial y otras semejantes, siempre que ellas formen parte del mérito de autos” (SCS,14.12.1967, R., t. 65. Secc. 4ª, p. 71). En cuanto a que son múltiples esos hechos, tal requisito está al margen del cuestionamiento dado su pluralidad respecto de cada uno de los encartados”. (Rol N° 65.358-2021 de fecha 09 de julio de 2024).

E. En cuanto a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal y beneficios de la ley 18.216: El Tribunal se referirá a ellas en los considerandos posteriores.

F. Prueba del plenario: analizado el expediente y el término probatorio, la defensa no ofreció ningún medio de prueba para sustentar su pretensión.

G. Calificación final: Atendido el mérito de los antecedentes y los argumentos de la defensa, el Tribunal mantiene la calificación que ha dado precedentemente en esta sentencia y además se ha dado en el auto acusatorio, esto es, **cómplice** del delito secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, en su carácter de lesa humanidad.

ACUSACIONES PARTICULARES

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

43°) A fs. 4.735 a fs. 4.743 (Tomo XIV), el abogado Ricardo Lavín Salazar, en representación de la Unidad Programa de Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos formula acusación particular en contra de Luis Robinson Bustos Letelier, Oscar Alfonso Podlech Michaud, Pedro Guillermo Manuel Tichauer Salcedo, Raimundo Ignacio García Covarrubias y Romilio Osvaldo Lavín Muñoz. **a)** Establecimiento de los hechos constitutivos del delito que motiva la acusación particular: el querellante da por reproducidos los hechos señalados en la acusación fiscal, la calificación jurídica del ilícito y la participación de los acusados en los delitos de detención ilegal y secuestro con grave daño. **b)** Calificación jurídica de los ilícitos y participación que se les imputa a los acusados: afinca que de lo razonado por el Tribunal en los apartados N°61 y N°62 del auto acusatorio, se desprenden cargos fundados para estimar que Luis Robinson Bustos Letelier, le ha cabido participación en calidad de autor del delito de detención ilegal, y a los acusados Oscar Alfonso Podlech Michaud, Pedro Guillermo Manuel Tichauer Salcedo, Raimundo Ignacio García Covarrubias y Romilio Osvaldo Lavín Muñoz, considera que se desprenden cargos fundados para estimar, que les ha cabido participación en calidad de cómplices del delito de secuestro con grave daño, cometidos en las personas de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, conforme lo dispuesto en los artículos 148 y 141 inciso tercero en relación con el inciso primero del Código Penal, respectivamente. **c)** Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal: estima pertinente evaluar la concurrencia de circunstancias agravantes del numeral 8 del artículo 12 del Código Penal respecto de todos los acusados, toda vez que de los antecedentes que obran se desprende que quienes llevaron adelante la comisión de estos hechos, ostentaban la calidad de funcionarios públicos, buscando total impunidad para la ejecución de sus actos, reproduce doctrina al respecto y señala tres fundamentos que harían procedente la aplicación de la agravante: primero, aduce que la agravante del artículo 12N°8 del Código Penal, es una circunstancia versátil que permite considerarse tanto para posibilitar la comisión del delito, facilitarla o bien procurar impunidad. Segundo, es aplicable por lo que los delitos de lesa humanidad no requieren de un sujeto activo calificado. Es decir, el carácter de público del imputado no se

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

requiere ni para satisfacer el elemento contextual ni forma parte de las figuras penales de detención ilegal ni de secuestro calificado. Tercero, alude al Estatuto de Roma, dentro de sus Reglas de Procedimiento y Prueba por cuanto considera como agravante el abuso de poder o del cargo de oficial, en la regla 145 (2) (b) (ii). Enuncia fallos al efecto y expresa que existiendo civiles que participaron en crímenes de lesa humanidad, demuestra que este tipo de crímenes no es exclusivo de los agentes del Estado. Por lo que solicita se considere la aplicación de esta agravante a los acusados antes referidos. **d)** Sobre la no aplicación de la atenuante de irreprochable conducta anterior: funda que los acusados Oscar Alfonso Podlech Michaud, Pedro Guillermo Manuel Tichauer Salcedo, Raimundo Ignacio García Covarrubias y Romilio Osvaldo Lavín Muñoz, eventualmente podrían ser favorecidos por la atenuante de responsabilidad penal del artículo 11 N°6 del Código Penal, considerando que al momento de cometidos los hechos no tenían antecedentes penales, sin embargo hace presente que los acusados estuvieron prestando colaboración continua en el regimiento Tucapel, a partir del 11 de septiembre de 1973 en el contexto de la dictadura militar, lo que se desprendería de sus propias declaraciones las que enuncia y arguye que los inculpados se encuentran acusados en causa rol 113.089 por los delitos de apremios ilegítimos y homicidio calificado lo que constaría en sus extracto de filiación y antecedentes, lo que daría cuenta de su compromiso criminal durante su paso por el regimiento Tucapel. Acota que a la época de los hechos se encontraba vigente la Constitución de 1925 transcribiendo el artículo tercero, concluyendo que los acusados no cuentan con irreprochable conducta anterior, desde el momento que transgreden gravemente lo dispuesto por la Constitución, vigente a la época de consumación de los hechos, apoyando en jurisprudencia. **e)** Pena que solicita: solicita imponer a los acusados Luis Robinson Bustos Letelier, la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, por el delito de detención ilegal, más las accesorias legales y a Oscar Alfonso Podlech Michaud, Pedro Guillermo Manuel Tichauer Salcedo, Raimundo Ignacio García Covarrubias y Romilio Osvaldo Lavín Muñoz, la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, por el delito de secuestro con grave daño, más las accesorias legales, considerando en particular una serie de factores que reseña en cuanto al tipo penal, etapa de ejecución del delitos, participación de los acusados, circunstancias agravantes, atenuantes y en consideración al artículo 69

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

del Código Penal y 509 del Código de Procedimiento Penal se considere la reiteración de los delitos de detención ilegal y secuestro con grave daño, considerando la extensión de mal causado a las víctimas y a los familiares, así como la naturaleza de lesa humanidad.

44°) A fs. 4.814 a fs. 4.851 (Tomo XIV), el abogado Sebastián Saavedra Cea, en representación de los querellantes de autos, formula acusación particular en contra de Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, Pedro Guillermo Manuel Tichauer Salcedo, Raimundo Ignacio García Covarrubias, Romilio Osvaldo Lavín Muñoz y Luis Robinson Bustos Letelier. **a)** Establecimiento de los hechos constitutivos del delito que motiva la acusación particular: reproduce parte de la acusación fiscal desde el numeral 33) al 60). **b)** Calificación jurídica: advierte que los hechos reseñados constituyen los delitos de secuestro con grave daño, en carácter de reiterado de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, previsto y sancionado en el artículo 141 inciso tercero del Código Penal, en su texto vigente a la fecha de los hechos, en su carácter de lesa humanidad, ilícito ocurrido entre fines de septiembre e inicios de octubre de 1973. Considerando que lo razonado por el Tribunal, se desprenden cargos fundados para estimar que a Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, Pedro Guillermo Manuel Tichauer Salcedo, Raimundo Ignacio García Covarrubias y Romilio Osvaldo Lavín Muñoz, les ha cabido participación en calidad de cómplice del delito antes referido. De la misma forma comparte la calificación de Luis Robinson Bustos Letelier en cuanto se le acusa como autor de delito de detención ilegal, en carácter de reiterado de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt. **c)** Circunstancias que deben influir en la aplicación de las penas: solicita considerar la agravante relacionadas con el delito de secuestro con grave daño, a saber, circunstancias 8ª y 11ª del artículo 12 del Código Penal, toda vez que quienes llevaron adelante la comisión de este hecho ostentaban la calidad de funcionarios públicos y lo realizaron con auxilio de gente armada, circunstancia que además les aseguraba la impunidad a los acusados en la ejecución de estos. En relación con

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

la detención ilegal solicita considerar la circunstancia 11ª del artículo 12 del Código Penal. Añade doctrina en relación con el artículo 12 N°8 y al N°11 del texto punitivo, requiriendo se aplique a los acusados la pena de quince años de presidio mayor en su grado medio para los cómplices del delito de secuestro con grave daño, y de cinco años en su grado máximo para el autor del delito de detención ilegal, acotando los elementos de aplicación de las penas.

45°) A fs. 4.903 a fs. 4.940 (XIV), el abogado Sebastián Saavedra Cea, en representación de querellantes de autos Aguayo Olavarría, formula acusación particular en contra de Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, Pedro Guillermo Manuel Tichauer Salcedo, Raimundo Ignacio García Covarrubias, Romilio Osvaldo Lavín Muñoz y Luis Robinson Bustos Letelier. **a)** Establecimiento de los hechos constitutivos del delito que motiva la acusación particular: transcribe acusación fiscal en sus numerales 33) al 60). **b)** Calificación jurídica de ilícito: esgrime que los hechos reseñados en esta etapa procesal, constituyen los delitos de secuestro con grave daño, en carácter de reiterado de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, previsto y sancionado en el artículo 141 inciso tercero del Código Penal, vigente a la época de los hechos en su carácter de lesa humanidad, ilícito ocurrido entre fines de septiembre e inicios de octubre de 1973. Considera que de lo razonado por el Tribunal se desprenden cargos fundados para estimar que a Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, Pedro Guillermo Manuel Tichauer Salcedo, Raimundo Ignacio García Covarrubias y Romilio Osvaldo Lavín Muñoz, les ha cabido participación en calidad de cómplices del delito de secuestro con grave daño en carácter de reiterado de las víctimas de autos. Asimismo, en cuanto a la calificación de Luis Robinson Busto Letelier en calidad de autor del delito de detención ilegal en carácter de reiterado de las víctimas presentemente indicadas. **c)** Circunstancias que deben influir en la aplicación de las penas: destaca se considere la concurrencia de las agravantes relacionadas con el delito de secuestro con grave daño circunstancias 8ª y 11ª del artículo 12 del Código Penal, por cuanto se desprende de los antecedentes que quienes llevaron adelante la comisión de este hecho ostentaban la calidad de funcionarios públicos y lo realizaron con auxilio de gente armada, circunstancia que además, les aseguraba

la impunidad a los acusado en la ejecución, atañe doctrina en relación a las agravantes peticionadas y requiere la aplicación de pena de quince años de presidio mayor en su grado medio para los cómplices del delito de secuestro con grave daño, y de cinco años de presidio menor en su grado máximo para el autor del delito de detención ilegal, describiendo a los elementos que hacen posible tal aplicación.

46°) Que del análisis de las acusaciones particulares de fs. 4.735 a fs. 4.743 (Tomo XIV), del abogado Ricardo Lavín Salazar; de fs. 4.814 a fs. 4.851 y de fs. 4.903 a fs. 4.940 (Tomo XIV), del abogado Sebastián Saavedra Cea, se observa que todas cumplen con los requisitos del artículo 424 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Ahora bien, analizadas dichas acusaciones se ciñen a los hechos y la calificación jurídica que ha realizado el Tribunal. La diferencia estriba en la petición de agravantes para los acusados, y que no se aplique determinada atenuante, las que serán analizadas con posterioridad.

47°) Que revisados los escritos de contestación de las defensas, en primer lugar no existe ningún otrosí en que se refieran específicamente a las acusaciones particulares. De la misma forma, en las peticiones concretas al término de las contestaciones, tampoco existe alguna solicitud específica respecto de las acusaciones particulares. Lo que realizan las defensas son observaciones generales, en todo caso si tenían alguna objeción pudieran haberlas realizado a través de las impugnaciones pertinente durante el proceso. Finalmente, a diferencias de lo que exponen las defensas, las acusaciones cumplen con la forma y contenido que exige el Código de Procedimiento Penal. En consecuencia, el Tribunal no tiene nada más que analizar.

ADHESIONES A LA ACUSACIÓN

48°) A fs. 4.952 a fs. 4.986 (Tomo XIV), los abogados Manuel Alejandro Lisboa Cordero y Juan Carlos Hernández Vidal, en representación de la querellante de autos se adhieren a la acusación fiscal de fs. 4.600 a fs. 4.662 de fecha 18 de noviembre de 2022, solicitando se condene a los acusados a las máximas penas legales por los delitos cometidos, a la accesorias que correspondan y al pago de costas de la causa, transcribiendo los numerales 61) al 64) de la acusación fiscal.

49°) A fs. 5.007 a fs. 5.035 (Tomo XIV), el abogado David Morales Troncoso, en representación de los querellantes de autos se adhiere a la

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

acusación fiscal de fs. 4.600 a fs. 4.662 de fecha 18 de noviembre de 2022, contra los exfuncionarios, de carabineros y ejército de Chile.

50°) A fs. 5.061 a 5.083 (Tomo XIV), el abogado José Luis Neira Vejar, en representación de la querellante de autos, se adhiere a la acusación fiscal.

51°) Que haciéndonos cargo de las adhesiones a la acusación fiscal, el Tribunal sobre esta materia nada tiene que reflexionar, toda vez que, se han adherido expresamente a la acusación fiscal de fs. 4.600 a fs. 4.662 (Tomo XIII).

REFLEXIONES SOBRE LESA HUMANIDAD

52°) Para mayor ilustración y atendido además que se ha alegado la prescripción gradual del artículo 103 del Código Penal, que se analizará más adelante, es necesario reflexionar sobre el delito de lesa humanidad.

Que profundizando el origen y concepto del delito de lesa humanidad para un adecuado análisis de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal y determinación de la pena, cabe citar la sentencia Almonacid Arellano y otros versus Chile, de fecha 26 de septiembre de 2006 puntualizando lo siguiente:

Párrafo 94. El desarrollo de la noción de crimen de lesa humanidad se produjo en los inicios del siglo pasado. En el preámbulo del Convenio de la Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre de 1907. Asimismo, el término “crímenes contra la humanidad y la civilización” fue usado por los gobiernos de Francia, Reino Unido y Rusia el 28 de mayo de 1915 para denunciar la masacre de armenios en Turquía.

Párrafo 95. El asesinato como crimen de lesa humanidad fue codificado por primera vez en el artículo 6.c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg. Poco después, el 20 de diciembre de 1945, la Ley del Consejo de Control No. 10 también consagró al asesinato como un crimen de lesa humanidad en su artículo II.c. De forma similar, el delito de asesinato fue codificado en el artículo 5.c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional para el juzgamiento de los principales criminales de guerra del Lejano Oriente (Estatuto de Tokio), adoptada el 19 de enero de 1946.

Párrafo 96. Estatuto de Nuremberg jugó un papel significativo en el establecimiento de los elementos que caracterizan a un crimen como de lesa humanidad. Así constituyen actos inhumanos, como el asesinato, cometidos en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Basta que un solo acto ilícito como los antes mencionados sea cometido dentro del

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

contexto descrito, para que se produzca un crimen de lesa humanidad. En este sentido se pronunció el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia en el caso *Prosecutor v. Dusko Tadic*, al considerar que “un solo acto cometido por un perpetrador en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil trae consigo responsabilidad penal individual, y el perpetrador no necesita cometer numerosas ofensas para ser considerado responsable. **Todos estos elementos ya estaban definidos jurídicamente cuando el señor Almonacid Arellano fue ejecutado.**

Párrafo 98. La prohibición de crímenes contra la humanidad, incluido el asesinato, fue además corroborada por las Naciones Unidas. El 11 de diciembre de 1946 la Asamblea General confirmó “los principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y las sentencias de dicho Tribunal.

A. Que como ya se ha dicho, por tratarse de un delito de lesa humanidad y no común, sobre esta materia el Tribunal tiene presente lo que en forma reiterada la Excm. Corte Suprema ha manifestado que hechos, como los investigados en esta causa y por los cuales se ha dictado acusación, que corresponden a **detención ilegal y secuestro con grave daño**, es un delito de tal magnitud que deben ser **imprescriptibles**. Asimismo, dicho ilícito es de aquellos que la doctrina reconoce como de **lesa humanidad** y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14 N°1 y 15 N°2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambos ratificados por Chile, tienen plena vigencia en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que son imprescriptibles e inamnistiables.

B. Que a modo de ilustración, por este Tribunal reiteradamente se ha pronunciado en las siguientes causa sobre de delito de lesa humanidad: 27.525; 27.526; 45.345; 113.990; 113.989; 18.780; 29.877; 45.344; 45.371; 45.342; 29.869; 27.527; 114.001; 113.986; 63.541; 45.363; 114.048; 10.868-P; 114.003; 10.851; 10.854; 45.359; 54.035; 63.535; 45.343; 57.071; 113.997; 45.354; 45.361; 114.000; 4-2010; 45.362; 114.007; 114.042; 113.996; 29.879; 45.365; 45.367; 44.305.

C. Cabe también hacer presente, que el mismo fallo *Almonacid Arellano y otros versus Chile* dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 26 de septiembre de 2006, en su párrafo 119, al analizar el Decreto Ley de

Amnistía 2.191 y en lo pertinente manifiesta que “las leyes de amnistía con las características descritas (es decir, como la chilena) conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad de los crimines de lesa humanidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana e indudablemente afectan derechos consagrados en ella. Ello constituye per se una violación de la Convención y genera responsabilidad internacional del Estado. En consecuencia, dada su naturaleza, el Decreto Ley N°2.191 carece de efectos jurídicos y no puede seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos, que constituyen este caso, ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puede tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en Chile”.

D. Sobre la misma materia del delito de lesa humanidad, cabe recordar lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso ya señalado, **“Almonacid Arellano y otros versus Chile”**, en que reitera, a propósito de las leyes de amnistía, entre otros aspectos la doctrina centrada en la sentencia caso **“Barrios Altos versus Perú”** de 14 de marzo de 2001, en cuanto la incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención Americana de Derechos Humanos. En lo pertinente, el fallo “Almonacid Arellano y otros versus Chile” afirma lo anterior en los siguientes párrafos: 82.5, 82.6, 82.7, 111 y en especial en el párrafo 119 donde la Corte expresa que las leyes de amnistía, como la chilena, conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana y afectan los derechos consagrados en ella. Ello constituye per se una violación de la convención y genera responsabilidad general del Estado, agregando que el Decreto Ley 2.191, carece de efectos jurídicos y no puede seguir representando un obstáculo para las investigaciones de los hechos, ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puede tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en Chile. En la misma línea, para sostener como lo ha hecho la Excm. Corte Suprema y este Tribunal, la Corte Interamericana en el fallo aludido manifestó lo siguiente:

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

82.5. La época más violenta de todo el período represivo corresponde a los primeros meses del gobierno de facto. De las 3.197 víctimas identificadas de ejecuciones y desapariciones forzadas que ocurrieron en todo el gobierno militar, 1.823 se produjeron en el año 1973. Por su parte, “el 61% de las 33.221 detenciones que fueron calificadas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, corresponde a detenciones efectuadas en 1973”. Esta misma Comisión señaló que “más del 94% de las personas que sufrieron prisión política” dijeron haber sido torturadas por agentes estatales.

82.6. Las víctimas de todas estas violaciones fueron funcionarios destacados del régimen depuesto y connotadas figuras de izquierda, así como sus militantes comunes y corrientes; jefes y dirigentes políticos, sindicales, vecinales, estudiantiles (de enseñanza superior y media) e indígenas; representantes de organizaciones de base con participación en movimientos de reivindicaciones sociales. “Muchas veces [las] relaciones políticas se deducían de la conducta „conflictiva” de la víctima en huelgas, paros, tomas de terrenos o de predios, manifestaciones callejeras, etc.” Las ejecuciones de estas personas “se insertan dentro del clima reinante [...] de hacer una “limpieza” de elementos juzgados perniciosos por sus doctrinas y actuaciones, y de atemorizar a sus compañeros que podían constituir una eventual “amenaza”. No obstante, en la época inicial de la represión existió un amplio margen de arbitrariedad a la hora de seleccionar a las víctimas.

82.7. En lo que se refiere a las ejecuciones extrajudiciales –crimen cometido en el presente caso, por lo general, las muertes fueron de personas detenidas y se practicaban en lugares apartados y de noche. Algunos de los fusilamientos al margen de todo proceso fueron, sin embargo, fulminantes y se efectuaron al momento de la detención. [...] En las regiones del sur [del país] la persona, sometida ya al control de sus captores, [era] ejecutada en presencia de su familia”.

E. En el mismo sentido cabe también hacer presente, que el **fallo pronunciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con fecha 15 de noviembre de 2021, en caso Maidanik y Otros Vs. Uruguay**, mediante la cual declaró la responsabilidad internacional de la República Oriental del Uruguay (en adelante “el Estado” o “Uruguay”) por las violaciones a distintos derechos humanos, en perjuicio de Luis Eduardo González González y Óscar Tassino

Asteazu, víctimas de desapariciones forzadas que principiaron durante la dictadura que sufrió Uruguay entre 1973 y 1985, así como de sus familiares, desatándose los siguientes párrafos:

Párrafo 206: ...“en relación tanto con actos de desaparición forzada como respecto a otras graves violaciones a derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, en la misma oportunidad este Tribunal señaló que “es incompatible con las obligaciones internacionales de un Estado Parte en la Convención que éste deje de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos que por su naturaleza sean **imprescriptibles**, en perjuicio del derecho de las víctimas de acceso a la justicia, amparándose en una situación de impunidad que sus propios poderes y órganos hayan propiciado”...

Párrafo 211: “El Estado debe asegurar que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes ex officio, contando, para ese cometido, con las facultades y recursos necesarios²³⁹, inclusive logísticos y científicos, para recabar y procesar las pruebas, así como para acceder plenamente a la documentación e información pertinente y para llevar a cabo las actuaciones y averiguaciones esenciales para esclarecer lo sucedido a las personas desaparecidas y a las víctimas de ejecución extrajudicial”.

Párrafo 246: “La **Corte** recuerda que, al decidir sobre el caso Gelman Vs. Uruguay determinó que “la Ley de Caducidad carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos”. Por ello, dispuso que “el Estado deberá asegurar que [dicha ley] no vuelva a representar un obstáculo [...] para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de [...] graves violaciones de derechos humanos [...] acontecidas en Uruguay”.

Párrafo 251: “Considerando lo anterior, la Corte entiende necesario recordar al Estado que: cuando un Estado es Parte en un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, también están sometidos al tratado, lo cual les obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas

contrarias a su objeto y fin, de modo que decisiones judiciales o administrativas no hagan ilusorio el cumplimiento total o parcial de las obligaciones internacionales. Es decir, todas las autoridades estatales, están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. [...]. Por el solo hecho de ser Parte en la Convención Americana, todas sus autoridades públicas y todos sus órganos, incluidas las instancias democráticas, jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, están obligados por el tratado, por lo cual deben ejercer, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, un control de convencionalidad tanto en la emisión y aplicación de normas, en cuanto a su validez y compatibilidad con la Convención, como en la determinación, juzgamiento y resolución de situaciones particulares y casos concretos, teniendo en cuenta el propio tratado y, según corresponda, los precedentes o lineamientos jurisprudenciales de la Corte Interamericana”.

F. En consecuencia, cabe reflexionar lo siguiente:

F.1. La lesa humanidad nos remite a lo más profundo de la mujer y del hombre, puesto que sostiene todos nuestros valores. Además es una verdadera exigencia social y civilizadora.

F.2. La lesa humanidad modela nuestro habitar. Sensibiliza nuestro marco de acción.

F.3. La lesa humanidad insufla, canaliza, transforma y dinamiza nuestro Derecho. Dotándolo de nuevas herramientas y concepciones. Le fija los límites infranqueables ante los cuales mujeres y hombres deben actuar y detenerse.

F.4. La lesa humanidad como un muro invencible, rechaza con toda fuerza la irracionalidad y arbitrariedad.

F.5. La lesa humanidad vence, derrota a la prescripción (en el más amplio sentido), a las simples legalidades del Derecho penal liberal (prescripción, tipos, participación, penas), puesto que, no tienen la capacidad de resolver esos dilemas jurídicos y sociales.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

F.6. La Lesa humanidad es la conciencia robusta de la humanidad. Nos muestra el ideal de mujer y hombre, de humanidad.

F.7. La lesa humanidad, con una resonancia infinita, atraviesa todo el universo jurídico y nos sitúa en lugar correcto y verdadero. Esto es, como honestamente debe funcionar nuestra convivencia en la sociedad.

G. Que también es relevante para esta causa, lo que señala dicha Corte Interamericana en relación a la jurisdicción militar, **párrafo 131**, donde la Corte indica que “El Tribunal ha establecido que en un Estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas Militares. Por ello, sólo se debe juzgar a Militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. Al respecto, la Corte ha dicho que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso”, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia”. Se hace presente que en ese proceso no consta además, que la Justicia Militar hubiere siquiera iniciado alguna investigación sobre estos hechos, lo que revela la actitud del Estado de mantener la impunidad sobre el delito investigado en esta causa.

H. Cabe puntualizar que en el caso de “**Hilario Barrios Varas**” (**causa rol 25.657-14 de la Excma. Corte Suprema**), en los considerandos cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno se dan todos los elementos que ha descrito la Excma. Corte Suprema, esto es, en síntesis, una represión generalizada del régimen de la época, una hiperseguridad al margen de toda condición de la persona humana, una conformidad con la impunidad de los actos cometidos por los agentes estatales, además, con el amedrentamiento a la población civil. Lo cierto es que los hechos calzan con lo que la Corte interamericana de Derechos Humanos, en el caso citado, lo que ha fallado en forma robusta la Excma. Corte Suprema y este Ministro Visitador, por lo que corresponde sin duda a un delito de lesa humanidad. **Delitos que son imprescriptibles.**

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE RESPONSABILIDAD PENAL

53°) Eximentes de responsabilidad penal

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

A. Que a fs. 5.576 y siguientes (Tomo XVI) el abogado Luis Hernán Núñez, en representación de **Raimundo Ignacio García Covarrubias**, alega eximentes de responsabilidad penal artículo 10 N°10 del Código Penal.

B. Que a fs. 5.923 y siguientes (Tomo XVII) el abogado Rodrigo Cortes Carrasco, en representación de **Romilio Osvaldo Lavín Muñoz**, alega eximentes de responsabilidad penal del artículo 10 N° 10 del Código Penal.

54°) Análisis del Tribunal: Que en relación con la eximente del **artículo 10 N°10** del Código Penal, solicitada por las defensas de los acusados **Raimundo Ignacio García Covarrubias y Romilio Osvaldo Lavín Muñoz**, cabe hacer presente que dicha eximente consiste en: “el que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo”. Según el estudio detallado y minucioso de los hechos probados, es posible concluir que nadie obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho para cometer un delito de lesa humanidad, en especial tomando consideración lo dicho por Claus Roxin en cuanto que “**no existen causales de exculpación**”. Sobre todo, no viene en consideración el estado de necesidad como consecuencia de una orden. Con mayor razón no se puede hablar de un error de prohibición exculpante. **Es difícilmente imaginable que quien actúa en un campo de concentración hubiera podido considerar que el asesinato de personas completamente inocentes resultaba conforme al derecho**. Pero incluso de haber sido éste el caso – por ejemplo, debido a la autoría estatal –, una semejante “ceguera jurídica” no habría merecido ninguna disminución de la pena. En el caso que aquí se discute los acusados tampoco invocaron un error de prohibición”. En consecuencia, **esta eximente es rechazada**.

55°) Atenuantes de responsabilidad penal

A. Que a fs. 5.731 y siguientes (Tomo XVI) el abogado Alfonso Eduardo Podlech Delarze, en representación de **Oscar Alfonso Podlech Michaud** alega como atenuantes de responsabilidad penal el artículo 11 N°6 y el artículo 103 del Código Penal.

B. Que a fs. 5.683 y siguientes (Tomo XVI) la abogada Karen Valenzuela Jerez, en representación de **Pedro Guillermo Tichauer Salcedo**, alega como atenuantes de responsabilidad penal el artículo 11 N°6 y N°9, asimismo el artículo 103 del Código Penal.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

C. Que a **fs. 5.576 y siguientes (Tomo XVI)** el abogado Luis Hernán Núñez Muñoz, en representación de **Raimundo Ignacio García Covarrubias**, alega como atenuantes de responsabilidad penal el artículo 11 N° 6 y N° 8, y artículo 103 del Código Penal. De la misma forma invoca el artículo 211 del Código de Justicia Militar.

D. Que a **fs. 5.923 y siguientes (Tomo XVII)** el abogado Rodrigo Cortes Carrasco, en representación de **Romilio Osvaldo Lavín Muñoz**, alega como atenuante de responsabilidad penal el artículo 11 N°1, N°6 y N°9 y artículo 103 del Código Penal. Además, plantea el artículo 211 del Código de Justicia Militar.

56°) ANÁLISIS DEL TRIBUNAL

A. En relación con la atenuante del **artículo 11 N°1** del Código Penal: Analizada la circunstancia atenuante del artículo 11 N°1 del Código Penal solicitada por las defensas del acusado **Romilio Osvaldo Lavín Muñoz**, se reflexiona lo siguiente: la defensa no desarrollo cuales serían los requisitos faltantes para concretar esta atenuante con relación al artículo 10 del Código Penal. En consecuencia, **esta atenuante se rechaza.**

B. En relación a la atenuante del **artículo 11 N°6** del texto antes citado: Examinada la circunstancia atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal, solicitadas por las defensas de Oscar Alfonso Podlech Michaud, Pedro Guillermo Tichauer Salcedo, Raimundo Ignacio García Covarrubias y Romilio Osvaldo Lavín Muñoz, se reflexiona lo siguiente: **Se da lugar a esta minorante, en calidad de simple, por no existir mérito para otra calificación**, ya que a los acusados les favorece esta minorante, toda vez que de sus extractos de filiación y antecedentes citados al inicio de este fallo, se puede observar que no tenían antecedentes penales pretéritos, todos a la época de los hechos, esto es, entre fines de septiembre e inicio de octubre de 1973. Se califica de simple porque razonar de otra manera en relación con cualquier persona que reside en Chile, se incurriría en una discriminación arbitraria, puesto que solo los que pueden acceder a educación, formación y perfeccionamiento se les califica; pero los que no puede hacer eso (que hay muchas personas en Chile) no se les podría calificar, lo que sin duda constituye una discriminación sobre la materia. De esta forma el Tribunal se hace cargo de lo peticionado por los querellantes en cuanto a que no se aplicara esta minorante.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

C. En relación con la atenuante del **artículo 11 N°8** del Código Penal: Analizada esta minorante solicita por la defensa del acusado Raimundo Ignacio García Covarrubias, el Tribunal razona lo siguiente; prescribe esta minorante lo siguiente: “si pudiendo eludir la acción de justicia por medio de la fuga o ocultándose, se ha denunciado y confesado el delito”; que en conformidad al mérito del proceso y toda la prueba relacionado y ponderada no se reúnen los requisitos de esta minorante, ni tampoco son desarrollados en detalle por la defensa. En todo caso concurrir a la citación del Tribunal es una obligación de cada ciudadano y no se observa que el acusado García Covarrubias haya denunciado y confesado el delito. Por lo anterior, esta minorante es **rechazada**.

D. En relación con la atenuante del **artículo 11 N° 9** del Código Punitivo. Analizada esta minorante solicita por las defensas de los acusados Pedro Guillermo Tichauer Salcedo y Romilio Osvaldo Lavín Muñoz, el Tribunal razona lo siguiente: que **no se dará lugar** a la atenuante solicitada por las defensas, toda vez que como se ha razonado precedentemente en la ponderación y relación integral de toda la prueba del proceso, no es posible sostener que dichos acusados hayan colaborado sustancialmente a los esclarecimientos de los hechos, en realidad ha sido todo lo contrario, han pasado más de 50 años y con otros elementos probatorios, no con los dichos de estos procesados se ha logrado determinar los hechos y la participación de los responsables. En consecuencia, **no se hace lugar** a la atenuante solicitada por los acusados antes mencionados.

E. En relación con el **artículo 211 del Código de Justicia Militar**: Que respecto de esta minorante solicitada por las defensas de los acusados Raimundo Ignacio García Covarrubias y Romilio Osvaldo Lavín Muñoz, el Tribunal reflexiona lo siguiente: Esta alegación no puede ser acogida. En efecto, no se trata de la ejecución de la orden del servicio si no que se trata de la comisión de un delito de lesa humanidad, en este caso, secuestro con grave daño. Sobre la aplicación de esta atenuante en los delitos de lesa humanidad, podemos mencionar, entre otras, la **causa rol N° 95096-16**, de la Excm. Corte Suprema, quien en su considerando 5° expresa: “Que en subsidio solicitó se considerara que en el caso de autos concurren las circunstancias eximentes de los artículos 211, 214, 334 y 335 del Código de Justicia Militar, denominadas “obediencia debida” y “cumplimiento de órdenes recibidas por un superior jerárquico”, las que no pueden ser acogidas, pues respecto de los mandatos del superior jerárquico dentro de una institución

militar -de Ejército de Chile en este caso-, aparece de los hechos del proceso que la conducta de los acusados obedece a la materialización de sus propios designios, sin perjuicio de la situación de impunidad que el contexto imperante les proporcionaba, idea que se ha desarrollado en los apartados precedentes. Por ello esta defensa no puede ser atendida, pues dada la especial modalidad en que se cometió el delito, no hay antecedentes precisos de que éste haya sido el resultado del cumplimiento de una orden de carácter militar, presupuesto básico para alegar el cumplimiento del deber militar". Asimismo, **causa Rol N° 38766-2017**, quien en su considerando 26° señala: "Que en lo referido las pretensiones de las defensas de Krassnoff, Zapata y Alfaro, para determinar si en la especie se configuran los errores de derecho denunciados es necesario tener en consideración que, de acuerdo al mérito de autos, las defensas de los recurrentes solicitaron durante la secuela del procedimiento, entre otras pretensiones, que se reconociera a favor de sus representados las circunstancias consagradas en los artículos 211 y 214 inciso 2° del Código de Justicia Militar. Esta pretensión fue rechazada por el tribunal de primer grado, indicando en sus motivos 78°, 83° y 103° que en cuanto se invoca como circunstancia atenuante lo prescrito en el artículo 211 del Código de Justicia Militar, no cabe sino su rechazo, pues no se ha acreditado que la participación en calidad de autor, en los delitos sub-lite, lo haya sido en cumplimiento de órdenes recibidas de un superior jerárquico. Por la misma razón no se dan tampoco los supuestos para la concurrencia de la eximente incompleta en relación con el inciso segundo del artículo 214 del Código de Justicia Militar." Haciendo referencia a lo dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago, en autos **rol N° 2182-98**. Teniendo además presente lo señalado en las consideraciones generales de esta sentencia, en especial lo expuesto en las directrices de la jurisprudencia alemana por el jurista **Claus Roxin**, en cuanto resulta inimaginable que quien actúa en una situación como la establecida en esta sentencia hubiera podido considerar que la ejecución o secuestro de personas resultaba conforme al derecho. En consecuencia, **esta alegación es rechazada**.

57°) Institución de la media prescripción o prescripción gradual

Con relación al artículo 103 del Código penal, el Tribunal se hace cargo de esta institución, por lo que cabe precisar:

A. En síntesis, podemos expresar que sobre esta materia este Tribunal se remitirá a los razonamientos dados respecto a la imprescriptibilidad del delito

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

de lesa humanidad. Luego, siendo el delito de autos catalogado como de lesa humanidad, no es posible aplicar en todo su espectro algún instituto de prescripción. De no ser así, resulta muy difícil sostener la categoría de lesa humanidad. Si los hechos han sido calificados de esa forma debe sostenerse dicha afirmación tanto en la calificación del delito como en la determinación de la pena. Además, en relación con esta materia, el autor Óscar López (Derecho Internacional y Crímenes contra la Humanidad, Editorial Fundación de Cultura Universitaria. Uruguay, 2008. Pág. 235 y siguientes) menciona el **caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Cantoral Huamaní y García Santa Cruz versus Perú” de 10 de julio de 2007**, que en su párrafo **190**, señala que la Corte recuerda que el Estado no podrá aplicar leyes de amnistía ni disposiciones de prescripción ni otras excluyentes de responsabilidad que impidan investigar y sancionar a los responsables. Además, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en sus “Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de Chile” del mes de julio del año 2014, señaló que le preocupa la aplicación de la “prescripción gradual” o “media prescripción” contenida en el artículo 103 del Código Penal, a violaciones graves de derechos humanos ocurridas durante la dictadura, lo cual determina la disminución o atenuación de las penas aplicables. Además, en esa materia la **Excma. Corte Suprema, en sentencia en causa rol 28.581-2016 de 24 de octubre de 2016** (causa rol 29.877 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Pitrufquén, caso “Nicanor Moyano Valdés”) ha manifestado sobre esta materia, en su motivo quinto, que resulta conveniente recordar que el artículo 103 del Código Penal no sólo está contemplado en el mismo título que la prescripción, sino que se desarrolla luego de aquella, lo que revela la estrecha vinculación entre ambos institutos. Sin embargo, como en el caso se trata de un delito de lesa humanidad, circunstancia que el fallo declaró expresamente, lo que condujo a proclamar la imprescriptibilidad de la acción persecutoria, cabe sostener que por aplicación de las normas del Derecho Internacional y dado que tanto la media prescripción como la causal de extinción de la responsabilidad penal se fundan en el transcurso del tiempo como elemento justificante para su aplicación, la improcedencia de aplicar la prescripción total alcanza necesariamente a la parcial, pues no se advierte razón para reconocer al tiempo el efecto de reducir la sanción, dado que una y otra institución se fundamentan en el mismo elemento que es rechazado por el

ordenamiento penal humanitario internacional, de manera que ninguno de tales institutos resulta procedente en ilícitos como el de la especie.

B. Ahondando en esta institución de la prescripción gradual, el último estudio actualizado sobre la aplicación de ésta por los Tribunales y la Excm. Corte Suprema corresponde a la tesista de magister de la Universidad de Chile Karinna Fernández Neira, en su trabajo “La aplicación de la prescripción gradual del delito en las causas sobre violaciones de derechos humanos” (página 192) quien después de estudiar detalladamente aspectos dogmáticos y legales tanto nacionales como de derecho comparado, concluye “que la aplicación de la prescripción gradual en casos de violaciones a los derechos humanos debe ser rechazada. En los casos antes referidos, la Corte Suprema no motiva correctamente sus sentencias, descuida aspectos dogmáticos y procesales, e incurre en incongruencias argumentativas en el afán de aplicar una institución cuyo diseño histórico-legislativo fue pensado para otras realidades, y cuya aplicación en casos de derechos humanos resulta forzada. Además, aunque la jurisprudencia citada evidencia la evolución de nuestro Tribunal superior, pues éste reconoce explícitamente que el Derecho internacional es una fuente directa de obligaciones internacionales para el Estado de Chile en lo referido al respeto de los derechos humanos, dicha evolución ha sufrido serios tropiezos y contradicciones a causa de los fallos del último bienio. Al aplicar la prescripción gradual a delitos de lesa humanidad, la Corte Suprema, finalmente, compromete la responsabilidad internacional del Estado por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales, particularmente respecto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.”

C. Recientemente la Illma. **Corte de apelaciones de Temuco en la causa rol penal N°359-2019, de fecha 24 de septiembre de 2019,** pronunciándose sobre la no aplicación del artículo 103 del Código Penal, en su considerando tercero señala: “Finalmente, se tiene además en consideración, que la estimación de la prescripción gradual respecto de los responsables de la comisión de delitos de lesa humanidad afecta el principio de proporcionalidad de la pena, pues la gravedad de los hechos perpetrados con la intervención de Agentes del Estado, determina que la respuesta al autor de la transgresión debe ser coherente con la afectación del bien jurídico y la culpabilidad con que actuó. En este sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de "La

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Masacre de la Rochela vs Colombia", señaló de manera expresa: "que en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos sea imposible reconocer como compatible con la Convención Americana la imposición de penas ínfimas o ilusorias, o que puedan significar una mera apariencia de justicia" (Corte Interamericana de Derechos Humanos, fallo "La Masacre de la Rochela vs Colombia", Sentencia de fecha 11 de mayo de 2007, párrafo N° 191).

D. Del mismo modo, **Excelentísima Corte de Suprema en causa rol N°8914-2018, seguida por el delito de Homicidios calificados en carácter de reiterado de Pedro Antonio Bahamonde Rogel, José Santiago Soto Muñoz, Héctor Hugo Maldonado Ulloa y José Mañao Ampuero**, acoge el recurso de casación en el fondo, deducido por la Unidad Programa Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos contra la sentencia dictada por la Iltrma. Corte de Apelaciones de Valdivia, de fecha 05 de abril de 2018, en su aspecto penal, declarando su nulidad y dictando sentencia de reemplazo con fecha 15 de junio de 2020. En dicha sentencia expresa lo siguiente: "**Noveno:** Que, conviene dejar asentado que, aun cuando el reconocimiento de la prescripción gradual, regulada en el artículo 103 del código punitivo, carece de influencia en lo dispositivo del fallo en estudio, la jurisprudencia constante de esta Sala Penal ha señalado reiteradamente que, la calificación de delito de lesa humanidad dada al hecho ilícito cometido, obliga a considerar la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que excluye la aplicación tanto de la prescripción total como de la llamada media prescripción, por entender tales institutos estrechamente vinculados en sus fundamentos y, consecuentemente, contrarios a las regulaciones de los Cogens provenientes de esa órbita del Derecho Penal Internacional, que rechazan la impunidad y la imposición de penas no proporcionadas a la gravedad intrínseca de los delitos, fundadas en el transcurso del tiempo". Ratificando lo expuesto, con fecha reciente la Excelentísima Corte Suprema en roles N°5780-2023 denominado "Caso Caravana de la muerte episodio La Serena" de fecha 28 de diciembre de 2023 y en causa N°22.276-2022 denominado "Caso quemados" de fecha 05 de enero de 2024, ha rechazado la institución de la media prescripción. En consecuencia, esta institución del artículo 103 del Código Penal tampoco es aplicable en la causa y **se rechaza para todas las defensas**. Esto es la petición realizada por las defensas de los acusados Pedro Guillermo Tichauer Salcedo y Raimundo Ignacio García Covarrubias.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

58°) Agravantes de responsabilidad penal

A. Que en relación con la agravante del **artículo 12 N°8 del Código Penal**, alegadas por los abogados **Ricardo Lavín Salazar** a fs. 4.735 y siguientes (Tomo XIV) respecto de todos los acusados y la alegación del abogado **Sebastián Saavedra Cea**, de fs. 4.814 y siguientes (Tomo XIV) respecto de todos los acusados por el delito de secuestro con grave daño. Tal como lo ha dicho este Tribunal en la causa 114.000, homicidio de Exequiel Zigomar Contreras Plotzki, en causa rol 44.305, homicidios calificados de Abraham Oliva Espinoza y Luis Espinoza Villalobos, con un mayor estudio de los antecedentes y así lo ha resuelto en numerosas causas condenatorias, ya ejecutoriadas este Tribunal acogerá la agravante pedida del artículo 12 N°8 del texto punitivo para los acusados como cómplices Oscar Alfonso Podlech Michaud, Pedro Guillermo Tichauer Salcedo. Raimundo Ignacio García Covarrubias y Romilio Osvaldo Lavín Muñoz.

A.1. En este punto hay que hacer una distinción importante. En efecto los delitos de lesa humanidad, como ya se han descrito, no es efectivo, que solo puedan ser cometidos por agentes del Estado, es decir, delito de lesa humanidad, no es igual a que se comentan por agentes del Estado. Los delitos de lesa humanidad también pueden ser cometidos por particulares. En la jurisprudencia nacional hay varios casos en que se ha condenado a particulares, por ejemplo, en la causa rol N° 2.182-98, denominado “Episodio Liquiñe”, instruida por el señor Ministro en Visita Extraordinaria Alejandro Solís Muñoz. En ese sentido si bien el auto acusatorio en la descripción de los hechos por la facticidad misma describe a agentes del Estado, el hecho de ser funcionario público no implica automáticamente que la persona se prevalezca de su condición, por ello, lo especial de esta agravante, es decir, si el acusado no hubiera sido agente del Estado, no habrían tenido la posibilidad de actuar con el resguardo para su impunidad, como lo hizo, y eso es lo importante, el hecho de ser funcionario público no es parte de los requisitos de los crímenes de lesa humanidad, como ya se describió en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sólo se requiere ser detenido por una política contra determinada población, no siendo necesario que sean agentes públicos. Además, el artículo 63 no es tajante en esta materia, puesto que la persona siendo funcionario público, podría haber aprovechado de esa calidad y ejecutar el delito por otros factores o circunstancias que es lo que se viene explicando, por ejemplo, por relaciones de amistad, por

relaciones de trabajo o por otras situaciones, pero en este caso se aprovecha de la condición de calidad de ser funcionario público. Teniendo además en consideración que se estaba bajo un régimen militar, el que con mayor razón los acusados aprovechan la calidad de funcionario público para cometer el delito. El delito de homicidio calificado no tiene en el tipo el factor funcionario público, otros delitos tienen la calidad de ser cometidos por funcionarios públicos, pero este no es el caso. Si no hubiera existido el régimen militar, si las personas no fueran funcionarios del ejército de Chile, no habría sido posible que esas patrullas hubieran ejecutados a las víctimas. Por ello es por lo que debe acogerse la agravante del artículo 12 N°8 del Código Penal. De esta forma el Tribunal se hace cargo de lo expuesto por la defensa en el sentido que no debía acogerse esta agravante.

B. En relación con las agravantes del **artículo 12 N°11** del texto punitivo alegadas por el abogado Sebastián Saavedra Cea a fs. 4.814 a fs. 4.851 (Tomo XIV), y a fs. 4.903 a fs. 4.940 (XIV), respecto de todos los acusados por el delito de secuestro con grave daño y detención ilegal. No resulta aplicable, pues del auto acusatorio se desprende que en este caso los funcionarios de carabineros y del ejército de Chile, por su práctica y patrullajes en el contexto de aquella época, son personas que habitualmente portan armas para el ejercicio de sus labores. En ese sentido, si ya se acogió la agravante anterior, en que se estableció que fueron estos funcionarios públicos, personas del ejército de Chile, volveríamos a utilizar un mismo elemento para hacer calzar una agravante, puesto que utilizaríamos el elemento personal de las Fuerzas Armadas, funcionarios que hacen patrullajes en la ciudad, los que siempre utilizan armas. Luego esto va en contra del principio non bis in ídem. **Rechazando** la aplicación de la agravante del artículo 12 N° 11 del Código Penal para todos los acusados.

59°) Determinación de la pena. En la determinación de la pena se conjugan varios factores que el sentenciador debe evaluar, entre ellos, como esenciales son:

A. En primer lugar, la concurrencia de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, establecidas en los **artículos 11 y 12** del Código Penal y otras normas del ordenamiento.

B. En segundo lugar, la determinación de la pena regida por los **artículos 50 y siguientes** del mismo texto.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

C. En tercer lugar, tratándose en este caso de delitos que su penalidad consta de dos o más grados, se deberá aplicar el **artículo 68** del texto punitivo, y si no es así el **artículo 67** del texto citado.

D. En cuarto lugar, tratándose en este caso de delitos de lesa humanidad como se explicará con posterioridad, atendida la gravedad y en consideración a la proporcionalidad de las penas, no procede que los encartados, aparte por la extensión de la pena, obtengan algún beneficio de la **Ley 18.216** atendido a los estándares normativos e interpretativos existentes en la materia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

E. En quinto lugar, dentro de otros elementos, debe considerarse el **artículo 69** del Código Penal.

F. En sexto lugar, el equilibrio adecuado entre el **artículo 74** del Código Penal y el **artículo 509** del Código de Procedimiento Penal (si fuera pertinente). Que de igual forma se ha razonado, debe estarse a los estándares normativos e interpretativos sobre Derechos Humanos de la Corte Interamericana sobre esta materia, en especial el sentenciador tiene que considerar la gravedad de los hechos y la proporcionalidad de la pena, pues se trata de delitos de lesa humanidad.

60°) Que conforme a la calificación jurídica precedente y sus razonamientos posteriores, los hechos materia de la causa en primer lugar según la acusación se refirió a los delitos de **detención ilegal** Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt. Ahora bien, atendido que a fs. 6.376 (Tomo XVIII) se dictó sobreseimiento definitivo por fallecimiento del acusado Luis Bustos Letelier, esta determinación de la pena no será analizada.

Por su lado se determinó el delito de **secuestro con grave daño** de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, ilícito ocurrido a fines de septiembre e inicios de octubre de 1973. Delito previsto y sancionado en el artículo 141 inciso tercero del Código

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Penal, vigente a la época de los hechos que tiene una pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados.

61°) Cabe hacer presente, que según el auto acusatorio de **fs. 4.600 a fs. 4.662 (Tomo XVIII)**, fecha 4 de noviembre de 2022, y la calificación final que se ha hecho en esta sentencia a los encartados Oscar Alfonso Podlech Michaud, Pedro Guillermo Tichauer Salcedo, Raimundo Ignacio García Covarrubias y Romilio Osvaldo Lavín Muñoz como **cómplices del delito de secuestro con grave daño**. En este caso a todos estos acusados les beneficia la atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal la que como se señaló es en carácter de simple. En cuanto a las agravantes a todos estos acusados les perjudica la del artículo 12 N°8 del código citado. En virtud del artículo 68 del Código Penal haciendo la compensación racional a todos estos acusados, quedan sin circunstancias atenuantes ni agravantes, pudiendo el Tribunal en la aplicación de la pena recorrer toda su extensión. Asimismo, en conformidad al artículo 51 del Código Penal, a los cómplices de crimen o simple delito consumado se les impondrá la pena inmediatamente inferior en grado a la señalada por la ley para el crimen o simple delito. En este caso, tratándose de secuestro con grave daño, corresponde aplicarle la pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados y el grado que le sigue es presidio menor en su grado máximo. Tratándose de ocho delitos de secuestro con grave daño, la pena a imponer comienza en 5 años de presidio menor en su grado máximo. Ahora bien, haciendo un estudio del artículo 74 del Código Penal y el 509 del Código de Procedimiento Penal, se observa que de aplicar el artículo 74 del Código citado, la pena a imponer sería de 40 años. Por su lado, si se aplica el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, tratándose de delitos de la misma especie y en especial delitos de lesa humanidad la pena debe aumentarse al menos en 2 grado, quedando la pena para todos los efectos en presidio mayor en su grado medio. En efecto, atendida la extensión de la pena, **se avizora una diferencia** entre que se aplique el artículo 74 del Código Penal o el 509 del Código de Procedimiento Penal, en consecuencia, para todos los efectos legales se aplicará la **pena única de 15 años de presidio mayor en su grado medio, más las accesorias legales**.

62°) **Beneficios de la Ley 18.216 y sus modificaciones posteriores.** Atendidas las razones que se van a exponer (en especial la extensión de la pena) **no procede ningún beneficio de la ley 18.216 aplicable a los acusados.**

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Además, se tiene en consideración, los informes del Centro de Reinserción Social y Servicio Médico Legal allegados al proceso respecto de:

A. Oscar Alfonso Podlech Michaud, a fs. 6.377 a fs. 6.388 (Tomo XVIII) informe del Servicio Médico Legal, el que concluye en lo pertinente que: “Trastorno neurocognitivo mayor (demencia) es una patología degenerativa, progresiva e irreversible, cuyo cuadro clínico encuadra dentro de la figura legal de enajenado mental, no encontrándose en condiciones de brindar un testimonio confiable ni ser responsable de sus acciones”. Que respecto al informe de facultades mentales del acusado Oscar Alfonso Podlech Michaud, el Tribunal ya resolvió tanto en esta causa según consta a fs. 6.512 y siguientes (Tomo XIX) con fecha 26 de marzo de 2024, como en los roles 113.950, 113.961 y 114.011 de público conocimiento, que debía realizarse un nuevo peritaje (lo que está pendiente). Toda vez que, el peritaje inicial lo practicó una persona que, para los efectos de acreditación en Chile, no tiene la experiencia ni la especialidad de médico psiquiátrica. En consecuencia, mientras no llegue ese informe pericial para todos los efectos legales como ha sido este caso, desde el procesamiento a este fallo el acusado Podlech Michaud se encuentra con sus facultades mentales normales y se le puede seguir el juicio en su contra.

B. Pedro Guillermo Tichauer Salcedo, a fs. 6.061 a fs. 6.066–(Tomo XVII) informe del Servicio Médico Legal que concluye en lo pertinente que: “se trata de un hombre adulto mayor sin alteración de juicio de realidad. El evaluado posee todas sus funciones corticales superiores conservadas, por lo cual, desde el punto de vista psiquiátrico, no tiene impedimentos para enfrentar un proceso judicial”. En cuanto al informe del Centro de Reinserción Social, este fue solicitado con fecha 07 de septiembre de 2022, según consta a fs. 4.508 (Tomo XIII), y a la fecha se encuentra con pide cuenta de fecha 26 de junio de 2024, según consta a fs. 6.610 (Tomo XIX).

C. Raimundo Ignacio García Covarrubias, a fs. 5.628 a fs. 5.633 (Tomo XVI) informe del Centro de Reinserción Social mediante el cual se concluye que: “el Consejo Técnico presidido por la Jefe de la Unidad del establecimiento, no recomienda la incorporación de Raimundo Ignacio García Covarrubias a una pena sustitutiva de libertad vigilada / libertad vigilada intensiva”. Que respecto al informe de las facultades mentales del acusado García Covarrubias, se solicitó con fecha 07 de septiembre de 2022, según consta a fs. 4.508 (Tomo XIII), a la fecha se ha

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

pedido cuenta a fs. 6.430 (Tomo XIX), con fecha 14 de febrero de 2024, a fs. 6.565 (Tomo XIX) de fecha 08 de abril de 2024 y a fs. 6.610 (Tomo XIX) con fecha 26 de junio de 2024. Lo que no es óbice para dictar sentencia definitiva. Atendido a que se trata de hechos ocurridos en el año 1973 donde hay una extensión de la tramitación puesto que de no hacerlo sería un obstáculo más.

D. Romilio Osvaldo Lavín Muñoz, a fs. 4.593 a fs. 4.598 (Tomo XIII) informe del Centro de Reinserción Social mediante el cual se concluye que: “El Consejo Técnico no recomienda su incorporación a la Libertad Vigilada para el señor Lavín Muñoz”. En relación con el informe de las facultades mentales del acusado Lavín Muñoz, se solicitaron con fs. 4.508 con fecha 07 de septiembre de 2022, se pide cuenta a fs.6.610 (Tomo XIX) con fecha 26 de junio de 2024. Sin embargo, a la fecha no han sido allegados al Tribunal, lo que no es impedimento alguno para dictar sentencia definitiva. En razón a que se trata de hechos ocurridos en el año 1973 que de no hacerlo sería un obstáculo más.

63°) Sobre esta materia y aun en el caso que posteriormente los acusados tuvieran una pena inferior de igual forma **no puede acceder a cumplir la pena en libertad**, en efecto con un mejor estudio y ponderación actualizada de los estándares normativos e interpretativos en materia de derechos humanos es necesario hacer las siguientes reflexiones, como el Tribunal lo ha realizado últimamente en causa rol causa rol 2-2013-V de la Ilma. Corte de Apelaciones de Valdivia, causa rol 45.361 del Juzgado de Letras de Lautaro, causa rol 114.051 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, causa rol 45.357 del Juzgado de Letras de Lautaro, causa rol 114.103 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, causa rol 45.367 del Juzgado de Letras de Lautaro, causa rol 114.017 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, causa ro 2-2012 del Juzgado de Letras de Pucón, causa rol 114.034 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, causa rol 10.914-P del Juzgado del Crimen de Puerto Montt.

A. Un estándar en derechos humanos corresponde a la idea de descubrir mediante un razonamiento judicial una nueva regla que inspire la solución de un caso que puede ser perfectamente aplicable a casos similares. Un estándar importa alcanzar un determinado nivel, puesto que todas las herramientas interpretativas apuntan a una mayor realización de los derechos fundamentales. En este caso la interpretación debe ser plausible conforme al artículo 5 inciso 2° de nuestra Constitución que impele a reconocer y promover tales derechos

fundamentales (García Pino, Gonzalo: “La consideración de los estándares sobre derechos fundamentales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Tribunal Constitucional”. En Actas XI Jornadas Constitucionales. Temuco 2015, pp. 27 -53). Agregando este Ministro que a partir de la normativa aludida, esta deber ser aplicada e interpretada en conformidad con lo que ha decidido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos humanos (Corte IDH) sobre determinado estándar normativo.

B. Sobre la normativa interna y las prácticas judiciales de los Estados y en este caso del Poder Judicial, ya la Corte IDH en el **fallo Almonacid Arellano y otros versus Chile**, de 26 de septiembre de 2006, en su **párrafo 124**, señaló: “La Corte es consciente que los jueces y Tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”.

C. Esta institución denominada control de convencionalidad puede ser definida en término simples como el mecanismo que utiliza la Corte Interamericana de Derechos Humanos tanto en sede contenciosa como consultiva para determinar la compatibilidad o no del derecho interno o los actos de los agentes de un Estado, con las disposiciones de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Asimismo, como el ejercicio que realizan los jueces domésticos para realizar el mismo cotejo entre las normas internas, las que dispone la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana (García, Gonzalo (2014): “Preguntas esenciales sobre el control de convencionalidad difuso aplicables a Chile”, en: Nogueira, Humberto (coord.) La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo a

la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Santiago de Chile, Librotecnia. Pp.356-357).

D. Para aplicar entonces el control de convencionalidad, hay que observar por su puesto la Convención Americana (ya citada) en especial los artículos 1.1 y 2. Ello por cuanto los Estados tienen la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna (1.1). Por su lado su artículo 2 nos expresa, que si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Parte se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

E. Del mismo modo, debemos analizar ahora si la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia contenciosa o consultiva ha dictado al menos una sentencia o ha emitido alguna Opinión Consultiva sobre la materia, que permita al Juez respectivo aquilatar que se encuentra en presencia de un **estándar normativo y/o interpretativo** en materia de derechos humanos. En este caso en relación con la aplicación de sanciones y posibles beneficios respecto a los delitos que consistan en graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos el delito de lesa humanidad. En esta materia podemos observar que sí ha existido por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos un estándar y jurisprudencia robusta y contundente sobre la materia.

Siguiendo el razonamiento anterior observamos lo siguiente:

E.1. Caso Barrios Altos versus Perú, de 14 de marzo de 2001, en el párrafo 41, expuso que considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

E.2. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, de 26 de septiembre de 2006, párrafos 111 a 114, la Corte IDH ha señalado: Los crímenes de lesa

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

humanidad producen la violación de una serie de derechos inderogables reconocidos en la Convención Americana, que no pueden quedar impunes. En reiteradas oportunidades el Tribunal ha señalado que el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”. Asimismo, la Corte ha determinado que la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Al respecto, este Tribunal ha señalado que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Este Tribunal ya había señalado en el Caso Barrios Altos que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Resulta útil destacar también que el propio Estado en el presente caso reconoció que en “principio, las leyes de amnistía o auto amnistía son contrarias a las normas de derecho internacional de los derechos humanos”. Por las consideraciones anteriores, la Corte estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder amnistía.

E.3. Caso la Masacre de la Rochela vs Colombia, Sentencia de fecha 11 de mayo de 2007, párrafo N° 191, señaló de manera expresa: que en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos sea imposible reconocer como compatible con la Convención Americana la imposición de penas ínfimas o ilusorias, o que puedan significar una mera apariencia de justicia.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

E.4. Caso Cantoral Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú, de 10 de julio de 2007, en su párrafo 190, puntualiza: La Corte recuerda que en cumplimiento de su obligación de investigar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos, el Estado debe remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que impidan la debida investigación de los hechos, y utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita dicha investigación y los procedimientos respectivos, a fin de evitar la repetición de hechos tan graves como los presentes. El Estado no podrá argüir ninguna ley ni disposición de derecho interno para eximirse de su obligación de investigar y, en su caso, sancionar penalmente a los responsables de los hechos cometidos en perjuicio de Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García Santa Cruz. En particular, la Corte recuerda que el Estado no podrá aplicar leyes de amnistía, ni disposiciones de prescripción, ni otras excluyentes de responsabilidad que impidan investigar y sancionar a los responsables.

E.5. Caso Masacre de las Dos Erres versus Guatemala de 24 de noviembre de 2009, en el párrafo 129, señala que ante esta situación, la Corte reitera su jurisprudencia constante sobre la incompatibilidad de figuras como la prescripción y la amnistía en los casos de graves violaciones a los derechos humanos, que de manera clara ha establecido que: El Estado debe garantizar que los procesos internos tendientes a investigar y [eventualmente] sancionar a los responsables de los hechos de este caso surtan sus debidos efectos y, en particular, de abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad. En ese sentido, el Tribunal ya ha señalado que [...]son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos” [...] ninguna ley ni disposición de derecho interno puede impedir a un Estado cumplir con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos[...]. En particular, al tratarse de graves violaciones de derechos

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

humanos el Estado no podrá argumentar prescripción o cualquier excluyente similar de responsabilidad, para excusarse de su deber.

E.6. Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha Do Araguaia”) vs. Brasil de 24 de noviembre de 2010 en el párrafo 155, indica: Adicionalmente, el mismo Grupo de Trabajo manifestó su preocupación que en situaciones post-conflicto se promulguen leyes de amnistía o se adopten otras medidas que tengan por efecto la impunidad, y recordó a los Estados que: es fundamental adoptar medidas efectivas de prevención para que no haya desapariciones. Entre ellas, destaca [...] el procesamiento de todas las personas acusadas de cometer actos de desaparición forzada, la garantía de que sean enjuiciadas ante Tribunales civiles competentes y que no se acojan a ninguna ley especial de amnistía o medidas análogas que puedan eximir las de acciones o sanciones penales, y la concesión de reparación e indemnización adecuada a las víctimas y sus familiares.

F. Como se puede verificar al observar los fallos citados, la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de su jurisprudencia ha sostenido este estándar en materia de derechos humanos en cuanto tratándose de delitos de graves violaciones a los derechos humanos (entre otros el delito lesa humanidad), los responsables deben ser sancionados, la pena debe ser proporcional a la gravedad de los hechos perpetrados por la intervención de Agentes del Estado. Del mismo modo, se debe evitar cualquier práctica o aplicación de normativa interna que restrinja los efectos de la sentencia u otorgue algún beneficio de cualquier tipo para el cumplimiento de la sentencia. Del mismo modo que las penas resulten ilusorias. Todo ello por tratarse de graves violaciones a los derechos humanos perpetrados por Agentes del Estado. Lo anterior, es totalmente diferente al tratamiento penal y procesal penal de la delincuencia común.

G. Sobre esta materia, esto es, de los beneficios que pueden otorgarse a los responsables de los ilícitos penales (tratándose de la delincuencia común) el legislador chileno ya avanzó sobre la materia en la **Ley 18.216**. En efecto en esta ley, si bien el **artículo 33** permite al Tribunal, previo informe favorable de Gendarmería, disponer la interrupción de la pena privativa de libertad reemplazándola por el régimen de libertad vigilada intensiva, previo los requisitos legales, este artículo debe relacionarse con el artículo 1 y siguientes de la citada ley. En efecto el **artículo 1** de la señalada ley indicada, en forma categórica y

expresa, prescribe “No procederá la facultad establecida en el inciso precedente (otorgamiento de los beneficios de Remisión condicional, Reclusión parcial, Libertad vigilada, Libertad vigilada intensiva, Expulsión, en el caso señalado en el artículo 34 y Prestación de servicios en beneficio de la comunidad) ni la del artículo 33 de esta ley, tratándose de los autores de los delitos consumados previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 150 A, 150 B, 361, 362, 372 bis, 390 y 391 del Código Penal”.

H. En esa idea de razonamiento, si bien la Ley 18.216, se refiere a los ilícitos penales de la delincuencia común. Manifiesta la voluntad del Estado de Chile de negar cualquier tipo de beneficios (en forma acotada) para los cómplices consumados de determinados delitos, en este caso **secuestro con grave daño**. En todo caso si ello no estuviera consagrado en la legislación chilena para todos los responsables de los delitos de lesa humanidad (en la época de los hechos investigados) debemos observar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos antes citada, según se ha relacionado. En todo caso- como expone Nogueira, debe aplicarse el control de convencionalidad cuando el derecho interno se encuentra por debajo del estándar mínimo asegurado convencionalmente. Considerando los artículos 1, 2 y 29 de la Convención Americana citada. Además los artículos 26, 31.1 y 27 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 1969. (Nogueira, Humberto (2014): “Sistema interamericano de protección de derechos humanos, control de convencionalidad y aplicación por parte de las jurisdicciones nacionales” en: Nogueira, Humberto (“coord.”). La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Santiago de Chile, Librotecnia, pp. 395-420).

64°) En consecuencia, aplicando el control de convencionalidad, según lo dispuesto por la Corte IDH, en relación a los **estándares normativos e interpretativos** sobre derechos humanos para los efectos de la sanción y cumplimiento de las penas, en relación a los ilícitos de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos el delito lesa humanidad (como es el caso en estudio) **no es posible** (además de lo razonado y de los estándares normativos) **otorgarle algún beneficio de la ley 18.216 a los acusados** en esta causa y así se dirá en lo resolutivo. De esta forma el control de convencionalidad se manifiesta como una obligación de garantía, es decir, este control se enmarca en un instituto

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

que es el control internacional. Esto es, aquel conjunto de procedimientos y técnicas creadas y destinadas a verificar si el comportamiento de los Estados se adecua o no a lo exigido por normas de conducta internacionales. Este control es una expresión de la obligación de garantía y de disponer medidas en el ámbito interno. Esto implica que el control de convencionalidad cristaliza estas obligaciones para toda autoridad pública. Más aun, dicho control desde una mirada más amplia se enmarca dentro de un instituto que es el control internacional. Esto es, aquel conjunto de procedimientos y técnicas creadas y destinadas a verificar si el comportamiento de los Estados se adecua o no a lo exigido por normas de conducta internacionales. (Núñez, Constanza (2017): El control de convencionalidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Argentina, ARA, Editores. p. 36). Lo anterior ha sido además ratificado por la **II^{ta} Corte de Apelaciones de Temuco, el 04 de marzo de 2020, en causa rol 1.052-2019**, en cuanto la no concesión de beneficios de la ley 18.216 a aquellas personas que hubieran participado en graves violaciones a derechos Humanos (lesa humanidad). Lo mismo en causa **rol 114.034** del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el delito de apremios ilegítimos de Luis Alberto Chihuailaf Arriagada, no obstante las personas ser condenadas a tres años de presidio menor en su grado medio están cumpliendo pena efectiva, no otorgándosele beneficio. En consecuencia, **no es posible otorgarles a los acusados ningún beneficio y deberán cumplir la pena efectiva impuesta** como se dirá en lo resolutivo.

EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL

65°) Que **fs. 4.814 a fs. 4.851 (Tomo XIV)** en el primer otrosí de su presentación el abogado **Sebastián Saavedra Cea**, en representación de Luisa Noemi González Ortega, Othniel Isaac González Ortega, Neftalí González Ortega, Juana Eugenia González Ortega, Ruth Alicia González Ortega y Elibeth González Ortega, deduce demanda civil de indemnización de daños y perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por Álvaro Sáez Willer, abogado Procurador Fiscal de Temuco, por la suma de \$1.200.000.000.- (mil doscientos millones de pesos) que se desglosan en \$200.000.000 (doscientos millones) para cada una de sus representados, por el accionar ilícito de agentes estatales que secuestraron a Elías Dagoberto González Ortega, o lo que el Tribunal determine en justicia, con

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

los reajuste e intereses y las costas del juicio. El demandante se funda en lo sustantivo, esencial y pertinente:

A. Lo hechos: el demandante civil reproduce los hechos referidos en el auto acusatorio de fs. 4.600 a fs. 4.662 (Tomo XVIII), de fecha 04 de noviembre de 2022. Comenta que por el periodo en que se cometió este delito constituye un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad por lo que no puede ser objeto de amnistía o prescripción. Que el 11 de septiembre de 1973, a través del D.L. N°5 de la Junta de Gobierno coloco al territorio en Estado de sitio asimilándolo a un Estado de Guerra. Las consecuencias de la aplicación de este texto legal fueron gravísimas, aludiendo a Consejos de Guerra. Solicitando se tenga presente el Convenio de Ginebra. Que este delito constituye un crimen contra la humanidad. Viola principios que deben regir a la vida de las naciones civilizadas, transgrediendo los propósitos y principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas. Sostiene que los organismos internacionales han desarrollado latamente los fundamentos bajo los cuales, a la luz del corpus iuris del Derecho Internacional un crimen de lesa humanidad es en sí mismo una grave violación a los derechos humanos citando jurisprudencia en afinidad.

B. El reconocimiento del estado de Chile de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra: El 3 de diciembre de 1973 Chile concurre con su voto a aprobar la Resolución 3.074 (XXVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas denominada "Principios de Cooperación Internacional para la identificación, Detención, Extradición y Castigo de los Culpables de Crímenes de Guerra o de Crímenes de Lesa Humanidad" citando en su párrafo dispositivo 1° y el numerando 8°. Los fundamentos y criterios señalados por la Resolución ya referida se encuentran contenidos también en otras de la misma índole, pronunciadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, teniendo a Chile como país concurrente, aludiendo a jurisprudencia al respecto. En consecuencia, el Estado de Chile se encuentra sujeto a obligaciones internacionales que le son exigibles directamente y ha asumido soberanamente obligaciones de investigar los hechos criminales cometidos por sus agentes, enjuiciar, sancionar a los culpables y reparar a las víctimas o a sus familiares cuando se trate de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. Así resulta obvio, público y notorio que el delito cometido en perjuicio de **Elías Dagoberto Gonzalez Ortega**, es delito de carácter estatal, que en consecuencia genera responsabilidad y como tal deben

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

considerarse para los efectos de las acciones de reparación, que mediante esta demanda se reclaman.

C. El derecho: Expresa el demandante que el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal concede acción penal para sancionar a los culpables de un delito, y al mismo tiempo concede acción civil para obtener la reparación de los daños que son consecuencia de ese ilícito. Que esas acciones civiles de reparación del daño se dirigen directamente en contra del Estado de Chile, porque fueron agentes estatales al servicio de ese Estado y con ocasión de sus funciones, los que infringieron el daño cuya reparación se solicita. Se trata de una nomenclatura nueva, que proviene del derecho de los derechos humanos, la cual tiene al Estado como responsable directo de las violaciones de los derechos esenciales inferidas por sus agentes, que actúan en cuanto Estado, bajo el mandato, orientación, planificación, anuencia y consentimiento de las autoridades estatales. Así entre otros instrumentos internacionales, lo establece el artículo 63 N°1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en estrecha relación con el artículo 5 de la Constitución Política del Estado. Que estos agentes actúan en el marco de funciones estatales, con potestades, recursos materiales y humanos que esa misma organización jurídica pone a su disposición para el cumplimiento de sus tareas.

D. La competencia de este Tribunal para conocer y fallar la demanda civil que se interpone en juicio criminal: Una de las tesis sostenidas por el Fisco de Chile para eximirse del pago de las reparaciones en este tipo de juicios, alude a una interpretación errónea del artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, en orden a que el Juez del Crimen, sería incompetente para conocer de estas demandas de reparación. Afirma que lo cierto es que el texto actual del artículo citado, modificado por la Ley 18.857, de 6 de diciembre de 1.989, permite en términos amplios la interposición ante el juez que conozca del proceso penal las acciones civiles que persigan la reparación de los efectos patrimoniales que las conductas de los procesados por sí mismas hayan causado o que puedan atribuírseles como consecuencias próximas o directas, de modo que el fundamento de la respectiva acción civil obligue a juzgar las mismas conductas que constituyen el hecho punible objeto del proceso penal. En tal sentido, la excepción de incompetencia absoluta intentada por el Fisco de Chile ha sido

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

mayoritariamente rechazada por los jueces llamados a resolver el conflicto, transcribiendo jurisprudencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

E. Fallos de la Excma. Corte Suprema que rechazan la tesis de la incompetencia del Tribunal en materia civil: Esbozando al efecto la sentencia de casación rol 6.308-07, de fecha 8 de septiembre del 2008, sentencia de casación rol 10.666-2011 de fecha 04 de junio de 2012, entre otros fallos. Indica que los actos y hechos de los funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ella, son imputables directamente al órgano al cual pertenecen. Esta es la llamada "Teoría del Órgano". De ahí que la responsabilidad extracontractual del Estado se caracterice por ser una responsabilidad "orgánica", de lo cual deriva otra característica, el de ser una responsabilidad directa.

F. Lo que ha fallado la Excma. Corte Suprema, en forma unánime, sobre la responsabilidad del Estado: Al respecto cita cuatro sentencias: de fecha 26 de enero del 2005 "Bustos con Fisco", Rol 3354-03 ; otra de 19 de octubre del 2005- "Caro con Fisco", Rol 4.004-03 ; otra de 13 de diciembre del 2005, "Albornoz con Fisco", Rol 4006-03 ; y otra de fecha 20 de enero del 2006, "Vargas con García y Fisco", Rol 5.489-03, fallos unánimes de la cuarta sala del máximo Tribunal, que hace claridad acerca de la responsabilidad el Estado. Soslaya doctrina al respecto y que es importante el reconocimiento de que la responsabilidad extracontractual del Estado se trata de una responsabilidad regida por las normas del derecho público, y que ella emana de la propia naturaleza del Estado, como persona jurídica compleja que debe desarrollar su actividad teniendo presente los principios rectores de las Bases de la Institucionalidad, contenidas en el artículo 1° de la Carta fundamental. Luego, cita el Artículo 38 inciso segundo de la Constitución Política de la República, reconoce la responsabilidad del Estado, a su turno, cita el artículo 4 de la Ley N° 18.575, Orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado, así como jurisprudencia. Alega artículo 6 y el inciso 2 del artículo 38 de nuestra carta fundamental, entre otras normas, argumentando al respecto. Finalmente indica que las normas citadas encuentran su complemento en diversas disposiciones de Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Chile, ya sea entre otros la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, esa responsabilidad del Estado está consagrada y reconocida en ese Derecho

Internacional Convencional, aún más, lo está también en el Derecho de Gentes o Derecho Internacional Consuetudinario, aplicable en Chile y en todo el mundo, que bajo la fórmula de Principios Generales del Derecho Internacional ha elevado el Derecho a la Reparación de las víctimas como una norma de *Ius Cogens*, esto es, principios obligatorios, inderogables, imprescriptibles y con efecto *erga omnes*. Que en ese sentido es bueno dirigir la mirada hacia la profusa y rica jurisprudencia internacional emanada de órganos regionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismos a los que el Estado de Chile les ha reconocido competencia, siendo sus resoluciones vinculantes para todos los Estados suscriptores del Pacto de San José de Costa Rica.

G. Referencias jurisprudenciales de nuestros Tribunales sobre la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en materias de reparación: Que la forma en que incide el derecho Internacional en esta temática de derechos humanos queda refrendada en: sentencia de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 18 de enero del 2006, Recurso de apelación ingreso 37483-2004, por el Homicidio de Gabriel Marfull. En el mismo sentido apunta fallo de la 5ta. Sala de la I. Corte de Apelaciones de fecha 10 de julio del 2006, en causa ingreso 65-2001, "Causa Martínez con Fisco" entre otros.

H. Lo que ha aprobado Chile recientemente en el seno de las naciones unidas sobre la reparación en materia de derechos humanos: Que con fecha 21 de marzo del 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó la Resolución 60-147, denominada "Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones". El Estado de Chile concurrió a la suscripción de esa Resolución, unánimemente aprobada, citando los numerales 13, 15, 18, 19, 20 y 23; además del numeral IV, que hace alusión a la institución de la Prescripción.

I. El daño provocado y el monto de la indemnización demandada: Que el Estado de Chile, a través de la acción de sus agentes, ha provocado un daño ostensible, público y notorio a los demandantes de autos. La lógica pura nos dice que ese Estado no podía investigarse a sí mismo, puesto que quedaría en evidencia su compromiso directo con los crímenes. De esa manera el Estado aseguró a sus agentes la impunidad necesaria. Esa es otra dimensión del daño

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

ocasionado, impedir que los familiares de las víctimas supieran qué pasó con sus seres queridos. Con todo derecho pueden sus representados reclamar al Estado la reparación del inconmensurable daño que les ocasionó, por una acción intrínsecamente antijurídica. Se trata de un tipo de daño que es imposible soslayar, de aquellos que no se borran y que son manifiestos para cualquier persona que sufre esa circunstancia traumática. Elías Dagoberto González Ortega como toda persona cualquiera fuese su condición social, tenían derecho a su dignidad y al goce y disfrute de derechos esenciales por su condición de ser humano y persona. Su secuestro dejó a su familia en la más completa orfandad e inseguridad. Expresa que ese daño que sufrió y padece hasta hoy sus representados, es lo que constituye el daño moral que se demanda. El daño causado es obvio, público, notorio, y no hay quien pueda negarlo caprichosamente. Se trata de dolores y traumas humanos, que no hacen distinción para alojarse en el alma de quien los padece, atendiendo a condiciones sociales, políticas, culturales o religiosas. Todos lo sienten por igual, precisamente por nuestra misma naturaleza humana. Finalmente, define lo que es el daño moral de conformidad a la doctrina, citando además jurisprudencia al efecto. Respecto de la prueba, tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria coinciden en señalar que el daño moral no requiere prueba, citando jurisprudencia al respecto, con la cual coinciden plenamente y finaliza indicando que las angustias, padecimientos y dolores, sumadas a las incertidumbres, miedos, pérdidas de proyectos de vida, inseguridades, son fáciles de entender en su plenitud, y sólo cabe al sentenciador hacer una estimación fundada de su magnitud y del monto de la reparación.

66°) Que **fs. 4.903 a fs. 4.940 (Tomo XIV)** en el primer otrosí de su presentación el abogado **Sebastián Saavedra Cea**, en representación de Evita Valentina Aguayo Olavarría, deduce demanda civil de indemnización de daños y perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por Álvaro Sáez Willer, abogado Procurador Fiscal de Temuco, por la suma de \$200.000.000 (doscientos millones), por el accionar ilícito de agentes estatales que secuestraron a Héctor Aguayo Olavarría, o lo que el Tribunal determine en justicia, con los reajuste e intereses y las costas del juicio. El demandante se funda en lo sustantivo, esencial y pertinente:

A. Lo hechos: el demandante civil reproduce los hechos referidos en el auto acusatorio de fs. 4.600 a fs. 4.662 (Tomo XVIII), de fecha 04 de noviembre de

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

2022. Comenta que por el periodo en que se cometió este delito constituye un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad por lo que no puede ser objeto de amnistía o prescripción. Que el 11 de septiembre de 1973, a través del D.L. N°5 de la Junta de Gobierno coloco al territorio en Estado de sitio asimilándolo a un Estado de Guerra. Las consecuencias de la aplicación de este texto legal fueron gravísimas, aludiendo a Consejos de Guerra. Solicitando se tenga presente el Convenio de Ginebra. Que este delito constituye un crimen contra la humanidad. Viola principios que deben regir a la vida de las naciones civilizadas, transgrediendo los propósitos y principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas. Sostiene que los organismos internacionales han desarrollado latamente los fundamentos bajo los cuales, a la luz del corpus iuris del Derecho Internacional un crimen de lesa humanidad es en sí mismo una grave violación a los derechos humanos citando jurisprudencia en afinidad.

B. El reconocimiento del estado de Chile de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra: El 3 de diciembre de 1973 Chile concurre con su voto a aprobar la Resolución 3.074 (XXVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas denominada "Principios de Cooperación Internacional para la identificación, Detención, Extradición y Castigo de los Culpables de Crímenes de Guerra o de Crímenes de Lesa Humanidad" citando en su párrafo dispositivo 1° y el numerando 8°. Los fundamentos y criterios señalados por la Resolución ya referida se encuentran contenidos también en otras de la misma índole, pronunciadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, teniendo a Chile como país concurrente, aludiendo a jurisprudencia al respecto. En consecuencia, el Estado de Chile se encuentra sujeto a obligaciones internacionales que le son exigibles directamente y ha asumido soberanamente obligaciones de investigar los hechos criminales cometidos por sus agentes, enjuiciar, sancionar a los culpables y reparar a las víctimas o a sus familiares cuando se trate de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. Así resulta obvio, público y notorio que el delito cometido en perjuicio de **Héctor Aguayo Olavarría** es delito de carácter estatal, que en consecuencia genera responsabilidad y como tal deben considerarse para los efectos de las acciones de reparación, que mediante esta demanda se reclaman.

C. El derecho: Expresa el demandante que el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal concede acción penal para sancionar a los culpables de un

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

delito, y al mismo tiempo concede acción civil para obtener la reparación de los daños que son consecuencia de ese ilícito. Que esas acciones civiles de reparación del daño se dirigen directamente en contra del Estado de Chile, porque fueron agentes estatales al servicio de ese Estado y con ocasión de sus funciones, los que infringieron el daño cuya reparación se solicita. Se trata de una nomenclatura nueva, que proviene del derecho de los derechos humanos, la cual tiene al Estado como responsable directo de las violaciones de los derechos esenciales inferidas por sus agentes, que actúan en cuanto Estado, bajo el mandato, orientación, planificación, anuencia y consentimiento de las autoridades estatales. Así entre otros instrumentos internacionales, lo establece el artículo 63 N°1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en estrecha relación con el artículo 5 de la Constitución Política del Estado. Que estos agentes actúan en el marco de funciones estatales, con potestades, recursos materiales y humanos que esa misma organización jurídica pone a su disposición para el cumplimiento de sus tareas.

D. La competencia de este Tribunal para conocer y fallar la demanda civil que se interpone en juicio criminal: Una de las tesis sostenidas por el Fisco de Chile para eximirse del pago de las reparaciones en este tipo de juicios, alude a una interpretación errónea del artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, en orden a que el Juez del Crimen, sería incompetente para conocer de estas demandas de reparación. Afirma que lo cierto es que el texto actual del artículo citado, modificado por la Ley 18.857, de 6 de diciembre de 1.989, permite en términos amplios la interposición ante el juez que conozca del proceso penal las acciones civiles que persigan la reparación de los efectos patrimoniales que las conductas de los procesados por sí mismas hayan causado o que puedan atribuírseles como consecuencias próximas o directas, de modo que el fundamento de la respectiva acción civil obligue a juzgar las mismas conductas que constituyen el hecho punible objeto del proceso penal. En tal sentido, la excepción de incompetencia absoluta intentada por el Fisco de Chile ha sido mayoritariamente rechazada por los jueces llamados a resolver el conflicto, transcribiendo jurisprudencia de la Iltrma. Corte de Apelaciones de Santiago.

E. Fallos de la Excma. Corte Suprema que rechazan la tesis de la incompetencia del Tribunal en materia civil: Esbozando al efecto la sentencia de casación rol 6.308-07, de fecha 8 de septiembre del 2008, sentencia de

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

casación rol 10.666-2011 de fecha 04 de junio de 2012, entre otros fallos. Indica que los actos y hechos de los funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ella, son imputables directamente al órgano al cual pertenecen. Esta es la llamada "Teoría del Órgano". De ahí que la responsabilidad extracontractual del Estado se caracterice por ser una responsabilidad "orgánica", de lo cual deriva otra característica, el de ser una responsabilidad directa.

F. Lo que ha fallado la Excma. Corte Suprema, en forma unánime, sobre la responsabilidad del Estado: Al respecto cita cuatro sentencias: de fecha 26 de enero del 2005 "Bustos con Fisco", Rol 3354-03 ; otra de 19 de octubre del 2005- "Caro con Fisco", Rol 4.004-03 ; otra de 13 de diciembre del 2005, "Albornoz con Fisco", Rol 4006-03 ; y otra de fecha 20 de enero del 2006, "Vargas con García y Fisco", Rol 5.489-03, fallos unánimes de la cuarta sala del máximo Tribunal, que hace claridad acerca de la responsabilidad el Estado. Soslaya doctrina al respecto y que es importante el reconocimiento de que la responsabilidad extracontractual del Estado se trata de una responsabilidad regida por las normas del derecho público, y que ella emana de la propia naturaleza del Estado, como persona jurídica compleja que debe desarrollar su actividad teniendo presente los principios rectores de las Bases de la Institucionalidad, contenidas en el artículo 1° de la Carta fundamental. Luego, cita el Artículo 38 inciso segundo de la Constitución Política de la República, reconoce la responsabilidad del Estado, a su turno, cita el artículo 4 de la Ley N° 18.575, Orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado, así como jurisprudencia. Alega artículo 6 y el inciso 2 del artículo 38 de nuestra carta fundamental, entre otras normas, argumentando al respecto. Finalmente indica que las normas citadas encuentran su complemento en diversas disposiciones de Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Chile, ya sea entre otros la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, esa responsabilidad del Estado está consagrada y reconocida en ese Derecho Internacional Convencional, aún más, lo está también en el Derecho de Gentes o Derecho Internacional Consuetudinario, aplicable en Chile y en todo el mundo, que bajo la fórmula de Principios Generales del Derecho Internacional ha elevado el Derecho a la Reparación de las víctimas como una norma de *Ius Cogens*, esto es, principios obligatorios, inderogables, imprescriptibles y con efecto *erga omnes*.

Que en ese sentido es bueno dirigir la mirada hacia la profusa y rica jurisprudencia internacional emanada de órganos regionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismos a los que el Estado de Chile les ha reconocido competencia, siendo sus resoluciones vinculantes para todos los Estados suscriptores del Pacto de San José de Costa Rica.

G. Referencias jurisprudenciales de nuestros Tribunales sobre la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en materias de reparación: Que la forma en que incide el derecho Internacional en esta temática de derechos humanos queda refrendada en: sentencia de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 18 de enero del 2006, Recurso de apelación ingreso 37483-2004, por el Homicidio de Gabriel Marfull. En el mismo sentido apunta fallo de la 5ta. Sala de la I. Corte de Apelaciones de fecha 10 de julio del 2006, en causa ingreso 65-2001, "Causa Martínez con Fisco" entre otros.

H. Lo que ha aprobado Chile recientemente en el seno de las naciones unidas sobre la reparación en materia de derechos humanos: Que con fecha 21 de marzo del 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó la Resolución 60-147, denominada "Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones". El Estado de Chile concurrió a la suscripción de esa Resolución, unánimemente aprobada, citando los numerales 13, 15, 18, 19, 20 y 23; además del numeral IV, que hace alusión a la institución de la Prescripción.

I. El daño provocado y el monto de la indemnización demandada: Que el Estado de Chile, a través de la acción de sus agentes, ha provocado un daño ostensible, público y notorio a los demandantes de autos. La lógica pura nos dice que ese Estado no podía investigarse a sí mismo, puesto que quedaría en evidencia su compromiso directo con los crímenes. De esa manera el Estado aseguró a sus agentes la impunidad necesaria. Esa es otra dimensión del daño ocasionado, impedir que los familiares de las víctimas supieran qué pasó con sus seres queridos. Con todo derecho pueden sus representados reclamar al Estado la reparación del inconmensurable daño que les ocasionó, por una acción intrínsecamente antijurídica. Se trata de un tipo de daño que es imposible soslayar, de aquellos que no se borran y que son manifiestos para cualquier

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

persona que sufre esa circunstancia traumática. Héctor Aguayo Olavarría, como toda persona cualquiera fuese su condición social, tenían derecho a su dignidad y al goce y disfrute de derechos esenciales por su condición de ser humano y persona. Su secuestro dejó a su familia en la más completa orfandad e inseguridad. Expresa que ese daño que sufrió y padece hasta hoy sus representados, es lo que constituye el daño moral que se demanda. El daño causado es obvio, público, notorio, y no hay quien pueda negarlo caprichosamente. Se trata de dolores y traumas humanos, que no hacen distinción para alojarse en el alma de quien los padece, atendiendo a condiciones sociales, políticas, culturales o religiosas. Todos lo sienten por igual, precisamente por nuestra misma naturaleza humana. Finalmente, define lo que es el daño moral de conformidad a la doctrina, citando además jurisprudencia al efecto. Respecto de la prueba, tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria coinciden en señalar que el daño moral no requiere prueba, citando jurisprudencia al respecto, con la cual coinciden plenamente y finaliza indicando que las angustias, padecimientos y dolores, sumadas a las incertidumbres, miedos, pérdidas de proyectos de vida, inseguridades, son fáciles de entender en su plenitud, y sólo cabe al sentenciador hacer una estimación fundada de su magnitud y del monto de la reparación.

67°) Que fs. 4.952 a fs. 4.986 (Tomo XIV) en el primer otrosí de su presentación los abogados **Manuel Lisboa Cordero y Juan Carlos Hernández Vidal**, en representación de Elisa Margarita Schmidt Arriagada, deducen demanda civil de indemnización de daños y perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por Álvaro Sáez Willer, abogado Procurador Fiscal de Temuco, por la suma de \$200.000.000 (doscientos millones) por el accionar cometido por agentes del Estado en contra de los hermanos de su representada, a saber Carlos y Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, o lo que el Tribunal determine en justicia, con los reajuste e intereses y las costas del juicio. Los demandantes se fundan en lo sustantivo, esencial y pertinente:

A. Lo hechos: los demandantes civiles reproducen los hechos referidos en el auto acusatorio de fs. 4.600 a fs. 4.662 (Tomo XVIII), de fecha 04 de noviembre de 2022.

B. El Derecho: Los hechos relatados constituyen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra; que afectaron a doña Elisa Margarita Schmidt Arriagada, hermana de las víctimas Carlos y Ricardo Augusto Schmidt Arriagada,

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

además de constituir los delitos de detención ilegal y de secuestro con grave daño, a la luz del derecho internacional. Refiriendo al Estatuto del Tribunal Militar de Nüremberg de 1945. Que para la ejecución de este plan criminal, ideado desde la más alta jerarquía estatal, se prodigó a sus agentes la consigna de exterminio, se les entregó recursos humanos, materiales y se les aseguró un marco de absoluta impunidad en el cumplimiento de la tarea represiva. Funda que lo acontecido entre fines de septiembre e inicios de octubre de 1973 con las víctimas que individualiza, sucedía de igual manera con otras víctimas a lo largo y ancho del país, pudiendo sostenerse que estos crímenes corresponden a una política masiva, reiterada y sistemática de eliminación de adversario, asentada con el golpe militar y llevada a cabo por los agentes de la dictadura. Cita jurisprudencia al efecto y que entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de septiembre de 1974, en virtud del Decreto Ley N°3, en relación con el Decreto Ley N°5, ambos de 1973, la Junta de Gobierno colocó a todo el territorio del Estado bajo Estado de sitio, asimilándolo a un estado de guerra. Como consecuencia de ello, comenzó a regir el Estatuto del derecho internacional Humanitario, contenido en el Convenio de Ginebra de 1949. Que es el derecho internacional, tanto convencional como consuetudinario, el que tipifica y castiga estos crímenes, y el que obliga a los Estados a reparar a las víctimas, como lo son los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Señala normativa internacional para indicar que el Estado de Chile ha asumido soberanamente obligaciones de investigar los hechos criminales que constituyen crímenes de derecho internacional, cometidos por sus agentes, enjuiciar y sancionar, si corresponde a los culpables, y reparar a las víctimas y/o a sus familiares. Ninguna ley interna puede alzarse o desconocer esas obligaciones.

B.1. La responsabilidad del Estado analizada desde la Constitución Política de la República de 1980: advierte el artículo 38, inciso 2° de la norma fundamental y transcribe jurisprudencia. Que luego, para una adecuada comprensión y delimitación de la responsabilidad del Estado por los hechos que sustentan su pretensión, le resulta insoslayable remitirse al capítulo I de la Constitución Política, sobre las Bases de la Institucionalidad, que allí se constituyen los principios basales, desde donde se estructura todo el sistema institucional, aludiendo a la normativa.

B.2. La responsabilidad del Estado por crímenes de derechos internacional, a la luz del derecho internacional: Plantea el demandante civil

que este conjunto de normas y principios no han hecho sino reconocer aquellos que a nivel internacional se ha venido desarrollando por más de un siglo. La superioridad antológica de la persona humana frente al Estado o la dignidad humana como límite a la soberanía estatal, formaba parte integrante del Corpus Iuris Internacional, que obligan al Estado de Chile, mediante la suscripción de declaraciones y convenciones, así como su voto en la aprobación de múltiples resoluciones por parte de la Asamblea General de Organización de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, ciñendo otras normas internacionales y doctrina. Que se trata se trata de una responsabilidad objetiva en donde no interesa la presencia de dolo o culpa en el accionar dañoso del Estado. La responsabilidad internacional del Estado nace al momento en que con su actuar, infringe los límites que le señalan los derechos humanos, como atributos inherentes a la dignidad de las personas, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del autor material del acto.

B.3 La imprescriptibilidad de las acciones judiciales en casos de responsabilidad del Estado por crímenes de derecho internacional: expresa que la materia que trata el proceso quede gobernada bajo normas de carácter público e internacional- por sobre las meramente privadas-, implica reconocer la autonomía y orgánica particularidad del complejo normativo de los derechos humanos, de manera que son imprescriptibles las acciones patrimoniales derivadas de las violaciones a los derechos humanos, reproduce jurisprudencia y normativa nacional e internacional al respecto.

C. El daño provocado y el monto de la indemnización: soslaya que el Estado de Chile, a través de la acción de sus agentes, ha provocado un daño ostensible, público y notorio a su representada. Difícilmente pueden existir mayores desafíos para la justicia que enfrentarse a este tipo de criminalidad organizada, cuando esta proviene precisamente del mismo Estado. Manifiesta que con todo derecho su representada Elisa Margarita Schmidt Arriagada reclamar al Estado la reparación del inconmensurable daño que le ocasionó, por una acción intrínsecamente antijurídica. Que su representada al momento de la desaparición de sus hermanos quedó en la más absoluta indefensión y desamparo, dentro de un clima de terror, incertidumbre y soledad. Fue quien debió acompañar a su madre Aurora del Carmen Arriagada Vergara en la incomprensible pérdida de sus hijos y dolor que significó. La situación de este grupo familiar posterior fue de

aislación social de la comunidad de la que formaban parte, no tuvieron apoyo sino que fueron marginadas, quedando sumidas en la soledad. Que debe entenderse como daño moral aquella específica clase de menoscabo que afecta a los atributos y facultades morales o espirituales de una persona, prosigue su fundamento y se apoya en doctrina en cuanto a la definición de daño moral, así como en jurisprudencia.

68°) Que a **fs. 5.007 a fs. 5.035 (Tomo XIV)**, el abogado **David Alberto Morales Troncoso**, en representación de Ricardo Virginio Aguayo Olavarría, Matilde Escobar Vásquez, Maria Haydée Escobar Vásquez, Vicente Edmundo Escobar Vásquez, Pedro Juan Escobar Vásquez, Juan Escobar Vásquez, Daniel Segundo Escobar Vásquez y Erica Escobar Vásquez, en el primer otrosí de su presentación deducen demanda civil de indemnización perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado cuyo representante es el abogado Procurador Fiscal Álvaro Gastón Sáez Willer o quien lo represente, a fin de que se repare el daño moral a sus representados por el actuar dolosos de agentes del Estado, consistentes en la detención ilegal y secuestro con grave daño cometidos en contra de Héctor Aguayo Olavarría, hermano de Ricardo Virginio Aguayo Olavarría, solicitando la suma de \$200.000.000.- (Doscientos millones de pesos) o la suma que el Tribunal estimen conforme al mérito de autos; y por la detención ilegal y secuestro con grave daño de Alejandro Escobar Vásquez, hermano de Matilde Escobar Vásquez, Maria Haydée Escobar Vásquez, Vicente Edmundo Escobar Vásquez, Pedro Juan Escobar Vásquez, Juan Escobar Vásquez, Daniel Segundo Escobar Vásquez y Érica Escobar Vásquez, peticionando la suma de \$200.000.000. (Doscientos millones de pesos), para cada uno de ellos, o la suma que el Tribunal estime conforme a mérito de autos, además que dichas sumas se paguen con reajuste, intereses legales y las costas de la causa.

A. Hechos: El demandante civil sustenta su pretensión transcribiendo textualmente los hechos relatados en la acusación fiscal de fs. 4.600 a fs. 4.662 (Tomo XIII), los que por economía procesal se dan por reproducidos.

B. El derecho

B.1. El delito: que los hechos en que se funda la demanda civil constituyen los delitos de detención ilegal en las personas de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada,

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, previsto y sancionado en el artículo 148 del Código Penal, en su texto vigente a la fecha de los hechos, en su carácter de lesa humanidad, ilícito ocurrido el 13 de septiembre de 1973. Que asimismo constituyen el delito de secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, previsto y sancionado en el artículo 141 inciso tercero del Código Penal, en su texto vigente la época de los hechos, en su carácter de lesa humanidad, ilícitos ocurridos entre fines de septiembre e inicios de octubre de 1973.

B.2. Fuentes de la responsabilidad: Arguye el demandante civil que el inciso segundo del artículo 38 de la Constitución Política de la República, consagra la responsabilidad del Estado, al establecer que cualquier persona que sea lesionada en su derecho por la administración del Estado, de sus organismos o las municipalidades, podrán reclamar ante los Tribunales, citando jurisprudencia y que en ese sentido el inciso segundo del artículo 5 de la misma norma fundamental, expresa que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, en este caso el derecho a la vida, integridad física y psíquica, por lo que es deber del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados en la Constitución, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile, y que se encuentran vigentes. Acota que en el caso de los funcionarios del ejército de Chile, estos sin lugar a duda están ligados al Estado por vínculo de Derecho Público, como dependiente del Estado. En cuanto a la fuente de la obligación particular para los delitos que importen una violación a los derechos humanos no solo se encuentran en la Constitución y en la ley de Bases de la Administración, sino que también en los Principios Generales del Derecho Humanitario y de los Tratados Internacionales tales como la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados, de tal forma que las normas de derecho común interno aplicaran solo si no están en contradicción con ellas, aludiendo al artículo 2.329 del Código Civil, el que se encontraría en

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

armonía con el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, ciñendo jurisprudencia.

C. La imprescriptibilidad de la acción civil deducida en autos: comienza reproduciendo jurisprudencia en cuanto a la naturaleza de la acción, por cuanto se entendería que esta no es meramente patrimonial sino que se trata de una acción reparatoria en el ámbito de violaciones a los derechos humanos en crímenes de lesa humanidad y que se rigen por preceptos y principios del derecho internacional que consagran la imprescriptibilidad. Advierte también que el Estado de Chile se ha comprometido y obligado voluntariamente a no alegar la prescripción de la acción civil en causas que busquen o persigan la reparación por el daño causado a causa de este tipo de delitos de lesa humanidad.

D. Competencia de este Tribunal para conocer de la presente demanda de indemnización de perjuicios deducida: Transcribe el artículo 10, 431 del Código de Procedimiento Penal, y señala que tales disposiciones legales dejan claro que el proceso penal se puede deducir una acción que busque reparar los efectos patrimoniales del hecho punible, como es la acción de indemnización de perjuicios que se deduce en este acto. En este sentido, que si bien no puede atribuirse al Estado de Chile la calidad de procesado, no cabe duda de que toda consecuencia patrimonial deriva del delito cometido por sus agentes. Que lo anterior ha quedado zanjado en diversos fallos de los tribunales superiores de justicia.

E. Compatibilidad de la indemnización reclamada con otros beneficios otorgados: manifiesta que la indemnización de perjuicios pretendida en autos no es incompatible con otros beneficios otorgados por el Estado, puesto que el objeto de toda acción civil es la obtención de una compensación integral de los daños ocasionados por el actuar de los agentes del Estado de Chile, mencionado roles.

F. El daño provocado y el monto de la indemnización:

F.1. Demandante Ricardo Virginio Aguayo Olavarría, dice que desde el momento de la detención ilegal de su hermano Héctor Domingo Aguayo Olavarría, ocurrida el 13 de septiembre de 1973, a la fecha, ha pasado por múltiples pesares, siendo incluso detenido y torturado por carabineros y militares, al concurrir reiteradamente a preguntar por él, con quien tenía una relación cercana más allá de los lazos sanguíneos. La pérdida de su hermano, le causa hasta el día de hoy

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

una afección y pesar; daño moral que se vio incrementado al enterarse a través de la investigación de las múltiples torturas a que sometido su hermano Héctor, y el destino probable que tuvo, no comprendido su representado el inhumano actuar de los agentes del Estado. Reclamando para su representado la suma de \$200.000.000. (Doscientos millones de pesos), o lo que el Tribunal estimen de justicia.

F.2. En cuanto a los demandantes civiles doña Matilde Escobar Vásquez, María Haydée Escobar Vásquez, Vicente Edmundo Escobar Vásquez, Pedro Juan Escobar Vásquez, Juan Escobar Vásquez, Daniel Segundo Escobar Vásquez, Erica Escobar Vásquez, hermanos de la víctima Alejandro Escobar Vásquez: sostiene que en el caso de sus representados, no solo tenían una relación sanguínea de hermanos, sino de familia, se cuidaban mutuamente, se acompañaban y ayudaban, lo que llevó a Alejandro a huir junto a los otros siete jóvenes para así evitar que los agentes del Estado dañaran sus hermanos y padres. Por la detención ilegal y el secuestro con grave daño de Alejandro por cincuenta años sus representados les ha causado un pesar y aflicción; daño moral que también se incrementó al enterarse por la investigación de los múltiples apremios ilegítimos a que fue sometido su hermano y el probable destino que tuvo. Solicitando se indemnice a sus representados como reparación o indemnización una suma no inferior a \$200.000.000. (Doscientos millones de pesos), o lo que Tribunal estime en justicia para cada uno de ellos.

69°) Que a fs. 5.061 a fs. 5.083 (Tomo XIV), el abogado José Luis Neira Vejar, en representación de Rita Ortega Muñoz y Rita Aurora Gonzalez Ortega, en el otrosí de su presentación deduce demanda civil de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por el abogado Procurador Fiscal don Álvaro Sáez Willer, por la detención ilegal de Hugo Arner González Ortega y Elías Dagoberto González Ortega, solicitando se condene al demandado a pagar una indemnización de perjuicio a sus representados ascendente a la suma de \$300.000.000. (Trescientos millones de pesos), para la madre de las víctimas y de \$150.000.000 (Ciento cincuenta millones de pesos), para la hermana de las víctimas, o lo que el Tribunal determine con intereses y reajustes.

A. Antecedentes: el demandante civil señala que los hechos dan cuenta que el 13 de septiembre de 1973, ocho jóvenes dentro de los cuales se encuentran Hugo Arner González Ortega y Elías Dagoberto González Ortega,

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

abordaron un bus con la finalidad de cruzar hacia Argentina, no obstante, por razones que se ignoran descendieron del bus en el sector Caburgua, detallando los hechos posteriores y sosteniendo que estos fueron detenidos por carabineros y trasladados al regimiento Tucapel de Temuco. Que por lo anterior se sometió a proceso por el delito de detención ilegal a Luis Robinson Bustos Letelier. Que de los hijos y hermanos de sus representadas nunca se tuvo noticias, comenzando un largo peregrinar de más de cuarenta años en los que infructuosamente se ha tratado de determinar los responsables y ubicar sus restos para dar cristiana sepultura, siendo una pérdida imposible de superar la desaparición de sus hijos de 23 y 24 años respectivamente, cuyas vidas se vieron truncadas por agentes del Estado. Toda esta situación ha provocado grave trastorno físico y mental en sus representados quienes han pasado por duros momentos de aflicción y dolor, lo que no les ha permitido alcanzar su desarrollo. Por ello reclaman que el daño moral causado sea indemnizado.

B. El derecho: plantea que la responsabilidad de la demanda fluye de lo establecido por los artículos 2.314 y siguientes y 2320 del Código Civil. Afirma que el artículo 10 del Código de Procedimiento penal concede acción penal para sancionar a los culpables de un delito, y al mismo tiempo concede acción civil para obtener la reparación de los daños que son consecuencia de ese ilícito. Que en este caso se persigue las responsabilidades penales y civiles que de los hechos derivan. Esas acciones civiles de reparación del daño se dirigen directamente en contra del Estado de Chile, porque fueron agentes estatales al servicio de ese Estado y con ocasión de sus funciones, los que infringieron el daño cuya reparación se solicita. Se trata de una nomenclatura nueva en el área de la responsabilidad estatal, que proviene del derecho de los derechos humanos y que ya ha hecho suya la doctrina administrativa y constitucional más reciente. Cita que lo establece el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en estrecha relación con el artículo 5 de la Constitución Política del Estado. Que el fisco de Chile alude a una interpretación errónea del artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, en orden a que el juez del crimen sea incompetente para conocer de estas demandas de reparación. Lo cierto es que es la ley 18.857 que permite en términos amplios la interposición ante el juez que conozca el proceso penal las acciones civiles que persigan la reparación de los efectos patrimoniales que las conductas de los procesados por sí mismas hayan causado o puedan

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

atribuirles como consecuencias próximas o directas. En tal sentido, la excepción de incompetencia absoluta ha sido mayoritariamente rechazada por los jueces llamados a resolver el conflicto, citando jurisprudencia en ese sentido. Anexa que se trata de una responsabilidad orgánica, de la cual derivan otra característica, es de ser una responsabilidad directa. Advirtiéndole que cada vez que un funcionario público actúa en el ejercicio de sus funciones, quien actúa – jurídicamente hablando- es el órgano público. Y por lo tanto tal órgano debe asumir las consecuencias de dichos hechos o actos, los que son lícitos o ilícitos.

C. Sobre la responsabilidad del Estado: menciona jurisprudencia y doctrina en lo pertinente a la responsabilidad extracontractual del Estado, la que afina que se trata de una responsabilidad rígida por las normas de derecho público, y ellas emanan de la propia naturaleza del Estado, como persona jurídica compleja que debe desarrollar sus actividades teniendo presente los principios rectores de las Bases de la Institucionalidad, artículo 1, así como su artículo 38 inciso segundo de la carta fundamental, relacionando con los artículos 4, 21 y 42 de la ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases generales de la Administración del Estado, apoyándose en normativa internacional para inferir que las acciones civiles tratándose de crímenes contra el derecho internacional no prescriben jamás.

D. El daño: Que el Estado de Chile, a través de la acción de sus agentes, ha provocado un daño ostensible, público y notorio a las demandantes de autos. Durante más de cuarenta años han esperado a sus seres queridos sin resultados. Con todo derecho pueden sus representadas reclamar del Estado la reparación del incommensurable daño que le ocasionó, por una acción intrínsecamente antijurídica. Se trata de un tipo de daño que es imposible soslayar, de aquellos que no se borran y que son manifiestos para cualquier persona que sufre esas circunstancias traumáticas. Que las víctimas como toda persona cualquiera fuese su condición social, tenían derecho a su dignidad y al goce y disfrute de derechos esenciales por su condición de ser humanos y persona, prosigue aludiendo al daño moral provocado, citando jurisprudencia y doctrina.

CONTESTACIÓN DE LAS DEMANDAS CIVILES

70°) Que de **fs. 5.508 a fs. 5.548 (Tomo XVI)**, el abogado Procurador Fiscal del **Consejo de Defensa del Estado, Álvaro Sáez Willer**, contesta la demanda civil entablada por: **a)** el abogado Sebastián Saavedra Cea,

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

representación de Luisa Noemi González Ortega, Othierl Isaac González Ortega, Neftalí González Ortega, Juana Eugenia González Ortega, Ruth Alicia González Ortega, y Elibeth González Ortega, por quienes, invocándose la calidad de hermanos de la víctima don Elías Dagoberto González Ortega. **b)** La deducida por el abogado Sebastián Saavedra Cea, en representación de Evita Valentina Aguayo Olavarría, por quien se invoca la calidad de hermana de la víctima Héctor Aguayo Olavarría. **c)** la deducida por los abogados Manuel Lisboa Cordero y Juan Carlos Hernández Vidal, en representación de Elisa Margarita Schmidt Arriagada, por quien se invoca la calidad de hermana de las víctimas Carlos Schmidt Arriagada y Ricardo Augusto Schmidt Arriagada. **d)** la deducida por el abogado David Morales Troncoso, en representación de Ricardo Virginio Aguayo Olavarría, por quien se invoca la calidad de hermano de la víctima Héctor Domingo Aguayo Olavarría, y en representación de Matilde Escobar Vásquez, María Haydée Escobar Vásquez, Vicente Edmundo Escobar Vásquez, Pedro Juan Escobar Vásquez, Juan Escobar Vásquez, Daniel Segundo Escobar Vásquez y Erica Escobar Vásquez, por quienes se ha invocado la calidad de hermanos de la víctima Alejandro Escobar Vásquez. **e)** la deducida por el abogado José Luis Neira Vejar, en representación de Rita Aurora Ortega Muñoz y Rita Aurora Gonzalez Ortega, por quienes se invoca la calidad de madre y hermana respectivamente de la víctima Hugo Arner González Ortega y Elías Dagoberto González Ortega. Solicitando acoger las excepciones y defensas opuestas y negar lugar a dichas demandas en todas sus partes; y, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto de las sumas demandadas por concepto de indemnización de perjuicios, además de acoger la excepción que atañe a los reajustes e intereses, y su cómputo.

A. Excepción de reparación satisfactiva. Improcedencia de la indemnización reclamada por la actora Rita Aurora Ortega Muñoz por haber sido ya reparada conforme a las leyes de reparación:

A.1. Marco general sobre las reparaciones ya otorgadas. Comienza aludiendo a la Justicia Transicional, que desde esa óptica se puede mirar en mejores condiciones los valores e intereses en juego en esta disputa indemnizatoria. Que el denominado dilema “Justicia versus paz” es, sin lugar a duda, uno de los pilares sobre los cuales descansa el edificio de aquella justicia transicional. Que no debe olvidarse que, desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

aquella medida de justicia por tantos años buscada. Que en ese sentido, las negociaciones del Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas, a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos.

A.2. La complejidad reparatoria. Comienza citando a Lira. Posteriormente señala que la llamada Comisión Verdad y Reconciliación o también llamada “Comisión Rettig”, en su Informe Final propuso una serie de “propuestas de reparación” entre las cuales se encontraba una “pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas” y algunas prestaciones de salud. Dicho informe derivó en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. El mensaje de dicho proyecto de ley fue claro al expresar que por él se buscaba, en términos generales, “reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”. Por su parte, y en lo relativo a la forma en que se entendió la idea de reparación cabe indicar que el Ejecutivo, siguiendo el referido Informe de la Comisión, entendió por reparación “un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho informe”. A dicha reparación ha de ser convocada y concurrir toda la sociedad chilena, en “un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias directamente afectadas”. Compensación de daños morales y mejora patrimonial, son los dos claros objetivos de estas normas reparatorias. Refiere a la discusión de la ley 19.123 señalando como ejemplo las referencias a la reparación moral y patrimonial buscada por el proyecto. Aduce que la idea reparatoria se plasmó de manera bastante clara cuando dentro de las funciones de la Comisión se indicó le corresponderá especialmente a ella promover “la reparación del daño moral de las víctimas” a que se refiere el artículo 18. Que dichas consideraciones prácticamente idénticas a las señaladas se pueden formular respecto de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, ahora denominada Comisión Asesora para la calificación de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de prisión política y tortura y de las leyes 19.992 y 20.405. Asumida esa idea reparatoria, tanto la Ley 19.123 como las leyes 19.980, 19.992 y otras normas

jurídicas conexas, han establecido diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación exhibiendo aquella síntesis que explica cómo nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional. En ese sentido, se puede indicar que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones a saber:

A.3. Reparaciones mediante transferencias directas de dinero: diversas han sido las leyes que han establecido este tipo de reparaciones. Las leyes N° 19.123 y N° 19.992 han sido, este concepto, las más importantes. Destacando que en la discusión legislativa de la primera de las leyes se enfrentaron principalmente dos posiciones. Por un lado, algunos que sostenían que la reparación que se iba a entregar debía hacerse a través de una suma de dinero, mientras otros abogaban por la entrega de una pensión vitalicia. Ello no implicaba de manera alguna que la primera opción tendría efectos indemnizatorios y no así la segunda. Ambas modalidades tendrían fines innegablemente resarcitorios. Aduce a los costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones las que detalla y que ha significado a diciembre de 2019 la suma total de \$992.084.910.400. Que siguiendo desde una perspectiva indemnizatoria, y tal como se indicó en la historia de la ley 19.123, una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, ello no obsta a que podamos valorizarla para poder saber cuál fue su impacto compensatorio. Pues bien, el cálculo de los efectos indemnizatorios de una pensión vitalicia puede realizarse simplemente sumando las cantidades pagadas a la fecha. Que como puede apreciarse el impacto indemnizatorio de todo este tipo de pensiones es bastante alto. Ellas son, como ha entendido de manera generalizada, una buena manera de concretar las medidas que la justicia transicional exige en estos casos obteniéndose con ello, compensaciones razonables que están en coherencia con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

A.4. Reparaciones mediante la asignación de nuevos derechos: Sostiene que tal como sucede en la mayoría de los procesos de justicia transicional, la reparación no se realiza sólo mediante transferencias monetarias directas, sino que también a través de la concesión de diversos derechos a prestaciones. En efecto, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la

ONU ha señalado que el objetivo de un programa de reparación es garantizar que todas las víctimas reciban un tipo de reparación, aunque no sea necesariamente de un mismo nivel o de la misma clase. Señalando la normativa al respecto y las múltiples prestaciones con los desembolsos asumidos por el Estado en esas materias.

A.5. Reparaciones simbólicas: Que al igual que todos los demás proceso de justicia transicional, parte importante de la reparación por los daños morales causados a la víctima de Derechos Humanos se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor- siempre discutible en sus virtudes compensatorias- sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza actual y con ello reducir el daño moral. Aludiendo a lo que señala la doctrina al respecto. Afirma que en esta compleja tarea de entregar una compensación satisfactoria destaca la ejecución de diversas obras de reparación simbólica como las siguientes: **a)** La construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago realizada en el año 1993. **b)** El establecimiento mediante el Decreto N°121 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, del 10 de octubre de 2006, del día Nacional del Detenido Desaparecidos (se elige el día 30 de agosto de cada año). **c)** La construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. **d)** El establecimiento mediante Ley N°20.405 del Premio Nacional de los Derechos Humanos. **e)** La construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país y en lugares especialmente importantes para el recuerdo de las infracciones a los Derechos Humanos.

A.6. La identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas: Que todo lo expresado hasta ahora puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de Derechos Humanos no solo han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional, sino que han provisto indemnizaciones razonables con nuestra realidad financiera que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales sufridos a consecuencia de los violaciones a los Derechos Humanos. Así las cosas, tanto las indemnizaciones que se solicitan en estos autos como el cumulo de reparaciones hasta ahora indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma,

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

los ya referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños, no pudiendo por ello ser exigidos nuevamente. Al efecto, funda sus argumentos citando fallos de la Excm. Corte Suprema, la Corte Interamericana de Justicia, normativa internacional y doctrina. En efecto, cabe indicar que órganos internacionales de tanta importancia como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han valorado positivamente la política de reparación de violaciones de Derechos Humanos desarrollada por Chile, citando al efecto el caso Almonacid, jurisprudencia y doctrina atingente. Estando entonces la acción deducida por la demandante civil basada en los mismos hechos y pretendiendo ella indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cumulo de acciones reparatorias, ya enunciadas, es que se opone la excepción de reparación y pago por haber sido ya indemnizada en conformidad a las leyes 19.123 y 19.980.

B. Improcedencia de la indemnización dineraria demandada, por preterición legal del conjunto de los restantes demandantes, todos los cuales invocan la calidad de hermanos de víctima directa:

Que oponen esta excepción respecto de los restantes demandantes, todos los cuales invocan la calidad de hermanos de algunas de las víctimas directa, por haber sido preteridos legalmente tal calidad. Refiere que las indemnizaciones solicitadas en autos se desenvuelven en el marco de infracciones a los Derechos Humanos, cuya comprensión se da en el ámbito de la Justicia Transicional, tanto en el derecho interno como en el internacional. Solo desde esa óptica pueden analizarse y comprenderse los valores e intereses en juego en materia indemnizatoria, continúa argumentado en tal sentido. Que en este escenario 19.123 constituyó un esfuerzo trascendental de reparación haciendo posible atender a la necesidad de reparar económicamente a los familiares más directos, mediante prestaciones en dinero- preferentemente en cuotas mensuales. Detallando lo que, en términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnización ha significado, a diciembre de 2019, y cuya suma total es de \$992.084.910.400. Que para que ello fuera viable se determinó una indemnización legal, que optó por beneficiar al núcleo más cercano, esto es padres, hijos y cónyuge, pretiriendo el resto de las personas ligadas por vínculos de parentesco o de amistad y cercanía, quienes fueron excluidas, sin perjuicio de otras reparaciones satisfactivas a éstos últimos. Trae a colación el derecho comparado

aludiendo al concepto de “loss of consortium”. De la misma forma aduce al artículo 43 de la ley 16.744. Adiciona que las pretensiones económicas demandadas por los referidos restantes demandantes son improcedentes, porque en la especie, existe un sistema legal de reparación pecuniaria en el que se excluyó a quienes ostentaban la calidad de hermanos de víctimas directas. Que, sin perjuicio de lo anterior, reparación satisfactiva: que el hecho que los mencionados demandantes no tenga derecho a un pago de dinero, por preterición legal, no significa que no hayan operados otras formas de reparación. Alude que, tratándose en la especie de un daño extrapatrimonial, su compensación no se desenvuelve necesariamente en el aspecto netamente económico, sino que es posible reparar mediante la entrega de otras importantes prestaciones, como aconteció en el caso de autos, y que vinieron a satisfacer el daño moral sufrido. Trae a colación las discusiones originadas en la aprobación de la ley 19.123 en cuanto al cumulo de sensibilidades e intereses en juego en ella. Que, en ese sentido, puede indicarse que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se concretó también por reparaciones simbólicas, y no meramente pecuniarias, a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones y que permitieran recuperar el honor, dignidad y buen nombre. Cita doctrina atingente, enuncia las reparaciones simbólicas realizadas y jurisprudencia al respecto. Que estando las acciones de autos basadas en los mismos hechos y pretendiendo ellas indemnizar los mismos daños que han inspirado el cúmulo de acciones reparatorias opone la excepción de reparación satisfactiva, a las acciones deducidas por los demandantes por haber sido reparado el daño mediante el conjunto de reparaciones de diverso orden, incluyendo las simbólicas y beneficios de salud, a través del programa PRAIS.

C. Excepción de prescripción extintiva:

C.1. Normas de prescripción aplicables: en subsidio opone la excepción de prescripción extintiva de las acciones de indemnización de perjuicios deducidas con arreglo a lo dispuesto en el artículo en el artículo 2.332 del Código Civil, en relación con el artículo 2.497 del mismo Código; por encontrarse ellas prescritas, se rechacen las demandas, en todas sus partes. Expone que mediante las referidas demandas se persigue la responsabilidad extracontractual del Fisco de Chile por la detención y secuestro de los señores Elías Dagoberto González Ortega, Héctor Domingo Aguayo Olavarría, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Augusto Schmidt Arriagada, Alejandro Escobar Vásquez y Hugo Arner González Ortega que tuvieron lugar entre el 13 de septiembre de 1973 e inicios de octubre del mismo año. Es del caso que aun entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las víctimas o familiares de ejercer las acciones legales correspondientes ante los Tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, o aun, hasta la entrega pública del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, hechos acaecidos el 11 de marzo de 1990 y el 4 de marzo de 1991, respectivamente, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el **10 de enero de 2023**, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil. En consecuencia, oponen la excepción de prescripción establecida en el artículo 2.332 del Código Civil. En subsidio, en caso de estimarse que la norma anterior no es aplicable en autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de la demanda de autos, transcurrió con creces el plazo que establece el artículo 2.515 del Código Civil.

C.2. Generalidades sobre la prescripción: Alega que, por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles, citando doctrina al efecto. Expresa que, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe. Que la prescripción es una institución universal y de orden público. Que las normas del Título XLII del Código Civil, que la consagra y, en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no solo al derecho privado. Que entre estas normas está el artículo 2.497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, cuyo tenor cita. Que, esta última disposición consagra, con carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como señala el artículo 547, inciso 2º, del Código Civil, se rijan por las leyes y reglamentos especiales. Adosa que toda acción patrimonial crediticia se extingue por prescripción, de conformidad con los artículos 2.514 y 2.515 del Código Civil.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

C.3. Fundamento de la prescripción: comunica que, la prescripción tiene por fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida. Que los planteamientos doctrinarios de los que se vale le permiten concluir que la prescripción, es una institución estabilizadora. Que está reconocida por el ordenamiento jurídico con una perspectiva esencialmente pragmática, en atención a que existe bien jurídico superior que se pretende alcanzar, consistente en la certeza de las relaciones jurídicas, continua sus argumentos en ese contexto. Finalmente, refiere que, en la especie, el ejercicio de la acción indemnizatoria ha sido posible durante un número significativo de años, desde que los demandantes estuvieron en situación de hacerlo.

C. 4. Jurisprudencia sobre la materia: Cita jurisprudencia y reflexiona en ese ámbito. **1).** Que el principio general que rige la materia es de la prescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad debe, como toda excepción, ser establecida expresamente y no construida por analogía o interpretación extensiva. Agrega que, **2).** Los Tratados Internacionales invocados, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil; la imprescriptibilidad que algunos de ellos establece se refiere solo a la responsabilidad penal. Citando fallos al respecto. **3).** Que no existiendo una norma especial que determine el plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos el derecho común, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, y en particular por el artículo 2.332 que fija un plazo de cuatro años desde la perpetración del acto. **4).** Que, no obstante, la letra de dicho precepto, el plazo debe contarse no desde la desaparición del secuestrado, sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia. **5°)** Que el inicio del plazo

debe colocarse, en consecuencia, al momento de emitirse el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, pues desde ese momento se tuvo certidumbre de la condición de víctima de las personas desaparecidas. Adiciona fallo de la Excma. Corte Suprema. **6)** Normas contenidas en el Derecho Internacional, que en relación con las alegaciones expuestas por los actores en cuanto a que la acción patrimonial que se persigue la reparación por los daños reclamados sería imprescriptible conforme al derecho internacional de los derechos humanos, se hace cargo de los instrumentos internacionales citados en la demandas y otros no mencionados en dichas acciones civiles, ciñendo desde ya que ninguno contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia. Refiere a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad; aprobada por resolución N°2.391 del 26 de noviembre de 1968, y en vigor desde el año 1970, cita artículo 1letra a) y b) señalando que tal como lo reconocido la Excelentísima Corte Suprema que en ninguno de sus artículos declara la imprescriptibilidad de las acciones civiles para perseguir la responsabilidad pecuniaria del Estado por estos hechos, limitándose esta imprescriptibilidad a las acciones penales. Convenio de Ginebra de 1949, aduce que solo refiere a las acciones penales. Prosigue refiriéndose a las diferentes resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Convenciones Internacionales, citando jurisprudencia. Que en consecuencia no habiendo norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, el Tribunal no puede apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2.332 y 2.497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado. Solicitando sean rechazadas las acciones civiles indemnizatorias deducidas por encontrarse prescritas.

D. En cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas: vislumbra que los demandantes deberán acreditar el parentesco que, con relación a la respectiva víctima directa, invocan como fundamento de la indemnización por daño moral que reclaman en calidad de víctimas por repercusión, dado que dicho parentesco

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

determina la legitimación (activa) en la acción resarcitoria ejercitada, la que, de no concurrir, conduce a que las demandas deben ser rechazadas. En subsidio de las defensas y excepciones precedentes, opone alegaciones en cuanto a la naturaleza de las acciones indemnizatorias solicitadas y los montos pretendidos.

D.1. Fijación de la indemnización por daño moral: Que con relación al daño moral debe considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades morales. En términos generales refiere que la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgándole a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido. Citando la definición que ha realizado la Excm. Corte Suprema al respecto sobre el perjuicio moral.

D.2. En subsidio de las alegaciones precedente de reparación satisfactiva y de prescripción, la regulación del daño moral debe considerar los pagos efectuados por el Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales: En subsidio de las excepciones precedentes opuestas, alega en todo caso que en la fijación del daño moral por los hechos de autos, el Tribunal debe considerar todo los pagos recibidos a través de los años por los actores de parte del Estado conforme a las leyes de reparación 19.123 y sus modificaciones, y también a los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, y que benefician a los demandantes puesto que todos ellos tuvieron por objeto reparar el daño moral. De no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

D.3. Improcedencia del pago de reajustes e intereses con anterioridad a que la sentencia se encuentre ejecutoriada y se requiera legalmente su cumplimiento: hace presente que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia se dicte en la causa acoja las respectivas demandas y establezca la obligación indemnizatoria y además desde que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada. Que mientras no exista sentencia firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene su representado de indemnizar, y por tanto no existe ninguna suma que deba reajustarse. Realiza argumentos en esa línea citando jurisprudencia de los tribunales superiores. Luego expresa que, en el hipotético caso de que se resolviera acoger las acciones

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

de autos y se condene a su representado al pago de indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoria y su representado incurra en mora.

ANÁLISIS DEL TRIBUNAL

71°) Que haciéndonos cargo de la **contestación de la demanda efectuada por el Fisco de Chile**, reflexionaremos de la siguiente manera:

Para un mejor entendimiento de la contestación efectuada por el Fisco de Chile, se estructurará su presentación de la siguiente forma:

A. Excepción de reparación satisfactiva, improcedencia de la indemnización reclamada por la actora doña Rita Ortega Muñoz, por haber sido ya reparada conforme a las leyes de reparación.

B. Improcedencia de la indemnización dineraria demandada, por preterición legal del conjunto de los restantes demandantes, todos los cuales invocan la calidad de hermanos de víctimas directas.

C. Excepción de prescripción extintiva.

D. En cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas.

A. En cuanto a las excepciones señaladas precedentemente con las letras A) y B), el Tribunal razona lo siguiente: Las excepciones antes referidas, serán rechazadas por el Tribunal y así se estará en lo resolutivo, es especial por los siguiente fundamentos ya ponderados en las siguientes causas: **Causa rol 27.525** del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio calificado de Segundo Cayul Tranamil, sentencia de 26 de diciembre de 2014; **Causa rol 27.526** del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el homicidio calificado de Juan Segundo Palma Arévalo y Arcenio del Carmen Saravia Fritz, sentencia de 18 de diciembre de 2014; **Causa rol 45.345** del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio calificado de Juan Tralcal Huenchumán, sentencia de 11 de diciembre de 2014; **Causa rol 113.990** del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Manuel Alberto Burgos Muñoz, sentencia de fecha 06 de noviembre de 2015; **Causa rol 113.989**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Segundo Enrique Candía Reyes, sentencia de fecha 18 de abril de 2016; **Causa rol 18.780** del Juzgado de Letras de Curacautín, seguida por el delito de homicidio de Jorge San Martín Lizama, sentencia de fecha 28 de septiembre de 2015; **Causa rol 29.877**, del ingreso del Juzgado de Letras de

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Pitrufquén, seguida por el delito de homicidio calificado de Nicanor Moyano Valdés, sentencia de 25 de enero de 2016; **Causa rol 45.344**, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de Homicidio calificado de Osvaldo Moreira Bustos y apremios ilegítimos de Juana Rojas Viveros, sentencia de 23 de marzo de 2016; **Causa rol 45.371**, del Juzgado de Letras de Lautaro, por el delito de apremios ilegítimos de Jorge Contreras Villagra y otros, sentencia de 17 de agosto de 2016, **Causa rol 45.342**, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio en la persona de Gumerindo Gutiérrez Contreras, sentencia de 09 de octubre de 2015; **Causa rol 29.869**, del Juzgado de Letras de Pitrufquén, por el homicidio de Guillermo Hernández Elgueta, sentencia de 29 de diciembre de 2016; **Causa rol 27.527**, del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio de Anastasio Molina Zambrano, sentencia de 15 de septiembre de 2016; **Causa rol 114.001**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Osvaldo y Gardenio, ambos de apellido Sepúlveda Torres, sentencia de 17 de noviembre de 2016; **Causa rol 113.986**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el homicidio de Moisés Marilao Pichún, sentencia de fecha 24 de junio de 2016; **Causa rol 63.541**, del Juzgado de Letras de Angol, seguida por el homicidio de Sergio Navarro Mellado, sentencia de 27 de mayo de 2016; **Causa rol 45.363**, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de secuestro calificado de Gervasio Huaiquil Calviqueo, sentencia de 19 de mayo de 2017; **Causa rol 114.048**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Arturo Navarrete Leiva, sentencia de 10 de febrero de 2017; **Causa rol 10.868**, del Primer Juzgado del Crimen de Puerto Montt, seguida por el delito de apremios ilegítimos o aplicación de tormentos seguida de muerte en la persona de Juan Lleucún Lleucún, sentencia de 22 de noviembre de 2017; **Causa rol 114.003**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Gabriel Salinas Martínez, sentencia de 10 de noviembre de 2017; **Causa rol 10.851**, de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, seguida por el homicidio simple, en carácter de reiterado de Pedro Antonio Bahamonde Rogel, José Santiago Soto Muñoz, Héctor Hugo Maldonado Ulloa y José Mañao Ampuero, sentencia de 20 de enero de 2016; **Causa rol 45.343**, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el homicidio calificado en las personas de Segundo Lepín Antilaf, Juan Segundo Nahuel Huaiquimil, Julio Augusto Ñiripil Paillao, Segundo Levío Llaupe, Víctor

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Yanquin Tropa y Heriberto Collío Naín, sentencia de 31 de agosto de 2017; **Causa rol 57.071**, del Juzgado de Letras de Victoria seguida por el Homicidio Calificado en la persona de Jorge Arturo Toy Vergara, perpetrado en la comuna de Victoria, sentencia del 12 de octubre de 2017, **Causa rol 113.997**, del Juzgado de Juzgado del Crimen de Temuco para investigar el delito de Secuestro Calificado en la persona de Segundo Elías Llancaqueo Millán, perpetrado en la comuna de Lautaro en el mes de abril de 1975, sentencia del 19 de enero de 2018; **Causa rol 45.354**, del Juzgado de Letras de Lautaro seguida por el Secuestro calificado de Samuel Huichallán Levián, Ceferino Antonio Yaufulem Mañil, Miguel Eduardo Yaufulem Mañil y Oscar Rumualdo Yaufulem Mañil, sentencia del 03 de agosto de 2020; **Causa rol 45.361**, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el Secuestro Calificado de Manuel Elías Catalán Paillal, sentencia de 23 de diciembre de 2020; **Causa rol 114.000**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio simple de Waldo Enrique Rivera Concha, sentencia de 29 de abril de 2020; **Causa rol 4-2010**, de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el homicidio calificado en la persona de Víctor Carreño Zúñiga, sentencia de 16 de abril de 2018; **Causa rol 45.362**, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado en la persona de José Domingo Llabulén Pilquinao, sentencia de 16 de febrero de 2018; **Causa rol 114.007**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de Exequiel Zigomar Contreras Plotsqui, sentencia de 23 de octubre de 2018; **Causa rol 114.042**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de José Alberto Fuentes Fuentes, sentencia de 17 de agosto de 2018; **Causa rol 113.996** del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado y apremios ilegítimos en la persona de Tomás Segundo Esparza Osorio y apremios ilegítimos en la persona de Javier Enrique Esparza Osorio, sentencia del 30 de junio de 2018; **Causa rol 29.979** del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el homicidio calificado de Domingo Obreque Obreque, sentencia del 07 de abril de 2014; **Causa rol 45.365** del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de secuestro calificado de Luis Armando Horn Roa, sentencia del 25 de febrero de 2021; **Causa rol 45.367** del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de secuestro calificado de Pedro Millalén Huenchuñir, sentencia del 11 de mayo de 2022; **Causa rol 44.305** del Juzgado del Crimen de Puerto Varas, seguida por

el homicidio calificado en la personas de Abraham Oliva Espinoza y Luis Espinoza Villalobos , sentencia del 25 de enero de 2019; **Causa rol 45.368** del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de secuestro calificado de José Bernardino Cuevas, sentencia del 30 de marzo de 2019; **Causa rol 113.991** del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de Ramón Carrero Chanqueo, sentencia del 21 de noviembre de 2022; **Causa rol 113.478** del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de Luis Omar Torres Antinao, sentencia del 13 de junio de 2019; **Causa rol 114.051** del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el secuestro calificado de José Edulio Muñoz Concha, sentencia del 30 de abril de 2021; **Causa rol 5-2013** del ingreso criminal de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el delito de aplicación de tormentos en la persona de Harry Cohen Vera, sentencia de 30 de septiembre de 2019; **Causa rol 63.551** del Juzgado de Letras de Angol, seguida por el homicidio calificado de Patricio Rivas Sepúlveda, sentencia del 23 de diciembre de 2022; **Causa rol 113.969** del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la personas de Hernán Henríquez Aravena y Alejandro Flores Riveras, sentencia 02 de enero del 2020; Causa rol 114.034 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el delito de apremios ilegítimos de Luis Alberto Chihuailaf Arriagada, sentencia del 02 de agosto de 2022; Causa rol 24.428 del Juzgado de Letras de Traiguén, seguida por los apremios ilegítimos de Antonio Inostroza Segura y otros, sentencia del 30 de octubre de 2023. Todos los anteriores fallos condenatorios y ejecutoriados, que han rechazado los argumentos reiterados en el tiempo sobre estas excepciones que ha interpuesto el Fisco de Chile.

A.1. Sobre lo anterior, se reitera que el demandando no señala ninguna norma de las leyes que cita, donde se indique que los familiares, ya sea madre, cónyuge, hermanos, convivientes, primos, sobrinos u otros parientes de víctimas de violaciones de Derechos Humanos ocurridas durante el régimen militar año 1973 y siguientes, no puedan demandar por indemnización por daño moral. Por qué no la cita: primero porque no existe y segundo porque en el ordenamiento jurídico chileno, tratándose de violaciones a los derechos humanos y por las obligaciones generales establecidas en los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto es, respetar, garantizar, y no discriminar en el goce y ejercicio de los derechos y libertades, no es posible

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

obstruir a persona alguna el derecho de acceso a la justicia (artículos 8 y 25 de dicha Convención). No es óbice interponer las acciones civiles respectivas por el daño causado a las víctimas por violación a los derechos humanos y las reparaciones y prestaciones estatales de todo tipo que pueda otorgar el Estado en cumplimiento a los estándares internacionales. En este punto se seguirá la línea jurisprudencial desarrollada **en fallos por la Excma. Corte Suprema**, en especial: El fallo de 01 de abril de 2014, **rol 1424-2013**, sentencia de remplazo, considerando 13°, motivo que también cita fallos en el mismo sentido, **roles 2918-13, 3841-12 y 5436-10**. Que en síntesis expresa, con relación a la improcedencia alegada por el Fisco de Chile, que esta no es efectiva. Así en términos precisos, la acción civil es la obtención de la compensación íntegra de los daños ocasionados por el actuar de los Agentes del Estado de Chile. Las disposiciones de derecho internacional deben tener aplicación preferente en nuestro régimen jurídico al tenor del artículo 5° de la Constitución Política de la República. Del mismo modo el hecho que la demandante hayan sido favorecida por el Estado por la Ley 19.123 y leyes posteriores no es óbice para demandar civilmente (tanto la madre, el cónyuge, los hijos y los hermanos) toda vez que la citada Ley no establece de modo alguno la incompatibilidad que reclama el Fisco de Chile.

B. Que en cuanto a la excepción de prescripción extintiva del artículo 2.332 en relación con el artículo 2.497 y 2.515 en relación con el artículo 2.514 del Código Civil: También **será rechazada**. Este Tribunal, en igual sentido, estará a lo ya resuelto por la Excma. Corte Suprema en el fallo de remplazo **rol 1424-2013** de 1 de abril de 2014, considerando 11°, el cual en síntesis y en lo pertinente, señala que tratándose de un delito de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio Derecho Interno, que en virtud de la Ley N° 19.123 y su posterior modificación contenida en la Ley N°19.980, reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

familiares de las víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, reconocidos por los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario. Por consiguiente, agrega la Excma. Corte Suprema, cualquier diferenciación efectuada por el juez, en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento diferenciado, es discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama. Como se aprecia, la Excma. Corte Suprema de manera sostenida en el tiempo ha rechazado esta excepción de prescripción extintiva, como se puede observar en este fallo y otros posteriores, como en causas roles 15.294-2018 y 2.471-18 del ingreso de la Excma. Corte Suprema, entre otros. Sobre la materia también es importante señalar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Órdenes Guerra y otros vs Chile” de fecha 29 de Noviembre de 2018, el que se relaciona con la alegada responsabilidad del Estado por violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial como consecuencia de la aplicación de la figura de prescripción de acciones civiles de reparación relacionadas con crímenes de lesa humanidad. Las presuntas víctimas son siete grupos de personas que, entre 1997 y 2001, interpusieron por separado siete acciones civiles de indemnización de perjuicios, debido al secuestro y desaparición o ejecución de sus familiares por parte de agentes estatales en 1973 y 1974, durante la dictadura militar. Tales acciones fueron rechazadas entre 1999 y 2003, por juzgados, Tribunales de apelación o la Corte Suprema de Justicia, con base en la aplicación del plazo de la figura de prescripción establecida en el Código Civil. Si bien las presuntas víctimas han recibido una pensión mensual administrativa en virtud de lo dispuesto en la Ley 19.123 de 1992, así como otros beneficios en algunos casos (bono de reparación o bonificación compensatoria), la Comisión consideró que la existencia de un programa administrativo de reparaciones no excluye la posibilidad de que las víctimas de graves violaciones opten por reclamar reparación por vía judicial y que, tratándose de crímenes de lesa humanidad, es desproporcionado negarles sus derechos a una reparación bajo el argumento de prescripción. Sobre estos hechos, en el párrafo 13, el Estado de Chile acepta los hechos que se han tenido por probados por la Comisión en el Capítulo IV de su Informe. En los puntos resolutivos la Corte Interamericana de

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Derechos Humanos condena al Estado de Chile por violación al derecho de acceso a la justicia, en los términos de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y se ordena además al Estado a pagar determinadas sumas dinero.

C. En cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas: Que en un examen somero de las siguientes Constituciones Chilenas la expresión para referirse a los Tribunales es “Tribunales de Justicia”. De esta forma, lo hacían los siguientes textos: de 1822, capítulo I, artículo 158, donde a los Tribunales se les denomina “Tribunales de Justicia”; de 1823, título XIII, artículo 143, “Suprema Corte de Justicia”; de 1833, capítulo VIII, “De la administración de justicia”; de 1925, artículos 23 y 39, aluden a la expresión “Tribunales de Justicia”; de 1980, artículos 45, 52 N° 2 letra c) y 76 se refieren a la expresión “Tribunales de Justicia”. En consecuencia, la tradición constitucional, constata que el nombre para referirse a los Tribunales para que ejerzan su función no es de Tribunales de Ley, Tribunales de Derecho, Tribunales de Jurisprudencia, Tribunales de administración, sino que es **Tribunales de Justicia, lo que significa que tienen una conexión directa con este valor e ideal Constitucional**. Por lo tanto, siempre los Tribunales en conformidad, además, al Código Iberoamericano de Ética Judicial, vigente en Chile para los magistrados, en su artículo 35 señala: “el fin último de la actividad judicial es realizar la justicia por medio del Derecho”. Con mayor énfasis los jueces, frente a casos extraordinarios, únicos, irrepetibles que puedan suceder en una República, los Tribunales deben considerar la colisión que pueda producirse entre el Derecho positivo y la Justicia, debiendo considerarse, además, que la Corte de Apelaciones de Temuco ya recogió esta tradición constitucional de principios y valores en el fallo rol 45-2008 de 1 de septiembre de 2008, recaído en la **causa rol 113.959 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, caso “Curiñir Lincoqueo”**. Sólo a modo de ejemplo, ya que hay muchos sobre la materia, la Corte Constitucional Federal de la Republica Bonn, en una decisión ya en 1953, citando a Radbruch, declaró que en interés de la seguridad jurídica, un conflicto entre una prescripción de Derecho positivo y la justicia de fondo se resuelve normalmente en favor de la primera; sin embargo, cuando la discrepancia entre una ley positiva y la justicia llega a un grado intolerable, la ley por ser derecho injusto, debe ceder ante la justicia (**Antonio**

Pedrales: Atisbos de Supralegalidad en el ordenamiento positivo. Universidad de Valparaíso, 1982, pág. 584). Que en este caso es aplicable, a propósito de la indemnización reclamada.

C.1. Que asimismo podemos decir que la naturaleza humana es de tal condición que adquiere un deseo de actuar justamente cuando hemos vivido en un marco de Instituciones justas y nos hemos beneficiado de ellas. (**John Rawls**. Una Teoría de la Justicia. Fondo de Cultura Económica, año 2006, página 412).

C.2. Que en la misma línea, el autor citado en su obra Liberalismo Político, igual editorial, año 2013, página 224 y 225, donde expresa que los Tribunales cuando deban decidir los casos deben recurrir a los valores políticos que en su opinión pertenecen a la comprensión más razonable del concepto público de la justicia y a sus valores políticos de justicia y de razón pública (esto no tiene que ver con su propia moral personal) pues, los valores anotados son los valores que la ciudadanía y en general todos creen de buena fe, como les exige el deber de civilidad y que se espera que suscriban todos los ciudadanos en tanto personas razonables y racionales. Agrega este Tribunal que el valor justicia consagrado en nuestras Constituciones por lo menos desde 1822, es un acervo que cualquier ciudadano de una república independiente y soberana, como la chilena, adhiere.

C.3. Que continuando con lo anterior yendo más al fondo en esta introducción, si uno analiza, incluso, el desarrollo del Derecho Civil y su interpretación, como lo hizo **Alejandro Guzmán Brito** en su artículo La historia Dogmática de las Normas sobre Interpretación recibidas por el Código Civil de Chile, (Interpretación, Integración y razonamientos Jurídicos Editorial Jurídica de Chile, año 1992, página 77) en cuanto a que toda la evolución del derecho civil desarrollado por los jurisconsultos romanos y sus sucesores puede entenderse al Derecho como equidad constituida, lo mismo podemos decir con la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de Derechos Humanos, en especial en materia de reparación integral a las víctimas. Aquí el Derecho es equidad constituida. Del mismo modo, en materia de reparaciones, el autor chileno **Claudio Nash Rojas**, que ha hecho un estudio sistemático y completo hasta ahora en su libro “Las Reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1988 - 2007” (editorial Facultad de Derecho Universidad de Chile, Centro de Derechos Humanos) y también en su libro “Responsabilidad Internacional Del Estado En La Jurisprudencia Internacional y La

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Experiencia Chilena” (Editorial Legal Publishing) donde manifiesta en forma clara, en páginas 67 y siguientes del primero, que la Corte Interamericana ha señalado que en aquellos casos en que se han producido violaciones de los derechos y libertades convencionales, el Estado tiene el deber de actuar en el ámbito interno de forma tal que se determine la verdad de los hechos violatorios de la Convención, se juzgue y sancione a los responsables y se repare a las víctimas. Todo ello en el entendido que las situaciones de impunidad pueden inducir a futuras violaciones de Derechos Humanos. Agrega, además, este Tribunal, que lo anterior se ve refrendado por el artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo mismo en el segundo libro del autor mencionado, página 183, donde luego de hacer un análisis exhaustivo de la jurisprudencia chilena, concluye que la reparación siempre debe ser integral porque se debe prestar atención a la persona de la víctima y no el Estado victimario y, además, en el ámbito interno, el Estado tiene la obligación de evitar cualquiera interpretación que impida en pleno cumplimiento que signifique la reparación integral de la víctima. Que finalmente, hay que considerar el artículo de **Alejandro Vergara Blanco**, publicado en el Diario El Mercurio, el 30 de mayo de 2013, titulado “Ley Natural, Reglas o Principios Jurídicos: ¿Dónde está el Derecho?”. El autor acota que el derecho es aquel que sufre o goza cada sociedad en su tiempo, no aquel ideal de cada filósofo del derecho y añade, a propósito de un fallo de la Corte Suprema, de los consumidores de las empresas del comercio detallista, y se pregunta ¿Cuál era el Derecho? ¿El que provenía de una antigua ley supuestamente obedecida? ¿El de alguna Ley Natural? O ¿El que dijo la sentencia de la Corte Suprema? Y añade que la respuesta social fue esta última, pues todos los actores adquirieron la convicción de que sólo después de tal sentencia, habían cambiado las reglas. Continúa, ¿La Corte Suprema aplicó las reglas, la ley natural o un principio jurídico? Y se responde indicando que la respuesta es esta última, aplicó un principio jurídico y expresó que eso no es ni positivismo, ni ius Naturalismo, es Derecho. En el caso en estudio, dictado por la **Corte Suprema, sentencia rol 1424-2013, de 1 de abril de 2014**, ya el máximo Tribunal, lo que hizo, como en muchos otros casos, aplicó un principio jurídico ya establecido en la comunidad jurídica internacional, específicamente en la Convención Americana, artículo 63, el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, como también lo ha manifestado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto es, realizado un daño por el Estado y acreditado éste, la víctima debe ser reparada íntegramente. Finalmente, el

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

mismo Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, establece el principio *ex aequo et bono* (De acuerdo con lo correcto y lo bueno).

C.4. Que respecto a la responsabilidad civil del Estado, este Tribunal se ceñirá a las sentencias antes aludidas dictadas por este Ministro Visitador y en especial a la sentencia de la Sala Penal de la **Excma. Corte Suprema, de fecha 1 de abril de 2014, rol N° 1424-13**, que en su **considerando décimo**, en síntesis y en lo pertinente, señala que la responsabilidad del Estado, que se pretende hacer efectiva deriva, por un lado, de la comisión de hechos ilícitos por parte de sus agentes y, por el otro, de normas constitucionales precisas y de leyes de igual rango, que han sido incorporadas al Ordenamiento Jurídico Nacional, como lo son las obligaciones contempladas por los instrumentos internacionales que recogen los principios generales del Derecho Humanitario, entre los cuales se encuentra aquel relativo a la obligación de indemnizar los daños producidos por la violación de los derechos humanos. En consecuencia, se **procede a rechazar la excepción de prescripción opuesta por el Fisco de Chile.**

C.5. Que siguiendo la misma línea de la sentencia citada, en cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas, sobre esta materia este Tribunal estará a lo que ha resuelto en fallos precedentes en los últimos años, tratándose de cónyuge, hermanos, convivientes, primos, sobrinos u otros parientes de víctimas y al estándar que ha dispuesto además la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de la sentencia citada y los promedios habituales fijados por los Tribunales superiores de justicia en el último tiempo. Sobre este punto la Excma. Corte Suprema ha tenido la oportunidad de pronunciarse en:

C.5.a. Causa rol N°5572-2019, caratulados Schuster Pinto Macarena y otros, sobre juicio ordinario de indemnización de perjuicios contra Fisco de Chile, en sentencia del 29 de mayo de 2020, a propósito de la tragedia ocurrida en la isla Juan Fernández, que ante un hecho trágico de esta naturaleza para los actores (viuda e hijos), fijó la suma de \$150.000.000 para cada uno.

C.5.b. El fallo de 05 de agosto de 2021, rol 82-2021, sentencia de remplazo que en expresa en su considerando Décimo Quinto:..."Que la responsabilidad del Estado Administrador, a partir una interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 2°, 4°, 5°, 6°, 7° y 38 de la Constitución Política de la República en relación a los artículos 4° y 42 del D.F.L N° 1 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (en adelante Ley N° 18.575 actualizada), ha evolucionado hasta llegar a un estado pacífico, en cuanto a sostener que dicho instituto se funda exclusivamente en las referidas normas y tiene como factor de imputación la **“falta de servicio”**, que se presenta como una deficiencia o mal funcionamiento del servicio en relación a la conducta normal que se espera de él, estimándose que ello concurre cuando el servicio no funciona debiendo hacerlo, lo hace en forma irregular y/o lo hace tardíamente, operando así como un factor de imputación que genera la consecuente responsabilidad indemnizatoria. Es importante precisar que la norma del inciso segundo del artículo 21 de la Ley N° 18.575 actualizada, no excluye la aplicación del concepto de falta de servicio y el consecuente régimen de responsabilidad de Derecho Público a las Fuerzas Armadas, toda vez que tal norma no afecta la disposición del artículo 4°, piedra angular de la responsabilidad de los órganos del Estado, por lo que a su respecto debe atenderse a la concepción de la Administración que expresa el inciso segundo del artículo 1° del mencionado cuerpo de leyes, de forma tal que, sin duda alguna, este régimen de responsabilidad se aplica a las Fuerzas Armadas, como a las de Orden y Seguridad Pública”. En este sentido, en su parte resolutive “se revoca la sentencia apelada de 13 de septiembre de 2018 dictada, en cuanto rechazó la demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio y, en su lugar, se declara que la acoge sólo en cuanto se condena al Fisco de Chile a pagar a favor de cada uno de los actores la suma de \$250.000.000 por concepto de daño moral, la que deberá reajustarse conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, entre la fecha en que la presente sentencia quede firme y ejecutoriada y el mes anterior al pago efectivo, e intereses desde que esta sentencia quede firme”.

C.5.c. Fallo del 08 de julio de 2024 rol 119318-2023, sentencia de remplazo que expresa en sus considerandos: **9°)** “Que, en el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al dictaminar que “[...] no es suficiente que el Gobierno emprenda una investigación y trate de sancionar a los culpables, sino que es necesario, además, que toda esta actividad del Gobierno culmine con la reparación a la parte lesionada. (Cfr. CORTE LD.H., Caso Caballero Delgado y Santana. Sentencia de 8 de diciembre de 1995. Serie CN° 22, Párr. 58); **10°)** “Que, teniendo presente los hechos asentados en el fallo que se

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

revisa, en donde ha quedado acreditado que el demandante estuvo injustamente privado de su libertad por el lapso de un día en el que fue torturado por agentes del Estado, la misma debe ser reparada, dado el actuar ilegal de los agentes del Estado, ponderando la extensión de la privación a fin de determinar el monto de la indemnización. Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 10, 40 y 425 del Código de Procedimiento Penal, en relación con los artículos 6, 38 y 19 numerales 22 y 24 de la Constitución Política de la República y 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se decide: Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 170, 186, 187 y 227 del Código de Procedimiento Civil, artículos 1551, 2314 y 2329 del Código Civil y los artículos 6, 38 y 19 Nros. 22 y 24 de la Constitución Política de la República, se revoca parcialmente la sentencia apelada de diez de junio de dos mil veintidós, y en su lugar se resuelve que la demanda queda acogida por lo que se le condena al demandado a pagar la suma de \$ 10.000.000 (diez millones de pesos) en favor del actor don José Norvio González Mella, como resarcimiento del daño moral padecido, suma que devengará reajustes e intereses a contar de que esta sentencia quede ejecutoriada”.

C.6. Que razonado lo anterior, el Tribunal, sobre las indemnizaciones reclamadas, estará a una ponderación acorde con los daños ocasionados que se desprenden del mérito del proceso y del ilícito cometido. Teniendo presente que aquí se trata de actuaciones de agentes del Estado que han cometido un Delito de Lesa Humanidad. Habiendo por otro lado, la Excma. Corte Suprema fijado nuevo estándar sobre las indemnizaciones y la actuación del Estado para casos por falta de servicio. En consecuencia, aparece justo y razonable que se otorgue un monto:

C.6.a. De \$150.000.000.- (ciento cincuenta millones de pesos), para cada uno de los demandantes, a saber, Luisa Noemí González Ortega, Othniel Isaac González Ortega, Neftalí González Ortega, Juana Eugenia González Ortega, Ruth Alicia González Ortega, Elibeth González Ortega, hermanos de la víctima Elías Dagoberto González Ortega;

C.6.b. De \$150.000.000.- (ciento cincuenta millones de pesos), para Evita Valentina Aguayo Olavarría, hermana de la víctima Héctor Aguayo Olavarría;

C.6.c. De \$150.000.000.- (ciento cincuenta millones de pesos), para Elisa Margarita Schmidt Arriagada, hermana de las víctimas Carlos Schmidt Arriagada y Ricardo Augusto Schmidt Arriagada;

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

C.6.d. De \$150.000.000.- (ciento cincuenta millones de pesos), para Ricardo Virginio Aguayo Olavarría, hermano de la víctima Héctor Domingo Aguayo Olavarría;

C.6.e. De \$150.000.000.- (ciento cincuenta millones de pesos), para cada uno de los demandantes Matilde Escobar Vásquez, María Haydeé Escobar Vásquez, Vicente Edmundo Escobar Vásquez, Pedro Juan Escobar Vásquez, Juan Escobar Vásquez, Daniel Segundo Escobar Vásquez y Erica Escobar Vásquez, hermanos de la víctima Alejandro Escobar Vásquez;

C.6.f. De \$150.000.000.- (ciento cincuenta millones de pesos), para cada una de las demandantes Rita Aurora Ortega Muñoz y Rita Aurora Gonzalez Ortega, por quienes se invoca la calidad de madre y hermana respectivamente de la víctima Hugo Arner González Ortega y Elías Dagoberto González Ortega.

Por lo razonado anteriormente y así se dirá en lo resolutivo del fallo. Lo que equivale a una suma total **de \$2.700.000.000.- (Dos mil setecientos millones de pesos).**

D. Improcedencia del pago de reajustes e intereses con anterioridad a que la sentencia definitiva quede ejecutoriada: Que como ha venido razonando este Tribunal en las sentencias antes citadas, efectivamente como lo plantea el Fisco de Chile, para el caso de que se condene a pagar a los actores una indemnización determinada, **este pago debe devengarse desde que la sentencia se encuentra firme o ejecutoriada y el demandado se encuentre en mora.**

72°) Que con el fin de probar el daño moral sufrido por los demandantes civiles, desde esa fecha hasta la actualidad, como consecuencia de los delitos de detención ilegal y secuestro con grave daño de **Elías Dagoberto González Ortega, Héctor Domingo Aguayo Olavarría, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Alejandro Escobar Vásquez y Hugo Arner González Ortega,** se presentaron los siguientes antecedentes:

A. Demandantes civiles Luisa Noemí González Ortega, Othniel Isaac González Ortega, Neftalí González Ortega, Juana Eugenia González Ortega, Ruth Alicia González Ortega, Elibeth González Ortega, hermanos de la víctima Elías Dagoberto González Ortega:

A.1. Testimonios sin tachas y legalmente examinados de Gustavo Adolfo Becker Bello de fs. 6.219 (Tomo XVIII), Eliasib Alfredo Varas Acosta de fs. 6.130 a

fs. 6.131 (Tomo XVIII), María Graciela Medina Cares de fs. 6.132 (Tomo XVIII), quienes son contestes y en síntesis declaran que conocen a Luisa Noemí González Ortega, Othniel Isaac González Ortega, Neftalí González Ortega, Juana Eugenia González Ortega, Ruth Alicia González Ortega, Elibeth González Ortega, hermanos de la víctima Elías Dagoberto González Ortega, quienes relatan el primero que los conoce desde el año 2005 y los otros que los conocen desde antes de 1973 les consta el sufrimiento, el daño psicológico y económico sufrido a raíz del secuestro de su hermano Elías González Ortega.

A.2. A fs. 4.746 a fs. 4.785 (Tomo XIV), texto de la Resolución 60-147 de La Asamblea General de Las Naciones Unidas, denominada “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”.

A.3. A fs. 4.786 a fs. 4.804 (Tomo XIV), texto de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de Las Naciones Unidas, relativo a la promoción y protección de los Derechos Humanos, aprobados con fecha 8 de febrero 2005.

A.4. A fs. 4.805 a fs. 4.843 (Tomo XIV), sentencia de 29 de noviembre de 2018, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Órdenes Guerra y otros versus Chile.

A.5. A fs. 6.321 y siguientes (Tomo XVIII), ordinario N°773-2023 del Servicio de Registro Civil e Identificación, mediante el cual se informa antecedentes familiares de Elías Dagoberto Ortega González, padres Marcos Justiniano González y Rita Aurora Ortega González. Hijos: Elibeth Ortega González, Hugo Arner González Ortega, Juana Eugenia Ortega González, Luisa Noemí Ortega González, Neftalí Ortega González, Othniel Isaac Ortega González, Ruth Alicia Ortega González y Rita Aurora Ortega González.

B. Demandante civil Evita Valentina Aguayo Olavarría, hermana de la víctima Héctor Domingo Aguayo Olavarría

B.1. Testimonio sin tachas y legalmente examinados de Víctor Hernán Maturana Burgos de fs. 6.194 a fs. 6.195 (Tomo XVIII), María Angélica Esparza Nova de fs. 6.196 (Tomo XVIII), Ruth Elizabeth Michel Navarrete de fs. 6.197 (Tomo XVIII), Francisco Jerónimo Matta Iturra de fs. 6.198 (Tomo XVIII), quienes expresan en lo pertinente que conocen a Evita Valentina Aguayo Olavarría, el

primero desde 1990 por el proceso de búsqueda de víctimas de violaciones a los derechos humanos, la segunda desde que eran niñas y el tercero desde el año 1986. Agregan además que les consta el sufrimiento psicológico que les provocó, a ellas y sus padres lo que aconteció con su hermano Héctor Aguayo Olavarría.

B.2. A fs. 4.884 a fs. 4.893 (Tomo XIV), texto de la Resolución 60-147 de La Asamblea General de Las Naciones Unidas, denominada “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”.

B.3. A fs. 4.894 a fs. 4.913 (Tomo XIV), texto de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de Las Naciones Unidas, relativo a la promoción y protección de los Derechos Humanos, aprobados con fecha 8 de febrero 2005.

B.4. A fs. 4.914 a fs. 4.932 (Tomo XIV), sentencia de 29 de noviembre de 2018, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Órdenes Guerra y otros versus Chile.

B.5. A fs. 6.133 a fs. 6.135 (Tomo XVIII), informe psicológico realizado por el Programa de Reparación Integral de Salud, respecto de Evita Aguayo Olavarría, el que concluye que: “se constata la presencia de síntomas depresivos y ansiosos, como son la desconfianza, anticipación paranoide, la irritabilidad y episodios de desánimo, que la han acompañado gran parte de su vida. Es posible concluir la presencia de un Trastorno de estrés Postraumático Crónico (...), el sentimiento de injusticia que se origina con la desaparición y muerte de su hermano Héctor se reedita en su propia experiencia y en las de sus hijas y nieto. Esto daría cuenta de un daño psicológico que ha impactado a toda la familia”.

B.6. A fs. 6.321 y siguientes (Tomo XVIII), ordinario N°773-2023 del Servicio de Registro Civil e Identificación, mediante el cual se informa antecedentes familiares de Héctor Domingo Aguayo Olavarría, padres Francisco Aguayo Gallegos y Cirila Olavarría Jaramillo. Hermanos Evita Valentina Aguayo Olavarría, Nelly Sara Aguayo Olavarría, Ricardo Virginio Aguayo Olavarría.

C. Demandante civil Elisa Margarita Schmidt Arriagada, hermana de las víctimas Carlos Schmidt Arriagada y Ricardo Augusto Schmidt Arriagada.

C.1. Testimonios sin tachas y legalmente examinados de Elizabeth Del Carmen Arriagada Sanzana de fs. 6.229 a fs. 6.230 (Tomo XVIII), Fernando

Arriagada Sanzana de fs. 6.231 a fs. 6.232 (Tomo XVIII), quienes comunican que conocen a Elisa Margarita Schmidt Arriagada, los une una relación de parentesco pues son primos y saben lo mucho que le afectó a la familia y sobre todo a Elisa lo sucedido con sus hermanos Carlos Schmidt Arriagada y Ricardo Augusto Schmidt Arriagada.

C.2. A fs. 6.321 y siguientes (Tomo XVIII), ordinario N°773-2023 del Servicio de Registro Civil e Identificación, mediante el cual se informa antecedentes familiares de Carlos Schmidt Arriagada y Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Padres Otto Schmidt Weber y Aurora del Carmen Arriagada Vergara. Hermanos: Elisa Margarita Schmidt Arriagada, Isolde Yolanda Schmidt Arriagada, Susana Elena Apablaza Arriagada y María del Carmen Arriagada.

D. Demandante civil Ricardo Virginio Aguayo Olavarría, hermano de la víctima Héctor Domingo Aguayo Olavarría.

D.1. Testimonio sin tachas y legalmente examinados de Jorge José Pacheco Rubilar de fs. 6.246 (Tomo XVIII), Luis Rodolfo Vega de fs. 6.247 (Tomo XVIII) y Nicole Osses Jara de fs. 6.251 a fs. 6.252 (Tomo XVIII), quienes son contestes en manifestar que conocen a Ricardo Virginio Aguayo Olavarría, desde hace más de 45 años, el segundo lo conoce desde hace más de 50 años, ambos refieren que lo han visto afectado psicológicamente por los recuerdos de acaecido con su hermano Héctor Domingo Aguayo Olavarría. De la misma forma desde el ámbito profesional la Psicóloga doña Nicole Osses Jara anexa que le consta las vivencias de horror, amenazas y otros factores que afectaron a los familiares de la víctima Héctor Domingo Aguayo Olavarría.

D.2. A fs. 6.183 a fs. 6.187 (Tomo XVIII), informe psicológico de Ricardo Virginio Aguayo Olavarría, el que concluye: “Se releva que don Ricardo Virginio Aguayo Olavarría vivencia de episodios altamente traumáticos por causa de delitos que atentan los derechos fundamentales donde es expuesto y víctima de tortura, privación de libertad y daños colaterales como la pérdida de su hermano detenido-desaparecido, agresiones a su familia y el exilio”.

D.3. A fs. 6.321 y siguientes (Tomo XVIII), ordinario N°773-2023 del Servicio de Registro Civil e Identificación, mediante el cual se informa antecedentes familiares de Héctor Domingo Aguayo Olavarría, padres Francisco Aguayo Gallegos y Cirila Olavarría Jaramillo. Hermanos Evita Valentina Aguayo Olavarría, Nelly Sara Aguayo Olavarría, Ricardo Virginio Aguayo Olavarría.

E. Demandantes civiles Matilde Escobar Vásquez, María Haydée Escobar Vásquez, Vicente Edmundo Escobar Vásquez, Pedro Juan Escobar Vásquez, Juan Escobar Vásquez, Daniel Segundo Escobar Vásquez y Erica Escobar Vásquez, hermanos de la víctima Alejandro Escobar Vásquez.

E.1. Testimonio sin tachas y legalmente examinados de Carmen Patricia Forcael Garrido de fs. 6.248 (Tomo XVIII), Juan Armando San Martín Troncoso de fs. 6.249 (Tomo XVIII), Maria Elena Soto Suazo de fs. 6.250 (Tomo XVIII) y Nicole Osses Jara de fs. 6.251 a fs. 6.252 (Tomo XVIII), quienes son contestes en manifestar que conocen a Matilde Escobar Vásquez, María Haydeé Escobar Vásquez, Vicente Edmundo Escobar Vásquez, Pedro Juan Escobar Vásquez, Juan Escobar Vásquez, Daniel Segundo Escobar Vásquez y Erica Escobar Vásquez y dan fe del sufrimiento generalizado en la familia Escobar Vásquez por lo sucedido con Alejandro Escobar Vásquez. De la misma forma desde al ámbito profesional la Psicóloga doña Nicole Osses Jara anexa que le consta las vivencias de horror, amenazas y otros factores que afectaron a los familiares de la víctima Alejandro Escobar Vásquez.

E.2. A fs. 5.005 (Tomo XIV), certificado de nacimiento de Daniel Segundo Escobar Vásquez.

E.3. A fs. 5.006 (Tomo XIV), certificado de nacimiento de Erica Escobar Vásquez.

E.4. A fs. 6.138 a fs. 6.141 (Tomo XVIII), informe psicológico de Maria Haydée Escobar Vásquez, el que en lo pertinente concluye: “que existe la vivencia de eventos traumáticos como víctima por persecución de delitos de lesa humanidad, que impactan a la fecha en su desempeño social y de salud mental, habiendo experimentado, exclusión, rezago escolar obligado, horror, temor por la propia vida y la de referentes significativos durante un periodo superior a dos años”.

E.5. A fs. 6.144 a fs. 6.147 (Tomo XVIII), informe psicológico de Juan Escobar Vásquez, en lo pertinente reseña: “que existe la vivencia de eventos traumáticos como víctima por persecución de delitos de lesa humanidad, que impactan a la fecha en su desempeño social y de salud mental, habiendo experimentado, exclusión, rezago escolar obligado, horror, temor por la propia vida y la de referentes significativos durante un periodo superior a dos años. Presenta

una reducción. Respecto a la salud mental precisa una sintomatología depresiva crónica y traumática complejo”.

E.6. A fs. 6.150 a fs. 6.154 (Tomo XVIII), informe psicológico de Vicente Edmundo Escobar Vásquez, mediante el cual se concluye: “que existe la vivencia de eventos traumáticos como víctima por persecución de delitos de lesa humanidad, que impactan a la fecha en su desempeño social y de salud mental, habiendo experimentado, pobreza, soledad, impotencia, abandono, rezago escolar obligado y miedo durante un periodo superior a dos años, con manifestación de signos y síntomas a la fecha. (...)”.

E.7. A fs. 6.157 a fs. 6.160 (Tomo XVIII), informe psicológico de Daniel Segundo Escobar Vásquez, el que concluye en lo pertinente que: “Respecto de la salud mental del evaluado es posible precisar un desarrollo vital de la adolescencia temprana con sintomatología depresiva infantil, ansiedad de separación y trauma complejo del desarrollo entendido como las vulneraciones múltiples, crónicas e interpersonales (...)”.

E.8. A fs. 6.163 a fs. 6.167 (Tomo XVIII), informe psicológico de Pedro Juan Escobar Vásquez, por el cual se concluye: “Respecto de la salud mental del evaluado es posible precisar un desarrollo vital de la adolescencia temprana con sintomatología depresiva infantil, ansiedad de separación y trauma complejo del desarrollo entendido como las vulneraciones múltiples, crónicas e interpersonales (...) evidenciando en la evolución, trastornos psicosomáticos (enuresis nocturna)”.

E.9. A fs. 6.170 a fs. 6.174 (Tomo XVIII), informe psicológico Erica Escobar Vásquez, que en lo pertinente refiere: “Respecto de la salud mental del evaluado es posible precisar un desarrollo vital de la adolescencia temprana con sintomatología depresiva infantil, ansiedad de separación y trauma complejo del desarrollo (...) trastornos psicosomáticos (enuresis nocturna) según los episodios descritos y que son concordantes con el relato de sus hermanos (...)”.

E.10. A fs. 6.177 a fs. 6.180 (Tomo XVIII), informe psicológico Matilde Escobar Vásquez, el que en lo pertinente concluye: “Presencia de cuadro de neurosis nocturna, según los episodios descritos y que son concordante con el relato de sus hermanos”.

E.11. A fs. 6.321 y siguientes (Tomo XVIII), ordinario N°773-2023 del Servicio de Registro Civil e Identificación, mediante el cual se informa red familiar de Alejandro Escobar Vásquez, quien registra padres Daniel Escobar Núñez y

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

María Inés Vásquez Zeballos. Hermanos: Vicente Edmundo Escobar Vásquez, Daniel Segundo Escobar Vásquez, Erica Escobar Vásquez, Isaías Guillermo Escobar Vásquez, Juan Escobar Vásquez, María Haydée Escobar Vásquez, Matilde Escobar Vásquez, Pedro Juan Escobar Vásquez, Adela Escobar Vásquez, Carmela Escobar Vásquez y Francisca Irene Escobar Vásquez.

F. Demandantes civiles Rita Aurora Ortega Muñoz y Rita Aurora Gonzalez Ortega madre y hermana respectivamente de la víctima Hugo Arner González Ortega y Elías Dagoberto González Ortega.

F.1. A fs. 6.321 y siguientes (Tomo XVIII), ordinario N°773-2023 del Servicio de Registro Civil e Identificación, mediante el cual se informa antecedentes familiares de Hugo Arner Ortega González y Elías Dagoberto González Ortega, padres Marcos Justiniano González y Rita Aurora Ortega González. Hermanos: Elibeth Ortega González, Juana Eugenia Ortega González, Luisa Noemí Ortega González, Neftalí Ortega González, Othniel Isaac Ortega González, Ruth Alicia Ortega González y Rita Aurora Ortega González.

G. A fs. 5.038 a fs. 5.046 (Tomo XIV), informe del Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos, mediante el cual se acompaña documento sobre las secuelas en el plano de salud mental en los familiares de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura militar.

H. A fs. 5.050 a fs. 5.052 (Tomo XIV), informe del Programa de reparación integral de salud (PRAIS), en el cual se indican veintiocho archivos digitales con antecedentes teóricos con relación a personas afectadas por la represión política ejercida por el Estado en el periodo 1973- 1990. Asimismo, a fs. 5.716 a fs. 5.727 ordinario N°444, mediante el cual se acompaña Norma Técnica para atención en salud de personas afectadas por la represión política ejercida por el Estado en el periodo de 1973-1990.

I. A fs. 5.107 a fs. 5.177 (Tomo XIV) informe de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, en el que se acompaña los documentos: La tortura un problema médico; La tortura modelo de intervención; Experiencia traumáticas- violencia – tortura; Consecuencia en la salud mental de familiares de ejecutados políticos, y Consecuencias en la salud mental de familiares de detenidos desaparecidos.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

J. A fs. 5.182 a fs. 5.297 (Tomo XV), informe del Programa continuación de la Ley 19.123, que remite norma técnica para atención de personas afectadas por la represión política ejercida por el Estado en el periodo 1973-1990.

K. A fs. 5.313 a fs. 5.471 (Tomo XV), informe del Arzobispado de Santiago Fundación Documentación y Archivo de la Vicaria de la Solidaridad, en el cual se acompaña: Algunos factores de daño a la salud mental; Trabajo Social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los derechos humanos; Algunos problemas de salud mental detectados por equipos psicológicos psiquiátrico; Tortura, tratos crueles e inhumanos en 1980; Salud Mental y Violaciones a los derechos humanos y El problema médico de las aplicaciones de tratos crueles inhumanos y degradantes (torturas) a los detenidos por organismos de seguridad.

73°) Que ponderando tales documentos y testigos, teniendo además presente que de acuerdo con lo expuesto latamente en esta sentencia, el daño moral que reclaman los actores, provocado por **los delitos de detención ilegal y secuestro con grave daño de Elías Dagoberto González Ortega, Hugo Arner González Ortega, Héctor Domingo Aguayo Olavarría, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, y Alejandro Escobar Vásquez, está plenamente acreditado.** Que en la especie se ha establecido la concurrencia de todos los requisitos que hacen procedente la indemnización que se demanda, esto es: **a)** la perpetración de un delito por agentes del Estado; **b)** la existencia de un daño sufrido por el demandante; y **c)** la concurrencia del nexo causal entre estos y aquellos. Respecto del quantum de la indemnización, si bien tal daño, por su carácter inmaterial, es difícil de cuantificar, no es menos cierto que debe ser considerada la prolongación del dolor sufrido por el actor y considerando la restitución integral, aparece adecuado, congruente y lógico según lo que se ha dicho sobre los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los promedios fijados por los Tribunales superiores de justicia, fijar como indemnización para los actores, por los delitos de **delitos de detención ilegal y secuestro con grave daño de Elías Dagoberto González Ortega, Hugo Arner González Ortega, Héctor Domingo Aguayo Olavarría, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, y Alejandro Escobar Vásquez, cometido por los agentes del Estado,** esto es la suma de \$150.000.000.- (ciento cincuenta millones de pesos), para cada uno de los

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

demandantes, a saber: Luisa Noemí González Ortega, Othniel Isaac González Ortega, Neftalí González Ortega, Juana Eugenia González Ortega, Ruth Alicia González Ortega, Elibeth González Ortega, hermanos de la víctima Elías Dagoberto González Ortega. De \$150.000.000.- (ciento cincuenta millones de pesos), para Evita Valentina Aguayo Olavarría, hermana de la víctima Héctor Aguayo Olavarría. De \$150.000.000.- (ciento cincuenta millones de pesos), para Elisa Margarita Schmidt Arriagada, hermana de las víctimas Carlos Schmidt Arriagada y Ricardo Augusto Schmidt Arriagada. De \$150.000.000.- (ciento cincuenta millones de pesos), para Ricardo Virginio Aguayo Olavarría, hermano de la víctima Héctor Domingo Aguayo Olavarría. De \$150.000.000.- (ciento cincuenta millones de pesos), para cada uno de los demandantes Matilde Escobar Vásquez, María Haydeé Escobar Vásquez, Vicente Edmundo Escobar Vásquez, Pedro Juan Escobar Vásquez, Juan Escobar Vásquez, Daniel Segundo Escobar Vásquez y Erica Escobar Vásquez, hermanos de la víctima Alejandro Escobar Vásquez. De \$150.000.000.- (ciento cincuenta millones de pesos), para cada una de las demandantes Rita Aurora Ortega Muñoz y Rita Aurora Gonzalez Ortega, por quienes se invoca la calidad de madre y hermana respectivamente de la víctima Hugo Arner González Ortega y Elías Dagoberto González Ortega. Lo que da una **suma total de \$2.700.000.000.- (Dos mil setecientos millones de pesos).**

En nada arredra lo razonado, sobre la responsabilidad civil del Estado lo informado por el Instituto de Previsión Social, mediante el ordinario N°4792-11710 de fecha 03 de febrero de 2023, que consta a fs. 5.712 a fs. 5.714 (Tomo XVI), en cuanto informa los beneficios de reparaciones de las leyes 19.123 y N°19.980.

74°) Que habiéndose fijado la suma a indemnizar y como se ha razonado precedentemente, ésta deberá ser **reajustadas en la misma proporción en que varíe el Índice de Precios al Consumidor** entre el mes anterior que quede ejecutoriada la sentencia y el mes anterior al de su pago, devengando intereses corrientes por el mismo período, más costas.

ASPECTOS RESOLUTIVOS

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 3, 6, 7, 11 N°1, N°6 y N°9, 10 N°10, 12 N°8, y N°11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 50, 51, 52, 56, 61, 67, 68, 69, 74, 103, 141 inciso tercero y 148 **Código Penal**; artículos 10, 42, 43, 50, 51, 56, 67, 68 y siguientes, 81 a 84, 108

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

a 120, 121 y siguientes, 424 y siguientes, 447 y siguientes, 451 y siguientes, 456 bis, 457, 458 y siguientes, 471 y siguientes, 474 y siguientes, 477 y siguientes, 481 y siguientes, 485 y siguientes, 488 y siguientes, 499, 500 y siguientes y 533 del **Código de Procedimiento Penal**; artículos 2.314 y siguientes del **Código Civil**; **Ley 18.575**; artículos 1, 5, 6 y 38 inciso 2° de la **Constitución Política de la República**; 211, 214 del **Código de Justicia Militar**; **Ley 18.216**; **Ley 19.123** y sus modificaciones posteriores; **Ley 19.980**; **Ley 20.357**, **Convención Americana sobre Derechos Humanos y los Convenios de Ginebra de 1949**, se declara:

EN CUANTO A LA TACHAS

I.- SE RECHAZAN LAS TACHAS interpuesta de fs. 5.731 y siguientes (Tomo XVI), por el abogado Alfonso Podlech Delarze, en representación del acusado Oscar Alfonso Podlech Michaud, sin costas por haber tenido motivo plausible para litigar.

EN CUANTO AL INCIDENTE DE NULIDAD

II. QUE SE RECHAZA el incidente de nulidad procesal deducido fs. 5.923 y siguientes (Tomo XVII), por el abogado Rodrigo Cortés Carrasco, en representación del acusado Romilio Lavín Muñoz, en todas sus partes, sin costas por haber tenido motivo plausible para litigar.

EN CUANTO A LA ACCION PENAL

III. QUE NO HA LUGAR a la excepción de fondo, esto es la **prescripción de la acción penal** interpuesta por el abogado Luis Hernán Núñez Muñoz, en representación de Raimundo Ignacio García Covarrubias, a fs. 5.576 y siguientes (Tomo XVI).

IV. QUE NO HA LUGAR a la excepción de fondo, esto es la **prescripción de la acción penal** interpuesta por el abogado Rodrigo Cortés Carrasco, en representación de Romilio Lavín Muñoz, a fs. 5.923 y siguientes (Tomo XVII).

V. QUE NO HA LUGAR al sobreseimiento definitivo solicitado por la abogada Karen Valenzuela Jerez, en representación de Pedro Guillermo Tichauer Salcedo, a fs. 5.683 y siguientes (Tomo XVI).

VI. QUE NO HA LUGAR al sobreseimiento definitivo solicitado por el abogado Luis Hernán Núñez Muñoz, en representación de Raimundo Ignacio García Covarrubias, a fs. 5.576 y siguientes (Tomo XVI).

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

VII. QUE SE CONDENA con costas a OSCAR ALFONSO ERNESTO PODLECH MICHAUD, R.U.N. 3.085.228-1, ya individualizado en calidad de **cómplice** del delito de secuestro con grave daño en su carácter de lesa humanidad, en las personas de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, ilícito ocurrido entre fines de septiembre e inicios de octubre de 1973, a la pena única de **15 años de presidio mayor en su grado medio** y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

VIII. QUE SE CONDENA con costas a PEDRO GUILLERMO MANUEL TICHAUER SALCEDO, R.U.N. 5.166.731-K, ya individualizado en calidad de **cómplice** del delito de secuestro con grave daño en su carácter de lesa humanidad, en las personas de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, ilícito ocurrido entre fines de septiembre e inicios de octubre de 1973, a la pena única de **15 años de presidio mayor en su grado medio** y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

IX. QUE SE CONDENA con costas a RAIMUNDO IGNACIO GARCIA COVARRUBIAS, R.U.N. 5.482.807-1, ya individualizado en calidad de **cómplice** del delito de secuestro con grave daño en su carácter de lesa humanidad, en las personas de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, ilícito ocurrido entre fines de septiembre e inicios de octubre de 1973, a la pena única de **15 años de presidio mayor en su grado medio** y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

X. QUE SE CONDENA con costas a ROMILIO OSVALDO LAVÍN MUÑOZ, R.U.N. 6.352.155-8, ya individualizado en calidad de **cómplice** del delito de secuestro con grave daño en su carácter de lesa humanidad, en las personas de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt, ilícito ocurrido entre fines de septiembre e inicios de octubre de 1973, a la pena única de **15 años de presidio mayor en su grado medio** y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

XI. Que respecto al acusado **OSCAR ALFONSO ERNESTO PODLECH MICHAUD**, según se expresó, no se le concederá algún beneficio de la ley N°18.216, solicitado por la defensa. En consecuencia, deberá cumplir la pena privativa de libertad en forma efectiva, sirviéndole de abono los días que ha estado privado de libertad con motivo de este proceso, lo que se detalla de la siguiente forma:

ARRESTO DOMICILIARIO TOTAL: Desde el **04 de julio de 2022**, como consta a fs. 4.350 (Tomo XII), cuando es notificado del auto de procesamiento de fs. 4.254 a fs. 4.335 (Tomo XI), en virtud del cual se decreta su arresto domiciliario total. Hasta el **15 de julio de 2022**, donde le fue notificada la resolución que le otorgó el arresto domiciliario parcial nocturno como consta a fs. 4.423 (Tomo XII). Hasta el 02 de diciembre de 2022, cuando es notificado de la resolución que ordena su libertad bajo fianza, lo que consta a fs. 5.485 (Tomo XV).

XII. Que respecto al acusado **PEDRO GUILLERMO MANUEL TICHAUER SALCEDO**, según se expresó, no se le concederá algún beneficio de la ley N°18.216, solicitado por la defensa. En consecuencia, deberá cumplir la pena privativa de libertad en forma efectiva, sirviéndole de abono los días que ha estado privado de libertad con motivo de este proceso, lo que se detalla de la siguiente forma:

ARRESTO DOMICILIARIO TOTAL: Desde el **04 de julio de 2022**, como consta a fs. 4.351 (Tomo XII), cuando es notificado del auto de procesamiento de fs. 4.254 a fs. 4.335 (Tomo XI), en virtud del cual se decreta su arresto domiciliario total. Hasta el **15 de julio de 2022**, donde le fue notificada la resolución que le

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

concedió el arresto domiciliario parcial nocturno según consta a fs. 4.423 (Tomo XII). Hasta el **27 de enero de 2023**, cuando se ordena su libertad bajo fianza, lo que consta a fs. 5.617 (Tomo XV).

XIII. Que respecto al acusado **RAIMUNDO IGNACIO GARCIA COVARRUBIAS**, según se expresó, no se le concederá algún beneficio de la ley N°18.216, solicitado por la defensa. En consecuencia, deberá cumplir la pena privativa de libertad en forma efectiva, sirviéndole de abono los días que ha estado privado de libertad con motivo de este proceso, lo que se detalla de la siguiente forma:

ARRESTO DOMICILIARIO TOTAL: Desde el **05 de julio de 2022**, como consta a fs. 4.360 y 4.451 (Tomo XII), cuando es notificado del auto de procesamiento de fs. 4.254 a fs. 4.335 (Tomo XI), en virtud del cual se decreta su arresto domiciliario total. Hasta el **15 de julio de 2022** donde le fue notificada la resolución que concedió el arresto domiciliario parcial nocturno, según consta a fs. 4.423 (Tomo XII).

XIV. Que respecto al acusado **ROMILIO OSVALDO LAVIN MUÑOZ**, según se expresó, no se le concederá algún beneficio de la ley N°18.216, solicitado por la defensa. En consecuencia, deberá cumplir la pena privativa de libertad en forma efectiva, sirviéndole de abono los días que ha estado privado de libertad con motivo de este proceso, lo que se detalla de la siguiente forma:

ARRESTO DOMICILIARIO TOTAL: Desde el **05 de julio de 2022**, como consta a fs. 4.361 y 4.417 (Tomo XII), cuando es notificado del auto de procesamiento de fs. 4.254 a fs. 4.335 (Tomo XI), en virtud del cual se decreta su arresto domiciliario total. Hasta el **15 de julio de 2022** donde le fue notificada la resolución que le concedió el arresto domiciliario parcial nocturno, según consta a fs. 4.419 (Tomo XII).

XV. La pena impuesta a los condenados comenzará a regir desde que **se presenten o sean habidos en la presente causa.**

XVI. Que una vez ejecutoriada la sentencia, deberán dejarse sin efecto las medidas cautelares personales impuestas a los acusados, oficiándose a los organismos respectivos que fueren procedente.

XVII. Que para todos los efectos legales, se hace presente que el sobreseimiento solicitado por el abogado Alfonso Podlech Delarze de fs. 6.411 y

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

siguiente (Tomo XIX), fue fallado a fs. 6.512 y siguientes (Tomo XX) con fecha 26 de marzo de 2024, resolución que no fue apelada y se encuentra ejecutoriada.

EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL

XVIII. QUE NO HA LUGAR a las excepciones interpuestas por el abogado Procurador Fiscal de Temuco, Álvaro Sáez Willer, en representación del Fisco de Chile de fs. 5.508 a fs. 5.548 (Tomo XVI), esto es:

A. Excepción de reparación satisfactiva. Improcedencia de la indemnización reclamada por la actora Rita Aurora Ortega Muñoz por haber sido ya reparada conforme a las leyes de reparación.

B. Improcedencia de la indemnización dineraria demandada, por preterición legal del conjunto de los restantes demandantes, todos los cuales invocan la calidad de hermanos de víctima directa.

C. Excepción de prescripción extintiva.

Sin perjuicio de lo razonado en los párrafos precedentes, respecto del monto de la indemnización y sobre la fecha en que deben aplicarse los reajustes e intereses.

XIX. Que HA LUGAR a la demanda civil interpuesta por el abogado **Sebastián Saavedra Cea**, en representación de Luisa Noemí González Ortega, Othniel Isaac González Ortega, Neftalí González Ortega, Juana Eugenia González Ortega, Ruth Alicia González Ortega y Elibeth González Ortega, de fs. 4.814 a fs. 4.851 (Tomo XIV), en contra del Fisco de Chile. Condenándose a la parte demandada a pagar como indemnización de perjuicios, por concepto de daño moral producto del delito de secuestro con grave daño en su carácter de lesa humanidad en la persona de Elías Dagoberto González Ortega, la suma:

De **\$150.000.000.- (Ciento cincuenta millones de pesos)** para cada uno de los demandantes a saber: Luisa Noemí González Ortega, Othniel Isaac González Ortega, Neftalí González Ortega, Juana Eugenia González Ortega, Ruth Alicia González Ortega y Elibeth González Ortega.

XX. Que HA LUGAR a la demanda civil interpuesta por el abogado **Sebastián Saavedra Cea**, en representación de Evita Valentina Aguayo Olavarría, de fs. 4.903 a fs. 4.940 (Tomo XIV), en contra del Fisco de Chile. Condenándose a la parte demandada a pagar como indemnización de perjuicios, por concepto de daño moral producto del delito de secuestro con grave daño en su carácter de lesa humanidad en la persona de Héctor Aguayo Olavarría, la suma:

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

De **\$150.000.000.- (Ciento cincuenta millones de pesos)** para la demandante civil Evita Valentina Aguayo Olavarría.

XXI. Que HA LUGAR a la demanda civil interpuesta por los abogados **Manuel Lisboa Cordero y Juan Carlos Hernández Vidal**, en representación de Elisa Margarita Schmidt Arriagada, de fs. 4.952 a fs. 4.986 (Tomo XIV), en contra del Fisco de Chile. Condenándose a la parte demandada a pagar como indemnización de perjuicios, por concepto de daño moral producto del delito de secuestro con grave daño en su carácter de lesa humanidad en las personas de Carlos Schmidt Arriagada y Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, la suma:

De **\$150.000.000.- (Ciento cincuenta millones de pesos)** para la demandante civil Elisa Margarita Schmidt Arriagada.

XXII. Que HA LUGAR a la demanda civil interpuesta por el abogado **David Alberto Morales Troncoso**, en representación de Ricardo Virginio Aguayo Olavarría, Matilde Escobar Vásquez, Maria Haydée Escobar Vásquez, Vicente Edmundo Escobar Vásquez, Pedro Juan Escobar Vásquez, Juan Escobar Vásquez, Daniel Segundo Escobar Vásquez y Érica Escobar Vásquez, de fs. 5.007 a fs. 5.035 (Tomo XIV), en contra del Fisco de Chile. Condenándose a la parte demandada a pagar como indemnización de perjuicios, por concepto de daño moral producto del delito de secuestro con grave daño en su carácter de lesa humanidad en las personas de Héctor Aguayo Olavarría, hermano de Ricardo Virginio Aguayo Olavarría y Alejandro Escobar Vásquez hermano de los otros demandantes, la suma:

De **\$150.000.000.- (Ciento cincuenta millones de pesos)** para el demandante civil Ricardo Virginio Aguayo Olavarría.

De **\$150.000.000.- (Ciento cincuenta millones de pesos)** para cada uno los demandantes civiles Matilde Escobar Vásquez, Maria Haydée Escobar Vásquez, Vicente Edmundo Escobar Vásquez, Pedro Juan Escobar Vásquez, Juan Escobar Vásquez, Daniel Segundo Escobar Vásquez y Érica Escobar Vásquez.

XXIII. Que HA LUGAR a la demanda civil interpuesta por el abogado **José Luis Neira Vejar**, en representación de Rita Ortega Muñoz y Rita Aurora Gonzalez Ortega de fs. 5.061 a fs. 5.083 (Tomo XIV), en contra del Fisco de Chile. Condenándose a la parte demandada a pagar como indemnización de perjuicios, por concepto de daño moral producto del delito de secuestro con grave daño en su

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

carácter de lesa humanidad en las personas de Hugo Arner González Ortega y Elías Dagoberto González Ortega, la suma:

De **\$150.000.000.- (ciento cincuenta millones de pesos)** para cada una de las demandantes civiles, a saber: Rita Ortega Muñoz y Rita Aurora Gonzalez.

Lo que da una **suma total de \$2.700.000.000.- (Dos mil setecientos millones de pesos)**

XXIV. La suma anterior deberán ser reajustada en la misma proporción en que varíe el Índice de Precios al Consumidor entre el mes anterior a que la sentencia quede ejecutoriada y el mes anterior al de su pago; devengando intereses corrientes por el mismo período.

Que se condena en costas, al FISCO de Chile.

Notifíquese esta sentencia personalmente a los sentenciados, cíteseles personalmente bajo apercibimiento de arresto, dirigiendo los exhortos pertinentes, si correspondiere, facultándose al Tribunal para que los cite personalmente bajo apercibimiento de arresto o se constituya en sus domicilios si fuera necesario, realizando todas las diligencias para el oportuno cumplimiento de la notificación de esta sentencia pronunciándose sobre las peticiones que hicieran los sentenciados en el acto de la notificación, en especial si presentan apelación verbal.

Considerando la pena decretada en contra de los sentenciados y teniendo presente las medidas cautelares vigentes, fórmese cuaderno separado de medidas cautelares y otras situaciones que afecten a los sentenciados de este proceso. Incorporándose a este lo referente a revisión de medidas cautelares; tales como prisión preventiva, arresto domiciliario total o parcial, obligación de firma mensual y arraigos nacionales según corresponda.

Notifíquese a los abogados querellantes y al abogado que representa al Fisco de Chile, a través del Receptor de turno del presente mes.

En el caso del querellante Programa Continuación Ley 19.123, del Ministerio de Justicia, notifíquese personalmente en la secretaría del Tribunal, a cualquiera de los abogados que tenga representación.

Regístrese y cúmplase en su oportunidad, con lo que ordena el artículo 509 bis del Código de Procedimiento Penal, comuníquese a los diferentes Tribunales en que se tramitaren procesos en contra del sentenciado para informarles sobre las decisiones del presente fallo y **en su oportunidad, archívese.**

Detención ilegal y secuestro con grave daño de Hugo Arner González Ortega, Elías Dagoberto González Ortega, Carlos Schmidt Arriagada, Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, Juan De Dios Cabrera Figueroa, Alejandro Escobar Vásquez, Héctor Domingo Aguayo Olavarría y Raúl Marcial Figueroa Burkhardt.

Sentencia Definitiva de 1.081 fojas.

Consúltese si no se apelare y archívese en su oportunidad. Asimismo, elévese en **consulta el sobreseimiento** de Luis Bustos Letelier de fs. 6.376 (Tomo XVIII).

Siendo un hecho ocurrido en el año 1973 remítase por la vía más expedita a la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial.

Rol N° 4.473

Dictada por don **ÁLVARO MESA LATORRE**, Ministro en Visita Extraordinaria.

Autoriza don Germán Varas Cicarelli, Secretario de la Illma. Corte de Apelaciones de Temuco

En Temuco, a catorce de agosto de dos mil veinticuatro, notifiqué por el estado diario la resolución precedente. (YST).